

NORMA GIARRACCA

**ESTUDIOS RURALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES:
MIRADAS DESDE EL SUR**



ANTOLOGÍA ESENCIAL

Selección, edición y prólogo a cargo de

MIGUEL TEUBAL

**ESTUDIOS RURALES
Y MOVIMIENTOS SOCIALES:
MIRADAS DESDE EL SUR**

Norma Giarracca: Estudios rurales y movimientos sociales: miradas desde el Sur. Antología esencial / Norma Giarracca... [et al.] - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2017.
Libro digital, PDF (Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño / Pablo Gentili)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-722-287-6

1. Movimiento Social. 2. Agroindustria. 3. Sociología Rural.
I. Giarracca, Norma
CDD 305.963

Otros descriptores asignados por la Biblioteca virtual de CLACSO:
Estudios rurales / Movimientos Sociales / Estado / Políticas Públicas / América Latina / Sociología Rural / Campesinado / Agronegocio / Extractivismo / Colonialidad

Colección
**ANTOLOGÍAS DEL PENSAMIENTO SOCIAL
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO**

NORMA GIARRACCA

**ESTUDIOS RURALES
Y MOVIMIENTOS SOCIALES:
MIRADAS DESDE EL SUR**

ANTOLOGÍA ESENCIAL

Selección, edición y prólogo a cargo de
MIGUEL TEUBAL



CLACSO

Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño

Director de la Colección Pablo Gentili

CLACSO - Secretaría Ejecutiva

Pablo Gentili - Secretario Ejecutivo

Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial

Núcleo de producción editorial y biblioteca virtual:

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Núcleo de diseño y producción web:

Marcelo Giardino - Coordinador de Arte

Sebastián Higa - Coordinador de Programación Informática

Jimena Zazas - Asistente de Arte

Rosario Conde - Asistente de Programación Informática

Fotografía de tapa - Jitka Teubalova

Creemos que el conocimiento es un bien público y común. Por eso, los libros de CLACSO están disponibles en acceso abierto y gratuito. Si usted quiere comprar ejemplares de nuestras publicaciones en versión impresa, puede hacerlo en nuestra Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales.



Biblioteca Virtual de CLACSO www.biblioteca.clacso.edu.ar

Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE.

Primera edición

Norma Giarracca. Estudios rurales y movimientos sociales: miradas desde el Sur. Antología esencial (Buenos Aires: CLACSO, noviembre de 2017)

ISBN 978-987-722-287-6

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional



La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

Prólogo.....	15
<i>Miguel Teubal</i>	
Sobre los trabajos seleccionados. Introducción.....	25
<i>Miguel Teubal</i>	

PRIMERA PARTE

LA SOCIOLOGÍA RURAL Y EL DEBATE SOBRE EL CAMPESINADO

Complejos agroindustriales y la subordinación del campesinado. Algunas reflexiones y el caso de los tabacaleros mexicanos (1985).....	83
Campeños y agroindustrias en los tiempos del “ajuste”. (Algunas reflexiones para pensar la relación, con especial referencia a México y la Argentina) (1993)	109
Las agriculturas del Mercosur: el papel de los actores sociales (1998).....	131
<i>Norma Giarracca y Silvia Cloquell</i>	
Las Ciencias Sociales y los estudios rurales en la Argentina durante el siglo XX (1999)	147
América Latina: nuevas ruralidades, viejas y nuevas acciones colectivas (2004).....	187
Introducción a <i>Acciones colectivas y organización cooperativa: reflexiones y estudios de caso</i> (1994).....	197

“Tucumanas de ojos grandes”. Un estudio sobre acciones colectivas de campesinas tabacaleras (1994).....	211
El oficio del sociólogo o de los sociólogos con oficio (2001)	235
<i>Norma Giarracca y Susana Aparicio</i>	
Métodos cuantitativos y cualitativos en los estudios de la Sociología Rural (1995)	265
<i>Norma Giarracca, Carla Gras y Paula Gutiérrez</i>	
Ensamblando las voces: los actores en el texto sociológico (2004)	275
<i>Norma Giarracca y Karina Bidaseca</i>	
Notas sobre el trabajo de campo (2006).....	293
Prólogo a <i>El campo argentino en la encrucijada</i> (2005).....	307
<i>Norma Giarracca y Miguel Teubal</i>	
Los debates acerca del campo (2005).....	313
<i>Norma Giarracca y Miguel Teubal</i>	
El campesinado en la Argentina: un debate tardío (1990)	331

SEGUNDA PARTE
AGROINDUSTRIA, AGRONEGOCIO Y EXTRACTIVISMO

Del desarrollo agroindustrial a la expansión del “agronegocio”: el caso argentino (2008).....	349
<i>Norma Giarracca y Miguel Teubal</i>	
Introducción a <i>Agroindustrias del Noroeste:</i> <i>el papel de los actores sociales</i> (1995).....	381
La integración económica con el Brasil y los pequeños productores cañeros (1993).....	389
<i>Norma Giarracca y Miguel Teubal</i>	
Introducción a <i>Actividades extractivas en expansión.</i> <i>¿Reprimarización de la economía Argentina?</i> (2013).....	413
<i>Norma Giarracca y Miguel Teubal</i>	
Las actividades extractivas en la Argentina (2013).....	423
<i>Norma Giarracca y Miguel Teubal</i>	
Tres lógicas de producción de alimentos: ¿hay alternativas al agronegocio? (2013).....	451
<i>Norma Giarracca y Tomás Palmisano</i>	

La actividad cañera. Los campesinos cañeros en los nuevos escenarios económicos (1995).....	467
<i>Norma Giarracca y Susana Aparicio</i>	
De colonos a sojeros. Imágenes de la estructura social del sur de Santa Fe (2005).....	537
<i>Norma Giarracca, Carla Gras y Pablo Barbeta</i>	
Multioocupación y pluriactividad en el agro argentino: el caso de los cañeros tucumanos (2001).....	565
<i>Norma Giarracca, Susana Aparicio y Carla Gras</i>	
Los peligros de los modelos “productivistas” en el sector primario (2007).....	589

TERCERA PARTE

PROTESTA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Democracia y neoliberalismo en el campo argentino. Una convivencia difícil (2006)	603
<i>Norma Giarracca y Miguel Teubal</i>	
Prólogo a <i>La protesta social en la Argentina.</i> <i>Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país</i> (2001).....	629

Introducción a <i>La protesta social en la Argentina</i> . <i>Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país</i> (2001).....	635
<i>Norma Giarracca y Karina Bidaseca</i>	
El conflicto agrario 2008-2009: los debates necesarios (2010)	653
La tragedia del desarrollo. Disputas por los recursos naturales en la Argentina (2007).....	685
Movimientos sociales y protestas en los mundos sociales latinoamericanos. Nuevos escenarios y nuevos enfoques (2002)	713
El “Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha”. Protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina (2001).....	737
Bienes comunes en la hegemonía extractivista. Disputas y resistencias (2013).....	763
<i>Ger-Gemsal (Grupo de Estudios Rurales - Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina)</i>	
Presentación y notas metodológicas a <i>Cuando hasta las piedras se levantan</i> . <i>Oaxaca, México, 2006</i> (2008).....	783
Notas metodológicas: experiencia de investigación desde lugares diferentes. (Algunas reflexiones acerca del intelectual comprometido) (2008).....	795

El “desarrollo” basado en la extracción de recursos naturales (2011).....	805
La rebelión de 2001-2002: protestas, rupturas y recomposiciones (2007).....	823
<i>Norma Giarracca y Miguel Teubal</i>	
El día en que la Plaza de Mayo se vistió de campo (1993)	851
<i>Norma Giarracca y Miguel Teubal</i>	
De las fincas a las casas a las rutas y las plazas: las protestas y las organizaciones sociales en la Argentina de los mundos “rururbanos”. Una mirada desde América Latina (2003)	867
La lucha por los derechos del agua en Tucumán. Transnacionales y mujeres en la protesta social (2005)	893
<i>Norma Giarracca y Norma del Pozo</i>	
La tierra: polisemias, confusiones y debates (2012)	917
El Foro Social Mundial de Porto Alegre: otro paso de los movimientos sociales globalizados (2001)	923
<i>Norma Giarracca, Miguel Teubal y Diego Domínguez</i>	
Recuperación del territorio, “recuperación de Estado”. Mosconi, Argentina después de ocho años de lucha (2009)	937
<i>Norma Giarracca y Juan Wahren</i>	

“Vejeciones x 8”: arte y protesta social en Buenos Aires (2001) 955
Norma Giarracca y otros

Producción y mercados para la vida: una posibilidad
emancipadora para el siglo XXI (2008)..... 985

CUARTA PARTE
PERSPECTIVAS DESDE EL SUR.
COLONIALIDAD DEL PODER, OTROS BICENTENARIOS

Presentación de *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano*
de Arturo Roig, a modo de homenaje (2012) 997

El Bicentenario: miradas sobre la Argentina (2011) 1007

Cambiar de espejo: mirarnos en América Latina. Reflexiones, desde la Argentina,
inspiradas en las entrevistas al doctor Noam Chomsky (2011)..... 1025

Tres paradojas para repensar la política (2012) 1037

Prólogo a *Nosotros los indios* de Hugo Blanco (2010)..... 1067

Sobre la autora..... 1075

PRÓLOGO

MIGUEL TEUBAL*

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS APORTES DE NORMA GIARRACCA AL PENSAMIENTO SOCIAL

Los aportes de Norma Giarracca al pensamiento social y, en particular, a la Sociología Rural, son vastos y multifacéticos. Históricamente, en nuestro país eran numerosos los estudios de agrónomos y economistas sobre la zona pampeana, la región agraria más rica y poderosa del país, proveedora del grueso de las exportaciones y de los alimentos consumidos internamente. No podía decirse lo mismo respecto

del estudio de la cuestión agraria en el interior del país, en donde vivía la mayor parte de los productores y trabajadores rurales y en donde las condiciones de vida del grueso de esa población dejaba mucho que desear.

Desde sus inicios, Norma orientó sus trabajos de investigación hacia zonas donde habitaban sectores campesinos y sujetos agrarios subordinados, sometidos a situaciones de marginación, pobreza extrema y gran sufrimiento social. Constituía, y constituye aún en la actualidad, una problemática analizada tanto por la Sociología Rural, como así también por la Antropología, la Geografía y otras disciplinas sociales. Norma era consciente de que formaba parte de uno de los primeros grupos de sociólogas rurales argentinas en abordar esa problemática en forma sistemática, la cual continuó estudiando durante su estadía en México. Allí, se sumerge en el análisis del campesinado mexicano que culmina con un trabajo de tesis

* Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

de maestría que está referido específicamente al complejo tabacalero (ver más adelante).

Norma orientó su trabajo de investigación hacia los sectores agrarios subalternos en donde la cuestión agraria era también densa pero tenía otras características, y por tanto involucraba otras perspectivas teóricas. Se trataba de analizar las condiciones de vida de pequeños productores y trabajadores rurales, y de los factores que influían sobre su evolución futura. En fin, se trataba de un tópico no siempre considerado como relevante para entender aspectos que atañen del sector agropecuario de nuestro país. Más afín incluso a la problemática del campesinado latinoamericano, en general, a los casos de México, Perú, Brasil, y a países en donde se manifestaron importantes movimientos de reforma agraria en diferentes momentos históricos. Esta es una primera cuestión que podemos considerar: el realce de la sociología rural debido a los aportes que realiza Norma en relación con los productores y trabajadores rurales del interior de Argentina y de toda Latinoamérica. Y las preguntas que surgen entonces son: ¿cómo son sus condiciones de vida? ¿En qué medida podrán sobrevivir frente al embate de los procesos de globalización, frente a la importancia que adquieren grandes empresas transnacio-

nales que dominan sectores clave de los complejos agroindustriales que se van perfilando aceleradamente en nuestros países? O visto de otra manera: ¿en qué medida los medianos y pequeños productores de Tucumán y de otras regiones del noroeste y nordeste del país —muchos de los cuáles podrían asemejarse al campesinado mexicano, peruano o boliviano, y con una problemática diferente a la del charcarero, o colono, o gran terrateniente de la región pampeana— podrían “sobrevivir” frente al embate del neoliberalismo en general? ¿Cuáles son las consecuencias de esa *nueva ruralidad* que Norma percibe y que se estaba manifestando sobre las condiciones de vida de todos esos sectores —incluidos también, a una parte apreciable de los productores “charcareros” pampeanos—?

Desde sus primeros pasos, todas sus investigaciones requirieron de trabajo de campo ampliamente extendidos, siendo este una parte importante de su aporte como investigadora del agro argentino. Pero tras varios años de analizar casos circunscriptos territorialmente, sus reflexiones se amplían hacia las transformaciones que operan tanto en el sector, cuando conceptualiza el surgimiento del *agronegocio* —en especial el sojero— o hacia aquellas transformaciones vinculadas a la minería a

cielo abierto o el *fracking* en la producción petrolífera. Surge entonces la problemática y conceptualización del extractivismo.

En paralelo, Norma analiza en sus trabajos las alternativas y las resistencias. En un primer momento piensa en la cooperativa o el cooperativismo como una salida importante para los productores y trabajadores rurales, pero en forma conjunta con esta problemática también va sumergiéndose en el análisis de la protesta social para concluir en consideraciones en torno a nuevos enfoques, y a las epistemologías del Sur que desarrolla profusamente Boaventura de Sousa Santos.

En esta Antología hemos pautado las siguientes secciones, que de alguna manera reflejan la evolución de los intereses y prioridades de Norma en su trabajo de investigación. Una primera parte que denominamos “La Sociología Rural y el debate sobre el campesinado”. Seguidamente, “Agroindustria, agro-negocio y extractivismo”. La parte siguiente la denominamos “Protesta y movimientos sociales”; y, finalmente, “Perspectivas desde el Sur. Colonialidad del poder, otros bicentenarios”. Estos núcleos temáticos reflejan diferentes momentos del interés de Norma sobre tópicos diversos, pero que inevitablemente se entrecruzan. Esto se hace evidente en las fechas

de los escritos, pues hay trabajos de los años noventa que consideran el auge del agronegocio y el extractivismo, pero al mismo tiempo se presentan consideraciones sobre diferentes protestas y movimientos sociales. Algo similar ocurre con la protesta social que Norma analizó en paralelo al desarrollo de consideraciones sobre las epistemologías del Sur, las cuales, sin embargo, no pueden ser aisladas del surgimiento de nuevos movimientos sociales, especialmente en lo que atañe a las resistencias socio-ambientales.

De todos modos, lo que presentamos aquí constituye simplemente una matriz que nos permite ubicar los trabajos y tener alguna noción respecto de las relaciones que tienen entre sí. Por lo demás, esta ha sido la respuesta al complejo problema inicial de seleccionar algunos escritos de entre una multiplicidad de trabajos de gran calidad. Luego de varias lecturas e intercambios logramos seleccionar unas 900 páginas. Ello requirió un gran trabajo de selección de mi parte, y de Tomás Palmisano que me ayudó en esta tarea y en otras de ineludible importancia como, por ejemplo, la edición adecuada del Prólogo y la Introducción. Tomás posteriormente siguió colaborando en sucesivas versiones que fui produciendo, como así también en la selección de los traba-

jos que finalmente incluimos en este libro. Su aporte fue una contribución inestimable que me ayudó mucho para la elaboración de esta versión final.

Para lograr esta selección tuvimos que dejar afuera materiales muy importantes. Decidimos excluir algunos libros que coordinó o en los que colaboró Norma, y que podríamos decir que ya tenían su autonomía propia y estaban lanzados al mundo de la Sociología en general. Entre ellos figuran *Tucumanos y tucumanas, territorios y lugares; 15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en la Argentina; La tierra es nuestra, tuya y de aquel...; Las disputas por el territorio en América Latina*, y un último libro que Norma pensaba publicar y para el que ya tenía algunos capítulos escritos cuyo título es *Pensar resistencias y protestas. Problemas y conceptualizaciones del siglo XXI*, que será publicado prontamente por la editorial Antropofagia. El material requirió un importante trabajo de evaluación y selección, pero creemos que esta versión final de la compilación es un fiel reflejo del pensamiento de Norma.

También recabé la opinión de otros amigos, y quisiera incluir aquí un párrafo realmente emblemático sobre el pensamiento de Norma que me enviara en su momento Horacio Mackinlay,

un entrañable amigo mexicano de origen argentino. Él escribe:

Norma se apasionó, desde sus primeros pasos académicos en México, mucho más en el estudio de los pequeños productores rurales que del *agribusiness*... Estuvo atenta y escribió sobre los grandes problemas sociales agrarios de Argentina y de América Latina. Uno puede seguir la evolución de los mismos a través de la obra de una intelectual enterada, que participa en la cambiante discusión intelectual y política: la dependencia, el debate campesinistas-descampesinistas, la globalización, las nuevas características del sistema capitalista, las luchas indígenas (zapatismo) y su impacto en el cono Sur, el colonialismo interno, la multiplicación de nuevos grupos sociales en el campo, nuevas expresiones de lucha, la soya transgénica, la minería a cielo abierto, las nuevas alternativas políticas y sociales que se plantean, etc. Casi tienes, a través de su obra, una historia de América Latina rural desde los inicios del capitalismo dependiente hasta el neoliberalismo.

Una de las características que define gran parte de la obra de Norma es el trabajo conjunto con otros investigadores, y muy especialmente con sus ayudantes y doctorandos que investigaban y estudiaban con ella. Por una parte adopta el

enfoque que tempranamente había planteado Rolando García, quien consideraba que el proceso mismo de la investigación forma parte de la enseñanza del “cómo investigar”. Por ello sus becarios y discípulos, maestrandos y doctorandos que trabajaron con ella integran sus libros y artículos como partes esenciales, en muchos casos, de su formación como investigadores. No cabe duda de que ello constituye una tarea ardua, pero que Norma la asume con gran naturalidad y como inherente a la investigación misma.

Todo su trabajo también está imbuido de un profundo sentido político, que se basa en la pregunta: ¿cómo contribuir a las luchas que realizan los sectores subalternos en las sociedades capitalistas para superar las condiciones de vida en que se encuentran? ¿Cómo superar los procesos de explotación y los deterioros ambientales que provoca el proceso de “desarrollo” que se está llevando a cabo en el mundo en general? Todo ello bajo la firme creencia de que tales análisis y procesos de investigación también deben ser de excelencia. No es incompatible la excelencia con el sentido político de la investigación. O sea, la acción política también requiere de los análisis de excelencia de los tópicos relevantes e importantes. Su trabajo no solo es apasiona-

do, porque Norma ponía pasión en su trabajo, y esto se manifiesta a lo largo de sus escritos. Estaba además fuertemente comprometida con lo público, en tanto necesidades que atañen a la sociedad en su conjunto.

SEMBLANZA SOBRE LA VIDA DE NORMA GIARRACCA¹

Norma Aída Giarracca nació en Ramos Mejía, en el Gran Buenos Aires, el 7 de abril de 1945. Hija de Mateo Giarracca y Cayetana Saita, su familia, tanto del lado de su padre como de su madre, era originaria de Niscemi, Sicilia. Su madre había nacido en Mendoza, su padre en Niscemi. Cristina, la otra hija de ambos, le llevaba a Norma cuatro años.

Su padre había trabajado con el abuelo en la zona de huertas de San Justo, habiendo establecido posteriormente un pequeño ase-

1 Agradezco a Cristina Giarracca y Marta Cufre, hermana y prima de Norma; a Carlos Abeledo, ex director del CONICET con quien trabajó Norma en los ochenta a la vuelta de la democracia; a Néstor del Pozo de Tucumán, productor y director de una cooperativa de pequeños cañeros; y a Sandra Carli, quien realizó una entrevista a Norma en el año 2013 de donde extrajimos para este Prólogo algunas de sus palabras.

rradero que mantuvo hasta comienzos de los años setenta.

Cuando las hijas comenzaron la secundaria la familia se trasladó a Ramos Mejía. Norma siempre fue muy buena alumna, aunque también se destacó por su rebeldía, o mejor dicho, su inconformismo. Sin embargo, en todo momento se evidenciaba su avidez por el conocimiento. Señalaba alguna vez que cuando descubrió a Nkrumah, el líder político africano, se le abrieron los ojos respecto de lo que pasaba en ese continente.

Estudió la secundaria en el Colegio Normal de San Justo, donde se recibió de Maestra. Dice Norma:

Las materias como Historia de la Educación o Filosofía estaban en manos de profesores de Filosofía y Letras, que influyeron muchísimo en un grupo grande de alumnas que veían en esas materias la fuente del conocimiento. (Entrevista de Sandra Carli, en prensa)

En parte, esto contribuyó a forjar su interés por inscribirse en la Facultad de Filosofía y Letras, primero en la carrera de Educación y Psicología, y finalmente en Sociología.

Su familia y parientes eran en general comerciantes, pero sus padres reconocían la impor-

tancia de que sus hijas se formaran culturalmente y siguieran una carrera universitaria. Fue así como ambas estudiaron, y Norma incluso en su formación tuvo clases de música. Su madre cantaba tangos y era una ferviente admiradora de la ópera italiana. Ellas estuvieron entre las primeras profesionales de la familia.

Norma pasó su adolescencia en Ramos Mejía. Su abuelo materno era socialista, muy político, había leído a Gramsci e influyó significativamente en su pensamiento. Norma destaca que su familia no era antiperonista, un factor que fue importante en su formación. Su padre era frondizista pero no antiperonista; todo lo contrario, más bien tuvo simpatías por el peronismo. Su abuelo tampoco era antiperonista. Por otra parte el tío político de Norma era peronista, y su hermano Carlos Cufre fue sindicalista del gremio de la carne, con una actuación durante el conflicto de Lisandro de la Torre en Mataderos, y que también tuvo algún vínculo con Evita. Asimismo, Norma en su adolescencia, junto con amigos de Ramos Mejía, estaba al tanto en los años sesenta del pensamiento de Perón, y se intercambiaban cassettes que él enviaba desde su exilio en Madrid.

En 1968 terminó de cursar y en 1969 dio las materias. En 1967 la proponen como coayudante de Estadística de Fernando Álvarez.

Era el período en que se estaban formando las cátedras nacionales y, con Fernando, Norma se acerca a la CGT de los Argentinos (CGTA).

Sentía orgullo de haber participado junto a Adriana Puiggrós y otras docentes en la Comisión de Educación de la CGTA, y de haber conocido a Ongaro y a Di Pascuale. Y justamente, en paralelo a la CGTA, se estaba formando el Peronismo de Base. O sea, empezó a ligar la experiencia como maestra con la experiencia política, a conocer la resistencia peronista. Entonces (unos años después de 1968) se contactó con esa organización y empezó el trabajo territorial en los barrios de La Matanza o de Moreno o de Boulogne, pero dejó de participar cuando esa organización se integró a Montoneros.

Uno de sus primeros trabajos fue como maestra de escuela primaria en la zona de Rafael Castillo (en el Gran Buenos Aires), que duró un tiempo durante su formación como socióloga en la carrera de Sociología. Destaca que quien la indujo a pasarse a Sociología fue la cátedra de Introducción a la Sociología que dirigía Jorge Graciarena. Ingresó a Sociología porque en esa carrera había reflexión de filosofía social:

La Carrera de Sociología era una mezcla de Sociología funcionalista y estructuralista, el marxismo como mecha que daban Miguel Murmis y Mi-

guel (Teubal), y era muy fuerte Psicología Social. (Entrevista de Sandra Carli, en prensa)

Reconocía haber tenido una buena formación en Sociología gracias a la cátedra de Murmis y Verón, Sociología Sistemática. Germani ya se había ido a los EEUU pero estaba Miguel Murmis, a quien respectaba mucho, y consideraba como uno de sus principales mentores intelectuales. Asimismo, tuvo oportunidad de hacer trabajo de investigación con Lelio Mármora, y participó en el proyecto de marginalidad que dirigía Miguel Murmis. Hacia el final de su carrera pasó a ser ayudante de Estadística y después ayudante de Metodología de la Investigación Social. El hecho de que daba Estadística, un cuatrimestre para Sociología y otro para Psicología, fue muy importante para su formación como investigadora.

A comienzos de los años setenta empezó a trabajar en el Ministerio de Agricultura, pero previamente surgió un repentino viaje a Perú.

La experiencia peruana fue fundamental en su percepción sobre la vida y el trabajo en general.

Se estaba gestando la Reforma Agraria de Velasco Alvarado. A ese curso asisten sociólogos, economistas, educadores y un matemático.

No solo fue importante el curso sino también las visitas a diferentes localidades durante

los fines de semana. De lunes a viernes estudiaban la historia social y económica del Perú. Y los fines de semana iban a otros lugares.

Un médico peruano (que había estudiado en La Plata) nos acompañó. El primer fin de semana fuimos a los cerros a Huancayo a grandes alturas con una combi, y hablamos con la gente, a través de él. Nos encontramos con aymaras y quechuas con su ropa y muchas veces hablando en su idioma. Algunos estaban enterándose de la reforma agraria; otros, ni siquiera.

El segundo fin de semana fuimos a Mala, una playa al sur de Lima. Lo que yo sentía que tenía que hacer es lo que hice toda la vida: sentarme frente a alguien, y que esa persona me acepte, que pueda hablar conmigo. El desarrollo de ese talento tuvo que ver con la militancia; sin embargo, es mucho más fácil sentarse frente a un obrero del Conurbano y decirle “compañero” para entablar un diálogo. Acá, en Perú, no eran “compañeros”. Sin embargo, yo sentía que la gente, las mujeres o los hombres, se sentaban frente a mí y me hablaban, y para mí era algo natural, no me daba cuenta de que no le pasaba a todo el mundo. (Entrevista de Sandra Carli, en prensa)

En efecto, quizá sea esta una de las cualidades más notables que tenía Norma. Néstor del Pozo lo destaca, teniendo presente la experiencia que Norma tuvo años después en Tucumán.

Dice Néstor:

Cuando fui conociendo el pensamiento de Norma, el abordaje que tenía de la cuestión agraria era en función de una humildad terrible, digamos, y una capacidad de inserción con la gente que es fundamental para hacer cualquier investigación... Si vos no te insertás en el territorio no te van a dar bola ni te van a contar lo que les pasa. Entonces Norma manejaba todas esas cosas a diez puntos y toda la gente que traía, lo mismo. Y a partir de eso comenzó todo un estudio que hizo de las luchas cañeras. (Entrevista a Néstor del Pozo, 16 de diciembre de 2016, cañero tucumano y líder de una cooperativa de pequeños productores cañeros)

Pocos años después de su viaje a Perú, en junio de 1972, nos reencontramos con Norma. Ella había sido alumna del curso de Economía que yo dictaba en la carrera de Sociología de la UBA, pero nunca había hablado con ella. Sin embargo, justo cuando a ella le faltaban pocas materias para recibirse, yo renuncié tras la famosa Noche de los Bastones Largos.

Ese año yo daba clases en la carrera de Economía de la Universidad del Sur en Bahía Blanca. Por lo general iba en ómnibus, estaba de lunes a jueves y regresaba para el fin de semana a Bue-

nos Aires. En esa ocasión había perdido el ómnibus y decidí tomar el avión a la mañana siguiente para no perder la clase en Bahía Blanca. Norma, al mismo tiempo viajaba a Bahía Blanca porque su cuñado y hermana habían tenido un bebé, Pablo, y necesitaban de su ayuda ineludible. Como consecuencia, luego de un cierto retraso del avión, nos “conocimos” nuevamente en Aeroparque. Hacia fines de año Norma vino a vivir conmigo y en marzo del año siguiente, nos casamos.

Ya para entonces Norma trabajaba en el Ministerio, y yo había ingresado a la carrera del Investigador, teniendo como lugar de trabajo el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA cuyo director era el Dr. Julio H. G. Olivera (quién además fue el director de mi trabajo de investigación).

Estando casados, Norma y yo decidimos que teníamos que militar en forma conjunta, en una misma organización. Norma, como mencioné anteriormente, venía del Peronismo de Base, que sin embargo estaba dividido. Un grupo de militantes, entre los cuales se encontraba ella, no estaban de acuerdo con que la organización se integrara a Montoneros. Entonces elegimos militar en una unidad básica contigua al Barrio Mitre de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires, llamada “Hilda Guerrero”, que era el nom-

bre de la mujer de un cañero tucumano que cayó en 1968. Comenta Norma:

Ese espacio se había formado con algunos grupos estudiantiles que venían de FORPE [Fuerza para la Organización Revolucionaria Peronista], y con gente que venía de CGTA [Confederación General del Trabajo de los Argentinos]. Vivíamos en Juramento y Freire, y terminamos trabajando ambos en la Unidad Básica que le correspondía a Barrio Mitre, donde estaba [Carlos] “Chacho” Álvarez como principal referente. [...]

Nos dedicábamos básicamente a establecer relación con la gente y a organizarla, primero electoralmente, en el '73, y después, en lo que pudiéramos hacer para contribuir a la democracia. Porque ellos me decían —nunca me voy a olvidar—: “Hasta ahora fue difícil, pero ¿sabés lo que va a ser después del 25 de mayo?”.

El 25 de mayo era la fecha en que asumiría Cámpora. Por ejemplo, se armó una red de carnicerías en la zona para, entre otras cuestiones, contribuir al control de precios. Pero estas propuestas eran rechazadas por las Unidades Básicas subordinadas. Había una línea que no era militarista, y otra que era netamente militarista. Y nosotros teníamos una gran identificación con los sectores populares. Con eso no quiero decir que fuéramos liberales y creyéramos que en la democracia se iba a conseguir todo porque, de hecho, tampoco Perón era liberal. Pero sentíamos que había que

acompañarlo [a Cámpora] con la transición democrática y con Perón. Sentíamos que había que respetar esta transición. (Entrevista de Sandra Carli, en prensa)

Después de la muerte de Perón la situación se hizo más compleja. No se apoyó a Isabel Perón en el marco del proyecto “Lealtad”, y ello implicó un quiebre. No obstante, Norma siempre mantuvo un profundo respeto por Perón y siguió destacando la importancia de su pensamiento, por ejemplo, en materia ambiental, cuarenta años antes de que esta se volviera importante a escala mundial.

Norma siempre tuvo un especial vocación por “ayudar al otro” y en especial a los más necesitados y explotados por las políticas oficiales. Señalaba su preocupación por el sufrimiento de vastos sectores sociales. Era, además, una excepcional organizadora, creadora de trabajos y de vínculos entre las personas. Se señaló alguna vez su “carácter fuerte”, pero este no era otra cosa que su fuerte sentido de justicia, que nunca dejó de manifestar, incluso frente a los más encumbrados.

BIBLIOGRAFÍA

Carli, S. s/f (en prensa) *Entrevista inédita a Norma Giarraca realizada el 19/12/2013, en el marco de los Proyectos PIP-CONICET 2011-2014 “Transformaciones de los procesos de adquisición, producción y transmisión del conocimiento universitario. Un estudio de caso centrado en las historias de vida de profesores/as de la Universidad de Buenos Aires del área de humanidades y ciencias sociales” y UBACYT 20014-2017 “La universidad pública en perspectiva histórica: culturas institucionales, biografías de profesores/as y experiencias de conocimiento”* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).

SOBRE LOS TRABAJOS SELECCIONADOS

INTRODUCCIÓN

MIGUEL TEUBAL*

PRIMERA PARTE: LA SOCIOLOGÍA RURAL Y EL DEBATE SOBRE EL CAMPESINADO

Norma Giarracca comienza su trabajo de investigación en el año 1970 cuando integra el Grupo de Trabajo en Economía y Sociología Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. En este marco empiezan sus trabajos de campo en las provincias de Misio-

nes y Corrientes, lo que da lugar a sus primeras publicaciones¹.

Hacia el año 1973, con el fin de la dictadura iniciada en 1966 por Onganía y la vuelta del país a la democracia, siendo Horacio Giberti secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Norma participó activamente en actividades vinculadas con las políticas agrarias a nivel nacional e integró varias comisiones de concertación con sectores diversos de la comunidad.

* Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

1 Como resultado participó en la *Investigación sociológica del área tabacalera correntina* (Giarracca, Flood, Aparicio y Baudron, 1971) y en la publicación *Estudio de la mano de obra rural en la actividad forestal de la Provincia de Misiones* (Grupo de Trabajo de Sociología Rural, 1974). Entre otras cuestiones se trataba de analizar el mercado de trabajo en zonas de reforestación, destacando sus particularidades y la extrema precariedad e inestabilidad que caracterizaba al empleo en esas áreas.

Con Norma estuvimos exiliados² en México entre 1978 y 1984 en un período de gran efervescencia intelectual. Allí ella retomó sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el campo de los estudios agrarios tenía vigencia el debate entre *campesinistas* y *descampesinistas*³, siendo estos últimos los que consideraban inevitable la desaparición del campesinado en el marco del desarrollo del capitalismo mexicano. Norma se manifestó a favor de los *campesinistas* que refutaban esa tesis destacando la importancia de los aportes y la presencia del campesinado, en momentos en que se producía una gran transformación social, económica y política en

2 En el año 1976 tras el golpe militar de Videla, nos tuvimos que exiliar debido a que yo había formado parte de la carrera de Economía que se dictó a partir del año 1972 en la Universidad del Sur en Bahía Blanca. Todos los que participamos en un concurso de oposición internacional y fuimos designados profesores fuimos tildados de subversivos; muchos de mis colegas fueron presos, y otros tuvimos que emprender el exilio.

3 Entre otros autores que participan en el debate están Roger Bartra, Arturo Warman, Erich Wolf, Luisa Paré, Rodolfo Stavenhagen, Kristen A. de Apendini, Héctor Díaz-Polanco, y desde una perspectiva que sobrepasa México véase la recopilación de Teodor Shanin (1971), *Peasants and Peasant Societies*.

México. Su posición a favor de esta tendencia se basó en la diferenciación social que se manifestaba en el campesinado. Para ello se propuso revisar el debate en torno a esta cuestión que no solo tenía vigencia en México sino también en varios países de Europa.

En esta postura a favor de los campesinistas, Norma recurre al último Marx, entre otros, y su intercambio epistolar con la entonces populista Vera Zasúlich, y a su diálogo con los populistas rusos sobre la posibilidad de que el socialismo pasara por la comuna campesina, por lo menos para el caso de la Rusia de su época. Aunados a esta problemática están los planteos de Chayanov y Shanin, y la perspectiva de este último del campesinado como una “clase incómoda”. En uno de los capítulos de su tesis presenta una revisión crítica sobre esta problemática.

Norma se inscribió en el Departamento de Estudios de Postgrado de la UNAM, tomó cursos y elaboró su tesis para la obtención del título de Master en Sociología⁴. Participó asimismo

4 Había sido aceptada para realizar el doctorado en el Institute of Development Studies de Inglaterra, pero por diversas razones nos trasladamos a México. Allí la UNAM exigía que antes de postularse para el Doctorado todo investigador debía primero obtener la Maestría. Los cursos requeridos para ambos eran los mismos.

en el Seminario de Desarrollo Agrícola y Agroindustrial que dirigía Ruth Rama en la División de Estudios de Posgrado, donde encontró un importante ámbito de reflexión y discusión. Entre sus profesores también estuvieron Emilio de Ipola, René Zavaleta Mercado y Herbert Frey, un historiador conocedor de la problemática campesina de México e influenciado por el pensamiento marxista post renovador de la *New Left Review* de Perry Anderson. También se interesó por el pensamiento de Iván Illich y su concepto de “convivencialidad”.

Allí se retoma otra cuestión que tuvo vigencia en el México de este período y se relaciona con los análisis de diversos autores latinoamericanos sobre los denominados *complejos agroindustriales*, y las articulaciones del campesinado con los mismos. Entre ellos se destacaban los trabajos de Raúl Vigorito, Raúl Trajtenberg y Gonzalo Arroyo, así como los de Ruth Rama, la directora de tesis de Norma. Estos aportes fueron importantes para la evolución de su pensamiento.

Con posterioridad a este periodo y en función de una etapa en la que se planteaban alternativas en términos políticos a estas cuestiones, Norma rescató la experiencia del campesinado ucraniano en la figura de Néstor Majnó, de las comunas de Aragón en los años treinta. La ela-

boración teórica del debate sobre el campesinado continuó en décadas posteriores y estuvo presente en casi todas las fases de su trabajo de investigación. Tan es así que en las clases que dio en el año 1987 en el marco del seminario sobre Sociología Rural que dictaba en el Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trató con cierto detalle la problemática “campesinista” que había analizado con anterioridad.

En este período que pasamos en México la investigación de Norma se materializó en el trabajo de tesis de Maestría titulado “La subordinación del campesinado a los complejos agroindustriales. El tabaco en México” (Giarracca, 1983). El trabajo de campo se basó en datos recogidos durante una investigación sobre el complejo agroindustrial del tabaco llevada a cabo por los departamentos de Economía y Sociología de la UAM Azcapotzalco bajo mi coordinación en la que participaron Norma, Silvia Ortega y Carlos Calderón. Norma fue nombrada investigadora principal de la investigación, que fue impulsada por su directora de tesis, Ruth Rama, quien gestionó su financiamiento por parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México en el marco de un convenio de esa institución con la UAM Azcapotzalco.

Norma trabajó intensamente en este proyecto y coordinó varios de sus aspectos, en especial el trabajo de campo referido a los campesinos tabacaleros y sus articulaciones agroindustriales.

A partir de estos trabajos, se planteó cuestiones que le permitieron adquirir un importante conocimiento del agro mexicano. “La etapa de campo me proporcionó la oportunidad de recorrer zonas campesinas, de platicar con sectores integrados a empresas transnacionales; ya no solo los productores tabacaleros sino que en los ejidos platicamos con cafetaleros, cañeros, huleros, barbasqueros, etcétera” (ibídem). Norma se propuso “integrar la experiencia con los tabacaleros a un marco de explicación más amplio que incluyera a los campesinos ‘subordinados’ al capital agroindustrial” (ídem). Asimismo se realizaron entrevistas a productores, funcionarios de Tabamex, jornaleros, sindicatos, líderes regionales, y a los que actuaron en el conflicto que derivó en la creación de Tabamex. También se entrevistó a productores privados que aún persistían en las regiones (ibídem: 8).

Fue así como Norma aportó elementos teóricos y metodológicos importantes que no habían sido considerados en el trabajo “técnico” anterior. Presentó un capítulo entero con

reflexiones analíticas y epistemológicas sobre la categoría *campesinado*, y otro sobre las articulaciones agroindustriales. Asimismo, fue relacionando estos conceptos al mundo agrario mexicano, “particularizándolo(s) a un proceso social e histórico, para llegar al subsector que hemos decidido estudiar: el subordinado al capital agroindustrial” (ibídem).

En la Introducción de su tesis, Norma señaló el papel del campesinado mexicano:

[...] cumplió un importante papel en el desarrollo industrial del país hasta mediados de la década de los sesenta. Representaba el abastecedor de alimentos baratos para la reproducción de la fuerza de trabajo industrial, al mismo tiempo que el sector agrario capitalista aportaba una cuota importante de productos de exportación que permitía adquirir divisas para la compra de bienes de capital necesarios para dicho proceso. [...]

[En efecto,] el campesinado proporcionaba alimentos y trabajo baratos, indispensables para mantener un nivel de explotación de los sectores obreros urbanos y se constituía en un elemento importante para el patrón de acumulación establecido. (Ibídem: 1)

Este modelo entró en crisis en México durante la mitad de la década de los sesenta. Para algunos autores ello fue consecuencia de la

polarización que se fue dando en el agro a raíz de la presencia de esas dos formas de producción: la campesina y la capitalista. Y por la concentración de los recursos hacia la segunda (Paré, 1982, citado en Giarracca, 1983). A partir de esa situación, que repercutió fuertemente en los productores de alimentos, sobre todo maiceros,

hubo una marcada reorientación de la producción. Muchos campesinos orientaron sus tierras hacia el sorgo y otros abandonaron sus parcelas y migraron hacia las ciudades. Cundió la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, el incremento de las migraciones rurales urbanas y la reorientación de la producción hacia productos de exportación y agroindustriales. Asimismo, se produce la fuerte presencia de las Empresas Transnacionales en la producción de alimentos, una creciente importancia de la ganadería, la presencia del Estado en la comercialización de ciertos productos, todo lo cual, por un lado, modificó los patrones de producción y, por el otro, determinó cambios en la estructura jurídica en la que se sustentaba el modelo anterior. De este contexto el sector campesino con fuerte presencia en la producción de alimentos (maíz, azúcar, café, etcétera) es analizado por algunos autores como una fracción social que tiende a desaparecer, debido a las ventajas que el sector capitalista ofrece al capital (sobre

todo a la fracción agroindustria) en esta etapa. Otros autores oponen a esto el argumento de la “funcionalidad” que el sector campesino le ofrece el capital. Para estos últimos, el sector pasaría a estar organizado y controlado por el capital transnacional en función de la lógica capitalista de la valorización. (Ibídem: 3)

Comenta Norma:

Creemos que los descampesinistas ponen demasiado énfasis en el resultado final del proceso de diferenciación, y dejan de lado las etapas intermedias por las que el sector atraviesa. En algunos casos, estos autores ya suponen un sector desintegrado y “ordenadamente” proletarizado. Mientras los autores “campesinistas” en su afán de sustentar la hipótesis de la “refuncionalización” pretenden presentar un campesinado homogéneo sin demasiadas contradicciones en su interior. Nuestro principal objetivo es demostrar cómo el proceso de diferenciación campesina en México, se evidencia en el proceso de diferenciación social interna más que en una acelerada descomposición. Este hecho es el que determina, a nuestro juicio, la cada vez mayor heterogeneidad del sector. [...] [Asimismo,] la “proletarización” asume la forma de un proceso complejo y contradictorio, donde resaltan las formas de pauperización campesina o la semiproletarización sin abandono de parcelas. (Ibídem: 3)

Otro objetivo, más específico, es “demostrar que la penetración del capital agroindustrial acentúa este proceso, llegando a subordinar a campesinos de los sectores pauperizados, ofreciéndoles ingresos iguales o menores a los pagados a los jornaleros de la región” (Ibídem).

Esta problemática está ampliamente tratada en la tesis de Maestría, y en otros dos trabajos que publicó posteriormente: “Tabamex, a remolque de las empresas cigarreras. Y el tabaco se nos vuelve humo” (Giarracca, 1982) y “Complejos agroindustriales y la subordinación del campesinado. Algunas reflexiones y el caso de los tabacaleros mexicanos” (Giarracca, 1985). Incluimos en este libro este último trabajo, ya que en él se presentan los resultados de su trabajo de investigación que condujo a su tesis de Maestría. De todos modos, la tesis de Maestría “La subordinación del campesinado a los complejos agroindustriales. El tabaco en México”, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México en julio de 1983, fue muy reconocida, y obtuvo una mención honorífica y una medalla de honor. Entre los pocos argentinos que obtuvieron este reconocimiento se encuentran Ana María Escurra y Cayetano de Lella.

Considero que los aportes de Norma son fundamentales y van más allá de una proble-

mática que, podríamos presumir, tenía solo vigencia en esos tiempos mexicanos. El rol y los avatares con los que se enfrenta el campesinado (y otros sectores rurales subordinados afines como la población indígena e incluso sectores chacareros pequeños, así como también los sectores quilombolas y afroamericanos de muchos países latinoamericanos) en sus diversas manifestaciones siguen siendo hechos importantes del mundo actual. En este sentido, los trabajos de Norma no han perdido vigencia.

Una muestra de esta problemática es el artículo “Campesinos y agroindustrias en los tiempos del ‘ajuste’. (Algunas reflexiones para pensar la relación, con especial referencia a México y Argentina)” (Giarracca, 1993) que incluimos en este libro.

En este artículo Norma destaca a los cambios que se fueron materializando en el desarrollo agrario de Argentina y México impulsados en gran medida por cambios en la economía mundial.

Algunas décadas atrás no existían mayores dudas acerca del papel dinámico del Estado en los procesos de incorporación de los sectores campesinos, a los procesos económicos nacionales [...] Desde las reformas agrarias hasta paquetes de leyes que regulaban el desempeño agrícola, se había

dado una amplia gama de intervenciones estatales en las agriculturas latinoamericanas. (Ibídem)

Sin embargo a partir de las políticas de ajuste que se aplicaron en ambos países,

el Estado retira paulatinamente los apoyos imprescindibles para presumiblemente mantener la “integración” de las agriculturas campesinas a la expansión agroindustrial.

En el artículo se analizan las condiciones que facilitan (o no) “la integración de agricultores familiares a la expansión agroindustrial en México y la Argentina” (Ibídem: 16).

Vemos así que aún antes de que Harvey elaborara el concepto de “acumulación por desposesión” Norma presagiaba los efectos nefastos que sobrevendrían en nuestros países si los sectores subalternos y en particular los campesinos (y otros sectores subordinados como los chacareros medianos y pequeños, poblaciones originarias y sectores afines) no tomaban cartas en el asunto y se organizaban con efectividad para hacer frente las políticas neoliberales que aparecían con fuerza en el horizonte.

Esta perspectiva atravesó el trabajo de investigación que realizó Norma a su vuelta al país. Su trabajo sobre los cañeros tucumanos y la

problemática de las agriculturas del Noroeste continuaron en muchos sentidos con los análisis de esta problemática. Como muy bien lo plantea Norma, si bien no existe un campesinado en la Argentina tal como el que existe en México, Perú y otros países latinoamericanos, en Tucumán *sí* existe un campesinado, que ella se empeña en estudiar a fondo, y que constituyó una parte importante de su trabajo de investigación.

En 1998 se publica el libro coordinado por Norma Giarracca y Silvia Cloquell *Las agriculturas del Mercosur: el papel de los actores sociales*⁵. En la Introducción Norma y Silvia comentan que

desde mediados de la década del ochenta, los gobiernos latinoamericanos asesorados por los organismos internacionales —los agentes de la globalización— generan una serie de medidas económicas que tienden a expandir los intereses privados en las agriculturas. La denominada “retirada del Estado” en el sector agrario desató un proceso muy complejo que aún está en marcha. [...] Se corrobora en casi todos los países una fuerte intención por lograr altos niveles

5 Aparte de la Introducción que presentan las coordinadoras se incluyen artículos de Anita Brumer, Sergio Gómez, Miguel Murmis, Tomás Palau, Diego Piñeiro y José Vicente Tavares dos Santos.

tecnológicos en las nuevas y viejas producciones para lograr rentabilidades adecuadas en un mercado externo en “proceso de globalización”, altamente competitivo y donde las producciones subsidiadas (EE.UU. y Europa) tenderían a desaparecer. [...]

[Frente a esta situación] también asistimos a diversas respuestas de estos sectores subordinados: marchas y tomas de tierra de los “Sin Tierra” brasileños; movilizaciones y partidos agrarios en Paraguay; organización de mujeres agropecuarias endeudadas, tractorazos, marchas federales y cortes de ruta en Argentina [...] Nos propusimos trabajar algunas ideas acerca del Mercosur como proceso económico de integración pero también recordar que hay un proceso social en marcha, con múltiples determinaciones y cargado de las incertidumbres que le son propias. (Giarracca y Cloquel, 1998: 6-8)

En paralelo a estas investigaciones y a nuestra vuelta a la Argentina en 1984, Norma trabajó varios años en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En esos años, se trataba de reestructurar y adecuar dicha institución a los requerimientos de la democracia, dada la devastación habida en ella durante la dictadura militar. Entre otras políticas fueron impulsadas las “becas de actualización” para todos aquellos investigadores que

habían sufrido exilio o cárcel durante la dictadura militar, como mecanismo para encauzar la investigación científica en nuestro país. Asimismo, Norma contribuyó a orientar a los exiliados que regresaban hacia las instituciones en las que podrían retomar sus respectivos trabajos de investigación. Fue muy importante la participación que tuvo en la consolidación y activación de las investigaciones en Ciencias Sociales, que habían sufrido un especial deterioro en el período militar, y que muchas veces eran menospreciadas en el mundo de las ciencias (duras) en general.

En un artículo incluido en un número especial de la revista *Sociedad: Facultad de Ciencias Sociales*, dedicado a “Las Ciencias Sociales en el fin de siglo”, Norma presentó “Algunas reflexiones sobre las Ciencias Sociales y la investigación en los espacios académicos públicos” (Giarracca, 1992⁶). Reflexionó allí sobre diversos asuntos vinculados con sus prácticas institucionales desarrolladas tanto en el CONICET, entre 1984 y 1988, asesorando a la Secretaría de Coordinación Académica, como en la Facultad de Ciencias Sociales desde 1988, “tratando de gestar y construir, junto con mis

6 No se incluye en este libro.

colegas, un espacio de investigación universitaria”. Dice Norma:

Como docentes e investigadores universitarios en este final de siglo en Argentina, nos toca vivir una paradoja: la de poder actuar dentro de climas de libertad y tolerancia poco conocidas en otras épocas, que nos permiten pensar, analizar, transmitir y difundir conocimientos, pero también dentro de situaciones impregnadas por una profunda crisis de las instituciones dependientes del Estado. (Ibídem: 157)

El artículo mencionado trata sobre “un poco de la historia” de las Ciencias Sociales en nuestro medio, durante el retorno a la democracia, algunos de sus logros, y los escollos y dificultades con que ella y sus colegas se enfrentaron a estos problemas en un momento crucial para el desenvolvimiento de la investigación y la enseñanza de las Ciencias Sociales en el país.

Al mismo tiempo tuvo una participación activa en la creación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el desarrollo de numerosas actividades en el seno de lo que posteriormente sería el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad. En el marco de este instituto creó el Grupo de Estudios Rurales y posteriormente el Grupo de Estudios so-

bre los Movimientos Sociales (GER-GEMSAL), que formaron parte del marco institucional en el que desarrolló el grueso de su trabajo de investigación y el de sus colaboradores, desde ese entonces hasta el fin de su vida.

En este período Norma elaboró una serie de reflexiones en torno de la evolución de las Ciencias Sociales y los estudios rurales en la Argentina. Estas reflexiones se materializaron en diversas publicaciones incluidas en el libro *Estudios rurales: Teorías, problemas y estrategias metodológicas* (Buenos Aires: La Colmena, 1999). Fueron además adosados diversos trabajos de carácter metodológico y epistemológico tanto en este libro como en otras publicaciones.

En el primer capítulo del libro, titulado “Las Ciencias Sociales y los estudios rurales en la Argentina durante el siglo XX” (incluido en esta compilación), Norma nos presenta un panorama general del aporte de la Sociología Rural y las demás Ciencias Sociales a los estudios de los procesos agrarios y mundos rurales de Argentina. El artículo siguiente, “Una aproximación a los estudios agrarios en Europa y los EEUU”, extiende la recopilación a los países centrales.

El libro marca un hito importante en el análisis del alcance y la significación que tienen los estudios sociales agrarios de nuestro país y de

los enfoques y problemas sobre esta temática tratados en diversos países del mundo. También se presenta una reflexión sobre algunos de los principales temas y agendas de problemas que Norma percibía podrían ser objeto de análisis durante el siglo XXI: alimentación, medio ambiente, movilidad social, sistemas agroalimentarios, pobreza, etcétera. Como Anexo del primer capítulo, el libro incluye la masa de trabajos vinculados al agro publicadas en el siglo XX por los investigadores de las diversas disciplinas sociales de nuestro país.

A su vez, el resto de los capítulos están dedicados a orientaciones y estrategias metodológicas pensadas y diseñadas por sociólogos investigadores aun cuando esto no significa que sean de su uso exclusivo (de la Sociología). En efecto, “las reflexiones presentadas [...] integran el repertorio metodológico tanto de los sociólogos como de los antropólogos, geógrafos, etcétera” (ibídem).

En el libro *Ruralidades latinoamericanas. Identidades y luchas sociales*, compilado por Norma y Betina Levy, y publicado por CLACSO-ASDI en 2004, se reúne un conjunto de ensayos producidos por jóvenes investigadores latinoamericanos del concurso “Globalización, transformaciones en la economía rural y movimientos sociales agrarios”, organizado

por el Programa Regional de Becas de CLACSO. En este libro Norma publica la Introducción “América Latina, nuevas ruralidades, viejas y nuevas acciones colectivas” (Giarracca, 2004), incluida en esta antología, en la que destaca que

desde la década del ochenta las políticas públicas de América Latina tendieron a reorientar la intervención estatal, liberalizar la economía y la apertura al comercio internacional, tomando como variable de ajuste el salario. [Crecieron las tasas de desocupación y] se precarizaron las condiciones laborales de los que aún conservaban sus puestos de trabajo.

[...]

Las políticas públicas ortodoxas —como el Plan Austral (1985) y el Plan de Convertibilidad (1991) de la Argentina, la megaestabilización de Bolivia (1985) y una serie de programas de estabilización como los de Collor de Melo y Cardoso en Brasil entre 1986 y 1999, y en México entre 1987 y 1994— pusieron en marcha los mecanismos institucionales para llevar a cabo una transformación sin precedentes en el siglo XX. Las agriculturas y las poblaciones afectadas sufrieron las consecuencias de tales cambios macroinstitucionales. (Giarracca, 2004: 14)

Fue en este escenario donde se llevaron a cabo nuevas acciones colectivas y surgieron

nuevos actores sociales, muchos de las cuales tuvieron que ver con el mundo social agrario. Al finalizar la década del noventa, “la protesta se hizo global y se enfocó contra los organismos internacionales que promovieron estas transformaciones (la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera)”. Asimismo, entre fines de 1993 y 1994 en muchos países de América Latina “aparecieron novedosas y significativas resistencias que recuperaron las experiencias y luchas que se venían desplegando desde el comienzo de la mencionada década” (Ibídem).

Según Norma, a pesar de ser mayoría en varios de nuestros países, los pueblos originarios nunca antes se habían propuesto gobernar: Ecuador y luego Bolivia ponen esta cuestión en la agenda política regional (Ibídem: 17).

Desde el año 1987 hasta fines de los años noventa, Norma trabajó fundamentalmente sobre el complejo cañero de Tucumán en la Argentina, aunque también analizó otros complejos, como el arrocero de Entre Ríos y el tabacalero del noroeste del país. En los primeros momentos obtuvo subsidios para trabajar en el CEPA, pero posteriormente se dedicó de lleno a la investigación en el marco del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

En torno a esta problemática coordinó varios libros, algunos de los cuales reflejan aspectos de sus preocupaciones de carácter metodológico sobre el trabajo de campo. *Acciones colectivas y organización cooperativa. Reflexiones y estudios de caso* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina / Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencias Sociales, UBA), publicado en 1994, es un libro que, si bien a primera vista aparece orientado fundamentalmente a la acción cooperativa —en efecto el capítulo que escribe Norma en la segunda parte del libro trata sobre la Liga de Cooperativas Cañeras de Tucumán— también se explica en la Introducción “sobre la organización y autogestión como herramientas de desarrollo”⁷. Asimismo, se pregunta

en qué condiciones de posibilidad los sectores medios y populares logran cambios que mejoran, en algún sentido, sus posiciones laborales y sociales en general. La cooperativa en sus diver-

7 Aparte de la Introducción y el capítulo sobre la Liga de Cooperativas Cañeras de Tucumán que escribió Norma, y que incluimos en esta recopilación, el libro incluye trabajos míos y de Marta Panaia, Gurli Jacobsen, Mirta Vuoto, Carla Gras, Gabriela Riveiro, Valeria Hall, María Inés Alfaro, Ariadna Guaglianone y Marta Vuotto.

sas variantes de organización económica, aparece como una herramienta, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. El problema reside en indagar (acerca de) la naturaleza y las características de esas condiciones y, en esta acción, nos internamos en los mundos sociales, culturales y económicos. (Giarracca, 1994b: 7)

[...]

La experiencia de trabajar con la Liga de Cooperativas de Cañeros de Tucumán, una organización autogestionaria, observar su funcionamiento y la destreza de sus miembros (manejar un fax, conocer diariamente el precio del azúcar, manejar un ingenio, etcétera) nos planteó el desafío de conocer acerca de estos sujetos, ubicados en categorías subordinadas del espacio económico y social, que habían decidido modificar en conjunto sus condiciones preexistentes y crear otra situación.

Así, pues, abordamos la problemática del cambio desde la perspectiva del “agente”, tomando al “actor” como un recurso de inteligibilidad para dar cuenta de las acciones mientras nosotros —científicos sociales— nos ubicamos como intérpretes del “otro” en una situación de intersubjetividad y de implicación. (Ibídem: 9-10)

El trabajo “‘Tucumanas de ojos grandes’. Un estudio sobre acciones colectivas de campesinas tabacaleras”, incluido en el libro compilado por Lidia Knecher y Marta Panaia, *La mitad del*

país. La mujer en la sociedad argentina (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina / Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1994), y que también incluimos en este libro forma parte del trabajo de investigación que realizó Norma sobre las condiciones de posibilidad de nuevas acciones colectivas dentro de los sectores populares del noroeste rural argentino. Entre ellas tuvo gran éxito la Cooperativa Tabacalera de Trabajo “El Sacrificio”

que comienza en 1984, cuando un grupo de jornaleras tabacaleras, conscientes de la importancia del propio trabajo en la producción, se hicieron la pregunta: “por qué no trabajar para nosotras”. [...] Iniciaron así un proceso de organización que involucra tanto aspectos productivos como socioculturales. (Giarracca, 1994a: 397)

En numerosos trabajos Norma se preocupa por la problemática que marca al sociólogo en el trabajo de campo y en el trabajo de investigación en sí. De allí su interés como investigadora por los aspectos teóricos y metodológicos de su disciplina. Varios artículos siguen esta línea de análisis. En esta compilación se incluye un artículo un tanto coloquial impulsado por Susana Lamboglia, en el que Norma conjuntamente con Susana Aparicio comentan cómo investi-

garon y cuáles fueron los problemas con que se enfrentaron en sus estudios sobre Tucumán. Este artículo, “El oficio del sociólogo o de los sociólogos con oficio”, en el que ambas dialogan con Susana Lamboglia y Adriana Puiggrós, fue publicado originalmente en 1995 en el libro colectivo de F. Schuster, N. Giarracca, S. Aparicio, J. C. Chiaramonte y B. Sarlo *El oficio del investigador* (Buenos Aires: Homo Sapiens / Instituto de Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA).

Nosotras no somos epistemólogas. No somos metodólogas, sino que somos dos investigadoras que venimos trabajando en investigación en Sociología Rural desde hace muchos años, y que aceptamos esta invitación para contarles los problemas que tuvimos en una de ellas: la articulación del campesinado al complejo agroindustrial cañero de Tucumán. (Giarracca y Aparicio, 1995a)

Tal como lo señala Norma, el trabajo que realizaron ella y Susana Aparicio dio lugar a un “cuaderno” denominado “El campesinado cañero: multiocupación y organización”, reproducido en el año 1990 en *Agroindustrias del Noroeste. El papel de los actores sociales* (que incluimos con actualizaciones en el libro actual; véase más adelante Giarracca y Aparicio, 1995b).

Con posterioridad a esta investigación surgieron diversos trabajos de becarios, incluyendo tesis de maestría que se elaboraron en el país y en Holanda, y fueron planteadas otras muchas preguntas. Las autoras se propusieron narrar los problemas que tuvieron en esta etapa inicial de investigación sobre el complejo cañero:

No vamos a hacer una reflexión teórica, epistemológica, sobre los problemas de investigación, sino que vamos a hacer una reflexión acerca del proceso mismo, de la actividad misma que nosotras fuimos desarrollando a lo largo del período. [...] Entonces dijimos: ¿qué pasa con los campesinos? ¿Qué pasa con una actividad agroindustrial tradicional, como la cañera, que estaba sufriendo transformaciones? Complejos agroindustriales tradicionales o complejos agroindustriales nuevos eran atravesados por estas tendencias macroestructurales que estaban ocurriendo en la mayor parte de América Latina y yo diría, en la mayor parte del mundo. (Giarracca y Aparicio, 1995a)

Entre otras varias cuestiones planteadas, Norma menciona un problema importante que se plantean los científicos sociales cuando coordinan los trabajos de investigación de su equipo: “la construcción del objeto de investigación”.

Creo que ese es uno de los pasos más difíciles y más complicados de la tarea del investigador en Ciencias Sociales. Y yo diría bastante complicado para los sociólogos. Bourdieu insiste mucho sobre esto, ustedes habrán leído, porque él está constantemente discutiendo y debatiendo contra el empirismo, contra el empirismo ingenuo. Y está discutiendo, y se la agarra constantemente con lo que él llama el “eje Lazerfeld, Merton y Parsons”, formadores de las mentes, de la actitud y del “habitus” de los investigadores de muchas generaciones. Nosotras no escapamos a esa formación, nosotras fuimos formadas como sociólogas en períodos en que la Carrera de Sociología tenía un fuerte componente de la Sociología norteamericana, porque su fundador — Gino Germani— consideraba que los pasos más importantes para el desarrollo de una Sociología científica se estaba dando en Estados Unidos. Aun cuando él tenía muy buena formación en Sociología y Filosofía europeas, admiraba a Parsons y a la Sociología del Norte. Pero también es cierto que permitió que en la Carrera hubiese otras miradas críticas, otros sociólogos que comenzaron a formarnos dentro de la Sociología crítica. (Ibídem: 58-59)

Más adelante las autoras se plantean el problema de la persistencia del campesino cañero y lo que había pasado con el campesinado en su relación con los cambios agroindustriales.

Este trabajo es importante pues señala la multiplicidad de herramientas técnico-metodológicas que utilizaron Norma, Susana y su equipo, a lo que “después Touraine le pondría nombre: ‘intervención sociológica’” (ibídem).

En el trabajo “Métodos cuantitativos y cualitativos en los estudios de la Sociología Rural” (*Ruralia, Revista Argentina de Estudios Agrarios*), que incluimos en este libro, Norma junto a Carla Gras y Paula Gutiérrez (1995) continúan analizando la problemática de “Campesinos y agroindustrias en los tiempos del ‘ajuste’. (Algunas reflexiones para pensar la relación, con especial referencia a México y la Argentina.)” (Giarracca, 1993). Después de reflexionar nuevamente sobre las técnicas cuantitativas y cualitativas, señalan:

Cuando entrevistábamos a los dirigentes de cooperativas, por ejemplo, en sus relatos se podrían rastrear las condiciones y situaciones que derivaron en la construcción de un tipo de acción social, los momentos de “éxito” y de crisis, las opciones que como actores fueron construyendo, las relaciones establecidas con otros. Sabíamos de las funciones que cumplen las entrevistas en profundidad y las historias de vida en la identificación de procesos esenciales, de momentos de decisión, de aspectos centrales que parecen dignos de un estudio en profundidad (Bertaux,

1989), así como en la reconstrucción de datos factuales que de otra forma hubiesen sido difícil obtener. A poco de andar, nos dimos cuenta que la interacción con nuestros entrevistados nos permitía intercambios densos. No solo podíamos identificar determinadas líneas de análisis sino también “universos sociológicos” (Bertaux, 1989) relevantes para nosotras.

“Ensamblando las voces: los actores del texto sociológico” (en el libro coordinado por Ana Lía Kornblit *Metodologías cualitativas en Ciencias Sociales: modelos y procedimientos de análisis*. Buenos Aires: Biblos, 2004) es otro trabajo incluido en este libro en el que Norma y Karina Bidaseca transitan por este mismo escenario:

La Sociología y la Antropología Social, como disciplinas sociales, poseen una larga tradición en investigaciones en las que los actores sociales, o simples sujetos bajo estudio, son centrales tanto en los modos de indagación como en los textos resultantes. Recordemos, como ejemplos ilustres, el clásico trabajo de Thomas Znaniecki de comienzos de siglo, *The Polish Peasant in Europe and América*, o la reciente obra magistral de Pierre Bourdieu *La miseria del mundo*, sin olvidar, por supuesto, *Los hijos de Sánchez* y el resto de las obras de Oscar Lewis. [...]

Los sociólogos rurales evitamos, en parte, el mandato positivista por la fuerte influencia

que la antropología ejerció sobre “los estudios campesinos”. Una investigación o una tesis sin “trabajo de campo” resultaba impensable y los grabadores fueron —y siguen siendo— nuestras herramientas más preciadas. Heredamos, desde siempre, entrenamientos en estrategias metodológicas que valoraban la centralidad del sujeto y al investigador como intérprete del otro en una relación de plena intersubjetividad. [...] Pero siempre tanto antropólogos como sociólogos rurales, contaban con los “cuadernos de campo” verdaderos reservorios de documentación que eran inestimables fuentes de voces de los sujetos en los momentos de mayor libertad en la relación investigador-investigado. (Giarracca y Bidaseca, 2004: 35-36)

En este artículo las autoras se proponen reflexionar “precisamente acerca del lugar que ocupan los relatos de los entrevistados en los textos sociológicos, el lugar ‘cedido’ y el lugar ‘ganado’, así como de la configuración narrativa de las identidades e implicancias personales puestos en juego en la relación de entrevista” (ibídem: 38).

Varios trabajos del GER-GEMSAL y del Grupo de Trabajo Desarrollo Rural de CLACSO resultaron en publicaciones referidas a diversas regiones de América Latina. Un primer trabajo publicado como parte de la serie *Universalis-*

mo Pequeño N° 1 del GEMSAL⁸ se titula *Cuando el territorio es la vida: la experiencia de los Sin Tierra en el Brasil* (Buenos Aires: GEMSAL / Antropofagia, 2006). En el artículo “Notas sobre el trabajo de campo”, incluido en este volumen, Norma comenta:

Muchas veces se piensa que una sólida formación teórica por sí sola puede convertirnos en buenos intérpretes de la realidad que nos rodea y que no hace falta conocer las realidades particulares para saber, por ejemplo, qué son los campesinos y cómo actúan en nuestros países. Es verdad que si no partimos de una sólida formación teórica no obtendríamos los resultados esperados aunque conviviéramos días, meses, e incluso años con una comunidad campesina. Tal vez obtendríamos una excelente experiencia personal (que no es poco) pero nada muy relevante para aportar a los estudios campesinos. Si no sabemos interrogar a la realidad, esta no habla por sí misma (como muchos empiristas estiman). La

8 El trabajo incluye un Prólogo que escribió Norma; la Presentación de Bernardo Mançano Fernández; “Los apuntes de un trabajo de campo: el MST, San Pablo”, escrito por Norma y Jorge Montenegro; “Movimiento Sin Tierra: antecedentes y construcción territorial” de Comeli, García Guerrero, Petz y Wahren; y “Notas sobre el trabajo de campo” de Norma, que incluimos en esta compilación.

combinación de teoría y “experiencias” sobre una situación social son, a nuestro juicio, los aspectos primordiales para la generación de un conocimiento científico. Escribimos “experiencias” entre comillas pues deseamos dejar abierta los diversos sentidos del término, las variadas formas de acercarnos a las realidades concretas. Como solemos decir en nuestros seminarios de investigación, en el momento de pensar las metodologías de una investigación así como en la interpretación final de la misma, se ponen en acto la formación y la solidez del investigador pero también entra en juego su capacidad creativa. (Giarracca, 2006: 63-64)

Este es tan solo un párrafo de un conjunto de notas emblemáticas que escribe Norma sobre el trabajo de campo.

En otro artículo conjunto de Norma con Karina Bidaseca, “La entrevista: técnica metodológica y experiencia comunicativa”, que se encuentra en el libro *Estudios rurales: problemas, teorías y estrategias metodológicas* (no incluido en este libro) se elabora “el escenario conceptual” para una reflexión sobre la entrevista. Dicen las autoras:

La entrevista es básicamente un encuentro, una interacción comunicativa entre personas. No solo reafirma la importancia de las relaciones persona-

les, también desnuda la cotidianeidad silenciada, pero fundamentalmente recupera el valor de los métodos cualitativos, del “estar allí” en la esencia del hecho social. (Giarracca y Bidaseca, 1999: 201)

La interacción entre entrevistador y entrevistado se vuelve fundamental porque garantiza la paridad entre el entrevistador y su interlocutor durante la entrevista.

Predomina una idea democrática del sujeto de los procesos sociales, el reconocimiento de un mundo social popular y la esperanza de aproximarnos a comprender las grandes configuraciones de sentido, a veces locales (como en nuestro caso) en otros casos más generales pero siempre atravesados por “los climas de época” (estas últimas son palabras de Arfuch, 1992). (Ibídem)

Por último y a modo de reflexión final, comentan:

Pensamos que la entrevista trasciende el lugar del encuentro permitiendo abrir la interioridad de los sujetos a nuestras miradas, a nuestras escuchas, a nuestras posibles interpretaciones, sin cuestionar nuestra intrusión en su privacidad. No obstante, no se puede pretender que ella abarque de modo exhaustivo la totalidad de los aspectos de la vida de un sujeto o de una fa-

milia: siempre habrá, por reiteradas entrevistas que se piensen “completas”, un final inconcluso, un sentido huidizo, de “incompletitud” que desborda al saber y que la disciplina por sí sola no logra descifrar. Y esto mismo sucede en el nivel más general, cuando nos enfrentamos al interrogante “¿Qué sucede con los campesinos cañeros?”. Mientras el dato cuantitativo es indicativo y tiende a sedimentar lo social, el conocimiento construido desde la práctica etnográfica desliza tal pretensión advirtiendo la contingencia y la incompletitud de los procesos sociales. (Ibídem: 214-215)

El libro coordinado por Norma Giarracca y por mí *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza, 2005) incluye trabajos sobre la situación del agro en los años dos mil. Se basa en el trabajo de investigación que llevó a cabo el GER-GEMSAL, además de investigadores afines, entre los años 2000 y 2004⁹. En el Prólogo, que conjuntamente con

9 Aparte de los trabajos de los coordinadores se incluyen trabajos de Susana Aparicio, Pablo Barbeta, Karina Bidaseca, Adolfo Boy, Norma del Pozo, Diego Domínguez, Celeste Golsberg, Carla Gras, Pablo Lapegna, Daniela Mariotti, Javier Rodríguez, Pablo Sabatino, Juan Wahren y Ana Mariel Weinstock.

la “Introducción: los debates acerca del campo” incluimos en este libro, señalamos que

durante estos cuatro años de trabajo atravesamos una de las peores crisis que se recuerda en el país en materia económica. La población se empobreció en una magnitud inédita; en el país el excedente alimentario, las poblaciones de los desocupados, campesinos arrancados de sus tierras, trabajadores precarios, comenzaron a pasar hambre. Nosotros, como especialistas del sector agrario, vivimos esta situación como una paradoja que ameritaba un gran esfuerzo de nuestra parte para comprenderla y dar cuenta de ella. Investigamos, recorrimos provincias, generamos datos cuantitativos y cualitativos. Entrevistamos a todos, presentamos atención a los argumentos económicos, políticos, comprendimos por qué los productores aceptaron rápidamente la nueva propuesta, pero también escuchamos las voces de quienes experimentaron los cambios en sus propias existencias, deteriorando su calidad de vida y perdiendo derechos. (Giarracca y Teubal, 2005b)

Tanto en el Prólogo como en la Introducción se presenta un análisis crítico sobre la agricultura que se viene configurando en décadas recientes.

En la Introducción del libro que aquí consideramos y que titulamos “Los debates acerca del campo” se plantean algunas de las problemáticas más importantes que involu-

cran al sector agropecuario de nuestro país en décadas recientes. Después de presentar una visión global sobre “El papel del sector agrario”, nos abocamos a dilucidar aspectos de esos debates.

Si bien con frecuencia se destacan aspectos positivos de la evolución del sector en décadas recientes —por ejemplo como generador de divisas (crucial a la hora de pagar los servicios de la deuda externa) o como proveedor de alimentos—,

el gran reproche que se le puede hacer es que, a pesar de su crecimiento en décadas recientes, no ha contribuido a solucionar los grandes problemas de los argentinos: el hambre, la miseria, la desnutrición. Es decir, dejó de contribuir a la reproducción de toda la población y pasó a constituirse en fuente de alimentos solo para una parte del país, mientras que la otra no puede acceder a ellos. (Giarracca y Teubal, 2005a)

En determinado momento se introdujo la problemática de la renta de la tierra, entre otros factores. En efecto,

en nuestro país, por la forma en que fue distribuida la tierra, así como por la falta de mano de obra para su trabajo, se configuraron tres modos de organización en esta relación: el sistema de arrendamientos, que fue ampliamente mayoritario, la

hacienda con mano de obra asalariada o acasillada y el sistema de colonias agrícolas. El sistema de arrendamientos era compatible con la persistencia de la gran propiedad y siguió siendo importante a lo largo del siglo XX. (Giarracca y Teubal, 2005a)

No cabe duda de que la renta surge como una porción importante de los excedentes generados en el sector que tiende a ser apropiado por los grandes productores agropecuarios o transferidos a otros sectores de la economía nacional o internacional.

En este trabajo introductorio también se retoma el debate en torno a la cuestión campesina, como así también aquella que tiene que ver con la cuestión de la democracia.

En la Argentina durante la década del setenta, Archetti y Stölen habían sostenido el carácter de la pequeña explotación capitalizada de la gran franja de las unidades familiares de la estructura social, dejando en claro que no era correcto considerarla una economía campesina. [...] En los setenta, había consenso de que estábamos frente a una franja de proporciones importantes en la estructura social, formada, en su mayor parte, por unidades que raramente se mantenían fuera del mercado, que cuando podían utilizaban mano de obra asalariada y que, en la mayoría de los casos, habían sido generados al calor del desarrollo agroindustrial de la caña de azúcar, el algodón,

la yerba mate, el té, etcétera. No eran campesinos al estilo latinoamericano ni totalmente capitalistas. La antropología guardaba el concepto “campesino” para grupos donde el peso indígena fuera mayor o con fuertes particularidades étnicas, mientras Francisco Delich (1970), sociólogo, postulaba la singularidad del campesinado argentino, imposible de asemejarlo al marco latinoamericano. [...] La ambigüedad de origen condujo a otro debate con mayor anclaje en el registro político que tuvo que ver con las Ligas Agrarias de los años setenta. (Ibídem: 30-31)

El otro debate que mencionamos en esta Introducción trata sobre “el campo y la democracia”.

En nuestro país [...] las disputas agrarias giraban centralmente alrededor del aporte del sector al desarrollo capitalista. En muchos casos, se daba por supuesto que este tipo de desarrollo derivaba, necesariamente, a la formación de una sociedad democrática, suposición muy cuestionada por las teorías sociales y políticas contemporáneas (véase De Sousa Santos, 2000). (Ibídem: 33-34¹⁰)

10 Véase también el trabajo que publicamos con Norma sobre *Democracia y neoliberalismo en el campo argentino. Una convivencia difícil*, incluido en el libro compilado por Grammont y que incluimos también en este libro. (Ver más adelante.)

Estas dos temáticas, el campesinado y el campo y la democracia fueron tópicos en los que Norma venía trabajando (como señalamos en este libro) desde algún tiempo. En un artículo emblemático publicado en la revista *Realidad Económica* N° 94 en 1990, “El campesinado en la Argentina: un debate tardío”, Norma señala que “la cuestión campesina” nunca tuvo en nuestro país el peso o la importancia que tiene en Bolivia, México o Perú:

En estos países la persistencia del campesinado está fuertemente relacionada con el pasado indígena y con las reformas agrarias que fueron aplicadas en distintos momentos del siglo XX.

La estructura social agraria de nuestro país reconoce otros orígenes y otros procesos de desarrollo. El carácter capitalista del terrateniente pampeano, el papel de la renta del suelo, los procesos de colonización y de consolidación de la unidad familiar presente en todas las regiones del país, las relaciones entre las burguesías agrarias pampeanas y las regionales, la adecuación de la mano de obra a cada período de desarrollo, fueron aspectos relevantes del proceso de evolución agraria capitalista que concentraron la atención de aquellos que buscaban dar cuenta de la cuestión agraria nacional. [...] *Aunque existieron y existen campesinos*, estos no se tomaron en cuenta en las comprensiones más globales del funciona-

miento del agro, situación absolutamente impensable para México, el Perú o Bolivia. (Giarracca, 1990: 55, énfasis propio: MT)

Norma se preocupa por dilucidar las diferentes conceptualizaciones que aparecen en los estudios agrarios referidos a los denominados pequeños productores, los cuales podían ser caracterizados como “colonos”, o “minifundistas”, diferenciados de los “productores más capitalizados como los que consideraron Archetti y Stölen” mientras que “se reservaba la caracterización de “campesinos” para algunos grupos de pequeños agricultores con identidades culturales o étnicas fuertes o demandas típicamente campesinas”. Señala también que han aparecido estudios que “utilizan la categoría ‘campesina’ para designar a todo productor agrario que utiliza mano de obra ajena o a todo habitante rural que trabaja una porción de tierra”. Norma se involucra en este debate, analiza los datos censales y los datos elaborados en sus investigaciones y “propone una postura ‘campesinista’ para ser tomada en cuenta frente a la elaboración de políticas públicas” (ibídem)¹¹.

11 Norma conjuntamente con Susana Aparicio siguen el debate en torno al concepto de campesinado en sus análisis sobre *Los campesinos en la agroindustria*

SEGUNDA PARTE: AGROINDUSTRIA, AGRONEGOCIO Y EXTRACTIVISMO

Tal como señalamos más arriba, Norma con su equipo de investigación dedicó la mayor parte de su trabajo a la actividad cañera de Tucumán, aunque también se extendió a la actividad tabacalera de la región. En determinado momento analizó la producción del arroz en la Provincia de Entre Ríos. En función de estos y otros trabajos surgen las preguntas sobre en qué medida se va configurando una nueva etapa en el desarrollo agrario de nuestro país y si esta nueva etapa constituye parte de una *¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, que es el título del libro que coordinó como titular del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO. En el Prólogo de ese libro comenta:

¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al desarrollo rural? Se trataba de actualizar conceptos, dar sentido a los nuevos, referir a las realidades del hoy. No podemos seguir pensando con los mismos parámetros de unas décadas atrás; pasaron muchas cosas en nuestros países

cañera. Véase el trabajo incluido en este libro “La actividad cañera. Los campesinos cañeros en los nuevos escenarios económicos” (Giarracca y Aparicio, 1995b).

y en las teorías sociales. Allí comenzó a circular el interrogante que otorga el título a este libro: *¿una nueva ruralidad en América Latina?* (Giarracca, 2001b: 11)

[...]

Las imágenes rurales de nuestros países cambiaron con tal intensidad que habilitan a pensar “una nueva ruralidad” donde coexisten empresas de alta complejidad tecnológica, empresas que forman parte de “grupos económicos” extra-agrarios transnacionalizados, empresas del agroturismo, con mundos rurales heterogéneos con campesinos, productores medios y trabajadores segmentados por los procesos de mecanización, grupos étnicos, y nuevos desocupados. Todos ellos están presentes en las nuevas arenas tratando de imponer o adaptarse a las nuevas reglas del juego, resistir y organizarse para modificar gramáticas de poder políticas, o también buscar estrategias que les permitan encontrar otros espacios territoriales que los integran (migraciones nacionales e internacionales). Se plantea, además que en esta nueva ruralidad la producción agraria se descentró para dar lugar a territorios donde ella es solo un elemento de un amplio abanico de aspectos a considerar (bienes simbólicos, como lenguas, arte, comidas, producciones no-agrarias, servicios, etcétera. (Ibíd.: 11-12)

Ya por aquel entonces Norma fue desarrollando la idea de que lo que estaba en ciernes eran

cambios que atañen al sector agropecuario, lo cual tenía que ver con la transformación de la *agroindustria en agronegocio*. En efecto, desarrolla esta idea a partir de varios trabajos y, en forma explícita, en un artículo que escribimos en conjunto, “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del ‘agronegocio’: el caso argentino”, que integra el libro de CLACSO coordinado por Bernardo Mançano Fernandes, *Campesinato e agronegocio na América Latina: a questão agrária atual* (2008).

Tratamos de sintetizar los dos momentos indicados —el agroindustrial dentro de la ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones), y el del agronegocio, en el modelo neoliberal— mostrando cómo juegan en cada uno de ellos los productores, las empresas, el capital extranjero, las trasnacionales y el Estado. (Giarracca y Teubal, 2008: 141)

El trabajo presenta una revisión crítica de políticas y tendencias que se manifiestan desde los años setenta en adelante, pero particularmente a partir de un nuevo disciplinamiento institucional que se establece en los años noventa bajo el gobierno de Menem durante el cual prevalecen los preceptos más preclaros del neoliberalismo económico.

Una medida de gran importancia para el nuevo modelo agrario en ciernes lo constituyó el decreto de desregulación del año 1991 que, entre otras cuestiones, formó parte de un paquete de medidas tendiente a la liberalización plena de la economía, desarticulando la instituciones que constituían parte del andamiaje institucional que regía en la economía agraria nacional desde los años treinta a esta parte: fueron desarticuladas la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, así como se disolvieron diversas regulaciones sobre vitivinicultura, etcétera.

De golpe el sector agropecuario argentino se transformó en uno de los más desregulados y abiertos del mundo, sujeto mucho más que antes a los vaivenes de la economía internacional.

A partir de entonces, son los agronegocios los que influyen en forma destacada sobre el sector agropecuario, mediante la provisión de insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial y la comercialización de la producción, tanto para el mercado interno como para la exportación. (Ibídem)

El modelo se potencia cuando se introduce la semilla transgénica para la soja, que se expan-

de enormemente, introduciéndose la siembra directa que requiere como contrapartida la fumigación masiva con glifosato, un agrotóxico que no afecta a la semilla transgénica.

El trabajo comenta los avatares involucrados en esta transición, que comienza a ser muy resistida. En el trabajo se sostiene la tesis de que

una integración de los medianos y pequeños productores y de los campesinos en el circuito de los agronegocios ya casi no es posible debido, precisamente, a la lógica de su funcionamiento. (Ibídem: 161)

Tal como señalamos más arriba, a su vuelta a la Argentina, el complejo cañero fue el más exhaustivamente estudiado. Una de sus tempranas publicaciones fue realizada conjuntamente con Susana Aparicio, y titulada “Los campesinos cañeros: multiocupación y organización”, publicado en 1991. Con algunos agregados y actualizaciones este trabajo fue reproducido en el libro *Agroindustrias del Noroeste. El papel de los actores sociales* en el año 1995 con el título “La actividad cañera. Los campesinos cañeros en los nuevos escenarios económicos” (incluimos en este libro esta versión; Giarracca y Aparicio, 1995b).

En el libro *Agroindustrias del Noroeste* también se presentan varios artículos sobre la

actividad tabacalera. En nuestra antología se publica la Introducción al libro, en la que se incluye un contrapunto entre ambas actividades, y finalmente reproducimos el largo trabajo mencionado sobre la actividad cañera de nuestro país (véase más adelante)¹².

En la Presentación general de este libro se señala que

durante el siglo que se acaba, el Noroeste fue cañero y ello significó no solo que las clases dirigentes estuvieran fuertemente conectadas con la actividad, sino que, todos los sectores sociales estuvieran signados por esta historia regional. Se nacía en pueblos de los ingenios; se crecía y se aprendía a cosechar en itinerarios migratorios zafreiros, los ciclos de la vida social estaban fuertemente conectados con el comienzo o el final de la cosecha: muchos mitos y leyendas regionales están relacionados con las resistencias y conflictos de los trabajadores del surco o del ingenio (la leyenda de el familiar, por ejemplo); las identidades étnicas se cruzaban con las de clase, todo ello dentro de una organización social, en gran medida estamental, autoritaria y paternalista. La región ingresaba de manera desapareja e incompleta, a la modernización eco-

12 No incluimos en esta antología los trabajos sobre el complejo tabacalero.

nómica y a la modernidad política cultural. (Giarracca, 1995: 15)

A continuación presentamos otra caracterización del complejo cañero en el trabajo “La integración económica con el Brasil y los pequeños productores cañeros” (1993), coescrito conmigo. En este trabajo reflexionamos

sobre los probables efectos de los procesos de integración económica (con el Brasil principalmente) sobre los sectores subalternos dentro del complejo cañero, considerando que los intereses de estos no siempre coinciden con los intereses de los demás agentes que lo integran. (Giarracca y Teubal, 1993: 129).

El 2013 coordinamos con Norma el libro *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?*. Tanto en la Introducción como en el primer capítulo “Las actividades extractivas en la Argentina”, nuestro planteamiento se remite no solo al agronegocio, sino también a otras actividades denominadas extractivas o extractivistas que incluyen la *minería a cielo abierto* y el *fracking*, en la producción hidrocarbúrfica, entre otros sectores. Se trata de los denominados “recursos naturales” que tienen características afines, y por tanto involucran

procesos y movimientos sociales con características similares.

El libro propone una mirada sobre estas actividades en sus condiciones de posibilidad para su surgimiento, procesos de conformación y desarrollo y sobre todo, la fundamentación para caracterizarlas como “extractivistas”, una palabra que no figura en nuestros diccionarios pero que desea mostrar la falta de valoración social que gran parte de la población otorga a esas actividades. (Giarracca y Teubal, 2013a: 16)

En la Introducción del libro señalamos que

no es la primera vez en la historia de América Latina que uno de los ejes centrales de los debates y de las luchas políticas, sociales, culturales y epistemológicas del momento, gira en torno a la relación entre actividades primarias e industriales. (Ibídem: 11)

En el primer capítulo nos dedicamos

a definir minuciosamente qué entendemos por “extractivismo” y lo que, juzgamos, tienen en común las actividades que caen en esta categoría. Lo que importa resaltar es que si la agricultura y las extracciones de materiales de la tierra como cal, cemento, hierro, petróleo, gas, etcétera, necesarias para el modelo de la vida “moderna”, se llevasen a cabo de otros modos, no devastadores,

tales actividades tendrían características productivas muy diferentes y sería imposible encontrar en ellas rasgos comunes “extractivistas”. La agricultura rara vez en la historia se la caracterizó como actividad “extractiva”. Pero lo que intentamos demostrar en este libro es que los cambios en la agricultura con la denominada “revolución biotecnológica”, el retorno “actualizado” de la minería de metales y la actividad petrolera con sus nuevas tecnologías han hermanado en este rasgo “extractivista” a todas estas actividades. (Giarracca y Teubal, 2013b: 17¹³)

El capítulo va desglosando estas características de las actividades extractivas.

En este libro reproducimos, aparte de la Introducción y el primer capítulo que coescribimos con Norma, “Tres lógicas de producción de alimentos: ¿Hay alternativas al agronegocio?” de Giarracca y Palmisano (2013)¹⁴.

13 En el artículo de Norma Giarracca y Miguel Teubal “Argentina: Extractivist dynamics of soy production and open-pit mining”, incluido en el libro compilado por Henry Veltmeyer y James Petras *The new extractivism. A post-Neoliberal Development Model of Imperialism of the Twenty-First Century?* se amplían aspectos vinculados con estas actividades, y se presenta un análisis más pormenorizado de la minería a cielo abierto en nuestro país.

14 El libro incluye trabajos sobre la generación de grandes rentas diferenciales a escala mundial (Miguel

Finalmente presentamos el exhaustivo trabajo que publicaron Norma y Susana Aparicio sobre el complejo cañero de Tucumán, resultado de varios años de una intensa labor que realizó su equipo de investigación. En su versión original se denominó “Los campesinos cañeros: multiocupación y organización” (Giarracca y Aparicio, 1991). Fue reproducido con agregados en la segunda parte del libro *Agroindustrias del Noroeste* y se titula “La actividad cañera. Los campesinos cañeros en los nuevos escenarios económicos” (Giarracca y Aparicio, 1995b: 139-237). Decíamos que se trata de un trabajo exhaustivo sobre la actividad cañera de Tucumán, en la que, “en los últimos años apareció la preocupación por conocer las consecuencias que la fuerte expansión del capital

Teubal y Tomás Palmisano); la tecnociencia aplicada a la vida en el ejemplo de las semillas (Tamara Perelmueter); el papel de la tecnociencia en la expansión sojera (Fernando Barri y Juan Wahren) y casos específicos de las expansiones de estas actividades tanto provinciales (Tucumán, Ana I. Rivas) como en sus derivados, los biocombustibles (Virginia Toledo). Al avance que se presenta como “imparable” contraponemos las luchas silenciosas y de gran paciencia de los mapuche (Graciela Haddad), de las valerosas Madres de Ituzaingó (Fernando Barri) así como un pantallazo general de estas resistencias (GER-GEMSAL).

agroindustrial transnacional ha tenido sobre los pequeños productores” (ibídem: 149).

Dicen Norma y Susana en la Introducción al primero de los trabajos arriba señalados:

Las hipótesis en que basamos nuestros trabajos en general relacionan las reestructuraciones del capital agroindustrial (cambios en el nivel de las empresas, concentración de firmas y capitales, transformaciones en el destino de la producción, procesos de transnacionalización o internacionalización) con las producidas en el nivel de los actores sociales intervinientes. En este trabajo nos abocamos a las modificaciones que se dan en la conformación del sector cañero y particularmente dentro de los pequeños productores. En la etapa de “planes de ajuste”, de exclusión de vastos sectores sociales del aparato productivo industrial, muy pocos discuten la funcionalidad de la pequeña producción agraria dentro del nuevo “régimen social de acumulación”. (Giarracca y Aparicio, 1991: 10)

El caso del cañero tucumano es bastante único por cuanto, como mencionamos anteriormente, es una de las pocas provincias de nuestro país en la que se sigue considerando al campesinado en términos clásicos, así como también por el impacto de diversas políticas públicas sobre este importante actor social.

En todos los casos estudiados y conocidos, los Estados nacionales cumplieron funciones prioritarias para el funcionamiento del modelo agroindustrial. Arroyo, Rama y Rello (1985), en un trabajo de síntesis del período de los ochenta para América Latina, sostenían que las formas más frecuentes del modelo agroindustrial era el de una triangulación entre la producción familiar, las empresas procesadoras y los Estados. Daban como ejemplos los cultivos tropicales con una fuerte incidencia de la producción campesina, así como parte de la producción de granos y oleaginosas. (Giarracca y Aparicio, 1995b: 152)

[...]

En los noventa este modelo de desarrollo agroindustrial se transforma; se registra una fuerte disminución de la inversión extranjera directa en los países de América Latina, especialmente en las agroindustrias de alimentos y bebidas. (Rama, 1992) y, en segundo lugar, en el nuevo modelo conservador, el Estado permite la libre negociación entre empresas procesadoras y campesinas (ver Giarracca, 1992). Aun cuando el productor familiar está en mejores condiciones que antes para negociar debido a la conformación de organizaciones de todo tipo, la asimetría entre los actores transnacionales y los campesinos es muy marcada. (Ibídem: 152)

Una versión reducida de este trabajo, titulado “La acción social en los procesos económicos. El caso de la actividad cañero en Tucumán”

se publicó en 1997 en el libro coordinado por Darío Cantón y Jorge Raúl Jorrot *La investigación social hoy. A cuarenta años de la recreación del Instituto de Sociología (UBA)* (Giarracca y Aparicio, 1997). Asimismo, en el libro coordinado por Norma y por mí *El campo argentino de la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*, al cual hice referencia más arriba, se incluye el artículo de Norma con Daniela Mariotti “La caña de azúcar en Tucumán: transformaciones y permanencias” (Giarracca y Mariotti, 2015), que constituye en muchos aspectos una actualización de trabajos anteriores. En este trabajo las autoras comentan:

En los primeros años [...] emprendimos varios estudios específicos acerca de los distintos agentes económicos de la actividad, ya desde su ubicación jerarquizada en el espacio económico, ya desde sus posibilidades y márgenes para la acción social, que les permiten negociar posiciones relativas. Es decir, utilizamos elementos tanto de los aportes teóricos metodológicos de los complejos agroindustriales, como del paradigma orientado al actor. (Giarracca y Mariotti, 2015)

Las fuentes de los datos de este artículo están constituidas por dos trabajos que incluyeron,

por una parte, la aplicación de una encuesta a los productores cañeros en dos momentos del fin del siglo XX (1988 y 1996); por el otro, y con la misma metodología, a los trabajadores en 1999. También se trabajó sobre las cooperativas cañeras, sobre la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) hasta 1990 y en el momento actual.

Como en todo trabajo sobre productores de cultivos agroindustriales con una mirada desde la perspectiva de los complejos, se generó además información acerca de otros agentes económicos de la actividad cañera: los dueños de los ingenios, las cooperativas, etcétera. Asimismo, el estudio sobre los trabajadores rurales nos permitió abordar la caracterización de otros actores —contratistas—, así como la dinámica y las articulaciones entre ellos —trabajadores y contratistas— y los productores de los ingenios etcétera. (Ibídem)

En síntesis, las autoras analizan los distintos agentes que llevan a cabo la actividad cañera en Tucumán en los finales del siglo XX tanto en su condición de productores, trabajadores, oferentes de servicios, como en el nivel de las relaciones sociales, lo cual “les permiten negociar, año tras año, permanencias y posiciones relativas” (Ibídem: 133).

Una aproximación similar se propone en *De colonos a sojeros. Imágenes de la estructura social del sur de Santa Fe* escrito por Norma conjuntamente con Carla Gras y Pablo Barbetta (2005), que incluimos en este libro.

Otros aportes de las investigaciones sobre complejos agroindustriales se encuentran en el artículo “Multiocupación y pluriactividad en el agro argentino: el caso de los cañeros tucumanos” que publican Norma Giarracca, Susana Aparicio y Carla Gras en *Desarrollo Económico* en 2001 y que se reproduce en este libro. El mismo representa un importante trabajo sobre algunas de las formas según las cuales los cañeros tucumanos “comienzan a vincularse, en forma creciente, con el problema del abordaje de las transformaciones agrarias y rurales en curso” (Giarracca, Aparicio y Gras, 2001).

Concluimos este acápite con el importante trabajo “Los peligros de los modelos ‘productivistas’ en el sector primario”, publicado en *Anales de la Educación Común*, en 2007, en el que Norma nos presenta una crítica exhaustiva en toda su esencia del modelo extractivista sobre el que venía trabajando desde hacía muchos años.

Una década después, cuando los resultados del modelo del “agronegocio” están a la vista, se nos

plantea un nuevo desafío: dar cuenta de que, además de la producción agropecuaria que nos conduce a peligros sociales y ambientales, han aparecido la producción de la minería a cielo abierto, la expansión petrolera en manos de las empresas privatizadas y otra serie de negocios centrados en nuestros bienes naturales, y todos ellos suman consecuencias catastróficas.

En síntesis, el modelo de agricultura —“agronegocio”— que se viene desarrollando desde 1991 y que se profundiza con la expansión sojera a partir de la autorización del uso de la semilla transgénica en 1996, favorece a las grandes empresas transnacionales, a grandes inversores, exportadores, comisionistas y comerciantes de los pueblos del interior donde estos procesos se dan. (Giarracca, 2007b: 5)

TERCERA PARTE: PROTESTA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

El artículo “Democracia y neoliberalismo en el campo argentino. Una convivencia difícil”, en coautoría con Norma (Giarracca y Teubal, 2006) incluido en el libro de CLACSO compilado por Hubert C. de Grammont, *La construcción de la democracia en el campo latinoamericano*, trata sobre una problemática ya planteada en la Introducción de *El campo argentino en la en-*

crucijada. En este artículo se analizan las condiciones socioeconómicas para el surgimiento de la democracia tanto en la agricultura como en la sociedad en su conjunto. Una versión tradicional sostenía la idea de que

mientras los mundos urbanos, ligados a la industrialización, fueron más propensos a encontrar formas democráticas de convivencia, jerarquizando relaciones secularizadas basadas en la meritocracia que asigna recursos con criterios racionales, los mundos agrarios permanecen en las típicas dimensiones de las comunidades, regidas por pautas tradicionales contrarias a las libertades democráticas. Como consecuencia de todas estas ideas, los procesos de industrialización asociadas indefectiblemente a la modernización habrían de conducir a las sociedades contemporáneas hacia procesos democratizadores cada vez más acabados, inclusive en el dominio de lo agrario y rural. (Giarracca y Teubal, 2006: 70).

Sin embargo, este paradigma fue fuertemente cuestionado en nuestros países dado el surgimiento de dictaduras militares y políticas neoliberales de exclusión social en décadas recientes.

Pero hacia fines de la década de los años noventa, cuando las tensiones dentro del modelo neoliberal comienzan

a hacerse visibles, como suele suceder en momentos de crisis, América Latina irrumpe configurando nuevos escenarios imbricados con los que se construyen las protestas antiglobalización o altermundo. El nuevo siglo nos encuentra en esta transición, en estos momentos de pasajes en los que, por ejemplo en América Latina los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, el movimiento zapatista de México, los piqueteros (desocupados) Argentinos que forman alianza con los campesinos, o el movimiento de los Sin Tierra del Brasil, son —para dar algunos ejemplos— algunos de los actores políticos que mayor visibilidad pública han logrado y que luchan por demostrar la construcción de otro mundo posible; es decir, una transformación democratizadora. (Ibídem: 70-71)

En este artículo se analiza el impacto del *modelo agroalimentario implantado a escala mundial* para los procesos democratizadores y sus consecuencias en el caso argentino. En el caso generalizado,

la agricultura industrial condujo no solo al aumento de la mecanización y a la utilización de tractores cada vez más potentes, sino también a la utilización creciente de agroquímicos... [...] Surgen estratos de grandes productores que se adueñan de la mayor parte de la tierra, adquiriendo un excesivo poder, lo que tiende a ser

perjudicial para la democracia política. Esta se basa en la persistencia de una democracia económica, es decir, un contexto en el cual a muchas pequeñas explotaciones familiares les va bien, adquiriendo un compromiso no solo con la tierra sino también con el gobierno constitucional. (Vallianatos, 2001: 49, citado en Giarracca y Teubal, 2006: 74)

En el Prólogo al libro *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza, 2001), Norma comenta:

En este libro presentamos una serie de trabajos acerca de las acciones colectivas emprendidas por quiénes se sintieron agraviados, excluidos, violados en sus derechos sociales en la Argentina de la última década. En la mayoría de los casos conceptualizamos estas acciones como “protestas”. Protestar, en su definición corriente, significa “manifestar alguien su disconformidad vehemente, con algo”, “manifestarse alguien contra la validez o legalidad de un acto tachándolo de vicioso” (Diccionario Kapelusz de la lengua española). En las definiciones académicas —que están incluidas en el capítulo introductorio— la protesta aparece como una herramienta política de los que no tienen poder, el arma de los débiles. Cuando se manifiestan los poderosos, estamos frente a “lobbies” o “ac-

ciones corporativas”. Unas y otras son acciones con sentidos muy diferentes y con consecuencias sociales también distintas. (Giarracca, 2001b: 9)

Norma amplía esta conceptualización y describe el contenido del libro:

Pueblos fantasmas, miles de expulsados del campo, zonas del interior del país en las que su cercana prosperidad es solo un recuerdo, quiebra de infinidad de cooperativas: estos hechos son algunos de los resultados de la desregulación económica aplicada en amplias áreas rurales del territorio argentino; y a la vez son parte relevante del problema de inserción y arraigo de los habitantes de la “nación postergada”. Que frente a tales situaciones se realice una Marcha Federal o surja un Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, o que los trabajadores del petróleo, los cañeros tucumanos, los estatales jujeños y tantos otros sectores afectados por esas políticas impiadosas protesten, y que esas protestas sean cada vez mayores no debe asombrar a nadie. Sí, en cambio, asombra la escasa atención que se ha prestado al fenómeno. Pareciera que solo cuando los piqueteros cortan las rutas o se producen otras “incomodidades” para los ciudadanos de las grandes urbes los medios se hacen eco y los cientistas sociales intentan algún análisis. (Ibídem)

El Prólogo de Norma en el libro de referencia también nos da un pantallazo acerca de sus principales tópicos y artículos¹⁵.

Allí se propone dilucidar ciertas tendencias que imperan en la evolución de las acciones colectivas.

A mediados de la década del ochenta, la generación de organizaciones de tipo productivas (cooperativas, emprendimientos agroindustriales, sociedades familiares, etcétera) estaba a la orden del día entre agricultores familiares. Es así que, con el GER empecé el estudio de las cooperativas como agentes de un posible desarrollo¹⁶. Por

15 “La mayoría de los trabajos que integran este libro fueron elaborados por el equipo de trabajo que dirijo en la Universidad de Buenos Aires. Para llevar a cabo estos estudios contamos, además, con los investigadores invitados, los economistas Miguel Teubal y Javier Rodríguez. Pero en el libro encontramos, además, el importante aporte de colegas de las Ciencias Políticas que están estudiando la protesta social en el nivel nacional como Federico Schuster y Sebastián Pereyra” (Ibídem). También se invitó a participar en el libro a Cynthia Pizarro de la Universidad Nacional de Catamarca, quien es una asidua visitante de numerosos seminarios internos “y sensible conocedora de las acciones campesinas de la provincia” (Ibídem: 9).

16 Véase Giarracca, 1994a y 1994b, ambos incluidos en este libro.

aquellos tiempos había esperanza respecto de un desarrollo económico equitativo que acompaña el proceso de democratización política.

[En los noventa] comienzan a manifestarse, primero sobre las cooperativas bajo estudio y luego en el mundo rural en general, las consecuencias de la medida económica conocida como “desregulación económica”. [...] La situación de crisis no solo comenzaba a manifestarse en el Tucumán rural o en la economía valletana de Río Negro, sino que comenzaban a colapsar los pequeños poblados, dependientes de extracciones primarias como el petróleo. La imagen de “arrinconamiento” a la población trabajadora del interior del país se expandía: crisis de la pequeña agricultura, quiebra de las cooperativas, pequeños poblados que se convertían en fantasmas, desocupación que comenzaba a notarse en los grandes centros urbanos. (Ibídem: 10)

No fue tarea fácil instalar el tema de la protesta social agraria en la agenda de investigación de comienzos de la década.

No había consenso entre los especialistas de los estudios rurales acerca de las consecuencias que desataría el proceso político económico. La gente con formación marxista ortodoxa o desarrollista vio con buenos ojos las medidas desregulatorias: se liberarían fuerzas productivas y se produciría un desarrollo notable. El recuerdo del

“progreso” basado en la economía agroexportadora aún está presente entre algunos sectores de la producción y de sus especialistas. [...] La imagen de un fuerte desarrollo agrario (la producción y productividad de algunos cultivos aumentaba) estaba muy apoyada, además, por un dispositivo discursivo generado por las grades organizaciones, las empresas de agroquímicos y semillas, los “especialistas” de los suplementos rurales de los principales matutinos porteños y las fundaciones de los economistas neoliberales. Todavía perdura: la diferencia es que hoy tienen que admitir que el desarrollo programado tiende a convertir a los chacareros y a los trabajadores en “¡expulsados del campo!”. La resistencia y la protesta social es un tema ignorado por quienes mantienen este discurso: la generación de “parias” en el campo se considera inevitable. (Giarracca, 2001b: 10-11)

Norma comenzó aquí a trabajar el tema de la protesta agraria así como “el nuevo tipo de organizaciones rurales nacidas al calor de las resistencias a desalojos de la tierra, etcétera, y al margen de los proyectos institucionales” (ibídem). Muchos de los aportes teóricos utilizados tenían origen en una lectura de las teorías de los movimientos sociales surgida en el Norte (Europa y EEUU) y reinterpretada desde una perspectiva latinoamericana.

En 1992 fui invitado a pasar unos meses en La Haya como *Visiting Fellow* (investigador visitante) del Institute of Social Studies. Me acompañó Norma, quien tuvo acceso

a la magnífica biblioteca del ISS en la que me interné durante esos meses. Mi lectura se desplazó de los problemas de desarrollo rural a estar más interesada, a mi entender, en comprender los cambios sociales y políticos desde una geografía conceptual post-estructuralista que recibe el nombre genérico de Estudios de Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Los textos de Alberto Melucci, Mario Diani y Ron Eyerman, Donatella Della Porta, Paolo Donatti y David Slater, así como nuevos textos de autores más conocidos en Argentina como Ernesto Laclau, Alain Touraine, Charles Tilly, fueron invalorable aportes en aquella búsqueda personal por dilucidar situaciones de fuertes transformaciones en las que la conflictualidad se expande socialmente. [...]

Mi interés se centraba en comprender los momentos en que la gente se siente excluida, agraviada, no contenida en los marcos institucionales de las democracias, comprender estas situaciones en las que es dable llegar a la acción colectiva o, por el contrario, cuando la gente puede resignarse o emprender respuestas de violencias difusas. [...] La acción colectiva se produce en “ciertas condiciones” y conocerlas es uno de los grandes interrogantes de las Ciencias Sociales. Es en tales

momentos, cuando las personas agraviadas o excluidas pueden superar el malestar mortificante que produce la situación, es cuando aparece la acción de protesta. Protestar es una actitud activa, transgresora (Ulloa, 1995). (Ibídem: 11-12)

No obstante la importancia de la problemática planteada a raíz de las lecturas realizadas por Norma,

las protestas y movimientos europeos son muy diferentes de los de nuestras realidades: no se trataba de extrapolar comprensiones. En realidad lo que me importaba como búsqueda era el modo de abordar, de pensar estas nuevas problemáticas, sus sugerencias teórico-metodológicas que aquellos materiales nos podían brindar. (Ibídem)

Norma hace mención que ese material descubierto en Holanda por aquellos años, así como su acercamiento a colegas que, desde otras perspectivas (políticas, filosóficas) comenzaban a abordar el tema,

fueron decisivos en mi decisión de incorporar el tema a la agenda de la Sociología Rural. En efecto, Federico Schuster y Adrián Scribano desde otras disciplinas y con un buen bagaje de teoría política, comenzaban también a preguntarse por

la “acción colectiva” y sus posibilidades en los nuevos escenarios de los noventa. En ellos encontré a los interlocutores que no tenía en los espacios de los estudios agrarios, y creo no equivocarme si digo que ellos valoraban en mi esa larga experiencia en trabajos empíricos y esa facilidad para acercarnos y comprender las acciones de los actores sociales que tenemos algunos sociólogos rurales. (Ibídem: 12)

[...]

Un tiempo más tarde aparecieron los colegas brasileños y mexicanos que ya habían iniciado fértiles reflexiones sobre las nuevas experiencias campesinas (el Movimiento Sin Tierra, la Coordinadora Plan de Ayala, etcétera) desde los aportes teóricos metodológicos que proporcionan las nuevas bibliografías. (Ibídem: 12-13, nota al pie de página)

Además del Prólogo de *La protesta social...*; se incluyen en esta compilación la Introducción que escriben Norma y Karina Bidaseca; y el trabajo de Norma, Diego Domínguez y yo, “El Foro Social Mundial de Porto Alegre. Otro paso de los movimientos sociales globalizados”.

El GER-GEMSAL, en el que todos participamos, y en especial Norma, no pudimos abstraernos del denominado conflicto campo-gobierno (“lockout patronal” en la caracterización del gobierno y “paro agrario” en la de otros). “Si los medios de comunicación, programas periódicos

ticos y hasta las sobremesas familiares estuvieron impregnados por esta situación, es imaginable cómo se vivió en el Grupo de Estudios Rurales y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA donde desarrollamos nuestro trabajo” (ibídem).

El libro *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*, incluye una larga trama del día a día que va de marzo a julio del 2008, más algunos artículos publicados en diarios y revistas, así como también otro material más extenso que fue elaborado con posterioridad a los acontecimientos vividos¹⁷.

En esta antología se incluye el artículo de Norma “El conflicto agrario 2008-2009: los debates necesarios” (Giarracca, 2010a).

17 El libro comienza con una trama muy larga en la que se detallan los principales acontecimientos registrados por los diarios en ese período. Luego presentamos un artículo mío y de Tomás Palmisano, “El conflicto agrario: características y proyecciones”; a continuación el trabajo publicado por Norma, Tomás Palmisano y yo, “Paro agrario: crónica de un conflicto alargado”; sigue el trabajo de Norma y Tomás Palmisano, “Expansión sojera y paro agrario: reflexiones para comprender el 2008 y 2009 en la Argentina”; “Los usos del conflicto: la influencia de la Mesa de Enlace en el escenario electoral de 2009” escrito por Celeste Castro García, María Comelli y Tomás Palmisano; concluye el libro con una serie de colaboraciones periodísticas. En un anexo se incluye la votación que hubo en el Congreso de la Nación.

En el artículo “La tragedia del desarrollo: disputas por los recursos naturales en la Argentina” publicado por la revista *Sociedad* de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y reproducido en el libro coordinado por Ingrid Sarti, *Ciência, Política e Sociedade. As Ciências Sociais na América do Sul* (Porto Alegre: UFRGS) ambos publicados en 2007, Norma, después de describir algunas de las protestas sociales —disputas por los recursos naturales— que se venían dando desde la década del noventa en el interior del país —“aunque hay que remarcar que, desde principios de este nuevo siglo, se han convertido en claves para la comprensión de las luchas sociales contra el modelo capitalista neoliberal en la Argentina y en toda América Latina” (Giarracca, 2007a)—, presenta algunas consideraciones acerca de las diferentes concepciones de “desarrollo” que están en juego:

Las promesas del “progreso”, es decir, paz, alimentos, salud y educación para todos, formaban parte del sentido central de la dupla desarrollo económico y científico que, de distintos modos, se desplegaba tanto en el capitalismo como en las sociedades comunistas [...] A mediados de los años setenta, este modelo sufrió una “gran transformación”. (Giarracca, 2007a)

Norma plantea diversas cuestiones referidas al nuevo modelo, pero en el

plano internacional, con nuevas instituciones legales, financieras, económicas, han terminado de romper con las promesas de la modernización. [...] Con los auspicios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se expanden formas expropiatorias y expropiatorias de este capitalismo al conjunto del territorio mundial. El hambre, la pobreza, el surgimiento de viejas y nuevas enfermedades irán devastando al Tercer Mundo mientras la polarización de la riqueza alcanza niveles desconocidos, las guerras, con alto costo de poblaciones civiles, acompañan. (Ibídem)

Son múltiples los trabajos en los que Norma analiza el ciclo de protestas que define para nuestro país en los noventa y el primer decenio del nuevo centenario, y en particular aquellos que tienen que ver con la disputa por los recursos naturales. Un primer artículo publicado en el año 2002 en la revista de Porto Alegre *Sociologías* se titula “Movimientos sociales y protestas en los mundos rurales latinoamericanos: nuevos escenarios y nuevos enfoques” y se incluye en esta selección. Se trata de

pensar esta nueva etapa difícil y compleja, para las poblaciones rurales desde las conceptualiza-

ciones de una sociología de los movimientos sociales que recupere al sujeto su capacidad agencial, pero también que recupere al investigador como “intérprete” de significados y sentidos de los actores y sus producciones. (Giarracca, 2002: 268)

A continuación incluimos en este libro la versión anterior de “El ‘Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha’: protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina”, escrito por Norma y que integra el libro *¿Una nueva ruralidad en América Latina*, publicado por CLACSO en 2001.

El acercamiento a las Mujeres Agropecuarias en Lucha (AAL) fue muy importante para comprender que la situación no tenía retorno sin una acción eficaz de los actores afectados: estaban perdiendo las tierras, los trabajadores perdían sus trabajos, los pueblos del interior se convertían en lugares de soledad y desamparo. En 1996 comenzamos a investigar con Miguel Teubal el origen del MML y la situación de endeudamiento por la que atravesaban. (Giarracca, 2001a18)

18 Incluimos esta versión del trabajo porque incluye entrevistas que no fueron incluidas en versiones posteriores.

“Bienes comunes en la hegemonía extractivista. Disputas y resistencias” se trata de un artículo colectivo producto de investigaciones de diferentes integrantes de los programas de investigación del GER-GEMSAL así como las investigaciones colectivas de los miembros de la Cátedra de Sociología Rural financiadas por Foncyt y Ubacyt. Se intenta mostrar en este trabajo cómo a la lógica del agronegocio de le oponen otras lógicas de producción de alimentos (y no *commodities*), de cuidado de la tierra y de otra relación con los bienes comunes en general.

Son las apuestas de organizaciones de los pueblos indígenas y de los campesinos. Estos procesos de apropiación mercantil de los territorios también pueden constatarse con la megaminería. Si en el caso de la tierra la renta se genera principalmente con los mayores ingresos por la fertilidad de la tierra (entre otros factores), la minería lo hace por el control estratégico y monopólico de un recurso que es escaso. En la tendencia mundial hacia el aumento de los *commodities* los minerales no fueron la excepción; si bien el caso del petróleo es paradigmático por la alta dependencia del sistema capitalista mundial al oro negro, el oro, la plata, el cobre y la gran mayoría de los metales han subido notablemente. Según un informe realizado por la Secretaría de Minería de la Nación (2008), en el año 2007 se realizaron inversiones

destinadas a actividades de exploración, desarrollo de proyectos y producción de minerales por más de \$5.600 millones, que significaron un crecimiento acumulado de 748% con respecto al 2003 y la existencia de más de 336 emprendimientos mineros en todo el país. La emergencia de las organizaciones de los pueblos patagónicos y cordilleranos se coordinaron en muy pocos años y son paradigmáticos de esta lucha por parar esta actividad depredadora. (Ger-Gemsal, 2013: 188)

El trabajo del GER-GEMSAL se extiende al análisis de la APPO en la Oaxaca mexicana del año 2006. Se trata de otro libro incluido en la colección Universalismo Pequeño, el N° 3, *Cuando hasta las piedras de levantan, Oaxaca, México, 2006*. Norma concibió este libro, pidió colaboraciones a Gustavo Esteva, Rubén Valencia y David Venegas que participaran en los eventos, y escribió tanto la Presentación como el artículo “Notas metodológicas: experiencia de investigación desde lugares diferentes (Algunas reflexiones acerca del intelectual comprometido)” que incluimos en esta publicación.

Este libro nos habla sobre una experiencia de extraordinaria riqueza política, cultural, social que aconteció en Oaxaca, en uno de los Estados del sur mexicano, durante varios meses de 2006. Comenzó con un paro de los maestros y por la fuerza

del autoritarismo de los gobernantes terminó en una poblada que muchos denominaron “la comuna de Oaxaca”. [...] Durante varios meses poblaciones, pueblos (como ellos gustan denominarse) se auto organizaron para protestar, para resistir la represión pero en la travesía fueron generando lazos sociales, apropiándose de la ciudad, de las calles, instituyendo su “barrikadas”, sus espacios asamblearios, sus propios modos de construir mundos de vida. (Giarracca, 2008b)

Una visión global sobre las actividades extractivas y su impacto sobre el “recalentamiento mundial” se presenta en el trabajo de Norma: ‘desarrollo’ basado en la extracción de los recursos naturales” que incluimos en este libro. Se trata de un escrito encargado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) para su compilación *Derechos humanos en Argentina: Informe 2011*. En este trabajo se plantea una perspectiva crítica sobre el agronegocio, y en particular sobre la expansión sojera como su paradigma más caracterizado. Dedicamos algunas páginas a definir el agronegocio ya que “si bien es una producción agrícola-ganadera, funciona con la lógica económica del modelo extractivo en relación con los recursos naturales y humanos”. (Ibidem: 331)

Entre otros tópicos analiza “los conflictos por el agronegocio”, “la actividad de la mega-

minería”, “asambleas, movimientos, organizaciones, por el no a la minería”, el “conflicto más importante de 2010: Andalgalá, Catamarca”, “Los glaciares y su ley”, y “Algunas reflexiones a modo de conclusión”, y fundamentalmente su crítica al concepto de desarrollo, sobre el cual discute ampliamente en otros trabajos.

No podía faltar entre los trabajos de Norma el libro en el que participaron Daniela Mariotti, María Comeli, María Inés Petz, Juan Wahren, junto a Norma y yo, con una presentación de Raúl Zibechi, titulado *Tiempos de rebelión: “Que se vayan todos”. Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002*. Del mismo reproducimos el artículo que coescribimos con Norma titulado “La rebelión de 2001: protestas, rupturas y recomposiciones”.

Continuando con el análisis de diversas protestas que se manifestaron a lo largo de estas décadas presentamos el artículo “El día en que la Plaza de Mayo se vistió de campo” realizado por Norma y por mí, que se basa en los registros de 1993 de la primera gran marcha de los agricultores después de la desregulación. Incluimos en este libro este trabajo

magistralmente ilustrado por Sábato en la revista *Realidad Económica*. La Plaza de Mayo, en la imaginación de Sábato, recibía la marcha del

campo con un tractor en la punta de la Pirámide. Ese tractor, El Pampa, estuvo muchas veces en la plaza durante la década, acompañando a la Marcha Federal (1994) y al Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (1997), hasta que en 1998 las autoridades de la ciudad (cuando Fernando de la Rúa era jefe de Gobierno) le prohibieron la entrada. Los agricultores solo se animaron a desobedecer la medida en la gran protesta agraria de julio de 1999, cuando el gobierno de Carlos Menem agonizaba y la Alianza estaba más cerca que nunca de la protesta social. (Giarracca y Teubal, 2007: 10)

En efecto, el artículo trata sobre una de las protestas del campo que llegaron a la Plaza de Mayo. Incluye entrevistas que grafican claramente la problemática que afecta a productores de diversas provincias del país.

En el año 2003 en la revista *Sociologías* de Porto Alegre Norma publica “De las fincas a las casas a las rutas y las plazas: las protestas y las organizaciones sociales en la Argentina de los mundos ‘rururbano’”. Una mirada desde América Latina”, que se incluye en este libro. Comenta al respecto:

Las múltiples protestas, con o sin organizaciones sociales, que durante toda la década del noventa, constituyen un aspecto significativo para com-

prender los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre en la Argentina así como los nuevos sentidos de la política asamblearia en las calles porteñas, los barrios “piqueteros”, las fábricas recuperadas, de los tiempos posteriores. No obstante lo que ocurrió desde finales de 2001 no se deriva necesariamente, de la década; es decir, protestas, ajustes, pobreza, desempleos, pérdidas de derechos sociales, vaciamiento de la palabra por parte de los políticos, etcétera, constituyen los escenarios, la “situación incompleta” de donde se deslizan los acontecimientos posteriores cuando los hechos ya ocurrieron. No los anuncian, constituyen a posteriori, las condiciones estructurales de la situación emergente. (Giarracca, 2003: 274)

El artículo “La lucha por los derechos del agua en Tucumán. Transnacionales y mujeres en la protesta social”¹⁹, publicado en el libro que coordinamos con Norma *El campo argentino*

19 Existe una versión publicada como “Agua que no has de beber... La protesta social en Tucumán y el papel de las mujeres” incluido en el libro *Conflicto y colaboración en el manejo de los recursos naturales*, coordinado por Carlos Vacaflares (La Paz: Plural, 2005). Este artículo fue también traducido con el título “To make waves. Water and Privatization in Tucumán, Argentina” e incluido en el libro coordinado por Bennett, Dávila-Poblete y Nieves Rico (2005), *Opposing Currents. The Politics of Water and Gender in Latin America*.

en la encrucijada, fue escrito por ella y Norma del Pozo (2005) sobre “un hecho insólito pero festejado por toda una población que aún no llegaba a darse cuenta de la magnitud de lo que había logrado” cuando

la Compagnie Générales des Eaux, operadora del servicio de agua y cloacas de Tucumán que brinda Aguas del Aconquija, anunció que se retiraba de la provincia tres años después de la concesión del servicio de agua y cloacas de la provincia en 1995. En este trabajo se rescata la protesta social que se llevó a cabo y que tenía varias particularidades. En primer lugar involucraba a una gran empresa extranjera de servicios en un período en el que predominaba una energética demanda de “seguridad pública” al Estado; fue un movimiento urbano de pequeñas ciudades del interior, y tuvo la particularidad de que la participación de las mujeres fue “decisiva para sostener y llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. (Giarracca y Del Pozo, 2005)

En “La tierra: polisemias, confusiones y debates” (2012), Norma nos presenta un análisis exhaustivo del problema de la tierra. Dice al respecto:

La tierra, base de una de las actividades más antiguas del hombre, siempre fue esquivada para su conceptualización, debido a las diferentes relaciones

que las diversas culturas entablaron con ella. Por eso la enuncio como un concepto polisémico: para las culturas ancestrales de América Latina/Abya Yala los hombres/mujeres pertenecen a ella, son parte indisoluble de ese espacio material y espiritual que conforma la Naturaleza y en ella la tierra. Para los campesinos, descendientes de aquellas culturas que habitaron y dieron sentido a estos territorios, la tierra es su principal herramienta de trabajo; se la cuida pues sin ella no hay vida. Por otro lado para el chacarero —*farmer* en la bibliografía anglosajona— la tierra es un legado familiar, un patrimonio que se pasa de una a otra generación y hasta la expansión sojera se cuidaba como cualquier otro legado familiar. Por último, la tierra para el capitalista es una mercancía. Se compra, se usa y abusa. Aquí debemos marcar la primera falacia del pensamiento que da sustento al capitalismo: la tierra se comporta como una mercancía aunque no lo es; no es producto del trabajo humano pero sí es un recurso renovable. En efecto, a diferencia de otros medios de producción, la tierra no puede ser construida por los hombres como cualquier mercancía, como una fábrica o una maquinaria. No es producto del trabajo humano pero el capitalismo le hace jugar ese papel.

[Como consecuencia,] el terrateniente agrario —actor capitalista— recibe una “sobreganancia” por poseer un medio limitado, que no tiene el resto de la burguesía productiva. (Giarracca, 2012a: 44).

A continuación se presenta el artículo que publicamos Norma Giarracca, Diego Domínguez y yo en *Realidad Económica* sobre “El Foro Social Mundial de Porto Alegre. Otro paso de los movimientos sociales globalizados”.

A finales del siglo XX las protestas adquirieron carácter global con Seattle, Praga, Davos. Durante la década de los noventa algunos movimientos sociales habían irrumpido en la prensa internacional y crearon lazos mundiales. Todo ello y mucho más precedió al Foro Social Mundial de Porto Alegre que se desarrolló del 25 al 31 de enero del 2001. Pero el encuentro “gaúcho” fue pensado y organizado como un eslabón distinto en esta cadena de eventos de la resistencia global. En efecto, el FSM tuvo como finalidad transitar por una reflexión que batalle con las ideas dominantes, presentadas como “la única salida”, convertidas en sentido común durante mucho tiempo. (Giarracca, Teubal y Domínguez, 2001: 32)

Este libro también contiene el trabajo de Norma y Juan Wahren titulado “Recuperación del territorio, ‘recuperación de Estado’: Mosconi, Argentina después de ocho años de lucha”, publicado en la compilación de José Vicente Tavares dos Santos, *Democracia, violências e lutas sociais na América Latina* (2009). Allí afirman:

La territorialidad en Mosconi se va fijando a partir de múltiples intervenciones de la UTD en el terreno comunitario y cultural, en áreas productivas, en áreas de servicios. Pero también está la ruta como un lugar simbólico y a la vez concreto, desde dónde la organización comenzó estos procesos [...] Esta recuperación abarca más allá de la ciudad de Mosconi; incluye pueblos aledaños, comunidades aborígenes alejados, campos y poblados; territorios recuperados por sus propios habitantes mediante el trabajo autogestionario pero también en la disputa cotidiana con las grandes empresas petroleras y sojeras. (Giarracca y Wahren, 2009: 212)

Incluimos en esta parte una protesta novedosa aunque por cierto alejada de las protestas que giran en torno del extractivismo analizadas por Norma y su equipo. Se trata de un trabajo de investigación que fue realizado por el seminario “Acciones de protesta en escenarios en transformación”. En el año 2001, en un semestre caracterizado por el alto nivel de protesta social en Argentina, el trabajo “Vejaciones x 8’. Arte y protesta social en Buenos Aires” propone un análisis de la coyuntura y un estudio de caso. Fue la protesta llevada a cabo por los alumnos y docentes del Conservatorio Nacional de Música López Buchardo. Su particularidad radica

en la utilización de la música como modo de expresión de los sentidos de la acción colectiva, a través de la resignificación de la obra “Vejeciones” de Erik Satie. La misma fue ejecutada durante siete días ininterrumpidamente por diversos artistas. Se trata, pues, de interpretar esta novedosa acción de protesta, en la que la música aparece como un símbolo incompleto que irrumpe en el escenario nacional, para “incorporar el nuevo sentido de la política fusionada al arte”. Presentamos aquí el texto completo publicado en *Informes de Coyuntura* (Giarracca y AAVV, 2001).

El trabajo de Norma titulado “Producción y mercados para la vida: una posibilidad emancipadora para el siglo XXI” (publicado en la compilación de Giarracca y Massuh, *El trabajo por venir. Autogestión y emancipación social*) de 2008 se trata de un artículo crítico sobre el efecto arrollador que tiene el mercado en el capitalismo contemporáneo.

El mercado como dispositivo ideológico y comunicativo se muestra en todos los ámbitos. Los medios de comunicación proclaman disparates como “los mercados son sensibles”, se habla del “nerviosismo en el mercado”; el mercado aparece como un ser animado, como un mecanismo

de control al que todo el mundo le debe respeto. Mientras este nivel de organización que nos propone el discurso hegemónico se expande en toda América Latina, África y Asia, existen otras formas de pensar la producción para la vida. Observemos a las organizaciones mapuche: han perdurado siglos y han perdurado a pesar de la gran dominación que han soportado desde hace más de quinientos años. Y esto es por la fuerza de la cultura y la voluntad humana de producir y de organizar la vida de otra forma. Esta otra forma tiene como cuestión fundamental el “producir para vivir”, como dice Boaventura de Sousa Santos, producir para las necesidades de la vida y no para el mercado. (Giarracca, 2008c: 37-38)

CUARTA PARTE: PERSPECTIVAS DESDE EL SUR. COLONIALIDAD DEL PODER, OTROS BICENTENARIOS

Boaventura de Sousa Santos viene escribiendo y debatiendo profusamente sobre la necesidad de impulsar unas “Epistemologías del Sur”, como elementos esenciales de la nueva creatividad democrática que se requiere en el mundo contemporáneo. Dice en una reciente entrevista:

Hay un campo muy grande para la creatividad democrática. Por eso yo lucho en mi trabajo por

lo que llamo las “epistemologías del Sur”, en el sentido de crear también una reforma en el conocimiento. Porque no pienso que sea posible la justicia social global sin justicia cognitiva global, o sea, una democracia entre diferentes formas de conocimiento. En la raíz de todo el sistema político está el conocimiento académico que controla las universidades y que es eurocéntrico, como la Ciencia Política, la Sociología y la Antropología. Son los instrumentos que produjeron las políticas y las formas de representación política que tenemos. Eso tiene que transformarse, aceptando que hay otras maneras de conocer, que la representación del mundo es mucho más amplia que la representación occidental del mundo. Hay otras formas de transformación social que quizá no se van a llamar socialismo ni comunismo: se van a llamar respeto, dignidad, protección de los territorios, derechos del cuerpo de las mujeres. A esto le llamo una ecología de saberes, que implica también una reforma de la universidad. (De Sousa Santos, 2016)

Norma en sus últimos trabajos adhiere plenamente a la necesidad de reconocer e impulsar estas nuevas epistemologías del Sur mencionadas. En esa línea, durante la XXIV Asamblea General de CLACSO (2012) en la mesa “Lo plurinacional, la descolonización y el cuestionamiento a la problemática del desarrollo rural”,

Norma presentó la ponencia “Paradigmas de los estudios rurales, opción decolonial y constelaciones semánticas” (Giarracca, 2012d) en la que se exploya sobre estos temas:

Arturo Roig, uno de esos pensadores de Nuestra América de imprescindible lectura, dice refiriéndose a la identidad latinoamericana que no es un “yo” el que mira sino “un nosotros”, y no es un “todos los hombres” los que miran con nosotros sino algunos, los de nuestra diversidad en cualquier orden para insistir en esa parcialidad de todo mirar (Roig, 2009 [véase más adelante]). Más recientemente, Boaventura de Sousa Santos, otro gran pensador, formuló la idea de una “Epistemología del Sur”, no como una posición geográfica ni social sino como unos modos de ver el mundo atravesado por nuestras historias de dominaciones y resistencias que nos habilita al mirar sin ausencias.

Comienzo con estas palabras, esta ponencia, para señalar de entrada que hay “miradas”, “epistemes” (modos de conocimientos) que acompañan los estudios rurales y que si bien coexisten (a diferencia de las ciencias duras), hay algunos que intentan ser hegemónicos y jerarquizar a los otros. (Ibídem)

El documento que expone Norma es notable en cuanto a su conceptualización y a la necesi-

dad de buscar nuevos enfoques que enfrenten a nuestras realidades contemporáneas. Después de presentar tres paradigmas, que analiza a fondo y críticamente, nos presenta lo que sigue “a modo de conclusión”:

Coexisten tres paradigmas en los estudios rurales y de los recursos naturales en América Latina: la vieja “cuestión agraria”, *aggiornada* en algunos casos y en su forma más ortodoxa en otros; el “neodesarrollismo” que ven en cualquier transformación agraria “un progreso” que también puede estar en su estado puro, utilizando conceptos desarrollistas puros o se puede imbricar con las ideas de la “cuestión agraria” que sucede en muchos estudiosos que proviniendo del marxismo, justifican este proceso de “desposesión” en materia de recursos naturales. Por último, existe una constelación semántica, es decir un conjunto de ideas, conceptos, sentidos que tal cual las estrellas van configurándose, armando una figura, armando un espacio teórico que puede funcionar como programa político. Es decir, produce efectos, resignifica procesos, situaciones y habilita una nueva cultura política. Esa que necesitamos para producir nuevos mundos porque este en el que vivimos no solo no es sustentable, no aguanta mucho tiempo más, sino que está produciendo demasiado sufrimiento social en todo el mundo. (Giarracca, 2012d)

En la “Presentación de *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano* de Arturo Roig a modo de homenaje” Norma destaca algunos pensadores que son precursores e impulsores del nuevo pensamiento “decolonial”: Quijano, Mignolo, Grosfoguel, y por supuesto Boaventura de Sousa Santos, entre otros. También menciona a Kusch, a quien Norma no llegó a conocer, aunque en el último año de su vida había leído varios escritos de él y sobre su pensamiento.

Asimismo, ella reconoce como un importante antecesor de esta perspectiva a Arturo Roig, el gran filósofo mendocino, a quien Norma tuvo el privilegio de conocer durante su gestión en el CONICET, y también de interactuar con él a lo largo de su vida. La nieta de Roig y editora de su libro *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano* le pidió a Norma que participara en su presentación en el año 2010.

Esta solicitud me llenó de inquietud; cómo negarme a un pedido semejante y qué hacer para estar a la altura de las circunstancias. No soy filósofa, mis conocimientos de la historia de las ideas en América latina son más que modestos; no obstante no podía dejar de leer nuevamente el libro y poder lograr algún comentario desde, por qué no, mi propia experiencia contemporánea sobre la región. (Giarracca, 2012b)

Arturo Roig falleció en Mendoza el 30 de abril de 2012 a pocos meses de cumplir 90 años. Fue allí que Norma decidió publicar sus notas a modo de homenaje.

Estas notas escritas para presentar su libro hoy se convierten en un medio para homenajearlo porque fue uno de los intelectuales más importantes de este país, el gran pensador de Nuestra América y de lectura ineludible para quienes asumimos una “mirada situada” del mundo, una mirada desde el sur, es decir, desde América Latina. (Ibídem)

El libro *Bicentenarios (otros): transiciones y resistencias* compilado por Norma Giarracca nos presenta, en las palabras de Walter Mignolo, un conjunto de “batallas epistémicas de nuestra época”. Según este autor:

El último cuarto del siglo XX y la primera década del siglo XXI son testigos del surgimiento de una sociedad política global que, contrario a la sociedad civil, no asiste callada a los festejos y celebraciones de los beneficiarios del descubrimiento y de las independencias, sino que se levanta en letras para callar las armas. La toma de conciencia de que el descubrimiento encubre la humanidad de quienes fueron descubiertos y que las independencias de España resultaron en colonialismos internos y en la dependencia intelectual de

Francia y económica de Inglaterra, no es solo ya ocasión de denuncia sino de análisis de la doble cara de los momentos históricos fundacionales cuyo sentido fue controlado, hasta estas últimas décadas, por quienes lo hacen no solo desde la autoridad política y la política económica sino sobre todo mediante la política del saber. (Mignolo, 2011: 11-12)

En el primer párrafo del Prólogo de este libro, en el que participan 24 autores, Norma nos presenta una pauta de su contenido esencial.

Las llamadas “revoluciones” y a veces “independencias” que sacudieron a América y al mundo del Atlántico (desde España y Portugal hasta Francia, Alemania e Inglaterra), sostiene Walter Mignolo, fueron en realidad revoluciones e independencias post-coloniales. Post-coloniales en sentido literal: instauraron órdenes políticos y económicos sobre las ruinas de las colonias ibéricas y británicas. Ordenes políticos y económicos y además —como él y todos los autores que reflexionan en la primera parte de este libro sostienen—matrices de pensamientos, colonialidad del saber y del ser. (Ibídem: 14)

En este Prólogo, Norma sintetiza el contenido del libro, la multiplicidad de aspectos que atañen a esta problemática. Presentamos en esta

antología “El bicentenario: miradas sobre la Argentina” (Giarracca, 2011c), un importante artículo de Norma en la que se explaya en un análisis crítico de lo que fueron los festejos del Bicentenarios en la Argentina.

El libro *Comunalidad, educación y resistencia indígena en la era global. Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano* está constituido por tres diálogos que tienen Lois Meyer y Benjamín Maldonado con Noam Chomsky, y otros múltiples trabajos escritos por una serie de autores en torno a las temáticas tratadas en tales diálogos. Un tema central considerado tiene que ver con la supresión cultural y la resistencia: “Chomsky sostiene que debemos entender que la constitución de los Estados nacionales homogéneos ha sido un proceso brutal y áspero al servicio de los intereses políticos y económicos de los poderes imperiales” (Meyer y Maldonado, 2011).

El artículo de Norma se titula “Cambiar de espejo: mirarnos en América Latina. Reflexiones, desde la Argentina, inspiradas en las entrevistas al doctor Noam Chomsky”. Allí plantea:

Las sugerentes entrevistas realizadas al intelectual norteamericano Noam Chomsky dan pie para reflexionar acerca de los problemas de la construc-

ción del Estado-nación en América Latina así como sobre las formas comunales de vida de muchas poblaciones que habitaban y habitan en sus territorios, y que resurgen como opciones políticas en la última parte del siglo XX. Querría detenerme en la aparición de estos procesos en la Argentina, ya que en su fuerte imaginario social se ubica como el país más europeizado de América Latina; como una nación donde la “colonialidad” (Quijano, 2000) caló tan hondo en su trama cultural que los sectores pensantes o progresistas tradicionalmente se plantearon solo una parte de estos problemas (el surgimiento del Estado) pero muy pocas veces la cara oculta de la modernidad capitalista; la operación cultural de subalternización de las diversas poblaciones involucradas. La cuestión indígena quedó recluida a una antropología colonial y con influencias marcadamente racistas; cuando hoy aparece, es por la insistencia de intelectuales como Osvaldo Bayer y de los propios actores sociales (las comunidades indígenas junto con poblaciones campesinas) en el dramático escenario de la expansión agraria sojera. (Giarracca, 2011a: 249-250)

En el libro *Renunciar al bien común: extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina*, (2012), Norma escribe “Tres paradojas para pensar la política”. En el texto reafirma:

Tres paradojas trasvasan la situación actual de América Latina. La primera proviene de la con-

junción de dos conceptos tan antagónicos como subdesarrollo y abundancia: países ricos con recursos naturales incapaces de reducir las significativas franjas de pobreza de sus poblaciones aún bajo el riesgo de dilapidar sus recursos naturales. La segunda conjuga una modalidad política progresista, que por un lado esgrime un discurso de izquierda, con una tradición desarrollista socialdemócrata y por el otro no cuestiona el saqueo de los recursos naturales, sino que lo integra como parte esencial de las políticas de Estado. La tercera ofrece un horizonte abierto: el de los movimientos, que hace más de una década hacían eclosión en sus luchas proponiendo nuevas formas de articulación social y ahora no logran reunirse alrededor de consignas como aquella del “otro mundo es posible” del Foro Social Mundial. [...] Una economía basada exclusivamente en la explotación de los recursos naturales profundiza el subdesarrollo y generan democracias de baja calidad. La segunda situación paradójica marca la coexistencia y entrelazamiento entre una ideología neoliberal y un neodesarrollismo. Esta constelación genera el actual “Consenso de los Commodities” y su paradójica redistribución del ingreso. (Giarracca, 2012c: 231-232)

Más adelante puntualiza una cuestión que continúa teniendo vigencia en América Latina:

El sistema de representación no cambió en los países que habían despertado las esperanzas de un nuevo pacto fundante a través de la modificación de sus constituciones (Bolivia, Ecuador, Venezuela). El Estado y sus instituciones democráticas no son los actores adecuados para llevar a cabo un cambio de rumbo hacia el “buen vivir” andino (para usar la polisémica y holística idea andina), o para acceder a un mundo “otro”, alternativo al que nos ofrece esta etapa devastadora del capitalismo global. La representación solo habilita la gestión del Estado, que puede ser mejor o peor, más o menos corrupta. El Estado se subordina a la economía, conserva lo existente y se muestra impotente frente a la transformación que reclaman los nuevos sujetos (Cfr. Cerdeiras, 2011). (Ibídem)

Que Hugo Blanco, el dirigente histórico de la lucha campesina peruana y de la izquierda revolucionaria latinoamericana, quien “fuera protagonista fundamental de la inmensa insurrección de los pobres del campo en los valles de La Convención y Lares que impuso de manera singular una reforma agraria desde abajo” (Blanco, 2010), le propusiera a Norma escribir el Prólogo a su libro *Nosotros los indios*, una compilación de sus textos escritos en diversos momentos, fue un gran honor para ella, máxime teniendo presente que dicho prólogo estuvo precedido

por comentarios de Eduardo Galeano y Raúl Zibechi. En su aporte afirma:

Estamos frente a un libro que conmueve y sorprende por muchas razones. Conmueve por la posibilidad de conocer de modo directo las luchas de América/Abya Yala extendidas por múltiples tiempos y territorios. Conmueve porque las resistencias están narradas en una forma simple y profunda; conmueve por lo que representa su autor, Hugo Blanco, para muchas generaciones de luchadores; por su inmenso afecto por la selva y por la Pachamama; por el privilegio de convertirnos en testigos del intercambio epistolar entre el protagonista y José María Arguedas en los últimos momentos trágicos de la vida del escritor. Conmueve por constatar una vez más los infinitos sufrimientos que el orden colonial infligió e inflige a vastas poblaciones; sorprende por el grado de empobrecimiento subjetivo del “hombre moderno” que es capaz de provocar los peores sufrimientos en prisiones, enfrentamientos, saqueos [...] Sorprende por la actualidad que adquieren esas luchas de los años sesenta en los contextos regionales e internacionales actuales tan diferentes en algunos aspectos y tan cercanos en la continuidad del poder colonial y depredador. Sorprende y conmueve la posibilidad de seguir los derroteros de aquel estudiante de agronomía que en estas tierras argentinas se convierte en un militante político tenaz e íntegro hasta llegar a este presente de madurez y compromiso. (Giarracca, 2010b)

Más adelante Norma agrega:

Hugo Blanco es un “sujeto social rebelde” que pudo sentir las injusticias, las injurias, la tragedia colonial de sus hermanos indígenas en su propio cuerpo y generar ese “nosotros” que da título a este libro. [...] Los debates de los pensadores y militantes de la Revolución de Octubre, el monumental emprendimiento de la China de Mao Tse Tung, el voluntarismo infinito de Sierra Maestra o los movimientos de liberación de África permitían pensar vías y horizontes posibles.

[El pensamiento político emancipador] aún circulaba como un fantasma cruzando mares y entremezclándose con las ideas de los intelectuales indígenas y criollos de América Latina. [...] Esa apuesta a la construcción histórica de un espacio de no dominación, atravesaba tiempos y territorios. [...]

El agotamiento de los pilares de la modernidad socavó la emancipación para quedarse con la pura regulación, con el puro control social. Pero la potencia de ese pensamiento decimonónico que prefiguraba un espacio de “no dominación”, que fue capaz de articular las luchas obreras europeas con las campesinas e indígenas de América Latina, o las de liberación nacional de Asia o África, impregna aún hoy la búsqueda de los pensamientos emancipatorios en las múltiples resistencias. Y, a mi entender, Hugo Blanco viene a representar esta constante, esta tenacidad, esta

presencia irreductible de un pensamiento político. Es decir, una decisión ligada a una ruptura: a la ruptura con un orden moderno/colonial, capitalista, racista, patriarcal e individualista. [...] Considero que el hallazgo más significativo en la lectura de este libro reside en la historia de vida de Hugo Blanco, en ese andar político más parecido al de los activistas indígenas del presente que al de los luchadores de las décadas del sesenta y setenta. (Ibídem: 22-23)

BIBLIOGRAFÍA

- Abeledo, C. 2007 “Ciencia y tecnología en el retorno a la democracia” en *Ruptura y reconstrucción de la ciencia argentina*, 2 y 3 de agosto, Buenos Aires, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Salón Leopoldo Marechal, Palacio Pizzurno.
- Bartra, A. 1982 *El comportamiento económico de la producción campesina* (México DF: Universidad Autónoma de Chapingo).
- Bennett, V.; Dávila-Poblete, S. y Nieves Rico, M. (coords.) 2005 *Opposing Currents. The Politics of Water and Gender in Latin America* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).
- Blanco, H. 2010 *Nosotros los indios* (Buenos Aires: Herramienta / La Minga).
- De Sousa Santos, B. 2016 “Hay que empezar de nuevo” en *La Diaria* (Montevideo) 17 de mayo. Entrevista de D. León Pérez y G. Delacoste. Disponible en <<https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/5/hay-que-empezar-de-nuevo/>>.
- Ger-Gemsal 2013 “Bienes comunes en la hegemonía extractivista. Disputas y resistencias” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Actividades extractivas*

- en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Giarracca, N. y Mariotti, D. 2005 “La caña de azúcar en Tucumán: transformaciones y permanencias” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. (coord.) y AAVV 2001 “‘Vejeciones x 8’. Arte y protesta social en Buenos Aires” en *Informes de Coyuntura* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 2, diciembre.
- Giarracca, N. 1982 “Tabamex, a remolque de las empresas cigarreras. Y el tabaco se nos vuelve humo” en *Página Uno*, suplemento político de *Uno más Uno*, 21 de noviembre.
- Giarracca, N. 1983 “La subordinación del campesinado a los complejos agroindustriales. El tabaco en México”, tesis para obtener el grado de Maestría en Sociología (México DF: UNAM).
- Giarracca, N. 1985 “Complejos agroindustriales y la subordinación del campesinado. Algunas reflexiones y el caso de los tabacaleros mexicanos” en *Estudios Rurales Latinoamericanos* (Bogotá) Vol. 8, N° 1.
- Giarracca, N. 1990 “El campesinado en la Argentina: un debate tardío” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 94.
- Giarracca, N. 1992 “Algunas reflexiones sobre las ciencias sociales y la investigación en los espacios académicos públicos” en *Sociedad* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 1, pp. 157-166.
- Giarracca, N. 1993 “Campesinos y agroindustrias en los tiempos del ‘ajuste’. (Algunas reflexiones para pensar la relación, con especial referencia a México y la Argentina)” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 114-115.
- Giarracca, N. 1994a “‘Tucumanas de ojos grandes’. Un estudio sobre acciones colectivas de campesinas tabacaleras” en Knecher, L. y Panaia, M. (comps.) *La mitad del país. La mujer en la sociedad argentina* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina / Facultad de Ciencias Sociales, UBA / FIDES / Ministerio de Cultura y Educación).
- Giarracca, N. 1994b “Introducción” en Giarracca, N. (comp.) *Acciones colectivas y organización cooperativa. Reflexiones y estudios de caso* (Buenos Aires: Bibliotecas Universitarias del Centro Editor de América Latina / Instituto de Investigaciones,

- Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires) pp. 7-16.
- Giarracca, N. 1995 “Introducción” en Giarracca, N. (coord.) *Agroindustrias del Noroeste: el papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena) pp. 11-18.
- Giarracca, N. 1999 “Las Ciencias Sociales y los estudios rurales en la Argentina durante el siglo XX” en Giarracca, N. (coord.) *Estudios rurales: problemas, teorías y estrategias metodológicas* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. 2001a “El ‘Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha’: protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina” en Giarracca, N. (coord.) *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires: CLACSO / ASDI).
- Giarracca, N. 2001b “Prólogo” en Giarracca, N. (coord.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Madrid / Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. 2002 “Movimientos sociales y protestas en los mundos sociales latinoamericanos: nuevos escenarios y nuevos enfoques” en *Sociologías* (Porto Alegre) Año 4, N° 8, julio-diciembre.
- Giarracca, N. 2003 “De las fincas a las casas a las rutas y las plazas: las protestas y las organizaciones sociales en la Argentina de los mundos ‘rururbanos’. Una mirada desde América Latina” en *Sociologías* (Porto Alegre) Año 5, N° 10, julio-diciembre.
- Giarracca, N. 2004 “América Latina, nuevas ruralidades, viejas y nuevas acciones colectivas: Introducción” en Giarracca, N. y Levy, B. (comps.) *Ruralidades latinoamericanas. Identidades y luchas sociales* (Buenos Aires: CLACSO-ASDI) pp. 13-19.
- Giarracca, N. 2006 “Notas sobre el trabajo de campo” en AAVV *Cuando el territorio es la vida: la experiencia de los Sin Tierra en el Brasil* (Buenos Aires: GEMSAL / Antropofagia).
- Giarracca, N. 2007a “La tragedia del desarrollo. Disputas por los recursos naturales en la Argentina” en *Sociedad* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales de la UBA / Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Solina) N° 26, invierno.
- Giarracca, N. 2007b “Los peligros de los modelos ‘productivistas’ en el sector primario” en *Anales de la Educación Común*, Vol. 3, N° 8.

- Giarracca, N. 2008a “Notas metodológicas: ‘experiencia de investigación’ desde lugares diferentes (algunas reflexiones acerca del intelectual comprometido)” en Esteva, G.; Valencia, R. y Venegas, D. (eds.) *Cuando hasta las piedras se levantan. Oaxaca, México, 2006* (Buenos Aires: GEMSAL / Antropofagia).
- Giarracca, N. 2008b “Presentación” en Esteva, G.; Valencia, R. y Venegas, D. (eds.) *Cuando hasta las piedras se levantan. Oaxaca, México, 2006* (Buenos Aires: GEMSAL / Antropofagia).
- Giarracca, N. 2008c “Producción y mercados para la vida: una posibilidad emancipadora para el siglo XXI” en Giarracca, N. y Massuh, G. (comps.) *El trabajo por venir. Autogestión y emancipación social* (Buenos Aires: Goethe Institut / GEMSAL / Antropofagia).
- Giarracca, N. 2010a “El conflicto agrario 2008-2009: los debates necesarios” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Giarracca, N. 2010b “Prólogo” en Blanco, H. *Nosotros los indios* (Buenos Aires: Herramienta / La Minga).
- Giarracca, N. 2011a “Cambiar de espejo: mirarnos en América Latina. Reflexiones, desde la Argentina, inspiradas en las entrevistas al doctor Noam Chomsky” en Meyer, L. M. y Maldonado, B. (coords.) *Comunalidad, educación, y resistencia indígena en la era global. Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano* (Oaxaca de Juárez: CSEIIO).
- Giarracca, N. 2011b “El ‘desarrollo’ basado en la extracción de recursos naturales” en CELS (ed.) *Derechos Humanos en Argentina. Informe 2011* (Buenos Aires: CELS / Siglo XXI).
- Giarracca, N. 2011c “El Bicentenario: miradas sobre la Argentina” en Giarracca, N. (comp.) *Bicentenarios (otros), transiciones y resistencias* (Buenos Aires: Una Ventana).
- Giarracca, N. 2011d “Prólogo” en Giarracca, N. (comp.) *Bicentenarios (otros), transiciones y resistencias* (Buenos Aires: Una Ventana).
- Giarracca, N. 2012a “La tierra: polisemias, confusiones y debates” en *Causa Sur; Pensar Nuestra América*, Año 1, N° 2, junio-julio.
- Giarracca, N. 2012b “Presentación de *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano*

- de Arturo Roig, a modo de homenaje” en *Realidad Económica*, N° 268, mayo-junio.
- Giarracca, N. 2012c “Tres paradojas para pensar la política” en Massuh, G. (ed.) *Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina* (Buenos Aires: Mardulce).
- Giarracca, N. 2012d “Paradigmas de los estudios rurales, opción decolonial y constelaciones semánticas”, ponencia en la XXIV Asamblea General de CLACSO.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 “Los campesinos cañeros: multiocupación y organización” en *Cuaderno del Instituto de Investigaciones* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 3.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1995a “El oficio del sociólogo o de los sociólogos con oficio” en Schuster, F.; Giarracca, N.; Aparicio, S.; Chiamonte, J. C. y Sarlo, B. *El oficio del investigador* (Buenos Aires: Homo Sapiens / Instituto de Ciencias de la Educación, UBA) pp. 53-77.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1995b “La actividad cañera. Los campesinos cañeros en los nuevos escenarios económicos” en Giarracca, N. (coord.) *Agroindustrias del Noroeste: el papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1997 “La acción social en los procesos económicos. El caso de la actividad cañero en Tucumán” en Cantón, D. y Jorrat, J. (coords.) *La investigación social hoy. A cuarenta años de la recreación del Instituto de Sociología (UBA)* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani / Oficina de Publicaciones del CBC).
- Giarracca, N. y Bidaseca, K. 1999 “La entrevista: técnica metodológica y experiencia comunicativa” en Giarracca, N. (coord.) *Estudios rurales: problemas, teorías y estrategias metodológicas* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. y Bidaseca, K. 2001 “Introducción” en Giarracca, N. (coord.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Madrid / Buenos Aires: Alianza Editorial).
- Giarracca, N. y Bidaseca, K. 2004 “Ensamblando las voces: los actores en el texto sociológico” en Kornblit, A. L. (coord.) *Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y procedimientos de análisis* (Buenos Aires: Biblos).
- Giarracca, N. y Cloquel, S. 1998 “Las agriculturas del Mercosur. El papel de los

- actores sociales. A modo de introducción” en Giarracca, N. y Cloquel, S. (comps.) *Agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena / CLACSO).
- Giarracca, N. y Del Pozo, N. 2005 “La lucha por los derechos del agua en Tucumán. Transnacionales y mujeres en la protesta social” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. y Palmisano, T. 2013 “Tres lógicas de producción de alimentos: ¿Hay alternativas al agronegocio?” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía Argentina?* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) 2005 *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1993a “El día en que la Plaza de Mayo se vistió de campo” en *Realidad Económica*, N° 118, agosto-septiembre.
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1993b “La integración económica con el Brasil y los pequeños productores cañeros” en *Ciclos*, Año III, Vol. III, N° 5, 2° semestre.
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2005a “Introducción: los debates acerca del campo” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2005b “Prólogo” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza) pp. 9-13.
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2006 “Democracia y neoliberalismo en el campo argentino. Una convivencia difícil” en De Grammont, H. C. (comp.) *La construcción de la democracia en el campo latinoamericano* (Buenos Aires: CLACSO, Colección Grupos de Trabajo).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2007 “La rebelión de 2001-2002: protestas, rupturas y recomposiciones” en GER-GEMSAL *Tiempos de rebelión: “Que se vayan todos”. Calles y plazas en la Argentina, 2001-2002* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2008 “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del ‘agronegocio’: el caso Argentino” en Mançano Fernandes, B. (org.) *Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual* (San Pablo: CLACSO, Colección Grupos de Trabajo / Expressão Popular).

- Giarracca, N. y Teubal, M. 2013a
 “Introducción” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2013b “Las actividades extractivas en la Argentina” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía Argentina?* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2014 “Argentina: Extractivist dynamics of soy production and open-pit mining” en Veltmeyer, H. y Petras, J. (eds.) *The new extractivism. A post-Neoliberal Development Model or Imperialism of the Twnty-First Century?* (Londres: Zed books).
- Giarracca, N. y Wahren, J. 2009
 “Recuperación del territorio, ‘recuperación de Estado’: Mosconi, Argentina después de ocho años de lucha” en Tavares dos Santos, J. V. (org.) *Democracia, violências e lutas sociais na América Latina* (Porto Alegre: Editora de Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS).
- Giarracca, N.; Aparicio, S. y Gras, C. 2001
 “Multiocupación y pluriactividad en el agro argentino: el caso de los cañeros tucumanos” en *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social) Vol. 41, N° 162, julio-septiembre.
- Giarracca, N.; Flood, C.; Aparicio, S. y Baudron, S. 1971 *Investigación sociológica del área tabacalera correntina* (Buenos Aires: Dirección Nacional de Economía y Sociología Rural de la Secretaría de Agricultura y Ganadería) publicación N° 28.
- Giarracca, N.; Gras, C. y Barbeta, P. 2005
 “De colonos a sojeros. Imágenes de la estructura social del sur de Santa Fe” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N.; Gras, C. y Gutiérrez, P. 1995
 “Métodos cuantitativos y cualitativos en los estudios de la Sociología Rural” en *Ruralia, Revista Argentina de Estudios Agrarios* (Buenos Aires: FLACSO) octubre.
- Giarracca, N.; Teubal, M. y Domínguez, D. 2001
 “El Foro Social Mundial de Porto Alegre. Otro paso de los movimientos sociales globalizados” en Giarracca, N. (coord.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis*

- social en el interior del país* (Madrid / Buenos Aires: Alianza).
- Grupo de Trabajo de Sociología Rural 1974
Estudio de la mano de obra rural en la actividad forestal de la provincia de Misiones (Posadas: Provincia de Misiones, Dirección General de Estadísticas y Censos).
- Meyer, L. M. y Maldonado, B. (coords.) 2011
Comunalidad, educación, y resistencia indígena en la era global. Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano (Oaxaca de Juárez: CSEIIO).
- Mignolo, W. 2011 “Prefacio” en Giarracca, N. (comp.) *Bicentenarios (otros), transiciones y resistencias* (Buenos Aires: Una Ventana).
- Roig, A. 2009 (1981) *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano* (Buenos Aires: Una Ventana).
- Shanin, T. 1971 *Peasants and Peasant Societies* (Harmondsworth: Penguin).

Primera Parte

LA SOCIOLOGÍA RURAL Y EL DEBATE SOBRE EL CAMPESINADO

COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES Y LA SUBORDINACIÓN DEL CAMPESINADO

ALGUNAS REFLEXIONES Y EL CASO DE LOS TABACALEROS MEXICANOS*

OBJETIVOS

A mediados de la década del sesenta comenzó a manifestarse en México una crisis agrícola cuyas consecuencias más importantes fueron el estancamiento de la producción de alimentos básicos, el estancamiento de la producción de bienes de exportación (algodón) y por lo tanto un descenso considerable en el volumen de exportaciones agropecuarias. Para algunos autores esta situación puso de manifiesto el agotamiento del modelo de crecimiento que hasta ese entonces se había seguido y marcó un cambio fundamental en el papel del sector agropecuario dentro de los

nuevos patrones de acumulación capitalista. Se sostiene que esos cambios están relacionados con la “internacionalización” de la agricultura mexicana en relación a un proceso más amplio de “internacionalización del capital” y con una nueva división internacional del trabajo. Todo lo cual se verificaría tanto en la producción como en la distribución y consumo de los productos agrícolas (Rama y Rello, 1978).

Junto a la retracción en la producción de granos básicos y de otros cultivos de exportación, comenzó un dinámico desarrollo de nuevos cultivos ligados a la exportación, a las empresas agro-industriales y a la alimentación del ganado. La penetración del capital agroindustrial tomó especial importancia y la producción agraria comenzó cada vez más a pasar por algún tipo de elaboración industrial. Este proceso acarreó transferencia internacional de tecnologías, produjo cambios

* Giarracca, N. 1985 “Complejos agroindustriales y la subordinación del campesinado. Algunas reflexiones y el caso de los tabacaleros mexicanos” en *Estudios Rurales Latinoamericanos* (Bogotá) Vol. 8, N° 1.

en los procesos productivos y en las relaciones de producción de la estructura agraria en general. El crédito se convirtió en el medio más importante para adquirir esta nueva tecnología. Por tal motivo, la disposición del mismo estuvo en función de aquellos cultivos que se quisieron estimular y favoreció en los últimos años la producción de frutas y legumbres, granos industriales y ganadería, y desestimuló la producción de granos básicos.

El resultado de este proceso fue un importante cambio en los cultivos, se estimularon estos sectores dinámicos y cada vez más se fue desalentando la producción de granos básicos. Esta situación derivó en una dependencia cada vez más importante del mercado internacional para satisfacer las necesidades alimentarias de la mayoría de la población. Durante los últimos años la renta obtenida por las exportaciones de petróleo y las exportaciones industriales financiaron estas importaciones, optando de este modo la política oficial por el camino de las “ventajas comparativas”.

El trabajo sobre sistemas agroindustriales en México de Domike y Rodríguez (1976), junto con otros trabajos más recientes de la CEPAL, nos permiten desarrollar una caracterización general del desarrollo del país. Estos estudios establecen doce complejos

agroindustriales: frutas y legumbres, granos básicos, otros granos, oleaginosas, sacarígenos, fibras, bebidas alcohólicas, café y té, cacao, tabaco, especias, chicles, etcétera. En 1975 eran 193 las empresas transnacionales que participaban en el control de 390 firmas; de ellas, 284 se dedicaban exclusivamente al procesamiento de materias primas de origen agrícola. De estas, 43 son las más importantes que operan a escala mundial con volúmenes de venta que superan los quinientos millones de dólares. Para algunos organismos oficiales, todo beneficio o procesamiento por mínimo que sea constituye procesos agroindustriales; sin embargo los criterios establecidos por estos trabajos suponen sistemas más complejos y con cierto grado de integración vertical.

Dentro de los sistemas agroalimentarios, las transnacionales controlan el 97 por ciento en la producción de la leche evaporada, condensada y en polvo, el 86 por ciento en la elaboración de concentrados, jarabes y colorantes, el 73 de la fabricación de palomitas de maíz, papas fritas y otros, el 96 por ciento del café soluble y el té, el 95 por ciento de los cereales y el 100 por ciento de los alimentos infantiles (Gómez Cruz, 1980: 59).

En este trabajo nos proponemos analizar las nuevas modalidades de articulación de las

explotaciones agropecuarias a estas formas de organización económico-social que son los complejos o sistemas agroindustriales. Nos detendremos particularmente en los sectores campesinos y señalaremos, tanto los mecanismos utilizados para integrarlos, como las consecuencias que este proceso acarrea a nivel de esta clase social.

Los caminos que se han producido a partir del desarrollo agroindustrial no solo se han dado a nivel de los mercados, sino que lo novedoso de este proceso es la intervención a través de diversos mecanismos utilizados por las procesadoras e integradoras en los procesos productivos. Como lo plantea Sorj (1980), la explotación del sector campesino ya no se da a partir de su atraso, como era corriente con los comerciantes tradicionales, sino a partir de la introducción en los procesos productivos de prácticas modernas, de utilización de tecnologías avanzadas por un control monopsónico del mercado por parte de la industria procesadora.

Utilizaremos para ejemplificar este proceso el caso del complejo tabaco, basándonos en trabajos que hemos realizado en los últimos tres años (Teubal et al., 1982; Giarracca, 1983). Además, haremos referencias a otros complejos utilizando material disponible,

producto de las investigaciones que sobre complejos agroindustriales se han realizado en los últimos años en el país.

LOS COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS: MODALIDADES DE INTEGRACIÓN

En los últimos años se han realizado varios trabajos tendientes a definir criterios metodológicos que permitan identificar “complejos sectoriales” en general, y en particular los agroindustriales (Vigorito, 1979; Trajtenberg, 1977).

Se define al complejo o cadena como la estructura de relaciones entre las distintas etapas que intervienen en la elaboración de un bien. Cuando el producto tiene origen agropecuario, estamos en presencia de un complejo agroindustrial. En este caso existe una división de las etapas productivas relacionadas con la transformación de la materia prima.

El complejo agroindustrial es un mecanismo de reproducción que se estructura en torno a la cadena de transformaciones directamente vinculadas a la producción agraria, hasta llegar a: a) su destino final como medio de consumo

o inversión, o b) formar parte de la órbita de otro complejo no agroindustrial. En un complejo agroindustrial el dominio relativo se ejerce mediante el control directo o indirecto de sus etapas. (Vigorito, 1979: 25)

Es importante determinar no solo los aspectos formales relacionados con los procesos técnicos y económicos de la producción, agroindustrialización y transformación, sino tomar en cuenta además las relaciones sociales y económicas que se dan en los complejos y las bases materiales que las sustentan. Las relaciones que se desarrollan dentro del complejo entre las unidades de producción son “asimétricas” (Vigorito, 1979; Scott, 1983), o que significa que ciertas empresas tienen mayor poder de determinación que otras. Estas empresas consideradas “núcleos”... “operan en etapas en cuyas condiciones de reproducción tienen más alto grado de incidencia sobre el proceso de reproducción en su conjunto” (Vigorito, 1979: 24).

En los complejos agroindustriales se constata un alto grado de integración vertical, los procesos de trabajo complejos se subdividen y se ejecutan en forma sucesiva, pasando a estar integrados en forma vertical o subsecuente en el tiempo. La integración de la

producción primaria se lleva a cabo por la existencia de un “polo integrador”. Este, generalmente, pero no siempre, coincide con el “núcleo” y es el que determina qué, cuánto, cuándo, cómo y dónde producir. La integración procura garantizar una oferta regular de materia prima con determinada calidad y precio a las empresas transformadoras. Además, supone que el ciclo de reproducción de las unidades agropecuarias está incluido y comprendido en el ciclo de reproducción de los núcleos.

En el país una gran parte de la producción agropecuaria se relaciona de alguna manera con el capital agroindustrial. Existe una diversidad de situaciones de integración que responden no solo al tipo de relaciones de producción que se dan en el sector agrario integrado, sino además al tipo de relaciones que se entabla entre las unidades agrícolas y la empresa integradora o con sus agentes intermediarios. De esta forma, aparece un amplio espectro de posibilidades de formas de articulación. En un extremo encontramos una posible unidad productiva independiente y autónoma que se relaciona con las empresas agroindustriales, simplemente en el momento de realizar la producción en un mercado que guarda una forma tradicional y,

si bien, los productores tienen algún tipo de compromiso de venderles la producción, pueden optar por mercados alternativos. Aquí, el nivel de integración es bajo y generalmente las unidades primarias articuladas son medianas o grandes. En el otro extremo ubicarnos empresas que a pesar de estar formalmente separadas del resto del complejo y de poseer la tierra, tanto por el capital de operaciones que utilizan, como por la toma de decisiones y gestión de la explotación, están totalmente integradas o subordinadas al capital agroindustrial. En este caso, planteamos que el grado de integración vertical es alto. Entre ambos extremos se presenta una compleja gama de situaciones con particularidades importantes, cuando se trata de complejos que involucran a los sectores campesinos.

ALGUNAS MODALIDADES DE INTEGRACIÓN EN EL PAÍS

Aún no existe información sobre la cantidad de productores que trabajan relacionados al capital agroindustrial. Sabemos que un 57 por ciento de la producción agropecuaria nacional pasa por algún tipo de procesamiento agroindustrial, pero desconocemos qué cantidad de agricultores están involucrados en este

proceso. Sin embargo, a través de los trabajos sobre el tema que se han realizado en los últimos años, podemos señalar las formas de integración más frecuentes y las principales determinantes que intervienen en esa relación.

A partir de una serie de variables, como tipo de mercado, tipo de explotaciones agrarias, tipo de empresas procesadoras (nacional, transnacional, estatal), grado de participación del Estado, fuente de financiación, intentamos una primera clasificación de las formas de integración, ubicando los tipos de articulaciones que se presentan entre los productores y los integradores.

En primer lugar, encontramos complejos cuya característica fundamental, para los fines de nuestro trabajo, reside en una articulación entre productores y procesadores, que permite cierta autonomía de los primeros respecto de los segundos. Esto se verifica fundamentalmente en el control del proceso productivo y en la posibilidad de rescindir el contrato agroindustrial por parte de los agricultores. Son complejos con presencia de empresas transnacionales que funcionan como “núcleos” de los mismos. Sin embargo, entre los productores y los procesadores aparecen una serie de instancias intermediarias que, en última instancia, redundan en un menor control sobre es-

tos últimos. Otra característica importante de esta primera modalidad de integración es que estas empresas transnacionales tienen que compartir los mercados. Este hecho posibilita a los agricultores alternativas para colocar la producción y, por otro lado, a través de asociaciones o uniones llegan a negociar en términos favorables para sus propios intereses con estas grandes empresas.

Por supuesto, el dominio dentro del complejo es ejercido por las empresas transnacionales (ET), en tanto tienen mayor capacidad financiera, pueden acaparar recursos y pueden tener mayor injerencia que las otras empresas en los mecanismos de fijación de los precios en el complejo. Ejemplos de este tipo de complejos en México son el de granos y el de leche. En el primero, la relación entre productores y procesadores siempre está mediada. Puede aparecer alguna institución que represente al Estado, como lo es CONASUPO, pero también pueden funcionar como mediadores comisionistas o algún comerciante que actúe de intermediario (Barkin y Suárez, 1980). No se presenta la unidad integradora que desarrolla la función de proveedora de semillas e insumos y de “comprador”. Tampoco existe una intervención directa de los contratantes en los procesos pro-

ductivos. Los agricultores tienen mercados alternativos para colocar la producción, y en última instancia tienen la posibilidad del autoconsumo. En el complejo granos se constata una importante presencia estatal, a través de BANRURAL que entrega los créditos y de la CONASUPO que fija los precios de garantía. Sin duda, el Estado tiene particular interés en tener algún tipo de regulación dentro de este complejo, pues los granos son bienes de consumo directo y componentes básicos del valor de la fuerza de trabajo.

En segundo lugar, incluimos en esta primera forma de integración la que se presenta dentro del complejo leche. Se articulan medianos y pequeños productores empresariales y campesinos. Las ET (Nestlé, Carnation) se relacionan con sus proveedores de materia prima a través del típico contrato agroindustrial: les proporcionan financiación, asistencia técnica, insumos y el productor les garantiza la entrega de la leche en las cantidades y calidades que aquellas necesitan. Mientras dura el contrato el control sobre los procesos de trabajos es alto, pero lo interesante de este ejemplo es que generalmente después de uno o dos años los productores, incluso los campesinos, buscan mercados alternativos para el producto y logran desvincularse de

las transnacionales. De este modo, en el complejo leche aparece una alta rotación de los productores integrados (CODAI, 1982; Quintar, 1983). Por lo tanto, también planteamos que la articulación resultante permite cierta autonomía de los productores involucrados. En este caso esto es así, no porque haya bajo control del proceso productivo, sino por la posibilidad que tienen los ganaderos de rescindir el contrato. Esto está relacionado, por un lado, con la existencia de mercados regionales alternativos, pero, también, con el tipo de financiación que utilizan estas transnacionales que no desarrolla endeudamientos crónicos en los integrados.

La segunda forma de integración que establecimos es la más representativa de lo que en México se conoce como “agricultura de contrato”. Se presenta sobre todo para los casos de productos que se han desarrollado muy intensamente en los últimos años, por ejemplo frutas y legumbres, soja y la avicultura. En este caso, la producción bajo contrato se propone modernizar los procesos productivos agrarios. Por este motivo se tiende a seleccionar de entrada productores capitalistas que sean capaces de absorber los avances tecnológicos que los procesadores les imponen. Regionalmente son merca-

dos monopsónicos controlados por grandes firmas transnacionales (General Food, McCormick, entre otros) o grandes firmas nacionales (Herdez, Alimentos del Fuerte). Generalmente son complejos agroindustriales que actúan en espacios que van más allá de las fronteras nacionales, y donde los productores mexicanos cumplen un determinado papel dentro de las estrategias más globales de estos conglomerados.

Las modalidades específicas que asume la integración de los productores en estos tipos de complejos están dadas por la condición de empresa capitalista de aquellos, por la necesidad de modernizarse que el proceso les impone y por los resultados positivos en cuanto al dinamismo que las empresas agrarias van adquiriendo. De todos modos, los integradores imponen el qué, cómo, cuánto producir, aun cuando los mecanismos utilizados guarden formas aparentemente comerciales.

Un tercer tipo de integración se da a partir de dos situaciones: los productores que se articulan son mayoritariamente campesinos y se trata de productos tradicionales en el país (azúcar, tabaco, café). Generalmente funcionan con estructura de mercado monopsónicas, y entre los productores y los procesadores aparece una instancia con una

función mediadora, tanto en el plano económico como en el político. La integración se realiza por medios de mecanismos claramente subordinativos. Así, los agricultores deben cumplir con un programa laboral que se adecue a los criterios de los procesadores. La empresa integradora interviene directamente en los procesos productivos determinando qué insumos se usan, qué tipo de labores deben realizarse y marcando el calendario de entregas. Se modernizan las prácticas laborales de los campesinos, pero esto no redundará en un desarrollo global de las fuerzas productivas del sector. Los núcleos utilizan mecanismos de extracción del excedente campesino vía precios, vía dependencia financiera, de tal manera de recuperar lo máximo posible la acumulación que por otro lado se propicia. Margulis (1979) llama a este proceso “acumulación subordinada”, así aportes externos a la unidad productiva, créditos, tecnologías, la preparan y la ponen al servicio de las necesidades de la valorización del capital. Como veremos más adelante algunos segmentos de los sectores campesinos integrados pueden aprovechar para sí mismos esta clase de integración. De este modo funcionalizan la integración y logran un proceso de acumulación.

Casi siempre las ET se ubican en la segunda fase de la transformación, evitando de este modo una relación directa con los sectores campesinos. El Estado o las uniones de productores quedan a cargo de la integración, cumpliendo de este modo un papel importante, logrando una organización capitalista de la producción, aun cuando esta esté en manos de ejidatarios o pequeños propietarios campesinos, y por otro lado una función política mediatizadora de los conflictos sociales. En segundo lugar, pareciera no ser indispensable para estas grandes empresas una modernización de los procesos productivos primarios. Si bien hubo algunos importantes adelantos técnicos para los cultivos mencionados, ellos no son comparables con los que se han dado en otros productos como las frutas y legumbres y soja. En estos, tercer tipo de complejos (café, caña, tabaco), las principales innovaciones tecnológicas se han producido en la etapa de transformación industrial.

LA SUBORDINACIÓN DEL CAMPESINADO AL CAPITAL AGROINDUSTRIAL

El debate sobre la naturaleza, funcionamiento y futuro del campesinado se ha extendido

al caso del moderno desarrollo agroindustrial. Así, para algunos autores son las medianas y grandes propiedades agrícolas las que se adaptan a los requerimientos necesarios para la utilización de insumos agroindustriales. Según este razonamiento, la pequeña producción es incapaz de invertir dentro del cuadro de tecnologías modernas y de soportar la competencia en momentos de bajas de precios o de cosechas (Arroyo, 1979). Por otro lado, se sostiene que el proceso de desaparición de las pequeñas explotaciones es inherente al desarrollo agroindustrial. Así, aunque las transnacionales se adapten a las legislaciones vigentes y a situaciones sociales diversas, seguirán manteniendo una misma línea de operaciones, la cual supone el rechazo y desplazamiento de las explotaciones campesinas (Feder, 1979). Así, tanto Arroyo como Feder plantean que la tendencia predominante del capital agroindustrial es relacionarse con productores medianos y grandes. El argumento principal, en ambos, parte de la necesidad de la agroindustria de modernizar las agriculturas y ese proceso no tiene viabilidad en las economías campesinas.

Sin embargo, para otros autores, este no es un argumento válido ya que el capital agroindustrial puede producir modificacio-

nes en las formas campesinas de producción para adaptarlas a sus necesidades. Estos últimos autores van más lejos aun y argumentan que en realidad el capital agroindustrial *necesita* de la presencia campesina, en tanto las explotaciones capitalistas para funcionar reclaman no solo la ganancia media sino también la renta de la tierra. De allí que se haya adoptado por integrar unidades campesinas “refuncionalizándolas”, es decir, introduciendo en ellas modificaciones (determinados procesos laborales, uso de tecnologías) para que se adecuen a las necesidades de valorización del capital (Gómez Olivier, 1979; Bartra, 1979).

El capital transnacional en el país se adaptó a las características agrarias vigentes, por un lado, una fuerte limitación legal sobre la tierra que le impide una forma de integración vertical directa (comprar o rentar tierra) y, por otro lado, una estructura agraria con fuerte predominio de unidades campesinas. De allí que para ciertas regiones del país y para ciertos cultivos, independientemente de las estrategias más globales de estas empresas, el capital agroindustrial tuvo que relacionarse con sectores campesinos. Como planteamos en el punto anterior, esa relación no es directa, sino que en la mayoría de los casos apare-

ce una empresa estatal o gremial que media entre el capital agroindustrial transnacional y los campesinos.

Planteamos en este trabajo que estos sectores se integran de manera subordinada a las empresas agroindustriales. Definimos la *subordinación* como un proceso social, por lo tanto contradictorio, con determinaciones mutuas, resultado por un lado de los intereses de rentabilidad de las empresas procesadoras, pero también de las negociaciones y luchas que los sectores campesinos realizan para modificar las condiciones de integración. En segundo lugar, supone una relación asimétrica, es decir, las empresas integradoras a partir de diferentes condiciones de existencia y funcionamiento (monopolio de los recursos, posición favorable en el mercado, capacidad de financiación y dominación) pueden ubicar bajo su control, y sacar provecho de esta situación, a las unidades integradas.

Así planteada la subordinación, las vinculaciones que la operacionalizan quedan sujetas al mismo supuesto básico. En todos los casos los objetivos de las empresas integradoras se inscriben en esta necesidad de control de las unidades y de captación de excedentes. Podemos puntualizar una serie de vinculaciones

tales como las financieras, las comerciales, técnicas, gerenciales y administrativas. Este proceso no debe ser visto como una relación “funcional” en la que los productores actúan en términos de cómo servir mejor a la acumulación capitalista, sino como un proceso contradictorio donde el comportamiento social y político del sector afectado también condiciona las modalidades que esta relación asume, lo cual aparece claramente en el análisis histórico de la formación de estos complejos. Por ejemplo, los cambios ocurridos en el año 1972 en la caña y en el tabaco (Giarracca, 1983; Paré, 1982).

La subordinación supone, por un lado, las necesidades de las empresas productoras de abastecerse de ciertas materias primas que estos campesinos cultivan y, por el otro, el condicionamiento que tienen estos productores para adoptar la conducta económica que sus integradores les imponen a través del contrato. Establecimos que el soporte de esta relación social lo constituye *el contrato*. Este puede ser oral o escrito; el último formaliza aún más la relación y generalmente interviene además de las partes alguna dependencia oficial para la suscripción del mismo. El contrato refleja las condiciones logradas por las partes en el proceso de subordinación, teniendo

siempre presente el carácter “asimétrico” que esta relación presenta.

MECANISMO DE SUBORDINACIÓN

El crédito es el mecanismo de subordinación más importante; a través de él se financia parcial o totalmente la producción. Las funciones más importantes del crédito son seleccionar la parcela contratada, establecer especificaciones técnicas de las labores, marcar un calendario de labores, determinar la cantidad, calidad y uso de los insumos, determinar la cantidad de mano de obra a utilizar. Un nuevo elemento que introduce el crédito en las formas campesinas de producción es la utilización en cantidades importantes de mano de obra asalariada. Se usa en las tareas que rebasan la utilización de la mano de obra familiar. El contratante es el campesino con fondos que le provee el crédito, y generalmente el integrado estipula las actividades precisas que esos asalariados deben realizar, y se deja librado al productor el cumplimiento del salario mínimo legal.

El crédito es otorgado siempre a muy baja tasa de interés y su devolución está condicionada a la entrega de la cosecha. Más que

representar un “crédito” en el sentido tradicional del término, esta forma de financiación agroindustrial tiene el sentido de un adelanto (en tabaco se llama “habilitación”), pues en todos los casos a través de la financiación la producción queda comprometida para un determinado receptor. Se establece una especie de “venta a futuro”, la cosecha queda prendada y no se puede hacer con ella más que entregarla a las empresas que la financiaron o a la empresa que el financiador estipuló. De esta forma, el crédito o financiación se convierte en un importante mecanismo de integración.

Existen dos situaciones generalmente asociadas a este proceso de subordinación de los productores campesinos al capital agroindustrial: la primera es la estructura de los mercados donde participan las ET o las grandes firmas nacionales, y la segunda es la resultante de la acción del Estado. Los complejos se caracterizan por un alto control de los mercados por parte de las empresas procesadoras e industrializadoras. Frente a mercados oligopsonicos o monopsonicos los campesinos no tienen la menor posibilidad de negociar, aun cuando los precios fijados por las empresas no cubran el costo de producción más la ganancia media. Esto es así porque los pequeños agricultores no cuentan con mercados

alternativos, y cuando los tienen, el carácter perecedero de su producción o el financiamiento previo que han recibido les impiden una libre elección. Lo que planteamos como elemento a tener en cuenta al analizar la subordinación de los sectores campesinos es que el contratante, el financiador, el planificador (aun cuando lo sea en forma indirecta) es además, en la mayoría de los casos, el “único” comprador posible de la producción.

La segunda situación que condiciona el proceso de subordinación campesina es la presencia del Estado. A pesar que las empresas privadas y el Estado no siempre buscan los mismos objetivos e incluso pueden existir enfrentamientos entre ellos, siempre parten de una identidad básica en la persecución de una mayor rentabilidad para el capital. En las ramas agroindustriales, el Estado interviene con acciones precisas por la importancia que los alimentos tienen en la reproducción de la fuerza de trabajo. En muchas ocasiones, además el Estado interviene con acciones de tipo mediador entre campesinos y empresas procesadoras. Por ejemplo, en regiones tradicionalmente conflictivas interviene en algún espacio del complejo. Así, encontramos a Inmecafé, Tabamex, la nacionalización de los ingenios en 1972, en general, aunque sea

en forma transitoria, la intervención estatal aplaca los conflictos, y los mecanismos de subordinación pueden seguir desarrollándose y perfeccionándose.

LOS CAMPESINOS TABACALEROS

La subordinación de los 26.000 campesinos a un complejo agroindustrial como el tabacalero tiene particular importancia. En efecto, se trata de un complejo que, en primer lugar, presenta un alto grado de integración vertical, además, un alto grado de transnacionalización en la segunda transformación el Estado tiene una fuerte presencia, y, por último, en la actividad tabacalera tradicionalmente se ha presentado un alto nivel de lucha social tanto entre los campesinos como dentro de los asalariados de Tabamex y de las empresas transformadoras.

El tabaco, desde la siembra en campo hasta la venta de los productos terminados, pasa por una serie de procesos de transformación técnica que supone actividades que son llevadas a cabo por distintos agentes intervinientes. El mayor número de unidades se encuentra a nivel de la producción primaria (25.284 campesinos en 1981), gran parte de las etapas

agroindustriales está en manos de la empresa paraestatal Tabamex. Esta, además, tiene a su cargo etapas productivas de campo (almácigos), la administración del financiamiento de la producción primaria, y el control general de todo el proceso productivo. Por último, tiene a su cargo “la compra” o acopio de todo el tabaco producido por estos productores. En la etapa manufacturera operan tres empresas, dos de las cuales controlan el 99 por ciento del mercado y están en manos de dos de las grandes transnacionales; ellas son La Moderna SA, filial de la British American Tobacco, y Cigarros La Tabacalera Mexicana SA (CI-GATAM), filial de la Philips Morris. Además actúan veinte pureras, y para la distribución en el mercado interno intervienen empresas distribuidoras o departamentos de las propias empresas manufactureras. El control del mercado externo de los tabacos claros lo tienen cuatro grandes y también transnacionalizadas exportadoras. Ellas son The Austin Company, Edwards Leaf Tobacco GF, Vaugham Tobacco Inc., de origen norteamericano, y Chuo Tobacco de origen japonés. La comercialización externa de los tabacos oscuros está en manos de una serie de exportadores y comisionistas.

Las unidades de producción y empresas dentro del complejo agroindustrial tabacale-

ro (CAT) entablan relaciones; ellas están determinadas por múltiples factores: los tipos de uso y destino finales de los tabacos, las características de los productores en cada región, el funcionamiento de Tabamex en ellas, las estrategias que asuman las transnacionales cigarreras y exportadoras, el peso relativo de las pureras. El conjunto de unidades productivas y empresas, por un lado, y las relaciones asumidas entre sí en torno al proceso de transformación de la materia, por otro, conforman el CAT. Son “núcleos” las transnacionales cigarreras y comercializadoras que operan en el país por lo tanto ejercen un significativo control sobre el complejo en su conjunto. Son capaces de garantizar la vigencia del proceso de reproducción global según sus propias determinaciones. Esto se verifica en el desarrollo que ha tenido en los últimos años la actividad tabacalera nacional, caracterizado por cambios ventajosos para estas empresas, por ejemplo, la concentración y la transnacionalización de la industria, la imposición del “gusto” por el cigarro rubio, retracción de las regiones productoras de tabacos oscuros, el desempeño real de la paraestatal que en última instancia cumple “un servicio” para esas empresas y el control sobre la lucha social de los sectores campesinos.

La empresa paraestatal Tabamex fue creada en 1972 como consecuencia de un proceso social de organización y movilización que llevaron a cabo los tabacaleros a fines de los sesentas en las regiones de Nayarit y Norte de Veracruz. Este levantamiento se produjo a raíz de la creciente explotación y dominación que llevaron a cabo los departamentos de campo de las cigarreras. Tabamex desde entonces monopoliza el acopio y agroindustrialización del tabaco, administra la financiación que entrega el capital cigarrero para que se realicen los procesos de producción en las cantidades y calidades que estas empresas necesitan. Además, la paraestatal mediatiza las relaciones entre las ET y los productores, desplazando el conflicto entre ET y productores que se dio antes de 1972 a una relación mucho más compleja, pero también mucho más controlada entre los campesinos y ella misma.

Tabamex desde su creación organiza las regiones productoras e impone distintas modalidades de contratación¹. Algunas regiones reciben la financiación completa de la producción (habilitación) y otras solo reciben algu-

nos insumos adelantados. En las primeras, el “crédito” o “habilitación” se presenta como el principal mecanismo de subordinación de los productores al resto del complejo. La empresa integradora es Tabamex, pero el capital adelantado, sin interés, proviene de las cigarreras (industrializadoras y comercializadoras) y para los tabacos que no son insumos de aquellas Tabamex consigue créditos bancarios.

A través de la habilitación se determina: 1) la extensión de las áreas de cultivo, 2) el número de tareas u operaciones a realizar, 3) la cantidad de fuerza de trabajo que se empleará en el proceso, 4) la cantidad y calidad de los insumos. La cuota de habilitación se establece por medio de una negociación entre la paraestatal y los representantes campesinos. Los productores organizados en entidades gremiales fuertes y con poder contestatario son los que logran habilitaciones más altas. Con la cuota de habilitación se establece un control estricto sobre las decisiones de los ejidatarios. La función concreta del funcionario de Tabamex es recomendar, vigilar y aprobar el uso adecuado de los insumos y la correcta labor que el campesino o el asalariado desarrollan. La entrega periódica del dinero está condicionada al cumplimiento de lo estipulado.

1 En el Cuadro N° 1 se presentan las regiones productoras con la información más importante de cada una de ellas.

Cuadro N° 1

Número de productores, tipo de tabaco y destino de los mismos por regiones productoras y zonas administrativas (1980-1981)

Zona y región	Estado	Productores	Tipos de tabaco	Uso
Zona Nayarit				
Chile - Región Nayarit	Jalisco y Nayarit	15.804	Virginia Burley	Insumo de Cigarreras Exportación
Total (Zona Nayarit)		15.804		
Zona Golfo				
Región Norte de Veracruz	Veracruz	2.187	Huasteco, Tlapacoyan, Habano	Insumo de Cigarreras Insumo de Pureras Exportación
Región San Andrés Tuxtla	Veracruz	685	Negro San Andrés - Sumatra	Insumo de Pureras Exportación
Región Córdoba	Veracruz	2.000	Córdoba	Exportación
Región Tuxtepec	Oaxaca	1.975	Jaltepec, TW	Insumo de Pureras Exportación
Región Zimatlán	Oaxaca	3.300	Aromático	Insumo de Cigarreras
Región Huixtla	Chiapas	417	Burley Huixtla	Insumo de Cigarreras Exportación
Región Simojovel	Chiapas	400	Simojovel	Exportación
Total (Zona Golfo)		10.964		

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TABAMEX.

Las regiones no habilitadas de todos modos reciben algunos insumos adelantados y la paraestatal controla que se haya cumplido lo

establecido en el contrato en el momento de entregar la producción. Allí es cuando Tabamex y sus clientes seleccionan la producción

y se llegan a desechar porcentajes importantes de la misma. Por este motivo los campesinos de estas regiones, aun cuando no reciben las visitas de los auxiliares de campo de Tabamex para controlar el proceso de producción, igualmente siguen las indicaciones que la empresa les hace al comienzo de la temporada. En estos casos la estructura monopsónica del mercado es la situación que determina el proceso de subordinación.

A nuestro juicio, estas diferentes formas de organizar la producción y modalidades de contratación están relacionadas a dos factores: en primer lugar, la importancia que el tipo de tabaco cultivado en cada región tiene para las transnacionales como insumos, o el éxito que la propia Tabamex logra en la comercialización del mismo, y, en segundo lugar, el papel que hayan desempeñado las regiones en el movimiento tabacalero de los sesentas y la capacidad organizativa y contestataria actual. De este modo, las regiones que producen insumos de las transnacionales o que producen tabacos fácilmente colocables en los mercados internacionales o nacional, están habilitadas (reciben financiación) y Tabamex funciona eficientemente en ellas.

En segundo lugar, tenemos regiones que producen tabacos que no son insumos de las ET,

que son difíciles de colocar en los mercados internacionales (algunos tabacos oscuros) y además no presentan conflictos sociales de magnitud importante. Estas regiones, por lo tanto, no reciben la habilitación; solo se les adelanta algunos insumos y se les asegura la compra de la producción (Córdoba, Simojovel).

Existe un tercer grupo de regiones que producen tabacos que no son insumos de las ET, que a Tabamex tampoco le interesa comercialmente mantenerlas abiertas como productoras, pero como son muy activas gremialmente la paraestatal las ha habilitado desde su creación. El funcionamiento de Tabamex no es eficiente (desalienta la producción), y además ha iniciado en ellas un acelerado plan de reducción del área sembrada, aprovechando que en estos últimos tiempos la organización independiente de los campesinos parece haber fracasado (Norte de Veracruz y Tuxtepec).

Existe una región que por sus características escapa a estos tres grupos de regiones presentadas. Es Zimatlán, en Oaxaca, productora de un importante insumo de las ET (el tipo Aromático) y además presenta un importante grado de movilización social, sin embargo no está habilitada y los campesinos producen en condiciones de extrema pobreza. Como explicaremos más adelante, tanto las ET como la

paraestatal se basaron en esas condiciones de pobreza para organizar la producción, sin embargo, sobre la base de lo que planteamos en este trabajo, en Zimatlán pueden ocurrir en el futuro dos cosas: 1) que mediante la “cooptación” de los líderes o la represión se aplaque el movimiento campesino y se siga con la modalidad de contratación actual o 2) que a través de la organización independiente de los campesinos se logre mejorar las condiciones del contrato agroindustrial.

Estas diferentes modalidades que asume el contrato en las regiones están también relacionadas con las diferenciaciones internas que el campesinado como clase social presenta. Si bien muchos autores coinciden en que el capital agroindustrial busca integrar campesinos medios, como vemos con el tabaco (y también en otros cultivos) muchas veces tiene que integrar campesinos pobres que solo cuentan con un trozo de tierra (y no siempre) y su fuerza de trabajo. En estos casos el elemento más importante del contrato es esa fuerza de trabajo campesina.

En el ejemplo que nos ocupa se presentan regiones con mayoría de campesinos pobres (Zimatlán, Simojovel). Allí se organizó la producción de forma de aprovechar el trabajo campesino, en tanto la empresa adelanta insu-

mos y medios de producción (arados, fumigadoras). No están habilitados; sin embargo estos productores reciben indicaciones precisas sobre los procesos laborales (de otro modo no se les recibe el tabaco), y al terminar el ciclo reciben un ingreso (“alcance”) que no cubre la reproducción de la fuerza de trabajo invertida por el productor y su familia. Estos campesinos complementan el ingreso tabacalero con trabajos asalariados fuera de la explotación.

En estos casos, la modalidad asumida por el contrato está fuertemente relacionada con el tipo de campesino por integrar. Como se trata de estratos pobres (de infrasubsistencia) la subordinación, y por lo tanto el contrato, se basan en la explotación directa de la fuerza de trabajo de la familia campesina, lo que a varios autores ha llevado a plantear que estos productores son en realidad “proletarios disfrazados” o “proletarios a domicilio”. Como plantea Armando Bartra (1979), en estos casos se refuncionaliza el trabajo campesino y se lo pone al servicio del capital agroindustrial.

Por otro lado, cuando los integrados pertenecen a los estratos medios y acomodados del campesinado, el contrato asume otras modalidades y la subordinación tiene otras consecuencias. El contrato se basa en la unidad de producción, es decir, supone que el productor

además de la tierra cuenta con otros medios de producción. Habilita una superficie que difícilmente el cosechero podría cultivarla sin recurrir a mano de obra externa a la explotación, y por último hace recaer la contratación de los asalariados en el propio campesino.

Las consecuencias del proceso de subordinación en estos distintos estratos campesinos tendrán sus propias particularidades. Así como las modalidades que asume el contrato están condicionadas por esta característica inherente al campesinado que es la diferenciación social, el proceso de subordinación la acentúa y la acelera.

CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE SUBORDINACIÓN

Algunos autores enmarcan la subordinación del campesinado al capital agroindustrial en el esquema de la “refuncionalización”. En general, esta supone que el capital introduce los cambios que necesita para su proceso de valoración en los procesos laborales de la forma campesina de producción, logrando que la unidad siga mostrando el aspecto formal de su autonomía. Según esta argumentación, el capital agrario opta por esta forma de organización de

la producción, porque la plena proletarización haría rígida y permanente la parte variable de los costos, mientras la producción agrícola tiene una distribución desigual en el tiempo de sus requerimientos de trabajo. Es decir que, al capital le conviene más que el ingreso campesino siga dependiendo de la producción, que asumir el costo de una fuerza de trabajo proletarizada que no puede utilizar regularmente (Bartra, 1979).

Tanto en el caso del tabaco, como en otros estudios de complejos consultados, aparecen ciertos estratos campesinos que, más que integrados, “trabajan” para las procesadoras. Población que ocupa tierra en la que ciertos cultivos que les interesan a determinadas empresas se dan, se les suministra insumos, fertilizantes, los medios de trabajo necesarios, y bajo la dirección técnica de los integradores se pone en marcha el proceso productivo, aprovechando el trabajo de la familia campesina y la tierra que poseen. Al finalizar el ciclo productivo, estos campesinos reciben un ingreso igual o menor al que hubiesen recibido asalariados realizando esa actividad. Como decíamos anteriormente, en estos casos el proceso de subordinación se basa en la explotación de la fuerza de trabajo campesina y lo que se consigue con la subordinación es un reforzamiento de esas condiciones iniciales de pobreza. En efecto,

ante la posibilidad de cultivar para la venta generalmente esa población que antes de la aparición del capital agroindustrial producía para la subsistencia, al dedicar la tierra al tabaco o a cualquier otro cultivo agroindustrial, debe proveerse de sus medios de subsistencia con un ingreso que rara vez le alcanza para tal fin.

En un trabajo de campo realizado durante los años 1980-1981² se concluyó que los 3.300 campesinos tabacaleros que producían tabaco aromático en los valles centrales de Oaxaca pertenecían al estrato más pobre del campesinado mexicano. En esa región, Zimatlán, la totalidad de los productores entrevistados solo producían tabaco para el mercado y complementaban sus ingresos con trabajos como asalariados fuera de la explotación. El tiempo anual de trabajo fuera de la unidad se relacionaba con la composición familiar. Aquellos productores que tenían hijos pequeños que no los podían reemplazar en las labores, solo salían a trabajar entre los dos ciclos (en la región el tabaco es bianual). Por otro lado, los campesinos con hijos grandes que los reemplazaban en las labores culturales intermedias entre la siembra y la cosecha salían

como asalariados más frecuentemente y durante períodos más largos.

Zimatlán es una de las regiones que no recibe financiación, al campesino se le suministran solo los insumos necesarios para comenzar el proceso productivo, al entregar la producción se le descuenta los valores de los mismos. Si bien los líderes gremiales tienen estimaciones de los costos de producción, no existen registros que puedan permitir una aproximación al ingreso de estos campesinos. El trabajo sobre tabacaleros mencionado anteriormente recoge para la región las cifras más bajas de “alcances” por hectáreas. En efecto, los campesinos entrevistados de Zimatlán registraron los ingresos más bajos del total de la población tabacalera estudiada, cifra que en promedio estuvo en los \$4.000 por hectárea para 1981, mientras para el mismo año los productores nayaritas del Burley Sombra-Mata recibieron un alcance promedio de \$30.000 por hectárea. Estos datos, así como la condición de “semiproletarios” de estos campesinos, permitieron ubicarlos en el estrato más pobre de la población tabacalera entrevistada. Agreguemos que su situación no era mejor antes de la creación de Tabamex, pues ya las empresas cigarrerías, a partir de la apertura de la región en 1967, habían organizado la producción en base a esta situación de pobreza: atomización de la produc-

2 Los resultados de ese trabajo de campo se encuentran en Teubal y otros, 1982; y Giarracca, 1983.

ción y explotación de la fuerza de trabajo de la familia campesina. Lo que es importante señalar es que con la intervención del Estado esta situación no solo no se modifica sino que se acentúa. En esta región, así como en las otras dos que tampoco reciben financiación (Simojovel, Chis y Córdoba) predominan campesinos pobres y las condiciones y consecuencias de la subordinación pueden ser explicadas en el marco de la “refuncionalización” del campesinado. También Rama presenta para los cañeros lo que la autora llama “campesinos como asalariados de la fábrica de azúcar”, que ocupan nada menos que el 45 por ciento de la superficie cañera sembrada del país (Rama, 1980: 186). Tanto en el caso del tabaco como en el de la caña, características particulares de los procesos laborales han permitido que este estrato de productores pueda integrarse a estos sistemas agroindustriales (por ejemplo la posibilidad de aprovechar la mano de obra infantil y femenina). Es difícil encontrar este estrato de productores en otros sistemas agroindustriales donde los procesos laborales de los cultivos en cuestión están más tecnificados.

En los campesinos medios y acomodados la subordinación tiene otro tipo de consecuencias, ya que a partir del contrato agroindustrial algunos pueden iniciar un proceso de acumulación y reproducción ampliada.

En el caso del tabaco, las diferentes modalidades de contratación aunado a ciertas condiciones iniciales favorables (poseer tierra de buena calidad) permitieron, en el periodo que va desde la creación de Tabamex hasta la actualidad, el surgimiento de un estrato de productores excedentarios. Este estrato es reducido y aún poco representativo del tabacalero en general, pero está presente en la mayoría de las regiones productoras (no aparece en Zimatlán y Simojovel). Son productores que se encuentran en expansión en sentido empresarial, diversificando la explotación en algunas regiones (Norte de Veracruz), invirtiendo en capital fijo en otras (Nayarit), pero en casi todos los casos dedicándose a actividades como el transporte, el comercio minorista, la cantina del ejido.

En la región tabacalera que denominamos Norte de Veracruz (Papantla, Platón Sánchez y Álamo) estos productores pueden ubicarse por las siguientes características: tienen entre 5 y 12 ha de superficie total, y en todos los casos han logrado ser habilitados con 4 ha (la máxima habilitación) de tabaco. Sacan alcances mayores a los \$30.000 por hectárea y lograron un considerable nivel de diversificación (Cuadros N° 3, 4 y 5). Por otro lado, la Región de San Andrés Tuxtla permite seguir la evolución que estos tabacaleros han tenido, ya que al habilitarse la región la

mayoría de ellos eran ejidatarios de subsistencia. Actualmente es una de las regiones prósperas y, si bien la mayoría de los cosecheros pertenece a los estratos medios, se encuentra un pequeño grupo de productores que se destaca por el nivel económico alcanzado. En las entrevistas aparece este hecho muy relacionado con el tiempo que lleva como habilitado de Tabamex. Así, la totalidad de los productores entrevistados que pertenecen a este estrato comenzó a producir con la apertura de Tabamex en la zona. Obtienen alcances por encima de la media regional (\$20.573,63; Cuadro N° 2), comenzaron a diversificar la producción y, en algunos casos, hasta han dejado temporalmente la gestión de la explotación en manos de hijos o “administradores”, para dedicarse a algún negocio dentro del ejido. Si bien estos tabacaleros son minoritarios en la región y en la población tabacalera nacional, ejemplifican cómo, a través de un buen contrato agroindustrial, algunos campesinos que combinan este hecho con alguna otra buena condición, logran diferenciarse del resto del sector, permitiendo que la integración al complejo valore los recursos detentados. En general, siguen utilizando mano de obra familiar, aun cuando lo decisivo es que comienzan a utilizar mano de obra asalariada en forma regular.

Cuadro N° 2

Alcance promedio por hectárea y por kilogramo de tabaco, por tipos de tabaco y regiones (1979-1980)

Tipo de tabaco por regiones	Alcance por ha (\$)	Alcance por kg (\$)
Nayarit		
Virginia Sarta Sol	11.309,79	6,64
Burley Sarta Sol	7.951,76	5,76
Burley Semi Sombra	11.079,56	7,36
Burley Sombra Mata	29.525,34	12,77
Veracruz		
R. Norte Huasteco	18.626,26	9,27
Tlapacoyan	12.332,15	5,87
Habano	17.942,43	13,96
R. San Andrés Tuxtla		
Negro San Andrés	20.573,63	15,24
Oaxaca		
Valle Nacional	12.101,51	—
Chiapas		
Burley Huixtla	7.803,57	5,18

Fuente: Elaboración propia con base en datos de TABAMEX.

Si bien en este trabajo como intento de explicación del surgimiento de este estrato campesino, jerarquizamos la modalidad que asume el

contrato agroindustrial y la capacidad de renegociación del mismo, debemos tener presente otros factores tanto de tipo económico como también político.

Para el caso del tabaco, en ciertas regiones los dirigentes campesinos muy activos en años pasados, son en la actualidad pequeños empresarios agrícolas y esto lo han logrado, no solo por conseguir óptimas condiciones en el contrato, sino por recibir ayudas extraordinarias (préstamos especiales, doble cupo de producción) de parte de Tabamex. Luisa Paré ha realizado interesantes análisis de los mecanismos políticos que influyen en la posición que a través del tiempo fue adquiriendo el campesinado cañero (Paré, 1982).

Tal vez el estrato más representativo del campesinado tabacalero es el formado por productores medios, para los cuales el contrato agroindustrial representa la posibilidad de obtener ingresos que cubren la reproducción simple de la explotación. En este estrato, el ingreso tabacalero cubre la reproducción de la familia campesina, tanto en el ciclo productivo como en el improductivo. Este hecho es de especial importancia, ya que diferencia al tabaco de otros cultivos campesinos no agroindustriales, y, a nuestro juicio, se presenta, pues las empresas procesadoras quieren asegurarse ciclo tras ciclo el uso de esas tierras que son las más aptas para el cultivo.

Cuadro N° 3

Superficie total de la explotación y alcance por hectárea en la región norte de Veracruz (1979-1980)

Superficie (ha)	Alcance por ha (%)		
	Hasta \$16.300	\$16.301 a \$30.000	\$30.000 y más
2,5 a 5	100	45	—
5,1 a 8	—	45	10
8,1 a 12	—	10	90
Total	100 (31)	100 (9)	100 (3)

Fuente: Entrevistas a productores tabacaleros, 1981.

Este tipo de campesino medio corresponde a los productores típicos de Nayarit y San Andrés Tuxtla. La primera región es productora del principal insumo de las cigarrerías transnacionales y la segunda produce un tipo de tabaco que Tabamex comercializa con mucho éxito. A los estratos de campesinos medios los ubicamos también en las regiones Norte de Veracruz y Tuxtepec (Oax). Son poco representativos de la región Córdoba, y están definitivamente ausentes en Zimatlán y Simojovel.

Es un estrato inestable y tiende a generar en su interior contradicciones que producen diferenciación. Por ejemplo, en la actividad tabacalera este fue un sector muy afectado con la

política de reducción de áreas sembradas que planificó Tabamex en algunas regiones (Tuxtepec y Norte de Veracruz). Con disminuciones del 39 al 50 por ciento del área cultivada, cantidades importantes de campesinos pertenecientes a este estrato volvieron a la producción de maíz y frijol y tuvieron que salir a trabajar fuera de la explotación para completar sus ingresos, lo cual los acerca a los estratos más pobres dentro del campesinado. Por otro lado, también es cierto que, en Nayarit o San Andrés Tuxtla, de este estrato medio han surgido algunos cosecheros que han logrado funcionalizar la integración y convertirse en excedentarios.

Cuadro N° 4

Superficie con tabaco y alcance por hectárea en la región norte de Veracruz (1979-1980)

Superficie (ha)	Alcance por ha (%)			
	Nada	Hasta \$16.300	\$16.301 a \$30.000	Más de \$30.001
0 a 2	100	90	50	—
2,1 a 3	—	10	—	—
3,1 a 4	—	—	50	100
Total	100 (3)	100 (28)	100 (9)	100 (3)

Fuente: Entrevistas a productores tabacaleros, 1981.

Cuadro N° 5

Grado de diversificación de la producción y alcance por hectárea en la región norte de Veracruz (1979-1980)

Diversificación	Alcance por ha (%)	
	Nada a \$16.300	\$16.301 a \$55.000
Tabaco, maíz y frijol para el consumo	65	—
Tabaco, maíz y frijol para el mercado	15	33
Tabaco y otros (cítricos, otros frutales)	20	77
Total	100 (31)	100 (12)

Fuente: Entrevistas a productores tabacaleros, 1981.

En síntesis, dentro de la población tabacalera del país se observa una primera e importante diferenciación interna que aparece muy relacionada a las regiones productoras y a las modalidades que el contrato asume en cada una de ellas. De este modo pueden establecerse regiones prósperas (Nayarit, San Andrés Tuxtla) y regiones pobres (Zimatlán, Simojovel). Pero, además, en algunas regiones se distinguen distintos tipos de productores, los que se van diferenciando por condiciones particulares del contrato, por el aprovechamiento que hagan de este, por las relaciones establecidas con Tabamex.

En general, en los estudios de complejos que subordinan campesinos, estas diferenciaciones están presentes (caña, cacao, café).

En este proceso de subordinación del campesinado al capital agroindustrial, algunos se convertirán en “proletarios disfrazados” de las empresas procesadoras, otros pocos emprenderán un proceso de acumulación de capital, y los estratos medios se reproducirán en las condiciones que la dinámica del cultivo en cuestión y sus propias luchas sociales y políticas determinen.

BIBLIOGRAFÍA

- Arroyo, G. 1979 “Firmas transnacionales y agroindustriales, reforma agraria y desarrollo rural” en *El Desarrollo Agroindustrial y la Economía Internacional. Documento de Trabajo para el Desarrollo Agroindustrial* (México DF: SARH-CODAI) N° 1.
- Barkin, D. y Suárez, B. 1980 *El complejo de granos en México* (México DF: Centro de Eco-Desarrollo-ILET).
- Bartra, A. 1979 *La explotación del trabajo campesino por el capital* (México DF: Macehuel).
- Castillo, D. 1982 “El desarrollo agroindustrial y los sistemas alimentarios: cacao” en *Desarrollo Técnico para el Desarrollo Agroindustrial* (México DF: SARH-CODAI) N° 27.
- CODAI 1982 “El desarrollo agroindustrial y los sistemas alimentarios básicos: leche” en *Desarrollo Técnico para el Desarrollo Agroindustrial* (México DF: SARH-CODAI) N° 8.
- Domike, A. y Rodríguez, G. G. 1976 *Agroindustrias en México, estructuras de los sistemas de y oportunidades para las empresas campesinas* (México DF: CIDE, Proyecto FAO/PNUD/SRA) mimeo.
- Feder, E. 1979 *El imperialismo fresa, una investigación sobre los mecanismos de la dependencia en la agricultura mexicana* (México DF: Campesina).
- Giarracca, N. 1983 “La subordinación del campesinado a los complejos agroindustriales. El tabaco en México”, tesis para obtener el grado de Maestría en Sociología (México DF: UNAM).
- Gómez Cruz, M. 1980 “Las transnacionales en la industria alimentaria y la agricultura mexicana” en *Textual. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales* (México DF: Universidad de Chapingo) N° 4.

- Gómez Olivier, L. 1979 "Las agroindustrias y la distribución del excedente económico en la economía campesina" en *El Desarrollo Agroindustrial. Documento de Trabajo para el Desarrollo Agroindustrial y la Economía Campesina* (México DF: SARH-CODAI) N° 2.
- Jáuregui, J. et al. 1980 *Tabamex, un caso de integración vertical en la agricultura* (México DF: CIDER / Nueva Imagen).
- Lenin, V. I. 1977 *El desarrollo del capitalismo en Rusia* (México DF: Cultura Popular).
- Margulis, M. 1979 *Contradicciones en la estructura agraria y transferencia de valor* (México DF: Jornadas 90 / El Colegio de México).
- Paré, L. 1982 "Mecanismos económicos y políticos de subordinación de la tierra y del trabajo campesino al capital en la zona de abastecimiento del ingenio La Margarita" en *Cómo le dieron caña a los cañeros* (México DF: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales) documento de circulación interna.
- Quintar, A. 1983 "Las empresas transnacionales en la agroindustria de lácteos: el caso de la compañía Nestlé en México", tesis de Maestría en Sociología (México DF: UNAM).
- Rama, R. 1980 "Transnacionales. Estado y acumulación agrícola. La caña de azúcar en México", tesis para obtener el grado de Maestría en Economía (México DF: UNAM).
- Rama, R. y Rello, F. 1978 *La internacionalización de la agricultura mexicana* (México DF: UNAM, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía) mimeo.
- Rama, R. y Vigorito, R. 1978 *Transnacionales en América Latina. El complejo frutas y legumbres en México* (México DF: ILET / Nueva Imagen).
- Scott, C. D. 1983 "Transnational Corporations and Asymmetries in the Latin American food system", ponencia para el Congreso de Las Américas y la Nueva División Internacional del Trabajo (Florida: University of Florida) mimeo.
- Sorj, B. 1980 *Estado o clases sociais na agricultura brasileira* (Río de Janeiro: Zahar).
- Teubal, M. et al. 1982 *El desarrollo agroindustrial y los sistemas no alimentarios. Tabaco* (México DF: SARH-CODAI) documento técnico para el desarrollo agroindustrial.
- Trajtenberg, R. 1977 *Un enfoque sectorial para el estudio de la penetración de las empresas transnacionales en América Latina* (México DF: ILET, DEE/D).

Vigorito, R. 1979 “Criterios metodológicos para el estudio de los complejos agroindustriales” en *El desarrollo agroindustrial y la economía internacional. Documento de Trabajo para el Desarrollo Agroindustrial* (México DF: SARH-CODAI) N° 1.

CAMPESINOS Y AGROINDUSTRIAS EN LOS TIEMPOS DEL “AJUSTE”

(ALGUNAS REFLEXIONES PARA PENSAR LA RELACIÓN, CON
ESPECIAL REFERENCIA A MÉXICO Y LA ARGENTINA)* **

OBJETIVOS

Este trabajo contiene reflexiones sobre los cambios de las condiciones macro-estructurales para la integración de los estratos de pequeños productores agrícolas a la expansión agroindustrial. Estas transformaciones se han ido manifestando desde comienzos de los ochenta

y se han profundizado desde entonces con la aplicación de políticas económicas efectuada por los gobiernos nacionales bajo la estricta supervisión de los organismos financieros internacionales. Las políticas de ajuste en América Latina se aplican en un contexto internacional caracterizado por la globalización de las relaciones de producción, distribución y consumo; la globalización de las finanzas y del comercio en valores de bolsa; tendencias a las regionalizaciones en torno a las grandes potencias; cambios en la división internacional del trabajo; grandes movimientos migratorios de Sur a Norte y un medio ambiente competitivo que lo acelera todo (Cox, 1992).

Algunas décadas atrás no existían mayores dudas acerca del papel dinámico del Estado en los procesos de incorporación de los sectores campesinos, a los procesos económicos nacionales. Los debates sobre el desarrollo agrario, y en particular sobre la capacidad de

* Giarracca, N. 1993 “Campesinos y agroindustrias en los tiempos del ‘ajuste’”. (Algunas reflexiones para pensar la relación, con especial referencia a México y la Argentina.)” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 114-115.

** Este trabajo es la versión en castellano, con algunas modificaciones, de la comunicación presentada al seminario “New forms of Agroindustrial Modernization and Globalization. Impacts on Rural Development in the Third World”, que se realizó en La Haya, Holanda, en diciembre de 1992.

“modernización” e integración de los sectores campesinos, incluían cuestiones tales como el origen del financiamiento; los intercambios desiguales entre sectores capitalistas y campesinos; la función del capital privado y, nunca faltaba, el papel que se le asignaba al Estado. Desde las reformas agrarias hasta paquetes de leyes que regulaban el desempeño agrícola, se había dado una amplia gama de intervenciones estatales en las agriculturas latinoamericanas.

La intervención estatal se visualizaba como una necesidad en tanto se daba una dualidad agraria estructural difícil de superar sin dicha intervención. Se fundamentaba también en cierta incapacidad de los sectores industriales para absorber el posible excedente de mano de obra agraria y se buscaba, con la intervención, una modernización que permitiera la persistencia de vastos sectores poblacionales en el campo; estos problemas, como otros relacionados con la búsqueda de legitimidad política, inducían respuestas fuertes de los Estados nacionales y hasta pactos de tipo continentales (por ejemplo la Alianza para el Progreso).

A fines de los sesenta, cuando comienzan a expandirse las relaciones agroindustriales con fuerte predominio del capital transnacional, la discusión giró sobre las posibilidades de los campesinados para integrarse a dicha expan-

sión. El crecimiento de las ramas agroalimentarias y agroindustriales, en general, modificaron sustancialmente las estructuras productivas y sociales agrarias de la mayoría de los países. Hubo un importante número de proyectos financiados por organismos internacionales (Banco Mundial, BID, AID) que apoyaban la integración de regiones y de sectores de bajo desarrollo a la expansión agroindustrial. En todos ellos, tanto la intervención de estos organismos como la del Estado jugaron papeles decisivos, se hablaba de proyectos “tripartitos” cuando la acción incluía a los tres actores: empresas agroindustriales, Estado y campesinos.

Desde la crisis de 1982 en casi todo el continente han menguado los montos de recursos destinados a los programas sectoriales de desarrollo y los nuevos créditos provenientes de los organismos internacionales comenzaban a ser otorgados condicionados a severas políticas de ajuste. En este nuevo marco de política macroestructural, el Estado retira paulatinamente los apoyos imprescindibles para mantener la “integración” de las agriculturas campesinas a la expansión agroindustrial.

Los términos del debate cambian: las nuevas condiciones generales de producción agroindustrial (incluyendo las tecnológicas, financieras y, fundamentalmente, las institu-

cionales) son desfavorables para la integración de los sectores campesinos. El problema ya no reside solo en la naturaleza y el grado de *subordinación* al capital agroindustrial de estos sectores, o la *ideología* que subyace al “contrato agroindustrial” (Clapp, 1988), sino que la situación actual habilita un debate que, sin dejar de lado la naturaleza de esta relación, debería centrarse en otras cuestiones. Las más relevantes son: quién o quiénes sustituyen el papel regulador del Estado; qué capacidad de negociación pueden tener las organizaciones existentes de productores (uniones, cooperativas, etcétera) frente a los procesadores; qué posibilidades tienen hoy los campesinos para construir nuevas organizaciones o mantener las propias; cómo pueden participar los campesinos, sin reglas preexistentes, en mercados oligopsónicos o monopsónicos. En definitiva, qué mecanismos sociales podrían neutralizar los crecientes procesos de *exclusión* de los mercados, a los que están expuestos la mayoría de los sectores subalternos dentro del nuevo modelo de acumulación.

La bibliografía reciente trata los procesos macroeconómicos del ajuste, las transformaciones que se presentan en los niveles de los mercados, de las áreas productivas, en los espacios de concertación (Garramón, 1988);

algunas informaciones recientes dan cuenta sobre el poco interés del capital transnacional agroindustrial en América Latina como zona de inversión, pero poco se conoce aún sobre las transformaciones que las nuevas condiciones macroestructurales pueden acarrear en las relaciones entre agroindustrias y pequeña producción.

Tal vez sea demasiado pronto para registrar tales cambios, por eso este trabajo propone un ejercicio teórico. Consiste en analizar las condiciones macroestructurales de la expansión agroindustrial con integración de la pequeña propiedad que se dieron en otros momentos y plantear los cambios actuales que modifican estas condiciones.

Una primera revisión a las actuales condiciones macroestructurales, sobre todo el retiro del Estado (con sus funciones reguladoras, financiadoras) y su reemplazo por el mercado como principal asignador de recursos, tentaría a caracterizar la actualidad como un desarrollo agroindustrial de tipo “kautskyano”, es decir, un proceso en el que se concentra tierra y capital, donde la gran industria capitalista domina y la pequeña agricultura tiende a desaparecer (Kautsky, 1977). Sin embargo, considero que los cambios en las condiciones generales moldean, limitan, pero no determinan los procesos

sociales. El accionar de los actores, la fuerza que adquieran sus organizaciones, los acontecimientos políticos, el éxito o fracaso de las actuales políticas, el consenso y legitimidad que logren o no, son factores tan importantes como las tendencias estructurales en los procesos de mediano plazo. Es más, algunos autores consideran que el retiro del Estado puede contribuir a una mayor autonomía de los sectores campesinos, al desaparecer las relaciones clientelísticas que aquel alentó (Cornelius, 1992).

Expondré las condiciones que facilitaron la integración de agricultores familiares a la expansión agroindustrial en México y en la Argentina y señalaré algunos cambios actuales que, a mi juicio, modifican las condiciones para que el modelo se reproduzca.

LAS CONDICIONES DE INTEGRACIÓN AGROINDUSTRIAL HASTA LOS OCHENTA

EL DEBATE SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA PEQUEÑA EXPLOTACIÓN

El proceso de “modernización” agrícola iniciado algunas décadas atrás acompañaba otro proceso más amplio de internacionalización de

capital y una nueva división internacional del trabajo. Dichos procesos se verificaban tanto en la producción como en la distribución de los productos agrícolas.

Muchos trabajos especifican que no todos los sectores campesinos latinoamericanos pudieron ingresar al proceso modernizador. De Janvry (1989) estimaba alrededor de 7 millones de explotaciones de tipo “subfamiliar” (es decir incapaz de reproducirse como unidad) dentro del conjunto de países de América Latina y recordaba que, precisamente, este sector “subfamiliar” era el que más había crecido en los últimos treinta años. Un trabajo de la CEPAL (1982) daba cuenta de casi un millón y medio de explotaciones campesinas en México en real o potencial proceso de desaparición; el programa de gobierno Sistema Alimentario Nacional recomendaba subsidiar con alimentos a esa franja de campesinos y excluirlos de los programas de apoyo tecnológico y financiero tendientes al aumento de la producción alimentaria.

Al mismo tiempo, se señalaba la existencia de estratos de explotaciones campesinas que habían logrado insertarse en procesos capitalistas, adoptando tecnologías y produciendo para mercados internos o externos con relativo éxito (Piñeiro, 1992). Pero sin duda, lo que más

llamaba la atención eran los procesos que conectaban a sectores campesinos con desarrolladas empresas agroindustriales —nacionales o transnacionales— en distintas variantes de “agricultura de contrato”.

Bernardo Sorj (1980) planteaba que la explotación del sector campesino ya no se daba a partir de su atraso, como era usual con los comerciantes tradicionales que los endeudaban, sino a partir de la introducción en los procesos productivos de prácticas modernas, de utilización de tecnologías avanzadas, por un control monopsónico del mercado por parte de la industria procesadora.

El punto de vista de los grandes financiadores (Banco Mundial, US AID) sostenía que este sistema de incorporación de los campesinos solucionaba el “problema campesino” transformando a ese productor de autosubsistencia, aislado en otro más productivo que se integraba a la economía de mercado. “El Estado, dotado con un coherente propósito, asesorado por las agencias internacionales debe emprender la forma de proveer infraestructura y un ambiente adecuado para las inversiones” (Citado por Clapp, 1989: 22).

La Harvard Business School y su representante más conocido, Ray Goldberg (1981), sostenían que la agricultura es un sistema in-

ternacional y los nuevos esquemas de desarrollo agroindustrial podían brindar a la pequeña producción las herramientas necesarias para desarrollarse e integrarse.

Desde una perspectiva distinta de análisis, los agraristas latinoamericanos afirmaban que el capital agroindustrial producía modificaciones en las pequeñas explotaciones de manera de “funcionalizarlas” a sus necesidades de expansión. Es decir mediante la financiación, se imponían determinados procesos laborales y tecnologías sin que necesariamente se estimulara la acumulación interna de la explotación. Mario Margulis (1979) denominaba a este proceso “acumulación subordinada”: aportes externos a la unidad —créditos y tecnologías— la preparaban y la ponían al servicio de la valorización del capital.

Un trabajo de Arthur Goldsmith (1985) analizaba doce casos de grandes proyectos agroindustriales con “agricultura de contrato” llevados a cabo en los setenta, ocho de los cuales estaban localizados en América Latina. Lo primero que advertía era que “hasta el presente la compra de insumos agrícolas a los pequeños productores puede contabilizarse en un pequeño porcentaje del 5% de las transacciones de *agrobusiness* con los agricultores del tercer mundo” (Goldsmith, 1985: 1127). El Estado, en

algunos casos, había iniciado el proyecto y “fue común que el gobierno donara tierra al proyecto y construyera o mejorara rutas, edificios o inversiones en infraestructura. Parecería que pocos proyectos hubieran podido ser llevados a cabo sin algunas de las asistencias públicas” (ibídem: 1128).

Gonzalo Arroyo y sus colaboradores en un trabajo de síntesis del período, afirmaban:

En forma creciente, los agricultores y parte del campesinado latinoamericano están articulados con las cadenas agroalimentarias. Es decir, que no solo se está reduciendo la importancia numérica de los que están aislados del mercado, sino incluso de los que operan independientemente en los mercados locales, sobre la base de recursos financieros propios y con autonomía empresarial. (Arroyo et al., 1985: 78)

Según ellos, las formas de integración eran seleccionadas por las empresas procesadoras de acuerdo con una serie de variables como el tipo de mercado de materias primas, la disponibilidad de recursos financieros o la dotación de *know-how* de cada una de las partes. Sin embargo, concluían, era cuantitativamente mucho más importante la integración con alguna forma de triangulación, con intervención del Es-

tado u otra instancia intermediadora. Y ponían como ejemplos los cultivos tropicales con fuerte incidencia de producción campesina como café o azúcar, así como parte de la producción de granos y oleaginosas (ibídem: 78).

ALGUNAS REFERENCIAS A LOS CASOS MEXICANO Y ARGENTINO

El Estado mexicano durante las presidencias de Echeverría y López Portillo entre 1970 y 1982, expandió sus funciones en la economía nacional y desarrolló una serie de acciones tendientes a la financiación general del sector agropecuario. Fueron elementos esenciales de este proceso tanto la renta lograda por las exportaciones petroleras como la solvencia de México —por esta misma situación— en los mercados de crédito internacionales. Si agregamos a esta política general las acciones empresariales directas en actividades agroindustriales podremos evaluar la enorme importancia estatal en las condiciones macrogenerales en que la agricultura de contrato para la pequeña propiedad se llevaba a cabo.

En un trabajo realizado sobre México durante los setenta (Giarracca, 1985) encontré varias formas de presencia estatal mediando

las relaciones entre empresas y agricultores. En el complejo granos esto se verificaba a través de BANRURAL, que entregaba los créditos, y de la CONASUPO —ambas empresas del Estado— que fijaba los precios de garantía. En los cultivos tropicales, en tanto, el Estado controlaba directamente algunas de las etapas de producción: Inmecafé y Tabamex (en café y tabaco respectivamente) controlaban la etapa de beneficio y comercialización, en tanto que en el azúcar, a partir del gran conflicto campesino de 1972, el Estado controlaba directamente la primera industrialización en los ingenios. Las empresas transnacionales, ubicadas en la segunda etapa de industrialización (desde las refresqueras como Coca-Cola hasta la British American Tobacco, pasando por Nestlé) raramente establecían algún tipo de contrato con los productores agropecuarios sin que mediaran claras regulaciones y sin que participara directamente el Estado. Debemos agregar que para gran parte del territorio cualquier otra forma de integración de la agricultura que se propusiera (por ejemplo la compra de tierra), se encontraba con la limitante del *sistema ejidal*. Para producir café, azúcar o tabaco en Veracruz había que obtener la materia prima en zonas donde el sistema ejidal estaba difundido: había que

encontrar formas de articulación con los ejidatarios campesinos.

En general, la participación estatal se había dado como culminación de procesos conflictivos entre campesinos y procesadores agroindustriales. El Estado demostraba la voluntad política de supervisar las negociaciones económicas entre actores con muy desigual capacidad de negociación-confrontación (campesinos y grandes procesadores), pero también garantizaba a las empresas un control más directo y eficaz de los conflictos que pudieran interrumpir el abastecimiento de la materia prima. Con la estatización de la comercialización tabacalera, por ejemplo, las movilizaciones de campesinos demandando mayores precios para la materia prima ya no se hacían en las puertas de la BAT o la Philip Morris (como en los cincuenta o sesenta), sino que los tabacaleros se dirigían al edificio central de Tabamex en Ciudad de México.

Barros Nock (1992) sostiene en su análisis sobre el complejo frutícola que

en 1972 el gobierno decidió intervenir directamente con la creación del Frutícola Industrial de Papaloapan S.A. (COFRINA). El gobierno proveía créditos a los pequeños productores y recibía la producción como pago, garantizan-

do de este modo demandas y ofertas regulares. (Nock, 1992: 12)

En tanto Feder (1977), sostenía que la CONAFRE y posteriormente la CONAFRUT (comisiones nacionales de la fresa y de la fruta respectivamente), establecidas bajo el control de la Secretaría de Agricultura, tuvieron como función conciliar los intereses de productores, comerciantes e industriales y que dada la naturaleza del régimen de propiedad de la tierra ello significaba proteger a los pequeños agricultores ejidatarios. En estos casos, otra vez, el Estado aparece mediando las relaciones entre pequeños productores y procesadores, en situaciones no exentas de conflictos.

En el caso de la Argentina, país sin una fuerte tradición indígena y con muy pocas comunidades campesinas, la mayoría de los grupos de pequeños productores que conocemos actualmente se han originado precisamente al calor de la expansión agroindustrial con apoyo de políticas públicas de fomento a dicha expansión. Estas actividades se desarrollaban dentro de un régimen social de acumulación que se basaba sobre la expansión del mercado interno en el proceso de sustitución de importaciones. Solo en zonas como la Puna (lindante con Bolivia) o en el Sur Andino, los campesinos pro-

vienen de las antiguas comunidades indígenas y han subsistido como productores de auto-subsistencia, como ganaderos trashumantes, criadores de ovinos o como jornaleros de los grandes establecimientos agroindustriales.

Los pequeños productores conectados con las actividades agroindustriales como la caña, el tabaco, el algodón, la yerba mate, el té, el arroz, son, o bien resultado de colonizaciones de inmigrantes europeos (los aldoneros, los yerbateros), o asentamientos de poblaciones que buscaron dentro del país regiones donde hubiese actividades en expansión (la caña de azúcar en Tucumán). Tsakoumagkos (1986) sostiene que la combinación “agroindustria-campesino” fue predominante en las regiones no-pampeanas, aun cuando —aclara— en ningún caso se trata de ofertas exclusivamente campesinas.

Algunas de estas agroindustrias, las productoras de bienes-salarios, han perdido dinamismo en los últimos veinte años y han registrado un lento crecimiento y una moderada modernización; es el caso de la caña de azúcar, de la yerba mate, del algodón. Otras han encontrado nuevos mercados (para sectores de medios o altos ingresos o para la exportación) y han logrado expandirse y modernizarse; son los casos del tabaco claro, del arroz, de la avicultura, el complejo oleaginoso, etcétera.

En el caso de la caña de azúcar en Tucumán (Región Noroeste del país), el proceso de articulación entre cañeros independientes e ingenios es un fenómeno que se profundiza en este siglo y es el resultado de una serie de políticas públicas del primer gobierno radical (1916-1930) y del primer gobierno peronista (1946-1955). En la historia de la industria azucarera argentina el Estado ha sido un actor privilegiado. Los estudios dan cuenta de una amplia gama de intervenciones que van desde la generación de políticas públicas que protegieron a la industria de la competencia internacional (tarifas aduaneras); la formación de la CO-NASA (Comisión Nacional Azucarera) creada en 1970 para nuclear a los ingenios con dificultades financieras o, directamente, la compra de ingenios. En síntesis, la actividad cañera, desde su surgimiento hasta hace muy poco, estuvo fuertemente regulada y la configuración actual de la actividad solo puede explicarse en función de los pasos que en distintas épocas fue dando el Estado nacional.

Durante muchos años la relación agricultores-ingenios se formalizó mediante un “contrato de compra-venta” de caña y en los últimos años previos a la desregulación total de la actividad (1991), se había establecido una normativa de comercialización que favoreció al agri-

cultor cañero y disparó un proceso de organización de cooperativas (Giarracca y Aparicio, 1991). En uno y otro sistema, la Dirección Nacional del Azúcar supervisaba las operaciones.

Las articulaciones entre agricultores y procesadoras en la actividad tabacalera datan de períodos más recientes. Comenzaba después de la segunda guerra mundial dentro de un proceso de sustitución del tabaco negro por variedades de tabaco claro destinado a la fabricación del cigarrillo rubio de estilo americano (*american blend*).

En el período que llega hasta 1967 se desarrollaron condiciones muy desventajosas para los agricultores: pocas empresas cigarreras para una oferta agrícola atomizada y donde predominaba el “acopiador”. Este personaje mediaba entre empresas y agricultores de tabaco y se quedaba con un porcentaje del precio que las empresas ofrecían a los tabacaleros. Eran, generalmente, dueños de los negocios de alimentos donde se proveían los agricultores y lograban mantener a los más pequeños, siempre endeudados. La situación cambió con la creación del Fondo Especial del Tabaco (FET) en 1967. El Fondo es un organismo estatal que funciona con los fondos provenientes de un impuesto directo al consumidor interno de cigarrillos. Mediante el FET se le

abona al agricultor un “sobreprecio” al abonado por las empresas cigarreras (que rondaba el 40% del precio total). El aporte más significativo del FET fue la financiación de un sistema cooperativo de exportación que posibilitó un posicionamiento diferente del agricultor tabacalero. Hubo un período de capitalización de la agricultura, generándose una burguesía agroindustrial dinámica, exportadora y la posibilidad de que la pequeña explotación fuese incluida en el proceso de expansión (Giarracca y Aparicio, 1991b). A partir de allí, la relación contractual con las empresas cigarreras o exportadores se modificó.

En la actividad avícola de la Región Noreste, los campesinos firman contratos muy estrictos con las transnacionales del sector. Se trata de una actividad que reúne una alta demanda de mano de obra, lo cual favorece a la explotación familiar, pero también el más alto riesgo de toda la cadena recae en estos productores. Es un “contrato de producción” sin participación directa del Estado, pero con una serie de políticas públicas que ordenaron al sector durante la década de los sesenta.

Otros entes reguladores se han originado en políticas gestadas para contrarrestar las consecuencias locales de la crisis mundial de 1930: juntas reguladoras tales como la Comisión Re-

guladora de la Yerba Mate, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, etcétera.

Como en el caso mexicano, la intervención del Estado argentino es la clave para comprender la coexistencia durante décadas de “colonos” o “pequeños productores” con las empresas capitalistas agroindustriales. La persistencia de pequeños agricultores, en ambos casos, se sostenía en una trama de relaciones institucionales que, a nuestro entender, formaban parte del régimen social de acumulación imperante. Empresas paraestatales, bancos de créditos, oficinas del Estado, convenios con organismos internacionales conformaban un entramado social donde además, las organizaciones gremiales productivas fueron tomando parte.

La crisis del modelo se manifestó en la desaceleración del crecimiento económico de México y en un franco estancamiento de la economía argentina. Los Estados nacionales, asesorados por los organismos internacionales, respondieron a esta situación generando una serie de políticas macroestructurales de ajuste. En el sector agrario se está modificando sustancialmente la red institucional donde la relación agricultor-empresa agroindustrial se llevaba a cabo.

EL NUEVO RÉGIMEN SOCIAL DE ACUMULACIÓN Y LAS AGRICULTURAS MEXICANA Y ARGENTINA

Los analistas marcan la crisis del endeudamiento externo, desatada inicialmente por la moratoria mexicana de 1982, como un hito importante en el proceso profundo de reestructuración económica, social y cultural que vive América Latina. Proceso donde las agriculturas cumplen un rol estratégico.

Dice Casio Luiselli:

A partir de la crisis de 1982, las restricciones presupuestarias que han resultado de la política de austeridad en el gasto dirigidas a eliminar el déficit público, así como los menores ingresos gubernamentales debidos a la caída de los precios del petróleo y de las mayores tasas de interés (nacionales e internacionales), han menguado fuertemente el monto de recursos que el gobierno mexicano destina a programas sectoriales de Desarrollo, como la agricultura. Además, la enorme deuda externa acumulada y la crisis económica por la que atraviesan países como México, han creado desconfianza acerca de la efectividad de las políticas económicas que estos países suelen adoptar, lo que ha causado que los nuevos préstamos provenientes de instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) sean otorgados condicionados a severas políticas de ajuste económico. Así, la agricultura se desenvuelve en un marco económico altamente condicionado. (1988: 2)

Las políticas económicas están sujetas a fuertes restricciones de los organismos externos, en parte acreedores de nuestros países, pero también financiadores de los cambios en marcha. Los nuevos préstamos externos se realizan ligados a ajustes estructurales, préstamos amarrados a paquetes de políticas macroeconómicas, que se parecen mucho entre sí, independientemente del organismo involucrado (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) o del país en cuestión.

Las medidas generales más importantes impulsadas desde el nuevo modelo son, entre otras: procesos de privatización; desregulación de la economía; ajustes en los gastos fiscales; liberalización del comercio exterior y apertura general al mercado mundial; tendencia a la formación de mercados regionales como la North American Free Trade Association (NAFTA) y el Mercado Común del Cono Sur (Mercosur).

En el caso mexicano, a partir de 1982 se fueron dando distintos momentos de mayor o menor éxito en cuanto al crecimiento económico. La experiencia argentina solo resultó, hasta

ahora, en un programa de estabilidad basado sobre la libre convertibilidad y un acelerado y desordenado proceso de privatización, sin que los índices de estancamiento económico variaran demasiado. Dice el ex-secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno radical, Lucio Reca:

Los problemas estructurales de crecimiento de la Argentina [...] se profundizaron en ocasión de la crisis de la deuda y aumentaron su magnitud con la nacionalización (de la deuda externa) (1981), que creó ingentes obligaciones al sector público, sin generar recurso alguno. El cierre de esta brecha permanece como una de las cuestiones críticas, aún no resueltas de la política económica, que se manifiesta entre otras cosas, en la caída de la inversión por falta de recursos disponibles y en el deterioro del potencial de crecimiento. (Reca, 1988: 34)

En ambos países ya es posible contabilizar importantes pasos hacia la nueva orientación de las políticas económicas en general y de las agrarias en particular. Predomina en ambas clases dirigentes un discurso que acentúa la necesidad de la transformación —“modernización”, “mayor productividad”— que prepare las condiciones para la libre competencia en el mercado internacional y especialmente con

sus vecinos y próximos socios en la integración regional: “El campo es el ámbito de la nación donde el cambio es más apremiante y más significativo para el futuro del país [...] El cambio deliberado es una necesidad”, dice el presidente mexicano Salinas de Gortari (1991).

Dentro de este contexto general, señalaré las medidas para el sector agrario que según mi opinión están modificando las condiciones macroestructurales donde se llevan a cabo las relaciones entre agricultores y procesadores, y particularmente las relaciones que involucran a pequeños agricultores familiares.

En México, la medida más importante ha sido, sin duda, la modificación del artículo 27 de la Constitución Nacional de 1917. Me remitiré a los fundamentos que el presidente Salinas de Gortari desarrollaba para sustentar la medida:

En el artículo 27, el constituyente de Querétaro estableció decisiones políticas fundamentales, principios fundadores de la institución de la propiedad en México [...] La población rural crece, mientras que la tierra no varía en extensión [...] Debemos reconocer que culminó el reparto de la tierra que estableció el artículo 27 constitucional de 1917 y sus sucesivas reformas. (Salinas de Gortari, 1991: 1090)

El artículo 27 establecía la propiedad originaria, inalienable e imprescriptible, sobre todos los recursos naturales (tierra, agua, riquezas del subsuelo y de sus derivados). La modificación actual alcanza a la forma de propiedad de la tierra y no la modifica para los otros recursos naturales. La Reforma Agraria de 1917 establecía la parcela individual o el ejido colectivo como unidad inalienable y transferible solo por herencia. La modificación actual permite la venta, renta, la formación de sociedades mercantiles por acciones, la asociación con terceros y establece las condiciones conforme a las cuales el núcleo ejidal podrá otorgar al ejidatario el dominio sobre sus parcelas.

El *sector ejidal* ocupa más de la mitad de la tierra cultivable del país y cuenta con 28.000 ejidos, ocupa a 3,1 millones de agricultores y a gran parte de los millones de familiares del ejidatario. La modificación genera las condiciones para la formación de un mercado de tierras, anteriormente ausente en las zonas afectadas por la Reforma Agraria, y por las magnitudes de los recursos que están en juego es de esperar consecuencias económicas y sociales que modificarán el paisaje rural de México.

Esta modificación estructural fue acompañada, además, por una serie de medidas que reformaron el sistema de apoyo oficial al sec-

tor agrícola. Se suprimieron varias agencias y programas oficiales y se reformularon el mandato para muchas de las otras como parte de una acción más amplia para redefinir el papel del Estado en la economía. Dice Cinthya Hewitt que no hubo una posición única dentro del gobierno para llevar a cabo este programa: algunos defendieron la posición extrema de retirarse y dejar actuar las fuerzas del mercado internacional en tanto otros, que reconocían la ineficiencia y el alto costo del modelo intervencionista anterior, bregaban por una estructura de apoyo oficial más eficiente y acorde con la mayoría de los intereses de los productores (ibídem: 964).

En la producción de cereales, la combinación CONASUPO-BANRURAL, que permitía la articulación de vastos sectores campesinos al complejo cerealero, fue modificando su funcionamiento. La CONASUPO ha quedado reducida a la recepción de maíz y frijol y se suprimió su papel regulador del mercado de otros cultivos básicos, permitiéndose la competencia con productos importados. Entre 1983 y 1986 la compra de frijol y maíz se redujo a la mitad (de 530.400 t a 259.500 t y de 5.518.500 a 2.300.900 t, respectivamente). BANRURAL comenzó en 1989 un saneamiento de su cartera de morosos y a partir de allí se anunció que solo los pe-

queños productores mejor dotados recibirían créditos. El Crédito BANRURAL dejó de cubrir para 1989 más de 1,2 millones de hectáreas en comparación a 1987 y disminuyó 553 mil hectáreas más en 1990 (Appendini, 1991).

En materia de comercio exterior el gobierno iniciaba una política de libre importación que incluía sorgo, arroz, soya, manzana, duraznos, leche. Políticas que afectaban básicamente a pequeños y medianos agricultores (Barros, 1992).

La política de privatización de las empresas públicas, iniciada en la práctica a partir de febrero de 1985, cuando el Estado anunció la necesidad de desincorporar entes que ya no tenían un papel estratégico, incluyó gran cantidad de entes estatales y paraestatales que funcionaban en el sector agrario. Del listado de empresas vendidas entre diciembre de 1982 a noviembre de 1988, se pueden contabilizar veinte, mientras que seis estaban en etapa de finalización del trámite, todas ellas dentro de la coordinación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos¹.

La desincorporación de Inmecafé, así como la devolución de la comercialización del tabaco

(Tabamex) a las grandes empresas cigarreras, sin dudas modificaron los dos casos de agricultura de contrato con mediación estatal más importante de la década de los setenta.

En la Argentina la situación del sector agropecuario estaba en franco proceso de reestructuración desde mediados de la década de los setenta. Algunos de esos cambios estaban basados sobre la recuperación del ritmo de crecimiento de cinco productos pampeanos para la exportación y en un proceso importante de modernización tecnológica (Ver Aparicio, Giarracca y Teubal, 1992). Los gobiernos democráticos debieron afrontar la caída de los precios internacionales de muchos de estos productos y la consiguiente interrupción de la tendencia alcista en materia de producción. La respuesta estatal fue la eliminación de los derechos a la exportación y, durante el gobierno radical (1983-1989), una mejora en el tipo de cambio. Esas políticas beneficiaron principalmente a la región pampeana y a productores cerealeros del resto del país. Durante el gobierno radical se modificó el modo de intervención estatal en algunas actividades agroindustriales regionales; asimismo los presupuestos para el funcionamiento de las agencias estatales agrarias bajaron en tal magnitud que casi se paralizaron las actividades regulatorias o fiscalizadoras.

1 Este dato fue contabilizado a partir de los cuadros del trabajo de Zamora, 1989.

Si bien el Estado había perdido capacidad de intervención y, en los últimos meses del gobierno radical de Alfonsín, la “desregulación” se daba casi de hecho, las acciones definitivas se produjeron durante el gobierno justicialista de Carlos Menem.

El decreto 2284 de fines de 1991 de desregulación económica formó parte de un paquete de medidas tendientes a la liberalización de la economía: ley de emergencia económica, ley de reforma del Estado, ley de flexibilización del mercado laboral. Con el decreto de desregulación se desactivaba por completo la red institucional que había regulado la actividad agropecuaria por más de seis décadas.

En los considerandos de la normativa se re fuerzan los principios de libre comercio y se enuncia, con una claridad sorprendente, la necesidad de modificar las relaciones básicas del modelo de desarrollo de la posguerra:

Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía social de mercado, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional. [...] Que una vez eliminado

las intervenciones y regulaciones del Comercio Exterior e Interior no se justifica la existencia de numerosos organismos públicos, creados a partir de la crisis mundial de la década del treinta, que no resultan aptos para la Argentina de los umbrales del siglo XXI.

El decreto establece:

1. disolución del Mercado de Concentración Pesquera de Mar del Plata, el Instituto Nacional de Actividades Hípicas, el Instituto Forestal Nacional y el Mercado de Hacienda de Liniers;
2. definitiva disolución y ventas de activos de la Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP);
3. definitiva disolución de la Junta Nacional de Granos, que se ocupó, entre otras cosas, de otorgar adelantos para las exportaciones, fijar precios de garantías, estimular convenios de país a país, llevar la estadística de los principales cereales y oleaginosas del país;
4. disolución de la Junta Nacional de Carnes y, como vimos, la privatización simultánea del Mercado de Liniers que fue el principal ente concentrador de la comercialización de carne;
5. disolución de la Dirección Nacional del Azúcar, que regulaba la producción de

caña desde la producción primaria (estableciendo cupos de producción) hasta la entrega final al mercado interno (cuotas de comercialización);

6. disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que establecía cuotas de producción así como una serie de mecanismos que regulaban la comercialización final;
7. derogación de las regulaciones sobre la vitivinicultura, se liberaban la plantación, reimplantación o modificación de viñedos, así como también venta y despacho de vinos. Se redefinen las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que se limitan al control de la genuinidad de los productos vitivinícolas.

En cuanto al Fondo Especial del Tabaco, el decreto establecía una mayor injerencia del Estado en el uso de la recaudación fiscal, es decir, que no se afectaba el impuesto directo al consumo, sino que se establecía una utilización fiscal que no contemplaba la legislación anterior “la acción del FET queda completamente reducida e impredecible ya que depende de los fondos que quedan después de que el Ministerio de Economía resuelva la proporción a afectar a rentas generales, que para 1992 es del 34%, y se

programa una eliminación total del FET en dos años ya que el porcentaje sería del 66% en 1993 y del 100% en 1994” (Bertoni, 1992: 22).

En el mismo decreto se establecían medidas que fortalecían la desregulación del comercio interior de bienes y servicios, la desregulación del comercio exterior, regímenes de gravámenes a las importaciones, desregulación del sistema de transporte, etcétera.

ALGUNAS REFLEXIONES

En uno y otro caso —México y la Argentina— las medidas que se han tomado en relación con el funcionamiento de la economía y el sector agrario en particular, posibilitan modificaciones en relaciones básicas de producción y distribución que por décadas fueron constitutivas del “régimen social de acumulación” donde el Estado fue agente regulador y de intervención.

Después de la segunda posguerra, para los países desarrollados se dio una ruptura deliberada con el capitalismo de libre mercado, se aplicaron las políticas keynesianas no solo para atacar la desocupación sino para estimular la demanda (Hobsbawm, 1992). El “keynesianismo mixto” se basó sobre la asociación del capital con el trabajo organizado bajo los

benevolentes auspicios de los gobiernos. El modelo, con variantes, se extendía al mundo capitalista y en América Latina alentó posibilidades de industrialización y modernización dentro de regímenes políticos diversos (democracias limitadas o dictaduras) que proponían programas “desarrollistas”.

Con el agotamiento mundial del modelo y con la crisis del endeudamiento externo, se instala en nuestros países un período de profundos cambios estructurales. Algunos autores hablan de “un nuevo poder económico” y de una nueva función estatal que busca generar la legitimación de los nuevos grupos económicos en las funciones conductoras de las acciones económicas, es decir, el mercado (Azpiazu, 1986).

En este nuevo contexto, la red institucional que permitió la persistencia durante décadas de la explotación familiar argentina o el ejido mexicano, se está resquebrajando, lo cual debilita las posibilidades de acceso de estas explotaciones al modelo de “agricultura de contrato” desarrollado por las empresas agroindustrializadas transnacionalizadas.

Durante toda la década de los ochenta se manifestaron emigraciones de las zonas de agricultura campesina en ambos países. En la Argentina crecieron las ciudades intermedias y los empleos precarios (Giarracca, 1990) y en

México hubo un creciente proceso de feminización del trabajo rural; los ancianos, las mujeres y los niños son los encargados de cultivar la tierra mientras los hombres migran a zonas urbanas o a los Estados Unidos (Hewitt, 1992). En la Argentina se redujo durante los veinte años transcurridos entre los dos últimos censos agrarios —en términos absolutos y relativos— el estrato de “pequeños productores”. Mientras las explotaciones de “hasta 25 hectáreas” eran 217.318 y representaban el 41% del total en 1969, han pasado a ser 140.177 y a representar el 37% en el último censo de 1988².

El proceso en curso nos desafía a pensar nuevamente desde la teoría, problematizando el lugar de la pequeña propiedad familiar en el modelo de acumulación en formación. Al revisar los trabajos recientes, se pueden encontrar dos posiciones. La primera sostiene que la intervención del Estado no hizo más que limitar el

2 Hubo una reducción de 151.687 explotaciones agropecuarias entre los dos censos y casi el 50% de esa reducción recayó en el estrato de pequeños productores. Sin embargo es necesario señalar que muchos analistas coinciden en que el censo de 1969, por errores técnicos, sobreestimó la cantidad de explotaciones. De todos modos, la mayoría de los estudios sectoriales dan cuenta de una notable reducción de las explotaciones y aún más de los “productores” (como personas jurídicas).

desarrollo productivo y crear relaciones políticas clientelísticas en el campo latinoamericano; con los nuevos cambios estamos frente a una coyuntura que permitirá la consolidación de actores sociales autónomos que deberán concertar en espacios más transparentes que los que producía la intervención estatal y se dará una liberalización de fuerzas productivas. La segunda posición considera que, justamente por la naturaleza de los Estados latinoamericanos, muy poco quedaron de los recursos y acciones que este aplicó y desarrolló, y por lo tanto se abre un período donde prevalecerán los sectores más fuertes y los pequeños productores correrán la misma suerte que muchos grupos sociales: serán excluidos de los mercados de producción agrícolas y se sumarán a los “nuevos pobres”. Sostienen la posición “optimista” la mayoría de los organismos internacionales y ONG (ver Murmis, 1992); en la segunda posición encontramos a la mayoría de las organizaciones representativas de campesinos.

Aún falta sostener conceptualmente una u otra posición: la crisis de los paradigmas teóricos parecen habernos paralizado en tal sentido. En esta coyuntura existe un debate agrario, que como en otros tiempos, exige acciones y la generación de un pensamiento activo. Parecería que no son tiempos ni para una cosa ni para la otra.

Sin embargo existe una lucha diaria de los sectores subalternos rurales de Latinoamérica por la “inclusión” en los nuevos mercados, en mantenerse o integrarse en los espacios de los ciudadanos, etcétera; también se dan “intervenciones” de todo tipo (ONG, proyectos de desarrollo de organismos internacionales, extensiones universitarias, etcétera³). Hace falta la generación de un pensamiento activo que ayude a esclarecer funcionamientos, posibilidades de transformación. Esta comunicación tiene esa finalidad: advertir que no podemos seguir pensando la articulación campesina a la expansión agroindustrial como lo hacíamos hace unas décadas, que las condiciones generales se han transformado y que los actores sociales ya no son los mismos, incluidos los “sujetos” pequeños productores⁴.

3 Es interesante observar que la presencia activa de las ONG en el campo latinoamericano (o en las sociedades en general) ha estimulado dos direcciones de análisis sobre sus funciones: que pueden reemplazar al Estado en materia de políticas sociales (y en algunos países como Chile lo logran con bastante eficiencia) o que pueden tener un papel político esencial en la formación de nuevos movimientos sociales (ver en esta última dirección Restrepo, 1989).

4 Una propuesta de reflexión interdisciplinaria tendría que tomar un esquema que dé cuenta de la tensión constante entre las tendencias estructurales y el accio-

BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio, S.; Giarracca, N. y Teubal, M. 1992
 “Transformaciones en la agricultura argentina,
 su impacto sobre los sectores sociales”
 en Jorrat, J. y Sautu, R. (eds.) *Después de
 Germani. Exploraciones sobre la estructura
 social argentina* (Buenos Aires: Paidós).
- Appendini, K. 1991 “Los campesinos frente
 a la política de abasto: una contradicción

nar de los actores, entre la “determinación” y la “indefinición”. Que contenga los niveles de explicación económicos más generales, procesos difíciles de modificar desde los actores locales, pero que incluya además una rigurosa reflexión sobre las potencialidades transformativas de los “sujetos” en juego, sobre sus capacidades para moverse en condiciones desfavorables y producir cambios en beneficio propio y del conjunto (capacidad para producir acciones políticas); se necesitan análisis sobre las condiciones de posibilidad de las organizaciones, sobre la viabilidad de la organización cooperativa. Se necesita tomar en cuenta el papel de la socialización del “sujeto campesino”, de la educación, de la posibilidad de formación y capacitación de jóvenes dirigentes; debemos indagar más sobre la potencialidad de la mujer campesina en todo este proceso, y aún más sobre sus condiciones de subordinación. Es una tarea muy compleja, que en parte la estamos haciendo, pero también es el desafío de producir un pensamiento activo que acompañe la lucha por la “inclusión” de los sectores subalternos rurales de América Latina.

- permanente” en *Comercio Exterior*
 (México DF) Vol. 41, N° 10.
- Arroyo, G.; Rama, R. y Rello, F. 1985
Agricultura y alimento en América Latina
 (Madrid: UAM, Instituto de Cooperación
 Iberoamericana).
- Azpiazu, D. et al. 1986 *El nuevo poder
 económico* (Buenos Aires: Legasa).
- Bertoni, L. 1992 “El Estado en el complejo
 agroindustrial tabacalero”, Informe parcial
 de Beca de Iniciación (Buenos Aires:
 UBACYT) mimeo.
- CEPAL 1982 *Economía campesina y
 agricultura empresarial* (México DF: Siglo
 XXI).
- CEPAL 1987 *Despoblamiento rural y cambios
 recientes en los procesos de urbanización
 regional* (Buenos Aires: CEPAL)
 Documento de Trabajo N° 25.
- Clapp, R. 1988 “Representing Reciprocity,
 Reproducing Domination: Ideology and
 Labour Process in Latin American Contract
 Farming” en *The Journal of Peasant
 Studies*, Vol. 16, N° 1.
- Cornelius, W. 1992 “The Politics and
 Economics of Reforming The *Ejido* Sector
 in Mexico. An Overview and Research
 Agenda” en *LASA Forum* (Estados Unidos)
 Vol. XXIII, N° 3.

- Cox, R. W. 1992 "Globalización, multilateralismo y posibilidades de elección" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 109.
- De Janvry, A. 1981 *The Agrarian Question and Reformism in Latin American* (Baltimore / Londres: The John Hopkins University Press).
- De Janvry, A. et al. 1989 "Land and labour in Latin American Agriculture from 1950s to 1980" en *Journal of Peasant Studies*, Vol. 16, N° 3.
- Feder, E. 1977 *El imperialismo fresa* (México DF: Editorial Campesina).
- Garramón, C. et al. 1988 *Ajuste macroeconómico y sector agropecuario en América Latina* (Buenos Aires: IICA / KIFP / FS).
- Gasca Zamora, J. 1989 "Fuentes para el estudio de las empresas paraestatales de México y su privatización. 1983-1988" en *Comercio Exterior* (México DF) Vol. 39, N° 2.
- Giarracca, N. 1985 "Complejos agroindustriales y la subordinación del campesinado. Algunas reflexiones y el caso de los tabacaleros mexicanos" en *Estudios Rurales Latinoamericanos* (Bogotá) Vol. 8, N° 1.
- Giarracca, N. 1988 "Nuevas situaciones de articulación agroindustrial en el complejo arrocero. El papel de las cooperativas" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 85.
- Giarracca, N. 1990 "El campesinado en la Argentina. Un debate tardío" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 94.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991a *El campesinado cañero: multiocupación y organización* (Buenos Aires: Instituto de Ciencias Sociales) Cuaderno N° 3.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991b "Las cooperativas en el Complejo Agroindustrial Tabacalero", Informe de Investigación (Buenos Aires: UBACYT) mimeo.
- Glover, D. 1984 "Contract Farming and Smallholder Out Grower Schemes in Less-Developed Countries" en *World Development*, Vol. 12, N° 11/12, noviembre-diciembre.
- Glover, D. 1987 "Increasing the Benefits to Smallholders from Contract Farming: Problems for Farmer's Organizations and Policy Makers" en *World Development*, Vol. 15, N° 4.
- Goldberg, R. 1981 "The role of the multinational corporation" en *American Journal of Agricultural Economics*, Vol. 63.

- Goldsmith, A. 1985 "The Private Sector and Rural Development: Can Agribusiness Help the Small Farmer?" en *World Development*, Vol. 11, octubre-noviembre.
- Hewitt de Alcántara, C. 1991 "La economía política del maíz en México" en *Comercio Exterior* (México DF) Vol. 41, N° 10.
- Hobsbawm, E. 1992 "El día después del fin de un siglo" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 108.
- Kautsky, K. 1977 *La cuestión agraria* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Lappe, F. y Collins, J. 1977 *Food First: Beyond the Myth of Scarcity* (Boston: Houghton Mifflin).
- León, C. 1991 "El sector agropecuario durante la década de los ochenta: de la euforia productivista a la crisis de improvisación" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 99.
- Luiselli Fernández, C. 1988 "Las políticas de ajuste estructural sobre el sector agroalimentario de México" en Garramón, C. et al. *Ajuste macroeconómico y sector agropecuario en América Latina* (Buenos Aires: IICA / KIFP / FS).
- Margulis, M. 1979 *Contradicciones en la estructura agraria y transferencia de valor* (México DF: El Colegio de México, Jornadas 90).
- Murmis, M. 1992 "Ajuste y pobreza campesina: análisis de algunas propuestas para América Latina", mimeo.
- Nock Barros, M. 1992 "*Agro-Industrial Production in Mexico. The case of Fruit and Vegetables*" en *Research Seminars - Rural Development Studies* (Ámsterdam: Institute of Social Studies).
- Piñeiro, D. 1992 "Estructura Agraria y constitución de actores en una época de cambios en la agricultura", mimeo.
- Reca, L. y Katz, L. 1988 "Proceso de ajuste y política agropecuaria y alimentaria: algunas reflexiones sobre la experiencia argentina" en Garramón, C. et al. *Ajuste macroeconómico y sector agropecuario en América Latina* (Buenos Aires: IICA / KIFP / FS).
- Restrepo, L. A. 1989 "Los movimientos sociales, la democracia y el socialismo" en *Análisis Político* (Bogotá) N° 5, septiembre-diciembre.
- Salinas de Gortari, C. 1989 "Criterios generales de política económica para 1990" en *Comercio Exterior* (México DF) Vol. 39, N° 12.
- Salinas de Gortari, C. 1991 "Iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución" en *Comercio Exterior* (México DF) Vol. 41, N° 11.

- Sorj, B. 1980 *Estado o clases sociais na agricultura brasileira* (Río de Janeiro: Zahar).
- Tsakoumagkos, P. 1986 *Sobre la descomposición del campesinado en la Argentina* (Buenos Aires: CEPA).
- Wilson, J. 1986 "The political Economy of contract farming" en *Review of Radical Political Economics*, Vol. 18, N° 4.
- Zamora, J. 1989 "Fuentes para el estudio de las empresas paraestatales de México y su privatización, 1983-1988" en *Comercio Exterior* (México DF) Vol. 39, N° 2.

LAS AGRICULTURAS DEL MERCOSUR: EL PAPEL DE LOS ACTORES SOCIALES

A MODO DE INTRODUCCIÓN*

NORMA GIARRACCA Y SILVIA CLOQUELL**

INTRODUCCIÓN

Este libro contiene las ponencias centrales de las III Jornadas Regionales: "Agriculturas Latinoamericanas y las Transformaciones Sociales" que se llevaron a cabo entre el 7 y el 9 de noviembre de 1996 en Argentina.

Dichas jornadas y las anteriores tuvieron como finalidad fomentar el encuentro de académicos especializados en los procesos sociales

* Giarracca, N. y Cloquell, S. 1998 "Las agriculturas del Mercosur: el papel de los actores sociales. A modo de introducción" en Cloquell, S. y Giarracca, N. (comps.) *Agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena / CLACSO).

** Doctora por la Universidad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Profesora titular e investigadora. Directora del Grupo GEA (Grupo de Estudios Agrarios) en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario.

agrarios, quienes se dedican a la investigación y a la docencia en doce universidades nacionales del Mercosur: cinco brasileñas, cinco argentinas, así como las de Paraguay y Uruguay. Existe una organización que agrupa a estas universidades, se denomina Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y está apoyada por la UNESCO. La AUGM constituye una importante herramienta para articular distintos tipos de esfuerzos universitarios. Tanto la AUGM como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) apoyaron la realización de este evento. CLACSO facilitó la incorporación del representante chileno y apoyó la publicación de este libro.

Estos encuentros se iniciaron con una convocatoria realizada por la Universidad de la República en 1991, la cual se llevó a cabo en Montevideo y que fue el comienzo de un fértil intercambio de investigadores, docentes y alumnos de la región, preocupa-

dos por los aspectos sociales del desarrollo agrario. Además de los tres encuentros, se han logrado intercambios docentes, reuniones de investigadores, pasantías de alumnos avanzados, sobre todo entre el Grupo de Investigaciones en Sociología Agraria de la Universidad de la República del Uruguay, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, el Programa de Posgraduación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y el Grupo de Estudios Rurales de la Universidad de Buenos Aires. En el último año y gracias al apoyo de CLACSO, se lograba una mayor interacción con los colegas paraguayos y chilenos. Todo lo cual, además, se fortalece mediante el esfuerzo académico del Grupo de Trabajo Desarrollo Rural desde 1995 a la actualidad.

Relatamos este proceso porque consideramos importante transmitir nuestra propia experiencia dentro del proceso de integración regional como actores universitarios. En efecto, si bien el Mercosur tiende a constituirse como una serie de acuerdos económicos-comerciales con predominio de agentes económicos de envergadura, es también, una posibilidad para que interactúen actores económicos subordinados (campesinos, obreros) además de otros actores tales como organizaciones y movi-

mientos sociales, universidades, miembros de movimientos culturales, etcétera. Como para todos ellos, nuestras dificultades son múltiples; los recursos son escasos para disminuir distancias físicas tan vastas. Aun así, mediante las acciones conjuntas y la movilización de los recursos disponibles se logran poner en marcha procesos que permiten la concurrencia de los actores universitarios y, en nuestro caso, la participación de los jóvenes, protagonistas del nuevo siglo. Pero vayamos, en primer lugar a conocer algunos de los propósitos convocantes de las Jornadas.

Desde mediados de la década del ochenta, los gobiernos latinoamericanos asesorados por los organismos internacionales —los agentes de la globalización—, generan una serie de medidas económicas que tienden a expandir los intereses privados en las agriculturas. La denominada “retirada de Estado” en el sector agrario desató un proceso muy complejo que aún está en marcha. La información general permite registrar la expansión de sectores privados agrarios y extra-agrarios con magnitudes muy altas de capital aplicadas a la agricultura a través de nuevas formas de organización productiva y empresarial. Asimismo, se corrobora en casi todos los países, una fuerte intención por lograr altos niveles

tecnológicos en las nuevas y viejas producciones para lograr rentabilidades adecuadas en un mercado externo en “proceso de globalización”, altamente competitivo y donde las producciones subsidiadas (EEUU y Europa) tenderían a desaparecer.

Pero esta expansión del sector empresarial coexiste con la persistencia de los pequeños y medianos productores en procesos de descapitalización, con campesinos sin tierra o campesinos con tierra pero arrinconados por las políticas neoliberales. También asistimos a diversas respuestas de estos sectores: marchas y tomas de tierra de los “Sin tierra” brasileños; movilizaciones y partidos agrarios en Paraguay; organización de mujeres agropecuarias endeudadas, tractorazos, marchas federales y cortes de ruta en Argentina.

A lo largo de la historia del capitalismo latinoamericano, la agricultura fue desarrollándose con sus particularidades y tiempos propios. Las “revoluciones verdes”, “las reformas agrarias” y la participación estatal fueron moldeando estructuras agrarias donde predominaban distintos tipos de productores y relaciones sociales. A partir de los años ochenta comenzaron a aplicarse una serie de medidas que conocimos por el sentido común como “retirada del Estado” que dejó a los sectores mayoritarios

de la producción agraria latinoamericana sin la red de contención legal que había habilitado su sostenimiento durante este siglo.

Al final del siglo XX preguntamos: ¿qué es lo nuevo y particular en las agriculturas y en los mundos rurales de nuestras sociedades? ¿Cuáles son los elementos vinculados con lo agrario y lo rural que caracterizan y diferencian la etapa actual de etapas anteriores? ¿Cómo conforma y a la vez es conformado el proceso de integración regional en relación con las agriculturas?

Los autores de los trabajos que se presentan en este libro fueron invitados a participar en las Jornadas a partir de una consigna: diagnosticar y problematizar las agriculturas y sus transformaciones en cada uno de los países. Como veremos, los trabajos exceden esta consigna y a través de ellos podemos conocer no solo los cambios agrícolas sino otros aspectos económicos, sociales y políticos de los países en cuestión. No les solicitamos que articularan explícitamente estas problemáticas con el proceso de integración del Mercosur, aun cuando este fuera un escenario privilegiado para sus análisis.

Por tales razones, las compiladoras de este libro —coordinadoras académicas del evento—, consideramos necesario abrirlo con una

introducción que recupere la temática del Mercosur. Se trata de puntualizar las principales tendencias, problemas, conflictos que el proceso de integración acarrea. Nos propusimos trabajar algunas ideas acerca del Mercosur como proceso económico de integración pero también recordar que hay un proceso social en marcha, con múltiples determinaciones y cargado de las incertidumbres que les son propias.

EL MERCOSUR COMO PROCESO DE INTEGRACIÓN

Con la creación del Mercosur nos asomamos en la década del noventa a la generación de uno de los bloques subregionales más importantes de América Latina.

Los incentivos más inmediatos para su creación tienen que ver con el interés que Brasil y Argentina pusieron en la promoción del Programa de Integración y Cooperación Económica en 1986, con el fin de profundizar la dinámica de las relaciones bilaterales. Las iniciativas a partir de los años noventa están relacionadas con la consolidación de gobiernos neoliberales en el área; con la desregulación de los mercados mundiales y con la apertura y liberalización de los mercados

en el marco de la política de globalización de la economía.

La conformación de bloques regionales aparece en este contexto relacionado con la dinámica de la globalización y con la aplicación de instrumentos económicos a fin de revertir los efectos de una excesiva apertura para algunos sectores.

La regionalización se presenta como una forma en la que pueden regularse ambas tendencias, correspondiendo así a una estrategia de desarrollo combinada, la integración regional como un primer paso para la integración al mercado mundial (Zimmerling, 1992). En el Cono Sur estas tendencias dominantes en el sistema económico internacional, son, además, un impulso importante para la integración económica de los países.

La eliminación de barreras aduaneras, la apertura de los mercados nacionales, a diferencia de otros intentos de integración latinoamericana, marcan el cambio en las modalidades de comercialización regional y parecerían constituir el núcleo central. La plena reciprocidad de derechos y obligaciones es uno de los pilares donde se sustenta el Mercosur, sin que se establezcan tratos diferenciales a partir del grado de desarrollo relativo de cada uno de los pilares que se integran.

Esto permite pensar que se exponen mucho más las vulnerabilidades de cada uno, y aumenta la probabilidad de exclusión de importantes capas de población.

La reconversión tanto en el agro como en la industria es un prerrequisito de la rebaja arancelaria encarada por los gobiernos, ya que el incentivo a las exportaciones es uno de los principales puntos del modelo. Precisamente esto, junto con la anulación de las barreras arancelarias, trajeron importantes cambios en el interior de las economías nacionales y fomentaron la especialización productiva a nivel regional.

La alta heterogeneidad social de la región, la coexistencia de diversos tipos de unidades de producción agropecuaria e industrial, con diversas productividades y potenciales competitivos, presentan también distinta respuesta a la eliminación de barreras al comercio intraregional. Los pequeños productores agropecuarios y algunos sectores industriales constituirían el segmento más sensible a la integración aun en cadenas altamente competitivas (Buxedas, 1994).

La articulación de los Estados a través del comercio en el bloque, coloca en el escenario de la región un nuevo status para los países que lo conforman, el cual se establece en la noción

de integración. Esto se fundamenta ante la comunidad internacional al poco tiempo de su creación, como un mercado de una población de 200 millones de personas en una superficie de 11.872.000 km². La producción agropecuaria ascendía en 1993 a 64.520 millones de dólares, en tanto que la producción industrial alcanzaba a 248.640 millones de dólares.

La región en su conjunto tiene una gran concentración de su población en zonas urbanas. Más del 87% de personas en Argentina viven en localidades de más de 2.000 habitantes; 77% en Brasil, 89% en Uruguay y 49% en Paraguay (Teubal, 1997).

Según Hirst (1992) la promoción e integración asumió para estos gobiernos un sentido estratégico, en tanto se transformó en un elemento de dinamización de los vínculos económicos externos, vínculos que habían estado mediatizados a partir de la década de los años ochenta por la crisis de la deuda externa, con varios intentos frustrados de concertación regional en torno a esa problemática.

El condicionamiento del crecimiento con deuda pone en severos riesgos la estabilidad de los países del bloque. La deuda externa en el Mercosur es de 235 mil millones de dólares, lo que representa el 24% del PBI regional. Para Argentina la deuda externa representa el 26%

del PBN, para Brasil el 23%, para Paraguay el 16,2%, mientras que para Uruguay el 52,1% del PBN, para el año 1994.

La deuda es uno de los principales problemas para la economía del bloque ya que representa entre tres y cuatro veces el valor de las exportaciones de cada país (Teubal, 1997).

Las iniciativas regionales de los años noventa, responden a una filosofía comercialista neoliberal cuya base es la creencia en las propiedades transformadoras del mercado y en la necesidad de limitar el poder del Estado. Este discurso hegemónico perfila los rasgos que va tomando el bloque: fundamentalmente tendería a constituirse en una zona de libre comercio.

Entre los años 1980 y 1993, el incremento del intercambio dentro de la región fue significativo, pasando desde menos de 10% del total de las exportaciones intramercosur en 1990, a un 20% en 1994.

Se registraría en esta primera etapa una estrategia exportadora por parte de las empresas transnacionales y grandes empresas nacionales, las que son capaces de incrementar la producción y comercialización hacia el interior del bloque y operar bajo economías de escala.

Argentina se configura como uno de los países que más ha incrementado su comercio y

el brasileño es su principal mercado con una demanda sostenida. Mercosur representa alrededor del 30% de las exportaciones argentinas. Para Brasil, comparativamente, el bloque regional es menos importante, ya que representa el 13,6% del destino de sus exportaciones. Paraguay y Uruguay tienen una mayor dependencia, siendo el 52% para Paraguay y casi el 47% para Uruguay sobre el total de las exportaciones para 1994.

Los principales actores, públicos y privados promotores del esquema subregional argumentaron, según Del Huerto Romero (1992) que la selección del modelo de integración comercialista, combinado con una apertura comercial al mundo, responden a las actuales tendencias mundiales de constitución de bloques regionales. Concomitantemente la ideología sobre la que se construye el acuerdo presupone que los efectos del mercado garantizarán la integración de los países del bloque, potencializando las economías de los países miembro.

No obstante, la separación entre Mercado y Estado será progresivamente uno de los elementos de conflicto en el marco de la integración. Tema que abordaremos más adelante.

Los actores que lideran el proceso —los representantes estatales de cada uno de los países y las corporaciones económicas— dirimen

las negociaciones externas y los proyectos que son viables para la región. Pero, ¿son estos actores del acuerdo los únicos que deben participar en la integración? ¿Qué ocurre con la participación de otros actores? ¿Acaso la continuidad subregional no requiere de una revisión de su origen y de una ampliación de la participación a otros actores sociales, pasando así de una integración excluyente a una integración ampliada y participativa? ¿Es la noción de integración original la que se tiene que seguir sosteniendo en el presente inmediato?

La región en su totalidad abarca más que los intereses originales ya que comprende distintas realidades de cada uno de los países. Muchos de los subsistemas económicos están localizados en puntos estratégicos de la circulación de mercancías y a través de la operacionalización del transporte y las comunicaciones, se vislumbra la posibilidad de construir estrategias de inserción para los diversos tipos de actores. Posibilitando, de este modo, el posicionamiento de pequeños y medianos productores agrarios e industriales.

Los sectores sociales ausentes en el debate sobre la formulación e implementación del esquema subregional, los sectores de trabajo y de la pequeña empresa, los gobiernos locales, la gente de la educación, de la ciencia, poco o

nada han incidido en los intereses del bloque en su origen, y a cuyo conocimiento y posibilidades van accediendo lentamente.

La adaptación a las exigencias mundiales impuso a los agentes económicos un determinado cuadro de políticas económicas tanto en el nivel macro como en el sectorial que produce efectos de variado signo. Y esto se hace más notorio en cuanto a las desigualdades de los actores en el proceso de decisión del Mercosur.

La producción agrícola del Mercosur es de alrededor de 64.500 millones de dólares para 1993, alrededor del 6,6% del PBI regional. El Mercosur exporta cerca de 70 mil millones de dólares, el 7% del PBI.

La integración económica de los países incrementó la interacción entre Argentina y Brasil. Entre ambos absorben el 97,7% del PBI regional, el 98% del industrial y el 95% del comercio exterior regional, ambos países constituyen su base (Lavagna, citado por Teubal, 1997).

Desde la formación del bloque todos los países miembros incrementaron sus exportaciones. Mercosur absorbe en 1994 el 30% de las exportaciones de Argentina, siendo menos importante para Brasil con el 13,6% durante el mismo año. Tanto para Uruguay como para Paraguay el 46,7% y el 52% respectivamente para el mismo período.

Para el año 1996, la tasa de desempleo más alta es la de la Argentina con el 17,6% y la más baja Brasil con el 4,5%, en tanto Paraguay y Uruguay arrojan una tasa del 9%. Los guarismos que muestra la tasa de desempleo son los que permiten visualizar con mayor expresión, los distintos niveles de apertura a la economía de los cuatro países, la intervención del Estado y los problemas de poner en práctica políticas neoliberales, ajuste, reconversión productiva, flexibilización laboral, en forma casi paralela a la formación del bloque.

EL MERCOSUR COMO PROCESO SOCIAL

En este punto proponemos centrar la atención en las tensiones y en los conflictos que los procesos de integración regional comportan. Nos permitiremos arriesgar una reflexión centrada en el cuestionamiento de una frecuente visión “integradora” de estos procesos de regionalización, tentada por el carácter polisémico del término. Esta perspectiva integradora —a nuestro juicio, tributaria del discurso neoconservador— se orienta a relativizar los conflictos sociales que estos procesos económicos acarrearán y a funcionar como un dispositivo ideológico-comunicacional.

No obstante los conflictos ya comenzaron a manifestarse y no podía ser de otro modo. La formación de la Unión Europea, que es considerada como un proceso largo, cuidadoso y fundamentalmente, orgánico (Vizentini, 1994) reconoce momentos de tensión, fragilidad de los acuerdos, negativas de participación de las comunidades nacionales, así como una larga historia de manifestaciones sociales en su contra. Aun en una situación como la europea, que como sostiene Vizentini, cuenta con instrumentos más eficaces que los nuestros y resultados exitosos, la tensión y los conflictos han estado siempre presentes.

Existe una concepción de las relaciones entre los países que parte del supuesto de cierto nivel de unidad (aunque tensional) de la sociedad internacional pero también de una profunda diversidad y desigualdad de los actores. Tal concepción se plantea la necesidad de estudiar las interacciones entre actores. En este enfoque, al concepto de integración se incorpora el de conflicto, a partir de su inserción en la red de intereses, de la viabilidad de acciones cooperativas o diferenciadas para prever pautas de acción que incrementen la capacidad de otros actores para participar.

Pero tal perspectiva de las relaciones internacionales se subvalorizan en las cancillerías participantes del Mercosur. Prueba de ello

es que desde la Ciencia Jurídica, se manifiesta cierta preocupación por la lentitud para la generación de marcos legales eficaces para dirimir conflictos y un trabajo (Rimoldi de Ladman, 1995: 176) puntea las siguientes posibles fuentes de controversias:

1. Por aplicación e interpretación de normas firmadas por los países con terceros o con acuerdos multilaterales.
2. Por la interpretación y aplicación de las normas del Tratado de Asunción, y el derecho interno vigente de cada país.
3. Tanto en Argentina como en Brasil, con estructuras de Estado de tipo federal, pueden presentarse conflictos entre los acuerdos y las normas que pueden aprobar los Estados miembros o provincias y las normas del Tratado de Asunción (el artículo 124 de la nueva Constitución de Argentina le confiere a las provincias capacidad de celebrar convenios internacionales).
4. Pueden darse contradicciones de interpretación entre las reglas secundarias que se van creando a medida que el proceso avanza y las reglas más generales del Tratado.

Además de estas situaciones que tienen como fuentes de conflictos a las normativas involu-

cradas en la formación del bloque regional, están aquellas otras derivadas de los intereses, derechos y expectativas de los protagonistas.

En primer lugar, existe una primera diferencia acerca de las interpretaciones que los actores dan al proceso iniciado en Asunción. Un primer sentido atribuye al proceso la promoción de la plena liberalización y apertura de las economías nacionales, en consonancia con el discurso neoconservador. Se pone énfasis sobre los procesos de liberalización arancelaria y se confía en el “mercado” para establecer pautas y orientaciones necesarias y suficientes como para lograr una adecuada inserción de los sectores regionales en la economía mundial. Se necesitaría una mínima coordinación solo para impulsar los procesos de liberalización, desregulación y apertura. Los acuerdos se orientarían a lograr la libre circulación de los factores de la producción (en especial el capital) y una reestructuración industrial tendientes a un esquema de especialización relativa donde prevalecerían ventajas comparativas estáticas (Giarracca y Teubal, 1995 y Chudnovsky, 1993).

La segunda interpretación propone un proceso de integración regional similar al de la Unión Europea: un bloque económico defensivo con una etapa de acuerdos y de coordi-

nación de políticas —industriales, agrarias, financieras— entre los países. Pone el énfasis en el mediano y largo plazo y toma en cuenta la reestructuración industrial, el desarrollo tecnológico, la consolidación de los complejos educativos, científicos y culturales. En esta interpretación el puro accionar del “mercado” generaría costos sociales demasiado altos.

En una variante más amplia de esta segunda interpretación, algunos actores —provenientes de los movimientos sociales o las ONG— agregan que no puede darse una verdadera integración sin un compromiso de las mayorías sociales, para lo cual deben generarse espacios de coordinación para los movimientos sociales. Dice Marcel Marloie que existen dos requerimientos importantes en los procesos de integración:

1. el desarrollo de una sociedad civil en la escala territorial implicada,
2. el compromiso de los movimientos sociales, con sus problemáticas y gramáticas particulares (Marloie, 1994: 194).

En tanto prevalece la hegemonía del discurso neoconservador, muchos pasos dados hasta ahora pueden leerse desde el primer sentido del proceso de integración, sin embargo no

todos los representantes de los Estados nacionales ni todos los actores económicos pioneros en los acuerdos se manejan con una sola interpretación. Los conflictos más importantes aparecidos, sobre todo entre Estado-agentes económicos argentinos y Estado-agentes económicos brasileños, dan cuenta de esta complejidad. Y esto es así porque, hasta ahora, los objetivos de la integración mantienen un fuerte grado de indefinición, o —como dice Ladman— si los que toman las decisiones políticas conocen esos objetivos, no lo han comunicado adecuadamente ni a la totalidad de los operadores económicos ni a la ciudadanía en general (1995: 231).

De este modo pueden aparecer conflictos entre Estados miembros, entre un Estado y el Mercosur como conjunto, entre actores económicos particulares de diferentes países, actores económicos regionales (transnacionales) y un Estado o el Mercosur, etcétera. Aparecen además, conflictos ligados al mundo laboral: diferencias en las tradiciones legislativas relacionadas con los derechos de los trabajadores, diferencias en los costos laborales que pueden generar conflictos internos, etcétera. Pueden darse conflictos regionales en cada país relacionados con los acuerdos generales que deciden la “viabilidad” o “no viabilidad” de regio-

nes, actividades y sectores sociales (recuérdese el conflicto por la Ley del Azúcar de 1997).

Es decir, como proceso social la formación del bloque regional comporta conflictos, que cuando emergen, hasta ahora se niegan/reprimen, sin embargo, es posible pensar en las posibilidades de crear espacios con formas creativas de negociación y resolución.

Desde la perspectiva analítica que proponemos, estos aspectos son especialmente relevantes por la centralidad que el conflicto social presenta en los procesos de cambio.

La tendencia hegemónica dentro del proceso iniciado desde el Tratado de Asunción privilegia la participación de los grandes actores económicos. Según el Tratado, los gobiernos deben favorecer a las economías de escala, estimular los flujos del comercio y servir de referencias a las acciones del sector privado; todas estas medidas son coherentes con la liberalización que predomina en los países del Mercosur (Romano, 1995).

Los actores que quedan excluidos o desfavorecidos por la iniciativa política de los Estados y los grandes grupos económicos no siempre aceptan sin reclamos tal situación. Además, como decíamos anteriormente, no necesariamente los grandes agentes económicos y políticos actúan entre ellos sin oposiciones o conflictos de intereses. Esta expansión del

conflicto social, entre sectores con distintos intereses o sectores económicos asimétricos en sus capacidades, así como la participación de otros actores con intereses no materiales (el interesado en el cuidado del medio ambiente, los movimientos feministas, las universidades, etcétera), podrían habilitar la posibilidad de transformaciones con un sesgo más democrático que el proceso concentrador actual.

Por ahora y a pesar de algunos avances, las entidades representativas de los sectores económicos subordinados son invitadas a las convocatorias oficiales en carácter consultivo y están al margen de los espacios donde se toman las decisiones más importantes. El carácter subordinado de algunos de los actores en los escenarios socioeconómicos nacionales, se traslada al nuevo espacio regional. Solo algunos pocos sectores que habían conseguido mejores posiciones en la negociación nacional, están en mejores condiciones de presentarse como “actores” cuyas prácticas y discursos puedan legitimarse en el Mercosur.

La temática fundamental, a partir de nuestras investigaciones, es conocer las condiciones de posibilidad para la generación y sostenimiento de nuevos actores capaces de democratizar el espacio económico del Mercosur. Las cooperativas (por el importante apoyo internacional

que tienen) están en adecuadas condiciones para negociar mecanismos de integración para los pequeños agricultores y trabajadores, siempre y cuando logren primero solucionar las diferencias propias. Las ONG, que ya son reconocidas como actores en otros foros internacionales así como las nuevas asociaciones de productores que han surgido al calor de estos últimos años, también podrían convertirse en “actores” con acceso a los formadores de opinión pública y a los espacios de decisión.

En síntesis, el MERCOSUR es un espacio social, por lo tanto abierto y complejo, donde, desde nuestra perspectiva, los distintos actores pueden cambiar el “rumbo natural de los acontecimientos económicos”. Si bien hay actores con mayor capacidad que otros para imponer sus intereses, sus prácticas y sus discursos, la posibilidad de que se instalen conflictos y antagonismos permite pensar el Mercosur como un espacio social no suturado, no sedimentado, donde circulen prácticas que no contengan el sesgo concentrador de las políticas neconservadoras. Es decir, que incluya tanto a los actores económicos subordinados como a los nuevos movimientos sociales, respetando y expandiendo el campo de sus derechos.

La presencia de los actores fuertes y concentrados es una tendencia económica difícil

de torcer. La participación de otros actores que impidan la consolidación de un único escenario es una posibilidad que depende de la política. Y la política depende del Estado, de los sectores dirigentes pero también de la sociedad civil.

EL CONTENIDO DEL LIBRO

Los trabajos presentados en este libro nos ofrecen diagnósticos de las estructuras sociales agrarias de los cinco países que integran el Mercosur: Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina. Los artículos analizan las transformaciones a nivel nacional que surgen a partir de los procesos de la globalización, los que, en nuestros casos, están muy relacionados con el Mercosur.

Asimismo, en todos ellos encontramos referencias a los actores sociales, es decir se reflexiona desde una perspectiva sociológica en la que actores, conflictos y poder son los aspectos centrales.

Abrimos el libro con el trabajo acerca de la agricultura brasileña. Respetamos el idioma original del artículo —portugués— debido a que el bilingüismo constituye una característica del Mercosur, sobre todo en los ámbitos académicos.

El trabajo de Anita Brumer y José Vicente Tavares Dos Santos “Tensões agrícolas e agrarias na transição democrática brasileira” analiza las principales transformaciones ocurridas en la agricultura brasileña. Ellos toman el período que caracterizan como la “modernización conservadora” y en él, se ponen de manifiesto las acciones de los actores (Estado, campesinos, etcétera). Luego se centran en el Brasil actual pero, especialmente, en el “campo de los conflictos agrarios”.

En el período comprendido entre 1985 a 1995 hubo un elevado número de conflictos en el campo —por la tierra, por las condiciones laborales, etcétera— que suscitaron las políticas implementadas. Los autores consideran que hasta hoy, no se generó una reforma agraria masiva, entendida como una redistribución de la propiedad de la tierra y una redistribución del poder. Asimismo, se interrogan acerca de los cambios agrícolas generados bajo las distintas políticas públicas aplicadas por el Estado (Plan Cruzado, Plan Real, Mercosur, etcétera) sin dejar de tomar en cuenta además los aspectos políticos, especialmente los que emanan de la Nueva Constitución.

Diego Piñeiro en su artículo “Cambios y permanencias en el agro uruguayo. Tendencias y coyunturas” nos ofrece una mirada acerca de

la evolución de las principales variables socioeconómicas en el agro desde 1960 a 1990, sin descuidar los aspectos sociopolíticos tales como las organizaciones de los productores o las políticas públicas.

En el segundo punto, Piñeiro se centra en la actual coyuntura y otorga al Mercosur un papel central para comprender las transformaciones recientes. El optimismo acerca del crecimiento del sector agrario no opaca la centralidad que se desprende del análisis acerca de la posibilidad de un desarrollo sustentable.

La propuesta de Sergio Gómez en su trabajo “Novedades en la agricultura chilena. Nuevos actores sociales y escenarios: negociaciones y confrontaciones” radica en pensar la actualidad del agro chileno desde dos pares de ideas centrales: “integración- consenso” y “desintegración-conflicto”. Ellas se toman como elementos que permiten explicar la dinámica del proceso de modernización. Básicamente estas ideas se refieren al tipo de estructuras predominantes y al tipo de relaciones sociales que establecen los actores.

En el trabajo de Sergio Gómez, además, se avanza en la formulación de un marco explicativo acerca de los efectos que la globalización y modernización tecnológica tienen sobre los procesos de trabajo, sobre las organizaciones

representativas y sobre las nuevas demandas que surgen desde los principales actores. En tales demandas, los niveles de integración así como la negociación y los enfrentamientos encuentran nuevamente espacios de expresión.

Tomás Palau en “La agricultura paraguaya al promediar la década del noventa: situación, conflictos y perspectivas”, expone de modo general, los problemas que la agricultura paraguaya arrastra para detenerse en aquellas situaciones y problemas que permiten comprender la compleja realidad paraguaya.

En efecto, el mapa agrario paraguayo, sus principales actores, el papel del Estado, las organizaciones campesinas y los nuevos debates de las políticas públicas son ofrecidas al lector a lo largo del trabajo.

Por último Miguel Murnis en el trabajo “El agro argentino: algunos problemas para su análisis” nos ofrece un amplio diagnóstico de los problemas de la agricultura.

Se interroga acerca de las nuevas formas de presentarse el capital en el agro; y con esa pregunta expresa la centralidad de las nuevas transformaciones en el nivel económico financiero. No obstante, Murnis enfatiza los aspectos que dan cuenta de la complejidad y profundidad de las transformaciones: la cuestión social, los viejos y nuevos actores sociales, las

dimensiones culturales. Finalmente, retoma la cuestión agraria y rural explorando la posibilidad de una fragmentación de lo agrario.

BIBLIOGRAFÍA

- Buxedas, M. 1994 “El Mercosur y las políticas agropecuarias” en *O Mercosul e a Comunidade Europeia* (Porto Alegre: UFRGS).
- Chudnovsky, D. 1993 “El futuro de la integración hemisférica: el Mercosur y la Iniciativa para las Américas” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 32, N° 28, enero-marzo.
- Del Huerto Romero, M. 1994 “Mercosur-Nafta y apertura comercial al mundo: condiciones y factores nacionales que han favorecido la creación del mundo” en Laredo, I. (comp.) *Estado, mercado y sociedad* (Rosario: Universidad Nacional de Rosario).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1995 “Los pequeños productores cañeros y la integración económica con Brasil” en Beckerman, M. y Rofman, A. (comps.) *Integración y sociedad en el Cono Sur. Las relaciones con el MERCOSUR y Chile* (Buenos Aires: Espacio Editorial).

- Hirst, M. 1992 “Condicionantes y motivaciones del proceso de integración y fragmentación de América Latina” en *Integración Latinoamericana* (Buenos Aires: INTAL-BID) N° 175.
- Laredo, I. 1994 “América Latina en el sistema internacional. La integración regional como herramienta de transformación del status” en Laredo, I. (comp.) *Estado, mercado y sociedad* (Rosario: Universidad Nacional de Rosario).
- Marloie, M. 1995 “Comunidades Económica Europea e MERCOSUL: da confrontação a cooperação, emergência de uma nova problemática” en Algorta Pla, J. O. (org.) *Mercosul e a comunidade europeia. Uma abordagem comparativa* (Río de Janeiro: Editora da Universidade / Goethe-Institut).
- Rimoldi de Ladman, E. 1995 “Propuesta para la solución de controversias en los procesos de integración” en Beckerman, M. y Rofman, A. (comps.) *Integración y sociedad en el Cono Sur. Las relaciones con el MERCOSUR y Chile* (Buenos Aires: Espacio Editorial).
- Romano, J. O. 1995 “El Mercosur como proceso social: el reconocimiento público y las estrategias de los actores sociales agrarios brasileños en el contexto de la integración regional” en Cloquell, S. y Santos, E. (comps.) *Argentina frente a los procesos de integración regional. Los efectos sobre el agro* (Rosario: Homo Sapiens).
- Teubal, M. 1997 “Mercosur, Argentina, and Regional Integration processes” en Fernández, A. y Hogenboom, E. (eds.) “The Political Economy of open regionalism” en *Latin American, International Journal of Political Economy*, Vol. 26, N° 4.
- Vizentini, P. G. F. 1995 “Diversidades e adversidades dos processos de integração” en Algorta Pla, J. O. (org.) *Mercosul e a comunidade europeia. Uma abordagem comparativa* (Río de Janeiro: Editora da Universidade / Goethe-Institut).
- Zimmerling, R. 1992 “El futuro de América Latina en el mercado mundial” en *Integración regional vs. Integración en el mercado mundial* (Buenos Aires: Fundación Ebert).

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LOS ESTUDIOS RURALES EN LA ARGENTINA DURANTE EL SIGLO XX* **

INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende dar un panorama general del aporte de las Ciencias Sociales a los estudios de los procesos agrarios y mundos rurales de Argentina. Está diseñado como una tarea de organización del material sin considerar,

particularmente, su valor teórico o metodológico. No obstante, el solo hecho de seleccionar unos trabajos y no otros supone decisiones no exentas de algún tipo de valoración académica. Esto aparece sobre todo en el último período en el que, sorprendentemente, encontré una producción abundante y heterogénea.

* Giarracca, N. 1999 "Las Ciencias Sociales y los estudios rurales en la Argentina durante el siglo XX" en Giarracca, N. (coord.) *Estudios rurales: problemas, teorías y estrategias metodológicas* (Buenos Aires: La Colmena).

** El trabajo tuvo una primera versión, "Los aportes de las Ciencias Sociales a la cuestión agraria argentina", producto de una exposición que Susana Aparicio, María Isabel Tort y yo realizamos en 1985 en un seminario titulado "El agro argentino, hoy". Sobre la base de esas exposiciones redacté provisoriamente aquel trabajo que circuló como trabajo mimeografiado. No contenía la bibliografía, llevaba la autoría de las tres y durante estos años fue muy utilizado por los docentes del campo temático. Por esta misma razón, después de 12 años,

he decidido retomarlo; completar un cuarto período, revisarlo e incluirle la bibliografía que, a mi juicio, es un importante propósito de pasar aquella exposición a la forma de artículo. Lamentablemente mis colegas no pudieron acompañarme en esta ocasión, por razones de agendas laborales; no obstante, considero que el trabajo no hubiese sido posible sin la organización de temas y autores que ellas realizaron para el primer y tercer período. En síntesis, este trabajo está diseñado y pensado, en gran medida, con Susana Aparicio y María Isabel Tort. Por último. Karina Bidaseca, miembro del Grupo de Estudios Rurales, colaboró en la recopilación bibliográfica. Asimismo agradezco las lecturas y comentarios de Miguel Teubal y Roberto Benencia de los borradores de esta versión.

Sin embargo, no es mi intención realizar un análisis que incluya una jerarquización del valor teórico de la producción ni de la injerencia que este material tuvo en las decisiones políticas de cada época. Esta tarea se va iniciando, lentamente, con algunos aportes dirigidos a evaluar las conceptualizaciones de una disciplina (Llovet, 1996) o de una temática (Barsky, 1997). También se pueden encontrar mis propias reflexiones acerca de cómo afectaron las crisis de los paradigmas teóricos a la Sociología Rural (Giarracca, 1997).

Recopilé el material e inicié un ordenamiento de acuerdo con ciertos ejes temáticos que hegemonizaron los debates en cada etapa, y en segundo lugar, encaré algunas reflexiones acerca de los avatares institucionales por los que atravesaron estas disciplinas sociales en cada etapa. Todo ello precedido de un pantallazo general del período.

La “perspectiva social” que en el título del trabajo se expresa como “Ciencias Sociales”, supone una discusión epistemológica que no es mi intención abordar aquí; simplemente partí de decisiones empíricas, condicionadas por mis propias prácticas profesionales. Ubico en esta categoría a los trabajos de la Sociología, la Antropología Social, la Geografía Humana, la Historia y la Economía Política.

Por razones igualmente empíricas, se delimitan los cuatro períodos para ubicar y contextualizar el material localizado. El primero está marcado por un acontecimiento académico: antes y después de la aparición de las Ciencias Sociales como disciplinas institucionalizadas; los otros tres, por los acontecimientos políticos de nuestro país.

El primer período incluye las primeras seis décadas de este siglo, etapa anterior a lo que se considera la “profesionalización de las Ciencias Sociales”. En ella inserto autores que, sin estar “profesionalizados” como académicos, tuvieron una marcada influencia en el desarrollo posterior de las disciplinas sociales aludidas.

El segundo período abarca desde finales de los cincuenta —que es el momento de la institucionalización de las Ciencias Sociales como carreras universitarias— hasta 1976. Fue una etapa muy productiva, que supuso uno de los períodos más fructíferos de la universidad argentina, así como el trabajo de equipos técnicos de primer nivel en el aparato del Estado (véase Giarracca, 1991).

En el tercer período se consideran los años del “proceso militar” y se intenta dar cuenta del sistemático desmantelamiento de centros de estudios y equipos de trabajo que operaban

en las universidades y organismos del Estado. Asimismo se recuperan los intentos organizativos de finales de la dictadura.

Por fin, el último período, que tomo como un bloque por razones prácticas, podría subdividirse tanto en relación con los procesos agrarios como con los estudios rurales. Respecto del primer punto, es el momento de la agriculturización, en especial del auge sojero. Luego se presenta una retracción productiva y se genera la medida política más impactante de esta parte del siglo: la desregulación económica (1991). Asimismo es el momento de las normalizaciones universitarias, rearmados de grupos, formación de recursos desde los programas de becas y maestrías. Es también el período de surgimiento del Mercosur, del auge de las políticas neoliberales pero también de las redes académicas, de la expansión de la informática, etcétera. Es un período complejo: por los cambios del país en su conjunto, por las novedades del mundo agrario y por los virajes de miradas para abordarlos. Ameritaría un trabajo en sí mismo y, en tal sentido, esta primera organización del material puede ser de suma utilidad para tal finalidad.

Para terminar esta introducción querría señalar la organización del texto en relación con la bibliografía. El lector va a encontrar

dos tipos de referencias bibliográficas: 1) la bibliografía que tiene que ver con el texto en su carácter de una Sociología de los estudios rurales —con el autor y el año entre paréntesis— y se encuentra al final del artículo bajo el rubro “Bibliografía citada”, 2) la bibliografía acerca de los estudios rurales que aparece dentro del texto o al final del párrafo, con la indicación de los autores y las fechas pero siempre con la referencia a la “Bibliografía general”¹. Bajo este último rubro el lector encontrará al final, como un anexo al libro, una organización alfabética de autores que durante este siglo han contribuido a conocer y comprender los procesos productivos agrarios y los mundos rurales en sus complejidades sociales y culturales. Fue mi intención seleccionar los trabajos más representativos de cada período o de cada autor. Aunque en la selección haya ausencias, errores y confusiones involuntarias, propias de toda acción organizativa y clasificatoria, es una

1 Por motivos de extensión y pertinencia, al final del presente artículo, bajo el título común de “Bibliografía”, se incluyen conjuntamente la bibliografía citada en él y las referencias explícitas a la “Bibliografía general” (extenso anexo final del libro). Para conocer la “Bibliografía general” a la que hace referencia el párrafo, véase la publicación original. [N. de los Ed.]

primera tarea que puede estimular para que se continúe y perfeccione.

PRIMER PERÍODO: EL PENSAMIENTO SOCIAL AGRARIO (1900-1956)

Desde fines del siglo XIX hasta la década del treinta, el sector agropecuario argentino generó importantes excedentes que permitieron un deslumbrante progreso económico del país. Este período expansivo, basado en un modo de producción “capitalista agroexportador”, estuvo favorecido por las condiciones internacionales que estimularon la demanda externa de la región pampeana, tanto por los altos precios de los productos agropecuarios como por el asentamiento de poblaciones en las vastas y fértiles tierras disponibles. Se produjo un proceso de expansión horizontal, en el cual la producción aumentó debido a la incorporación de tierras. Cuando este recurso se agotó, el ritmo de expansión disminuyó considerablemente.

Durante esta etapa, los principales problemas a solucionar hacían girar las discusiones —académicas y políticas— alrededor de los elementos necesarios para la puesta en producción de esas tierras que se iban incorporando con el avance de la línea de frontera: asen-

tamiento de mano de obra apta para la agricultura, colonización y propiedad de la tierra. Se propiciaron tecnologías ahorradoras de mano de obra como una forma de solucionar dichos problemas, lo que colaboró a conformar una estructura productiva que —cuando cambiaron las condiciones internacionales— respondió con la retracción.

Comenzó entonces la etapa conocida como el estancamiento pampeano que duró hasta la década del setenta. En realidad, el momento más duro se extendió entre 1930 y 1960; a partir de esta última fecha la situación había comenzado a mejorar, aun cuando seguían existiendo dificultades para mantener la participación relativa del país en el comercio mundial de granos, de carnes y de oleaginosas. Esta incapacidad de respuesta a las exigencias internacionales, y el simultáneo aumento de la oferta de otras naciones productoras, no mantenían una relación razonable con el potencial productivo del país. En términos relativos, el estancamiento continuaba.

Dado el papel del sector agropecuario en el modelo de acumulación establecido históricamente y, dentro de este, la importancia de las exportaciones, el estancamiento pampeano sacudió a la sociedad en su conjunto. Además, esta fuerte relación del sector con el resto de la economía se manifestaba en las orientacio-

nes de política económica desarrolladas por el Estado. En este mismo lapso, las economías regionales pasaron por severas crisis de producción que originaron distintos tipos de intervenciones estatales así como diversas consecuencias en el plano social.

En este período tenemos que referirnos al “pensamiento social agrario” más que a la producción de las Ciencias Sociales. Y esto es así, sencillamente, porque no existían estas disciplinas científicas tal cual las conocemos en la actualidad. No había aparecido la “profesión” del investigador social, es decir, cargos universitarios o institucionales de tiempo completo que permitieran sustentar económicamente al análisis social. De este modo, el “pensamiento social agrario” estaba generado por dirigentes económicos y políticos y por técnicos de los organismos estatales.

El debate de comienzos de siglo, estuvo signado por el pensamiento positivista. Esta influencia fue tan fuerte que la idea del progreso como proceso ilimitado deslumbraba a los pensadores de todas las corrientes. Varios autores, influidos por el pensamiento socialista, se interrogaban acerca de las razones por las que algunos sectores no podían acceder al progreso, pero no se cuestionaban el origen o la naturaleza de estos procesos. La crisis de 1930 marcó el fin de esta idea de progreso ilimitado.

La etapa del estancamiento relativo de la economía pampeana dio origen a distintas posiciones y debates.

En su libro *La agricultura y la ganadería argentina en el período 1930-1960*, José Alfredo Martínez de Hoz sintetizó la posición de uno de los sectores más poderosos del sector agropecuario, el representado por la Sociedad Rural Argentina. En dicha obra planteaba que la elevación de los rendimientos solo podía obtenerse mediante una mayor tecnificación del agro. El país, según Martínez de Hoz, había quedado en aislamiento técnico, a la zaga del progreso, a causa de la crisis de 1930, luego por la guerra, por la política desarrollada por el gobierno peronista, y por las desacertadas políticas de precios y medidas financieras y fiscales que desfavorecían al sector.

Otros autores adoptaron posiciones diferentes, más estructuralistas; ellos provenían, generalmente, del campo socialista. Así Lázaro Nemirovsky realizó un exhaustivo estudio (fue su tesis doctoral) sobre los precios y márgenes de ganancias que obtenían los terratenientes, para sustentar su argumento de la necesidad de cambios en la estructura social, capaces de superar el estancamiento.

Juan L. Tenenbaum, profesor de la Cátedra de Economía Agraria de la Universidad de La

Plata, en su libro *Orientación económica de la agricultura argentina* aparecido en 1948 demostraba el cambio producido desde 1930, año en que la crisis comenzó a sentirse con todo rigor. Fue partidario del sistema agrícola-ganadero sobre el ganadero-agrícola porque, a su juicio, aseguraba un régimen económico más estable. Sus argumentaciones tendían a demostrar la necesidad de un desarrollo agrícola-industrial como única posibilidad de superación de una etapa agotada. El prólogo de su libro, escrito por Luis Reissig, se planteaba: “Su tesis coincide con el pensamiento político que ha de primar en la etapa de la democracia progresista. El mundo se abre a una sucesión de profundas reformas, entre las cuales, la agraria y la industrial tendrán que ocupar un puesto de vanguardia en el desarrollo del mundo nuevo” (1948: 7).

Durante 1943, Carl Taylor visitaba el país invitado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Taylor era un experto norteamericano en organizaciones productivas agrarias y el producto de su trabajo en la Argentina fue su libro *Rural Life in Argentina* considerado “clásico” por los sociólogos y antropólogos rurales. El autor visitó la mayor parte de las zonas agrarias del país, entrevistó a más de 120 personas representativas, conversó con periodistas, dirigentes gremiales, ministros, productores, jornaleros y

profesores universitarios. Su trabajo —lamentablemente nunca traducido al español— puso de manifiesto uno de los debates latinoamericanos más importantes de la época: el papel de la mediana explotación familiar (*farm*) en el desarrollo del capitalismo. Este autor, funcionario del Departamento de Agricultura de EEUU, lamentaba en su libro la poca difusión del modelo *farmer* en nuestro país; una de sus conclusiones enunciaba que la principal traba para su implementación era el sistema de tenencia imperante.

La influencia teórica y metodológica de Carl Taylor fue notoria durante muchos años². Prueba de ello son los trabajos publicados por la Dirección de Economía Rural del Ministerio durante 1940 y 1950: el trabajo de Vicien y Del Castillo, *Regiones sociales agrarias*, publicado en 1943 y actualizado en 1952.

Por estos mismos años, además, en el Ministerio de Agricultura aparecía el Grupo de Sociología Rural. Los análisis del primer equipo que trabajó bajo ese nombre daban cuenta no solo de la influencia de la Sociología Rural norteamericana, sino de la Geografía Humana desarrollada fuertemente en Francia.

2 Véase, en este mismo libro, el capítulo “El pensamiento de Carl Taylor”, de Floreal Forni.

Simultáneamente, comenzó un florecimiento de las Ciencias Sociales como disciplinas científicas institucionalizadas.

Aquí debemos señalar el importante esfuerzo del fundador de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Gino Germani, no solo para abrir el espacio de esta disciplina en la universidad argentina, sino en el ámbito científico en general. Durante los años cuarenta se crearon cátedras de Sociología y Economía en varias universidades, se creó el Instituto de Sociología en la UBA y aparecieron las primeras evidencias de la influencia europea en el pensamiento social. A fines de la década del cincuenta comenzaron a crearse las carreras universitarias de las principales disciplinas sociales. A pesar de todos los avatares que sufrieron las universidades, a partir de entonces comenzó una producción sistematizada de estas disciplinas científicas (véase Giarracca, 1991 y 1992).

SEGUNDO PERÍODO: LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES (1957-1976)

Este segundo período se caracterizó por la alternancia de gobiernos civiles y militares. En el nivel económico, el modelo de crecimiento

basado en la sustitución de importaciones comenzaba a mostrar signos de agotamiento y no se hallaban políticas capaces de solucionar las recurrentes crisis de la balanza comercial. Si bien la industrialización mostraba claras evidencias de desarticulaciones y contradicciones entre las diferentes fracciones de la burguesía industrial, todavía daba lugar a interregnos redistributivos que se ubican en esos momentos de los intersticios democráticos de nuestra sociedad. A una reactivación industrial correspondía un aumento de las importaciones de bienes de capital, los sectores industriales presionaban por mantener baja la tasa de cambio y esto desfavorecía a los sectores exportadores, dentro de los cuales el agropecuario era el más importante.

En el nivel agrario, durante casi todo el período la mayor preocupación giraba alrededor del estancamiento relativo de la producción pampeana y de las políticas más adecuadas para superar esa situación. Las crisis de superproducción de las economías regionales tuvieron consecuencias significativas en el nivel de sus conflictivas estructuras productivas y de los sectores sociales involucrados. Se produjo una importante reestructuración de las organizaciones gremiales de la región y se exacerbó el conflicto social.

Durante los años sesenta aparecieron, por un lado, nuevos y significativos aportes de la Teoría Social y, por otro, un fructífero debate entre los economistas neoclásicos y estructuralistas. Esta confrontación se observó en toda América Latina, pero tuvo ciertas particularidades en el país dado su específico desarrollo agrario dentro de la región.

El pensamiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), claro exponente del pensamiento estructuralista, fundamentaba la necesidad de transformación del sector agrario en el necesario papel que este cumplía en el desarrollo general de las naciones. Desarrollo que, para la CEPAL, debía estar basado en el sector industrial. Es decir, había que adecuar el sector agrario a las necesidades del desarrollo industrial, principal pivote del crecimiento y el bienestar general.

La CEPAL señalaba dos elementos de la problemática agraria latinoamericana a considerar cuidadosamente: a) la lentitud del crecimiento ligado a determinadas estructuras agrarias, y b) la estructura de propiedad y tenencia de la tierra. Ambos elementos merecieron cuidadosos estudios en la mayoría de los países del área. En el nivel teórico, el estructuralismo trató de incorporar y formular conceptos capaces de dar cuenta de la realidad latinoamericana

oponiéndose, de este modo, al automatismo y la universalidad del proceso de desarrollo implícito en el pensamiento neoclásico.

En oposición al estructuralismo, los neoclásicos hacían abstracción del contexto social donde se desarrollaba la producción. Esta escuela estaba basada en una sólida tradición intelectual y el representante más significativo para América Latina fue Theodore Schultz.

Para Schultz las diferencias dentro de las agriculturas latinoamericanas reflejaban el grado de contribución al crecimiento económico que ellas realizaban. Caracterizaba a las agriculturas tradicionales en términos de una racionalidad propia y proponía su modernización a través de la disponibilidad de nuevos medios de producción de alta rentabilidad. El tratamiento del problema se planteaba en términos de decisiones individuales y no del contexto más general que condiciona estas decisiones.

Para los neoclásicos, las políticas gubernamentales de los países latinoamericanos estaban inspiradas en principios industrialistas y habían logrado que los precios en la agricultura fueran sistemáticamente inferiores a los "precios sombras". Se desalentaba el flujo de capitales al sector y los precios bajaban. De esta forma, concluían los neoclásicos, se producía una disminución en la tasa de beneficio

que condicionaba las decisiones de inversión del productor.

En este mismo período, simultáneamente al debate entre economistas neoclásicos y estructuralistas, aparecieron nuevos aportes de la Teoría Social. Estas nuevas corrientes, que caracterizamos de manera general como “dependentistas”, al igual que el estructuralismo en Economía, proponían entender a América Latina con parámetros teóricos propios. Los análisis de Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Pablo González Casanova, Ruy Mauro Marini impugnaron los supuestos de las teorías sociales norteamericanas y dieron el debate tanto en el campo académico como en el político.

La influencia de la teoría marxista del desarrollo desigual y de la teoría política del imperialismo se puede comprobar en cualquiera de las variantes de la escuela dependentista. Astori (1984) sostiene que el dependentismo realizó una crítica al enfoque dualista que predominaba en la bibliografía sociológica de la época y jerarquizó las condiciones del funcionamiento capitalista relacionadas con el sistema mundial con una identificación de las contradicciones asociadas a dicha expansión.

El esquema analítico que consideraba ciertos espacios de expansión capitalista como ne-

cesitados de otros —capaces de generar mayor nivel de explotación— era utilizado tanto para la relación entre países desarrollados y subdesarrollados como para la relación entre regiones de un mismo país con distintos grados de desarrollo. La teorización acerca del “colonialismo interno” se usó como referente obligado para explicar las desarticulaciones sociales y regionales de América Latina, oponiendo esta perspectiva analítica a la del “continuo rural-urbano” que había sido utilizada por los funcionalistas en años anteriores.

A finales del período se acentuó la influencia de las teorías que debatían “la cuestión campesina”. Los estudios sobre la persistencia o desaparición campesina se realizaban en la mayoría de los países donde la problemática de la pequeña producción ocupaba un lugar central. En nuestro país la Antropología Social había tenido un débil desarrollo y, salvo escasas excepciones, no había una línea de estudios campesinos. Sin embargo, la rica discusión que se formulaba en otros países despertó interés en antropólogos y sociólogos. Prueba de ellos son dos publicaciones de importante difusión que aparecieron en 1972 y 1974, respectivamente. Se trata de: 1) el *Estudio del campesinado*, una recopilación de los aportes de la Antropología Social norteamericana realizada y prologada

por el antropólogo Leopoldo Bartolomé³, y 2) la traducción al español de *Teoría de la organización campesina*, de Alexandre Chayanov, realizada y prologada por Eduardo Archetti.

A partir de estas reflexiones sobre los paradigmas teóricos, intentaremos ubicar la producción del período.

Aquellos años representaron una época de gran efervescencia social y política en el país. Existían centros académicos de primer nivel en las universidades, proliferaban los equipos técnicos (con cierta autonomía conceptual) en el aparato del Estado. También existía un reducido número de centros de investigación privados que habían sido creados posteriormente a la intervención universitaria de 1966. Entre ellos pueden mencionarse el Instituto Di Tella, el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales (CICSO) y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR).

Los temas que focalizaron la atención de las Ciencias Sociales fueron: 1) el estancamiento de la producción pampeana; 2) los arrendamientos y las posibilidades de la mediana producción en la región pampeana; 3) la crisis de

los cultivos regionales; 4) la problemática de la mano de obra agrícola; y 5) las organizaciones gremiales de los productores.

El primero de estos temas fue debatido fundamentalmente por economistas e ingenieros agrónomos. Las interpretaciones neoclásicas del estancamiento provenían de los economistas de la Sociedad Rural Argentina y están publicados en los *Anales de la Sociedad Rural Argentina* o en el diario *La Nación*. En esos textos se explicaba el lento crecimiento de la producción pampeana como una consecuencia de las políticas gubernamentales desfavorables al sector agropecuario. Políticas tales como fijación de precios, tasas de cambio, retención de las exportaciones y otras medidas impositivas lograban desalentar la inversión en el sector y producían el estancamiento.

A diferencia de los primeros, los llamados economistas “estructuralistas” no abordaban el estancamiento como un problema del “sector” frente al Estado, sino que basaban sus análisis en el papel del terrateniente pampeano como agente económico del desarrollo capitalista. Algunos de ellos subrayaban la resistencia de estos productores a introducir métodos de producción más intensivos. Consideraban que los grandes terratenientes no se comportaban como capitalistas en procura de ganancias.

³ Véase el capítulo “La antropología social y el medio rural en la Argentina”, de Hugo Ratier y Roberto Ringuelet.

Esta tesis fue sostenida por Aldo Ferrer y Horacio Giberti.

Dentro de los “estructuralistas”, otro grupo de autores intentaba demostrar la racionalidad capitalista de las explotaciones extensivas (Guillermo Flichman). En general, los autores que debatieron acerca del estancamiento pampeano desde estas posiciones fueron Horacio Giberti, Aldo Ferrer, Oscar Braun, Edith Obschatko, Alain de Janvry, Guillermo Flichman, Miguel Teubal y Alfredo Pucciarelli (aun cuando este último publicó su trabajo en los años ochenta). Sin duda, muchos de estos economistas no escapaban a la influencia de las teorías neoclásicas, pero se planteaban los problemas y los interrogantes desde espacios teóricos influidos por las distintas variantes de las “teorías críticas”.

El papel de los productores medios en el desarrollo pampeano y la discusión sobre el destino de los arrendatarios dieron lugar a investigaciones y publicaciones. Así, por ejemplo, el trabajo de Daniel Slutzky sobre “Los aspectos sociales del desarrollo rural de la Pampa Húmeda”, publicado en la revista *Desarrollo Económico*, cuestionaba las interpretaciones que sostenían que la mayor parte de los arrendatarios habían podido acceder a la compra de la tierra.

La mayoría de estos trabajos tomó como base y referencia el análisis llevado a cabo por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola y el Consejo Federal de Inversiones (CIDA-CFI). Este informe puso de relieve el grado de concentración de la tierra y la presencia del minifundio dentro del sector agrario argentino. La información analizada, que se basaba en el Censo Agropecuario de 1960, así como el enfoque histórico estructuralista, perduraron durante décadas en los estudios de la cuestión agraria del país.

A mediados de los años setenta, la mayoría de los cultivos regionales pasaron por crisis de diversa índole; el éxodo rural persistía y a finales de la década los productores de estas regiones buscaban formas de organización gremial diferentes a las tradicionales. Estos temas concentraban la atención de los equipos que trabajaban dentro del aparato del Estado.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) albergaba interesantes equipos de investigadores que produjeron sólidos informes sobre la región NEA, entre otros nombres recordemos a los sociólogos Daniel Slutzky, Víctor Broherson, Gustavo Tesoriero, quienes trabajaron sobre las producciones de algodón y tabaco.

Otro tanto ocurría en el Grupo de Sociología Rural de la Secretaría de Agricultura y Ga-

nadería donde, a partir de 1969 y hasta 1976, un grupo de sociólogos, economistas y agrónomos emprendió una serie de trabajos sobre los pequeños productores y la mano de obra agrícola en las regiones del norte. Algunos de los sociólogos participantes en este grupo, que aún hoy persisten en los estudios rurales de tipo académico, son: Susana Aparicio, Mercedes Basco, Norma Giarracca, Diego Piñeiro y Susana Soverna.

El Departamento de Economía del INTA-Castelar desarrollaba el programa Sistema de Información para el Plan de Abastecimiento de Productos e Insumos de Origen Agropecuario (SIPNA). El mismo consistía en la descripción de sistemas productivos y de comercialización por productos, con el fin de planificar la producción en función de los mercados.

A estos trabajos de carácter empírico, pero que contribuyeron a generar abundante y calificada información sobre el sector, debemos agregar otros con problemáticas abordadas teórica e históricamente. En este sentido, el CICOSO albergó a un importante número de sociólogos, antropólogos, historiadores y economistas que contribuyeron a los análisis de la estructura social agraria, los desequilibrios regionales y las estructuraciones de clase. En estas temáticas podemos ubicar a los siguien-

tes autores: Osear Colman, Alfredo Pucciarelli, Nicolás Iñigo Carrera, Diego Piñeiro y Mercedes Basco. Ellos, como muchos concurrentes a los seminarios, se beneficiaron con las lecturas y reflexiones grupales coordinadas por Miguel Murmis.

El debate de la viabilidad de la pequeña explotación familiar congregó estudios de la Antropología Social. Muchos de los trabajos realizados sobre el tema se presentaron en un encuentro de la Asociación de Economía Agraria, en la provincia de Tucumán, durante 1974. En tal dirección pueden mencionarse los estudios sobre este tema de Hebe Vessuri, Esther Hermitte, Carlos Herrán y Leopoldo Bartolomé.

Simultáneamente a estos eventos, otro importante antropólogo, Santiago Bilbao, junto con un grupo de agrónomos, llevaba a cabo la experiencia de organizar y acompañar en su funcionamiento la primera cooperativa de producción agrícola en el país: Campo de Herrera, en la provincia de Tucumán. Este emprendimiento que, tempranamente, articuló la teoría y la acción, estuvo sostenido por la pericia técnica del Ing. Roberto Fernández de Ullivarri y por la valiosa producción intelectual de Bilbao en temas de campesinos y mano de obra rural.

Si bien se estudiaron las condiciones de trabajo de la mano de obra agrícola, la experiencia no incorporó a tantos técnicos e investigadores como la de los pequeños agricultores. A partir del clásico trabajo de G. Gallo Mendoza y J. Tadeo, *La mano de obra en el sector agropecuario*, comenzaron a desarrollarse estudios sobre la precariedad del empleo rural (Sociología Rural de SEAG), las migraciones (Carlos Reboratti, Cristina Sabalain, Mario Margulis), las deficientes condiciones laborales y la estacionalidad del empleo (Hebe Vessuri, Nicolás Iñigo Carrera, Floreal Forni).

Tampoco el estudio de la problemática gremial de los sectores agrarios recibió un exhaustivo tratamiento. Sin embargo, cabe mencionar trabajos como los de Liliana Kuznir y Nidia Margenat, sobre la Federación Agraria y los de Francisco Ferrara y Leopoldo Bartolomé, sobre las Ligas Agrarias. La búsqueda de una interpretación para los fenómenos políticos del sector tampoco contaba en aquellas décadas con muchos adherentes.

El trabajo de Francisco Delich sobre el estudio de las luchas sociales y políticas de los campesinos cañeros de Tucumán, publicado como *Tierra y conciencia campesina en Tucumán*, intentaba relacionar las condicio-

nes económicas y la posición estructural del pequeño agricultor con su identidad política peronista. Por último recordamos un estudio acerca de las formas prepolíticas de organización de los sectores marginados de las regiones pobres del país, *Isidro Velásquez, formas prerrevolucionarias de violencia*, firmado por el sociólogo Roberto Carri. Influido por los análisis de la época, en especial por Eric Hobsbawm y Franz Fanon, relacionaba el “bandolerismo social” del campo chaqueño con las condiciones de posibilidad para la acción política radicalizada.

En este período se produjeron otros tres trabajos que he dejado intencionalmente para tratar en forma particular porque, a mi juicio, sintetizaron significativos debates teóricos y permitieron abrir la discusión conceptual sobre cuestiones altamente relevantes. El primero fue un trabajo dirigido por el sociólogo Miguel Murmis que se conoció como el estudio sobre marginalidad y que dio origen a varios artículos del número 69/2 de la *Revista Latinoamericana de Sociología* del Instituto Di Tella y en otros números posteriores de la misma revista. Estos trabajos partían de formulaciones teóricas del marxismo y discutían la validez de ciertos conceptos para las realidades subdesarrolladas. Pero el debate teóri-

co estaba acompañado por extensos trabajos empíricos sobre el norte, sobre distintas producciones y actores sociales, que marcaron un hito en los estilos de trabajo en la Sociología Rural de nuestro país.

El segundo trabajo al que hacemos referencia es el de E. Archetti y K. Stölen, *Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino*. En él se recoge el redescubrimiento de los aportes del economista ruso Alexandre Chayanov, se discute el concepto de campesinado y, a través de un trabajo de campo en Santa Fe, se caracteriza al colono argentino y se lo conceptualiza como empresa familiar susceptible de llevar adelante un proceso de acumulación, lo cual lo diferenciaría, según los autores, de las unidades campesinas de producción.

Por último, el libro de Guillermo Flichman, *La renta del suelo en el desarrollo capitalista* sintetiza la producción del período. Utilizó gran parte de la información disponible para las distintas regiones del país, y, apoyándose en la teoría de la renta, interpretó las formas asumidas por el desarrollo capitalista en el sector agropecuario argentino. Si bien es un trabajo publicado en 1977, fuera de nuestro país, consideramos que constituye “un broche de oro” de un período que, si bien tuvo grandes falencias

u olvidos, dejó un importante aporte al estudio de la cuestión agraria.

TERCER PERÍODO: EL “PROCESO” (1976-1983)

El contexto social y político en que se desarrolló esta etapa se caracterizó por una inusual concentración de poder que posibilitó la puesta en marcha de políticas que implicaban profundas transformaciones de la sociedad. La apertura de la economía nacional a la competencia internacional, la política financiera que sobredimensionó a este sector y la crisis de endeudamiento de los sectores económicos, para nombrar solo algunos aspectos de la política económica de “las juntas”, se acompañaban por la represión social y política más fuerte y sistemática de la historia argentina.

En lo que atañe al sector agropecuario, es el período del salto productivo de algunos productos pampeanos, proceso que se conoció como la “agriculturización” de la región pampeana. Este cambio fue acompañado, además, por la expansión y transnacionalización de la industria de insumos (semillas, agroquímicos) y por un notable cambio en los sistemas productivos. Las regiones extrapampeanas tam-

bién registraron cambios de consideración, como la expansión de productos y capitales de origen pampeanos, el apoyo a nuevos productos de exportación y la aparición de nuevos sujetos sociales.

Pero veamos qué pasó durante esos años en los centros e instituciones donde se llevaban a cabo trabajos sobre el sector agrario. En el ámbito de la universidad desaparecieron las cátedras que se habían consolidado en décadas anteriores. Es necesario señalar que, si bien este era un proceso que comenzó a darse durante la última etapa del gobierno de Isabel Perón, se aceleró y encontró su punto culminante a partir del gobierno militar. Se cerró la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias que funcionaba en el INTA-Castelar, se desactivaron los equipos que trabajaban en el aparato del Estado, tanto en el INTA como en el CFI y el grupo de trabajo de Sociología Rural de SEAG, y se anuló la existencia del Consejo Agrario Nacional. El panorama no sería completo si no mencionáramos la persecución, desaparición y exilio de varios especialistas, así como la desaparición, muerte o exilio de dirigentes gremiales, políticos y sociales del sector agrario.

Pasada la máxima violencia, comenzó a darse un período de transición en el que se trató de continuar o iniciar algunas líneas de trabajo e

investigación. Se buscaba mantener contactos y discusiones entre los profesionales que permanecían en el país, para lo cual se desarrollaban seminarios internos o reuniones acotadas. Se trataba de compartir la bibliografía que se podía conseguir del exterior y lograr ámbitos de discusión y reflexión.

En el Grupo de Sociología Rural de la SEAG, después del dismantelamiento del equipo que había estado trabajando desde 1969, se fue reconstruyendo un pequeño grupo que comenzó un trabajo sobre el minifundio en las distintas regiones del país.

El Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), Instituto perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), fue un lugar de reagrupamiento de sociólogos que habían trabajado en otros centros y que, dirigidos por Floreal Forni y con el apoyo de becas y subsidios del Consejo, aportaron interesantes estudios sobre mercados de trabajo regionales, condiciones de trabajo, trabajo femenino e infantil, sobre los contratistas de maquinarias en la Región Pampeana. Sociólogos rurales que hoy ocupan destacados lugares académicos o profesionales aprovecharon las becas y el ambiente adecuado (excepcional para la época) para completar formaciones y posgrados.

Por su parte, el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO) desarrollaba investigaciones de tipo histórico y retomaba una línea de análisis de la estructura social. Mientras tanto, el Instituto Argentino de Desarrollo Económico (IADE) organizaba seminarios con la participación de los que trataban de proseguir el debate sobre la problemática agraria.

En este recordatorio, que intenta dar cuenta del esfuerzo de los científicos sociales que permanecieron en el país por mantener abierta la posibilidad de pensamiento y reflexión, debemos señalar también los papeles cumplidos por los seminarios y la revista *Desarrollo Económico* del Instituto de Desarrollo Económico (IDES), por el curso tutorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y por el grupo que se conoció como Centro de Estudio y Promoción Agraria (CEPA), que fue un lugar de encuentro y discusión de sociólogos, economistas y agrónomos, radicados en distintas regiones y con diversas o ninguna inserción institucional.

A partir de 1981-1982 comenzó a visualizarse la necesidad y posibilidad de incrementar los intercambios abiertos, de integrar a las reuniones los debates teóricos que se daban en otros países, y, sobre todo, de actualizar la

bibliografía. Un hito importante en ese sentido, fue el V Congreso Mundial de Sociología Rural realizado en México en 1980, donde los especialistas que habían permanecido aquí se reencontraron con sus colegas desparramados por el mundo.

Desde este momento, los seminarios y cursos fueron más concurridos, se volvían a intentar trabajos de campo, se realizaban estudios de cátedras de universidades del interior del país (Rosario, Comahue, Posadas). En estos ámbitos la escasez de recursos humanos forzó una fructífera integración interdisciplinaria, ya que las dificultades del momento requerían privilegiar el análisis de la problemática por sobre las especializaciones académicas. En la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, a través de un convenio con organismos nacionales y provinciales, la socióloga Silvia Cloquell comenzó un trabajo sobre el cambio técnico en los productores pampeanos acompañada por ingenieros agrónomos.

Durante estos años, algunos investigadores habían seguido desarrollando sus tareas de investigación en la problemática social, en centros privados con financiación de agencias internacionales que derivaban fondos especiales para los países de América Latina

que estaban sufriendo regímenes represivos. Algunos de estos centros también se abocaron a la problemática agraria. En el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA), a través de una serie de trabajos realizados por Jorge F. Sábato sobre la región pampeana, se conformó un equipo que en la última época del “Proceso”, emprendía un completo análisis sobre las transformaciones de la agricultura pampeana. Este grupo estuvo dirigido por el economista Martín Piñeiro e integró a muchos investigadores retornados al país.

También en el CEUR se trabajó sobre las problemáticas regionales, en tanto en el Centro de Estudios de Población (CENEP) geógrafos, economistas y sociólogos emprendían trabajos sobre las distintas regiones del país. Por último, en aquella época, el Centro de Investigaciones Educativas (CIE) incorporaba el tema rural a través de la problemática educativa, utilizando una interesante y novedosa propuesta metodológica: la investigación participativa.

Los trabajos de estos equipos empezaron a ser publicados y difundidos cuando nuestro país comenzó a transitar nuevamente por la senda constitucional y se encuentran en la bibliografía que acompaña a este artículo.

CUARTO PERÍODO: EL REGRESO A LA DEMOCRACIA (1983 A LA ACTUALIDAD)

En diciembre de 1983 los argentinos recobramos a través del voto la esperanza de recrear una ciudadanía perdida durante los oscuros años del “Proceso”. El desgaste que ocasionó la guerra con el Reino Unido, la recesión económica, la presión internacional y el importante papel cumplido por los organismos de Derechos Humanos, fueron algunos de los elementos que persuadieron al gobierno militar a convocar a elecciones nacionales. El presidente Raúl Alfonsín gobernó un país donde se desplegarían, con el tiempo, los cambios estructurales preanunciados durante la etapa anterior y que darían su cabal significado a la tremenda represión iniciada en 1976. La recesión económica, la deuda externa, el cambio en las relaciones de propiedad, el comienzo de la hegemonía del discurso neoliberal, las transformaciones en el mundo laboral, provocaron —y no solo en este país sino en toda América Latina— lo que la CEPAL llamó “la década perdida”.

No obstante, y casi paradójicamente, el sector agropecuario había venido creciendo en forma desigual y despareja. Algunos subsectores aumentaron su producción debido a los nuevos paquetes tecnológicos y a los cambios en las

orientaciones de los mercados (comenzaron a exportar). Otros, generalmente vinculados con el mercado interno, se estancaban y disminuían sus niveles de actividad. Se producía el *boom* de los cereales y oleaginosas debido a la producción de cinco cultivos pampeanos. A partir de los años ochenta, la heterogeneidad del crecimiento se visualiza más claramente al analizar los incrementos de los subsectores que lo componen y la evolución de la participación relativa de los mismos.

En términos generales, la modificación en el nivel productivo se daba, básicamente, por un auge del complejo sojero y de la producción ligada a la industria de aceites vegetales y a sus productos de exportación. En lo que atañe a las regiones extrapampeanas, crecían determinados cultivos, en particular: poroto seco, manzanas, arroz, té y tabaco para exportación. En los últimos años crecieron las producciones hortícolas y citrícolas.

Pero las modificaciones más importantes se daban en la estructura social del agro, situación que se reforzó a partir del decreto de desregulación del gobierno del presidente Carlos Menem, a finales de 1991.

A fines de la década del ochenta, los pequeños y medianos productores de todo el país comenzaban a sentir una serie de medidas

económicas con un sesgo fuertemente concentrador, que se desplegarían con todo rigor en los años noventa. Aumentaron los impuestos, los servicios privatizados, faltaron políticas agrarias, los costos financieros fueron muy altos, etcétera. Gran parte del sector se endeudaba e, incluso, se armaban organizaciones de los productores endeudados que temían por sus patrimonios.

Simultáneamente, a mitad de la década comenzaban a generarse otras formas de encarar la producción con diferentes formas de conseguir el capital. Se registraban dos modalidades: los fondos de inversión y los *pool* de siembra. Los productores cedían tierra a estas organizaciones que se encargaban de la producción tratando de gestionarse a grandes escalas tanto en la compra de insumos como en la venta del producto. Asimismo, se eximían de pagar los costos fijos de la explotación y los gastos del mantenimiento de las administraciones locales.

Eran notables las diferencias entre los fondos de inversión: podían ser conjuntos de productores que se asociaban para una o dos temporadas, o inversiones de capitales externos al agro, o podían darse grandes inversiones con consultoras y bancos en operaciones de grandes magnitudes.

Frente a estos sistemas más desarrollados, algunos estudiosos temen un proceso concentrador muy relevante, pero otros creen que las entradas y salidas del capital al sector no resultarán en cambios significativos en cuanto a las relaciones de propiedad. No obstante, también existen grandes capitalistas que compran importantes magnitudes de tierra (Soros, Benetton, etcétera) y se registra la formación de “grupos económicos”.

Una posible división en el período, en función de los procesos agrarios, se ubicaría en 1991, cuando el gobierno justicialista de Carlos Menem, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, terminó con toda la red institucional que había sostenido la estructura social agraria argentina desde comienzos de siglo. A mi juicio, en estos momentos de finales de los años noventa, el agro argentino está atravesando, con cierto rezago, cambios tan profundos como los que sufrió el resto de la economía argentina.

Las llamadas “economías regionales” sufrieron el impacto de la desregulación; la formación de “mercados” en regiones atravesadas por poderes locales de tipo tradicional, con capacidad de influir en el gobierno nacional a partir de los partidos políticos y sus legisladores, no es una situación meramente “económica”

como a veces se plantea. Los que más sufrieron los cambios regionales fueron los trabajadores rurales y los campesinos. Las tasas de desocupación de las provincias afectadas por estos ajustes son altas y también se registran asentamientos de subsistencias en provincias anteriormente proveedoras de mano de obra rural.

Frente a estas situaciones, el Estado, asesorado y financiado por los organismos internacionales, comenzaba a elaborar programas sociales tendientes a paliar los aumentos de los índices de pobreza rural. Es la época de los programas de apoyo a los pequeños productores, del Programa Social Agropecuario y de la gestión y aplicación de un gran programa financiado por el Banco Mundial dirigido a los estratos más necesitados (PROINDER).

Por otro lado, en el período abierto en 1984, se generó la recuperación de los espacios universitarios mediante concursos y regresó al país una generación que había permanecido exiliada en la época anterior, que se sumó a los profesionales que habían permanecido. Sin embargo, ni el sistema universitario ni el científico otorgaron las condiciones para que los científicos sociales se instalaran y permanecieran en ellos. Los bajos sueldos, la falta de concursos, el retroceso del CONICET luego de 1989 y las dificultades de todo tipo que se generaron en

las universidades, fueron razones que llevaron a muchas personas de las Ciencias Sociales a trabajar como consultores de organismos internacionales o en organizaciones no gubernamentales. En muchos de los casos hicieron las dos cosas —trabajar en las universidades o el CONICET y hacer consultorías— lo cual, a mi juicio, profundiza una interpenetración de estilos discursivos que ha sido frecuente en nuestras disciplinas.

Por otro lado, los centros privados de investigación siguieron funcionando hasta 1989. A partir de allí, se retiraron los apoyos externos y los que habían recibido del gobierno radical; algunos se trasladaron a la Universidad de Buenos Aires (CISEA; CEUR), otros se transformaron en consultoras (CEDES y CEPA). La excepción fue FLACSO, que pasó de un período de crisis en los primeros años de la democracia a otro donde recibió mayores apoyos y continuó como centro de posgrado e investigación. Paralelamente abren sus puertas la Fundación del Banco Patricios, la Universidad Di Tella y varias universidades nacionales ubicadas en el gran Buenos Aires.

Por último, están las organizaciones no gubernamentales (ONG), que tuvieron distintos comportamientos a lo largo de estos años. La que mayor impacto produjo durante los prime-

ros años de la democracia (en función de nuestro análisis) fue Estudios Comparados Interdisciplinarios de la Realidad Andina (ECIRA), que luego se transformó en Centro Andino de Investigación y Formación (CADIF). Las novedades que instaló ECIRA fueron tanto el tipo de organización como la articulación que estableció con la UBA. En efecto, fue un programa de investigación y desarrollo financiado por la cooperación italiana que aportó distintos resultados. En su primera etapa la dirigió el antropólogo Alejandro Isla, quien le imprimió un estilo muy particular; fue un programa de la UBA instalado en Jujuy que generó material de rigurosidad intelectual. Asimismo, llevó adelante un programa de desarrollo en Amaicha del Valle (Tucumán) sin que, en esta tarea, el grupo pudiera superar las dificultades y conflictos que las intervenciones de este tipo acarrearán.

Durante los primeros años, ECIRA/CADIF publicó, a mi juicio, uno de los intentos más logrados de acercar acción y Teoría Social: *Norte Andino*. Fue una revista excelentemente ilustrada donde se combinaban entrevistas e historias de vida con interesantes reflexiones, acercando al debate a los principales actores sociales del NOA. Solo aparecieron siete números, pero la experiencia marcó un estilo de trabajo que, lamentablemente, no se ha logrado

repetir. Posteriormente CADIF, ya desvinculado de la UBA y con un cambio en su dirección, cambió el estilo de trabajo y se transformó en una ONG con un funcionamiento más parecido al resto de estas organizaciones.

Junto a CADIF, existen otras ONG vinculadas con el sector rural y el medio ambiente, con desapareja producción de material en función de nuestros objetivos. Varias de ellas están fuertemente articuladas al Programa Social Agropecuario (PSA) de la SAGPyA (que es la política social para el sector agrario más importante del gobierno de Menem) y esto debido a que el PSA está dirigido por un técnico salido de sus filas. El material de este sector, con algunas excepciones, circula de modo restringido y tal vez sea el que esté más subrepresentado en la Bibliografía general anexada a este trabajo.

En síntesis, el material sobre los estudios agrarios y rurales de esta etapa está disperso, en gran medida sin publicar y, por lo tanto, tiene una circulación limitada. Cabe preguntar si estas condiciones resultan de la falta de interés de la temática en el conjunto de las Ciencias Sociales o por la falta de organización de las comunidades disciplinarias (revistas de aparición errática, escasos seminarios y congresos, etcétera).

En el recorrido de los párrafos anteriores señalé varios centros o sedes donde se produce y guarda material relevante. Sinteticemos:

- Programas de investigación de las universidades nacionales; pueden incluir maestrías o posgrados y, por lo tanto, producción de tesis de maestrías o sencillamente la producción de los equipos de investigación con investigadores y becarios; en los últimos tiempos se sumaron varias tesis de doctorados. En esta categoría incluimos también al CEIL, ya que si bien no es un centro universitario, está financiado por aportes estatales (CONICET) y la mayoría de sus miembros tienen docencia universitaria.
- Centros de investigación privados que funcionaron hasta hace poco o que siguen en funcionamiento.
- Organismos internacionales y organismos del Estado que solicitan a los consultores trabajos socioeconómicos para generar políticas públicas.
- Organizaciones no gubernamentales dedicadas a programas de desarrollo en áreas rurales.

La rigurosidad y calidad académica de la producción no son necesariamente producto de al-

guno de estos lugares en especial. No obstante, las investigaciones con producción de datos, paradójicamente, fueron más frecuentes en las universidades y en el CEIL que en otras instituciones. Sostengo que es una situación paradójica porque si bien las universidades han estado escasamente financiadas y, por otro lado, han dedicado un porcentaje muy bajo de sus presupuestos a la investigación, los equipos emprendieron costosos trabajos de campo.

Las distintas perspectivas teórico-metodológicas que podemos encontrar revisando parte del material, tienen mucho que ver con las temáticas abordadas, ya que a diferencia de los períodos anteriores hubo más dispersión temática ligada a nuevas perspectivas de análisis.

Esta organización, que aborda temáticas y perspectivas analíticas a la vez, produce un resultado ecléctico, con categorías no excluyentes en referencia a los autores. Sin embargo, lo presento de este modo en tanto permite relacionar los nuevos debates del período con los nuevos aportes teóricos metodológicos. A mi juicio, esta diversidad temática y flexibilidad teórica es la principal característica del período y es lo que propongo resaltar.

1. En primer lugar están los estudios que persisten en las perspectivas de tipo estructu-

ral⁴. Intentan dar cuenta de los cambios en las estructuras productivas, y económico-social del sector. Los anteriores trabajos jerarquizaban tierra, propiedad, tenencia y niveles de capital; los nuevos se ocuparon de recuperar las instituciones, las políticas públicas, y, en algunos casos, se detuvieron en las relaciones sociales que las estructuras soportan. Las influencias de las nuevas corrientes francesas regulacionistas y los renovados aportes de la Economía Política permitieron dotar de mayor complejidad a los trabajos de este tipo. Asimismo, muchos se produjeron bajo la influencia de modelos económicos neoliberales, sobre todo los de los organismos internacionales.

Dentro de este primer tipo podemos ubicar los estudios generados por el programa de investigación que, en los comienzos de período fue dirigido por Martín Piñeiro y lue-

4 Entiendo por posiciones *estructuralistas* un amplio espectro de teorizaciones que jerarquizan las estructuras económicas o sociales para explicar procesos y conductas económicas (y a veces sociales). Es una acepción más amplia que la utilizada en el punto del “Segundo período” donde me referí a los estructuralistas como aquellos que daban cuenta de la influencia de la escuela “cepalina” en contraposición a los economistas neoclásicos.

go por Osvaldo Barsky en el CISEA. Dicho programa pretendió dar cuenta de los cambios de la Región Pampeana hasta los años ochenta, enfocando y buscando explicaciones en el nivel tecnológico pero sin descuidar otros aspectos económico-sociales que posibilitaron los saltos productivos de la época (véanse los tres trabajos compilados por Barsky, 1988).

En la misma dirección pueden ubicarse los trabajos, también acerca de la Región Pampeana, generados por el CEPA (véase CEPA, 1983 y 1990), que permitieron un interesante debate acerca de las tendencias socioeconómicas que marcaban los cambios productivos. Los investigadores del CEPA, a diferencia de los del CISEA, sostenían que la tendencia económico-institucional indicaba que la explotación pequeña y mediana corría riegos de desaparecer, en tanto los otros enfatizaban el carácter “farmerizador” del proceso de agriculturización.

En nuestros días, al final del período, el debate sigue pero ya entre investigadores de un mismo centro de investigación: FLACSO. En efecto, Osvaldo Barsky (coordinador de la orientación Rural de la maestría de FLACSO), junto a Alfredo Pucciarelli y a Mario

Lattuada mantienen un interesante debate acerca de las tendencias concentradoras en el agro con Eduardo Basualdo, del área económica de FLACSO (véase tal debate en *Realidad Económica*, N° 134, Vol. 34). Nuevamente, mientras Basualdo crea y organiza datos inéditos, y comprueba que en el nivel de las relaciones de propiedad la concentración de la tierra es continua, Barsky sigue apostando a que no hay tendencias comprobables de desaparición de los sectores medios (basándose en los datos censales).

Es interesante señalar que este debate, que comenzó con los albores de la recuperada democracia, recorrió el período. Se expresó en artículos y también en espacios de seminarios que reunieron a los estudiosos del campo. En tal sentido el más recordado fue el que organizó en 1993 la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y se llamó “El agro argentino, hoy” (rememorando al de 1985), donde los investigadores que participaban en esta polémica protagonizaron un enervado debate.

La mayoría de los informes técnicos generados por los consultores para la SAGPyA se ubican en esta perspectiva estructuralista y fueron realizados por agrónomos, econo-

mistas y sociólogos. En general, diagnostican ciertas producciones, regiones o problemas socioeconómicos. Del largo listado de informes de todo tipo generado en este marco institucional, y publicados en *Estadísticas Agropecuarias y Pesqueras*, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Subsecretaría de Economía Agropecuaria, en 1994, he seleccionado e incluido en la Bibliografía general aquellos trabajos firmados cuyos autores son expertos de las áreas socioeconómicas, con antecedentes en trabajos de tipo académico. Es decir, traté de que los trabajos citados guarden algunas de las reglas del trabajo intelectual propias de las Ciencias Sociales.

En general son de tipo técnico, descripciones y diagnósticos de producciones, comercialización, problemas de financiación, etcétera. Entre los autores figuran especialistas con largas trayectorias en los estudios rurales como los economistas Edith Obschatko, Juan Iñigo Carrera, Sergio Levín, María del Carmen González, Graciela Gutman, etcétera. También figuran sociólogos como Mercedes Basco, Ignacio Llovet, María del Carmen Borro, Susana Soverna, Clara Craviotti, Roberto Benencia, etcétera.

Existe otro conjunto de trabajos, que ubicamos en esta primera categoría, que realizaron tipologías o tomaron para su caracterización a un sector socioeconómico en especial (campesinos, trabajadores rurales, etcétera). Todos ellos ponen énfasis en las transformaciones de los escenarios económicos donde estos sectores actúan, atribuidas a las modificaciones de un régimen social de acumulación ocurridas en los alrededores de 1970.

Ubicamos en él a las construcciones de tipologías de productores realizadas antes y después del Censo Nacional Agropecuario de 1988 orientadas a registrar cambios en las estructuras agrarias. En general se trata de investigaciones sobre las estructuras sociales que complementan la ubicación estructural del productor con otros análisis donde se ponen de relieve las capacidades de los actores no explicables desde las estructuras⁵ (véase IPDERNOA, 1992 y Giarracca y Aparicio, 1991).

Están, además, los trabajos que abordan un tipo de productor en particular: los campe-

5 Véase el capítulo “Las tipologías como construcciones metodológicas”, de Susana Aparicio y Carla Gras.

sinos, los familiares capitalizados, etcétera. Por ejemplo, los análisis acerca de los “contratistas” realizados por Ignacio Llovet en el equipo del CISEA; los trabajos que tienen esta misma dirección en el CEIL; los trabajos sobre los campesinados efectuados por economistas o ingenieros agrónomos (Mabel Manzanal, Raúl Paz, Pedro Tsakoumagkos, etcétera); los trabajos sobre la explotación familiar de la socióloga Silvia Cloquell y los generados por investigadores de la Universidad Nacional de Misiones.

Una década atrás se debatió acerca de los atributos para caracterizar a los pequeños productores como campesinos y acerca de su peso relativo en la estructura social agraria (véanse los trabajos de Giarracca y Manzanal, 1990).

Por último ubico dentro de este grupo a los estudios laborales rurales que están conectados con las redes de estudios laborales (ASET) que tienen gran influencia de la escuela de los regulacionistas franceses. En estos trabajos se hacen fuertes relaciones entre los “régimenes de acumulación” y los cambios en el mundo laboral (véanse los trabajos del área laboral del CEIL en la Bibliografía general, en especial Forni, Benencia,

Neiman y Aparicio, 1988; Benencia, 1992; Benencia y Forni, 1996).

En síntesis, en todos estos trabajos la lógica de los cambios es buceada en las profundas reestructuraciones por las que pasó nuestra sociedad desde mediados de los años setenta. Sin descuidar las tendencias externas, el énfasis está puesto en quiénes reciben dichas tendencias y cómo lo hacen, sin apartarse de las ubicaciones estructurales. Generalmente estos trabajos contienen gran cantidad de información secundaria y generación cuantitativa de datos.

2. En el segundo grupo ubico aquellos materiales que han enfatizado en sus análisis las relaciones estructurales pero condicionadas por las tendencias que escapan a los espacios nacionales. Pueden partir de aproximaciones de tipo estructuralista pero se caracterizan por plantear la problemática nacional como “casos” de tendencias internacionales. Mientras en el primer grupo el supuesto teórico está fuertemente conectado con tendencias y fuerzas sociales internas, aquí la mirada parte desde un mundo cada vez más interrelacionado.

En el período anterior fue frecuente encontrar autores que plantearan las limitaciones

que el *agribusiness* encontraba, como forma de organización, en el campo argentino. En los años ochenta comenzaba a evidenciarse el impacto de la expansión del capital agroindustrial en todo el mundo. Nuestro país no podía escapar a estas tendencias dada las políticas de corte neoliberal que se estaban aplicando. Ubicamos en esta categoría a los trabajos que fueron construyendo (mirando) la problemática de la expansión agroindustrial, del sistema agroalimentario o relacionando los fenómenos locales con el proceso de globalización⁶.

Desde estos enfoques se puede analizar un particular sistema agroindustrial, pero siempre preexiste una serie de conceptualizaciones (presuposiciones en el sentido de Alexander, 1997) que derivan en formas nuevas de mirar al sector agrario, mucho más relacionado (articulado) tanto con el resto de la economía como con la economía globalizada.

Miguel Murmis, en su artículo “Algunos temas para la discusión en la Sociología Ru-

ral latinoamericana: reestructuración, desestructuración y problemas de excluidos e incluidos”, de 1994, sostiene, como lo hacen los brasileños, que puede hablarse de la “calificación” del agro, como una nueva forma de analizar al agro, ya no como sector sino en el escenario de sus articulaciones con el resto de la economía. Desde estas miradas, es importante analizar tanto a quienes entran como a los que quedan fuera de estos procesos agroindustrializadores.

Dentro de este segundo grupo de materiales podemos ubicar tanto a economistas como a sociólogos y geógrafos que comenzaron tempranamente a plantear la incorporación de Argentina a la fuerte expansión agroindustrial que se daba en el nivel mundial. Los trabajos de los economistas Miguel Teubal y Graciela Gutman fueron pioneros en tal sentido. Ambos autores habían trabajado con las metodologías de los complejos o sistemas agroindustriales y agroalimentarios en México y Venezuela, respectivamente, y los aplicaron antes que nadie en nuestro país (véase Gutman y Gatto, 1990, y Teubal, 1995).

Simultáneamente, los sociólogos y geógrafos acompañaron estos trabajos enfocando

6 Véase el capítulo “Complejos y sistemas agroalimentarios: aspectos teórico-metodológicos”, de Miguel Teubal.

las relaciones, los conflictos y las negociaciones entre actores dispares dentro del espacio del CAI.

Podemos mencionar, en estas líneas, los trabajos que se hicieron alrededor de la agroindustria frutícola del alto valle de Río Negro realizados por la socióloga Mónica Bendini y sus colaboradores; por el geógrafo Gerardo De Jong y por el economista Ernesto Bilder, todos ellos investigadores de la Universidad Nacional del Comahue. También están los trabajos acerca de las agroindustrias del NEA y NOA —arroz y caña— llevados a cabo, en una primera época por Susana Aparicio, Norma Giarracca, Susana Soverna y María Isabel Tort en el marco del CEPA. Encontramos también un programa coordinado por Alejandro Rofman en el CEUR que abordó las agroindustrias y que en los últimos tiempos continúa sus análisis incorporando el impacto del Mercosur. Un equipo de la Facultad de Agronomía también toma los cambios que el Mercosur produce en la agroindustria arrocería (Liliana Pagliettini). Asimismo encontramos los trabajos sobre cebada cervecera de Teubal y Pastore y sobre el complejo avícola de Patricia Dávalos (véanse todos estos autores en la Bibliografía general).

Graciela Gutman llevó a cabo estudios agroindustriales dentro del marco de consultorías para la SEAGYP, introduciendo estas metodologías en los informes técnicos del sector público (Gutman y Rebella, 1989).

Ya entrando en la década del noventa, los estudios agroindustriales despertaron el entusiasmo de los jóvenes investigadores formados durante este período y que fueron sistematizando y comentando los trabajos realizados durante la década del ochenta (véase Martínez Ibarreta, Pucciarelli y Posada, 1994).

En la temática agroalimentaria podemos incluir, además de los aportes de Teubal y Gutman, los de Graciela Ghezan y Mónica Mateos de la Universidad Nacional de Mar del Plata (véase Ghezan y Mateos, 1994). En los últimos años, desde distintas instituciones, se fueron generando una serie de trabajos acerca de la actividad hortícola, que contienen elementos relacionados con el problema alimentario, con las nuevas formas de organización agrícola, con las migraciones de bolivianos⁷, etcétera (véase Benencia, 1997).

7 Véase el capítulo “El concepto de movilidad social en los estudios rurales”, de Roberto Benencia.

Estos trabajos también contienen mucha información secundaria y generación de información cuantitativa primaria. Asimismo existe un gran componente de análisis de tipo comparativo en ellos ya que, como decíamos antes, la metodología de los “complejos o sistemas agroindustriales” es aplicada con pocas variantes para distintas producciones y en distintos países. Además, los sociólogos y antropólogos introducen información cualitativa que acerca a los lectores mundos sociales de los actores estudiados.

3. El impacto de la crisis y los virajes de las teorías sociales después de los años setenta fue menor en la Sociología y la Antropología Rural que en otros campos temáticos (los estudios políticos; los culturales, por ejemplo). En esta tercera categoría incluiremos todos aquellos trabajos que registran tales impactos de distintas formas y en diferentes grados. En general son estudios de tipo interpretativo, con más énfasis en “la comprensión” que en la explicación, lo cual supone un lugar distinto del investigador. En efecto, la comprensión de los significados y los sentidos que producen los sujetos es, básicamente, una experiencia comunicativa y, además, requiere de una participación del investigador y de otra preparación para producirla.

En tales estudios se reconoce la búsqueda de “actores”, “agentes” capaces de producir sentidos, representaciones en un mundo social del cual el investigador no es ajeno. Ya no es la “estructura” la que otorga inteligibilidad a las relaciones y procesos sino que la realidad social está pensada en términos de símbolos (signos, representaciones) cuyo significado (sentido, valor) queremos comprender.

El material que incluimos en esta categoría se debe, básicamente, a antropólogos y sociólogos. Por otra parte, aunque con cierta lentitud, los politólogos se van acercando a los estudios rurales y, por lo menos, conocemos un aporte producido desde esta perspectiva.

En general, este tipo de estudios requiere de trabajos de campo, de cierta etnografía capaz de acercar al lector los mundos sociales y de vida de las poblaciones rurales⁸. Sin em-

8 Acerca de las dificultades y posibilidades que presenta esta forma de trabajo, puede consultarse la Tercera Parte de este libro, particularmente los capítulos de P. Gutiérrez y M. Roggi “Encuentros y desencuentros. Reflexiones sobre el trabajo de Campo”; K. Bidaseca, “Etnografías de un encuentro: un intento de reflexión metodológica”; y N. Giarracca y K. Bidaseca, “La entrevista: técnica metodológica y experiencia comunicativa”.

bargo también es posible trabajar sobre los escenarios donde participan los actores que generan conflictos, negociaciones, arreglos, con materiales periodísticos, textos (declaraciones, solicitadas, etcétera). Un buen ejemplo de un manejo mixto de material es el trabajo del politólogo José Nun en un ensayo de hace unos años sobre la agroindustria láctea (véase Nun y Lattuada, 1991).

En general, buena parte de los antropólogos y un buen número de sociólogos están trabajando desde estas perspectivas. Las referencias a la teoría de la acción, a Anthony Giddens o a Pierre Bourdieu ya no son excepciones en los estudios rurales. Los trabajos del antropólogo británico Norman Long en la Universidad de Wageningen, Holanda, contribuyeron a consolidar lo que fue circulando como “la perspectiva del actor”. La mirada comenzó a posarse en los actores y sus acciones; empezaron a circular conceptos tales como “estrategias familiares”, “acciones colectivas”.

Los nuevos movimientos sociales de las mujeres de productores endeudados u otros que resultaban en organizaciones gremiales o cooperativas, despertaron también la curiosidad de los estudiosos. La mujer rural y la

expansión de la pelea por los derechos, por el espacio en la democracia de las minorías étnicas (mapuches, kollas, etcétera) fueron abriéndose paso como temas desde estas perspectivas teóricas metodológicas. Los temas de la cultura, de las identidades étnicas, de género o sociales, son abordados por sociólogos y antropólogos. Los interrogantes del biculturalismo como facilitador o limitante de la modernización económica circulan no solo por los ámbitos académicos sino por los de las ONG. Además, esta perspectiva intenta abrirse paso en los debates acerca del “desarrollo rural” donde los discursos estructuralistas aún son hegemónicos.

En el nivel académico, estas perspectivas permiten que los jóvenes sociólogos y antropólogos, formados en carreras donde predominan las nuevas teorías sociales, se interesen por los estudios rurales y generen sus trabajos desde estas orientaciones.

Ubico en esta categoría el trabajo de Nun anteriormente citado, los trabajos del Programa de Investigación coordinado por el antropólogo Mauricio Boivin de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Universidad de Paraná, los trabajos del antropólogo Hugo Ratier, investigador de la

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; los trabajos acerca de las transformaciones de los productores familiares frutícolas de Río Negro llevados a cabo por un grupo interdisciplinario (que incluye a una filósofa) de la Universidad de Comahue. Incluyo nuestros propios trabajos acerca de las acciones colectivas en los mundos rurales (Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani); las tesis y trabajos acerca del mundo rural del Programa de Posgrado de la Universidad Nacional de Catamarca, en especial los de la antropóloga Cynthia Pizarro. También están los trabajos del santiagueño José Luis Grosso, del antropólogo Alejandro Isla y los aportes de Silvia Cloquell acerca del medio ambiente desde la perspectiva del actor.

En los programas y grupos de trabajo mencionados, los jóvenes han producido tesis de posgrados e informes de investigación que son muy buenos ejemplos de estas nuevas miradas sobre los mundos sociales agrarios (véanse en tal sentido Cynthia Pizarro; Fernando Balbi; Valeria Hall; Inés Alfaro; Paula Gutiérrez, Leandro Bertoni, entre otros). El uso de la “historia de vida” ayuda a comprender los mundos de vida de los actores sociales que protagonizaron acciones colectivas (véase Bidaseca, 1998).

Estas miradas “comprensivistas”, en muchas ocasiones complementan los análisis de tipo estructural que utilizan datos cuantitativos (triangulaciones). Estas interesantes combinaciones aparecen en general en los trabajos de los sociólogos Floreal Forni, Roberto Benencia⁹, Guillermo Neiman, Susana Aparicio, Carla Gras y en los de casi todos aquellos que se manejan con entrevistas a los actores involucrados en sus investigaciones. No siempre la presentación de las entrevistas da lugar a interpretaciones del investigador, más bien aparecen como ejemplificación o testimonio de algo que se argumenta desde los datos.

4. Querría establecer una categoría residual, mucho más ecléctica que las anteriores, que incluye temas que refieren a problemáticas agudizadas en estos tiempos. Me refiero a los estudios sobre la pobreza, la mujer rural y el medio ambiente. En efecto, la importancia de estos problemas convocó un mayor interés por parte de los estudiosos de los años noventa que están en la

9 Véase el capítulo “Aspectos metodológicos de una investigación sobre población y salud en áreas rurales. El uso de indicadores simples y complejos”, de Roberto Benencia.

búsqueda de aproximaciones teóricas-metodológicas para un fructífero abordaje y de cómo institucionalizarlos en los campos académicos. Aquí no podemos establecer relaciones entre “temas” y “abordajes” sino que en los abordajes de estos problemas encontramos tanto posturas estructuralistas como comprensivistas.

En efecto, en el tema de pobreza rural Miguel Murmis no solo ha realizado importantes aportes teóricos y rigurosos análisis de datos (véase Murmis, 1996) sino que congregó una discusión interdisciplinaria en una sesión especial del congreso de “Pobres y pobreza en Argentina” que tuvo lugar a fines de 1997 en la Universidad Nacional de Quilmes. Allí se presentaron trabajos sobre trabajadores rurales, campesinos pobres, migrantes, multiocupados, y se propuso la construcción de una red temática.

El tema había sido abordado unos años antes por la economista Mabel Manzanal, quien publicó un primer diagnóstico acerca del problema en el año 1993 en *Estrategias de sobrevivencia de los pobres rurales*.

Como se dijo antes, en el tema de la pobreza rural existe un particular interés del Banco Mundial que desarrolla un programa (PRO-

INDER) en la Secretaría de Agricultura. Dentro de tal programa se generaron importantes informes que recopilaron los trabajos sobre pobreza y pobres rurales y que produjeron buenas síntesis a partir de categorizaciones muy útiles (véase Craviotti, 1995, Soverna, 1995, Benencia y Karasik, 1995).

Desde la Economía Política, Miguel Teubal relaciona la pobreza tanto con los cambios en el modelo de acumulación, y en especial con la distribución del ingreso como con el sistema agroalimentario que modificó sustancialmente las condiciones de posibilidad de acceso a la alimentación de vastos sectores sociales.

En la temática de género los aportes provienen tanto de los sociólogos y antropólogos sociales como de los historiadores y agrónomos. En las Jornadas “Historia de las mujeres y estudios de género”, que llevan a cabo periódicamente los Centros de Estudios de Género, se logran armar interesantes debates interdisciplinarios. Como los trabajos publicados son escasos, en la Bibliografía general incluí los trabajos presentados, fundamentalmente, a las últimas Jornadas, aun cuando también aparecen otros trabajos presentados a las anteriores jornadas que

fueron, llamativamente, muchos menos.

El trabajo de Cristina Biaggi “La mujer como productora agropecuaria en la Argentina” presentado a las últimas Jornadas en la Universidad Nacional de Tucumán en 1996, ofrece un panorama general a través del análisis de los datos censales de 1988 acerca del trabajo de la mujer en el campo. También encontramos trabajos sobre el papel de la mujer en los discursos de la modernización pampeana, sobre la problemática de la salud y las campesinas, etcétera.

Además de estos trabajos, figuran los artículos publicados con una perspectiva de “género” que intentan dar cuenta de las posiciones subordinadas de las mujeres tanto en los ámbitos laborales como familiares (véanse Basco, 1992; Racedo, 1988; Bravo y Garrido, 1993; Giarracca, 1994 y 1998; y Bendini y Bonaccorsi, 1998).

La temática del medio ambiente despertó el interés de economistas, geógrafos y sociólogos, ya sea porque se la toma como centro de interés o como un aspecto a considerar en los estudios generales. Los equipos del geógrafo Carlos Reboratti en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la socióloga Silvia Cloquell en la Universidad Nacional

de Rosario generaron una producción interesante¹⁰.

En efecto, Carlos Reboratti sabe convocar en sus análisis a otras disciplinas pertinentes al tema pero sin olvidar que el “problema” se centra en la relación del hombre en sociedad con la naturaleza. En tal sentido, los aportes de los biólogos y ecólogos con quienes trabaja otorgan densidad a estos trabajos sin que pierdan, en conjunto, la “perspectiva social”.

Por otro lado, los trabajos de Silvia Cloquell demuestran la fertilidad de la “perspectiva del actor” en este tipo de cuestiones. Ellos muestran cómo las lógicas de las decisiones de los productores, en relación con el medio ambiente, están construidas desde sus condiciones sociales y económicas. En tal sentido, las propuestas de Cloquell son muy útiles para complementar las visiones de los “ecologistas” como actores sociales.

Los trabajos del economista Pedro Tsakoumagkos ponen ciertos límites a las posiciones radicalizadas de la Economía Política ecologista y contribuyen al tema

10 Véase su capítulo en este libro “Apuntes y discusiones sobre la construcción de una sociología ambiental”.

de la evaluación de los aspectos ambientales en los proyectos de desarrollo (véase Tsakoumagkos, 1988 y 1992). Por último, se encuentran equipos de trabajo dirigidos por biólogos o ecólogos que introducen perspectivas sociales en sus análisis pero que, por razones de campos disciplinarios, no tomé en cuenta para esta organización bibliográfica.

Finalmente, desearía señalar que en este último período lamentó omitir la producción de los historiadores que, de una u otra forma, estuvo presente en los anteriores. Abordarlos hubiese representado un trabajo en sí mismo, ya que considero que la producción historiográfica desde 1984 ha sido de una fertilidad mucho mayor que la de otras disciplinas. No obstante, es necesario señalar que los historiadores contemporáneos cambiaron las imágenes de los procesos agrarios constitutivos de este país y, por lo tanto, contribuyeron a cambiar las preguntas del presente. De todos modos, muchos de los historiadores que me han ayudado, en mi tarea docente y como investigadora, a pensar el desarrollo pampeano y la conformación de la sociedad rural tucumana, figuran en la Bibliografía general.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Durante el siglo que se acaba, tanto el pensamiento social como las Ciencias Sociales que se institucionalizaron poco después de los años cincuenta, estuvieron atentas a los grandes problemas agrarios de cada período y participaron en sus debates.

Y esto no es poco, como conclusión, si recordamos cómo fueron las condiciones de posibilidad para la producción de pensamientos, ideas y debates durante este siglo que se apaga. La tensión entre “democracia-autoritarismo” o entre “institucionalización-falta de presupuesto” atravesó los ámbitos de generación del pensamiento social de este siglo. Muchos excelentes trabajos nunca llegaron a publicarse, a reeditarse o a traducirse (como el de Taylor).

Sin embargo, como vimos en las páginas anteriores, los temas relevantes para la producción agropecuaria, para el desarrollo, o para la vida de la gente han sido abordados, aunque más no sea, por un grupo o por un par de personas. Las posibilidades de difusión y circulación de estos trabajos es harina de otro costal y merecen pensarse dentro de un campo más amplio a construir por una Sociología de las Ciencias Sociales.

El otro interrogante que quiero plantear en estas últimas líneas se refiere a los efectos de los estudios rurales en la construcción social de los mundos económicos, sociales y culturales del campo argentino. Y tal pregunta se puede formular si aceptamos una perspectiva teórica “constructivista” de los mundos sociales. Es decir, si partimos del reconocimiento de nuestra participación como actores sociales universitarios, técnicos, funcionarios estatales o miembros de los programas de desarrollo, en la construcción social de los mundos rurales, comprenderemos el sentido de la pregunta. Los trabajos organizados y presentados en este artículo no fueron, según esta perspectiva, ajenos a tales construcciones.

En relación con las inserciones institucionales de los autores, varios aspectos fertilizan esta posición: circularon por distintos ámbitos —universidades, dependencias del gobierno, organismos internacionales— y no se encontraron diferencias importantes entre los estilos discursivos o las propuestas producidas en uno u otro lugar. No es posible sostener seriamente que se generaron discusiones marginales o exteriores a las instituciones.

Varios de los autores citados en el texto o que figuran en la Bibliografía general han desempeñado (o desempeñan) altos cargos de con-

ducción en la política agraria: Horacio Giberti, Lucio Reca, Felipe Solá, por nombrar los más recientes. Por su parte, sociólogos, antropólogos y geógrafos participaron en la generación de políticas públicas, en diseños de censos o en programas de desarrollo. Con las restricciones lógicas en los períodos de represión, la mayoría de nosotros pasó, en algún momento, por los espacios de la administración pública.

La mayoría de los autores “agraristas” debatió, en términos generales, dentro de posturas “modernizantes” que proponían introducciones tecnológicas que impulsaran una mayor productividad, una lógica empresarial, políticas públicas activas para mejorar los créditos, las condiciones laborales para los trabajadores, los mercados de los pequeños productores, etcétera.

Los principales debates de comienzos del siglo pueden sintetizarse en los siguientes interrogantes: *¿Cómo lograr que el deslumbrante desarrollo agrario pueda incluir a los sectores medios y a los trabajadores?* ¿Qué políticas generales limitan tal desarrollo? En los años posteriores el debate estimulado por Taylor giró alrededor de las posibilidades de extender el *modelo farmer* y poner límites al poder de los terratenientes. A partir de los años cincuenta la cuestión tecnológica ocupó el centro de la escena.

Con la institucionalización de las Ciencias Sociales los debates se tornaron más académicos pero siempre vinculados con el problema del desarrollo y sus principales actores. El tema acerca del papel del terrateniente pampeano tuvo fuertes connotaciones políticas y fue llevado a cabo por intelectuales de distintas posiciones teóricas. Pero tales debates no se correspondían con situaciones de expansión de la conflictualidad social agraria.

Y esta es una diferencia importante en relación con otras producciones intelectuales latinoamericanas, donde se pueden encontrar tanto posiciones radicales como producciones de discursos que modificaron el “sentido común” acerca de la naturalidad de las relaciones de poder. Un ejemplo de lo que afirmo reside en el significado de la idea o concepto “reforma agraria”: para la mayoría de los países latinoamericanos ya en los años setenta representaba una política pública como cualquier otra, incorporada al acervo lingüístico del “sentido común”, mientras en nuestro país se traducía como una medida que requería una revolución social previa y era casi un concepto peligroso.

Los procesos y estructuras sociales agrarias de nuestro país tenían particularidades que desestimulaban las teorizaciones radicales acerca de cambios sociales. En primer lugar, el histórico

predominio numérico de una clase media agrícola, en segundo lugar la “invisibilidad” política de los trabajadores rurales, es decir, el fracaso en la construcción de un “actor social” privilegiado para el cambio según tales posiciones.

Para las posiciones con fuertes anclajes en el marxismo ortodoxo, los chacareros y *farmers* y la Federación Agraria Argentina representaban la “pequeña burguesía” y no resultaban actores sociales interesantes para los modelos de cambios sociales. Por su parte, los asalariados rurales —aunque alcanzaron cantidades comparables con los de la Unión Obrera Metalúrgica— rara vez protagonizaron acciones colectivas y no fueron considerados sujetos políticos a tener en cuenta.

Por tales razones, los debates agrarios de los autores inscriptos en algunas variantes de las teorías críticas, siempre tuvieron como referentes al “terrateniente pampeano” y a su “cara” más política: la Sociedad Rural Argentina. Sin embargo, como vimos, no hubo consenso acerca del papel que tal actor cumplía dentro del desarrollo capitalista y casi todos reconocían su carácter modernizador. Fueron muy pocos los que argumentaban acerca de él como un sujeto tradicional, latifundiarario.

En síntesis, en los estudios rurales de este siglo fueron importantes, tanto en términos

numéricos como por sus efectos políticos, las producciones generadas desde posiciones “modernizadoras” (de cualquier origen teórico). Las variantes más “reformistas” que incorporaban las cuestiones sociales de *farmers*, campesinos y trabajadores debieron abrirse camino entre la crítica de las posiciones influidas por la izquierda tradicional y la oposición política de los que detentaban el poder. Algunos de nuestros “autores” intentaron demostrar desde el pensamiento y la acción que las posiciones “modernizadoras” y “reformista” no eran, necesariamente, incompatibles.

Pero algunos de los que intentaron producir nuevos sentidos teóricos-políticos o emprender reformas democratizadoras desde el Estado o desde instituciones como el INTA, fueron marginados o expulsados de sus cargos estatales o universitarios y sufrieron la represión de los años setenta: cárcel y exilio¹¹. Es decir, las inscripciones a líneas que cuestionaran ciertos órdenes hegemónicos y trataran de modificarlos en un “aquí y ahora”, desde los propios actores sociales, tuvieron,

en nuestro país, costos sociales y personales muy altos.

Hoy, a diferencia de épocas anteriores, el discurso neoliberal hegemónico se apropió de la idea de la “modernización” otorgándole un sentido único. El desafío de los estudios rurales, que aún conservan la crítica como elemento esencial, consiste en superar teóricamente esta falacia y poder articular la idea de la modernización con la de salidas múltiples y diversas. La tarea es tan complicada como lo fue pensar la modernización con las reformas sociales en otros momentos. El discurso económico es, por ahora, el que genera sentidos y un acervo lingüístico que convirtió “la única salida” en “sentido común”. Pero, como vimos en el desarrollo del cuarto período, contamos con una diversidad de trabajos y acciones sociales que abonan la vieja idea de Pierre Rosanvallon de “la sociedad experimental”, un mundo no terminado y siempre en transformación. El campo de batallas del conocimiento, como fue denominado por Long (1992) cobra significado en esta imagen abierta, no suturada de lo social.

Querría terminar este trabajo con un reconocimiento a “los sujetos”. Durante todo el trabajo fui poniendo énfasis en las condiciones institucionales de la producción. Sin embargo el cam-

11 Estoy pensando en Horacio Giberti y sus colaboradores en 1974 o en los técnicos del INTA que asesoraban la Cooperativa de Trabajo Campo de Herrera, en 1975, por solo tomar algunos ejemplos.

po de los estudios rurales académicos existe por la presencia de ciertos sujetos más que por las condiciones institucionales. En efecto, pienso que la debilidad institucional para desarrollar los estudios rurales durante todo este siglo y aún hoy, se ha visto compensado por la presencia de ciertos sujetos que “hicieron escuela”, desde las universidades, los organismos públicos o modestos centros de investigación.

BIBLIOGRAFÍA

- Alexander, J. 1997 *Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Análisis multidimensional* (Barcelona: Gedisa).
- Alfaro, M. I. 1997 “Conflictividad social y nuevos patrones de acción colectiva: el caso de los campesinos santiagueños”, Informe final de beca de iniciación (Buenos Aires: UBACyT) mimeo.
- Astori, D. 1984 *Controversia sobre el agro latinoamericano: un análisis crítico* (Buenos Aires: CLACSO).
- Barsky, O. 1997 “La información estadística y las visiones sobre la estructura agraria pampeana” en Barsky, O. y Pucciarelli, A. (comps.) *La agricultura pampeana. El fin de un período* (Buenos Aires: CBC / FLACSO).
- Barsky, O. et al. 1988 “Evolución y rasgos actuales de estructura agraria pampeana” en *La economía agraria argentina* (Buenos Aires: Asociación Argentina de Economía Agraria / IICA).
- Basco, M. et al. 1992 *Trabajando con mujeres campesinas en el noroeste argentino: aportes al enfoque de género en el desarrollo rural* (Buenos Aires: IICA).
- Bendini, M. y Bonaccorsi, G. 1998 *Con las puras manos* (Buenos Aires: La Colmena).
- Benencia, R. (coord.) 1997 *Área hortícola bonaerense. Cambios en la producción y su incidencia en los sectores sociales* (Buenos Aires: La Colmena).
- Benencia, R. 1992 “Características de la expansión capitalista en el agro pampeano”, tesis de Maestría (Buenos Aires: Flacso) mimeo.
- Benencia, R. y Forni, F. 1996 “Sociología y empleo agrario en la Argentina” en Panaia, M. (comp.) *Trabajo y empleo. Un abordaje interdisciplinario* (Buenos Aires: Eudeba / Paite).
- Benencia, R. y Karasik, G. 1995 “Bolivianos en Buenos Aires: aspectos de su integración laboral y cultural” en *Estudios Migratorios*

- Latinoamericanos* (Buenos Aires: CEMLA) N° 27, agosto.
- Bertoni, L. 1992 “*El Estado en el complejo agroindustrial tabacalero*”, informe parcial de Beca de Iniciación (Buenos Aires: UBACYT) mimeo.
- Bertoni, L. 1995 “El complejo tabacalera y la intervención estatal” en Giarracca, N.; Aparicio, S.; Gras, C. y Bertoni, L. *Agroindustrias del Noroeste, el papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena).
- Bidaseca, K. 1998 “Los campesinos cañeros: construcción de una identidad” en Giarracca, N. y Mallimaci, F. (comps.) *Movimientos sociales: acciones colectivas e identidades en transformación* (Buenos Aires: Eudeba).
- Bravo, M. C. y Garrido de Biazzo, H. 1993 “Aportes de la Universidad a los estudios de la mujer campesina den Tucumán: entre la crisis y la migración”, Jornadas Preparatorias para el Congreso de la Mujer en Berlín.
- CEPA 1983 “La política económica y su impacto en las economías agrarias marginales (caso de algunas producciones del noroeste argentino en la década 70/80” en *I° Seminario Latinoamericano sobre campesinado y tecnología campesina* (Punta de Tilcara, Chile).
- CEPA 1990 “Transformaciones sociales en el agro pampeano” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 92-93.
- Craviotti, C. 1995 “Relevamiento y síntesis de estudios de casos sobre pobres rurales”, informe (Buenos Aires: SEAGyP / PROINDER).
- Forni, F.; Benencia, R.; Neiman, G. y Aparicio, S. 1988 “El empleo agropecuario en la Argentina” en *La economía agraria argentina. Consideraciones sobre su evolución y situación actual (XX Congreso Internacional de Economistas Agrarios)* (Buenos Aires: Asociación Argentina de Economía Agraria).
- Ghezan, G. y Mateos, M. 1994 “Las grandes empresas agroalimentarias frente a la integración regional” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 85.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 “Los campesinos cañeros: multiocupación y organización” en *Cuaderno del Instituto de Investigaciones* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 3.
- Giarracca, N. (comp.) 1994 *Acciones colectivas, organizaciones cooperativas. Reflexiones y estudios de caso* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, Bibliotecas Universitarias).

- Giarracca, N. 1990 "El campesinado en la Argentina. Un debate tardío" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 94.
- Giarracca, N. 1991 "Germani y su época" en *Boletín de Ciencias Sociales* (Buenos Aires: UBA-FSOC).
- Giarracca, N. 1992 "Algunas reflexiones sobre las ciencias sociales y la investigación en los espacios académicos públicos" en *Sociedad* (Buenos Aires) N° 1.
- Giarracca, N. 1997 "La acción social en los procesos agrarios y en el mundo rural", presentación en Red de Filosofía y Teoría Social, 2° Encuentro, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca.
- Giarracca, N. 1998 "El trabajo invisible de las campesinas tucumanas: un intento de reflexión" en *Temas de Mujeres. Perspectivas de género* (Tucumán: Centro de Estudios Históricos Interdisciplinarios sobre la Mujer, UNT).
- Gutiérrez, P. y Roggi, M. C. 1998 "Sobre encuentros y desencuentros. Reflexiones acerca del trabajo de campo" en Giarracca, N. (coord.) *Estudios rurales: teorías, problemas y orientaciones metodológicas* (Buenos Aires: Eudeba).
- Gutman, G. y Gatto, F. (comps.) 1990 *Agroindustrias en Argentina. Cambios productivos y organizativos recientes* (Buenos Aires: CEAL).
- Gutman, G. y Rebella, C. 1989 "subsistema lácteo: elementos de diagnóstico para la formulación de políticas comerciales y tecnológicas", borrador para discusión, primera versión (Buenos Aires: SEAGyP, BM).
- IPDERNOA 1992 "Estadísticas básicas rurales y del sector agropecuario" (Tucumán: Instituto para el Desarrollo Rural del Noroeste Argentino, Universidad Nacional de Tucumán, Serie Investigación).
- Llovet, I. 1996 "Ensayismo y empiricidad: apuntes sobre las orientaciones de la Sociología Rural en la Argentina (1990-1996)", ponencia presentada al Congreso de Historia Económica y Social, Tandil.
- Long, N. 1992 *Battlefields of Knowledge* (Londres: Routledge).
- Manzanal, M. 1990 "El campesinado en la Argentina: un debate tardío o políticas para el sector: una necesidad impostergable" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 97.
- Manzanal, M. 1993 *Estrategias de sobrevivencia de los pobres rurales* (Buenos Aires: CEAL).
- Martínez de Ibarreta, R.; Pucciarelli, A. y Posada, M. (comps.) 1994 *Estudios agroindustriales* (Buenos Aires: CEAL).

- Murmis, M. 1994 “Algunos temas para la discusión en la Sociología Rural latinoamericana: reestructuración, desestructuración y problemas de excluidos e incluidos” en *Ruralia. Revista Argentina de Estudios Agrarios* (Buenos Aires: FLACSO) N° 5, septiembre.
- Murmis, M. 1996 “Pobreza rural y ocupación: revisión de algunos datos inéditos” en *Revista Estudios del Trabajo* (Buenos Aires) N° 12, agosto-diciembre.
- Nun, J. y Lattuada, M. 1991 *El gobierno de Alfonsín y las corporaciones agrarias* (Buenos Aires: Manantial).
- Racedo, J. 1988 *Crítica de la vida cotidiana en comunidades campesinas. Doña rosa, una mujer del noroeste argentino* (Buenos Aires: Cinco).
- Soverna, S. 1995 “Sistematización de estudios de casos de pobreza rural”, informe final (Buenos Aires: SEAGyP, PROINDER).
- Taylor, C. 1948 *Rural life in Argentina* (Louisiana: Louisiana University Press).
- Tenembaum, J. L. 1948 *Orientación económica de la agricultura argentina* (Buenos Aires: Losada).
- Teubal, M. 1995 “Notas sobre la mano de obra excedentaria del tercer mundo” en Teubal, M. et al. *Globalización y expansión agroindustrial. ¿Superación de la pobreza en América Latina?* (Buenos Aires: Corregidor).
- Tsakoumagkos, P. 1992 *Manual de evaluación económica para proyectos de mejoramiento ambiental del hábitat popular urbano* (Buenos Aires: GTZ-SVCA, Agencia Alemana de Cooperación Técnica, Secretaría de Vivienda y Calidad Ambiental).
- Tsakoumagkos, P. et al. 1988 “Algunos límites ideológicos, conceptuales y económicos del discurso ecológico-ambiental” en Yanes, L. (ed.) *Aportes para el estudio del espacio socioeconómico II* (Buenos Aires: El Coloquio).

AMÉRICA LATINA, NUEVAS RURALIDADES, VIEJAS Y NUEVAS ACCIONES COLECTIVAS

INTRODUCCIÓN*

La CEPAL caracteriza el sexenio que va de 1998 a 2003 como “el sexenio perdido” para la región. De este modo, hace referencia al pobre desempeño de las principales variables económicas y rememora lo que a fines de los años ochenta caracterizó como “la década perdida”. El discurso neoliberal sostenía que, después de las reformas estructurales de los ochenta y noventa, las economías crecerían y los sectores populares recibirían el derrame (el famoso *trickling down*) de tal crecimiento. No fue así: solo la variación del Producto Bruto Interno (PBI) para la región muestra una caída sostenida desde 1998, que llega a su punto culminante en el año 2002 por las repercusio-

nes de la crisis argentina. Pero este país no fue el único que mostró las consecuencias de las “políticas de mercado” impuestas por los organismos multilaterales y aceptadas por las dirigencias políticas locales; Uruguay, Venezuela, Haití y varios países del Caribe registran tasas anuales negativas en la variación de su PBI, y las que crecen lo hacen en muy pequeñas magnitudes (CEPAL, 2003).

Desde la década del ochenta, las políticas públicas de América Latina tendieron a reorientar la intervención estatal, liberalizar la economía y la apertura al comercio internacional, tomando como variable de ajuste el salario. De este modo, crecieron las tasas de desocupación y se precarizaron las condiciones laborales de los que aún conservaban sus puestos de trabajo. Las políticas públicas ortodoxas —como el Plan Austral (1985) y el Plan de Convertibilidad (1991) de la Argentina, la megaestabilización de Bolivia (1985) y una serie de programas

* Giarracca, N. 2004 “América Latina, nuevas ruralidades, viejas y nuevas acciones colectivas: Introducción” (sel.) en Giarracca, N. y Levy, B. (comps.) *Ruralidades latinoamericanas. Identidades y luchas sociales* (Buenos Aires: CLACSO-ASDI) pp. 13 a 19.

de estabilización como los de Collor de Melo y Cardoso en Brasil entre 1986 y 1999, y en México entre 1987 y 1994— pusieron en marcha los mecanismos institucionales para llevar a cabo una transformación sin precedentes en el siglo XX. Las agriculturas y las poblaciones afectadas sufrieron las consecuencias de tales cambios macroinstitucionales.

Reca y Echeverría (citado por Spoor, 2002) sostienen que la participación del sector agrario de América Latina en su conjunto pasó de representar un 15% del PBI en 1970 a un 10% en la década del noventa. Al parecer, en términos puramente productivos, el desempeño de las agriculturas no fue mejor después de la desregulación y la apertura externa. Según los especialistas, no existen diferencias sustanciales en las tendencias de producción y exportación con respecto a períodos previos en los que hubo una fuerte intervención estatal, como en las décadas de los sesenta y los setenta, pero hay otras fuentes de vulnerabilidad que parecen emerger como consecuencia de la apertura, tales como las derivadas de la volatilidad internacional y de la distribución interna (Spoor, 2002: 382-383).

En otras palabras el desempeño de las variables macroeconómicas no mejoró y las consecuencias en el nivel social fueron atroces. En

efecto, el retroceso de las amplias mayorías en la participación de las riquezas nacionales fue sistemático durante dos décadas: “la década perdida” —la del ochenta— y la de los noventa. Pero, en esta última, los índices que miden la pobreza y la indigencia subieron en tal magnitud que los constructores del modelo idearon y lanzaron los famosos programas de “alivio” que lograron bajarlos en términos relativos en los últimos años.

Un informe de la CEPAL sobre el Panorama Social de América Latina 2002-2003 muestra que, si bien los porcentajes de población pobre bajaron del 48,3% al 43,9% entre 1990 y 2002, en el volumen absoluto de personas se registró un aumento de 20 millones de pobres y la cifra pasó de 200 a 220 millones. Lo mismo ocurre en el nivel de indigencia. Tal vez el caso más dramático sea el de la Argentina, cuyos gobernantes siguieron al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario Internacional endeudando al país, entregando sus recursos naturales a las empresas transnacionales, flexibilizando el mercado laboral y desregulando la economía. Como consecuencia de ello, provocaron una de las crisis más profundas de la historia nacional: entre 1999 y 2002, el índice de pobres llegó prácticamente al doble (pasó del 23,7% al 45,4%), mientras que los

indigentes se multiplicaron por tres. En realidad, América Latina no fue la única que sufrió las consecuencias del modelo neoliberal; el crecimiento de la economía mundial fue más bajo entre 1980 y 2000 —época de oro del liberalismo y de la desregulación que se hacía en nombre del crecimiento— que entre los años sesenta y ochenta, período de regulación y proteccionismo (Cassen, 2003).

En este escenario, se llevan a cabo las acciones colectivas y surgen nuevos actores sociales. Muchas de estas nuevas experiencias tienen que ver con el mundo social rural y agrario. Según el *Report on Rural Movements* de NACLA (2000), en muchas partes de América Latina los movimientos sociales rurales han tomado el centro del escenario político de su nación. Y nosotros agregamos que este fenómeno no es exclusivo de países con una fuerte tradición de luchas campesinas, como Brasil o México, sino que se da también en países con una historia significativa de luchas obreras urbanas, como la Argentina, donde aparecen nuevos actores, no necesariamente articulados al mundo industrial o urbano.

Al finalizar la década del noventa, la protesta se hizo global y se enfocó contra los organismos internacionales que promovieron estas transformaciones (la Organización Mundial del

Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera). Asimismo, entre fines de 1993 y 1994 en muchos países de América Latina aparecieron novedosas y significativas resistencias que recuperaron las experiencias y luchas que se venían desplegando desde el comienzo de la mencionada década.

A mi juicio, en ese momento pueden contabilizarse tres acontecimientos que atravesaron el continente de Norte a Sur (o de Sur a Norte). Primero, la aparición del movimiento zapatista en México, en el mismo instante en que el país ingresaba al TLCAN (Tratado de Libre Comercio con América del Norte). Este colocó en el espacio de las resistencias un nuevo pensamiento político, por primera vez a distancia del Estado, centrado en la autonomía y con una lógica discursiva más cercana a la estética “expresiva” que a la “científica” de los viejos discursos de izquierda. Como dice Alain Badiou, “la irrupción de Chiapas fija una medida —una distancia— al Estado mexicano; muestra que tal Estado puede ser identificado y limitado por una nueva forma de acción política” (Badiou, 2003: 13).

El desarrollo de la tecnología informativa y comunicacional habilitó nuevas formas de circulación del capital financiero, que fue uno de los pilares del nuevo modelo, pero también

permitió la acción a distancia de los grupos en resistencia. Y tal vez el ejemplo paradigmático de esta situación haya sido la propagación de las ideas del zapatismo y su tremendo impacto en una población mundial que vivía con cierto malestar el avance “deshumanizante” del capitalismo neoliberal. Hoy, muchas de las ideas del zapatismo circulan por espacios académicos, culturales y artísticos y encuentran numerosos aliados en el mundo social urbano europeo. De hecho, el primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo —llevado a cabo en Chiapas a fines de julio de 1996 por iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con la presencia de casi medio centenar de organizaciones de la resistencia de todo el mundo— es considerado el antecedente más importante de la serie de protestas que se conoce como movimiento social de la antiglobalización neoliberal.

El segundo acontecimiento ocurre en la Argentina y es casi simultáneo al levantamiento zapatista. Fue en una de las provincias más pobres, Santiago del Estero, que tiene una alta proporción de población rural. La rebelión se desató en su ciudad capital, donde la gente vive de la administración pública o de los servicios hacia la agricultura. La “pueblada”

se produjo contra las autoridades del Estado provincial y se manifestó a través de la quema de edificios y la persecución de los políticos corruptos. Ese episodio, en pleno gobierno de Carlos Menem, se recuerda como el “santiagueño” y es un importante antecedente de la crisis de 2001. A partir de entonces, los índices de abstención electoral de la provincia treparon al 50% y comenzó un período de politización de la sociedad civil que llevó a una persecución política y social feroz por parte del poder provincial. Esta situación hizo crisis en 2003 con el asesinato de dos jóvenes, que el gobierno intentó ocultar por estar involucrado. Nuevamente la gente ganó las calles, aunque esta vez lo hizo en forma pacífica, buscando justicia y un cambio político. Esta irreconciliable relación entre la sociedad civil y los representantes del gobierno impregnó los avatares de la política argentina desde esos primeros momentos de 1994. Los hechos del 19 y 20 de diciembre marcaron el momento culminante de este ciclo en el nivel nacional. A pesar del proceso abierto desde el nuevo gobierno de Néstor Kirchner —que despertó grandes expectativas—, la tensión entre “representantes-representados” y el cuestionamiento a la idea de “representación” —clave de la democracia liberal— son centrales en el

pensamiento de muchas de las nuevas formas políticas surgidas desde entonces¹.

El tercer acontecimiento ocurre en Ecuador. En efecto, en junio de 1994, pocos meses después de los sucesos de México y de la Argentina, los indígenas de todo el territorio convocaron a una movilización que paralizó el país durante dos semanas. Como sostiene Nina Pacari (1996), abogada y líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la protesta se orientó en contra de la Ley de Desarrollo Agrario, pieza clave del plan de ajuste estructural del programa implementado por Sixto Durán Ballén. “La ley aprobada por el Congreso apelaba por la eliminación de las tierras comunales a favor de la agricultura empresarial, además de otras medidas que favorecían los intereses de los grandes terratenientes. Se ignoraba todo lo concerniente a los indígenas, campesinos y pequeños agricultores del Ecuador” (Pacari, 1996: 23, traducción propia). En los años posteriores, el movimiento indígena convergió con otros, no indígenas y urbanos, y dio lugar a la formación

del Movimiento Pachakutik, que durante los noventa incursionó en el campo de la política partidaria. Le siguió luego 1997 con la destitución del presidente Abdalá Bucará, la Asamblea Constituyente de 1998 y la destitución del presidente Jamil Mahuad en el año 2000 (Dávalos, 2003). Finalmente, a fines del año 2002, el Movimiento Pachakutik fue protagonista de la alianza electoral que llevó al triunfo electoral del coronel Lucio Gutiérrez, pero, a los pocos meses de gobierno, sus miembros se retiraron. Este proceso dinámico transcurrido en una década transformó el destino que históricamente se deparó a los indígenas de América Latina y, una vez más, marcó un hito en el pensamiento político de la región. A pesar de ser mayoría en varios de nuestros países, los pueblos originarios nunca antes se habían propuesto gobernar. Ecuador y luego Bolivia ponen esta cuestión en la agenda política regional.

Podríamos sumar a este listado de protestas, resistencias de campesinos e indígenas, “puebladas”, fortalecimiento de organizaciones, otros tantos hechos ocurridos en el período: el Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Brasil —así como los numerosos sindicatos campesinos de este país, como la Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (CONTAG)—, la Federación

1 La abstención electoral en un país con voto obligatorio trepó de una cifra histórica inferior al 20% al 32% en el conjunto de las varias elecciones del último año, con excepción de la elección presidencial.

Nacional Campesina de Paraguay, los movimientos campesinos e indígenas de Bolivia, Colombia, Perú, Chile y la Argentina. La mayoría de ellos se integran en la organización que los agrupa —Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)— y, a través de ella, en la organización internacional Vía Campesina.

Del mismo modo, se va desplegando a lo largo del continente una lucha por la preservación de recursos naturales en encuentros de poblaciones campesinas y pequeños centros urbanos, como los casos de Cochabamba y de la protesta por la privatización del agua en el Sur de Tucumán en Argentina (Giarracca y Del Pozo, 2004). Las poblaciones mapuches del Sur argentino reclamaron por la instalación de una empresa minera, aduciendo lo que significaría en términos de gasto de agua; los campesinos y comunidades de pueblos originarios de Bolivia se opusieron a la exportación del gas boliviano a EEUU a través de Chile y protagonizaron una rebelión que terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada. En esta misma dirección, el sociólogo Bernard Duterme advierte que en Chiapas la privatización de los bienes públicos transformará la tensión entre pueblos indígenas y Estado en una confrontación entre los últimos y las empresas transnacionales, por

la disputa por las riquezas naturales de la región (Duterme, 2004).

Nuevos reclamos y nuevas estéticas comienzan a circular de manera significativa de un lado al otro del continente sin que sus protagonistas, que coinciden en sumar al reclamo histórico de la tierra el de otros recursos naturales, sepan necesariamente unos de otros. Con el correr de los primeros años del siglo XXI, la lucha por los recursos naturales se instala como central y el concepto de “territorio” reemplaza al de “tierra”, pues la incluye y suma las riquezas del subsuelo.

El encuentro entre las organizaciones campesinas e indígenas en federaciones continentales e internacionales, la movilidad territorial de algunos de los dirigentes y los principios universalizables de orden político —como pueden ser la “soberanía alimentaria”, el respeto a la biodiversidad, la bioseguridad, así como el respeto a la igualdad de género, a la diversidad cultural, a los derechos humanos— marcan las novedades, producen nuevos sentidos y nos desafían a pensar desde nuevos paradigmas (véase *Vía Campesina*).

Un párrafo aparte amerita el proceso que se generó durante los últimos años en el campo mexicano. “El Campo No Aguanta Más”, junto con muchas otras organizaciones campesi-

nas e indígenas, reaccionó ante la devastación agraria prevista por el TLCAN. Asimismo, se sumaron luchas campesinas como la de Atenco, Estado de México, contra la destrucción del aeropuerto en Texcoco; la de las comunidades de Montes Azules, Chiapas, contra los desalojos; la de Tepoztlán, Morelos, contra un campo de golf, y la de los campesinos ecologistas de Guerrero contra los talamontes transnacionales y por la libertad de sus presos (Bartra, 2003).

[...]

BIBLIOGRAFÍA

- Alfaro, M. I. 2001 “Los trabajadores citrícolas en Tucumán: las condiciones para la construcción de la protesta social” en Giarracca, N. (coord.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza Editorial).
- Badiou, A. 1990 *Se puede pensar la política* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Badiou, A. 2003 “Conferencia en Buenos Aires” en *Acontecimiento* (Buenos Aires) N° 26.
- Bartra, A. 2003 “El campo no aguanta más, a báscula” en *La Jornada* (México, DF) 23 de abril.
- Cassen, B. 2003 “Los efectos de la liberalización del comercio mundial” en *Le Monde Diplomatique*, Año V, N° 51, septiembre.
- CEPAL 2003 *Situación y Perspectivas. Estudio económico de América Latina y el Caribe* (Santiago de Chile: ONU-CEPAL).
- Cerdeiras, R. 2002 “La política que viene” en *Acontecimiento* (Buenos Aires: La Escuela Porteña) N° 23.
- Cerdeiras, R. 2003 “Las desventuras de la ontología. Biopolítica del imperio” en *Acontecimiento* (Buenos Aires: La Escuela Porteña) N° 24-25, mayo.
- Dávalos, P. 2003 “Plurinacionalidad y poder político en el movimiento indígena ecuatoriano” en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires: OSAL-CLACSO) N° 9.
- De Sousa Santos, B. 2000 *A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência* (Brasil: Cortez Editora).
- Duterme, B. 2004 “Diez años de zapatismo en Chiapas” en *Le Monde Diplomatique* (Buenos Aires) Año V, N° 55, enero.
- Ejército Zapatista de Liberación Nacional 2003 “Chiapas: la treceava estela” en <<http://www.fzln.org.mx/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=725>>.

- Giarracca, N. (comp.) 2001 *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires: CLACSO / ASDI).
- Giarracca, N. 2003 “La protesta agrorrrural en la Argentina” en Seoane, J. (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: OSAL-CLACSO).
- Giarracca, N. y Del Pozo, N. 2004 “To make water... Water privatization and social protest in Tucumán, Argentina” in Barnett, V. et al. *Swimming against the Current: Integrated Water Resource Management and Gender in Latin America* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2001 “Crisis and agrarian protest in Argentina. The Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha in Argentina” en *Latin American Perspectives*, Vol. 28, N° 6/121, noviembre.
- Grinberg, L. y Grinberg, R. 1984 *Psicoanálisis de la migración y del exilio* (Madrid: Alianza).
- Hardt, M. y Negri, A. 2002 *Imperio* (Buenos Aires: Paidós).
- Laclau, E. y Mouffe, Ch. 1987 *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia* (Madrid: Siglo XXI).
- NACLA 2000 *Report on the Americas*, Vol. XXXIII, N° 5, marzo-abril.
- Orgaz García, M. 2003 *La guerra del gas* (La Paz: s/d).
- Pacari, N. 1996 “Taking on the neoliberal agenda” en *NACLA. Report on the Americas*, Vol. XXIX, N° 5, marzo-abril.
- Página/12* 2003 “La guerra no ha terminado” en *Página/12*, 31 de diciembre.
- Pérez, E. 2001 “Hacia una nueva visión de lo rural” en Giarracca, N. (comp.) *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires: CLACSO / ASDI).
- Pérez, G. 2002 “Modelo para armar: complejidad y perspectiva de la protesta social en la Argentina reciente” en *Argumentos* (Buenos Aires: IIGG) N° 1, diciembre.
- Petras, J. y Veltmeyer, H. 2001 “Are Latin American peasant movements still a force for changes? Some new paradigms revisited” en *Journal of Peasant Studies* (Londres: Frank Cass Journal) Vol. 28, N° 2, enero.
- Schuster, F. 2002 “La trama de la protesta” en *Cuadernos de coyuntura* (Buenos Aires: Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires) N° 4.
- Schuster, F. y Pereyra, S. 2001 “La protesta social en la Argentina democrática. Balance

- y perspectivas de una forma de acción política” en Giarracca, N. et al. *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Spoor, M. 2002 “Policy Regimes and Performance of Agricultural Sector in Latin America and the Caribbean during the last three decades” en *Journal of Agrarian Change* (Londres: Blackwell Publishing) Vol. 2, N° 2, julio.
- Teubal, M. 2004 “Perspectiva sobre la tierra y la reforma agraria en América Latina” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 200.
- Teubal, M. y Rodríguez, J. 2002 *Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica* (Buenos Aires: La Colmena).

SITIOS WEB

- CEPAL: <<http://www.eclac.cl/>>.
- Vía Campesina: <<http://www.viacampesina.org>>.

ACCIONES COLECTIVAS Y ORGANIZACIÓN COOPERATIVA: REFLEXIONES Y ESTUDIOS DE CASO

INTRODUCCIÓN*

“Hay napas potenciales, reservas profundas de solidaridad en los individuos y en la sociedad; se actualizan y resurgen cuando hay una estimulación fuerte. Es cierto que se desvanecen rápidamente, pero la potencialidad y la reserva perduran. El egoísmo es contagioso pero la solidaridad también puede serlo.”

EDGAR MORIN

Este libro contiene una serie de trabajos que giran alrededor del interrogante sobre la organización y la autogestión como herramientas de desarrollo. Los autores preguntan en qué condiciones de posibilidad los sectores medios

y populares logran cambios que mejoran, en algún sentido, sus posiciones laborales y sociales en general. La *cooperativa*, en sus diversas variantes de organización económica, aparece como una herramienta, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. El problema reside en indagar la naturaleza y las características de esas condiciones y, en esta acción, nos internamos en los mundos sociales, culturales y económicos.

Los estudios de caso, que se presentan en la segunda parte del libro, pertenecen mayoritariamente al Noroeste rural de nuestro país; solo uno aborda una cooperativa de trabajo industrial-urbana ubicada en la ciudad de La Plata. Asimismo, en las reflexiones que integran la primera parte encontramos referencias a otras cooperativas urbanas, así como a las de otras regiones agrarias de la Argentina. En los estudios de caso prevalecen las cooperativas rurales del NOA, porque la idea de reflexio-

* Giarracca, N. 1994 “Introducción” (sel.) en Giarracca, N. (comp.) *Acciones colectivas y organización cooperativa. Reflexiones y estudios de caso* (Buenos Aires: Bibliotecas Universitarias del Centro Editor de América Latina / Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires) pp. 7 a 16.

nar sobre estas experiencias de organización —“exitosas” algunas y “fallidas” otras— surgió del equipo de investigación del Área de Estudios Rurales del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, el tipo de indagación que nos propusimos traspone una cuestión privativa de la Sociología Rural y se ubica en la problemática del cambio, de la posibilidad de integración de los sectores subalternos a la economía y a la democracia. Nos internamos así en el viejo y nuevo problema del desarrollo.

En este libro, acompañan al equipo de Sociología Rural investigadores invitados que, desde sus propias perspectivas y temáticas, han aportado a la reflexión del equipo. Los trabajos que se presentan abordan el tema de la *cooperativa* desde diferentes perspectivas: como organización social, como resultado de acciones colectivas, como herramienta de inclusión y generadora de empleos en distintas ramas de actividad y como posible agente de desarrollo. Uno solo de los trabajos no tiene como tema central la organización cooperativa, se trata del artículo de Miguel Teubal, “Cambios en el modelo socioeconómico: problemas de incluidos y excluidos”. El sentido de la inclusión de una reflexión sobre los cambios macroestructura-

les emana de la necesidad de mostrar de entrada las condiciones económicas-institucionales donde surgen y/o actúan dichas organizaciones. Aun cuando la situación macroeconómica e institucional, por sí misma, no dé cuenta de las posibilidades de los actores, aunque no les otorgue un libreto para actuar, forman parte de las condiciones de posibilidad para la acción y quisimos señalarlo explícitamente.

La segunda parte del libro, como ya se mencionó, contiene una serie de artículos que cuentan experiencias concretas de organización de campesinos del Noroeste. Todos ellos fueron producidos con financiación de los programas de investigación y de becas tanto de la Universidad de Buenos Aires como del CONICET y con los apoyos, además, de la Fundación Enrique y Hugo Minyersky y del Instituto de la Cooperación, Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica (IDELCCOP). La mayoría, además, fue realizada por jóvenes sociólogas (o estudiantes de Sociología) que pasaron largas temporadas en las zonas de trabajo apoyadas, casi siempre, por instituciones provinciales y por las organizaciones en estudio. Susana Aparicio, quien integra el Área de Estudios Rurales pero no colabora en este libro, asesoró, junto con Norma Giarracca, los trabajos de las becarias y fue una importante y

activa acompañante en casi todos los trabajos de campo. Gurli Jakobsen, investigadora del Centro de Investigaciones de Desarrollo de Copenhague, desarrolla su trabajo en el Área de Estudios Rurales y, en sus largas estadías en el país, participa en los seminarios y talleres del Área. Los alumnos que participan en nuestros seminarios de investigación aportan interpelaciones, preocupaciones, dudas y, casi siempre, suman alguna nueva experiencia al programa de estudios de cooperativas.

Marta Panaia es investigadora y coordinadora del Área de Estudios Laborales del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales; Miguel Teubal y Mirta Vuotto son investigadores y docentes en la Facultad de Ciencias Económicas. Es decir, este libro es el resultado del esfuerzo conjunto de investigadores, becarios, docentes y alumnos avanzados de la Universidad de Buenos Aires.

Pero estos esfuerzos son posibles también debido a que algunas organizaciones cooperativas están dispuestas a ser estudiadas, a brindar información y a dialogar con los analistas. Estos “pactos cognitivos” que establecemos con esos agentes sociales habilitan diálogos, debates e interacciones, así como la posibilidad de templat ideas y arriesgar interpretaciones. Muchas de ellas están vertidas en este libro.

LA PERSPECTIVA DEL ACTOR

Cuando los miembros del Equipo de Sociología Rural trabajábamos en regiones campesinas, observábamos que los agricultores que habían podido permanecer dentro de cambiantes actividades agroindustriales como la caña de azúcar o el tabaco, y en algunos casos mejorar sus posiciones, eran aquellos que habían logrado convocar a otros campesinos en formas asociativas diversas o bien ser convocados por ellos. Las cooperativas aparecían como las formas organizacionales más logradas, pero en Tucumán se daban muchas otras maneras de asociarse: desde pre-cooperativas hasta otros modos informales semipermanentes (las llamamos “sociedades de hecho” o “sociedades familiares”). También podía suceder que la forma asociativa fuera un producto de una intervención externa (gubernamental o no gubernamental). Si rastreábamos el proceso de la “intervención” se encontraban dos situaciones posibles:

1. la intervención había generado un acontecimiento social que motorizaba un proceso transformativo; o
2. el impacto de la intervención (independientemente de su valor) era neutralizado por los

aspectos preexistentes, sin producir modificaciones esperadas en los “mundos de vida”¹ de las personas.

Estas experiencias nos llevaron a interrogarnos acerca de nuestros conocimientos sobre los procesos de cambio que involucran a los sectores populares. Las teorías del desarrollo, de cualquier origen, se manejan con determinados supuestos acerca del comportamiento humano. En muchas de ellas, son más importantes los factores técnicos que los humanos; en todo caso, el problema reside en qué uso hacen los hombres de los factores de la producción, cuán “racionales” son o qué “racionalidades” utilizan. Por otro lado, las teorías sociales de gran parte de este siglo se han manejado con dos grandes líneas interpretativas: las que suponen que hay categorías estructurales, ubicaciones sociales, propensas al cambio y otras que no

lo son (generalmente en estas últimas caen los campesinos). Y aquellas otras que suponen que el mundo social de los sectores subordinados es el mero espacio de la reproducción. En ambos enfoques, solo mediante la intervención estatal (política, económica), y la planificación e intervención, se logran mejoras en las condiciones de existencia de estos sectores.

La experiencia de trabajar con la Liga de Cooperativa de Cañeros de Tucumán, una organización autogestionaria, observar su funcionamiento y la destreza de sus miembros (manejar un fax, conocer diariamente el precio del azúcar, manejar un ingenio, etcétera), nos planteó el desafío de conocer acerca de estos sujetos, ubicados en categorías subordinadas del espacio económico y social, que habían decidido modificar en conjunto sus condiciones preexistentes y crear otra situación.

Así, pues, abordamos la problemática del cambio desde la perspectiva del “agente”, tomando al “actor” como un recurso de inteligibilidad para dar cuenta de las acciones mientras nosotros —científicos sociales— nos ubicamos como intérpretes del “otro” en una relación de intersubjetividad y de implicación².

1 El concepto “mundos de vida” (*life-world*) fue desarrollado por A. Schütz y T. Luckmann y supone el carácter autoorganizado de la vida social. Decían los autores que tenemos que entender nuestros mundos de la vida para actuar en él y actuar sobre él. Es retomado por Jürgen Habermas (1990) en *Teoría de la acción comunicativa* y por Norman Long (1992) en *Battlefields of Knowledge*.

2 Una reflexión sobre los abordajes metodológicos del equipo figuran en Giarracca, Gras y Gutiérrez, 1994.

¿Quién actúa? ¿Cómo las acciones individuales devienen acciones colectivas? ¿Cómo los individuos devienen actores sociales? ¿Supone un programa consciente y racional? ¿De dónde proviene la capacidad productora del “agente”, su poder? ¿Por qué unos y no otros? ¿Cómo se mediatizan las condiciones externas en las acciones del actor? ¿Por qué algunos intentos son más perdurables que otros? ¿Por qué los “éxitos” o “los fracasos”?

Se trata, en primer lugar, de respetar las facultades de los agentes sociales para producir y transformar sus propias circunstancias y reconocer la libertad inherente al actor. Dice Giddens que los actores pudieron haber actuado en forma distinta y esto permite reconocer que actúan en un marco de libertad. Pero Giddens y las teorías “estructuracionistas” prestan atención a las restricciones que el mundo social impone a la acción, niegan la libertad absoluta, “el margen de libertad de la agencia depende decisivamente de la variedad de actividades que un agente puede realizar con competencia” (Giddens citado por Cohen, 1990). Es más, en sus nuevas reglas, Giddens sostiene que el dominio de la actividad humana es limitado; si los hombres producen la sociedad, lo hacen desde una ubicación histórica, no en condiciones de su propia elección (Giddens, 1987: 164).

En la destreza del actor se juega su capacidad de apropiación y manejo de recursos materiales y simbólicos. La construcción de la vida social no es “natural”, es el producto de prácticas sociales entendidas como estrategias, procedimientos, aprendizajes, conocimiento mutuo, métodos y técnicas calificadas. La *organización* aparece como un punto crítico, un nivel que no puede ser ignorado, un momento donde aparecen destrezas, pero también libertades y restricciones.

La organización se presenta en los sectores estudiados como una herramienta para superar problemas de escasez de recursos *y* de aislamiento. En realidad, la organización económica —ya sea productiva, laboral, de mercadeo, etcétera— es una herramienta privilegiada para la administración de unidades económicas de cualquier nivel de capitalización. Pero en nuestros casos se trata de comprender cómo se logra combinar la organización administrativa en el nivel de la empresa (cooperativa, sociedad de hecho, etcétera) con la organización social que supone un fuerte componente de solidaridad. Nos enfrentábamos al tema del “por qué” y del “cómo” de la acción colectiva.

Frente a las mismas situaciones estructurales los actores responden de diferentes formas, las organizaciones aparecen como creaciones

de los propios actores y estos como activos participantes que procesan información, crean procesos de aprendizaje, generan estrategias de negociación y confrontación con otros actores e instituciones. No parece que la inexorable lógica estructural pueda explicar estas acciones, las mismas condiciones externas son procesadas y traducidas en diferentes formas de acción y aunque se reconozca que la mayoría de los integrantes de un sector llevan a cabo acciones, más o menos, esperadas y previstas que hacen a la reproducción social de un orden hegemónico, algunos intentan y logran cambios en el nivel de las asimetrías de las relaciones. Crear nuevas condiciones de trabajo en el caso de obreros represaliados, lograr la propiedad de la tierra, mejorar las condiciones de un contrato agroindustrial entre campesinos y procesadores, generar la propia integración agroindustrial independizándose del procesador, son todas acciones presentadas en los trabajos que fueron *transformando* un orden que se mostraba como dado o “natural”.

Reconocer las capacidades de los agentes para resolver los problemas que se les presentan en sus mundos de vida habilita a pensar la organización social como una forma de continua creación. La realidad social es creada constantemente por los actores, no es un dato

que los precede sino una interacción constante en el que se va fabricando un mundo “razonable” para vivir en él (Coulon, 1987: 34). Las personas o los grupos sociales inventan formas para resolver los problemas, aun cuando con ello se conviertan en “activos cómplices” de su propia dominación; no son pasivos receptores de aparatos de dominación que los constituyen en seres subordinados, pasivos y débiles, y, al revés, no despiertan al “mundo modernizador” y se convierten en activos, modernos y fuertes mediante la planificación e intervención de otros aparatos o porque se los lance al mercado.

Giddens plantea que *toda reproducción es necesariamente producción*; la conducta de los actores se mueve dentro de un amplio margen de libertad; la simiente del cambio, continúa, existe en cada acto constitutivo de la reproducción de cualquier forma “ordenada” de vida social. Es decir, para Giddens, toda reproducción contiene la potencialidad de la no-reproducción. En términos de Laclau se diría que las relaciones sociales se ubican en el registro de la contingencia y en la imposibilidad de *fixar* identidades, lo cual resulta en un campo relacional que niega toda positividad. Las condiciones para el cambio, en uno y otro autor, no se ubican en “niveles” configurados de una estruc-

tura, sino como dimensión misma, intrínseca, de la vida social. La política, dice Laclau, dejó de ser un nivel (donde se constituía la identidad de los agentes sociales) y se transformó en una dimensión, la cual está presente con mayor o menor extensión en todas las prácticas sociales. La política es una de las tantas formas de existencia de lo social (Laclau, 1993 y 1985).

Esta concepción de lo social deriva en una forma diferente de pensar los problemas del desarrollo. Si la vida de la gente no está, necesariamente, ordenada por la lógica del capital o por la intervención del Estado; si la posibilidad del desarrollo no deviene necesariamente de una carencia (capital, tecnología, conocimientos, conciencia) que pueda cubrirse u otorgarse; si los individuos desarrollan sus propias destrezas para arreglárselas en el mundo; si el lugar del cambio no es necesariamente el Estado o la “política como gestión”, el desarrollo en términos de cambio es un problema para reflexionar y resolver y no una solución.

Crozier y Friedberg (1990: 363, 364) proponen la fórmula de Pierre Rosanvallon de la “sociedad experimental”, un mundo nunca terminado y siempre en desarrollo; pero enseguida los autores se preguntan: ¿cuáles son los límites de la capacidad de los hombres para soportar la experimentación? “Parece

que hasta ahora nadie está consciente del costo humano de la experimentación [...] Es fácil decir que los interesados la pueden tomar por su cuenta (la gestión de conjunto) pero no pueden hacerlo más que si desarrollan un constructo social considerable que por el momento no se puede elaborar si no se cuenta con un largo aprendizaje”.

Como plantea Norman Long (1992) la bibliografía reciente ha enfatizado la necesidad de simplificar y condensar la investigación social para arribar a una rápida evaluación del contexto y de los problemas del desarrollo, sin comprender que los problemas del cambio y del desarrollo se resisten a tratamientos rápidos. Ni los análisis científico-tecnológicos puros ni las opciones ideológicas nos habilitan a determinar cuál es la mejor opción y el medio más adecuado para alcanzarla. Y allí aparecen nuevamente los actores, con sus prácticas, sus capacidades de aprendizaje, sus libertades y restricciones y con las valoraciones y sentidos que otorgan a sus acciones³.

3 Existen, en todo el mundo, grupos que piensan estos problemas y que buscan alternativas a las concepciones tradicionales del desarrollo. Por ejemplo: el equipo de Norman Long de Wageningen Agricultural University en Holanda; el CEPAUR dirigido por Man-

No podemos negar que la historia de nuestros países está plagada de intervenciones y proyectos de desarrollo con “buenas intenciones” para los más necesitados. Este libro da cuenta de ello; aparecerán desde las políticas estatales proteccionistas para los cañeros o el Fondo Especial del Tabaco para los tabacaleiros, hasta la explícita intervención del gobierno de Salta en Finca Palermo. La cuestión reside en entender cómo estas intervenciones penetran en los mundos de vida de las personas y lo hacen a través de políticas que deciden y cambian pautas económicas (cómo producir, cómo comercializar) o de vida (las relocalizaciones, por ejemplo), o a través de personas que entran en interacción con la población objetivo. En tal sentido, la intervención es también un proceso construido y negociado, con conflictos, generación de poder y conocimientos mutuos, y no solo un plan de acción “neutro”, con determinados objetivos y resultados.

fred Max Neef, en Chile, quien es un “ex-experto” de organismos internacionales y ha adoptado no solo una posición crítica, sino de cierta radicalidad en relación con los mercados. Existen, además, muchos otros antropólogos, sociólogos y economistas que, a partir de sus propias prácticas y experiencias, inician reflexiones fecundas sobre el problema.

Queríamos dejar bien claro que de ninguna manera negamos que una intervención externa pueda generar un acontecimiento y traducirse en un proceso de cambio o facilitar las condiciones en las que los actores se mueven. Tampoco se trata de no reconocer que hay políticas públicas adecuadas o facilitadoras del desarrollo (o todo lo contrario), el problema reside en el valor y los sentidos que le otorgan las personas destinatarias y allí es donde creemos que los planificadores y expertos subdimensionan el problema.

Para mejorar las condiciones de existencia de los campesinos, o de “los pobres” en general, se necesitan políticas públicas, acciones del Estado, financiamientos, asesoramientos tecnológicos, intervenciones “en redes”, expertos y conocimientos, pero todo esto no basta si no se reconoce que los actores construyen sus mundos y no necesariamente de acuerdo con “necesidades” o “intereses” determinados por los otros. La concepción general de “los expertos” se basa en que el actor ignora la fuente de sus acciones cotidianas y son ellos los que otorgan los conocimientos y las interpretaciones autorizadas⁴. Se pueden dar muchos ejem-

4 El creador de la Etnometodología, Harold Garfinkel, dice que “Los sociólogos conciben al hombre-

plos de intervenciones con respetables objetivos de desarrollo, con altas financiaciones, con expertos de todo tipo que fracasaron en sus objetivos explícitos y, al terminar el proyecto, la gente volvió a sus ocupaciones (o desocupaciones) habituales, aunque quedaran grandes inversiones en riego, maquinarias, etcétera.

Algunos pensadores eluden enfrentar la complejidad que comporta un cambio social hacia una mayor democracia económica —proyectado (proyectos de desarrollo) o autogestionado— y lo ubican como un problema irresoluble dada cierta “naturaleza” de los individuos, o dado el carácter determinante e inmodificable, en el corto plazo, de las estructuras (económicas, de poder). Aquí lo situamos, como problema, en el orden de lo social, entendiendo esto último como un precario, inestable y no-fijado conjunto de prácticas y discursos, producidos, significados y reproducidos por los agentes en sus esfuerzos por lograr la construcción social de sus mundos de vida. Pero este sistema de

relaciones (prácticas y discursos) está surcado por los antagonismos que impide fijarlo como positividad, el poder es inherente a las relaciones y se constituye en puntos nodales dentro de tal sistema. Las relaciones sociales, que dan cuenta de esos puntos nodales, no son, efectivamente, fácilmente des-enlazables o “nivelables” (democratizables), pero el desarrollo con equidad, frecuentemente, requiere de acciones que subviertan un orden social hegemónico que se presenta como natural (sedimentado).

Las condiciones de posibilidad para que tales acontecimientos ocurran no necesariamente se generan desde un Estado o desde cualquier otro tipo de intervención (o de institución) con vocación política democratizadora, sino que también fluyen dentro de la vida social que los hombres/mujeres producen y reproducen.

Goran Hyden (1988) sostiene que existen dos formas de pensar la promoción de la organización para el desarrollo: la perspectiva *blueprint* (reproducción de impresión o cianotipo) y la perspectiva *greenhouse* (invernadero). En la primera, la programación y planeación son los temas centrales. Existe una fuerte creencia en la macro-planificación y en los modelos y conocimientos técnicos que pueden reproducirse de experiencia en experiencia. Son proyectos de altos costos de transacción porque

en-sociedad como un idiota desprovisto de juicio (*a judgemental dope*). El actor social de los sociólogos es un ‘idiota cultural’ que produce la estabilidad de la sociedad al actuar de acuerdo con las alternativas de acción preestablecidas y legitimadas que le proporciona la cultura” (véase Garfinkel, citado por Coulon, 1987).

requieren la intervención de organismos del Estado, organismos internacionales y de muchos técnicos y expertos. El acento está en la intervención, en el otorgamiento de “algo que falta” y los expertos deciden qué es. En general existe poca reflexión sobre las nuevas relaciones y poderes que se van generando a partir de la intervención y poca autocrítica sobre “los fracasos” y sus razones.

En cambio, en la perspectiva *greenhouse*, el supuesto de trabajo es que si solo se proveen estímulos e incentivos adecuados, la gente se organizará y efectuará tareas de interés común y encontrará distintos niveles de soluciones a sus problemas. Lo que se enfatiza en esta perspectiva es la decisión política de apoyar a la población en sus propios esfuerzos, en sus propias prácticas, no aplicar modelos sino crear un clima de hospitalidad y fecundidad para estimular y apoyar sus iniciativas. Los apoyos tecnológicos, las propuestas de formaciones y capacitaciones, las articulaciones con otras experiencias o en otros niveles económicos (articulación entre cooperativas, por ejemplo) son prioritarios. La diferencia reside en que se apoyan *y* se potencian los esfuerzos de la propia gente. Se fortalece la autonomía y la capacidad de decisión aun a costa de las equivocaciones; son programas de menores costos, ya que no

necesitan las redes burocráticas de gerentes, técnicos, expertos, etcétera. En esta perspectiva, la población no es “objeto” sino *sujeto*.

LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS

Justamente el tema de las cooperativas nos remite a las iniciativas y construcciones de la gente para encontrar soluciones a sus problemas y al papel de las instituciones externas frente a estas iniciativas.

Una primera pregunta sobre la acción organizada de los hombres, sobre la acción colectiva, nos conduce al problema de la autogestión. Dijimos antes que no todos los hombres están dispuestos a la “experimentación” y el problema aún reside en conocer cuándo y por qué están dispuestos a correr el riesgo de construir y mantener sus propias organizaciones económicas. La autogestión aumenta la autonomía y la independencia de los individuos, pero los sitúa en un espacio donde no todos están dispuestos a ubicarse. Las situaciones de subordinación (no necesariamente de dominación) tienen aspectos que pueden ser valorados por la gente: no tener que tomar decisiones, no correr riegos (o correr riegos de otro tipo), etcétera. Pero como veremos en el artículo de

Marta Panaia, muchas veces la cooperativa no es una opción sino un último recurso frente a la desocupación.

Un primer interrogante nos ubica frente al problema de quiénes están dispuestos a participar en proyectos autogestionarios, quiénes a liderarlos o conducirlos, y por otro lado, qué pasa cuando la formación de la asociación o la cooperativa es una imposición de un financiador externo o del propio Estado. En los casos estudiados en este libro, la mayoría de las cooperativas son resultado de acciones colectivas llevadas a cabo para obtener o reconquistar ciertos derechos negados o perdidos. Pero en el caso de Finca Palermo nos enfrentamos a una decisión no tomada por la gente. En efecto, el Estado provincial salteño visualizó los lazos prevalecientes en esta “tradicional” comunidad (no integrada a los procesos de modernización), como una condición favorable para que los campesinos pasaran de una relación “patronal” a la “autogestión”: compró la finca y “les armó” una cooperativa. La trama de este proceso tejida entre “pobladores” y “Estado”, el carácter “indexical” de los relatos y diálogos que presenta la autora, así como las dificultades para pensar “agencias” dentro de la Finca, dan cuenta, más que cualquier otro caso, de la complejidad de estos procesos.

Hay autores que hacen fuertes críticas al ideal autogestionario porque suponen que encubre el objetivo de suprimir todo poder (como si esto fuese posible). En tal sentido se lo relaciona con las concepciones filosóficas revolucionarias y se lo desvaloriza como alternativas de las sociedades capitalistas modernas, en tanto consideran que son organizaciones que corrieron la misma suerte de los socialismos reales. Como todos sabemos, el cooperativismo nació en el país más avanzado del capitalismo en el siglo XIX —Inglaterra— y alcanzó su máximo desarrollo en los países del Norte europeo (los países escandinavos, Alemania, Holanda). Las cooperativas se convirtieron en una poderosa estrategia agrícola e industrial dentro de la Unión Europea y la Alianza Internacional de Cooperativas representa, hoy, fuertes sectores de la producción capitalista mundial.

Por otro lado el movimiento cooperativo fue muy mal visto por quienes sustentaban posiciones de izquierda porque consideraban que debilitaba la conciencia de clase del trabajador. Hans Holmén (1990: 18) cuenta que en Europa, frecuentemente, los cooperativistas agitaban en contra de la excesiva estatización y proponían la propiedad cooperativa como alternativa a la “propiedad estatal”. De este modo suscitaban antipatías de los socia-

listas y los socialdemócratas, que en aquellos años eran acérrimos estatistas. Algunos países europeos, por ejemplo Dinamarca, habían formado cooperativas para solucionar el acceso a los “bienes públicos” como la electricidad y el agua, pero a partir del auge del *Welfare State* esas empresas pasaron a manos del Estado. Las cooperativas mismas, además, fueron adaptándose a los requerimientos de la demanda de un capitalismo maduro y fueron perdiendo, en algunos casos, los principios fundacionales de la cooperación y la autogestión. Quedaron con las formas de empresas cooperativas, pero se perdió la concepción humanista de los pioneros. Sin embargo, en Europa y en todo el mundo siguen existiendo cooperativas que son ejemplo, tanto de autogestión y de cooperación, como de flexibilidad frente a los cambios y de eficiencia económica.

Argentina es el país de América Latina donde el desarrollo del movimiento cooperativo fue más temprano y guardó mayores similitudes con el desarrollo europeo. Las primeras cooperativas fueron, también, de servicios públicos (eléctricas) y se fundaron en los comienzos del siglo. Pero, en el movimiento de los chacareros pampeanos encontró rápidamente un fértil lugar de desarrollo; las empresas cooperativas comenzaron a ocupar un

espacio importante en la comercialización y la exportación de granos.

No existen cifras fehacientes sobre el número de cooperativas en Argentina y menos aún sobre la cantidad de personas asociadas a cooperativas. Generalmente se registran “miembros” y una persona puede ser socia de varias cooperativas. Durante la gestión de Héctor Polino en la Secretaría de Acción Cooperativa (1983-1989) se realizó un Censo que no se terminó de procesar; de todos modos, los datos publicados indican que durante 1983-1989 se crearon 3.407 nuevas cooperativas, de las cuales 876 fueron de trabajo y 427 agropecuarias.

Gurli Jakobsen (“Procesos de aprendizaje en las cooperativas”), las define como una forma especial de firma identificada por el carácter de la propiedad y sus principios organizativos. Una cooperativa es una organización económica —una empresa— propiedad de *una asociación de miembros*, y dirigida por ellos mismos de acuerdo con ciertos principios y con el propósito de satisfacer una necesidad económico-social compartida. La Alianza Internacional de Cooperativas (AIC) ha venido manteniendo el principio de “administración y control democrático (un miembro = un voto)” y ha agregado otros, como, por ejemplo, el de cooperación in-

ternacional “movimiento a movimiento”. Se esperan cambios para la próxima reunión de la AIC, se propondrán medidas tales como el refuerzo de las relaciones de cooperación “Norte-Sur” y un mayor énfasis en los temas ambientales. Sin embargo, algunos dirigentes esperan que se ponga en discusión el principio orgánico de “un miembro = un voto”, lo que significaría, por un lado legalizar situaciones que se dan de hecho en el cooperativismo internacional, pero por el otro terminar con un principio que hace al ideario de la democracia económica.

No obstante las cooperativas interesan sociológicamente porque son algo más que una empresa: son formas que encuentra la gente para resolver necesidades de manera conjunta; en tal sentido, las acciones colectivas y la organización son complementarias, son dos facetas indisociables del mismo problema que remiten a la construcción de los actores o agentes sociales. Pero también la formación de cooperativas y las acciones y rutinas dentro de ellas tienen que ver con la constitución de sujetos preparados para la vida democrática. Se ha hablado de las cooperativas como “escuelas de democracia” en tanto preparan culturalmente a ciudadanos preocupados por el bien común, preocupados por “el otro”. Como

sostiene el diccionario de Economía y cooperativismo, la “meta es formar al hombre cooperativo, que es la coexistencia armónica entre lo individual y lo social” (Olivera, 1973).

[...]

BIBLIOGRAFÍA

- Cohen, I. 1990 “Teoría de la estructuración y *praxis* social” en Giddens A.; Turner, J. et al. *La Teoría Social, hoy* (Madrid: Alianza Universidad).
- Coulon, A. 1987 *La Etnometodología* (Madrid: Cátedra).
- Crozier, M. y Friedberg, E. 1977 *El actor y el sistema* (México DF: Alianza).
- Giarracca, N.; Gras, C. y Gutiérrez, P. 1994 “Métodos cualitativos y cuantitativos en Sociología Rural”, presentación en Primeras Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos (Buenos Aires: UBA / IDES).
- Giddens, A. 1987 *Las nuevas reglas del método sociológico* (Buenos Aires: Amorrortu).
- Habermas, J. 1990 *Teoría de la acción comunicativa* (Madrid: Taurus).
- Holmén, H. 1990 *State, Cooperatives and Development in Africa* (Uppsala: The Scandinavian Institute of African Studies) Research Report N° 86.

- Hyden, G. 1988 "Approaches to Cooperative Development: Blueprint versus Greenhouse" en Attwood, D. W. y Baviskar, B. S. (comps.) *Who Shares? Cooperative and Rural Development* (Oxford: Oxford University Press).
- Laclau, E. 1985 "New Social Movements and the plurality of the social" en Slater, D. (ed.) *New Social movements and the State in Latin America* (Ámsterdam: CEDLA).
- Laclau, E. 1993 *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Long, N. 1992 "Introduction" en Long, N. et al. *Battlefields of knowledge* (Londres / Nueva York: Routledge).
- Olivera, J. H. 1973 *Teoría económica y sistema cooperativo* (Buenos Aires: Academia Nacional de Ciencias Económicas).

“TUCUMANAS DE OJOS GRANDES”: UN ESTUDIO SOBRE ACCIONES COLECTIVAS DE CAMPESINAS TABACALERAS*

“Una cosa es hacer sonar un instrumento y otra muy distinta es hacer música. La música tiene que tener magia de los buenos impulsores.

Mira —dijo pasando un brazo por la cintura de la tía—: tú quieres dar un Re con más énfasis, no sabes cómo.

En apariencia no tienes más que un dedo y una tecla para hacerlo, pero con el dedo y la tecla no haces más que un ruido, lo demás tienes que sacarlo de tu cabeza, de tu corazón, de tus entrañas.

Por ahí es donde está, con toda exactitud, el sonido que deseas. Cuando lo sabes, no tienes más que sacarlo. ¡Sácalo!”

ÁNGELES MASTRETTA, *MUJERES DE OJOS GRANDES*

OBJETIVOS DEL TRABAJO

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre las condiciones de posibilidad de nuevas acciones colectivas dentro de los sectores populares del noroeste rural argentino¹. Se trata de ex-jornaleros, campesinos sin tierra (ex-ocupantes de tierra fiscales

* Giarracca, N. 1994 “Tucumanas de ojos grandes”: un estudio sobre acciones colectivas de campesinas tabacaleras” en Knecher, L. y Panaia, M. (comps.) *La mitad del país. La mujer en la sociedad argentina* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina / Facultad de Ciencias Sociales, UBA / FIHES / Ministerio de Cultura y Educación).

1 El Proyecto de Investigación sobre Cooperativas en las Agroindustrias del NOA está coordinado por Norma Giarracca y Susana Aparicio. Las entrevistas presentadas fueron realizadas por Mercedes Ríos, quien participa y colabora con esta investigación, y por Norma Giarracca.

o privadas), y campesinos ricos o *farmers* que en los últimos diez años comenzaron una serie de acciones, estrategias en el sentido de Bourdieu, para modificar sus situaciones en algún sentido. Estas acciones se cristalizaron en cooperativas de distintos tipos. En este trabajo presentamos el origen y los primeros pasos de una de ellas: la Cooperativa Tabacalera de Trabajo “El Sacrificio”.

Esta experiencia de organización comienza en 1984, cuando un grupo de jornaleras tabacaleras, consciente de la importancia del propio trabajo en la producción del cultivo, se hicieron la pregunta: “¿por qué no trabajar para nosotros?”. Iniciaban así un proceso de organización (que será presentado en este trabajo mediante los relatos de sus actores) que abarca tanto aspectos productivos como socio-culturales.

Algunas preguntas que guían nuestra investigación se relacionan con las condiciones macro-sociales que posibilitaron el accionar de estas mujeres. Las condiciones “macro” son consideradas de suma importancia para la emergencia y sostenimiento de las acciones colectivas, factores tales como los económicos —la prosperidad o recesión y su impacto en la disponibilidad de recursos—; los niveles y tradiciones previas de organización en las provincias; “la estructura de oportunidades políti-

cas” —aliados, tolerancia de las élites, niveles de aperturas y cierres de posibilidades políticas— son especialmente tomados en cuenta por los estudios sobre los movimientos sociales. Sin embargo consideramos que estas “condiciones” no son tales si no son subjetivamente valoradas e interpretadas. Es decir estas condiciones permiten modelar una acción porque los individuos le atribuyen un sentido que ocurre en el plano subjetivo e intersubjetivo, son relaciones sociales que contribuyen a formar el sentido de la acción.

El centro de nuestro artículo es la recuperación, a través del relato, de las prácticas sociales y culturales desarrolladas por los sujetos que les posibilitaron un accionar “intencionalmente” (independientemente de que lo consigan o no) superador de condiciones críticas de exclusión por las que atraviesan mayoritariamente los sectores populares de nuestro país. En aquellos casos en que los sujetos enunciaron su disposición a no aceptar la exclusión, fueron creando un nuevo sistema de sentidos. Se anunciaba que en la sociedad en su conjunto estaban emergiendo nuevos problemas y potenciales nuevos conflictos².

2 Estos “nuevos problemas y nuevos conflictos” son no solo enunciados por estas pequeñas organizaciones

Esta experiencia, como otras estudiadas en la misma región (Giarracca, 1992), representa un estadio de consolidación de “acciones colectivas”. Este concepto, más amplio que el de “movimiento social”, permite pensarlas analíticamente más allá de una descripción empírica (Diani, 1992). Reconstruirlas a partir de un dispositivo teórico que ubica una política ya no más como un nivel de lo social, sino como transformada en una *dimensión* que está presente, con mayor o menor extensión, en todas las prácticas sociales. La política es una de las

rurales. Al movimiento por los derechos humanos (surgido en los setenta, y más estudiado, ver Mainwaring y Viola, 1984; Cheresky, 1991) debemos sumar un nuevo tipo de sindicalismo —autónomo de los partidos políticos y de la burocrática central de trabajadores, CGT— que trata de lograr organizarse en el nivel nacional (ver “La marcha continúa” en *Página/12*, 30-4-1992); una infinidad de pequeñas organizaciones urbanas apoyadas por las ONG y por la iglesia progresista, quienes hacen frente a la problemática del ajuste y la exclusión. Los jóvenes —independientemente de su origen de clase— protestan por el autoritarismo tanto policial como de otras esferas sociales (escuelas, por ejemplo); y existen otras manifestaciones provinciales (ver *Norte Andino*, varios números). Además existe una infinidad de radios locales, periódicos, boletines alternativos, grupos informales, etcétera; todos ellos constituyen un potencial “sector de movimiento social” (Melucci, 1992) pero no existen acciones visibles para construir la red que podría llegar a articularlos.

posibles formas de existencia de lo social. Los movimientos sociales se han caracterizado por un incremento de la politización de la vida social (Laclau y Mouffe, 1987).

Una primera pregunta es acerca del *cómo* de estas organizaciones; cómo lograron armarse; cómo aparece la cooperativa en sus horizontes de posibilidades; cómo se cumple el doble rol de las cooperativas de unidad productiva y de movimiento social. Pero además del *cómo* nuestra reflexión apunta a establecer el *porqué* de estas organizaciones. Y en el caso de “El Sacrificio” nos ocupamos de un doble porqué: ¿cómo este “nosotros” (que aparece en los relatos) se convirtió en “nosotros”, “cómo y por qué un agregado social llegó a una definición de sí mismo como un colectivo capaz de actuar como un grupo”? (Melucci, 1992), y en segundo lugar, ¿por qué las mujeres, por qué todo comenzó cuando ellas (y no todo el grupo) enunciaron la pregunta “por qué no trabajar para nosotras”?

La particularidad de esta experiencia recae justamente en esta doble condición de sus actores: mujeres trabajadoras. Fuimos reconstruyendo el sistema de relaciones que las ubica tanto en la producción como en posiciones de género, étnicas o de nacionalidad. Lo hicimos desde una perspectiva analítica que recupe-

ra la acción de un sujeto constituido por una diversidad de prácticas y discursos (Laclau y Mouffe, 1987). El tipo de conexiones que se establece entre varias “posiciones de sujeto”, relaciones no-predeterminadas, inconsistentes y contingentes es lo que Laclau llama “articulación”; cada “posición de sujeto” está constituida dentro de un campo inestable, sujeta a prácticas articuladoras. Esta inconsistencia es la que permite la proliferación de puntos de antagonismo, la acción política como una forma disruptiva de lo social.

Lo que se pone en juego en el momento de la acción es tanto la experiencia de los sujetos, es decir, el conjunto de valores, ideas, recuerdos, prácticas sociales. Prejuicios y saberes, como la capacidad de innovar, de crear, de imaginar, de lograr un efecto.

La posición de género, el trabajo y también el trabajo desde pequeñas, así como el color de la piel, “la negritud”, son inserciones constitutivas de nuestros “sujetos, generadoras y organizadoras” de la Cooperativa Tabacalera de Trabajo “El Sacrificio”.

En la primera parte de este trabajo, bajo el título de “Los escenarios” daremos cuenta de las condiciones macrosociales de donde partió esta experiencia, tanto las que remiten a las políticas de ajuste, como aquellas que posibilita-

ron la creación de colectivos de este tipo. En la segunda parte indagaremos sobre los orígenes y los primeros pasos del grupo.

LOS ESCENARIOS

El proceso de reconversión económica comenzado a mediados de los años setenta involucra a fuertes cambios en el sector agrario que afectaban particularmente a campesinos y jornaleros. La principal consecuencia, durante los primeros años, fue el despoblamiento rural. Muchas familias abandonaban la producción de los cultivos en crisis, especialmente los ligados al mercado interno, y migraban a ciudades provinciales. Se producía la denominada “terciarización”: gran cantidad de población activa, ligada anteriormente al sector agropecuario, se iba integrando a mercados informales de servicios y a las administraciones públicas provinciales y municipales.

A partir de la crisis del endeudamiento externo (Teubal, 1985) y la aplicación de las políticas de ajuste de achicamiento del Estado, la población regional sufría un nuevo agravamiento en su situación general: muchos de ellos quedaban desocupados o con salarios muy bajos y desamparados en todo lo concer-

niente a la seguridad social. Faltaban recursos para hacer frente al gasto social de salud, educación, viviendas y para pagar los salarios del personal a cargo del Estado. Aparecían los bonos como monedas provinciales.

En trabajos anteriores indagamos sobre las formas de reproducción o sobrevivencia de los sectores sociales que no abandonaron sus tierras o residencias rurales (Giarracca y Aparicio, 1991). Los hallazgos más importantes relacionan esta permanencia con dos factores: el fortalecimiento de las organizaciones cooperativas y la “multiocupación”.

Las cooperativas comenzaban a desarrollar funciones articuladoras en las cadenas agroindustriales; apoyaban, de este modo, la inclusión de las economías campesinas en la expansión agroindustrial. Existen cooperativas operando en etapas de beneficio, industrialización o exportación dentro de las dos agroindustrias más importantes de la región: caña de azúcar y tabaco; en ambas existe un predominio de pequeñas explotaciones que reciben apoyos tecnológicos y financieros por parte de ellas.

Por otro lado, la familia campesina comienza a desarrollar un abanico de ocupaciones y a recolectar una serie de ingresos que generan desde los más ancianos hasta los más pequeños. Este fenómeno, que en un trabajo reciente

denominamos “multiocupación”, involucra a todos los campesinos, desde los semiproletarios hasta los más ricos o *farmers* (Giarracca y Aparicio, 1991).

A partir del advenimiento de la democracia, las cooperativas comenzaban a expandirse y a fortalecerse. Para la actividad tabacalera existen dos factores que posibilitaron tal desarrollo. Por un lado, se generaron ciertas políticas públicas que fomentaron y crearon un marco institucional favorable para iniciar pequeños emprendimientos productivos, y, por otro, comenzaba un proceso de expansión de la producción tabacalera en el nivel internacional que permitía la incorporación de nuevos productores.

LA COOPERATIVA TABACALERA DE TRABAJO “EL SACRIFICIO”

Durante muchos años un grupo de jornaleros de tabaco compartió el mismo patrón. La relación contractual que se establece entre el patrón y los jornaleros en la producción de tabaco del NOA se denomina “aparcería” o “sociedad”. Sin embargo, no es una aparcería tradicional donde el patrón pone solo la tierra, aquí aporta además, los medios de producción y vivienda, en tanto el jornalero solo aporta su

trabajo. No existe salario sino un porcentaje sobre la producción; es decir que el trabajador asume todos los riesgos de la producción y ningún beneficio social.

En general, el trabajador que se hace cargo de la aparcería cultiva con su familia; en las fincas trabajan grupos familiares que se conocen, comparten el trabajo y la vida cotidiana por años.

La producción tabacalera es intensiva en mano de obra, hacen falta calendarios de trabajo estrictos y una serie de labores ponen en peligro la salud del trabajador. Las enfermedades respiratorias y las intoxicaciones son frecuentes entre los tabacaleros, causadas por las tareas de fumigación y por el cáncer tóxico de la planta.

En la producción tabacalera de Tucumán predominan los pequeños campesinos (59%), pero existe un sector importante que utiliza diversas formas contractuales de trabajo (IP-DERNOA, 1992). En los últimos treinta años, aproximadamente, con la incorporación de un tipo de tabaco —el Burley— se va incrementando el área tabacalera, destinando gran parte a la exportación. El mercado mundial está en plena expansión debido a la incorporación de los países del Este, sobre todo la ex-Unión Soviética.

En este contexto general, un grupo de trabajadores iniciaba en el sur de la provincia la experiencia de organizarse independientemente del patrón que los contrataba. En realidad, fueron las mujeres del grupo las creadoras de este proyecto y las que emprendieron los primeros pasos. Hubo un momento en que la reacción patronal fue dura (se quedaba sin trabajadores) e intentó convencer a los hombres del “disparate ideado por las mujeres”, pero no hubo ni violencia ni acciones que trascendieran la esfera privada de las relaciones laborales.

LOS ORÍGENES DESDE LAS PROTAGONISTAS

La presidenta actual de la Cooperativa Tabacalera de Trabajo “El Sacrificio” —Cristina Juárez— es una mujer joven, soltera, sin hijos, la mayor de seis hermanos, cuatro mujeres y dos varones (el menor fallecido hace dos años). Su padre fue un jornalero de tabaco toda su vida y Cristina y sus hermanos trabajaron desde pequeños con él.

Cristina vive con su familia muy cerca de las instalaciones de la cooperativa. Elena, la madre, es una tucumana muy expresiva, sus frases están llenas de metáforas. Tiene un pensamiento complejo, opina sobre la situación social de

los campesinos, sobre el gobierno y sobre el papel asignado a la mujer campesina. Las hijas hablan frecuentemente de la rebeldía de su madre frente a las injusticias sociales. Su padre es más silencioso, todas las hijas afirman que fue firme pero no autoritario y que, a diferencia de la mayoría de los hombres de la región, jamás manifestó disgusto por el alto número de mujeres dentro de su familia. Dos de las Juárez están casadas, Josefina tiene cinco niños y vive muy cerca de la casa de sus padres. Todos ellos forman un núcleo central dentro de la cooperativa; sin embargo las relaciones no son demasiado diferentes de las de las otras familias que participan de la experiencia. Existen lazos de afecto y solidaridad entre ellos, claramente enunciados como valores dentro de los Juárez como familia, pero es probable que estos hayan sido, además, un componente importante en la generación del grupo de trabajo.

Cristina fue armando, durante varias horas de entrevistas, el origen y los comienzos de la cooperativa.

Nosotras comenzamos a trabajar cuando mi papá se enfermó, comenzamos nosotras porque los muchachos estudiaban, estaban en la secundaria. Nosotras somos las mayores, ellos son los menores con otra de las hermanas, es decir somos tres

mujeres, después vienen ellos y al final otra mujer. En realidad nosotras siempre trabajamos con él, era jornalero. Yo te cuento, íbamos a la escuela y trabajábamos unas horas con él, no había domingos ni nada. Por suerte éramos buenas alumnas, pero trabajábamos duro. Siempre en tierra ajena, hasta hoy que estamos arrendando [...]

Al enfermarse papá empezamos a tener responsabilidad nosotras, entonces pensamos si tenemos la responsabilidad nosotras, empezamos a comparar, si teníamos toda la responsabilidad nosotras, por qué no para nosotras (acentuado en el relato). Por qué no empezar a hablar entre las cinco personas que trabajábamos la aparcería, donde estábamos mi hermana (la soltera) y yo.

Empezamos a contar los recursos con los que contábamos nosotros, teníamos un caballo, un arado, una carpidota, la azada. Un muchacho amigo nos prestó el galpón (para el secado del tabaco). Arrendamos una hectárea, nos ayudaron conocidos de la zona, teníamos contactos, INCUPO fue el puente [una ONG], nos tiraron un dinero para que fuéramos comprando las cosas que íbamos necesitando. Al pasar la campaña lo pudimos devolver, pero con eso y todo nos dimos cuenta que era mucho más rentable trabajar para nosotras que como aparceras [...].

Cuando nos hacemos cargo de esa aparcería, no satisfechos con los resultados, porque teníamos como se dice una aparcería, tenías que darle una parte a él.

El porcentaje era del 60% de lo que se comercializaba a través de las bocas de acopio para nosotros y el resto era para él, de lo que el Fondo Especial del Tabaco, de ese sobreprecio que venía, que en ese entonces se lo pagaba en tiempo y en forma, eso era todo beneficio para él³. Y así comenzamos, cuando vamos a arrendar, a trabajar para nuestra cuenta, teníamos esas herramientas y a su vez trabajábamos en la aparcería también, el primer año, para que podamos disponer de la casa en la que estábamos viviendo, porque no teníamos otro lugar donde estar, tenías que trabajar ahí y salir a trabajar afuera [...].

Ahí cuando se enteró el patrón, nos quiso presionar, la verdad que habló con los hombres, dijo que estábamos locas si pensábamos que lo que queríamos iba a funcionar. Les pidió que nos pusieran en orden, él sabía que éramos las mujeres las que armábamos todo aquello. No creía que íbamos a ser capaz —nosotras tampoco [risas]— pero quería asegurarse con los hombres.

Cuando hacemos el proyecto en 1985, si no estoy

acordándome mal, ya formó parte Don Sánchez, para el año 1985-1986. En realidad le ofrecimos a varios, lo invitamos así, a varios, digamos, a participar dentro de esta organización que nosotros ya la vislumbrábamos, así quien podía ser una parte, que podíamos salir de esa forma, y trabajaríamos todos juntos. Fue don Sánchez quien nos lo hizo, quien ha trabajado este año y luego se ha sumado Don Córdoba... Primero se sumaron Don Sánchez, Don Córdoba, después se sumó Jorge (Cuqui), el esposo de Josefina, y después se sumó el marido de Francis, Leo. Ya fue en el año 1986-1987 cuando se realiza ese proyecto que pedíamos, a la embajada de Alemania, MISERIOR era, también una ONG que ayudaba a grupos de trabajo. Y hemos pedido y nos han dado ese subsidio. Nosotros cuando pedimos, pedimos para la construcción de un galpón, para construir un galpón. En ese momento teníamos relación con la gente de INCUPO que había un coordinador en la provincia. El dato [sobre la posibilidad de pedir un subsidio], el asesoramiento, lo pasó él, hicimos el proyecto y lo hemos conseguido.

Como resultado de eso hemos logrado comprar esta hectárea y media primero, de la que disponemos. Habíamos pedido para comprar mulas y arneses. Cuando recibimos ese dinero, dice Cuqui especialmente, que por qué no comprábamos un tractor, aunque sea usado, pero que teníamos la ventaja para que así podíamos cultivar el campo, cultivar el tabaco y no estar haciendo los

3 El precio inicial era de alrededor del 60% del precio final, sobre ese porcentaje recibían el 60%, es decir, recibían un 36% del precio final para todo el grupo de trabajadores. Esto es así porque el productor tabacalero recibe el monto estipulado por el precio del tabaco en dos momentos: alrededor del 60% lo ganaba el acopiador (empresa o cooperativas) y el 40% restante el Fondo Especial del Tabaco con recursos de los impuestos directos que pagaba el consumidor.

intercambios que solíamos hacer en aquel momento para con la mano de obra, ¿no?. Nuestro único capital siempre es, hasta el momento, es la mano de obra, ¿no?, con la que podemos avalar cualquier trabajo, así, encararlo; y lo hacíamos, pagábamos con trabajo para que nos cultiven el suelo (con maquinarias, la preparación inicial para trasplantar los almácigos). Entonces Cuchi dice: si nosotros compramos un tractor, con ese tractor vamos a cultivar el campo y después cultivaremos el tabaco o el producto, digamos el cultivo que lo estés haciendo. Y hemos comprado ese tractor que tú lo conoces. Cambiamos, claro, cambiamos, en lugar de comprar las mulas, los arneses compramos el tractor. En lugar de comprar azadas, palas, continuamos sufriendo esas necesidades que eran más chicas y compramos el tractor. Al comprarlo, ese año hicimos el galpón este, con ese dinero, compramos la hectárea y media de tierra, el tractor y paremos de contar, no teníamos más que comprar con eso, ¿no? Esa fue la primera inversión que hicimos a través de un subsidio. Lo que pasa es que como en ese momento todavía no teníamos personería jurídica, no nos habíamos formado en cooperativa, cuando compramos ese lote lo compramos a mi nombre, trabajábamos con representantes de cada familia, con Córdoba, don Sánchez, eran los representantes, Leo, Jorge y por los Juárez era yo. Entonces de todos esos representantes, y Eduardo López era el otro compañero, y hubo un

muchacho que se fue. Decidimos que se compre a nombre mío y que después se transfiera a la cooperativa “El Sacrificio”. Y así fue, al trabajar con representantes, entonces íbamos y comprábamos a mi nombre, y el tractor está comprado a nombre de Jorge y mío, pero acá nunca es de Jorge y mío, es de la cooperativa, porque uno avala la confianza que los demás socios han tenido hacia nosotros. Se ha comprado eso y luego fue cuando hemos trabajado acá en La Invernada.

Ya éramos seis familias y con nosotras siete.

Las siete familias se juntaron porque los fuimos convenciendo, también había otros trabajadores de la zona pero no se han quedado. Nosotras no sé si por un poco de orgullo o que hemos dicho “sí se puede” y así hemos comenzado. Nos repartíamos organizadamente que es lo que teníamos que hacer, yo compraba los insumos por ejemplo, y cada familia hacía algo.

Allí nos dimos cuenta que no podíamos seguir manejándonos con el delegado (de INCUPO), él se podía morir, le podía pasar algo, los delegados se mueren no son eternos, lo podían trasladar, teníamos que formar nuestra propia organización. Allí fue que nos conectamos con Campo de Herrera (cooperativa de trabajo azucarera con 25 años de funcionamiento) y ellos nos dijeron que era mejor que formáramos una cooperativa, porque en realidad nosotros ya estábamos viviendo como una cooperativa de trabajo. El 17 de agosto de 1986 nos hemos transformado en una coope-

rativa [...] y así dando pasos más largos que nuestras piernas hemos avanzado [...].

Hoy tenemos muchos problemas, distintos criterios, distintas edades, hay desencuentros desagradables, a mí tampoco no me gusta que me vengan y me digan hacé esto sin explicarme por qué. Pero hoy ya tenemos un estímulo válido, tenemos, gracias a Dios un buen tabaco. Con mi hermana la casada, que nunca quiso trabajar con el patrón, porque es medio rebelde, no hubo más que decirle “querés participar” que comenzó a participar en la organización. El marido antes nos ayudaba cuando estábamos con el patrón, pero él también nos ayudó al comienzo, les decía a los demás “miren sí se puede, las chicas tienen razón”, él estaba convencido por sí solo.

Acá ha sido muy importante el primer paso que hemos dado, para vencer el miedo a lo que podíamos hacer, y eso ha servido. Y las cosas que nos han ido pasando también nos han servido [...].

Me gustan los inicios, porque después es fácil, después la gente se pone en marcha, después viene gente a consultar, a interesarse. Pero lo que cuesta es el inicio, lo duro, la lucha, son los mejores momentos. Lo bueno es cuando están difíciles las cosas sacarlas adelante [...].

Yo veía que la mujer campesina es conformista, que se conforma con lo que tiene, yo quería que esto fuera distinto y que sirva para otras zonas. Había mujeres que les costaba venir porque les cuesta hablar, yo les decía “vení, participá, es-

cuchá aunque no hables” algunas vinieron están participando, otras se quedaron [...].

Yo me siento contenta porque nosotras no queremos romper nada, no queremos poner a las mujeres en contra de sus maridos, queremos que hagamos las cosas todos juntos.

Las mujeres que participan son titulares de las cooperativas, ellas son las socias, son ellas las que hacen los trámites, ¿vieron ese carrito que pasó por ahí? Bueno allí va el hombre a entregar su tabaco y muchas veces las mujeres viajan con él a realizar los trámites.

Tendría que ponerme a escribir las experiencias que hemos tenido año a año, todo lo que vivimos.

Es difícil contestar al interrogante de por qué este grupo de mujeres en la cosecha de 1984 (comienzos de la democracia) imaginó que podían transformar sus condiciones laborales, las relaciones entre ellos y sus cotidianidades, y además juntas. El padre de las Juárez se enfermó, pudieron vivenciar sin él que ellas podían con todo el trabajo; el país hacía muy poco había vuelto a plantearse proyectos conjuntos (independientemente de que se cumplieran o no), y la producción tabacalera comenzaba por aquellos años un período de expansión que fue de crucial importancia para “el éxito” actual del proyecto. Pero estas mujeres no estaban enteradas de las tendencias internacionales del comercio del tabaco

por aquellas épocas (ahora lo están); tampoco creemos que su padre haya sido factor limitante para que la idea hubiese surgido antes, simplemente su ausencia fue un desencadenante.

Cuando el padre se enfermó durante casi todo un año, el patrón les dijo que era muy difícil que ellas pudieran seguir manteniendo “la aparcería”, que faltaba un hombre; sintieron en esa oportunidad las consecuencias prácticas de la subordinación de la mujer. Otras hubieran aceptado la decisión “patronal-masculina” y hubiesen ido a trabajar de “domésticas”. Una de las hermanas confiesa: “...antes de ir a trabajar de ‘muchacha’, prefiero hacer otra cosa, yo digo no es una deshonra, pero nunca nos ha gustado. Preferíamos hacer un esfuerzo, y hacer otra cosa”. Ellas buscaron generar otra situación, sin “patrón” y donde las mujeres no dependieran de padres o maridos. Las otras mujeres pudieron imaginarse a sí mismas en la misma situación y aceptaron el desafío de intervenir el presente. Doña Justina, una de las ancianas del grupo, relató sus largos itinerarios, cargando críos, buscando patrones por todo el NOA durante toda su vida, ella y su hija ya casada aceptaron de inmediato y con entusiasmo el proyecto, los maridos se unieron después. El proyecto de producir por cuenta propia suponía no depender más del patrón ni

de hombres titulares de las aparcerías, en “El Sacrificio” las acciones de la cooperativa pertenecen, por igual, a hombres y mujeres⁴.

Cristina dice: “Nosotras hemos dicho no sé si por un poco de orgullo o que ‘sí se puede’ y así hemos comenzado”. El consenso inicial fue fuerte dentro del grupo familiar afectado, trabajan tres de las hermanas pero la cuarta, así como Elena, la madre, estuvieron presentes desde los comienzos.

Bourdieu sostiene que los agentes no están completamente definidos por las propiedades que poseen en un momento del tiempo y cuyas condiciones de adquisición sobreviven en los habitus. La correlación entre una determinada práctica y el origen social es el resultado de ciertos efectos y uno muy importante es el de *inculcación* (Bourdieu, 1988). En los relatos de estas mujeres siempre aparecen los padres como “diferentes” y sobre todo siempre están muy presentes las palabras de Elena, la madre.

4 Que las mujeres sean socias es un hecho casi inédito en Tucumán (y nos animaríamos a afirmar que en todo el país); en la actividad cañera las mujeres no han logrado ser titulares de las cooperativas en vida de padres o maridos, ni siquiera la Cooperativa de Trabajo de Campo de Herrera.

Yo siempre he sentido que el papá es diferente [...] hasta el día de hoy el papá me alcanza los chicos hasta casa cuando se los dejo para cuidar, yo sé que ya no está para cargar niños, pero es la forma que él demuestra que participa con nosotras. (Josefina)

El papá era un hombre de campo, muy duro y la mamá tenía otra formación, pero el papá siempre nos ha tratado bien, no ha tenido la escuela primaria, que nosotros consideramos que es lo necesario, [...] yo siempre lo he valorado a mi papá y lo sigo valorando, porque nunca nos ha tratado con términos duros, fue muy respetuoso con nosotras. Nos ha reclamado las cosas con palabras suaves, nunca tuvo palabras agresivas, guasas como en el campo se usan [...] mamá siempre ha trabajado duro y no ha tenido un salario, de allí esa rebeldía, que ha tenido muy marcada. Por eso en esa tarea de criarnos a los seis, la mamá ha sido costurera, ha sido maestra, la mamá había tenido toda su formación y estaba ingresando casi a su escuela secundaria, y lo que ha tenido adentro no se lo ha guardado para ella sino que lo ha sabido transmitir [...]. (Cristina)

Escuchemos a Elena —“la mamá”—, una campesina que colaboró con el trabajo de su marido hasta hace muy poco, que crió seis hijos, que cuidó de la casa pero que guardó tiempo para la reflexión y para la transmisión de sus ideas:

Esta vida mía es la vida real, y si no hemos avanzado más no es porque no haya inteligencia. En el campo se pierde mucha inteligencia, por la situación, aunque a veces en la ciudad se consiguen también los títulos a base de dinero y no porque se lo ganen. En el campo está la base, donde crece la materia prima. Hoy la gente de campo ¿cómo está viviendo?, (cómo es esa diferencia entre) el nativo y el blanco, el rico y el pobre. Al lado de la inteligencia debe existir el amor, en el campo el amor sigue existiendo por el nivel de vida que tenemos. Bueno, esta es mi forma de pensar, porque no es cuestión que cada uno se considere dueño de la verdad. El afecto y la solidaridad se extinguen porque existe materialismo, y donde existe materialismo se adueña de todo, porque yo he pasado, yo tengo a mis hijos, que les doy, amor, (también sufrimiento porque en esta vida el trabajo es pesado) [...] Mire si vamos a la autoridad nosotros somos los nativos, pero en esa hora que ellos llaman verdad —yo no lo llamo así— en esa hora prevalece “el esclavo”. En esa hora el voto ese tiene importancia, pero que ha pasado después m’hija, somos los primeros que quedamos olvidados. En la ciudad prevalecen las alfombras, el oro, el lujo. Una vez vino un señor y trajo un perfume, que era así, o así y yo le dije, “el mejor perfume se llamaría así Sudor de Pobre, porque el pobre no tiene una gota de perfume pero se baña con ese sudor que el trabajo le da”. Por allí lo que digo no tiene sentido, el no sentido

viene de mi situación, por el dolor que siento [...] Una persona como yo de 61 años que siento dolor porque mis hijos siguen con ese trabajo bruto del campo. La inteligencia en el campo no existe, porque vivimos aislados, de una sociedad que nos olvida. Porque el país es de todos, nuestro país es rico por naturaleza pero los hombres no lo saben usar. Porque los gobernantes son nuestros representantes, pero no saben representarnos. Y el pueblo calla.

El discurso materno, la transmisión de “esa rebeldía” fue importante; esa inculcación que permitió preservar “un núcleo del buen sentido” (Nun, 1987) que fue más fuerte que los mensajes de los aparatos de la reproducción social. Josefina recuerda, en las entrevistas, la escuela como un lugar donde se hacían jerarquizaciones según el color de la piel; la “negritud”, sospechaba ella, incidía en el reconocimiento del trabajo y el esfuerzo, “...la bandera siempre caía en manos de los blanquitos del grado”. La casera era el lugar donde, al contrario, se reivindicaban esas condiciones, ser niñas, ser negras o ser pobres era un “desafío” (la posibilidad de una resistencia) y no una vergüenza.

Todas las hijas siguen alrededor de la casa materna, y por la casa de las Juárez pasan todas las mujeres de la cooperativa. En la actualidad el grupo se va vinculando con otras ins-

tituciones, con medios de comunicación, con ONG, con una cooperativa más grande y con una compleja trama de relaciones que les devuelve la imagen de una organización. Ese sistema de relaciones que van conformando es el que permite pensarlos como un grupo con una identidad colectiva. Cuando comenzaron contaban con poco capital, poco dinero y pocos recursos no materiales: la relación entre ellas, ciertos contactos, un discurso que valoraba los derechos individuales y sociales. Movilizar estos recursos —materiales y simbólicos— permitió la formación de una matriz que les fue permitiendo el cuestionamiento de la subordinación y las reivindicaciones de sus derechos como campesinas y mujeres de tez oscura.

Sin embargo la enumeración de condiciones de posibilidades no es finita, no es posible explicar el origen de las acciones colectivas cuando estas logran un des-enlace social. No todas las condiciones son ubicables y enunciables, en el relato de Cristina queda un lugar para lo que no se puede explicar “estábamos locas”, “el patrón no lo creía posible y nosotras tampoco”, “dimos pasos más largos de lo que nuestras piernas podían”. No hubo una lógica de medios-fines, de racionalidad política, de hacer “lo posible”. Hubo un campo de posibilidades y límites dentro del cual el

propósito fue perseguido, pero ese propósito fue co-producido por ellas mismas y en el sentido que le fueron atribuyendo aparecen los determinantes estructurales (las condiciones macro), así como la capacidad de invención, de creación de sentidos de ellas mismas como sujetos. No había nada que predijera que la acción sucedería, hubiese podido no suceder, que sucediera fue una contingencia. Estas varias familias podrían estar hoy trabajando con un patrón como muchas otras, la intervención, la apuesta de unos sujetos posibilitó una transformación.

Dice Melucci:

Hablar de propósitos implica poner el acento en fines y sentidos. La idea de un campo que refiere a posibilidades y límites dentro del cual las metas son conseguidas; la definición de esos propósitos es algo que los actores co-producen y es una representación o reflejo de las condiciones estructurales. Este proceso es un activo proceso relacional, lo que yo llamo, a falta de mejor término, “identidad colectiva” [...] Este proceso de definición implica la presencia de esquemas de conocimientos, de densas interacciones y de intercambios emocionales y afectivos. (Melucci, 1992)

LA ORGANIZACIÓN

La unidad es un resultado y no un punto de partida, gran parte de las acciones de los participantes de “El Sacrificio” se realizan precisamente tratando de conseguir la unidad. En muchas ocasiones, la visibilidad de un nombre tapa la fragilidad transitoriedad de las relaciones que están detrás de él. La organización aparece como un fin en sí mismo, si lo van logrando, el actor sigue en el escenario. Todas las experiencias que analizamos en el NOA buscan recursos que contribuyan con la tarea de la unidad (boletines, programas de educación, subsidios, apoyos externos, nuestro propio apoyo reflexionando y escribiendo sobre ellos).

“El Sacrificio” se origina como organización “autogestionaria”: con ello entendemos que no depende en ningún sentido de “gestiones externas” para su desarrollo y sostenimiento. Esto no significa que no puedan solicitar créditos, subsidios, y toda clase de apoyos externos, pero las decisiones de cómo usar los fondos, de cómo actuar, de a quiénes elegir como aliados son tomadas por ellos. De hecho, esta organización tuvo un importante apoyo del INCUPO en sus primeros momentos, pero el núcleo que armaron sujetos fue tan potente que el delegado de la ONG terminó trabajando directamente

con ellos. Cristina expresa muy bien la autonomía inicial, no se podía depender de una persona (o de una institución), solo necesitaban apoyos para ir armando la propia⁵.

En el plano empírico aparecen dos niveles de organización: el que remite al accionar de la cooperativa como unidad económica y aquel que permite que cada sujeto decida diariamente trabajar o entregar su producción a la cooperativa, participar de sus reuniones, “delegar” responsabilidades, las mujeres seguir peleando la participación, los jóvenes cuestionando el lugar de los “viejos”, en síntesis seguir formando parte de “un nosotros”. Cada día que esto ocurre se co-produce y redefine el sentido de la acción social para el conjunto. El mensaje que viene desde el exterior, en la actual coyuntura, es el de no se puede, independientemente de la rudeza o sofisticación del emisor.

El seguimiento y el análisis del nivel de organización de las unidades económicas es una tarea más fácil que la reconstrucción del otro

tipo de acciones. Sin embargo lo primero que debemos plantear es que la distinción es analítica ya que las tareas de la cooperativa como unidad productiva re-construyen o destruyen el lazo social solidario tanto como la toma de decisiones o la elección de representantes.

LA ORGANIZACIÓN DESDE LOS ACTORES: “EL SACRIFICIO”

Cristina contó el proceso de organización económica-productiva en los momentos de decisiones relevantes (cómo distribuir el trabajo, qué hacer con el excedente). Tratamos de complementar ese relato con otros sobre la vida cotidiana de estas mujeres: qué se hace con los niños, cómo actúan los compañeros, cómo lograr la participación, etcétera.

Algunas de las integrantes de “El Sacrificio” (no todas) colaboran con un programa provincial para mujeres. Cuando se les preguntó el motivo y si en esa decisión se tomaba en cuenta la experiencia actual, una de ellas planteó claramente las dificultades de conciliar consenso acerca de los procesos laborales dentro de “El Sacrificio”. Las labores culturales agrícolas son muy pesadas y además los hombres creen poseer un saber superior

5 En nuestras investigaciones aparecen dos tipos de experiencias organizativas de los sectores populares: las “autogestivas” y las que son producto de una “intervención extrema” producida por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales (véase Giarracca, 1992).

al de ellas. El tema de la división sexual del trabajo no está discutido a fondo, aún cuesta hacerlo, tanto dentro de la cooperativa como dentro del hogar.

Los niños están a cargo de las madres, vacunarlos, llevarlos a revisiones médicas periódicas son tareas muy complejas en las zonas rurales. Hay que caminar mucho hasta la ruta, esperar colectivos que pasan una o dos veces al día. Josefina pone mucho empeño en lograr una adecuada escolaridad de los pequeños, habla con las maestras, supervisa sus deberes. Las tareas domésticas también son más complicadas que en los hogares urbanos, los alimentos necesitan mayor elaboración, el pan o las galletas se hacen en las casas. Ellas se alegran de los intercambios que realizan: cuando necesitan tomates piden a los vecinos o los cambian por naranjas. Josefina, y casi todas ellas, preferirían un trabajo menos pesado y menos insalubre que el cultivo del tabaco. “¿Cómo querer una tarea que te deje exhausta?” nos pregunta con frecuencia. Prefiere el trabajo doméstico, pero ello implica no participar en la cooperativa, por eso apareció la idea de una nueva cooperativa, tomando, pero superando, la experiencia actual.

Yo soy la que menos hago en el surco porque estoy con los chiquitos. Mi marido ayuda en las cosas de la casa cuando yo voy también al campo. En general voy a las tareas del galpón, o a la cosecha, allí sí cuando volvemos repartimos las tareas, él cocina y yo lavo [...].

Cuando viajé, me di cuenta que aquí en “El Sacrificio”, las mujeres tienen el mismo peso que el hombre, no es así en otras cooperativas [...] nosotras no trabajamos gratis, tenemos mucha influencia, tenemos mucha participación. Hemos ido a conocer otras cooperativas, y (las mujeres) no tienen la participación que tenemos aquí. Hemos ido por allí, dejamos a los niños con los abuelos, la beba tenía 20 días y la llevé conmigo, vi al médico que me ha dicho que no la desabrigue en los cerros y que la lleve.

Pero a la siguiente vez no he salido porque me di cuenta que no es factible salir todas las veces con los chiquitos. No tenés una niñera que los cuide.

Hace cuatro años “El Sacrificio” solicitó la incorporación a la Cooperativa de Agroindustrialización Tabacalera de Tucumán. Una organización que acopia, agroindustrializa y exporta tabaco. Esta integración les facilitó ciertas decisiones acerca de la organización del proceso laboral. Cristina cuenta cómo fueron logrando la organización económica:

Y nosotros ya éramos una cooperativa y si sos una cooperativa y hay otra más grande y tabacalera es como si fueras de la familia. Nos informamos a través del síndico, él tiene experiencia en cooperativas [el anterior promotor de INCUPO], desde que nos conocimos que conversamos las decisiones con él. Cuando INCUPO se retira nosotros seguimos en contacto con él [...].

Hasta el año 1987-1988 nos equivocamos, cada familia agarraba un lote y plantaba su tabaco. Después dijimos “muchachos tenemos que cambiar”. Un año trabajamos juntos los Juárez, el gallego y otro muchacho, y nos fue muy bien. Nosotros sabíamos lo que trabajábamos cada uno, teníamos cierto control, las horas de trabajo, anotamos todo lo que hicimos. Nos fue bien. Al año siguiente dijimos volvamos a probar y volvimos a trabajar juntos. El resto seguía trabajando cada uno en lo suyo. En los años 1989-1990 hicimos “un bolsillo” (juntaron dinero entre todos los que producían juntos) y compramos una rastra. Éramos cuatro familias y estuvimos todos de acuerdo. Pero en el año 1990 éramos socios de la cooperativa tabacalera y un asesor nos dijo que hiciéramos los almácigos (plantines de tabaco previos a la plantación) todos juntos. Nos pusimos de acuerdo para probar. Decíamos es como trabajar todos juntos con un solo patrón, la cooperativa “El Sacrificio” que es nuestra será nuestro patrón con la diferencia que teníamos que organizarnos nosotros y organizar los recursos.

Habíamos arrendado ese año 12 hectáreas, en realidad eran menos porque siempre te arriendan 12 hectáreas pero cuando las caminas son menos. Eso ya era 1990-1991, allí empezamos a distribuir tareas y no parcelas. Distribución del trabajo lo llamábamos nosotros y allí no más elegimos los responsables. Esa campaña tuvimos plantadas 10 hectáreas pero con el pulgón (una enfermedad del tabaco) terminamos cosechando 8 hectáreas.

[...]

Cosechadas las 8 hectáreas nos preguntamos qué íbamos a hacer con el excedente. No teníamos un buen excedente (le preguntamos si tuvieron un buen excedente), pero no sé si no es un “no soberbio” porque en realidad nosotros queremos siempre más. Teníamos después de haber pagado las deudas equis cantidad y teníamos que pagar el trabajo que cada uno había realizado. Sacamos el cuaderno donde cada uno había anotado y hemos ido sacando de allí los números.

Fijamos la hora de trabajo de acuerdo a lo que estaba en la zona, a razón de ese precio nos adjudicamos la hora. Antes nos habíamos puesto de acuerdo: el tractorista cobraría un 30% más que los demás, hombre o mujer, no habría diferencias por sexo. Nos habíamos puesto de acuerdo que tractorista, fumigadores de noche y los que trabajaron los domingos cobrarían más. No era un plus en pesos sino en horas. Él había anotado 10 horas de tractoristas y nosotros agregábamos

30% más, es decir, 3 horas más. Los criterios los discutimos, los sacamos entre todos, discutimos las responsabilidades, por ejemplo un tractorista tiene que cuidar el capital de todos.

Así pagamos, sin recibo, con confianza pagamos el trabajo y nos quedó la mitad del excedente ¿Qué íbamos a hacer? Discutimos que teníamos que dejar un porcentaje para capitalizar la cooperativa, para las necesidades más urgentes que tuviéramos y luego el excedente lo adjudicaríamos a cada familia de acuerdo a la proporción de trabajo. Es decir íbamos a tener ganancias de acuerdo a tu dedicación a tu trabajo.

Esto surge porque siempre decíamos que nuestro capital es el trabajo. Todos sabíamos eso, aun los que no saben leer ni escribir el criterio del trabajo era fácil de entender, debemos ganar de acuerdo al trabajo, fue simple... ¿a quién se le ocurre la idea?, era clara, era una buena idea... creo que se le ocurre al gallego⁶ [...].

6 Es interesante notar que la idea de tomar el criterio de trabajo para la distribución de excedente surgió en la Cooperativa Campo de Herrera, hace más de veinticinco años atrás; es muy probable que la gente de allí haya recomendado el criterio pero ya no se recuerda, forma parte de los valores cooperativos provinciales. En nuestras investigaciones encontramos que en la provincia siempre hubo organizadores, personas en distintas épocas de este siglo que fueron figuras clave en la creación del movimiento cooperativo, difusores de los valores de la cooperación.

Volvíamos a necesitar para comprar algo no previsto... nuevamente hacíamos el “bolsillo”.

En la temporada 1991-1992 cultivaban 22 ha de tabaco y melón bajo cubierta, tomaban créditos y seguían distribuyendo tareas y no tierra. Le entregaban el tabaco a la Cooperativa Tabacalera y recibían de parte de esta, insumos y asesoramiento técnico y contable. Al final de la temporada sintieron que se habían sobreexcedido: durante la actual temporada (1992-1993) están atravesando por la crisis que instaura la retirada desordenada del Estado (Decreto de desregulación económica), pero “el colectivo” funciona: dividieron tareas, buscan pequeños proyectos complementarios, sienten que juntos pueden afrontar la situación en mejores condiciones.

Las decisiones siguen tomándolas entre ellos, y los “externos” asesoran y aconsejan. Son pocos y se tienen confianza, van de una casa a la otra tomando una decisión rápida. Participan siete familias, unas veinte personas, deciden entre todos, no han tenido que abordar aún el tema de la representación o la delegación. Todos actúan por igual, lo cual es igual a decir nadie actúa, ni habla “en nombre de otro”.

Esta experiencia que comenzó como un cambio en las relaciones de producción, puso

al descubierto una serie de problemáticas que tienen que pensar y resolver: el trabajo cooperativizado sin perder eficiencia productiva; la igualdad del ingreso pero con respecto a la división sexual de las tareas; el trabajo hogareño de la pareja; el cuidado de los niños frente a la participación pública de las madres; el cuidado de la salud y el medio ambiente; las otras igualdades posibles.

El desafío que se les presenta en estos momentos es cómo superar la crisis y seguir creciendo. Los referentes para la toma de decisiones en estos momentos se han diversificado, existe un discurso “eficientista” de la Cooperativa Tabacalera “La Invernada”, que pone el acento en el crecimiento económico en sí mismo más que en las formas de organización del grupo (Gras y Ríos, 1992).

Estas mujeres de tez oscura hoy en día participan en reuniones de la cooperativa grande en condiciones de igualdad con hombres y con técnicos, son escuchadas y reconocidas. Ellas mismas se extrañan de la potencia que han adquirido para hacer respetar sus derechos. El lugar que actualmente ocupan en la Cooperativa Tabacalera les permite participar en las políticas que se están generando allí para los productores campesinos y los jornaleros, en la nueva etapa de la

actividad desregulada que se inició con esta nueva siembra⁷.

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

Esta experiencia, así como muchas otras que se desarrollan en el Norte, se originaron en torno de nuevos conflictos y suponen la participación de individuos que comparten ciertas imágenes que les permiten una valorización común de lo que sucede. Algunos sujetos buscan diferenciarse: actúan, proponen, movilizan recursos. “El Sacrificio” ha logrado en estos años un nivel de visibilidad que habilita a pensarla como un actor colectivo en construcción. Pero esta construcción es constante, la organización no es un resultado, es la finalidad misma de las acciones; en esta construcción se juega la posibilidad de reconocimiento e inclusión.

Los sectores populares pueden recurrir a múltiples formas de sociedad primordial —el parentesco, la solidaridad vecinal, la amistad, la cooperación— en la lucha por el hacerse re-

7 Cuando revisaba este nuevo trabajo para su publicación hubo un cambio de autoridades en la Cooperativa Tabacalera. Cristina Juárez dejó de ser vicepresidenta.

conocer (Barbero, 1988), y sin escapar del todo (situación inimaginable) de la institucionalización de lo social y de los aparatos de la reproducción, pueden construir herramientas para lograr la inclusión en “los mercados” y en “la democracia”, para lograr mayor equidad en las relaciones sociales que involucran a mujeres, a jóvenes y a minorías étnicas. Las cooperativas (sobre todo las de reciente constitución) aparecen en este horizonte de expectativas.

Varios autores han desarrollado argumentos sólidos sobre las ventajas de las cooperativas de trabajo dentro del capitalismo moderno, pueden mejorar costos de producción, propiciar la incorporación de tecnologías avanzadas, sobre todo de gestión; asimismo el capital tiende a rendir un retorno fijo y limitado que facilita la inversión productiva, etcétera (Baldacchino, 1990; Holme, 1990). Otros argumentos se orientan por el lado de las cooperativas como “escuelas para la Democracia”, es decir, espacios donde se juegan los principios de igualdad y control democrático. Sin embargo, en Argentina no existe actualmente una política dirigida al fomento de estas organizaciones. Desde el gobierno se sostiene, por un lado, el discurso de los “microemprendimientos” como herramienta de política social, pero, por el otro, se ignoran los emprendimientos que los propios

actores generaron en los últimos tiempos y en muchos casos se generan políticas públicas que los ahogan.

Si bien la producción tabacalera posibilita un nicho de producción y exportación para el desarrollo de este emprendimiento, las condiciones generales del país han cambiado sustancialmente. La desregulación (la desaparición del Fondo Especial del Tabaco), la liberalización del mercado, y hasta el proyecto del MERCOSUR, si no se modifican condiciones iniciales, juegan en contra de la lucha de estos campesinos por la inclusión. Por otro lado ni el Estado ni los partidos políticos (gestores dentro del Estado) están capacitados para gestionar y representar las demandas de los sectores populares.

Las clases subalternas argentinas hicieron suyo durante muchos años, un imaginario político que suscitaba la confianza de que participaban o podían participar en un sistema que los incluía y los reconocía: imaginario desde los ochenta y, más aún, desde el gobierno del Dr. Menem, no deja margen a dudas sobre la capacidad (o, mejor dicho, la incapacidad) del Estado de hacerse cargo de las demandas de “inclusión” de los sectores populares. En el nuevo modelo de país el Estado no expande “ciudadanía”, sino todo lo contrario.

Uno de los resultados más interesantes de esta, como de otras experiencias, reside en constatar la predisposición “modernizante” de los actores: toman créditos, recibe asesoramiento tecnológico, participan en programas sobre la mujer, se preocupan por los factores contaminantes del tabaco, etcétera. No existen lógicas diferenciales de los campesinos que justifiquen la orientación que los excluye del mercado, existen condiciones de aislamiento y subordinación que no son fáciles de superar. Las acciones colectivas autogeneradas, así como aquellas que son producto de intervenciones externas programadas, constituyen herramientas eficaces para superar el aislamiento, aunque esto solo no baste.

La pregunta que está en juego, pues, es sobre las condiciones de posibilidad para generar redes sociales capaces de autosostener estas iniciativas. Los apoyos más importantes que aparecieron hasta ahora se han originado en algunos espacios internos del movimiento cooperativo nacional e internacional, dentro de sus redes institucionales, o a partir de otras organizaciones no gubernamentales extranjeras, sobre todo europeas. En nuestro ejemplo, tanto el movimiento cooperativo como las organizaciones que apoyan a mujeres campesinas o a microemprendimientos han facilitado

las acciones del grupo para lograr insertarse en una red de relaciones que permiten sostener la experiencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio, S., Giarracca, N. y Teubal, M. 1992 “Trasformaciones en la agricultura argentina. Impacto sobre los sectores sociales” en Jorrat, R. y Sautu, R. (comps.) *Después de Gino Germani: exploraciones sobre la estructura social argentina* (Buenos Aires: Paidós).
- Baldacchino, G. 1990 *Worker Cooperatives with Particular Reference to Malta: An Educationists Theory and Practice* (La Haya: Institute of Social Studies) Occasional Paper N° 107.
- Barbero, M. 1988 “Comunicación, pueblo y cultura en el tiempo de las transnacionales” en Gilli, G. (comp.) *Comunicación y cultura en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Bourdieu, P. 1988 *Cosas dichas* (Buenos Aires: Gedisa).
- Bourdieu, P. 1988 *La distinción* (Madrid: Taurus).
- Boyer, R. 1980 *La teoría de la regulación: un análisis crítico* (Buenos Aires: Humanitas).

- Cheresky, I. 1991 "Creencias políticas, partidos y elecciones" en *Cuadernos del Instituto de Ciencias Sociales* (Buenos Aires: Instituto de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 2.
- Diani, M. 1992 "Analysing Social Movement Network" en Diani, M. y Eyerman, R. (eds.) *Studying Collective Action* (Londres: SAGE).
- García Canclini, N. 1988 "Reconstruir lo popular", ponencia presentada en el seminario "Cultura popular: un balance interdisciplinario" (Buenos Aires).
- Giarracca, N. 1992 "Sectores populares rurales y políticas de ajuste en Argentina: arrinconamiento, exclusión, acciones colectivas", ponencia presentada al VII Congreso Mundial de Sociología Rural, Pennsylvania, EEUU.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 "Campesinos cañeros: multiocupación y organización" en *Cuadernos del Instituto de Ciencias Sociales* (Buenos Aires: Instituto de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 3.
- Gras, C. y Ríos, M. 1992 "Encrucijada en una actividad agroindustrial en expansión: inclusión democrática o subordinación de los sectores subalternos" en *Revista de INDELCOOP* (Buenos Aires).
- Holmen, H. 1990 "State, cooperatives and development in Africa" en *The Scandinavian Institute of Africa Studies* (Upsala) Research Report N° 86.
- IPDERNOA (Instituto Provincial de Desarrollo Rural del NOA) 1992 *Los pequeños productores de Tucumán. Diagnóstico y alternativas* (Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, Serie Investigación).
- Laclau, E. y Mouffe, C. 1987 *Hegemonía y estrategia socialista, Hacia una radicalización de la democracia* (Madrid: Siglo XXI).
- Mainwaring, S. y Viola, E. 1987 "New Social movements, political Culture and Democracy Brazil and Argentine in the 1980's" en *Telos*, N° 61.
- Melucci, A. 1987 "An end to Social Movement? Introductory paper to the sessions on New Social Movement and change in organizational forms" en *Social Science Information*, Vol. 23, N° 4-5.
- Melucci, A. 1992 "Frontier Land: Collective Action between Actors and Systems" en Diani, M. y Eyerman, R. (eds.) *Studying Collective Action* (Londres: SAGE).
- Minujin, A. 1991 "En la rodada", ponencia presentada en seminario "Efectos de la

- Crisis en la Sociedad Argentina, Los nuevos pobres" (S/d: UNICEF).
- Nun, J. 1987 *La rebelión del coro, estudios sobre la racionalidad política y el sentido común* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Página/12* 1992 "La marcha continúa" en *Página/12*, 30-4.
- Rodríguez, M. T. 1992 "La relación entre movimiento social y democracia desde una perspectiva de género: el caso de las 'Madres de Plaza de Mayo', 1980-1988", ponencia presentada en la II Jornadas de Historia de las Mujeres (Buenos Aires: FSOC-UBA).
- Secretaría de Acción Cooperativa 1989 *Cinco años de acción cooperativa* (Buenos Aires: Ministerio de Economía).
- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 1989 "Tipos de trabajadores y mercado laboral en la producción de tabaco virginia en la provincia de Jujuy", preliminar, mimeo.
- Slater, D. 1985 "New social movement and old political questions. Rethinking state-society relations in Latin American Development", ponencia presentada al XV Congreso Internacional de Ciencias Políticas (Buenos Aires).
- Teubal, M. 1985 *Crisis y deuda externa: América Latina en la encrucijada* (Buenos Aires: IDES).
- Vargas, V. 1991 "The Women's Movement in Perú Streams, Spaces and Knots" en *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe* (Holanda: CEDLA) N° 50.

EL OFICIO DEL SOCIÓLOGO O DE LOS SOCIÓLOGOS CON OFICIO*

NORMA GIARRACCA Y SUSANA APARICIO**

Norma Giarracca: Me gustaría dedicar diez minutos a que nos presentáramos. Daniel Suárez ya lo hizo, pero agregaría que, efectivamente, Susana Aparicio y yo hace muchos años que trabajamos juntas, además estudiamos juntas la carrera de Sociología y por lo tanto compartimos este oficio de hacer investigación desde tiempo atrás, con el único paréntesis de ocho años, en los que yo estuve en el exterior, varios de ellos en México. Allí hice un posgrado y trabajé sobre el campesinado mexicano. Mientras tanto, Susana Aparicio, quien se que-

dó en el país, también hizo un posgrado y además, hizo parte de su carrera en el CONICET, trabajando en CEIL (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales).

Ayer, cuando repasaba el material que les había enviado para leer, pensé que había sido una elección muy pertinente porque, como ustedes vieron, la mayoría de los ejemplos que pone Pierre Bourdieu son sobre educación y cuando uno encuentra ejemplos que hacen a la propia práctica puede llegar a percibir o darse cuenta mejor de los problemas que marca el autor. En relación con la lectura —no sé si todos ustedes pudieron hacerse del material y leerlo— yo quería pedir disculpas por la traducción: fue hecha —para la discusión interna de nuestro equipo de investigación— por un miembro del mismo que maneja bien el francés, pero la traducción tiene algunos problemas de redacción y de ortografía. Les pido disculpas por no haber revisado la versión que envié para esta charla.

* Giarracca, N. y Aparicio, S. 1995 “El oficio del sociólogo o de los sociólogos con oficio” (sel.) en Schuster, F.; Giarracca, N.; Aparicio, S.; Chiamonte, J. C. y Sarlo, B. *El oficio del investigador* (Buenos Aires: Homo Sapiens / Instituto de Ciencias de la Educación, UBA) pp. 53-77.

** Magíster en Sociología. Investigadora principal del CONICET (Argentina). Docente e investigadora con una extensa trayectoria en temáticas rurales.

Quiero comenzar mi exposición, justamente con una de las primeras frases de Bourdieu. Como ustedes vieron, en ese trabajo reflexiona sobre los problemas de la tarea de investigación: era una serie de reuniones que incluía distintas presentaciones de investigadores invitados¹. Pierre Bourdieu toma al público desprevenido y le pide a cada uno que cuente sus trabajos. Él dice que lo pide sorpresivamente adrede, para que nadie esté preparado y tenga un discurso demasiado armado sobre sus investigaciones. Y dice que la exposición de una investigación es todo lo contrario a un show, a una exhibición en la que uno busca hacerse ver y hacerse valer. Es un discurso en el que uno al poner, se expone, toma riesgos. Y, precisamente, esto es lo primero que quiero decirles. Nosotras no somos epistemólogas. No somos metodólogas sino que somos dos investigadoras que venimos trabajando en investigación en Sociología Rural aplicada desde hace muchos años, y que aceptamos esta invitación para contarles los problemas que tuvimos en una de ellas: la articulación del campesinado al complejo agroindustrial cañero de Tucumán.

Esta investigación da lugar al “Cuaderno” que les recomendamos revisar —“El Campesinado cañero: multiocupación y organización”—, publicación que sale en 1990. Pero de esta primera parte de la investigación salen otros trabajos, se abren muchas otras preguntas. Nosotras les vamos a narrar los problemas que tuvimos en esta etapa inicial. A partir de ese trabajo salen diversas investigaciones de becarios, salen tesis de maestría en el país y en Holanda.

Desde 1984, Susana y yo estamos trabajando en la problemática agroindustrial y en la problemática de los actores dentro de los espacios agroindustriales, pero elegimos reflexionar con ustedes sobre esta investigación en concreto porque pensamos que plantea muchas cuestiones interesantes desde el punto de vista de nuestro oficio. Nosotras vamos a plantear algunos problemas que tuvimos en el proceso de investigación, siempre con referencia a la misma, haciendo referencia a nuestra propia problemática. No vamos a hacer una reflexión teórica, epistemológica, sobre los problemas de investigación, sino que vamos a hacer una reflexión acerca del proceso mismo, de la actividad misma que nosotras fuimos desarrollando a lo largo del período.

Una de las razones por las cuales elegimos para comentar con ustedes esta investiga-

1 El trabajo recomendado es Bourdieu, 1992.

ción, fue porque ella nos requirió mayor nivel de reflexión metodológica. Tuvimos una serie de problemas que aparecieron en el trabajo de campo, con la muestra, que nos demandó decisiones, opciones, consultas con colegas, cuestiones que hacen “a la cocina” de la investigación. Pero además fue la primera investigación, después de muchos años, que hicimos en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Hasta ese momento habíamos estado trabajando sobre la problemática de la expansión agroindustrial en un centro privado de investigación, el CEPA (Centro de Estudios y Promoción Agraria) y estábamos dando cursos y seminarios y la materia Sociología Rural en la Universidad. En los años 1987 y 1988 comienzan los subsidios de investigación de UBACYT. Nosotros teníamos subsidios de investigación para el CEPA del CONICET y decidimos poner una parte de la tarea de mayor relevancia sociológica, la que hacía a los actores sociales, en la Universidad de Buenos Aires. Lo hicimos con el convencimiento de que la investigación sería, además, una herramienta de trabajo con los alumnos. Y así fue, a partir del proyecto, en el marco del mismo, se presentaron varios becarios. Daniel (Suárez) lo sabe muy bien porque fueron becarios a pedir fondos para viajar a Tucumán y lo tuvieron bastante loco.

Armar un equipo en la Universidad, ¿qué significó? Significó que Susana y yo, que veníamos trabajando desde hacía muchísimos años con supuestos y con consignas, procedimientos, proceder, reglas en el sentido de Bourdieu, estrategias implícitas, tuvimos que empezar a explicitarlas porque tuvimos que comenzar a sostener nuestras actividades frente a los muchachos que estaban aprendiendo a investigar con nosotras. Esto fue una tarea tan fascinante que nos llevó a dejar CEPA y radicarnos en lo que en aquel entonces era el Instituto de Sociología y después sería el actual Instituto de Ciencias Sociales. Así, el equipo de las sociólogas rurales de mediana edad, para no decir grandes, que veníamos trabajando desde 1970, comenzó a abrirse a los nuevos sociólogos rurales en formación. Cuando comenzaron a investigar hubo que plantear preguntas y procedimientos y no en forma teórica como se hace en las materias metodológicas, sino en forma práctica: tomando decisiones y sosteniéndolas, argumentándolas frente a los jóvenes aprendices.

Las principales preguntas que iniciaban la investigación tenían que ver con la capacidad de los campesinos, sectores desfavorablemente ubicados en la actividad azucarera, para generar y poder utilizar la organización como una herramienta para transformar en algún sentido sus

condiciones de existencia. Entonces por eso, la elección de esta investigación, para reflexionar con ustedes. Antes habíamos hecho otra sobre el complejo arrocero en el NEA, después hicimos muchas más en el NOA, sin embargo cuando Susana Lamboglia me propuso esta conversación, Susana Aparicio y yo no tuvimos ninguna duda y elegimos hablar sobre esta experiencia, que se puede compartir, que se puede discutir y que puede servir, creo, para saber los problemas que se le presentan a un sociólogo cuando está trabajando en investigación.

Querría hacer una pequeña referencia a la cuestión institucional. Antes dije que elegimos la Universidad de Buenos Aires porque nosotras estábamos ahí dando clases, pero además fue con la convicción de que la elección del lugar donde se hace investigación es relevante. Uno no puede hacer cualquier investigación en cualquier parte: la institución que la contiene, que es sede, es importante. Y creo que para las investigaciones en Sociología —yo hablo por la Sociología— y en las Ciencias Sociales en general y, es más, yo diría en las ciencias en general, uno de los mejores lugares para investigar es la Universidad. Y esto por muchas razones; una de las razones es por esto que yo planteaba antes, por esta cadena generacional que coexiste dentro de la Universidad, por esta

cuestión de la convivencia de distintas generaciones que están trabajando y formándose en un mismo lugar. Esto que aparece como una relación natural en la Universidad o en cualquier otro centro que sea un centro de investigación y docencia —porque no todos los centros de docencia son universidades— no aparece como natural en centros donde generalmente aparece una sola generación o aparece la otra como auxiliar y no en tanto tarea consciente de formación. Y la segunda razón para elegir la Universidad es por lo que dice un conocido científico del campo de las ciencias duras, que es el Dr. Benjamín Fridman, y es que la tarea de investigación, la tarea científica, es una tarea demasiado importante para la humanidad como para que no haya algún control, alguna evaluación de la sociedad en su conjunto a través del Estado. Creo que estas son las dos razones que me parecen de mayor peso para creer que la investigación debe hacerse dentro del marco de la Universidad.

La otra cuestión, en relación al planteo institucional, es que nosotras somos sociólogas rurales que siempre hemos trabajado fuera de la región pampeana, tal vez porque somos de esa generación donde el trabajo de la Sociología Rural estaba muy ligado a los problemas sociales. Cuando nosotras empezamos a

trabajar en Sociología Rural los economistas agrarios (que generalmente eran ingenieros agrónomos que habían hecho un posgrado en Economía Agraria) se ocupaban de la cuestión económica o productiva que se relacionaba con las divisas para el país, y esa producción se hacía en la región pampeana. Así nos dejaban a los antropólogos y a los sociólogos las cuestiones regionales del campo argentino. Si bien cuestiones sociales se daban tanto en las regiones no pampeanas como en la pampeana, el imaginario “tecnocrático” decía que la región pampeana no necesitaba de la perspectiva social. Había un discurso oficial, un discurso institucional que nos orientaba hacia regiones de problemas sociales más importantes. Se trataba de los pobres rurales, o sea la mano de obra rural, los jornaleros rurales o los campesinos, y los sociólogos rurales nos orientábamos a abordar los problemas de las llamadas economías regionales. Esta demanda externa llegó a una especialización, y yo diría que en algún momento —por lo menos por mi parte y creo que de parte de Susana Aparicio también— nos llevó a una decisión, una opción. Cuando uno comienza a acumular capital académico, como diría Bourdieu, en alguna especialización, después tiene la tendencia a seguir trabajando sobre esa problemática. Sin embargo a esta al-

tura, yo considero que los problemas que nosotros trabajamos en las regiones no pampeanas son problemas sociales del agro argentino, y yo diría más, son problemas que hacen a la Teoría Social. La Sociología Rural es tributaria de la Teoría Social. Le ha aportado algunas cuestiones específicas, como el problema de la renta agraria o como la cuestión campesina. Pero es tributaria de la Teoría Social. Por lo tanto yo no me considero una socióloga rural especialista en una región del país, sino que me considero, primero y antes que nada, una socióloga, y después una socióloga rural en general.

Pero esta cuestión, que así se fue dando, nos llevó a que siempre trabajáramos en zonas muy alejadas de nuestro lugar de residencia y con muchas complicaciones como para levantar —hijos, maridos— e instalarse en otra región del país. Por lo tanto, nosotros, en nuestra práctica de investigación también tuvimos que desarrollar —y esto es bueno que lo desarrolláramos— el trabajo con otras instituciones. Porque nosotros estábamos trabajando en regiones, en problemáticas que se daban en un espacio, en regiones muy alejadas de nuestro lugar de trabajo y de nuestro lugar de residencia. Y esto es importante. Para nosotros es una necesidad, y aprendimos a hacerlo como una necesidad, pero creo que aprendimos a hacer-

lo. Este trabajo, como el resto de los trabajos que hicimos sobre el NOA, no se hubiese podido realizar si no hubiésemos tenido el apoyo de la Universidad Nacional de Tucumán. La parte del complejo azucarero en su conjunto no la hubiésemos podido realizar si no hubiésemos tenido el apoyo de la Universidad Nacional de Jujuy, de los INTA regionales; y esto que aparece para nosotras como algo imprescindible, creo que tiene que ser un paso importante en todo proceso de investigación.

Las conexiones con las instituciones de investigación del espacio disciplinario e interdisciplinario donde estoy me permiten varias cosas: un diálogo con quienes están trabajando en temáticas que me conciernen; facilidad para rastrear el estado de la cuestión; no doblar esfuerzos en la organización y generación de información, etcétera. Estos primeros pasos son muy importantes en la construcción, en la formulación del proyecto y en las revisiones bibliográficas iniciales. Revisión bibliográfica que nos dice cuál es el estado de la cuestión y quiénes han trabajado sobre el tema. Es el rodeo bibliográfico que debo hacer, tanto de trabajos aplicados como de trabajos teóricos.

Bueno, todo esto está en conexión con las relaciones institucionales, que además, tecnologías de comunicación modernas mediante, no

son necesariamente relaciones cara a cara, uno puede estar relacionado con otras partes del mundo, lo cual enriquece la tarea del equipo.

Otro problema, bastante complicado para los científicos sociales, es *la construcción del objeto de investigación*. Creo que ese es uno de los pasos más difíciles y más complicados de la tarea del investigador, de la tarea del investigador en Ciencias Sociales. Y yo diría bastante complicado para los sociólogos. Bourdieu insiste mucho sobre esto, ustedes habrán leído, porque él está constantemente discutiendo y debatiendo contra el empirismo, contra el empirismo ingenuo. Y está discutiendo, y se la agarra constantemente con lo que él llama el “eje Lazarfeld, Merton y Parsons”, formadores de las mentes, de la actitud y el “habitus” de los investigadores de muchas generaciones.

Nosotras no escapamos a esa formación, nosotras fuimos formadas como sociólogas en períodos en que la carrera de Sociología tenía un fuerte componente de la Sociología norteamericana, porque su fundador —Gino Germani— consideraba que los pasos más importantes para el desarrollo de una Sociología científica se estaban dando en Estados Unidos. Aun cuando él tenía muy buena formación en Sociología y Filosofía europeas, admiraba a Parsons y a la Sociología del norte. Pero también

es cierto que permitió que en la Carrera hubiese otras miradas críticas, otros sociólogos que comenzaron a formarnos dentro de la Sociología crítica que por aquella época, después de la posguerra, venía desarrollándose fuertemente, tanto en Estados Unidos como en Europa: los *radicals* norteamericanos o los miembros de la Escuela de Frankfurt en Alemania que durante el nazismo se instalan en Estados Unidos, etcétera; además se veían a los Interaccionistas Simbólicos y a los Etnometodólogos. Sin embargo, en nuestra formación metodológica, nosotros aprendimos las cosas básicas de la Sociología empirista: “la variable se construye con los indicadores”; “la realidad social es cuantificable”; “no tengo más que construir las herramientas para acercarme a la realidad y medirla”; “cuando tengo las mediciones de la realidad, tengo la matriz de datos y puedo plantearme una serie de relaciones”. Y cuanto más matemática y cuantos más coeficientes use, y cuantas más cuentitas largas haga, más rigurosidad tendrá esta formulación. Todo esto fue parte de nuestra formación. Y como dice Bourdieu, romper con esto, plantearnos la duda radical del investigador, la nueva mirada del investigador fue un proceso largo, fue un proceso de trabajo con investigadores formados. Tanto Susana Aparicio como yo debimos

romper con esta mirada ingenua de la realidad y para ello contamos con buenos maestros.

Tuvimos que aprender que la realidad como objeto de conocimiento es *una construcción*. Y es una construcción donde, como dice Bourdieu —lo voy a leer porque es muy lindo— dice:

Construir el objeto supone que se tiene frente a los hechos una postura activa y sistemática para romper con la pasividad empirista que no hace sino ratificar las preconstrucciones del sentido común. No se trata de proponer grandes construcciones teóricas vacías sino de abordar un caso empírico con la intención de construir un modelo que no tiene necesidad de revestir una forma matemática o formalizada para ser riguroso, para ligar los datos pertinentes de tal manera que funcionen como un programa de investigación, planteando preguntas sistemáticamente. En una palabra, de construir un sistema coherente de relaciones que debe ser puesto a prueba en tanto que tal. (Bourdieu, 1992)

Como ustedes habrán visto, lo que él plantea constantemente en la formulación del problema, lo que yo llamo “la tematización”, que tal vez es uno de los procesos más difíciles en la formulación del proyecto de investigación, supone formar un sistema de relaciones. En general, en mi experiencia como lectora de pro-

yectos de investigación de jóvenes postulantes a becas (esto lo digo al margen) observo que la mayoría de los proyectos fracasan en el intento de tematizar. En general lo que se hace es dar vueltas alrededor de la relevancia del tema, por ejemplo “los pobres en la Argentina”; no hay ninguna duda de que es un tema importante pero se gira alrededor de la relevancia que tiene estudiar a los pobres en la Argentina y no se tematiza, no se plantea, de este referente empírico, una cuestión digna de ser investigada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Este es uno de los problemas más importantes que aparece en la formulación de proyectos de investigación.

¿Qué nos pasó a nosotros cuando tuvimos que “tematizar” en la investigación? Nosotros veníamos con un capital académico: éramos autoras de estudios sobre actividades agroindustriales y estudios sobre la cuestión campesina. Un capital académico que nos permitía pensar sobre lo que había pasado con los campesinos en el país. Nos interesaba qué estaba pasando —no solo qué había pasado—, qué sucedía con este impresionante proceso de expansión del capital agroindustrial. Muchos sociólogos, antropólogos, economistas planteaban que había aparecido un nuevo ordenador de los espacios agrícolas en América Latina en función de esta expansión importante del capi-

tal agroindustrial. Aquello que Kautsky, a finales del siglo XIX, cuando escribe *La cuestión agraria*, predecía: la subordinación de la agricultura al desarrollo industrial, al desarrollo del capitalismo. Como ustedes saben, a partir de la posguerra hay un gran avance no solamente en el desarrollo de la tecnología, lo que se llamó la “revolución verde”, sino de la internacionalización del capital agroindustrial, del capital industrial invirtiendo en las ramas agroindustriales o agroalimentarias. Y esto aparecía en todos los países, se estaba analizando en todos los países, yo misma venía de estudiarlo en México. Allí, habíamos visto cómo ya no se podía pensar la cuestión campesina en los términos en que se la había pensado en la década del cuarenta o en la década del treinta, sino que la cuestión campesina estaba atravesada por la presencia del capital agroindustrial, se subordinara o no se subordinara a la agroindustria. Regiones que se subordinaban, regiones que no se subordinaban, pero toda la cuestión campesina estaba atravesada por la expansión agroindustrial.

Nosotras habíamos estudiado lo que había pasado con la expansión agroindustrial en Argentina. Habíamos encontrado ciertas especificidades nacionales de la expansión agroindustrial. Les digo una sola para que tengan idea. Ha-

bíamos encontrado que el capital transnacional no se ubicaba en las etapas de procesamiento como ahora (en los noventa) lo hace. En los setenta y ochenta se había ubicado básicamente en los insumos, fundamentalmente en la venta de las semillas —la aparición de los híbridos, los fertilizantes, los agroquímicos, etcétera— Pero nuestra preocupación por el tema pasaba por lo que ocurría con los actores sociales, qué cambios se estaban dando en la estructura social. La idea era estudiar, elegir algunos complejos agroindustriales que estuviesen ligados a productores familiares. Habíamos estudiado, hasta ese momento, el complejo agroindustrial arrocero, donde participaban productores empresariales, pequeños y grandes, pero no participaban “campesinos”. Y estábamos encontrando cosas interesantes. Estábamos encontrando que esta cuestión de las particularidades que la expansión agroindustrial evidenciaba en Argentina, tenía mucho que ver con la estrategia de los actores sociales. Estábamos encontrando que allí donde el proceso de integración agroindustrial aparecía, por la demanda tecnológica, por la demanda productiva, como necesario, no era necesariamente el capital agroindustrial que subordinaba al sector agrario sino que había acciones de los actores agrarios, por ejemplo formando cooperativas.

En el caso del arroz, habíamos encontrado que algunos formaban molinos cooperativizados y otros encontraban una salida individual comprando un pequeño molino propio. A diferencia de lo que yo había encontrado en México, que era fundamentalmente que el capital industrial proponía la salida para el sector agrario, aquí encontrábamos un sector, actores sociales agrarios muy activos, con estrategias muy activas en la incorporación agroindustrial.

Entonces dijimos: ¿qué pasa con los campesinos? ¿Qué pasa con una actividad agroindustrial tradicional, como la cañera, pero que estaba sufriendo transformaciones? Complejos agroindustriales tradicionales o complejos agroindustriales nuevos eran atravesados por estas tendencias macroestructurales que estaban ocurriendo en la mayor parte de América Latina y yo diría, en la mayor parte del mundo. Era un desafío porque era muy importante saber qué estaba pasando con un actor social que había sido un actor social y político muy importante: el campesinado cañero. ¿Por qué? Porque no cabían dudas de que aparte de ser un sector con características “no capitalistas” en su forma de producir, el campesinado tucumano era un sujeto político importante. Un sujeto político que había sido actor provincial y regional muy importante. Desde la forma-

ción del primer Sindicato Cañero, en la década del cincuenta, las respuestas, las acciones políticas habían sido estacadas en cada uno de los períodos de crisis que había sufrido la actividad azucarera en Tucumán. Si nosotros pensamos, la primera cooperativa de trabajo que permanece hoy como cooperativa de trabajo, ejemplo en todo el país, es la de Campo de Herrera en Tucumán. Y es cañera. Creo que Francisco Delich fue el que primero lo enuncia, pone de manifiesto la condición campesina cuando hace su estudio en el año 1965, saca un libro que se llama *Tierra y conciencia campesina*², que es un estudio de los campesinos cañeros, en que el autor decide dejar eufemismos y llamarlos *campesinos*.

Entonces la pregunta fundamental es que había pasado con los campesinos cañeros dentro del proceso de transformaciones agroindustriales. Cuáles eran los mecanismos que habían permitido la persistencia de los campesinos cañeros, aun con las transformaciones del complejo agroindustrial azucarero.

Frente a la modernización y a una serie de estrategias empresariales que se habían planteado en los grandes ingenios del Norte (Salta

y Jujuy), como Ledesma o como San Martín del Tabacal, nosotros encontrábamos que en la actividad cañera, persistía este sector de pequeños productores. Quiero decir que nosotros estábamos oyendo en la etapa exploratoria una cantidad de discursos que daban cuenta de tal existencia. Y aquí aparece un elemento muy importante, un problema muy importante que es esto que Bourdieu llama las pre-nociones o las pre-construcciones. Nosotras, como sociólogas, teníamos por un lado un capital académico, la problemática teórica del campesinado en el desarrollo agro-industrial, habíamos estado pensando, nos habíamos dado cuenta de que había que re-pensar conceptos fundamentales, que eran necesarias nuevas interpretaciones. Yo estaba trabajando un concepto que se usó mucho en América Latina, que es el concepto de “subordinación o de integración subordinada”, de acumulación subordinada. Teníamos un capital académico que nos permitía acercarnos a la problemática, pero también fuimos receptoras, en la etapa exploratoria, de ciertos discursos. Había un discurso técnico — de los técnicos del INTA por ejemplo—, había un discurso político y teníamos un discurso académico. El último trabajo integral que se había hecho sobre los campesinos cañeros era el de Delich, publicado en el año 1970. Delich,

2 Para conocer la experiencia de “El Sacrificio” ver Giarracca, 1994.

en aquel entonces decía: el 98% de la estructura social cañera de Tucumán son campesinos. No utilizan mano de obra asalariada, no tienen mecanización, no utilizan tractor, no tienen ningún nivel de capitalización y raramente salen a trabajar afuera. Son campesinos puros que tienen una hipervaloración de la tierra. La relación trabajo-tierra es la relación fundamental y de ahí su bajo nivel de conciencia política. De ahí, su adhesión al peronismo y su no adhesión revolucionaria, como se podía esperar de los sectores jornaleros o de proletarios. Este era, en términos generales, el esquema de interpretación de Delich.

Después del trabajo de Delich no había habido otros trabajos importantes.

Ustedes saben que el último Censo Agropecuario anterior al de 1988 es el censo de 1969. O sea que era el trabajo de Delich y el censo agropecuario y después algunos trabajos del INTA, que eran trabajos técnicos. Esto se creía conocer porque en 1988, cuando iniciamos el trabajo, el Estado aún entregaba cupo de producción, decía cuánto podía producir cada uno, de acuerdo a un registro de productores. Estaba totalmente regulada la comercialización. Se decía cuánto se iba mandando de azúcar al mercado por mes. La Dirección Nacional de Azúcar regulaba todo ese proceso. Entonces, nosotros

teníamos el discurso técnico que decía: el 90% o el 95% de los productores de caña son minifundistas campesinos, tienen un cupo menor a las veinte toneladas de caña. Por lo tanto son campesinos. El discurso político o de las organizaciones gremiales, y en ese momento tanto las cooperativas en formación como las más antiguas y las federaciones de cooperativas en formación, la Liga de Cooperativas Cañeras, con quienes más discutimos este trabajo, decían lo mismo: la estructura de caña en Tucumán es básicamente minifundiaria, son productores pequeños, con bajo nivel de capitalización y por lo tanto no se puede tomar ninguna medida económica en Tucumán que no afecte a esa masa empobrecida de productores.

Pero aparte de eso —por supuesto que este también era el discurso de los dirigentes de la Unión de Productores Cañeros Independientes (UCIT)—, a medida que nosotros íbamos planteándonos la formulación del problema, también nos encontramos con que algunos trabajos académicos, sobre todo de economistas, planteaban la misma situación: hay un 90% de campesinos, de productores pequeños, con bajo nivel de capitalización, con una estructura homogénea, etcétera.

Estos fueron los discursos que heredamos, estas eran las prenociones, diría Bourdieu, con

que nosotros nos encontramos. Nuestra actitud, nuestra estrategia de investigación fue la de la duda: cómo puede ser que las otras actividades agroindustriales habían sufrido tremendas transformaciones y no así la cañera. No teníamos censo agropecuario, pero los censos de población, cuando tomaban categorías ocupacionales, daban transformaciones en las regiones de pequeños productores. Pero en el Tucumán cañero, según toda esta gente, no había pasado nada.

Pero para nosotras el registro de productores de la Dirección Nacional del Azúcar era un recurso técnico muy importante. Y efectivamente allí figuraba que había 17 mil nombres de productores y que un gran porcentaje de esos nombres tenían pequeños cupos. Cupos de tres toneladas, dos toneladas, cuatro toneladas. Efectivamente había un registro estadístico, una construcción, un dato construido —de esto después va a hablar Susana— del registro de productores, que hablaba de 17 mil productores con bastante homogeneidad.

La decisión de cómo plantearnos el problema de la persistencia campesina y lo que había pasado con el campesinado en su relación con los cambios agroindustriales fue una decisión que tenía que ver con la problemática teórica que plantea que la ubicación de los agentes, la

ubicación estructural, es importante, que los agentes están ubicados en una posición y las posiciones estructurales no son intercambiables. Esto es un supuesto teórico que aprendimos con Miguel Murmis. Él siempre dice que lo primero que tenemos que saber cuando nos planteamos una problemática en el sector agrario es quién produce, cómo produce, para quién produce, con qué medios produce. Pero desde el comienzo nosotras combinamos esta perspectiva estructural con otra que enfoca la acción de los actores, que plantea la contingencia del hecho social.

Nosotras utilizamos para este trabajo muchas herramientas técnico-metodológicas, utilizamos encuestas, utilizamos entrevistas cerradas, utilizamos entrevistas abiertas, utilizamos participación en reuniones y finalmente derivamos en un método que veníamos trabajando desde hace muchos años, con nuestras propias particularidades por supuesto, y que después nos alegró Touraine le pusiera nombre: “intervención sociológica”. Pero nosotras nos dimos cuenta de que estábamos trabajando el método Touraine sin saber de su existencia (en 1984 aparecen las primeras publicaciones sobre el método). También Alberto Melucci en Milán, había reflexionado bastante sobre el asunto. Pero la decisión de qué herramientas

construir tiene que ver con la problemática teórica y tiene que ver con los recursos con que nosotras contamos. Yo estoy de acuerdo con Bourdieu cuando dice que es difícil trabajar con datos construidos por otros; a la realidad hay que interrogarla y hay que interrogarla de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a nuestra problemática teórica. Dice: cada vez que nosotros nos encontramos con datos construidos por otros y queremos interrogarlos nos encontramos que es un problema. Pero sin embargo, yo creo que sobre todo los últimos dos censos, tanto el Censo de Población como el Censo Agropecuario fueron hechos con mucha participación de los usuarios. En el censo agropecuario nosotras participamos, criticamos, trabajamos las categorías. Si hubiésemos tenido el Censo Agropecuario —nosotros hicimos la encuesta en el mismo año del censo— no hubiésemos hecho la encuesta. ¿Se entiende? Porque hubiésemos pedido al Censo Agropecuario tabulaciones especiales, cruzamientos especiales para la ubicación estructural de nuestros agentes. Faltaba un censo desde 1969. Esta fue una decisión. Una decisión muy cara, por otro lado. Hacer una encuesta rural es una de las cosas más complicadas y más caras que hay. Pero una de nuestras primeras decisiones fue hacer una encuesta porque no teníamos in-

dicación estructural de estos sujetos. La decisión fue hacer la encuesta, y con qué elementos hicimos la encuesta es algo que voy a dejar que cuente Susana.

Pero antes quiero decirles que aparte de la encuesta, nosotras trabajamos con entrevistas, trabajamos con historias de vida, trabajamos con entrevistas cerradas sin grabador y trabajamos con entrevistas abiertas, historias de vida con grabador. Y ahí la recolección de información permitió que realmente los problemas teóricos que nos habíamos planteado en un comienzo se ramificaran, aparecieron muchos problemas relevantes que permitieron que la investigación se ramificara. Por ejemplo, Clara Cravioti trabajó toda la cuestión de la organización gremial de los cañeros. Otra becaria trabajó la historia de cómo aparecieron —porque el final de la historia es que la estructura social no era homogénea sino tremendamente heterogénea— y esta persona del equipo empezó a plantearse el cómo había sido eso, cómo había sido el proceso por el cual muchos campesinos se habían capitalizado, se habían tecnificado, y apareció esta otra problemática de la agricultura familiar, de la agricultura de los campesinos ricos. Apareció, además, un problema que nos sigue obsesionando hasta ahora que es esta capacidad de los actores para

innovar y para proponer estrategias de acción que permitan ubicarlos en mejores condiciones en los procesos de transacción y negociación con el resto de los actores, el problema de la organización y del cambio (viejo tema de la Teoría Social). Y apareció otro problema al que nosotros le dimos nombre, creo que fuimos de las primeras en nombrar este fenómeno para el sector agrario, lo llamamos “multiocupación”. Nos dimos cuenta de que además de productores eran trabajadores agrícolas, trabajadores en las ciudades, trabajadores en la hotelería, se iban al sur a levantar las manzanas, las hijas trabajaban haciendo pastelitos y vendiéndolos en la ruta. Nos dimos cuenta de que la familia campesina desarrollaba un abanico de actividades que sumaban al ingreso cañero. Por eso el título del trabajo fue “Los campesinos cañeros” y dos pistas teóricas importantes: organización y multiocupación.

Si leyeron el trabajo, habrán visto la presentación de la estructura social, que es un poco el final del cuento (Giarracca y Aparicio, 1991: 37, cuadro), nosotros presentamos la estructura social cañera. Y presentamos algo absolutamente distinto a una homogeneidad social. Planteamos pequeños productores y empresarios; y empresarios no un 3%, sino que encontramos 17% de productores empresariales, dentro

de los cuales, por supuesto, están los ingenios, que producen caña. Y dentro de los pequeños productores, a diferencia de Delich, que encontró un campesino homogéneo, todo igual, encontramos mucha diferenciación; aun con el respeto que me merece Delich como investigador, estamos poniendo en cuestionamiento su trabajo de los años 1965-1970, porque cuando se empezó a estudiar cómo se habían capitalizado los campesinos, se encontró que no se habían capitalizado en 1970 o 1972. Muchos se habían capitalizado sobre todo por los créditos de Lanusse, pero había muchísimos que venían de la década del sesenta. Entonces, ¿justo Delich en la muestra no los encontró? ¿No le cayeron en la muestra de Delich? ¿O Delich estaba convencido de que se iba a encontrar con homogeneidad productiva y no se preocupó de la validez de sus datos? Esta es la duda. Nos encontramos con que, dentro de lo que llamamos en términos generales campesinos, nosotros tenemos los que llamamos campesinos puros, o sea que no utilizan mano de obra asalariada y no tienen niveles de capitalización, pero encontramos campesinos transicionales que comienzan a tener elementos capitalistas muy importantes dentro de la unidad productiva, y “familiares capitalizados”. Un 22% de lo que nosotros llamamos “familiares capitalizados”, que

fue lo que más nos sorprendió. ¿Cómo pasó esto? Ahora Susana Aparicio les va a contar cómo pasó esto. Porque cómo pasó esto tiene muchísimo que ver con los problemas metodológicos, problemas técnicos que tuvimos.

La otra cosa importante —y acá la dejo a Susana, si no me va a matar— es que cuando nosotras nos dimos cuenta de los elementos capitalistas que había dentro de la unidad, nos dimos cuenta de que esos elementos capitalistas no solamente estaban en la demanda de contratación de mano de obra sino en esto que yo les dije es el final de la historia que es la multiocupación, la venta de trabajo. Entonces, ahí, aparte de la construcción de variables complejas, tuvimos que buscar, imaginarnos, optar por alguna otra herramienta metodológica. En el momento de la problemática de la multiocupación, en el momento en que se rompe ese esquema teórico de *una sola* inserción estructural, la inserción de productores, nosotras tuvimos que pensar el problema teórico pero además tuvimos que plantearnos el problema técnico, metodológico, porque en la Argentina a nadie se le había ocurrido, nadie había necesitado registrar varias ocupaciones agrarias (además de la semiproletarización, por supuesto), siempre se está pensando en la contratación de mano de obra para los campesinos, para los familiares.

Pero nadie había encontrado compra y venta a la vez, todo el mundo decía: los chiquitos venden mano de obra, los grandes compran mano de obra, pero nadie se había planteado que en todos los estratos pasaba de todo. Y ahí fue cuando revisando material vimos que en todos los países del Tercer Mundo se tiende a la multiocupación. Uno ve trabajos de la India, trabajos de Pakistán, trabajos del resto de América Latina y parece que están repitiendo las cosas que pasan entre los campesinos argentinos, aparece la multiocupación. Encontramos una herramienta de primer nivel que fue una tasa, a la que nosotras le pusimos el nombre de la autora, la llamamos Tasa Patnaik (por Utsa Patnaik), pero ella la llama “tasa de balance neto de fuerza de trabajo”. Y es una tasa que mide la relación entre fuerza de trabajo comprada y fuerza de trabajo vendida y aplicada a la unidad. Pero este es un poco el final de la cuestión, y las decisiones metodológicas, la cocina metodológica no solamente quedan en el relato de Susana, sino que es así porque ella comanda gran parte de esta etapa. En general, la que está pensando en cómo implementar opciones técnicas es Susana Aparicio.

Susana Aparicio: Nosotras teníamos un primer problema, como habrán escuchado por el

relato de Norma: nos interesaba ver la relación entre la estructura social agraria y las nuevas transformaciones agroindustriales. Lo cual supone tener un abordaje del problema desde un punto de vista relacional, de la relación entre aquellos que producen la materia prima con un sistema más amplio, un sistema complejo que inclusive tiene características transnacionales. Voy a saltar un poco las decisiones metodológicas del complejo cañero que habíamos pensado. Me voy a centrar más en las que hicieron a la investigación sobre el campesinado. Y si después a alguien le interesa, vemos las decisiones metodológicas del complejo, cómo las fuimos tomando.

Norma (Giarracca) decía recién que nosotras veníamos con preconceptos. Yo creo que el colmo del preconcepto es Delich en esto, ¿no? Creo que esta imagen viene de la influencia de un mundo dicotómico en la década del sesenta, la influencia teórica de un mundo dicotómico, un mundo donde por un lado había una sociedad tradicional y por otro una sociedad moderna. Esto en términos del Funcionalismo. En términos de las teorías más radicales o por influencia marxista uno decía que había un colonialismo interno y el colonizador era heterogéneo y lo colonizado era homogéneo. Y en la cuestión agraria esta

dicotomía se presentaba en la relación que se llamaba la constelación latifundio-minifundio. La gran explotación versus el campesino. La gran explotación era homogénea, tradicional, improductiva, compraba mano de obra, es decir tenía asalariados, era rentista, tenía normas de prestigio. Por otro lado el campesinado araba con bueyes, el más pobre se contrataba en las cosechas, el más rico resistía. Es decir, eran todos homogéneos. Esta dicotomía yo creo que a Delich lo limitó, pero también a los que vinieron después, al punto que en 1976 hay un trabajo muy técnico, absolutamente técnico del INTA, en donde se ve una heterogeneidad, y fue pasado por alto por la mayor parte de los que trabajaban con la cuestión agraria, inclusive por gente que participa con nosotros de una posición crítica respecto de lo agrario y siguió usando el 92% de Delich de bueyes y de bucolismo en relación con la naturaleza. Siguió usando ese “corsé”, aunque este trabajo del INTA, que es muy poco conocido, es un trabajo absolutamente técnico, donde lo que trataban de ver era cómo introducir tecnología en los cañeros, planteaba una mayor heterogeneidad. En 1990, simultáneamente con nuestro trabajo hay una publicación que sigue usando el 92%. ¿Por qué este corsé? Por un lado por no discutir uno mismo con los preconceptos.

Cuando empezamos a trabajar con caña, que fue después de trabajar con el arroz, con el complejo arrocero y empezamos a revisar, como decía Norma, lo primero que hacemos es ver, poner en duda el bagaje académico que traemos y empezar a contrastar con otros trabajos como el del INTA donde había indicios de capitalización, había indicios de cambio, por ejemplo había muchos productores con tractor, que es un elemento de capital, es una relación con el capital distinta a un campesino que trabaja con bueyes. Ahí tenemos un indicio de que había más heterogeneidad. Al menos había algo dado por otros que nos ponía en cuestión los preconceptos. Nosotros empezamos a dudar porque dudábamos desde el principio. Es decir, lo que nosotros hacíamos era decir: bueno, existe 92% de campesinos, veamos, porque acá tuvo que haber transformaciones, no puede ser que esto siga así. No puede ser que no haya habido cambios cuando hubo cambios tan importantes en todo el agro argentino.

Primera duda, cómo trabajar la estructura agraria pensando en estos términos. ¿Qué es lo que uno hace primero? Una cosa que dice Bourdieu en su trabajo es que uno arma los distintos grupos que pueden aparecer —él lo plantea con las instituciones educativas— y ve cuáles propiedades están presentes y cuáles están au-

sentes. Como forma de abordaje del problema. Eso fue lo primero que hicimos, un poco antes de ir a Tucumán. Es decir, cuáles son las propiedades que hay en la estructura social agraria, que están presentes en un grupo y están ausentes en otro o que están presentes en los dos grupos. Nosotros tomamos como elemento relacional cierto tipo de propiedades. Yo puse allí la relación con el trabajo, lo cual quiere decir no solo si él trabaja, sino cómo se relaciona con el mercado de trabajo. ¿Es oferente de mano de obra, sale a vender su fuerza de trabajo? ¿Es demandante de mano de obra, contrata asalariados? ¿Contrata asalariados en forma permanente? ¿Contrata asalariados en forma transitoria? ¿Qué combinaciones son posibles? ¿Qué relación tiene con la tierra? La relación principal con la tierra es la propiedad-no propiedad. ¿Cuánto domina? ¿Cuánto tiene de propiedad? Es un indicador, una relación que va a significar cosas distintas. Es distinto tener un dominio sobre un territorio de montaña de mil hectáreas versus un señor que solamente tiene una manzana de dominio. Entonces acá aparecen diferencias inclusive en los poderes de negociación que van a tener en los distintos mercados. Es distinto tener mil manzanas en una montaña que tener mil manzanas en Pergamino.

¿Qué otros vínculos aparecen? Aparece el vínculo con lo social, con lo organizativo. ¿Cómo se vincula con los distintos tipos de organizaciones que hay? ¿Hay organizaciones? ¿Se organizan? En qué cosas está presente la comisión vecinal, la cooperativa, la cámara de productores, la cámara azucarera, el mundo internacional de los bancos, hay uno de los ingenios que es dueño de bancos. Entonces, hay una serie de vínculos con toda la sociedad que deben ir planteándose: ¿dónde hay ausencia y presencia de esto? ¿Qué sistema se construye con esto? Y a nosotras nos interesaba, por las razones que dijo Norma antes, tener alguna aproximación de cuánto representaba esto, cuánto era esta estructura. El 92%, decían, tenía la característica de ser campesinos, de tener una baja dotación de capital, de utilizar solo su mano de obra familiar y a lo sumo utilizar su mano de obra familiar y venderla. Vender la mano de obra familiar es visto generalmente, en el corsé teórico, en un proceso donde uno finalmente deja de ser campesino y se transforma solo en asalariado: tomado desde el mundo de la transformación del feudalismo al capitalismo, lo que aparece es que la venta de la fuerza de trabajo termina por despojar al campesino de la tierra.

¿Pasaba eso en Tucumán? Esa era nuestra pregunta. Esta duda era permanente. Norma

nombró que había un registro de productores. Eso era lo más actualizado. Si yo no recuerdo mal, el último censo de productores cañeros era de 1976, pero era una especie de censo donde lo único que se preguntaba era cuántas hectáreas de caña tenía y el cupo de producción otorgado por la DNA. El cupo quiere decir: usted produce esta cantidad y no puede producir más, se le puede comprar solo esto. Esto es una relación. Así como en la mayor parte de los trabajos aparece como un dato, no es un dato, es “un construido”. ¿Por qué es un construido? Porque el cupo implica una relación de propiedad o en dominio sobre una producción. Si yo domino solamente —así tenga 50 hectáreas de caña—, si mi cupo es de cinco toneladas, yo en realidad tengo solamente una hectárea de caña porque solo una hectárea de caña es la que puedo vender. El resto, en estos términos, se transforma en ilegal. Esto duró hasta 1991. Es decir, todo el resto que yo tenía era ilegal. Esto es una relación social. Inclusive hay una legislación que sostenía y legitimaba esta relación. Con esto no estoy juzgando si era bueno o malo, sino esto es lo que era y este es un vínculo. Como vínculo debe ser entendido el cupo.

Nosotras teníamos este registro. En base a este registro es que se seguía diciendo el 92%. Porque ese 92% no era que se trasladaba el dato

de Delich, sino que lo que se trasladaba de Delich era que todos los campesinos vendían menos de diez toneladas, o cinco —no me acuerdo cuánto era—, de caña. Entonces, se tomaba el cupo y se decía ¿cuántos tienen menos de cinco toneladas? Y en base a eso saco la proporción. Pero este era el único dato que teníamos del universo de productores cañeros. Sabíamos, con solo mirar el registro y con solo tratar de deconstruir el concepto, que podíamos tirar abajo el concepto que hay por detrás del registro. Volver a armar los pasos con los que se construyó el dato. Deconstruir es eso. Es volver para atrás ese dato del cupo y la cantidad de hectáreas que fue construido también con un preconcepto. No solo Delich trabajaba con preconceptos. Los censos trabajan con preconceptos. El concepto de trabajo, por ejemplo, que se usa en el censo cuando nos preguntan “¿usted trabajó la última semana?” es entendido por nosotros de una manera, y por un campesino es entendido en forma distinta y por una mujer campesina mucho más. Una mujer campesina contesta que no trabajó. Porque el concepto de trabajo para una mujer campesina es salir a trabajar afuera. Aunque haya estado atando tabaco y vendiendo tabaco todo el tiempo, va a decir que no trabajó, porque para ella, lo que ella tiene en su concepto de trabajo es otra cosa, es salir a trabajar afuera

por un salario. Esas deconstrucciones hay que hacerlas permanentemente. ¿Qué había detrás del cupo? Dijimos antes que había una relación de propiedad, que suponía un dominio sobre la producción y que lo que se producía por fuera de eso era ilegítimo, era muy posible que hubiera violaciones a esto por algún lado. Entonces, si este era el concepto de “cupo”, había que pensar por qué lado podía ser violada esta norma.

Teníamos un capital académico, hay otras producciones en la Argentina que fueron cupificadas con lo que nosotras trabajamos por los setenta: el caso de la yerba mate tuvo cupo. Sabíamos que en los registros de productores, cuando hay cupificación, es bastante frecuente que se anote como productor el marido con un cupo y la mujer con otro cupo y el hijo con otro cupo. Esto nosotros lo sabíamos, teníamos experiencia, la norma nos daba lugar a pensar que las formas de poder tener un cupo más grande pudieran ir por este lado: distintas personas registradas, pero que en realidad trabajan juntos. Tomamos recaudos, al hacer la investigación y al plantearnos los problemas técnicos, de tratar de identificar la existencia de distintos cupos dentro de los que residían y trabajaban en la explotación.

¿Cómo tomamos recaudos? Tomamos recaudos repreguntando, preguntando al prin-

cipio, preguntando al final del cuestionario la misma cosa de distinta manera, haciendo preguntas de control, como por ejemplo “¿cuánto vendió en el último año?”. Entonces, aparece por ahí toda la producción junta y entonces volver al principio y preguntar “¿cuántos cupos, qué otro cupo había en la familia?”.

Nosotras hicimos primero entrevistas en la zona, donde tomamos los conceptos más globales, si quieren. La lista de propiedades y ausencias de las mismas que habíamos hecho, eso fue lo primero que hicimos en la entrevista. Y después diseñamos el cuestionario con estas perspectivas: lo que habíamos visto en las entrevistas, el bagaje intelectual, los trabajos académicos y los datos de registro que teníamos. En base a eso diseñamos el cuestionario. Perdón, me olvidé una parte: el registro era el universo que habíamos usado para la muestra; habíamos hecho una muestra con distintos estratos lo cual supone que tiene distinta ponderación, distinto peso. Si uno supone que hay mucha homogeneidad toma menos casos, para eso llama a un muestrista, pero es uno, el investigador, el que le dice al muestrista los problemas teóricos, metodológicos y técnicos que tiene. Nosotras le dijimos ojo con este registro, queremos que haya representación buena de tales, tales y tales estratos de productores. El

único dato que teníamos era el cupo. No armamos dos estratos como decía Delich, los campesinos y los empresarios; sino que armamos cuatro estratos en donde presuponíamos que había heterogeneidad; el de productores más pequeños suponíamos que era el más homogéneo y el que más población tenía, por lo tanto se extrae una unidad cada más casos. En cambio en el último, que era el de los empresarios grandes, los ingenios integrados, que eran creo que 17 en ese momento, o 18; de esos tomábamos todos los casos. Entrevistábamos a todos.

Norma Giarracca: Perdoname Susana, para los que leyeron Bourdieu, él dice que es imposible hacer un muestreo o un campo de los científicos de relevancia; los científicos del siglo XX sin que caiga Einstein, por ejemplo. Es imposible, ¿se entiende? Uno tiene que garantizar que en el estrato de los productores más grandes estén los ingenios, por un problema de relevancia en el campo; ese es un problema metodológico que lo conversás con el muestrista: ¿cómo hacés para garantizar la presencia de actores relevantes en el campo?

Susana Aparicio: Primera gran alarma: Norma se va primero con todo un grupo de graduados y estudiantes con los que estábamos trabajan-

do y el primer día a la noche llama desesperada, a las 0:30, cuando no se usaba no dormir de noche como ahora. El primer día se hicieron una o dos entrevistas, el primer día en el campo, en el mundo rural me refiero, difícilmente se hagan más de una o dos entrevistas por persona, inclusive menos, sobre todo si uno va con estudiantes que es la primera vez que van al campo y van de a dos. Bueno, llama Norma y dice: “Susana, no solo hay familias en donde el marido tiene un cupo y la mujer tiene otro, sino que hay familias donde el dueño del cupo está viviendo en Buenos Aires, no pertenece a la unidad doméstica, está viviendo en Buenos Aires y el hermano administra su cupo, hay familias con varios cupos, etcétera, etcétera”. En síntesis se presentaba una complejidad *no esperada ni prevista*.

Yo llamé a la muestrista y le dije que había una complicación más: “Con el cupo no solo pasa esto, sino que además hay familiares no residentes que tienen cupos”. Y le pregunto si esto modificaría mucho las ponderaciones con que eran extraídos los casos. Con las indicaciones de la muestrista (Sara Novaro) pensamos una serie de cosas nuevas para preguntar y agregar al cuestionario, para poder registrar correctamente la existencia de este tipo de casos: preguntábamos si el jefe administra-

ba otros cupos, cómo era la relación con los cupos que administraba. Y esto nos llevó a un hallazgo que llamamos “sociedades familiares”, que son grupos productivos administrados y organizados familiarmente y donde la familia no terminaba en la unidad doméstica que reside allí sino que había miembros de la familia que estaban viviendo muy lejos, en Buenos Aires, en una villa o donde fuera, pero que tenían un vínculo familiar al estilo de lo que define el censo como familia. Para el censo, “familia” es la unidad que reside en un *mismo* lugar y que comparte la misma olla, es decir el presupuesto familiar en común. Acá lo que pasaba era que no residían en el mismo lugar, pero había como presupuestos familiares comunes. Es decir que el que estaba en Buenos Aires le mandaba dinero por mes de la plata de su salario a la familia que estaba en Tucumán. La familia que estaba en Tucumán le reintegraba lo que había “ganado”, lo que habían obtenido con el cupo de caña que el hermano tenía. Entonces, el vínculo familiar iba mucho más allá de la frontera de la definición tradicional de familia.

Y esto se está viendo en este momento en las zonas urbanas también: la familia que se usa operativamente. El uso del concepto “familia” hay que hacerlo con cuidado. Estar permanentemente preguntándose por qué se sigue usando

tal cosa. Así yo después la uso porque reconozco que es lo mejor, que es lo que más se adecua a mi interpretación teórica, a mi explicación teórica, a los vínculos que esto tiene con otras cosas. Pero hay que ponerlo en duda. Finalmente, nosotros cometimos un error al no poner totalmente en duda la construcción del registro, pero también tuvimos un hallazgo. Cometimos un error porque no pudimos estimar bien cuánto era la cantidad de campesinos. Posiblemente tengamos una sobreevaluación de los campesinos.

Norma Giarracca: Ella dice “posiblemente”, porque no cree en el censo, porque en el mismo año se hizo el censo. En vez de 17 mil cañeros, como decían todos, nosotros estimamos 11 mil cañeros en el mismo 1988. El Censo Agropecuario de 1988, cinco años después, estimó diez mil, o sea la diferencia con nuestra estimación fue lo que era nuestro margen de error. Pero el Censo Agropecuario registró menos campesinos aún de los que registramos nosotros. Este 60% de campesinos que nosotros registramos, el Censo Agropecuario creo que lo baja al 40 y pico. Y aumentan los familiares capitalizados. Ese estrato que descubrimos unos años antes de que saliera el censo, el censo lo registra perfectamente. Ese estrato que no había aparecido nunca, que era novedad en la

estructura social. Claro, el censo no dice cómo apareció, y creo que el hallazgo de nuestra investigación es decir cómo apareció. En el cuadro que muestra los cupos que manejaba cada explotación encontramos que podían manejar hasta ocho cupos. ¿Se entiende? Sumaba mi cupo de cuatro toneladas, el cupo de mi mujer de cuatro toneladas, ocho toneladas, el cupo de mi cuñado que estaba en la ciudad de Tucumán, cuatro toneladas, el cupo del hermano de mi cuñado que trabajaba en la construcción y que había accedido al cupo, otras cuatro toneladas. Ya iban doce toneladas. Encontramos que un solo jefe manejaba ocho cupos. Por supuesto, los más pequeños son los que menos manejan, manejan hasta dos cupos, porque si manejaran más dejarían de ser pequeños, tendrían más posibilidades en esta compactación... porque la compactación de cupos viene sumada a la compactación de tierras. El cupo viene con la tierra y con el crédito de las cooperativas. Entonces, los campesinos manejaban hasta dos cupos, pero lo más interesante es que los familiares capitalizados, son el 26% de los familiares capitalizados, manejaban ocho cupos. Ese era el secreto de la posibilidad de capitalización.

Susana Aparicio: Yo voy a decir por qué tengo mi duda con lo del Censo, porque me parece

que es importante en el proceso de investigación cuando uno tiene que ver cómo fue construido el concepto con el que está registrado el dato, lo que llamamos el dato secundario que construyó otro. Tener en cuenta que ese dato que nos aparece como un numerito y que nos encanta porque nos solucionó la vida porque es un número, no nos solucionó nada. Porque hay que ver como se construyó. Entonces, mi preocupación con los censos es que, como los campesinos suelen vivir en los sectores más alejados, en los sectores donde hay que pasar un bañado, por ejemplo, para llegar, o hay que ir en burro hasta allí, en un censo, que es un relevamiento masivo es muy posible que esos casos se pierdan. Justamente, los que se suelen perder son los más pobres. Nosotros teníamos el nombre del productor y dónde estaba ubicado y lo ubicábamos como fuera. Y cuando no pudimos llegar, como una vez me pasó personalmente, no pude llegar con la camioneta, nosotros supimos que ese campesino se había ido y que ya no estaba viviendo más en ese lugar, porque preguntábamos a todos los vecinos. Esto, un censista no lo hace. Entonces, en la deconstrucción del dato, uno tiene que mirar no solo qué conceptos usó, qué indicadores usaron sino qué inconvenientes hubo en el relevamiento. Por ejemplo, en un censo de pobla-

ción o en un censo agropecuario, coincidió en una provincia con una huelga de maestros. Eso es muy importante, porque son los maestros los que hacen el censo. Por lo tanto ahí hubo algún “despiole”. En otra provincia, en el Censo de 1988, una Dirección de Agricultura provincial estafó la plata del censo. Esto se descubrió y se tuvo que volver a hacer el censo. Pero podría no haberse descubierto.

Volviendo al tema del campesinado en caña, el primer hallazgo que tuvimos fue esta cuestión de la existencia de “sociedades familiares”, como “sociedades de hecho” de familias que nucleaban cupos, y esto fue como un avance. No hay solo una familia, la unidad de producción campesina no es solo una unidad de producción residente, sino que también puede incluir otro tipo de relaciones, de vínculos. Relaciones con otros familiares que de alguna manera forman parte de la olla, permite pensar en conceptualizaciones, en nuevas relaciones.

Eso por un lado. Por otro lado, esta heterogeneidad que nosotras vimos que existía y que Norma les mostró en ese cuadro que tiene muchísimas celdas; solamente con verlo uno encuentra que hay por lo menos nueve o diez hileras que son distintos tipos de productores. Otro recaudo que habíamos tomado —y esto por nuestra experiencia en otras zonas y por cuestiones teó-

ricas para definir la penetración del capital en el agro— fue el conocimiento sobre los elementos de capital en cada tipo de productor, qué elementos de compra de fuerza de trabajo o venta de fuerza de trabajo. Nosotras, en eso, tomamos muchos recaudos. ¿Por qué? Porque puede haber formas encubiertas de compra de fuerza de trabajo o de venta de fuerza de trabajo y esto pasa mucho cuando uno escucha el discurso de la Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina se cree casi campesina y dice que no tienen asalariados. Es verdad, no tiene asalariado porque no contrata un asalariado como se contrata en la fábrica. Contrata a través de terceros. Contrata un servicio, es distinto por ejemplo tener una empleada doméstica que llamar a Manpower o qué sé yo cuál, o a una empresa de limpieza que haga el servicio de limpieza. No es uno el que contrata asalariados. Es el servicio de limpieza el que lo contrató. Por lo tanto, este tipo de desdibujamiento del vínculo laboral donde el patrón no es directamente el patrón, sino que contrata un servicio, servicio que sí tiene asalariados, ahí hay una compra de fuerza de trabajo que no está claramente en la relación. No es la clásica relación patrón-empleado, sino es la relación empresa-empresa en donde el segundo empresario es el que está poniendo la fuerza de trabajo.

Nosotras habíamos tomado recaudos, pero no quiere decir que preguntáramos “¿señor, usted contrata en forma encubierta asalariados?”. No. Preguntábamos sobre algunas tareas que sabemos que son típicas para que pase esto: preparar el terreno, transportar el producto. Preguntábamos ¿cómo prepara el terreno? ¿Lo hace usted? ¿Con tractor? ¿Con bueyes? ¿Contrata a alguien que se lo hace? Y ahí nos aparecía una forma de compra de fuerza de trabajo que tuvo bastante peso, muchísimo peso. Cuando nosotras decimos que el 7% son “campesinos puros”, en general lo que estamos diciendo es que el que le sigue, que es un “campesino medio”, que tiene alguna contratación de fuerza de trabajo, no es contratante de asalariados por un día o por dos días, sino que muchas veces lo que contrató es un servicio para preparación de terreno y para el transporte. Eso era muy común, la contratación de un servicio en donde había un sistema de compra de fuerza de trabajo no tradicional, o no tradicional en el mercado formal con el que se trabaja. El mercado formal es el mercado urbano, donde existen en el diario los pedidos de trabajadores y las ofertas de trabajadores. En cambio en el campo esto no pasa y aparecen estos servicios, y en la ciudad también, si uno mira un poco hay montones de cosas que se contratan por servi-

cio y que no aparecen como un vínculo claro de patrón-empleado.

Esto además indicaba una penetración del capital en el agro. No es solo que hay contratación de “esta cosa”, ¿qué está significando “esta cosa”? Esto es la puesta en función de una cuestión conceptual: esto implica una penetración del capital en el agro, una mayor cantidad de elementos de capital de lo que tradicionalmente se veía. Por otro lado antes decíamos “los más pobres solo venden fuerza de trabajo”, y esto representaba algo que era un supuesto muy fuerte. Esta cuestión de que los más pobres terminan por irse del campo. Teníamos algunos indicios, en general “el último que se va que cierre la puerta”, pero los campesinos nunca cerraban las puertas. Siempre queda alguien cuidando la tranquera. Por algo la persistencia campesina en sistemas donde hay mucha penetración de capital. ¿Qué pasaba? En primer lugar lo que vimos: el vínculo familiar con otros sistemas que no fueran agrarios, es decir, salís a trabajar afuera, ¿adónde? Si tenía otras inversiones, es decir, si el que es un familiar capitalizado y tiene un pequeño negocio, un almacén de ramos generales o vende su capital, alquila su capital, sale a hacer preparación del terreno para otros, o transporte para otros. Lo que vimos fue que esta cuestión de vender fuerza

de trabajo nos aparecía en todos los estratos que llamamos subordinados. Es decir, desde el campesino puro hasta el familiar capitalizado, encontrábamos que algún miembro de la familia trabajaba afuera. Y esto no significaba que se fuera a ir del campo o que fuera el paso previo a la migración ni a la proletarización, sino que era una estrategia del grupo familiar para su canasta de ingresos. Lo que sí había eran diferencias en qué se ocupaban. Los más pobres se ocupaban en tareas más inestables, de más uso de la fuerza. No quiero utilizar la palabra “calificación” porque en general las tareas de cosecha son calificadas, son desvalorizadas por ser manuales, pero son calificadas, no cualquiera puede cortar la caña en el momento oportuno y hacer bien todas las cosas que hay que hacerle para que no pierda el juguito que tiene. Es decir, son tareas más bien manuales, de mucha fuerza, esto es lo que aparecía en los estratos más pobres y en los estratos de los “familiares transicionales” lo que aparecía era el trabajo más estable en algún sector de servicios —enfermera, en la cooperativa, como empleado, alguna hija maestra, empleado en servicios de alguna cuestión municipal—. Esto sí mostraba diferencias, pero que vendían fuera de trabajo, en los dos sectores vendían. Esto es lo que nosotros llamamos “multiocupación”. La

proletarización no es, necesariamente, un paso previo a la migración. No es una condición previa necesaria. Es una propiedad, pero no una condición previa. Esta es un poco la conclusión que sacábamos.

La otra cuestión era el tema de la alta heterogeneidad que significaba todo este mundo. Estuvimos viendo propiedades, relaciones, y esto no era fácil de sintetizar metodológica o técnicamente. ¿Por qué diferencio metodológico de técnico? Porque creo que lo metodológico es estar dudando siempre de lo que uno está proponiendo y de lo que el dato está diciendo. Dudar del dato, y deconstruir, y dudar de lo que uno dice y decir qué preconcepción estoy usando para esto. Creo que esa es la esencia de lo metodológico. Lo técnico es un derivado que surge casi espontáneamente, con un poco de oficio, con el oficio que usamos para superar estas dudas. Superar las dudas no quiere decir encontrar la verdad, sino cómo controlar estas dudas. Cómo preguntar, cómo mantener esta duda que yo tengo acerca de si todos los que venden fuerza de trabajo son muy pobres. Cómo controlar esta duda. Cómo pensar que esto no es cierto. Entonces, lo técnico surge casi inmediatamente. En lo técnico hay distintos elementos. Desde cómo uno va a aproximarse al campo, qué estrategia va a usar —en-

cuesta, entrevista, datos provistos por otros y demás—, cómo sintetizo la información de forma tal que aquello que uno sintió como relevante lo pueda resumir para que otro lo entienda. Es decir, cómo se presenta un nuevo dato dando cuenta de los conceptos que lo generaron.

Todo proceso de investigación supone que uno va haciendo estas cosas, que son artesanales y tediosas, junto con lecturas; y que va buscando nuevas lecturas en función de lo que le va apareciendo. Una de las cosas que Norma decía antes, nosotras estuvimos revisando material y encontramos esa tasa que llamamos Tasa Patnaik que nos permitía sintetizar este mundo complejo sobre las distintas formas de fuerza de trabajo. Esa tasa lo que hacía era resumir relacionando distintas variables. Tomaba básicamente la cantidad de jornales que en una unidad de producción se habían comprado versus la cantidad de jornales que se habían vendido, en relación con los que habían sido provistos por la mano de obra familiar. Eso si quieren en el trabajo nuestro está más explicado, pero quiero darles una idea de que la tasa sintetizaba bastante bien aquello que nosotras habíamos visto: una alta heterogeneidad y cómo resumirla de forma tal que diera cuenta de esta heterogeneidad, es decir ver cuál era el balance de la fuerza de trabajo que aparecía y

si esto nos permitía estratificar a los productores teniendo en cuenta las relaciones teóricas que nosotras estábamos viendo.

Con respecto a la tasa, lo que hicimos fue vincularla con otros elementos del sistema campesino. ¿Cómo? Nosotras, desde el principio, nos planteamos el problema campesino, quiero decir “la acción de los campesinos”. Para la investigación de los “complejos” utilizábamos conceptos “macro” (sociales y económicos) pero para este buscamos elementos “micro” o “etno-sociológicos”. Nuestra encuesta tenía dos partes: tenía un cuestionario bastante formal, bastante trabajado con entrevistas previas y una entrevista mucho más informal pero bastante estructurada, para aquellos que al aplicar el cuestionario grande nos daba que eran campesinos. Antes de irnos habíamos dicho que había que aplicar el segundo cuestionario a todos aquellos que tengan menos de veinte toneladas de cupo, pero mientras estábamos allí resolvimos que no, que eso no era un buen indicador, por más que si alguno de ustedes encuentra por ahí el cuestionario arriba dice eso, “hacer a todos los que tienen menos de veinte toneladas”. Pero no fue así, no usamos eso, porque en el trabajo de campo mismo hicimos un cambio y solamente aplicamos el segundo cuestionario a aquellos que tenían tales y tales

características y que el cupo conjunto de todos los que él maneja no supere tantas toneladas. Este tipo de instrucciones no quedan registradas muchas veces, y después uno tiene que tratar de acordarse, como lo hicimos nosotras, tomamos esta decisión, entonces, nuestra entrevista a campesinos, que era una entrevista en profundidad, se hacía solo en estos casos. Y esa fue la que trabajamos más cualitativamente en el libro.

Al reducir en esta charla lo que habíamos pensado dar de la estrategia metodológica y técnica, tuvimos que saltar algunas partes. Usamos distintas técnicas, usamos hasta técnicas históricas, y estuvimos revisando archivos, historia de los ingenios y demás. Usamos múltiples técnicas, inclusive técnicas de trabajo en grupo, reuniones con las cooperativas. Pero también hicimos reuniones entre nosotros, al mediodía nos encontrábamos a almorzar o a la noche, a cenar y discutíamos lo que habíamos estado viendo. Algunos de nuestros planteos e hipótesis surgen de esas cenas o almuerzos, de la charla entre nosotros. El que hayamos usado distintas técnicas no quiere decir que hayamos tenido distintas metodologías. La metodología permanente era estar dudando de lo que uno decía. Cuando otro decía algo, decirle: bueno, no, pero ¿si es de tal otra

manera? Pero fíjate que esto no tiene que ver con lo que uno espera teóricamente. Y había que argumentar para poder sostener lo que se estaba diciendo. Este ejercicio es como el ejercicio que se transmite solo en “el hacer”. Entonces, por ahí múltiples técnicas pero una sola inquietud metodológica: dudar desde la teoría, si no está pasando algo que contrasta o que tengo que indagar más. Por ahí eso era un poco, en cuanto a abordaje metodológico-técnico, lo que queríamos contarles.

Norma Giarracca: Yo les quiero contar algo, como broche de cierre. Cuando les transmitimos los primeros resultados, nuestras construcciones, a los dirigentes campesinos se les pusieron los pelos de punta. “¿Cómo? ¿Y nuestro discurso político en Buenos Aires? ¿Qué decimos ahora? Que hay un estrato de 22% más acomodado etcétera, etcétera. No, pero qué sé yo”... Trabajamos muchísimo con ellos. Nosotras tenemos una relación muy importante con las organizaciones, seguimos trabajando con las organizaciones y vemos con el tiempo que se da lo que llamamos “efecto de teoría”: ellos ahora hablan de “familiares capitalizados”, de “familiares transicionales” y gestan políticas para cada uno de los sectores. Se dieron cuenta de lo importante que es información actuali-

zada para el accionar de ellos como organizaciones. Pero al comienzo les costó aceptar los resultados de nuestro trabajo porque no coincidían con el discurso más generalizado de que había un 92% de campesinos todos igualitos. Ellos, la Liga de Cooperativas cañeras y UCIT, ayudaron económicamente a que esta publicación saliera, presentamos la primera vez el libro en Tucumán. Y ellos dicen: “como dicen ellas, yo que soy familiar capitalizado...”, “yo que soy campesino transicional...”, “en esta posición hago tal y tal cosa, pero si vendo más trabajo seguramente no lo haría”. Es decir, empezaron a complejizar sus propias estrategias gremiales. Ellos mismos se dieron cuenta de la importancia de romper con las prenociones. De la importancia de la buena información, de la mirada compleja. Otra cosa que les quiero decir es que en 1991, hubo un decreto presidencial, que desreguló totalmente la actividad cañera; en este momento hay un “sálvese quien pueda”, pero es muy, muy importante lo que ellos hicieron estos años, sobre todo a partir del fortalecimiento de sus cooperativas desde 1985. Ellos ahora son actores más fuertes para enfrentarse al mercado. El libro es una fotografía de fines de los ochenta, y los procesos actuales plantean, justamente, esta capacidad de los distintos actores para ir moviéndose, para

ir negociando. Pero ellos, en este momento, no solamente están negociando con el capital agroindustrial tucumano, con el capital agroindustrial argentino en su conjunto, sino con el brasileño. Porque la caña, si bien todavía los protocolos no han sacado las tarifas, va a ser una de las tarifas o en la integración con Brasil. Muchas de las cosas que se plantea el libro son coyunturales, son de ese momento. No la cuestión estructural, pero sí sobre todo la cuestión de la intervención del Estado.

[...]

BIBLIOGRAFÍA

- Bourdieu, P. y Wacquant, J. D. 1992 *Réponses pour une anthropologie réflexive* (París: Seuil).
- Delich, F. 1970 *Tierra y conciencia campesina* (Buenos Aires: Signos).
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 “Los campesinos cañeros: multiocupación y organización” en *Cuaderno del Instituto de Investigaciones* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 3.
- Giarracca, N. 1994 “Tucumanas de ojos grandes” en Panaia, M. (comp.) *Las mujeres en la Argentina: la otra mitad del país* (Buenos Aires: CEAL, Colección Universitaria).
- Giarracca, N.; Gras, C. y Gutiérrez, P. 1994 “Métodos cuantitativos y cualitativos en los estudios de la Sociología Rural”, ponencia presentada a las Primeras Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos, Buenos Aires.
- Giddens, A. 1987 *Las nuevas reglas del método sociológico* (Buenos Aires: Amorrortu).
- Hooks, B. 1990 *Yearning, Race, Gender, and Cultural Politics* (Boston: South End Press).
- Melucci, A. 1993 “Frontier Land: Collective Action between Actors and systems” en Diani, M. y Eyerman, R. (comps.) *Studying collective action* (Londres: Sage).
- Nun, J. 1987 *La rebelión del coro. Estudio sobre la racionalidad política y el sentido común* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Touraine, A. 1988 *El regreso del actor* (Buenos Aires: Eudeba).

MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS EN LOS ESTUDIOS DE LA SOCIOLOGÍA RURAL* **

NORMA GIARRACCA, CARLA GRAS*** Y PAULA GUTIÉRREZ****

INTRODUCCIÓN

La Sociología Rural en Argentina ha seguido diferentes escuelas y perspectivas teóricas.

* Giarracca, N.; Gras, C. y Gutiérrez, P. 1995 "Métodos cuantitativos y cualitativos en los estudios de la Sociología Rural" en *Ruralia, Revista Argentina de Estudios Agrarios* (Buenos Aires: FLACSO) octubre.

** Comunicación presentada a las "I Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos", realizadas en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), 9-10 de junio de 1994.

*** Posdoctora y socióloga, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y miembro del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad de Buenos Aires.

**** Socióloga (UBA). Integra el área de Estudios Rurales del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Pero en la producción realizada después de la institucionalización de la Sociología a fines de los cincuenta, se nota una fuerte influencia del estructuralismo. Sus análisis e interpretaciones se centraron en las "estructuras" (productivas, económicas, sociales), y "la producción" es el lugar de referencia obligado de cualquier intento de comprensión de la acción. Aun en los estudios de sectores subalternos, en los que coexisten producción y consumo, y en los que es muy difícil obviar la vida cotidiana para comprender el funcionamiento de la unidad, las referencias estructurales ocupan un fuerte lugar. De igual modo, los pocos trabajos producidos hasta los años ochenta sobre las organizaciones y movimientos políticos de actores agrarios han tendido a relacionar la naturaleza y eficacia de las demandas y reivindicaciones con la posición estructural de los sujetos en cuestión.

La mayoría de los sociólogos rurales se formaron para organizar y trabajar información se-

cundaria y para generar información cuantitativa. Series de datos de producción, área sembrada, rendimientos y precios, así como los censos son informaciones de uso cotidiano. Sin embargo, la Sociología Rural se ha diferenciado de la economía agraria por llevar a cabo estudios de campo para generar nueva información, lo que llevó a encuestar, entrevistar, entrar en contacto con los sujetos analizados. Y, precisamente, este estilo de investigación facilitó que dentro de la Sociología Rural se generaran otros tipos de interrogantes que necesitaron otras formas de generar información y conocimientos.

Esos otros interrogantes refieren a la presencia de “un sujeto”, pero ya no aquel ubicable y comprensible dentro de la estructura, sino aquel otro capaz de intervenir en un curso de acontecimientos o en un estado de cosas, ese otro “agente” capaz de estructurar al mismo tiempo que es estructurado (Giddens, 1987). Los actores comienzan a ser tomados como recursos de inteligibilidad para explicar los acontecimientos, la “acción” pasa a tener un papel central. Como plantean Delacroix y Dosse (1993), se pasa a valorizar simultáneamente al sujeto como actor y al científico como intérprete del Otro, “situándolos en una relación que siempre es de intersubjetividad y de implicancia” (ibídem: 21).

Conceptos como “estructura agraria”, “estructura de tenencia y tamaño de la tierra”, “mercados de tierra o de trabajo”, comenzaron a combinarse con otros como “estrategias”, “construcción”, “sentido”, “negociación”, “autoorganización”. Los aspectos singulares, vitenciales, intersubjetivos y las historias de los sujetos comienzan a importar tanto como los estructurales.

En este trabajo reflexionaremos, desde nuestra propia experiencia, acerca de este proceso, que fue mutando preocupaciones por la ubicación estructural, por cortes sincrónicos y tipologías que borran las singularidades, por otra posición que busca un sujeto singular y la comprensión del sentido que los sujetos dan a sus acciones. En ese espacio de reflexión, aparecerán las otras metodologías y técnicas de análisis.

CAMPESINOS Y AGROINDUSTRIAS: LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y LA FORMA DE ABORDARLA

En la década de setenta, los campesinos no solo no desaparecían —como se había pronosticado tantas veces— sino que cuando se presentaban ciertas condiciones, se integraban a

las formas más avanzadas de la organización capitalista: las agroindustrias. El interés por estudiar la relación entre campesinos y agroindustrias permitió generar una abundante producción sobre lo que se conoció como “agricultura por contrato” (*contract farming*).

Estos estudios coincidían en que las condiciones para el contrato agroindustrial entre campesinos y empresas agroindustriales eran heterogéneas, cambiantes, no solo de país en país, sino dentro de un mismo país, o de una misma región. Nestlé, por ejemplo, no podía obtener en México el mismo contrato agroindustrial con los pequeños ganaderos de dos regiones cercanas. Además de las necesidades de abastecimiento de las empresas, aparecían acciones, estrategias de los actores que modificaban y daban particularidades a la relación. La mirada comenzó a posarse en los actores y sus acciones, el concepto “estrategias” comenzó a circular en los estudios. A los importantes aportes de los economistas para comprender los procesos estudiados había que sumar la mirada de la Antropología, de la Micro-Sociología.

En Argentina dicho proceso adquirió interesantes características: los pequeños agricultores buscaban formas de integrarse a la expansión agroindustrial a partir de sus propias organizaciones, que agroindustrializaban y

competían con las grandes empresas. Nuestros trabajos conceptualizaron esta situación como “integración cooperativizada” (Giarracca y Aparicio, 1991; Giarracca, 1988; Gras, 1993).

La organización cooperativa y sus nuevas funciones —que exigían destrezas, iniciativas, novedosas prácticas (manejar un fax, por ejemplo)— nos planteó un desafío de conocimiento: cómo y por qué unos sujetos ubicados desfavorablemente dentro de la estructura social deciden modificar en conjunto las condiciones existentes y crear otra situación, que modificara la situación inicial. Por qué son unos y no otros, por qué algunos toman iniciativas capaces de convocar a otros y formar un “nosotros”.

Se trataba entonces, de focalizar el punto de vista de los actores desde situaciones económicas, pero también desde el campo de sus representaciones, desde sus universos simbólicos, desde sus prácticas culturales, inculcaciones y experiencias, creatividades y deseos. Para trabajar en este plano, se tenían que privilegiar ámbitos de acción que incluyeran desde los laborales-familiares hasta los afectivos (educación, relaciones familiares etcétera), sin olvidar los culturales y comunicacionales. Buscar en las historias de vida de los pioneros, por ejemplo, las marcas que contribuyen al deseo de generar salidas compartidas.

Contábamos con un adecuado nivel de información cuantitativa, habíamos trabajado con esos productores desde hacía años, conocíamos la situación económica en la que se movían y habíamos conversado con muchos de ellos sobre las crisis y las salidas imaginadas. El trabajo dentro de equipos interdisciplinarios nos había facilitado el estudio de las condiciones económicas donde los agricultores accionaban. Las condiciones “macro” estaban suficientemente elaboradas e interpretadas. Pero la propuesta se ubicaba en otro orden: no era en la ubicación estructural donde podíamos comenzar a indagar el por qué y el cómo del accionar colectivo. Sin embargo, sin ese conocimiento, la pregunta sobre el accionar de los actores perdía significado. Aquella pregunta cobraba sentido, precisamente, por la ubicación subordinada de los actores (analizaríamos una liga campesina y no las fuertes cooperativas de medianos cañeros que se constituían simultáneamente, por ejemplo), por la posibilidad de ruptura de una relación asimétrica que la acción de estos sujetos comportaba.

Podemos suponer que delimitar un sector social es eficaz porque existe alguna relación entre dicha delimitación y las conductas individuales. Como sostiene Bourdieu, las personas, los individuos están ubicados en un espacio so-

cial, no están ubicados de cualquier modo, es decir, no son intercambiables. En función de la posición que ellos ocupan en este espacio muy complejo, se puede avanzar en la comprensión de la lógica de sus prácticas y en la percepción, entre otras cosas, de cómo clasificarán y se clasificarán y, llegado el caso, cómo se pensarán como miembros de un determinado sector (Bourdieu, 1988). Sin embargo, este conocimiento debe evitar, por un lado, sustancializaciones sobre un sujeto privilegiado para el cambio por su ubicación estructural (la clase), y, por el otro, perspectivas que suponen que el mundo de la vida cotidiana de los sectores subordinados es el mero espacio de la reproducción. Ese espacio se halla atravesado por múltiples puntos de ruptura con el orden hegemónico vigente y, aunque contradictorios y parciales, ellos hacen a la lógica más íntima y permanente de la lucha social (Nun, 1987: 24).

¿POR QUÉ LAS TÉCNICAS CUALITATIVAS?

La pregunta sobre qué estrategias metodológicas utilizar para acercarnos al proceso de construcción de las acciones colectivas involucra, como vimos, ciertos puntos de partida: enfocar la singularidad de una situación so-

cial sin renunciar a estudiar procesos sociales más amplios.

La caracterización estructural de productores agrarios del NOA vinculados con distintos mercados no alcanzaba para explicar cómo y por qué estos sujetos lograban actuar sobre las condiciones subordinantes. El problema consistía en relacionar las condiciones y ubicaciones macrosociales con la singularidad, con el sujeto. Pero las *condiciones macrosociales* no representan aspectos meramente externos que se imponen o condicionan a los individuos, sino que han afectado a su propio ser social. Representan *condiciones* en tanto son subjetivamente valoradas e interpretadas. Esas condiciones permiten modelar una acción porque los individuos le atribuyen un sentido que ocurre en el plano subjetivo e intersubjetivo, de ciertas relaciones sociales, que contribuyen a formar también el sentido de la acción.

El uso de distintas técnicas cualitativas permitió acompañar este tránsito de las categorías sociales a los sujetos actuantes. En particular, permitió rastrear el proceso de construcción de las acciones colectivas y el sentido que los actores les fueron otorgando. En efecto, como señala Saltalamacchia (1990: 325), “los hechos son importantes no solo en tanto ocurren, sino en tanto son interpretados por los actores”.

Dicha interpretación es la que se intenta recuperar a través de estas técnicas (por ejemplo, historias de vida, entrevistas focalizadas): una sucesión de acontecimientos que pueden ubicarse temporalmente, y que son recordados como significativos porque produjeron una diferencia entre lo que había/pasaba antes y lo que hubo/pasó después.

En particular, cuando se trata de reconstruir la historia de un movimiento, de una organización, o de una acción colectiva, lo que queremos es rastrear la formación de ese “nosotros” que les permitió a los sujetos actuar en forma conjunta, identificarse (entre sí y frente al “otro”). “La solidaridad que lleva a la acción colectiva a ciertos individuos que viven en condiciones estructurales comunes nace, en el plano subjetivo, a partir de la experiencia de encuentro y reconocimiento provocados por la vivencia de ciertos acontecimientos” (Saltalamacchia, 1990: 325). Lo que buscamos, entonces, es reconstruir esas vivencias, comprender el sentido que adquirieron y que permitió la acción en ese lugar y no en otro. En los relatos de los actores se tejen, a través de distintas temporalidades, no solo testimonios sino también identidades. En estos testimonios, es posible encontrar los trazos de algo que los excede, esto es, el orden de lo social.

Las técnicas cualitativas permiten, así, recuperar el punto de vista del actor y recuperar la dimensión temporal de sus acciones: “Se tratará de revivir, en lo posible, los hechos, tratando de recordar el sentido atribuido a los mismos en el momento en que ocurrieron” (Saltalamacchia, 1990: 331).

Cuando entrevistábamos a los dirigentes de cooperativas, por ejemplo, en sus relatos se podían rastrear las condiciones y situaciones que derivaron en la construcción de un tipo de acción social, los momentos de “éxito” y de crisis, las opciones que como actores fueron construyendo, las relaciones establecidas con otros. Sabíamos de las funciones que cumplen las entrevistas en profundidad y las historias de vida en la identificación de procesos esenciales, de momentos de decisión, de aspectos centrales que parecen dignos de un estudio en profundidad (Bertaux, 1989), así como en la reconstrucción de datos factuales que de otra forma hubiesen sido difícil obtener.

A poco de andar, nos dimos cuenta que la interacción con nuestros entrevistados nos permitía intercambios densos. No solo podíamos identificar determinadas líneas de análisis, sino también “universos sociológicos” (Bertaux, 1989) relevantes para nosotros. En efecto, podíamos acercarnos al sentido que les permitió ir constru-

yendo un tipo determinado de acción social. Las condiciones que en los relatos aparecían como “facilitadoras” o “inhibidoras” de la acción eran tales porque los sujetos las habían valorado, les habían otorgado un determinado sentido. Y en ese sentido, se jugaban destrezas, experiencias pero fundamentalmente creativas.

Debimos recurrir a numerosas formas de control del material recogido a través de estas entrevistas, era necesario tener en cuenta que “el entrevistado tenderá a organizar el discurso de su memoria desde sus actuales convicciones e instrumental cognitivo” (Saltalamacchia, 1990: 330), o que, como plantea Arfuch (1993), los entrevistados tienen sus propias “estrategias de presentación”. Utilizamos así archivos periodísticos, datos estadísticos, etcétera. Confrontamos los discursos de distintos sujetos. Muchas veces tuvimos que aceptar que la “opacidad” de lo social, la “incertidumbre” se iba a colar también en nuestro trabajo, en tanto este era un proceso de construcción social.

LA RELACIÓN ENTREVISTADOR-ENTREVISTADO

Pero también tuvimos que problematizar nuestra propia relación con los entrevistados, nues-

tras expectativas sobre la relación, focalizar las emociones y relaciones que se involucraban en las situaciones de entrevista. Este tipo de “intervención” requiere de parte del investigador un determinado compromiso.

El trabajo de campo del sociólogo rural (como el del antropólogo) es una tarea que compromete al actor investigador tanto como al investigado. Compartir el tiempo, encontrar al entrevistado “en familia”, volver cada tanto, va configurando un escenario de participación con subjetividades en juego. Los “informes de campo”, donde registramos información fuera de entrevista o detalles de la escena, son de gran utilidad a la hora de comprender ciertos procesos y, sobre todo, cuando analizamos las experiencias de organización a través del tiempo.

El compromiso que se asume al realizar una historia de vida es el de compartir con el entrevistado la tarea de construcción y búsqueda teórica: en el proceso de reconstrucción de los sentidos que los hechos pasados tuvieron para el entrevistado, surgirán interpretaciones nuevas sobre lo vivido. Como señala Saltalamacchia, “dado que la entrevista no es una forma de ‘recolección de datos’, sino una propuesta de investigación conjunta, los propios significados de la entrevista deberían ser discutidos

durante la relación” (1990: 332). En este tipo de entrevistas, “el interlocutor no es simplemente un ‘objeto de investigación’, es un ser humano que se confía” (Ferrarotti, 1990: 123); por lo tanto, la relación entre el investigador y el entrevistado es “esencialmente un ‘pacto fiduciario’ que liga a los contrayentes al respeto recíproco y a una empresa cognoscitiva común” (ibídem: 127).

Las experiencias en el trabajo sobre las organizaciones cooperativas del NOA desarrolladas en los últimos cinco años las llevamos a cabo sin una “metodología de participación” previa. Fuimos logrando acuerdos de trabajo con las cooperativas: manteníamos largas entrevistas grabadas con los dirigentes, podíamos presenciar reuniones entre ellos, y podíamos proponer el análisis de ciertas coyunturas y la forma en que ellos habían actuado. Si bien no realizamos una “intervención sociológica” en la modalidad que Touraine propone (ver Touraine, 1987; Vuoto, 1990) o que Alberto Melucci llevó a cabo en Milán, la metodología desarrollada tomaba algunos aspectos de estas propuestas.

Una primera advertencia realizada por Melucci, y que pronto realizamos en nuestro trabajo, se refería a los intereses en juego en la relación “investigadores-entrevistados”. Tanto nosotros, en nuestro rol de investigadores,

como los entrevistados teníamos intereses que eran distintos, más allá de las coincidencias que pudiéramos tener en torno a algunos tópicos (el impacto de las medidas económicas sobre los mercados regionales, por ejemplo). Fue necesario trabajar dentro del equipo en la clarificación de dichos intereses: nosotros queríamos la información y experiencia controlada por los entrevistados mientras que estos requerían de cierta información que nosotros podíamos generar. Este “pacto cognitivo” (Melucci, 1992) era el espacio desde donde era posible el intercambio. Desde ese lugar, era posible indagar sobre la acción. Unos y otros teníamos intereses en el proceso de “deconstrucción-reconstrucción de los datos” (Saltamacchia, 1990).

La participación de los entrevistados en el proceso de construcción de conocimiento supuso también reconocer que “los actores comprenden el significado de sus acciones” (Melucci, 1992, traducción nuestra). Ello cuestionaba cierto rol tradicional del investigador en tanto “concientizador”, a la vez que implicaba no identificar la acción con el punto de vista de los actores. En otras palabras, si bien las condiciones estructurales que definen a los actores no son capaces de explicar en todo su sentido las acciones de los sujetos, tampoco sus repre-

sentaciones. En nuestro caso, aceptamos que la acción colectiva “puede pensarse como una orientación propositiva construida a través de relaciones sociales, en un campo de posibilidades y limitaciones que los actores pueden percibir y tomar en cuenta” (Melucci, 1992, traducción nuestra).

En este sentido, la relación del equipo con las organizaciones de productores campesinos entraba en el campo de relaciones sociales sobre el que se construían las acciones de aquellos. Esto significaba entonces, reconocer que nuestra presencia generaba efectos: condicionaba en algún sentido las “estrategias de presentación” de los entrevistados, ponía a su alcance información, percepciones e imágenes (sobre ellos, sus organizaciones, sus estrategias), que facilitaban o inhibían acciones.

Pero esta relación también tenía efectos sobre nuestras propias estrategias y apuestas de conocimiento. No solo en términos de la orientación de nuestras hipótesis, sino fundamentalmente en la construcción de los problemas de investigación planteados por el equipo. Las visiones, las apuestas, las demandas de estos actores tenían peso en nuestras decisiones. Nos dimos cuenta que nosotros también construíamos nuestras acciones sobre una trama de relaciones sociales, en las que ellos participaban.

Este “pacto cognitivo” permitió construir relaciones más democráticas en la vinculación con los sujetos estudiados. Se trataba de romper con la idea de que el investigador —el analista— puede guiar las acciones de los actores, y desde ahí, trabajar nuestras propias expectativas y sentimientos acerca de la capacidad de los sectores estudiados para modificar sus condiciones de existencia, y de las opciones que ello pudiera significar en términos de sus estrategias.

La “transferencia” de los resultados de nuestros trabajos se realiza en el mismo proceso investigativo, existe un ida y vuelta constante. Como plantea Melucci, en nuestro rol de investigadores, la capacidad de producir conocimiento supone responsabilidades éticas y políticas en relación con dicha producción y al destino de la misma, así como el respeto por la libertad de los actores.

BIBLIOGRAFÍA

- Arfuch, L. 1993 “La interioridad pública. La entrevista como género” en *Cuadernos del Instituto de Investigaciones* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 11.
- Bertaux, D. 1989 “Los relatos de vida en el análisis social” en *Historia y Fuente Oral* (Barcelona: Instituto Municipal de Historia) N° 1.
- Bourdieu, P. 1988 *Cosas dichas* (Barcelona: Gedisa).
- Delacroix, C. y Dosse, F. 1993 “El viraje de las ciencias sociales” en *Ciencias Sociales. Boletín de Informaciones de la Facultad de Ciencias Sociales* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA).
- Ferrarotti, F. 1990 *La historia y lo cotidiano* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- Giarracca, N. 1988 “Nuevas situaciones de integración agroindustrial: el caso de las cooperativas arroceras” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 85.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 “Los campesinos cañeros: multiocupación y organización” en *Cuaderno del Instituto de Investigaciones* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 3.
- Giddens, A. 1987 *Las nuevas reglas del método sociológico* (Buenos Aires: Amorrortu).
- Gras, C. 1993 “Las cooperativas en el desarrollo agroindustrial”, Informe de Investigación, Beca de Iniciación (Buenos Aires: CONICET / IPDERNOA / UNT-IIFCS / UBA).

- Melucci, A. 1992 "Frontier Land: Collective Action between Actors and Systems" en Diani, M. y Eyerman, R. (eds.) *Studying Collective Action* (Londres: Sage).
- Nun, J. 1987 *La rebelión del coro: Estudios sobre la racionalidad política y el sentido común* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Saltalamacchia, H. et al. 1990 (1983) "Historias de vida y movimientos sociales: Propuesta para el uso de la técnica" en *Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* (México DF) Año 4, N° 9.
- Touraine, A. 1988 *El regreso del actor* (Buenos Aires: Eudeba).
- Vuoto, M. et al. 1990 "El método de la intervención sociológica: su validación en el análisis de la acción sindical", informe de investigación (Buenos Aires: UBA).

ENSAMBLANDO LAS VOCES: LOS ACTORES EN EL TEXTO SOCIOLÓGICO* **

NORMA GIARRACCA Y KARINA BIDASECA***

“A wild crowd outside the department stores in the city center. A terrible noise, vendors shouting, street organs grinding, children crying. Hell. The camera observes this sea of faces slightly from above. Slowly it distinguishes

Karol from among the crowd. He approaches closer, cranes his neck and, using the camera as a mirror, scrutinizes himself”.

KRZYSZTOF KIESLOWSKI, GUIÓN DE *BLANC*
(CITADO EN INSDORF, 1999)

* Giarracca, N. y Bidaseca, K. 2004 “Ensamblando las voces: los actores en el texto sociológico” en Kornblit, A. L. (coord.) *Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y procedimientos de análisis* (Buenos Aires: Biblos).

** Una primera versión de este trabajo fue presentada en las “Terceras Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos” realizadas en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, en junio de 2001.

*** Posdoctora por PUC-SP/Universidad de Manizales-CINDE/COLEF/CLACSO/FLACSO y Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Es coordinadora del Programa Sur-Sur (CLACSO).

INTRODUCCIÓN

La Sociología y la Antropología Social, como disciplinas sociales, poseen una larga tradición en investigaciones en las que los actores sociales, o simples sujetos bajo estudio, son centrales tanto en los modos de indagación como en los textos resultantes. Recordemos, como ejemplos ilustres, el clásico trabajo de Thomas y Znaniecki de comienzos de siglo, *The Polish Peasant in Europe and America* (1919), o la reciente obra magistral de Pierre Bourdieu *La miseria del mundo* (1999), sin olvidar, por su-

puesto, a *Los hijos de Sánchez* (1961) y el resto de las obras de Oscar Lewis.

Esta tradición nunca perdió vigencia en la Sociología; no obstante, durante los años del “consenso ortodoxo”, la hegemonía positivista y su obsesión cuantitativista, trataron de exiliarla en la Antropología o en la Etnografía.

Los sociólogos rurales evitamos, en parte, el mandato positivista por la fuerte influencia que la Antropología ejerció sobre “los estudios campesinos”. Una investigación o una tesis, sin “trabajo de campo” resultaba impensable y los grabadores fueron —y siguen siendo— nuestras herramientas más preciadas. Heredamos, desde siempre, entrenamientos en estrategias metodológicas que valoraban la centralidad del sujeto y al investigador como intérprete del otro en una relación de plena intersubjetividad. No obstante, en muchos casos se buscaba corroborar las palabras de los entrevistados con otras fuentes pues se los sospechaba de “subjetividades” como si tales aspectos en las encuestas se pudieran evitar. En las etapas de mayor hegemonía de las posiciones estructuralistas hasta los antropólogos rurales evitaban la soledad con las voces de los sujetos y buscaron los siempre legitimados “datos” cuantitativos. Pero siempre, tanto antropólogos como en sociólogos rurales, contaban con los “cua-

ernos de campo”, verdaderos reservorios de documentación que eran inestimables fuentes de las voces de los sujetos en los momentos de mayor libertad en la relación investigador-investigado. Esos momentos de “intercambios densos” donde el investigador puede dedicarse a identificar mundos sociales, detalles de las escenas laborales o familiares, sentidos y significados en disputa entre distintos sujetos, resultaban ser de vital importancia a la hora de comprender hacia donde se dirigía el deseo de conocimiento y comprensión.

Con la nueva Teoría Social Posestructuralista, la centralidad del sujeto en los estudios sociales tomó una vigorosa actualidad y se expandió a diversas especialidades de la Sociología. Se toman a los actores como recursos de inteligibilidad para comprender los acontecimientos, para producir conocimientos y, en muchas ocasiones, convierten sus narrativas en elementos centrales de los materiales resultantes (artículos, libros, etcétera). Pierre Bourdieu, con su trabajo mencionado, se convirtió en el mejor exponente contemporáneo de esta Sociología. En la teleconferencia ofrecida a mediados del año 2000 en la Universidad de Buenos Aires, nos desafió precisamente a problematizar la Sociología en sus posibilidades “socioanalíticas”, potenciando el espacio don-

de la gente se expresa en cuestiones profundas e importantes. Como alguna vez M. Ferro (s/f) dijo acerca del cine, las disciplinas sociales en sus potencialidades comprensivistas e interpretativas develan el secreto y hacen caer las máscaras, muestran el revés, los lapsus de aquello que nos presentan como “social”.

La “escucha” de la gente, le demanda al sociólogo un concienzudo proceso de autorreflexión acerca de los tamices por los que se escucha y de las resignificaciones (“traducciones” en términos de Long, 1992) por las que se filtran sus narrativas, así como un entrenamiento interpretativo (teórico) que lleva tiempo. Mientras que el objetivo de la “explicación sociológica” a partir de técnicas “neutras” — como los cuadros de doble entrada, los análisis multivariantes o los coeficientes de relación— es una estrategia que puede transmitirse fácilmente en las carreras de Sociología, la comprensión y comunicación de las acciones de los hombres en sus distintas dimensiones requiere algo más que el aprendizaje de las metodologías. Compromete al investigador en su formación intelectual, sensibilidad, capacidad intuitiva y de autoconocimiento y reflexión. Compromete además al investigador en su capacidad de comunicación y, como dice la antropóloga Julie Taylor,

en lugar de tratar de analizar o explicar, intentar evocar, que es una palabra muy de moda en la Antropología interpretativa. [...] Y otra palabra que se usa en inglés es *inacting*, que decidimos que puede ser “puesta en acto”, o sea, comunicar por los textos mismos que mimetizan lo que uno está tratando de comunicar. (Taylor, 1993: 3)

Los actores o los simples sujetos sociales tejen sus propias interpretaciones de los acontecimientos, pueden narrarlos de una forma o de otra, y una misma realidad puede ser representada por expresiones distintas, hasta incompatibles, por diferentes actores. Las narrativas orales son modos de argumentar; los actores en sus discursos realizan operaciones retóricas para convencer a sus interlocutores acerca de cómo interpretar los hechos narrados.

En esta perspectiva los acontecimientos y procesos son obras de “sujetos activos y conocedores”, de “actores sociales”, y no resultados del impacto diferencial de grandes fuerzas sociales despersonalizadas sobre individuos pasivos o engañados por dispositivos ideológicos. Y en esta ontología nosotros mismos como investigadores somos sujetos activos, con capacidades puestas a prueba para comunicar, evocar, traducir diferencias culturales y desnaturalizar aquello que pretende presentarse como

“natural”, que casi siempre está en el orden de la dominación.

Apelamos a los sujetos para obtener información, interpretaciones, gestos, etcétera, que son valiosos para la comprensión de una situación; pero, ¿qué destino damos a sus palabras, a sus interpretaciones?, ¿por qué incorporarlas al texto o no? Es decir, ¿por qué brindarles un lugar en los textos?

Para los sujetos, la producción textual que el analista realiza, significa además de la posibilidad de ser escuchados, la de trasladar su experiencia privada al espacio de lo público.

Una oportunidad también de *explicarse*, en el sentido más completo del término, es decir, de construir su propio punto de vista sobre sí mismos y el mundo y poner de relieve, dentro de este, el punto a partir del cual se ven y ven el mundo, se vuelven comprensibles y se justifican, en principio para sí mismos. (Bourdieu, 1999: 536, énfasis en el original)

Este proceso puede provocar en los sujetos un proceso de liberación de estados larvados durante largo tiempo; experiencias cognitivas y emocionales, ambas, penosas y/o reconfortantes.

En las formas textuales resultantes también se modifica el lenguaje del investigador; el so-

ciólogo y el antropólogo se transforman en autores, como diría Julie Taylor en “comunicadores”. La intervención del analista consiste en *publicar* las narrativas de los sujetos que hablan; en quebrar el límite de la interioridad trasponeando la barrera del “sí mismo”, revelando, a través de sus escritos, la subjetividad del hablante. Se convierte así en intermediario entre este y el lector, en traductor de la oralidad, de las expresiones gestuales, de las emociones, de los lapsus, y cómplice de los silencios, de aquellos que emiten su voz en una relación espacio-temporal única que lo incluye a él y al hablante y excluye al lector.

La tarea del analista, por cierto privilegiada, requiere impregnarse de cierta ética que, conforme a un bálsamo, nos evite caer, presos de los deslices de nuestra propia subjetividad, en traducciones incorrectas o, peor aún, en tergiversaciones de sentido. No hay más técnicas para ello que el “autoconocimiento”, la capacidad reflexiva y el control que dan los equipos de trabajo (la presencia de otro investigador que funciona como “control”).

Una tensión puede cobrar relieve; aquella que reside en la representación de la experiencia, tan rica y diversa, que desafía los postulados mismos de la escritura y nuestra propia capacidad de traducción. El sujeto de la

voz, en el texto crece, cobra autonomía —tal como cuentan los escritores que les ocurren con sus personajes—, el sociólogo-autor, se siente “en retirada”.

Este artículo se propone reflexionar precisamente acerca del lugar que ocupan los relatos de los entrevistados en los textos sociológicos, el lugar “cedido” y el lugar “ganado”, así como de la configuración narrativa de las identidades e implicancias personales puestas en juego en la relación de entrevista.

Esta reflexión surge del trabajo de campo realizado en los espacios rurales de la provincia de Tucumán en varias oportunidades contiguas en el tiempo, en el marco de la investigación “El trabajo en el complejo azucarero en Tucumán: trabajadores del surco y campesinos multiocupados”, financiada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONCYT), entre los años 1998 y 2000. Los resultados de la investigación dieron lugar al libro *Tucumanos y tucumanas. Zafra, trabajo, migraciones e identidad*, que escribimos las autoras de este artículo junto a Carla Gras y Daniela Mariotti (2000).

La escritura del libro se convirtió en una experiencia que ameritaba una reflexión; las voces de los actores pujaban por aparecer de un modo distinto al de nuestros trabajos

anteriores. Esas voces habían sido fuente de exploración temática, de testimonios, de “disonancias” (narrativas contradictorias sobre los procesos); de intentos de análisis textuales, pero a la hora de producir el libro, algunas de ellas nos reemplazaban en la tarea de organizar procesos sociales, de mostrar la complejidad de las transformaciones o sus aspectos dramáticos, casuales (contingentes), o de centrar las improntas personales (la singularidad de los sujetos).

Una corta reflexión acerca de estos temas apareció en el *Boletín de Ciencias Sociales* de la Universidad de Buenos Aires, bajo el nombre de “La sociología y las palabras de los otros” (*Boletín de Ciencias Sociales*, 2000). En este nuevo trabajo retomamos aquella línea de reflexión incorporando “casos”: dos mujeres clave en el proceso de investigación, a quienes les fuimos otorgando el espacio que sus voces requerían en el texto: *Rita y Amalia*.

TRAS LAS HUELLAS DE LA POLIFONÍA. NARRACIÓN E IDENTIDAD

Desde que Marcus y Cushman definieron como ficción al “realismo etnográfico”, las críticas se profundizaron y, por consiguiente, se tendió a

buscar la polifonía (despliegue de voces a veces en disputa) y a recrear esta plurivocalidad en el texto. De este modo, podemos asimilar esta nueva concepción acerca del lugar que las voces ocupan en él utilizando el concepto de “novela polifónica” que desarrolló Bajtin (1993), desde una concepción dialógica de la lectura, a partir de la novela rusa de Dostoievski. En ella los personajes poseen voz propia, independiente de la voz del autor, y a menudo, se desarrollan en disonancia.

Frente a los “textos realistas” de principios del siglo XX, los “textos modernos” introdujeron una reciprocidad de perspectivas entre el analista y los sujetos y establecieron nuevos modos de textualidad: el diálogo; el discurso; los textos cooperativos y el surrealismo, entre otros.

En el primer caso, la etnografía se nutre de la experiencia inmediata del trabajo de campo reproduciendo, por ejemplo, pasajes de entrevistas o autobiogramas; en el segundo caso, se estructura el texto en términos de una retórica tratando de capturar el discurso oral en forma textual. Por su parte, los “textos cooperativos” son elaborados por los sujetos y el analista en forma conjunta, y por último, los “textos surrealistas”, a modo de *puzzle*, reproducen pasajes de historias de vida o entrevistas incluyendo al lector en el proceso de interpretación.

El rol del analista implica trasvasar su propia subjetividad en la elección del texto; esto es, seleccionar de modo arbitrario, fragmentos de la vida de los hablantes aceptando con complicidad la construcción artificial de sentidos.

Como sostiene James Clifford (1988), la textualización implica una autoridad interpretativa que excluye el diálogo.

La metáfora del diálogo, que emula la de la “cultura como texto” (Geertz, 1994), ha sido central en las discusiones acerca de la escritura etnográfica. En su artículo “Ethnography and Interpretative Anthropology”, Marcus y Fischer (1986) expresan que el diálogo se tornó central para expresar el modo en que los antropólogos se involucran en los procesos comunicativos con otras culturas. Al respecto citan las ideas más relevantes, como la noción de “tercera persona” de Lacan presente en cualquier conversación o entrevista¹; la yuxtaposición de los conceptos de “experiencia cercana” y

1 Algunos autores han señalado que en la conversación entre dos personas siempre hay, al menos, una tercera que constituye la mediación de la internalización de estructuras culturales inconscientes en el lenguaje, terminologías, códigos no verbales de comportamiento, que conforman el imaginario real y simbólico (Marcus y Fischer, 1986: 31).

“experiencia lejana” desarrollados por Geertz² (1994) y la perspectiva dialéctica del diálogo formulada por Gadamer en la que integra la noción de mediación lacaniana y de yuxtaposición de Geertz (1994: 30-31).

En esta relación dialógica que analista y el/los sujeto/s acuerdan, ambas identidades se modelan recíprocamente; los interlocutores, a pesar de situarse en diferentes posiciones del espacio social, intercambian puntos de vista. En el nivel del discurso, los “otros” son fijados textualmente.

En ese intercambio se plasman experiencias, imágenes, prejuicios, representaciones de la alteridad, pero también la misma situación de investigación puede conducir a que el sujeto perturbe nuestra posición de *traductores*. Es el momento en que se evanece nuestra mediación hermenéutica y el excedente de sentido, instala, de este modo, una tensión entre el autor y su escritura.

2 Conceptos de “experiencia próxima” son aquellos que alguien puede emplear naturalmente y sin esfuerzo alguno para definir lo que él o sus prójimos ven, sienten, piensan, imaginan, etcétera. Conceptos de “experiencia distante” son aquellos que los especialistas emplean para impulsar sus propósitos científicos, filosóficos o prácticos (Geertz, 1994: 76).

Decíamos, párrafos atrás, que la producción textual que elabora el analista puede implicar para los sujetos la oportunidad de *explicarse*. Esta reflexión nos remite a profundizar en el tema de la identidad.

En los momentos en que la situación de entrevista deja de ser tal para convertirse en “entrega emocional” de aquellos recuerdos más íntimos, más emotivos, la voz del entrevistado aparece habitada por una heteroglosia en la que es posible reconocer otra voz, la autobiográfica.

¿Qué avatares recorre la voz del entrevistado hasta llegar al texto que es ofrecido al lector? ¿Cómo interviene el analista en el proceso de alteración de una identidad que se cree indemne?

Para responder a estos interrogantes nos remitiremos a los tres niveles de análisis que explicita Régine Robin (1989): el nivel de lo autobiográfico o personal; el de la “identidad narrativa”, que es la narración que el individuo hace de sí mismo, sobre sí mismo; y el nivel ficcional, que remite a la omnipotencia del escritor sobre lo que él inventa.

En estos tres niveles reside la dificultad de la narración, así como del intento de dar cuenta de la vida de otro, de su trama identitaria construida a través de complejas mediaciones. Allí

es donde se impone el límite de lo decible, donde se cuestiona la legitimidad del texto resultante, donde la vida del otro se torna inasible.

Ello conduce a plantear la tematización de los relatos de vida como acceso directo a la experiencia, que concierne a la palabra del otro recogida a través de las diversas técnicas cualitativas que emplean las Ciencias Sociales: entrevistas, historias de vida, autobiogramas, etcétera.

Este límite opera en el cuestionamiento del (los) lugar(es) en el (los) que se sitúa el analista: el del saber, instalando una situación aparentemente asimétrica; el del otro que escucha; el del otro extraño que se entromete en la vida de los sujetos; el del otro que puede remediar alguno de los males que padecen (falta de trabajo; enfermedad; violencia familiar, etcétera), y tantos otros *otros* que nuestra imaginación pueda albergar.

Es que el analista que se sumerge en aquellos lugares difíciles que describe Bourdieu — las ciudades marginales, las escuelas, las cárceles, los guetos, las zonas rurales en las que abunda la pobreza—, tampoco puede negar que su identidad resulta alterada y que en más de una oportunidad ha cuestionado su práctica profesional, su situación de privilegio frente a la crudeza con que a menudo, y sin vacilaciones, se muestra la realidad en esos lugares.

En síntesis, se trata, como expresa Robine (1989: 73), de “poder promover en la escritura la diversidad cultural que uno promueve”. Como lo sugiere la lógica de la interpretación de textos, “existe una *plurivocidad específica* en el significado de la acción humana. También la acción humana es un campo limitado de interpretaciones posibles” (Ricoeur, 1985).

LOS “CASOS”: TUCUMANAS DE OJOS GRANDES³

RITA...

Los mundos rurales de la provincia de Tucumán también se pueden definir como uno entre otros lugares “difíciles de describir y de pensar” (Bourdieu, 1999: 9), que sintetizan la complejidad y la contradicción inherentes a la condición humana.

Tucumán lleva tras de sí las marcas de un proceso político que ha caracterizado a la sociedad

3 En otro trabajo sobre la historia de mujeres de la provincia parafraseamos el título de la novela de Ángeles Mastretta (*Mujeres de ojos grandes*) utilizando el mismo sentido que la autora impregna a esas mujeres mexicanas, simples, con historias cargadas de significación.

argentina durante gran parte del siglo XX. Nos referimos a la impronta militar y a la intervención del ejército en la escena política nacional a partir de los años treinta, siendo una de las provincias que más ha sufrido las consecuencias de estas intervenciones: el golpe de Estado del año 1966 de Onganía, que implicó el cierre de once ingenios y la migración forzosa de miles de tucumanos, produjo un malestar social que se profundizaba y era expresado a través de las manifestaciones de protesta de las clases medias y de los obreros, así como en la violencia revolucionaria de los movimientos guerrilleros y la consiguiente cruenta represión sintetizada en el “Operativo Independencia” que continuó durante la dictadura militar de los años 1976-1983⁴.

Durante este lapso, Tucumán se vio involucrada en un proceso muy doloroso caracterizado por las desapariciones forzadas de personas, seguidas, a menudo, de muerte: dirigentes sindicales, políticos y universitarios, maestros, militantes...⁵

4 En el año 1975, el general Antonio Bussi se hace cargo del “Operativo Independencia” y el 24 de marzo de 1976 se convierte en gobernador de facto de la provincia hasta fines del año 1977.

5 Atilio Santillán, secretario de la “Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera”

La violencia ejercida desde “el poder” se materializaba en los cuerpos de los individuos de una forma original e inaudita; al mismo tiempo que se iba encarnando en ellos, desatando el miedo y el terror e impregnando los diferentes discursos, marcaba a toda una comunidad e instalaba las contradicciones y paradojas que emergerían con el devenir del tiempo.

La violencia política de aquellos tiempos fue seguida por las crisis, el aumento de los niveles de la pobreza y desocupación de los tiempos actuales: tasas de desempleo que trepan y sobrepasan el 20%, lo que representa unas cien mil personas⁶; una tasa de mortalidad infantil que es más de tres puntos superior a la nacional y, según cifras oficiales, cerca de 250.000

(FOTIA) muere en marzo de 1976 en un confuso atentado. Junto con él se estima que desaparecieron alrededor de doscientos cuarenta dirigentes sindicales desde el régimen de Onganía hasta entonces. Cabe recordar también a Isauro Arancibia, maestro rural y dirigente de CTERA.

6 En mayo de 1999 se registró una tasa de desempleo de 19,2%, cifra que indica que un año después hay 4.000 personas desocupadas más. La fuerza laboral de la provincia asciende a 495.000 personas y la tasa actual de desempleo sería la segunda más alta de los últimos diez años, solo superada por el 21,8% de octubre de 1996 (*La Gaceta*, 20-07-2000).

niños y jóvenes analfabetos (Llanos Navarro, 1997, citado por Giarracca et al., 2000).

Este cuadro nos resultaba familiar después de tantas recorridas por estos mundos rurales, pero logró volver a conmovernos cuando comenzamos a enfocar a los zafreiros (trabajadores rurales de la caña). Aunque parecido, se presentaba distante de aquel otro —el de los campesinos cañeros— ya conocido por nosotras. Los zafreiros se nos mostraban siempre “en tránsito” (venían de..., o iban hacia...), sin anclajes políticos, abandonados por el gremio a las arbitrariedades de la sociedad neoliberal “del mercado”, habitando campamentos sin luz, sin condiciones sanitarias mínimas, con changos desertores del año escolar, etcétera.

En una de esas tantas travesías por parajes inciertos conocimos a quienes, en forma ficticia, nombramos como Rita, Juan y la pequeña Danita.

Juan era zafreiro, quizás uno de los últimos zafreiros⁷, cosechero del limón y migrante. *Rita*, como tantas otras mujeres del campo, había comenzado su trayectoria laboral a los quince

años como empleada doméstica para ayudar a su madre y a su padre enfermo. Luego trabajó como cosechera del limón a la par de los hombres. Amasó empanadas de humita, migró con Juan en algunas ocasiones y fue “remisera”.

De a poco fue convirtiéndose en una persona casi imprescindible en nuestra investigación. Nos acompañó a realizar las primeras encuestas piloto; a rastrear informantes clave en la primera etapa del proceso de investigación. Así es que decidimos integrarla al proyecto como encuestadora, sumando una nueva actividad a su fructífera y flexible trayectoria laboral.

Al principio, tímidamente hizo explícito su miedo de no poder afrontar tal responsabilidad pues conocía que sus compañeros de trabajo —los otros encuestadores— poseían una educación formal alta. Pero el desafío fue enfrentado y terminó destacándose en el grupo de encuestadores por la destreza que logró desarrollar en poco tiempo y por la confianza que recibía de sus vecina/os (migrantes de los Valles Calchaquíes), muchas de ellas, “comadres”. Varias encuestas, a migrantes asustados por la falta de trabajo, no hubiesen podido realizarse sin Rita.

Ella fue adquiriendo protagonismo; contaba la historia de Juan —su marido, el zafreiro— con un detalle que no hallábamos en él. Grabamos muchas horas, observamos muchas

7 La incorporación de la cosechadora integral en los procesos laborales ha reducido la necesidad de mano de obra en la zafra, dada la economización de tiempos y costos. Por ello se alude a los “últimos zafreiros”.

fotos familiares, conocimos cada detalle del proceso de construcción de esa casa de Los Sosa, donde se destinaban los ingresos de Juan como “golondrina”. La casa de Los Sosa fue convirtiéndose, poco a poco, en un lugar en el que pasábamos largas horas, habilitadas por la calidez de esta mujer joven que encontraba en nuestra “escucha” el espacio de conformación de su propia historia articulando etapas, períodos felices con los que no lo fueron. Sus álbumes de fotos familiares (el casamiento, el nacimiento de Danita) fueron dispositivos del recuerdo, de rememorar aquellos momentos — los más felices— frente a nosotras.

Nuestro trabajo requiere que viajemos a Tucumán continuamente, pero nuestra residencia está en Buenos Aires. Por eso, frente a esta disposición de Rita, decidimos emplear la técnica del “autobiograma”, utilizada por Thomas y Znaniecki en *The Polish Peasant in Europe and America*, ya por el año 1919. Las consignas para Rita fueron que escribiera en un cuaderno cuando ella quisiera y que registrara, sobre todo, sus vidas en los períodos de interzafra. Que se tomara todo el tiempo que quisiera.

Rita escribió un relato de su vida que comienza con su encuentro con Juan pero que, por momentos, se remonta a su infancia, su adolescencia dando pincelazos de su familia

de origen y de la familia de su compañero. Además incluyó descripciones de su comunidad, resultado de una pequeña investigación que fue realizando en las distintas instituciones, y agregó un mapa de la zona marcando ríos y carreteras. Nos entregó el cuaderno en un corto tiempo.

Nosotras respetamos su decisión y guardamos aquel cuaderno con sus relatos, dibujos, descripciones, etcétera y seguimos las entrevistas en el período interzafra. Ella había modificado el objetivo de la técnica pero había comprendido el sentido más profundo de la misma. Nosotras mismas, contagiadas del entusiasmo literario de Rita, comenzamos a bosquejar nuestras etnografías ocupando más lugar que en otras investigaciones y deslizando con mayores libertades nuestras propias emociones.

Cuando armamos el libro convencimos a nuestra editora de hallar un modo en que, la descripción de los procesos sostenidos por información de distintos tipos, se diferenciara de las voces de nuestros actores y de nuestras propias voces como etnógrafas. En forma conjunta diseñamos “ese otro libro” que atraviesa, se mezcla y enriquece al discurso más tradicional de la Sociología Rural —necesario en este caso pues el Estado no guarda ningún tipo de estadísticas sobre el sector de los trabajado-

res rurales de la caña y ni siquiera el sindicato podía establecer el grado de formalidad en los vínculos laborales—. Habíamos logrado tales datos con la rigurosidad estadística que nos da aquella vieja formación cuantitativa pero queríamos transmitir, además, los mundos culturales que solo a través de la experiencia y vivencias de los investigadores se pueden recuperar. La tarea con el material etnográfico y con las entrevistas se nos presentaba como una tarea propia de decidir su uso, su ubicación en el libro, pero con el cuaderno que contenía la historia escrita por Rita se nos presentaban algunos interrogantes.

En efecto, teníamos que tomar una decisión: ¿qué destino le otorgábamos a la autobiografía de Rita?, ¿fragmentarla como hicimos con sus entrevistas o con otras entrevistas? ¿Usarla como testimonio, interpretándola? La primera e importante decisión fue que su autobiografía habilitaba una comprensión del mundo de las mujeres jóvenes tucumanas ligadas a los jornaleros migrantes que ningún otro material podría lograr. En esa historia singular, de casi niña trabajando en el servicio doméstico de ciudades desconocidas, en sus encuentros y desencuentros con su compañero, en su valoración positiva a sus propias migraciones, hallamos un modo expresivo complejo, de dichos

y contradichos que la vida, en sus intrincados despliegues preparó para esta joven de los sectores subalternos tucumanos. Y en tal historia se condensan muchas otras historias —parecidas y diferentes— de jóvenes mujeres migrantes, con identidades en tránsito, desafiando al “lugar” y buscando esa dimensión que apela al “espacio” en su significación de “libertad” (Tuan, 1997). Cuando nos convencimos de que Rita sería nuestra co-autora nos pareció necesario su propia opinión y autorización. Ella autorizó sin dudar pero prefirió que el relato tuviese unidad, que llegara de modo directo, sin intervenciones de nuestra parte. Le recordamos que en algunos tramos se recuerdan aspectos dolorosos e íntimos (un aborto, por ejemplo) pero ella, de algún modo, catalizando su sufrimiento pasado a través de la palabra, nos repitió que ya formaba parte de su relato escrito.

Así, el texto autobiográfico⁸ está presentado completo, casi como un capítulo del libro, respetando su redacción y modismos. Solo seguimos las indicaciones del programa del procesador de textos con relación a la ortografía, del mismo modo que se hace con cualquier trabajo en nuestros días.

8 Ver Giarracca, Gras, Bidaseca y Mariotti, 2000.

En síntesis, Rita pasó de ser entrevistada, y luego encuestadora a ser *autora* y en su texto pudo plasmar los momentos más dramáticos y ricos de su vida. La escritura, su compromiso puesto en describir “Los Sosa”, la fue convirtiendo en un personaje central. De este modo, el *espacio biográfico* que Rita configuró inintencionadamente, fue necesariamente incorporado como un elemento de transmisión, de comunicación de los mundos pocos conocidos por los lectores urbanos.

AMALIA...

La segunda experiencia que presentamos aquí, es la relación que sostuvimos con *Amalia Arancibia*. Ella no dudó en aparecer con su nombre, pues comparte ese respetado apellido con sus hermanos, reconocidos gremialistas docentes, asesinados por la dictadura. Nuestro interés en ella se inició por su condición de maestra rural jubilada que nos podía conducir al pasado. Efectivamente, con su fabulosa memoria durante varias horas, en esa entrañable casa familiar de Monteros, se remontó una y otra vez a la vida rural de los zafreiros de décadas anteriores. Ella conoció la pobreza de los niños descalzos de los zafre-

ros, la mayoría migrantes que venían a trabajar en la cosecha de la caña de azúcar, habitando sitios construidos con malojas verdes y pisos de tierra.

Ella también fue maestra en los tiempos de la dictadura, la etapa más dramática de su vida. Sus hermanos Isauro y Arturo habían sido asesinados el 24 de marzo de 1976 cuando volvían del entierro del compañero y amigo, secretario de la Federación de Obreros Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), Atilio Santillán, también asesinado dos días antes. La muerte rondaba por aquellos días los lugares de los sindicalistas luchadores (Isauro había sido el fundador de CTERA).

Amalia, como antes Rita, fue adquiriendo mayor protagonismo en la investigación, pero por otras causas, sin duda más dolorosas. Cada entrevista con ella nos deparaba mayor conocimiento del mundo rural de otras décadas, de suma importancia en nuestro trabajo para comprender la profundidad de las transformaciones. Pero fundamentalmente, Amalia nos introducía en las huellas del terror, en situaciones extremas en las que los significantes irrumpían desestabilizando la experiencia y marcando la fractura del relato. Por su alto contenido emotivo, porque develaba lo ominoso, lo brutal de nuestra condición humana.

Su relato detallado sobre la muerte de sus hermanos, la violencia desplegada desde el terrorismo de Estado sobre la trama familiar, los detalles de otras desapariciones, muertes abstractas, se hacían presentes en su narración. Si bien se trataba de un tiempo lejano, cobraba actualidad en el relato, se hacía más próximo cuanto más se lo describía.

Las entrevistas con Amalia nos remitían a la memoria como construcción colectiva, obligándonos a detenernos en una historia que, desde la práctica sociológica, nos interpela a salir del encierro y a honrar a los muertos. Los fantasmas de la muerte, de los cuerpos mutilados, las presencias de las desapariciones transitaban por las entrevistas.

Rita, con sus 29 años, representaba el presente, con sus angustias económicas, sus iras hacia el sindicalismo corrupto, sus ganas de pelearle a la vida. Amalia nos recordó que este presente tiene un pasado y que todo proceso social en Tucumán —como en la Argentina toda— está atravesado por él.

Amalia también tiene su lugar privilegiado en el libro, pero, a diferencia del caso de Rita, tuvimos que cortar, fragmentar su relato, hacerlo aparecer en trozos y en esa decisión se fueron muchas y complicadas horas de trabajo. ¿Cómo cortar? ¿Qué dejar, qué sacar? Sabíamos que en

este caso no podíamos delegar la responsabilidad (como cuando le consultamos a Rita acerca de su biografía). Sabíamos también que las largas horas de grabación con Amalia no podían ser presentadas en el libro (ameritaban un libro aparte). La decisión, en este caso, se basó en mostrar todos los matices de la historia contada por Amalia: el horror (la represión), el dolor por la muerte de un chango, la pobreza, pero también las fiestas, los bailes, las alegrías, el recuerdo del compromiso de aquellas otrora jóvenes maestras rurales, vacunando, enseñando y asistiendo a los bailes de final de zafra.

El relato de Amalia nos permitió abordar el tema de la dictadura y la violencia en Tucumán desde los relatos de los sujetos. Mostrar como desde los problemas económicos actuales (la desocupación de los zafreiros) hasta muchas enfermedades de la población de mayor edad, prácticas cotidianas, el hambre de los niños, etcétera, remontan sus razones a ese horroroso período.

Transmitir los significados de la violencia es una de las tareas más complejas del etnógrafo, nos dice Julie Taylor, quien abordó este tema, justamente, para Tucumán:

Igual que el arte, la vivencia de la violencia no encuentra, para mí al menos, expresión en discursos

racionales o logocéntricos. Justamente una de las secuelas de la violencia que marca más profundamente a la población que la ha sufrido es el esfuerzo, frente a un sinsentido, de reformular la experiencia para que tenga sentido, y es una traición a la vivencia misma. A la vez la naturaleza extendida y difusa de la violencia la hace inexplicable de todas las otras experiencias de vida con las cuales está plasmada. Y entonces al explicar la violencia se deja de lado todas las otras cosas con las cuales está trenzada. Tan es así que cuando estalla dentro del contexto de lo cotidiano parece una contradicción total, y esta naturaleza, o sea, la contradicción, es justamente lo que tenemos que conservar, pero ¿cómo? En un artículo antropológico se supone que no podés tener una contradicción, una paradoja — aunque los antropólogos posmodernos hablan de paradojas— pero no hablan de nada en concreto, entonces es un problema... Lo que yo diría es que lo que estaba buscando aquí es una formulación de textos suficientemente fuertes, del sufrimiento que es la secuela de las rupturas violentas que irrumpen en la vida cotidiana [...]. Tenemos que poder volcar, de alguna manera, a gente que no haya vivido, o no lo haya querido reconocer cuando lo vivió, las contradicciones extremas que pueden encontrar su expresión en técnicas literarias y artísticas, o sea hay arte sobre la violencia. (Taylor, 1993: 15)

Es bien sabido que fueron los artistas quienes advirtieron desde la plástica aquello que po-

cos se atrevían a imaginar en los años setenta; es bien sabido, también, que la condena más publicitada internacionalmente al tirano venido a gobernador demócrata, provino del silencio de una voz y de un canto, los de Mercedes Sosa.

La vida cotidiana de Amalia durante la dictadura, cuando ella sospechaba que la vigilaban pero debía seguir su tarea de maestra que la ponía en contacto con niños que aún no comprendían las mentiras de sus padres con el fin de protegerlos, condensa las contradicciones de la naturaleza de la violencia. El relato de Amalia, “Arancibia” (con la carga significativa que tal apellido ostenta en Tucumán) por un lado, y maestra sensible y protectora por el otro, nos muestra más que cualquier otro material lo ominoso apropiándose de los espacios políticos y sociales pero también la ternura y la tenacidad en la búsqueda de justicia, como las más eficaces apuestas a la vida, capaces de sostener a los sujetos que padecen. En tal sentido, la voz de Amalia en el texto permite ubicar de modo complejo la violencia de la dictadura militar y sus actuales secuelas. Sus relatos inhibieron cualquier interpretación posible de nuestra parte, cualquier intento de llevar racionalidad allí donde no existe.

REFLEXIONES FINALES

Como podemos observar, las estrategias de incorporar la voz de los hablantes en el texto son variadas y creativas; no obstante, como expresa Bourdieu (1999: 540), “transmitir tales o cuales palabras no es dar realmente la palabra a quienes habitualmente no la tienen”.

Unas décadas atrás, los intelectuales solían aplicar una estrategia que enunciaban como “otorgar voz a los *sin voz*” (las minorías étnicas, los pobres, los campesinos, etcétera) dentro del espacio textual, a modo de una “contramemoria”.

En la actualidad, no se trata de una concesión que el sociólogo establece con los sujetos, sino que la voz de los hablantes es parte constitutiva del discurso sociológico, *necesitamos* a los entrevistados en los abordajes, en las prácticas investigativas, en los textos.

Las voces de los sujetos cobran cada vez mayor protagonismo, se transforman en autores o en co-autores de los analistas, como vimos sucedió con Rita y Amalia; crecen en el texto, se autonomizan, fijan sus identidades en él.

Acercarnos a comprender el mundo que nos rodea, implica persuadirnos de que la esencia de la ciencia social se basa en la comprensión de lo significativo, penetrando hermenéuticamente en formas de vida, mundos laborales,

políticos, culturales a través de acceder al testimonio de los miembros participantes y logrando la “fusión de horizontes” gadameriana entre la cultura y el intérprete.

Se trata de captar discontinuidades, fracturas, contradicciones, los aspectos inexplicados, y de lograr una representación compleja y múltiple, fundada en la expresión de las mismas realidades en discursos diferentes, a veces irreconciliables y abandonar el punto de vista único en beneficio de la pluralidad de puntos de vista coexistentes y a veces irreconciliables (Bourdieu, 1999: 9).

El libro mencionado (Giarracca, Gras, Bidasca y Mariotti, 2000) representa nuestra decisión de asumir “las co-autorías” de los actores —fraccionando sus narrativas lo menos posible, respetando sus modos de expresar las experiencias de un presente y un pasado— y de presentar sus voces como textos autónomos. Creemos que, si bien nosotras desde el discurso sociológico pudimos acercar al lector los mundos laborales rurales fragmentados, flexibilizados, empobrecidos, etcétera, solo los sujetos de la experiencia pueden dar cuenta de esos “lugares difíciles” en sus dimensiones existenciales profundas.

Rita puede, desde su propia historia, narrar lo que les ocurre a los sujetos cuando

deben separarse todos los años por las migraciones estacionales, cuando la pérdida de un embarazo debe pasarse sin el compañero, cuando con la migración también se logran crecimientos personales. Las experiencias y palabras de Amalia Arancibia, que abrigaban la tragedia provincial, ponen en el texto sociológico, mejor que nada y que nadie aquello que no hay que olvidar, aquello que atraviesa los procesos sociales.

Estas propuestas metodológicas están articuladas a un conocimiento que se genera consciente de una doble transición, paradigmática y sociocultural, que no aspira a conformar una gran teoría, sino como sostiene De Sousa Santos (2000) aspira a una teoría de la traducción (de diferencias con inteligibilidad) “que sirva de soporte epistemológico a las prácticas emancipatorias, todas ellas finitas, incompletas y por eso apenas sustentables con la condición de estar ligadas a redes” (ibídem: 31). Redes, agregamos, en la que los grupos que generamos conocimientos formamos parte en una relación horizontal y democrática con los actores de la acción en este complejo país del siglo XXI.

BIBLIOGRAFÍA

- Bajtín, M. 1993 *Problemas de la poética en Dostoievski* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Boletín de Ciencias Sociales* 2000 (Buenos Aires) N° 41.
- Bourdieu, P. (dir.) 1999 *La miseria del mundo* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Clifford, J. 1988 “On ethnographic self-fashioning” en *The Predicament of Culture* (Cambridge: Harvard University Press).
- De Sousa Santos, B. 2000 *A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência* (San Pablo: Cortez).
- Ferro, M. s/f “El cine, ¿un contraanálisis de la sociedad?”, copia fotostática.
- Geertz, C. 1973 *La interpretación de las culturas* (México DF: Gedisa).
- Geertz, C. 1994 *Conocimiento local. Ensayo sobre la interpretación de las culturas* (Barcelona: Paidós).
- Giarracca, N., Gras, C., Bidaseca, K., y Mariotti, D. 2000 *Tucumanos y tucumanas. Zafra, trabajo, migraciones e identidad* (Buenos Aires: La Colmena).
- Hastrup, K. 1992 “Writing Ethnography. State of the art” en Okely, J. y Callaway, J.

- (eds.) *Anthropology and Autobiography* (Londres: Routledge).
- Heller, A. 1991 "De la hermenéutica en las ciencias sociales a la hermenéutica de las ciencias sociales" en *Historia y futuro. ¿Sobrevivirá la modernidad?* (Madrid: Península-Ideas).
- Insdorf, A. 1999 *Doubles lives, second chances. The cinema of Krzysztof Kieslowski* (Nueva York: Mairamax).
- Llanes Navarro, A. 1997 "La educación en un ámbito regional de subdesarrollo: el Noroeste Argentino - Tucumán" en Bolsi, A. (dir.) *Problemas poblacionales del Noroeste Argentino (contribuciones para su inventario)* (San Miguel de Tucumán: Instituto de Estudios Geográficos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Junta de Andalucía).
- Long, N. y Long, A. 1992 *Battlefields of Knowledge* (Londres: Routledge).
- Long, N. y Villarreal, J. 1996 "Exploring development interfaces: From the transfer of knowledge to transformation of meaning" en Schuurman, F. (ed.) *Beyond the Impasse* (Londres: Zed Books).
- Marcus, G. y Fischer, M. 1986 *Anthropology as Cultural Critique* (Chicago: University of Chicago Press).
- Ricoeur, P. 1985 "La acción entendida como un texto" en *Hermenéutica y acción* (Buenos Aires: Docencia).
- Robin, R. 1989 *Identidad, memoria y relato. La imposible narración de sí mismo* (Buenos Aires: Publicaciones del CBC, UBA).
- Taylor, J. 1993 "La experiencia como método antropológico", seminario en el Instituto Gino Germani, copia fotostática.
- Thomas, W. y Znaniecki, F. 1919 *The Polish Peasant in Europe and America* (Boston: Gotham Press).
- Tuan, Yi-Fu 1997 *Space and Place. The Perspective of Experience* (Minnesota: University of Minnesota Press).

OTRAS FUENTES

Diario *La Gaceta* (Tucumán).

NOTAS SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO*

Algunas disciplinas científicas se caracterizan por un proceso de investigación en el que es imprescindible incluir “salidas al campo”. Con este polisémico nombre se hace referencia a la necesidad de los investigadores de trasladarse a otros escenarios diferentes de los laboratorios o institutos de investigación donde se supone que habitualmente realizan sus tareas, con la finalidad de recoger datos, registrar situaciones, participar —en el caso de las Ciencias Sociales y Humanidades— en situaciones reales de la vida de las poblaciones estudiadas. Nadie conoce mejor la necesidad de contar con financiamientos para salir “a campo” que los geólogos, arqueólogos, paleontólogos, antropólogos, geógrafos y sociólogos. Muchas

veces en el espacio del sistema científico no se encuentra una cabal comprensión por parte del resto de las disciplinas científicas: ¿Para qué salir tanto tiempo de los lugares habituales de trabajo? ¿Para qué incrementar tanto los gastos de investigación con estas salidas?

Como dice Bernardo Mançano Fernandes en la introducción de este trabajo, muchas veces se piensa que una sólida formación teórica por sí sola puede convertirnos en buenos intérpretes de la realidad que nos rodea y que no hace falta conocer las realidades particulares para saber, por ejemplo, qué son los campesinos y cómo actúan en nuestros países. Es verdad que si no partimos de una sólida formación teórica no obtendríamos los resultados esperados aunque conviviéramos días, meses, e incluso años con una comunidad campesina. Tal vez obtendríamos una excelente experiencia personal (que no es poco) pero nada muy relevante para aportar a los estudios campesinos. Si no sabe-

* Giarracca, N. 2006 “Notas sobre el trabajo de campo” en AAVV *Cuando el territorio es la vida: la experiencia de los Sin Tierra en el Brasil* (Buenos Aires: GEMSAL / Antropofagia).

mos interrogar a la realidad, esta no habla por sí misma (como muchos empiristas estiman). La combinación de teoría y “experiencias” sobre una situación social son, a nuestro juicio, los aspectos primordiales para la generación de un conocimiento científico. Escribimos “experiencias” entre comillas pues deseamos dejar abierta los diversos sentidos del término, las variadas formas de acercarnos a las realidades concretas. Como solemos decir en nuestros seminarios de investigación, en el momento de pensar las metodologías de una investigación así como en la interpretación final de la misma, se ponen en acto la formación y la solidez del investigador pero también entra en juego su capacidad creativa.

Todos los investigadores involucrados en estas relatorías sobre las experiencias del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), habían pasado por un entrenamiento teórico acerca de las temáticas del campesinado, de los movimientos sociales y en particular del MST. Desde los más experimentados hasta los más jóvenes. Es decir, llegaron a los asentamientos y campamentos con muchos insumos: teoría, lecturas, investigaciones previas sobre el movimiento (en el caso de J. Montenegro), etcétera. Esta preparación es una condición necesaria pero no suficiente para lograr “un buen

campo”. En efecto, un trabajo de campo en las Ciencias Sociales está organizado en base a muchos aspectos que hacen, básicamente, a la comunicación humana. La entrevista es uno de nuestros principales dispositivos pero existen muchos otros que en conjunto podemos definir como los “elementos de la intervención”.

Cuando hablamos de intervención explicitamos la conciencia acerca del involucramiento en la situación por parte de los investigadores: entramos en interacciones densas y debemos manejar nuestras propias simpatías, empatías, esas energías que fluyen en los encuentros humanos, sobre todo en los primeros encuentros entre las personas. Comienza con las imágenes, las miradas, el reconocimiento del otro y de uno mismo en él. El reconocimiento de los escenarios, modos de percibirlos e integrarlos a la situación de interacción. Luego está la palabra, el escucharse, la presentación, el momento de lograr construir, o no, un espacio democrático de encuentro, de presentarnos en nuestras verdaderas funciones (investigadores, universitarios) pero sin pretender una connotación jerárquica en virtud de ellas. En nuestras palabras y en las de los entrevistados, desde el comienzo, se juegan no solo lo que decimos sino también lo que no decimos; esas experiencias que anduvieron en nosotros

y en ellos, que nos atravesaron y constituyeron como sujetos sociales. Experiencias que no necesariamente se expresan con las palabras sino que a veces solo se necesitan gestos, movimientos, miradas, e incluso silencios. Luego, generalmente, comienza el diálogo. La capacidad de escuchar, conectarse con el entrevistado y que él pueda confiar en nosotros. Mantener una actitud atenta y posibilitar que nuestra capacidad de percepción se potencie, ensanchando el horizonte y el contexto de la situación. La práctica de esta actitud, con el tiempo, puede llegar a ampliar nuestra capacidad de percepción, de conexión con quienes deseamos conocer y hacer más interesantes los modos en que nos damos a conocer y actuamos para nuestros entrevistados.

Tenemos varios aportes publicados acerca de la entrevista en situación de trabajos de campo muy similares a los que aquí se presentan (Giarracca et al., 1995, Giarracca y Bidaseca, 1999, 2005)¹. La entrevista es un dispositivo

etnográfico, un escenario configurado en situación que trasciende el registro de lo observable y genera un espacio intersubjetivo. Los relatos se tornan interacciones cargadas de sentido que van mucho más allá de las palabras, las miradas, los gestos, lo no dicho. El sentido de lo narrado se interpreta a partir de la “estructura de relevancia” que organiza la percepción activa del sujeto. De allí que los gestos, lapsus, silencios tengan tanta significación como las palabras. “En el mundo intersubjetivo del trabajo de campo, el etnógrafo y los informantes están atrapados en redes de significación que ellos mismos han tejido” (Rabinow, citado por Hastrup, 1992: 119).

Es habitual encontrar en la bibliografía especializada la idea de que en toda entrevista se producen “traducciones” que van y vienen entre los personajes de la situación; son momentos donde nuestra mediación hermenéutica como entrevistador se evanesce para dar lugar a excedentes de sentidos que producen momentos de tensiones. Lacan sostiene que en una conversación entre dos personas siempre existe al menos una tercera que constituye la mediación de la internalización de estructuras culturales inconscientes en el lenguaje, terminologías, códigos no verbales de comportamientos, que conforman el ima-

1 También tenemos publicada una larga reflexión sobre el trabajo de campo en las zonas de campesinos cañeros, las peripecias con técnicas como la muestra estadística y la encuesta en el contexto de una investigación que incluyó técnicas cuantitativas (Véase Giarracca y Aparicio, 1995).

ginario real y simbólico (Marcus y Fischer, citados por Giarracca y Bidaseca, 2005).

Si lo dicho en el párrafo anterior vale para cualquier situación de entrevista, es aún mucho más importante para nuestro trabajo donde el idioma materno de los entrevistadores difería con el de los entrevistados. En efecto, un elemento importante en este campo fue la cuestión del lenguaje. El portugués y el español son dos idiomas muy cercanos pero distintos y si bien en todos los casos se daba una buena comprensión del idioma local por parte de los investigadores, la lengua se convertía en un elemento de tensión en la situación de entrevista. La excepción fue Jorge Montenegro que por los años de residencia y trabajo en Brasil con estas poblaciones, superaba este problema y muchas veces actuó de traductor en sentido literal. Y el resto, ¿cómo superarlo? Creemos que lo superamos por el deseo de los entrevistados de transmitir sus experiencias a visitantes latinoamericanos, y por nuestro propio deseo de comprender este complejo mundo campesino. Lo superamos con la ayuda de los gestos, los movimientos y energías corporales que pueden ser instrumentos de comunicación tan útiles como las palabras. Sin embargo fuimos conscientes de que en todo momento se formaban situacio-

nes de encuentros culturales que se podían convertir en escollos para el diálogo o de los que podíamos sacar provecho, tanto los entrevistadores como los entrevistados. El lenguaje es la cultura y nuestro esfuerzo por hacernos entender y comprender también tenía ese sentido.

Pero estos “trabajos de campo” no se basaron exclusivamente en las entrevistas (que hubo muchas) sino en otro tipo de experiencias: compartir comidas, recorrer los campamentos, los asentamientos, compartir un curso de formación, conocer las cooperativas y los emprendimientos, etcétera. Compartir un “tiempo extraordinario” por un lado pero también intervenir en los “tiempos cotidianos” (por ejemplo la merienda de los niños en el asentamiento “Mario Lago”). Esta “otra” experiencia no siempre es posible en los trabajos de campo, muchas veces nuestros entrevistados interrumpen sus trabajos agrarios para atendernos y no es posible prolongar el encuentro por mucho tiempo. Los “tiempos extraordinarios” fueron posibles por varias razones pero, en el primer caso, básicamente por la visita programada del grupo latinoamericano.

LO QUE VINIMOS A PRESENTAR

Después de un “trabajo de campo” se llevan a cabo varias tareas: 1) el informe de campo donde se cuenta día a día los encuentros, las visitas, el material grabado y el que no lo está, las anécdotas, las percepciones, las sensaciones, etcétera; 2) las desgrabaciones de las entrevistas o el desarrollo de las mismas cuando no se usó grabador; 3) la organización del material que se recogió (periódicos, materiales de cooperativas, organizaciones, etcétera). El informe de campo, por muchos años, fue el material donde el investigador podía escribir sus percepciones, experiencias subjetivas, sus temores y alegrías en relación con los sujetos del encuentro. Luego, en los trabajos finales de investigación esos registros raramente aparecían ya que se los consideraban una intromisión subjetiva incompatible con el principio de “objetividad” que se debía respetar. Con la crisis de los paradigmas estructuralistas y sus consabidas metodologías cuantitativas, los informes de campo comenzaron a ocupar un lugar significativo en la reconstrucción e interpretación de las situaciones analizadas.

El diario de Malinowski, escrito en polaco intercalando frases en inglés, fue escrito en Nueva Guinea y las islas Trobiand durante los

años 1914-1915 y 1917-1918. Fue descubierto después de su muerte en 1942 y hubo que esperar otros veinticinco años para que fuera publicado. Geertz (1989) afirma que el diario de Malinowski es perturbador; y a mi entender perturba porque devela los complejos sentimientos y sensaciones del “estar allí” de un europeo constituido en los paradigmas de su tiempo. Pero esta revelación, en la actualidad es casi más importante que el resultado mismo de aquellas investigaciones, y esta subjetividad del etnógrafo nos permite dar cuenta del papel eurocéntrico y colonizador de las tempranas Ciencias Sociales.

Otra función interesante de las relatorías o diarios de campo es el registro inmediato de acontecimientos a los que volveremos si se trata de una investigación de larga duración. Sabemos que la memoria es subjetiva, selectiva, fragmentada. Muchas veces estos registros de los investigadores pueden ayudar para reconstruir una situación de algunos años atrás².

2 Con los campesinos cañeros trabajamos más de una década y nos convertimos en testigos de sus problemas durante la etapa neoliberal de los noventa. También de sus resignaciones y luchas. De este modo pudimos comprobar como una movilización numéricamente pobre contra una política gubernamental se con-

El material que aquí presentamos son informes o relatorías de campo. La pregunta que cabe es: ¿por qué presentarlos en una publicación? ¿Por qué no dejarlos como material para los estudios campesinos dentro de los proyectos de investigación grupal o individual? La decisión de publicar estas relatorías se relaciona, como decíamos antes, con la valorización que deseamos dar a este tipo material; con la significación que, por sí mismo, este material posee dentro del procesos de investigación y de producción de conocimientos. Pierre Bourdieu en sus últimos tiempos solía repetir que “la gente tiene cosas muy importantes que transmitirnos” (que no se contradice con aquel otro Bourdieu joven que recomendaba desconfiar de la veracidad del actor, ponerla en duda). Para escuchar esas cosas importantes debemos estar preparados y esta preparación no solo se da en el registro teórico y metodológico sino en el humano. El punto de partida debe ser, por ejemplo, que sabemos escucharnos y comprendernos a nosotros mismos con la misma rigurosidad y

vertía, con el pasar de los años mediante el recuerdo de los actores secundarios, en “una gran movilización”. Llegamos a leerles nuestras propias descripciones y resultaron interacciones muy interesantes.

duda radical con la que encaramos la escucha del otro. La relatoría, el informe de campo (o el diario de Malinowski) muestran mejor que cualquier otra herramienta este principio, develan al cientista social como persona en interacción con otras personas. Por todo esto decidimos publicar estos relatos.

En los informes y relatorías se explicitan no solo los escenarios que rodean los encuentros sino los momentos del “pacto fiduciario” donde el entrevistado “es un ser humano que confía” (Ferrarotti, 1990: 123) y entre ambos se va configurando un espacio de respeto mutuo y una empresa cognoscitiva común. Este espacio común no es un camino de una sola dirección: nuestro interés en conocer los entrevistados. Como vimos en estas relatorías, en los encuentros se dan intercambios de información entre ambas partes y muchas veces les contamos acerca de nuestros trabajos y ocupamos tiempo para poder argumentar por qué nos interesamos sobre ellos. No fue el caso en estas visitas: los acampados y asentados del MST tienen mucha conciencia de que están generando una organización que interesa en muchas partes del mundo.

También están los momentos de las fotografías, las filmaciones y todos esos nuevos dispositivos visuales de la etnografía que despiertan

tan la curiosidad de las personas de todas las edades. Compartirlas como hizo muchas veces Douglas Mansur en estos campos es una forma de democratizar conocimientos. Regresar las fotos a los propios actores es un principio ineludible. Esta publicación está acompañada por las fotografías de los lugares y las personas que conocimos. Como etnógrafos conscientes de toda la complejidad y riqueza de estos procesos, las imágenes se convierten en dispositivos de primer nivel. La posibilidad de presentar ambos registros abre un campo de reflexión sobre estos viajes que no solo cobran valor en sí mismo sino que se convierten en medios muy útiles para seguir estos procesos de investigación sobre los movimientos sociales latinoamericanos.

En muchos de nuestros trabajos el lector interesado encontrará interpretaciones más elaboradas sobre estos Movimientos Sociales. Estos trabajos que presentamos son una invitación a acompañarnos en estas travesías territoriales pero también emocionales que raramente aparecen en los libros o publicaciones finales. De estas travesías extraemos materiales, información pero, básicamente, una experiencia insustituible para nuestra formación y para una significativa reflexión académica-política.

Por último, un comentario sobre el contexto de estos trabajos. En el primero sobre el MST de San Pablo se trató (como muy bien lo explica Bernardo Mançano Fernandes en la introducción) de un encuentro del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO. No obstante lo que el colega no dijo es que la práctica de complementar los encuentros de discusión de trabajos con las visitas de campo en los distintos países en los que nos encontramos, fue una idea suya. Como buen geógrafo hizo que territorializáramos estos encuentros tanto en sentido simbólico como en un conocimiento denso de las problemáticas agrarias y campesinas de cada país. Luego estuvimos en Tarija, Bolivia y el ritual volvió a repetirse, conociendo las experiencias del movimiento campesino tarijeño. El trabajo sobre el MST de Río Grande del Sur fue realizado por estudiantes de grado y posgrado en el marco de un encuentro académico en Porto Alegre. Acostumbrados a las visitas a los mundos campesinos, no desearon perder una oportunidad que no se da muy frecuentemente. Vale aclarar que todos, los colegas del GT de CLACSO como los estudiantes, son académicos formados en los estudios rurales y con buenos conocimientos de la problemática brasileña.

NUESTRAS EXPERIENCIAS CON EL REGISTRO FOTOGRÁFICO³

Desde los inicios de la formación del equipo de investigación (1984, cuando regresé al país) comenzamos a registrar con la cámara fotográfica nuestros “trabajos de campo”. Lo hacíamos con las máquinas comunes y con el permiso de los entrevistados. Ese conjunto de fotografías forma parte de los recuerdos del grupo de trabajo, como diría Bourdieu, “recuerdos de familias”.

Luego, en una ocasión (no recuerdo la razón) buscamos fotos en el archivo fotográfico del diario *Clarín* y nos impactó comparar aquellas imágenes del Tucumán cañero de los años sesenta o setenta con las que habíamos registrado en nuestros viajes: los caballos que tiraban a los carros helvéticos en los que se transporta la caña habían desaparecido así

como muchos cargaderos (lugares donde se depositaba la caña). Las fotos complementaban los recuerdos de los viejos dirigentes sobre “los tiempos de antes”. Allí comprendimos el valor de la fotografía como registro histórico.

Después comenzó la etapa de diseñar las tapas de nuestros libros y apareció la necesidad de la “buena imagen”, tanto desde la mirada artística como técnica. Aproveché la ocasión y comencé a considerar el registro fotográfico como elemento propio de la investigación. Para eso necesitaba gente que garantizara los dos aspectos —el técnico y el artístico— y que pudiera trabajar con nosotros en un viaje a la provincia con la naturalidad que los investigadores vamos adquiriendo con la experiencia de campo. Además era imprescindible que ese trabajo no significara un gran desembolso para nuestro financiamiento.

Se lo propuse a Julián Teubal, mi hijo mayor que se dedica al arte y que comenzó su carrera con la fotografía artística. Él aceptó. Luego viajó Jitka Teubal, su mujer de nacionalidad checa, también fotógrafa. Finalmente, Daniela Mariotti, Paula Gutiérrez (investigadoras) y casi todos los integrantes del grupo se hicieron cargo de la tarea. Últimamente sumamos el video como forma de registro y ya tenemos un bello material sobre Formosa.

³ Este apartado que consideré oportuno incluir en estas notas, fue realizado hace un tiempo respondiendo a una entrevista que nunca se utilizó. Por lo tanto está escrito en primera persona del singular. Podría haberlo cambiado para darle coherencia gramatical con la primera parte del trabajo pero decidí mantenerlo para darle ese matiz testimonial que, finalmente, todo este apartado tiene. (NG)

El viaje de Julián fue breve, aunque él se tomó su tiempo para estar con esa gente que de algún modo ya conocía a través de mis relatos y trabajos. Elegí para comenzar una cooperativa de mujeres con la que veníamos trabajando hacía muchos años. Fue bien recibido por personas que mantienen —después de muchos años de trabajo compartido en la provincia— un lazo de confianza con nosotros. Julián se tomó tiempo para comenzar el trabajo; tomó mate con Elena, la anciana campesina, y esperó el momento oportuno para sacar la cámara. Allí disparó su vocación de “capturador de almas” y rollo tras rollo fue registrando ese mundo campesino que conoció desde muy pequeño acompañándome en los trabajos de campo por Latinoamérica. Julián, como todos los hijos de las antropólogas o sociólogas rurales, me había acompañado de pequeño a varios “viajes de campo” por las zonas campesinas de México.

El resultado de este trabajo dio lugar a exposiciones fotográficas, a imágenes que se mezclaron con la plástica y que integran un libro de arte de su autoría (Teubal, 2000), tapas de libro de mis colegas, galería de fotos en nuestro lugar de trabajo y, sobre todo, imágenes de los miembros de las familias campesinas de distintas dimensiones que regresaron al lugar de origen. Las llevé yo misma, ya sin el fotó-

grafo, en grandes sobres que presagiaban los tamaños de las imágenes. La comunidad es grande y yo no contaba con fotos de todos ni para todos. Estaban las imágenes de los ancianos —Elena, Don Pancho y Don Sánchez— de algunas de las mujeres, pioneras de la cooperativa y de casi todos los niños. Tomé la decisión de mostrárselas primero a los ancianos, sobre todo a Elena, esa inteligente mujer que es el centro de ese conjunto de campesinas luchadoras. Las desparramé sobre una mesa del patio, con las gallinas alborotadas alrededor nuestro y con Don Pancho, su marido, bajando las naranjas que terminan en nuestros vehículos para acompañar el viaje de regreso. Elena miró las fotos, tomándose el tiempo del mundo, se vio ella, sus hijas y vecinas, sus nietos, el grupo de niños, una y otra vez. Finalmente me abrazó y me pidió que abrazara a mi hijo por ella. No me pidió ninguna, yo le ofrecí que eligiera y delegó la tarea en una de sus hijas. Dos de ellas viven en la misma casa de la madre y otra en una de las viviendas de la cooperativa. Todas quisieron fotos de Elena y negociaron el reparto. La escena tenía un sentido trascendente y pude notar que Elena también lo percibía pero guardaba silencio.

Después de esta escena en casa de Elena, fui a las viviendas de la cooperativa para repartir

el resto del material. Cuando regresé a despedirme de Elena, había preparado una planta en una precaria maceta y me pidió que se la llevara, en su nombre, al fotógrafo.

Los niños reaccionaron de modo diferente, me rodearon, me dificultaron la tarea de encontrar una mesa, hablaban todos juntos y cuando logré desparramar el material sobre una mesa, se ubicaron cada uno cerca de su imagen. Para muchos fue la primera imagen fotográfica de gran tamaño. Comentaron sus fotos, las de sus hermanos, las de sus amigos, se las intercambiaban, se reían, festejaban y reprochaban a aquellos más tímidos y menos fotografiados. Fue muy interesante la reacción de los propios tímidos pues ellos mismos estaban arrepentidos y me preguntaron más de una vez si el fotógrafo regresaría alguna otra vez.

El reparto del material, finalmente, no pude presenciarlo pues quedó a cargo de las dirigentes de la cooperativa, quienes aprovechan estas ocasiones para trabajar con los niños los temas relacionados con la propiedad del conjunto. Julián, el fotógrafo, no regresó pero es muy recordado en la comunidad.

Con Jitka, su mujer, fue distinto. Al año siguiente, tomó fotos en comunidades de zafreos golondrinas. No pudimos devolverlas pues cuando el material estuvo listo, la zafra había

terminado y los dueños de las imágenes habían partido a otros destinos migratorios.

Las fotos tomadas por ella, que integran nuestro archivo fotográfico y la galería en el Instituto, guardan la perplejidad de su mirada ajena y a la vez sensible a la realidad de nuestros países. Hay en esas imágenes más interrogación que en el resto del material tomado por mi hijo o por los miembros del equipo que poco a poco fueron reemplazando a los fotógrafos profesionales. Las fotos de Jitka quieren descubrir, desean comprender este otro país profundo, desconocido por el Buenos Aires donde ella residió los dos años previos a su viaje a Tucumán. Los zafreos la recibieron como a cualquiera de nosotros y permitieron el trabajo fotográfico. (Estos episodios están relatados en las etnografías de *Tucumanos y Tucumanas. Zafra, trabajo, migraciones e identidad* [Giarracca et al., 2000].)

A mi entender, el material fotográfico complementa nuestro trabajo acerca de las comunidades campesinas, sus culturas, sus mundos laborales, sociales y cotidianos. Alguna vez, Elena —la anciana de la cooperativa— alegrándose al verme llegar después de muchos meses, comentó su preocupación por mi ausencia y su pensamiento fue “mi biógrafa tarda en regresar”. Me sentí depositaria de esa historia de

vida rica en experiencias y reconocí en su elogio la responsabilidad por la construcción de esas imágenes que le devolvía con cada uno de mis escritos. El trabajo sociológico como espejo de la vida, de las personas, donde se pueden re-conocer o des-conocer. En tal sentido las fotografías en sus posibilidades de capturar momentos de las vidas de nuestros actores, aparecen también como otro modo en que ellos se re-conocen o se des-conocen.

La tercera experiencia que deseo comentar se refiere a un grupo social totalmente distinto y con fotografías tomadas por Daniela Mariotti. Ella fue la socióloga que sucedió, con la misma calidad técnica y artística, a los fotógrafos profesionales (tomó cursos y en el entusiasmo fotográfico casi la perdemos como socióloga). Registró (entre muchas otras) la protesta musical del Conservatorio López Buchardo de septiembre del 2001. La población: músicos, pianistas, en su *continua* interpretación de *Vejaciones* de Erik Satie (estuvieron 8 días ininterrumpidos)⁴. La experiencia de devolución del material escrito y del registro fotográfico resultó sumamente interesante. Los músicos recibieron la publicación de la pro-

testa con sumo interés, nos manifestaron que los hizo pensar y reflexionar sobre sus propias acciones. Músicos al fin, estaban acostumbrados al registro de sus interpretaciones pero no al de sus acciones (a diferencia de las comunidades campesinas). Entregué las fotos al docente más importante en la organización del evento (el Maestro Santiago Santero) y pude comprobar, una vez más, que en esa devolución se completaba lo que ya habían recibido con la publicación. Allí estaban, los pianistas en el escenario de esa magnífica casa de la calle Córdoba, en medio de carteles en defensa por la educación pública, en aquel raro clima que el ritual de “la música no para” había logrado crear. Las imágenes capturadas por Daniela poseían ese excedente de sentido que conduce no solo a recrear aquello que pasó sino a percibirlo con otros matices que dan la distancia y las distintas perspectivas. Aquello había sucedido, ellos fueron los protagonistas de la protesta pero hubo muchas consecuencias posteriores que no dejaron de sorprenderlos. En los viajes de campo que presentamos en esta publicación contamos con muchos fotógrafos. En Río Grande del Sur los autores de la relatoría tomaron sus propias fotografías en una práctica que ya es tan habitual como el grabador y la entrevista. Todos los autores, inte-

4 Véase Giarracca et al., 2001.

grantes de mi equipo de investigación, comenzaron sus formaciones en una época donde la fotografía ya estaba instalada. Además, todos ellos comparten una especial sensibilidad para conectarse con los mundos campesinos y de los sectores populares en general. Cuando los acompaño en algunos de sus trabajos de campo, siento como si ellos y las personas (de distintas edades) del “caso” se conocieran de mucho tiempo atrás. Estoy segura de que el registro fotográfico es una extensión con la cámara de por medio de estas fáciles relaciones de estas jóvenes generaciones.

La relatoría de Jorge Montenegro y mía corresponde al campo donde tuvimos la inmensa fortuna de compartir esos días con Douglas Mansur, excepcional fotógrafo y estudioso de los movimientos campesinos. Con él aprendimos muchas cosas en relación con el registro fotográfico: que la cámara siempre cuelgue de nuestro cuello, aun en esas situaciones que presagian que no la utilizaremos; registrar *todo* para luego elegir los momentos más significativos: de antemano no sabemos cuáles serán; despojarnos del monopolio de la cámara y comenzar a pasárselas a nuestros actores. Son ellos los que deben seguir el registro. Nosotros, como nos muestra muy bien el cineasta iraní Abbas Kiarostami en el final de *A través*

de los olivos, podemos ir con nuestras cámaras hasta cierto punto, pero la vida sigue... Solo ellos pueden continuar con el registro de sus propias existencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Ferrarotti, F. 1990 *La historia y lo cotidiano* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- Geertz, C. 1989 *El antropólogo como autor* (Barcelona: Paidós Estudio).
- Giarracca, N. (coord.) et al. 2001 “Vejaciones por 8. Arte y protesta social en Buenos Aires” en *Informes de Coyuntura* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 2, diciembre.
- Giarracca, N. et al. 1995 “Métodos cuantitativos y cualitativos en la Sociología Rural” en *Ruralia* (Buenos Aires: FLACSO) N° 6.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1995 “El oficio del sociólogo o de sociólogos con oficios” en Schuster, F. et al. *El oficio del investigador* (Rosario: Homo Sapiens).
- Giarracca, N. y Bidaseca, K. 1999 “La entrevista: técnica metodológica y

- experiencia comunicativa” en Giarracca, N. (coord.) *Estudios rurales, teorías, problemas y estrategias metodológicas* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. y Bidaseca, K. 2004
“Ensamblando las voces: los actores en el texto sociológico” en Kornblit, A. (comp.) *Metodologías cualitativas en ciencias sociales* (Buenos Aires: Editorial Biblos).
- Giarracca, N., Gras, C., Bidaseca, K. y Mariotti, D. 2000 *Tucumanos y tucumanas. Zafra, trabajo, migraciones e identidad* (Buenos Aires: La Colmena).
- Hastrup, K. 1992 “Writing ethnography. State of the art” en Okely, J. y Callaway, H. (eds.) *Anthropology and Autobiography* (Londres: Routledge).
- Teubal, J. 2000 *And polenta?* (Buenos Aires: Fetuccini).

EL CAMPO ARGENTINO EN LA ENCRUCIJADA. ESTRATEGIAS Y RESISTENCIAS SOCIALES: ECOS EN LA CIUDAD

PRÓLOGO*

NORMA GIARRACCA Y MIGUEL TEUBAL**

Recorrer la Argentina en toda su extensión es una travesía por los grandes contrastes: los campos prósperos, las señales comerciales que indican que estamos utilizando la biotecnología de punta vendida por exitosas empresas transnacionales, las nuevas maquinarias agrícolas, los helicópteros, los “mosquitos”, las camionetas 4 x 4 de la “nueva burguesía”; todo esto conviviendo con poblaciones expulsadas, pueblos fantasmas, pobreza, hambre y una re-

ligiosidad popular que crece en la figura roja y flameante del Gauchito Gil. Sus altares se encuentran por doquier y las imágenes de las banderas rojas al costado de las rutas y caminos de todo el país nos recuerdan que este territorio aún es habitado por una población con creencias, ideas y resistencias.

¿Por qué crece la figura de quien, sin delinquir, pasó toda la vida en conflictos con la ley? En efecto, Antonio Mamerto Gil Núñez nació en Corrientes en 1847; fue alistado para distintas guerras, pero terminó desertando y vivió errante, junto a otros compañeros, alimentándose de productos del campo que robaban a los ricos y que compartían con los pobres, sobre todo con familias numerosas que sufrían hambre. Terminó degollado por un escuadrón militar. En el mismo acto de su muerte, cuenta la leyenda que generó el primer milagro: le deparó el bien a su asesino y sanó a uno de sus hijos. Quienes recorren el interior del país pueden corrobora-

* Giarracca, N. y Teubal, M. 2005 “Prólogo” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales: ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza) pp. 9 a 13.

** Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

rar cómo su figura gana espacio con relación a otros “santos populares”, como la Difunta Correa o Ceferino Namuncurá. Las Vírgenes regionales, “mujeres-madres” bondadosas y porfiadas que eligieron *lugares* donde permanecer, siguen ocupando un espacio importante en la religiosidad popular, pero en sitios fijos (Luján, Catamarca, etcétera). El Gauchito Gil, en cambio, sigue sin pausas un recorrido interminable por los campos, pueblos, comunas, barriadas, que se muestran cada vez más polarizados socialmente. Con sus improvisados altares rojos, el santo y la pobreza se acercan, sin tregua, a los esquivos espacios urbanos (por ejemplo, lo encontramos en el límite de Palermo Viejo).

Zygmunt Bauman (2004) contrapone la imagen del hombre de esta época, nómada, casi un vagabundo, al colono de antaño, instalado y aquerenciado a un lugar. El hombre de hoy, como la imagen del Gauchito Gil, no tiene un destino final que marque de antemano su itinerario ni un lugar privilegiado al cual llegar. Por eso, llama la atención que, en el momento en que el país de colonos, campesinos y chacareros corre peligro de desaparecer, la imagen del santo popular nómada y errante recorra la Argentina. Sin embargo, sus comentaristas nos recuerdan que el gauchito tiene un lugar de origen: la provincia de Corrientes. Decía una nota

en el diario *La Nación*: “Los fieles encienden velas y tocan la tumba antes de tomar asiento en largos bancos de madera que dan al tinglado un aire de iglesia rural. Cada cual sigue sus oraciones particulares como le viene en gana. Rezan, piden, lloran, ríen. No es raro ver músicos que, bajando de un micro, regalen canciones al santo de sus amores” (24 de mayo de 1999).

Mientras desaparecen campos con frutales, arroz, producción tambera, cultivos industriales que antes alimentaban a los argentinos, y aparecen los campos de la otra “milagrosa” figura —no popular—, la soja (para exportación), muchos levantan altares a aquel gaucho rebelde del siglo XIX que compartió sus alimentos con los paisanos hambrientos. El Gauchito Gil, como la protesta social de la década del noventa, ocupa las rutas y los espacios públicos y desde el interior se va acercando al centro, a la Ciudad de Buenos Aires.

El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales: ecos en la ciudad es un análisis crítico de la agricultura y los mundos rurales que se han configurado en las últimas décadas. Varios de sus autores tienen una larga experiencia en el estudio del sector agrario, desde la Economía, la Sociología y las Ciencias Agronómicas. Siguieron las transformaciones, tanto desde la reflexión y

la investigación, como desde la participación activa en el diseño y gestión de políticas públicas y foros de debates; sobre todo, a partir de los viajes realizados por el país, las ciudades o poblados del interior y las conversaciones o entrevistas sostenidas con la gente.

Asimismo, los investigadores más jóvenes que firman muchos de los trabajos se han formado en la Universidad de Buenos Aires —en el Instituto Gino Germani y en el Centro de Estudios Avanzados—, en la tradición crítica de las disciplinas científicas, donde se valora la posibilidad de investigar y trabajar con fondos públicos que habilitan la libertad y la autonomía en el proceso de creación de conocimientos.

Frente a la actitud celebratoria de un campo que aumenta la producción para exportación, que utiliza tecnología de punta y que soluciona los problemas de ingresos fiscales del gobierno nacional, los autores de este libro nos ocupamos de sumar otros aspectos de este proceso: poblaciones campesinas amenazadas por la aparición de “guardias blancas” (fuerzas armadas privadas) que amedrentan a los pobladores con la intención de apropiarse de tierras en “propiedad veinteañal”, comunidades enteras intoxicadas por la prepotencia de la fumigación aérea de los grandes inversores sojeros, poblaciones indígenas despojadas violentamente de

sus tierras por empresas que les desconocen derechos emanados de legislaciones nacionales e internacionales, yungas y montes del Noroeste arrasados para siempre, familias de chacareros que perdieron sus tierras por endeudamientos tan irracionales como todo el comportamiento financiero de la última década.

También comprobamos que, a pesar del salto productivo de algunos granos y del aumento del valor de las exportaciones, la pobreza, el hambre, la mortalidad y desnutrición infantil nos ha convertido en uno de los países de América Latina con más pobreza relativa (véase CEPAL, 2003). Los argumentos que intentan consolidarse como “sentido común” disocian esta última situación de la celebración agropecuaria. “La soja es, fundamentalmente, un gran éxito nacional. Ha sido la nueva colonizadora de la Segunda Revolución de las Pampas, como lo reconoce el último censo”, reclamaba una nota de *Clarín Rural* del 10 de mayo de 2003, en respuesta a los comentarios sobre los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002 que habían aparecido en diarios y revistas de difusión masiva, varios de ellos firmados por algunos autores de este libro.

Por esta razón, venimos a debatir, a recuperar una de las herramientas más valiosas del pensamiento crítico y de las sociedades con

vocación democrática. Deseamos recuperar el debate sobre la Argentina agraria: país con fértiles praderas que solían abastecer de alimentos al mundo, con recursos naturales suficientes, con una población agraria con larga experiencia en su *métier* (véase el capítulo de Adolfo Boy), pero también territorio de una agricultura mono-productora y mono-cultivadora (nuevamente referimos al ingeniero Boy). Un país, tercer exportador mundial de soja, que se ha convertido en la punta de lanza para el proyecto de las grandes semilleras transnacionales en América del Sur (véase el mapa de la República Unida de la Soja¹).

Nuestros argumentos en el debate están sustentados por información obtenida de los censos, de las estadísticas oficiales y de nuestra propia producción, que cumple con los recaudos de la estadística social en la que osentamos largos entrenamientos. No obstante, nuestras interpretaciones se basan en ideas, en conceptos que provienen de las Ciencias Sociales, de la Economía Política y de las Ciencias

Agrarias. No pretendemos mostrar un simple registro de los datos productivos o sociales; la realidad se resiste a tal registro (es puro empirismo) si no partimos de interrogantes significativos. Por eso, las Ciencias Sociales, como dijo alguna vez Pierre Bourdieu, son las disciplinas que molestan: las que hacen las preguntas incómodas, las que vienen a traer, en medio de la fiesta, algunas malas noticias.

El trabajo central de la investigación en que se basa este libro se llevó a cabo entre fines de 2000 y 2004. Durante estos cuatro años de trabajo atravesamos una de las peores crisis que recuerde el país en materia económica. La población se empobreció en una magnitud inédita; en el país del excedente alimentario, las poblaciones de desocupados, campesinos arrancados de sus tierras, trabajadores precarios, comenzaron a pasar hambre. Nosotros, como especialistas del sector agrario, vivimos esta situación como una paradoja que ameritaba un gran esfuerzo de nuestra parte para comprenderla y dar cuenta de ella. Investigamos, recorrimos provincias, generamos datos cuantitativos y cualitativos. Entrevistamos a todos, prestamos atención a los argumentos económicos, políticos, comprendimos por qué los productores aceptaron rápidamente la nueva propuesta, pero también escuchamos las voces

1 Una propaganda de la empresa Syngenta señala, sobre un mapa de América del Sur en blanco, un sombreado en verde de zonas de la Argentina, el Brasil, Bolivia y el Paraguay. La titula “República Unida de la Soja” y remarca como consigna: “La soja no tiene fronteras”.

de quienes experimentaron los cambios en sus propias existencias, deteriorando su calidad de vida y perdiendo derechos.

BIBLIOGRAFÍA

Bauman, Z. 2004 *La sociedad sitiada* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

CEPAL 2003 *Situaciones y perspectivas. Estudio económico de América Latina y el Caribe* (Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL). Disponible en <<http://www.eclac.cl/>>.

LOS DEBATES ACERCA DEL CAMPO

INTRODUCCIÓN*

NORMA GIARRACCA Y MIGUEL TEUBAL**

EL PAPEL DEL SECTOR AGRARIO

En la Argentina, los medios urbanos tienden a darle la espalda al sector agropecuario, acerca del cual existe un gran desconocimiento, en especial en lo que se refiere a la población mayoritaria, es decir, pequeños productores, campesinos, trabajadores rurales, indígenas campesinos, quienes, con sus familias, son los

principales habitantes de casi las tres cuartas partes del territorio argentino ocupado por este sector. Las entidades corporativas que se expresan públicamente como representativas, en muchas ocasiones, durante las últimas décadas, han abandonado a su suerte a esta franja. A veces, en los discursos gubernamentales, se los presenta como “descartables”¹ o “inviabiles” (organismos internacionales) ante el embate de “las economías a escala” y la “eficiencia”.

El sector agropecuario argentino sigue teniendo importancia, aunque no la misma que en el pasado. En efecto, su significación no estriba en su contribución al producto nacional, que es apenas del 6 al 7% (aunque, si consideramos el sistema agroindustrial o agroalimentario en su conjunto, ese porcentaje aumenta

* Giarracca, N. y Teubal, M. 2005 “Introducción: Los debates acerca del campo” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales: ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza).

** Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

1 Recuérdese a un subsecretario de Agricultura que pronosticó (y efectuó en consonancia) la desaparición de la mitad de las unidades productivas.

sustancialmente). Tampoco puede ser considerado como generador pivote de empleo, un factor tan vital para salir de la crisis actual. Por el contrario, se trata de un medio que continúa expulsando —incluso con mayor intensidad que antes— a productores y trabajadores rurales. Tiene importancia como generador de divisas (crucial a la hora de pagar los servicios de la deuda externa) y como proveedor de alimentos. No obstante esta centralidad en los ingresos fiscales y en la reproducción poblacional, el gran reproche que se le puede hacer es que, a pesar de su crecimiento en décadas recientes, no ha contribuido a solucionar los grandes problemas de los argentinos: el hambre, la miseria y la desnutrición. Es decir, dejó de contribuir a la reproducción de toda la población y pasó a constituirse en fuente de alimentos solo para una parte del país mientras que la otra no puede acceder a ellos.

El sector agropecuario tiende a ser considerado, en forma casi exclusiva, como un proveedor de recursos para otros segmentos de la economía. En efecto, visto desde la perspectiva urbana, el agro aparece como un recurso al que hay que exprimir de la mejor manera posible. Sin embargo, es mucho más que eso. Constituye el sustento y la forma de vida de muchas personas, con todo lo que ello impli-

ca; un ámbito natural que debe preservarse para la vida misma, fuente de la biodiversidad, del paisaje, de la soberanía alimentaria de la población, en fin, del bienestar de muchas personas de la sociedad toda, incluyendo a las generaciones futuras.

En el imaginario popular y del mundo en general, la Argentina siempre fue “un país rico”, precisamente por sus vastos recursos naturales, grandes extensiones de tierras fértiles, de agua, petróleo, etcétera.² Este país rico, que atrajo a millones de inmigrantes del Viejo Mundo y que en la actualidad recibe millones de personas de países limítrofes, también expulsa a miles de ciudadanos. En el siglo XIX formaba parte de la “periferia próspera”, que se perfilaba como una “potencia mundial”; pero, por complejas razones del orden de lo político, no pudo lograr un desarrollo sostenido.

En torno al sector agropecuario de nuestro país giraron grandes e importantes debates que

2 Según Hobsbawm, los países del Tercer Mundo que emergen en la era poscolonial eran generalmente pobres, “con raras excepciones, particularmente la Argentina, que, aunque era un país rico, nunca pudo recuperarse de la declinación y caída del Imperio Británico que, hasta 1929, le había dado prosperidad como exportador de alimentos” (Hobsbawm, 1996: 357, traducción nuestra).

se expresaron, primero, en la producción escrita del pensamiento social, luego, en la de los ámbitos académico y periodístico y, en estos últimos años, en espacios donde también intervienen organizaciones ligadas al cuidado de los recursos naturales, la agroecología, etcétera (véase Giarracca, 1999). Retomaremos, en esta introducción, algunas de estas discusiones, ya que recordarlas nos conduce a recuperar ideas muy caras al concepto de democracia: la posibilidad de encontrar posiciones diferentes en relación con los procesos sociales, de disentir de las políticas públicas, de recuperar el pensamiento crítico que atravesó el siglo XX, desde Juan L. Tenenbaum y Carl Taylor (a pesar de ser este un funcionario del gobierno norteamericano) hasta Guillermo Flichman o los antropólogos y sociólogos que comenzaron a registrar, después de los sesenta, el “otro campo”.

ALGUNOS DEBATES ACERCA DEL SECTOR AGROPECUARIO

Uno de los planteos más recordados tuvo que ver con las características y evolución del sector agrario y se focalizó en el “estancamiento agrario” de la zona pampeana entre 1930 y 1970. Se trataba del período en que nuestra economía

global, tras la crisis de los años treinta, emprendía el proceso denominado de “industrialización por sustitución de importaciones” (ISI). El debate se nutrió de varias vertientes: “estructuralista” (con énfasis en la persistencia en nuestro país de una estructura latifundista), “neoclásica” o “liberal” (que clamaba por la falta de “incentivos” a la producción agropecuaria argentina), “tecnológica” (que señalaba el retraso tecnológico relacionado con características inherentes a la estructura agraria) (véase Giarracca, 1999).

La controversia tenía implicancias relacionadas con las estrategias socioeconómicas de los diferentes gobiernos. La corriente neoclásica o liberal cuestionaba las políticas de ISI porque se contraponían al impulso que debía dárseles en el proceso de desarrollo económico al agro y a la agroindustria. En lo esencial, se planteó que la política global de impulsar procesos de industrialización se contraponía a estrategias que privilegiaban a sectores, como el agropecuario, con “ventajas comparativas” en el concierto mundial. En este sentido, se consideraban como perjudiciales ciertas políticas de gobierno, tales como la fijación de precios de garantía, tasas de cambio desfavorables, retenciones y otras medidas impositivas. Se presumía que todas ellas desalentaban la inversión y el desarrollo del sector.

En cambio, las corrientes estructuralistas enfatizaban las limitaciones que entrañaban las relaciones y los regímenes de propiedad, la persistencia de grandes explotaciones que configuraban parte de una estructura agraria retrógrada, poco propensa al desarrollo capitalista y menos aún al bienestar social. Cuestionaban también el modelo agroexportador, vulnerable a los vaivenes de la economía mundial, que no generaba empleo y se contraponía a procesos de industrialización considerados como esenciales para el desarrollo económico.

La discusión se extendió más allá del período señalado (1930-1970) y tuvo un punto de inflexión cuando se introdujo la problemática de la renta de la tierra con los planteamientos de Laclau (1975), Flichman (1974, 1977), Braun (1974) y Teubal (1975), entre otros. Recientemente, Basualdo y Arceo retomaron aspectos de esta perspectiva de análisis.

LA RENTA DE LA TIERRA, COMPONENTE DEL DEBATE

La importancia del agro como generador de riqueza fue destacada por los fisiócratas en el siglo XVIII. Fueron los primeros en considerar la tierra como *madre de la riqueza* y la agri-

cultura como el único elemento capaz de generar un excedente económico (*produit net*) susceptible de contribuir al proceso de acumulación de capital. Los clásicos, Adam Smith y David Ricardo, no desdeñaban la importancia de los recursos naturales en los procesos económicos, pero destacaban, en cambio, el trabajo —en el caso de A. Smith, también la división del trabajo— como generador de la riqueza de las naciones. Sin embargo, según estos autores, los frutos del trabajo no era percibidos íntegramente por los trabajadores: los terratenientes, a través de la propiedad y el control de la tierra, recibían un tipo de ingreso muy diferente del de los obreros y los dueños del stock de capital, que los ubicaba en una posición de poder.

Surge, entonces, la necesidad de explicar las razones por las cuales los terratenientes percibían un ingreso por el uso de las “energías originarias e indestructibles del suelo” (Ricardo, 1959: 51), por el solo hecho de tener el “monopolio de [...] determinadas porciones del planeta, sobre las cuales pueden disponer como esferas exclusivas de su arbitrio privado, con exclusión de todos los demás” (Marx, 1981: 793). Como señaló Adam Smith, “no bien toda la tierra del país se ha transformado en propiedad privada, a los terratenientes, como a todos los demás (por el solo hecho de ser los

propietarios y controlar porciones de la tierra), les gusta cosechar donde nunca sembraron y demandan una renta aun por aquello producido por la naturaleza” (Smith, 1964: 44). Se trata de explicar la renta que el terrateniente percibe y que es pagada por el arrendatario capitalista³. Según estos autores, la renta de la tierra constituye un ingreso que no necesariamente tiene que ver con el trabajo (la principal fuente de riqueza de la nación) y aparece, en este sentido, como un beneficio claramente diferenciado de la ganancia y del salario.

David Ricardo proyectó rigurosamente un modelo en el que introduce el concepto de *renta diferencial*, imbricado en uno de los objetivos esenciales de su pensamiento y de la Economía Política clásica: determinar los factores que inciden en la distribución de los ingresos entre las tres principales clases de la sociedad: los trabajadores, los terratenientes y los capitalistas.

¿Por qué surge la renta de la tierra? En el modelo que elabora Ricardo, a medida que van siendo incorporadas al proceso productivo porciones de tierra cada vez menos fértiles, con niveles de productividad decrecientes, se

manifiesta el alza del precio de los alimentos —ciertamente, esas tierras menos fértiles no se hubieran incorporado si no fuera por el precio elevado, que garantiza la cobertura de los costos de producción—. Este precio es el que habrá de regir en toda la economía. Como consecuencia, los propietarios de las tierras más fértiles son los únicos que perciben una renta. De ahí la denominación de “renta diferencial”. Para los dueños de las tierras más fértiles, se trata de una especie de ganancia extraordinaria debido a los menores costos de producción. El precio del maíz no es alto porque se paga una renta; se paga una renta precisamente porque el precio del maíz (del pan) es alto (Ricardo, 1959: 56). Se trata, como dijimos, de una ganancia extraordinaria, es decir, de un plus sobre la tasa de ganancia normal y que es apropiada por los terratenientes, que son los dueños de las tierras más fértiles. Constituye, además, la explicación de por qué estos puedan cobrar una renta a los arrendatarios.

Marx le dedica bastantes páginas, en sus principales obras, a la cuestión de la renta de la tierra. Le interesa incorporar el concepto y sus diversas formas, en su análisis de las leyes de movimiento de la sociedad capitalista. Señala que las mejoras introducidas por el hombre para aumentar la productividad de la tierra

3 Señala Marx que, en el caso irlandés, el arrendatario era un pequeño campesino.

también inciden en la renta. “Un campo cultivado vale más que un campo inculto de la misma calidad natural... Las mejoras incorporadas al suelo caen en manos del terrateniente en cuanto accidentes inseparables de la sustancia, del suelo” (Marx, 1981: 797-798). Para este autor, al igual que para Ricardo, la renta de la tierra no surge por sí misma, sino porque los terratenientes son capaces de apropiarse de parte del trabajo de los trabajadores, por el solo hecho de ser propietarios de la tierra. En efecto, la renta representa parte de una deducción del valor generado en otro lugar. Con relación al modelo ricardiano, Marx complejiza la teoría de la renta de la tierra, los diversos casos y tendencias que se manifiestan en torno a la “renta diferencial” e introduce, asimismo, el concepto de “renta absoluta”.

LA RENTA EN EL CASO ARGENTINO

Nos interesa ver de qué modo ciertos elementos inherentes a estas teorías —por cierto, modificados— pueden ser útiles para entender aspectos esenciales del desarrollo agrario y económico argentino. El análisis que nos proponemos organiza el proceso de desarrollo económico del país en tres grandes etapas o

“régimenes de acumulación”, así como las características que asume el sector agropecuario y, en particular, la renta de la tierra, en cada una de ellas: 1) la economía “agroexportadora” (c. 1880-1930); 2) la etapa de “industrialización por sustitución de importaciones” (ISI) (1930-c. 1970); y 3) la actual etapa de “apertura al exterior”, “ajustes estructurales” o de “valorización financiera” (de mediados de los años setenta a esta parte). En este libro, focalizamos el análisis en la última etapa de hegemonía del neoliberalismo económico y social enmarcado en los procesos de globalización.

1) LA ECONOMÍA “AGROEXPORTADORA” (C. 1880-1930)

El pensamiento de los economistas clásicos influyó significativamente en la percepción que tuvieron los pensadores argentinos, tanto en el siglo XIX como en el XX, respecto del papel importante que habría de tener nuestro país en la economía mundial, precisamente a causa de su enorme dotación de recursos. Se visualizaba que, con capital y trabajo, esos vastos territorios susceptibles de ser incorporados al proceso productivo podrían valorizarse. Ricardo Ortiz planteaba que la revolución industrial y

el triunfo del liberalismo en Inglaterra habían generado una demanda a escala mundial de alimentos y de recursos naturales; la Argentina habría de aprovechar significativamente esta situación (Ortiz, 1955: 29-46).

Por esta razón, se pensaba que el auge de la producción agropecuaria argentina —principalmente la pampeana— generaba una renta, en su forma de “renta diferencial en escala internacional”. En efecto, la persistencia de costos internos significativamente más bajos que los que prevalecían en los países altamente industrializados generaban esta renta, y el crecimiento sustancial que tuvo nuestro país en el período 1880-1930 se podía explicar, fundamentalmente, por esta situación. La Argentina formaba parte de un grupo de países que conformaban la “periferia próspera”, por la gran disponibilidad de sus recursos naturales, junto con Canadá, Australia, Nueva Zelanda e incluso los Estados Unidos. En todos estos países, una producción agropecuaria de sus regiones templadas se constituyó en una fuente importante de alimentos básicos para los países europeos. Este auge de la producción se debió a la existencia de tierras fértiles, en cantidad y calidad, que posibilitaban una producción agropecuaria que habría de generar sustanciales rentas, tanto para los terratenientes como

para otras ramas y actividades de la economía: el transporte, la comercialización, los bancos, y que podrían incluso traducirse, en algunos momentos y para determinados sectores, en salarios relativamente altos⁴.

La existencia de las “ventajas comparativas” de nuestro país con relación a otros se debía, como se dijo, a la mayor fertilidad de las tierras. Los países europeos tenían elevados costos para el mismo tipo de producción agropecuaria. La producción y exportación crecientes generaban, pues, grandes rentas diferenciales o internacionales⁵. Se trató de un período de expansión horizontal en el cual vastas extensiones de tierras fértiles eran incorporadas a la producción agropecuaria, en un proceso que configuraría el desarrollo de un modelo

4 Según Laclau, “...el monopolio de la tierra y la elevadísima renta diferencial proveniente de la inagotable fertilidad de la llanura pampeana se unieron para consolidar la estructura a la vez capitalista y dependiente de la economía argentina... La expansión de la renta pasó a ocupar en nuestra economía el lugar que en un capitalismo no dependiente corresponde a la acumulación del capital” (Laclau, 1975: 36-37).

5 Arceo prefiere llamarlas “rentas internacionales” dado que en el nivel mundial no tendían a igualarse las tasas de ganancia (Arceo, 2003; véase también Teubal, 2004).

“agroexportador”. Este modelo entró en crisis en los años treinta con la caída de los precios internacionales de nuestros productos de exportación. Comenzó desde entonces otro “régimen de acumulación”, basado, como dijimos, en los procesos de industrialización por sustitución de importaciones.

Pero antes de pasar a la otra etapa, podemos interrogarnos: ¿cómo se distribuía la renta o las ganancias extraordinarias entre 1880-1930? En primer lugar, se debe considerar una serie de factores institucionales vinculados a la organización nacional. Tal como lo señala Arceo, la distribución de la renta tuvo mucho que ver con la forma de apropiación de la tierra en los orígenes de estos procesos. Según el autor, en los demás países de la periferia opulenta, el acceso a la tierra fue más “democrático”, los productores familiares pudieron obtener terrenos y, en consecuencia, no se consolidó un régimen terrateniente al estilo argentino⁶.

Sin embargo, en un punto importante, el desarrollo agrario argentino se asemejó al estadounidense y canadiense, así como al austro-

liano y neozelandés. En todos estos procesos, fueron desplazadas, acorraladas, diezmadas las poblaciones indígenas originarias. El proceso de conquista y colonización que caracterizó a América Latina continuó tras la independencia y la adopción de las Constituciones liberales de mediados de siglo XIX. Se constituyeron regímenes oligárquicos que desplazaron a las comunidades y poblaciones indígenas preexistentes. En la Argentina, al igual que en los Estados Unidos, Canadá y Australia, la densidad poblacional de los pueblos originarios era mucho menor que la de países tales como México o el Perú y, por tanto, pudieron ser arrasadas casi por completo. La colonización y “conquista del desierto” fueron definitorios en este sentido.

La problemática de la renta, en su sentido clásico, está indisolublemente asociada a la propiedad de la tierra. Pero esta tiene diversas funciones y significados, que son recreados en diferentes períodos históricos y por diferentes grupos sociales. Diversos teóricos reflexionaron sobre esta cuestión (véase Polanyi, 1957; Wolf, 1973; y otros).

En nuestro país, por la forma en que fue distribuida la tierra, así como por la falta de mano de obra para su trabajo, se configuraron tres modos de organización de esta relación: el sistema de arrendamientos, que fue amplia-

6 Arceo deja entrever que el nuestro fue el único país de la *periferia próspera* que no logró un desarrollo industrial acorde con el de los países del llamado Primer Mundo.

mente mayoritario, la hacienda con mano de obra asalariada o acasillada y el sistema de colonias agrícolas. El sistema de arrendamientos era compatible con la persistencia de la gran propiedad y siguió siendo importante a lo largo del siglo XX.

2) LA ETAPA DE “INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES” (ISI) (1930-C. 1970)

La crisis de los años treinta dio por tierra con el modelo agroexportador instaurado hacia mediados y fines del siglo XIX. Tal como señalamos más arriba, comienza un período de industrialización por sustitución de importaciones. El debate, aquí, gira en torno a qué usos debía darse a la renta agraria, en qué medida debía utilizarse para promover un proceso de industrialización.

El análisis de Flichman (1977) sobre la renta de la tierra está centrado en los diferentes grados de extensividad agropecuaria en distintas regiones y provincias del país. Algunas de ellas, donde prevalece una mayor extensividad (la ganadería y la gran agricultura, por ejemplo), son regiones en las que se generan rentas diferenciales a escala mundial. En cambio, en las denomi-

nadas economías regionales, predominaba una agricultura “intensiva en mano de obra”.

De la perspectiva planteada por Flichman se desprenden importantes consecuencias, como la necesidad de impulsar una mayor intensificación de la producción agropecuaria, o bien, un proceso de “agriculturización”. En los hechos, fue lo que ocurrió en nuestro país, en particular, a partir de mediados de los años setenta. En efecto, a partir de entonces, se potencia el crecimiento de la producción agrícola con relación a la pecuaria. Los argumentos para comprender estos procesos hacían referencia a la aplicación de nuevas tecnologías, combinadas en lo que se denominó un “paquete tecnológico”, centrado en los agroquímicos y en nuevas formas organizativas para la producción (véase el artículo de Teubal, Domínguez y Sabatino en este libro).

3) LA ACTUAL ETAPA DE “APERTURA AL EXTERIOR”, “AJUSTES ESTRUCTURALES” O DE “VALORIZACIÓN FINANCIERA” (DE MEDIADOS DE LOS AÑOS SETENTA A ESTA PARTE)

En el presente trabajo nos proponemos una puesta al día de la problemática agraria y agroalimentaria actual de nuestro país, que parte

del análisis de las transformaciones operadas, precisamente, desde la década del setenta. El panorama agrario sufre cambios sustanciales en este período, transformaciones en las relaciones sociales agrarias, que involucran a numerosos sujetos sociales del campo. Estos cambios tienen que ver con un nuevo “régimen de acumulación” (véase Aparicio et al., 1992) y un nuevo “paradigma agrario” que se manifiesta de diversos modos; supone otros comportamientos sociales, otras políticas globales, referidos tanto a la economía global como al sector y, así también, otro contexto global mundial que incide significativamente en los procesos sociales agrarios. Nuevamente, la producción y la apropiación de las grandes rentas generadas contribuyen a sustentar un modelo denominado de “valorización financiera” dada la importancia que van asumiendo las actividades e intereses financieros en la economía nacional.

Otro aspecto destacable, en esta etapa, es que el sector agropecuario se articula cada vez más con “complejos agroindustriales” y con un “sistema agroalimentario o agroindustrial” en el contexto del proceso de globalización. Nuevos temas y debates emergen: qué tecnología, para quiénes, el acceso a la tierra, nuevas políticas, el papel del agro en la economía global, etcétera. Cómo son y cuáles son las consecuencias de

las nuevas formas de articulación del agro, de los productores agrarios con grandes empresas —muchas, transnacionales—, núcleo del sistema agroalimentario. Cómo se dan la provisión de los insumos —en particular, semillas—, el procesamiento industrial de la materia prima, la distribución final, gran parte del consumo a través de los *fast foods* que crecen significativamente en nuestro país. Estos interrogantes nos refieren al impacto de los procesos de globalización y al papel jugado por esas grandes empresas que dominan segmentos clave del sistema agroalimentario.

La renta de la tierra también está presente en la actualidad, pero la forma en que es apropiada y quiénes se la apropian ha cambiado. Si bien los grandes terratenientes siguen siendo algunos de sus beneficiarios —en los trabajos más recientes de E. Basualdo y N. Arceo (2005) sobre la evolución de los grandes grupos económicos vinculados al sector, en particular, las “sociedades”, la renta fundiaria percibida por estos aparece como definitoria—, también lo son las grandes empresas agroalimentarias (los proveedores de la semilla y de los insumos, las grandes empresas procesadoras de la materia prima agraria, los supermercados, etcétera).

Finalmente, existe otra articulación entre renta de la tierra y valorización financiera. El

auge de la soja transgénica tiene un vínculo casi directo con el modelo económico instaurado desde mediados de los años setenta, que se basó en el auge del endeudamiento externo. En efecto, uno de los cuellos de botella que define, en gran medida, el “régimen de acumulación” actual tiene que ver precisamente con el endeudamiento externo. En la década del noventa, esto se expresó claramente: la política económica giraba en torno a la deuda externa, sus condicionamientos y la necesidad de proveer mecanismos que garantizaran el pago y la expansión de esta. El proceso de reprimarización de la economía ha llegado a niveles extremos con la importancia que se le asigna en la actualidad a las exportaciones sojeras transgénicas. La recomposición del modelo de la economía global, tras el derrumbe de 2001-2002, se basa casi exclusivamente en el logro de un superávit de la balanza comercial que garantice a acreedores externos e intereses financieros locales e internacionales la continuidad del modelo denominado de “valorización financiera”.

OTROS DEBATES

Existen otros dos debates que en nuestro país no se desarrollaron con profundidad o que se

hicieron tardíamente en relación con otros países. Son, por un lado, la cuestión del campesinado como categoría social en la estructura social agraria; por otro, la discusión sobre la indagación de las condiciones que aporta la agricultura, como sector económico *y* social, en la constitución de una sociedad que aspira a la democracia tanto en su forma de gobierno como en las relaciones entabladas en los espacios sociales (en los mundos agrarios y rurales).

EL DEBATE CAMPESINO

Los debates sobre los campesinados fueron frecuentes e importantes en la sociedad europea (véase Etzezarreta, 1980) y en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, aunque fue en México donde desplegaron su riqueza conceptual, sus aspectos interdisciplinarios y, con el tiempo, ciertas consecuencias políticas profundas (véase CEPAL, 1982; Giarracca, 2004). En la Argentina, durante la década del setenta, Archetti y Stölen habían sostenido el carácter de pequeña explotación capitalizada de la gran franja de las unidades familiares de la estructura social, dejando en claro que no era correcto considerarla una economía campesina. “Si una economía campesina se repro-

duce, no crece, no se desarrolla, la economía *farmer* se caracteriza porque acumula capital y se reproduce a una escala mucho más amplia, crece y se desarrolla” (1975: 15).

En los años setenta, había consenso acerca de que estábamos frente a una franja de proporciones importantes en la estructura social, formada, en su mayor parte, por unidades que raramente se mantenían fuera del mercado, que cuando podían utilizaban mano de obra asalariada y que, en la mayoría de los casos, habían sido generadas al calor del desarrollo agroindustrial de la caña de azúcar, el algodón, la yerba mate, el té, la vid, etcétera. No eran campesinos al estilo latinoamericano ni totalmente capitalistas. La Antropología guardaba el concepto “campesino” para grupos donde el peso indígena lucra mayor o con fuertes particularidades étnicas, mientras Francisco Delich (1970), sociólogo, postulaba la singularidad del campesinado argentino, imposible de asemarlo al marco latinoamericano.

Esta ambigüedad de origen condujo a otro debate con mayor anclaje en el registro político. En efecto, la crisis de superproducción de los años setenta y las oportunidades políticas expresadas en cierta apertura de los gobiernos militares de la época (1970) fueron condiciones de posibilidad positivas para la organización de

las Ligas Agrarias. Estas organizaciones, muy sostenidas por el ala progresista de la Iglesia católica, convocaron a un gran conjunto de agricultores familiares ligados a las agroindustrias del norte (véase Golsberg en este libro).

La polémica que se abrió en relación con las Ligas Agrarias giró alrededor del carácter político de la organización. En efecto, se interrogaban sobre el tipo de demandas que generaban los productores organizados y, como los requerimientos más frecuentes eran precios o mejores condiciones de comercialización, algunos autores consideraban las Ligas como movimientos “populistas” y las ubicaban en el mismo registro que *farmers* canadienses o norteamericanos; otros analistas, al contrario, ponían el acento en la condición subordinada de estos actores y los comparaban con los movimientos campesinos latinoamericanos (véase Bartolomé, 1982 y Ferrara, 1973).

Es importante recordar este planteamiento en el orden de la caracterización política de las organizaciones de los agricultores en la década del setenta, pues sus principales ejes aún impregnan las discusiones acerca de los movimientos sociales en el campo. Si bien en la cultura política contemporánea, despojada de determinantes estructurales, no cabe duda de que campesinos y pequeños productores son

sujetos interesantes en las resistencias globales a las políticas neoliberales y que generan organizaciones y principios novedosos (véase los principios de Vía Campesina), algunos autores locales ven con beneplácito la desaparición de la pequeña unidad de producción o caracterizan al Movimiento de las Mujeres Agropecuarias en Lucha, y hasta al mismo Movimiento Campesino Santiaguense, como organizaciones de poco interés en el espacio de las resistencias al modelo vigente.

En relación con la franja de la agricultura familiar, observamos que, con el regreso a la democracia (1983), los cuestionamientos expresaron otros problemas. Se centraron en la delimitación de las unidades agrícolas más vulnerables para ser objeto de políticas públicas. Algunos especialistas utilizaban la categoría “campesino” para caracterizar a todo el segmento de la agricultura familiar y proponían políticas públicas basadas en créditos internacionales para sostenerla, tecnificarla y desarrollarla. Otros reprochaban un uso exagerado del concepto y proponían ajustar las definiciones y utilizar diferentes categorías sociales (campesinos, chacareros, trabajadores sin tierra) para diseñar sendas políticas públicas (véase el debate Manzanal-Giarracca, 1990). En realidad, en los tiempos de esta controversia (pri-

meros años de la democracia), aún se apostaba a que las políticas públicas de los gobiernos democráticos neutralizaran las tendencias económicas concentradoras de la tierra y el capital. Es decir, las sostenedoras de este debate no pudieron anticipar que los chacareros y los campesinos correrían una misma suerte y que la situación de los trabajadores se agravaría a partir de una profundización sin límites de las políticas de corte neoliberal. Esto ocurrió, primero, con el decreto de desregulación de 1991 y, luego, con el cambio productivo de la soja transgénica en 1996, enmarcados en un contexto político de muy baja densidad democrática.

La discusión actual focaliza en el acceso a la tierra, las nuevas tecnologías, la redistribución de los ingresos; y también cobra significación el tema de las desapariciones de numerosos agricultores de la famosa franja de la pequeña y mediana producción. El problema de los trabajadores rurales, sus fragmentaciones y polarizaciones son otras novedades de la época actual (véase el artículo de Susana Aparicio en este libro).

Aun sin políticas públicas que tomen en sus manos las condiciones de producción para la convivencia de la pequeña y gran explotación (solo hubo las llamadas “políticas sociales”), la fracción de explotaciones familiares, aunque

disminuida, se mantiene. En los más pequeños, por la persistente actitud de generar organizaciones fuertes y por su persistente lucha (véase la tercera parte de este libro), y en las franjas de los capitalizados, por las estrategias de pluriactividad, cooperativismos, etcétera (véase la primera y segunda parte de este libro).

EL DEBATE ACERCA DEL CAMPO Y LA DEMOCRACIA

Por último, querríamos retomar sucintamente un debate que no tuvo una expresión plena en nuestro país y que ahora se está desarrollando para toda América Latina: aquel que se centra en la relación “agricultura y democracia” o “campo y democracia”, con toda la polisemia que esta supone (véase Grammont, 2005). La Argentina no tuvo históricamente una discusión que examinara las condiciones que aportaba la agricultura a la conformación de una forma de gobierno democrático, planteo que fue significativo en Europa y los Estados Unidos. En nuestro país, como vimos más arriba, las disputas agrarias giraban centralmente alrededor del aporte del sector al desarrollo capitalista. En muchos casos, se daba por supuesto que de este tipo de desarrollo se derivaba,

necesariamente, la formación de una sociedad democrática, suposición muy cuestionada por las teorías sociales y políticas contemporáneas (véase De Sousa Santos, 2000).

Las disquisiciones sobre el desarrollo del capitalismo agrario para el mundo occidental fueron abundantes; recordemos, por ejemplo, que Barrington Moore (1976) dedicó un profundo estudio histórico a los orígenes sociales de las democracias (y de las dictaduras). Su contundente conclusión fue que Inglaterra constituyó el primer éxito en materia de democracias porque supo deshacerse a tiempo de la agricultura como actividad principal. Esta idea acerca de que la industrialización favorecía las democracias, la formación de partidos políticos, etcétera, se constituyó como una marca del pensamiento social occidental por mucho tiempo.

Algunos autores han sostenido que en los países de la periferia próspera fueron impulsados tempranos procesos de democratización, debido, precisamente, a la difusión que tuvo la pequeña propiedad en el medio rural (Vallianatos, 2003 y el mismo Barrington Moore). Se marcaba una fuerte relación entre la forma en que es controlada la tierra y el carácter político de la sociedad. “Por esta razón, los griegos insistían en que pequeños pedazos de tierra debían ser distribuidos entre la mayor canti-

dad posible de ciudadanos libres dentro de sus Estados, para que la democracia fuera la regla y no la excepción” (Vallianatos, 2003: 57). Los promotores de la constitución de los Estados Unidos incorporaron, según Vallianatos (2003: 46-47, 57), el modelo griego de democracia agraria en los fundamentos constitucionales de su república. Eran estos los principios que sustentaban la democracia “jeffersoniana” de los 1800, el *Homestead Act* de los años de 1860 y el desarrollo de la irrigación bajo el *Reclamation Act* en los 1900. “Un sistema de poder basado en la Norteamérica rural como para favorecer a los pequeños *farmers* sería acorde con los principios fundamentales de la Constitución” (Vallianatos, 2003: 57). Pero este modelo pierde vigencia, en los mismos Estados Unidos, a partir del auge de la agroindustria, de las grandes empresas agroalimentarias, denominadas genéricamente como *agribusiness*.

Se puede marcar un paralelismo entre estos procesos y la Argentina. En *Rural life in Argentina*, Carl Taylor (1948) valoriza la presencia de las esferas medias rurales, tanto por su contribución al desarrollo económico, como por su importancia cultural en los mundos sociales del interior del país. Como en Europa y en otros países de América Latina, se relacionó al gran terrateniente (*junker*; latifundista, pro-

pietario de las plantaciones) con condiciones de posibilidad negativas para gobiernos democráticos. Aunque Taylor encuentra en los terratenientes un aporte significativo al desarrollo, considera necesario ponerles límites para garantizar la democracia.

Hoy, el debate de la agricultura y la democracia se da en un doble nivel: primero, se discute qué tipo de configuración social y económica necesita el campo para contribuir al bienestar del conjunto social, que es un aspecto básico de una forma de gobierno democrático, y, en segundo lugar, qué tipo de organizaciones y de actores sociales democratizan el espacio social ocupado por la producción agraria (véase Giarracca y Teubal, 2005).

Este libro trata de contribuir a los nuevos interrogantes, centrados en el modelo agrario actual, a través de discusiones que contienen aspectos actualizados de aquellas problemáticas presentadas en la presente introducción y donde aparecen, además, cuestiones propias de la época (la biotecnología, el rol político desempeñado en toda América Latina por los indígenas y los campesinos, etcétera). Por eso, es nuestra intención aportar a los nuevos debates marcando continuidades y permanencias, pero destacando, fundamentalmente, las singularidades y particularidades de los nuevos procesos.

BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio, S. et al. 1992 “Las transformaciones en la agricultura; el impacto sobre los sectores sociales” en Jorrat, J. R. y Sautú, R. (comps.) *Exploraciones sobre la estructura social de la Argentina* (Buenos Aires: Paidós).
- Arceo, E. 2003 *Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación* (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes / FLACSO, Instituto de Estudios sobre Estado y Participación).
- Archetti, E. y Stölen, K. 1975 *Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Bartolomé, L. J. 1982 “Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en Misiones entre 1971 y 1975. Emergencia de un populismo agrario” en *Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires) Vol. 22, N° 85, abril-junio.
- Basualdo, E. y Arceo, N. 2005 “Incidencia y características productivas de los grandes terratenientes bonaerenses durante la vigencia del Plan de Convertibilidad” en *Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires) Vol. 45, N° 177, abril-junio.
- Braun, O. 1974 “La renta absoluta y el uso ineficiente de la tierra en la Argentina” en *Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires) N° 54, julio-setiembre.
- CEPAL (Shejtman, A.) 1982 *Economía campesina y agricultura empresarial* (México DF: Siglo XXI).
- De Sousa Santos, B. 2000 *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. Vol. 1: Para um novo senso comum. A ciência, o direito e a política na transição paradigmática* (San Pablo: Cortez).
- Delich, F. 1970 *Tierra y conciencia campesina en Tucumán* (Buenos Aires: Edición Signos).
- Etxezarreta, M. 1980 *La evolución del campesinado en el desarrollo capitalista* (Madrid: Ministerio de Agricultura, Secretaría General Técnica).
- Ferrara, F. 1973 *¿Qué son las Ligas Agrarias? Historia y documentos de las organizaciones campesinas del nordeste argentino* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Flichman, G. 1974 “Nuevamente en torno al problema de la eficiencia en el uso de la tierra y la caracterización de los grandes terratenientes” en *Desarrollo Económico -*

- Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires) N° 54, julio-septiembre.
- Flichman, G. 1977 *La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino* (México DF: Siglo XXI).
- Giarracca, N. 1999 “Las ciencias sociales y los estudios rurales en la Argentina durante el siglo XX” en *Estudios Rurales* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. 2004 “América Latina, nuevas ruralidades, viejas y nuevas acciones colectivas” en Giarracca, N. y Levy, B. (comps.) *Ruralidades latinoamericanas. Identidades y luchas sociales* (Buenos Aires: CLACSO-ASDI).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2005 “Democracia y neoliberalismo en el campo argentino. Una convivencia difícil” en Grammont, H. (comp.) *La construcción de la democracia en el campo latinoamericano* (Buenos Aires: CLACSO-ASDI).
- Grammont, H. (comp.) 2005 *La construcción de la democracia en el campo latinoamericano* (Buenos Aires: CLACSO-ASDI).
- Hobsbawm, E. 1996 *The Age of Extremes. A History of the World, 1914-1991* (Nueva York: Vantage Books).
- Laclau, E. 1975 (1969) “Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación histórica a los casos argentino y chileno” en Giménez Zapiola, M. (comp.) *El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina (hasta 1930)* (Buenos Aires: Amorrortu).
- Manzanal, M. 1990 “El campesinado en la Argentina: un debate tardío o políticas para el sector: una necesidad impostergable” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 97.
- Marx, K. (Engels, F.) 1981 *El Capital. Crítica de la Economía Política* (México DF / Buenos Aires / Madrid / Bogotá: Siglo XXI) Libro tercero, Vol. 8.
- Moore, B. 1976 *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia* (Barcelona: Península).
- Polanyi, K. 1957 *The Great Transformation* (Boston: Beacon Press).
- Ricardo, D. 1959 *Principios de economía política y tributación* (México / Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Smith, A. 1964 *The Wealth of Nations* (Londres: Everyman’s Library) Vol. I.
- Taylor, C. 1948 *Rural life in Argentina* (Baton Rouge: Louisiana State University Press).
- Teubal, M. 1975 “Estimaciones del excedente financiero del sector agropecuario argentino” en *Desarrollo Económico* -

- Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires) N° 56, enero-marzo.
- Teubal, M. 2004 “Reseña bibliográfica del libro de Arceo” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 201, enero-febrero.
- Vallianatos, E. G. 2003 “American cataclism” en *Race & Class* (Institute of Race Relations: Londres) Vol. 44, N° 3, enero-marzo.
- Wolf, E. 1973 (1969) *Las luchas campesinas del siglo XX* (Madrid / México DF: Siglo XXI).

EL CAMPESINADO EN LA ARGENTINA: UN DEBATE TARDÍO*

El carácter capitalista del terrateniente pampeano, el papel de la renta del suelo, los procesos de colonización y de consolidación de la unidad familiar presente en todas las regiones del país, las relaciones entre las burguesías agrarias pampeanas y las regionales, la adecuación de la mano de obra a cada período de desarrollo, fueron aspectos relevantes del proceso de evolución agraria capitalista que concentraron la atención de aquellos que buscaban dar cuenta de la cuestión agraria argentina. Aunque existieron y existen campesinos, estos no se tomaron en cuenta en las comprensiones más globales del funcionamiento del agro, situación absolutamente impensable para México, el Perú o Bolivia.

Durante la década de los setenta, antropólogos, sociólogos y economistas de América Latina debatieron acaloradamente sobre la persistencia, funcionalidad o desaparición de la forma social campesina de producción agraria en el contexto de la “modernización” o “internacionalización del capital” en la región. La Argentina no participó en este debate, en parte porque en ese período se vivió bajo la dictadura militar, que no permitió y hasta reprimió toda forma de reflexión crítica pública; los pocos grupos que permanecían en el país discutieron “puertas adentro” y hasta se vieron privados de la recepción de la revista temática de habla hispana más difundida, que por aquellos años hacía su aparición: *Estudios Rurales Latinoamericanos*. Pero, además, es necesario reconocer que “la cuestión campesina” nunca tuvo en nuestro país el peso o la importancia que tiene en Bolivia, México o el Perú. En esos países la persistencia del campesinado está fuertemente

* Giarracca, N. 1990 “El campesinado en la Argentina: un debate tardío” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 94.

relacionada con el pasado indígena y con las reformas agrarias que fueron aplicadas en distintos momentos del siglo XX.

La estructura social agraria de nuestro país reconoce otros orígenes y otros procesos de desarrollo. El carácter capitalista del terrateniente pampeano, el papel de la renta del suelo, los procesos de colonización y de consolidación de la unidad familiar presente en todas las regiones del país, las relaciones entre las burguesías agrarias pampeanas y las regionales, la adecuación de la mano de obra a cada período de desarrollo, fueron aspectos relevantes del proceso de evolución agraria capitalista que concentraron la atención de aquellos que buscaban dar cuenta de la cuestión agraria nacional. Aunque existieron y existen campesinos, estos no se tomaron en cuenta en las comprensiones más globales del funcionamiento del agro, situación absolutamente impensable para México, el Perú o Bolivia.

En la década de los setenta, Archetti y Stölen (1974) se preocuparon por caracterizar a los productores agrarios que utilizan mano de obra familiar diferenciándolos particularmente de los campesinos. Por aquellos años hubo cierto consenso acerca de la conceptualización utilizada en los estudios que involucraban a pequeños productores. Bartolomé (1975) ha-

blaba de “colonos” para referirse a los misioneros; el Grupo de Sociología Rural de la SEAG (1970) decía “minifundistas” cuando describía a los aparceros correntinos y se reservaba la caracterización de “campesinos” para algunos grupos de pequeños agricultores con identidades culturales o étnicas fuertes o demandas típicamente campesinas. Actualmente ese consenso parece haberse quebrado: han aparecido varios estudios que generalizan la categoría “campesino” y la utilizan para caracterizar a todo productor agrario que no utiliza mano de obra ajena o a todo habitante rural que trabaja una porción de tierra. El resultado de ello es que casi la mitad de los productores agrarios del país, según estos estudios, son campesinos o minifundistas.

Esta falta de consenso entre los que trabajamos sobre la estructura social agraria de nuestro país, me impulsó a explicitar la situación y reflexionar sobre esta nueva orientación “campesinista” que se pone de manifiesto en trabajos recientes. Si bien aparecen citados varios autores, tomo como base el trabajo de Mabel Manzanal (1988) “El minifundio en la Argentina: políticas alternativas sobre una realidad poco conocida”. En él, a mi juicio, se sintetizan e integran a otros autores que han trabajado en la misma orientación.

Mi propuesta es contrastar dos formas de mirar a los sectores subalternos del agro argentino, debatir para poder llegar a las formulaciones más adecuadas para sustentar los proyectos de cambio. Estos trabajos son la base de proyectos de desarrollo rural con financiamiento externo, por lo cual la validez de las caracterizaciones de los sectores sociales sobre los que se interviene con políticas concretas, importa tanto académica como políticamente. Por otro lado, estoy segura de que la tarea de producción de conocimiento necesita de la discusión y del libre intercambio de las ideas tanto como de la información cuantitativa o de las buenas técnicas de análisis. Eso que no pudimos realizar durante muchos años, es un ejercicio saludable que debemos retomar.

En síntesis, mi propuesta es reflexionar sobre la base conceptual de esta posición “campesinista” y plantear algunas hipótesis opcionales sobre lo que sucede actualmente en el agro no pampeano.

CAMPESINADO COMO CATEGORÍA ANALÍTICA

Una de las primeras advertencias que nos hace Mabel Manzanal en su trabajo es que no le inte-

resa debatir sobre los posibles contenidos del concepto “campesino”: “No es nuestro interés entrar en este trabajo en el debate de la cuestión del campesinado y en especial sobre quiénes serían, según una definición u otra, campesinos o no en la Argentina, a partir de una defensa de nuestra propia definición” (ibídem: 45). Sin embargo, sus primeras definiciones de minifundistas hacen referencias básicas al concepto: “Entendemos que los minifundistas en la Argentina son asimilables a la categoría de campesinos con ciertas particularidades propias” (ibídem: 145). Estas particularidades son, según Manzanal —y en ello sigue a Pedro Tsakoumagkos (1986)— la producción mayoritaria para el mercado, su coexistencia con otros tipos de productores, su participación en las cadenas de producción agroindustrial, su menor importancia (en relación con otros países de América Latina) en el complejo latifundio-minifundio. Y agrega: “De todos modos los minifundistas en la Argentina son campesinos que viven en niveles de subsistencia, fundamentalmente porque su inserción subordinada en la producción y en los mercados les impide toda posibilidad de acumulación, y esta ausencia de capitalización es la característica determinante en la clasificación de minifundio en la Argentina” (ibídem: 145).

A mi juicio, definir y dar contenido al concepto “campesino” es una tarea previa e imprescindible, sobre todo cuando con él estamos significando sectores sociales sobre los que se programa intervenir. Dentro de las Ciencias Sociales el concepto campesino se ha utilizado para caracterizar distintas situaciones o sectores sociales. El campesino puede ser un pequeño productor, pero también un proletario rural (campesino sin tierra). Por otro lado, es frecuente encontrar el concepto asociado a categorías tales como “economía”, “sociedades”, “cultura” y hasta “modo de producción”. Esta amplia variación en la aplicación del término ha llevado a imprecisiones y confusiones tales que podemos llegar a no saber sobre qué estamos hablando cuando caracterizamos con él a un sector social.

Por otro lado, el campesino es frecuente pero no necesariamente un minifundista. Este último término hace referencia a la escasez del recurso tierra, o a la escasez relativa de tierra y fuerza de trabajo, en tanto “campesino” remite a un conjunto de aspectos económicos, pero también sociales y culturales; un pasado o religión común, historias de luchas sociales que los haya conformado como grupo. “Minifundio” hace referencia a una característica de la explotación, “campesino” a una relación entre la

unidad familiar y la tierra, a una relación social, y básicamente a la relación social de un grupo o sector articulado de una u otra forma al resto de los sectores y a la sociedad en su conjunto.

Una segunda imprecisión de la definición ofrecida por el trabajo comentado reside en la identificación entre “campesinos” y “asalariados agrícolas”.

Son hombres, mujeres, niños y ancianos, algunos criollos, otros aborígenes, que trabajan como haceros, o cosecheros o como simples peones de campo, mientras también producen en una pequeña parcela, un poco para el consumo y otro poco para el mercado, según lo determinen factores climáticos, políticos o económicos, no manejados por ellos. (Ibídem: 114)

En la vasta bibliografía sobre la cuestión campesina aparece reiteradamente la preocupación por establecer diferencias conceptuales y metodológicas entre estos dos sectores —asalariados con tierra y campesinos— que pueden tener un mismo origen, dado los procesos de constante diferenciación interna de los campesinos. Miguel Murmis (1980) pudo aprehender toda la complejidad de este proceso y formular una serie de precisiones acerca de la diferenciación, descomposición del sector o la fran-

ca descampesinización. Existen campesinos ricos, medios y pobres y estos últimos muy fácilmente se transforman en semiproletarios, pero el trabajo fuera de la explotación es temporal y la mayor parte de sus ingresos proviene de la producción; por otro lado se integran gremialmente a asociaciones de productores (cooperativas, uniones de productores). Muy distinta es la situación del “proletario-parcelero”, generalmente golondrina, que, o bien deja a su familia con una huerta de subsistencia o bien sale el grupo familiar completo a levantar cosechas dejando casas y pertenencias a cargo de los ancianos o vecinos. Algunos pueden ser asalariados de origen campesino, otros nunca tuvieron tierra para la producción mercantil, pero la inserción dentro de la economía y de la trama social regional suele ser muy distinta a la de los campesinos que no venden fuerza de trabajo o que lo hacen ocasionalmente y a la de los pequeños productores. En la bibliografía especializada aparece una serie de instrumentos metodológicos para delimitarlos (Patnaik, 1988); también es necesario tomar en cuenta sus representaciones sociales, culturales y gremiales así como la autopercepción como sector o clase social.

La tercera dificultad aparece en la delimitación entre las categorías “campesino” y “peque-

ño productor familiar”. La confusión en este caso se acentúa por lo engorroso que resulta diferenciar en los censos estos dos sectores, pero aun así vale la pena intentarlo conceptualmente. El famoso antropólogo Teodoro Shannin (1975), en uno de sus trabajos más importantes proponía reservar la utilización de la categoría “campesino” para los productores de autoconsumo que mantuvieran independencia de los mercados y con identidades sociales y culturales definidas y fuertes. En tal sentido, los agricultores integrados a los mercados dejarían de ser “campesinos”. Sin embargo la tradición latinoamericana de estudios de la “cuestión campesina” aportó gran cantidad de trabajos, los cuales demuestran que los campesinos han sido integrados a los mercados, a las actividades capitalistas más variadas y a las formas más sofisticadas del desarrollo agroindustrial, sin perder la condición de campesinos aun cuando solo sea formalmente; muchos hablaron de su “refuncionalización” dentro del capitalismo¹.

1 Estas características no están reservadas a los campesinos argentinos como supone Tsakoumagkos (y cita Manzanal), sino que son comunes a gran parte de los campesinos latinoamericanos. Ver Bruno Kervin (1988), Armando Bartra (1979), Norma Giarracca (1985), Arthur Goldsmith (1985).

Pero cuando aceptamos que el campesino es no solo una categoría antropológica e histórica sino, además, sociológica y utilizable para comprender las clases sociales de las sociedades actuales, aparece el riesgo de confundirlo con los pequeños productores familiares. Las diferencias entre ambos no son de matices o de escala de ingresos, sino de tal índole que los hacen sujetos sociales distintos. El “pequeño productor familiar”, “colono”, “chacarero” (o *farmer* en la bibliografía anglosajona), igual que el “campesino”, no utiliza mano de obra asalariada en forma permanente pero, a diferencia de este, es capitalizable, puede acumular. Las condiciones técnicas de su explotación, la combinación en el uso de sus recursos, el incremento en la incorporación de relaciones salariales, lo ubica en una posición que le permite negociar las condiciones de reproducción. La posición de clase del campesinado es diferente, es un sector subalterno; Armando Bartra (1979) ha planteado que es un grupo explotado más, dentro del capitalismo. El campesino puede lograr un fondo de reproducción de su unidad, pero no acumula y no es capitalizable hasta tanto no cambien las condiciones básicas de su inserción en la sociedad (reformas agrarias) o haya modificaciones tales que impulsen acelerados procesos de diferenciación. El “campesino” y

el “pequeño productor familiar” son dos sujetos sociales cercanos pero de naturaleza diferente: se integran de manera distinta a las regiones, a los mercados, a la política.

Delimitar estos dos sectores resulta una difícil tarea a partir de las publicaciones de los datos censales, son necesarias recategorizaciones y pedidos especiales de información para poder llegar a ello. Pero el tema preocupó a técnicos e investigadores que poco más de una década atrás dejaron una vasta bibliografía (Vessuri [1975], Bartolomé [1975, 1982], Archetti y Stölen [1974], Archetti [1975], Forni y Tort [1984]). Estos estudios permiten acercarnos a las regiones de pequeños productores con una visión más compleja de la que nos proporcionan los datos de superficie o la categoría “cuenta propia” de los censos. Es cierto que en estas últimas décadas ocurrieron transformaciones importantes en el agro, pero los datos disponibles como así también los estudios recientes muestran una profundización en las relaciones capitalistas y una expulsión neta de población del sector, lo cual en principio no parece una dirección compatible con la hipótesis de la “campesinización” o aumento del minifundio de subsistencia que sostienen algunos autores.

LA LÓGICA CAMPESINA

¿Cuál es la razón por la cual el minifundista-campesino —según la conceptualización de Manzanal— no puede acumular, a diferencia de un agricultor empresarial? En la primera parte de su trabajo, la clave reside en las racionalidades de uno y otro sujeto.

Los minifundistas no son capitalistas, tienen una racionalidad diferente. No persiguen en su actividad la obtención de la máxima ganancia sino el máximo ingreso neto (aunque no deducen el costo de la mano de obra propia y familiar). [...] Esta racionalidad está asociada, en alguna medida y en ciertos casos, a su propia cultura. (Ibíd.: 147, 148)

No es mi intención entrar en la polémica de si el campesinado tiene o no una racionalidad o conducta diferente a la del empresario, sino señalar que considero que con ello no se puede explicar la situación social subordinada del sector. Algunos autores influidos por el pensamiento chayanoviano ponen en los aspectos subjetivos la clave de la comprensión de la situación de los campesinos; otros como Luis Llambí (1981), se encargaron de refutar estas ideas. Este autor sostiene que, en la medida en

que las vinculaciones entre el sector y el sistema capitalista se consolidan, comienzan a generarse condiciones objetivas que se traducen en la adopción de nuevos patrones de conducta y valoración: una racionalidad común. En nuestro país, con un desarrollo capitalista temprano que integró de una u otra forma a los distintos sectores sociales, resulta difícil sostener la tesis de racionalidades distintas para los pequeños agricultores. La generalización de las pautas y valores capitalistas ha sido tal, que Isla (1988) propone hasta para las comunidades andinas campesinas de nuestro país, la “búsqueda de excedente” como uno de los principios de análisis; como plantea Llambí, citando a Harrison y Patnaik, no debe confundirse lo que el campesino *se propone* con lo que *logra alcanzar* de hecho y muy a pesar de él (1981: 133).

El peligro de las explicaciones de tipo subjetivo sobre la falta de ganancia campesina radica en desconocer o ignorar en el análisis las condiciones objetivas y mecanismos sociales (económicos, políticos, culturales) que conducen a esta situación. No es el caso del trabajo comentado; en efecto, Manzanal adhiere a la hipótesis de la racionalidad campesina, pero arriba a otras conclusiones:

El determinante decisivo que explica esta racionalidad es la nula posibilidad de capitalización que tienen estos productores. No siempre obtienen excedentes y cuando lo obtienen es escaso y les es extraído —precisamente por su condición subordinada— en los mercados con los que se vinculan, como el de comercialización de sus productos y artículos de consumo, el de tierra, el financiero, etcétera. En este sentido el minifundio puede definirse como una unidad de producción-consumo cuyo grado de escasez en recursos naturales y de capital, en relación con los requerimientos promedio para la actividad y la zona en cuestión, *le impide su capitalización y lo obliga* a basarse en el trabajo familiar. (Ibídem: 146, énfasis propio)

En este último desarrollo, las variables explicativas son otras y de índole distinta al anterior. En el primer planteo, los pequeños productores no persiguen la obtención de ganancia, en el último la inserción del sector en la estructura económica (posición subordinada) lo obliga a basarse sobre el trabajo familiar y no capitalizarse². Para el primer razonamiento, el pro-

ductor actúa de tal forma que el resultado es la falta de ganancia y persistencia en el mercado; para el segundo, el sujeto no puede actuar de otra manera, debido a condiciones materiales y objetivas, y cuando puede lo hace, lo cual explica la diferenciación y capitalización de franjas campesinas en todo el mundo.

EL CAMPESINADO EN LA ARGENTINA

El uso generalizado y laxo del concepto “campesino” lleva a que asuma diversos significados sociológicos. Vimos que para algunos autores, “campesino” significa “minifundista”, “proletario”, “población rural pobre”, y estimo, aunque es muy difícil corroborarlo para todo el país, también “productores familiares”. Desde hacía veinte años no se realizaba un censo agropecuario (los resultados del censo de 1988 aún no se conocen), y además, censalmente es complicado diferenciar a un campesino de un pequeño productor familiar. Lo más usual es relacionar la superficie y la utilización de mano de obra ajena/familiar con el grado de mecanización. Difícilmente se puede sostener que un pequeño productor familiar que posee uno o dos tractores es un campesino; en todo caso es un campesino en transición.

2 Es interesante observar que ocurre lo mismo en el trabajo de SEAG (1978); parte de la hipótesis chayano-viana de la “lógica campesina”, pero termina afirmando que el sujeto social minifundista aspira a ganar como cualquier otro sujeto dentro del capitalismo.

Manzanal toma algunos trabajos y arriesga cifras sobre el número de los minifundistas-campesinos del país: “Un bien conocido trabajo (Basco y Rodríguez Sánchez, 1978: 132) calculaba que había en 1969 en el país 234.335 explotaciones subfamiliares (asimilables a la definición dada aquí a minifundio). Estas representaban el 44,5% de las explotaciones agropecuarias del país y ocupaban el 3% de la superficie en explotación” (ibídem: 148). Cita luego un trabajo de Schmalenberger sobre el NOA y el NEA donde se identifican minifundio con hogares con necesidades básicas insatisfechas y cuyo jefe trabaja en el sector agropecuario y en la categoría “cuenta propia”, lo cual arroja 118.200 hogares que representan una población activa de 273.000 personas. “Asimismo equivaldrían a una población total de 600.000 personas en solo dos regiones” (ibídem: 149). Es más, comparando los dos trabajos —el de Basco para 1969 y el de Schmalenberger para 1980— concluye que para el NOA y el NEA hubo un aumento del 10% de esta categoría (minifundio = hogares con necesidades básicas insatisfechas con jefe cuenta propia en el sector agrario).

Para algunos de los que estudiamos la estructura social agraria de nuestro país, estas cifras nos despiertan ciertas reservas. Si casi

la mitad de las explotaciones son minifundias y alojan a campesinos pobres con necesidades básicas insatisfechas, estaríamos frente a una estructura agraria con fuerte contenido campesino en cuanto a la relación social de producción, es decir entre otros aspectos, escasa asalarización y bajos niveles de mecanización. Expondré sobre qué baso mis reservas. Tal vez cuando se publiquen los datos del censo agropecuario de 1988 esta discusión pueda realizarse sobre una base más firme; por ahora utilizo las mismas fuentes de información que la autora.

1

La estimación de 234.335 explotaciones para 1969 que realizó SEAG está basada sobre una proyección para ese año del trabajo de CONADE-CFI de 1960. Organizaron los datos del Censo de 1969 para cuantificar la categoría “subfamiliar” según los cortes por hectáreas que fija el trabajo del CONADE-CFI para cada departamento. Recordemos que aquel clásico trabajo, que formaba parte de un gran estudio que realizó el CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola), constituyó un avance en la percepción de la heterogeneidad de

la estructura social del agro latinoamericano y basaba su tipología sobre el tamaño de las explotaciones y en el valor de la producción. Se estimaba mediante este último indicador la capacidad de la explotación para absorber trabajo familiar/asalariado; el trabajo se realizó con una muestra del total de explotaciones del censo de 1960.

¿Qué riesgos corrieron Basco y Rodríguez Sánchez —que por otra parte los hacen explícitos— cuando a partir de la metodología del CONADE-CFI realizaron la estratificación para 1969? En primer lugar, el censo de 1969 no unifica las explotaciones de un mismo productor si son lotes no linderos, excepto que sean trabajados por el mismo personal, se empleen los mismos elementos de trabajo y respondan a una misma dirección técnica. Esto significa que en algunas provincias en las que el productor tiene varias parcelas pequeñas sin que se cumplan esos requisitos, aparecen como varios minifundios y se elevan los porcentajes.

Otro supuesto que toman los técnicos de la SEAG es que entre 1960 y 1969 no hubo modificaciones sustanciales en la absorción de mano de obra en el estrato subfamiliar y por departamento. Pero como aclaran ellos mismos “en algunos pudieron haberse producido y de hecho se produjeron cambios tanto en el tipo de pro-

ducción como en la tecnología y en la relación costos-ingresos que alterarían la cantidad de mano de obra ocupada en las distintas escalas de extensión y por lo tanto el límite en hectáreas de lo que se considera familiar” (SEAG, 1978: 18).

Recordemos que este trabajo de la SEAG data de 1978 y tiene como mérito propio —aun con todas estas limitaciones— plantear la problemática del minifundio en el país en un momento de severas transformaciones. Pero, a mi juicio, para poder ser usado diez años después hubiese sido imprescindible revisarlo y afinarlo metodológicamente³.

Ese trabajo arrojaba un pequeño aumento en la cantidad de subfamiliares en nivel nacional, pero también demostraba una disminución de este tipo de explotaciones en Tucumán (NOA), Chaco (NEA) y en algunas zonas patagónicas.

2

La segunda fuente de información disponible es el Censo de Población de 1980. Las cifras y

3 Ver la elaboración que realizó *Alejandro Schejtman* sobre el trabajo del CIDA para México. CEPAL (1982).

análisis que sobre ellas se han realizado marcan las siguientes tendencias:

1. Desde el censo de 1960 al último censo poblacional, la población rural decreció sistemáticamente. Representó dentro de la población nacional el 26,8% en 1960, el 20,8% en 1970 y el 17,0% en 1980.
2. En el período 1960-1980 la población económicamente activa agropecuaria se redujo aproximadamente en 150.000 personas, mientras que la PEA total del país creció en casi un millón y medio de personas (CEPAL, 1987).
3. Si se toma la PEA-GD1 (Gran división nacional: agricultura, caza, silvicultura y pesca) la participación de los asalariados en el sector pasó de 48,8% en 1960 a 52,9% en 1980. Si relacionamos esto con la disminución en la PEA agropecuaria de los censados en la categoría "Patrón y socios" (de 19,7% en 1960 se redujo al 7,8% en 1980), podemos comprobar la concentración en la relación asalariados/patrones, destacada en varios trabajos (S. Aparicio, 1986).
4. Además, como destaca el trabajo de CEPAL (1987): "El proceso de creciente asalariación de la mano de obra agropecuaria se verifica en la mayor parte de las provincias, lo cual indicaría en principio que es un fenómeno que abarca a la mayor parte de las producciones" (ibídem: 128).
5. El despoblamiento rural va acompañado de un importante aumento de pequeños centros urbanos en el interior del país (CEPAL, 1987).
6. Es frecuente tomar la categoría censal "Cuenta propia" del censo poblacional como indicador de jefes de explotaciones campesinas. Generalmente esa categoría cubre distintos sujetos: productores agrarios, contratistas de maquinarias, pequeños rentistas. Forni y colaboradores plantean al respecto: "En la actividad agropecuaria [...] hay amplios estratos de trabajadores cuenta propia, muchos de los cuales están altamente capitalizados en maquinarias" (Forni et al., 1988: 170). Con esta advertencia echemos una mirada a las cifras y cambios arrojados en esta categoría. Según los datos presentados por Rodríguez Sánchez (1987), entre 1960 y 1980 los "cuenta propia" aumentaron en 70.937 casos, lo que representa el 4,8% de aumento en la participación en la PEA total. Ese aumento se refleja muy bien en algunas provincias del NEA (Chaco, Formosa y especialmente Misiones) pero no así en el NOA donde se registra una disminución de 4.665 casos. Por otro lado el principal aporte de

este aumento general proviene de la región pampeana con 42.619 casos, zona donde están concentrados los sujetos altamente mecanizados, muy lejos de la condición de campesinos a los que se refiere Forni.

Esta información da cuenta de dos tendencias: a) modificaciones en la organización social productiva: concentración de asalariados por patrones; aparición de nuevos sujetos como los “contratistas de producción accidental” en cereales que aparecen censalmente como “cuenta propia”, pero que sabemos, por los estudios realizados, que están altamente capitalizados; descapitalización e incremento del trabajo familiar en algunas de las provincias del NEA, sobre todo en Misiones y desaparición de pequeñas explotaciones familiares en la región NOA (con excepción de La Rioja); b) despoblamiento rural, crecimiento de poblados en zonas rurales que permiten plantear la hipótesis de incremento de empleos urbanos precarios o abierta desocupación.

CONCLUSIONES

El importante aumento de la producción de un conjunto de granos, básicamente en la re-

gión pampeana, pero también en el resto del país, el crecimiento en la utilización de insumos agroindustriales, el mayor nivel de mecanización, el mayor grado de integración vertical agroindustrial, inducen a pensar que el agro argentino atraviesa una etapa de profundización de las relaciones capitalistas. Es un proceso complejo y contradictorio, pero que deja poco espacio a la duda de su dirección. Por un lado, aparece una fuerte concentración de capital y es muy probable que también de tierra, nuevas formas de organización de la producción, concentración de asalariados por patrones. Por otro, se producen diferenciaciones sociales: aumento del trabajo asalariado, pequeños productores que se capitalizan o se convierten en pequeños rentistas, otros que se “campesinizan” y muchos que son desplazados y marginados pero que, a diferencia de otras épocas, se quedan subsistiendo en la región. Estos últimos son la principal base de los altos índices de pobreza de las zonas rurales que arrojan los estudios pertinentes.

El resultado es una compleja trama de ocupaciones nuevas en las zonas rurales, aumento de pequeños rentistas, desocupados, inactivos, incremento de los empleos precarios y una mayor heterogeneidad de la estructura social agraria. Este proceso necesita de políticas

públicas y, en tal sentido, los proyectos de desarrollo rural con financiamiento externo son una excelente herramienta de intervención. La participación de las organizaciones no gubernamentales, de los técnicos y de los propios interesados muestra la orientación democrática de estos proyectos. En tal sentido quisiera alertar sobre la necesidad de contar con información y conocimiento de las problemáticas generales y particulares como paso previo a la programación participativa. A mi entender, un campesino minifundista, un pequeño productor capitalizable, los asalariados o la población rural desplazada conectada a los mercados de trabajo urbanos, no necesitan la misma política. Por ejemplo, los problemas de la comercialización y los precios, la articulación con las empresas agroindustriales, son problemas prioritarios de los pequeños productores; la tierra es el punto clave del campesino minifundista, para los jornaleros la cuestión básica no está en la producción de subsistencia que pueda o no realizar sino en los mercados de trabajo y en la legislación laboral. Con la conceptualización generalizada de minifundista o campesino, aun con buenas intenciones, se puede llegar a velar estas heterogeneidades y diferencias que es necesario sacar a la luz y respetar en las formulaciones de políticas opcionales.

Por último, quisiera reparar un olvido; reiteradamente Manzanal sostiene que en el país nunca hubo políticas públicas y programas de desarrollo tendientes a mejorar la situación de los pequeños productores y que esa es una novedad que ocurre con el advenimiento de la democracia en 1984 (ibídem: 151, 153). Cabe recordar que en la década anterior, durante el gobierno democrático justicialista, la Secretaría de Agricultura y Ganadería a cargo del Ing. Horacio Giberti diseñó y puso en marcha el Programa de Reconversión de Áreas Minifundistas (PRAM). Ese programa formaba parte de una política global de reformas de fondo para el agro. Tanto la creación de políticas de fondo, como de programas específicos para los más perjudicados por las políticas de ajuste, representan una necesidad impostergable en las actuales circunstancias.

BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio, S. 1986 "Evidencias e interrogantes acerca de las transformaciones sociales en la zona extra pampeana", mimeo.
- Archetti, E. 1975 "Viabilidad estructural y participación gremial en explotaciones familiares. Explotaciones agrícolas y

- tamberas en Santa Fe” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 15, N° 59.
- Archetti, E. 1988 “Ideología y organización sindical: las Ligas Agrarias del norte de Santa Fe” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 28, N° 11.
- Archetti, E. y Stölen, C. 1975 *Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Bartolomé, L. 1975 “Colonos, plantadores y agroindustrias. La explotación agrícola familiar en el sudeste de Misiones” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 15, N° 58.
- Bartolomé, L. 1982 “Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en Misiones entre 1971-1975. Emergencia de un populismo agrario” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 22, N° 85.
- Bartra, A. 1979 *La explotación del trabajo campesino por el capital* (México DF: Macehual).
- CEPAL (Schejtman, A.) 1982 *Economía campesina y agricultura empresarial* (México: Siglo XXI).
- CEPAL 1987 *Despoblamiento rural y cambios recientes en los procesos de urbanización regional* (Buenos Aires: CEPAL) Documento de trabajo N° 25.
- Forni, F. et al. 1988 “El empleo agropecuario en la Argentina” en *La economía agraria argentina* (Buenos Aires: AAEA).
- Forni, F. y Tort, I. 1984 *Las explotaciones familiares en la producción de cereales de la región pampeana argentina* (Buenos Aires: CEIL).
- Giarracca, N. 1985 “Complejos agroindustriales y la subordinación del campesinado. Algunas reflexiones y el caso de los tabacaleros mexicanos” en *Estudios Rurales Latinoamericanos* (Colombia) Vol. 8, N° 1.
- Goldsmith, A. 1985 “The private sector and Rural Development: can agribusiness help the small farmer?” en *World Development*, Vol. 13, N° 10-11.
- Isla, A. 1987 *Persistencia y desestructuración: dos casos para su comparación* (Jujuy: ECIRA, Dto. de Trabajo).
- Kervin, B. 1988 “La economía campesina en el Perú: teorías y políticas” en *Estudios Rurales Latinoamericanos* (Colombia) Vol. 11, N° 1-2.
- Llambí, L. 1981 “Las unidades de producción campesina en un intento de teorización” en *Estudios Rurales Latinoamericanos* (Colombia) Vol. 1, N° 4.
- Manzanal, M. 1988 “El minifundio en la Argentina: políticas alternativas para una

- realidad poco conocida” en *Economía Agraria Argentina* (Buenos Aires: AAEA).
- Murmis, M. 1980 *Tipología de pequeños productores campesinos* (Costa Rica: PROTAAL) Documento N° 55.
- Patnaik, U. 1988 “Ascertain the Economic Characteristics of peasant class in Themselves in Rural India. A methodological and Empirical Exercise” en *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 15, N° 3.
- SEAG (Basco, M. y Rodríguez, S.) 1978 *El minifundio en la Argentina* (Buenos Aires: SEAG).
- SEAG (Rodríguez Sánchez, C.) 1987 *Transformaciones económicas y sociales en el campo argentino* (Buenos Aires: SEAG).
- SEAG 1970 *Investigación sociológica del área tabacalera correntina* (Buenos Aires: SEAG) Pub. N° 28.
- Shanin, T. 1975 “Peasantry as a political factor” en Burns, T. (ed.) *Peasants and Peasant Societies* (Londres: Penguin Books).
- Thompson, E. 1979 *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial* (Barcelona: Crítica).
- Tsakoumagkos, P. 1986 *Sobre el campesinado en la Argentina* (Buenos Aires: CEPA) mimeo.
- Vessuri, H. 1975 “La explotación agrícola familiar en el contexto de un sistema de plantación: un caso de la provincia de Tucumán” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 15, N° 58.

Segunda Parte

AGROINDUSTRIA, AGRONEGOCIO Y EXTRACTIVISMO

DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL A LA EXPANSIÓN DEL “AGRONEGOCIO”: EL CASO ARGENTINO*

NORMA GIARRACCA Y MIGUEL TEUBAL**

INTRODUCCIÓN

Es común escuchar el argumento de que el problema de la pequeña agricultura latinoamericana es la falta de valor agregado a sus propias producciones y que se debería estimular la creación de agroindustrias para salir de la

situación de pobreza. Los organismos internacionales formulan salidas “agroindustriales” a las “agriculturas familiares” y se propone la incorporación de insumos industriales (agroquímicos en general) y el agregado de etapas de beneficio (lo que comúnmente se conoce como la “modernización” agraria).

Estas propuestas “modernizadoras”, que ocupan muchas páginas de organismos nacionales e internacionales, se basan en la situación presente y poco o nada nos dicen de las experiencias anteriores de agroindustrialización en regiones de América Latina donde predominaban agriculturas familiares (pequeños capitalistas o campesinos). Se procede, de este modo, a producir “ausencias”, o lo que De Sousa Santos (2006) denomina un gran “desperdicio de experiencias”. En efecto, en esta etapa de capitalismo neoliberal, predomina una construcción cultural-comunicacional que indica que debemos pensar en un puro futuro, como si todo

* Giarracca, N. y Teubal, M. 2008 “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del ‘agronegocio’: el caso argentino” en Mançano Fernandes, B. (org.) *Campeinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual* (San Pablo: CLACSO - Colección Grupos de Trabajo / Expressão Popular).

** Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

comenzara nuevamente, y muchas de las propuestas de los “expertos” de estos organismos excluyen las experiencias de las poblaciones involucradas, aunque sostengan a rajatabla el principio de la “participación”.

Muchos países de América Latina exhibieron desarrollos agroindustriales importantes que, con las políticas públicas generadas en el período del Consenso de Washington, fueron excluyendo a la pequeña agricultura de sus etapas primarias para conectarse con productores capitalistas o adoptar la integración vertical directa (asumir por sí mismo la etapa).

En este trabajo, nos proponemos reflexionar acerca de las condiciones necesarias para un desarrollo agroindustrial con integración de la agricultura familiar y revisar qué ocurre cuando estas condiciones han sido desbaratadas. Para este fin, nos serviremos del caso argentino, país donde el sector agrario ocupó el centro del crecimiento económico en las últimas décadas del siglo XIX y primera parte del siglo XX y que posteriormente siguió teniendo una importancia relativa. Y esto en relación con el desarrollo no solo de la agricultura cerealera-pampeana sino de las agroindustrias claves como la cárnica o la azucarera. La significación del ejemplo propuesto se basa también en que ha sido uno de los pocos casos,

dentro de América Latina, donde se había configurado una estructura agraria heterogénea, con un sector medio muy extendido y casi sin campesinado, excepto en las regiones denominadas extra pampeanas.

Durante el siglo XX y, sobre todo, en los períodos de expansión del mercado interno, cuando predominó el modelo de Industrialización por Substitución de Importaciones (ISI), los casos de desarrollos agroindustriales, tanto sectoriales como regionales, encontraron los momentos de mayor florecimiento dentro de un sistema de integración con fuertes desigualdades. El excedente de los sistemas agroindustriales era apropiado de modo desigual por los distintos agentes dentro del espacio general (industrias, agricultores, distribuidores, etcétera) y en el espacio agrario en particular (entre los agricultores participantes). Con estas expansiones, se beneficiaron los productores grandes, los medianos y la agricultura familiar. Fue la etapa en la que muchas poblaciones que se desplazaban de una provincia a otra para el trabajo agrario pudieron asentarse y comenzaron a conformar pequeños bolsones de campesinados pobres, que entregaban la producción a estas empresas agroindustriales (la caña de azúcar en Tucumán es paradigmática en este sentido; véase Giarracca et al., 1995).

A nuestro juicio, este esquema agroindustrial comenzó a resquebrajarse a partir de mediados de los años setenta y, luego de un período de transición, en 1991, se lo desbarata con el decreto de desregulación económica del gobierno de Carlos Menem. Desde entonces, no solo se intensifica la desaparición de las agriculturas familiares de las agroindustrias sino que estas mismas sufren fuertes transformaciones. Con la expansión sojera, se impone un nuevo modo de funcionamiento general, con predominio del capital financiero, orientado ya casi exclusivamente al mercado externo y con una tendencia inherente a la concentración de unidades de explotación. A este modelo, como veremos más adelante, lo denominamos *agronegocio*.

Trataremos de sintetizar los dos momentos indicados —el agroindustrial, dentro de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), y el del agronegocio, en el modelo neoliberal— mostrando cómo juegan en cada uno de ellos los productores, las empresas, el capital extranjero, las transnacionales y el Estado. A través de esta tipología de situaciones, no pretendemos cristalizar procesos sino hacer más visibles los puntos clave de la transformación y su resultado actual.

Con el ejercicio intelectual de comparar dos momentos en el desarrollo agrario argen-

tino, deseamos indagar en qué condiciones de posibilidad se habilitaba la articulación de la pequeña agricultura con el crecimiento agroindustrial. Asimismo, trataremos de mostrar cómo esas condiciones —que no son más que un gran andamiaje institucional—, al ser desbaratadas, comienzan primero a arrinconar y luego a excluir a la pequeña agricultura. Este proceso no es muy diferente del que ocurrió en México, entre la etapa del “desarrollo estabilizador” y el actual modelo agrario preparado para el Tratado de Libre Comercio.

DE LA AGROINDUSTRIA A LOS AGRONEGOCIOS

Existe cierta tradición en el país que clasifica el territorio nacional en “regiones homogéneas” basadas en producciones clave. La de mayor significación económica es la *región pampeana*, que incluye —según distintos momentos y regionalizaciones— algunas provincias y porciones de otras; en general, está integrada por Buenos Aires, el sur de Santa Fe, parte de La Pampa, de Entre Ríos y de Córdoba. Su principal producción son los granos y la ganadería y, en las últimas décadas, las oleaginosas, en especial la soja. De igual modo, las denominadas

residualmente *regiones no pampeanas* constituyen una importante porción del territorio nacional agropecuario y también son relevantes.

Las regiones no pampeanas han conocido, a lo largo del tiempo, diferentes formaciones pero, en general, se habla del *Noroeste* (NOA) y *Noreste* (NEA), haciendo referencia al norte andino y al litoraleño, respectivamente; *Cuyo*, para la zona oeste andina; *Centro*, que incluye básicamente Córdoba y, en algunos casos, La Pampa (región pampeana seca); y la gran *región patagónica*, en el sur del país. Actualmente, en muchas de estas regiones, se encuentran cultivos de granos, antes considerados netamente “pampeanos”, o de oleaginosas, como la soja. No obstante, en el período de la conformación agropecuaria, cada región se especializó en una producción básica adecuada a sus condiciones ecológicas. Así, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el NOA fue el centro de la producción cañera; Cuyo, el de la vitivinicultura; el NEA comenzaba la explotación de yerba mate, té, algodón; y la Patagonia tenía una producción lanera con algunos oasis de fruticultura (la región del Valle de Río Negro).

El grueso de la agroindustria centrada en la región pampeana procesaba alimentos y materia prima de origen agropecuario, tanto para el mercado interno como para la exportación.

Sobre la base de esta producción, la Argentina se transformaba rápidamente en uno de los “graneros del mundo”, y exportaba carnes y cereales a la economía mundial. Se trataba de productos que conformaban los alimentos básicos de consumo popular masivo. En las regiones no pampeanas, el procesamiento de los cultivos industriales se orientaba fundamentalmente hacia el mercado interno aunque circunstancialmente una parte podía ser exportada. Desde hace varias décadas, algunos de estos cultivos han venido transformándose en productos de exportación (la manzana, el vino, etcétera).

El proceso de agroindustrialización tiene larga data en el país. Comienza en la etapa *agroexportadora*, o sea, en el período que va de 1880 a 1930, aproximadamente; recibe un fuerte impulso durante la etapa de *Industrialización por Sustitución de Importaciones* (ISI) (1930-1970), cuando se fortalece el mercado interno en el marco de una mejora en la distribución de los ingresos y un aumento de los salarios reales; finalmente, desde mediados de los años setenta y hasta la actualidad —período de la apertura de mercados, ajustes estructurales, extranjerización e impulso a determinados desarrollos tecnológicos— la agroindustria se va transformando en la base de sustentación de los *agronegocios*.

Como se puede ver en los cuadros del apéndice, elegimos dos momentos que, en cuanto modelos agrarios y agroindustriales, difieren radicalmente. El primero corresponde, en términos generales, al modelo agroindustrial dentro del ISI, que entra en crisis en los 1970; y el segundo, al modelo actual, que denominamos del agronegocio, dentro del neoliberalismo. En ambos cuadros aparecen referencias a la tipología regional que hemos explicitado en el párrafo anterior. Podemos plantearnos el interrogante: ¿qué se modifica de un modelo a otro? Nuestra interpretación se sustenta en dos cuestiones básicas: 1) las condiciones políticas que habilitaron esta gran transformación; 2) los cambios en los arreglos institucionales que han sido producto de aquellas condiciones políticas. Desarrollaremos brevemente estas ideas.

CONDICIONES POLÍTICAS Y MACROINSTITUCIONALES PARA LA TRANSFORMACIÓN

Dos momentos históricos recientes nos permiten comprender los contextos en los cuales fue posible la gran transformación agraria de nuestros días: 1) el período de la dictadura militar

(1976-1983); 2) la primera década del regreso institucional a la democracia (1984-1995).

Durante la dictadura de 1976, se desarrolló un proceso caracterizado por una inusual concentración de poder, lo cual posibilitó la puesta en marcha de profundas transformaciones con fuerte disciplinamiento social que crearían las condiciones para que, una década después, ya en democracia, se profundizaran las medidas neoliberales sin grandes costos políticos. En efecto, la apertura de la economía nacional a la competencia internacional, el sobredimensionamiento del sector financiero, el aumento de la deuda —deuda privada externa, que por esos años se traspasa al Estado— fueron medidas y tendencias acompañadas de un alto nivel de represión social y política, que dejó sin margen de acción a los sindicatos y al resto de las organizaciones sociales.

Es importante destacar que, en el sector agrario de esta etapa, los actores tuvieron comportamientos políticos claramente diferenciados. Las Ligas Agrarias, asociación de pequeños agricultores familiares y campesinos, fue objeto de feroces represiones, y sus principales dirigentes sufrieron cárcel, desapariciones y exilio. Otro tanto sucedió con las organizaciones de trabajadores rurales como la Federación Obrera Tucuma-

na de la Industria Azucarera (FOTIA): a su máximo dirigente lo fusilaron en las oficinas de Buenos Aires, el mismo día del golpe de Estado. Así también, la agrupación de pequeños y medianos agricultores, la Federación Agraria, mantuvo en casi todo el período un profundo silencio gremial, no obstante, su máximo dirigente, Humberto Volando, salió en apoyo de los reclamos de los organismos de derechos humanos, sobre todo en los finales de la dictadura. Lo cierto es que las corporaciones ligadas a los grandes productores agropecuarios gozaron de los privilegios de un gobierno que tuvo a varios de sus hombres —mayormente de la Sociedad Rural Argentina (SRA)— en sus filas¹. Hasta el día de hoy, grandes productores e ingenios son acusados de haber colaborado con la desaparición de obreros, campesinos y pobladores².

1 Un caso muy conocido fue el de Jorge Zorreguieta, miembro del Centro Azucarero Argentino, involucrado con el gobierno de la dictadura, quien por esta causa no pudo asistir a la boda real de su hija, la actual princesa Máxima de Holanda. Otro ejemplo es el de José Martínez de Hoz, ministro de Economía del gobierno de facto, quien pertenecía a una encumbrada familia de la Sociedad Rural Argentina.

2 Es el caso de Carlos Pedro Blaquier, acusado de participar en la gran desaparición de obreros del In-

La gran transformación agraria tal cual la conocemos hoy, en términos económicos apenas despuntaba. Es la etapa de la “agriculturización”, cuando se extienden los cereales de la “revolución verde”: nuevas variedades, híbridos que permiten ciclos más cortos y una doble cosecha. Se legitiman los contratos accidentales por una cosecha y surge la figura del “contratista”. Es, además, el momento de la transnacionalización de la industria de insumos, de la profundización de la apertura de los bancos genéticos de los organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del traspaso a las empresas privadas de funciones de investigación y venta de semillas. Pero, aun con estos cambios de lógica y de políticas públicas, los actores agrarios mantenían cierta inercia inherente a la lógica agroindustrial de las etapas anteriores. Tenuemente, el sector terrateniente va siendo amenazado en su poder

genio Ledesma, de su propiedad. Recientemente, se ha elevado un pedido a la Justicia para que se reabra el caso en su contra, en el contexto de las modificaciones de las leyes de amnistía llevadas a cabo por el gobierno de Néstor Kirchner. Veremos, por otro lado, lo que ocurre en los casos de encumbrados actores económicos.

histórico frente al avance de los actores del agronegocio y otros provenientes del sector financiero, que comienzan a incidir significativamente sobre los procesos agrarios.

Se necesitó unos cuantos años —los primeros de la democracia— para que el sector terrateniente se adaptara al nuevo modelo de la economía general, participara en privatizaciones y hasta llegara al Congreso Nacional con diputados propios que levantaron la defensa sectorial. También sus encumbrados dirigentes participaron en la nueva configuración económica y política que ya se perfilaba como irreversible. Precisamente, con el regreso a la democracia en 1984, durante el gobierno del Partido Radical, se van desplegando lentamente los cambios estructurales preanunciados en el período anterior: se discuten las privatizaciones paralelamente a la sistemática crítica al Estado en sus funciones empresariales, se mantiene la centralidad del sector financiero, el sector agrario comienza lentamente a incorporarse al nuevo modelo económico y sociocultural. No obstante, la profundización llega con el gobierno de Carlos Menem y el plan de convertibilidad aplicado a partir de 1991.

Por efecto del nuevo plan económico, que imponía el control de salarios, las condicio-

nes laborales se flexibilizaron. A esta situación se llegó no solo por la tragedia de la década del proceso militar sino también por varios “golpes económicos”, que desataron una hiperinflación y una fuerte desestructuración de lazos sociales, resultado de varias etapas de “saqueo” en todo el país. Pero, para el sector agrario, el bajo costo de la mano de obra no llegaba a compensar las consecuencias de la convertibilidad y la consiguiente sobrevaluación del tipo de cambio. El sector sufrirá especialmente esta situación y comenzará el período del endeudamiento. Millones de hectáreas hipotecadas, restricciones a las posibilidades de colocación en mercados externos y depreciación del mercado interno por los bajos salarios conformaron las bases de una importante crisis agraria, a pesar de los aumentos de productividad global (el sector aumentó un 20% su producción total en volúmenes entre 1993 y 1999). En los primeros años de la convertibilidad, aumentaron los precios agrícolas externos, con un pico en 1995-1996; tendencia que luego se revirtió y se tradujo, al concluir el siglo, en caídas sustanciales para los principales productos del sector. Sumemos a esto que los insumos agropecuarios aumentaron en pesos/dólar. En la segunda mitad de la década, cayeron

sustancialmente los precios relativos producto/insumo, principales sostenes del nivel de rentabilidad.

En 1993 y 1994, se desencadenó una serie de paros y marchas agrarias, hasta que, en 1996, apareció una propuesta de “salida”. Se trataba de profundizar el modelo neoliberal dentro de la agricultura, lo que vino de la mano de la autorización del uso de la semilla transgénica y de la expansión de la producción sojera.

En definitiva, las condiciones de posibilidad de profundización del modelo neoliberal en la agricultura argentina, el agronegocio, tuvo que ver con tendencias globales impulsadas por los organismos y empresas internacionales pero también con las intervenciones del Estado nacional, las presiones de los grandes grupos económicos y las respuestas de los diferentes actores en cada una de estas coyunturas. Hubo que desarmar la vieja sociedad conformada por la anterior etapa del capitalismo —ISI— tanto con represión como con otros dispositivos dentro de la democracia —los golpes económicos— para establecer el nuevo país neoliberal.

EL ESTADO Y LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES³

Como vemos a lo largo de este trabajo, la condición de posibilidad para la convivencia de actores muy desparejos en un mismo espacio económico, donde las asimetrías son muy marcadas, es construida por la intervención reguladora del Estado. Así, terratenientes, fuertes agroindustrias y medianos y pequeños productores y campesinos solo pueden coexistir (con participación desigual en el usufructo del excedente generado) si el Estado interviene con políticas públicas de regulación. Esto, que es una de nuestras conclusiones más importantes, amerita un análisis de las razones por las cuales el Estado, en la etapa conocida como de ISI (en nuestro país), o de “Estado de bienestar” (en casi todo el mundo), adoptó una política intervencionista que reguló el espacio económico, además de ofrecer servicios estatales gratuitos o de muy bajo costo en educación,

3 Agradecemos los comentarios de Carlos Vacaflores, en ocasión de la presentación de este artículo en Tarija, acerca de por qué el Estado se ha comportado de forma tan disímil en la etapa anterior y en la actual. Es a raíz de sus observaciones que incluimos estas reflexiones teóricas.

salud, vivienda, alimentación, etcétera (lo que se denominan derechos de segunda generación o derechos sociales) y decidió tener en sus manos el control de los servicios de transporte, explotación energética y otros.

En un clásico trabajo de Nicos Poulantzas —publicado en una recopilación de los *Cuadernos de Pasado y Presente* (Poulantzas, 1975)— acerca de la hegemonía del Estado moderno, el autor sostiene que aunque este corresponde o expresa los intereses privados de las clases dominantes “mediante una proyección ‘ideológica’ claramente mistificadora, se proclama la esfera del interés universal” (Poulantzas, 1975: 54); su proyecto incluye a la “sociedad civil” en la reproducción de sus condiciones materiales de vida y en la integración a la producción y el consumo. Los denominados “Estados de bienestar” solo pueden ser comprendidos en función de las diferentes evoluciones de la hegemonía de clases. Citando a André Gorz, señala Poulantzas que las funciones sociales del Estado moderno están subordinadas a la labor principal de regulación de la producción, correspondiente a los intereses de la fracción hegemónica. Entonces, el papel realmente hegemónico del Estado reside en el hecho de que este representa el interés del conjun-

to de las fracciones dominantes del capital pero se presenta como entramando el interés general. La salud, la educación, etcétera, de los sectores subordinados así como el transporte público o las fuentes de energía, antes del Estado de bienestar en manos privadas y luego estatizados por este, constituyeron un prefinanciamiento público de las bases de expansión y de acumulación monopólica (Gorz, citado por Poulantzas, 1975).

En otras palabras, podemos decir que la reproducción de los sectores subordinados (trabajadores, medianos y pequeños productores, campesinos, etcétera) estaba implícita en la lógica capitalista, y el Estado moderno funcionaba como financiador de las condiciones de reproducción social de esos sectores. El Estado, a través de estas actividades de producción de hegemonía, incluía al conjunto de la sociedad en un sistema de desigualdad.

Conocemos demasiado bien los cambios ocurridos en el capitalismo a partir del Consenso de Washington, centrados en procesos de globalización que incluyeron no solo prácticas financieras sino todo un modo de organizar la producción, la distribución y el consumo mundial. Los Estados nacionales pierden la centralidad en la evolución de la regulación y aparecen nuevos actores inter-

nacionales —Fondo Monetario, Banco Mundial, entre otros— que son los que van marcando las políticas a seguir: desregulación, privatización de los servicios públicos, expansión de empresas privadas de energía, de servicios de agua, aperturas al exterior, etcétera. En lo político, como sostiene De Sousa Santos (2000), se pasó del “consenso” conseguido por el Estado moderno (nacional), en tanto se gobernaba en nombre de “un interés general”, a una propuesta de pura “resignación” (“el futuro puede ser aún peor”). Las transformaciones internacionales, la caída del mundo socialista y la falta de un pensamiento político emancipador nuevo coadyuvan a ello. Las clases dominantes no buscan consensos, en tanto están muy seguras de que no hay alternativas posibles a las ideas y soluciones que defienden. “Lo que existe no tiene que ser aceptado por bueno. Bueno o malo, es inevitable, y en base a esto es que se tiene que aceptar” (De Sousa Santos, 2000: 35).

En ese cambio de contexto económico, político, cultural e ideológico, se toman medidas que desbaratan la red institucional que permitía la inclusión en la producción, en el consumo, en la educación, en la salud, etcétera, de millones de personas en todo el mundo. Argen-

tina no solo no fue la excepción sino que fue pionera en estas renovaciones.

Con las transformaciones del siglo XXI, en el marco del contexto latinoamericano, el Estado va adquiriendo nuevas funciones que, como dice el pensador uruguayo Raúl Zibechi, supone el control de los pobres no organizados por medio de subsidios del Banco Mundial; ya no es el Estado benefactor ni el Estado neoliberal, es el Estado de los subsidios. Es una configuración estatal en formación, que deberíamos tener cuidado al caracterizar (*lavaca*, julio de 2006). En la Argentina, la conexión del Gobierno con sectores populares mediante la red de subsidios aporta a esta nueva idea de Zibechi, pero en el sector agrario la preeminencia del modelo del agronegocio le deja poco margen al Estado para intentar una política asistencialista (electoralista) con los sectores populares —además de que no representan un gran número—, como los desocupados urbanos. La necesidad de tierras de los inversores sojeros reclama la mirada complaciente de los poderes judiciales de las provincias más articuladas con el proyecto presidencial⁴.

4 En el año 2006 el gobierno nacional avanzó en la cooptación del recientemente creado movimiento campesino e indígena nacional. Varios de sus técnicos asumie-

DE LA ISI AL NEOLIBERALISMO

En este trabajo, señalamos que el complejo agroalimentario de nuestro país se fue transformando de un sistema basado en la expansión agroindustrial en otro basado fundamentalmente en el agronegocio. A continuación, consideraremos en términos globales estas etapas diferenciadas del desarrollo agrario argentino, incluyendo el papel del Estado.

CONFORMACIÓN DEL MODELO ISI

Las dos guerras mundiales y la crisis de los años treinta ponen de manifiesto las vicisitudes del modelo agroexportador, impulsado desde fines del siglo XIX, cuando nuestro país se integró a la economía mundial y, junto con

ron la dirección del programa asistencial para el sector así como anteriormente varios dirigentes del movimiento piquetero asumieron cargos de gobierno en las áreas asistenciales. Estas integraciones al gobierno nacional no se expresan en cambios de políticas: la polarización social sigue en aumento, los nuevos puestos laborales son informales, las apropiaciones de las tierras campesinas e indígenas por parte de los inversores aumentaron y estas siguen siendo con violencia estatal o privada; la ley para detener los desmontes no se pudo aprobar.

países como Canadá, Australia e, incluso, los EEUU, se transformó en uno de los “graneros del mundo” en razón de sus exportaciones de granos y carnes. Ese modelo o régimen de acumulación entra en crisis a raíz de la caída vertical de los precios de sus exportaciones y del cierre de los mercados de exportación tradicionales. La conjunción de medidas tomadas por el gobierno argentino para conjurar la crisis — el control de cambios, un régimen arancelario para las importaciones, la creación del Banco Central, la instauración del impuesto a los réditos, la creación de diversas organizaciones reguladoras de la actividad agropecuaria (Junta Nacional de Carne - JNC, Junta Nacional de Granos - JNG y Dirección Nacional del Azúcar - DNA)— tuvo como consecuencia el desarrollo del mercado interno y la instalación de una serie de industrias relacionada con él. Las políticas de ISI continuaron en los años cuarenta, cuando se impulsaron industrias livianas, alimentarias, textiles, de artefactos para el hogar, etcétera, que se compatibilizaban con las políticas de redistribución de los ingresos entre los sectores populares, constituidas como ejes fundamentales del fortalecimiento del mercado interno. Vemos así cómo el alza de los salarios reales, directos e indirectos, característica de esa década, fue compatible con el desarrollo

de una industria orientada hacia el mercado interno sustentado en la producción de “bienes salario”. Al mismo tiempo, como se plantea en el apartado anterior, fueron nacionalizados los servicios públicos y ciertos sectores considerados estratégicos —la siderurgia, el carbón, el petróleo— y, por ende, susceptibles de mantenerse bajo la égida del Estado.

La política de ISI se expande aun en los años sesenta, en un marco de políticas *desarrollistas*. En ese momento, se pasó a una segunda fase de ISI, con la implantación de la industria pesada, por ejemplo, la automotriz, la petroquímica. Si bien se impulsó la promoción de la inversión extranjera, las industrias estratégicas productoras de petróleo, de carbón y la siderúrgica continúan teniendo un fuerte componente estatal.

En el sector agropecuario, la presencia de un fuerte sector *chacarero* en la región pampeana coexistía con otro de grandes explotaciones ganaderas. Los terratenientes pampeanos, agrupados en la Sociedad Rural Argentina, ejercían un gran poder político en el ámbito nacional, con cargos ejecutivos durante los gobiernos militares y con fuertes *lobbies* durante la alternancia de gobiernos democráticos. A comienzos de siglo, empezó a prevalecer un sistema de arrendamiento, en especial, en regiones de la provincia de Buenos Aires. Se

trataba de “compatibilizar” la producción cerealera con la ganadera mediante sistemas de arrendamiento: los grandes ganaderos podían proveerse de mano de obra agropecuaria, proveniente en gran medida de Europa, sin perder el control de la tierra y, por consiguiente, su poder político. El censo de 1937 denota un fuerte componente de arrendatarios en la estructura agraria argentina. Se produce también un fuerte proceso de colonización, que potencia al sector chacarero de nuestro país.

Las primeras décadas del siglo marcan un período de lucha del sector chacarero por mejorar sus condiciones de vida y de acceso a la tierra, por regular los arrendamientos, el crédito a su sector, etcétera. Muchas de estas contiendas finalmente se plasmarán en legislación efectiva establecida durante la etapa de ISI, en particular durante el primer gobierno peronista. Es decir, el tipo de lucha gremial de los pequeños y medianos agricultores en esta etapa es por conquistar un mejor posicionamiento en el sector.

Políticas agropecuarias durante la etapa ISI

Tal como señalamos más arriba, durante el período ISI se adoptan determinadas medidas macroeconómicas —la implantación del control de cambios, en los años treinta, o la creación

del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), en los cuarenta, en la primera etapa del gobierno de Juan Perón— que habrán de incidir directamente sobre el sector agropecuario. En efecto, el Estado profundiza su papel primordial en materia agropecuaria. Se crean organismos de control que, hasta su defunción en el año 1991, definen aspectos esenciales de la política agropecuaria: precios sostenidos, medidas anticíclicas, etcétera.

La producción se vendía en forma directa —generalmente a través de cooperativas— a empresas agroindustriales, acopiadores y exportadoras. La JNG intervenía con frecuencia estableciendo precios sostenidos, necesarios para mantener la rentabilidad, particularmente de los medianos y pequeños productores. En el área del procesamiento industrial de esta producción, prevalecían algunas grandes empresas, conjuntamente con un grupo importante de empresas medianas y pequeñas. Igual situación se presentaba en la distribución final de alimentos, caracterizada por gran cantidad de “pymes” (pequeñas y medianas empresas), mercados de concentración diversos e infinidad de pequeñas bocas de expendio (almacenes, verdulerías, etcétera).

Dentro de las cadenas agroindustriales de la región pampeana, existían molinos, aceiteras,

silos y otras industrias vinculadas al procesamiento de alimentos. Se registraban algunas grandes empresas, generalmente nacionales, pero también infinidad de pymes, en varias de las cuales predominaba el trabajo familiar, por ejemplo, en el sector panadero. Las exportaciones estaban, en general —salvo el caso de Bunge & Born, que operaba como una empresa transnacional, o la Asociación de Cooperativas Argentinas—, en manos extranjeras. En lo referente al procesamiento industrial de las carnes, la cadena englobaba a muchos sectores: partiendo desde los matarifes, vinculados a la comercialización, hasta desembocar en el mercado interno, en una serie de carnicerías, locales relativamente reducidos que servían a los intereses de los barrios o localidades pequeñas. Persistían grandes frigoríficos nacionales y extranjeros —aunque también los había medianos y pequeños— que se dedicaban a las exportaciones cárnicas, actividad sustancialmente regulada por el Estado a través de la JNC. Cabe destacar la preponderancia de la ganadería vacuna frente a otros productos ganaderos (caprino y ovino) y el crecimiento de la avicultura, fundamentalmente en función de los denominados “pollos de campo”.

El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), creado en 1944, tenía

por función el monopolio del comercio exterior, convirtiéndose en uno de los ejes del proceso de redistribución del ingreso y de la renta agraria en favor de la pequeña y mediana industria nacional. En noviembre de 1943, el Decreto 14.001 se hace eco de los reclamos de los arrendatarios y se concede una rebaja obligatoria del 20% en el precio vigente para los arriendos, una medida fuertemente apoyada por la Federación Agraria Argentina, que la consideraba como un paso previo a la resolución del histórico problema de “la tenencia de la tierra para quien la ocupa y la trabaja”. Otras medidas que impulsó el gobierno nacional son el Estatuto del Peón, de 1944, el Estatuto del Tambero-Mediero, diversas disposiciones tendientes a la sindicalización de los peones estacionales o transitorios y otras propuestas de reforma agraria sustentadas por el Consejo Agrario Nacional.

En síntesis, se promulgaron normas económicas, políticas de tierras y concesiones laborales que, junto con una creciente presión nacional sobre la tierra, se combinaron con los bajos precios que el IAPI pagaba a los productores rurales, por lo menos en los últimos años de la década del cuarenta. Esto dio como resultado un decaimiento del área sembrada por el sector, que pasa de 27,6 millones de hectáreas

en 1946-1947 a 23,6 millones de hectáreas en 1950; en tanto que, entre 1946 y 1949, el volumen de la producción agrícola declina en más de un 10%. A partir de 1950, el gobierno revisa su política económica e incorpora a ella una serie de medidas de corte liberal que revierte tendencias manifestadas anteriormente. Se hace hincapié en los incentivos que requiere el sector agropecuario, en que “el campo necesita seguridad y tranquilidad para producir”, en que las reformas sociales deben ser equilibradas o en que “no hay latifundio si la tierra produce”.

Tras el derrocamiento del presidente Perón, en el año 1955, muchas de las políticas que caracterizaron a su gobierno son modificadas. Priman nuevamente los intereses agropecuarios tradicionales, que presionan al gobierno para dismantelar gran parte del andamiaje institucional. Sin embargo, en 1957, se crea el INTA, como base de sustentación para impulsar un agro cada vez más tecnificado y enmarcado en los preceptos más preclaros del *desarrollismo*. Se liberaliza en gran medida el control de cambios y el comercio exterior. Comienza un período de grandes pujas sectoriales entre los diversos agentes de la economía, en particular entre el agro y la industria o, mejor dicho, entre sectores agrarios y los asalariados urbanos, estos últimos asociados a la mediana

y pequeña empresa industrial orientada hacia el mercado interno. Los economistas caracterizan la década del sesenta como un período de importantes procesos cíclicos, políticos y socioeconómicos y de conflictos que se manifiestan en función de intereses divergentes. En cuanto a la política global, comienza a aplicarse planes de estabilización impulsados por el FMI, que tienden a favorecer a los sectores tradicionales del agro, en detrimento de los intereses urbanos tanto sindicales como empresariales. Uno de los mecanismos más utilizados para favorecer al sector agropecuario es la política de devaluación del tipo de cambio. Dado que las exportaciones de nuestro país seguían siendo predominantemente de origen agropecuario, una devaluación favorecía fundamentalmente al “sector” (a los grandes productores agropecuarios, pero también, en alguna medida, a los medianos y pequeños). Sin embargo, estas devaluaciones tenían efectos recesivos importantes, ya que, entre otras razones, el alza de los precios de los alimentos incidía en la caída de los salarios reales. Por su parte, esto afectaba a la demanda global de la economía, profundizándose sus efectos recesivos. Como consecuencia, surgían conflictos y presiones sindicales sobre el gobierno para el logro de la correspondiente recomposición salarial que, a

su vez, se compatibilizaba con una mayor reactivación económica.

Los años sesenta se constituyeron en un período de importante crecimiento del PBI, manteniéndose en un nivel alto la participación de los salarios en el ingreso global. También crece ostensiblemente la producción agropecuaria. El modelo de ISI comienza a modificarse en forma considerable a mediados de los años setenta.

EL ISI Y LA AGROINDUSTRIA REGIONAL

Tanto los pequeños productores campesinos como los que lograban algún tipo de capitalización dentro de las agroindustrias regionales provenían de colonizaciones de inmigrantes europeos (los algodóneros, los yerbateros, los tealeros) o de los asentamientos de poblaciones que buscaron dentro del país producciones en expansión, primero para conseguir trabajo como asalariados y luego para fundar distintos tipos de asentamientos (ver Giarracca y Aparicio, 1991). El economista Pedro Tsakoumagkos (1994) sostiene que la combinación agroindustria-campesino fue significativa en estas regiones, aun cuando en ningún caso se tratara de ofertas exclusivamente campesinas. Nos detendremos en el caso de la caña, tanto

por conocer su período de expansión y su crisis actual como por resultar paradigmático en relación con la integración de campesinos y productores capitalistas de todos los tamaños.

En el complejo agroindustrial cañero, el proceso de articulación entre cañeros independientes e ingenios se profundiza en el siglo XX y es resultado de una serie de políticas del primer gobierno del Partido Radical (1916-1930) y del primer gobierno del Partido Justicialista (1946-1955). En esta relación entre agroindustria privada y productores independientes (mayoritariamente campesinos en la provincia de Tucumán) fue fundamental la presencia directa del Estado, así como la generación de políticas regulatorias. En efecto, diversos estudios dan cuenta de una serie de intervenciones estatales, que van desde la generación de políticas públicas que protegieron a la industria de la competencia internacional (tarifas aduaneras) hasta la creación de la CONASA (Comisión Nacional Azucarera), en 1970, para nuclear a los ingenios con dificultades financieras o directamente para la compra de ingenios. En síntesis, la actividad cañera-azucarera es paradigmática en el país como sistema agroindustrial con integración campesina. Desde su surgimiento, estuvo fuertemente regulada, y la configuración que había

adquirido hacia 1991 solo puede comprenderse por las distintas intervenciones estatales. La Dirección Nacional del Azúcar, entidad pública desbaratada en 1991, intentó distintas formas de organización de la producción y la comercialización para que hubiese mayor redistribución del excedente del sistema. En el último periodo, antes de que Menem asumiera, hubo interesantes intervenciones que favorecieron la formación de cooperativas y que aumentaron los ingresos campesinos.

Procesos parecidos encontramos en la agroindustria tabacalera, con fuerte presencia campesina tanto en el NEA como en el NOA, en la del cultivo del arroz, la yerba mate, el té, el algodón, la fruta fresca, etcétera.

HACIA UN SISTEMA DE AGRONEGOCIOS EN LA ARGENTINA

A mediados de los años setenta, se estableció otro tipo de “disciplina institucional” a fin de poder impulsar eficazmente un nuevo modelo socioeconómico: el neoliberal⁵. Comienza

5 Consideramos que, a diferencia del modelo ISI, las características del modelo general del neoliberalismo son más conocidas por todos, tanto por la vasta biblio-

a dársele cabida —en forma por demás desproporcionada— al sector financiero y, por ende, al endeudamiento externo, que habrá de transformarse en el condicionamiento más importante del desarrollo de nuestro país en las décadas siguientes. En los años noventa, ya bajo el gobierno de Menem, se establece el plan de convertibilidad que, si bien logra frenar las tendencias inflacionarias del período 1989-1991, tenía por finalidad primordial establecer las condiciones para impulsar un fuerte “ajuste estructural” y la “integración a la economía mundial”. Se proclama la primada del “mercado” en todos los órdenes del quehacer nacional. La desregulación de la economía, en particular en lo que atañe al mercado laboral y al sector agropecuario, conjuntamente con las privatizaciones realizadas a mansalva a comienzos de la década y la apertura indiscriminada hacia el exterior, fueron todos elementos del modelo neoliberal que se implantó en nuestro país, quizás con mucha mayor severidad que en otros países latinoamericanos.

grafía sobre el tema como por la experiencia cotidiana que tenemos de él.

EL DECRETO DE DESREGULACIÓN DE 1991: HACIA EL AGRONEGOCIO

El decreto de desregulación de 1991 formó parte de un paquete de medidas tendiente a la liberalización plena de la economía. Algunas de las entidades disueltas por esta norma son las siguientes:

1. el Mercado de Concentración Pesquera de Mar del Plata, el Instituto Nacional de Actividades Hípicas, el Instituto Forestal Nacional y el Mercado de Hacienda de Liniers;
2. la Corporación Argentina de Productores de Carne, incluyendo la venta de sus activos;
3. la Junta Nacional de Granos, que se ocupaba, entre otras medidas, de otorgar adelantos para las exportaciones, fijar precios de garantía (sostén), estimular convenios de país a país y llevar la estadística de los principales cereales y oleaginosas;
4. la Junta Nacional de Carnes, cuya disolución se lleva a cabo simultáneamente con la privatización del Mercado de Liniers, el principal ente concentrador de la comercialización de carne;
5. la Dirección Nacional del Azúcar, que regulaba la producción de caña desde la producción primaria (estableciendo cupos de pro-

- ducción) hasta la entrega final al mercado interno (cuotas de comercialización);
6. la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que establecía cuotas de producción, así como una serie de mecanismos que regulaban la comercialización final;
 7. además, se disolvieron diversas regulaciones sobre vitivinicultura, se liberó la plantación, reimplantación o modificación de viñedos, así como la venta y el despacho de vinos. Se redefinen las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura, limitando sus funciones al control de la genuinidad de los productos vitivinícolas (Giarracca, 1993: 24).

En el mismo decreto se establecen medidas que fortalecen la desregulación del comercio interior de bienes y servicios, del comercio exterior, de regímenes de gravámenes a las exportaciones, del sistema de transporte, etcétera. También se acotó el alcance del Fondo Especial del Tabaco, al permitir que sus recursos fueran utilizados por Rentas Generales del Ministerio de Economía. Estas medidas tenían por finalidad *acercar el sector al mercado*. De golpe, el sector agropecuario argentino se transformó en uno de los más desregulados y abiertos del mundo, sujeto mucho más que

antes a los vaivenes de la economía internacional (Giarracca, 1993; Teubal y Rodríguez, 2001: 73-74).

Esta política impactó decisivamente en el sector agropecuario y, en particular, sobre los medianos y pequeños productores y trabajadores rurales. La fijación de determinados precios agropecuarios, las condiciones de entrega, las cantidades a producir, etcétera, dejaron de estar reguladas por el Estado, mientras que la articulación entre el productor agropecuario y el semillero, el acopiador, la industria o el supermercado se vio súbitamente transformada.

IMPACTOS SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA Y OTRAS CONSECUENCIAS

Decíamos que, desde mediados de los años setenta, y potenciado por el cambiante marco institucional que refleja el decreto de desregulación, surge en nuestro país un nuevo régimen de acumulación y de política económica, denominado de “apertura” con “ajustes estructurales”. A partir de entonces, son los agronegocios los que influyen en forma destacada sobre el sector agropecuario, mediante la provisión de insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial y la comer-

cialización de la producción local, tanto para el mercado interno como para la exportación.

Este vasto sistema de agronegocios se manifiesta en gran medida en función de la primacía que adquieren la producción de soja y el paquete tecnológico que la acompaña. Dicho cultivo, que comienza a realizarse en gran escala en los años setenta, adquiere un cariz muy especial a mediados de los noventa, cuando se libera al mercado el cultivo de la soja transgénica. Este desarrollo se manifiesta en detrimento de la ganadería, de otros cereales tradicionales y de cultivos industriales del interior del país.

Las grandes empresas semilleras, combinadas con las que venden los agrotóxicos —introducidos en forma creciente en el sector—, adquieren una preeminencia inusitada en el sistema agroindustrial de nuestro país, en gran medida potenciada como consecuencia, primero, de las denominadas revoluciones tecnológicas de los híbridos (la revolución verde) y, más recientemente, de los transgénicos (la revolución biotecnológica).

En la Argentina, estas grandes empresas se conectan con el sector financiero, formando los denominados “pools de siembra”, que transforman al sector en un negocio financiero. Algunas veces compran tierras, otras operan con “contratistas” que arriendan tierras y

proveen la maquinaria, el equipo y los agroquímicos necesarios para impulsar la producción de los *commodities* requeridos por el mercado. El agro se transforma cada vez más en un productor de *commodities*; y, cada vez menos, constituye un medio de vida para la mayoría de los productores agropecuarios, especialmente para los productores familiares. Asimismo, el país va perdiendo su calidad de productor de alimentos básicos. Se van conformando los denominados complejos agroindustriales, con grandes empresas que extienden su poderío “hacia delante” y “hacia atrás” en la cadena agroindustrial, integrándose verticalmente, sea en forma directa o mediante alguna forma de agricultura de contrato.

Se potencia *una agricultura sin agricultores*. Los productores agropecuarios, en especial los medianos y pequeños productores familiares y los campesinos, son desplazados por grandes productores o terratenientes y por grandes empresas favorecidas por un proceso de sojización que privilegia las “economías a escala” orientadas a las exportaciones, en oposición a las necesidades de los productores familiares. La escala de producción requerida para los nuevos cultivos, fundamentalmente la soja transgénica, es cada vez mayor, lo que excluye a los productores medianos y pequeños,

así como la producción de *commodities* desplaza a los tradicionales alimentos básicos de consumo popular masivo.

El cultivo de la soja en nuestro país crece notablemente. La producción pasa de 3,7 millones de toneladas en 1980-1981 a 10,8 millones en 1990-1991 y a 35 millones en 2002-2003. Se prevé que en la actual campaña (2006) alcanzará entre 38,5 y 40 millones de toneladas. Esto significa que la soja, que expresaba el 10,6% de la producción de cereales y oleaginosas en 1980-1981, pasa a representar casi el 50% en el período 2002-2003. La mitad de la superficie que se destina a la producción de estos cultivos se utiliza para producir soja. En la actualidad, la casi totalidad de la producción sojera es transgénica y se destina a la exportación. En el año 2005, las exportaciones de los diversos productos sojeros representaban 8.460 millones de dólares, es decir, el 24,5% del total. La mayor parte de las exportaciones de soja eran harinas y otros subproductos del aceite de soja, que se destinan fundamentalmente al consumo animal de los países europeos. Después de la crisis de la “vaca loca”, la soja se transformó en uno de los alimentos balanceados más apetecibles para alimentar los pollos y los cerdos del antiguo continente. Evidentemente, no es un cultivo que necesariamente contribuye a pa-

liar el hambre en el mundo y, menos aún, en nuestro país.

El *boom* sojero se da en detrimento de otros productos cerealeros y oleaginosos. Entre las campañas agrícolas de 1997-1998 y 2004-2005, la producción sojera aumentó en casi 20 millones de toneladas, mientras que la de girasol cayó 2 millones, la de arroz 0,5 millones y la de maíz se mantuvo más o menos constante. En la provincia de Córdoba, el auge de la soja vino acompañado de la pérdida del 17% de las cabezas de ganado, una tendencia equiparable a la que se manifiesta a nivel nacional. Asimismo, a escala nacional, de 1988 a 2003, el número de tambos pasó de 30.141 a menos de la mitad, 15 mil establecimientos. También cayó la producción de frutales y de los tradicionales cultivos industriales (algodón) del interior del país.

Por otro lado, el auge de la soja se ha dado también en perjuicio de la yunga, de la biodiversidad y de la flora y fauna que habitan extensos territorios del interior del país. Es, además, un modelo que ha menoscabado la agricultura familiar, que era tradicional. En el período 1960-1988 desaparecieron 51 mil explotaciones agropecuarias, 1.800 por año. Entre los censos de 1988 y 2002 —en la era neoliberal— desaparecieron 87 mil explotaciones agropecuarias,

esto es, 6.263 explotaciones por año, casi todas de menos de 200 hectáreas.

Los productores que logran sobrevivir y mantenerse en el sector se ven sujetos más que nunca a la agricultura de contrato que el agronegocio le impone, o bien, a la provisión de semilla y al paquete tecnológico que la semillera exige. Qué, cómo y con qué tecnología producir tienden a ser cuestiones dictaminadas cada vez más por la gran empresa transnacional: el agronegocio.

Algunas consecuencias de estos procesos son: la desaparición de la agricultura familiar; la transformación del sector en una agricultura sin agricultores; la creciente dependencia del productor agropecuario del semillero que le provee la semilla y los agroquímicos; la pérdida de soberanía alimentaria, al tiempo que se dejan de producir los alimentos básicos de consumo popular masivo; el avance sobre la yunga, las tierras fiscales del interior, la flora y fauna tradicional; y, en general, la pérdida de la biodiversidad y el deterioro ambiental, especialmente en algunas regiones, como efecto de la utilización masiva del glifosato y otros agroquímicos requeridos cada vez en mayor proporción.

Los conflictos por la tierra aumentan exponencialmente debido a la voracidad de los inversores. La lógica del agronegocio se expande

y los viejos ingenios, las agroindustrias de la vitivinicultura, de los cítricos, etcétera, siguen sus pasos. Viejos y nuevos inversores actúan de modo similar.

REFLEXIONES EN TORNO A LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS AGRONEGOCIOS

La lógica del sistema de los agronegocios involucra una nueva etapa en la evolución del sistema agroindustrial o agroalimentario; etapa que integra la era de la globalización que predomina en el mundo por lo menos desde los años setenta (véase McMichael et al., 1994).

Las grandes empresas transnacionales agroindustriales, en el Sistema Agroalimentario-Industrial (SAI) de nuestro país, van adquiriendo un creciente poder mediante el control de sectores determinantes. Se trata de procesos que comenzaron en la anterior etapa de ISI pero que adquieren una significación muy especial en la actualidad.

Una de las consecuencias es que esas grandes empresas transnacionales adquieren una mayor autonomía de los demás actores que componen el sistema agroalimentario. En la etapa anterior de ISI, el ciclo del capital y,

por lo tanto, de las finanzas de las agroindustrias clave y de otras empresas dependían del ciclo de producción del sistema agroalimentario propiamente dicho. Efectivamente, este se reproducía o se ampliaba en función de los ciclos de producción y comercialización. Pero ahora, con la liberalización de los mercados financieros, el ciclo del capital se independiza del funcionamiento del SAI; el sistema puede proveerse de productos, capitales y fuentes de financiamiento externos.

Nuevas fuentes de financiamiento también involucran la posibilidad de nuevas fusiones empresariales, internacionalización del capital y compra de empresas nacionales. Evidentemente, la enorme extranjerización que se produjo en el país hacia fines de los años noventa tiene que ver con esto.

Por las razones apuntadas más arriba, y al igual que en otros sectores de la economía, para el SAI, el mercado interno pierde importancia en relación con el mercado externo. Esto se observa notablemente en el caso de la soja. A diferencia de lo que ocurre con la carne y los cereales, la soja y, en particular, sus subproductos —más importantes que el aceite— se destinan fundamentalmente a las exportaciones. Pese a los intentos, durante la reciente crisis, de difundir su consumo mediante

la distribución la “soja solidaria” en comedores y organizaciones orientadas a paliar el hambre en el país, no se logró transformarla en un alimento básico de consumo popular. En consecuencia, la soja se mantiene casi exclusivamente como un producto de exportación; solo una porción ínfima de la producción total se consume internamente, en forma de aceite. Se replica aquí la tendencia que encontramos en el resto de Latinoamérica pero que estaba ausente en nuestro país en el siglo XX: un sector exportador disociado del mercado interno. En muchos países, la demanda de alimentos básicos se diferencia radicalmente de los productos agroalimentarios de exportación, incluso, se va perdiendo la “seguridad alimentaria”, al ser provisto el consumo popular cada vez más por importaciones.

Convendría aquí volver hacia atrás y reflexionar algo más sobre el proceso de globalización y su incidencia sobre el SAI y, en particular, sobre el sector agropecuario que lo integra. El proceso de globalización involucra una preeminencia creciente de las grandes empresas transnacionales en el sistema económico mundial, con un componente financiero muy importante (véase Teubal y Rodríguez, 2001, entre otros). Esto involucra lo que antes se denominaba internacionalización del capi-

tal, lo cual implica que los circuitos de capital a escala mundial inciden sobremanera sobre el SAI interno. No es de extrañar, entonces, que algunos de los preceptos más preciados del neoliberalismo se remitan a la liberalización de los movimientos del capital, hacia y desde el país, conjuntamente con las “reformas financieras” que posibilitaron la plena liberalización de las finanzas internacionales, como un elemento complementario de la libre movilidad de los capitales⁶. Cabría preguntarse cuáles son las implicaciones de esta plena liberalización o “apertura” a los movimientos de capital para los sectores agropecuarios de nuestros países.

Analicemos esta cuestión: el sector agropecuario es *socioterritorial* (Mançano Fernandes, 2005) por excelencia, mucho más que lo que puedan ser el sector industrial o el de servicios. A diferencia de lo que ocurre con el sector industrial, las nuevas tecnologías no siempre tienden a superar esa restricción: no se puede producir cualquier producto, en cualquier parte del mundo, en cualquier época del año y al ritmo que se desee. Los desarrollos productivos agropecuarios necesitan de suelos y con-

diciones climáticas adecuados. Dependen de ciclos biológicos que están fechados: el trigo se siembra y cosecha en determinados momentos y tiene un ciclo que define su producción ulterior. Por más que las nuevas tecnologías puedan modificar en alguna medida estos factores —irrigación cuando falta agua, invernaderos que regulan factores climáticos, semillas híbridas que definen ciclos cortos de trigo, permitiendo la siembra de soja “de segunda” y la doble cosecha, etcétera— el proceso productivo no puede fácilmente trasladarse a cualquier parte del mundo, de la misma manera en que se puede trasladar, por ejemplo, una planta fabril para la producción de automóviles. Esto también requiere que los productores agropecuarios se afinquen en determinados territorios, pese a que el proceso de globalización tienda a hacer su situación mucho más precaria.

La internacionalización del capital impulsa la relocalización de las grandes empresas en cualquier parte del mundo, en regiones donde los salarios son más bajos y se ofrecen mejores condiciones para la producción desde el punto de vista empresarial (por ejemplo, en regiones donde existan tierras adecuadas y no se pongan reparos a las industrias contaminantes). Pero la producción agropecuaria no es fácilmente relocalizable; en muchos casos resulta

6 El Plan de Convertibilidad de 1991 incluía entre sus medidas la libre movilidad del capital, desde y hacia el país.

casi imposible o, por lo menos, los márgenes para ello son en general limitados. Sin embargo, se pueden encontrar formas para modificar la comercialización, la distribución final o el procesamiento industrial de la materia prima agropecuaria, o bien, su financiamiento. Es por ello que las transnacionales, los agronegocios, ocupan esos espacios y actividades. Remarquemos que la producción agropecuaria misma tiende a “internacionalizarse”, o sea, a ser vendida en cualquier país del mundo siempre y cuando se encuentren formas para evitar su perecibilidad.

La internacionalización de los capitales significa que las grandes empresas pueden orientar sus inversiones de capital hacia cualquier región del mundo y, por ende, no dependen de los mercados internos para su evolución o acumulación de capital. Aunque, como advertíamos más arriba, la producción agropecuaria no siempre puede localizarse en cualquier parte del mundo, hecho que limita la internacionalización de los circuitos de capital. Con todo, hay segmentos del sistema agroalimentario-industrial que sí se pueden internacionalizar, por ejemplo, los supermercados, en cierta medida, la industria alimentaria, la producción de insumos agropecuarios, etcétera. Cabe desatacar que una forma de superar este límite es lo que

hacen algunas grandes empresas: compran tierras en distintas regiones del globo para proveer a sus circuitos productivos internacionales, lo cual constituye una forma de adecuar el circuito productivo agropecuario a los ciclos productivos del capital transnacional. Esto es lo que caracteriza un sistema basado en los *agronegocios*. También se van conformando determinados productos globales, por ejemplo, la Coca-Cola, ciertas marcas de cerveza, las hamburguesas, etcétera. Son algunos de los aspectos que inciden sobre una suerte de homogeneización de la producción a escala mundial en el marco de procesos de globalización de los circuitos productivos del sistema agroalimentario mundial.

La liberalización de los movimientos de capital, la difusión de tecnologías capital intensivas, de híbridos y transgénicos son tendencias que pueden ser contradictorias con las necesidades de campesinos y productores agropecuarios, así como con la producción de alimentos básicos de consumo popular. No es de extrañar que, pese a la creciente importancia que adquiere este circuito dominado por los agronegocios, existan otros que, en forma creciente, operan al margen y con cierta independencia de aquellos. No todo el sistema agroalimentario está subsumido en el de los agronegocios.

En la actualidad, ha cobrado relevancia el concepto de *redes de producción* en el agro argentino, que tiende a sustituir el anterior concepto de *complejos agroindustriales*, elaborado por autores tales como Vigorito, Trajtenberg, Giarracca y Teubal (véase Teubal, 1999 y Murmis, 1993). Se trata de un enfoque que permite analizar “las relaciones entre los agentes principales de un subsistema económico como, por ejemplo, cualquiera de los complejos agroindustriales” (Díaz, 2006: 7).

¿Qué es una red? Según el artículo periodístico mencionado en el párrafo anterior, se trata de “un ámbito económico de creación de competencias e intercambio, tanto de bienes como de servicios, que incluye una o varias empresas núcleo y a sus proveedores y clientes”. El objetivo es lograr “intercambios de flujos de información, experiencias productivas, conocimientos, estrategias concurrentes de desarrollo a futuro” (Ibídem: 7). Visto desde esta perspectiva, el énfasis puesto en el concepto de *red* tiene que ver fundamentalmente con el intercambio de información científica y técnica. En realidad, lo que no se subraya en la formulación del concepto, pero que está implícito en él, es que esta “red” o “trama” opera, por lo general, a partir de una empresa o mega empresa madre o —como se lo llamaba ante-

riormente— un núcleo de poder, que articula a las demás empresas, generalmente “pymes”, que lo integran⁷.

Frente a esta perspectiva, aquí preferimos considerar la nueva realidad agroindustrial como aquella en la que prevalece una red de agronegocios, o sea, aquella dominada por grandes empresas agroindustriales transnacionales que definen las pautas de funcionamiento del sistema en su globalidad.

En este nuevo sistema, sustentado en *commodities* tales como la soja, no existen indicios de que vayan a tener sustancial cabida los medianos y pequeños productores agropecuarios o las pymes industriales, de

7 Gustavo Grobocopatel, el principal sojero del país, explica: “Compartimos nuestro negocio con otros inversores, la mayoría de ellos en la actualidad son los jubilados argentinos. Con Los Grobo SGR poseemos un programa de financiación para 220 Pymes por 60 millones de pesos y con Grobo Gestión de Talentos buscamos desarrollar competencias y aumentar la empleabilidad de los que trabajan directa o indirectamente con nosotros. La formación de redes es parte de un proceso revolucionario que cambiará la vida y las relaciones de las personas. Las redes podrían ser la base de un Capitalismo Social y resolver problemas que aún están pendientes: la equidad y una redistribución más justa de la riqueza” (Grobocopatel, *Página/12 - Suplemento Económico “Cash”*, 13-8-2006: 4).

comercialización o de provisión de semilla e insumos agropecuarios. Las nuevas prácticas tecnológicas —por ejemplo, la siembra directa en la producción de soja, conjuntamente con el uso masivo del glifosato como agroquímico privilegiado para la eliminación de la maleza— configuran parte de un sistema que favorece sobremanera a “economías a escala de producción” y, por ende, a “empresas agropecuarias” de mayor tamaño. Se trata de un sistema que se combina con “contratos” por una cosecha, en el marco de los “pools de siembra”, emporios financieros que tratan a la actividad agropecuaria y agro industrial como “un negocio más”, independientemente de las necesidades de productores agropecuarios, campesinos o trabajadores rurales (Giarracca y Teubal, 2005).

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

La gran transformación agraria de la Argentina, con la imposición del “agronegocio” como modelo configurado en el marco institucional, a partir del decreto de desregulación, estrechó el margen de posibilidades de la articulación agroindustrial con la agricultura

familiar. Y esto que demostramos para el caso argentino, ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos con cierta modernización agraria. No solo existió la posibilidad de que los campesinos agroindustrializaran su producción sino que fueron desarrollos exitosos que desplegaron distintas formas de articulación, dando lugar a acalorados debates (Giarracca, 1983; Paré, 1982). Es cierto que predominaba un fuerte sistema de desigualdad, que el excedente agroindustrial se distribuyó en forma muy desigual y que muchos trabajos mostraban que los ingresos campesinos tenían un sentido más cercano a un salario que a un cierto nivel de ganancia. Pero representaba un sistema de inclusión.

El modelo del agronegocio es un sistema de pura exclusión en relación con la agricultura familiar y campesina. De exclusión y de mayor desigualdad que en el periodo anterior en lo que se refiere a mano de obra, puesto que el trabajo es reemplazado por nuevas organizaciones laborales. En el agronegocio, el trabajo escasea y está mal retribuido (véase Aparicio, 2005).

Por estas razones, las agroindustrias capitalistas con integración campesina y el “agronegocio” difícilmente puedan coexistir. Los marcos institucionales vigentes fueron, pre-

cisamente, impuestos para desarrollar el modelo del agronegocio, y esta transformación respondió a una nueva configuración de fuerzas, con nuevos agentes económicos apoyados por los gobiernos de nuestra región. La “vuelta atrás” es muy difícil de pensar, aun si se producirán ciertos cambios en los Estados nacionales. Los nuevos gobiernos de América Latina, tales como los de Argentina, Brasil, Venezuela (marcamos una diferencia con el caso de Bolivia por la fuerte presencia de la “comunidad andina”), si bien tienen una estrategia continental interesante y una mayor sensibilidad hacia algunos aspectos sociales, apoyan las lógicas productivistas del agronegocio, pues ven en el modelo la posibilidad de aumentar los ingresos fiscales gracias a las divisas generadas por la exportación.

¿Cuál es la salida para la pequeña explotación dentro de este modelo? La experiencia de nuestros países muestra que hay una fuerte intención de generar una economía o territorialidad campesina con sus propios procesos de agroindustrialización, con lógicas propias basadas en los principios de la soberanía alimentaria y el respeto a la biodiversidad. Estas acciones alcanzan un importante grado de avance en Brasil con el Movimiento Sin Tierra. En la Argentina, a pesar del po-

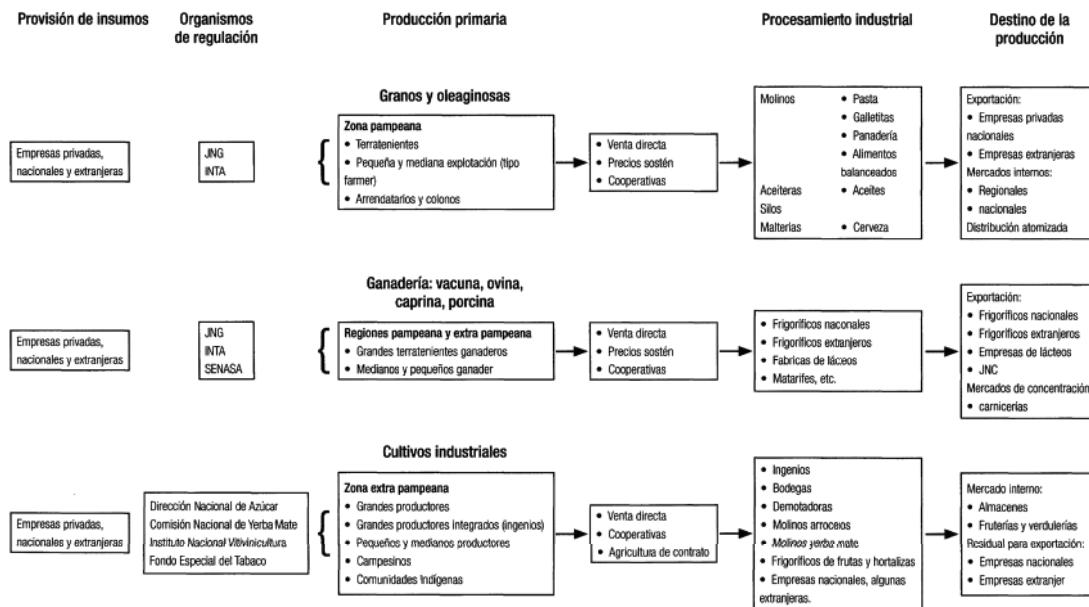
der del agronegocio, se abren paso con el apoyo de subsidios internacionales, algunas fuentes nacionales y mucho esfuerzo de las propias comunidades.

Las experiencias de organización agroindustrial campesina emanadas del incipiente movimiento campesino nacional, si bien no tienen la densidad de las que hallamos en Brasil (véase Giarracca et al., 2006), muestran que también para Argentina es una alternativa viable. La nueva pregunta es si es posible, en un mundo globalizado pero fragmentado, la coexistencia del *modelo del agronegocio* y la territorialidad campesina.

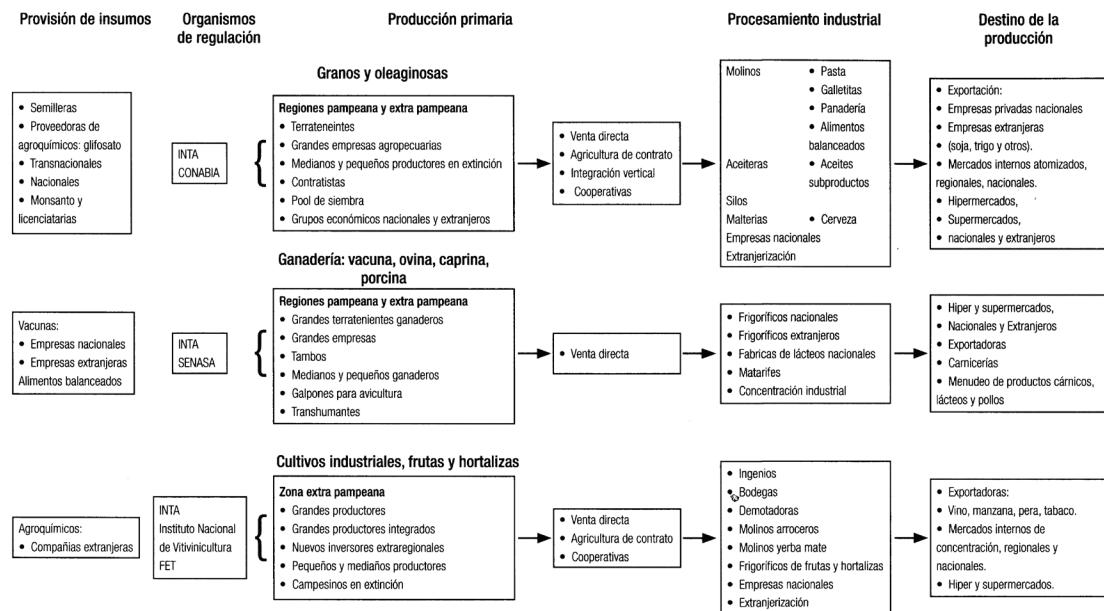
En este trabajo, sostenemos la tesis de que una integración de los medianos y pequeños productores y de los campesinos en el circuito de los agronegocios ya casi no es posible debido, precisamente, a la lógica de su funcionamiento. Por ello, es importante pensar en formas alternativas de producción/comercialización por fuera de este sistema. En muchas partes del país —y, por cierto, también en América Latina—, han ido plasmándose nuevas prácticas y recortándose espacios socioeconómicos y territoriales al margen de su integración a la lógica de los agronegocios.

ANEXOS

Cuadro N° 1
Sector agropecuario argentino (hasta 1991)



Cuadro N° 2
Sector agropecuario argentino (después de 1991)



BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio, S. 2005 “Trabajo y trabajadores en el sector agropecuario de la Argentina” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza).
- De Sousa Santos, B. 2000 *Pela Mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade* (San Pablo: Cortez).
- De Sousa Santos, B. 2006 *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social* (Buenos Aires: CLACSO).
- Díaz, S. 2006 “Una nueva armonía en el campo” en *Cash, Suplemento Económico de Página/12*, 13 de agosto.
- Domínguez, D. y Sabatino, P. 2003 “Con la soja al cuello. La transgénesis de un modelo” en *Biodiversidad en América Latina*, página web. Disponible en <<http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/6898>>.
- Giarracca, N. (coord.) 1995 *Agroindustrias del Noroeste: el papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. 1993 “Campesinos y agro industrias en los tiempos del ‘ajuste’ (Algunas reflexiones para pensar la relación, con especial referencia a México y Argentina)” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 114-115.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 “Los campesinos cañeros: multiocupación y organización” en *Cuaderno del Instituto de Investigaciones* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 3.
- Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) 2005 *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza).
- Giberti, H. 2003 “Modernizado e insatisfactorio sector agropecuario” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 200, noviembre-diciembre.
- Girbal-Blacha, N. 1998 *Ayer y hoy de la Argentina Rural. Gritos y susurros del poder económico (1880-1997)* (Buenos Aires: REUN).
- Mançano Fernandes, B. 2005 “Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais” en Seoane, J. (comp.) *Reforma agraria y lucha por la tierra en América Latina. Territorio y movimientos sociales* (Buenos Aires: CLACSO-OSAL) Año VI, N° 16.
- McMichael, P. et al. 1994 *The global restructuring of agro-food systems* (Ithaca: Cornell University Press).

- Página/12, Suplemento Económico “Cash”,* varios números.
- Paré, L. 1982 “Mecanismos económicos y políticos de subordinación de la tierra y el trabajo campesino al capital en la zona de abastecimiento del ingenio La Margarita” en *Cómo le dieron caña a los cañeros* (México DF: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM).
- Poulantzas, N. 1975 *Hegemonía y dominación en el Estado moderno* (Buenos Aires: Cuadernos de Pasado y Presente).
- Scaletta, C. 2006 “Mañanas” en *Cash, Suplemento Económico de Página/12*, 30 de julio.
- Teubal, M. 2004 “Rise and collapse of neoliberalism in Argentina: the role of economic groups” en *Journal of Developing Societies* (Londres: Thousand Oaks / Nueva Delhi: Sage Publications) Vol. 20, N° 3-4.
- Teubal, M. y Rodríguez, J. 2001 “Neoliberalismo y crisis agraria” en Giarracca, N. et al. *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Teubal, M. y Rodríguez, J. 2002 *Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica* (Buenos Aires: La Colmena).
- Tsakoumagkos, P. 1994 “Sobre la descomposición del campesinado en la Argentina” en Posadas, M. (ed.) *Sociología Rural en la Argentina. Estudio en torno al campesinado* (Buenos Aires: Ceal).
- Zibechi, R. 2006 Entrevista en *lavaca*. Disponible en <<http://lavaca.org/seccion/actualidad/1/1398.shtml>>.

AGROINDUSTRIAS DEL NOROESTE: EL PAPEL DE LOS ACTORES SOCIALES

INTRODUCCIÓN*

“Tabaco y azúcar son ambos productos del reino vegetal que se cultivan, se elaboran, se mezclan y al fin se consumen con gran deleite en las bocas humanas. Además en la producción tabacalera y la azucarera pueden advertirse los cuatro elementos: tierra, máquina, trabajo y dinero, cuyas variantes combinaciones constituyen su historia. Pero, desde su germen en la entraña de la tierra hasta su muerte por el consumo humano, tabaco y azúcar se conducen casi siempre de modo antitético.

La caña y el tabaco son todo contraste. Diríase que una rivalidad los anima y separa desde sus cunas. Una es planta gramínea y otra es planta solanácea. La una brota del retoño, el otro del simiente; aquella de grandes trozos de tallo con nudos que se enraízan y este de minúsculas

semillas que germinan. La una tiene su riqueza en el tallo y no en sus hojas, las cuales se arrojan, el otro vale por su follaje, no por su tallo, que se desprecia. La caña de azúcar vive en el campo largos años, la mata de tabaco solo breves meses. Aquella busca la luz, este la sombra; día y noche, sol y luna... El azúcar es ella; el tabaco es él... La caña fue obra de los dioses, el tabaco lo fue de los demonios; ella es hija de Apolo, él es engendro de Proserpina... El consumir tabaco, o sea el fumar, es un acto personal de individualización. El consumir azúcar no tiene nombre específico, es un acto común de la gula. Por esto, el fumador está en el vocabulario; pero no existe el azucarador... El cultivo del tabaco requiere atenciones delicadísimas en todo momento; no puede dejarse, en el grado que la caña de azúcar, al propio impulso natural.”

FERNANDO ORTIZ, *CONTRAPUNTO CUBANO
DEL TABACO Y EL AZÚCAR*

* Giarracca, N. 1995 “Introducción” (sel.) en Giarracca, N. (coord.) *Agroindustrias del Noroeste: el papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena) pp. 11 a 18.

LA EXPANSIÓN AGROINDUSTRIAL EN EL NOROESTE

Este libro contiene una serie de trabajos, producto del Programa de Investigación “Expansión agroindustrial y transformaciones sociales”, que se llevó a cabo en el Área de Estudios Rurales del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Los autores de este libro formamos un equipo de investigación que desde hace varios años, estudia dos de las más importantes agroindustrias del Noroeste argentino: la tabacalera y la cañera.

Si bien nuestros trabajos toman las agroindustrias como un conjunto de actividades económicas, llevadas a cabo por agentes sociales alrededor de los procesos técnicos de la producción, comercialización y distribución de la materia prima de origen agrícola, el énfasis siempre está puesto en los procesos sociales. Somos sociólogos, estudiosos de las relaciones que entablan los agentes sociales y por lo tanto, nos interesan las acciones, los conflictos, las negociaciones, las estrategias, llevadas a cabo por los actores agrarios dentro del espacio socio-económico que definimos como agroindustrias. Nuestra perspectiva parte de los actores sociales y no de los procesos económicos.

La importancia de la expansión agroindustrial en el Noroeste, es económica pero también socio-cultural. Dice el historiador Roberto Pucci (1994) que en 1860 el azúcar ya constituía la principal actividad económica de los tucumanos, veinte años más tarde se había convertido en una fiebre arrasadora y que con el correr del tiempo, fue trazando una huella tan profunda en todas las dimensiones de la vida provincial, que dio origen a una “segunda naturaleza” de la geografía tucumana.

La presencia de la industria azucarera en el Noroeste, nos remite al período nacional de consolidación del Estado y a la integración del país a la economía internacional. Estos procesos implicaron el crecimiento de un mercado interno y, como sostiene Balán (1978), la modernización y el crecimiento de las economías del interior, orientadas a satisfacer un mercado que crecía, paralelo a la población y a los ingresos.

En la década de 1840 se instalaron las primeras fábricas de azúcar en Tucumán que, en realidad, eran haciendas cañeras con simples trapiches de madera. La modernización tecnológica se dio con la llegada del ferrocarril, en 1876, que permitió transportar las maquinarias de origen europeo. La provincia pionera fue, sin duda, Tucumán. En 1894 existía un solo in-

genio en Salta y tres en Jujuy, pero en Tucumán ya existían 36. Sin embargo con la fundación del ingenio San Martín del Tabacal en Orán, Salta —que junto con el Ledesma en Jujuy llegaron a ser los más grandes e importantes dentro de la actividad— el peso de Salta y Jujuy se acrecentó. En 1891, Salta y Jujuy ya habían logrado, también, comunicarse por ferrocarril con Buenos Aires.

La agroindustria regional se expandía gracias a la política aduanera, que la protegía de la competencia de producciones externas más baratas. La protección contenía, además, una favorable política crediticia, que permitía una amplia y sólida modernización tecnológica.

Algunos de los principales agentes de la modernización en Jujuy fueron los integrantes de la familia inglesa Leach. Cuenta Rutledge (1987) que el joven ingeniero inglés llamado Roger Leach llegó a Jujuy, en 1876, a supervisar la instalación de la maquinaria del ingenio Ledesma, propiedad de los hermanos Ovejero; en 1878 repite la tarea para el ingenio San Isidro de la provincia de Salta, propiedad de los Cornejo. Finalmente en 1882, Roger Leach junto con Miguel Aráoz, propietario de la Hacienda San Pedro, Wenceslao Lobo y los hermanos Uriburu, instalaban su propio ingenio —La Esperanza— en la provincia de Jujuy. Después

de ciertos avatares económicos y financieros, el ingenio pasó totalmente a manos de Leach y sus hermanos, quienes a esa altura también habían migrado de Inglaterra. En 1892, en las tierras jujeñas se instala un tercer ingenio, La Mendieta, fundado por Alvarado y Müller. Entre 1880 y 1890 la producción de las tres provincias aumentó de 9.000 a 41.000 toneladas.

En Tucumán, hasta 1880, los ingenios eran propiedades de residentes en la provincia. Familias como los Posse, los Gallo, los Méndez, los Terán, el grupo Paz, los Padilla y los Avellaneda fueron los que iniciaron la inversión de capital. Se logró un crecimiento que atrajo capitales extrarregionales interesados, sucesivamente, en la importación de maquinarias, la comercialización en los centros urbanos y más tarde en la inversión directa (Giarracca y Aparicio, 1989: 74).

Dentro de este grupo de inversionistas, se destacaron Clodomiro Hileret, quien fundó el ingenio Lules y el Santa Ana; Manuel García Fernández, quien fundó el Bella Vista; y Ernesto Tornquist, quien en 1885, fundó la Compañía Azucarera Tucumana.

Salta y Jujuy fueron organizando la producción en grandes complejos agroindustriales que integraban las distintas etapas en una sola unidad productiva. La situación de Tucumán

fue distinta: ya antes de la expansión cañera, varios autores coinciden en reconocer la presencia de la pequeña explotación campesina. Con la *fiebre azucarera* se generaría un extenso campesinado que imprimiría la particularidad provincial dentro de la actividad.

El peso de la agroindustria cañera en Tucumán, Salta y Jujuy permite pensar que, en gran medida, la vida sociopolítica de la región fue constituida por actores sociales muy ligados a dicha actividad. En Salta, los dueños de los ingenios estuvieron fuertemente conectados al partido Demócrata Nacional, que predominó en la vida política salteña durante los treinta y los cuarenta. Los Patrón Costa, dueños del ingenio San Martín del Tabacal, fueron destacadas figuras del partido y Luis Patrón Costas, hermano de Robustiano, fue gobernador hasta 1940. El Partido Conservador Jujeño, pivoteado por Don Herminio Arrieta, dueño del ingenio Ledesma después de los Ovejero, tuvo, también, significativa influencia en la vida política jujeña.

Algunos autores sostienen que en Tucumán, antes de la *fiebre del azúcar*, se vislumbraba otro desarrollo más diversificado, y que el modelo monoprodutor inspiró voces de resistencia así como prácticas y acciones —proyectos políticos e investigaciones técnicas— orientadas hacia la diversificación (Pucci, 1993). La

alianza de la burguesía agroindustrial provincial con el poder central de Buenos Aires en los finales del siglo XIX (Batán, 1978), fue conformando una región integrada tempranamente al desarrollo nacional.

Tucumán tuvo, por un lado, movimientos sociales importantes (de *cañeros chicos*, de obreros, etcétera), y tuvo, además, un temprano desarrollo socio-cultural (su Universidad, por ejemplo, fue una de primeras en ser creadas y era una de las más importantes del país); estos dos aspectos la diferenciaron, en gran medida, del resto de las provincias del Noroeste.

Durante el siglo que se acaba, el Noroeste fue cañero y ello significó no solo que las clases dirigentes estuvieran fuertemente conectadas con la actividad, sino que, todos los sectores sociales estuvieran signados por esta historia regional. Se nacía en pueblos de los ingenios; se crecía y se aprendía a cosechar en itinerarios migratorios zafreiros, los ciclos de la vida social estaban fuertemente conectados con el comienzo o el final de la zafra; muchos mitos y leyendas regionales están relacionados con las resistencias y conflictos de los trabajadores del surco o del ingenio (la leyenda de “el familiar”, por ejemplo); las identidades étnicas se cruzaban con las de clase, todo ello dentro de una organización social, en gran medida es-

tamental, autoritaria y paternalista. La región ingresaba de manera despareja e incompleta, a la modernización económica y a la modernidad político-cultural.

Las diferencias entre Salta y Jujuy (el Norte) y Tucumán persistieron y se profundizaron. En el Norte se logran mayores rendimientos sacarinos y culturales de la materia prima, debido a situaciones climáticas más adecuadas; a la producción de la gramínea —menos heladas por ciclo agrícola—; y a la utilización del riego. En el nivel industrial, los ingenios del Norte logran menores costos como resultado de una adecuada escala de producción y de la organización integrada.

La actividad tabacalera, por otra parte, tiene una larga historia en el Noreste argentino y cobra importancia en el Noroeste solo a partir de los años cuarenta. En efecto, la producción de tabacos negros, criollos y las manufacturas artesanales de cigarros son ya muy importantes en el siglo XIX en Corrientes. Pero el desarrollo de la actividad en el Noroeste está conectado con la expansión del consumo del cigarrillo rubio, tipo americano, que comienza con la importación de cigarrillos o del tabaco claro, cuando la British American Tobacco (BAT) se instala en el país, en las primeras décadas de este siglo.

En la década del cuarenta comenzaron los primeros intentos de sustitución de importaciones de los tabacos claros. Los realizó la BAT y fue en el NOA. En realidad ya existían algunos intentos personales de finqueros que producían tabaco Virginia y variedades de tabacos criollos y elaboraban cigarrillos en forma artesanal. En varias entrevistas, los productores de tabaco jujeños, y otros actores ligados a este proceso, nos relataron la historia de sus familiares y vecinos, todos migrantes europeos, que comenzaron por los treinta producciones intensivas en pequeñas parcelas. Esa fue la base social de la organización productiva que llevaría a cabo la sustitución de importaciones por el tabaco Virginia y luego el Burley en Jujuy (véase el artículo de Susana Aparicio y Carla Gras en este volumen).

El cultivo del tabaco en Tucumán, en los departamentos del Sur de la provincia, es relativamente reciente. Aparece como otro posible cultivo para escapar de la monoproducción cañera (también se probó con la soja), de hecho, muchas de las tierras que en la década del cincuenta se dedican al tabaco fueron entregadas por un miembro de la familia Hileret a sus aparceros. La producción se incrementaba paralelamente a los procesos expansivos de la industria y al crecimiento de la exportación de

tabaco. Como consecuencia, muchos productores abandonan la producción cañera para dedicarse en forma casi exclusiva al tabaco. En distintas entrevistas, los tabacaleros tucumanos nos relataron este proceso que se da fuertemente a partir de la década del sesenta con la instalación de la BAT, de Massalin y Celasco, y la firma Imparciales; hasta entonces, la mayoría de ellos producían hortalizas, caña o bien eran jornaleros. Este proceso modificó la geografía del sur tucumano, y La Cocha, el departamento que concentraba la mayor parte de las tierras con tabaco, se convirtió en *la capital del tabaco*. En todo el NOA, la actividad tabacalera moviliza cantidades importantes de población en las épocas de implantación y de cosecha.

En Jujuy y Salta las organizaciones tabacaleras están muy vinculadas a la vida institucional y política. Algunos de sus gobernadores han surgido de las Cámaras provinciales, y sus estrategias de intervención y negociación política explican en buena medida los logros obtenidos por los productores en momentos de fuertes pujas sectoriales; un ejemplo reciente lo que constituye la restitución del Fondo Especial del Tabaco (véase el artículo de Leandro Bertoni en este volumen).

En conjunto, las dos actividades fueron conformando una economía regional que, hasta

avanzada la primera mitad de este siglo, situaba a las tres provincias en un nivel de desarrollo medio, dentro de la escala nacional. En efecto, en 1959, el producto bruto interno per cápita nacional fue de \$31.248 (aproximadamente 550 dólares). Con excepción de las provincias más despobladas, Buenos Aires era la de mayor nivel, \$60.987 (1033 dólares) y Misiones la de menor nivel, \$9.870 (167 dólares). Jujuy lograba un ingreso per cápita de \$23.740 (402 dólares); Tucumán \$19.311 (327 dólares) y Salta \$18.737 (317 dólares). Jujuy estaba en el undécimo lugar de las veinticuatro provincias, solo un lugar por debajo de la provincia de Córdoba; Tucumán estaba en el décimo quinto lugar y Salta en el décimo séptimo (*Revista de Economía Regional*, 1964)¹.

La suerte de la región se vio fuertemente afectada por los cambios en la política económica desarrollada desde mediados de la década de los setenta, proceso que algunos autores denominan cambios en el *régimen social de acumulación* (Teubal, 1994; Nun, 1994). En el nuevo modelo, los cultivos destinados al mercado interno —sobre todo los de consumo masivo

1 La equivalencia entre pesos y dólares para la época es de la Economic Commission for Latin America (ECLA). Citado por Rutledge, 1987: 237.

como el azúcar— sintieron los efectos de la retracción en el consumo, debido tanto a la política regresiva de ingresos como a los altos índices de desocupación y subocupación. Aquellos productos que pudieron lograr los cambios requeridos para colocarse en los mercados externos, mantuvieron o expandieron la producción.

Mientras el azúcar se destina, básicamente, al mercado interno, una parte importante de la producción de tabaco se exporta a través de fuertes cooperativas de agricultores. Mientras que el decreto de desregulación económica liberalizó la actividad azucarera, el Fondo Especial del Tabaco, órgano de regulación y apoyo a la actividad tabacalera, sigue en funcionamiento. Es decir, las dos agroindustrias atraviesan por situaciones muy diferentes. La conformación de estos escenarios y las acciones de sus principales actores, son presentadas en este libro.

[...]

BIBLIOGRAFÍA

- Balán, J. 1978 “Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y el mercado nacional en el desarrollo agro-exportador” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) N° 69, Vol. 18.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1989 *La integración del campesinado al complejo agroindustrial cañero* (Buenos Aires: UBACYT) Informe de Investigación.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 “Los campesinos cañeros: multiocupación y organización” en *Cuaderno del Instituto de Investigaciones* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 3.
- Nun, J. 1994 “Populismo, representación y menemismo” en *Sociedad* (Buenos Aires) N° 5.
- Pucci, R. 1993 *Monocultivo y diversificación en el Tucumán azucarero* (Tucumán) Mimeo. *Revista de Economía Regional* 1964 (Buenos Aires) Año I, N° 1.
- Rutledge, I. 1987 *El desarrollo del capitalismo en Jujuy* (Jujuy: Proyecto Ecira / UBA).
- Scott, C. D. 1983 “Transnational corporations and asymmetries in the Latin American food system”, ponencia presentada al congreso *Las Américas y la nueva división internacional del trabajo*, Universidad de Florida.
- Teubal, M. 1994 “Cambios en el modelo económico: problemas de incluidos y excluidos” en Giarracca, N. (comp.) *Acciones colectivas y organización cooperativa. Reflexiones y estudios de*

caso (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).

Vigorito, R. 1978 “Criterios metodológicos para el estudio de los complejos agroindustriales” en *El desarrollo agroindustrial y la economía internacional* (México DF: SARH-CODAI) Documento de Trabajo N° 1.

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CON EL BRASIL Y LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CAÑEROS* **

NORMA GIARRACCA Y MIGUEL TEUBAL***

INTRODUCCIÓN

En años recientes se ha intensificado el debate en torno a los posibles caminos, mecanismos y consecuencias para diversos grupos y sectores sociales, del proceso de integración economi-

ca con el Brasil en el marco de la formación del Mercosur. Durante los años sesenta la integración económica de América Latina había sido impulsada, en gran medida, por la CEPAL, siendo visualizada como un espacio que permitiría profundizar el proceso de industrialización de la región (Teubal, 1961 y 1968). Posteriormente esta problemática fue relegada, hasta que, en la actualidad, la integración económica de la Argentina con el Brasil adquiere una nueva entidad.

* Giarracca, N. y Teubal, M. 1993 "La integración económica con el Brasil y los pequeños productores cañeros" en *Ciclos*, Año III, Vol. III, N° 5, 2° semestre.

** Comunicación originalmente presentada al seminario "Redéfinition des politiques agricoles et alimentaires et le rôle des petits producteurs", Institut d'Etude du Développement Economique et Social, París, marzo de 1993.

*** Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

Nuevos mecanismos de cooperación e integración se han ido planteando, habiéndose firmado una serie de tratados y protocolos, tanto globales como sectoriales. De este modo se abren nuevas perspectivas para la reestructuración de ciertas ramas industriales y sectores productivos de ambas economías.

Sin embargo, el proceso abierto es complejo y multifacético, y su orientación futura, altamente incierta (Chudnovsky, 1993). Asimis-

mo, persisten perspectivas diferentes acerca del sentido mismo del proceso de integración y de cómo debería tramitarse. Desde una cierta perspectiva los mecanismos de integración deben remitirse fundamentalmente a la promoción de la plena liberalización y apertura de las economías nacionales, como una suerte de continuación de procesos que, en años recientes, fueran iniciados por los gobiernos de los Estados miembros del Mercosur. Como consecuencia, se pone énfasis sobre la liberalización arancelaria y el impulso al comercio intrarregional en el marco de una ampliación de los mercados; esto presupone que “el mercado”, por sí solo, establecerá pautas y orientaciones necesarias y suficientes como para lograr una adecuada reestructuración y una nueva inserción de los diversos sectores en la economía regional y mundial. Esta variante, que ha sido denominada “comercialista” (Chudnovsky, 1993), no siempre considera como esencial la coordinación de políticas entre los dos países, excepto aquellas que contribuyan a impulsar plenamente estos procesos de liberalización, desregulación y apertura.

Dentro de esta tesitura, la integración económica con el Brasil solo tendría sentido como un instrumento que coadyuvara a la plena liberalización y apertura de las economías naciona-

les. En todos los países del Mercosur se están aplicando políticas tendientes a la liberalización plena de las economías, y fueron reduciéndose los niveles arancelarios externos y medidas de protección no arancelaria. A partir de ahí, “la reestructuración pasa a ser orientada estrictamente por mecanismos de mercado... la función del gobierno es promover la liberalización comercial y, eventualmente, una política cambiaria que no la desvirtúe” (Chudnovsky, 1993: 496).

Como consecuencia, los tratados y protocolos firmados en el marco del Mercosur son vistos —desde esta perspectiva— como pasos intermedios de esta tendencia liberalizadora. Si bien la conformación de un mercado común para el año 1994 involucraría, además, la coordinación de políticas y una mayor cooperación económica para lograr la reestructuración industrial del espacio económico ampliado del Mercosur, la plena liberalización del comercio intrarregional así como también la libre circulación de factores de producción en la región (básicamente del capital) contribuirían presuntamente a la profundización de un esquema de especialización relativa en donde prevalecerían ventajas comparativas estáticas¹.

1 Dentro de esta tesitura, en meses recientes el gobierno argentino se ha orientado hacia la finalidad de

Otras perspectivas que se han planteado en torno a la integración económica argentino-brasileña visualizan este proceso como un mecanismo mucho más defensivo, tendiente a la constitución de un bloque económico, y que requeriría una mayor coordinación de políticas de los países miembros, tanto a nivel global como sectorial. Esta variante “industrialista” pone énfasis sobre el desarrollo de estrategias de más largo alcance, no solo en el campo del comercio intrarregional, sino también en lo que atañe al proceso de reestructuración industrial, desarrollo tecnológico, consolidación de los complejos educativos, científicos, tecnológicos y del área de las políticas sociales. En este sentido se reconoce la necesidad de adoptar políticas de integración específicas para diversos sectores y de impulsar el desarrollo de estrategias que posibiliten la consolidación de “ventajas comparativas dinámicas”. Según esta variante, “el mercado”, por sí solo, generaría costos sociales excesivos, por lo cual los múltiples problemas de reestructuración industrial que surgen en torno al proceso de integración económica deberían ser negociados y coordinados en forma conjunta.

integrar el espacio económico que configura el Mercosur en el NAFTA, a partir de las propuestas impulsadas por la “Iniciativa para las Américas”.

En este trabajo nos remitimos al análisis de un sector particular —el de los pequeños productores cañeros de Tucumán— y a los probables escenarios futuros que se le abren frente al proceso de integración económica con el Brasil.

El problema que abordamos atañe, por una parte, a la actividad o el complejo cañero en su globalidad y, por la otra, a los pequeños productores cañeros tucumanos vinculados con este complejo agroindustrial. Evidentemente la actividad cañera en nuestro país ha estado regida por políticas nacionales, aunque también ha estado influida, indirectamente, por políticas que se desarrollan en el Brasil y en el mundo azucarero y cañero en su globalidad. No es de extrañar entonces que los cañeros tucumanos —en particular los más pequeños y los trabajadores vinculados con el sector— reciban el impacto de procesos más amplios que escapan a su control.

En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre los probables efectos de estos procesos sobre los sectores subalternos dentro del complejo cañero, considerando que sus intereses no siempre coinciden con los intereses de los demás agentes que integran el complejo cañero.

Las políticas más amplias que giran en torno a la conformación del Mercosur, los acuerdos macroeconómicos y políticos que se logren en

el nivel nacional e internacional, no consideran necesariamente los intereses específicos de los pequeños productores cañeros tucumanos. Si bien fue firmado un protocolo según el cual habrán de continuar las negociaciones tendientes a la coordinación de las políticas agropecuarias de ambos países, nada asegura que esa coordinación considere los intereses específicos de estos sectores. Se trata, además, de un vasto sector que está en crisis, en gran medida como consecuencia del proceso de desregulación que se ha operado en los últimos años.

En la primera parte de este trabajo, presentamos algunas consideraciones en torno al mercado cañero y azucarero mundial; caracterizamos después al Brasil como productor de caña, de azúcar y de alcohol de caña a escala mundial. Seguidamente, ubicamos los principales parámetros de la producción cañera de nuestro país y dedicamos un apartado a la evolución de la regulación estatal que ha tenido la actividad, para comprender el amplio entramado institucional en el que los pequeños productores se desarrollaron y las repercusiones que el desordenado retiro del Estado nacional provoca en la actualidad. Caracterizamos al sector de pequeños productores así como a sus organizaciones representativas y presentamos algunas de las estrategias que en la actualidad han

comenzado a desarrollar. El trabajo concluye con algunas reflexiones en torno al impacto que los procesos desatados en la actualidad, así como la integración económica, podrían ejercer sobre la actividad y el sector de los pequeños cañeros en el futuro.

EL MERCADO AZUCARERO MUNDIAL

De todos los bienes agropecuarios producidos en el Tercer Mundo, la caña de azúcar es casi el único que sufre la competencia directa de otras actividades desarrolladas en los países templados del mundo altamente industrializado. En primer lugar, está el azúcar de remolacha, que, por tener —por lo menos hasta hace poco— mayores costos de producción que la caña, es una actividad fuertemente subsidiada tanto en la Comunidad Económica Europea (CEE) como en los EEUU. Asimismo, se han desarrollado múltiples sustitutos del azúcar, tales como la isoglucosa o fructosa de jarabe de maíz, que sustituye al azúcar como un edulcorante importante utilizado en la producción de gaseosas y alimentos procesados.

El azúcar consumido actualmente en el mundo proviene principalmente de la remolacha azucarera (37%) que se produce en climas

templados, y de la caña de azúcar (63%) que se produce en climas tropicales y subtropicales. Durante la década de los años setenta la producción de azúcar aumentó 25% —debido sobre todo al alza de la producción de la Comunidad Económica Europea— pese a la caída del consumo per cápita en los países ricos. Entre los años 1975 y 1979 la producción de azúcar de la CEE se triplicó debido a los fuertes subsidios desarrollados bajo la Política Agrícola Común. En ese período, la superficie destinada a la producción de remolacha para azúcar fue duplicada en Gran Bretaña. Estas tendencias continuaron en los años ochenta, debido a precios mundiales nuevamente en alza luego de que hubieran caído a los niveles más bajos de su historia en años anteriores, y a la sustancial caída de los *stocks* existentes.

La producción mundial de azúcar en bruto fue de 109 millones de toneladas en 1990-1991 (USDA, 1990, 1991, 1992), para la cual fueron utilizadas 20 millones de hectáreas (11,2 millones de caña y 8,6 millones de remolacha). La India, el Brasil, Cuba y los EEUU son los principales productores de caña de azúcar en el mundo, mientras que la ex-URSS y la CEE fueron los mayores productores de azúcar de remolacha. Los países y regiones mencionados, más Australia, China y México, aportaron casi

dos terceras partes de la producción mundial. Los EEUU y la CEE son también tradicionales importadores de azúcar, pese a que han aumentado constantemente su producción en las últimas décadas, en gran medida debido a políticas proteccionistas. Estas les han permitido reducir sus volúmenes de importación y —en el caso de la CEE y la ex-URSS— convertirse en autosuficientes y exportadores de azúcar. Por otra parte, algunos países del Tercer Mundo han disminuido su producción, al mismo tiempo que han aumentado su demanda interna y reducido sus excedentes exportables. En la década de los noventa se espera que continúe el auge de la producción en la CEE, la India, China y el Brasil, mientras que la producción de la ex-URSS tiende a declinar, así como también las exportaciones de Cuba. En el trienio 1988-1990 el Brasil fue uno de los principales productores de azúcar en el mundo, con una producción de 8,1 millones de toneladas, siendo superado solamente por la CEE (16,1 millones de toneladas) India (11,8 millones), y la URSS (9,2 millones). Asimismo, los principales consumidores mundiales fueron la URSS (13,7 millones de toneladas), la CEE (12,9 millones), India (11,5 millones) y los EEUU (7,7 millones de toneladas). El resto del mundo consumió 62,1 millones de toneladas.

En los años ochenta el comercio mundial de azúcar se mantuvo relativamente estable en torno a los 28 a 29 millones de toneladas. Hubo un lento crecimiento de la producción de los países del Tercer Mundo debido a programas de sustitución de importaciones. Asimismo, se produjo una cierta saturación del mercado de edulcorantes en los países altamente industrializados, mientras que hubo una sustitución importante de la producción cañera por edulcorantes derivados del maíz, y otros de alta intensidad y escasas calorías.

Los principales exportadores mundiales de azúcar son la CEE, Cuba, Tailandia, Australia y el Brasil, que en conjunto proveen 70% de las exportaciones totales. En el año 1990-1991 hubo reducciones de los envíos del Brasil y de Cuba, que incidieron significativamente sobre la caída de las exportaciones mundiales.

En el primer caso, se debió a la estrategia de abastecer prioritariamente al mercado interno de azúcar y alconafita por sobre las exportaciones.

A la competencia que significa para los productores cañeros del Tercer Mundo, la producción de azúcar de remolacha y de otros sustitutos por parte de los países del “Primer Mundo”, se le suma un mercado mundial azucarero altamente regulado. En efecto, existen cuotas a las importaciones y subsidios de todo tipo

para el logro de la autosuficiencia alimentaria en los países altamente industrializados. Estos elementos contribuyen a configurar una situación negativa para los productores cañeros del Tercer Mundo.

En los EEUU se han aplicado regulaciones de todo tipo sobre el régimen azucarero instaurado en el año 1934. Tras una serie de cambios en la legislación que regulaba el sistema impuesto en esa fecha, en 1981 se sancionó la “Food and Agriculture Act”, que facultó al presidente a establecer cuotas y derechos de importación variables para el azúcar, de hasta el 50% *ad valorem*, adicionales a la tarifa de importación. También impuso el “Market Stabilization Price” (MSP: Precio de Estabilización del Mercado), destinado a aplicar un impuesto variable o “levy”, por diferencia entre el precio del mercado internacional y el MSP, el mínimo valor deseado para la producción local. Como la legislación obligaba a optar entre el “levy” y la cuota y aquel no alcanzó para cubrir la protección deseada, porque la diferencia entre el precio local e internacional superó el 50%, se decidió utilizar la cuota como sistema de restricción a las importaciones. Esto tuvo lugar en 1982. A partir de entonces el precio internacional del azúcar inició una caída espectacular que lo llevó hasta niveles

no imaginados anteriormente (véase de las Carreras, 1990: 18-19).

Una situación semejante involucró a la CEE en los años ochenta. El régimen azucarero de la CEE forma parte de una estrategia destinada a lograr la autosuficiencia alimentaria en este rubro. Se establecieron precios de garantía para la producción comunitaria, limitaciones a las importaciones, y subsidios a las exportaciones que llegaron a costar aproximadamente 3 millones de dólares por día.

La Comunidad Económica desarrolló una política de producción beligerante destruyendo los mecanismos internacionales para la fijación de los precios (del azúcar) establecidos bajo el Acuerdo Internacional del Azúcar (International Sugar Agreement, ISA), que en teoría deberían haber servido como “salvavidas” para los productores cañeros del Tercer Mundo en una época en que los precios internacionales se colapsaron. (Plant, 1987: 158)

Estas políticas han incidido significativamente sobre el mercado azucarero mundial, que no ha podido recobrar el dinamismo y el potencial que tuvo en épocas pasadas. Son pocos aquellos que piensan que existe un futuro promisorio para el azúcar en el mercado mundial.

EL BRASIL EN EL MERCADO MUNDIAL

El Brasil es uno de los mayores productores mundiales de caña de azúcar, que se destina en un 60 por ciento a la producción de alcohol para uso energético y en un 40 por ciento para la producción de azúcar. En ese país el azúcar y el alcohol están profundamente interrelacionados. La industrialización de la caña está a cargo de empresas que originariamente se dedicaban a la elaboración del azúcar y que luego instalaron destilerías, y de otras que solo elaboran alcohol. El programa alcoholero tuvo su origen en 1975, cuando aumentó el precio del petróleo generándose la crisis del sector externo del país, lo cual motivó la decisión de expandir el cultivo de la caña para el desarrollo del programa energético. Como consecuencia, la producción de caña pasó, entre 1975 y 1988, de 68 millones a 231 millones de toneladas.

En 1989-1990 la producción de caña rindió 260 millones de toneladas de caña no procesada sobre una superficie de 4,1 millones de hectáreas. De esta producción, aproximadamente 147 millones de toneladas se utilizaron para la producción de etanol, 73 millones se orientaron a la producción de azúcar, y el resto se utilizó como forraje o tuvo usos no comerciales (USDA, 1990: 32). Aproximadamente un

73% de la producción cañera y dos terceras partes de la superficie utilizada pertenecen a los Estados del centro-sur del país. San Pablo, que contribuye con más del 50% de la producción de caña del Brasil y que tiene los menores costos de producción, domina esta área, que incluye además a los Estados de Minas Gerais, Río de Janeiro, y de Paraná. En esta región la producción de caña se realiza sobre tierras fértiles y planas, lo cual ha posibilitado una alta tasa de mecanización.

El centro-sur produce aproximadamente el 85% del etanol provisto a los grandes centros industriales y a la población urbana. La industria del etanol basada en la producción cañera se considera altamente eficiente. Estudios realizados indican que la región está entre los primeros seis países con costos más bajos del mundo para este tipo de actividad (USDA, 1990).

El resto de la producción proviene de los Estados del norte y del nordeste, que producen entre el 20 y el 25% de la producción cañera del país, aproximadamente un tercio de su producción de azúcar y 15% del etanol. La industria del etanol es allí relativamente menos eficiente.

Gran parte de la actividad cañera del Brasil estuvo relacionada con la estrategia nacional de producir etanol en sustitución de las importaciones de petróleo. El programa de etanol,

que recibe subsidios tanto para la producción como para el consumo, ha generado la industria productora de etanol más importante del mundo. Se trata de una industria que provee gran parte de la alconafta utilizada en la flota de automotores del país.

Hasta hace unos años, las refinерías producían la mayor proporción de azúcar brasileño; era un producto más artesanal y de mayor calidad que el cristal. Actualmente, las usinas son las que producen el azúcar centrifugado o cristal. Las usinas, que conforman el eslabón más importante del complejo agroindustrial, están llegando al autoabastecimiento pero tienen aún una proporción de materia prima provista por los *fornecedores*.

EL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CAÑERO EN LA ARGENTINA

Frente a la producción y el consumo cañeros del Brasil, la actividad cañera y azucarera de la Argentina tiene una importancia mucho menor. Nuestro país es solo el productor número 21 de azúcar en el mundo, con una producción de apenas 1,1 millones de toneladas.

La producción de caña de azúcar en la Argentina está destinada, mayoritariamente, al

mercado interno (75% en promedio histórico). Genera el 7% del valor bruto de la producción agrícola nacional (cuarto lugar después de la soja, trigo y maíz), mientras que el azúcar representa el 4,14% del rubro “alimentos y bebidas” de la canasta familiar.

Se trata de una de las agroindustrias más antiguas del país, que fue iniciada en forma artesanal en el siglo XVII. Con la consolidación del “Estado moderno” a fines del XIX, comenzó su etapa de expansión y modernización. La provincia de Tucumán, pequeño territorio ubicado en el noroeste del país, fue la primera región que —con la instalación del ferrocarril y con fuertes inversiones de distintos orígenes (véase Balán, 1978)— logró el abastecimiento del mercado interno. En los comienzos del siglo XX se incorporaban las provincias de Salta y Jujuy, que contaban con mejores condiciones climáticas y agronómicas que Tucumán y con la posibilidad de abastecerse de mano de obra barata proveniente de pueblos cordilleranos andinos y bolivianos.

Las diferencias entre Salta y Jujuy (el Norte) y Tucumán persistieron y se profundizaron. Mientras que en la primera zona predominó la organización de grandes y pocos ingenios integrados verticalmente (5 en la actualidad, que producen el 85% de la caña que necesitan), que

compran solo pequeñas cantidades complementarias a la propia (a 80 productores capitalistas independientes, de origen inmigrante), en Tucumán abundaron ingenios sin producción de caña propia que compraban a pequeños productores independientes, asentados en los alrededores de los molinos. La formación de este sector “cañero” en Tucumán, y su relación con la burguesía industrial, ha sido objeto de varios estudios (Pucci, Santamaría, Delich, Giarracca y Aparicio entre otros).

La producción total nacional de caña fue de 9,3 millones de toneladas en 1970 y pasó a 16,4 millones en 1980. A partir de entonces la producción cañera fue disminuyendo: a 14,8 millones de toneladas en 1987 y superando apenas los 10 millones de toneladas en 1989 y 1990. Es decir que en la actual década la producción cañera vuelve a estar en los niveles de la década del setenta y con una fuerte tendencia a la disminución. Tucumán participa de esta producción en un 60%, Jujuy, 25%, y Salta, 10%.

La producción total de azúcar aumentó de 900 mil toneladas en 1970 a un máximo de 1.600.000 toneladas en 1980. Luego, igual que la producción de caña, fue descendiendo: en 1990 apenas superó 1.200.000 toneladas. Tucumán participó a lo largo del período con entre un 50

y un 60% del total; Jujuy, entre 24 y 37% y Salta, entre un 9 y un 15%.

Durante la década del ochenta se puso en marcha un programa para estimular la producción de alcohol de caña: Programa Alco-nafta. Como hubo una disminución de la demanda internacional, el gobierno generó una política impositiva favorable al solo efecto de buscar un uso alternativo a la caña. La producción de alcohol ha estado a cargo de los ingenios con destilerías que la proveen a las empresas petroleras, las que se encargan de la mezcla y la distribución como sustituto de la nafta en doce provincias. El programa no ha tenido éxito y ha dejado de aplicarse en varias provincias.

En Tucumán, la caña es producida por 11.496 cañeros; funcionan 16 ingenios (muchos en delicada situación financiera). Todavía es la principal zona productora: como vimos anteriormente, cuenta con casi 70% de la superficie plantada del país; genera 60% de la producción de caña y 50% de la producción de azúcar.

En la zona Norte se logran mayores rendimientos sacarinos y culturales de la materia prima, debido a situaciones climáticas más adecuadas a la producción de la gramínea — menos heladas por ciclo agrícola— y a la utili-

zación del riego². En el nivel industrial, los ingenios del Norte tienen menores costos como resultado de una adecuada escala de producción (Campi, 1992) y a la integración agroindustrial vertical.

Cualquier caída de los precios siempre ha afectado en mayor medida a los productores tucumanos (agrícolas e industriales), quienes se han visto más expuestos a variaciones cíclicas por su mayor vulnerabilidad frente a los cambios climáticos.

Estas condiciones de producción han llevado a que Tucumán siempre fuera decididamente favorable a la regulación estatal, y los productores del Norte fueran demandantes de medidas de mayor liberalización. Sin embargo, en la práctica, la regulación también los ha favorecido vía precios.

2 Los rendimientos tucumanos oscilan entre 42 y 45 mil kg. de caña por hectárea, mientras los de Salta trepan los 70 mil y Jujuy ha llegado a 80 mil y en los últimos años se mantienen en 78 mil kilogramos de caña por hectárea (Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería).

LA REGULACIÓN ESTATAL Y LOS PEQUEÑOS CAÑEROS

El Estado argentino ha sido un actor privilegiado en el funcionamiento de la actividad cañera. En los primeros tiempos, fue creando las condiciones de posibilidad para que la agroindustria se desarrollara: en forma indirecta, mejorando la infraestructura, o de manera directa, protegiendo la producción interna de azúcar mediante el manejo de tarifas aduaneras. En un trabajo sobre el complejo cañero (Giarracca y Aparicio, 1991) se detectaron siete formas de intervención del Estado durante los orígenes de la actividad en Tucumán:

1. el establecimiento de un sistema eficiente de transporte;
2. aplicación de tarifas aduaneras proteccionistas para la industria;
3. ayuda crediticia;
4. exenciones de impuestos;
5. subsidios a las exportaciones;
6. concesiones especiales a la empresa Refinería Argentina³;

3 Como resultado de la demanda creciente de azúcar refinado, hacia 1885 varios empresarios consideraron la idea de crear una refinería. El plan que resultó exitoso fue el de Ernesto Tornquist, quien fundó la Refinería Ar-

7. condiciones para que los ingenios obtuvieran fuerza de trabajo barata.

En todo el período de expansión del complejo agro-industrial los actores sociales conformaron “frentes azucareros” con el propósito de defender, en el plano nacional, la protección industrial. Sin embargo, los objetivos y necesidades de estos agentes no fueron siempre coincidentes. La crisis de sobreproducción de finales del siglo XIX que saturó el mercado, provocó la baja de los precios y las consecuentes quiebras de ingenios y agricultores, mostró tempranamente los límites del sistema (Bravo, 1992).

En la primera parte de este siglo, básicamente a partir de 1920, las medidas del Estado tendían a mantener cierto equilibrio de fuerzas entre los principales agentes del sistema. Se ha caracterizado a esta etapa como de “protección distributiva” (Murmis y Waisman, 1969). Las políticas públicas más importantes del período que dan cuenta de la intención distributiva fueron: el

gentina, gracias a dos factores confluyentes: la protección del Estado nacional y el apoyo financiero de la banca europea. El apoyo estatal se materializó a través de la garantía de dividendos por 15 años a una tasa del 7%, las exenciones de impuestos y un impuesto a la importación de azúcar (Soverna, Giarracca y Aparicio, 1991).

“Laudo Alvear” del gobierno radical en 1927 y las políticas sociales y la creación del Fondo Regulador del primer gobierno peronista (1945-1955).

LA CRISIS DE 1966 Y EL SISTEMA DE “CUPOS DE PRODUCCIÓN”

A comienzos de los años sesenta la industria azucarera tucumana presentaba un retraso tecnológico y un bajo nivel de equipamiento, consecuencia de una política que no indujo necesariamente a la inversión productiva. El bajo nivel de desarrollo de estas empresas era resultado de políticas de subsidios sin los cuales no operaban: cuando se veían amenazadas echaban mano a la “cuestión social” provincial para no perder privilegios. Esta situación alcanzó su punto de ruptura hacia 1960.

El gobierno del Dr. Frondizi intentó erradicar la regulación estatal, en tanto el breve interregno democrático del Dr. Illia (1963-1966) consideró las modificaciones del sistema preocupándose particularmente por la situación del pequeño productor. El golpe de Estado de 1966 y la administración militar decidieron una de las intervenciones directas más contundentes en la actividad cañera: la fijación de cupos de producción.

En 1966 el gobierno del general Onganía produjo el cierre de siete ingenios: cuatro pertenecían a “nuevos industriales” ajenos a la provincia y con vinculaciones con la opositora Confederación General Económica, dos eran ingenios cooperativos y uno de empresarios tucumanos. De los 15 ingenios que quedaron solo 7 estaban en situación financiera sólida. Los productores de caña, mientras tanto, quedaron sin las protecciones generadas por el gobierno anterior, y no pudieron resistir al establecimiento de la cupificación —realizada en base a la cosecha de 1965— que generó la administración *de facto*. Se estimuló la venta voluntaria de cupos previamente repartidos, así como la expropiación de los cupos más pequeños con una compensación a los agricultores.

Estas medidas, lejos de solucionar la situación, la empeoraron aún más. No fueron coordinadas con efectivas medidas de reconversión; en consecuencia, si bien se retiraban los cupos, no se erradicaban los cañaverales y los agricultores siguieron levantando su caña y entregándosela a productores con cupos. Las consecuencias más notables de esta situación fueron la disminución de los rendimientos en general⁴ y el desarrollo de un mercado negro

4 Los productores con cupos no debieron esforzarse para obtener la cuota fijada: si no la alcanzaban la con-

de cupo (Canitrot y Sommer, 1972; citado por Giarracca y Aparicio, 1991).

Los pequeños productores fortalecieron, en este período, formas asociativas, como estrategias para sostenerse, y en algunos casos para capitalizarse. Es el período en que se registran dos tipos de asociaciones: “sociedades de hecho”, grupos de parentesco o vecinales que compactaban los “cupos” y trabajaban en una escala superior de producción; o las cooperativas, como medios de abaratar insumos y comercializar en mejor posición con los ingenios. Un buen número de campesinos adquirieron tractores y dentro de este mismo estrato aparecieron los dirigentes más activos del movimiento cooperativo que en los ochenta tomarán iniciativas relevantes para el sector: la “integración hacia adelante”.

LA CRISIS DE 1984-1985 Y LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO RADICAL

La dictadura militar (1976-1983) no había generado políticas que modificaran sustancialmente el sistema de cupos establecido en 1966 mo-

según a un precio muy inferior al de venta comprándola a los pequeños cañeros sin cupo.

dificado en 1972 y 1975. Ciertamente, a través del crédito barato y de la liquidación de una compañía estatal que manejaba varios ingenios (CONASA) se había facilitado la entrada de grupos empresarios estrechamente vinculados con el gobierno.

El salario del obrero industrial y del peón agrícola disminuyó notablemente en el período, como también la cantidad de personal ocupado en la rama, todo lo cual favoreció a los industriales y cañeros grandes al disminuir costos de producción. De todos modos las zafas seguían siendo financiadas por las instituciones oficiales que recibían créditos del Banco Central, en tanto la Dirección Nacional del Azúcar fiscalizaba la operatoria.

Si bien el azúcar no había sido un producto destinado a la exportación, los grandes volúmenes exportados en el trienio 1972-1974 — que obtuvieron altos precios— se explican debido a una favorable coyuntura del mercado mundial. Otra situación internacional propicia se reiteró en los años 1980-1981 y las exportaciones de ese año significaron el 47% de la producción nacional. La importancia del nuevo mercado para la actividad se pone de manifiesto en la profunda crisis de los años 1984-1985, cuando debido a las tendencias recesivas del mercado internacional los inge-

nios entraron en cesación de pagos a proveedores y acreedores.

Frente al deterioro del estado financiero de los ingenios tucumanos, el gobierno del Dr. Alfonsín buscó un mecanismo que permitiera una mayor autofinanciación de los agentes y que solucionara la situación de emergencia en la que se encontraban los pequeños productores a quienes los ingenios habían dejado de pagar la cosecha 1985.

Un decreto presidencial estableció un sistema de comercialización opcional al establecido por ley. Este sistema, denominado “maquila oficial”, limitaba las funciones financiadoras e integradoras de los ingenios y modificaba la relación cañero-ingenio.

El “Decreto de maquila” autorizaba a los ingenios a contratar con los productores de mollienda de caña a cambio de una participación en la misma. El ingenio recibía 47% de azúcar molida a cuenta del cañero como pago del servicio, y el agricultor recibía el 53% restante. Uno de los problemas que se puso de manifiesto con el funcionamiento del sistema fue quién comercializaba el azúcar del cañero. Se intentó una “corporación de cañeros de Tucumán” pero fue resistida por los industriales; en segundo lugar se adjudicó aquella tarea a la Dirección Nacional del Azúcar, pero fue un fracaso (los cañeros

perdieron su azúcar). Finalmente, a instancias de la organización representativa del pequeño cañero (Unión de Cañeros Independientes de Tucumán, UCIT), se sancionó otra normativa para autorizar a las cooperativas a comercializar por cuenta de los cañeros.

De este modo, la intervención del Estado en esta coyuntura innovó y fortaleció la organización de los productores. Aumentaron las cooperativas, sobre todo las de segundo grado (federaciones de cooperativas) se capacitaron para funciones agroindustriales, y se estimuló la integración cooperativizada agroindustrial.

El sistema estimuló la capitalización del sector agrario, permitió un mayor ingreso al sector de pequeños productores y un notable aumento de los rendimientos agrícolas. Asimismo, puso una vez más al descubierto la ineficiencia de parte del sector industrial tucumano: convocatorias de acreedores, quiebras y “vaciamientos” de empresas estuvieron a la orden del día. Simultáneamente, otro grupo de ingenios (entre los cuales se encontraba uno en poder de las cooperativas) mostraban altos rendimientos industriales, bajos costos y con el tiempo comenzaron a sanear situaciones financieras complicadas; más aún, la sociedad de la que la Liga de Cooperativas Cañeras formaba parte, que arrendaba al ingenio

Nuñorco, lo lograba comprar. Asimismo, grandes capitales agrarios cañeros comenzaban a invertir en ingenios, en una nueva tendencia —iniciada por las cooperativas— de “integración vertical hacia delante”.

El sistema de participación y concertación de los agentes que establecía el sistema de maquila no se correspondía con la rigidez que establecía la Dirección Nacional del Azúcar en la regulación de la actividad en su conjunto. Mientras se creaban federaciones de cooperativas de pequeños, medianos y grandes productores, se creaban formas de competencia para atraer a los agricultores más productivos⁵, se iniciaban formas de organización agroindustrial con integración de costos y se encontraba una forma de concertación con los grandes ingenios del Norte, la DNA seguía con los viejos sistemas clientelísticos y no exentos de corrupción; era un antiguo organismo nacional donde el grupo “político” tenía mayor fuerza que el grupo de técnicos que habían ideado el sistema de maquila. Así, además de los cupos de pro-

ducción, la DNA establecía cupos mensuales de comercialización de azúcar, y mediante el otorgamiento de “cupos extras” mantuvo en pie a varios ingenios a punto de quebrar, más por razones políticas que por razones técnicas o “sociales”, como aducían las resoluciones.

EL DECRETO DE DESREGULACIÓN DE 1991

El decreto 2284 de desregulación económica de fines de 1991, formó parte de un paquete de medidas del gobierno de Menem, tendientes a la liberalización de la economía.

El decreto establece la disolución de la Dirección Nacional del Azúcar que regulaba la producción de caña, así como la derogación de la Ley Nacional del Azúcar y todos los decretos *ad hoc* de regulación.

Algunas medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional desde que el Dr. Menem asumió la presidencia se orientaron a la desregulación. Por ejemplo, durante 1990 el decreto de maquila fue sustituido por otro que establecía: “Los porcentajes de distribución del azúcar producido serán de libre negociación entre las partes”. Complementando esta normativa se permitía comerciar el azúcar de maquila (anteriormente

⁵ El cañero podía optar por pertenecer a una cooperativa y *entregar caña y recibir azúcar*, operar vendiendo la caña (venta por ley) o, por último, otros arreglos privados con el ingenio, que se llamaban “maquila privada”.

en manos de las cooperativas) a los ingenios que la procesaron.

LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA ACTIVIDAD CAÑERA

Un trabajo da cuenta de 11.496 productores tucumanos que conforman una estructura productiva heterogénea y en constante modificación. Se establecieron tipos de productores según el nivel de capital invertido en la unidad (medido por maquinarias) y utilización de mano de obra ajena a la explotación (Giarracca y Aparicio, 1991).

Cuadro N° 1
Tipología de productores

Pequeños productores	Porcentaje
Campesinos puros	42,2%
Campesinos transicionales	18,1%
Familiares capitalizados	22,0%
Empresarios	17,7%
Total	100% (11.496)

Fuente: Giarracca y Aparicio, 1991: 37.

En el Cuadro N° 1 se muestra la gran heterogeneidad en la estructura agraria cañera tu-

cumana. El trabajo señalaba una tendencia a la disminución del “campesino puro” y la formación de una capa de “transicionales” y “familiares capitalizados” quienes registraban un nivel de capitalización más elevado que los primeros. El Censo Nacional Agropecuario corroboró estas tendencias en cifras aún más contundentes que las del trabajo de Giarracca y Aparicio⁶.

La producción de caña como única actividad agropecuaria para la venta subsiste como característica predominante: casi el 77% de las explotaciones son monoproductoras. Si a esta información se la cruza por la tipología presentada en el cuadro anterior se obtiene

6 Este trabajo se hizo en 1988, unos meses antes de que se realizara el Censo Nacional Agropecuario. Este último (cuyos datos se publicaron cuatro años después) registra alrededor de mil productores menos en los estratos menores de superficie que el estudio de Giarracca y Aparicio. La muestra estadística (basada en el registro de la DNA) sobreponderó a los cañeros de pequeños cupos (hasta 25 t. de cupo) que aparecían en los registros de productores del ente oficial pero en los hechos ya habían desaparecido, por muertes o por “venta” del cupo (que legalmente estaba prohibida: el cupo estaba ligado a la tierra, no se podía vender sin ella). En todos los otros parámetros la “muestra” y el “censo” coinciden (Ver Giarracca y Aparicio: anexo metodológico y Tecno UBACYT, 1991).

que mientras el 86,9% de los “campesinos puros” y el 76,9% de los “empresarios” son monoproductores, estas proporciones bajan en los “campesinos transicionales” a 59,4% y en los “familiares capitalizados” a 69,9%. En efecto, los productores medios adoptan una estrategia productiva de mayor diversificación en la producción destinada al mercado, los “transicionales” incorporaron tabaco, hortalizas y animales (vacunos y porcinos); los “familiares capitalizados” incorporaron especialmente cereales y hortalizas (Giarracca y Aparicio, 1991: 41).

Así también los campesinos comenzaron a complementar ingresos con otras actividades fuera de la explotación. Gran parte de los miembros de las unidades “pequeños productores” (los componentes de la unidad doméstica) desarrollan actividades asalariadas fuera de la explotación. Los más pobres, en tareas agrícolas precarias, y las mujeres e hijas, en tareas de servicio doméstico de ciudades cercanas o en Buenos Aires (migraciones transitorias); los miembros de los “familiares capitalizados” en trabajos más calificados en servicios y las mujeres en enfermería o docencia.

LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS ORGANIZACIONES

Los pequeños cañeros están organizados gremialmente en la Unión de Cañeros Independientes (UCIT), creada en 1945, pero que registra antecedentes importantes (el Sindicato Cañero) en la década del treinta. UCIT tuvo posiciones reivindicativas que expresaban el alto grado de organización de los cañeros.

La primera cooperativa cañera se forma en ese mismo año, 1945, en el departamento de Simoca; sin embargo, la proliferación de cooperativas se produce en los años sesenta, en un período de intensa agitación social. Entre 1966 y 1969 surgen cooperativas en casi todos los departamentos cañeros. Los dirigentes que formaban las cooperativas actuaban en UCIT. “Cooperativas y sindicato eran estrategias de un movimiento, formado por luchadores, para defendernos de las injusticias” (Entrevista a un cañero, citado por Riveiro, 1992).

A partir de 1985, las cooperativas se organizan en “federaciones” para cumplir el requisito de la normativa de maquila y comercializar el azúcar a cuenta del cañero. También se crean cooperativas de grandes productores, que en la actualidad están desapareciendo.

La Liga de Cooperativas Cañeras de Tucumán, la Cooperativa de Productores Agrarios de Tucumán (COPRATUC) y la Asociación de Cooperativas Cañeras de Tucumán agrupan a los “pequeños productores”. La Liga agrupó, hasta hace poco, a once cooperativas de primer grado, entre ellas la cooperativa de trabajo Campo de Herrera. Además forma parte de una sociedad (junto con el Estado provincial y los trabajadores de fábrica) propietaria del ingenio Nuñorco⁷.

Las tres federaciones que agrupan a pequeños productores comercializaban alrededor del 10% del azúcar a nivel nacional. La Liga fraccionaba y distribuía por su cuenta y llegó a tener un local de distribución en Buenos Aires.

LA SITUACIÓN ACTUAL

Durante los cuatro años en que se comercializó mediante el contrato de maquila oficial, los agricultores se capitalizaron y fortalecieron sus organizaciones. En los primeros años del gobierno menemista la situación funcionaba

más “de hecho” que por las normativas, ya que la DNA se estaba desmantelando. Los actores del complejo programaban formas de concertación privada y hubo un intento de acuerdo entre las cooperativas tucumanas y el sector industrial nacional, para establecer reglas del juego respetadas por todos, por ejemplo mantener cierta cuota de azúcar en el mercado mensualmente para no bajar los precios.

Sin embargo, la aparición del decreto de desregulación apresuró un proceso que, de haberse dado con más tiempo, hubiese resultado de otra forma. La desregulación total, el cierre de la DNA (que de hecho casi no funcionaba) volvió a cohesionar a los agentes regionalmente. Los industriales tucumanos nuevamente adujeron la “cuestión social” para encontrar soluciones a la situación de endeudamiento en la que se encontraban mayoritariamente. Los cañeros pequeños y sus organizaciones, frente a la retirada total del Estado y el peligro de un precio del azúcar que comenzó a bajar casi un 50% (llegó a \$0,21 el kg) volvieron a la antigua alianza con los industriales de Tucumán, demandando al Estado provincial que interviniera.

Así se creó un ente concentrador de azúcar financiado por el Banco Provincia y el Banco Nación, con la garantía de la coparticipación federal de Tucumán. Es decir que si no se cum-

7 Para un desarrollo mayor del proceso de formación de la Liga y la importancia de la compra del ingenio, ver Giarracca, 1992.

plía con los pagos de los préstamos la Nación podía retener la partida de la provincia en la co-participación de ingresos nacionales. Ese ente financió la zafra de 1992 recibiendo azúcar a \$0,25, pero con la finalidad de no entregarlo al mercado hasta que no se produjera un aumento del precio. Este ente, llamado Mercoazúcar, está integrado por ingenios y las cooperativas comercializadoras y sustentado por el gobierno provincial. En noviembre de 1992 terminó la zafra, y en las últimas semanas de febrero de 1993 efectivamente el precio del azúcar subió a \$0,38, con lo cual es de esperar que el Mercoazúcar haya logrado su objetivo de cancelar el préstamo y lograr una mayor ganancia para los entes comercializadores que participaron en él.

Esta fue una situación de emergencia frente al descontrol que suscitó el decreto de desregulación, o por lo menos así fue caracterizada por importantes actores del complejo. Existen desniveles entre los grupos de ingenios que controlan el mercado y el ingenio cooperativizado y las cooperativas en general.

Los ingenios tucumanos tienen fuertes deudas con el Estado provincial y el nacional que constantemente buscan refinanciar. Carlos Paz, dueño del ingenio Concepción, en su carácter de presidente del Centro Azucarero Tucumano (que nuclea a los ingenios) declaró: “necesita-

mos una suerte de Plan Brady azucarero en Tucumán, con formas de pago especiales para las deudas previsionales, impositivas, bancarias que arrastran los ingenios” (*Clarín*, 1-2-1993). En otros ingenios la situación no es mejor: grupos de dudoso origen arrendaron dos ingenios y en la mitad de la zafra desaparecieron de la provincia dejando deudas con los cañeros⁸.

Las organizaciones de los pequeños productores, mientras tanto, actúan de distintas formas. Algunos dirigentes, sobre todo de UCIT, consideran que el sector no puede reacomodarse a la nueva situación recibiendo precios muy bajos. Muchos pequeños productores, frente a la situación de este año, vendieron caña en pie sin cubrir costos; las cooperativas que entregaron al ingenio cooperativizado fueron las únicas que lograron contratos de maquila con los porcentajes anteriores. Esto derivó en problemas de costos para el ingenio, con lo cual la situación del sector cooperativizado se tornó delicada. Esto, a nuestro entender, ha llevado a que las organizaciones de los pequeños

8 Un artículo sobre grupos mafiosos de Tucumán se sorprende de que ciertos personajes que actuaron en negocios clandestinos durante la década pasada hayan podido arrendar un ingenio en la última cosecha (ver “Buenos muchachos” en *Clarín*, 21-2-1993).

productores hayan perdido la capacidad para generar iniciativas en forma independiente del sector industrial.

De todas formas, las organizaciones representativas de los pequeños productores desarrollan distintas estrategias frente a la grave situación:

1. buscar soluciones para el ingenio propiedad de las cooperativas, mediante créditos y disminución de costos; encontrar formas de disminuir costos agrícolas mediante “frentes de cosecha”⁹, y preservar el espacio de la integración cooperativizada, que alcanza a 2.000 pequeños cañeros;
2. buscar formas de reconversión de la producción cañera. El problema fundamental es la financiación de este proceso; por ahora COPRATUC ha encontrado financiar un proyecto de cría de cerdos y la Cooperativa de Trabajo (que integra la Liga) buscaba financiación para varios proyectos agroindustria-

9 El “frente de cosecha” consiste en armar un calendario de zafra regional donde con las maquinarias y transporte de los socios y el trabajo de los cañeros, se van cosechando sucesivamente los cañaverales. Las cooperativas han demostrado que esta forma baja el costo de la cosecha y sube los rendimientos porque el pequeño cañero no tiene que esperar contratar un transporte para trasladar su cosecha.

les; existe además un programa dedicado a este fin de la SEAGYP.

3. fortalecer las cooperativas de comercialización para estar en mejores posiciones frente a los ingenios¹⁰.

REFLEXIONES FINALES

La actividad cañera y azucarera de nuestro país pasa por una importante crisis, que seguramente va a derivar en una profunda reestructuración del sector. Dentro de este contexto, la supervivencia de los pequeños productores solo podrá realizarse en la medida en que las organizaciones cooperativas que los representan puedan desarrollar estrategias y políticas que les permitan capear la tormenta actual, una de las peores crisis de su historia, y desarrollar estrategias viables para el mediano y largo plazo.

Es difícil dilucidar, más allá de la situación coyuntural por la que atraviesan los pequeños productores cañeros, los posibles rumbos estratégicos por los que van a tener que transitar a mediano y largo plazo. En este contexto, la proyectada integración económica con el Bra-

10 Entrevistas a dirigentes del sector.

sil seguramente va a constituirse en un importante elemento a tener en consideración.

El complejo cañero de nuestro país se enfrenta con un complejo mucho más desarrollado como es el brasileño. Asimismo, allí la producción cañera estuvo mucho más vinculada a la producción dealconafta y, por consiguiente, ligada a consideraciones estratégicas globales relacionadas con una política de energéticos. Se trata de un complejo que ha evolucionado en función de claras políticas estatales, tomándose en consideración objetivos estratégicos de largo alcance.

Frente a esta disyuntiva, se plantean por lo menos dos escenarios alternativos para el complejo cañero de nuestro país. Una posibilidad es que sea impulsado plenamente el proceso de apertura en el marco del Mercosur, permitiéndose que “el mercado”, por sí solo, sea el único o principal elemento reordenador de la reestructuración del sector. Pero la apertura plena e indiscriminada, no necesariamente coadyuvaría a una mayor eficacia productiva o social. Es muy probable que determinados sectores sigan persistiendo en el complejo cañero argentino, y no necesariamente por ser los más eficientes y eficaces. Existen “sesgos” y “fallas del mercado” en este sentido, que no serían necesariamente subsanados mediante

la apertura plena de ambos complejos. En este escenario, no habría lugar para la producción familiar (por lo menos para un mercado legal) y los agentes que permanecerían encontrarían formas de integración parecidas a las del Norte prescindiendo de terceros, o con muy pocos productores independientes.

La otra alternativa tendría que ver con la negociación paulatina de la reestructuración del sector en función de una equivalente coordinación de políticas que sean elaboradas con el Brasil. Tampoco aquí podría darse, necesariamente, un resultado apropiado para el conjunto del complejo azucarero, o para el sector de los productores familiares en particular. Pero por lo menos se habilitarían soluciones discutidas, analizadas, y negociadas por las organizaciones y los sectores involucrados en forma paulatina.

En el escenario de una “negociación cañera” con el Brasil, un aspecto a considerar es la política petrolera de nuestro país¹¹, a la que se po-

11 Demás está decir que la actual política de privatizaciones que incluye a YPF no nos permite decir nada respecto de lo que sería, en el futuro, la política estatal de energéticos para nuestro país, dado que el Estado ha perdido significativamente capacidad de gestión en esta área.

dría vincular con la de la actividad cañera brasileña. En la medida en que nuestro país pudiera proveer al Brasil de una oferta regular de petróleo a precios estables, esto coadyuvaría no solo a consolidar una política conjunta en materia de energéticos sino que también permitiría que, a cambio se fortaleciera el desarrollo de una estrategia conjunta para la actividad cañera de ambos países frente al mercado internacional.

El análisis de los intereses específicos de los pequeños productores cañeros, tanto de nuestro país como del Brasil, podría ser incorporado en este contexto más global. A lo largo de los años, la formación de cooperativas cañeras, y la integración cooperativizada “hacia delante” con la compra de un ingenio azucarero, les ha otorgado una herramienta importante que les ha permitido —hasta ahora— desarrollar mecanismos para enfrentar la crisis que afecta al sector. En el futuro, sería importante que estos esfuerzos sean aunados con los que estuvieran desarrollándose en el Brasil. Solo en forma conjunta podrán estas organizaciones representativas de pequeños cañeros y trabajadores del sector desarrollar estrategias que posibiliten su permanencia y reestructuración en el marco de la constitución del Mercosur.

La importancia del productor familiar cañero es social, pero también productiva y po-

lítica. Está demostrado para la Argentina que frente a aumentos de precios y por lo tanto de ingresos, el sector familiar aumenta la productividad de su cañaveral, tecnifica y cuida la calidad de su producción (véase Giarracca y Aparicio, 1991). La combinación de producción familiar tecnificada y eficiente con ingenios azucareros modernizados y saneados financieramente puede complementar y no competir con el complejo brasileño y recuperar mercados internacionales. Esta estrategia necesita de políticas públicas coherentes para las economías regionales y el agro en general, que, como sabemos, son reclamadas permanentemente por el sector.

BIBLIOGRAFÍA

- Balán, J. 1978 “Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y el mercado nacional en el desarrollo agro-exportador” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 18, N° 69.
- Bravo, M. 1992 “Las leyes machete y la ruptura del frente azucarero tucumano” en Campi, D. (comp.) *Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina* (Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy).

- Campi, D. (comp.) 1992 *Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina* (Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy).
- Chudnovsky, D. 1993 "El futuro de la integración hemisférica: el Mercosur y la Iniciativa para las Américas" en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 21, N° 128.
- Clarín 1993 "Buenos muchachos", 21-2.
- De las Carreras, A. 1990 *El azúcar en la Argentina y en el mundo* (Buenos Aires: Hemisferio Sur).
- Estrugo, F. y Habiague, C. 1993 *El complejo cañero en Brasil ante el Mercosur. Posibles repercusiones y estrategias en el sector cañero tucumano* (Buenos Aires: Monografía de la UBA) mimeo.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 "Los campesinos cañeros: multiocupación y organización" en *Cuaderno del Instituto de Investigaciones* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 3.
- Murmis, M. y Waisman, C. 1969 "Monoproducción agroindustrial, crisis y clase obrera: la industria azucarera tucumana" en *Revista Latinoamericana de Sociología*, Vol. 15, N° 69/2.
- Plant, R. 1987 *Sugar and Modern Slavery. A Tale of Two Countries* (Nueva York: Zed Books).
- Pucci, R. 1989 *La élite azucarera y la formación del sector cañero en Tucumán (1880-1920)* (Buenos Aires).
- Riveiro, G. 1992 *Producción familiar y acumulación de capital: el caso de los cañeros tucumanos* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA) Informe final de investigación, mimeo.
- Rutledge, I. 1987 *Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy: 1550-1960* (Tilcara / Buenos Aires: CICSO / ECIRA / ITT-MLAL).
- Santamaría, D. 1986 *Azúcar y sociedad en el Noroeste Argentino* (Buenos Aires: Ediciones del IDES) N° 11.
- Teubal, M. 1961 "Europa y Latinoamérica ante la integración económica" en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 1, N° 3.
- Teubal, M. 1968 "The Failure of Latin America's Economic Integration" en Petras, J. y Zeitlin, M. (comps.) *Latin America: Reform or Revolution* (Nueva York: Fawcett).
- United States Department of Agriculture (USDA) 1990 "Brazilian Sugar at a Crossroads" en *Agricultural Outlook* (Washington DC: Economic Research Service) junio.

United States Department of Agriculture
(USDA) 1991 “Global Sugar Output Catches
Up” en *Agricultural Outlook* (Washington
DC: Economic Research Service) enero-
febrero.

United States Department of Agriculture
(USDA) 1992 “U.S. Sugar Consumption
on the Rise” en *Agricultural Outlook*
(Washington DC: Economic Research
Service) enero-febrero.

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN EXPANSIÓN. ¿REPRIMARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA?

INTRODUCCIÓN*

NORMA GIARRACCA Y MIGUEL TEUBAL**

El paisaje tanto geográfico como agrario-cultural de la Argentina llamaba mucho la atención de propios y ajenos; las inmensas llanuras planas donde se llegaba a divisar tanto la salida como la puesta de sol, ese horizonte difícil de encontrar en otros territorios fue frecuentemente cantado por los poetas; caminos de montañas, serranías, desiertos que desembocaban en oasis naturales o producidos por la

mano del hombre; inconmensurables zonas de lagos y glaciares, saltos verticales u horizontales de los cauces de los ríos en una provincia de tierra ferrosa de color ladrillo; todo junto y mucho más podía registrarse como en muy pocas otras naciones del mundo. Los recorridos por las rutas, hasta hace unos años suponía cambiar cada tanto de paisaje agrario; pasar por zonas de vacas pastando a campo abierto en grandes extensiones, los tupidos girasoles o campos de maíz y trigo que nos hicieron famosos en todo el mundo. Llegar a Tucumán era perderse en un mundo verde de cañaverales arroyos y ríos; a Chaco en un mundo blanco del algodón a punto de cosechar; Misiones un universo pequeño de cultivos y culturas de muchas partes del mundo. Esa diversidad, que como siempre ocurre era biológica y cultural, se expresaba en extensiones interminables de cultivos (por lo menos para el europeo) y pueblos entrañables donde los vecinos paseaban o hacían compras sobre

* Giarracca, N. y Teubal, M. 2013 “Introducción” (sel.) en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?* (Buenos Aires: Antropofagia), pp. 9-16.

** Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

un sulky o en un tractor; los bares eran lugares de reunión y amistad y todo giraba alrededor de las plazas. Nuestra literatura da cuenta de estos territorios y poblaciones preñadas de historias que tanto reenviaban a los pueblos preexistentes con sus leyendas como las del “familiar” o “la salamanca” en el norte como a los “gringos” de todos los rincones: árabes, ucranianos, alemanes, daneses, españoles, gauchos judíos y “chinas” rubias y polacas. Las comidas de los pueblos podían ser tan variadas como las culturas mismas pero los huevos siempre fueron caseros, los asados de carne de vacas caminadoras que nos hizo famosos en el mundo por su calidad y los vinos de verdaderos maestros en el arte de hacerlos. Esos territorios nunca estuvieron exentos de tensiones y conflictos porque en el momento fundacional del Estado-nación además de un etnocidio se configuró una injusta distribución de la tierra que no pudo remediarse con los miles de colonos que comenzaron a llegar y asentarse durante décadas. Pero un fuerte entramado institucional había logrado una convivencia sin violencias y un sistema de inclusión, muy desigual por cierto, pero donde todos estaban adentro. Éramos autosuficientes alimentariamente y podíamos exportar; el mercado interno permitía alimentar con los mismos productos a la clase obrera y al resto (el famoso

asadito de los albañiles). Necesitábamos cambios, distribuir la tierra o profundizar innovaciones propias para subir rendimientos; en eso estábamos a comienzos de los setenta bajo la batuta experta del Ing. Horacio Giberti.

Hoy, dictadura, década del noventa y gobiernos posteriores mediante, todo eso ha cambiado y muchos lo llaman “progreso”. Solo mencionar ese tramo de la Ruta 158 de Villa María a Río Cuarto en la provincia de Córdoba para ejemplificar los que “esos muchos” denominan progreso. Los desiertos de soja verde derivan en la ciudad General Deheza, reinado del complejo del agronegocio sojero donde el olor rancio del aceite indica la famosa “agroindustrialización” o “incorporación de valor” como dicen las propagandas oficiales del “modelo”. Una ciudad intervenida, rodeada por unos hierros de una pestilente fábrica que cruza la ruta en forma de puentes e imponen al que pasa por la ciudad esa presencia prepotente de poder, devastación y saqueo de una tierra que para la Constitución de 1949, debía cumplir una función social. Con sus propios trenes a los costados para sacar las producciones por los puentes de Rosario, una parte de Córdoba se alza con el orgullo de los ricos ignorantes en el corazón del agronegocio sojero. Recordamos al pasar por allí a esos hijos muertos y enfermos

de unas madres valerosas que en esta misma provincia llevaron a los tribunales por contaminación a dos sojeros y un fumigador en un juicio penal que les dio la razón (véase artículo de Fernando Barri en este libro).

¿Debemos resignarnos a que estamos en finales de una época, que esta es la nueva Argentina a la que nos debemos adaptar? ¿Reconocernos como los “perdedores del modelo” como suele decir el sojero Grobocopatel? O como nos cuenta el final de la novela de Gabriela Massuh, *La omisión*, debemos mantener oculta de algún modo nuestra cultura como lo hizo una de las más antiguas civilizaciones entre el Éufrates y el Tigris, Góbekli Tepe, que preservaron el pasado enterrándolo para testimoniar sobre él en tiempos futuros. ¿Son los libros nuestras formas contemporáneas de preservar u ocultar lo que fuimos para un futuro incierto? En cierto sentido los son, pero también son herramientas de resistencia para parar y modificar aquello que destruye el tesoro más importante que se nos otorgó: un territorio diverso y fértil.

Este libro trata de esto, de mostrar las transformaciones en marcha desde diversas disciplinas y con la rigurosidad del buen oficio de investigadores pero también desde la invitación a conocer y sumarse a las resistencias y proponer un camino a seguir que no haga necesario

“ocultar” en páginas lo que construimos alrededor de una naturaleza generosa y exuberante, porque lo perdemos.

¿REPRIMARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA?¹

No hay ninguna duda y el libro así lo demuestra, que las actividades extractivas se expandieron, la inquietud que cabe es si este crecimiento se refleja en los datos de los componentes de la economía del país. Hemos demostrado en trabajos anteriores (Giarracca, 2012) que en el nivel de los valores exportables, en la Argentina como en el resto de la América Latina incluido Brasil, hubo una reprimarización (aunque la presidenta en sus discursos se empeñe en decir lo contrario). El interrogante reside en si en el nivel de la actividad interna prevalecen también los sectores de origen primario o la industria ha recuperado cierta dinámica que la lleva a convertirse en motor de la economía.

No es la primera vez en la historia de América Latina que uno de los ejes centrales de los debates y de las luchas políticas, sociales, cul-

1 Los datos de este apartado provienen de los informes económicos de CEPAL de varios años.

turales y epistemológicas del momento, gire en torno a la relación entre actividades primarias e industriales. En otras palabras, el interrogante de si hubo un proceso de reprimarización de la economía, las características que asumiría dentro de lo que hemos denominado modelo extractivo o extractivismo y su relación con el sector industrial. Hablamos de reprimarización porque esta relación ha sufrido un largo derrotero en el continente desde la conquista hasta nuestros días, es decir en algún momento el continente tuvo una vocación industrializadora.

Entendemos por reprimarización al énfasis puesto sobre la producción de materias primas que se constituyen en productos básicos de exportación (*commodities*) aunque también aquellos provistos por el sector agropecuario en el modo de producción del “agronegocio” o agroindustrias para el mercado interno. Los sectores primarios de la economía incluyen en forma creciente sectores que pueden ser altamente intensivos en capital, pero que generan poco empleo, e incluso lo expulsan, y que tienen pocos vínculos con el resto de la economía (tienden a formar parte de las llamadas economías de enclave). Y si bien, como señalamos en este libro, en el momento actual son actividades muy rentables, involucran el desgaste y agotamiento de la base de recursos naturales

del país, una feroz degradación ambiental y consecuencias en el nivel de la salud humana.

El papel que juega el sector primario, y lo que denominamos como la reprimarización o sea el extractivismo, en nuestra sociedad puede ser visualizado en un contexto más amplio, en el marco de las políticas globales aplicadas en diferentes períodos históricos. En este sentido podemos considerar como trasfondo de estos análisis las políticas y los procesos referidos a la explotación de los recursos naturales en tres períodos:

1. Una primera etapa en la que se resaltan muy marcadamente las denominadas políticas de “industrialización por sustitución de las importaciones” (ISI);
2. Las denominadas políticas de “apertura” impulsadas tanto por la dictadura militar como por la convertibilidad enmarcada en el neoliberalismo económico;
3. Las actuales políticas de la “postconvertibilidad”.

Las políticas de ISI surgen como consecuencia de la crisis de los años treinta y las dos guerras mundiales y concluyen hacia comienzos de la década de los setenta con el embate del neoliberalismo. Señaladas como políticas que

se proponían modificar el tradicional patrón primario exportador establecido en nuestro país desde fines del siglo XIX, se manifiestan claramente a partir del primer gobierno peronista del período 1946-1955. Diversos estudios remarcan como parte de este proceso el crecimiento de la industria, y la sustitución de importaciones de productos manufacturados. En un primer período se trata del establecimiento de industrias livianas (textiles, artefactos para el hogar, etcétera), mientras que en una segunda etapa se complejiza el desarrollo industrial y tienden a sustituirse las importaciones de algunos bienes intermedios y de capital al establecerse industrias tales como la petroquímica, química pesada, automotriz, etcétera.

A lo largo de esta etapa el proceso de industrialización se manifiesta en el aumento de la participación del producto industrial en la producción global; en nuestro país este alcanza un máximo en el período 1970-1974 con un producto industrial que representa 43,5% del PBI. Se trata de un proceso que involucra a toda América Latina en general. La otra variable que configura un indicador del grado de sustitución de importaciones alcanzado es el porcentaje de la participación de la producción manufacturera en las importaciones (en particular en lo que concierne a importaciones de

bienes de consumo) que a lo largo del período se reduce sustancialmente. El proceso de industrialización incide sobre el aumento del PBI per cápita de toda la región alcanzando un 2,5% por año entre 1950 y 1973. Asimismo, si bien se manifiesta una tendencia decreciente en las importaciones de productos manufacturados, en casi todos los países de la región se producen déficit de la balanza comercial inclusive en nuestro país. Esto se debe, por una parte, a los aumentos de las importaciones de bienes intermedios y de capital, y por la otra, a que las exportaciones siguen siendo casi exclusivamente productos primarios que no aumentan sus volúmenes o valores de exportación lo suficientemente como para hacer frente a las crecientes importaciones. Asimismo se trata de un período en el que se presenta un claro enfrentamiento entre el modelo de ISI y el de la “apertura” apoyado por sectores tradicionales y el capital extranjero.

En esta etapa el movimiento obrero adquiere un protagonismo muy importante y la participación del trabajo en el ingreso nacional alcanza niveles muy altos (en particular a comienzos de los años cincuenta). En nuestro país el modelo es en general resistido por diversos sectores, lo que se manifiesta en una gran inestabilidad política.

Vemos así que con vaivenes y en el marco de procesos políticos complejos que conducen inclusive a golpes de Estado, el proceso de industrialización en nuestro país sigue su curso. Al mismo tiempo el grueso de las exportaciones están conformadas por los tradicionales productos primarios de exportación, constituyéndose en determinadas coyunturas económicas cuellos de botella a causa de los déficits en la balanza comercial que conducen a cambios bruscos de política. Cabe destacar también que la ISI como régimen de acumulación se constituyó como un proceso que se proponía modificar las pautas primarias exportadoras de antaño. Ya se había generado un debate impulsado inicialmente por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) destacándose la importancia de la ISI y la necesidad de modificar estructuras económicas y los modelos de acumulación basados en exclusividad en las “ventajas comparativas” que presuntamente tenían los países de la periferia respecto de sus productos primarios de exportación.

Estas políticas de ISI entran en crisis en los años setenta, a causa del auge del neoliberalismo en todo el continente. En nuestro país surge con el golpe militar del “proceso de reorganización nacional” primero y durante la “convertibilidad” de los años noventa después.

Comienzan a prevalecer las políticas de “apertura” al exterior, la presunta necesidad de dar rienda suelta a las denominadas “ventajas comparativas”, y al “mercado” que cuestionaban las anteriores políticas de ISI. Se trata de la implantación de políticas de desregulación, privatizaciones, y aperturas al exterior, políticas que habrían de potenciar fundamentalmente a dos sectores de la economía que paulatinamente se transformaron en hegemónicos: el sector financiero y los sectores primarios relacionados fundamentalmente al agronegocio sojero. Es el período en el que se impulsa la expansión sojera y se establecen las bases para el crecimiento de la minería a cielo abierto. También se trata de darle rienda suelta al capital extranjero en estos sectores y en el sector petrolífero, en el proceso de privatización de YPF.

A lo largo y ancho del continente se establecen regímenes y leyes que favorecen al extractivismo y a la reprimarización de la economía. En Argentina se decreta el Plan de Convertibilidad y el Decreto de Desregulación del año 1991 siendo este último el marco en el que se establecen las bases para dar impulso al neoliberalismo y a la reprimarización de la economía. El Plan de Convertibilidad establece el uno a uno (un peso igual a un dólar) y la plena liberalización de los capitales desde el exterior hacia

el país y desde el país hacia el exterior. Como consecuencia existe una recuperación de los sectores primarios en el producto agregado y en particular en la estructura de las exportaciones, pero también se manifiesta un intenso proceso de desindustrialización, lo cual conduce a “la destrucción de la capacidad instalada y del tejido industrial, así como la pérdida de capacidades humanas difíciles y costosas de revertir (Nadal, 2009).

Durante este período se promueve activamente la reprimarización de la economía aparte de la importancia que le es asignada al sector financiero. Se manifiesta cierta recuperación de los sectores primarios en el producto agregado y en las exportaciones, o sea, una tendencia hacia la reconfiguración de la tradicional *economía primario-exportadora*. El contexto global ha cambiado con relación a lo que eran las economías primario-exportadoras de comienzos del siglo pasado; hoy en día están motorizadas por grandes empresas transnacionales que dominan sectores claves en las que operan y en los espacios financieros que las impulsan. Se manifiesta la utilización de tecnologías de punta —en la producción agraria las semillas transgénicas, en la minería grandes emprendimientos “a cielo abierto” en la que se dinamitan montañas enteras en vez de utilizar

los tradicionales socavones, en la producción de hidrocarburos el nuevo sistema de *fracking*— y entre cuyas características determinantes están los enormes pasivos ambientales y sociales que generan. No es de extrañar entonces que son procesos altamente resistidos tanto en nuestro país como en todo el continente, dados sus efectos sociales y ambientales altamente perniciosos.

En esta etapa del proceso de apertura, la ISI se revierte sustancialmente y tiene que ver en gran medida con las reprimarización de la economía. El sector manufacturero como porcentaje del PBI cae en casi todos los países del continente. A nivel latinoamericano cae del 12,7% en el período 1970-1974 al 6,4% en 2002-2006, en nuestro país del 43,5% a 27 % en el mismo lapso. Este retroceso del sector manufacturero, es interpretado como una pérdida de importancia o abandono del proyecto de industrialización. Sin embargo en varios países aparentemente hay un aumento del proceso de industrialización contrariando estas tendencias. Según Nadal (2009) se trata de una reprimarización que va acompañada del síndrome maquilador; la mayoría de los países que muestran esta tendencia distinta (aumento de la participación de las manufacturas en el PBI) fueron receptoras de maquiladora: México, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

En nuestro país con la reprimarización de la economía las exportaciones de soja adquieren preeminencia en el total, y en términos globales si bien se produjo cierto recuperó de las exportaciones de productos manufacturados (por ejemplo automóviles al Brasil), casi el 70% de las exportaciones siguen siendo productos primarios, tanto agropecuarios y manufacturas de origen agropecuarios, como productos mineros. Como veremos más adelante, es una tendencia que sigue también en nuestros días, pese a que el modelo neoliberal es denostado por los gobiernos denominados “progresistas”.

La reprimarización continúa intensamente durante la tercera etapa, la postconvertibilidad. Si bien en 2001-2002 hay una crisis propia del neoliberalismo, algunas políticas que se remiten precisamente a la reprimarización de las economías siguen su curso con posterioridad. Un cambio importante lo constituye el hecho de que en los términos planteados por Daniel Azpiazu habría habido una reactivación industrial donde se quebró el modelo de desindustrialización que arrancó en el año 1976. Sin embargo, la nueva paridad cambiaria y los bajos costos salariales en dólares potenciaron un perfil exportador vinculado con la producción de *commodities* (Azpiazu, 2009). El autor

acepta que hubo un proceso industrializador circunscrito a determinados sectores pero tuvo sus limitaciones. La única política activa que hubo fue la promoción industrial que favoreció a los oligopolios (las siderúrgicas, las automotrices y las de procesamiento de soja). En medio del conflicto del agro, se les dio beneficios de promoción a los que procesaban soja de exportación y a las que producen biodiesel a partir de la soja (véase Toledo López en este libro). Se promocionaron además proyectos que se hubiesen hecho de todas formas porque estaban las condiciones dadas en el escenario internacional (Azpiazu, 2009).

Daniel Azpiazu fue crítico del proceso industrializador por ser concentrador y extranjerizante, marcaba que no hubo políticas para las pymes y se mantenía un perfil exportador semejante a los de 1990. Asimismo, si bien hasta 2006 las cifras muestran superávit comercial, en 2007 y 2008 se transforman en déficit industrial. Vuelven a aparecer las figuras del *stop and go* de la industrialización sustitutiva; y si la estructura de la producción industrial no se modificaba volvería a aparecer el déficit comercial.

Como es sabido, y este libro refuerza la idea con datos y análisis de todo tipo, la Argentina sigue impulsando significativamente los secto-

res primario-exportadores a fin de garantizar la provisión de reservas de divisas para hacer frente a posibles efectos de la crisis mundial. El modelo extractivista cobra intensidad a raíz del aumento de la demanda de China y la India y del alza de los precios de los *commodities* en los mercados internacionales. Tal como lo señalaba Nadal (2009), el mercado de *commodities* asume plenamente las características que tienen los mercados financieros globales y que han contribuido significativamente a la debacle actual que sufren los países europeos, EEUU y Japón, entre otros.

Con respecto a nuestro país, creemos que es necesario poner en cuestionamiento un modelo que no solo es inestable y no resuelve los problemas fundamentales de la sociedad sino que los agrava, creando con el correr de los años creciente sufrimiento entre amplios espectros de la población.

[...]

BIBLIOGRAFÍA

- Azpiazu, D. 2009 “No hubo políticas para las pymes”, entrevista de Natalia Aruguete en *Cash, Suplemento Económico de Página/12*, 29 de marzo.
- Giarracca, N. 2012 “Tres paradojas para repensar la política” en *Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos) desarrollo en América Latina* (Buenos Aires: Mardulce).
- Nadal, A. (Colegio de México) 2009 Ponencia en *La reprimarización de América Latina*, CISDA IV, Bogotá, octubre.

LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN LA ARGENTINA

INTRODUCCIÓN* **

NORMA GIARRACCA Y MIGUEL TEUBAL***

*A Tupac Teubal, ternura y afecto
en nuestras vidas.*

EL MODELO EXTRACTIVO

Las sociedades humanas, desde tiempos inmemorables, estuvieron vinculadas con la naturaleza y con una dinámica productiva que se estableció en torno de los recursos naturales. Esto se vio claramente a partir de la invención de la agricultura y la domesticación de anima-

les hace 10 mil años; actividades que integraban al hombre con la naturaleza en una relación en la que este, si bien incidía en el proceso productivo, se adaptaba plenamente a su entorno respetando la capacidad de producción y reproducción de las plantas, los animales y el medio ambiente. Tanto los alimentos como la ropa que el hombre “producía” (superada la etapa de recolección propiamente dicha) eran y siguen siendo productos de la naturaleza. A esto se suman los materiales utilizados en la construcción de edificios de todo tipo, los instrumentos de producción y los combustibles usados para resguardarse del frío (madera). A

* Giarracca, N. y Teubal, M. 2013 “Las actividades extractivas en la Argentina. Introducción” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?* (Buenos Aires: Antropofagia).

** Una primera versión de este trabajo fue publicada en la revista de *Alasru*, N° 5, 2010. La presente versión es nueva, modificada, ampliada y actualizada a 2013.

*** Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

partir de la Modernidad, la Revolución Industrial y particularmente con la intensificación del capitalismo en el siglo XX, esas necesidades fueron extendiéndose en términos cuantitativos y geográficos: surgieron otras fuentes energéticas, nuevas formas de producir ropa y alimentos, y la búsqueda de minerales y materiales que pudieran ser utilizados, tanto como fuentes energéticas (carbón y luego petróleo) como para otros usos (la gama de materiales utilizados en los procesos de industrialización). Todos estos materiales fueron insumos de formas productivas que muchas veces tenían como sustento relaciones sociales regresivas en términos laborales (esclavitud, servidumbre) como también efectos negativos sobre el medio ambiente (Grigg, 1977; Diamont, 2006; Van Bath, 1974; Altieri, 2009).

Harvey (2004) señala que, en la etapa actual del desarrollo del capitalismo neoliberal a escala internacional, prevalece lo que él denomina un proceso de *acumulación por desposesión*, contrapuesto a lo que tradicionalmente constituía el proceso de acumulación expansiva del capital.

Esto involucra entre otras cuestiones: la mercantilización y privatización de la tierra; la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conver-

sión de diversas formas de derechos de propiedad —común, colectiva, estatal, etcétera— en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancías y la supresión de formas de producción y consumo alternativos; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales [...] El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un papel crucial al respaldar y promover estos procesos [...] Asimismo, a estos rasgos que en la actualidad forman parte de la geografía del capitalismo, y que tienen reminiscencias con lo ocurrido en la etapa de su *acumulación originaria*, se le suman otros nuevos que configuran la *acumulación por desposesión*: el énfasis en los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (el denominado Acuerdo Trips) marca los caminos a través de los cuales las patentes y licencias de materiales genéticos, plasma de semillas, y cualquier forma de otros productos, pueden ser usados contra poblaciones enteras cuyas prácticas de manejo ambiental han jugado un papel crucial en el desarrollo de estos materiales. La biopiratería es galopante, y el pillaje del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas pocas grandes empresas multinacionales está claramente en marcha. La reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra,

aire, agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía... La corporativización y privatización de activos previamente públicos (como las Universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua, y de otros servicios públicos que han arrasado al mundo, constituye una nueva ola de cercamiento de los bienes comunes. (Harvey, 2004: 113-115)

Un aspecto importante de esta *acumulación por desposesión* está relacionado con lo que denominamos en este artículo el *modelo extractivo*, es constitutivo de la misma. Se trata de un modelo vinculado al recurso natural e impulsado con gran ahínco por grandes empresas transnacionales que dominan sectores claves de la producción y comercialización, así como las tecnologías utilizadas en estos procesos. Si bien constituye un modelo remitido originalmente a la extracción de minerales —potenciado en años recientes por la *minería a cielo abierto*— también tiene que ver con la extracción del petróleo y con cierto tipo de agricultura como el modelo sojero y otros identificados como “agronegocio”.

La minería es paradigmática del modelo extractivo, pues se trata de una actividad que

pone de manifiesto la extracción (el saqueo) de materiales de la tierra que se hallan en cantidad limitada y que, una vez extraídos y utilizados, no pueden ser reproducidos. O sea, generan la depredación de estos y otros recursos de su entorno. En efecto, este tipo de minería amenaza —como en muchas partes del globo terráqueo— recursos naturales escasos —por ejemplo, el agua— en las distintas regiones donde se ha establecido, así como también poblaciones enteras y otras actividades que operan en su entorno.

En décadas recientes, las transformaciones operadas en el agro mundial han potenciado los aspectos netamente extractivos del modelo agrario (el “agronegocio”). Se trata de un proceso novedoso, ya que por siglos la agricultura tendió a ser sustentable al reproducir los recursos extraídos de la naturaleza. Incluso hoy persiste en muchos espacios el interés por mantener la sustentabilidad del agro, lo cual permitiría su reproducción. Pero no toda la agricultura es sustentable, pues requiere de recursos como el agua, la tierra fértil, la biodiversidad, que se hallan en cantidad limitada y no todos son reproducibles. Menos aún cuando se trata de darle impulso a un agro *extractivo*, como el caso de la expansión sojera en la Argentina, que incide de manera significativa en el medio

ambiente y en las poblaciones del entorno en el que opera (Giarracca y Teubal, 2008).

Los modelos extractivos recientes de la agricultura y la minería fueron todos promovidos en el marco de la aplicación de *tecnologías de punta*, por parte de grandes empresas transnacionales. Por este término puede entenderse simplemente cualquier tecnología que fue recientemente inventada y que es de última generación. Aunque por lo general se remiten a tecnologías cuyos campos de aplicación se vinculan con la frontera del conocimiento científico. Por ejemplo, la biotecnología, la informática o la nanotecnología, también pueden incidir en el desarrollo de otros campos de aplicación entre los cuales se encuentran los recursos naturales. En efecto, las tecnologías que se impulsan en el campo de los recursos naturales —en concreto aquellas vinculadas con la soja transgénica y la minería metalífera a cielo abierto, e incluso con las nuevas pasteras como la de UTM-Botnia en Uruguay o el *fracking* en el campo del petróleo— pueden ser consideradas de punta. Tras muchos años de neoliberalismo, de multiplicidad de desregulaciones y medidas promocionales, se han comenzado a aplicar cambios tecnológicos, considerados “de punta” y que habilitan esta nueva etapa del neoliberalismo portadora de los modelos extractivos. En ge-

neral, se piensa que la tecnología de punta es forzosamente buena, impulsora del progreso y del bienestar del país y de la comunidad en general. Pero esto no es necesariamente cierto. La semilla transgénica, base de sustentación del modelo sojero, fue inventada no para paliar el hambre en el mundo, sino para acrecentar la rentabilidad de las empresas que la promueven junto con el paquete tecnológico que la acompaña. En efecto, Monsanto —la principal proveedora de semilla en el mundo— acrecienta sus ganancias con la difusión de la semilla transgénica. Una vez establecida en el mercado, los productores agropecuarios —contrariando 10 mil años de agricultura durante los cuales reproducían su propia semilla— se ven obligados a comprarla año tras año a la empresa transnacional. Por ahora, eso no ocurre en su totalidad: los productores pueden también reproducir su propia semilla. Pero ocurrirá cuando Monsanto traiga una semilla “de última generación” que se suicide después de su primer (y único) uso. Entonces los productores agropecuarios se verán obligados a comprar a Monsanto o a sus licenciatarias año tras año. Y no solo eso, también tendrán que comprar el paquete tecnológico que la acompaña, incluyendo los agroquímicos que son provistos por la empresa o sus licenciatarias.

La minería *a cielo abierto* también involucra la utilización de una nueva tecnología de punta. En vez de utilizar los tradicionales socavones de la minería de antaño, se dinamitan grandes extensiones del territorio —montañas y glaciares enteros— y se aplica el método de *lixiviación* para separar materiales valiosos, de aquellos que no lo son. Este sistema puede considerarse una tecnología de punta que utiliza una cantidad exorbitante de cianuro y otros elementos, así como agua a raudales (que escasea y termina contaminada). Todos estos factores inciden en las actividades agropecuarias y turísticas, así como en la vida misma de las provincias donde se han establecido o van a establecerse estos emprendimientos mineros. En todas estas demarcaciones, tanto en nuestro país como en Chile y en el resto de América Latina, uno de los factores limitantes cruciales para la vida en general, es el agua.

En el caso de las pasteras-papeleras también se introducen métodos nuevos de cloración (sin embargo, se sigue tirando cloro elemental a los ríos, y se utiliza ácido sulfúrico —50 mil litros diarios en el caso de UTM-Botnia, 14 millones de metros cúbicos de gases—). El ácido sulfúrico se transforma en ácido sulfhídrico, el cual genera un olor nauseabundo en todos los lugares en donde hay plantas de este tipo.

También en este caso la utilización del agua es descomunal y se contamina junto con el aire. Luego se devuelven dioxinas altamente contaminantes a los ríos. Los gases que se liberan devuelven lluvia ácida. Estos tóxicos no se eliminan ni se degradan; se transforman en grasas de los animales, en leche y carne, mediante los forrajes, etcétera. Asimismo, los accidentes en todos los casos son muy frecuentes. Como el ocurrido en el Lago Laimaa, en Finlandia, que mató a infinidad de peces, o el caso de los cisnes de cuello negro en Concepción, Chile.

Las actividades extractivas (minera, petrolera, forestal, “agronegocio”) tienen múltiples aspectos en común:

- Fueron impulsadas en el marco del neoliberalismo económico difundido a escala mundial.
- Se vinculan con el interés de grandes corporaciones que las impulsan y que controlan sectores clave del espacio económico donde operan.
- Se remiten a escalas de producción mayores a las tradicionales desplazando multiplicidad de actividades preexistentes.
- Utilizan tecnologías de punta.
- Se localizan territorialmente porque dependen de la existencia y la persistencia de determinados recursos naturales.

- Desplazan masivamente tanto a trabajadores rurales, como al campesinado, a la agroindustria¹ en general y a pobladores cordilleranos circundantes.
- Significan actividades con alto consumo de recursos no reproducibles, como el agua, la tierra fértil, la biodiversidad.
- Se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver necesidades internas.
- Son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas regiones (agricultura, ganadería, turismo, cultivos industriales).
- No son esenciales para la vida de las comunidades —o del mundo en general—. Podemos vivir sin oro y también sin soja, pero no sin agua, ni alimentos.
- Son actividades que generan mucho valor de cambio, grandes rentabilidades para algunos agentes económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad.
- Generalmente están relacionadas con la generación y apropiación de “rentas diferenciales a

escala mundial” de los recursos naturales, aunque también son generadores de grandes desventajas externas, o costos sociales y ambientales no considerados por sus promotores.

LAS “RENTAS” (SOBREGANANCIAS) EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

La actividad extractiva es altamente rentable. Esa gran rentabilidad tiene que ver tanto con sus tasas de ganancia como con *rentas diferenciales a escala mundial* que son apropiadas en gran medida por las empresas del sector². Se trata de actividades rentables no solo porque sus costos internos son relativamente bajos —tierra fértil, gran disponibilidad de recursos mineros o petrolíferos— sino también porque existe en la actualidad una tendencia alcista en los precios internacionales de los *commodities*.

La valorización de esas rentas se realiza en el mercado mundial, en relación con esos aumentos de precios internacionales. A las empresas

¹ Para comprender la diferencia entre “agroindustrias” y “agronegocios” ver Giarracca y Teubal (2008).

² Para un análisis de las rentas diferenciales a escala mundial vistas desde la periferia del sistema mundial, véase el trabajo de Teubal y Palmisano incluido en este volumen.

les interesan los salarios más bajos que pueden existir a nivel interno u otros costos de producción que, en términos relativos, pueden ser comparativamente más bajos. Pero la disponibilidad de recursos “escasos” frente a una demanda creciente en el ámbito mundial constituye un ítem fundamental que determina la gran rentabilidad de esas actividades. Sin embargo, esa alta rentabilidad generada por la actividad minera y la del “agronegocio” no debería ser la única dimensión considerada en los análisis sobre esta cuestión. También deberían tenerse en cuenta una serie de “costos” —sociales, económicos, culturales, medioambientales y respecto a la salud humana— que no siempre son considerados. Tal como se señala en trabajos diversos, esos costos involucran muchas veces lo que los economistas denominan eufemísticamente *deseconomías externas*; es decir, son “externas” a las empresas involucradas en la producción (véanse Martínez y Schlupmann, 1993; y Mishan, 1967).

En definitiva, cualquier análisis de la viabilidad de una actividad —en particular las extractivas a que hacemos referencia en este trabajo— debería considerar tanto las enormes rentas o rentabilidad que generan como la multiplicidad de costos o *deseconomías externas* generadas por las empresas involucradas.

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS VERSUS LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Presentamos en términos muy generales los rasgos de dos tipos de actividades: *producción de alimentos* con sistemas agrícolas regionales y actividades que caracterizamos como *extractivas*. Partimos del presupuesto de que la competencia por los recursos naturales de este tipo de actividades conduce finalmente a la sustitución de una por la otra. Entre *agricultura de alimentos o de procesos* (véase el trabajo de Giarracca y Palmisano en este libro) y la *minería a cielo abierto* la competencia es por el agua; y entre el “agronegocio”, cuyo paradigma es la soja, y la *agricultura de alimentos o de procesos*, la competencia se da, principalmente, por el recurso tierra. Debido a que la sustitución de la *agricultura de alimentos o de procesos* por alguna de las actividades extractivas pone en peligro la seguridad alimentaria de importantes poblaciones regionales, el Estado en sus diferentes niveles, debería cumplir un papel fundamental. Asimismo también intervienen en estos territorios organizaciones de la sociedad civil: los “nuevos movimientos sociales” (campesinos, indígenas, “paren de fumar” y poblaciones autoconvocadas contra la megaminería), organizaciones gremiales, de re-

gantes, cooperativas, etcétera, que resisten la aplicación de estos modelos en sus respectivos entornos territoriales.

En este trabajo, nos proponemos considerar, como ejemplo de un modelo agropecuario no sustentable, en primer lugar, el denominado *modelo sojero* que ha tenido una creciente vigencia en nuestro país. Extractivo por excelencia además de paradigmático del “agronegocio” contrasta en toda su esencia con los preceptos y análisis elaborados, desde hace mucho, por Vía Campesina y otras organizaciones, que se remiten fundamentalmente a la *soberanía alimentaria*. El otro caso de estudio que consideramos en este trabajo es el de la *minería a cielo abierto*, y la manera en que entre otras cuestiones, esta actividad incide en el agro y la producción de alimentos.

EL “AGRONEGOCIO” EN ARGENTINA

A partir de la década del setenta, se ha producido un intenso proceso de expansión sojera en el país, basado en la preeminencia de este producto agropecuario en detrimento de otros. Se trata de un modelo que adquiere un cariz muy especial a mediados de los noventa, cuando se libera al mercado la soja transgénica. A partir

de entonces, Argentina se transforma en uno de los principales países del Tercer Mundo en el que se cultivan transgénicos. Todo esto involucra un nuevo paquete tecnológico basado no solo en la utilización de la semilla transgénica, sino también, en la siembra directa y el uso masivo del glifosato y otros agroquímicos. La soja en nuestro país creció en forma espectacular. La producción pasó de 3,7 millones de toneladas en 1980, a 11 millones en 1996-1997 y a 47,5 millones en 2006-2007. La cosecha de 2012-2013 es estimada en 50 millones de toneladas. Así la soja pasó de representar 10,6% de la producción granaria total en 1980-1981 a más de 50% en 2011-2012.

El auge de esta oleaginosa se manifiesta también en la superficie destinada al cultivo. En 1996, cuando se liberó al mercado la semilla transgénica, se le destinaba 20% de la superficie granaria total; en la actualidad esta se estima en más de 53%. Además, la soja cultivada casi en su totalidad es transgénica, y más del 90% de su producción se exporta.

Tras la devaluación de 2002 y el alza de los precios internacionales de la soja y de otros *commodities*, se produce un aumento continuo del valor total de las exportaciones de estos ítems. Durante 2008 se exportó aceite de soja por 4.275 millones de dólares; harina y pellets

por 5.762 millones, y poroto de soja por 3.428 millones; todos estos productos sumaron en total 13.602 millones de dólares, lo que representa 24,4% del valor total de las exportaciones de Argentina. El valor de las exportaciones de soja en 2007 aumentó con relación a 2006 en 52,3%; debido no solo a mayores volúmenes exportados sino también al alza significativa de sus precios. Otros *commodities* también se orientaron en forma creciente a la exportación. En 2007 el trigo representó 4,3% de las exportaciones totales (en 2002 representaba 3,6%), el maíz 4,1%, la carne 2,7% y los productos lácteos 1,2%.

Dichos procesos operaron en el marco de arreglos institucionales que facilitaron la consolidación de un sistema de “agronegocios” en el país. Se trata de un sistema que propicia el control, por parte de grandes empresas transnacionales, de sectores claves del sistema agroalimentario argentino: la provisión de semillas e insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial (la industria alimenticia) y el comercio de la producción, tanto para el mercado interno (súper e hipermercados) como para el externo. Estas empresas asumen una lógica muy distinta a la agroindustrial de antaño. Argentina era un país de chacareros, de cooperativas, de industrias nacionales, de cadenas agroindustriales, tanto

en los frigoríficos como en las harinas: Terrabusi o Bagley, por ejemplo, eran algunas de las viejas empresas nacionales que estaban en la cadena agroindustrial y les iba bien (Giarracca, 2008). Había una doble lógica, orientada a exportar pero también a producir alimentos para el consumo popular masivo.

Todo ello comenzó a cambiar durante la dictadura militar de 1976-1983, y se enmarca en la globalización y el predominio del capital financiero. Cada vez es más común que grandes empresas transnacionales o transnacionalizadas definan aspectos esenciales de la política agropecuaria. Un hito importante es el Decreto de Desregulación de 1991, el cual eliminó de raíz todas las juntas reguladoras de la actividad agropecuaria —la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, entre otras— que operaban en el país desde la década del treinta. De manera intempestiva, el agro argentino se transformó en uno de los más desregulados del mundo, sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial. Se trataba de producir *commodities* orientados a la exportación, con base en “tecnologías de punta” y en grandes unidades productivas. Según funcionarios del gobierno de los noventa debían desaparecer 200 mil explotaciones agropecuarias (de las 420 mil registradas en el censo de 1988) consideradas ineficientes.

El modelo sojero ha sido altamente rentable para una parte considerable del agro pampeano, así como también para el Gobierno, debido a los superávits de la balanza comercial y fiscal que se generaron y que le redituaron fondos importantes por concepto de retenciones y otros impuestos. En lo esencial, se trató de la apropiación de una parte de grandes “rentas diferenciales a escala mundial” generadas a causa de, entre otros factores, el alza continua de los precios internacionales de la soja y otros *commodities* en los mercados internacionales. Sin embargo, tal como hemos señalado más arriba, estos procesos no tomaron en consideración una serie de “costos” y “deseconomías externas” que genera el modelo sojero, tanto sociales, como económicos, ambientales y para la salud humana.

EFFECTOS DEL MODELO

A lo largo del conflicto agrario de 2008 —así como en los debates que hubo tanto en el Congreso Nacional como en los medios— muchos aspectos vinculados al modelo sojero salieron a la luz. Pero no siempre fueron considerados los efectos nocivos del mismo. Se siguieron haciendo proyecciones a futuro respecto de la

oportunidad que podría significar para el país, responder a una creciente demanda internacional de *commodities* de exportación, incluyendo la soja. Pero, salvo algunas excepciones, persiste la sensación de que pocos fueron los análisis críticos del modelo. Y que los efectos negativos del mismo, tanto económicos, como sociales, culturales, medioambientales y sanitarios, no fueron considerados suficientemente importantes.

A continuación presentamos algunas de las consecuencias del modelo.

1

El *boom* de la soja transgénica ha causado la especialización del país en producir y exportar unos pocos productos primarios (monocultor en soja); esto lo ha sujetado, como en ningún periodo anterior, a los vaivenes de la economía mundial. De haber sido un importante proveedor de carnes y cereales para el mundo durante gran parte del siglo XX, y autosuficiente respecto a los alimentos que consumía su población, en la actualidad, tiende a perder esa calidad. La doble cosecha trigo-soja ha desplazado a la ganadería como actividad de rotación incluyendo a los tambos y a gran parte de los cultivos

industriales del interior. Todo ello contribuye al deterioro de la seguridad alimentaria. En efecto, la superficie destinada a la producción sojera aumenta sistemáticamente año tras año, mientras las de otros cultivos caen o se estanca. Esta situación también se da con los frutales y el algodón, y con la cantidad de tambos existentes en el país que en pocos años cayó de 30 mil a la mitad. Si bien todavía persiste una suerte de seguridad alimentaria —se produce casi la totalidad del alimento que se consume internamente— estos no son totalmente accesibles para gran parte de la población debido al alza de sus precios internacionales y a su incidencia en el mercado interno.

2

El crecimiento de la soja transgénica ha originado un fenómeno de dependencia del país respecto de las grandes empresas multinacionales agroalimentarias. Esto se evidencia por el dominio que ejercen los proveedores de semillas (Monsanto y sus licenciatarias), así como otros sectores que suministran el paquete tecnológico y los agroquímicos para el cultivo de la soja transgénica. Cabe destacar que Monsanto desarrolla acciones para hacer cumplir supuestos

derechos de propiedad sobre la patente de la semilla de soja transgénica, que van más allá de lo que cobra por la venta de la semilla. En la actualidad, exige el cobro a los agricultores de las “regalías extendidas” (2 dólares por cada bolsa de 50 kg, incluso sobre las semillas que se guardan para uso propio). En el año 2012 fuentes oficiales presentaron en el Congreso un nuevo proyecto de Ley de Semillas “como corresponde en un país que aspira a ser líder en la producción de alimentos, y que busca proteger la propiedad intelectual en el proceso de desarrollo” (sic). Esta situación deja abierta al menos tres discusiones. Por un lado, respecto del pago de regalías en tanto significa un aumento del precio de las semillas con fuertes implicancias para los pequeños productores y los consumidores. Por otro lado, respecto de lo que pasaría con los derechos de los productores agrarios para guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. Y, finalmente, con relación a los dilemas que involucra el hecho de tratar al material vivo de la naturaleza como propiedad privada plausible de ser patentada y, por ende, tener dueño. (Para una discusión sobre las leyes y debates en torno a las semillas en Argentina véase Teubal, 2006 y Perelmuter en este libro.) En otras áreas del sistema agroalimentario, las corporaciones transnacionales

controlan gran parte del procesamiento industrial y la comercialización de alimentos.

3

Cabe destacar el aumento inusitado en el uso de agroquímicos que está involucrado en la producción sojera. Durante 2011 la superficie implantada con soja recibió más de 300 millones de litros de glifosato, un aumento de más de 2100% respecto a lo aplicado en 1996 (14 millones de litros). A este herbicida, parte indispensable del paquete tecnológico, se suman las aplicaciones de 2-4D, atrazina y endosulfán, los cuales sumaron entre 32 y 37 millones de litros. El creciente uso de estos agroquímicos se debe tanto al significativo avance del cultivo de soja como a la creciente resistencia que las malezas presentan al agroquímico, lo cual provoca que se incrementen las dosis. Es importante destacar que, en el caso del glifosato, existen importantes y documentados estudios que advierten sobre la peligrosidad de este herbicida para la salud humana, a los cuales se suman numerosas denuncias e investigaciones de organizaciones y poblaciones afectadas. Cabe destacar las condenas que sufrieron dos productores y un fumigador en el juicio que en-

tablaron contra ellos las Madres de Ituzaingó, Anexo-Córdoba (véase el artículo de Fernando Barri en este libro). El uso masivo del glifosato, su rocío intensivo por aire sobre comunidades campesinas e indígenas, ejerce efectos perniciosos para la salud humana, así como también para la producción local de campesinos y poblaciones indígenas.

4

El modelo ha contribuido a la desaparición de gran parte de la agricultura familiar, campesina, de las comunidades indígenas y de los trabajadores rurales. Entre los censos de 1988 y 2002 desaparecieron 25% de las explotaciones agropecuarias existentes en el país, es decir, 87 mil explotaciones (86% de las cuales tenían menos de 200 ha y 9% entre 200 y 500 ha). En cambio, aumentaron las de más de 500 ha (en especial las de entre 1000 y 2500 ha). Este fenómeno, ha convertido al agro argentino en una especie de *agricultura sin agricultores*. El avance de la soja en el interior del país desplaza con violencia a campesinos de sus tierras amparados en las leyes *veinteañales*, y a comunidades indígenas que tienen derechos ancestrales sobre esos terrenos.

5

Consideremos otros costos importantes: a lo largo del periodo considerado hubo un aumento de la deforestación y un avance de la actividad agropecuaria sobre el monte nativo. Desde comienzos del siglo XX, la Argentina perdió dos tercios de la superficie de su bosque nativo. Según diversos Censos Agropecuarios Nacionales, la superficie de bosques nativos pasó de 39% en 1939 a 17% en 2002. Hacia 1987 esa superficie se había reducido a poco más de 35,1 millones de hectáreas y para 1998 quedaban poco más de 33,1 millones. A partir de entonces el ritmo de deforestación aumentó; hoy esa superficie apenas llega a 31 millones de hectáreas. Durante el periodo 1998-2002 se perdieron 938.699 ha de bosques nativos por deforestación (aproximadamente 200.000 ha por año). En los años posteriores, durante el periodo 2002-2006, se perdieron 1.356.868 ha de bosque, es decir, 250 mil ha por año. Como es de imaginar, este proceso se encuentra estrechamente vinculado al avance de la soja. Las provincias más afectadas son Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y Salta. Esta última ha tenido el índice de deforestación más alto: perdió en la primera década del milenio 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos.

Los ecosistemas boscosos son considerados como una organización vegetal compleja, pues involucran diferentes tipos biológicos vegetales (hierbas, arbustos, árboles), formaciones que brindan un hábitat adecuado para otro tipo de organismos, como hongos, algas y animales vertebrados e invertebrados. Todo esto constituye un sistema biológico complejo, establecido sin la intervención del hombre, con un alto grado de biodiversidad. Por otra parte, estos ecosistemas brindan una serie de bienes y servicios (funciones biológicas, reguladores del clima, protectores del suelo, además de las culturales y recreativas), que se ven afectados seriamente por la degradación y eventual pérdida de las masas forestales nativas.

En la actualidad, una de las causas principales de la pérdida de los bosques nativos es el avance de la frontera agropecuaria. Miles de hectáreas son desmontadas para el cultivo de diferentes especies agrícolas, en particular la soja. Esto incide también en el suelo. Existe un conjunto de circunstancias tecnológicas y económicas que repercuten gravemente sobre este recurso y pone en peligro el desarrollo sustentable de las regiones cultivadas. El principal problema de la degradación del suelo es el sistema de monocultivo y el mal manejo de este, sin respetar su aptitud agrícola. En este

sentido, la soja tiene las características de ser un cultivo extractivo de los nutrientes del suelo, que exige una práctica de rotación determinada según la zona. Además, en ciertos suelos no es aconsejable producirla, a pesar de sus buenos resultados económicos de corto plazo. Según Pengue (2005) el cultivo de la soja erosiona los suelos, especialmente en aquellas situaciones donde no es parte de rotaciones largas. Los agricultores creen erróneamente que con la siembra directa no habrá erosión, pero los resultados de su estudio demuestran que, a pesar del incremento de la cobertura del suelo, esta es inevitable y de grandes proporciones. En la Argentina, el incremento de la producción sojera ha llevado a una importante caída en el contenido de nutrientes del suelo.

6

El *boom* de la soja en la Argentina está íntimamente asociado con el deterioro ambiental. Además de la irresuelta cuestión acerca de los riesgos del cultivo de la soja transgénica a gran escala y en el largo plazo, su auge se ha dado en detrimento de la yunga, la flora y la fauna en extensos territorios del país. Esto también ocasiona la deforestación de extensas áreas, en

particular en las provincias del norte, al tiempo que desplaza campesinos y comunidades indígenas y compromete la biodiversidad del país³.

7

En los últimos tiempos se han dado importantes inundaciones en ciudades ubicadas en territorios vinculados a la expansión sojera: Tartagal (Salta), ciudad de Santa Fe, La Plata (Provincia de Buenos Aires) y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay motivos urbanos por semejantes catástrofes —lo que el abogado ambientalista Dr. Enrique Viale llama el “extractivismo urbano”: fiebre inmobiliaria devastadora, ciudades convertidas en piscinas por la falta de respeto a los espacios verdes, etcétera— pero el ecosistema que envuelve a esas ciudades también influye.

Vemos así cómo el avance de ese paquete tecnológico involucrado en la producción so-

3 El sistema de siembra directa que evita que se revuelva la tierra mediante su labranza, la compacta a la tierra y evita que sea absorbida la lluvia. Como consecuencia el agua se escurre hacia los ríos. La sojización del agro fue considerada como uno de los factores determinantes de las inundaciones en la ciudad de Santa Fe en 2009.

jera amenaza la soberanía alimentaria del país; crea graves problemas de salud a las poblaciones donde se fumiga —con el agrotóxico que la transnacional estadounidense Monsanto y sus licenciatarias comercializa con la marca Roundup Ready (RR)—; tiene efectos edafológicos, con un deterioro sustancial de la calidad de los suelos debido a prácticas corrientes del paquete tecnológico utilizado; afecta la biodiversidad así como la fauna y flora del medio rural, y contribuye a que los desechos tóxicos se dispersen por el medio ambiente. Asimismo, la sobreutilización de fertilizantes, y agroquímicos en general, afecta lagos, ríos, regiones oceánicas y las capas acuíferas de vastas regiones en el mundo (Foster, 2010). Por último, enunciamos dos elementos que pueden contribuir a incrementar la expansión continua del modelo: a) los biocombustibles, debido al interés de Estados Unidos y otras potencias por sustituir el petróleo con otras fuentes energéticas; y b) el papel que comienza a ejercer China y la India en el panorama mundial, una de cuyas expresiones es su creciente demanda de soja. Estas perspectivas pueden llevar a muchos a considerar que la Argentina debe continuar siendo un gran productor de soja, lo cual también acrecentaría la peligrosa dependencia del país de este monocultivo con las demás consecuencias econó-

micas, sociales, ambientales y sobre la salud.

Frente a este panorama que se plantea a nivel mundial, movimientos internacionales impulsados por gobiernos y grandes intereses agroalimentarios impulsan la adquisición de vastos territorios en los países del sur. Se trata de una tendencia hacia la creciente apropiación de tierras, o lo que en inglés se denomina *land grabbing*. Boaventura de Sousa Santos (2011) caracteriza esta tendencia como formando parte de una suerte de *fascismo territorial* que, según este autor, “asume una virulencia alarmante en la actualidad”. Según Santos “la adquisición masiva de tierra... afecta muy especialmente al campesinado sujeto a perder el control sobre sus tierras y culturas y eventualmente a que les sean expropiadas”. El *land grabbing* constituye “una nueva forma de colonialismo” que se realiza “muchas veces con la connivencia de los países [...] Son procesos dominados por la corrupción, ya que la adquisición masiva de tierra envuelve una flagrante ilegalidad dado el carácter no escrito y ancestral de los títulos de propiedad individual” (De Sousa Santos, 2011: 123). Se trata de la misma estrategia que condujo a los colonizadores a apropiarse de las tierras de las poblaciones originarias en los orígenes mismos de los procesos de colonización (De Sousa Santos, 2011). En la

Argentina han recibido mucha atención pública en los últimos años las grandes propiedades adquiridas por extranjeros, principalmente en zonas de frontera, en el área cordillerana y en la Patagonia. Una parte de estas adquisiciones se caracteriza por el gran tamaño de los establecimientos y el hecho que, en muchos casos, dichas inversiones son realizadas por personas que representan fortunas a escala mundial. Vemos así que en la Argentina en los últimos veinte años se ha dado con cierta intensidad la compra de tierra por extranjeros, aunque no se han concretado compras por parte de Estados extranjeros que, según la FAO, constituye un componente central del fenómeno de *land grabbing* (véase Murmis y Murmis, 2012)⁴.

LA MINERÍA A CIELO ABIERTO

Argentina es un país sumamente vasto en recursos mineros, con una superficie continental cercana a los 2.700.000 km². De las áreas con potencial minero la mayor parte se encuentra sin explotar, lo que hace del país un centro de

atracción de inversoras, como lo propagandizan las páginas oficiales de Internet. Las principales áreas de explotación se localizan en la Cordillera de Los Andes, en un recorrido de unos 4.500 kilómetros de extensión. Un documento del Ministerio de Economía publicado en línea recomienda la inversión en el sector minero. De acuerdo con un trabajo de la CEPAL (1999) basado en información de la Escuela de Minas de Colorado, Estados Unidos, sobre un total de 24 países considerados en dicho documento, la Argentina presenta la segunda Tasa Interna de Retorno más alta para un proyecto modelo de oro y la tercera más alta para un proyecto modelo de cobre. El Ministerio de Economía complementó estos datos con otra información acerca de la conveniencia de los bajos costos que ofrecen los servicios públicos y la mano de obra local (2006).

Una actividad paradigmática del extractivismo es la minería a cielo abierto. A lo largo de los últimos 10 a 15 años, se ha desarrollado lo que se considera una nueva oleada minera a escala mundial, en un contexto de reformas de corte neoliberal de los códigos mineros nacionales; reformas promovidas tanto en países de tradición minera como en aquellos que no contaban con esa tradición. En lo esencial fueron impuestos códigos mineros que constituyen un

4 Corea del Sur, Arabia Saudita y China han mostrado interés en comprar tierras en la Argentina, pero hasta ahora estas operaciones no se han materializado.

copy paste del marco legal establecido en países emblemáticos de estas actividades. Cabe destacar que también dio impulso a esta actividad la explosión de los precios de los metálicos en el mercado mundial, el crecimiento de China y en menor medida el de la India, así como el uso de metales preciosos —por ejemplo, el oro— como valores refugio, a raíz de la última crisis financiera y la especulación desatada en torno a estos metales. Vinculado con este proceso, la nueva megaminería es del tipo “a cielo abierto”, alejada de la explotación minera en los típicos socavones de antaño. También corresponde señalar que en un mundo multipolar en el que han surgido nuevas potencias emergentes a nivel planetario, muchos más países tienen como objetivo asegurarse el acceso a minerales tanto debido a su valor económico, como por su carácter militar o industrialmente estratégicos, como por ejemplo el litio. En América Latina, la llegada al poder de gobiernos considerados progresistas no ha frenado este tipo de minería.

En la Argentina la minería nunca tuvo la importancia relativa que tuvo o tiene, por ejemplo, en Perú o Chile. Asimismo, la que persistió en el caso argentino estuvo vinculada con las necesidades internas y el proceso de industrialización: el carbón, los diversos materiales

para la construcción, el aluminio, el hierro, el acero, etcétera. Pero en años recientes ha crecido la megaminería a cielo abierto, enlazada con la producción de materiales metalíferos —oro, plata y cobre principalmente— junto a otros productos afines. En 1990 la producción de minerales metalíferos representaba solo el 22% de la producción minera total, mientras los no metalíferos y las rocas de aplicación conformaban el 78% de todos los emprendimientos mineros del país. En 2002 ya se había revertido esta tendencia: la producción de minerales metalíferos alcanzaba el 69% de la producción minera nacional, frente a solo el 31% de los no metalíferos y rocas de aplicación. En el año 2012 la producción de oro (33%), plata (21%), cobre (19%) y uranio (5%) representaban el 78% de la producción minera total del país, conformando en su globalidad la megaminería o minería a cielo abierto. La minería tradicional se había reducido al 22% (minería industrial 12%; zinc, hierro, plomo, grafito, níquel, etcétera, 9%; otros minerales 1%). También cabe destacar la significación del litio que se proyecta producir en la Argentina y que tiene importancia para la producción de pilas eléctricas, la industria electrónica y de computación. El valor total de la producción del sector minero aumentó de 461 millones de dólares en 1993 a 1786 millo-

nes en 2004. Las exportaciones representaban solo 16 millones de dólares en 1993. En el año 2010 ascendían a 4500 millones de dólares, y en los primeros nueve meses de 2012 a 5349 millones. Cabe destacar que, si bien está en aumento, la proporción de las exportaciones mineras no representan más del 2,55% del total de las exportaciones argentinas (Colectivo Voces de Alerta, 2011).

En su nueva etapa la actividad minera del país fue impulsada durante las administraciones de Menem (1989-1995 y 1995-1999), donde fueron aprobadas por el Congreso Nacional una serie de leyes que favorecían cabalmente a la minería. Legislación y normas especiales a favor de la minería incluían exenciones y beneficios impositivos que no fueron aplicados a otros sectores de la economía. Si bien esta legislación fue configurada en los años noventa, los gobiernos que le sucedieron continuaron introduciendo normas y legislaciones muy favorables a la minería. En mayo de 1993 fue aprobada la Ley 24.196 que establecía condiciones muy favorables para las inversiones mineras. Esta Ley fue complementada con otras Leyes (24.296, 25.161 y 25.429) que “perfeccionaban” y completaban las leyes anteriores. Históricamente la minería constituía una actividad perteneciente a las provincias. La

Reforma constitucional de 1994 confirmó este hecho: las provincias constituyen la autoridad originaria que rige sobre los recursos naturales existentes en sus territorios. Los aumentos de los precios de los minerales en los mercados mundiales contribuyeron a aumentar sustancialmente la rentabilidad de los *commodities* tales como el oro, la plata y el cobre; y dio aún mayor impulso a la minería a cielo abierto también llamada a tajo abierto.

En 1997 inició actividades la empresa La Alumbreira en Catamarca. A partir de 2003, se da el gran salto según lo demuestra la página de Internet de la Secretaría de Minería: en 2008 registra 302% más metros de perforación que en 2003, en cuanto a las inversiones, 1,014% más que el año de referencia. Asimismo, en materia de exploraciones se pasó de 40 proyectos en 2003, a unos 400 proyectos en 2008 y a más de 600 proyectos mineros de todo tipo en la actualidad. Hacia el año 2008, el 85% de la actividad empresarial minera estaba todavía en la etapa de exploración y tan solo 14% eran empresas en operación, mientras un 1% se encontraba en una etapa de desarrollo. Pese a la importancia que algunos círculos asignan a la megaminería en nuestro país, en la actualidad representa solo el 2% del PBI nacional y su contribución al empleo sigue siendo ínfima.

Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación (Secretaría de Minería, 2008, citado en Voces de Alerta, 2011: 31) en 2007 el país contaba solamente con 40.000 empleos directos en minería, lo que equivalía apenas al 0,24% de la población económicamente activa, compuesta por 16 millones de trabajadores. Asimismo, la Secretaría de Minería afirmaba que la actividad generaba 192.000 puestos de trabajo indirectos lo cual nos daría un total de 232.000 empleos generados por la minería. Sin embargo, no se indica la metodología utilizada para determinar estas cifras. Tampoco está claro cómo se generarían los 380.000 empleos directos y 800.000 indirectos que la Secretaría de Minería de la Nación promete para 2025. Además, se elude el cálculo acerca de los empleos que serían resignados a causa de la expansión minera en muchas provincias y sus impactos sobre la agricultura y otras actividades tales como el turismo. Tampoco está claro en qué información se basó recientemente la Secretaría de Minería de la Nación, para afirmar que el sector minero ya genera 500.000 empleos en el país (Infobae.com, 2010, citado por Colectivo Voces de Alerta, 2011: 31).

Estos datos contrastan con los publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2011), según esta fuente durante

2010 hubo un promedio de 19.412 trabajadores registrados en explotación de minerales no energéticos (es decir, sin considerar petróleo, gas, carbón y uranio), 7.127 en minerales metalíferos y 12.285 en otras minas y canteras (Colectivo Voces de Alerta, 2011: 31). Los datos más recientes publicados en el sitio Web del Ministerio de Minería de San Juan, correspondientes al año 2006, indican la existencia de 4.167 empleos directos en la minería de esa provincia, equivalente al 1,8% de la PEA sanjuana (Colectivo Voces de Alerta, 2011: 32).

En la actualidad la Argentina cuenta con la mayor cantidad de minas en operación de toda su historia, entre las cuales se destacan 12 metalíferas: Veladero, Martha, Cerro Vanguardia, San José, Alumbra, Pirquitas, Gualcamayo, Manantial Espejo, Aguilar, Farallón Negro, Andacollo y Sierra Grande. También operan yacimientos de minerales industriales, entre los que sobresalen Salar del Hombre Muerto, Tincalayu y Loma Blanca, así como el carbón de Río Turbio y la rodocrosita en Capillitas. Varias minas se localizan en la provincia de Santa Cruz mientras que gran parte del oro se produce en San Juan en donde Pascua-Lama de la empresa minera Barrick Gold se proyecta como una de las mineras de oro más importantes del mundo, aun cuando en los últimos tiem-

pos su actividad está suspendida en Chile y no se sabe que pasará.

El 64% de los emprendimientos mineros están en su fase exploratoria. Aunque esta actividad se presenta en el marco de unos escenarios de grandes riesgos, las perspectivas futuras de la actividad indujeron a una expansión fenomenal de la actividad exploratoria. Existen corporaciones mineras de diversas nacionalidades, 43% son canadienses y solo 19% pertenecen a capitales locales.

No solo la minería saquea el agua en zonas donde esta escasea, también se contaminan las napas freáticas a causa de la utilización masiva de cianuro y otros tóxicos para la lixiviación. Asimismo, cabe destacar la contaminación del aire y de la tierra, con su incidencia sobre la flora y la fauna. La actividad minera en general tiene un límite en su proceso productivo, y cuando termina la extracción del mineral la mina queda abandonada generándose en el terreno pasivos ambientales adicionales, pues sigue contaminando el medio ambiente por muchos años más e incluso décadas.

En la zona cordillerana donde los gobiernos locales impulsan esta megaminería, se ha tomado conciencia de los efectos nefastos que ha de tener: la experiencia de Andalgalá lo demuestra patéticamente. Mientras los go-

bernadores locales, apoyados por el gobierno central, pregonan este tipo de minería como “factor de desarrollo” y hacen promesas de todo tipo sobre los presuntos beneficios de largo plazo, las poblaciones se han informado sobre sus efectos depredadores y contaminantes, así como su impacto sobre una forma de vida construida a lo largo de los años. Para empezar está el agua: en la región cordillerana del noroeste y cuyo, este recurso es muy escaso; no obstante se ha desarrollado en la región una agricultura importante en base a un uso racional de este insumo, vital para la vida de las comunidades y la actividad agropecuaria. Los emprendimientos mineros utilizarían para los procesos de lixiviación agua que será retraída de la agricultura y del consumo de las familias en tanto no existe agua suficiente que permita convivir a la actividad minera conjuntamente con la tradicional actividad agrícola de la región (tanto la impulsada en base a los beneficios otorgados por la Ley de Diferimientos, como la tradicional que fuera desarrollada en la región a lo largo del siglo XX).

Este es uno de los ejes centrales del conflicto que suscita la actividad minera en toda la región cordillerana: por una parte, los grandes proyectos mineros impulsados por los gobier-

nos provinciales con el apoyo del gobierno nacional; por otra, las numerosas asambleas y organizaciones que la resisten en distintas provincias. Las consultas populares de Esquel y Loncopué, poblada masiva de Chilecito y Famatina, y las resistencias de Tinogasta y de otras regiones del país demuestran que la oposición a la megaminería es apoyada por el conjunto de las comunidades afectadas. “El agua vale más que el oro”. Se trata de una consigna que refleja una realidad palpable: el agua es una necesidad vital, no así el oro; podemos vivir sin oro, no así sin agua. El oro puede tener mucho valor de cambio, generar mucha rentabilidad, pero en los términos en los que se lo extrae de la naturaleza y utiliza no garantiza el bienestar de la población. Por lo tanto, el agua es un bien común esencial para mantener la calidad de vida de la población, la cual es incompatible con la megaminería. Sumada al saqueo de otros minerales críticos y estratégicos y a la contaminación, todos estos elementos contribuyen a la destrucción de los territorios de las economías regionales. El discurso “desarrollista” de los gobernadores locales suena hueco, cuando un pueblo entero defiende su forma de vida, su ambiente y la naturaleza en general.

LA AGRICULTURA DE ALIMENTOS Y LA MINERÍA A CIELO ABIERTO: DOS LÓGICAS

Como hemos dicho antes, la Argentina a diferencia de otros países de América Latina ha alcanzado su desarrollo capitalista en base al modelo agroexportador, es decir sistemas agrícolas y agroindustrias diversos por todo el país (anterior al período del “agronegocio”). Por esto mismo las poblaciones asocian la actividad minera con etapas muy lejanas en la historia colonial, y también la asocian con condiciones de trabajo precarias, como la esclavitud. Aunque minería y agricultura pertenezcan al sector primario, están sustentadas por lógicas productivas diferentes:

1. Las lógicas de apropiación de los territorios son disímiles; en la agricultura la tierra es el lugar colonizado, es decir de asentamiento familiar y de trabajo. Si bien no en todas las provincias hubo procesos de colonización ordenados, el uso del territorio para comenzar un trabajo y una vida agraria, fue el elemento común en todos los tipos de asentamientos de pequeñas y medianas unidades productivas del país. Es decir, la apropiación del recurso básico para producir no generaba conflictos con la sociedad

- sino que, en principio, se ponía al servicio de esta. Muy diferente es la apropiación del territorio minero; en este caso, son empresas extranjeras que desconocen las características de las poblaciones circundantes y de la sociedad nacional. Se apropian (aunque se trate de consignaciones) de una parte importante del territorio, que incluye cerros, caminos, agua, flora, glaciares, etcétera. Además, en la actividad se extraen minerales que no se articulan con las necesidades de las poblaciones. Se estima, por dar un ejemplo de minería, que solo el 15% del oro extraído en el mundo tiene fines industriales, mientras que el resto se destina a consumos suntuarios y reservas monetarias (de países diferentes de donde se extrajo el mineral).
2. La lógica agrícola es de sostenibilidad en el tiempo. Con un buen manejo y el cuidado de los recursos, la producción agraria resulta no solo una de las más antiguas del mundo, además puede reproducirse infinitamente. La lógica extractiva es insostenible en el tiempo porque la destrucción del recurso le es inherente: se basa en extraer, agotar y retirarse a otras regiones donde aún no se ha iniciado el proceso. Esta insostenibilidad temporal es proporcional al impacto ambiental que genera y a los daños en el medio ambiente que deja tras su paso.
 3. La lógica agraria produce para un consumo ligado directa o indirectamente a las poblaciones de origen. La extractiva tiene como principal destino el mercado internacional, en un sendero difícil de seguir por las poblaciones locales y nacionales. La sospecha del saqueo tiene que ver con esta característica de desconexión con el destino de los recursos una vez extraídos de sus lugares de origen.
 4. La agricultura requiere adaptarse a un ciclo biológico de la producción: tiene una fecha para el cultivo y otra para la cosecha; una para el apareo de los animales, otra para el nacimiento, y los trabajos se llevan a cabo en ese marco. No puede producirse cualquier cosa en cualquier lugar y momento: depende no solo del suelo y su fertilidad, sino también del clima, de las precipitaciones, de la disponibilidad del agua y del momento del año; así como del ciclo biológico que incide sobre el crecimiento de las plantas y los animales. Todos estos elementos influyeron sobre la estructura social del campo con la importancia histórica de la agricultura familiar. El proceso de trabajo en la minería se asemeja mucho

más al trabajo industrial, aunque a diferencia de este no puede realizarse en cualquier lado, pues el lugar de establecimiento de una mina obedece fundamentalmente a la disponibilidad de los minerales existentes en las diferentes regiones del globo. Por ello, la actividad minera depende del cateo realizado para determinar, previamente, la disponibilidad de los minerales. Además, la actividad concluye y deja secuelas contaminantes, así como un gran cráter inútil en el terreno.

5. Ambas actividades utilizan grandes cantidades de agua, aunque la agricultura lo requiere por el proceso biológico que tienen las plantas o animales, y la minería para algunos procesos industriales. Es decir, la agricultura consume y transforma el agua en alimentos (u otras producciones), mientras que la minería solo la consume y la contamina (Giarracca y Hadad, 2009).

CONFLICTOS Y DISPUTA POR LOS TERRITORIOS

Tanto la Argentina —considerada un país con un gobierno de orientación socialdemócrata— como Brasil y Uruguay, así como otros más ra-

dicalizados como Bolivia, Ecuador y Venezuela y los que se orientan a gobiernos de derecha, como México o Chile, se comportan de modo similar frente al modelo extractivo. En los momentos más duros del neoliberalismo —década del noventa— prepararon su legislación y recibieron las inversiones. Algunos partidos considerados de “izquierda” fuera del poder criticaron estas actividades pero una vez en acciones de gobierno se adaptaron a ellas (el caso de Brasil con la soja transgénica; Uruguay con las pasteras, etcétera). Es decir, no se puede pensar en alguna resistencia nacional-institucional más allá de algunas votaciones de legisladores no oficialistas en casos excepcionales. Entonces, ¿quiénes resisten esta devastación? Lo hacen las poblaciones, las comunidades indígenas, pequeñas ciudades perjudicadas por la minería, etcétera. Las resistencias tanto en los países andinos como en México, han intentado férreamente impedir avances de las corporaciones del extractivismo. Tienen a su favor toda la legislación internacional, que les asegura cierta autonomía en sus territorios. Algunos gobiernos latinoamericanos han llegado a la masacre, como ocurre en Chile con los mapuches, para pararlos. También las comunidades campesinas han resistido en la región, contra los nuevos inversores sojeros y agronegocios

de todo tipo, que están dispuestos a quedarse con sus tierras en el imparable avance de la expansión. Los movimientos campesinos y las comunidades indígenas de toda América Latina resisten tanto la sojización como el avance minero. Recordemos la Guerra del Gas o del Agua en Bolivia a comienzos de siglo; Bagua, pueblo amazónico peruano que perdió muchas vidas defendiéndose del avance autoritario del gobierno de Alan García sobre sus territorios, el pueblo de Andalgalá, Catamarca, Argentina, que puso un límite, y el ejemplo de Famatina que ha logrado parar durante años distintas inversiones mineras a su región.

Estos movimientos se apoyan en muchas redes regionales e internacionales (Vía Campesina es la más conocida) y de esos lugares pueden extraer más fuerzas para resistir que de las instituciones nacionales; lamentablemente esto ocurre en Chile y en México pero también en Ecuador y Bolivia, considerados de los más progresistas. Instalados en el modelo económico y cultural del neoliberalismo, dependen de los excedentes generados por estas actividades (pocos, si se considera lo que consiguen) para seguir con los dispositivos del reparto de subsidios a los sectores subalternos y ampliar sus bases para generar hegemonía. Pero es un proceso en tensión que aunque se quiera no puede cerrarse.

El caso argentino es muy interesante. Las poblaciones indígenas y campesinas fueron tan invisibilizadas por la modernidad/colonialidad, que cuando salieron a resistir tomaron a muchos por sorpresa. Hoy se considera que existen 20.000 familias campesinas distribuidas por todo el país con un alto nivel de organización y reclamos. Los indígenas contagiados de los bolivianos y ecuatorianos comienzan a hablar de Estado plurinacional, paralelamente a la recuperación de sus tierras (siempre amenazadas); por otra parte, las poblaciones cordilleranas que se organizan en Asambleas de autoconvocados por el “no a la minería”, son el fenómeno social más importante de este siglo⁵.

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

La crisis que sufre la humanidad no es solo la del capital en la era del neoliberalismo y en la globalización, ni siquiera es solo civilizatoria; constituye más bien una crisis planetaria de enormes proporciones, de la vida de la humani-

5 Para un panorama general de las resistencias véase en este libro el artículo firmado por GER-GEMSAL.

dad en el planeta. El recalentamiento mundial puede ser considerado la punta del iceberg de fenómenos y transformaciones profundas que subyacen detrás de estos. Por ello la crisis se ha transformado en uno de los hechos fundamentales de nuestra actualidad que atraviesa el mundo y las vidas de los que lo habitan.

Una de las expresiones de esta crisis que produce una imparable decadencia es la reaparición de actividades de despojo como en los comienzos del capitalismo. En toda América Latina, pero también en Asia y África, hay un nuevo potenciamiento de las industrias extractivas de exportación que expresa y sobredetermina la crisis civilizatoria.

La reemergencia extractivista tuvo que ver con cierta escasez de los países centrales, algunos límites que establecen los recursos naturales; es conocida, por ejemplo, la problemática del petróleo y el interés que tienen los países centrales por sustituirlo con otras fuentes energéticas, como consecuencia de su impacto sobre el calentamiento mundial y también debido a que las fuentes del mismo son limitadas. Este constituye el trasfondo del problema energético y de los proyectos para impulsar los biocombustibles a nivel mundial. Pero también está la crisis alimentaria mundial, que puede ser considerada producto de la expan-

sión del “agronegocio” a escala mundial y de la sustitución de una agricultura más o menos sustentable por otra extractiva, generadora de la depredación de los recursos, altamente contaminante, que se orienta hacia la demanda de los países centrales, China e India. Para todas estas actividades fueron decisorias las nuevas tecnologías de punta que las habilitaron en territorios antes impensables.

Es difícil vislumbrar el desarrollo de un modelo alternativo sin el impulso de los movimientos sociales en toda América Latina. Sin embargo, es necesario el trabajo en redes entre estas organizaciones, periodistas, artistas, intelectuales con actores de las instituciones gubernamentales. No son tiempos fáciles cuando la autonomía de muchos movimientos en relación con el Estado fue socavada. Cuando las organizaciones comienzan a tener distinto tipo de relaciones con los funcionarios del gobierno (participar en mesas de las secretarías del área, recibir más subsidios que el resto de otras organizaciones, que sus técnicos pasen a trabajar en el gobierno, etcétera) las posibilidades de críticas y prácticas autonómicas disminuyen notablemente. La particularidad del neoliberalismo del tiempo de las actividades extractivas, consiste en avanzar en territorios donde otrora convivían diversas sociedades.

En efecto, en tiempos pre-neoliberales coexistían distintas capas societales en las mismas regiones. Las capitalistas avanzadas con trabajo asalariado de mala calidad pero en los límites del capitalismo (como por ejemplo los ingenios azucareros del norte del país), coexistían con otros mundos “río arriba” como convierten en imágenes los cineastas, donde, después de la etapa de asalarización en condiciones casi esclavas en las fábricas de azúcar, pudieron vivir casi en el decir de Zibechi y Hardt (2013) como *sociedades otras*, en comunidades regidas por sus propias reglas y conectadas en lo educativo y cultural con la nación.

Esa “nación interior” reclamaba mejoras en sus zonas, pero preferían sus trabajos campesinos que les proveían alimentos y trabajos eventuales en la sociedad oficial, antes que lo que habían hecho parte de sus familias: engrosar los bordes pobres de las ciudades capitales y ciudades intermedias. En muchos países de América Latina estas *sociedades otras* eran importantes en cantidad de habitantes. En cambio, en la Argentina nunca fueron numéricamente significativas; pero estaban, formaban parte de un país que el ciudadano e intelectual europeizado ignoraba. En tiempos neoliberales extractivistas esos territorios ocupados por estas poblaciones se valorizaron, y se inicia el

proceso de desposesión silenciosa o con una violencia descarada.

Es así que las comunidades formadas en las luchas de los noventa y primera década de este siglo, junto con las viejas comunidades indígenas y campesinas con pretensiones de autonomía del orden capitalista/moderno/patriarcal/racista, presentan en la actualidad serias dificultades frente al gobierno y las grandes corporaciones. Muchos sostienen que después de una catástrofe se podrá pensar en las alternativas. Pero, aun así, para esos momentos los espacios alternativos que pululan como “campos de experimentación” adquieren la necesidad de mantener la vida hoy y en el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

- Altieri, M. A. 2009 “Agroecology, Small Farms and Food Sovereignty” en *Monthly Review* (Nueva York) Vol. 61, N° 3, julio-agosto.
- CEPAL 1999 *Panorama minero de América Latina a fines de los noventa* (Santiago de Chile: CEPAL) Serie Recursos Naturales e Infraestructura N° 1.
- Colectivo Voces de Alerta 2011 *15 mitos y realidades de la minería transnacional*

- en la Argentina* (Buenos Aires: Editorial El Colectivo).
- De Sousa Santos, B. 2011 *Portugal: ensaio contra a autoflagelação* (Coimbra: Alamedina).
- Diamont, J. 2006 *Armas, gérmenes y acero. Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años* (Barcelona: Debate).
- Foster, J. B. 2010 “Why Ecological Revolution?” en *Monthly Review* (Nueva York) Vol. 61, N° 8, enero.
- Giarracca, N. 2008 “Agronegocios y retenciones: el conflicto” en *Diario La Vaca*, 10 de junio.
- Giarracca, N. y Hadad, G. 2009 “Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera. Política de vida y agua en el centro de la escena” en Svampa, M. y Antonelli, M. (eds.) *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2008 “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del ‘agronegocio’: el caso argentino” en Mançano Fernandes, B. (org.) *Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual* (San Pablo: CLACSO).
- Grigg, D. B. 1977 *The Agricultural Systems of the World. An Evolutionary Approach* (Cambridge / Londres / Nueva York: Cambridge University Press).
- Harvey, D. 2004 “The New Imperialism: Accumulation by Dispossession” en *The Socialist Register* (Londres: Merlin Press).
- INDEC, documentos varios. Disponibles en <www.indec.gov.ar>.
- Martínez, A. J. y Schlupmann, K. 1993 *La ecología y la economía* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Mishan, E. J. 1967 *The Costs of Economic Growth* (Londres: Staples Press).
- Murmis, M. y Murmis, M. R. 2012 “El caso argentino” en Baquero, F. y Gómez, S. (eds.) *Dinámicas del mercado de tierras en América Latina y el Caribe. Concentración y extranjerización* (Roma: FAO).
- Pengue, W. A. 2005 *Agricultura industrial y transnacionalización en América Latina. ¿La transgénesis de un continente?* (México: PNUMA, Red de Formación Ambiental) Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental N° 9.
- Teubal, M. 2009 “La lucha por la tierra en América Latina” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *La tierra es nuestra, tuya y de aquel... Las disputas por el territorio en América Latina* (Buenos Aires: Antropofagia).

- Van Bath, S. 1974 *Historia agraria de Europa occidental – 500-1850* (Barcelona: Ediciones 62).
- Zibechi, R. y Hardt, M. 2013 *Preservar y Compartir. Bienes comunes y movimientos sociales* (Buenos Aires: Mardulce).

TRES LÓGICAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS: ¿HAY ALTERNATIVAS AL AGRONEGOCIO?*

NORMA GIARRACCA Y TOMÁS PALMISANO**

A partir del desarrollo global del “agronegocio”, se pueden distinguir tres formas de producir en el sector agrario y en los alimentos en particular: 1) la campesina, 2) la del “agronegocio” y 3) la “*farmer*” o “chacarera” (en la Argentina). Esta última forma, en nuestra hipótesis, mantiene rasgos interesantes que aún no se han perdido del todo pero corre peligro de su desaparición en un mediano plazo. Esta tipología supone distintas relaciones con la tie-

rra; diferencias fundamentales en los procesos productivos y laborales; en las orientaciones de la producción; en el tipo de “capital” interviniente, etcétera. Si bien en nuestro país la forma campesina de producción no ha tenido, por razones históricas, una marcada significación, de la mano de los pueblos indígenas ha cobrado importancia en un interesante proceso de recuperación histórica de sus tierras, que se suma a los muchos criollos desplazados de la agricultura comercial que también están intentando esta modalidad, estimulados básicamente por los postulados de la organización internacional Vía Campesina.

* Giarracca, N. y Palmisano, T. 2013 “Tres lógicas de producción de alimentos: ¿hay alternativas al agronegocio?” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?* (Buenos Aires: Antropofagia).

** Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Becario CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y miembro de GER-GEM-SAL (Grupo de Estudios Rurales-Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina).

LA LÓGICA DE PRODUCCIÓN CAMPESINA

El campesino mantiene una relación de familia/trabajo/tierra como unidad que habilita la ocupación familiar, la valoración de la tierra

como instrumento de trabajo y un proceso productivo con escasos componentes capitalistas como los insumos agroindustriales o maquinarias agrícolas. En primer lugar debemos diferenciar la forma de producción campesina integrada de diversos modos a los mercados capitalistas que prevalece en las décadas de las reformas agrarias o las intervenciones estatales y donde se producía alimentos para los mercados internos. Es el caso de México y muchos otros países con tradición campesina durante la etapa de sustitución de importaciones (ISI). Luego aparecerán desde los movimientos sociales nuevas formas surgidas a fines del siglo XX (el Movimiento Sin Tierra de Brasil es paradigmático) que guardan relativa autonomía de los mercados capitalistas. En el primer caso los autores, sobre todo Armando Bartra (1979), proponían una diferenciación de la producción campesina y capitalista dejando en claro varias cuestiones. En primer lugar, que mientras en la capitalista el trabajo es inmediatamente subordinado al proceso de valorización del capital (la explotación de la mano de obra le es inherente), el trabajo campesino solo se valoriza a través de una serie de mediaciones, cuando entra en el circuito de comercialización capitalista. Allí los autores muestran encuentros entre el campesino y el capital en una serie de regis-

tros derivados más que nada de los procesos históricos de cada país. No obstante, el mercado de producción en un intercambio desigual, es el punto de coincidencia para la realización del valor del trabajo campesino, que se suma a otros mecanismos de explotación registrados en los mercados laborales (semi-proletarización) o en los circuitos de comercialización de alimentos o insumos.

Esta discusión ya no es una preocupación de los estudios campesinos del siglo XXI, no interesa tanto la valorización del trabajo campesino porque se considera que los procesos tanto productivos como comerciales, se llevan a cabo en espacios con una autonomía relativa de los mercados capitalistas. Y esto ocurre tanto porque al capitalismo neoliberal no le interesa la producción campesina como fuente de alimentos para las poblaciones locales o nacionales, como porque los campesinados surgidos de movimientos de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, tratan de formar mercados propios donde se abastecen e intercambian unos con otros. La agroecología, no solo es un modo de producir de los movimientos campesinos (sobre todo los organizados dentro de Vía Campesina) sino que también incluye circuitos propios de comercialización. En un trabajo reciente (Vía Campesina, 2010)

se lo plantea como un concepto clave que renvía a un enfoque interdisciplinario que explica el funcionamiento de los agroecosistemas; se trata de principios que guían las prácticas agronómicas y productivas que permiten cultivar alimentos y fibras sin agrotóxicos. Miguel Altieri, importante miembro de la ecología política citado en el trabajo que aludimos, es quien puntea sus principios más importantes:

- Incrementar el reciclaje de biomasa y lograr un balance en el flujo de nutrientes;
- Asegurar las condiciones favorables del suelo, con alto contenido de materia orgánica y biológica;
- Minimizar la pérdida de nutrientes del sistema;
- Impulsar la diversificación genética y de especies, a nivel de finca y a nivel del paisaje;
- Incrementar las interacciones biológicas y sinergismos entre los componentes del agroecosistema.

Se sostiene, por último y a modo de síntesis, que

para los movimientos sociales que componen la Vía Campesina, el concepto de agroecología va más allá de los principios ecológicos-productivos. Se incorpora a su visión agroecológica otros

principios y metas sociales, culturales y políticas. En esta visión, por ejemplo, no existe —por incompatibilidad— un “latifundio agroecológico”, o una “plantación agroecológica” que produzca “agrocombustibles” para automóviles en vez de alimentos y productos para seres humanos. Para nosotros, pues, la agroecología es un pilar fundamental en la construcción de la soberanía y la Seguridad Alimentaria. (Vía Campesina, 2010: 16)

Sin embargo, no todas las comunidades campesinas la utilizan, es un principio pero no necesariamente una imposición y esto está claro en las diversidades de producción que pueden encontrarse en todas las regiones que se organizan alrededor de Vía Campesina.

La agroecología es una práctica ancestral en las comunidades indígenas y de reciente aplicación en las comunidades campesinas de criollos pero existen rasgos comunes entre ellas que perduran a través del tiempo: a) el jefe de explotación tiene bajo su control qué y cómo producir; b) si bien en los últimos tiempos hay introducción tecnológica, predominan las “técnicas” producidas localmente o en muchos casos por el productor mismo; c) predominan los valores de uso por sobre los valores de cambio; d) el manejo agronómico está en función de preservar la tierra como instrumento de labor y

de integrar a la familia al trabajo campesino independientemente del uso de la agroecología¹.

LA LÓGICA DE PRODUCCIÓN DEL AGRONEGOCIO

A partir de la instauración del neoliberalismo, en el campo argentino se extendió un modelo de producción agropecuaria cuyas características lo asemejan a otras dinámicas extractivas extendidas en el país y el mundo. Específicamente, el agronegocio es la expresión en el mundo rural del modelo civilizatorio neoliberal. Esto implica una profunda transformación de las estructuras productivas y de los actores que actúan en y sobre ellas.

El caso argentino es paradigmático por la enorme expansión que tuvo esta forma de producir y por eso nos referiremos particular-

mente a sus características. Quizá la primera a destacar es el requerimiento de escalas productivas más amplias que en el pasado. Desde la década del setenta se registra una disminución constante de la cantidad de explotaciones agropecuarias (EAPS) en todo el país. Tal es así que mientras el Censo Nacional Agropecuario de 1969 registraba más de medio millón de EAPS, para 2002 este número había disminuido a 333.533 EAPS y la tendencia parece mantenerse a pesar de la ausencia de datos oficiales fiables. Como puede imaginarse este proceso estuvo acompañado por un crecimiento de la superficie promedio de las explotaciones en todo el país (característica que será detallada en las páginas subsiguientes). No solo en la región pampeana, que será el escenario privilegiado del avance del cultivo “estrella” del modelo, la soja, las escalas de las unidades crecieron también en las regiones extrapampeanas. En estas zonas, se introdujeron cultivos que requerían gran inversión tecnológica y plantaciones mucho más amplias de las habituales. Su establecimiento fue favorecido por la política de diferimientos agrícolas que se intensificó en la década del noventa²

1 La tierra tanto para los campesinos como para los indígenas es concebida como territorio en el sentido más pleno y diverso de la palabra: como jurisdicción; como espacio geográfico; como hábitat o conjunto sistémico de recursos esenciales para la existencia colectiva; como biodiversidad y los conocimientos ancestrales conectados a ella; y como espacialidad socialmente construida vinculada a la identidad colectiva (Toledo Llancaqueo, 2005).

2 Los diferimientos agrícolas constan de una serie de exenciones impositivas reguladas por la Ley 22.021

e introdujo nuevas producciones orientadas al mercado externo o a sectores de alto poder adquisitivo. Así en regiones donde la superficie promedio de las explotaciones rondaba en las 5 ha, se difundieron establecimientos que excedían con creces las 25 ha con niveles de inversión considerables tanto en los cultivos como en la tecnología aplicada (principalmente sofisticados sistemas de riego).

Tras este proceso de concentración también se fortalece una concepción particular de la tierra como mercancía cuyo valor simbólico está completamente diluido en las posibilidades de negocios que la misma pueda aportar. Tanto el sentido patrimonial como el territorial pierden significancia frente a la faceta mercantil de la tierra, que en un contexto de avance de las actividades del agronegocio implican una presión constante y el desplazamiento de las otras terri-

torialidades (campesina, indígena, chacarera, etcétera). La manifestación de este avance tiene al menos dos caras. La primera, de índole económica que se encarna en el constante encarecimiento de la tierra tanto para arrendamiento como para la compra. En términos prácticos esto implica mayores dificultades en el acceso a la tierra por parte de los actores de menor capacidad económica y mayores posibilidades para los grandes emprendimientos que aprovechan sus economías de escala y las estrategias de acaparamiento de renta para sostener su posición privilegiada³. Este proceso excluyente se potencia por la tendencia a la reducción del número total de trabajadores por hectárea, principalmente aquellos de carácter familiar que pierden importancia relativa frente a los asalariados, ya sea aquellos que se encuentran directamente vinculados a la explotación, los contratistas⁴ que realizan las labores culturales

dictada durante la última dictadura (1979) y prorrogada durante la década de los noventa. Esta legislación les concede a los empresarios que invierten en explotaciones agropecuarias de alto requerimiento de capital, facilidades de pago y exenciones del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias, Derechos de Importación, etcétera. La mayoría de los emprendimientos que se han establecido corresponden a producciones orientadas al mercado externo o de consumo de alta gama.

3 Para una descripción detallada de este proceso véase Teubal y Palmisano en este libro.

4 En la bibliografía sobre el tema el concepto de contratista suele tener un doble sentido. Por un lado, incluye a prestadores de servicios agrícolas que realizan las labores culturales (rotulación, siembra, fumigación, cosecha, poda, desmalezamiento, etcétera) para diversos productores; por el otro, a aquellos dueños

o la tercerización de la toma de trabajadores a través de empresas intermediarias. Es decir, se borran las relaciones contractuales de asalarización de mano de obra y se acentúan los modos mediados por contratistas en la relación con los trabajadores rurales (véase Aparicio, 2005).

La segunda cara de este proceso es el recrudecimiento de la violencia rural. Las lesiones físicas e incluso la muerte son el resultado de las disputas territoriales que desata la lógica del agronegocio. La expansión de la superficie agrícola-ganadera sobre las tierras de comunidades campesinas e indígenas se ha dado tanto a través del desplazamiento silencioso, donde las poblaciones son desalojadas sin mayores conflictos a partir de engaños o manipulaciones, y también por medio de formas más violentas, donde frente a la resistencia de las familias y organizaciones se erigen estructuras públicas y privadas que accionan en pos de una reconfiguración territorial que suele favorecer a los intereses más concentrados (GER, 2004 y GEPCyD, 2010). En este punto también debería destacarse la violencia sobre los animales al pasar de las viejas prácticas

agronómicas a las modernas “fábricas de pollos, cerdos y vacas”.

Otra característica importante de la lógica del agronegocio es la intensificación de las estrategias de integración vertical y horizontal de los establecimientos más importantes, impulsados por la continua incorporación de “tecnología de punta” difundida, y en muchos casos patentada, por empresas transnacionales o transnacionalizadas. El rol del capital foráneo se incrementó principalmente en dos sectores. Por un lado, la provisión de insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas, etcétera) se convirtió en una sección clave donde las empresas ingresaron a medida que la lógica del agronegocio se extendía ofreciendo los adelantos tecnológicos de la “revolución transgénica”⁵. Asimismo, varias empresas nacionales del área desplegaron un proceso de transnacionalización, que se manifestó notablemente en el segundo sector que consideraremos: los eslabones de transformación y comercialización alimentaria. Aquí la mayoría de las compañías nacionales recibieron capitales del exterior que reconfiguraron su paquete accionario a la par que se intensificaba la concentración en la producción y comercio de los alimentos en el

de maquinarias que además tienen tierras (propias o arrendadas) en producción. En este caso nos referimos a la primera noción.

5 Véase en este libro el artículo de Tamara Perelmuter.

mercado interno y externo (Teubal y Rodríguez, 2002). En el caso de la producción agropecuaria, el ingreso de capital extranjero fue un poco más limitado y en la mayoría de los casos se originó producto de fusiones y emisión de acciones en diversas bolsas de valores del mundo.

Si bien algunas actividades propias de las agriculturas integrantes del modelo agroindustrial (Giarracca y Teubal, 2008) mantienen sus formas productivas pero concentradas en menos manos, paralelamente se desarrollan estrategias para integrarlas a la lógica del agronegocio. Quizá el ejemplo más marcado sea la tensionante realidad que presenta la producción azucarera en la cual muchos ingenios fueron comprados por empresas transnacionales y buscaron ensamblarse a la creciente tendencia de los agrocombustibles. En este caso el “salto tecnológico” más profundo se da en los eslabones superiores de la cadena agroalimentaria, al sumarle un paso hasta ese momento inexistente. De esta manera a la compra de tierras para su propio abastecimiento y la renovación de maquinaria se suman las inversiones necesarias para destilar el bioetanol (Mariotti, 2011)⁶.

6 Para 2013 un conflicto entre Santiago del Estero y Tucumán en torno a los desechos contaminantes generados por esta producción que afecta la cuenca del Río

A estas tecnologías materiales se suma el continuo énfasis a la integración de redes de diversos actores de la cadena agroalimentaria. A primera vista, estas propuestas parecen ofrecer mecanismos de democratización dentro de la dinámica del agronegocio, sin embargo, el esquema de las redes esconde las jerarquías típicas que se dan en los contextos socio-económicos donde las grandes empresas tienen participación. La igualdad aparente del modelo reticular propuesto desde los *think tanks* podría pensarse como una manifestación actualizada de la “monocultura de la naturalización de las diferencias que ocultan jerarquías” (De Sousa Santos, 2006) para el mundo rural. Al sostener la apariencia de un vínculo entre iguales no solo se naturaliza la primacía de las grandes corporaciones sino que se acota el mundo de los actores posibles a aquellos que muestren un perfil netamente empresarial que se adapte a los designios y demandas del mercado.

En definitiva, la perspectiva que subyace a la lógica del agronegocio es el desplazamiento del rol de la agricultura como productor alimentario o de materias primas hacia una dinámica ordenada por los *commodities*. Los mercados internacionales, cuya expresión máxima es el

Salí-Dulce podría detener la producción de bioetanol.

Chicago Board of Trade, son los que marcan a fuego los cultivos que se deben producir para satisfacer la demanda mundial que en la enorme cantidad de los casos está completamente desligada de las necesidades de las comunidades locales. Más aún, la fortaleza de estos lineamientos llega a transformar los hábitos alimentarios de un país entero, tal es así que entre el año 2000 y el 2007 el consumo de aceite de soja en la Argentina creció un 224,5%, convirtiéndose en el producto oleaginoso más consumido en el país. Similarmente, la lecitina de soja desplazó a las grasas animales de la gran mayoría de los alimentos a base de harina (galletitas, panificados, golosinas, etcétera) generando que en la actualidad la población argentina consume a diario alimentos modificados genéticamente sin que exista ninguna identificación en ellos.

LA LÓGICA DE PRODUCCIÓN “*FARMER O AGRICULTURA DE PROCESOS*”⁷

Por último, querríamos referirnos a la tercera forma de producir alimentos, “ni campesino ni

7 Agradecemos al Ing. Alfredo Galli las conversaciones interesantes e inspiradoras mantenidas sobre esta problemática.

agronegocio”, actualizando a los antropólogos Archetti y Stölen (1975) que hablaron a comienzos de los setenta de “ni campesinos ni capitalistas” refiriéndose al “chacarero”. Se trata del productor que en la Argentina reenvía a la colonización de fines del siglo XIX y comienzos del XX y que, con los cambios democráticos del país, de arrendatario de los grandes terratenientes pasó a pequeño y mediano propietario dedicándose básicamente a producir alimentos. En nuestro país, este agricultor medio, asumía la característica de orientarse tanto al mercado interno como a la exportación; esta combinación era posible por las instituciones que regulaban al sector y que desaparecieron en 1991 con el “Decreto de desregulación” de Menem-Cavallo. Las características de ese productor residen en que utiliza mano de obra familiar (como los campesinos), una mínima utilización de insumos agroindustriales (sobre todo agroquímicos⁸) y una mecanización escalonada, con fuertes innovaciones tecnológicas

8 La gran expansión agraria de 1880 a 1930 se hizo sin agroquímicos, que se introdujeron paulatinamente a fines del período. El aumento del consumo de agroquímicos en la Argentina pasó de 10.000 litros por año en los setenta a 270 millones de litros en 2010, de los cuales 200 millones corresponden al glifosato.

propias del sector de acuerdo a sus necesidades, y apoyadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Para el colono “gringo”⁹ la tierra tenía el sentido de un fuerte patrimonio familiar que permitía reproducir y educar a la familia y pasarla de generación en generación. Si bien a partir de la desregulación de 1991, de la liberación de la semilla transgénica en 1996 (Menem-Solá), este sujeto se fue transformando en “sojero” (el “pequeño productor” del sistema sojero)¹⁰, el original (productor de alimentos) perdura en otras producciones. En un libro de hace unos años, nuestro equipo de investigación tituló la historia de los productores del sur de Santa Fe “De colonos a sojeros” (Giarracca y Teubal, 2005) dando cuenta de esta transformación luego de sufrir los embates de las políticas económicas de los noventa que los obligaron a tal cambio y que dejó muchos agricultores en el camino.

¿Existe hoy ese productor de alimentos “charcarero”? ¿Podemos hablar en tiempo presente

de esta tercera forma de producir alimentos? Este interrogante es muy importante no solo por el futuro de la agricultura y la alimentación en el país, sino básicamente por una cuestión de índole política. En efecto, si el modelo de actividades extractivas, con el avance de nuevas tecnologías llega a consolidarse de tal forma que el “agronegocio” colonice todo los espacios agropecuarios, con soja, transgenia en maíz, *feed lot* en ganadería, etcétera, estaremos en una situación muy difícil de revertir y muy complicada en términos no solo de “soberanía alimentaria” (derecho a elegir lo que necesitamos) sino en el registro del mapa político de los que detentan el poder en la Argentina vía concentración de tierra, capital y renta agraria.

Por ahora, dadas las actuales condiciones del llamado “avance tecnológico”, podemos asegurar que existe una parte muy importante de los productores agrícolas que producen alimentos y que no están involucrados en la expansión del “agronegocio”. En nuestras investigaciones a este sector lo denominamos “agricultura de procesos” para distinguirlo por una serie de características —definidas previamente— de la lógica económica del agronegocio. Consideramos que es aún un sector importante sobre todo en algunas zonas. Veamos los derroteros de la estructura agraria del país para

9 En el campo argentino al colono de origen inmigrante se lo ha denominado coloquialmente gringo.

10 Escribimos “pequeño productor” con comillas pues consideramos que las dos palabras son contradictorias, si se es sojero ya no se es un pequeño productor, excepto en la escala de relación del sistema sojero.

comprender que aún el potencial peso de esta categoría es alto.

Cuadro N° 1

Peso relativo de las EAP por estratos según los distintos censos

	CNA 1947	CNA 1960	CNA 1960	CNA 1988	CNA 2002
EAP pequeñas	79,91	80,42	79,60	74,54	69,51
EAP medianas	14,27	13,81	14,31	18,20	20,73
EAP grandes	5,82	5,77	6,09	7,26	9,76
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a los censos agropecuarios.

No se puede estimar que ha pasado en estos años desde el 2002 ya que el Censo Nacional Agropecuario de 2008 no se puede utilizar (véase Giarracca, 2011) pero dadas las tendencias a la concentración de tierra y capital impuestas por el modelo del agronegocio, es esperable varios puntos de reducción en el primer estrato de EAP, “Pequeñas”; no obstante, su peso así como el de las medianas siguen siendo significativos sobre todo fuera de la región pampeana.

No afirmamos que la totalidad del estrato responda a las características de “agricultura de procesos” ya que existen muchas formas de incluir a esas parcelas en el circuito del “agronegocio” sin perder la titularidad de la tierra, pero una parte pertenece a esa categoría que intentamos caracterizar.

Estas explotaciones que preservan una “agricultura de procesos” en regiones donde por razones climatológicas (pluviales) pueden utilizarse las semillas transgénicas ya son escasas para no decir inexistentes. Habría que analizar producción por producción pero sin siquiera contar con el CNA de 2008, es una tarea difícil de llevar a cabo. No obstante, en las regiones productoras de otros alimentos tan o más importantes como los granos y oleaginosas, como la horticultura, frutales, legumbres, etcétera, en zonas fuera de la región pampeana, pueden encontrarse con facilidad.

Consideramos que este sector muy arrinconado por el agronegocio (y por la minería) contiene los elementos que podrían colaborar a configurar una agricultura distinta para nuestro país. Esos rasgos tuvieron una clara presencia en las décadas del siglo XX cuando se consolidó la agricultura no solo granaria sino de otros productos alimentarios y no alimentarios; es decir como modo de producción está

en la memoria histórica colectiva del sector. No se trata de la imposición de modos de producción ajenos a las tradiciones del país. De allí la importancia de mostrar algunas de las características de este tercer sector delimitado no como compartimiento, es decir “son o no son” sino como un continuo, donde esos rasgos pueden darse en mayor o menor grado pero que lo diferencian, aquí si cualitativamente, del “agronegocio”.

Estos puntos, nuevamente, son graduales y en todo caso ofreceremos ejemplos de procesos concretos de nuestro país para mostrar como aún con la relatividad de algunos ejes se mantiene la diferencia con la forma de producción campesina y del “agronegocio”.

1. Es el jefe de explotación (individual o sociedades pequeñas tipo cooperativas) quienes tienen a su cargo las decisiones básicas de qué, cómo, dónde producir. Esto se basa en la hipótesis de que existe un saber del productor por su experiencia que lo orienta a tomar las mejores decisiones para él y su comunidad (incluida la nacional);
2. Rotación de los cultivos y de ser posible, con producción ganadera. Nuevamente aquí es el productor quien conoce las ventajas y desventajas de las combinaciones productivas;

3. Diversificación productiva tanto agraria como ganadera, la diversificación a pequeña escala es la que garantiza procesos microbiológicos naturales que evitan o reducen la utilización de los agroquímicos;
4. Todas estas características por sí solas, conducen a mayor utilización de mano de obra, es decir generan trabajo que puede ser familiar o contratado a pequeña escala (cosechas, por ejemplo).

Este “modelo *aggiornato*” a este siglo no puede sostenerse sin una decisión política fuerte (que es reclamada por importantes sectores damnificados o no del país) pero también por un nuevo armado institucional que otorgue financiación, infraestructura, asesoramiento técnico (no ya propaganda de las tecnologías de punta de las corporaciones), y otras formas de exportación, etcétera. Pero también es necesario recomponer las formas de comercialización cooperativa; los productores, nuevamente, tienen un importante saber y experiencia en esto pero, seguramente desactualizada. No es lo mismo exportar en 1970 que en 2015, sin embargo existen una serie de experiencias desde las famosas cooperativas en la exportación de granos en Canadá (Abramovich y Ama-

rilla, 2011), hasta formas latinoamericanas que las federaciones de pequeños productores y cooperativas, conocen muy bien. Sin estos entramados, el “mercado” (léase grandes actores económicos) impiden el funcionamiento de estos sistemas.

Las ventajas frente al “agronegocio” son más que evidentes: por un lado, conservar el recurso tierra, por el otro volver a imponer condiciones de salud a las poblaciones agrarias y rurales, así como diversificar la producción agraria, producir alimentos y recuperar la soberanía alimentaria.

Cuadro N° 2

Síntesis de las formas de producción

	Lógica		
	Campesina	Chacarera	Agronegocio
Relación con la tierra	Territorial - Instrumento de trabajo - Pachamama	Patrimonial	Mercantil (mercancía)
Uso de técnicas Tecnología Tecnología de punta	Uso de técnicas externas combinado con saberes técnicos tradicionales	Incorporación paulatina de tecnología en relación con la mano de obra familiar disponible. Mecanización con bajo nivel de insumos agroquímicos	Utilización intensiva de “tecnologías de punta” Alto nivel de agroquímicos
Destino de la producción	Mercados locales y regionales	Mercado interno y externo	Mercado externo
Utilización de mano de obra	Mano de obra familiar	Combinación de mano de obra familiar y asalariados transitorios	Asalariados y contratistas

Fuente: Elaboración propia.

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

Queda claro que el avance del “agronegocio” hipoteca los territorios de nuestro país, convierte la tierra en recurso “no renovable” y anticipa un final dramático para una Argentina que tuvo las praderas más fértiles del planeta. No obstante aún existen otros sistemas agrícolas que con un adecuado fomento pueden producir alimentos, preservar los suelos, generar empleos y tener sobrantes para la exportación. Pueden coexistir adecuadamente con los sistemas campesinos y con las comunidades indígenas; no necesita arrebatarles tierras y además, pueden colaborar en etapas de mercadeo locales y regionales.

El interrogante que nos hacemos es cómo revertir la tremenda expansión del “agronegocio” con las tendencias a la no rotación, al monocultivo y a la orientación externa además con todas las consecuencias sociales, ambientales y sobre el nivel de la salud de la población que acarrea. Es un interrogante difícil de responder cuando todas las políticas públicas tienden a fomentarlo y a desalentar los otros sistemas. Se trata básicamente de una cuestión cultural, de una matriz de conocimiento y poder que valoriza aquello que proviene de la

supuesta “modernización” y desjerarquiza formas que no necesitan los insumos que las grandes empresas transnacionales imponen en el “mercado”. Ese “grave pecado” —no entrar en cantidades masivas en el mercado de insumos agroindustriales— las convierten, en el acervo lingüístico modernizador, en “atrasadas”. Si a esto le agregamos la “vocación” modernizante de la sociedad argentina, sobre todo las poblaciones de las grandes ciudades, entenderemos porque cuesta tanto introducir estos elementos en los debates. Solemos afirmar, que lo que plantea el discurso oficial con sus intelectuales iluministas, corresponde a los debates de mediados del siglo XX: el desarrollismo, el papel de la ciencia en él, los motores modernizadores del desarrollo, los sectores capaces de introducir tecnologías de punta, etcétera. Todos esos puntos formaban parte de la esperanza liberal del “desarrollo” (difícilmente alcanzado por los países periféricos al poder central) y también de la teoría crítica que apostaba al “desarrollo de las fuerzas productivas”.

Entre la posguerra y la segunda década del siglo XXI han ocurrido muchos procesos que han echado por tierra las promesas de la modernidad y han hecho tambalear sus tres pilares: la ciencia, el derecho y el poder (De Sousa Santos, 2006). La modernidad y todas sus cons-

telaciones semánticas: desarrollo, innovaciones tecnológicas, educación como herramienta de progreso, y el concepto mismo de progreso están en crisis terminales si tenemos en cuenta las formaciones económico-sociales de EEUU y Europa en esta última etapa. Ya no se trata de una crisis financiera o económica sino, como lo muestran bien quienes resisten en los territorios, se trata de una crisis civilizatoria. Paradójicamente, las novedades que despuntan por ahora como simples bisagras de nuevos tiempos civilizatorios provienen del Sur. Se genera una epistemología del sur, se instalan conceptos como soberanía alimentaria, derecho a la tierra, el buen vivir, derechos de la naturaleza, etcétera; se genera un pensamiento performativo donde se demuestra que otro mundo, efectivamente, es posible.

Si bien en América Latina estos mundos tienen relativa importancia, en la Argentina el impacto de las actividades extractivas los esconde y los invisibiliza. Es por ello que desde el pensamiento crítico nos proponemos otorgarle espacio a la discusión y la interacción con los actores mismos de estas pequeñas experiencias. Realidades que se despliegan desde las apuestas del movimiento campesino hacia la agroecología, a la incansable lucha de los pueblos indígenas en pos de sus territorios ancestrales,

pasando por los sistemas agrícolas caracterizables como agriculturas de proceso, como por ejemplo, el sistema agrícola-ganadero del Valle de Famatina (véase Giarracca y Hadad, 2009).

Sabemos porque no solo tenemos experiencia de investigación sobre estos sectores sino la participación en el diseño de políticas públicas de neto corte transformador¹¹, que modificar esta expansión descomunal del “agronegocio” necesita más que voluntad de los actores, requiere de políticas públicas que orienten ese cambio. Pero también es cierto que la mayoría de las veces las políticas que perjudican a la gran mayoría y a los territorios, finalizan cuando quienes salen a hacer “política de calles” logran poner un límite al “orden hegemónico”. Recordemos la política del primer “neoliberalismo”, como la privatización de todos los activos sociales de la Argentina, se revirtió después de la gran “rebelión” del 2001-2002 cuando el capital financiero se quedó también con los ahorros de los argentinos y se

11 Norma Giarracca participó en la Secretaría de Agricultura y Ganadería durante los años 1973-1974 cuando el Ing. Horacio Giberti emprendió con el Ministerio de Economía una indiscutida política a favor de la distribución de la riqueza agraria que terminaría con la muerte del presidente Perón y la renuncia del ministro de Economía, José Gelbard.

expresó el hartazgo a todo ese modo de gobernar. Es decir, cuando una franja importante de la población comprenda que las grandes corporaciones del agronegocio se están quedando con un bien común como es la fertilidad de la tierra además del gran sufrimiento social que desata, posiblemente nuevamente logremos poner límite a este orden hegemónico extractivista.

BIBLIOGRAFÍA

- Abramovich, F. y Amarilla, C. 2011 “Situación actual y perspectivas del comercio de granos en la Argentina”, ponencia presentada en las *IV Jornadas de Economía Crítica*, 25 a 27 de agosto, Córdoba, Argentina.
- Aparicio, S. 2005 “Trabajos y trabajadores en el sector agropecuario de la Argentina” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).
- Archetti, E. y Stölen, K. 1975 *Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Bartra, A. 1979 *La explotación del trabajo campesino por el capital* (México DF: Macehual).
- De Sousa Santos, B. 2006 *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. Encuentros en Buenos Aires* (Buenos Aires: CLACSO / Facultad de Ciencias Sociales, UBA).
- Giarracca, N. 2011 “El fracaso del Censo Nacional Agropecuario” en Giarracca, N. y Teubal, M. (comps.) *Del paro agrario a las elecciones de 2009* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Giarracca, N. y Hadad, G. 2009 “Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera. Política de vida y agua en el centro de la escena” en Svampa, M. y Antonelli, M. (eds.) *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Giarracca, N. y Teubal, M. (coord.) 2005 *El campo argentino en la encrucijada: estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2008 “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del ‘agronegocio’: el caso argentino” en Mançano Fernandes, B. (org.) *Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual* (San Pablo: CLACSO). Grupo de Estudios Rurales (GER) 2004 “Desalojos y arrinconamientos de

- campesinos y comunidades indígenas en la Argentina” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 203, abril-mayo.
- Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCyD) 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios: crónicas invisibles del despojo”, ponencia presentada en las *VI Jornadas de Antropología Social* (Buenos Aires: 3-6 de agosto).
- Mariotti, D. 2011 “Estrategias sociales y acciones colectivas de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán. Una historia sobre la herejía, la infamia y lo profano”, tesis de doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 4 de noviembre.
- Teubal, M. y Rodríguez, J. 2002 *Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica* (Buenos Aires: La Colmena).
- Vía Campesina 2010 *Revolución agroecológica: El Movimiento de Campesino a Campesino de la ANAP en Cuba* (s/d: Vía Campesina).

LA ACTIVIDAD CAÑERA

LOS CAMPESINOS CAÑEROS EN LOS NUEVOS ESCENARIOS ECONÓMICOS*

NORMA GIARRACCA Y SUSANA APARICIO**

INTRODUCCIÓN

*“Y hacia la tarde ya,
los peladores regresan;
tristes, desmemoriados...
Y el callejón,
pura sombra, los va borrando...”*

O. M. COSTELLO, *AGOSTO EN TUCUMÁN*

En noviembre de 1991, el presidente Menem firmaba un decreto *de necesidad y urgencia*

* Giarracca, N. y Aparicio, S. 1995 “La actividad cañera. Los campesinos cañeros en los nuevos escenarios económicos” en Giarracca, N. (coord.) *Agroindustrias del Noroeste: el papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena).

** Magíster en Sociología. Investigadora principal del CONICET (Argentina). Docente e investigadora con una extensa trayectoria en temáticas rurales

—el 2284— con el que ponía en funcionamiento la más amplia desregulación conocida por el sector agropecuario en este siglo. El decreto estableció la disolución de la Dirección Nacional del Azúcar (DNA), la derogación de la Ley Nacional del Azúcar así como la de todos los decretos de regulación. La desregulación significó, también, la eliminación de las cuotas de producción de caña —cupos de producción— que se habían mantenido durante más de veinticinco años y habían cristalizado una forma de mirar al agro tucumano.

Durante muchos años el cupo fue el indicador a través del cual se estudiaba el agro tucumano. Nuestro estudio, cuyo trabajo de campo por encuesta se realizó antes de la desregulación, ya mostraba señales o evidencias de situaciones sociales diferentes de las que se deducían de una lectura lineal de las estadísticas, que tomaban el cupo como base del análisis de la estructura agraria tucumana.

La situación desde entonces se ha tornado muy difícil, no solo para los cañeros sino para el conjunto del sector agropecuario nacional¹.

La desregulación, el cierre de la DNA (que de hecho ya casi no funcionaba) aceleró un proceso que se hubiese podido dar de otra forma, con menores costos para los actores subordinados del sector. La respuesta de los distintos agentes de la actividad cañera fue la tradicional: la cohesión regional. Los industriales tucumanos nuevamente adujeron la “cuestión social” para acertar con soluciones a las situaciones de endeudamiento en la que se encontraban mayoritariamente.

La zafra de 1992 comenzó tarde debido a la incertidumbre que generaba la nueva situación, el fantasma de 1966 con el cierre de ingenios, campesinos y jornaleros sin trabajo cayó sobre el Tucumán de finales de siglo. En una provincia donde las tasas de desocupación abierta y encubierta están entre las más

altas del país (entre 12 y 14% de desocupación abierta para el conglomerado de San Miguel de Tucumán) la situación se tornaba desesperante. La producción de caña de azúcar a finales de 1993 fue de 6.092.256 toneladas, 1.927.943 toneladas menos que el año anterior (Cuadro N° 1). El 30% de los cañaverales quedó sin cosechar. Sin embargo, el precio del azúcar había bajado hasta alcanzar cifras un 50% por debajo de los años anteriores (llegó a \$0,21 el kg en 1992), se hablaba de un importante *stock* de los ingenios y de la entrada ilegal de azúcar de países limítrofes. Productores e industriales, después de un período de enfrentamientos, volvieron a formar la tradicional alianza regional y demandar al Estado provincial que interviniera (ver Giarracca, 1994).

Así se creó un ente concentrador de azúcar financiado por el Banco Provincia y el Banco Nación, con la garantía de la co-participación federal de Tucumán. Es decir, que si no se cumplían con los plazos de devolución, la Nación podía retener la co-participación de ingresos nacionales. Este ente financió la zafra de 1992 recibiendo azúcar a \$0,25 con la intención de no venderla hasta lograr subir el precio de mercado. Mercoazúcar, nombre del ente, está formado por los ingenios, las cooperativas comercializadoras y sustentado por el gobierno provincial.

1 Durante 1992, 1993 y en el corriente año se han generado tanto una infinidad de conflictos regionales (Río Negro, Misiones, Santa Fe, etcétera), como dos grandes manifestaciones nacionales: el “tractorazo” en julio de 1993 (Ver Giarracca y Teubal, 1993) y el Paro Agrario de agosto de 1994. Los agricultores fueron también importantes participantes de Marcha Federal en julio de 1994.

Según los dirigentes de los pequeños productores, esta fue una situación de emergencia frente al descontrol que suscitó el decreto de desregulación. Carlos Paz, dueño del ingenio Concepción en su carácter de presidente del Centro Azucarero Tucumano (que nuclea a los ingenios) declaró: *Necesitamos una suerte de Plan Brady azucarero en Tucumán, con formas de pago especiales para las deudas previsionales, impositivas, bancarias que arrastran los ingenios* (Clarín 1-2-1993). En el resto de los ingenios la situación no es mejor: grupos de dudoso origen rentaron dos ingenios y en la mitad de la zafra desaparecieron de la provincia dejando deudas con los cañeros².

Las organizaciones de los pequeños productores, mientras tanto, actúan de distintas formas. Algunos dirigentes, sobre todo los de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), consideran que el sector no puede reacomodarse a la nueva situación recibiendo precios muy bajos. Muchos pequeños productores, frente al nuevo escenario, venden caña

en pie sin cubrir sus costos o dejan de levantar el cañaveral; las cooperativas que entregaron al ingenio cooperativizado fueron las únicas que lograron contratos de maquila cercano a los porcentajes históricos. Esto derivó en problemas de costos para el ingenio en un momento donde la tendencia a la concentración se presenta en todos los niveles. Grupos empresariales (algunos de origen agrario) compran o arriendan ingenios con problemas de funcionamiento. Por tal motivo, la situación del ingenio de las cooperativas (en sociedad con la provincia) también es complicada.

Esto, a nuestro entender, ha llevado a que las organizaciones de los campesinos deban resolver muchos problemas a la vez: la situación de los campesinos como cañeros, la posible reconversión productiva y la situación del ingenio co-propiedad de las cooperativas.

Nuestro equipo de investigación ha continuado trabajando en la región, elaborando un seguimiento del proceso de cambio y analizando las posibilidades de la actividad en el marco del MERCOSUR. Si bien las transformaciones son importantes y estimamos que el número de cañeros independientes está disminuyendo, evaluamos que la configuración de la estructura social del complejo agroindustrial cañero en Tucumán no ha variado sustancialmente.

2 Un artículo sobre grupos mafiosos de Tucumán se sorprende cuando ciertos personajes que actuaron en negocios clandestinos durante la década pasada hayan podido arrendar un ingenio en la última cosecha. (Ver "Buenos muchachos" en *Clarín*, 21-2-1993).

Sin embargo, también nos surgen nuevas preguntas que aún no podemos contestar. Qué pasará con las sociedades familiares; qué influencia tenía en esas sociedades el sistema de cupos de producción; qué nuevas estrategias de persistencia adoptarán los distintos sectores; estos son algunos de los procesos que analizaremos en el futuro. Pero estos interrogantes son hoy posibles, porque el trabajo que aquí presentamos echó luz sobre una sociedad mucho más compleja de lo que generalmente se describía. En efecto, el aporte más significativo fue mostrar la heterogeneidad de la estructura social agraria y oponer nuestra mirada a otras, que aun a fines de los años ochenta, daban por supuesta una estructura social polarizada.

Asimismo, fue importante encontrar la forma de nombrar y registrar un fenómeno cada vez como más significativo en el agro argentino: la multiocupación. Encontramos y adaptamos para nuestro país, una metodología utilizada por Utsa Patnaik en la India que logra medir los niveles de incorporación de trabajo dentro y fuera de la unidad campesina. La construcción metodológica fue denominada *Tasa de balance de la fuerza de trabajo* en los trabajos originales, nosotros la denominamos *Tasa Patnaik*, haciendo referencia de este modo, a su creadora. El alto nivel de *multiocupados* en

el agro tucumano, ayuda a comprender cómo, frente a situaciones de crisis importantes, la unidad familiar agraria persiste.

LOS CAMPESINOS EN LA AGROINDUSTRIA CAÑERA

CAMPESINADO COMO CATEGORÍA ANALÍTICA

“El campesino no encaja bien en ninguno de nuestros conceptos generales de sociedad contemporánea. Esta exasperante cualidad campesina parece subyacer en todos los problemas de investigación de este campo.”

TEODOR SHANIN (1975: 239)

Nuestra investigación no escapó a esta afirmación de Teodor Shanin: no es fácil en primer lugar saber y en segundo definir, en términos que logren cierto consenso, qué es hoy un campesino cañero. Primero porque hay que acordar mínimamente que significa definir un sector de la estructura social agraria como “campesino” y en segundo lugar porque heredamos un conjunto de “teorizaciones”, construcciones empíricas y diversos “discursos” que dan por definido al sector.

Nosotros elaboramos nuestras propias categorías: tanto “productor campesino”, como “productor familiar capitalizado” o “productor capitalista” son conceptos contruidos. Fuimos operando a partir de *teorizaciones*, más que de teorías (García, 1981), lo que nos permitió jerarquizar un dato, una relación y no otra.

Los resultados obtenidos son producto de ... *ese conjunto de afirmaciones y suposiciones sobre las cuales el investigador establece sus hipótesis o realiza sus inferencias* (García, 1981: 50). Repensamos la categoría “campesino” otorgándole el significado que resulta de la actual reflexión teórica, que incorpora análisis micro-sociales y regularidades, que se presentan en las regiones campesinas de países como los nuestros, atravesados por profundas crisis.

Dentro de la Teoría Social los campesinos han dado lugar a históricos debates políticos y académicos y a muchas confusiones conceptuales. Se los relaciona con los agricultores, pero también se habla de “campesinos sin tierra” identificándolos con los jornaleros; se asocia el término a otros conceptos de la magnitud de “sociedades”, “culturas” y hasta “modo de producción”. Hebe Vessuri, refiriéndose a nuestro país sostiene que el concepto suele ser usado con vaguedad de significado cuando no se lo toma con sentido crítico, y a

la vez, especialmente en Tucumán, el término es tan amplio que abarca prácticamente toda la población rural por oposición de la urbana (Vessuri, 1974: 38 bis).

Para gran parte de la bibliografía actual, los campesinos son agricultores que pueden producir para el mercado, que combinan esa producción con otras para el autoconsumo, pero cuyo rasgo principal es la organización productiva basada en el trabajo familiar. Galeski (1977) destaca como atributo esencial la fusión o identificación entre la unidad de producción de mercancías y la unidad doméstica familiar; hecho básico que influye decisivamente en la relación del campesino con los diversos mercados.

La relación “trabajo familiar-tierra” representa el elemento campesino básico (Murmis, 1980), pero la interacción de estas unidades dentro de sociedades más amplias determina la incorporación de elementos capitalistas, como trabajo asalariado, capital, venta de fuerza de trabajo, etcétera, que hace que, aun manteniendo la relación social básica, se presenten diversidad de situaciones.

González de Olarte (1988) plantea que, frente a las nuevas situaciones económicas, el campesinado ha demostrado una gran adaptabilidad y permeabilidad a la modernización. El

elemento común, que se encuentra en todos los casos estudiados, es la capacidad, de estos actores, de diversificar estrategias que permitan su reproducción y sostenimiento.

En la década pasada se planteaban dos tipos de hipótesis sobre el papel de los campesinos, en los países subdesarrollados. La primera focalizaba las contradicciones que este tipo de unidad productiva desarrollaba en relación a las tendencias del moderno desarrollo agrario, por ejemplo la necesidad de contar con unidades “capitalizables”, receptoras de insumos industriales, de nuevas tecnologías, etcétera; la segunda reconocía una lógica específica de acumulación en los países periféricos que permitiría la coexistencia de formas productivas no capitalistas con las que lo son; en términos de De Janvry (1981), la persistencia en nuestros países de modelos de acumulación “desarticulados social y sectorialmente”.

En esta etapa de “planes de ajustes”, de exclusión de vastos sectores sociales del aparato productivo industrial, muy pocos discuten la funcionalidad de la pequeña producción agraria dentro del nuevo régimen social de acumulación³.

3 Un “régimen social de acumulación” tiene que ver con ciertas formas institucionales (la relación salarial, la competencia y la inserción internacional) y relacio-

Los campesinos se insertan subordinadamente al sistema, interactúan y asumen relaciones asimétricas con los otros actores económicos o sociales. Es decir, los agentes mejor dotados en cuanto a recursos tenderán a controlar y a sacar provecho económico de esta situación (Llambí, 1981). Las relaciones asimétricas y por ende desventajosas para los campesinos se entablan, en los mercados donde estos participan, en el mismo proceso productivo mediante mecanismos nuevos como los sistemas de contratación agrícola (agricultura de contrato), o en otros campos donde interactúa: educativos, culturales, políticos. Amartya Sen utiliza el concepto de *entitlements*:

[...] en una economía de mercado basada en la propiedad privada el conjunto de *entitlements* (derechos) de una persona está determinada por el conjunto originario de bienes de su propiedad

nes estructurales que caracterizan determinadas etapas históricas. Aquí nos referimos solo esquemáticamente a la transición de la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones orientada al mercado interno, hacia la etapa de apertura hacia el exterior tendiendo hacia un modelo de acumulación “social y sectorialmente desarticulado”. Para una revisión crítica de este concepto de “régimen social de acumulación, véase Boyer, 1989; Teubal, 1994.

(lo que se le llama su dotación) y los diversos conjuntos alternativos que pueden adquirir a partir de su dotación original, mediante el comercio y la producción lo que se denomina su mapeo de derechos de intercambio (*Exchange entitlement mapping*). (Sen, 1986 citado por Teubal, 1994)

La articulación del campesinado con el resto del sistema social forma parte de un proceso complejo, moldeado fuertemente por las condiciones materiales de reproducción y por las políticas generadas por el Estado. Pero aparecen también aspectos referidos a otros campos: actitudes y conductas frente al riesgo, búsqueda de seguridad, posibilidades de educación y capacitación, imaginarios sobre la posibilidad de retener excedentes, múltiples formas de “resistencia cotidiana” y de “estrategias de sostenimiento”. La unidad campesina mezcla la producción —conectada con configuraciones económicas complejas— con los *mundos de vida* de la gente conformadas a través de una historia multicultural y compleja.

El efecto más significativo de la dinámica capitalista sobre las unidades de producción campesinas es producirles inestabilidad. Los elementos básicos del desarrollo agrario —expansión de mercados, concentraciones agroindustriales, difusión de insumos, etcétera— resultan

mecanismos significativos de diferenciación social interna dentro del sector social campesino.

Los procesos de expansión capitalista habían sido regulados por los Estados y es muy difícil imaginar cómo se hubiesen desenvuelto sin esta mediación. Como planteaba lúcida-mente Claude Meillassoux (1978), los campesinados fueron simultáneamente preservados y destruidos, coexistiendo con sectores capitalistas en una organización contradictoria, donde se conservaba al campesinado para extraerle su sustancia y, al hacerlo, destruirlo en tanto se le limitaba los medios para su reproducción.

En el actual modelo de desarrollo, el Estado tiende a intervenir en menor grado, transfiriendo sus responsabilidades a organizaciones no gubernamentales que mediante distintos tipos de intervención logran, con mayor o menor éxito, regular o neutralizar procesos macroeconómicos, generalmente desfavorables a los campesinos. Hasta hace poco tiempo existía un debate en América Latina acerca de la función de la agricultura familiar en el nuevo modelo neo-conservador (Ver Murmis, 1992), hoy, después de conocer los resultados de la aplicación de las políticas instrumentales del modelo en México o en nuestro país, pocas dudas caben acerca de los efectos excluyentes de la política económica hegemónica.

LOS CAMPESINOS Y EL CAPITAL AGROINDUSTRIAL

En los últimos años apareció la preocupación por conocer las consecuencias que la fuerte expansión del capital agroindustrial transnacional ha tenido sobre los pequeños productores. Desde la década del sesenta, el crecimiento de las ramas agroalimentarias y agroindustriales, en general, modificaron sustancialmente las estructuras productivas y sociales agrarias de la mayoría de los países. Había un importante número de proyectos financiados por organismos internacionales que apoyaron la integración de regiones de bajo desarrollo a la expansión agroindustrial.

En zonas de pequeños productores, especialmente campesinos, la integración entre las grandes firmas procesadoras y los agricultores se efectuaba bajo la forma de “agricultura de contrato”. En el contrato se especificaban calendarios, volumen de producción, calidad y precios; la compañía proveía créditos, insumos, tecnologías de punta y siempre se guarda el derecho a rechazar la producción (Glover, 1987: 441). Desde el punto de vista de los grandes financiadores (Banco Mundial, US, AID) este sistema de incorporación de los campesinos “...*soluciona el problema campesino en tanto*

se produce una transformación del productor de autosubsistencia y aislado a otro, que aumentará su productividad y su integración a la economía de mercado. El Estado tenderá a invertir en infraestructura para complementar las financiaciones de las agencias” (Clapp, 1989: 22, énfasis propio).

Una parte de la bibliografía —sobre todo la elaborada en la década anterior— debatía sobre las posibilidades de la pequeña explotación dentro de este esquema de desarrollo agroindustrial. Para algunos autores esas explotaciones eran incapaces de invertir, dentro del cuadro de tecnologías modernas, y de soportar la competencia en momentos de bajas de precios o de cosecha (Arroyo, 1979; Feder, 1979). Asimismo, Frances Lappé y Joseph Collins (1977), del Institute of Food and Development Policy sostenían que la transnacionalización de la agricultura hería de muerte a la pequeña producción al exponerla a la competencia más eficiente y conducirla fuera de sus tradicionales esquemas de nutrición (Goldsmith, 1985: 1125).

Más cercana a la posición de las agencias financiadoras, la Harvard Business School y su representante más conocido, Ray Goldberg (1981), sostenían que la agricultura era un sistema internacional y los nuevos esquemas de desarrollo agroindustrial podían brindar, a la

pequeña producción, las herramientas necesarias para desarrollarse e integrarse.

La bibliografía de los ochenta se ocupaba básicamente de analizar estudios de casos y comparar los resultados de las experiencias en distintos países. De este modo los debates se enriquecieron y en algunos casos se presentaban variantes al modelo inicial. Como plantea Roger Clapp (1989), el contrato es “la representación de la relación”, y no la relación en sí misma, la divergencia entre las dos partes puede demostrar ser un determinante esencial en el desarrollo del esquema. Durante el desarrollo del modelo ocurren conductas imprevistas, las relaciones no se desenvuelven tal cual esperaban los que elaboraron los proyectos, los acontecimientos modifican los planes iniciales; la confrontación-negociación se convierte en un elemento inherente al esquema.

La agricultura, históricamente, fue un espacio problemático para el capitalismo: el componente biológico en el proceso productivo que marca tiempos con márgenes escasos de acortamiento, la estacionalidad e irregularidad en los requerimientos de mano de obra y la renta agraria, obstaculizaron el ritmo de su expansión. La “agricultura de contrato” que integra productores campesinos que asumen —aunque sea formalmente— el proceso pro-

ductivo, que se costean los períodos de subocupación y que no reclaman renta, representa un esquema “funcional” para la lógica del capital agroindustrial.

John Wilson (1986) plantea que la presunta neutralidad entre productor y procesador, se asemeja a las relaciones contractuales de “trabajador” y “empleador” y constituye parte de una estrategia de acumulación. El modelo se sustenta en determinantes de tipo tecnológico, en la estructuración de los mercados (mono u oligopsónicos) y en mecanismos culturales e ideológicos; por ejemplo, los mecanismos de supervivencias desarrollados por las familias campesinas frente a los procesadores oligopólicos.

La elección de los productores para participar en el esquema es autónoma, Clapp enfatiza dos tipos de condicionantes en la elección: la posibilidad de acceder a bienes y consumos distantes de su cotidianidad, la atracción de lo que el autor citando a M. Taussig llama “la magia de la modernidad” y en segundo lugar la posibilidad de reducir el riesgo de la propia subsistencia. El contrato reduce riesgos, asegura el acceso al crédito y promete el incremento de rendimientos, mediante modernas tecnologías que, de otro modo, estarían fuera de su alcance.

En los trabajos de recopilación y evaluación de estas experiencias, se encontraron significativos impactos en el crecimiento de la productividad y de los ingresos de los productores. Goldsmith analiza doce proyectos que llevaron a cabo procesadoras transnacionales, con campesinos de varios países del mundo, concluye que el modelo no soluciona todos los problemas de subdesarrollo y de hambre en todas las áreas rurales, pero puede aumentar la productividad y el ingreso en algunas regiones favorecidas.

Algunos trabajos focalizaron los efectos “diferenciadores” del contrato agroindustrial (Giarracca, 1985); sin embargo, no existen conclusiones definitivas acerca de la dirección de los cambios. Aparecen diferenciaciones, estratificaciones internas, algunos agricultores se capitalizan refuncionalizando para sí las ventajas del contrato, otros se convierten en pequeños rentistas y dejan la producción directamente bajo el control de las empresas. Las cooperativas, uniones de productores y empresas mixtas, cumplen papeles muy importantes, aprovechando los “nichos” productivos, comerciales o de exportación de estos espacios agroindustriales de alta rentabilidad.

En todos los casos estudiados y conocidos, los Estados nacionales cumplieron funciones

prioritarias para el funcionamiento de este modelo agroindustrial. Arroyo, Rama y Rello (1985) en un trabajo de síntesis del período de los ochenta para América Latina, sostenían que, las formas más frecuentes que asumía el modelo de contrato agroindustrial era el de una triangulación entre la producción familiar, las empresas procesadoras y los Estados. Daban como ejemplos los cultivos tropicales con una fuerte incidencia de la producción campesina, así como parte de la producción de granos y oleaginosas.

En los noventa este modelo de desarrollo agroindustrial se transforma: se registra una fuerte disminución de la inversión extranjera directa en los países de América Latina, especialmente en las agroindustrias de alimentos y bebidas (Rama, 1992) y en segundo lugar, en el nuevo modelo neo-conservador, el Estado permite la libre negociación entre empresas procesadoras y campesinos (ver Giarracca, 1992). Aun cuando el productor familiar está en mejores condiciones que antes para negociar debido a la conformación de organizaciones de todo tipo, la asimetría entre los actores transnacionales y los campesinos es muy marcada.

ORIGEN Y CONFIGURACIÓN DEL CAMPEBINADO CAÑERO EN TUCUMÁN

Los campesinos tucumanos que participan desde tiempo atrás en la actividad agroindustrial cañera, se los puede considerar como un antecedente histórico del esquema de “la agricultura de contrato”. Los ingenios financiaban la producción, adelantaban algunos insumos, algún capital de operaciones que funcionaban como comprometedores de la producción, una modalidad de “venta a futuro”.

Durante muchos años la relación contractual se mantuvo y en varias ocasiones, los productores estaban tan fuertemente articulados con los ingenios que terminaban corriendo su misma suerte cuando quebraban. A diferencia del modelo moderno, el capital agroindustrial local, no dinamizó la producción ni las innovaciones técnicas de los cañeros independientes. Por otro lado, el sistema de financiación implementado se basaba en créditos oficiales baratos a los ingenios para habilitar las zafras, lo cual, en última instancia resultó otra forma de subsidiar al sector industrial. Este sistema se mantuvo hasta hace muy poco y su implementación se remonta a los orígenes de los campesinos como sector independiente.

En una primera etapa, los ingenios tendían a autoabastecerse de caña; varios autores relacionan el surgimiento del campesinado cañero con la necesidad de mano de obra que experimentaban los ingenios y los grandes productores de caña (Rosenzvaig, 1987: 127; Bilbao, 1974: 3; Santamaría, 1986: 100). Se sostiene que la doble condición de campesinos y proletarios permitía a los ingenios pagar salarios relativamente bajos, en tanto la unidad de producción familiar complementaba la reproducción de la fuerza de trabajo. Para corroborar esta hipótesis sería necesario comprobar que los cañeros tenían efectivamente doble ocupación, cosechando caña propia y la de los ingenios, lo que no ha sido realizado hasta ahora. Además, un dato que limita esta hipótesis, es que los ingenios instalaban colonos en sus tierras con el fin de satisfacer sus demandas de mano de obra (Vessuri, 1977).

Para explicar el surgimiento del campesinado cañero, es imprescindible tomar en cuenta las políticas estatales regulatorias de la actividad azucarera. Nuestra hipótesis es que el tipo de intervención estatal que comienza a mediados de los años veinte con el gobierno radical y culmina con el derrocamiento del gobierno peronista, favoreció el asentamiento de muchas familias procedentes de otras provincias

que llegaban a Tucumán buscando trabajo en la industria azucarera. Estas familias ocupaban tierra y comenzaban a producir caña. Como productores, supieron organizarse, presionaron al Estado y lograron una legislación que los defendía frente a los industriales, creando así condiciones que facilitaron sus asentamientos. El mejoramiento de las condiciones técnicas de la producción —por ejemplo, la extensión del riego y la consiguiente incorporación de tierras marginales al cultivo de la caña— actuaron en el mismo sentido.

Legislación favorable

La intervención del Estado en la actividad azucarera se hizo necesaria para regular los conflictos entre industriales y cañeros que, desde principios de la década del veinte, se repetían año a año al iniciarse la zafra. En ese momento los productores presionaban para que el precio de la caña fuese más flexible. Tras la crisis de sobreproducción de 1926-1927 y el incumplimiento de los ingenios en el pago de la caña, el conflicto entre cañeros e industriales se agudizó. La Federación Agraria Argentina⁴ organi-

zó el 2 de junio, una concentración frente a la Casa de Gobierno de Tucumán. Concurrieron, según estimaciones de los periódicos, unos 30.000 manifestantes. Decidieron luego conferir al Presidente Alvear el cargo de árbitro único para solucionar el conflicto y establecer la liquidación definitiva de la cosecha de 1926 y la fijación de los precios para la cosecha de 1927.

El Laudo Arbitral del Presidente Alvear estableció los derechos de molienda para los cañeros asignándoles el 43,42% y el 56,58% a los ingenios, sobre la base de la zafra 1927. El precio de la caña se fijó en el 50% del valor del azúcar obtenido, según los precios de venta de los azúcares en la plaza de Buenos Aires. En los considerandos del pronunciamiento se remarcaba “la necesidad de fomentar la economía del norte argentino en base de la subdivisión de la tierra”. Después del Laudo el número de cañeros prácticamente se duplicó, aunque una parte de este aumento se debió a falsas subdivisiones de grandes propiedades.

Las condiciones favorables del Laudo para los cañeros culminaron en el aumento de la importancia de este sector dentro de la estructura

4 La FAA agrupaba a los pequeños cañeros, los medianos y grandes eran representados por el Centro Cañero. En 1973 se disolvieron las seccionales de la FAA

y se constituyó la Unión Agraria Provincial. En 1945 el Centro y la Unión Agraria se unieron y formaron la UCIT (Unión Cañeros Independientes de Tucumán).

productiva tucumana. En los veintiún años que van desde 1919 a 1940 los cañeros independientes pasaron de controlar el 33,3% del área cultivada al 55% de la misma. En 1937 dos tercios del sector eran unidades de menos de 4 ha y casi la cuarta parte cultivaba entre 4 y 10 ha (Santamaría, 1986).

La política social del peronismo

La legislación social del radicalismo y del peronismo impulsó indirectamente la subdivisión y venta de parte de las plantaciones cañeras de los ingenios. Desde la década del veinte el costo de la mano de obra se había convertido en un problema para los industriales por la sanción de leyes sociales y el establecimiento de bases mínimas de organización del movimiento obrero. Este problema se agudizó durante el gobierno peronista.

Desde 1945 en adelante, los obreros azucareros protagonizaron importantes huelgas y acciones en contra de los ingenios, buscando elevar sus salarios y mejorar sus condiciones de vida⁵. La obligación de aumentar los sala-

rios de los jornaleros, incluyendo los semiproletarios cañeros, se sumó a los altos costos de la industria tucumana. Los ingenios disminuyeron sus plantaciones de caña e incrementaron la compra a terceros. Se ha planteado al respecto, la hipótesis de que la producción fue dejada en manos de los ex-jornaleros que, convertidos en productores cañeros, seguirían obteniendo un ingreso igual o menor al jornalero, pero asumiendo los riesgos de la producción para la venta⁶.

Es conocido el caso de la poderosa Compañía Azucarera Tucumana que en los años cincuenta vendió todas sus propiedades, en parte a sus propios cañeros. En el análisis que Carlos León (1974) hace de este caso, señala que la CAT impulsó la subdivisión y la venta de sus tierras para equilibrar sus quebrantos. Derivados tanto de las dificultades durante la cosecha provocadas por huelgas e incendios intencionales de cañaverales, como de los mayores costos de los salarios y beneficios sociales, la escasez de mano de obra y materiales y

5 Los obreros reclamaban también la subdivisión de los latifundios. El dictamen del Segundo Congreso de la FOTIA declaró necesarios "...la subdivisión de la tierra y expropiación de latifundios de cañeros e ingenios

azucareros [...] para entregarlas en propiedad y en parcelas a los obreros que tienen los requisitos a establecerse" (tomado de Carlos León, 1974: 2).

6 Ver Carlos León, 1974; Canitrot y Sommer, 1972; Slutzky, 1967.

las leyes provinciales que imponían al ingenio la construcción de hospitales con instalaciones y servicios completos.

Slutzky (1967) analizó el proceso de subdivisión de los grandes cañaverales y demostró que entre 1937 y 1963 se registró un aumento de las explotaciones de 20 a 100 ha a expensas de las explotaciones mayores de 1.000 ha, por entonces propiedad de los ingenios.

El Fondo Regulador

La intervención directa del gobierno peronista en la regulación de la producción también incidió sobre el sector industrial y el agrícola. El Fondo Regulador, creado durante el primer gobierno peronista, protegía a los productores de menores rendimientos. El precio del azúcar se fijaba en base al costo de producción medio nacional. Los ingenios del Norte, cuyos costos eran inferiores a la media nacional, debían ingresar la diferencia al Fondo Regulador, que utilizaba esos recursos para subsidiar a los ingenios de más altos costos.

De este modo se permitió la entrada a la producción de pequeños agricultores que se ubicaban en las zonas menos fértiles y aptas para el cultivo de caña. Paralelamente. Tucumán perdía importancia relativa en la producción nacional y el norte —Salta y Jujuy— aumenta-

ban su participación con una organización productiva exenta de la forma social campesina de producción. El Estado debía financiar a las empresas, para que no dejaran de proveer de fuentes de trabajo a los obreros, y a los pequeños cañeros. Los ingenios lograron la protección estatal invocando la “cuestión social”. Como vemos, la problemática minifundista ha sido utilizada como elemento de presión por los otros agentes del complejo (ingenios, grandes y medianos cañeros), para obtener medidas que, en realidad, los beneficiaban más a ellos que a los campesinos.

En síntesis, el surgimiento y consolidación del campesinado cañero es producto de sucesivos asentamientos poblacionales posibilitados por:

1. la necesidad de mano de obra por parte de los ingenios;
2. la intervención estatal directa del radicalismo y del peronismo;
3. la política social radical y peronista que al aumentar el costo de los salarios, alentó la subdivisión de las tierras de los ingenios y el asentamiento de ex-jornaleros. A esto debe sumarse la división sucesoria de tierras, mecanismo que históricamente ha operado como multiplicador del minifundio.

Por los elementos recogidos y expuestos, el surgimiento cañero no fue producto de un proceso de desintegración de una economía de plantación (como las de Salta o Jujuy), no hubo tampoco población campesina indígena que se la desplazara de otros cultivos para proletarizarse. Hubo sucesivos grupos poblacionales que se asentaron y se conformaron como sector productivo en un proceso ni lineal ni ordenado —como son las colonizaciones— que comenzaron a producir y que se fueron asumiendo como sector social, es decir conformando un modo de vida alrededor de los ingenios que signó no solo la economía sino la cultura de la provincia.

La forma en que se desarrolló este proceso dio lugar a una estructura social agraria caracterizada por la coexistencia de una mayoría de pequeños productores familiares con escasos recursos e ingenios integrados verticalmente.

LA CRISIS DE LOS SESENTA

A comienzos de los sesenta la industria azucarera tucumana presentaba un retraso tecnológico y un bajo nivel de equipamiento producto de su política de no inversión. El desarrollo que habían alcanzado estas socie-

dades azucareras, se relacionaba fuertemente con la condición de empresas ineficientes y subsidiadas que tuvieron desde sus orígenes. Esta situación alcanzó el punto de ruptura hacia 1960.

Antes del golpe de Estado de 1966 se presentó en Tucumán una producción récord de 1.200.000 t. Los industriales no pudieron absorberla y atrasaron sus pagos a cañeros y jornaleros. Estas deudas se sumaron a las que los ingenios habían contraído con el Estado por la falta de pago de impuestos y de créditos recibidos. Entre 1966 y 1967 se redujo en un 31% el precio de la caña en valores constantes. El sistema bancario restringió al máximo los créditos a los productores cañeros lo que afectó muy duramente a los estratos de pequeños y medianos productores independientes. Hubo un intenso período de agitación social y tras el golpe de Estado comenzó el cierre de los ingenios. Se mantuvieron los más poderosos que iban concentrando en sus manos lo que anteriormente producía el conjunto (Murmis y Waisman, 1969: 350).

Con relación a la producción de caña, en abril de 1966 el gobierno radical había dispuesto la disminución de la producción tucumana al 70%, tratando de minimizar el impacto de esta reducción sobre los sectores minifun-

distas. Las fincas de hasta 6 ha sufrieron una reducción del 20%, en tanto que entre las mayores de 20 ha ese porcentaje era del 40%. El gobierno del Gral. Onganía dejó sin efecto las diferenciaciones según tipo de productor y canceló una resolución del gobierno de Illia que establecía que cada ingenio debía mantener la misma proporción de caña propia y comprada que en la zafra de 1965.

A comienzos de 1967 se sancionó la Ley 17.163 que dispuso la reducción de la producción a nivel nacional y la expropiación de los productores cuya cuota de producción fuese menor a las 8 toneladas. Esta expulsión de sectores campesinos de la actividad junto con el cierre de los ingenios complejizó la cuestión social de la provincia y llevó al gobierno a diseñar programas de diversificación del agro y radicación de industrias. La falta de coherencia en la formulación e implementación de estas aspiraciones llevó a que la situación se agravara y se intensificara el conflicto social.

La crisis de sobreproducción de 1966 fue una coyuntura que permitió reordenar las relaciones de fuerza a favor de los sectores más concentrados del capital y en contra de los pequeños productores.

EL CUPO DE PRODUCCIÓN CAÑERA HASTA 1991

El cupo cañero se inscribió dentro de estas políticas regulatorias e intervencionistas. La producción cañera se mantuvo a un ritmo expansivo, con crisis periódicas hasta 1966, fecha en que se desata la crisis. El Estado intervino obligando a reducir fuertemente la cantidad de caña molida y en consecuencia el azúcar producido. Este hecho se combinó con la decisión oficial de no subsidiar a los ingenios en situación de quiebra o convocatoria, en aras de efficientizar y modernizar la actividad industrial. Como consecuencia de la crisis se cerraron once ingenios y disminuyó en 6.000 el número de cañeros.

A partir de esta coyuntura, y exceptuando algunos períodos, la producción cañera quedó cuotificada. El Poder Ejecutivo Nacional, mediante la Dirección Nacional de Azúcar, fijó cada año la cantidad de azúcar a producir y se le asignó un cupo a cada productor. La base de la cupificación de 1988 (año en que se realizó la encuesta) derivaba de la distribución realizada en función de la zafra de 1965. Para estar habilitado como productor cañero, se debía acreditar un cupo y estar inscripto en el registro de productores. Además se debía

tener la titularidad de la explotación en la que “siembra, cultiva y cosecha caña”. El último listado disponible había sido actualizado y revisado en 1976.

La cuotificación efectuada sobre la base de la cosecha de 1965, se modificó sustancialmente con un decreto del ministro Martínez de Hoz que introdujo algunos cambios a la ley. A partir de entonces se tomó como base la zafra de 1976, año en que por razones climáticas (heladas) y políticas (operativo Independencia) no se había podido cumplir con el cupo provincial. La caña con cupo solo podía ser destinada al mercado interno de azúcar y la caña sin cupo (excedente) se podía destinar a la fabricación de alcohol o azúcar crudo para exportación, pero a un precio sensiblemente menor.

La cantidad de cupos no coincidía con el número de productores: la primera excedía al segundo. Es decir que existían personas físicas y/o jurídicas que eran titulares de más de un cupo. La asignación de la cuota de producción (cupos) estaba indisolublemente ligada a la tierra, se transfería con ella, excepto en el caso de traslados a tierras, dentro de la misma provincia, que garantizaran rendimientos más altos.

En la práctica el cupo funcionaba como una mercancía más, se vendía, se rentaba; la diferencia es que el cupo, como la tierra, no era

producto del trabajo y no era reproducible. Se trataba de una producción cerrada donde no era posible el ingreso de nuevos productores. Esta situación había llevado a algunos investigadores a plantear la existencia de una renta ligada al cupo (Kostzer, 1989).

El cupo suponía un “monopolio” sobre una cuota de la producción, así, todo productor que tenía cupo podía vender azúcar, aunque no cultivara caña. Las situaciones que se presentaban a partir de este hecho eran variadas: era probable la existencia de productores con cupo pero sin caña, o con menos caña que cupo; productores con cupos pequeños y plantaciones grandes que “entregaban” o “tiraban” caña para los que, si bien tenían cupos, no plantaban caña. También encontrábamos situaciones donde lo que se buscaba era mantener fragmentado un cupo de grandes dimensiones, para evitar ser perjudicados ante cualquier redistribución de los cupos a favor de los pequeños “cupohabientes”.

Todas estas situaciones derivaban en transacciones con precios fijados entre las partes y permitían suponer un ingreso, para algunos de estos productores, que se podía categorizar como renta. Era el caso de un “cupohabiente” sin cañaveral que compraba caña excedente barata y la entregaba como propia al ingenio al precio de mercado.

La distribución y asignación de los cupos que realizó la Dirección General de Azúcar, en el año 1987 le otorgaba a la provincia de Tucumán el 57,24% de la producción nacional, a Jujuy el 27,51 %, a Salta el 10,83%, en tanto el resto quedaba para el litoral (Cuadros N° 2 y 3). Si analizamos el número de “cupohabientes” por provincias, se observa que Tucumán tenía el 88,27%, Jujuy el 0,52% y Salta el 0,04%.

Del análisis de la distribución de cupos a nivel nacional correspondiente al año 1988, se desprende que el 56% de los casos poseían cupos menores a las 15 t de azúcar y concentraban solo el 5,9% del azúcar autorizado. En el otro extremo 66 productores de cupos de más de 1000 t acumulaban el 51,19% de la producción de azúcar (Cuadro N° 2).

Este mismo análisis para la provincia de Tucumán arroja que el 56,8% de los cupos era menor a las 15 t de azúcar y concentraba el 9,3% del producto, mientras que 45 productores poseían cupos de más de 1000 t de azúcar y acumulaban el 24,4% del total provincial (Cuadro N° 3).

LA CRISIS DE 1984-1985 Y LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO RADICAL

La dictadura militar (1976-1983) no había generado políticas que modificaran sustancialmente

el sistema de cupos establecido en 1966 y modificado en 1972 y 1975. Ciertamente a través del crédito barato, y de la liquidación de una compañía estatal que manejaba varios ingenios (CONASA) se había facilitado la entrada de grupos empresarios estrechamente vinculados con el gobierno.

El salario del obrero industrial y del peón agrícola disminuyó notablemente en el período, también disminuyó la cantidad de personal ocupado en la rama, todo lo cual favoreció a los industriales y cañeros grandes a disminuir costos de producción. De todos modos las zafras seguían siendo financiadas por las instituciones oficiales que recibían créditos del Banco Central en tanto la Dirección Nacional del Azúcar fiscalizaba la operatoria.

Si bien el azúcar no había sido un producto destinado a la exportación, los altos volúmenes exportados en el trienio 1972-1974 que obtuvieron altos precios —debido a una favorable coyuntura del mercado mundial— estimuló la exportación. Otra situación internacional propicia se reiteró en los años 1980-1981 y las exportaciones de ese año significaron el 47% de la producción nacional. La importancia del nuevo mercado para la actividad se pone de manifiesto en la profunda crisis de los años 1984-1985, cuando debido a las tendencias recesivas del

mercado internacional los ingenios entraron en cesación de pagos a proveedores y acreedores.

Frente al deterioro del estado financiero de los ingenios tucumanos, el gobierno del Dr. Alfonsín buscó un mecanismo que permitiera una mayor autofinanciación de los agentes y que solucionara la situación de emergencia en la que se encontraban los pequeños productores a quienes los ingenios habían dejado de pagar la cosecha 1985.

Un Decreto presidencial estableció un sistema de comercialización opcional al establecido por ley. Este sistema denominado “maquila oficial” limitaba las funciones financiadoras e integradoras de los ingenios y modificaba la relación cañero-ingenio.

El Decreto de Maquila autorizaba a los ingenios a contratar con los productores la molienda de caña a cambio de una participación en la misma. El ingenio recibía 47% de azúcar molida a cuenta del cañero como pago del servicio y el agricultor recibía los 53% restantes. Uno de los problemas que se puso de manifiesto con el funcionamiento del sistema fue quién comercializaba el azúcar del cañero. Se intentó una “corporación de cañeros de Tucumán” pero fue resistida por los industriales; en segundo lugar se le adjudicó a la Dirección Nacional del Azúcar y fue un fracaso (los cañeros perdieron

su azúcar). Finalmente, a instancias de la organización representativa del pequeño cañero (Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), se sancionó otra normativa para autorizar a las cooperativas a comercializar por cuenta de los cañeros.

De este modo, la intervención del Estado en esta coyuntura innovó y fortaleció la organización de los productores. Aumentaron las cooperativas, sobre todo las de segundo grado (federaciones de cooperativas) se capacitaron para funciones agroindustriales y se estimuló la integración cooperativizada agroindustrial.

El sistema estimuló la capitalización del sector agrario, permitió un mayor ingreso al sector de pequeños productores y un notable aumento de los rendimientos agrícolas. Asimismo, puso una vez más al descubierto la ineficiencia de parte del sector industrial tucumano: convocatorias de acreedores, quiebras y “vaciamientos” de empresas estuvieron a la orden del día. Simultáneamente, otro grupo de ingenios (entre los cuales se encontraba uno en poder de las cooperativas) mostraban altos rendimientos industriales, bajos costos y con el tiempo comenzaron a sanear situaciones financieras complicadas; más aún la sociedad en la que la Liga de Cooperativas Cañeras formaba parte y que rentaba el ingenio Nuñorco lo

lograba comprar. Asimismo, grandes capitales agrarios cañeros comenzaban a invertir en ingenios en una nueva tendencia —iniciada por las cooperativas— de “integración vertical hacia adelante”.

El sistema de participación y concertación de los agentes que establecía el sistema de maquila no se correspondía con la rigidez que establecía la Dirección Nacional de Azúcar en la regulación de la actividad en su conjunto. Mientras se creaban federaciones de cooperativas de pequeños, medianos y grandes productores, se creaban formas de competencia para atraer a los agricultores más productivos⁷, se iniciaban formas de organización agroindustrial con integración de costos, se encontraba una forma de concertación con los grandes ingenios del Norte, la DNA seguía con los viejos sistemas clientelísticos y no exentos de corrupción; era un antiguo organismo nacional donde el grupo político tenía mayor fuerza que el grupo de técnicos que habían ideado el sistema de maquila. Así, además de los cupos de producción, la

DNA establecía cupos mensuales de comercialización de azúcar y mediante el otorgamiento de “cupos extras” mantuvo en pie a varios ingenios a punto de quebrar, más por razones políticas que por razones técnicas o “sociales” como aducían las resoluciones.

EL DECRETO DE DESREGULACIÓN DE 1991

El Decreto 2284 de fines de 1991 de desregulación económica formó parte de un paquete de medidas del gobierno de Menem tendientes a la liberalización de la economía: ley de emergencia económica, ley de reforma del Estado, y el proyecto de ley de flexibilización del mercado laboral. Con el decreto de desregulación se desactivaba por completo la red institucional que había regulado la actividad agropecuaria por más de seis décadas.

El decreto establece la disolución de la Dirección Nacional del Azúcar que regulaba la producción de caña, así como la derogación de la Ley Nacional del Azúcar y todos los decretos *ad-hoc* de regulación.

Algunas medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional desde que el Dr. Menem asumió la presidencia se orientaron a la desregulación. Por ejemplo, durante 1990 el decreto de maqui-

7 El cañero podía optar por pertenecer a una cooperativa y “entregar caña y recibir azúcar”; operar vendiendo la caña (venta por Ley) o, por último, otros arreglos privados con el ingenio que se llamaban “maquila privada”.

la fue sustituido por otro que establecía: “Los porcentajes de distribución del azúcar producido será de libre negociación entre las partes”. Complementando esta normativa, se permitía comerciar a los ingenios procesadores el azúcar de maquila que anteriormente estaba en manos de las cooperativas.

En los considerandos de la normativa desreguladora se refuerzan los principios de libre comercio y se enuncia la necesidad de modificar las relaciones básicas del modelo de desarrollo de la posguerra:

Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía social de mercado, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituyen un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional. Que una vez eliminado las intervenciones y regulaciones del Comercio Exterior e Interior no se justifica la existencia de numerosos organismos públicos, creados a partir de la crisis mundial de la década de 1930, que no resultan aptos para la Argentina de los umbrales del siglo XXI.

El decreto establece:

1. la disolución del Mercado de Concentración Pesquera de Mar del Plata, del Instituto Nacional de Actividades Hípicas, del Instituto Forestal Nacional;
2. la definitiva disolución y ventas de activos de la Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP) y de la Junta Nacional de Granos que se ocupó, entre otras cosas, de otorgar adelantos para las exportaciones, fijar precios de garantías, estimular convenios de país a país, llevar la estadística de los principales cereales y oleaginosas del país;
3. la disolución de la Junta Nacional de Carnes y la privatización del Mercado de Liniers, que fue el principal ente concentrador de la comercialización de carne;
4. la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate;
5. se derogaban las regulaciones sobre la vitivinicultura y se redefinen las funciones del Instituto Nacional de vitivinicultura que se limitan al control de la genuinidad de los productos vitivinícolas;
6. la disolución de la Dirección Nacional del Azúcar que regulaba la producción de caña desde la producción primaria (estableciendo cupos de producción) hasta la entrega final al mercado interno (cuotas de comercialización).

Las primeras zafras después de la desregulación fueron configurando un nuevo escenario donde lo que se puso en juego fueron las capacidades de los actores para adaptarse a la nueva situación. A partir de ese momento, los cañeros van perdiendo posición relativa en el excedente de la producción de azúcar y el grupo de industriales van perfilando una diferenciación interna importante, aunque todavía no cerró ningún ingenio definitivamente.

EL CAMPESINADO CAÑERO Y SU IDENTIDAD DE CLASE

¿Cómo se forma un sector social integrado por sujetos de distintos orígenes étnicos y geográficos?; ¿cómo se transformó un grupo productivo ligado a unas cuantas empresas, en un sector social protagónico, reconocido como actor social tanto por el resto de los sectores involucrados en la actividad azucarera como por el Estado?

Los cañeros tucumanos han sido de los pocos pequeños productores en el país que, desde los ámbitos políticos y académicos, se los llama “campesinos”. Para nuestro país, ello significa registrar en el sector no solo componentes económicos y sociales de no-asalariación sino, fundamentalmente, otros de tipo

político. Se reconoce un proceso social conflictivo en el cual los cañeros se originaron y constituyeron su identidad.

Como sostiene E. Thompson (1984) las condiciones de producción dan lugar a las formaciones de clases y a la disposición de comportarse como tal. El campesinado tucumano se conformó históricamente a través de la demanda, del conflicto, de la lucha social. Como actores concretos experimentaron situaciones de clase mucho antes de constituirse en “clase”; se agruparon, se cohesionaron cuando confrontaron o negociaron con el resto de los actores. Se constituyeron en el proceso mismo de demandar, en la búsqueda de su representación encontraron su identidad.

En el devenir histórico moldeado —no determinado— por la lógica de las condiciones materiales, se reconocieron como actor social y se comportaron como tal. De allí en más, confrontaron y constituyeron alianzas según las coyunturas; formaron parte de “la provincia” en alianzas tácticas con los ingenios frente al Estado nacional o fueron “la mayoría cañera” frente a los empresarios, se aliaron a los trabajadores de FOTIA o negociaron con los ingenios del norte en contra de los de su provincia.

Armaron representaciones sociales o gremiales y generaron soluciones alternativas en

los momentos más críticos. Como otros campesinados activos, contaron con aliados urbanos y generaron líderes.

La creación de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) en 1945 marcó un hito muy importante en ese proceso; UCIT tuvo posiciones reivindicativas que expresaban un alto grado de organización que permitía aumentar la capacidad de negociación-confrontación del sector.

La creación de la UCIT, como sostiene Craviotti (1992), surgió de la fusión de las principales organizaciones de cañeros: la Unión Agraria Provincial, el Centro Cañero y el Centro de Cañeros Independientes quienes convocaron una asamblea en Monteros, donde se decidió la conformación de una única gremial. De entrada, el precio de la caña fue la demanda unificadora de tan diversos grupos, la oposición fundamental fue contra los industriales azucareros: con ellos se disputaba precios y condiciones de comercialización. La identidad cañera se forma en oposición al ingenio en un conflicto no exento de violencias.

Durante la crisis de 1966 constituyeron una alianza con FOTIA y gremios estatales para oponerse a la burguesía azucarera que consideraban como responsable de la caducidad de la estructura económica provincial.

El dinamismo social y político de las representaciones campesinas, así como la combatividad de los jornaleros y su gremio FOTIA, fue tan inusitado dentro del comportamiento general de los sectores agrarios del país, que incluso impulsó a grupos de izquierda a generar “guerrillas” rurales en la región, lo cual produjo una fuerte reacción militar⁸.

Aquellos años marcaban el inicio de un período, en el que se modificaron drásticamente las pautas de acumulación nacional y la conformación y funcionamiento de los sectores sociales. Mientras la economía general dejaba de crecer, el sector agropecuario retomaría un ritmo de crecimiento perdido desde décadas atrás. Aunque ese crecimiento no fue homogé-

8 Según Richard Gillespie (1987) la guerrilla se concentró en las áreas rurales por espacio de un año y tuvo varios éxitos iniciales al enfrentarse con la policía, pero sucumbió gradualmente al ejército. Se había conseguido apoyo por el trabajo realizado por grupos políticos de izquierda afines a la guerrilla durante los años de cierre de ingenios; ese trabajo fue socavado por el ejército con la creación de “áreas protegidas” y la destrucción de zonas de viviendas para separar a la población de la guerrilla (ibídem: 240). También María Seoane describe la conexión del ERP con los conflictos cañeros de los sesenta y los criterios de elección de esta organización armada cuando se retiran al monte tucumano (Seoane, 1992).

neo y, especialmente los productos ligados al mercado interno se retrajeron, ciertas transformaciones involucraron por igual a todos los actores del sector agropecuario.

Es difícil reconstruir cómo se sostuvo, cómo demandó a los otros sectores y cómo se fue transformando el campesinado tucumano. Los últimos veinte años aparecen fragmentados en los relatos de los tucumanos, existen reticencias, la memoria no basta. Aparecen algunos elementos recurrentes en las entrevistas que permiten orientar los próximos trabajos, pero de ninguna manera reconstruir hoy la transformación.

En definitiva, jerarquizamos los momentos políticos en los que el campesinado irrumpió, confrontó y negoció con otros actores para explicar su formación como grupo. Su identidad se constituyó en la interacción y en la representación que en cada momento logró. De este modo UCIT se ubicó en el escenario del complicado mundo azucarero y fue reconocido como actor de concertaciones, negociaciones y también de confrontaciones. Los contenidos sociales y políticos de las demandas expresaron el nivel de organización y capacidad de confrontación, pero también posiciones estructurales de los actores, originadas en el control de la tierra y en el control del cupo cañero que

les confería un derecho tan primordial como la tierra misma. Estas especificidades lo diferencian de otros actores subalternos: jornaleros del surco o del ingenio.

AQUEL CAÑERO DE ANTAÑO

En 1970 se publicó *Tierra y conciencia campesina en Tucumán* del sociólogo Francisco Delich. El trabajo está muy influido por posiciones marxistas ortodoxas acerca de la “cuestión campesina”. La investigación se llevó a cabo desde mediados de los sesenta, exactamente durante el desarrollo de una de las crisis más importantes de la actividad cañera.

Fue una etapa de conflictos, de generación de alternativas autogestionarias, de posibilidades de tecnificación y de consolidación del movimiento cooperativo. Sin embargo, estos hechos son escasamente registrados por el trabajo en tanto que el autor parte de ciertas limitaciones políticas de los campesinos, frente a los procesos de cambio. Delich sostenía que la conciencia del campesino es “filial” —contraparte de la política populista en la que se inserta a través del peronismo— y está infranqueablemente limitada por el principio de identidad con la tierra, la hipervaloración de la tierra.

En esta conceptualización, la ubicación como “productor” especifica la relación subordinada dentro de la sociedad, así sus intereses, demandas, reivindicaciones son formuladas y contenidas a partir de esa identidad, de esta poca “clasicidad” en el decir de Shanin.

El análisis socio-económico de Delich sobre los campesinos cañeros se basaba en un trabajo de campo que se había realizado entre 1965 y 1967. La muestra se había realizado en base al padrón de la Dirección Nacional de Azúcar de 1963, y el primer problema con que se encontró el investigador fue la disparidad en el número de cañeros registrados por distintos organismos. Para 1965, la DNA registraba 18.602 cañeros y la UCIT 23.000.

Delich consideraba, que una finca cañera resultaba rentable para una familia tipo, cuando la superficie sembrada se situaba entre las 14 y 20 ha. Era el mínimo de una explotación cañera y racional a la vez; la racionalidad se refiere a la utilización del suelo (Delich, 1980: 37). De este modo, de las 18.602 explotaciones que registraba la DNA figuraban 17.341 minifundistas o campesinos. De ellos, 13.000 poseían menos de cinco hectáreas.

Sobre la base del trabajo de campo, el sociólogo combinaba el criterio de la superficie cultivada con otras variables estructurales dentro

de la explotación. Así, tomaba de otros trabajos de la época el requerimiento de mano de obra de las explotaciones y el nivel de mecanización encontrado. Concluía que las explotaciones de menos de 500 surcos (aproximadamente 10 ha) ni siquiera se adaptaban al concepto de “explotación familiar”, en el sentido de dar ocupación a la familia, es decir, que dentro de lo que luego fue la conceptualización utilizada en el informe CONADE-CFI (CIDA) eran “explotaciones subfamiliares”⁹. Con respecto a la mecanización encontraba que el 97,49% de los campesinos encuestados no tenía tractor. El 54,99% no usaba ningún tipo de abonos y el 77,20% no usaba herbicidas. Alrededor del 50% tampoco poseía *carros* por lo que dependían de otros para transportar al cargadero. El 72% presentaba una sola ocupación: la de jefe de la explotación agraria.

Esta alta homogeneidad del sector estudiado por Delich en los sesenta, así como la

9 El trabajo del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA) consideró explotación familiar a aquella que, por su disponibilidad de recursos, podía asegurar al productor empleo permanente e ingresos, al menos a dos miembros de la familia. Para la familia “tipo” del campo argentino una situación inferior a esta categoría, las explotaciones “subfamiliares”, las convierte en explotaciones pobres. Esta tipología fue utilizada en 7 países de América Latina.

inexistencia de “elementos capitalistas” dentro del mismo lo llevó a concluir que como todo campesinado, el tucumano tenía una inserción equívoca dentro del sistema, en tanto trabajador y propietario. Esta doble condición modelaba, a su entender, los modos de acción y las orientaciones básicas del sector.

Santiago Bilbao, ya en 1972 recopiló los principales trabajos sobre el “minifundio cañero”. Planteaba que la mayoría coincidía en el corte de las 20 ha con caña para determinar el “minifundio”. Sobre la información del censo de 1971 que arrojaba 17.657 cañeros presentaba la siguiente clasificación: hasta 500 surcos (10 ha) se registraba el 85,75% de los cañeros y hasta 1000 surcos (20 ha) el 92,57%. La utilización de la mano de obra familiar y la residencia de la familia en la explotación, eran atributos de los campesinos que los diferenciaban de las medianas y grandes explotaciones.

Hacia fines de los setenta, un trabajo realizado por Ponce y Haro (INTA, s.f.) muestra una estructura agraria diferenciada. Se realiza una estratificación de los productores cañeros tomando como variable discriminante el número de surcos y se identifican seis tipos de explotaciones. En cada una de las seis categorías aparecen formas distintas de organización de la producción, diferentes niveles de tecnifica-

ción y capitalización, orígenes distintos de la mano de obra ocupada en la producción (familiar, transitoria, asalariada, permanente), formas distintas de cosecha, entrega y venta de la caña. Este trabajo muestra la existencia de una estructura agraria más heterogénea que la presentada por Delich unos años antes. Lamentablemente no se analizaba internamente el sector de la pequeña producción.

Las condiciones de vida de los campesinos eran muy duras, la mayoría habitaba viviendas precarias, de barro y paja, los servicios de luz eléctrica y agua potable eran casi inexistentes y se daba un alto grado de hacinamiento. Bilbao, citando un estudio del INTA, mencionaba 5,1 hijos por familia. Las migraciones estaban al orden del día, el Censo de 1970 arrojaba una cantidad de 170.000 personas menos de la esperada.

Como vemos, había bastante consenso acerca de la delimitación y caracterización del sector campesino cañero. Los trabajos lo presentan homogéneo, subordinado al capital agroindustrial a través del contrato de compra-venta.

La estricta regulación a la que estaba sometido por el sistema de cupos, los conflictos que lo enfrentaban, por un lado, al gobierno nacional para defender su fuente de trabajo cuando peligraban los ingenios, y por otro, a esas empresas cuando se trataba de establecer los precios y condicio-

nes del contrato, coadyuvaban a mantener cierta homogeneidad y a imponer resistencias a los elementos disruptores de la organización familiar.

Aunque ignoramos gran parte de lo que ocurrió en Tucumán desde 1975 hasta 1983, podemos afirmar que los campesinos cañeros dentro de una cotidianeidad silenciada y acotada por severas condiciones de sobrevivencia funcionalizaron esa equívoca inserción, esa ambigua acción de la que hablaba Delich, para adecuarse a los difíciles momentos que los setenta y los ochenta les deparaban.

Hubo “descampesinización”, hubo cambios generacionales, y hubo incontables estrategias de reproducción que les permitieron permanecer. En la actualidad; aunque reducidos en número, y sin una clara adhesión al peronismo, los campesinos siguen produciendo caña y siendo un importante actor social provincial. Sin dudas, la primavera de 1991, con el decreto desregulador del gobierno justicialista marcará un nuevo hito en la historia de este grupo social.

EL CAMPESINADO CAÑERO, HOY

Para categorizar las unidades cañeras jerarquizamos dos variables: tipo de fuerza de trabajo utilizada y nivel de mecanización. Primero

establecimos las combinaciones de variables (construcción de variables complejas) para categorizar al conjunto de cañeros. De la tipología resultante, delimitamos el sector campesino, conformándolo por unidades que no contratan mano de obra asalariada permanente y, o no están mecanizadas, o poseen un tractor, pero en tal caso sin comprar trabajo.

Jerarquizamos la relación social básica —utilización de mano de obra familiar— combinando este elemento con los componentes “capitalistas” (compra de trabajo, nivel de mecanización) que permiten dar cuenta de los procesos de diferenciación interna.

El supuesto teórico de esta construcción, es que el trabajo asalariado en forma permanente es un elemento que modifica la organización social de la unidad. La utilización de trabajo ajeno permanente refleja un componente capitalista dentro de la unidad, que combinado con otras dotaciones de recursos, permite la capitalización. Existen, además, otros elementos capaces de modificar la organización social productiva de las unidades campesinas, y en las entrevistas en profundidad, tratamos de detectarlos y son también presentados en este trabajo.

La contratación de trabajo se presenta dentro de un proceso —una transición— que puede iniciarse a partir de diversas situaciones. En

nuestro caso, la variable laboral fue jerarquizada tanto por un criterio teórico como por su consistencia con otros aspectos. Registra una adecuada relación con: a) el tamaño de la superficie cañera, b) el cupo, c) el tipo de participación laboral del jefe, d) su lugar de residencia y e) el nivel técnico de la unidad.

Se trata de diferenciar las formas de producción, o como sostiene Utsa Patnaik (1988), detectar las jerarquizaciones resultantes a partir de “complejos de métodos de producción técnicos-organizativos”. Actualmente, con el uso de técnicas e insumos industriales, importa más la posibilidad de aplicación de capital por unidad de tierra que la extensión de la misma.

En la actividad cañera, esta idea de “complejos técnicos” contribuye a una primera diferencia entre unidades integradas agroindustrialmente, de las que no lo son (Blume, 1985). Sin embargo, dentro de los cañeros independientes, también se dan diferencias sustanciales en los modos de combinar los recursos; todo esto a partir de considerar, siempre, la desigual dotación de los mismos, básicamente de la tierra y, en el momento de la encuesta, del cupo.

Las posibilidades de generar excedentes dependen no tanto del “tamaño de la explota-

ción” sino de la “escala de la explotación”, es decir de la inversión de capital por unidad de superficie, entendiéndola también por capital la fuerza de trabajo asalariada. Pero además de generar excedentes, se trata de conocer la posibilidad de retenerlo, ya sea para reinvertir e iniciar un proceso sostenido de acumulación o para mejorar las condiciones generales de la unidad doméstica y el desarrollo de las personas (inversiones para mejorar la vivienda, hacer estudiar a los hijos).

Pero además de tomar “fuerza de trabajo” como “compra” (contratada), la tomamos en su otro sentido: cuando la unidad doméstica “vende” fuerza de trabajo. El significado capitalista que asume esta situación no solo se basa en que la venta de trabajo “proletariza” a los miembros de la unidad, y cuando se trata del “jefe” puede llevar a la desaparición de la finca productora de bienes, sino en otros aspectos. En primer lugar, a la posibilidad de que ese ingreso que proviene del trabajo extra-predial facilite el sostenimiento y reproducción de la unidad. En segundo lugar, el desarrollo de “multiocupaciones” que, desde los actores permite desarrollar estrategias de reproducción, y desde el modelo de acumulación actual, representa formas de inclusión de los sectores populares al aparato productivo.

El resultado de la información elaborada indica una disminución en el número de cañeros y un proceso de diferenciación en marcha. Desconocemos el proceso social y político que derivó en esta situación; de aquel sector de entre 15 y 18 mil cañeros, que Delich caracterizaba, por lo menos homogéneo en el 90% de los casos minifundistas, donde el 98% de ellos no tenía tractores ni los contrataba, y la mitad ni siquiera tenía cualquier medio para transportar la caña al cargadero, encontramos en 1988 un heterogéneo sector social productivo y básicamente un diferenciado sector de pequeños productores familiares. Estos 9.470 pequeños cañeros conforman un conjunto con franjas o estratos bien diferenciados por las variables más relevantes.

EL CAMPESINADO EN EL MUNDO CAÑERO

Las estratificaciones de productores mencionadas anteriormente aluden a modelos de análisis de la estructura agraria que, en general, toman el volumen disponible de tierra como variable discriminante que permite distinguir tipos de productores: en Delich la unidad a alcanzar eran 16 ha; en los trabajos de INTA son las explotaciones de mayor tamaño

las que permiten economías de escala, adoptan tecnología y diversifican actividades.

Desde nuestra perspectiva, para estudiar la estructura agraria azucarera tucumana, no podemos limitarnos al análisis de las formas de distribución y tenencia de la tierra y del cupo azucarero vigente hasta 1991. Es necesario adoptar una concepción teórica que permita identificar qué lugar ocupa cada actor en el proceso de acumulación de capital, cómo se relacionan o subordinan relaciones aparentemente “no capitalistas”, qué formas de acción o reacción se generan y organizan en función de retener o disminuir la apropiación de excedentes.

Con este objetivo partimos de una conceptualización de productores en términos de la organización del trabajo en la chacra y de los niveles de capitalización existentes. Esto supone la presencia de dos figuras contrapuestas: el campesino que basa la realización de su producción en la utilización de su mano de obra familiar, sin disponer de capital; y en el otro extremo, el sector empresario, caracterizado por la contratación de fuerza de trabajo asalariada y con propiedad del capital, reflejada en instalaciones y dotación de maquinarias.

En cuanto al tipo de mano de obra utilizada, los productores cañeros presentan una amplia gama de posibilidades:

1. los que utilizan solo el recurso humano disponible en la familia;
2. los que contratan asalariados transitorios;
3. los que utilizan personal eventual en forma indirecta a través de la compra de servicios a contratistas de maquinarias y
4. los que basan su producción en el empleo de trabajadores permanentes.

Cuadro N° 1

Distribución de los productores según tipo de mano de obra y nivel de mecanización (%)

Tipo de mano de obra utilizada	Sin mecanización	1 tractor	2 o más tractores	2 o más tractores y cosechadora	Total
Solo mano de obra familiar	7,3	18,1	—	—	23,4
Mano de obra familiar y transitorios	5,4	15,9	—	—	2,4
Mano de obra familiar y contratista	21,1	—	—	—	21,1
Mano de obra familiar, contratista y transitorios	8,2	2,8	—	—	12,1
Con asalariados permanentes	4,1	5,3	7,9	0,4	17,7
Total	46,1	42,1	11,4	0,4	100 (11,496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

El Cuadro N° 1 nos indica que —a diferencia de los datos brindados por Delich— a fines de los años ochenta solo un 25,4% de los productores no utilizan ninguna forma de trabajo asalariado. En el otro extremo, un 17,7% de los productores basan su producción en la contratación de personal permanente.

El trabajador transitorio contratado en forma directa, en especial para la cosecha, está presente en el 23,7% de las explotaciones; mientras que un 21,1% de los productores contratan servicios, en especial para la preparación del terreno y/o transporte de la caña.

En cuanto a la disponibilidad de capital, los datos actuales revelan una importante transformación respecto a la situación descripta para 1965. En esa época, se señalaba la casi inexistencia de maquinarias, nuestra encuesta detectó que, actualmente, solo un 46% no posee tractor, mientras que un 11,4% posee más de dos tractores y un 0,4% dispone además de cosechadoras integrales (Cuadro N° 5). Cabe aclarar que un 1%, de las unidades productoras son ingenios integrados verticalmente.

La combinación de las distintas formas de utilización de fuerza de trabajo y de disponibilidad de capital permite caracterizar a los distintos tipos de productores presentes en el área cañera (Cuadro N° 5).

Este cuadro muestra la gran heterogeneidad en la estructura agraria. No es posible seguir

sosteniendo que el área tiene una fuerte presencia campesina combinada solo con grandes empresas integradas.

En realidad, como se verá a lo largo del trabajo, el sector campesino es importante (60%) pero está diferenciado internamente: adquiere relevancia una franja *transicional* de productores que utilizan solo mano de obra familiar y disponen de algún nivel de capitalización (tractores).

Por otro lado, se registra un sector de pequeños productores capitalizados (22,2%) que combina la contratación de asalariados transitorios con la disponibilidad de elementos de capital (maquinarias) al que hemos excluido del grupo campesino. Por último, el sector empresario representa el 17,7% de los productores.

La siguiente tipología de productores cañeros sintetiza los actores predominantes en el área:

Cuadro N° 2
Tipología de productores

Pequeños productores	Campesinos	Con mano de obra familiar sin mecanización	7,3
		Con transitorios o contratistas sin mecanización	26,5
		Transitorios y contratistas sin mecanización	8,2
	Campesinos transicionales	Mano de obra familiar y con un tractor	18,1
	Familiares capitalizados	Transitorios o contratistas y un tractor	15,9
		Transitorios y contratistas con uno y más tractores	3,9
		Transitorios y dos o más tractores	2,4
Empresarios	Permanentes sin mecanización	4,1	
	Permanentes, uno o más tractores, sin cosechadora	13,2	
	Permanentes, uno o más tractores con cosechadora	0,4	

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS POR SECTORES SOCIALES

La superficie con caña constituye tradicionalmente una variable discriminadora del tipo de productor, no obstante que impide caracterizar, exhaustivamente, la ubicación del productor en un sistema de estratificación social.

En efecto, si bien un minifundio es una explotación pequeña que está por debajo de lo que se considera, para un producto, unidad econó-

mica, no significa que el minifundista sea necesariamente un campesino. Puede tener otras actividades, agropecuarias o no agropecuarias, y esta explotación corresponder a una de sus diversificaciones de inversión o también, puede estar produciendo en base exclusivamente a la contratación de fuerza de trabajo, lo que impediría categorizarlo como campesino.

No obstante, generalmente existe una estrecha asociación entre el tamaño de la explotación y el tipo de productor.

Cuadro N° 3
Superficie con caña y tipología de productores (%)

Superficie con caña	Campesinos	Campesinos transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
1-2	39,3	10,2	8,2	10,4	22,2 (2.533)
3-4	32,4	30,5	—	4,4	19,9 (2.288)
5	2,2	35,6	11,7	—	9,9 (1.145)
6-12	19,7	23,8	37,4	14,8	23,4 (2.701)
13-20	6,5	—	30,0	15,4	12,1 (1.392)
21-50	—	—	9,3	12,1	4,1 (482)
51-100	—	—	2,0	24,6	4,7 (549)
101-200	—	—	1,3	14,9	2,7 (318)
201-400	—	—	—	2,2	0,3 (44)
401-600	—	—	—	1,1	0,1 (22)
600 y más	—	—	0,1	1,0	0,1 (22)
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.558)	100 (2.026)	100 (11.496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

En el área cañera, se puede observar (Cuadro N° 3) que el 52% de los productores poseen menos de 5 ha con caña, pero este elato alcanza aproximadamente el 75% en los productores campesinos y transicionales. Entre los *farmers*, solo el 19,9% está en ese tamaño de explotación y en los sectores empresarios llega solo al 14,8%. Es decir que si hubiéramos rea-

lizado la tipología en función de la superficie con caña, ese casi 15% de los productores empresariales, hubiera sido incluido en el estrato de pequeños productores campesinos.

En el otro extremo, con más de 50 ha con caña se encuentran el 3,4% de los pequeños productores familiares capitalizados y el 42% de los empresarios.

Cuadro N° 4
Cupo real y tipología de productores (%)

Cupo real	Campesinos	Campesinos transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
1-5	39,3	20,3	—	10,4	22,0
6-15	39,3	40,6	8,2	10,4	27,5
16-20	4,4	20,3	—	—	5,5
21-25	8,4	5,1	20,6	—	9,0
26-30	1,8	5,1	32,2	—	8,9
31-47	3,1	8,6	15,2	6,6	7,4
48-99	3,7	—	19,1	23,4	9,9
100-250	—	—	2,6	25,7	5,1
251-430	—	—	2,0	15,9	3,3
431-759	—	—	—	3,3	0,6
760 y más	—	—	0,1	4,2	0,8
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.558)	100 (2.026)	100 (11.496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Muchos trabajos sobre el área cañera utilizaron el tamaño del cupo como indicador del tipo de productor (León, 1988; Kostzer, 1989). Sin embargo, para esta variable valen las mismas críticas que las indicadas para el tamaño de la explotación; aún más, dado que el cupo tenía un carácter de no reproducible ni ampliable, su concentración estaba subvaluada a través de distintos mecanismos que desarrollaban los

agentes sociales (por ejemplo: compactación de cupos).

Al analizar la distribución de los cupos en función de los datos de la Dirección Nacional de Azúcar, mencionamos que un 56,1% de los productores tenía hasta 15 t de cupo de azúcar. Sin embargo, los datos relevados por nuestro trabajo de campo disminuyen esa proporción al 49,5% (Cuadro N° 4); los productores con

más de 100 t de cupo para la DNA representaban el 7,3%; sin embargo, en nuestra encuesta, son casi el 10%.

Obviamente estas diferencias entre nuestros datos y los provenientes de la DNA pueden deberse a errores de muestreo; no obstante, es importante señalar que fue relativamente frecuente que un productor “administrara” más

de un cupo. Como se observa en el Cuadro N° 5 aproximadamente el 20% de los productores controlaba más de un cupo y el 10% más de dos cupos. Estas características se acentuaban en los productores *farmers* y empresariales. La gestión de más de un cupo aparecía como una estrategia central en el sector *farmer*: el 41% de estos productores manejaba más de un cupo.

Cuadro N° 5

Número de cupos administrados y tipología de productores (%)

Número de cupos	Campeños	Campeños transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
1	88,1	94,9	58,7	74,6	80,4
2	11,9	5,1	11,8	10,5	10,4
3	—	—	2,7	5,0	1,5
4	—	—	—	6,3	1,1
5	—	—	0,7	—	0,2
6	—	—	—	0,7	0,1
8	—	—	26,0	2,9	6,3
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.558)	100 (2.026)	100 (11.496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

A partir de la zafra de 1992, con la desregulación de la economía, el cupo desaparece. Sin embargo, es posible sostener que la concentración de producción indicada por el sistema de cupos —y que nuestra encuesta relevó con mayor peso que el surgido de los datos de la DNA— se debió agudizar.

Aún más, existen indicios de una tendencia a desmejorar la producción proveniente de pequeños productores. La baja de ingresos, las ventas en pie, los cambios en las formas de comercialización los han desfavorecido al disminuir sus ingresos netos. En consecuencia, no les ha sido posible realizar algunas labores culturales que implican gastos, la renovación de los cañaverales se ha detenido y la productividad de los cañaverales ha disminuido, reduciendo sus ingresos.

En este contexto, es necesario preguntarse cómo ha afectado la desregulación a las sociedades familiares, a la antigua compactación de cupos. Hoy los pequeños empresarios del sec-

tor expresan su preocupación ante las nuevas condiciones que no les han dado tiempo suficiente ni los apoyos financieros indispensables para una reconversión productiva. Seguramente, la situación de los campesinos y familiares capitalizados también ha empeorado, ante la caída de ingresos y la escasa diversificación existente ya antes de la desregulación.

La producción de caña como única actividad agropecuaria para la venta subsiste como característica predominante en el área: casi el 77% de las explotaciones son monoproductoras. Los productores medios adoptan una estrategia productiva de mayor diversificación en la producción destinada al mercado. En efecto, los campesinos transicionales incorporan entre sus rubros productivos tabaco, hortalizas y algunos animales, en especial porcinos. Los pequeños productores familiares capitalizados incluyen especialmente cereales y hortalizas (Cuadro N° 6).

Cuadro N° 6

Actividades agropecuarias para la venta y tipología de productores (%)

Actividad agropecuaria	Campesinos	Campesinos transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
No diversifica	86,9	59,4	69,9	79,6	76,8
Solo cereales	—	—	5,9	4,1	2,0
Solo ganadería (vacuno-porcino)	4,4	10,2	8,2	—	5,5
Cereales, ganadería con o sin forraje	—	—	—	3,7	0,6
Cítricos y/o reforestación	—	—	—	1,3	0,2
Combinaciones con tabaco	—	20,3	—	6,9	4,9
Hortalizas y otros sin tabaco	4,4	10,2	16,0	2,0	7,6
Otras Combinaciones	4,4	—	—	2,6	2,3
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.558)	100 (2.026)	100 (11.496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

La explotación familiar capitalizada, tal como señala Caballero (1980) presenta también algunas particularidades. En ella se visualiza una creciente división del trabajo del grupo familiar. En efecto, es frecuente que el productor y sus hijos se reserven solo el manejo de la maquinaria y/o la administración de la chacra

contratando transitorios para las tareas más intensivas y de mayor esfuerzo físico, como la cosecha. En este grupo de productores, solo un tercio realiza todas las tareas, mientras que también en un tercio del estrato, el productor solo se ocupa de las gestiones y decisiones de la producción (Cuadro N° 7).

Cuadro N° 7

Tipo de trabajo en la chacra y tipología de productores (%)

Tipo de trabajo	Campesinos	Campesinos transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
Todas las tareas	78,9	74,6	33,9	0,8	54,3
Manejo de la maquinaria y gestión	—	—	32,4	11,3	9,2
Solo gestión	16,8	25,4	33,6	86,9	34,4
No corresponde	—	—	0,1	0,8	0,2
No trabaja en la explotación	4,4	—	—	0,2	1,9
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.558)	100 (2.026)	100 (11.496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Esta división del trabajo implica en muchos casos una separación física entre la unidad doméstica y la unidad de producción: el 45% de los productores no reside en la chacra (Cuadro N° 8).

Cuadro N° 8

Lugar de residencia del productor y tipología de productores (%)

Lugar de residencia	Campesinos	Campesinos transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
En la explotación	83,2	91,4	55,2	19,8	67,3
Fuera de la explotación	16,8	8,6	44,8	79,5	32,6
No corresponde	—	—	—	0,7	0,1
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.558)	100 (2.026)	100 (11.496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

En cuanto a la compra y venta de servicios de contratistas de maquinarias aparecen dos comportamientos complementarios. En primer lugar, el 70% de los campesinos contratan servi-

cios a terceros para la preparación del terreno previa a la implantación de la caña y también para el transporte del producto hasta el cargadero (Cuadro N° 9).

Cuadro N° 9

Tareas para las que utiliza contratista y tipología de productores (%)

Utilización de contratista	Campesinos	Campesinos transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
Ninguna	30,2	100	82,5	61,0	59,9
Preparación de suelo	29,0	—	—	—	12,2
Para cosecha	—	—	8,2	3,4	2,4
Para transporte	10,9	—	2,7	8,9	6,8
Combinación de dos o más (sin cos.)	19,3	—	1,7	6,8	9,7
Combinación de dos o más (con cos.)	10,6	—	4,8	20,0	9,0
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.558)	100 (2.026)	100 (11.496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Complementariamente, el sector de campesinos transicionales maximiza la valorización de

su capital vendiendo sus servicios a aquellos que no disponen de maquinaria (Cuadro N° 10).

Cuadro N° 10

Tareas para las que se ofrece como contratista y tipología de productores (%)

Se ofrece como contratista	Campeños	Campeños transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
Ninguna	100	74,6	86,9	83,6	89,6
Preparación suelo	—	5,0	—	1,6	1,2
Para cosecha	—	—	—	1,9	0,3
Para transporte	—	10,2	—	6,6	3,0
Combinación de dos o más (sin cos.)	—	10,2	13,0	1,6	3,2
Combinación de dos o más (con cos.)	—	—	0,1	4,7	2,7
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.558)	100 (2.026)	100 (11.496)
Ninguna	100	74,6	86,9	83,6	89,6

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

En cuanto a los niveles tecnológicos en el cultivo (Cuadro N° 11) se observa que prácticamente el 87,5% fertiliza debido a la necesidad de recomponer nutrientes, en especial, con urea;

mientras que la utilización de herbicidas está poco difundida, prevaleciendo el desmalezamiento en forma manual.

Cuadro N° 11

Utilización de insumos y tipología de productores (%)

Utilización de insumos	Campesinos	Campesinos transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
No utiliza	8,7	20,4	20,4	1,7	7,6
Usa solo urea	91,3	79,6	79,6	71,6	87,5
Usa solo herbicida	—	—	—	10,4	1,8
Usa urea y herbicida	—	—	—	16,3	3,1
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.078)	100 (2.026)	100 (11.496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

La cosecha de la caña tradicionalmente ha demandado una abundante mano de obra estacional. Ir a la zafra implicaba un gran movimiento de trabajadores con sus familias. Los cosecheros llegaban desde otras áreas de la provincia y también de provincias vecinas. A partir de la década del setenta comienza a incorporarse la cosecha semimecánica e integral de caña, desplazando un volumen considerable de mano de obra.

La cosecha manual consiste en cortar la caña en la base con el machete, luego deshojar y despuntar el tallo y por último apilar y cargar la caña en carros, estimándose que un obrero cosecha aproximadamente entre 1,5 y 2 t por día, lo que implica aproximadamente 30 jornales por hectárea. En Tucumán, aún hoy prevalece la forma de cosecha manual (81,8%), aunque en el sector empresario es importante la incorporación de cargadoras mecánicas y, también, el corte y la carga mecánica (Cuadro N° 12).

Cuadro N° 12

Forma de cosecha y tipología de productores (%)

Forma de cosecha	Campeños	Campeños transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
Manual	93,8	100	72,4	46,1	81,8
Corte manual y carga mecánica	1,8	—	13,1	26,4	8,3
Corte y carga mecánica	4,4	—	14,5	27,2	9,9
Integral	—	—	—	0,2	0,0
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.558)	100 (2.026)	100 (11.496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Esta forma de cosecha, conocida como semi-mecánica, puede incluir solo corte mecánico o solo carga mecánica o bien corte y carga mecánica, reduciéndose la tarea a aproximadamente 10 a 15 jornales por hectárea respecto al promedio histórico.

Las máquinas integrales realizan el corte, el despuntado, el troceado, y efectúan la limpieza y la carga simultáneamente, lo que implica cosechar una hectárea de caña en 5 horas (0,6 jornales/ha).

Los productores también cosechan la caña “quemándola” previamente, lo que implica conocer el momento de maduración para evitar pérdidas de producción. En general, los pro-

ductores queman cuando el ingenio lo indica. El 53,8% de los productores quema la caña y solo un 22,8% realiza todas las tareas en forma manual, sin quemar el cañaveral (Datos de la encuesta).

La incorporación de tecnologías mecánicas ahorradoras de mano de obra en la cosecha prevalece en el sector empresarial. Estos agentes, pueden ofrecerse, inclusive, como contratistas para la cosecha y existen casos de ingenios que se ocupan de la zafra de sus productores proveedores.

Estos establecimientos disponen en general de un gran parque de maquinaria, a la vez que tienen una compleja organización del trabajo:

profesionales en distintas áreas (Agronomía, Contaduría, Ingeniería); operarios especializados en el uso de las maquinarias; obreros de planta y obreros de surco; y, también, en épocas de cosecha, contratan personal suplementario.

El sector empresarial presenta una importante diversificación en sus inversiones externas al sector agropecuario: el 42% está inserto en otras actividades empresariales (Cuadro N° 13).

Cuadro N° 13

Diversificación de actividades empresariales y tipología de productores (%)

Diversificación de actividades	Campesinos	Campesinos transicionales	Familiares capitalizados	Empresariales	Total
No diversifica	95,6	100	79,1	57,7	86,1
Comercio	4,4	—	17,0	8,6	7,1
Industria	—	—	—	2,2	0,4
Finanzas	—	—	—	1,6	0,3
Transporte	—	—	—	3,8	0,7
Construcción	—	—	0,1	4,4	0,8
Otras	—	—	2,6	20,6	4,2
Combinaciones	—	—	1,3	1,0	0,5
Total	100 (4.834)	100 (2.078)	100 (2.558)	100 (2.026)	100 (11.496)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

La cúpula de este sector —los dueños de los ingenios— forma parte generalmente de importantes grupos económicos a nivel nacional que incluyen inversiones en otras industrias, finanzas, comercio.

En síntesis, la actual estructura social cañera es heterogénea y presenta estratos de

productores diferenciados en función de sus distintos accesos al capital, a los mercados de insumos y productos, a la compra de trabajo y a las posibilidades de acumulación sostenida.

Los campesinos coexisten con estos otros estratos, sin que este hecho marque grandes diferencias en la productividad y calidad del pro-

ducto final. La caña es una producción que si se realiza en forma artesanal (con poca mecanización) mantiene un buen rendimiento industrial. Las diferentes calidades de azúcar provienen, más que de la etapa agrícola, de los niveles de eficiencia en los procesamientos industriales.

¿EL CAMPESINO O TIPOS DE CAMPESINOS?

La encuesta estima 6.912 unidades campesinas, 60,12% del total. Este conjunto, delimitado a partir de las variables señaladas anteriormente, presenta diferencias internas. Se acentúa la heterogeneidad del sector, no se registra una “conducta campesina” sino varias “conductas campesinas”. Esto resulta de su inserción dentro del capitalismo, tanto por las inestables situaciones estructurales de la actividad azucarera como por las múltiples estrategias adaptativas que desarrollan.

Una primera caracterización de las unidades se hizo a partir de las diferencias entre los que utilizan solo mano de obra familiar y los que incorporan trabajo ajeno en forma transitoria y/o contratistas, combinando esto con el nivel de mecanización. De este modo, registramos los siguientes subgrupos:

- Subgrupo 1: Unidades que utilizan solo mano de obra familiar y no tienen tractor. Representan el 12% del sector.
- Subgrupo 2: Unidades que utilizan mano de obra familiar y mano de obra transitoria o contratistas y no tienen tractor. Representan el 44% del sector.
- Subgrupo 3: Unidades que utilizan mano de obra familiar, mano de obra asalariada transitoria y contratistas y no tienen tractor. Representan el 14 % del sector.
- Subgrupo 4: Unidades que utilizan solo mano de obra familiar y poseen un tractor. Representan el 30% del sector.

Estos cuatro estratos fueron presentados y analizados en relación con el total de cañeros en el capítulo anterior¹⁰.

10 Debemos aclarar que del total de productores campesinos que aparecen en el cuadro 10, procedimos a retirar 600 casos distribuidos en los subgrupos 2 y 3 y que aparecen en los análisis en la categoría “otros”. En el específico análisis del sector campesino, estas unidades presentan un comportamiento irregular en un aspecto importante: el jefe de la familia realiza solo tareas de administración y, a pesar de utilizar mano de obra familiar, el jefe y la familia residen fuera de la explotación. Estos “campesinos urbanos” aparecen en los cuadros de este capítulo como “otros” (para no confundirlos con el estrato 5 de cañeros en general) y representan el 8,7% de los campesinos.

Los aspectos estructurales: superficie y cupo cañero

En conjunto, los campesinos ocupan el 11% de la superficie cañera y acaparan aproximada-

mente el 10% del cupo provincial. En primer lugar, relacionamos los estratos campesinos con la superficie cañera y el tamaño del cupo (Cuadros N° 14 y 15).

Cuadro N° 14

Superficie con caña y categorías de campesinos (%)

Superficie con caña	Categorías de campesinos				
	Mano de obra familiar	Sin mecanización		Un tractor y mano de obra familiar	Otros
		Transitorios o contratista	Transitorios y contratista		
1-2	50	52,2	—	10,2	—
3-4	50	22,3	91,9	30,5	—
5	—	3,7	—	35,6	—
6-12	—	3,1	8,1	—	29,7
Total	100 (844)	100 (2.834)	100 (556)	100 (2.078)	100 (600)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Las tres cuartas partes del sector cultiva “hasta 5 ha” de caña. El subgrupo 1 no pasa de las 4 ha, en tanto el subgrupo 4 cultiva hasta 12 ha.

¿Qué subgrupos ocupan el estrato mayor de superficie: 13 a 20 ha?

La mayoría es parte del grupo de los “cañeros urbanos” (ver nota 10) y el resto pertenece a los grupos 2 y 3, es decir con predominio de trabajo contratado a terceros. No se registran cañeros que ocupan solo trabajo familiar.

Cuadro N° 15

Tareas para las que utiliza contratista y categorías de campesinos (%)

Utilización de contratista	Categorías de campesinos				
	Mano de obra familiar	Sin mecanización		Un tractor y mano de obra familiar	Otros
		Transitorios o contratista	Transitorios y contratista		
No utiliza	100	21,8	—	100	—
Utiliza para preparación del suelo	—	37,2	62,1	—	—
Utiliza para cosecha	—	—	37,9	—	—
Utiliza para transporte	—	11,2	—	—	—
Combinación de 2 o más (sin cos.)	—	29,8	—	—	14,8
Combinación de 2 o más (con cos.)	—	—	—	—	85,2
Total	100 (844)	100 (2.834)	100 (556)	100 (2.078)	100 (600)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

De la combinación de la información proporcionada por la encuesta, dedujimos que las pocas unidades que se ubican en el estrato alto de superficie con caña (unos 134 excluyendo a los cañeros urbanos) combinan, mayoritariamente, esta condición con la contratación de trabajo de terceros para las tareas mecanizadas (preparación del terreno, transporte y cosecha). Esta organización del proceso productivo se asemeja a la de los familiares capitalizados

(aunque no combinen estas condiciones con la posesión de máquinas). Representan el 2% de los campesinos y si profundizáramos el análisis encontraríamos, probablemente, que tienen más semejanzas con los “familiares capitalizados” (de origen campesino) que con el resto del conjunto campesino. Situación que da cuenta del dinamismo del proceso y que nos alerta sobre el peligro de tomar a las tipologías como cristalizaciones duraderas.

Cuadro N° 16

Cupo real y categorías de campesinos (%)

Cupo real	Categorías de campesinos				
	Mano de obra familiar	Sin mecanización		Un tractor y mano de obra familiar	Otros
		Transitorios o contratista	Transitorios y contratista		
1-5	75,0	44,7	—	20,3	20,3
6-15	25,0	37,3	37,9	40,6	40,6
16-20	—	—	37,9	20,3	20,3
21-25	—	11,2	16,1	5,1	5,1
26-30	—	—	—	5,1	5,1
31-47	—	3,7	8,1	8,6	8,6
48-99	—	3,1	—	—	—
Total	100 (844)	100 (2.834)	100 (556)	100 (2.078)	100 (2.078)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

En cuanto al tamaño del cupo, se observa en el Cuadro N° 16 que el 90% está ubicado en el estrato de cupos menores a las 25 t. El subgrupo 1 no pasa de cupos de 15 t, y nuevamente en el estrato de mayor tamaño se registran frecuencias de los “cañeros urbanos” y del subgrupo 2.

Es interesante comentar cómo se comporta el subgrupo 4 (mano de obra familiar y un tractor): si bien se concentran en “hasta 20 ha” se registran casos en casi todas las celdas. Este hecho, a nuestro juicio, da cuenta de las diferencias estructurales entre este subgrupo

y el 1, es decir que aunque ambos comparten la condición de usar solo mano de obra familiar, los que están mecanizados (indicador de algún nivel de excedente), han partido, mayoritariamente, de una mejor situación en cuanto a dotación de recursos.

El subgrupo 4 está integrado por unidades con mayores posibilidades de capitalización, la mecanización les permite aumentar la productividad. Como la cuotificación de la caña no les permite acrecentar esa producción, diversifican. Plantan tabaco y hortalizas.

Las variables jerarquizadas en la construcción de la tipología, están fuertemente relacionadas con la superficie y con el tamaño del cupo, aspectos relevantes dentro de la estructura productiva. Sin embargo no son correlaciones perfectas: la mayoría de las unidades campesinas presenta poca superficie y poco cupo, pero una pequeña proporción tiene superficie y cupo más grandes (Cuadro N° 17).

Cuadro N° 17

Tamaño del cupo según superficie total (%)

Cupos (toneladas)	Superficie				
	1 a 2 ha	3 a 4 ha	5 ha	6 a 12 ha	12 a 20 ha
1-5	70	38	—	29	—
6-15	30	29	75	29	—
16-20	—	29	—	—	—
21-25	—	4	—	30	—
26-30	—	—	12	—	29
31-47	—	—	13	12	14
48-99	—	—	—	—	57
Total	100 (2.111)	100 (2.199)	100 (845)	100 (1.445)	100 (312)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Si comparamos el Cuadro N° 17 —cupo y superficie— con los Cuadros N° 14 y 16, que relacio-

nan estas dos variables con la tipología, se deduce que el subgrupo 1 es el más homogéneo en relación con estas características: las frecuencias se concentran en las cuatro primeras celdas del Cuadro N° 17 (hasta 15 t de cupo y 4 ha).

Los desvíos en la diagonal del Cuadro N° 17 (superficie y cupos) pueden ser explicados por las diferencias de productividad, por distintas fertilidades de la tierra y por la posibilidad real de producir caña fuera de cupo. Las relaciones se establecieron por las respuestas de los entrevistados que *siempre* coincidían con lo que, legalmente, su cupo *le permite* y no con lo que produce de hecho. De todos modos sostenemos que no siempre a un cupo pequeño le corresponde poca superficie y viceversa.

De la información presentada podemos concluir que los aspectos laborales y técnicos usados para la delimitación del sector se relacionan fuertemente con las variables estructurales (tamaño y cupo). El subgrupo 1 es el más homogéneo en este nivel del análisis; allí se concentran los cañeros más pobres. Aquellas unidades donde se comprueba la aparición de componentes capitalistas (contratación de trabajo o mecanización) son más heterogéneas y presentan comportamientos más irregulares en estas variables.

Caracterización de la unidad doméstica¹¹

Boguslaw Galeski (1977) sostiene que la unidad de producción campesina se caracteriza por la fusión o, más exactamente, la identificación de la empresa con la economía doméstica del hogar familiar (ibídem: 47). Este argumento sigue siendo válido siempre y cuando tengamos presente que, en los procesos capitalistas, los grupos familiares campesinos complejizan sus comportamientos económicos y sociales.

Entre los campesinos cañeros se registra una marcada mayoría de familias de “tipo nuclear” (73%). Dentro de las unidades con familias de “tipo ampliadas”, predominan las integradas por padres grandes (mayores de 70 años y “cupohabientes”) que viven con hijos casados y varios niños pequeños.

El sistema de cupos también se ligaba con los papeles que desempeñaban los distintos miembros de la familia. El cupo se compra-

ba o se heredaba con la tierra; en general los campesinos accedían a él cuando fallecían los padres, mientras tanto vivían y trabajaban con ellos. En estos casos el anciano titular del cupo se asume como Jefe y los hijos o yernos lo reconocen como tal. Para la encuesta el “jefe” era el titular, siempre y cuando tomara las principales decisiones en relación a la organización productiva; en los casos de familias ampliadas la doble condición se cumplió en todos los casos.

En el Cuadro N° 18 presentamos las edades de los jefes; la mayoría tiene entre 51 y 70 años. El 22% tiene más de 70 años y solo el 17% tiene entre 30 y 50 años. Se trata de una población en proceso de envejecimiento.

Cuadro N° 18
Distribución de los jefes por edad

Edad del jefe	Número de productores	Porcentaje
30-40	422	9
41-50	389	8
51-60	1.477	31
61-70	1.462	30
71-80	422	9
+80	633	13

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

11 En este apartado los cuadros difieren de los del resto del artículo en la estimación del total de campesinos debido a que en algunos casos no fue posible recabar la información sobre el grupo familiar. En consecuencia, es válido sostener las tendencias que de ellos surgen, sin esperar que los valores absolutos (frecuencias de cada celda) estimen correctamente los parámetros poblacionales.

Se relacionó el “tipo de familia” con los subgrupos presentados anteriormente. En este caso nos interesaban solo dos categorías: los que usan solo mano de obra familiar (1 y 4) y los que contratan trabajo (2 y 3). Se buscó la relación entre tipo de familia y utilización de mano de obra familiar suponiendo que las familias ampliadas tienen mayor disponibilidad de trabajo familiar. Sin embargo, no se halló ninguna relación, o peor aún, prevalece la relación contraria (Cuadro N° 19).

Cuadro N° 19

Tipo de explotación campesina y tipo de familia (%)

Tipo de explotación campesina	Tipo de familia	
	Nuclear	Ampliada
Solo mano de obra familiar	47	24
Mano de obra familiar, asalariada y/o contratista	53	76
Total	100 (4.028)	100 (1.507)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Cuando efectuamos la misma relación con el número de miembros de la familia se registró cierta asociación entre “familias numerosas” y “trabajo familiar” y por otro lado “familias pequeñas (hasta 4 miembros)” y “contratación de trabajo ajeno” (diferencia porcentual del 13%, Cuadro N° 20).

Cuadro N° 20

Cantidad de miembros del grupo familiar y tipo de explotación campesina (%)

Tipo de explotación campesina	Grupo familiar	
	Hasta 4 miembros	5 y más miembros
Solo mano de obra familiar	33	46
Mano de obra familiar, asalariada y/o contratista	67	54
Total	100 (2.513)	100 (3.226)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Es evidente que no siempre las “familias ampliadas” tienen mayor disponibilidad de trabajo. Generalmente se trata de grupos donde conviven personas de avanzada edad con hijos pequeños. Por otro lado, los “grupos familiares”, tan frecuente en la utilización de los cupos, no necesariamente conviven. En muchos casos parte de la familia residía en el campo y parte en las ciudades cercanas.

Los miembros de las familias son mayoritariamente activos. Esto resulta de medir la proporción de la población activa (independientemente de la remuneración del trabajo) sobre la población total:

$$\text{Tasa de actividad (TA)} = \frac{\text{Población Activa}}{\text{Población Total}}$$

La cercanía al valor 1 indica una composición familiar adulta y activa, la cercanía al 0 muestra unidades con muchos niños, ancianos, o inactivos desalentados a trabajar por escasez de oportunidades ocupacionales en el área (“desocupados que no buscan trabajo”). Categorizamos una tasa entre 0,01 y 0,49 como baja (menos de la mitad de la familia está activa), y de 0,50 a 1 como alta.

Los niveles de la tasa de actividad de las unidades domésticas entrevistadas alcanza los siguientes valores: con tasas altas encontramos un 66% de unidades mientras que las tasas de actividad baja se registran en el 34% restante (Encuesta a productores, 1988).

Esta relación se corroboró aún más con otra tasa que midió el balance neto de fuerza de trabajo comprado-vendido y el aplicado a la unidad y que presentamos en el siguiente apartado.

Tasa de Patnaik (índice de balance de fuerza de trabajo)

Hasta este momento analizamos las diferencias internas del sector campesino jerarquizando básicamente la compra de fuerza

de trabajo. Sin embargo, cuando se integran componentes capitalistas al interior de la unidad campesina, pueden ocurrir diferenciaciones “hacia arriba” (unidades que mejoran su situación para generar y retener excedentes), pero también ocurren diferenciaciones “hacia abajo”. En su significado más clásico: la unidad no puede aportar a la reproducción familiar y productores y familiares salen a trabajar fuera de la unidad.

Tanto la capacidad de contratar trabajo ajeno como la obligación de vender trabajo, de “semiproletarizarse”, son relaciones de tipo capitalista que se van convirtiendo en componentes cuantitativos y medibles. Shanin (1978) sostiene que la medición del capitalismo dentro del campesinado es una de las preocupaciones centrales de las Ciencias Sociales contemporáneas y tiene que ver con el “proceso capitalista”, es decir con la focalización de los posibles mecanismos que este desarrolla para estabilizar, reproducir e incluso expandir economías y sociedades campesinas haciéndolas más explotables o marginándolas.

Para registrar las diferencias dentro del sector en relación, no solo a la *compra* de trabajo, sino a la *venta* de trabajo familiar utilizamos un índice elaborado por Utsa Patnaik para la India. Se trata de la medición del balance final en-

tre compra y venta de trabajo en relación al trabajo familiar aplicado a la unidad. Utilizamos la versión simplificada de la tasa, ya que la autora le agrega la relación entre tierra arrendada y tierra cedida, altamente relevante para la población objeto de su estudio, pero irrelevante para el caso tucumano donde toda la población es propietaria de las tierras.

La tasa representa un instrumento metodológico capaz de registrar el uso “neto” de fuerza de trabajo. Teodor Shanin, quien efectuó una interesante crítica al índice, sostiene que la relación entre trabajo vendido y comprado es altamente significativa e

[...] indudablemente central a cualquier intento de comprensión de la estructura y dinámica del capitalismo dentro de la agricultura campesina. En este sentido es indudable que “funcionará”, es decir ofrecerá una forma de estratificar las familias campesinas de una manera relevante al problema básico planteado. (1978: 152)

Tasa de balance de fuerza de trabajo

Se trata de registrar el “status” de clases de las unidades domésticas, desde el punto de vista del balance entre fuerza de trabajo contratada y ofrecida y el trabajo ocupada en ella (Patnaik, 1988).

La siguiente fórmula expresa la forma de medición utilizada:

$$E = \frac{(H_i - H_o)}{F}$$

Donde:

H_i: días de trabajo contratado para la explotación.

H_o: días de trabajo vendidos por la familia campesina.

F: días de trabajo totales ocupados por la familia en la unidad.

Todos en un ciclo agrícola anual.

Si el balance del numerador (H_i-H_o) da negativo (vende más trabajo del que compra), el resultado final es negativo. Los límites posibles son:

- E > 1: El balance da un margen tan importante de trabajo ajeno como propio dentro de la unidad. Patnaik los llama “campesinos ricos” y nosotros “transicionales”.
- 1 > E > 0: Menor cantidad de contratación de trabajo ajeno que propio: “Campesinos medios”.
- 0 > E > -1: El balance entre trabajo comprado y vendido es negativo, pero el trabajo para otros se da en menor escala que para la propia explotación: “Pequeños campesinos”.
- E > -1: El trabajo fuera de la explotación es más importante que el trabajo dentro de la

unidad: “Campesinos Pobres”, “Semiproletarios”, o “Semiasalariados”.

A diferencia de Patnaik, que en la India encuentra “semiproletarios”, es decir campesinos que trabajan como jornaleros de explotaciones capitalistas, en Tucumán la familia campesina sale a trabajar, en parte como jornaleros agrícolas o industriales, pero también como obreros o empleados en el sector de servicios, o empleos gubernamentales. En rigor a la verdad, se “asalarizan”, pasan a depender de salarios mensualizados a los que suman el ingreso cañero.

El interrogante que nos planteamos frente a los resultados de la información fue: este fuerte componente de trabajo fuera de la explotación es la clave para entender un proceso de descampesinización en marcha o para entender cómo, a pesar de las reiteradas crisis, persisten estas unidades.

La primera decisión tomada fue registrar todo tipo de trabajo realizado fuera de la unidad por cualquier integrante del grupo doméstico. La recesión económica del capitalismo argentino ha limitado la incorporación de población al sector industrial (con excepción de las regiones favorecidas por el régimen de promoción industrial), y por otro lado, la mecanización de las tareas agrícolas hace lo propio para las actividades agropecuarias. Las posibilidades

laborales para los sectores de bajos ingresos en la mayoría de las provincias se presentan en los sectores de servicios, fundamentalmente en los organismos públicos y en tareas cortas y mal pagas (“precarias”).

Cuadro N° 21
Estratos campesinos según la Tasa Patnaik

Estratos	Frecuencias	Porcentajes
A: Transicionales (E > 1)	422	7
B: Medios (E entre 0 y 0,99)	1.084	17
C: Pequeños (E entre 0 y -0,99)	2.289	36
D: Semiasalariados (E < -1)	2.517	40
Total	6.312	100

Fuente: Encuesta a productores cañeros, 1988.

El 53% de los productores presenta un comportamiento campesino “clásico”, es decir un predominio de trabajo familiar aplicado a la unidad productiva (B y C). Los ubicados en la categoría B, están en mejores condiciones de asegurar la reproducción familiar (17%) en tanto en la categoría C la reproducción comienza a depender del trabajo vendido fuera de la explotación (entre 0 y -1,36%).

Un escaso 7%, está en mejores condiciones que el resto para generar excedentes, aunque

no haya realizado inversiones en maquinarias, lo cual lo hubiese colocado en la categoría de los “Pequeños Productores Capitalizados”.

Pero sin duda, lo más significativo de este análisis es haber hallado un 40% de unidades que arroja un balance negativo de fuerza de trabajo. Es decir que lo que predomina es la venta de trabajo familiar y como veremos, en muchos casos en forma permanente.

¿Cómo interpretar esta información? Estamos realmente frente a un 40% de campesinos *pobres*? ¿Salir a trabajar significa que agotaron todas las posibilidades como familia agricultora?

Cruzamos los resultados de la Tasa con la Tipología presentada en la primera parte. Ambos índices utilizan un mismo tipo de información: tipo de mano de obra usada en la unidad. Pero en la tasa se toma también la venta de trabajo, y en la tipología el grado de mecanización, es decir existen mediciones de atributos semejantes y diferentes. Se combinaron los índices tanto para integrar más elementos en la comprensión de los comportamientos campesinos como para medir el grado de correspondencia entre los atributos escogidos.

El “supuesto” teórico utilizado en la bibliografía especializada de la década del setenta indicaba que el nivel de mecanización y la con-

tratación de trabajo asalariado representaban buenos indicadores de la capacidad de generar excedentes y que las unidades excedentarias no necesitaban vender trabajo. Esto generalmente era así, excepto en algunos casos de agricultura *part-time* que se presentaban en países desarrollados como Italia (Brusco, 1978).

Pero los campesinos se integran a las nuevas condiciones del capitalismo, son agentes económicos flexibles; como plantea González de Olarte (1988) tienen una gran adaptabilidad a situaciones nuevas. Frente a las políticas de la crisis, de los planes de ajuste, del endeudamiento los campesinos cañeros buscaron diversas salidas, entre ellas la de combinar ocupaciones. La “multiocupación” les permite subsistir, pero también progresar: aumentar el cupo, comprar una o dos hectáreas más.

Como observamos en el Cuadro N° 22, cañeros que venden considerable cantidad de trabajo fuera de la explotación compran trabajo para su finca; y cañeros que poseen tractores, también venden trabajo en proporciones importantes. Otra ocupación, salarios extras, no son necesariamente, indicadores de empobrecimiento. En algunos casos la “multiocupación” familiar permite mecanizarse, pagar salarios o educar a los hijos.

Cuadro N° 22

Tasa de Patnaik y categorías de campesinos

Categorías de campesinos	Tasa de Patnaik				
	Mano de obra familiar	Sin mecanización		Un tractor y mano de obra familiar	Total
		Transitorios o contratista	Transitorios y contratista		
Transicionales	—	422	—	—	422
Medios	—	617	45	422	1.084
Pequeños	211	633	—	1.445	2.289
Semiasalariados	633	1.162	511	211	2.517
Total	844	2.834	556	2.078	6.312

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Tanto para subsistir como para mejorar, de acuerdo al aprovechamiento de ciertas condiciones, se necesita un gran esfuerzo familiar. Las entrevistas dan cuenta de que existe una gran voluntad para permanecer en la actividad cañera: se desea y valora la condición de cañero. Dejar de ser cañero implica varias cosas: levantar el cañaveral, perder el cupo (deseado por otros campesinos), y sobre todo perder una actividad cuyo proceso laboral le permite realizar otras actividades.

El trabajo fuera de la explotación, esta “multiocupación” que aparece en los datos, adquiere el significado de otra estrategia de reproducción de su finca, y no el paso previo al abandono de la agricultura.

Los campesinos diversifican sus actividades, como hace el resto de los agentes productivos del capitalismo. Encuentran una diversidad de estrategias que les permiten subsistir, y en algunos casos crecer y mejorar.

En definitiva, en Tucumán el trabajo fuera de la explotación está relacionado tanto con la necesidad de sumar ingresos familiares como con la de contar con un fondo adicional a la gestión productiva.

*Trabajo de la familia campesina:
la multiocupación*

Estas distintas posibilidades del significado del trabajo extra-predial están fuertemente

relacionadas con tipo y frecuencia de estas tareas. Es muy probable que los “campesinos-jornaleros golondrinas” necesiten el salario extra para alimentar a la familia y subsistir, en tanto que esos otros que trabajan todo el año en la administración pública sumen ingresos para una más eficiente organización de sus unidades doméstico-productivas.

La información registrada por la encuesta y la que proviene de las entrevistas permitió encontrar ciertas relaciones significativas que a la luz de los testimonios de los actores contribuyen a hacer comprender la naturaleza y el significado del trabajo extra-predial dentro de la unidad doméstica.

En el Cuadro N° 23 se muestra que en el 14,8% de las unidades, el jefe o algún miembro tienen algún trabajo *estable* externo al predio y en el 28,9% de las unidades, las tareas extra-prediales son de tipo *transitorio*.

Cuadro N° 23

Distribución de las explotaciones campesinas según niveles de asalarización externa de los miembros y percepción de ingresos de miembros migrados

Asalarización externa	Cantidad de unidades	Porcentaje
Jefe, asalariado permanente	406	6,4
Algún miembro asalariado permanente	1.822	8,4
Jefe o miembro asalariado transitorio	1.822	28,9
Giros enviados por ex-miembros	1.583	25,1
Percibe solo ingreso de explotación	1.972	31,2
Total	6.312	100,0

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Veamos el caso de esta anciana cañera: vive en Monteros, a 12 cuadras del camino, para llegar es necesario pasar por otras fincas. Se define como “cañera” aunque parte de sus ingresos provienen del trabajo como costurera. Sus padres eran cañeros como ella, desde comienzos de siglo. Trabaja con un hermano tan viejo como ella (setenta y pico de años). Antes hacían juntos un poco de tabaco, ya no lo hacen, es mucho trabajo. Levantan la caña a mano, usan tractor solo si algún amigo o pariente pasan y les hacen algo, no contratan mano de obra, reciben trabajo por ayuda de vecinos. Le venden por maquila priva-

da al ingenio para recibir plata de entrada, luego se arregla con sus trabajos para afuera.

En el Cuadro N° 24 presentamos el tipo de actividad y de mercado laboral, así como la estabilidad de la tarea.

Cuadro N° 24

Distribución de la población campesina según tipo de ocupación y estabilidad de la misma (%)

Tipo de ocupación y estabilidad	% sobre total de población campesina que trabaja fuera de la unidad	% sobre total de población activa
Asalariados permanentes en servicios	28,0	9,6
Asalariados transitorios en caña	42,3	14,5
Asalariados transitorios en otras actividades agropecuarias	12,9	4,4
Asalariados transitorios en servicios	7,5	2,6
Contratistas y cuenta propia	9,4	3,2
Mano de obra familiar	—	65,7
Total	100,0 (5.619)*	100,0 (16.360)**

* Total de ocupados campesinos con doble ocupación.

** Total de población activa.

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Aparece una alta proporción de población activa: 57,3% (16.360 personas en actividad sobre un total de 28.552 estimadas por la encuesta), alta proporción, típica de sectores donde desde edades tempranas e independientemente del sexo se colabora tanto en trabajos en la finca, como en otras actividades que permiten obtener ingresos adicionales. De esta población activa, un 34,3% (5.619) tiene alguna ocupación extrapredial, además de la que desarrolla en la chacra.

Es cañero desde 1950, su padre era cañero pero le quitaron el cupo en la crisis de 1966. Va todos los años a la cosecha de tomate a Río Negro. Cuenta que antes mandaban camiones a buscarlos pero este año tuvo que pagarse el pasaje, con ese gasto y la comida, volvió sin plata. Un hijo trabaja en Buenos Aires pero vuelve para la época de zafra, su otro hijo solo trabaja de cosechero en Tucumán. Los hombres de la familia pasan poco tiempo todos juntos, cuando lo hacen hablan de los problemas del INTA con las semillas —que las dan gratis pero hay que pagarse el flete— de UCIT, o de las cooperativas cañeras.

Este grupo “semiproletarizado” realiza ciclos ocupacionales fuera de la provincia: como vimos, participan de la cosecha de tomate en Río Negro, levantan papas en Balcarce o van a la

vendimia en San Juan o Mendoza. Todas son actividades de verano que coinciden con el ciclo de baja demanda técnica de trabajo en la producción de caña.

Por último, otro grupo de transitorios y una parte importante de los “cuenta propia”, se incorporan al mercado informal urbano: hacen changas en la construcción, venden artesanías y productos de granja (huevos, aves, hortalizas).

R. G. tiene 46 años y desde 1966 es productor de caña. Actualmente es propietario de 6 ha que las dedica a la caña. Posee además un tractor que lo utiliza, tanto para arar y preparar la tierra como para trasladarse. Con el tractor lleva su caña al cargadero más cercano. Su cañaveral tiene en promedio 5 años, renueva periódicamente y tiene adecuada información sobre variedades y técnicas de siembra. Su familia está compuesta por la esposa y cinco hijos de 18; 17; 15; 12 y 1 años. Su hijo mayor está contratado en una empresa —a la que viaja diariamente— como ayudante mecánico y tanto el jefe como los hijos de 15 y 12 años (la de 17 es una joven) salen a cosechar alrededor de 60 jornales anuales. Los ingresos provenientes de estas actividades son claramente contabilizados por el jefe como extraprediales.

Le preocupa el actual sistema de cupos, insistió acerca de la necesidad de redistribuir los cupos: “necesitamos más cupo”, “mi cupo actual no cubre”.

Antaño contaba con un cupo de 400 t, estaba mucho mejor ya que los niños eran pequeños y su trabajo en la finca rendía. Salió por necesidad, pero insiste en su condición de cañero.

En este caso, el trabajo fuera de la explotación ayuda al campesino a mantener a la familia y conservar la esperanza de que alguna vez podrá vivir de la caña. Su problemática principal gira alrededor de la caña, presenta una fuerte identidad campesina y el trabajo extra-predial es vivido como una necesidad transitoria.

J. R. tiene 52 años, es propietario de 3 ha y de un cupo de 7 t; es productor desde 1975, año en que heredó la tierra y el cupo. Cultiva papas y tiene algunas aves para el autoconsumo, espera poder sembrar algo de maíz el año entrante. Contrata trabajo de terceros y maquinarias para arar y preparar la siembra y para el traslado de la caña al cargadero cercano. Sin embargo, su trabajo más importante por la cantidad de horas dedicadas, es el de cuidar un pozo de Obras Sanitarias de la Nación. Es un empleo permanente, mensualizado y según declara el mismo cañero trabaja en el campo en “los ratos libres, 2 o 3 veces a la semana”.

La familia está compuesta por la esposa, una hija de 23 años, otro hijo de 12 y el yerno de 35 que es obrero permanente de la empresa de electrificación rural. El grupo familiar recibe, además,

giros en dinero y en especies que mandan los hijos migrados.

J. R. se queja fuertemente de su condición de campesino, insiste “estamos embromados”, sin embargo no plantea levantar el cañaveral. Tampoco piensa dejar la agricultura o vender la tierra, se declara agricultor “medio-tiempo”, pero sabe que esta condición lo ayuda a seguir adelante y como R. G. (el semiproletario anterior) seguirá siendo cañero.

Estas entrevistas son representativas de las vidas de estas familias dentro del estrato de población cañera que vende trabajo. En el segundo testimonio hay elementos objetivos que preanunciarían un proceso de descampesinización. Pero no es así: esta y otras familias en la misma situación mantienen los cupos, mantienen la producción de la finca y también salen a trabajar.

La combinación de salarios, el cupo cañero, y el pequeño reaseguro de la tierra componen estrategias de acción para estas familias tucumanas. Además, la unidad doméstica, suele ser el lugar donde los miembros migrados regresan en situaciones de desocupación prolongadas, enfermedad o muerte.

Muchas familias campesinas tienen miembros migrados, muchos de ellos siguen mante-

niendo un estrecho lazo: mandan giros, vuelven transitoriamente. o mandan a sus hijos. En el Cuadro N° 23 se observa que el 25% de las unidades reciben giros de miembros migrados, estos ingresos junto a otros provenientes de la seguridad social (pensiones y jubilaciones) son otros componentes que permiten el mantenimiento de estas unidades.

Don A. S. es muy viejo, no recuerda cuantos años tiene. Con él viven un hijo soltero, retrasado mental, y una de sus hijas, con la familia: su esposo y cinco de sus siete hijos. Los dos niños más pequeños están internados en la casa cuna de Tucumán. “Son muchas bocas y pocos brazos” sostiene. El cupo es pequeño (4 t), los niños no pueden ayudar. El yerno del jefe trabaja todo el año de jornalero y otros hermanos que viven en Buenos Aires mandan giros cada tanto. Reciben ayuda alimentaria.

La situación familiar de A. S. no podría sostenerse sin la internación de los niños (presentaban cuadros de desnutrición) sin la ayuda alimentaria y sin los giros de los familiares que consiguieron trabajo en Buenos Aires. No es representativa de los cañeros en general, pero sí de los “cupohabientes” ancianos. En este caso, sus hijos viven con él, en otros, la situación de precariedad alcanza al anciano con su esposa.

Entre los más pobres se dan migraciones por relevos, a pesar de las largas ausencias de los miembros, mandan dinero y casi siempre vuelven:

R. C. tiene 58 años, vive con su esposa de 48 años, su hija de 15 y un hijo de 10. En 1968 heredó la tierra con el cupo, la sucesión nunca se regularizó. Maneja 5 ha, 3 las dedica a la caña para cubrir un cupo de 4 t. En la tierra libre su esposa y él cultivan hortalizas y producen aves, cerdos y tienen una cabra, todo para el autoconsumo. Contrata un tractor para el arado y transporte de su caña, el resto de las tareas las hacen él y sus hijos. Al terminar la zafra R. C. se va, todos los años, cuatro meses a la vendimia de San Juan. En esos meses, Dominga, su esposa, queda al cuidado de la finca y de los niños. Cuando el productor regresa, ella se va a Buenos Aires y trabaja de sirvienta: se queda todo el ciclo de la zafra (junio-diciembre) o sea el tiempo en que su esposo reside en Tucumán.

Esta entrevista da cuenta del complejo funcionamiento de las unidades más pobres: ausencias, combinaciones de trabajos rurales y urbanos. Dominga divide su existencia entre un medio rural pobre y el Buenos Aires próspero de los sectores que contratan sirvientas. Los niños no logran ver más que un par de meses a sus dos padres juntos. En algunos casos vuel-

ven con dinero pero en muchos otros la sobrevivencia y los viajes acabaron con todo.

La relación más clara que encontramos es entre el nivel de *precariedad* del trabajo y tipo de campesinos. Los más pobres encuentran trabajos inestables, deben recorrer grandes distancias, y no les queda dinero para ahorrar, en tanto los “excedentarios” suelen combinar la condición de cañeros con trabajos permanentes en servicios o en la administración.

El último testimonio refleja, precisamente, esta relación entre tipo de empleo y nivel de cañero. V. M. está entre los mejores ubicados:

V. M. posee 8 ha, tres de las cuales las adquirió este año. Tiene un cupo de 6 t y declara que llegó a tener el doble. Tiene mucha caña excedente que vende a otros cañeros. Tiene producción para el autoconsumo: maíz, 2 vacas y 3 caballos; es propietario de un tractor de 55 HP con el que realiza las tareas de preparación del terreno y transporte de caña. V. M. trabaja todo el año, jornada completa en la comuna, es Delegado Comunal, su hijo trabaja también allí. Sin embargo se autodefine como cañero, pertenece a UCIT, a una cooperativa y se interesa por las perspectivas de la caña. Se autodefine como un agricultor.

En definitiva, los cañeros puros son pocos, los campesinos persisten porque desarrollaron

formas mixtas de producción, porque se agruparon en diversas asociaciones y porque desarrollaron un complejo sistema “multiocupacional” donde se combinan mercados laborales, rurales y urbanos.

El ingreso cañero¹²

La tarea de reconstrucción del ingreso campesino presentó serias dificultades: como en todas las mediciones de ingreso anual, hubo un primer problema relacionado con el “recuerdo de la información”, que se agrava aún más en períodos de inflación acelerada, cuando los parámetros monetarios están en constante movimiento.

La explotación campesina, aparentemente sencilla en su organización, suele encubrir una amplia gama de estrategias de producción y de sobrevivencia de las familias. Como acabamos de ver, los cañeros no escaparon

a esta tendencia y resultó una tarea compleja reconstruir el ingreso y sus componentes. Por esta razón no fue posible efectuarla para todo el sector campesino: la información ofrecida para algunos aspectos del ingreso, señala tendencias pero no estima mediciones para el total de la población.

En primer lugar obtuvimos los ingresos originados en la producción cañera a partir de la estimación de la venta de caña para azúcar en cada explotación. Se estimó el ingreso promedio mensual a partir del cupo, y el precio promedio de dos meses de referencia: mayo y junio de 1988.

¿Qué era esperable hallar en relación con este aspecto del ingreso?

La caña es un cultivo perenne, renovable cada 5 o 6 años; la tierra destinada a su producción está inhabilitada de producir complementariamente a su calendario. Por lo tanto el ingreso debería asegurar al productor la reproducción de la unidad contemplando el período de inactividad. Esto es, proporcionar ingresos semejantes al salario mínimo legal para todos los miembros familiares participantes en el cultivo y un fondo de reposición que permitiera comenzar ciclo a ciclo la operatoria, teniendo en cuenta además que en muchas unidades aparece contratación de asalariados o pagos de servicios contratados. Además, dadas las caracterís-

12 Quisiéramos aclarar que el ingreso de los cañeros campesinos está estimado sobre las condiciones de la actividad en 1987-1988. En tal sentido fue un año excepcionalmente bueno y, a la luz de los años posteriores, no pueden tomarse las cifras como representativas del ingreso regular. Sin embargo creemos importante incluirlo en esta nueva presentación del trabajo, porque da cuenta de cómo una política pública (el decreto de maquila) puede ser a la vez menos estatista y favorecer a los sectores subalternos.

ticas de algunos estratos, también era esperable encontrar excedentes a esos básicos.

Para establecer esta relación comparamos los ingresos estimados con los salarios del peón rural y el mínimo legal para los meses de referencia:

Cuadro N° 25

Distribución de las unidades campesinas según ingresos promedios mensuales provenientes de la venta de caña (en %)

Ingresos Mensuales (en A)*	Mayo	Junio
Hasta 520	6,7	6,7
521 a 680	3,3	—
681 a 800	—	3,3
801 a 1040	13,4	13,4
1041 a 1360	16,7	13,4
1361 a 1600	5,0	8,4
1601 a 2080	11,7	11,7
2081 a 2720	3,3	6,7
2721 a 3200	6,7	3,3
3201 a 4160	10,0	10,0
4161 a 5440	14,8	14,8
5441 y +	8,3	8,3
Total	100 (6.312)	100 (6.312)

* Salarios utilizados como parámetro:

Salario mínimo: \$520 (mayo), \$680 (junio) / Salario de Peón Rural: \$520 (mayo), \$800 (junio)

Fuente: Encuesta a productores, 1988; DNA y FATRE.

Esta metodología de estimación de ingresos cañeros tiende a sobrestimar el monto. Supone que todos los productores vendieron en el mismo momento y al precio promedio de mercado. Sin embargo, no todos los campesinos venden por maquila oficial y al precio de mercado, los más pobres venden caña en pie, por maquila privada o por ley. Por otro lado, las operaciones del pesaje y control de contenido de sacarosa en los cargaderos no parecieran estar supervisadas particularmente a favor de los campesinos. Además, en este cálculo estamos suponiendo que los productores (a través de los entes comercializadores) venden 1/12 parte de su producción mes a mes, cuando en realidad en algunos meses las cuotas de venta al mercado interno son mayores y los precios en esos momentos tienden a bajar (Entrevista a DNA). Por último, debemos aclarar que este cálculo estima el ingreso bruto, es decir sin descontar los gastos de producción.

En primer lugar, observamos que la mediana de ingresos se ubica en 1800 A, es decir cercana a los cuatro salarios básicos en mayo, pero en el mes de junio, donde la mediana sigue siendo la misma, pasa a representar 2,6 salarios mínimos y 2,3 salarios del peón rural. Es decir que si se descontaran los

egresos monetarios incurridos en la producción, estas familias percibirían dos salarios mínimos de las categorías ocupacionales de menor calificación.

Si recordamos que la encuesta estima 16.360 personas activas en el sector campesino cañero, resulta que en promedio cada unidad campesina tendría 2,6 miembros de la familia trabajando en la explotación. Por lo tanto, a partir de ese punto (1800 A) el 50% superior de las unidades tomadas en el análisis de los ingresos, retribuye la mano de obra familiar empleada en el ciclo productivo y en el no productivo; más allá de este límite reflejaría la existencia de un “excedente” a los gastos de producción.

Pero es importante analizar el otro 50% por debajo de los 1800 A, es decir unidades con menos de 2,6 salarios mínimos en el mes de junio. Si relacionamos estas proporciones con el hecho de que el salario mínimo legal generalmente no cubre la canasta familiar básica, y que los campesinos tucumanos son importadores netos de alimentos, se entiende la causa de la asalarización de aquel 40% de unidades vendedoras netas de trabajo.

Cuadro N° 26

Distribución de unidades campesinas según ingresos total promedio mensual (incluye ingresos por caña y otros ingresos)

Categorías de ingresos (A)	Ingreso promedio del mes de mayo
Hasta 520	—
521 a 1040	28,0
1041 a 1560	4,7
1561 a 2080	14,0
2081 a 2600	4,7
2601 a 3120	14,0
3121 a 3640	9,3
3641 a 4680	—
4681 a 5200	9,3
+ de 5200	15,9
Total	100 (4.518)

Fuente: Encuesta a productores, 1988.

Incorporamos los ingresos anuales (a valores constantes del mes de mayo de 1988) provenientes de la venta de otras producciones; los ingresos obtenidos por la venta de fuerza de trabajo y los aportes provenientes de beneficios sociales (jubilaciones y pensiones) y aquellos registrados como “giros en dinero”.

Observamos que, incorporando los otros componentes del ingreso campesino, la media-

na pasa a ser 2,450 A, es decir casi cinco salarios mínimos.

En cuanto a la producción de autoconsumo, solo un 13% de las unidades presenta una superficie equivalente a más del 25% del área cultivada. Sin embargo, todos tienen alguna producción para el consumo doméstico, aunque más no sea algunas aves. Como decíamos, Tucumán es una provincia importadora de alimentos, por lo tanto, muchos productos básicos tienen que ser comprados porque, o no se dan por razones agronómicas o no existe la tradición de producirlos en la provincia. El ingreso monetario es indispensable para el campesino tucumano.

Por último, en relación con los ingresos cañeros, querríamos presentar un informe reciente (octubre de 1994), producido por el Programa Social Agropecuario en Tucumán. Este señala que para un productor familiar capitalizado (un tractor, 7 ha de caña) el ingreso bruto anual proveniente de la caña es de \$6.489,77 y el ingreso neto de \$2.317. Estos datos mostrarían en comparación con los nuestros, que se ha reducido el ingreso de los productores en forma significativa: el ingreso bruto de este productor estaría en dos salarios mínimos mensuales. La situación empeora al tomar el ingreso neto, este se reduce a menos de un salario mínimo mensual. En el sector

campesino, este nivel de ingresos es significativamente inferior, dado que tiene menor producción de caña y menor diversificación de actividades.

BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio, S. y Tort, M. I. 1980 *La producción agropecuaria y su relación con el mercado de trabajo rural: estudios de casos de desequilibrio* (Buenos Aires: CEIL) Informe de Investigación N° 2.
- Arroyo, G. 1979 "Firmas transnacionales agroindustriales. Reforma agraria y desarrollo rural" en *El desarrollo agroindustrial y la economía internacional* (México DF: SARH-CODAI) Documento de trabajo para el desarrollo agroindustrial N° 1.
- Azpiazu, D. et al. 1986 *El nuevo poder económico* (Buenos Aires: Legasa).
- Balán, J. 1976 "Migraciones, mano de obra y formación de un proletariado rural en Tucumán, Argentina, 1879-1914" en *Demografía y Economía* (México DF) Vol. X, N° 2.
- Balán, J. 1978 "Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales

- y el mercado nacional en el desarrollo agroexportador” en *Desarrollo Económico*, N° 69, Vol. 18.
- Bartra, A. 1979 *La exploración del trabajo campesino por el capital* (México DF: Macehual).
- Bilbao, S. 1972 “El minifundio cañero de Tucumán”, trabajo presentado al Seminario sobre identificación y análisis del problema del minifundio en la Argentina, IICA-Zona Sur (Famaillá: INTA-EERA).
- Blume, H. 1985 *Geography of Sugar Cane. Environmental, Structural and Economics Aspects of Cane Sugar Productions* (Berlín: Dr. Albert Bartens).
- Bourdieu, P. 1988 *Cosas dichas* (Buenos Aires: Gedisa).
- Bousquet, A. et al. 1882 *Memoria histórica y descriptiva de la Provincia de Tucumán* (Buenos Aires: M. Biedma editor).
- Boyer, R. 1980 *La teoría de la regulación: un análisis crítico* (Buenos Aires: Humanitas).
- Brusca, S. 1979 *Agricultura ricca e classi sociali* (Milán: Feltrinelli).
- Caballero, J. M. 1980 *Campesinos y Farmers: Desarrollo capitalista y tipos de empresa agraria* (Roma: s/d) mimeo.
- Canitrot, A. y Sommer, J. 1972 *Diagnóstico de la situación económica de la provincia de Tucumán* (Buenos Aires: ITDT) Documento de trabajo N° 67.
- Carrasco, G. 1894 *La producción y el consumo de azúcar en la República Argentina* (Buenos Aires: Peuser).
- CEPA 1984 *La economía del azúcar en la década del '70* (Buenos Aires: CEPA).
- CEPAL 1985 *Principales consecuencias socioeconómicas de la división regional de la actividad agrícola* (Buenos Aires: CEPAL) Documento de Trabajo N° 17.
- CFI 1988 *Programa: Determinación de espacios diferenciados. Actividades productivas: Caña de azúcar* (Buenos Aires) Vols. I y II.
- Clapp, R. 1988 “Representing Reciprocity, Reproducing Domination: Ideology and Labour Process in Latin American Contract Farming” en *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 16, N° 1.
- Craviotti, C. 1989 “Campesinos y farmers en situaciones de crisis: la Unión Cañeros Independientes de Tucumán y la reconversión azucarera”, tesis de maestría en Ciencias Sociales.
- De Janvry, A. 1981 *The agrarian question and reformism in Latin American* (Baltimore / Londres: The Johns Hopkins University Press).

- Delich, F. 1970 *Tierra y conciencia campesina en Tucumán* (Buenos Aires: Signos).
- Feder, E. 1979 "Agronegocio y la eliminación del proletariado rural de América Latina" en *El desarrollo agroindustrial y la economía internacional* (México DF: SARH-CODAI).
- Gaignard, R. 1964 "Une spéculation tropicale en crise: les plantations de canne a sucre de Tucumán (Argentine)" en *Les cahiers d'outre mer*, Tomo XVII, pp. 245-291.
- Galeski, B. 1977 *Sociología del campesinado* (Barcelona: Península).
- García, R. 1986 "Conceptos básicos para el estudio de los sistemas complejos" en Leff, E. (coord.) *Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo* (México DF: Siglo XXI).
- Giarracca, N. (comp.) 1994b *Acciones colectivas, organizaciones cooperativas. Reflexiones y estudios de caso* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, Bibliotecas Universitarias).
- Giarracca, N. 1985 "Complejos agroindustriales y la subordinación del campesinado. Algunas reflexiones y el caso de los tabacaleros mexicanos" en *Estudios Rurales Latinoamericanos*, Vol. 8, N° 1, enero-abril.
- Giarracca, N. 1990 "El campesinado en la Argentina. Un debate tardío" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 94.
- Giarracca, N. 1993a "Campesinos y Agroindustria en los tiempos del Ajuste. Algunas reflexiones para pensar la relación con especial referencia a México y Argentina" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 114-115.
- Giarracca, N. 1994a "Conflicto y negociación en los nuevos escenarios económicos. La primera zafra cañera después de la desregulación, Tucumán, Argentina", ponencia presentada al IV Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Chile.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 *Los campesinos cañeros, multiocupación y organización* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones, UBA) Cuaderno N° 3.
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1993a "El día en que la Plaza de Mayo se vistió de Campo" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 118.
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1993b "La integración con Brasil y los pequeños productores cañeros" en *Ciclos* (Buenos Aires) N° 5.
- Giddens, A. 1987 *Las nuevas reglas del método sociológico* (Buenos Aires: Amorrortu).

- Gillespie, R. 1987 *Soldados de Perón, los Montoneros* (Buenos Aires: Grijalbo).
- Glover, D. 1984 "Contract Farming and Smallholder Out grower Schemes in Less-developed Countries" en *World Development*, Vol. 12, N° 11-12, noviembre-diciembre.
- Glover, D. 1987 "Increasing the Benefits to Smallholders from Contract Farming: Problems for Farmer's Organizations and Policy Makers" en *World Development*, Vol. 15, N° 4.
- Goldberg, R. 1981 "The role of the multinational corporation" en *American Journal of Agricultural Economics*, Vol. 63.
- Goldsmith, A. 1985 "The Private Sector and Rural Development: Can Agribusiness Help the Small Farmer" en *World Development*, Vol. 13, N° 10/11, octubre-noviembre.
- Gonzales de Olarte, E. 1988 "Modernización a paso de tortuga. El campesinado en el Perú" en *Nueva Sociedad*, N° 96.
- González Lelong, A. y Cárdenas, G. s/f "Evolución de la agroindustria en el país y en Tucumán" en *La industria azucarera* (Buenos Aires).
- Hobsbawm, E. 1976 *Los campesinos y la política* (Barcelona: Anagrama)
- Cuadernos de Anagrama, Serie Sociología y Antropología, N° 128.
- Huici, N. y Jacobs, E. 1989 *Agroindustrias argentinas de alimentos, Diagnósticos y perspectivas* (Buenos Aires: CISEA).
- Iñigo Carrera, N. 1988 *La violencia como potencia económica* (Buenos Aires: Cuadernos de CICSO, Serie Estudios N° 61).
- Kostzer, D. 1989 "Cupo azucarero, una forma de redistribuir la renta en el sector agroindustrial cañero-azucarero" en *Realidad Económica*, N° 87.
- Lappe, F. y Collins, J. 1977 *Food First: Beyond the Myth of Scarcity* (Boston: Houghton Mifflin).
- Lasa, C. 1989 "Apuntes sobre un proceso de mediación política. El movimiento rural y las Ligas Agrarias chaqueñas", ponencia presentada al Congreso Nacional de Antropología, Salta.
- León, C. 1974 "Desarrollo socioeconómico de un área de colonización en 'La Florida', Departamento Cruz Alta, Tucumán, estructurado en base a unidades agrícolas familiares" (Horco Molle: Universidad Nacional de Tucumán) mimeo.
- León, C. 1988 "Una nueva crisis azucarera de mayor profundidad" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 82.

- Llambí, L. 1981 "Las unidades de producción campesina en un intento de teorización" en *Estudios Rurales Latinoamericanos* (Bogotá) Vol. 4, N° 21, mayo-agosto.
- Llambí, L. 1988 *La moderna finca familiar* (Caracas: Acta Científica Venezolana).
- López, M. 1988 *Antecedentes y perspectivas de la actividad agroindustrial azucarera* (Famaillá: INTA).
- Marechal, C. 1983 *La gran burguesía comercial y financiera de Buenos Aires (1860-1914). Tipología de cinco grupos* (México DF) mimeo.
- Meillassoux, C. 1978 *Mujeres, graneros y capitales* (México DF: Siglo XXI).
- Murmis, M. 1980 *Tipología de pequeños productores campesinos en América Latina* (Costa Rica: PROTAAL) Documento N° 55.
- Murmis, M. y Waisman, C. 1969 "Monoproducción agroindustrial, crisis y clase obrera: la industria azucarera tucumana" en *Revista Latinoamericana de Sociología* (Buenos Aires) Vol. 15, N° 69/2.
- Patnaik, U. 1988 "Ascertaining the Economic Characteristics of Peasant Classes in Themselves in Rural India: A Methodological and Empirical Exercise" en *The Journal of Peasants Studies* (Londres) Vol. 15, N° 3.
- Ponce, J. L. y Haro, M. s/f *Incidencias económicas de la mecanización en la cosecha de la caña de azúcar* (Famaillá: INTA).
- Pucci, R. 1989 *La élite azucarera y la formación del sector cañero en Tucumán (1880-1920)* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, colección Conflictos y Procesos de la Historia Argentina Contemporánea N° 37).
- Riveiro, G. 1989 "La persistencia del campesinado cañero tucumano", informe final, beca de UBACYT (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires) inédito.
- Riveiro, G. 1991 "Producción familiar y acumulación de capital: el caso de los cañeros tucumanos", informe final, beca de UBACYT (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires) inédito.
- Rojas, F. 1938 "Los productores de azúcar" en *Argumentos* (Tucumán).
- Rosenzvaig, E. 1987 *Historia social de Tucumán y del azúcar* (Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán).
- Rutledge, I. 1987 *Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy: 1550-1960* (Tilcara / Buenos Aires: ECIRA (ITT-MLAL) / CICSO).
- Sabalain, C. y Reboratti, C. s/f "Vendimia, zafra y alza: migraciones estacionales en la

- Argentina” en Lattes, A. (comp.) *Migración y Desarrollo* (Buenos Aires: CLACSO) N° 6.
- Santamaría, D. 1986 *Azúcar y sociedad en el noroeste argentino* (Buenos Aires: Ediciones IDES) N° 11.
- Schleh, E. 1921 *La industria azucarera en su primer centenario* (Buenos Aires: Ferrari Hnos.).
- Seoane, M. 1992 *Todo o nada* (Buenos Aires: Planeta).
- Shanin, T. 1975 “Peasantry as a political factor” en Burns, T. (ed.) *Peasants and Peasant Societies* (Londres: Penguin Books).
- Shanin, T. 1978 “La medición del capitalismo dentro del campesinado” en *Estudios Rurales Latinoamericanos*, Vol. 1, N° 2.
- Sidán, E. 1988 “La Liga de las Cooperativas, una experiencia solidaria” en *IDELCOOP*, N° 58, julio-septiembre.
- Sigal, S. 1970 “Crisis y conciencia obrera: la industria azucarera tucumana” en *Revista Latinoamericana de Sociología* (Buenos Aires) N° 70/1.
- Slutzky, D. 1967 “Algunos aspectos de la estructura socioeconómica en una zona rural de la Argentina” en *Economía y Ciencias Sociales* (Caracas: Facultad de Economía, Universidad Central de Venezuela) Año IX, N° 4.
- Soverna, S. 1986 *Algunos elementos para describir el complejo agroindustrial azucarero* (Buenos Aires) inédito.
- Soverna, S. et al. 1989 “El complejo agroindustrial Cañero”, Informe de Investigación (Buenos Aires: CONICET / CEPA) mimeo.
- Teubal, M. 1985 *Crisis y deuda externa: América Latina en la encrucijada* (Buenos Aires: Ediciones IDES).
- Thompson, E. 1984 “Tradición, revuelta y conciencia de clase” en *Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial* (Barcelona: Crítica).
- Tort, M. I. 1982 “La mecanización en la cosecha de caña de azúcar”, informe de beca de perfeccionamiento (Buenos Aires: CONICET) inédito.
- Vessuri, H. s/f *Ocupación y estratificación social entre los obreros de la finca cañera tucumana* (Buenos Aires: CICSO).
- Vigorito, R. 1979 “Criterios metodológicos para el estudio de los complejos agroindustriales” en *El desarrollo agroindustrial y la economía internacional* (México DF: SARH-CODAI) Documento de trabajo para el desarrollo agroindustrial N° 1.
- Wilson, J. 1986 “The political Economy of contract farming” en *Review of Radical Political Economics*, Vol. 18 (4).

DE COLONOS A SOJEROS

IMÁGENES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL SUR DE SANTA FE*

NORMA GIARRACCA, CARLA GRAS** Y PABLO BARBETTA***

INTRODUCCIÓN

Desde mediados de la década del noventa, el Sur de Santa Fe mostró como primicia lo que ocurriría luego en casi todo el país: producción

* Giarracca, N.; Gras, C. y Barbetta, P. 2005 “De colonos a sojeros. Imágenes de la estructura social del sur de Santa Fe” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).

** Posdoctora y socióloga (Universidad de Buenos Aires), es investigadora del I Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y miembro del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad de Buenos Aires.

*** Doctor de la Universidad de Buenos Aires (área Antropología), docente de la materia Sociología Rural de la carrera de Sociología (FSOC-UBA) e investigador asistente del CONICET (Argentina).

de soja, introducción de las tecnologías de la semilla transgénica, es decir, la expansión del herbicida glifosato producido por la empresa Monsanto, siembra directa, arrinconamiento de producciones de alimentos (en este caso, carne y leche) a zonas marginales. Como veremos en este trabajo, los resultados del proceso castigan a la pequeña producción familiar cuyos agricultores pierden de a poco su viejo oficio mientras ceden o venden sus tierras y buscan trabajo en ciudades o pequeños pueblos de una sociedad con altas tasas de desocupación.

Cuando logró permanecer, el colono santafecino, productor familiar con gran conocimiento de su actividad, se fue convirtiendo en el “productor profesional” aplaudido y estimulado por el discurso hegemónico. No obstante, la cultura “chacarera” y los nuevos aspectos se entremezclan, se tensionan, se pueden fugar por cualquier resquicio y reaparecer con nuevos sentidos.

Este trabajo fue llevado a cabo durante los últimos años: el trabajo de encuesta se realizó antes de la devaluación y del aumento de los precios internacionales de la soja; aun así, las tendencias, que se fueron profundizando, son claras y marcadas. El Censo Nacional Agropecuario de 2002 nos mostró el gran avance sojero en todo el país; aquí exponemos las particularidades de una de las zonas privilegiadas: el sur de Santa Fe.

DEL COLONO AL “SOJERO”, UN POCO DE HISTORIA

Las fértiles tierras santafecinas habilitaron, en momentos tempranos del desarrollo agroexportador argentino, la coexistencia de pequeños y medianos arrendatarios y terratenientes. No obstante, el pago de renta por la tierra arrendada, así como la aparición de diversos agentes intermediarios (acopiadores), configuraron una estructura social no exenta de tensiones.

Es preciso señalar algunos hitos en estos procesos de finales del siglo XIX y comienzos del XX: en primer lugar, la colonización que acompañó a los fenómenos migratorios, alentados por la magnitud del excedente agrario; y por otro lado,

los conflictos surgidos alrededor del arrendamiento, que dieron lugar a la protesta chacarera conocida como “Grito de Alcorta”, en 1912.

El chacarero, primero colono (Kusnir de Winkler, 1971), fue tomando la condición de arrendatario, pero, a pesar de las condiciones que imponían los terratenientes, no descuidaron los vínculos de sociabilidad entre conacionales y crearon organizaciones duraderas orientadas a protegerse.

El sistema de explotación eclosionó en 1912 con una huelga de los arrendatarios, inesperada para los terratenientes. Si bien no todas las reivindicaciones demandadas fueron conseguidas, el impacto político y la creación de la Federación Agraria estimularon muchas mejoras; y, en última instancia, dieron lugar al proceso que los condujo en el mediano plazo a la propiedad de la tierra.

En la primera posguerra, a diferencia de épocas anteriores, tanto el crédito como el comercio, que participaban en el ciclo expansivo, fueron accesibles y facilitaron el acceso a las maquinarias e implementos. Como sostiene Cloquell (2003), la introducción de toda clase de maquinarias agrícolas fue una constante antes de la crisis del treinta. Luego la situación cambió: la falta de crédito bancario afectó gravemente la producción. Precisamente, a partir

de este momento, se produjo una desaceleración del crecimiento productivo agrario y una reducción del nivel de ocupación rural¹.

El Censo Nacional Agropecuario de 1947 registra 60.847 explotaciones en la provincia de Santa fe, con un total de superficie agropecuaria de 11.815.668 hectáreas, distribuidas del siguiente modo: “praderas, pastoreos y superficie apta para agricultura” 47%; “superficie con cultivos anuales” 25%; el resto es para cultivos permanentes, montes y superficie de desperdicio. En 1937, un censo provincial había registrado 52.991 explotaciones, de las cuales 35.754 eran predominantemente agrícolas.

Con el peronismo, se sancionó el Estatuto de Perón y se pactó una rebaja del canon de los arrendamientos. Durante los años cincuenta, se registró un retroceso productivo relacionado con la desestructuración del sistema de arriendo en la región, pero duró poco. Dice Cloquell:

Desde la década del cincuenta y hasta la mitad de los años sesenta, comienza la recuperación

de la gran crisis anterior. Tanto los cultivos del trigo como del maíz aumentan sus rendimientos, y la razón corresponde a las buenas condiciones climáticas y a un proceso masivo de mecanización. A partir del segundo quinquenio de 1960, la difusión del maíz híbrido quiebra, en la región del sur de Santa Fe y norte de Pergamino, el equilibrio de asignación de tierras a cada uno de los cultivos. En el primer quinquenio de los años setenta, se difunde en forma masiva el cultivo de soja que arrastra la recuperación del trigo y desplaza al maíz en el sur de Santa Fe. (Cloquell, 1983: 22)

Es decir, en los quince años que van desde principios de los cincuenta a la mitad de la década del sesenta, comienza cierta recuperación de la etapa anterior. El trigo y el maíz aumentan sus rendimientos; con la introducción del maíz híbrido, y luego, en los setenta, con la difusión masiva de la soja que arrastra la recuperación del trigo y desplaza al maíz, se reestructura la ocupación del suelo en la provincia. Mientras el Censo Nacional Agropecuario de 1960 había registrado 56.267 explotaciones, el de 1969 muestra una leve expansión de 1,4% (57.054 explotaciones). Asimismo, se da un aumento de la superficie total de estas explotaciones, así como un 9,1% de aumento en la superficie media que pasa de

1 En el censo de 1937 se registran 2.635.585 personas ocupadas en el sector agrario; diez años después, el censo de 1947 consigna solo 2.428.747 (casi un 10% menos) (Teubal, 1975).

81,7 a 89,1 ha. Del mismo modo, los datos de los dos censos dan cuenta de una disminución de la población que vive en las explotaciones y del personal ocupado.

En estas décadas, la tierra sigue representando un recurso abundante; esta situación, combinada con la incorporación tecnológica, le da al modelo de organización la posibilidad de modificarse, manteniendo la estructura de una agricultura netamente familiar. Será en la década del ochenta cuando este sistema empiece a resquebrajarse, pues el aumento de la escala de producción y el mayor requerimiento de capitales son dispositivos que agreden la producción familiar. Comienza un proceso, aún hoy en marcha, de segmentación y exclusión de productores.

La década del noventa se inaugura con el proceso de desregulación económica de fines de 1991, desbaratando la trama institucional que había permitido la coexistencia de la “gran” con la “mediana y pequeña” explotación agraria. Sin regulación alguna, se desata un proceso de concentración en la agricultura, que el CNA de 2002 mostrará en el nivel nacional y —en niveles aún más altos— en algunas regiones.

Los precios relativos no son favorables en estos primeros momentos de los noventa. Su-

mando a esto los gastos de la explotación y de la casa de los productores, que aumentan al ritmo de las privatizaciones, la situación de muchos agricultores se dificulta, razón por la cual comienzan a contraer deudas. La magnitud del endeudamiento llega al punto de que, solo en el Banco Nación, trece millones de hectáreas de tierras agropecuarias del país están bajo hipotecas. Y en Santa Fe, como en el resto del mundo, las hipotecas agrarias son mecanismos clásicos por medio de los cuales los grandes capitales se quedan con las tierras.

Con la introducción de la semilla transgénica y la siembra directa, a mediados de la década, se supera la situación crítica en relación con los precios internacionales; pero, dado el endeudamiento y el requerimiento de capitales para la nueva agricultura, también comienza el final de una agricultura familiar diversificada.

A continuación, reproduciremos un cuadro comparativo de las décadas del setenta, ochenta y noventa, síntesis realizada por Silvia Cloquell, que, a nuestro juicio, representa una herramienta capaz de resumir y hacer gráfica las transformaciones de este último tiempo.

Cuadro N° 1
Secuencia histórica

	Del 70 al 80	Del 80 al 90	Del 90 en adelante
Rotación Agrícola	Trigo-Soja Soja de primera	Soja de primera Trigo-Soja	Soja de primera Trigo-Soja-Maíz
Sistemas de Labranza	Sistema tradicional, con arado de rejas	Labranza Vertical Labranza Mínima con disco doble acción	Siembra directa
Percepción del deterioro	Muy baja	Primeras observaciones	Profundiza la observación del deterioro
Acciones para contrarrestarla	Inexistente	Realizan algunas prácticas	Realizan distintas prácticas
Siembra directa según cultivos	No se realiza	En soja de segunda	Soja de segunda, generalizada Parcial en soja de primera, trigo y maíz
Rotación agrícola-ganadera	Presencia de algunos establecimientos	Casi desaparición del sistema ganadero en rotación, ubicación de la ganadería en sectores marginales	Ubicación de la ganadería en sectores marginales
Tipos de herbicidas	Genéricos de bajo espectro	Específicos variados	Glifosato Específicos variados
Fertilizantes	Esporádico Nitrogenado	Maíz Nitrogenado	Generalizado y multinutricional
Semillas	Híbridos y variedades	Híbridos y variedades	Transgénicos

Fuente: Cloquell et al., 2001: 16.

Según los datos censales, entre 1988 y 2002, hubo una disminución de casi un 33% de explotaciones en la provincia y un aumento de 97 hectáreas en la superficie promedio de

las explotaciones (de 300 ha en 1988 a 397 en 2002).

Al analizar la distribución de unidades por estratos de superficie, se observa que en las

explotaciones de hasta 200 hectáreas se registra el mayor desplazamiento de explotaciones; la proporción se ubica por encima del promedio general. En total, este estrato registra 75.293 unidades menos que en 1988, lo cual representa cerca del 93% de la disminución total de explotaciones, indicando que el desplazamiento se condensa principalmente en las explotaciones de menor superficie. Para el sur santafecino, el CNA de 2002 muestra una disminución del 23% en el número total de explotaciones agropecuarias respecto de la medición censal de 1988. La caída es significativamente mayor en el tramo de hasta 50 hectáreas (29%) y aún más en la franja de 50 a 200 hectáreas (31%).

En lo que respecta al estrato de 200 a 500 hectáreas, la variación intercensal es menor: 16%. Si bien la pérdida de unidades tiene menor incidencia en este estrato que en el de hasta 200 hectáreas, las explotaciones medias también resultaron afectadas por las pautas emergentes del modelo neoliberal. En tal sentido, tempranamente, autores como Llovet (1991) o Cloquell (1996) mostraron la relación entre la conversión de los productores en rentistas y la expansión del contratismo en la región pampeana. Por su parte, las explotaciones de más de 500 hectáreas registran un

aumento global del 4%. Sin embargo, cabe señalar que mientras las unidades de hasta 500 hectáreas aumentan en número, el resto de los tramos se mantiene o disminuye.

El análisis censal señala la importancia del arrendamiento como categoría que explicaría las formas que asume el desplazamiento y, en consecuencia, los mecanismos que adopta el incremento de escala productiva. Se observa, en ese marco, que la cantidad total de tierras bajo arriendo aumenta un 52% entre 1988 y 2002, fundamentalmente: a expensas de la forma "propiedad". Las explotaciones que tienen toda su tierra bajo arrendamiento aumentan un 18%, mientras que la cantidad de hectáreas que controlan se incrementa en un 43%, lo que: resulta también en un mayor tamaño medio: pasan de 411 hectáreas en 1988 a 498 en 2002. Un comportamiento similar tienen las explotaciones que combinan propiedad y arrendamiento de la tierra: aumentan un 7,5%, y la cantidad de hectáreas operadas bajo esta forma se incrementa en un 48%. En el mismo período, las explotaciones con toda su tierra bajo propiedad disminuyen un 26%, y la cantidad de hectáreas, en este caso, decrece un 11%.

LA IMAGEN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL AGRARIA EN EL SUR DE SANTA FE

En el sur santafecino, como vimos anteriormente, la estructura agraria ha estado marcada históricamente por el carácter familiar de las explotaciones agropecuarias. Todavía hoy, y a pesar de la importante disminución en el número de las explotaciones de hasta 200 hectáreas y de la introducción de tecnologías que determinaron cambios en la relación tierra-trabajo, la agricultura familiar presenta

un peso significativo en la estructura agraria de la región.

Si tomamos los departamentos del sur de la provincia, en los que se basa nuestra información por encuesta, observamos ciertos cambios entre los censos agropecuarios de 1988 y 2002. No se registra, entre los dos censos, un aumento de la superficie utilizada sino una leve disminución, mientras la cantidad de las explotaciones cae en 2853 unidades. Ambas cifras dan cuenta de un proceso de concentración de la tierra en producción, con un aumento promedio de 55 hectáreas por explotación.

Cuadro N° 2

Cantidad y superficie (ha) en departamentos seleccionados, 1988 y 2002

Departamentos	Cantidad de EAP (1988)	Superficie (1988)	Explotación media (1988)	Cantidad de EAP (2002)	Superficie (2002)	Explotación media (2002)
Belgrano	1.287	225.174,8	174,96	1.011	223.797	221,3
Caseros	2.513	332.980,5	132,50	2.201	332.053	150,8
Constitución	2.167	280.867,2	129,61	1.615	265.084	164,1
Gral. López	4.042	976.998,0	241,71	2.957	1.004.721	339,7
San Jerónimo	1.904	334.218,8	175,5	1.276	308.281	241,5
TOTAL	11.913	2.150.239,3	180,4	9.060	2.133.936	235,5

Fuente: Elaboración propia en base a los CNA de 1988 y 2002.

El trabajo que emprendimos en 2001 comprendió estos departamentos, que representan casi el 20% de la superficie provincial pero casi un tercio de las explotaciones provinciales. La muestra fue de 141 explotaciones² y 319 incursiones al campo para hallar la unidad seleccionada. La razón de esta diferencia es un hallazgo interesante que muestra la diferencia numérica y el destino de las explotaciones ubicadas en los distintos estratos, desde que la institución provincial que proveyó el padrón realizó el listado (mitad de la década de los noventa) y el momento de la encuesta. Se encontraron unidades inexistentes (cedentes de tierra, vendedores, otros destinos productivos, etcétera) que se reemplazaron por otras; asimismo, se recolectó toda la información que se pudo acerca del destino de los agricultores ausentes. Veamos el cuadro resumen donde se estima, desde los datos de las incursiones y la muestra final, el estado de situación (Cloquell, 2003: 41):

2 El trabajo de campo se llevó a cabo entre el Grupo de Estudios Rurales, dirigido por Norma Giarracca, y el equipo de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por Silvia Cloquell. Para mayor información sobre el proceso de muestreo, véase la tesis doctoral de Cloquell, 2003, y acerca del convenio, véase el prólogo de este libro.

Cuadro N° 3
Valores estimados del total de productores (%)

Es- tratos (ha)	Perte- necen al Estrato	Ceden su tierra	Pasa- ron de estra- to	Ven- die- ron la tie- rra	Otros	Total
Menos de 50	21,7	29,9	16,9	9,7	21,7	100,0
50-200	45,7	13,1	18,1	2,1	21,0	100,0
201-500	51,7	8,5	25,4	—	14,4	100,0
501 y más	85,0	5,0	—	—	10,0	100,0
Total	35,9	20,1	17,9	5,3	20,7	100,0

Fuente: Convenio GER-UNR (resultado de incursiones a campo).

Como puede observarse en el cuadro anterior, solo el 21,7% de las explotaciones de menos de 50 hectáreas había permanecido en producción, mientras casi el 30% había cedido sus tierras. El cuadro muestra, además, que solo los grandes habían permanecido mayoritariamente (85%), mientras solo un 5% habían cedido su tierra. En el nivel general casi el 36% había permanecido en el estrato o, dicho de otra forma, 64% de las incursiones muestrales mostró un cambio en esa unidad de producción.

La muestra así constituida arrojó los siguientes resultados: el 63% de las unidades se ubica en el estrato de hasta 200 hectáreas, la mayor parte de ellas en el tramo de más de 50 hectáreas. Las unidades de 200 a 500 hectáreas representan el 20%; sin embargo, al interior de este grupo, es importante distinguir entre quienes contratan mano de obra permanente y quienes no lo hacen. A nuestro juicio, la contratación de mano de obra sigue representando (aunque en magnitud distinta con relación a otros años) elementos de capitalización de las unidades. En efecto, como veremos en cruces muy importantes, la variable discrimina a los medianos en forma significativa. De este modo, las explotaciones que contratan incluyen el 12% del total, mientras que las segundas representan el 7%. Finalmente, las unidades de más de 500 hectáreas alcanzan al 17%.

Se observa que, a pesar de la pérdida en los estratos de magnitudes pequeñas de superficie, sigue habiendo un fuerte predominio de las explotaciones pequeñas y medianas (hasta 200 hectáreas).

Cuadro N° 4
Tipología de productores (%)

Tipología de productores	Absolutos	En %
Pequeños	88	62,9
Medianos	17	12,1
Medianos con trabajadores permanentes	11	7,9
Grandes	24	17,1
Total	140	100,0

Fuente: Encuesta. Convenio GER-UNR.

Al construir tipos de unidades, la tierra adquiere en la región pampeana una predominancia fundamental. En nuestra clasificación, jerarquizamos este factor básico de producción, constituyéndose en un indicador operativo del capital controlado por las explotaciones. Los niveles de capitalización guardan relación con el tamaño de las unidades. No obstante, es importante señalar que, en las últimas décadas, la difusión del servicio de labor en siembra directa y en la fertilización modificó el acceso de los productores a los recursos de capital. Así pues, la presencia de productores con poco capital o sin él de ningún modo determina su exclusión de los modelos tecnológicos vigentes. Como veremos, la contratación de labores es predominante tanto a nivel del total de explotacio-

nes como al interior de los distintos estratos de superficie. De modo que, para dar cuenta de las formas en que los productores han podido o no mantener un ritmo de capitalización, es necesario considerar que su profundización puede operar tanto por la vía de la adquisición de maquinarias o animales como de la compra o toma de tierras. En efecto, en las entrevistas, muchos productores señalaron que prefieren invertir en animales o en tierras antes que en maquinarias, ya que mantener el ritmo de capitalización en este nivel supone incorporar elementos que no son amortizables dentro de ciertas escalas productivas.

Para analizar el capital en maquinarias y vehículos (camiones y camionetas) construimos una variable que sintetiza todos estos elementos en un mismo valor monetario³, y que estratificamos teniendo en cuenta los cuartiles en la distribución. Un primer aspecto a señalar es que las unidades sin ningún capital representan

una proporción muy baja respecto del total de explotaciones (3,6%). La región sigue asentando a pequeños productores capitalizados, en claro proceso de diferenciación.

La distribución de los distintos niveles de capitalización —medidos en los términos señalados— muestra cierta relación con el tamaño de la unidad. Así, se observa que las explotaciones de más de 500 hectáreas se ubican mayoritariamente en el cuartil superior, mientras que dos tercios de las explotaciones de hasta 200 hectáreas se encuentran en los cuartiles inferiores. En el estrato de 200 a 500 hectáreas, que presentan una distribución más heterogénea, el grueso se concentra en los niveles medios de capitalización.

La mano de obra es fundamentalmente familiar tanto en tareas físicas como de dirección y gestión. Esta, en general, se combina con el trabajo de asalariados transitorios y/o la contratación de servicios. Las explotaciones que operan hasta 200 hectáreas tienen una organización laboral en la que predomina el trabajo familiar e, incluso, existe una importante franja en la que el trabajo depende solamente de la familia. Sin embargo, entre las unidades de este grupo, se observa un comportamiento diferencial en las ubicadas en el tramo de hasta 50 hectáreas: allí existe una franja significativa

3 Este valor monetario refleja los precios de cada ítem en el momento de relevar la encuesta (septiembre de 2001). Registran valores a dólares de entonces, cuando la paridad cambiaria en la Argentina era U\$S1 = \$1. Con los cambios en el régimen monetario, a partir de enero de 2002, estos valores se han devaluado fuertemente. No obstante, la variable así construida mantiene las diferencias internas entre magnitudes.

(casi cuatro de cada diez) en la que el trabajo familiar se limita a tareas de dirección, y es la que presenta mayores indicadores de descapitalización: es uno de los estratos donde se re-

gistran cesiones y ventas de tierras en la última década. Finalmente, las unidades que operan más de 500 hectáreas incluyen, en la mayoría de los casos, a asalariados permanentes.

Cuadro N° 5

Cuartiles de capitalización según tipología de productores (%)

Cuartil / Tipología de productores	Pequeños	Medianos	Medianos con trabajadores permanentes	Grandes	Total
1	35,2 (31)	5,9 (1)	9,1 (1)	4,2 (1)	24,3 (34)
2	31,8 (28)	29,4 (5)	18,2 (2)	4,2 (1)	25,7 (36)
3	23,9 (21)	29,4 (5)	54,5 (6)	12,5 (3)	25,0 (35)
4	9,1 (8)	35,3 (6)	18,2 (2)	79,2 (19)	25,0 (35)
Total	100,0 (88)	100,0 (17)	100,0 (11)	100,0 (24)	100,0 (140)

Fuente: Encuesta. Convenio GER-UNR.

La presencia o no de asalariados permanentes aparece con alguna significación a la hora de diferenciar los tipos de unidades. El reemplazo de la labranza tradicional por la labranza vertical y la posterior adopción de la siembra directa (es decir, la implantación sin laboreo previo del suelo), durante la década del noventa, redujo el número de labores. Ello, junto con la incorporación de semillas transgénicas, resistentes al glifosato, dio lugar a cambios cualitativos en el modelo tecnológico ya que, como señala

Cloquell, esta combinación tuvo consecuencias “en el tipo de capital fijo y la organización laboral necesaria para poder llevar adelante el proceso productivo” (2001: 17).

Una primera consecuencia, además de la mayor necesidad de capital circulante necesario para afrontar la contratación de estos servicios, es la simplificación de las tareas productivas, que se traduce también en menores requerimientos de trabajo por hectárea y en una mayor flexibilidad en el ciclo laboral, ya

que estas tareas no precisan ser realizadas en un momento preciso. La segunda consecuencia a destacar es el cambio en la conducción de los cultivos, que pasan a estar crecientemente en manos de los contratistas. Estos adquieren la capacidad de incidir en la forma en que las tareas contratadas son llevadas a cabo. Por otra parte, la externalización de tareas implica cierta relativización del trabajo familiar, así como de la contratación directa de asalariados.

De tal forma, en nuestra tipología, distinguimos solamente entre las unidades medias (es decir, entre 200 y 500 hectáreas) la presencia o no de asalariados permanentes. En esta franja, se observan relaciones distintas con ciertas variables según el peso relativo que adquiere el tipo de organización laboral.

La tipología, así como su relación con la variable capitalización, muestra que la estructura agraria del sur santafecino presenta aspectos dinámicos y de gran diversidad, situación básicamente relacionada con la presencia de una agricultura familiar capitalizada, que desarrolló una variedad de comportamientos para mantenerse en la producción durante las últimas décadas y que no siempre estuvieron dados en torno de la escala. Ello se refleja en una imagen de heterogeneidad, que es

una cristalización de procesos contextuados históricamente en el tiempo. El momento de relevamiento de la encuesta correspondió a un período particularmente crítico (previo a la crisis de 2001). La salida de la convertibilidad, la devaluación y los altos precios de la soja en los dos años siguientes han abierto otras movilidades, que plantean todavía interrogantes pero que introducen algunas variantes: productores que vendieron sus parcelas en los noventa y que vuelven a arrendar pequeñas superficies, productores que renuevan sus equipos, productores que amplían su escala mediante la toma de nuevas tierras, productores que se concentran en la tierra propia atemorizados por los altos valores de los alquileres, productores que aún continúan endeudados y venden herramientas o animales para saldar sus compromisos. El punto de partida de cada grupo delimita el marco de posibilidades en situaciones cambiantes. Esa imagen cristalizada en el momento de la crisis no solo hace referencia a los procesos previos durante los años noventa, sino también a los comportamientos y estrategias del presente. En los puntos que siguen, profundizaremos en la caracterización de los distintos tipos de unidades.

SOJA: CULTIVO PREDOMINANTE

La región es predominantemente agrícola, no obstante lo cual aún es importante la porción de la superficie dedicada a pasturas en tierras no aptas para la agricultura, que dan un carácter mixto a la explotación. En efecto, en nuestros datos, el 47% de las unidades son solo agrícolas, es decir, no dedica superficie alguna a pasturas: en un 9,3% solo se cultiva soja; en un 15,7% soja y trigo; en un 5,7% soja y maíz; en un 14,3% soja, maíz y trigo; un 0,7% más le agrega sorgo. Un 2,1% hace solo pastura, y el resto combina esos cultivos mencionados anteriormente con pasturas.

La rotación —tanto de agricultura-ganadería como con distintos productos agrícolas— es muy importante para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Las rotaciones agrícolas se logran con trigo y, en una proporción significativa, con maíz. Cloquell (2003) halló que, entre los que hacen predominantemente ganadería, se registra una tendencia a disminuir la rotación agrícola ganadera.

En nuestro trabajo, se registró qué porcentaje de la superficie se dedica a soja de primera. Los resultados son los siguientes:

Cuadro N° 6
Porcentaje de soja de primera sobre el total de hectáreas con agricultura

Porcentaje de soja sobre ha con agricultura	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Hasta 25%	9,0	9,0
Entre 25,1 a 50%	29,5	38,5
Entre 50,1 y 75%	35,2	73,8
Más de 75%	26,3	100,0

Fuente: Encuesta. Convenio GER-UNR.

Con la excepción de ese 2% de unidades registradas que hacen solo pasturas, el resto de nuestros encuestados hace soja y, como vemos, más de un cuarto de ellos tiene un 75% de su superficie dedicada a la oleaginosa.

Cuadro N° 7

Porcentaje de soja de 1ª sobre el total de hectáreas con agricultura por tipología de productores

Tipo de productores / Porcentaje de soja de primera	Pequeños	Medianos	Medianos con permanentes	Grandes	Total
Hasta el 25%	10,8%	0,0%	10,0%	8,3%	9%
Más de 25 y hasta 50%	25,7%	37,5%	20,0%	41,7%	29,5%
De 51 a 75%	31,1%	56,3%	40,0%	33,3%	35,2%
Más de 75%	32,4%	6,3%	30,0%	16,7%	26,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Encuesta. Convenio GER-UNR.

Como vemos en el cuadro anterior, las proporciones de la superficie agrícola de la explotación dedicadas a soja de primera se mantienen altas en todos los tipos de unidades. En las pequeñas, el 63,5% de las unidades, más de la mitad es soja; crece esa proporción en las medianas y baja un poco en las grandes, aun cuando más de un cuarto de ellas siembra con soja más del 25% de su superficie.

Muy ligada al cultivo de la soja transgénica está la incorporación de la llamada “labranza cero”, una práctica supuestamente conservacionista que ha comenzado a plantear dudas con respecto a los efectos a largo plazo en materia de absorción de agua y las probables inundaciones. Esta nueva técnica permitió la realización de un doble cultivo

de la soja. De esta manera, la preeminencia de este cultivo se evidencia, por otro lado, en la alta proporción de productores que realizan una doble cosecha. En efecto, el 62,15% de los productores cultiva soja en primera y en segunda ocupación. Si bien la superficie cultivada en segunda ocupación es significativamente menor a la primera (23,6% y 49,8% respectivamente), si se suma la extensión implantada con soja de primera y de segunda ocupación, hay una superficie cubierta que garantiza el consumo de soja transgénica y, por lo tanto, del herbicida glifosato, un potente producto incorporado a partir de la aparición de la soja transgénica, que es la única que lo resiste.

TIPO DE UNIDADES PRODUCTIVAS

LAS UNIDADES DE MÁS DE 500 HECTÁREAS

La mayoría de estas explotaciones utilizan mano de obra permanente, que combinan con el trabajo de la familia, este último aplicado en gran medida al manejo de maquinaria, la gestión y la administración. La organización laboral incluye la contratación de contratistas: el 80% utiliza estos servicios.

Estas unidades se caracterizan, asimismo, por el control de altos niveles de capital fijo y circulante. Es interesante señalar que el 50% de las explotaciones dispone de cosechadoras que, en el momento del relevamiento, eran “nuevas”, es decir, adquiridas luego de 1995. Además de utilizar las maquinarias en la propia explotación, una pequeña franja (17%) vende también servicios a terceros.

El 83% de estas unidades son mixtas, esto es, combinan la producción agrícola con la ganadería. Cabe destacar que, de acuerdo con distintas entrevistas, durante los años noventa, la ganadería no tuvo entre estos productores un comportamiento dinámico, cumpliendo más bien cierta función de “reaseguro”. Más aún, relevamos ejemplos en los cuales se ob-

serva la predominancia que adquirieron en esos años las actividades agrícolas sobre las ganaderas en la estructura productiva de estas explotaciones. Al igual que se observa en el nivel agregado —nos referimos al aumento de la superficie agrícola en detrimento de la ganadera en toda la región pampeana—, en las trayectorias de muchos de estos productores, ello también está presente. En efecto, y tomando en cuenta las distintas rentabilidades que tuvieron estas actividades en la última década, muchos productores abandonaron progresivamente la ganadería. El capital ganadero se liquida total o parcialmente para propiciar la inversión en los nuevos equipos agrícolas o bien para tener un “fondo de reserva” para apuntalar la actividad agrícola.

La forma de tenencia predominante entre estas explotaciones es la combinación propiedad-arrendamiento (79% de las unidades). El 12,5% opera solamente tierras en propiedad y solo un 4,2% son arrendatarios puros. Pero, como planteábamos más arriba, la compra o el arrendamiento de tierras permite dar cuenta de los cortes que se producen al interior de las distintas capas de productores, entre quienes han podido mantener un ritmo de expansión y quienes no. Como trataremos de demostrar, la persistencia y expansión de las unidades de

más de 500 hectáreas involucró respuestas significativas en torno de la escala, sea mediante la compra, sea a través del arrendamiento.

Para ello, analizamos la información referente a compra, venta, toma y cesión de tierras en los últimos años. La compra de tierras, durante los años noventa, ha representado un comportamiento importante en estas explotaciones, alcanzando a más de las tres cuartas partes de quienes se ubican en este estrato. Ello demuestra la relación entre las posibilidades de inversión y las posiciones estructurales. En otras palabras, la importancia que adquiere la expansión en tierras propias en estas unidades se vincula directamente con su mayor capacidad de generación de excedentes.

Sin embargo, la interpretación se complejiza al incorporar otro dato: el 29% de estas unidades también vendió tierras en los años noventa. Para comprender esta información, es preciso tomar en consideración la valorización diferencial que tenían las tierras ubicadas en distintas zonas, proceso relacionado con la expansión sojera. Así, según la información cualitativa que se desprende de las entrevistas realizadas, se registran situaciones de venta de tierras agrícolas ubicadas en distritos donde el valor de la hectárea era alto, y de compra de mayores superficies en zonas más marginales. Este comportamiento

puede estar asociado a la incorporación de ganadería en los últimos años o al aprovechamiento de rentas diferenciales, según la aptitud de los suelos en cada zona y la organización productiva de las unidades. Otra situación a considerar, de más larga data entre los productores familiares, es la venta de parcelas entre miembros de una sociedad familiar y la compra por parte de productores individuales o por dos integrantes de la antigua sociedad familiar.

La cesión de tierras propias es prácticamente inexistente entre estas unidades: apenas el 4%. Por el contrario, dentro de la imagen expansiva que los datos anteriores mostraban, se observa que el 57% de estas unidades aumentó la cantidad de tierras tomadas en los cinco años previos al relevamiento. Cabe señalar que en varios de los productores entrevistados, se observó que el alquiler de tierras involucra la toma de propiedades de familiares que dejan de producir para pasar a percibir una renta por la cesión de la tierra. Para quienes toman tierras, ello permite un arreglo más conveniente: estos productores se aseguran así continuidad en la cesión a valores que no son los de mercado; para quienes ceden, significa efectivizar un ingreso a través de un esquema que permite conservar la propiedad de la tierra en el marco de las relaciones familiares.

LAS EXPLOTACIONES DE 200 A 500 HECTÁREAS

Como ya mencionamos, en este grupo se diferencian dos situaciones en relación con las modalidades que asume la organización laboral, según la presencia de trabajadores externos permanentes. Así, es posible hablar, dentro de este estrato, de explotaciones de carácter familiar (donde la fuerza de trabajo doméstica se combina en distinto grado con la incorporación de asalariados transitorios y la contratación de servicios) y de explotaciones de tipo empresarial-familiar, para aludir, en este caso, a una forma de organización donde existe una menor importancia del trabajo físico directo del productor o de su familia, concentrándose estos en tareas de gestión y dirección. No obstante, aun en este subgrupo existen unidades en las cuales la familia (mayoritariamente el titular de la explotación) participa incluso con trabajo directo en algunas tareas consideradas críticas. Entre estas unidades que contratan trabajo permanente, se observa, por otra parte, una disminución en el número de asalariados.

Tanto en las explotaciones que no incorporan asalariados permanentes como en las que lo hacen, la importancia relativa del trabajo

directo de la familia muestra que este tipo de comportamiento forma parte de las respuestas desarrolladas por estos productores para mantenerse en la producción, aprovechando al máximo los recursos provistos por la familia. Sin embargo, las que no contratan asalariados registran en mayor proporción más de un miembro de la familia trabajando en la explotación (75% del total de unidades de este grupo); por el contrario, entre las que sí contratan permanentes, el 54,5% ocupa a un solo miembro de la familia.

En otras palabras, la existencia de formas de organización laboral donde la participación de la familia sigue siendo importante —especialmente entre las que no tienen trabajadores externos permanentes— refleja un cambio en la estructura de las explotaciones, en particular, en este estrato, que es uno de los que han visto más fuertemente comprometidas sus posibilidades de sostenibilidad durante los años noventa. Podemos plantear que este comportamiento revierte una de las dinámicas que había caracterizado, en buena medida, los procesos de modernización; como sostiene Cloquell (2001: 19), la equivalencia entre cambio tecnológico y reducción de mano de obra familiar toma otro signo a partir de mediados de la década del noventa.

Al igual que en las explotaciones de más de 500 hectáreas, en este estrato la contratación de servicios es predominante, si bien con diferencias entre los tipos de organizaciones laborales que distinguimos: alcanza al 82% de las unidades que no tienen trabajadores permanentes y al 73% de las que tienen permanentes. Es interesante destacar que se registran diferencias porcentuales similares al considerar la venta de servicios a terceros por parte de estas explotaciones: así, el 45,5% de las que contratan permanentes son también contratistas, mientras que, entre las unidades sin permanentes, el 35% vende servicios. De tal forma, es posible pensar que la presencia de permanentes se relaciona en algún grado con la organización de otro negocio, que permite —dada su complementariedad con la propia actividad predial agraria— un mejor aprovechamiento de los recursos de la explotación.

Como se planteó anteriormente, los niveles de capitalización entre los dos subgrupos de unidades es similar: las mayores concentraciones se ubican en los dos superiores. Sin embargo, entre las unidades con permanentes, el peso relativo de quienes están en el cuartil más alto es mayor. Teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo anterior, es posible pensar que el nivel de capitalización en este grupo se relaciona

en buena medida con la organización de otro negocio más que con las necesidades de capital para operar la explotación agraria.

En comparación con las explotaciones de más de 500 hectáreas, las de 200 a 500 presentan un mayor peso relativo de la agricultura como única actividad. En efecto, cerca de la mitad de estas unidades se dedican exclusivamente a la producción agrícola, ya sea que contraten permanentes o no.

La forma de tenencia predominante en estas explotaciones es también la combinación propiedad-arrendamiento. Bajo esa forma se encuentran el 71% de las unidades sin permanentes y el 64% de las que incorporan a estos trabajadores. La segunda categoría en importancia, en el caso de los primeros, es la propiedad (18%), seguida del arrendamiento (12%). Entre las unidades que contratan permanentes, se observa una distribución similar, aunque con alguna variante: el 18% es propietario, el 9% arrienda, mientras que un porcentaje idéntico combina propiedad y arrendamiento con la cesión de tierras propias.

El análisis de la información referida a la compra, toma, venta o cesión de tierras en la década de los noventa revela algunos aspectos importantes para captar las dinámicas de las explotaciones familiares.

Aunque con una importancia relativa menor que en el estrato de más de 500 hectáreas, en los años noventa, la compra de tierra entre estas explotaciones aparece como un comportamiento significativo: alcanza al 57% de las unidades. Pero, al considerar a los dos grupos que integran este estrato, se observan importantes diferencias. En efecto, entre las unidades que no contratan permanentes, el 41% compró tierras durante los años noventa, porcentaje que asciende a 82% en el caso de las explotaciones que incorporan asalariados permanentes. Cabe señalar que, según entrevistas realizadas, la compra de tierras no involucró generalmente grandes extensiones entre estos productores sino pequeñas parcelas. Por otra parte, también en este caso está presente la circulación de tierras al interior de un “mercado familiar”, tanto en la compra como en la toma de tierras.

Respecto del arrendamiento, ambos grupos muestran un comportamiento diferenciado. Así, entre las explotaciones que no contratan permanentes, predominan dos comportamientos: la reducción de la superficie bajo arriendo (44%) o el mantenimiento de la cantidad de hectáreas tomadas (44%) entre 1995 y 2001. Es decir, solo el 12,5% expandió su escala a través de este mecanismo. Por el contrario, entre las unidades que contratan

permanentes, el 44% aumentó la superficie tomada y el 33% la mantuvo.

Se observa así que las unidades de tipo familiar-empresarial tuvieron estrategias más expansivas que los productores familiares medios, tanto en lo referido a la compra como a la toma de tierras. Por otra parte, es posible pensar que los productores más típicamente familiares desarrollaron estrategias de “repliegue”: como vimos, también tienen entre ellos mayor peso relativo quienes redujeron la cantidad de hectáreas tomadas. Sin embargo, no querríamos traducir una imagen de mera expansión entre quienes tienen asalariados permanentes; en efecto, en este caso, se registra una pequeña franja (9%) de unidades que cede tierras a terceros, situación que no encontramos en el otro grupo.

La venta de tierras, durante los años noventa, también es significativa entre las explotaciones de 200 a 500 hectáreas. En conjunto, una de cada cuatro unidades vendió tierras durante ese período. Entre tipos de unidades, no se observan grandes diferencias (23,5% de quienes no tienen permanentes y 27% de quienes contratan). Entre estas explotaciones, la venta está vinculada en distinto grado con situaciones de endeudamiento.

LAS EXPLOTACIONES DE HASTA 200 HECTÁREAS

Estas explotaciones, que constituyen el grupo más numeroso en términos absolutos y relativos en el sur de Santa fe, tienen una organización laboral en la que predomina el trabajo familiar tanto en tareas físicas como de dirección y gestión. Como ya señalamos, aunque en la mayoría de los casos la mano de obra familiar se combina con el trabajo asalariado transitorio y/o la contratación de servicios, en una importante franja el trabajo depende solamente de la familia. Es importante destacar que, entre estas explotaciones, adquieren relevancia las unidades que ocupan a un solo integrante de la familia: alcanzan al 46%, el porcentaje más alto en comparación con el resto de los estratos. En el mismo sentido, las unidades de hasta 200 hectáreas representan el 70% del total de unidades que solo ocupa a un integrante de la familia en la producción agraria predial.

Por otra parte, como se remarcó anteriormente, dentro de este grupo, y en términos de las modalidades laborales, se distinguen las de menos de 50 hectáreas, donde en una significativa franja (casi cuatro unidades de cada diez) el trabajo familiar se limita a tareas de dirección, combinado con la contratación de contratistas.

Estas explotaciones están capitalizadas aunque, en comparación con los estratos anteriores, en menor nivel: el grueso (77%) se ubica en el segundo cuartil de la distribución. Ello es coherente con la menor importancia que tiene en este grupo la venta de servicios, que alcanza al 20% de las unidades, y, paralelamente, con la fuerte presencia de unidades que compran servicios (86%) respecto de los otros estratos.

La estructura productiva es similar a la de las explotaciones de 200 a 500 hectáreas. El 51% se dedica exclusivamente a la producción agrícola, y, en el caso de las explotaciones mixtas (47%), la ganadería ocupa un lugar secundario en términos de uso del suelo. En ello influye la búsqueda por obtener las mayores rentabilidades para los recursos disponibles, teniendo en cuenta la evolución diferencial que han tenido los precios ganaderos respecto de los agrícolas, en particular, de la soja.

La forma de tenencia predominante es la propiedad (54,5%), seguida de la combinación propiedad-arrendamiento (35%). Ello muestra significativas diferencias respecto de los otros estratos y pone de manifiesto las dificultades que tuvieron estas unidades para ampliar su escala productiva mediante el tradicional mecanismo de la agricultura familiar, lo que los colocó en una situación sumamente difícil frente

al contexto macroeconómico de la década pasada. Al respecto, un estudio realizado en 2001 estimaba que, en el área sur de la provincia de Santa Fe, el umbral mínimo de rentabilidad (es decir, el que corresponde a la definición de Unidad Agrícola Económica) se ubica en la actualidad en torno de las 330 hectáreas mientras que, a principios en 1992, dicha escala mínima se calculaba alrededor de las 226 hectáreas (Porstmann y López, 2001).

Sin embargo, al analizar la información referida a la compra y toma de tierras durante la década de los noventa, se advierten algunas complejidades. En primer lugar, la compra de tierras ha sido un comportamiento importante en las explotaciones de menos de 200 hectáreas (particularmente en las de más de 100): el 29,5% realizó inversiones en tierras, en la mayoría de los casos, comprando pequeñas parcelas. Si se tienen en cuenta —en un contexto de incremento de los umbrales mínimos de sostenimiento de las explotaciones— las posibilidades de generación de excedentes entre las más pequeñas, puede plantearse que la presencia de unidades que compraron tierras en este estrato daría cuenta de la canalización de recursos extra agrarios hacia la producción agropecuaria.

En segundo lugar, la mayoría de estas explotaciones (64%) mantuvo a lo largo de la década

anterior la cantidad de tierras tomadas. El 19% aumentó la superficie bajo arriendo mientras que el 16% la disminuyó. Entre estas últimas, predominan las unidades ubicadas en las escalas más pequeñas (hasta 100 hectáreas).

Es precisamente en estos tamaños donde se registra la mayor cantidad de unidades que ceden parte de sus tierras. En efecto, si bien para el total del estrato la cesión alcanza a una franja minoritaria (6%), al discriminar por grupos, se observan comportamientos diferentes: entre las de menos de 50 hectáreas, el 7% cedía tierras en el momento del relevamiento, y todavía es más alta la cesión en las explotaciones de 50 a 100 hectáreas (12%).

Puede afirmarse, en tal sentido, que existe una heterogeneidad de estrategias desarrolladas con el fin de permanecer de un modo u otro en la producción, con comportamientos de tipo defensivo (en los que se puede encuadrar la compra de pequeñas parcelas o el incremento de la superficie bajo arriendo), pero también involucrando formas de repliegue (dejando de tomar tierras, por ejemplo). En síntesis, se puede apreciar una diversidad de estrategias, que contemplaron, en algunos casos, respuestas en torno del problema de la escala; aunque, en la mayoría, se advierte el despliegue de distintas estrategias “conserva-

doras” del patrimonio familiar. En ese marco, cabe destacar que solo el 9% de las unidades de este estrato vendió tierras en la última década (el grueso se concentra en las explotaciones de hasta 50 hectáreas), en comparación con el 23% de las unidades de 200 a 500 sin trabajadores permanentes, el 27% de las unidades del mismo tamaño con permanentes y el 29% de las unidades de más de 500 hectáreas.

COMPRA DE INSUMOS Y COMERCIALIZACIÓN

Como resaltamos en las secciones anteriores, la incorporación de nuevas tecnologías en el sector configuró un esquema tecnológico de mayor capital intensivo y, por lo tanto, un aumento de los requerimientos mínimos de capital exigidos a las unidades agrarias, según hacen constar Teubal y Rodríguez (2001). En efecto, los autores sostienen que la provisión de insumos agropecuarios durante la década del noventa aumentó a tasas significativamente altas, incluso a un ritmo bastante mayor que el aumento de la producción agropecuaria. Además, si tenemos en cuenta que el valor unitario de la producción tiende a caer significativamente en relación con el valor de los insumos

(Teubal y Rodríguez, 2001), cabe preguntarnos acerca de las formas de acceso a los principales insumos agropecuarios.

Los datos de la encuesta muestran que, de las 39.949 hectáreas destinadas a la agricultura, cerca del 50% están implantadas con soja en primera ocupación. Dada esta preeminencia del cultivo de la soja entre los productores encuestados, y dado que la utilización de semillas transgénicas (el 87,9% de las semillas de soja utilizadas es de estas características) y la aplicación de fertilizantes y agroquímicos deben ser integradas en la forma de un “paquete” —en el cual el uso de una determinada técnica obliga a la implementación de todas las demás—, consideraremos la compra de tres insumos básicos en relación con este cultivo: las semillas, los fertilizantes y los herbicidas.

Los diferentes insumos pueden ser adquiridos por canje, por cosecha, financiados o al contado. Ya que las tres primeras modalidades suponen algún grado de financiamiento, la variable “forma de pago” fue clasificada en dos categorías: “contado” y “financiado”. Por otro lado, la encuesta consultó a los productores qué porcentaje de los diferentes insumos eran comprados bajo estas modalidades, y los que superaban el 50% en alguna de ellas fueron incluidos en dicha categoría. Existen casos puros

(con más de 50% en una de las dos formas) pero en casi todos aparecen casos mixtos. Lo que se pone en juego aquí es la capacidad de disponer de diferentes niveles de capital circulante.

Una visión de conjunto da cuenta de la importancia que adquiere el financiamiento en la compra de insumos. En efecto, dentro de las tres categorías de “forma de pago”, la “financiación” adquiere proporciones superiores al 60% (69,4% en el caso de las semillas, 64,2% en los fertilizantes y 64,7% en los herbicidas). Sin embargo, los datos muestran comportamientos diferenciales de acuerdo al tipo de productor de que se trate.

En la compra de semillas y fertilizantes, aparece una estrecha relación entre las formas de pago y el tipo de productor. En efecto, entre los productores “pequeños” y “medianos”, la compra de dichos insumos se realiza mayoritariamente con algún tipo de financiación

(76,2% y 83,3% en el caso de la compra de semillas y 67,6% y 80% en los fertilizantes, respectivamente). Dicha tendencia se revierte en los productores “medianos con trabajadores permanentes”, donde el financiamiento para la compra de semillas es solo del 40% (minoría), registrándose un 57,9% en el caso de los productores grandes.

En el caso de los fertilizantes, el pago al “contado” y el “financiado” adquieren la misma importancia relativa para los productores “medianos con permanentes” y “grandes” (en ambos casos es del 50%). De esta situación, a nuestro juicio, se deriva que, a pesar de la existencia de mayor capital circulante en los estratos más grandes de productores, los insumos no pueden ser adquiridos sin algún tipo de financiación.

Cuadro N° 8

Forma de pago de las semillas de soja según tipología (%)

Tipo de productores / Forma de pago de insumos	Pequeños	Medianos	Medianos con permanentes	Grandes	Total
Mayormente al contado	23,8 (10)	16,7 (1)	60,0 (3)	42,1 (8)	30,6 (22)
Mayormente financiado	76,2 (32)	83,3 (5)	40,0 (2)	57,9 (11)	69,4 (50)
Total	100,0 (42)	100,0 (6)	100,0 (5)	100,0 (19)	100,0 (72)

Fuente: Encuesta convenio GER-UNR.

Cuadro N° 9

Forma de pago de los fertilizantes para soja según tipología (%)

Tipo de productores / Forma de pago de insumos	Pequeños	Medianos	Medianos con permanentes	Grandes	Total
Mayormente al contado	32,4 (11)	20,0 (1)	50,0 (4)	50,0 (5)	35,8 (19)
Mayormente financiado	67,6 (23)	80,0 (4)	50,0 (2)	50,0 (5)	64,2 (34)
Total	100,0 (34)	100,0 (5)	100,0 (4)	100,0 (10)	100,0 (53)

Fuente: Encuesta convenio GER-UNR.

En el caso de los herbicidas, se presenta una singularidad. En efecto, si bien existen algunas diferencias porcentuales, no se presenta una diferenciación significativa entre productores como en los otros insumos mencionados anteriormente. Una posible explicación remite a la utilización de la soja RR (variedad de soja transgénica más conocida y cuyo uso es el más extendido), que tiene tolerancia al herbicida glifosato, producido durante mucho tiempo solo por Monsanto. De esta manera, una vez que el productor incorporaba esta semilla transgénica, estaba obligado a comprar el glifosato de Monsanto al precio establecido, sin poder siquiera optar por otro producto.

En conclusión, la incorporación de la soja transgénica y de los insumos asociados a esta no solo cercena la capacidad de decisión del productor sobre su producción —los insumos utilizados y las técnicas productivas a implementar— sino que, por la alta incidencia del financiamiento en la compra de insumos, remite a una pérdida de control sobre los excedentes generados. En otras palabras, la financiación de los insumos incide en forma indirecta sobre la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias en la medida en que esta supone una transferencia de ingresos a favor de otros sujetos pertenecientes al complejo (cooperativas, acopiadores, cerealistas, etcétera).

Cuadro N° 10

Forma de pago de los herbicidas para soja según tipología (%)

Tipo de productores / Forma de pago de insumos	Pequeños	Medianos	Medianos con permanentes	Grandes	Total
Mayormente al contado	33,8 (24)	33,3 (5)	40,0 (4)	39,1 (9)	35,3 (42)
Mayormente financiado	66,2 (47)	66,7 (10)	60,0 (6)	60,9 (14)	64,7 (77)
Total	100,0 (71)	100,0 (15)	100,0 (10)	100,0 (23)	100,0 (119)

Fuente: Encuesta convenio GER-UNR.

Otro factor que remite a la transferencia de ingresos entre los productores agrarios y otros sujetos pertenecientes al complejo agroindustrial es la comercialización. La década del noventa fue un periodo de crisis para el sector a nivel de precios, situación que se vio profundizada por la brecha existente entre los valores de los productos agropecuarios y los precios en la distribución final de alimentos (supermercadismo) (Teubal y Rodríguez, 2002). En este contexto, avanzar en la cadena de comercialización se convirtió en un proceso clave para mejorar la sustentabilidad de los productores agropecuarios.

Básicamente, existen tres canales a través de los cuales los productores pueden comer-

cializar su producción: el acopiador, la cooperativa y la venta directa (a cerealeras, molinos harineros o industrias aceiteras, entre otros). Se les consultó a los productores qué porcentaje de su producción comercializaban a través de los distintos canales. Aquellos que superaban el 50% en alguna de estas modalidades fueron incluidos en esa categoría (es decir que una parte inferior de su producción puede ser vendida por otra vía). En el acceso a uno u otro canal, comienzan a tallar una serie de cuestiones que tienen que ver con el empleo de determinados recursos: informativos, económicos y financieros.

Cuadro N° 11
Formas de comercialización según tipología (%)

Tipo de productores / Forma mayoritaria de comercialización	Pequeños	Medianos	Medianos con permanentes	Grandes	Total
Acopiador	46,6 (41)	41,2 (7)	36,4 (4)	37,5 (9)	43,6 (61)
Cooperativa	35,2 (31)	17,6 (3)	27,3 (3)	8,3 (2)	27,9 (39)
Venta directa	4,5 (4)	17,6 (3)	18,2 (2)	29,2 (7)	11,4 (16)
Otras combinaciones	13,6 (12)	23,5 (4)	18,2 (2)	25,0 (6)	17,1 (24)
Total	100,0 (88)	100,0 (17)	100,0 (11)	100,0 (24)	100,0 (140)

Fuente: Encuesta convenio GER-UNR.

En efecto, del Cuadro N° 10 se desprende la preeminencia del acopiador (43,6%) y de la cooperativa (27,9%) como canales de comercialización de la producción. Al interior de los estratos, la figura del acopiador es importante en todos ellos aunque, a medida que nos desplazamos hacia productores de mayor tamaño, su importancia decae. Así, mientras que el 46,6% de los productores pequeños vende su producción mayormente a través de este medio, solo el 37,5% de los productores grandes utiliza dicho canal. En cuanto a la comercialización a través de la cooperativa, encontramos que, salvo para los productores grandes —solo el 8,3% utiliza mayormente dicho canal—, es la cooperativa la que adquiere especial importancia. En efecto, el 35,2% de los productores pequeños comercializan a través de

ella, siguiéndole en importancia los productores medianos con permanentes (27,3%) y los medianos (17,6%). En este caso, debemos resaltar la importancia que históricamente tuvieron las cooperativas agrarias en el sector, generalmente asociadas al movimiento cooperativo de la Federación Agraria Argentina (véase Lattuada y Renold, 2004). Su importancia se comprueba a la hora de apoyar a los productores a través de adelantos financieros y de insumos (semillas, fertilizantes, etcétera). Muchos entrevistados han resaltado el papel jugado por la cooperativa durante la década del noventa para permanecer en la actividad.

Por último, la venta directa. Es aquí donde más se marca la relación entre el tamaño de la explotación y la posibilidad de comercializar la producción en forma directa, ya que lo que está en

juego es un acceso disímil a la información y a los recursos económicos y financieros. En efecto, las diferencias porcentuales entre los pequeños y medianos y los grandes productores certifican dicha relación. Incluso, si observamos a todos aquellos productores que comercializan en forma directa, el 43,8% corresponde a productores grandes.

SÍNTESIS Y ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

Todavía hoy, y a pesar de la importante disminución en el número de las explotaciones de hasta 200 hectáreas y de la introducción de tecnologías que determinaron cambios en la relación tierra-trabajo, la agricultura familiar presenta un peso significativo en la estructura agraria de la región.

La estructura agraria del sur santafecino presenta aspectos dinámicos y de gran diversidad, situación básicamente relacionada con la presencia de una agricultura familiar capitalizada.

La compra o el arrendamiento de tierras permite dar cuenta de los cortes que se producen al interior de las distintas capas de productores, entre quienes han podido mantener un ritmo de expansión y quienes no.

La persistencia y expansión de las unidades de más de 500 hectáreas involucró respuestas

significativas en torno de la escala, sea mediante la compra, sea a través del arrendamiento.

En las explotaciones de 200 a 500 hectáreas, la venta de tierras durante los años noventa es significativa. Se observa así que las unidades de tipo familiar-empresarial tuvieron estrategias más expansivas que los productores familiares medios, tanto en lo que refiere a la compra como a la toma de tierras. Por otra parte, es posible pensar que los productores más típicamente familiares desarrollaron estrategias de “repliegue”: como vimos, también tienen entre ellos mayor peso relativo quienes redujeron la cantidad de hectáreas tomadas.

Las explotaciones de hasta 200 hectáreas tuvieron dificultades para ampliar su escala productiva mediante el tradicional mecanismo de la agricultura familiar, lo que las colocó en una situación sumamente difícil en el contexto macroeconómico de la década pasada. Las compras de tierra en este estrato no son despreciables y puede plantearse que la presencia de unidades que compraron tierras da cuenta de la canalización de recursos extra agrarios hacia la producción agropecuaria (véase en este libro el artículo de Gras y Sabatino). Entre estas explotaciones, se registra la mayor cantidad de unidades que ceden parte de sus tierras.

BIBLIOGRAFÍA

- Cloquell, S. 1996 "Producción familiar en el agro santafecino" (Rosario: UNR) copia fotostática.
- Cloquell, S. 2003 "Estrategias de reproducción de la producción familiar. La problemática de la sustentabilidad de los recursos naturales en un área agrícola de la Región Pampeana", tesis doctoral (Rosario: Universidad Nacional de Rosario).
- Cloquell, S. et al. 1983 "Diagnóstico de las limitantes al aumento de la productividad en el sur santafesino", convenio (Rosario: INTA-MAG-UNR) copia fotostática.
- Cloquell, S. et al. 2001 "Transformaciones en el área agrícola del sur de Santa Fe: los cambios locales en la dinámica económica, social y cultural. Su importancia para la construcción de estrategias", ponencia presentada en las Jornadas del programa de estudios agroindustriales (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas, UBA).
- Kusnir de Winkler, L. 1971 "Los forjadores del cereal" en *Crecimiento y desequilibrio* (Buenos Aires: CEAL).
- Lattuada, M. y Renold, J. M. 2004 *El cooperativismo agrario ante la globalización* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Llovet, I. 1991 "Contratismo y agricultura" en Barsky, O. (ed.) *El desarrollo agropecuario pampeano* (Buenos Aires: INDEC / INTA / IICA).
- Porstmann, J. C. y López, G. 2001 "Variaciones en la Unidad Agrícola Económica. La influencia del precio de los granos", ponencia presentada a las II Jornadas sobre Estudios Agrarios y Agroindustriales (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas, UBA).
- Teubal, M. 1975a "Estimaciones del excedente financiero del sector agropecuario argentino" en *Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales*, N° 56, enero-marzo, Buenos Aires.
- Teubal, M. y Rodríguez, J. 2001 "Neoliberalismo y crisis agraria" en Giarracca, N. et al. *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Teubal, M. y Rodríguez, J. 2002 *Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica* (Buenos Aires: La Colmena).

MULTIOCCUPACIÓN Y PLURIACTIVIDAD EN EL AGRO ARGENTINO

EL CASO DE LOS CAÑEROS TUCUMANOS* **

NORMA GIARRACCA, SUSANA APARICIO*** Y CARLA GRAS****

INTRODUCCIÓN

En la última década, el estudio de las estrategias de multiocupación y pluriactividad entre productores de tipo familiar comenzó a vincularse, en forma creciente, con el problema del abordaje de las transformaciones agrarias y rurales en curso. Si bien la temática figuraba ya en las agendas de investigación de los distintos países —a partir de los análisis del *part-time farming* en Europa y Estados Unidos o de las

migraciones estacionales en América Latina—, es a partir de los años ochenta cuando se extiende la preocupación por abordar este fenómeno de diversificación de ocupaciones y actividades del productor y su familia en relación con los procesos en la estructura agraria¹.

* Giarracca, N.; Aparicio, S. y Gras, C. 2001 “Multiocupación y pluriactividad en el agro argentino. El caso de los cañeros tucumanos” en *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social) Vol. 41, N° 162, julio-septiembre.

** Este trabajo se basa en investigaciones financiadas por la Agencia de Promoción de Investigación del FONCYT, Secretaría para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva, Ministerio de Educación.

1 En la década del setenta, los estudios sobre la agricultura *part-time* en Europa y Estados Unidos reflejaron el interés por comprender este fenómeno (Motura y Pugliese, 1980; Brusca, 1979). Inicialmente, los investigadores se centraron en las actividades extraprediales realizadas por el titular de la explotación. De tal forma, el enfoque de

*** Magíster en Sociología. Investigadora principal del CONICET (Argentina). Docente e investigadora con una extensa trayectoria en temáticas rurales.

**** Posdoctora y socióloga (UBA), es investigadora del I Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y miembro del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad de Buenos Aires.

La mayoría de los trabajos sobre el tema abordan la pluriactividad como una estrategia de adaptación a las cambiantes condiciones técnicas, económicas e institucionales, tendiente a garantizar la persistencia de las explotaciones, en particular, de las más vulnerables, frente a los nuevos requisitos de capitalización que afectan a las agriculturas en esta etapa de globalización. No obstante, los estudios también destacan la importancia de ciertos factores que coadyuvan a la emergencia de pautas de pluriactividad entre los productores agropecuarios: la existencia de oportunidades laborales extraprediales, las condiciones de los mercados de trabajo rural, la estructura y composición de las familias, etcétera.

Distintos autores plantean que la pluriactividad constituye un rasgo estructural de las

la agricultura *part-time* asumía que la dedicación parcial del titular a las actividades agrarias significaba también un funcionamiento parcial de la unidad de producción. Este enfoque comparaba las explotaciones *part-time* con las *full-time*, conceptualizaba a las primeras como pequeñas e ineficientes, considerando que podían estar tanto insertas en procesos de desplazamiento de la actividad agropecuaria como ingresando al sector. En ese contexto, la agricultura *part-time* se visualizaba como un mecanismo de ajuste, que involucraba principalmente a las explotaciones de menor tamaño (Craviotti, 1999).

agriculturas. La misma aparece fuertemente asociada a la búsqueda por mantener la propiedad de la tierra, asegurar la subsistencia de la familia y mantener ciertas condiciones de vida previas, en contextos de pérdida de rentabilidad. Si bien dicha estrategia puede aparecer como una respuesta frente a determinadas coyunturas críticas, pocas dudas caben respecto

Hacia fines de los años ochenta, hubo un primer cambio en las conceptualizaciones empleadas para el abordaje de este fenómeno. Los estudiosos del tema comenzaron a utilizar el término “multiocupación” para tomar en cuenta las diferentes estrategias ocupacionales desplegadas por todos los miembros de la unidad doméstica. El proyecto de Arkleton Trust, llevado a cabo en 1984-1985 en 12 países de Europa, constituyó un hito en el desarrollo de investigaciones sobre el tema. Entre sus principales conclusiones, establecía que la multiocupación era un fenómeno de vieja data y que constituía un modo de vida extendido y variado, y, en tal sentido, un rasgo importante de la economía rural. Asimismo, se destacaba la naturaleza estable y persistente de las unidades multiocupadas. En el período 1987-1990, distintos autores adoptaron el término “pluriactividad”, ampliando los alcances del concepto de manera de incluir tanto las actividades que no necesariamente remitieran al trabajo asalariado como las actividades no agrarias realizadas en la explotación. De tal forma, el foco de atención viró de las unidades de producción a las unidades domésticas, integrando la diversificación de actividades prediales y no prediales (véase Fuller, 1990).

tanto de su persistencia en el tiempo como del hecho de que el campo es, en forma creciente, asiento de actividades no agrarias (Fuller, 1990). En tal sentido, Buttel y La Ramee sostienen que “la pluriactividad se ha convertido en una fuerza fundamental que modela la estructura agraria” (1991: 163, la traducción es nuestra). Podemos pensar, entonces, que las características de los distintos tipos de sujetos presentes en el agro en la actualidad no solo se complejizan al considerar sus conexiones con actividades fuera del predio, o con actividades no agrarias, sino que las mismas son condicionadas, e incluso posibles, por tales conexiones (Murmis, 2000: 13).

En este trabajo nos proponemos abordar el análisis de estrategias de pluriactividad en sectores campesinos en la Argentina —a partir de la presentación del estudio de caso de campesinos vinculados con la producción de caña de azúcar en la norteña provincia de Tucumán—, retomando dos cuestiones presentes en el debate sobre las transformaciones actuales en las agriculturas y los mundos rurales.

En primer lugar, sostendremos la hipótesis de que la pluriactividad no es solo una estrategia adaptativa sino también, y fundamentalmente, una de las principales fuentes de diversidad (Murmis, 2000); diversidad entendida

como heterogeneización creciente de capas sociales anteriormente homogéneas; como fenómeno que conlleva procesos de distinto tipo si se considera la variedad de puntos de partida y de llegada involucrados en las trayectorias de dichas capas. En tal sentido, nos importa abordar las formas en que la diversidad se redefine de cara a la pluriactividad, es decir, al considerar las conexiones del sector agropecuario con los mercados de trabajo y, en general, con actividades no agropecuarias. Nos proponemos así vincular el análisis de la pluriactividad en sectores campesinos —más precisamente, el análisis de la multiocupación campesina, ya que, como veremos, las estrategias analizadas se centran básicamente en la realización de ocupaciones externas a la unidad productiva más que en actividades de tipo empresarial no agrarias en la explotación²— con las formas

2 En sentido estricto, el concepto de “pluriactividad” no forma parte de un marco teórico consistente. En el uso que hacen del mismo los estudiosos de la temática, existen diferencias con respecto a tres dimensiones fundamentales: a) si se consideran los trabajos realizados por el productor y/o su familia fuera del predio o solo aquellos fuera de la actividad agrícola, a lo que se agrega una segunda distinción vinculada con la consideración exclusiva o no de actividades salariales; b) si se toman en cuenta actividades o ingresos; e) si se

que asume la persistencia de las explotaciones campesinas y la complejidad resultante en cuanto a las características de los sujetos involucrados en la producción agraria.

Por otra parte, diversos autores han establecido una relación entre la expansión de la pluriactividad y los procesos de diversificación económica en áreas rurales, como es el caso de los países centrales. En el agro argentino, la pluriactividad —multiocupación en nuestro caso³— ha estado estrechamente ligada al cre-

considera la realización de actividades no agrarias en el predio. En nuestro caso, hablaremos de multiocupación y no de pluriactividad, en tanto que las estrategias que analizamos para el caso de los campesinos cañeros engloban, principalmente, a las ocupaciones externas de los miembros de la familia. Estas pueden ser con relación de dependencia o pequeños emprendimientos por cuenta propia, pero de ningún modo actividades de tipo empresarial. En efecto, la precarización de los vínculos laborales hace que consideremos como “multiocupadas” no solo a aquellas explotaciones cuyos miembros se asalarizan en los mercados formales sino también a aquellos que realizan actividades como cuentapropistas, sin contratar mano de obra (véase Giarracca y Aparicio, 1991). En tal sentido, definimos a la “multiocupación” como una forma de pluriactividad orientada a observar estos comportamientos en sectores campesinos.

3 Por pluriactividad se entiende la combinación de actividades empresariales propias de unidades de explo-

cimiento de la economía informal, como también al empleo en el sector público.

Dentro de ese contexto, en este trabajo nos interrogaremos acerca de cómo y en qué medida el desarrollo de estrategias de multiocupación resulta afectado en contextos de estancamiento económico. En otras palabras, cómo se puede sostener una estrategia de multiocupación en regiones donde la desocupación amenaza la “primera ocupación” de mucha gente.

Nuestro ejercicio se halla facilitado por la posibilidad de comparar la magnitud y las características de la multiocupación entre los campesinos cañeros en dos contextos socioeconómicos diferentes: antes y después de la implementación del decreto de desregulación económica de 1991, que modificó hasta niveles anteriormente desconocidos las condiciones en que se desarrollaban las actividades económicas y los mercados de trabajo en la Argentina (véase Giarracca et al., 1997).

Para ello recurrimos a la *labour-use index* utilizada por la investigadora Utsa Patnaik (Patnaik, 1988) y que en nuestras publicaciones aparece como “tasa Patnaik” en referencia

tación que son “empresas” también en la actividad agraria, en tanto se reserva el concepto de “multiocupación” para unidades de tipo campesinas y trabajadores rurales.

a la investigadora que la construyó (Giarracca y Aparicio, 1991; Giarracca, Aparicio, Gras y Bertoni, 1995). La tasa —que fue construida con información relevada por encuestas en los años 1988 y 1996— nos permite abordar la organización del trabajo en la unidad tomando en cuenta el trabajo del productor y su familia, tanto dentro como fuera de la misma, y la contratación de mano de obra ajena. En nuestra investigación empleamos la tasa para describir las estrategias ocupacionales de las familias campesinas, y no en el sentido clásico de identificar tendencias a la descampesinización con la que fue desarrollada por Patnaik para la India. La herramienta permite las dos cosas, ya que la existencia de “otras ocupaciones” (sobre todo en el “jefe”) era vista en los años setenta como un indicador de “descampesinización”. Sin embargo el tiempo permitió corroborar que no necesariamente solo tenía ese significado y el fenómeno se comenzó a mirar desde la “permanencia” campesina.

¿Qué procesos —desplazamiento, persistencia, expansión— pueden vislumbrarse en sectores campesinos? ¿Qué relación existe entre esos procesos y la multiocupación? ¿En qué medida esta se asocia a la persistencia de las unidades campesinas? O bien, ¿en qué medida puede asociarse a procesos de expansión de

la unidad productiva? ¿Supone una estrategia de ingresos que permite generar un fondo adicional para el funcionamiento de la unidad en momentos en que existe una mayor demanda de capital para sostenerse en la producción? ¿Qué inserciones laborales pueden lograr los campesinos fuera de sus explotaciones, teniendo en cuenta los cambios en los mercados de trabajo rurales? Estos son algunos de los interrogantes que intentaremos responder a lo largo de este trabajo.

En los puntos que siguen, situamos nuestro estudio de caso en el contexto de las tendencias recientes que afectan a la capa de productores familiares. En ese marco, hacemos alusión a las formas en que tanto la pluriactividad como la multiocupación se hacen presentes. La decisión de integrar el debate de la multiocupación campesina y de los trabajadores en otro más amplio, que incluye la pluriactividad de los “familiares capitalizados”, se basa en la hipótesis de que ambos fenómenos forman parte de la creación de una “nueva ruralidad” paralela a la expansión de los procesos económicos en el nivel global.

Seguidamente, nos detendremos en el análisis de los sectores campesinos a partir del caso en estudio: los campesinos cañeros de la provincia de Tucumán. Ubicaremos a los campesi-

nos cañeros dentro de la estructura social provincial así como dentro de algunos parámetros de la actividad. Por último, nos ocuparemos de la multiocupación en esta capa de productores.

MULTIOCUPACIÓN Y PLURIACTIVIDAD EN EL AGRO ARGENTINO

Las explotaciones agrícolas están disminuyendo considerablemente en la Argentina debido a una tendencia a la concentración que se manifiesta en toda la actividad económica. El Censo Agropecuario de 1988 registró 378.357 explotaciones con límites definidos, mientras que en 1969 ese número ascendía a 538.430. Estos datos mostraban un descenso significativo en las explotaciones que, seguramente, sería aún mucho más marcado de haberse realizado el censo agropecuario en 1998 (como estaba programado)⁴.

En el último censo realizado (1988), las explotaciones agropecuarias de más de 1.000

ha poseían en conjunto 133.640.000 hectáreas, 76% de la superficie agropecuaria total del país. Las explotaciones de menos de 200 hectáreas, alcanzaban en esos años a 282.029 y representaban el 74% del total de unidades. Pese a su importancia numérica, controlaban solo 13.637.000 hectáreas, 7,7% de la superficie agropecuaria.

En el estrato de “hasta 200 hectáreas” se ubica la mayoría de las explotaciones familiares, es decir las que utilizan trabajo del jefe de la explotación y de sus familiares en la mayor parte de las labores agrícolas. Las encontramos por todas las regiones del país, incluyendo la rica región pampeana; presentan algún grado de mecanización y fuertes conexiones con otros sectores, como los contratistas de servicios, las cooperativas, los exportadores, las instituciones de asistencia técnica, etcétera.

Este sector es el que mayores interrogantes presenta respecto de su capacidad de respuesta frente a las exigencias del nuevo escenario en que se desarrolla la agricultura argentina, vale decir, frente a la demanda de una mayor escala de producción (tanto en términos de la extensión de los predios como de la dotación de capital) en un contexto en el que se suprimen los apoyos estatales. Un trabajo reciente (Murmis, 1998) plantea la existencia de una diversidad de procesos

4 Tanto el Pre-censo Agropecuario que realizó el INDEC en Pergamino como los datos generados por una consultora nacional para la Región Pampeana, indican alrededor de 24% menos de unidades de producción, siendo especialmente afectadas las de menor superficie de tierra.

en los que este sector se haya involucrado: desplazamiento de unidades, formas de persistencia que pueden incluso involucrar procesos de capitalización, reproducción, estabilidad productiva, expansión. En todos estos procesos, la pluriactividad se presenta como un resorte que aporta a la comprensión de los mismos.

En efecto, en las últimas décadas, la multiocupación y la pluriactividad ya no implican en forma excluyente la venta de trabajo estacional en mercados agropecuarios o el desarrollo de otra actividad ligada a la explotación agraria. Adquieren también el carácter de estrategias de sostenimiento de unidades familiares (tanto campesinas como *farmers*), que anteriormente habían encontrado formas más o menos exitosas de permanencia en la producción y que, en el nuevo contexto, evidencian pérdidas de ingresos, que ponen en cuestión la supervivencia de la explotación. Pero, también, la multiocupación y la pluriactividad están conectadas, en algunos casos, con procesos de expansión de la explotación: se trata de situaciones en las cuales la capitalización de las unidades está viabilizada, en distinta medida, por ingresos externos a la actividad agraria predial (Murmis, 1998). En otros casos, este tipo de estrategia se vincula con la búsqueda de ingresos familiares acordes con expectativas más altas.

Diversos estudios (Craviotti, 1999; González et al., 1996; Neiman et al., 1998; Soverna y Craviotti, 1999) permiten afirmar que estas estrategias sociales caracterizan, en la actualidad, a buena parte de los productores de tipo familiar en la Argentina. Se trata de fenómenos de diversificación de ocupaciones e inserciones productivas que resultan en un aumento de la heterogeneidad de las capas de unidades agrarias de tipo familiares. Ello se debe, por un lado, a que complejizan las inserciones en la estructura económica, y, por otro lado, a que, por lo menos en el caso de la pluriactividad, se involucran tanto procesos de reproducción como de estabilidad productiva e, incluso, de expansión con intensificación de la capitalización.

EL CASO BAJO ESTUDIO

El sector social que presentaremos como “caso” en este artículo —los campesinos cañeros de la provincia de Tucumán⁵— forma parte

⁵ Esta provincia tiene solo el 0,8% de la superficie nacional, pero es la región de mayor densidad poblacional del país: 50,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Ostentó una urbanización muy temprana en pequeños

del estrato de productores familiares —unidades de hasta 200 hectáreas para los parámetros nacionales—, pero en sus estadios de extensión de superficie más pequeños. Por el tipo de producción que emprenden, históricamente han estado incluidos en el mercado azucarero, aun aquellos más pequeños (con menos de una hectárea de superficie). La participación del Estado mediante distintas políticas a lo largo de este siglo tuvo mucho que ver en tal situación (véase Campi, 1990). En efecto, los campesinos cañeros, que han tenido una larga trayectoria de luchas sociales durante gran parte del siglo pasado, surgieron y permanecieron en la actividad cañera amparados por políticas proteccionistas que favorecían a la actividad azucarera en su conjunto, especialmente a los ingenios azucareros en manos de fuertes burguesías provinciales.

Tucumán produce alrededor del 60% de la producción nacional de caña de azúcar en el país, diferenciándose de las otras regiones productoras (las provincias de Salta y Jujuy principalmente) por el tipo de organización es-

pueblos y ciudades que viven de la administración y servicios para sus principales actividades agrarias. En la medición del INDEC de mayo de 2000, presentó la tasa de desocupación más alta del país, arañando el 20%.

tablecida, que combina ingenios de distintos tamaños con agricultores independientes —monocultivadores de caña— y, por lo tanto, con una alta dependencia de los ingenios⁶. La caña de azúcar producida en el país se orienta fundamentalmente al mercado interno, tanto para el consumo de azúcar como para los consumos industriales (las embotelladoras de gaseosas, fábricas de golosinas, etcétera).

Se trata de una actividad muy amenazada por los acuerdos económicos firmados en el marco del Mercosur, en la medida en que Brasil es un gran productor de caña y está en condiciones de sustituir la producción nacional⁷. Esta situación no es novedosa ya que la actividad se desarrolló, desde el siglo XIX, con aranceles que la protegían del mercado internacional.

6 Las otras regiones, ubicadas en las provincias de Salta y Jujuy, se organizaron con pocos y grandes ingenios que producían su propia caña y muy pocos cañeros independientes, de tipo empresarial.

7 Por ahora existe un arancel al azúcar brasileño debido a que Brasil produce con importantes subsidios del Estado. Es producto de fuertes negociaciones entre la región NOA en su conjunto con el poder central. El vigente es un decreto firmado por el presidente De la Rúa.

LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR EN TUCUMÁN

En 1988, en Tucumán producían caña alrededor de 10.000 cañeros, de los cuales solo el 25,4% no utilizaba ninguna forma de trabajo asalariado, mientras que el 46,1% no empleaba ningún tipo de mecanización agrícola. En esta situación estaban los campesinos que, aun en tales condiciones, se mantenían dentro de la actividad porque estaban habilitados por el Estado con un “cupo”, es decir, tenían una cuota de la producción y comercialización asegurada. Sin embargo, esa habilitación —que suponía también una cuotificación del mercado— no garantizaba la sostenibilidad de estas pequeñas explotaciones y los campesinos combinaban ocupaciones recurriendo al trabajo fuera de la explotación.

En 1991, todas las regulaciones —cupos de producción, cuotas de mercado, etcétera— desaparecieron, generándose así mercados libres, negociaciones privadas entre agentes económicos muy desiguales y sin aprendizajes en la negociación del mercado (véase Giarracca y Aparicio, 1997). La situación se tornó muy difícil para los campesinos que fueron abandonados a su suerte, sin apoyos crediticios ni técnicos. Algunos ingenios desaparecieron

y simultáneamente entró al sector una de las principales empresas alimentarias del país, gran consumidora industrial del azúcar⁸. En tal escenario no es extraño que en 1996 nuestros estudios registraran un menor número de productores cañeros que en 1988 y que de ellos los pequeños campesinos fueran los que habían desaparecido en mayor medida.

Cuadro N° 1

Tipología de cañeros para 1988 y 1996, en porcentajes

Tipo de productor	1988	1996
Campesinos	42,0	34,9
Campesinos transicionales	18,1	12,5
Familiares capitalizados	22,2	42,5
Empresarios	17,7	10,0
Total	100 (11.496)	100 (7.373)

Fuente: Tipologías construidas por el Grupo de Estudios Rurales (GER), sobre la base de las encuestas de 1988 y 1996.

En efecto, en 1996 —a cuatro años de estar en funcionamiento la desregulación económica

⁸ La empresa agroindustrial Arcor S.A. fue pionera en la integración vertical con el ingenio. En los últimos años entraron a sociedades de ingenios las embotelladoras de Pepsi y de Coca-Cola.

en el agro— se registraron 7.373 explotaciones cañeras, lo que significa alrededor de un 25% menos de agricultores que en 1988. Dentro de nuestra tipología, la mayor disminución recayó en el estrato de “campesinos”, mientras que, en términos relativos, se incrementaba el estrato medio (“los familiares capitalizados”)⁹. Los grandes empresarios también disminuyeron en número, pero aumentaron la cantidad de superficie que controlaban.

El principal interés de nuestros últimos estudios acerca de los cañeros se centró en las perspectivas futuras de la población campesina tucumana. A mediados de los años noventa las tasas de desocupación de la provincia llegaron al pico más alto de las últimas décadas (cercasas al 20%) y las economías regionales comenzaron a agravarse en relación con los parámetros económicos. En ese contexto, nuestros interrogantes se orientaban a comprender cómo lograban permanecer los campesinos en la actividad cañera dadas estas nuevas condiciones económicas. Y tal pregunta nos remite a los campesinos entendidos como actores com-

petentes que logran generar estrategias sociales capaces de hacerlos sobrevivir en condiciones muy desfavorables. Desde una pura “lógica de mercado”, este interrogante no tendría sentido.

En 1988 habíamos analizado dos estrategias de los campesinos: una socio-organizativa (las cooperativas) y otra familiar (la multiocupación). Reconstruirlas en el mundo campesino nos permitió dar cuenta de cómo algunos sectores campesinos lograban —por aquellas épocas— no solo subsistir sino también, en algunos casos, mejorar sus condiciones económicas y sociales. En efecto, tomando las trayectorias de los “familiares capitalizados” y de los “campesinos transicionales” habíamos corroborado en muchos de ellos una movilidad social ascendente en las décadas del setenta y ochenta, proceso sostenido a través de las organizaciones cooperativas (básicamente para la comercialización) y de la multiocupación.

Sin embargo, en los años noventa las cooperativas sufrieron duros golpes, sobre todo desde que dejaron de cumplir un papel importante en el sistema de comercialización del azúcar denominado “maquila” (véase Giarracca y Aparicio, 1991). Disminuyeron en número, quebraron y, en varios casos, se quedaron con dinero o azúcar de los campesinos. Sobrevivieron tres de las más de 30 existentes en los

9 Para una mayor información acerca de los criterios de construcción de la tipología de cañeros véase Giarracca y Aparicio, 1991; Giarracca, Aparicio, Gras y Bertoni, 1995; Aparicio y Gras, 1999.

años ochenta. Estas tres cooperativas siguen teniendo una fuerte importancia en la zona de mayor densidad campesina y, a través de ellas, los campesinos reciben servicios de cosechas y comercialización que les permiten mayor capacidad de negociación.

No obstante, la estrategia organizativa para 1996 no tenía la relevancia que tuvo ocho años atrás. Nos propusimos averiguar, entonces, qué pasaba con la estrategia familiar que denominamos “multiocupación”. Era de esperar que, aun con trabajos más precarios que en 1988, esta estrategia se hubiese extendido.

Debemos aclarar que si bien la organización cooperativa había quedado reducida a dos o tres cooperativas que seguían en funcionamiento, ellas fueron muy importantes para introducir a una fracción campesina en el gran “salto tecnológico”: la cosechadora integral. En efecto, las cooperativas fueron las primeras en armar “frentes de cosecha” (calendarios de cosechas tomando a los pequeños cañaverales como un todo) e introducir la forma de cosecha integral. Cuando se comprobó que era posible integrar en estas nuevas formas de cosecha a los campesinos, se expandieron los servicios de contratistas que trabajaban para los ingenios o para un gran productor. Esta modalidad abonaba la hipótesis de que hubiese aumenta-

do la multiocupación en tanto, al otorgar la cosecha a los “frentes”, el productor y su familia tendrían mayor disponibilidad de tiempo y lo ocuparían para trabajar afuera.

LA “MULTIOCCUPACIÓN” CAMPESINA

En 1988 nuestra investigación abordó el análisis de la multiocupación a través de la aplicación de la *tasa Patnaik*, la cual mide el balance final entre la compra y la venta de trabajo en relación con el trabajo familiar aplicado en la unidad campesina¹⁰. Si bien la tasa fue trabaja-

10 Utilizamos una versión simplificada de la tasa, ya que la autora le agregaba la relación entre tierra arrendada y tierra cedida, altamente relevante para la población objeto de su estudio, pero irrelevante para el caso tucumano, donde toda la población era propietaria de las tierras. Una segunda precisión que debemos realizar aquí en relación con el cálculo de la tasa remite a la definición de “trabajo vendido” que utilizamos. Al igual que en 1988, consideramos todo tipo de trabajo realizado fuera de la unidad por cualquier integrante del grupo doméstico, tanto aquellos trabajos que suponían un salario como aquellos otros ingresos que correspondieran a actividades extraprediales, relacionadas, en general, con formas de cuentapropismo (“changas” en la construcción, venta de productos artesanales, ingresos provenientes de pequeños comercios). Debemos señalar

da por su autora para precisar las tendencias hacia la diferenciación y descampesinización, el hecho de combinar las relaciones entre venta de trabajo y trabajo aplicado a la explotación tiene la virtud de resumir en un solo valor datos que nos permiten clasificar a las unidades campesinas en un gradiente de multiocupación.

La comparación entre los valores que asume la tasa para 1988 y 1996 nos permite además abordar el análisis de los cambios en la estructura agraria tomando como variables significativas las conexiones de este sector social con los mercados de trabajo.

La tasa se construyó a partir de la siguiente fórmula:

$$E = \frac{(H_i - H_o)}{F}$$

que como parte de la unidad doméstica se consideró a todos los miembros que vivían en ella, ya fuera en forma permanente o transitoria. En tal sentido, la definición de trabajo familiar empleada remite a la de “hogar” y no a “familia”, ya que no computamos en el cálculo de la tasa el trabajo que realizan los miembros migrados, quienes muchas veces mantienen vínculos económicos con la unidad, enviando dinero o especies, los cuales constituyen un resorte fundamental en su reproducción. Ellos fueron tenidos en cuenta para el análisis del ingreso campesino.

Donde:

H_i es días de trabajo contratado para la explotación; H_o es días de trabajo vendidos por la familia campesina; F es días de trabajo totales ocupados por la familia en la unidad durante todo un ciclo agrícola anual.

$E \geq 1$: El balance da un margen importante de trabajo contratado que es, por lo menos, semejante al propio dentro de la unidad. Patnaik los denomina “campesinos ricos” y nosotros los denominamos “ricos y transicionales”.

$1 > E > 0$: Si bien el trabajo contratado supera al vendido por la familia, este saldo es menor que el provisto familiarmente; son los “campesinos medios”.

$-1 < E < 0$: El balance entre el trabajo comprado y vendido es negativo pero el trabajo para otros se presenta en menor escala que para la propia explotación; son “campesinos pequeños”.

$E \leq -1$: El trabajo fuera de la explotación es más importante que el trabajo dentro de la unidad (“Campesinos semiasalariados”).

$E \rightarrow 8$: No hay trabajo familiar pero hay mucho trabajo de otros; Patnaik los llama “landlords” (terratenientes) y nosotros “receptores de pequeñas rentas”.

La tasa identificó en 1996 los siguientes estratos de productores, que comparamos con los valores encontrados en 1988.

Cuadro N° 2

Estratos campesinos según la tasa Patnaik en 1988 y en 1996 (en porcentajes)

Estratos / años	1996	1988
Campesinos ricos o transicionales	—	7,0
Campesinos medios	34,8	17,0
Campesinos pequeños	35,3	36,0
Campesinos semiasalariados	14,8	40,0
Campesinos receptores de pequeñas rentas	15,1	—
Total	100,0	100,0

Fuente: GER, 1996 y 1988.

El cuadro muestra cambios muy significativos en el período. En primer lugar, a diferencia de 1988, en 1996 no se registran unidades “ricas o transicionales”. Pero para comprender mejor esta información, se necesitan ciertas aclaraciones: seguramente “los ricos o transicionales” de 1988 no desaparecieron (por lo menos la totalidad) sino que, si lograron sostener su posición de finales de los años ochenta, en 1996 no fueron registrados como “campesinos” sino como “familiares capitalizados” y, por lo tanto, no les aplicamos la tasa. Lo que en realidad expresan los datos de 1996 es que en el período no se generaron nuevos “transicionales”.

En 1988 la presencia de esta franja daba cuenta de la existencia de un pequeño subcon-

junto de campesinos que estaba en mejores condiciones que el resto para generar algún excedente. Si bien entonces esta situación alcanzaba a un escaso porcentaje de unidades campesinas, su “ausencia” en 1996 denota que, en el período reciente, los campesinos no pudieron participar de procesos de expansión. Muestra, además, que la multiocupación dejó de jugar un papel importante como estrategia que permitía la generación de un fondo adicional para la capitalización de la unidad productiva. En efecto, en 1988 las unidades que denominamos “transicionales” registraban trabajo extrapredial —en términos relativos, en tareas y actividades con mejores ingresos que el resto de los campesinos— que permitían a la unidad disponer de otros recursos además de los provenientes de la venta de la materia prima para sostener procesos de inversión.

En el caso analizado, era posible pensar que la existencia de factores tales como la eliminación de medidas que favorecían el sostenimiento del ingreso campesino (a partir de la desregulación de la actividad cañera) y los procesos de cambio tecnológico habían incidido para determinar formas de persistencia sin capitalización en las que la unidad depende de su capacidad de conseguir ingresos fuera de la parcela. Sin embargo, la evolución de

las restantes categorías de campesinos según la tasa pone en duda esta afirmación. En efecto, el Cuadro N° 2 muestra que, entre las unidades que registran venta de trabajo, el peso de las “pequeñas” no varió significativamente (apenas un 0,7% menos), mientras que, por otro lado, las “semiasalariadas” disminuyeron en cerca de un 26%. Coincidentemente, las unidades “campesinas medias” se duplicaron en el período.

¿Cómo comprender el aumento de estas últimas en un contexto en el que la evolución del ingreso cañero y, en general, las condiciones en que los productores más pequeños participen del complejo azucarero hacía esperar, como tendencia, un incremento de las formas de persistencia campesinas asociadas a la multiocupación? En otras palabras, ¿es posible suponer que el grueso de las unidades campesinas ha podido sostenerse en estos años solo con el ingreso proveniente de la caña?¹¹ Nuestra hipótesis es que para comprender las variaciones entre categorías es necesario analizar dos procesos que se habrían desarrollado en forma simultánea.

11 Cabe señalar en tal sentido que la producción de caña como único cultivo para la venta subsiste en el 88% de las explotaciones campesinas.

En primer lugar, el avance de la mecanización de la cosecha muestra la intensificación de capital en la producción cañera. Determina niveles de rentabilidad muy diferentes para las explotaciones, que expresan nuevas escalas de sostenimiento en la producción (Giarracca y Gras, 1999). De allí que la incorporación de esta tecnología aparezca en forma creciente como un requisito de capitalización necesario para permanecer en la producción. Ello se tradujo en un aumento de la compra de trabajo en las unidades campesinas vía contratación de servicios de cosecha¹².

12 La contratación de servicios para labores (por ejemplo, la cosecha) consiste en la realización de la tarea por un tercero que cobra por un trabajo y pone maquinarias y trabajadores. Es una organización agrícola muy expandida en el país, que en la actividad cañera pasó de representar el 40% en 1988 al 60% en 1996 (Giarracca, 1999). Esta modalidad amplió la mecanización de procesos laborales agrarios, en particular, la cosecha: resulta sorprendente que el 16% de los campesinos declararon hacer cosecha integral a través de cooperativas, contratistas o del ingenio. Estas nuevas modalidades de integración agroindustrial, que incorporan la realización del servicio de cosecha a los cañeros, facilitan el acceso de los productores más pequeños a estas tecnologías. No obstante, los distintos tipos de arreglos con el ingenio expresan, en la mayoría de los casos, una menor participación del productor en el precio del azúcar.

Cuadro N° 3

Trabajo familiar y contratado en las unidades campesinas

Indicador	1988	1996
A: Jornales contratados por explotación	36	36
B: Jornales familiares por explotación	130	82
Total jornales	166	118

Fuente: Encuesta a cañeros, 1996, GER.

En segundo lugar, se presenta una disminución del trabajo campesino, tanto el aplicado a la explotación como el trabajo fuera de ella. Por un lado, y como muestra el Cuadro N° 3, la incorporación de tecnologías ahorradoras de mano de obra significó una importante reducción de jornales aplicados en la realización del cultivo que incluyó el trabajo de la familia. En efecto, mientras que el total de jornales familiares aplicados a la explotación muestra un descenso, los jornales contratados no varían entre los dos años considerados, dato que es coherente con los cambios en las modalidades de cosecha. En otras palabras, el tiempo dedicado a la caña es menor porque algunas etapas de la producción (cosecha, transporte, preparación del suelo) se contratan.

Por otra parte, se observa un aumento de los jornales vendidos que, sin embargo, no

compensa la disminución del trabajo aplicado en la explotación. En promedio, en el total de explotaciones se venden más jornales (188 en 1996 con respecto a 147 en 1988); sin embargo, como coexiste con un menor porcentaje de unidades que registran multioocupación (42% en 1996 mientras que en 1988 alcanzaban al 49 %), al tomar del total de las explotaciones campesinas *solo aquellas* en que se registra multioocupación, vemos que el número de jornales vendidos en cada familia alcanza a cerca del 50% más que en 1988 (446 jornales en 1996 respecto de 300 en 1988). Podríamos concluir que los que logran algún vínculo con el mercado de trabajo externo al predio pueden intensificar su oferta, mientras que los que tienen relaciones más débiles ven constreñidas sus posibilidades ocupacionales extraprediales.

Los datos señalan la incapacidad del mercado de trabajo local para absorber la mano de obra excedentaria en las explotaciones campesinas. Ello es coherente con el aumento de los índices de desocupación en la provincia. En otras palabras, lo que se encontró es una disminución de trabajo campesino aplicado a la finca y una economía provincial que no genera puestos de trabajo para esta población.

El análisis anterior plantea el interrogante acerca de las posibilidades que tienen los sectores campesinos para generar otras alternativas de ingresos. Las demandas laborales en la producción de caña (donde la población campesina solía contratarse) son menores a las de una década atrás y requieren de cierta calificación. Asimismo, en la oferta de trabajo hacia mercados más dinámicos como el de la citricultura, los cañeros compiten con mano de obra urbana (no solo por su lugar de residencia sino también por la trayectoria laboral de muchos cosecheros de cítricos, en particular, los más jóvenes, véase Aparicio, 1999).

EL TRABAJO FUERA DE LA UNIDAD CAMPESINA

La información sobre la cantidad de miembros multiocupados por unidad que registra trabajo extrapredial arroja luz sobre la complejidad de esta estrategia para aquellos que pudieron mantenerla en la última década. En efecto, del total de unidades que venden trabajo, el 55% tiene más de un miembro ocupado, y cerca del 23% tiene tres o más miembros con trabajo extrapredial. La mayoría de los miembros multiocupados son hijos del “jefe de explotación” (cerca del 80%).

Cuadro N° 4

Distribución de la población campesina según tipo de ocupación y estabilidad (en porcentajes)

Tipo de ocupación y estabilidad	Porcentaje sobre el total de población campesina que trabaja fuera de la unidad	
	1988	1996
Asalariados permanentes en servicios	28,0	13,9
Asalariados transitorios en caña	42,3	13,9
Asalariados permanentes en caña	—	2,8
Asalariados transitorios en servicios	7,5	—
Asalariados transitorios en otras actividades agrarias	12,9	19,4
Asalariados permanentes en actividades no agrarias	—	36,1
Cuenta propia	9,4	13,9
Total	100,0 (5.619)	100,0 (3.528)

Fuente: GER, 1988 y 1996.

Como en 1988, el tipo y la frecuencia o estabilidad del trabajo extrapredial están fuertemente relacionados con las distintas posibilidades del significado de estas tareas para las

familias campesinas. Sin embargo, casi una década después observamos algunos cambios en la distribución de la población campesina “multiocupada”. En efecto, si bien se siguen combinando las ocupaciones agrarias con trabajos en servicios (“cuentapropismo”), con trabajos en los municipios o delegaciones comunales, con trabajos permanentes en algunas de las industrias de la provincia y con otros trabajos agrarios, como jornaleros, la importancia relativa de cada una de estas combinaciones varió.

El Cuadro N° 4 muestra, en primer lugar, el crecimiento absoluto de las ocupaciones no agrarias entre la población campesina multiocupada. Este dato abona nuestra hipótesis acerca de la conformación de “nuevas ruralidades” que señalan nuevas articulaciones entre el sector agrario y el resto de la economía.

En segundo lugar, el cuadro señala la pérdida de puestos de trabajo en la propia actividad cañera: los “campesinos —jornaleros golondrina”— ya no encuentran en ese mercado la posibilidad de sumar ingresos extra para alimentar a la familia y subsistir. Finalmente, se destaca la disminución relativa de los ocupados en el sector servicios. Ambas situaciones muestran el debilitamiento de las unidades campesinas, en

este caso por el lado de su conexión al mercado de trabajo, en tanto el trabajo en la caña y en actividades de servicios, constituían estrategias mayoritarias entre los multiocupados de 1988.

Como sugiere el Cuadro N° 4, la disminución en caña y servicios parece haber sido compensado en parte por el incremento relativo de los asalariados en actividades no agrarias, de los cuentapropistas y el de los transitorios en otras actividades agrarias. Sin embargo, los valores absolutos hablan claramente de la expulsión de población campesina de los mercados laborales formales e informales. Esta falta de nuevas ocupaciones tiene que ver con el estancamiento de la economía provincial que no generó actividades económicas en las localidades donde vive esta población. Las pocas nuevas actividades se desarrollaron en la ciudad de Tucumán y, como en todo el país, tienen que ver con los servicios: supermercados, “shoppings”, expansión bancaria, etcétera.

UNIDADES CAMPESINAS RECEPTORAS DE PEQUEÑAS RENTAS

La aplicación de la tasa Patnaik (Cuadro N° 2) muestra, por último, el surgimiento de una

nueva categoría, integrada por aquellos que no registran trabajo familiar directo en la unidad¹³. Patnaik los denomina para la India “terratenedores” y, en el caso de la población estudiada por la autora, la ausencia de trabajo familiar directo se combina con la contratación de trabajo ajeno en proporciones significativas. Para el caso de Tucumán, nosotros los llamamos “receptores de pequeñas rentas”, porque los cambios que registra este subconjunto de explotaciones campesinas en sus características generales y, en particular, en el uso del trabajo familiar, no permiten homologarlo a lo que en Argentina se entiende por “terratenedores”.

Se trata de un subconjunto de explotaciones en las cuales el trabajo familiar —en todos los casos del productor y de algún otro miembro— se restringe a tareas de administración y supervisión. El proceso productivo se lleva adelante, en la mayoría de los casos, mediante contratistas (privados o los propios ingenios) que realizan la cosecha. En algunos casos se observa, además, la contratación de asalariados transitorios para otras tareas, principalmente para la plantación. Si bien la cesión de tierras bajo la forma del arrendamiento no tiene una

importancia significativa entre los productores de esta última categoría (3%), encontramos que un 19% entrega parte de sus tierras en aparcería. Esto daría sustento a la caracterización que hacemos de este subgrupo como un conjunto de productores que comienza a dejar de participar de la actividad a partir de la generación de excedentes en el proceso productivo, para recibir un ingreso por la propiedad de la tierra que trabajan otros, si bien mantienen su poder de tomar decisiones.

Otro rasgo interesante de destacar en este subgrupo es que el 100 % vive fuera de la explotación. En 1988, también se identificó un conjunto de productores residente en las cabeceras departamentales y los pueblos del interior de la provincia, pero, a diferencia de 1996, en estas unidades se registraba trabajo familiar directo, y era el productor el que no trabajaba en la explotación (8,7% del total de campesinos). En 1996, además, el cambio en las formas e intensidad en que se utiliza el trabajo familiar coincide con un aumento del trabajo fuera del predio.

Se trata de un subconjunto de campesinos que van perdiendo inserción como productores y que desarrollan estrategias defensivas para mantener su capital —la tierra—. En otras palabras, en este caso la multiocupación, unida al

13 Esto es, donde la tasa tiende a infinito por tener valor “0” en el denominador.

abandono del trabajo directo en la explotación y el cambio de residencia, estaría ejemplificando las formas que asume el desplazamiento en los sectores campesinos que, sin embargo, se reservan la posibilidad de “volver” a la actividad, manteniendo la tierra como una fuente de pequeñas rentas. Por el tamaño de las actividades económicas que realizan —ocupaciones asalariadas como jornaleros agropecuarios o trabajos informales (“changas”)— es posible sostener que no se trata de sectores empresariales con inversiones agrarias.

La aparición de esta nueva categoría en 1996 es un “hallazgo”, porque plantea una situación paradójica para una capa social que se define básicamente por la relación tierra-trabajo familiar. En qué medida ello modifica la inserción de este estrato de productores en la estructura social es un interrogante planteado.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Desde un punto de vista puramente económico, con la desregulación estatal de la actividad agroindustrial los pequeños agricultores tienen pocas probabilidades de permanecer en la actividad. Los datos comparativos entre las dos encuestas demuestran que, efectivamen-

te, ha desaparecido un gran número de ellos. No obstante, muchos insisten en mantener sus cañaverales y en encontrar formas de financiar sus actividades agrícolas en condiciones muy desfavorables.

El interrogante que se plantea es por qué los campesinos insisten en producir caña si ya no es un negocio redituable y ni siquiera les permite mantener a la familia en condiciones dignas. Una primera respuesta a este interrogante proviene de un aspecto que no debemos pasar por alto: en Tucumán existe “una cultura cañera”.

La identidad cañera es fuerte: ser cañero es pertenecer a un sector social con una historia que posee reconocimiento nacional por muchas razones. En primer lugar, porque fue una actividad exitosa dentro del desarrollo capitalista nacional y fueron muy pocas las provincias —sobre todo las del norte del país— que podían ostentar tal status. En segundo lugar, los campesinos cañeros, así como los trabajadores rurales y de los ingenios, protagonizaron, durante varias décadas, a través de fuertes y combativas organizaciones, protestas sociales en búsqueda de mejores posiciones en una actividad hegemónica por los propietarios de los ingenios que constituyeron fuertes burguesías provinciales. Los campesinos cañeros, sobre todo los de mayor edad, conocen y recuerdan

sus luchas sociales y, si bien se muestran muy preocupados por el presente, no se resignan a dejar la producción y creen que *“la situación puede mejorar”*.

Otro elemento importante que no debemos dejar de lado para contestar el interrogante acerca de la “insistencia campesina” es la falta de oportunidades para quienes quieran dejar la actividad. La citricultura —sobre todo el limón— se ha expandido en Tucumán debido a la estrategia de exportación que llevaron a cabo las grandes empresas. Pero es una actividad a la que los campesinos no tienen la mínima posibilidad de acceso, dados los altos niveles de inversión iniciales requeridos.

Frente a tales situaciones, los campesinos cañeros siguen manteniendo (sin incrementar) la estrategia de “multiocupación”, que les permite un ingreso que complementa al cañero en el mantenimiento de las familias. En 1988, un 7% de los multiocupados podía pensar en una expansión o inversión porque la combinación de ocupaciones los hacía excedentarios. En 1996 ese estrato desapareció, todos tienen las otras ocupaciones para subsistir o, peor aún, para financiar la actividad cañera.

No obstante, a diferencia de 1988, en 1998 encontramos un estrato —receptores de pequeñas rentas— que tomó distancia del trabajo

propriadamente campesino: vive fuera de la explotación, no realiza tareas agrícolas y cede tierra además de vender trabajo. Esta nueva combinación es una estrategia que, tal vez, les permita atravesar estos momentos que son muy desfavorables para los campesinos.

Tal vez el rasgo más importante que muestra la última medición es una organización tipo campesina con más trabajo adentro que afuera de la explotación (más del 70% de los multiocupados según el Cuadro N° 2). Ese trabajo es cada vez más “ineficiente” en términos de productividad. La disponibilidad de formas de servicio para cosecha (a través de las cooperativas o los ingenios) si bien les permite mantenerse en la actividad, les resta tareas para hacer y, por otro lado, no existe una demanda externa de ese trabajo campesino sobrante.

A diferencia de otros campesinados de América Latina, los argentinos no tienen posibilidades de migrar a otros países más desarrollados (como en el caso de los mexicanos). Tampoco Buenos Aires es ya una posibilidad laboral. En definitiva, las estrategias de pluriactividad y multiocupación se pueden desarrollar en economías con algún nivel de crecimiento sostenido y con cierta capacidad para generar empleos. No es el caso de algunas de las economías regionales

en la Argentina actual, lo cual repercute en las condiciones de trabajo y de vida de los sectores campesinos y de trabajadores rurales del noroeste argentino.

Una última reflexión está orientada al problema del azúcar en la provincia en relación con la probable finalización del proteccionismo a la importación de Brasil. El *lobby* azucarero, formado básicamente por el sector industrial del Noroeste, suele invocar la “cuestión social” para mantener el arancel al azúcar brasileño, sin reconocer los graves problemas de asimetrías en el interior mismo de la actividad. No obstante, en el caso de que subsistan las actuales condiciones de la actividad económica, la provincia de Tucumán enfrentará un problema social de magnitud aún mayor que el actual, lo que planteará, finalmente, un escenario sin actividad cañera-azucarera. Este problema puede ser mayor que el que enfrenta actualmente la provincia a raíz de la disminución de puestos de trabajo en la zafra debido a la expansión de la cosechadora integral, ya que parte de los zafreiros reemplazados fueron transitorios de otras provincias vecinas, mientras que los campesinos y sus familias residen y consumen en Tucumán.

BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio, S. y Gras, C. 1999 “Las tipologías como construcciones metodológicas” en Giarracca, N. (comp.) *Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas* (Buenos Aires: La Colmena).
- Brusca, S. 1979 *Agricultura ricca e classi sociali* (Milán: Feltrinelli).
- Buttel, F. y La Ramee, P. 1991 “The Disappearing Middle: a Sociological Perspective” en Friedland, W. et al. *Towards a new political economy of agriculture* (Boulder: Westview Press).
- Campi, D. 1990 *Política Azucarera en Argentina, 1945-1990 Regulación y crisis* (Tucumán: UNT).
- Craviotti, C. 1999 “Pluriactividad: su incorporación en los enfoques y en las políticas de desarrollo rural” en *Estudios del Trabajo* (Buenos Aires: ASET) N° 17.
- Craviotti, C. y Soverna, S. 1999 *Sistematización de estudios de casos de pobreza rural* (Buenos Aires: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, Dirección de Desarrollo Agropecuario, PROINDER).
- Fuller, A. 1990 “From part-time farming to pluriactivity. A decade of change in rural

- Europe” en *Journal of Rural Studies* (Londres: Pergamon Press) Vol. 6, N° 4.
- Giarracca, N. 1999 “Trabajo y trabajadores en la actividad cañera de Tucumán” en *Estudios del Trabajo* (Buenos Aires: ASET) N° 17.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 “Los campesinos cañeros: multiocupación y organización” en *Cuaderno del Instituto de Investigaciones* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 3.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1997 “La acción social en los procesos económicos” en Jorrot, R. (comp.) *La investigación social hoy* (Buenos Aires: EUDEBA).
- Giarracca, N. y Gras, C. 1999 “Transformaciones en las organizaciones laborales de las explotaciones agrarias de las actividades agroindustriales. Caña y tabaco en Tucumán, Argentina” en *Cuadernos de Desarrollo Rural* (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana) N° 42.
- Giarracca, N.; Aparicio, S.; Gras, C. y Bertoni, L. 1995 *Agroindustrias del Noroeste: el papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N.; Gras, C.; Gutiérrez, P. y Bidaseca, K. 1997 “Negociación y conflicto en el contrato agroindustrial. Caña y tabaco en Tucumán”, informe final (Buenos Aires: UBACYT).
- González, M. y Bilello, G. 1996 “Heterogeneidad y estrategias de los productores agrarios de la región pampeana argentina” en *Políticas Agrícolas* (Buenos Aires) Año 2, Vol. II, N° 2.
- Motura, G. y Pugliese, E. 1980 “Capitalism in agriculture and capitalistic agriculture: the Italian case” en Buttell, F. y Newby, H. (eds.) *The Rural Sociology of the Advanced Societies* (Nueva Jersey: Alianheld, Osmund & Co.).
- Murmis, M. 1998 “Agro argentino: algunos problemas para su análisis” en Giarracca, N. y Cloquell, S. (comps.) *Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena).
- Murmis, M. 2000 “Diversidad y Sociología Rural”, ponencia presentada al X Congreso Mundial de Sociología Rural (Río de Janeiro).
- Neiman, G.; Jiménez, D. y Bardomas, S. 1988 “Entre lo rural y lo urbano. La pluriactividad entre los agricultores de la región pampeana”, ponencia presentada en las Jornadas de Estudios Agrarios Horacio Giberti (Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA) agosto.

Patnaik, U. 1988 “Ascertaining the Economic Characteristics of Peasant Classes-in-Themselves in Rural India: A Methodological and Empirical Exercise” en *The Journal of Peasant Studies* (Londres) Vol. 15, N° 3, abril.

LOS PELIGROS DE LOS MODELOS “PRODUCTIVISTAS” EN EL SECTOR PRIMARIO*

Quienes tenemos largas trayectorias de trabajo en estudios de la producción agraria y los mundos rurales desde una mirada crítica, hace más de una década que nos venimos preocupando por el rumbo que toma el modelo agropecuario (resultado del conjunto de políticas emanadas del Estado y de los organismos internacionales). La tendencia a la producción de *commodities*, (por ejemplo la soja); la orientación exportadora; el avance sojero sobre cultivos alimentarios; la concentración de las unidades de producción, etcétera, nos conducían a pensar que la profundización de las tendencias agravarían problemas tales como la alimentación, la pobreza, el despoblamiento de pequeños poblados; un avance ciego de la frontera agraria sobre jungas, montes y bosques, etcétera.

* Giarracca, N. 2007 “Los peligros de los modelos ‘productivistas’ en el sector primario” en *Anales de la Educación Común*, Vol. 3, N° 8.

Una década después, cuando los resultados de diez años del modelo del “agronegocio”¹ están a la vista, se nos plantea un nuevo desafío: dar cuenta de que, además de la producción agropecuaria que nos conduce a peligros sociales y ambientales, han aparecido la producción de la minería a cielo abierto, la expansión petrolera en manos de las empresas privatizadas y otra serie de *negocios* centrados en nuestros bienes naturales, y todos ellos suman consecuencias catastróficas. Es un avance sobre el *territorio*, es decir, sobre la tierra (nuestro bien tanpreciado y envidiado) pero también sobre

1 Denominamos “agronegocio” al modelo impuesto por el neoliberalismo económico que se basa en una lógica de producción con fuerte apoyo del sector financiero, orientado a la exportación, con fuerte inversión de agroquímicos, semillas transgénicas y en gran escala. Se diferencia del anterior modelo agrícola y agroindustrial porque expulsa a la pequeña unidad familiar, reduce la incorporación de mano de obra y la fragmenta.

cerros y montañas con minas de todo tipo; sobre el agua (el Acuífero Guaraní², por ejemplo); los ríos (el uso de los ríos por las empresas papeleras ubicadas en Uruguay y también en Argentina), y sobre las zonas de biodiversidad acechadas por las empresas transnacionales.

Estos territorios son disputados económicamente dentro de un plan de dominación política en el nivel mundial. Como dice la investigadora mexicana Ana Esther Ceceña (2004) el “otro nacional” pierde su expresión para reencarnarse el mundo como un único territorio a disputar. La globalización como dispositivo ideológico comunicacional; los efectivos procesos de globalización donde se jerarquizan las financiaciones de los organismos de crédito como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI); los ordenamientos comerciales pivoteados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) o los nuevos tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), configuraron los nuevos escenarios. Los Estados nacionales contribuyeron con leyes que

habilitan las nuevas formas de inversión: leyes de privatización, patentamientos, licencias de utilización de semillas transgénicas, ley de producción minera, ley de exploración petrolera.

Estos procesos son económicos, sociopolíticos y culturales. Se basan en viejas concepciones del *desarrollo* (un ciego productivismo), en una ciencia acrítica al servicio de la innovación tecnológica de los grandes grupos económicos y en prácticas de gestión acorde a ellas. Nuevas organizaciones como la Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción/Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), complejos programas para alivio de la pobreza rural del Banco Mundial, así como organismos que se centran en una gestión de los recursos y de la biodiversidad, sustentadas en instituciones como el BM, el G8 o varias ONG como la World Wildlife Fund, World Conservation Union o el World Resource Institute, constituyen *la mano izquierda* de esta política de los grandes intereses internacionales. Proponen “desarrollos territoriales”, “sustentabilidad” dentro de la política de corte neoliberal y siguen realizando inventarios de la biodiversidad latinoamericana y mundial para continuar con la actual política de apropiación, patentamientos o “biopiratería”.

2 El Sistema Acuífero Guaraní es un cuerpo transfronterizo de agua subterránea, uno de los reservorios más grandes del mundo, perteneciente a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. [Nota de los editores originales]

LA AGRICULTURA Y LOS MUNDOS RURALES

Nuestro país ha sido integrado tempranamente al capitalismo mundial sobre la base de sus fértiles praderas productoras de cereales y ganadería. Desde la formación nacional, la agricultura tuvo fuertes rasgos capitalistas y dio lugar a burguesías agrarias que, si bien eran diversas de acuerdo a las regiones donde vivían y desarrollaban sus empresas, supieron conformar alianzas que posibilitaran tanto el impresionante desarrollo pampeano como el de las llamadas “economías regionales”. Los territorios agrarios capitalizados ocuparon la mayor parte de la agricultura, aunque siempre existió una serie de territorios marginales a este centro capitalista ocupado por mano de obra asentada, campesinos integrados de forma subordinada a las agroindustrias, comunidades indígenas asentadas en distintas formas (las “fincas” salteñas, por ejemplo), selvas, yungas, bosques, etcétera. El Censo Agropecuario de 1947 mostró que en esa fecha el 22,4% de la superficie censada era propiedad del fisco, y el 17% eran bosques y montes naturales. Junto al núcleo capitalista pervivían diversidades productivas y culturales. Pequeños agricultores capitalizados, campesinos, comunidades de campesinos que practicaban trashumancia, etcétera.

Los campesinos constituían un pequeño núcleo dentro del gran estrato de explotaciones familiares capitalizadas (Explotaciones Agropecuarias Pequeñas - EAP en Cuadro N° 1) cuyo corte de superficie en tierra se establecía “hasta 200 ha”. Con este corte de superficie, el estrato alcanzaba alrededor del 80% de las explotaciones en el período que llega hasta 1960, y dinamizaba la economía agraria como productor de agroalimentos para el mercado interno y también como exportador (y generador de divisas) acompañando a los sectores más capitalistas.

Cuadro N° 1
Peso relativo de las EAP por estratos
según los distintos censos

	CNA 1947	CNA 1960	CNA 1960	CNA 1988	CNA 2002
EAP Pequeñas	79,91	80,42	79,60	74,54	69,51
EAP Medianas	14,27	13,81	14,31	18,20	20,73
EAP Grandes	5,82	5,77	6,09	7,26	9,76
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Teubal et al., 2005: 62.

El Censo del 2002 ya mostraba el proceso de concentración en unidades de producción ma-

yores a 200 hectáreas (sobre todo mayores a 500) y el fuerte crecimiento de lo que pasaron a denominarse: megaexplotaciones (mayores a las 100.000 hectáreas).

Pero no solo en el nivel de la estructura agraria el nuevo modelo tuvo consecuencias notables, también se mostró un cambio importante en el tipo de producción predominante: se redujeron los alimentos de consumo nacional y la producción sojera se impuso sin tapujos en el país; el crecimiento del área sembrada con soja pasó de 4.328.847 en 1993 a 10.835.300 hectáreas en 2002, es decir, un crecimiento del orden del 150,3%. El aumento de la superficie implantada con esta oleaginosa se manifestó en muchas regiones del país: un 116,4% para la región pampeana; un 119,1% para la región del noreste argentino (NEA) y un 207,7% para la región del noroeste (NOA). En estas últimas dos regiones, tal aumento de la superficie oleaginosa fue a costa de aquella destinada a los tradicionales cultivos industriales, ya que esta se redujo en 29,5% y 15,8% en el NEA y NOA, respectivamente. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), la campaña 1980-1981 arrojó una cosecha de soja de 3,7 millones de toneladas; durante la de 1990-1991 fue de 10,8 millones, mientras que en la de 2002-2003 fue del

orden de los 35 millones de toneladas: casi la mitad de una producción total de 70 millones de toneladas de cereales y oleaginosas.

¿Qué se dejó de producir? La soja avanzó sobre tierras dedicadas a tambos, es decir que hoy contamos con menos producción lechera, ganadería, arroz, hortalizas, etcétera. Como vemos son producciones para el mercado interno, para la alimentación de la población interna y principales alimentos de la infancia como es la leche. Los cambios en las formas de producir fueron notables. En 1996 comienza la implantación de la semilla transgénica de la soja, comercialmente llamada "RR", cuyas siglas en inglés significan *Roundup Ready*. Roundup es la marca comercial del glifosato, herbicida al cual es resistente la soja RR. El paquete tecnológico consiste en combinar esta semilla con el glifosato, utilizado en cantidades cada vez mayores. Tanto la semilla RR como el glifosato Roundup son producidos por Monsanto. La distribución de la semilla fue luego transferida a su licenciataria Asgrow, que fue adquirida por Nidera. Sobre la base de esta nueva biotecnología de los transgénicos, la Monsanto y sus licenciatarias en la Argentina han podido inducir a los productores a agregar un paquete tecnológico controlado por ellas, al hacer que la soja incorpore genéticamente la resistencia a su propio

agroquímico, el glifosato. La introducción de este paquete tecnológico ha aumentado la dependencia de los agricultores respecto de las grandes empresas transnacionales proveedoras de semillas e insumos agrícolas.

En muchos países del mundo las semillas transgénicas no están autorizadas para el consumo humano porque se respeta el “principio de precaución” que supone que aún no se ha establecido con exactitud qué consecuencias pueden acarrear a la salud humana. Otros países como el nuestro, violan este principio y no solo autorizan el cultivo de semillas sino la alimentación humana en base a transgénicos. Tampoco se conocen a ciencia cierta las consecuencias en el nivel de los suelos. Hay fuertes sospechas acerca de la impermeabilización de los suelos por el uso del glifosato, y las recientes inundaciones en (la provincia de) Santa Fe, (en la localidad de) Tartagal (provincia de Salta) y otras regiones netamente sojeras así lo demostrarían.

Pero tal vez la consecuencia más trágica del nuevo modelo en el nivel social la constituya la aparición de una violencia en territorios rurales desconocida por la Argentina agraria del siglo XX, que tiene la finalidad de arrinconar a comunidades indígenas y campesinas del norte (Salta y Santiago del Estero sobre todo) violan-

do sus derechos a la tierra y otorgándoselas a los nuevos inversores sojeros o a los ingenios que se expanden por el nuevo negocio de los biocombustibles. Esto se hace con la complicidad de los gobiernos provinciales y la mirada distraída del gobierno nacional.

Lo que está en peligro es la convivencia de dos mundos agrarios que caracterizaron a la Argentina y la diferenciaron de otros países latinoamericanos muy polarizados (Guatemala, Ecuador, Perú). En efecto, el país se había caracterizado por la coexistencia de una agricultura con sus mundos culturales y sociales de tipo familiar en la que convivían las explotaciones campesinas, las comunidades indígenas, para la subsistencia con la explotación familiar capitalizada, nuestro “chacarero”. Unos produciendo para la autoalimentación; los campesinos, para las agroindustrias/autoalimentación, y los chacareros en la Región Pampeana, para el mercado interno y la exportación. Sus representaciones gremiales han sido la Federación Agraria Argentina, las asociaciones de pequeños productores (tal vez la más recordada es Ligas Agrarias Argentinas de la década del setenta) y organizaciones con cobertura zonal. Todos ellos convivieron, por supuesto con tensiones, durante casi todo el siglo XX con la gran propiedad ganadera y agrícola representados por la Sociedad Rural Argenti-

na y Confederaciones Rurales Argentinas. Esto fue posible por una serie de arreglos institucionales (instituciones como la Junta Nacional de Granos, de Carnes; direcciones nacionales del azúcar, la vitivinicultura, etcétera) que el Estado fue generando a partir de la década de treinta. A partir de 1991, un decreto del presidente Menem y su ministro (de Economía, Domingo) Cavallo, da por tierra con todas estas instituciones y se prepara el terreno para la implantación de este nuevo modelo.

En síntesis, el modelo de agricultura —“agro-negocio”— que se viene desarrollando desde 1991 y que se profundiza con la expansión sojera a partir de la autorización del uso de la semilla transgénica en 1996, favorece a las grandes empresas transnacionales, a grandes inversores, exportadores, comisionistas y comerciantes de los pueblos del interior donde estos procesos se dan. También el Estado es un gran socio, pues a través de las retenciones a las exportaciones (que han crecido mucho) obtiene ingresos fiscales. No obstante, podemos sostener dos consideraciones: 1) la cantidad de población beneficiada directamente con este modelo es muy poca si ponemos en la balanza los riegos que este tipo de producción acarrea, y si consideramos que lo que está en juego son las fértiles praderas que debieran utilizarse con una función social, en

primer lugar la alimentación de la población y la oportunidad para todos aquellos que desean mantener el oficio de agricultor. 2) es una modalidad muy perversa: arrojar a grandes cantidades de población fuera de sus territorios de orígenes donde producían para la autosuficiencia alimentaria, para las agroindustrias nacionales, y para una diversificada exportación (los chacareros), así como a pobladores que con sus comercios creaban una dinámica en muchas pequeñas ciudades del interior, para ofrecerles solo la gran desocupación urbana y el asistencialismo de los planes sociales.

Por último, un gran peligro del nuevo modelo es la incidencia en la salud de las poblaciones, no solo por el consumo de productos que aún no se conoce si podrán dañar o no la salud, sino por la ya probada incidencia de aumentos de enfermedades (sobre todo cáncer) en poblaciones en contacto con los nuevos agroquímicos³.

3 No solo aparecen varios documentales televisivos que han mostrado esta situación, sino que existe un interesante estudio de la Universidad Nacional de Rosario con la Fundación del Hospital Italiano de la región, que demuestran contundentemente la relación entre consumos y acopio de agroquímicos y aumentos de enfermedades, sobre todo cáncer.

LOS OTROS BIENES NATURALES EN PELIGRO

Pero como decíamos al comienzo de este artículo, no solo la tierra está en peligro, lo están muchos otros territorios que son los que contienen nuestros recursos naturales ahora codiciados por el capital transnacional. En etapas anteriores del capitalismo fue el Estado-nación el que resguardó el uso de los recursos pues se conocía que por un lado, la mayoría no son renovables; por otro, que acarrear grandes rentas (sobreganancias) y básicamente porque forman parte del patrimonio de todos. Con el neoliberalismo esto cambió, sobre todo en la Argentina. En efecto, el nuestro es el cuarto productor de petróleo en América Latina pero es uno de los pocos (ahora el único) que privatiza su exploración y explotación en la década del noventa con consecuencias económicas y sociales de inmensa magnitud (recuérdese las pobladas de Cutral-Có, Mosconi, Tartagal⁴). Lo mismo se

4 Las movilizaciones acompañadas por cortes de ruta (*piquetes*) para protestar contra la desocupación surgieron en localidades del interior de la Argentina, en las provincias de Jujuy, Neuquén y Salta en 1996 y 1997; se desarrollaron en los años sucesivos con inusitada violencia y represión. Los primeros piquetes se registra-

podría decir en relación con el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo (en este caso con la responsabilidad compartida con Brasil, Paraguay y Bolivia) y con la política de puertas abiertas a la biopiratería de las grandes empresas europeas (con sus famosas ONG supuestamente ambientalistas) que están registrando y llevándose la información de las regiones de biodiversidad⁵.

No podemos ocuparnos de todos estos bienes naturales en este artículo. Por eso he elegido el caso de la minería que desarrollaré en estas últimas páginas. La elección de la minería recae en varias razones que trataré de enumerar: 1) compartimos esta tragedia de la gran invasión de capitales norteamericanos, canadienses y australianos con el resto de los países de América Latina, y se están conformando redes de organizaciones continentales en contra de la minería; 2) la expansión en la Argentina es exponencial; 3) considero a los

ron en Cutral-Có y Plaza Huincul (ambas en Neuquén); en Tartagal, y en General Mosconi (Salta). [Nota de los editores originales]

5 Pobladores de comunidades indígenas han prohibido el paso a supuestas ONG que trabajan a cuenta de empresas para llevarse información de la rica cantidad de plantas de posibles usos medicinales en el norte del país.

maestros agentes sociales muy importantes que deben estar informados acerca de esta situación realizada sobre la base de las investigaciones de equipos universitarios autónomos e independientes, ya que la propaganda de las empresas es abundante, producto de las mejores consultoras de publicidad, y confunden a la población desinformada.

LA PRODUCCIÓN MINERA: EL “NO” DEBE SER “NO” EL CONTEXTO MACRO INSTITUCIONAL

Argentina es un país sumamente vasto en recursos mineros, con una superficie cercana a los 2.700.000 km². El 75% de las áreas con potencial minero se encuentra sin explotar, lo que hace del país un centro de atracción de inversoras, tal como lo propagandizan las páginas oficiales de Internet. Las principales áreas de explotación se localizan en la cordillera de Los Andes, en un recorrido de unos 4.500 kilómetros de largo. Un documento del Ministerio de Economía (y Producción de la Nación) publicado en Internet, recomienda la inversión en el sector minero, argumentando que, de acuerdo con un trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1999) ba-

sado en información de la Escuela de Minas de Colorado, EEUU, Argentina presenta la segunda Tasa Interna de Retorno (ganancias) más alta para un proyecto modelo de oro, y la tercera Tasa Interna de Retorno más alta para un proyecto modelo de cobre, sobre un total de 24 países considerados. El Ministerio de Economía complementó estos datos con otra información acerca de la conveniencia de los bajos costos que ofrecen los servicios públicos y la mano de obra local.

Con la sanción de la Ley 24.196/93, en pleno gobierno neoliberal de Carlos Menem, hubo un incremento muy significativo de las inversiones mineras. Asimismo, estas empresas fueron aumentando en número⁶. Un informe de la

6 Principales empresas mineras en Argentina: Bajo La Alumbra (Xstrata, Wheaton River Minerals Ltd., Northern Orion Resources Inc.), Salar del Hombre Muerto (FMC Lithium Corp.), Mina Aguilar (Compañía Minera Aguilar S.A.), Cerro Vanguardia (Anglogold), Agua Rica (Northern Orion Resources Inc.), Farallón Negro (YMAD), Pirquitas (Silver Standard), Pascua-Lama (Barrick Gold Corp.), Pachón (Noranda), Manantial Espejo (Silver Standard, Pan American Silver Corp.), Andacollo (Andacollo Gold), Veta Martha (Coeur D'Alene), Potasio Río Colorado (Río Tinto), Borax Argentina (Borax Argentina), Arizaro/Lindero (Mansfield Minera S.A., Río Tinto) (Fuente: Secretaría de Minería). Un informante, miembro del Estado, me aseguró que existen

CEPAL sostiene que de siete empresas mineras que se registraban en el país a comienzos de los noventa, se llegó en nuestros días al número de 55 firmas extranjeras y algunas pocas empresas nacionales. Y no era para menos; la citada Ley configuró un marco legal inconcebible de ser generado por un Estado soberano: le otorga a las empresas extranjeras plenos derechos de acceder al crédito interno, transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas, repatriar su inversión, además de extraer cualquier tipo de mineral sin restricciones de ningún tipo (nuclear, por ejemplo). Sumado a este marco general, (las empresas extranjeras) podrán gozar de una serie de incentivos que establece el régimen de inversiones mineras que hace de esto un gran negocio.

Es decir, el marco legal para la explotación minera tiene tal permisividad y favorece de tal modo la inversión foránea que se puede comprender fácilmente el aluvión de capitales extranjeros llegados al país en los últimos años. Como decíamos anteriormente, el Estado no solo no regula sino que habilita las condiciones para que la actividad económica extractiva, criticada por los modos de explotación y las

alrededor de 500 proyectos mineros en marcha y 250 con trabajos de exploración avanzados.

consecuencias ambientales en todo el mundo *desarrollado* (en varios países está prohibida), pueda encontrar una especie de *zona franca* jurídica y económica en la Argentina y en toda la América Latina.

LAS ASAMBLEAS AUTOCONVOCADAS POR EL “NO” A LA MINERÍA

Mientras los gobiernos de toda América Latina (gobiernos “progresistas” y de derecha como el de Guatemala) prepararon y actualizaron la legislación para que esta inversión extractiva pueda darse, son las poblaciones las que salieron a oponerse y a defender nuestros cerros, ríos, territorios. Tal vez el caso más conocido es el de Esquel⁷ que en 2003 logró un plebiscito con un resultado del 82% en contra de la instalación de la empresa canadiense Meridian Gold. Luego, la organización surgió en todos los pueblos andinos en la mira del gran capital internacional minero. Se formó una Red de

7 Ciudad cordillerana de aproximadamente 40.000 habitantes, está ubicada en el noroeste de la provincia de Chubut, a 620 kilómetros de la capital de esa provincia de la Patagonia argentina. [Nota de los editores originales]

organizaciones y finalmente la Unión de Asambleas de Autoconvocados (UAC) donde participan también organizaciones en disputa por la tierra y la Asamblea (Ciudadana Ambiental) de Gualeguaychú⁸.

El gobernador sanjuanino José Luis Gioja se ha convertido en un símbolo del funcionario aliado al capital expoliador: no solo impide un plebiscito que tiene el visto bueno del intendente y del Consejo Deliberante de Calingasta sino que se muestra orgulloso de formar parte del primer emprendimiento binacional de minería Pascua-Lama, inversión de la canadiense-norteamericana Barrick Gold. Ya cuenta con la aprobación de Chile donde (el emprendimiento) se ubicará en el Valle de Huayco en la Tercera Región, y del lado argentino muy cerca de otro yacimiento en producción —Veladero— en el noroeste de (la provincia de) San Juan. Se dice que se constituirá un “tercer país” virtual con una ciudad a 5.000 metros con un

hotel para 2.000 personas, televisión satelital, Internet, etcétera, que aprovechará las mejores ventajas de las ya favorecedoras legislaciones de ambos países.

El inmenso boquete a cielo abierto estará del lado chileno pero Argentina se llevará lo peor en contaminación ambiental: “la planta de procesos” (donde las rocas se muelen, con enormes cantidades de polvo liberadas al aire) y el “dique de colas”, una gigantesca pileta de 420 hectáreas y de 200 metros de profundidad, que cumplirá la función de basurero químico. Allí se depositarán, según cifras de la misma empresa, hasta 257 millones de toneladas de basura química. Además de los gases que emanan, estos diques pueden sufrir roturas, con filtraciones subterráneas que terminan en arroyos y ríos. El 3 de junio de 2007, el diario *Página/12* expresó:

“Imagínese ese enorme piletón con basura química filtrando en la cordillera, donde nacen todos los ríos que nos alimentan de agua y que permanecerá allí por siempre, más allá de cuando se vaya la Barrick. Además, todo en una zona de movimientos sísmicos, con dos devastadores terremotos en los últimos sesenta años”, lamenta Leonardo Fernández, de la organización campesina Asociación de Familias Rurales del Norte Jachalero.

8 La empresa española Ence y la finlandesa Botnia están finalizando el emplazamiento de dos plantas de pasta de papel en Uruguay, frente a las costas de la provincia argentina de Entre Ríos. Los impactos negativos que provocarán, generaron un fuerte movimiento de oposición liderado por los habitantes de la localidad entrerriana de Gualeguaychú. [Nota de los editores originales]

¿Para qué sirve el oro extraído? Casi un 80% para joyas y solo el 20% para usos industriales. ¿Qué le queda al país? Gran contaminación, territorios destruidos y poblaciones empobrecidas y enfermas. ¿Negocios para quiénes? Para las transnacionales y sus socios nacionales que seguramente están ubicados dentro del Estado nacional, y José Luis Gioja es un claro ejemplo.

Las poblaciones ancestrales desde siempre buscaron y extrajeron el oro de modo artesanal preservando los territorios; las leyendas cuentan de expropiadores foráneos que, engeguedidos por la búsqueda de oro, destruían con sus picos y palas partes importantes de los cerros. Los adelantos tecnológicos permiten detectar vía satélite los cerros que contienen plata, oro y cualquier otro mineral, y el cianuro que, con el agotamiento del agua de la región, permite separar rápidamente el mineral. Lo que queda ya lo narramos. El interrogante es: ¿se puede permitir y estimular esta aberrante producción?

Dos importantes poblaciones latinoamericanas lograron parar la explotación minera: Tambogrande en Perú, y Esquel en Argentina. Es decir, se puede y esto se logra con una ciudadanía informada, no propensa al engaño y sin vulnerabilidades extremas (grandes tasas de

desocupación). En este período de la historia les toca a las poblaciones de toda América Latina defender sus territorios, y lo están haciendo; y quienes estudiamos estas cuestiones tenemos la obligación de difundirlo y colaborar para que todas las poblaciones estén informadas. Es una gran tarea de la universidad y de toda la educación pública.

BIBLIOGRAFÍA

- Barbetta, P. 2005 “El Movimiento Campesino de Santiago del Estero: luchas y sentidos en torno a la problemática de la tierra” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza).
- Ceceña, A. E. 2004 *Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI* (Buenos Aires: CLACSO).
- Giarracca, N. 2007 “La tragedia del desarrollo: disputas por los recursos naturales en la Argentina” en *Sociedad* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 27.
- Teubal, M.; Domínguez, D. y Sabatino, P. 2005 “Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y

sistema agroalimentarios” en Giarracca,
N. y Teubal, M. (coords.) *El campo
argentino en la encrucijada. Estrategias
y resistencias sociales, ecos en la ciudad*
(Buenos Aires: Alianza).

Tercera Parte

PROTESTA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

DEMOCRACIA Y NEOLIBERALISMO EN EL CAMPO ARGENTINO

UNA CONVIVENCIA DIFÍCIL*

NORMA GIARRACCA Y MIGUEL TEUBAL**

INTRODUCCIÓN

Para pensar los procesos democratizadores en el campo latinoamericano se requiere poner en claro el sentido que le queremos dar a la idea. Y esto es así porque existe una vieja concepción derivada de las teorías de la modernización que da por supuesto que la democracia es un proce-

so que acompaña al desarrollo del capitalismo y, por lo tanto, al progreso técnico —desarrollo de las fuerzas productivas— y a una sola manera de producir (en determinado contexto histórico), así como sus consiguientes modos de distribuir y consumir, ordenados por el mercado. En tal escenario, se presume que las producciones agrarias latinoamericanas y sus mundos sociales, que sufrieron fuertes atrasos en relación con otros sectores económicos en la introducción tecnológica y en la producción para el mercado (o sea, en su “modernización”), serían más vulnerables a sufrir retrasos en sus procesos de democratización; y como consecuencia, a permanecer bajo la influencia de fuerzas políticas tales como el caudillismo, los compadrazgos, etcétera.

Otra versión de la misma idea sostiene que mientras los mundos urbanos, ligados a la industrialización, fueron más propensos a encontrar formas democráticas de convivencia,

* Giarracca, N. y Teubal, M. 2006 “Democracia y neoliberalismo en el campo argentino. Una convivencia difícil” en De Grammont, H. C. (comp.) *La construcción de la democracia en el campo latinoamericano* (Buenos Aires: CLACSO, Colección Grupos de Trabajo).

** Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

jerarquizando relaciones secularizadas basadas en la meritocracia que asigna recursos con criterios *racionales*, los mundos agrarios permanecen en las típicas dimensiones de las comunidades, regidos por pautas *tradicionales* contrarias a las *libertades democráticas*. Como consecuencia de todas estas ideas, los procesos de industrialización asociados indefectiblemente a la modernización habrían de conducir a las sociedades contemporáneas hacia procesos democratizadores cada vez más acabados, inclusive en el dominio de lo agrario y rural.

Todos estos planteos se sostuvieron firmemente durante gran parte del siglo XX, cuando la modernidad tardía aún desplegaba los últimos estertores de una arquitectura social que nos había incluido como parte de un occidente subdesarrollado. En los finales del siglo, con los dramáticos procesos dictatoriales de los setenta en casi toda Latinoamérica, los ochenta como la *década perdida* en lo económico pero con despliegues de incipientes procesos de democracias formales, y con la última década neoliberal y sus ajustes estructurales extremos a lo largo y ancho del continente, tales paradigmas son radicalmente cuestionados. En los noventa, el capitalismo mostró nuevamente la dimensión expropia-

toria que le dio origen, y pretendió sostener esta fase de su desarrollo con políticas neoliberales enmarcadas en democracias plagadas de casos de corrupción asociados a los meganegocios transnacionales. Cuando se abandonó la intención política de generar hegemonía con programas de inclusión, la resignación fue la única propuesta frente a un futuro que *podía ser peor* (el TINA thatcheriano: *no hay alternativa*). Como sostiene De Sousa Santos (2000), los otrora *progresistas* se convierten en conservadores: mantener el presente es lo mejor que puede ocurrir frente a un futuro *sin progreso*. Una espera sin esperanza.

Pero en los finales de la década, cuando las tensiones dentro del modelo neoliberal comienzan a mostrarse, a hacerse visibles, como suele suceder en los momentos de crisis, América Latina irrumpe configurando nuevos escenarios imbricados con los que se construyen las protestas antiglobalización o *altermundo*. El nuevo siglo nos encuentra en esta transición, en estos momentos de pasajes en los que, por ejemplo en América Latina, los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, el movimiento zapatista de México, los piqueteros (desocupados) argentinos que forman alianza con los campesinos, o el movimiento de los Sin Tierra en Brasil son —por dar solo

algunos ejemplos— los actores políticos que mayor visibilidad pública han logrado y que luchan por demostrar la construcción de *otro mundo posible*; es decir, una transformación democratizadora.

Por eso nos interrogamos: ¿se puede seguir pensando la democracia y los procesos democratizadores como hace cincuenta años? ¿Podemos sostener las mismas categorías dicotomizadoras de campo-ciudad, progreso-atraso, etcétera, de las teorías de la modernización?

¿O por el contrario, se trata de buscar nuevos sentidos para el concepto democracia, y bucear, desde las nuevas experiencias que surgieron como rebeldía a un modelo autoritario, los componentes que integran estos nuevos campos de experimentación? Dentro de este espacio encontramos movimientos sociales tales como los de derechos humanos en todo el continente, mujeres, ecologistas, indígenas y campesinos, desocupados y ocupados —esta nueva categoría que, en nuestro país, se llama *piqueteros*— pero también hallamos experiencias de producción, redes de comercialización al margen del mercado, consumos justos y solidarios, medios de comunicación (*Indymedia*, por ejemplo), nuevas instituciones educativas o científicas que cuestionan los viejos paradigmas, etcétera. Es decir, un campo de

experimentación democrática que resignifica el concepto mismo y deja abierta la potencial creatividad de la acción humana.

En este trabajo nos proponemos demostrar que estas tensiones de *control social/democratización* se manifiestan en todos los dominios sociales y no solo en las arenas donde se juegan las decisiones políticas. Con el ejemplo de lo que ocurre en la agricultura argentina se muestran, por un lado, los componentes autoritarios del modelo productivista agrícola; y por otro, las posibilidades de algunas experiencias de resistencias e iniciativas en los niveles de la producción, distribución y consumo.

Desde las acciones de las poblaciones afectadas se ponen de manifiesto las tremendas irracionalidades de una política que ha conducido al país a una transformación conservadora, concentradora de riqueza y de un empobrecimiento nunca antes conocido. Esto se logró con un manejo institucional que condujo al vaciamiento de los mecanismos de la democracia representativa y a la pérdida de todas las posibilidades que, en los comienzos de los ochenta, parecían poder desarrollarse.

Antes de desarrollar el caso argentino queremos enmarcarlo en un contexto más global, y mostrar que no es solo la agricultura argentina la que viabilizó fuertes retrocesos en las condi-

ciones de posibilidad de una democracia, sino que ha sido un proceso iniciado y desarrollado en occidente.

EL MODELO AGROALIMENTARIO IMPLANTADO A ESCALA MUNDIAL

Vivimos en un mundo crecientemente globalizado. En décadas recientes, tanto en nuestro país como en otros, fueron introducidas pausas, políticas y mecanismos vinculados con la producción agropecuaria y agroindustrial que tienen mucho que ver con el denominado modelo agroalimentario difundido masivamente a escala mundial. Como consecuencia, conviene que analicemos algunos de los elementos esenciales de este modelo, para luego tratar de vislumbrar su incidencia sobre el medio local. Nuestro punto de partida es el análisis de algunas cuestiones relacionadas con las características que asume este modelo que se expande mundialmente y sus vínculos con la problemática de la democracia. Estas reflexiones sobre las tendencias que operan a nivel mundial nos habilitan para pensar, luego, lo ocurrido en la Argentina en la década del noventa.

No cabe duda de que el nuevo modelo agroalimentario que se expande a escala mundial

tiene mucho que ver con la hegemonía creciente de la agroindustria; o mejor dicho, el *agri-business*, o sea, las grandes empresas transnacionales agroalimentarias en diversos ámbitos rurales y agropecuarios del mundo. El paradigma del modelo agroalimentario impulsado por estas transnacionales y por organismos internacionales se basa fundamentalmente en el modelo agrario estadounidense, en donde se originó la *agricultura industrial* que según algunos autores ha hecho estragos en todas partes, inclusive en EEUU, y que se contrapone al modelo de la agricultura familiar.

Como lo señala Vallianatos,

el modelo agropecuario (de EEUU), que es el ícono de la agricultura industrial en el mundo, se ha transformado en una fábrica mecanizada gigante, que en el último siglo ha atravesado a la ruralidad norteamericana minándola y “canibalizándola” y dejando detrás de sí una tierra desolada, comunidades que se desintegran y una población temerosa. (Vallianatos, 2001: 48, la traducción es nuestra)

La importancia de la pequeña explotación familiar y campesina como elemento condicionante del proceso democratizador ha sido considerada con frecuencia (Moore, 1976; Meiksins Wood, 1988; Vallianatos, 2003). En efecto, son

diversas las interpretaciones que señalan que en sus orígenes mismos, la democracia griega, y en particular la ateniense, se basaba en la persistencia de un importante estrato de campesinos que trabajaban su tierra conjuntamente con otros trabajadores artesanos. Si bien también la esclavitud era una característica de la época, la diferencia específica del caso ateniense se debía fundamentalmente al campesinado y a los demás estratos que constituían los ciudadanos trabajadores por excelencia (Meikins Wood, 1988)¹.

También en EEUU se consideró que la difusión de la explotación familiar sentó las bases económicas de las libertades y de las instituciones democráticas del país. Evidentemente, el modelo de *agricultura industrial* que pasó por diversas etapas y que tuvo una difusión creciente y masiva en este siglo se contraponen al tradicional modelo asentado en los *farmers*.

1 Vallianatos (2003) también señala la importancia que tenían los campesinos como basamento del surgimiento de la democracia en la antigua Grecia de sus antepasados. Hijo él mismo de un pequeño productor del pueblo montañoso de Valsamata, en la isla griega de Kephallonia, recuerda la vida y la alegría de vivir que tenían sus familiares y su comunidad de antaño. Según este autor, ahora todo ha cambiado: prevalece la agroindustria y se han vaciado las comunidades.

Diversos autores (Strange, 1988; Vallianatos, 2003) señalan el embate en contra del proceso democratizador que significó en EEUU el auge de la agricultura industrial en contraposición al modelo de agricultura familiar corporizada en la pequeña explotación familiar².

2 Walter Goldschmidt, antropólogo del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) en los años cuarenta, formuló una comparación entre dos comunidades rurales del Estado de California con características climáticas y de fertilidad semejantes pero que se diferenciaban básicamente por el tamaño promedio de sus explotaciones. En Arvin, el tamaño promedio de la explotación agropecuaria era de 500 acres; en cambio, en Dinuba, localizada en una región cercana a Arvin, las explotaciones tenían en promedio 53 acres. Las explotaciones de más de 160 acres cubrían el 91% de la tierra en Arvin, pero solo el 25% en Dinuba. Menos de un tercio de la población activa en Dinuba eran trabajadores rurales, mientras que en Arvin dos tercios de dicha población lo eran. Las diferencias entre ambas comunidades no podían ser mayores. “Tres cuartas partes de los *farmers* de Dinuba eran propietarios de sus tierras. Se trataba de una economía vigorosa y democrática. Una comunidad que tenía buenas escuelas tanto primarias como secundarias. Los maestros vivían en la localidad contribuyendo ampliamente a la cultura comunitaria. Los residentes de Dinuba eran, en general, de clase media, tenían buenos ingresos y un interés intenso en su comunidad. En el pueblo había tres parques públicos y dos periódicos. El pueblo disponía de buenos servicios sanitarios, calles asfaltadas y buena iluminación. Die-

La conquista del oeste en el siglo XIX se produjo en el marco de la difusión del *arado, el hacha y el ganado*, siendo la base de sustentación de un posterior proceso de mecanización. También se produjo a costa de la deforestación, el deterioro ambiental, el sobre-pastoreo y la eliminación de cuajo de las comunidades indígenas originarias. Pero el cambio más im-

cinieve por ciento de los residentes eran californianos nativos, 22% inmigrantes de los *Dust Bowls*. La media de residencia de los habitantes de Dinuba era de entre 15 y 20 años". En definitiva, "la prosperidad de Dinuba se debía a sus pequeñas explotaciones" (Vallianatos, 2003: 41). La situación de Dinuba contrastaba con la de Arvin. Aquí solo el 35% de los *farmers* eran propietarios. El 4% eran nativos de California. El 63% eran inmigrantes de la era de los *Dust Bowls* con menos de cinco años de residencia en el pueblo. Ganaban poco, no tenían mucho interés en su comunidad. Los gerentes de las grandes explotaciones eran ausentistas. Hasta los maestros del pueblo lo encontraban triste, la mayoría prefería vivir a 30 km, en Bakersfield, y viajar todos los días. Tanto las escuelas como las iglesias y la economía de Arvin estaban empobrecidas. Al pueblo le faltaba una escuela secundaria. Faltaban calles asfaltadas, iluminación y veredas para caminar. No tenía adecuadas facilidades sanitarias y de agua. El pueblo tampoco tenía un liderazgo político y administrativo propio. Por todas estas razones, Goldschmidt consideraba a Arvin "más una aglomeración de casas que una comunidad" (citado por Vallianatos, 2003: 41).

portante se produjo a partir de la introducción y la difusión masiva del maíz híbrido, que tuvo un auge espectacular entre 1930 y 1965. Este, que rápidamente sustituyó al maíz de polinización abierta, permitió al *farmer* intensificar la mecanización de su campo, ya que las plantas de maíz híbrido eran esencialmente idénticas y, por tanto, permitían una fácil cosecha mecánica. En 1935 solo el 15% de los productores de maíz en el Estado de Iowa poseía cosechadoras mecánicas. En 1945, ya el 70% utilizaba cosechadoras. Los híbridos también permitieron una mayor fertilización. Entre 1950 y 1980 la cantidad de semillas híbridas utilizadas por superficie se duplicaba año tras año. Las ventas de semillas híbridas aumentó 60%, y el tonelaje de venta de fertilizantes nitrogenados se multiplicó por 17. La producción de plantas muy cercanas unas a otras con abundantes fertilizantes también contribuyó al aumento de yuyos, insectos y enfermedades, lo cual hizo que ese maíz dependiera cada vez más de los nuevos pesticidas.

Estos procesos se encadenaron con el auge de la industria química y la producción de potentes venenos y agrotóxicos. El Paratión y otros agrotóxicos mataban insectos y plantas, pero también pájaros y toda fauna y flora útiles. Uno de los agrotóxicos más importantes

fue el DDT, sucedido por el 2,4-D. La lucha contra los rastrojos, sin embargo, contribuyó al surgimiento de insectos resistentes a los nuevos agrotóxicos, los *superbugs* (los bichos gigantes). En la actualidad existen más de 540 tipos de estos *bichos* que comen grandes cantidades de la cosecha y que son prácticamente indestructibles.

En el Tercer Mundo los campesinos que utilizan grandes cantidades de pesticidas pierden hasta la mitad de los alimentos que producen por pestes que no pueden ser controladas por ellos. En EEUU las pérdidas por la difusión de nuevas pestes ha ido en aumento, ascendiendo a 77 mil millones de dólares en 1974. El surgimiento de nuevos gases tóxicos, la utilización de los híbridos y el uso del DDT y otros agrotóxicos son característicos del nuevo modelo agroindustrial impulsado en el mundo, potenciados en la actualidad por los nuevos organismos genéticamente modificados.

Fue así como la agricultura industrial condujo no solo al aumento de la mecanización y a la utilización de tractores cada vez más potentes, sino también a la utilización creciente de los agroquímicos, los cuales aumentaron los costos sociales de producción agropecuaria. Vallianatos sostiene que “los costos de esta industrialización agraria han sido muy altos. La

acumulación de maquinaria poderosa hace que algunos *farmers* sean grandes y poderosos, capaces de explotar vastos territorios. Tienen a colonizar a los pueblos rurales vaciando al campo de la pequeña explotación. O sea, el surgimiento de un estrato de grandes productores que se adueña de la mayor parte de la tierra, adquiriendo un excesivo poder, es lo que tiende a ser perjudicial para la democracia política. Esta se basa en la persistencia de una democracia económica, es decir, un contexto en el cual a muchas pequeñas explotaciones familiares les va bien, adquiriendo un compromiso no solo con la tierra sino también con el gobierno constitucional” (Vallianatos, 2001: 49).

La concentración de la tierra y de los recursos naturales, inclusive debido a los subsidios gubernamentales y a factores tales como la provisión privilegiada de agua para irrigación a los productores más grandes por parte del gobierno, significó otorgar “a estos grandes productores privilegios antidemocráticos”, ya que en última instancia “les permitieron echar a los pequeños productores familiares de la agricultura; lo cual constituye una tragedia y una falla de la democracia” (Vallianatos, 2001: 49).

Las cifras que denotan la desaparición de los *farmers* familiares en EEUU son contundentes. En la década del veinte el éxodo agrario

afectaba a 600 mil *farmers* por año, un proceso que se intensificó entre 1940 y 1960 cuando más de un millón de *farmers* dijeron adiós a la América rural. En 1940 la población agraria de EEUU alcanzaba a 30,5 millones de personas. Hacia 1960 había descendido a 15,6 millones, y en 1970 no superaba los 10 millones. El racismo también tuvo que ver con este proceso. De los 926 mil productores negros que había en 1920, en 1974 solo quedaban 46 mil. “Se trataba de una calamidad que en 54 años deshizo todo lo que los antiguos esclavos habían ganado después de siglos de servidumbre” (Vallianatos, 2003: 49, la traducción es nuestra).

La desaparición de los *farmers* familiares se extendió hasta décadas recientes. Hacia 1979 eran 6 millones en todo EEUU. En los años ochenta continuó el éxodo ante la desintegración de las comunidades en los Estados del Farm Belt, en donde los servicios sociales y las instituciones tienden a colapsar. En 1990, 100 mil *farmers* por año dejaron el campo. “La vida de la Norteamérica Rural se cae. En lugar de comunidades rurales florecientes encontramos gente pobre, organizaciones sociales decadentes, guetos rurales con los *farmers* viviendo de la asistencia pública, las calles principales pobladas de *dealers*, *brokers* y *agentes*. Los *farmers* ya no producen alimentos, producen

commodities que compran una pocas grandes corporaciones agroindustriales con enorme poder” (Vallianatos, 2003: 50).

Un análisis de la distribución de la tierra y de aspectos vinculados con los subsidios estatales denota una creciente regresividad en el reparto de los recursos. Hacia fines de 1980, los principales beneficiarios de los favores y subsidios federales y estatales eran los grandes productores agropecuarios y las compañías agroindustriales gigantes, en detrimento de los medianos y pequeños productores familiares. Se considera que los subsidios a favor de los grandes productores y compañías contribuyeron significativamente a la exclusión social de los productores familiares, lo cual, a su vez, representa una falla de la democracia.

La agricultura industrial continúa deteriorando el medio ambiente y no solo en el medio rural. Los agrotóxicos han generado un cataclismo con efectos destructivos inusitados: constituyen la metáfora de lo que la agricultura industrial le está haciendo tanto a la naturaleza como al mundo rural en general. La utilización de maquinaria agrícola gigante, la aplicación descontrolada de pesticidas y agrotóxicos, y la difusión de fábricas ganaderas, se expanden como si los *Dust Bowls*, las grandes tormentas de polvo y tierra de las décadas del treinta,

cincuenta y setenta, nunca hubiesen ocurrido³. La enfermedad de la Vaca Loca y la ingeniería genética constituyen elementos clave de la culminación de todo este proceso. Una de las conclusiones de Vallianatos afirma que “la enfermedad de la Vaca Loca es solo un síntoma de una enfermedad sistémica de la agricultura industrial. Se trata de un sistema agropecuario global que está fuera de control”. Es un sistema

que encomia al comercio (exterior) [...] El comercio significa que los productores occidentales subsidiados puedan continuar haciendo *dumping* en los trópicos con sus granos y productos alimentarios manufacturados excedentarios. Este *dumping* favorece a pocas personas urbanas con dinero, pero hace irreparable daño a los campesinos que tratan de ganarse la vida con el cultivo de sus cosechas tradicionales. (Vallianatos, 2003: 52)

En esta misma dirección se orienta la ingeniería genética que tiende a generar desarreglos a partir de los orígenes mismos de la semilla.

3 Durante esas décadas, la utilización de estos insumos, el sobrepastoreo y la erosión del suelo generaron una serie de tormentas de polvo que trajeron consecuencias muy graves al medio ambiente.

CAMBIOS EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO EN ARGENTINA: LA TRANSFORMACIÓN CONSERVADORA

Con algunas diferencias, por supuesto, estos procesos se replican en el medio rural y agroindustrial argentino. Si bien en sus orígenes la agricultura familiar en nuestro país no tuvo tanta injerencia como en EEUU, donde fue desarrollada en el marco del movimiento *homestead* de mediados y fines del siglo XIX, en nuestro medio la agricultura familiar basada en un sistema de arrendamientos tuvo cierta importancia⁴. Sin embargo, en los últimos decenios del siglo XX, en particular con la introducción de la soja, se acentúan todos los elementos del modelo de la agricultura industrial caracterizados en el acápite anterior.

En la década del noventa se adoptaron, tanto a nivel de la economía en su globalidad como del sector agropecuario, una serie de medidas que habrían de significar cambios importantes en el funcionamiento del sistema agroalimentario, entendiendo por este a la serie de actividades involucradas en la producción agropecua-

4 Para un análisis de la ocupación territorial en nuestro país comparada con la de otros países de la denominada *periferia próspera*, ver Arceo (2003).

ria, el procesamiento industrial, la comercialización y distribución final de alimentos.

Tales transformaciones tuvieron que ver fundamentalmente con: políticas macroeconómicas globales que aplicaron sucesivos gobiernos, particularmente los *ajustes estructurales* (privatizaciones, desregulaciones y apertura al exterior) enmarcadas en el Plan de Convertibilidad de 1991; y políticas sectoriales con influencia sobre el sector agropecuario, así como también sobre los demás sectores que integran el sistema agroalimentario (procesamiento industrial y distribución final de alimentos, provisión de semillas e insumos agropecuarios, etcétera).

Entre las políticas más notables dirigidas al sector se encuentra el Decreto de Desregulación de noviembre de 1991. Si bien se trata de una disposición que incluye medidas desregulatorias que afectaron a una amplia gama de actividades, aquellas referidas tanto al sector agropecuario como a la comercialización y distribución final de productos de origen agropecuario ocupan en él un lugar destacado. A partir de este decreto, entre otras medidas de desregulación, quedaron eliminadas de cuajo todas las entidades reguladoras de la producción agropecuaria que habían sido creadas desde 1930: la Junta Nacional de Granos, la Junta

Nacional de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar. A partir de entonces, el sector agropecuario argentino emerge como uno de los más desregulados del mundo; pero, por ello mismo, más que ningún otro, se encuentra sujeto a los vaivenes de la economía mundial. Asimismo, con este conjunto de medidas —ajustes estructurales y decretos desregulatorios— cuyo objetivo manifiesto era *lograr una mayor integración a la economía mundial*, se produce una mayor variabilidad de la actividad agropecuaria debido a la variabilidad de los precios de su producción y de sus insumos, y del acceso al crédito; factores estos que inciden sobre la rentabilidad general de la actividad y las condiciones de vida de los grupos mayoritarios que integran el sector, o sea, los medianos y pequeños productores y trabajadores rurales.

Estas políticas a que hacemos referencia incidieron en la incorporación de una serie de transformaciones tecnológicas y organizativas, así como en las relaciones de poder que operan internamente en diferentes sectores y complejos del sistema agroalimentario. Se trata de un conjunto de políticas que abrió el campo a la difusión local de una serie de procesos de globalización en nuestro medio, los cuales significaron, en lo esencial, la adopción de pautas y medidas que habrían de impulsar, más que en

otros períodos anteriores, la instauración en el país del modelo de *agricultura industrial* aludido en el acápite anterior.

A partir de las privatizaciones, las desregulaciones y la apertura al exterior de la economía argentina introducidas en los años noventa, grandes empresas agroindustriales y supermercados transnacionales o transnacionalizados adquieren preeminencia en el ámbito del Sistema Agroalimentario Argentino. Se acrecienta el uso de nuevos insumos y tecnologías desarrollados o impulsados por esas grandes empresas. Asimismo, se intensifica la concentración, extranjerización e integración vertical al interior de los complejos que integran el sistema agroalimentario de nuestro país, redefiniéndose las características y la naturaleza de las relaciones de poder al interior del mismo, así como su perfil tecnológico. Con el aumento de la integración vertical, crecen la agricultura de contrato y otras formas de articulación agroindustrial, adquiriendo mayor poder las grandes empresas extra-agrarias con respecto a los medianos y pequeños productores agropecuarios y campesinos, quienes tendieron a perder significativamente su autonomía de decisión y/o fueron expulsados masivamente del sector, tal como lo demuestran los datos provisorios del reciente Censo Nacional Agropecuario (CNA).

En la década del noventa aumentó la producción global agropecuaria en la Argentina. Tuvo un protagonismo importante en este proceso el auge de la soja, y a partir de 1996 la soja RR, o sea, aquella basada en semillas transgénicas.

Hacia 1970 se introdujeron nuevas variedades de cereales y oleaginosas en la zona pampeana, y los cultivos *de segunda* en combinación con el trigo. Comienza el auge fenomenal de la producción sojera que, conjuntamente con la introducción del “germoplasma mexicano” en el trigo, permite el desarrollo del doble cultivo trigo-soja, que rápidamente se difunde en la región pampeana, y muy especialmente en la región maicera típica. Se produce una parcial sustitución del maíz y del sorgo, así como de actividades ganaderas, que participan con estos cultivos en sistemas de explotación mixta (ver De Obschatko y Piñeiro, 1986: 11).

Tal fue la base de sustentación de la nueva *agriculturización* del campo argentino, basada profusamente en la soja y el paquete tecnológico que habría de acompañarla. Se trataba de la aplicación tardía en nuestro país de algunos rasgos de la *revolución verde*.

Hacia mediados de la década de los noventa, se da un nuevo salto tecnológico en el agro argentino. En 1996 comienza la implantación de la semilla transgénica de la soja RR que se com-

bina con la denominada *siembra directa* y la utilización del *glifosato*, el agroquímico exclusivo aplicable a aquella implantación. La producción sojera se expande a lo largo y ancho del país. Se trata de una producción que tiene dos consecuencias importantes para el perfil del agro argentino: en primer lugar, contribuye significativamente a la desaparición de una serie de explotaciones agropecuarias; y, en segundo lugar, se trata de una producción orientada casi exclusivamente hacia la exportación que sustituye en gran medida la producción de alimentos básicos orientados hacia la demanda del sector interno.

Se trata de una producción que no solo se expande a costa de las tradicionales producciones agrícola-ganaderas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. También en el interior sustituye a los tradicionales cultivos industriales. En todas partes “se están reemplazando otros cultivos y sistemas productivos, y si esto se pudiera cambiar al año siguiente no sería un problema, pero lo que está sucediendo es que se están levantando montes enteros, frutales, tambos, para la siembra de soja y se está eliminando la diversidad productiva” (Pengue citado por Backwell y Stefanoni, 2002: 31).

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de estos procesos de intensificación del mode-

lo de agricultura industrial en nuestro país? El último Censo Nacional Agropecuario de 2002 registra 318 mil explotaciones agropecuarias en el país, que ocupan una superficie de 171 millones de hectáreas. En comparación con los valores del censo anterior muestra una disminución de 24,5% en el número de explotaciones (en 1988 eran 378 mil) y otra de 3,4% en la superficie incorporada a las explotaciones agropecuarias (en 1988 estas ocupaban 177 millones de hectáreas). Asimismo, aumentó 28% el tamaño promedio de las explotaciones agropecuarias para alcanzar 538 hectáreas, lo cual refleja la desaparición de las más pequeñas explotaciones. Cabe destacar que el tamaño promedio de las explotaciones agropecuarias en Argentina es mucho mayor que el que se registra en EEUU, Europa u otras partes del mundo. Una encuesta privada realizada en casi toda la región pampeana registró la reducción de la cantidad de explotaciones en 31% en el período 1992-1977. Según Giberti (2001: 128), “tan acelerado ritmo no se observa ni remotamente, por ejemplo, en EEUU o Europa”, reflejando el sesgo netamente *anti* mediana y pequeña explotación agropecuaria de las políticas gubernamentales.

Pero no solo desaparecen las medianas y pequeñas explotaciones agropecuarias. Cabe

destacar su impacto sobre la autonomía de los productores agropecuarios. Esta pérdida de autonomía incluye una creciente dependencia del productor de la provisión de insumos y semillas; y cada vez más, de la semilla transgénica, que a partir de 1996 fue difundida masivamente en el nivel de la producción sojera. Asimismo, existen algunas pocas grandes empresas semilleras transnacionales que no solo proveen la semilla sino también el paquete tecnológico y los insumos que la acompañan, que el productor se ve obligado a comprar. De tal modo, se produce la creciente dependencia del productor agropecuario no solo respecto de la agroindustria y la provisión de insumos agroquímicos, sino también —y mucho más que antes— a las empresas proveedoras de semilla. Se trata posiblemente de un punto de inflexión en el desarrollo agropecuario de nuestro país y del mundo en general. Desde que se inventó la agricultura hace diez mil años el productor agropecuario se proveía a sí mismo de la semilla que requería para el año siguiente, esencial para garantizar la reproducción de su finca agraria y su identidad como productor. Ahora, en la medida en que depende de unas pocas empresas gigantes para la provisión de la semilla y del paquete tecnológico que la acompaña, va perdiendo

esa capacidad y autonomía. El proceso comenzó con las semillas híbridas y continúa, en la actualidad, con los transgénicos.

No es de extrañar entonces algunas de las consecuencias de estos procesos que involucran una *agricultura sin agricultores*. También en Argentina encontramos pueblos desolados, el medio ambiente desarticulado, pobreza rural inusitada, y éxodo rural continuo. Todos estos elementos contribuyen al deterioro de las condiciones que sustentan la democratización. Aunque el proceso también contiene los movimientos a que hacemos referencia en los próximos acápite, los afectados suman millones.

Desde tiempo atrás, también en nuestro país se produce un fuerte proceso de mecanización, y la aplicación de agrotóxicos de todo tipo que acompaña el auge de la soja con su paquete tecnológico. Asimismo, en la década de los noventa se introduce la siembra directa, que se combina con la soja transgénica y la aplicación masiva del *glifosato*. La soja transgénica arrasa con todo, influye sobre el medio ambiente y contribuye sin igual a la exclusión social que afecta a vastos sectores de medianos y pequeños productores agropecuarios y trabajadores rurales. Vemos así que todos los elementos de una agricultura industrial se hallan presentes en nuestro medio, y van configu-

rando este perfil de una *agricultura sin agricultores* que caracteriza a nuestro ámbito rural en la actualidad.

PROTESTAS E INICIATIVAS: CAMPO DE EXPERIMENTACIÓN

Las consecuencias sociales y culturales del modelo se desplegaron en los modos de producir los alimentos, la descomposición de la agricultura familiar, los arrinconamientos y desalojos campesinos; así como en el empobrecimiento de pueblos y pequeñas ciudades del interior del país. Se registraron en todas las regiones del país, desde la rica región pampeana hasta el norte campesino. No obstante, como adelantamos en los primeros párrafos de este trabajo, con este proceso se desarrollaron otras acciones de las poblaciones. Algunas comenzaron y finalizaron dentro de la década, y otras perduran hasta el día de hoy. En tales acciones indagamos en su potencial democrático así como en las posibilidades de articulación con otras más consolidadas en el nivel nacional.

En los primeros años de la década, los chacareros (*farmers* en la bibliografía anglosajona), los campesinos y los jornaleros em-

prendieron dos tipos de acciones: trataron de adaptarse a las nuevas circunstancias económicas por medio de lo que en nuestros trabajos llamamos *estrategias sociales*. Dentro de ellas contabilizamos la pluriactividad, la multiocupación, las migraciones temporales y las formas asociativas para emprender etapas del proceso productivo o la compra de insumos con el fin de abaratar costos; y comenzaron a protestar y llevar a cabo todo tipo de acciones colectivas. Primero intentaron movilizar a los viejos gremios que representaban a los pequeños y medianos productores (Federación Agraria Argentina), y luego, claramente al margen de estos, buscaron nuevos modos de expresión, nuevas estéticas en las acciones; y fue cuando aparecieron nuevas demandas con sentidos más *universales*, es decir, elementos más democráticos.

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

Como vimos en los apartados anteriores, el Censo Nacional Agropecuario de 2002 mostró que casi un cuarto de los productores agrarios perdieron en su intento de adaptarse al modelo que propagaban los técnicos de los organismos oficiales —nacionales e

internacionales— y los comunicadores de los suplementos rurales de los principales diarios nacionales, entre otros dispositivos comunicacionales (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2003). Algunos tomaron créditos y perdieron las tierras; otros fueron convencidos de que eran inviables en sus *escalas de producción* y vendieron sus campos; y otros, sencillamente, los cedieron por una renta que les permitía vivir en algún poblado donde complementaban sus ingresos con trabajos informales o con empleos en educación o salud de las esposas.

Silvia Cloquell sostiene, para el sur de Santa Fe, que la desestructuración del sistema económico de las décadas pasadas, es decir los cierres de fábricas, frigoríficos, comercios en los pueblos del interior de la provincia y la mudanza de los agricultores familiares que *cedieron* sus tierras a los grandes sojeros, modificó la semblanza de tales poblados. Dice Cloquell: “Hay distritos en los que la falta de trabajo local genera procesos de migraciones diurnas, donde los trabajadores se trasladan a localidades vecinas para desarrollar sus actividades laborales. Es, por ejemplo, el caso de Maciel hacia Puerto San Martín y Rosario, o los traslados desde Santa Teresa hacia Pavón para trabajar en una fábrica de hortalizas

enlatadas. En los distritos crece el cuentapropismo y los pequeños comercios manejados por la familia” (Cloquell, 2003: 143).

Esta situación no solo ocurre en provincias de la región pampeana, corazón de la producción sojera, sino también en el Norte del país. Las políticas públicas nacionales no se orientan a fijar a la población en zonas agrarias; y los agricultores, aunque lo sigan siendo, tratan de vivir en poblados para que el resto de la familia encuentre salidas laborales. Es el caso de Tucumán, donde desde los campesinos cañeros hasta los agricultores familiares capitalizados de la producción hortícola de Lules residen en poblados y pequeñas ciudades (Giarracca, 1998-1999; Giarracca et al., 2003).

Estas mudanzas les permiten desarrollar la estrategia de ocupaciones múltiples, donde las familias se convierten en verdaderas empresas que consiguen ingresos de los modos más diversos. En los siguientes cuadros podrá observarse la incidencia de la *pluriactividad familiar* en dos poblaciones estudiadas por nosotros: productores sojeros del Sur de Santa Fe (estudio en convenio con Silvia Cloquell) y los horticultores del departamento de Lules de la provincia de Tucumán.

Cuadro N° 1

Tipología de explotaciones hortícolas de Lules y condición de actividad de las familias (%)

Tipo de familia a cargo	Tipo de explotación			Total
	Medias capitalizadas	Campe sinas medias	Campe sinas puras	
Pluriactiva	57,1	83,3	53,1	56,5
No pluriactiva	42,9	16,7	46,9	43,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta Grupo de Estudios Rurales (2001).

Cuadro N° 2

Explotaciones sojeras del sur de Santa Fe y condición de actividad de las familias (%)

Tipo de familia a cargo	Hasta 200 ha	De 200-500 ha	Más de 500 ha	Total
Pluriactiva	68,2	75,0	70,0	70,0
No pluriactiva	31,8	25,0	30,0	30,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta del Grupo de Estudios Rurales en convenio con la Universidad Nacional de Rosario (2001).

La *pluriactividad familiar* es una estrategia que permite comprender la permanencia de las explotaciones que para el modelo o la política oficial ya no tendrían que estar en producción. Para el caso de Lules (Cuadro N° 1) no constan los empresarios, pues consideramos la pluriactividad como un atributo de las familias (no de las empresas), y puede observarse que es un fenómeno mayoritario en todos los estratos. En el caso de Santa Fe, la pluriactivi-

dad medida en los grandes productores indica sobre todo diversificación de inversiones, en tanto ese fenómeno en los productores familiares muestra una clara estrategia de las familias y no solo de la empresa agrícola. Viven en los pueblos o pequeñas ciudades y desarrollan todo tipo de actividades, desde trabajos formales en docencia o enfermería a cargo de las esposas, hasta comercios de ropa, venta de empanadas, etcétera.

Otras formas de adaptación muy frecuentes de los productores argentinos al modelo propuesto por el Estado y las grandes corporaciones, fueron los *pools de siembra*. Comenzaron por ser una modalidad de los pequeños y medianos productores para superar la escala de producción con que el aparato comunicacional insistía como una de las principales limitantes para permanecer en la producción, y terminaron siendo adoptados por los grandes.

Consiste en agrupar una serie de productores en distintas *formas asociativas* para comprar insumos en cantidades mayores y a mejores precios, contratar servicios de terceros para una superficie mayor que abaratará el servicio, etcétera. No obstante, con el tiempo, estas formas artesanales propias de los productores fueron adoptadas por los *fondos de inversión*, que incorporaron a una combinación de inversionistas privados, operadores técnicos experimentados en el manejo del negocio agropecuario y un *management* que incluía administradores, consultores, bancos auditores, etcétera. En este nuevo esquema de *fondos de inversión*, los productores medianos y pequeños pasaron —simplemente— a ceder sus tierras.

En efecto, a diferencia de los *pools de siembra* donde participaban los pequeños y media-

nos productores, en los *fondos de inversión* la tierra se alquila justamente a estos productores, convirtiéndolos en pequeños rentistas que, mudados a las ciudades, buscan otros ingresos. Mientras tanto, estos poblados pierden las inversiones que antes hacían los agricultores locales, en tanto que los *fondos de inversión* actúan económicamente tanto en la provisión de insumos como en el nivel de transacciones bancarias en otros niveles territoriales.

En todos los casos se incrementó el uso de agroquímicos, pues el razonamiento se sustentaba en que el aumento de la escala de producción debía ir acompañado de una agricultura más intensiva y con programas tecnológicos definidos (como en el caso de la producción sojera de semilla transgénica).

Otra estrategia que se ha incrementado en el sector de los pequeños agricultores es la multiocupación del jefe, con desplazamientos territoriales. Muchos jefes de explotación buscan nuevos trabajos en los períodos de descanso, fuera de la región donde viven. Pueden ser dentro de la misma provincia en actividades de turismo y construcción o siguiendo circuitos de trabajos por varias provincias.

Estas estrategias, a nuestro entender, no modifican aspectos fundamentales de las relaciones sociales internas a la familia o ex-

ternas con otros actores socioeconómicos. Son acciones sociales de tipo defensivo, intentando salvar patrimonios de todo tipo y, en la mayoría de los casos, sin mensurar las responsabilidades en las consecuencias que sus estrategias podían producir en el nivel del medio ambiente, en el de la salud, en el de las relaciones con los pares o con los trabajadores. Se adoptaron los paquetes tecnológicos con agroquímicos en cantidades a veces innecesarias, pues la relación *peso-dólar* permitió acceder sin grandes erogaciones relativas a estos insumos. El caso de la soja, con la siembra directa y el glifosato, ya fue analizado en los apartados anteriores, pero en otras producciones el aumento de agroquímicos fue muy notable.

La horticultura se expandió en todo el país sobre la base de producciones bajo cubierta, que requieren de mayor cantidad de fertilizantes. En 2002, después de la devaluación, los productores del Norte del país comenzaron a disminuir el uso de agroquímicos importados y tomaron conciencia de que en todos los años anteriores habían utilizado hasta un 50% más de lo necesario por indicaciones, a veces, de los propios técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esto ocurrió en zonas de horticultura, de producción tabaca-

lera, y en todos los casos hubo consecuencias tanto en el medio ambiente como en la salud de las poblaciones⁵.

CAMPOS DE EXPERIMENTACIÓN DE DEMOCRACIA

Como decíamos anteriormente, junto con estas estrategias que desarrollaron las poblaciones agrarias para poder mantenerse en la producción, sin marcar alternativas a las propuestas del discurso económico hegemónico, se generaron acciones colectivas. Nuestros trabajos anteriores (Giarracca, 2001) demuestran el gran despliegue de acciones acaecidas en el interior del país. En efecto, se llevaron a cabo protestas, rebeliones de pueblos enteros, cortes de ruta, marchas con entregas de petitorios, etcétera. Los llevaron a cabo actores agrarios como los campesinos, los chacareros, los trabajadores; pero también se desplegaron en un territorio —la ruta al costado de un ingenio, por ejemplo— que congregaba a actores agrarios y desocupados, estatales, docentes,

5 El caso más dramático fue el de la provincia de Misiones, en la zona de producción tabacalera, con registro de nacimientos con malformaciones.

etcétera. Es decir, comenzó un período donde los sujetos de la protesta pudieron superar la reivindicación sectorial y conectar sus problemas con muchos otros que incluían a la mayoría de los argentinos.

Los proyectos productivos de pequeños productores y campesinos tienen larga data en el país; pero en los últimos años se vinculan con este nuevo espacio de conflictos y propuestas alternativas al modelo hegemónico. Estos proyectos, de algún modo, tratan de conectar el *oikos* (la economía de la gente) con la política; es decir, con las acciones que se proponen modificar la gramática del poder que construyen los actores económicos concentrados. Y, precisamente, en estos espacios es donde se pueden registrar novedades democráticas en relación tanto con el discurso hegemónico como con las viejas organizaciones gremiales.

Por un lado encontramos organizaciones que se originan básicamente por la defensa de los recursos naturales como la tierra y el agua. La tierra, para no perderla frente a la expansión de los grandes inversores sojeros, como fue el caso del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Para no perderla tampoco a favor de los bancos acreedores de créditos que llegaron a multiplicar sus sumas iniciales por 100, en dólares, en un par de años. Fue

el caso del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. El agua, por el proceso de privatizaciones, llegó a precios que las poblaciones del interior no podían afrontar. Fue la lucha por el agua en la Provincia de Tucumán entre 1995 y 1998. Podemos sumar a estas organizaciones muchas otras como la Red Puna, Poiajú, Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC), Unión de Pequeños Productores del Chaco (UNPEPROCH), Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), etcétera.

Para sustentar la hipótesis de que en estas organizaciones aparecen componentes novedosos que habilitan caracterizarlas como agentes de procesos democratizadores, tomamos algunas cuestiones ligadas a su surgimiento y desarrollo.

En primer lugar, todas ellas hacen su aparición pública como organización después de un proceso de acciones colectivas llevadas a cabo al margen de las viejas corporaciones gremiales. Aparecen, justamente, por carencias importantes de las antiguas organizaciones que se ligaron de varios modos a las políticas hegemónicas y que se mostraron incapaces de hacerse cargo de los problemas que surgían en las bases. Un dato muy ilustrativo en tal sentido es la conexión entre los partidos políticos y los anti-

guos gremios del campo: muchos diputados nacionales y provinciales salieron de sus filas, en estos veinte años, comprometiendo al gremio con tal o cual partido. La crisis de los partidos políticos arrastró a muchos de estos gremios, a quienes se les cuestiona la pretensión de representar *un campo* y una fuerte complicidad con las políticas neoliberales.

En segundo lugar, estas organizaciones tienen carácter político; sin embargo, a diferencia de las organizaciones corporativas del agro argentino, no proponen la representación del *campo*, o de *los productores*, entendidos como *uno*. No aspiran, como la Federación Agraria Argentina o las Confederaciones Rurales Argentinas, a representar los intereses del conjunto del campo frente al Estado⁶. Se ubican en los nuevos espacios de los movimientos sociales donde las representaciones son de carácter horizontal (aunque puedan surgir liderazgos). Es decir, a diferencia de la representación de tipo corporativo de las viejas organizaciones agrarias, los nuevos grupos buscan representa-

ciones plurales y no monopólicas. No abusan de la representación de *un campo* pues son concientes de que los problemas de los distintos sectores no son los mismos.

En tercer lugar, una diferencia muy importante con los viejos gremios recae en el tipo de reivindicación que instalan. Si bien hay una variedad de tipos de demandas, que van de lo estrictamente sectorial a muchas otras articuladas dentro de la sociedad, en general no piden *privilegios*. No son así las viejas corporaciones agropecuarias —como la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas y muchas veces la Federación Agraria Argentina— que pararon el país agrario para lograr reivindicaciones tales como no pagar impuestos. Este es un claro reclamo de tipo corporativo que supone un mejor posicionamiento en el espacio social nacional en detrimento de muchos otros sectores.

Tal vez la demanda de carácter más sectorial durante los noventa fue la del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML) al tratar de renegociar sus deudas. Su reclamo era comprendido por el resto de la sociedad pues, como se demostró más tarde, muchos sectores medios estaban en situaciones semejantes dado el carácter especulativo que tuvo el sector financiero durante esta etapa

6 Schmitter considera el corporativismo como un sistema de representación de intereses y/o actitudes, un particular acuerdo institucional para vincular los intereses, organizados en asociaciones de la sociedad civil, con las estructuras de decisión del Estado (1987: 3).

del neoliberalismo. Las principales referentes del MML, además, se integraron a los partidos políticos, pero cuando esta estrategia fracasó (se fueron con una declaración pública), el movimiento estaba fragmentado y debilitado. Sin embargo, después de ocho años de fuerte exposición en el espacio público, muchas de las chacareras habían solucionado el problema del endeudamiento.

En cuarto lugar, son importantes los intentos de democratizar las organizaciones en el plano interno. Las corporaciones agrarias argentinas son verticalistas, con conducciones que pueden durar décadas (es el caso de la Federación Agraria Argentina) y están atravesadas por la cultura patriarcal. En efecto, las mujeres no han logrado cargos importantes de conducción gremial en las corporaciones a pesar de que más del 10% de los *jefes de explotación* y más de un tercio de la *mano de obra familiar* son mujeres. La cuestión de género, así como la cuestión ambiental, han ganado espacio en las nuevas organizaciones.

En síntesis, estas nuevas organizaciones presentan aspectos internos novedosos desde su origen, ya que nacen de acciones colectivas que se consolidan en estructuraciones precarias y transitorias, con liderazgos igualmente transitorios que dan posibilidades a dirigencias

menos consolidadas y rotativas. Otro elemento muy importante es la intención de darles a sus demandas un carácter universal y de tomar distancia de los tradicionales reclamos que separaban al mundo agrario de las luchas populares (supresión de impuestos, aumento de precio de los alimentos, etcétera).

Podemos mencionar, a modo de ejemplo, dentro de este primer grupo de organizaciones de tipo político-reivindicativo, a las de la zona Norte del país. El Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR) lleva a cabo reuniones por colonia, forma parte de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, la Vivienda y el Hábitat de la Central de los Trabajadores Argentinos y de la Mesa Nacional de Organizaciones de Productores Familiares de Argentina. Actualmente está en lucha con inversores sojeros por casos de envenenamiento de animales y plantas debido a la fumigación con glifosato. Sus demandas se centran también en los derechos como ciudadanos y campesinos y en el cuidado de la salud y del medio ambiente.

La organización Unión de Pequeños Productores del Chaco (UNPEPROCH) generó una fuerte crítica a la política social agraria del gobierno del presidente Menem. Discutió, frente a los componentes autoritarios de los programas sociales, las estrategias diseñadas para

ellos. Sostiene, en un documento interno de la organización, la necesidad de debatir la cuestión relativa al uso y forma de devolución de los créditos otorgados a los beneficiarios. Es decir, trata de introducir una mayor participación de estos últimos en la toma de decisiones, situación que los lineamientos de los programas no consideran.

El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML) surge en 1995 cuando se negaron a que sus campos hipotecados por absurdas deudas bancarias fueran rematados. Pararon más de 500 remates y lograron poner en la agenda pública el problema de los endeudamientos. Por primera vez las mujeres agrarias se organizaron y aparecieron en el espacio público con gran receptividad en los mundos sociales urbanos. Pudieron lograr una cobertura territorial más amplia que las organizaciones anteriores (Giarracca y Teubal, 2001).

El Movimiento Agrario Misionero (MAM) proviene del viejo movimiento de la década del setenta: las Ligas Agrarias. Se propone la defensa de los campesinos constantemente amenazados por los nuevos inversores, por la contaminación ambiental, etcétera. Forman parte de la Mesa Nacional de Organizaciones de Productores Familiares de Argentina (Goldberg, 1999).

La Asociación de Pequeños Productores del Norte de Córdoba (APENOC) hace su aparición en los noventa entre campesinos cordobeses con interesantes modos de organización. Y dejamos para el final al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) por ser uno de los más conocidos. Surge como parte de la lucha de los campesinos con propiedad veinteañal que ven amenazadas sus tierras por los nuevos inversionistas en conjunción con un régimen de gobierno y un poder judicial provinciales que, sin duda, son de los más corruptos del país. Forma parte de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y de Vía Campesina. Propone la soberanía alimentaria, se opone al nuevo modelo agrario basado en la soja y mantiene una interesante articulación con organizaciones de desocupados de origen urbano.

Pero además de generar nuevas organizaciones en el plano político-gremial, estos movimientos sociales emergentes han desarrollado diversas experiencias en el plano de la producción, distribución y consumo de alimentos. En lo referente a la producción y comercialización adoptaron la forma de cooperativas. El movimiento cooperativo en el campo argentino tiene una fuerte tradición; pero estas nuevas iniciativas tratan de no repetir algunos de los

problemas registrados en otras épocas. Nuevos componentes, como un uso más frecuente de la asamblea, que permite tomar decisiones con el conjunto de los asociados, la participación de las mujeres, la formación permanente de los miembros para evitar que se delegue en los dirigentes, etcétera, son constantes en estas experiencias.

Por otro lado surgieron *ferias*, basadas muchas veces en viejas tradiciones provinciales. Tanto las ferias como las cooperativas están frecuentemente articuladas con un movimiento social que les dio origen. Esta articulación entre la economía y la política les permite generar una mayor autonomía y relacionarse de modo distinto con los programas del Estado.

Las cooperativas ligadas a la Red Puna y al MOCASE, así como las Ferias Francas ligadas al Movimiento Agrario Misionero, son los ejemplos más elocuentes de este tipo de experiencias.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN

Retomamos en este apartado las ideas de la introducción de este trabajo, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia o procesos de democratización? Como

vimos a lo largo de estas páginas, el modelo agroindustrial y las posteriores políticas de corte neoliberal no son condiciones de posibilidad positivas para pensar procesos de democratización en los mundos agrarios y urbanos de Argentina, pero tampoco en cualquier otro lugar. Creemos que volver a las viejas ideas de Barrington Moore —que relacionaban concentración de tierra y centralización de capital con procesos de índole autoritarios en el nivel de los gobiernos— y repasar las de Vallianatos puede ayudar en estos momentos de la América Latina cuando los propios actores piden un modelo más democrático con base en el reparto de tierras y asignación de recursos.

Las transformaciones en el nivel de las producciones, la agroindustrialización creciente, la hegemonía de grandes empresas transnacionales o nacionales, la concentración de la tierra ligada a la centralización del capital, no son, a nuestro juicio, condiciones positivas para pensar las democracias más allá del concepto minimalista (ciertos procedimientos como votar cada tanto tiempo, por ejemplo). Circula un pensamiento que relaciona *economía de mercado* con el retiro de los Estados nacionales; y como estos últimos, históricamente, desplegaron una carga de corporativismo (está bien claro en el caso de México), se considera tal *reti-*

ro como positivo. Sin embargo, ni con Estados corporativos ni con la hegemonía de empresas económicas o terratenientes, que desarrollan prácticas con una gran dosis de autoritarismo, hay democracia en un sentido profundo, que incluya la querrela por una posible igualdad.

Frente a los avances de las acciones colectivas y movimientos de los campesinos, en la Argentina de los noventa surgieron, por primera vez en su historia agraria, *guardias blancas*, civiles pagados por los nuevos inversores sojeros, que desalojan a tiros a los campesinos del MOCASE. El gobierno de Néstor Kirchner, después de muchos años de inacción gubernamental durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, decidió intervenir. El informe realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación muestra muy bien, por un lado, la relación de empobrecimiento de la población con la imposibilidad de acceder a los derechos; y por el otro, la manera en que la corrupción de los poderes del Estado (en este caso provincial) imposibilita la ejecución de la única herramienta que las democracias formales ofrecen a sus ciudadanos: la justicia.

Dice el informe: “Si bien el derecho asiste a la gran mayoría de los campesinos, la Ley de Prescripción Veinteañal es muy compleja y requiere de carísimas mensuras, además de que

el plazo de posesiones es excesivamente largo y requiere de un sostenido, preciso y costoso asesoramiento legal que impide, tácitamente, el acceso a la justicia [...] Muchos de los campesinos tenedores de derechos son injustamente desalojados de sus legítimas posesiones por supuestos dueños y compradores”. Para finalizar, “la problemática de la tenencia y posesión de la tierra es una de las principales cuestiones de la agenda de derechos humanos santiagueña, ya que el proceso de avance indiscriminado de la frontera agrícola de las oleaginosas con eje en la soja, atenta no solo contra los derechos reales de la posesión sino también contra el patrimonio ambiental de las comunidades campesinas” (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, 2004).

Este informe surge después de muchos años de resistencias del MOCASE y varios meses de acciones colectivas en toda la provincia por el esclarecimiento del asesinato de dos jóvenes, que los poderes provinciales pensaban ignorar debido al involucramiento de funcionarios. Movimiento que pide por justicia y al que se le sumaron los campesinos provinciales.

Estos procesos en el campo argentino, que integran a su vez los nuevos procesos de la sociedad en su conjunto, ocurren después de una de las crisis de legitimidad política más

importantes de la historia (2001-2002), cuyas expresiones dejaron como saldo 48 muertos en pocos días y cuyos ecos aún están presentes en el país. Los procesos de democratización reales se obtienen de una relación, en tensión y en cuestión, entre los representantes y los representados, y no del mero mantenimiento de procedimientos formales de la democracia. Para que esa relación persista, para neutralizar los avances de los actores económico-políticos que condujeron a nuestros países a la situación actual, es necesario mantener estos campos de resistencias y experimentación con nuevos actores, nuevas estéticas, nuevas propuestas, que son los que les otorgan valor a las democracias formales y delegativas que prevalecen en América Latina. En síntesis, la democratización de los mundos rurales y agrarios es un proceso que se produce en el mismo registro que la de las sociedades en su conjunto.

BIBLIOGRAFÍA

- Arceo, E. 2003 *Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación* (Buenos Aires: Universidad de Quilmes / FLACSO / IDEP).
- Backwell, B. y Stefanoni, P. 2002 “El negocio del hambre en la Argentina. ¿Soja solidaria o apartheid alimentario?” en *Le Monde Diplomatique* (Buenos Aires) febrero.
- Censo Nacional Agropecuario 2002, datos provisionales.
- Cloquell, S. 2003 “Estrategias de reproducción de la producción familiar. La problemática de la sustentabilidad de los recursos naturales en un área agrícola de la Región Pampeana”, tesis doctoral (Rosario: Universidad Nacional de Rosario).
- De Obschatko, E. y Piñeiro, M. 1986 *Agricultura pampeana: cambio tecnológico y sector privado* (Buenos Aires: CISEA).
- De Sousa Santos, B. 2000 *A crítica da razão indolente* (San Pablo: Cortez).
- Domínguez, D. y Sabatino, P. 2003 “Lo que la soja se llevó: transgénesis de un modelo”, ponencia presentada a las III Jornadas de Agricultura y Agronomía (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires).
- Domínguez, D.; Lapegna, P. y Sabatino, P. 2003 *Diagnóstico socioeconómico. Efectos de la agricultura industrial en un área de agricultura familiar* (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires / Grupo de Estudios Rurales).

- Giarracca, N. (coord.) 2001 *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. 1998-1999 "Transformaciones en la estructura social agraria cañera de Tucumán y las estrategias de los actores sociales" en *Población y Sociedad. Revista Regional de Estudios Sociales* (Tucumán).
- Giarracca, N. et al. 2003 *Territorios y lugares. Entre las fincas y la ciudad. Lules en Tucumán* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2001 "Crisis and Agrarian protest in Argentina. The Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha in Argentina" en *Latin American Perspectives* (Riverside) Vol. 28, N° 6, noviembre.
- Giberti, H. 2001 "Sector agropecuario. Oscuro panorama ¿y el futuro?" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 177, enero-febrero.
- Goldberg, C. 1999 "El Movimiento Agrario de Misiones en un escenario en transformación", mimeo.
- Meiksins Wood, E. 1988 *Peasant-Citizen and Slave: The Foundations of Athenian Democracy* (Londres / Nueva York: Verso).
- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 2004 "Informe de Santiago del Estero" en <www.jgm.gov.ar>.
- Moore, B. 1976 *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia* (Barcelona: Península).
- Pengue, W. 2000 *Cultivos transgénicos ¿Hacia dónde vamos?* (Buenos Aires: Lugar).
- Schmitter, P. C. 1987 "El siglo del corporativismo" en *Cuadernos de Sociología* (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires).
- Strange, M. 1988 *Family Farming. A New Economic Vision* (Lincoln, San Francisco: University of Nebraska Press, Institute for Food and Development Policy).
- Vallianatos, E. G. 2001 "All of Africa's gods are weeping" en *Race and Class* (Nueva York: Sage Publications) Vol. 43, N° 1.
- Vallianatos, E. G. 2003 "American cataclysm" en *Race and Class* (Nueva York: Sage Publications) Vol. 44, N° 3.

LA PROTESTA SOCIAL EN LA ARGENTINA. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y CRISIS SOCIAL EN EL INTERIOR DEL PAÍS

PRÓLOGO*

En este libro presentamos una serie de trabajos acerca de las acciones colectivas emprendidas por quienes se sintieron agraviados, excluidos, violados en sus derechos sociales en la Argentina de la última década. En la mayoría de los casos, conceptualizamos estas acciones como “protestas”. Protestar, en su definición corriente, significa “manifestar alguien su disconformidad vehemente, con algo”, “manifestarse alguien contra la validez o legalidad de un acto, tachándolo de vicioso”¹. En las definiciones académicas la protesta aparece como la herramienta política de los que no tienen poder,

1 Según el *Diccionario Kapelusz de la Lengua Española*.

* Giarracca, N. 2001 “Prólogo” (sel.) en Giarracca, N. (coord.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Madrid / Buenos Aires: Alianza).

el arma de los débiles. Cuando se manifiestan los poderosos, estamos frente a “lobbies” o “acciones corporativas”. Unas y otras son acciones con sentidos muy diferentes y con consecuencias sociales también distintas.

La mayoría de los trabajos que integran este libro fueron elaborados por el equipo de trabajo que dirijo en la Universidad de Buenos Aires. Para llevar a cabo estos estudios contamos, además, con los investigadores invitados, los economistas Miguel Teubal y Javier Rodríguez. Pero en el libro encontramos, además, el importante aporte de colegas de las ciencias políticas que están estudiando la protesta social en el nivel nacional, como Federico Schuster y Sebastián Pereyra.

Por último, invitamos a participar en el libro a la antropóloga Cynthia Pizarro, de la Universidad Nacional de Catamarca, asidua visitante de nuestros seminarios internos y sensible conocedora de las acciones campesinas de su provincia.

A mediados de la década del ochenta, la generación de organizaciones de tipo productivas (cooperativas, emprendimientos agroindustriales, sociedades familiares, etcétera) estaba a la orden del día entre los agricultores familiares. Es así que, con el GER (Grupo de Estudios Rurales), emprendí el estudio de *las cooperativas* como agentes de un posible desarrollo (véase Giarracca, 1994). Por aquellos tiempos había esperanzas respecto de un desarrollo económico equitativo que acompañara el proceso de democratización política.

A comienzos de la década del noventa (y sobre todo después de 1991) comenzaron a manifestarse, primero sobre las cooperativas bajo estudio y luego en el mundo rural en general, las consecuencias de la medida económica conocida como “desregulación económica” (que es tratada en el trabajo de Teubal y Rodríguez). La situación de crisis no solo comenzaba a manifestarse en el Tucumán rural o en la economía valletana de Río Negro, sino que empezaron a colapsar los pequeños poblados, dependientes de extracciones primarias como el petróleo. La imagen de “arrinconamiento” a la población trabajadora del interior del país se expandía: crisis de la pequeña agricultura, quiebra de las cooperativas, pequeños poblados que se convertían en fantasmas, desocupa-

ción que comenzaba a notarse en los grandes centros urbanos.

En 1993, con Miguel Teubal registramos la primera gran marcha de los agricultores después de la desregulación, en un artículo que denominamos “El día en que la Plaza de Mayo se vistió de campo”, magistralmente ilustrado por Sábat en la revista *Realidad Económica*. La Plaza de Mayo, en la imaginación de Sábat, recibía la marcha del campo con un tractor en la punta de la Pirámide. Ese tractor, El Pampa, estuvo muchas veces en la plaza durante la década, acompañando a la Marcha Federal (1994) y al Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (1997), hasta que en 1998 las autoridades de la ciudad (cuando Fernando de la Rúa era jefe de Gobierno) le prohibieron la entrada. Los agricultores solo se animaron a desobedecer la medida en la gran protesta agraria de julio de 1999, cuando el gobierno de Carlos Menem agonizaba y la Alianza estaba más cerca que nunca de la protesta social.

No fue tarea fácil instalar el tema de la protesta social agraria en la agenda de investigación de comienzos de la década. No había consenso entre los especialistas de los estudios rurales acerca de las consecuencias que desataría el proceso político-económico. La gente con formación marxista ortodoxa o desarrollista vio

con buenos ojos las medidas desregulatorias: se liberarían fuerzas productivas y se produciría un desarrollo notable. El recuerdo del “progreso” basado en una economía agroexportadora aún está presente entre algunos sectores de la producción y de sus especialistas.

La imagen de un fuerte desarrollo agrario (la producción y productividad de algunos cultivos aumentaba) estaba muy apoyada, además, por un dispositivo discursivo generado por las grandes organizaciones; las empresas de agroquímicos y semillas, los “especialistas” de los suplementos rurales de los principales matutinos porteños y las fundaciones de los economistas neoliberales. Todavía perdura: la diferencia es que hoy tienen que admitir que el desarrollo programado tiende a convertir a los chacareros y a los trabajadores en “expulsados del campo”. La resistencia y la protesta social es un tema ignorado por quienes mantienen este discurso: la generación de “parias” en el campo se considera inevitable.

Comencé a trabajar el tema de la protesta agraria, el nuevo tipo de organizaciones rurales nacidas al calor de las resistencias a desalojos de la tierra, etcétera, al margen de los proyectos institucionalizados. En 1992 pasé unos meses en La Haya y tuve acceso a la magnífica biblioteca del Institute of Social Studies (ISS), en la que me

interné durante esos meses. Mi lectura se desplazó de los problemas de desarrollo rural a la más interesada, a mi entender, en comprender los cambios sociales y políticos desde una geografía conceptual postestructuralista, que recibe el nombre genérico de estudios de Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Los textos de Alberto Melucci, Mario Diani y Ron Eyerman, Donatella Della Porta, Paolo Donatti y David Slater, así como nuevos textos de autores más conocidos en Argentina como Ernesto Laclau, Alain Touraine, Charles Tilly, fueron invalorable aporte en aquella búsqueda personal por dilucidar situaciones de fuertes transformaciones en las que la conflictualidad se expande socialmente.

Mi interés se centraba en comprender los momentos en que la gente se siente excluida, agraviada, no contenida en los marcos institucionales de las democracias; comprender estas situaciones en las que es dable llegar a la acción colectiva o, por el contrario, cuando la gente puede resignarse o emprender respuestas de violencias difusas.

La acción colectiva se produce en “ciertas condiciones” y conocerlas es uno de los grandes interrogantes de las Ciencias Sociales. Es en tales momentos, cuando las personas agraviadas o excluidas pueden superar el malestar mortificante que produce la situación, cuando

aparece la acción de protesta. Protestar es una actitud activa, transgresora (Ulloa, 1995).

Las protestas y movimientos europeos son muy diferentes de los de nuestras realidades: no se trataba de extrapolar comprensiones. En realidad, lo que me importaba como búsqueda era el modo de abordar, de pensar estas nuevas problemáticas, las sugerencias teórico-metodológicas que aquellos materiales nos podían brindar. Recordemos que los europeos habían pasado unas décadas antes por el surgimiento de los NMS (mientras en la Argentina estábamos en dictadura) y, además, nos llevaban la delantera, por muchas razones, en este ejercicio de pensar imaginativa y creativamente las transformaciones sociales (lo que en este trabajo llamo la comprensión “postestructuralista”).

Ese material descubierto en Holanda por aquellos años, así como mi acercamiento a colegas que, desde otras perspectivas (políticas, filosóficas), comenzaban a abordar el tema, fueron decisivos en mi decisión de incorporar el tema a la agenda de la Sociología Rural. En efecto, Federico Schuster y Adrián Scribano, desde otras disciplinas y con un buen bagaje de teoría política, comenzaban también a preguntarse por “la acción colectiva” y sus posibilidades en los nuevos escenarios de los noventa. Con mucha generosidad me integraron

en sus seminarios, discusiones, redes. En ellos encontré a los interlocutores que no tenía en los espacios de los estudios agrarios, y creo no equivocarme si digo que ellos valoraban en mí esa larga experiencia en trabajos empíricos y esa facilidad para acercarnos y comprender las acciones de los actores sociales que tenemos algunos sociólogos rurales².

En julio de 1994, en una gran acción desde el interior del país, conocida como la Marcha Federal, se puso en acto esta situación de arrinconamiento de las poblaciones subalternas de la que hablaba antes. El campo estuvo en la calle pero también marcharon los desocupados de General San Martín o de Cutral-Có, los estatales de Jujuy, los maestros de Neuquén. Un tiempo después, cuando los medios de comunicación comenzaron a dar cuenta de los primeros remates judiciales saboteados por un grupo de chacareras de

2 Un tiempo más tarde aparecieron los colegas brasileños y mexicanos que ya habían iniciado fértiles reflexiones sobre las nuevas experiencias campesinas (el Movimiento Sin Tierra, la Coordinadora Plan de Ayala, etcétera) desde los aportes teóricos metodológicos que proporcionan las nuevas bibliografías postestructuralistas. En julio de 2000, en el Congreso Mundial de Sociología Rural, participé y coordiné junto a Edna Castro un simposio sobre los nuevos movimientos sociales agrarios en el sur de América Latina.

La Pampa, decidí que ya era hora de generar un programa de investigación, que la problemática de la “protesta social agraria” nos acompañaría, como país, durante un largo tiempo.

El acercamiento a las Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML) fue muy importante para comprender que la situación no tenía retorno sin una acción eficaz de los actores afectados: estaban perdiendo las tierras, los trabajadores perdían sus trabajos, los pueblos del interior se convertían en lugares de soledad y desamparo. En 1996 comenzamos a investigar con Miguel Teubal el origen del MML y la situación de endeudamiento por la que atravesaban.

Y en efecto, generamos un programa de investigación en el cual intentamos cuantificar las acciones de protesta de cuatro regiones del país. Tomamos no solo las acciones de los actores agrarios sino las que ocurrían en pueblos de baja urbanización castigados por los cierres de empresas agroindustriales o extractivas (YPF). Realizamos, además, el seguimiento de varias experiencias, muchas de ellas a través de los proyectos de investigación de los becarios UBA o CONICET. Miguel Teubal y Javier Rodríguez, economistas ambos, son investigadores del Centro de Estudios Avanzados y fueron miembros invitados en nuestro programa.

[...]

BIBLIOGRAFÍA

- Giarracca, N. 1994 *Acciones colectivas y organización cooperativa* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, Bibliotecas Universitarias).
- Ulloa, F. 1995 *Novela clínica psicoanalítica. Historial de una práctica* (Buenos Aires: Paidós).

LA PROTESTA SOCIAL EN LA ARGENTINA. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y CRISIS SOCIAL EN EL INTERIOR DEL PAÍS

INTRODUCCIÓN*

NORMA GIARRACCA Y KARINA BIDASECA**

LAS DEFINICIONES

Esta introducción a los diversos y ricos trabajos —que dan cuenta de un fenómeno social al que caracterizamos genéricamente como “protesta social”— tiene como finalidad alcanzar una definición teórica de la *acción colectiva de protesta*. Partimos de comprenderla, obviamente, como un tipo específico de acción colectiva que se inscribe en el espacio público y que es síntesis de un acto político. Para aprehender su especificidad —y desde las teorizaciones de Alberto Me-

lucci sobre los movimientos sociales— comenzamos por diferenciar la “acción colectiva” del “movimiento social”; así llegamos a una caracterización de la acción colectiva de protesta. Su dimensión política se presenta en la politización de los cuerpos y del lenguaje, hecho que se puede rastrear en los relatos de los sujetos.

Es necesario aclarar que, aunque no todos los trabajos utilizan la misma conceptualización, como veremos al atravesar este libro, en casi todos se mencionan autores e interpretaciones que se acercan más a las corrientes “comprensivistas” que a las que buscan explicaciones a partir de factores estructurales. En todos los trabajos los factores objetivos que favorecen una acción de protesta o de organización tienen tanta importancia como las interpretaciones y los reconocimientos que los actores son capaces de hacer de ellos.

Como decíamos al comienzo, nos interesa problematizar la acción de *protesta* como un

* Giarracca, N. y Bidaseca, K. 2001 “Introducción” en Giarracca, N. (coord.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Madrid / Buenos Aires: Alianza).

** Posdoctora por PUC-SP/Universidad de Manizales-CINDE/COLEF/CLACSO/FLACSO y Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Es Coordinadora del Programa Sur-Sur (CLACSO).

tipo específico de acción colectiva. Para ello intentaremos deslindar teóricamente las nociones de *movimiento social*, *acción colectiva* y *protesta* basándonos fundamentalmente en la teoría de la acción colectiva desarrollada por la escuela europea (Melucci; Diani; Della Porta; etcétera) cuyos miembros combinan distintos aportes provenientes de la Sociología post-estructuralista, la Filosofía Social y la Psicología.

Melucci (1984: 202) define la *acción colectiva* como el ensamble de los diversos tipos de acciones basadas en conflictos. “Una acción colectiva implica la existencia de una lucha entre dos actores por la apropiación y orientación de los valores sociales y los recursos”. En un segundo nivel, “la acción colectiva también incluye todo tipo de conductas que transgreden las normas que han sido institucionalizadas en roles sociales; aquellas que exceden las reglas del sistema político y/o que atacan la estructura de una sociedad basada en relaciones de clases” (ibídem: 202). El autor denomina *acción basada en conflictos* a la primera categoría y *movimiento social* a la acción colectiva que cumple con ambas condiciones.

En sus trabajos posteriores, suma elementos más subjetivos y define a la acción colectiva como el “resultado de intenciones, recursos y límites, una orientación intencional construida

mediante relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones” (Melucci, 1994: 157).

Para Melucci (1984), un *movimiento social* podría adquirir la forma de acción colectiva, pero basada en tres dimensiones: la solidaridad, el desarrollo de un conflicto y la ruptura del límite del sistema donde ocurre la acción. A tal fin, concibe la *solidaridad* como la capacidad de los actores de compartir una identidad colectiva, es decir, la capacidad de reconocerse y ser reconocido como parte de la misma unidad. La construcción de un “nosotros” se integra en el proceso de conformación de la identidad colectiva, que es “el producto de una definición de la situación, construida y negociada a través de la constitución de redes sociales que conectan a los miembros de un grupo o movimiento. Dicho proceso implica la presencia de marcos cognitivos, interacciones densas, de intercambios emocionales y afectivos” (Melucci, 1992: 244).

La presencia de una identidad colectiva requiere una alteridad adversaria —“nosotros” frente a “ellos”—, instancia conflictiva que se dirime en el campo de disputas¹. En cambio, el

1 Touraine (citado por Hilhorst, 1992) define en este sentido la meta de los movimientos sociales: la reali-

conflicto es definido como una relación entre actores opuestos que contienden sobre los mismos recursos a los que ambos otorgan un valor (Melucci, 1984: 423).

El movimiento social es una construcción analítica y no un objeto empírico; la sola existencia de un conflicto no basta para el surgimiento de un movimiento social. Un actor colectivo es siempre una realidad construida que se presenta empíricamente como una unidad dada, ya sea porque los mismos actores le atribuyen una realidad objetiva o porque los investigadores otorgan coherencia a fenómenos empíricos dispares. Precisamente dicha unidad debe cuestionarse y comprenderse como lo que es: el resultado de intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos (Melucci, 1992).

Los movimientos, en tanto acciones colectivas, se relacionan directamente con una expansión de la conflictualidad social; allí deviene campo propicio para la aparición de la protesta. Comprendemos a la *protesta* como una forma específica de acción colectiva —razón por la cual comparte sus rasgos identificatorios— que no se agota en su sola manifestación sino

zación de valores culturales así como la victoria sobre una adversario social (Ibíd.: 123).

que, tal como la acción colectiva, se relaciona con los períodos de latencia².

Autores como Lipsky (citado por Della Porta y Diani, 1999) sostienen que la protesta es el recurso político de los sujetos carentes de poder (*powerless*), que no están representados por las formas políticas tradicionales (partidos, sindicatos, etcétera). Con la protesta aparecen nuevas formas de participación en la arena política a nivel nacional (piquetes, paros de remate³, tractorazos, ocupaciones de tierras⁴, etcétera) y supranacional (*redes transnacionales*

2 Los dos polos que describe Melucci (1994) —la *latencia* y la *visibilidad*— se encuentran conectados entre sí dado que la fase latente posibilita la acción visible al brindar recursos de solidaridad y produce el marco cultural dentro del cual surge la movilización. Por su parte, el estado de movilización fortalece las redes y la solidaridad del grupo y funciona como espacio de reclutamiento de otros individuos que se identifican con las consignas del movimiento.

3 Metodología inventada y utilizada por el Movimiento de las Mujeres Agropecuarias en Lucha.

4 En Brasil las ocupaciones de tierra son el principal instrumento de los movimientos sociales agrarios (especialmente del Movimiento dos Trabalhadores Sem Terra) que actúan bajo el lema “ocupar, producir, resistir”. En las diferentes regiones los asentamientos son respuestas de las familias a un modelo excluyente y conservador.

*de defensa*⁵ tendientes a influir en los gestores de políticas). Según Della Porta y Diani (1999) una de las características de la protesta es su capacidad para movilizar la opinión pública a través de un proceso persuasivo mediado por los medios de comunicación utilizando formas no ortodoxas de acción y ejerciendo presión sobre los decisores de políticas.

La *acción colectiva de protesta* aparece de este modo como una irrupción conflictiva, es decir, aquella que está comprendida en un “campo conflictual” que se inscribe en el espacio público a partir de una demanda concreta y que necesita del discurso y de la acción para adquirir visibilidad aunque también está vinculada con los períodos de latencia. Su especificidad viene dada por la manifestación de un litigio y la construcción de un sentido político público.

Su sentido público adquiere tal característica cuando logra generalizar las demandas particulares en la esfera pública, momento en el

cual aparece un tercer actor, el *espectador u observador*, que si bien no se halla involucrado en la acción, emitirá un juicio respecto de la misma ofreciendo una interpretación alternativa a lo sucedido. La protesta comienza a ser eficaz cuando, a través de los medios de comunicación, persuade a los actores más poderosos de que están “legitimados” para tomar decisiones (legisladores, funcionarios de gobierno, etcétera). En realidad, la protesta moviliza una gran variedad de actores. Por ejemplo, puede ser que el acto de protesta no haya convocado a los medios; pero si un religioso influyente o un legislador mediático o un cantante popular lo menciona, se logra por fin que los medios y el público se ocupen de él.

En un trabajo reciente (Della Porta y Diani, 1999) se adaptó un esquema del flujo de comunicación que había sido realizado por Michael Lipsky en su clásico trabajo de 1965, *Protest and City Politics*, cuya inclusión consideramos de mucha utilidad.

Del grupo iniciador de la protesta —la “base”— surgen los líderes, que son los que inician las relaciones con el medio externo. Los medios de comunicación expanden el mensaje, que está dirigido a quienes toman decisiones. Estos se convierten en el objetivo de la protesta y, para que la misma tenga éxito, no solo debe

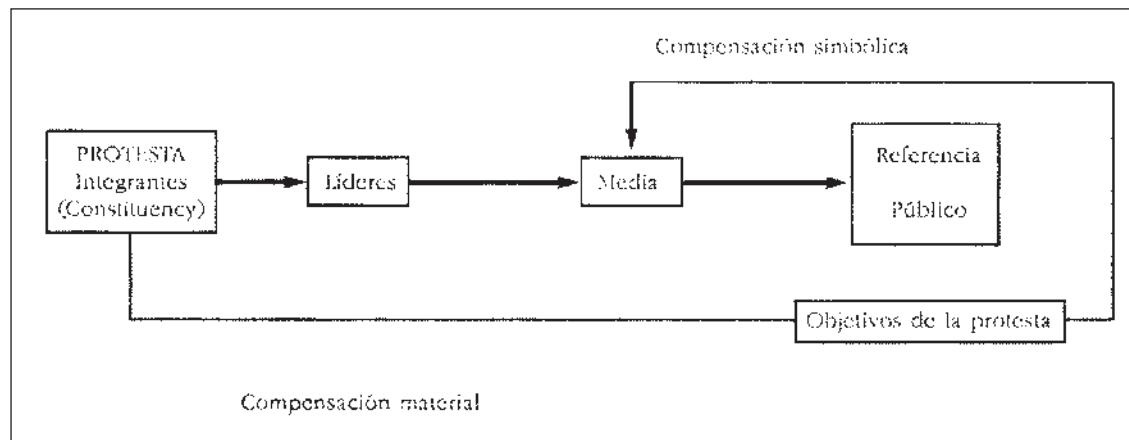
5 Keck y Sikkink (1999) definen a estas redes básicamente como “estructuras comunicativas”; formas de organización que se caracterizan por patrones de comunicación e intercambio voluntarios, recíprocos y horizontales que encierran un potencial de transformación mutua de los participantes.

producirse un estímulo positivo, sino que los líderes necesitan ganarse las simpatías de quienes tienen los recursos, para influir en los que toman las decisiones. Mientras que para las acciones de tipo corporativas (grupos con poder que protestan para mantener privilegios, por ejemplo) la relación con quienes toman decisiones es re-

lativamente fácil (los reciben los funcionarios o legisladores), en las protestas de los grupos subalternos, o de poblaciones minoritarias, etcétera, la situación es más compleja. Por eso casi siempre involucran a terceros que puedan crear acercamientos con quienes toman las decisiones o impulsar decisiones a su favor.

Cuadro N° 1

El proceso de comunicación de la protesta



Fuente: Della Porta y Diani, 1999.

La situación descrita en los párrafos anteriores se verá muy claramente en los artículos de este libro: mientras las marchas y protestas de las grandes corporaciones agrarias reciben inmediatamente la atención del secretario de Agricultura de turno, los cortes de ruta de los desocupados, el acto de parar los remates de las chacareras endeudadas, etcétera, deben contar con la prensa y con las simpatías y el apoyo de la jerarquía eclesiástica o de legisladores progresistas para que los atienda la autoridad correspondiente⁶.

En general, las acciones de protesta se asocian con los movimientos sociales o las “campañas”; sin embargo, las protestas pueden tener identidades propias. En relación con los primeros, las acciones de protesta identificadas como tales (que no son formas de un movimiento social) son más discontinuas, más cortas, como acción propiamente dicha, y además menos previsible. También es cierto que pueden ser una forma de acción de un movimiento social o parte de una campaña. O, incluso, hay

que recordar que muchos movimientos sociales comienzan con acciones de protesta (por ejemplo los comienzos del Movimiento por los Derechos Humanos). Pero como nos recuerdan Della Porta y Diani:

Los movimientos sociales no poseen el monopolio sobre la protesta. Otros actores, tales como partidos políticos o grupos de presión, también hacen uso de la acción de protesta y ocasionalmente llevan a cabo alianzas con los movimientos sociales en determinadas campañas. No obstante, la protesta (particularmente en su máxima innovación y radicalización) ha sido considerada como una forma de acción típica de los movimientos sociales porque, a diferencia de los partidos políticos y grupos de presión, poseen escasos canales a través de los cuales pueden acceder a los que producen decisiones. Las formas de acción son importantes ya que los movimientos sociales son generalmente recordados por los métodos persuasivos que adoptan más que por sus objetivos. (Ibídem: 170)

⁶ El caso más dramático ocurrido en la Argentina en los últimos tiempos (comienzos de 2001) fue una protesta por desalojos de casas tomadas donde uno de los habitantes se quemó vivo delante de las cámaras de la televisión para llamar la atención de las autoridades, insensibles frente a la situación de los “sin techo”.

ACCIÓN COLECTIVA DE PROTESTA Y ESPACIO PÚBLICO

El giro lingüístico y pragmático implementado por la Filosofía ha influido decisivamente en

las teorías sociales modernas, de modo que los conceptos, la acción y el discurso, se han vuelto esenciales para comprender procesos que interesan al sociólogo. Hannah Arendt en su obra *La condición humana* (1998), expresa que “a través de la acción y el discurso los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano.

Ambos conceptos crean un espacio local y temporal. Se trata del *espacio de aparición*: “el espacio donde yo aparezco ante otros como otros aparecen ante mí” (Arendt, 1998: 223).

En la concepción arendtiana, lo público remite a la acción y al discurso, a lo manifiesto, a la libertad y a la capacidad de inicio de algo nuevo; lo privado a la reproducción, al trabajo, al reino de la necesidad, “a lo oscuro que debe ser ocultado, sustraído a la mirada de los demás” (Rabotnikof, 1997: 143).

Según Arendt, ninguna otra actividad humana requiere el discurso como la acción; en todas las demás cumple un papel subordinado. En efecto, la acción sin el discurso perdería su carácter revelador y su sujeto. El espacio de aparición cobra existencia toda vez que los hombres se reúnen por el discurso y la acción y, por lo tanto, precede a toda formal constitución de la esfera pública. Siempre que la gente

se reúne se encuentra potencialmente allí, pero no necesariamente ni para siempre.

Por otro lado, hay autores que proponen hablar de discurso para diferenciar el lenguaje hablado del escrito, y lo definen como “acontecimiento en forma de lenguaje o uso lingüístico” (Ricoeur, 1985: 9). Para este autor el discurso solo existe como instancia temporal y presente; es autorreferencial, alude a un mundo que afirma describir, expresar o representar, se dirige a un interlocutor y posee un carácter fugaz, donde el acontecimiento aparece y desaparece, lo que remite a un problema de fijación o inscripción. El mismo sentido de fugacidad le otorga Hannah Arendt a la acción, teñida además por su inherente ilimitación e inherente falta de predicción, solo remediadas por la facultad humana de perdonar y mantener las promesas.

La constitución del *nombre* implica la conformación de un “nosotros”, momento a partir del cual se desarrolla un poder, cuando un grupo de personas se percibe como colectivo capaz de inscribir sus reclamos en un universo de significados públicos y hace oír su voz.

El poder solo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y donde los actos no son brutales. “El poder surge entre los hombres cuando ac-

túan juntos y desaparece en el momento en que se dispersan” (Arendt, 1998: 223). Esa instancia de conformación del colectivo, del nacimiento del poder, es el momento esencialmente político; este instala un espacio que permite la configuración de una nueva identidad colectiva que genera un nuevo tipo de prácticas, de solidaridades compartidas. Este momento constituye una experiencia única, porque conduce a los actores a la construcción de una interpretación alternativa de la realidad a partir de la cual dicha realidad se presenta como contingente y pasible de transformación; implica un quiebre, un punto de inflexión en la cotidianidad, y, además, la creación de un nuevo espacio social, cultural y político que expone a los sujetos, los “hace visibles” públicamente.

En el proceso de constitución de la identidad colectiva dos dimensiones, la cultural y la política, se imbrican mutuamente: la primera alude a la construcción de un nuevo espacio alternativo en el cual se construyen nuevos lenguajes, se establecen códigos, se sintetizan otros símbolos; la dimensión política es la síntesis del grupo, su capacidad de proyección de ese espacio.

Naishtat (1999) expresa que la acción colectiva implica “decir” y “mostrar”, enunciación de sentidos y cuerpos demandantes que irrumpen

conflictivamente para, *postfacto*, inscribir sus demandas en la esfera pública.

No obstante, la inscripción de la demanda en el espacio público depende de otro exterior al lenguaje, la acción. El “nosotros” interpela a un público abierto inscribiendo un acto de lenguaje (protesta, reclamo, promesa) con contenido proposicional y fuerza ilocucionaria que adquiere mayor magnitud con la acción colectiva: “La protesta en cuanto protesta no es simplemente la interacción, sino la emergencia unificada de un hablante colectivo que expresa un acto ilocucionario” (Naishtat, 1999: 10). La acción colectiva tiene pretensión de generalidad y aparece articulada en un “juego de lenguaje”⁷.

7 En *Investigaciones filosóficas*, Wittgenstein (1988) define el “juego de lenguaje” como “un todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretelado” (Ibídem: 25). Para él imaginar un lenguaje equivale a “imaginar una forma de vida”. El lenguaje para Wittgenstein antes que “representación” es *acción*, es un *modo de acción específicamente humano*. El autor utiliza dos metáforas para describir al lenguaje: como “caja de herramientas”, es decir, el lenguaje no tiene solo una función, sino muchas funciones, y además se define por el uso; los usos están articulados, pero no son inamovibles. No hay límites prefijados para el lenguaje, sino que se caracteriza por su *disponibilidad*. La segunda metáfora alude al “juego”.

Para Arendt (1998), el discurso corresponde al hecho de la distinción, es la realización de la condición humana de la *pluralidad*. La pluralidad humana tiene el doble carácter de igualdad y distinción: si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse; si no fueran distintos, no necesitarían el discurso ni la acción para entenderse.

En este trabajo, abordaremos el *espacio público* como campo polifónico (Naishtat, 1999) en el cual se despliegan disputas hegemónicas y contrahegemónicas de discursos y sentidos⁸. Es el lugar formador de audiencias y no mero espacio deliberativo, lugar de reconocimiento de la otredad.

Esta concepción ampliada de espacio público “históricamente extendido y culturalmente enriquecido” posee una acepción interesante que puede vincularse al problema de la inscripción de las demandas de los actores colectivos, en tanto dicho espacio es definido como medio privilegiado para la conformación de identidades colectivas a través de un proceso de apropiación histórica.

Las acciones de protesta deben comprenderse, entonces, como acciones caracterizadas

por su rasgo inherente, el de ser comunicables en un espacio de visibilidad o campo discursivo, tanto a través del discurso como del lenguaje corporal, a un público que puede ser espectador o narrador o partícipe. Dicho espacio, al dar visibilidad, otorga existencia.

Pensamos en los “actores mediáticos” como los “piqueteros” o “fogoneros” del sur y del norte de nuestro país, nominados de este modo a partir de su aparición en los medios; o en las Mujeres Agropecuarias en Lucha, cuyo origen se puede rastrear en el llamado desesperado de Lucy de Cornelis (presidenta del MML) por la radio local en el momento en que el rematador había llegado a su casa para iniciar el embargo de sus bienes. Pero también la multiplicidad y heterogeneidad de acciones colectivas que se desarrollaron hacia fin de siglo desde la refundación democrática, cuyo referente más próximo fueron las Madres de Plaza de Mayo, y las acciones que las prosiguieron: el Movimiento por los Derechos Humanos, las Marchas del Silencio por el caso María Soledad; el nacimiento de HIJOS; las movilizaciones por el asesinato del fotógrafo Cabezas; la Marcha Federal; Memoria Activa, por el esclarecimiento de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel; las movilizaciones de los estudiantes por la defensa de la universidad pública; los

8 A diferencia de Arendt, para quien dicho campo se halla libre de antagonismos.

cortes de ruta de los desocupados; los “Tractorazos”, protagonizados por los productores agrarios; etcétera. Todos ellos han propiciado lo que Habermas define como ensanchamiento del espacio público, movilizándolo amplios sectores de la sociedad.

Por consiguiente, la elaboración de nuestra concepción de espacio público no se limita a su carácter de ser comunicable. El espacio público es consustancial con el sistema democrático y el ejercicio de la ciudadanía. Nuestro interés parte de comprenderlo, además, como “campo polifónico” en el cual se despliegan disputas hegemónicas y contrahegemónicas de discursos y sentidos (Naishtat, 1997). Es el lugar formador de audiencias y no mero espacio deliberativo o espacio de comunicación abierta como lo entiende Habermas (1981), es el lugar de reconocimiento de la “otredad”, otra vez, de la existencia.

MARCAS Y RELATOS DEL MALESTAR: EL ACTOR

Algunos autores americanos, influidos por las interpretaciones marxistas acerca de la transformación subjetiva de la conciencia como proceso crucial en la generación de insurgencia, destacan factores que habían sido ignorados por

los estudios previos sobre movimientos sociales y por los teóricos de la escuela de “movilización de recursos”, los que resultan fundamentales para comprender el origen de la acción de protesta: la “liberación cognitiva”. Las desigualdades estructurales (condiciones objetivas) pueden ser constantes, pero la percepción colectiva de la mutabilidad y legitimidad de esas condiciones varían todo el tiempo (McAdam, 1982).

En un lugar intermedio entre las estructuras de oportunidades y la acción, se ubican los sujetos y su capacidad de atribuir sentidos a las situaciones. La transformación que opera en la conciencia de los sujetos implica creer en su propia capacidad de alterar sus destinos. ¿Son las estructuras de oportunidades políticas independientes de las interpretaciones y definiciones de los sujetos?, ¿son los recursos independientes de lo que la gente piensa de ellos y de cómo los usarán?, ¿tienen importancias las redes sociales más allá de los significados y lealtades efectivas que ellas representan?, se interroga James Jasper (1997: XI).

El proceso de liberación cognitiva, si bien es subjetivo, alcanza su plenitud bajo condiciones de fortalecimiento de redes interpersonales e intersubjetivas y de fuerte integración social. Antes del surgimiento de la protesta, la gente debe definir colectivamente sus situacio-

nes como injustas y tener la creencia de que la acción puede surtir efectos. Esta noción de “acción” es entendida como la “única facultad humana de hacer milagros”, en tanto “actuar es tomar una iniciativa, comenzar. Se inicia algo nuevo que no puede esperarse de cualquier cosa que haya ocurrido antes. Lo nuevo aparece como milagro. Si el hombre es capaz de acción, significa que puede esperarse de él lo inesperado” (Arendt, 1998: 202).

En los trabajos del Grupo de Estudios Rurales aparece claramente esta opción conceptual a la que el GER llegó a través de la recreación del aporte teórico metodológico del paradigma orientado al actor. Los primeros trabajos en los estudios rurales provienen del antropólogo inglés radicado en Holanda, Norman Long (1992, 1997), quien lo desarrolló, básicamente, para abordar problemas de desarrollo y transformaciones macroestructurales en relación con comunidades campesinas. Pero tal paradigma abre posibilidades indagatorias para cualquier aspecto de la vida social, incluidos los movimientos sociales o la formación de las protestas sociales. Las situaciones sociales se constituyen a partir de las interpretaciones, traducciones que llevan a cabo sujetos capaces y cognocientes en un mundo que conocen, que es parte de su vida diaria. Como en Schutz (1995) el escenario de

las acciones como seres humanos tanto como el *locus* de resistencia a la acción, está constituido por el mundo de la vida diaria; el hombre tiene un acervo de “conocimiento a mano”. Este conocimiento se origina en lo social y está socialmente distribuido, pero el modo individualizado que asume está condicionado por la situación exclusiva que ocupa el individuo en el mundo social.

La protesta enfrenta a los sujetos con pretensiones de constituir colectivos, un “nosotros” a un “otro”. Ese otro, generalmente, posee recursos que los primeros no tienen y que pueden usarlos para agraviarlos, violar derechos adquiridos o mejorar/reformar el hecho que dio origen a la protesta, etcétera. En tales situaciones (pueblos indios enfrentados a grandes empresas como Techint; el MML y los bancos acreedores; los desocupados y los funcionarios del Ministerio de Trabajo, etcétera) se constituye un espacio de interacción en el que no solo se enfrentan proyectos (*project of actor*) sino mundos sociales y culturales con profundas diferencias. En tales escenarios —“interfaces” en la conceptualización de Long (1996)— se ponen en acto los esquemas cognitivos, los de interpretación, las traducciones que posibilitan negociaciones o enfrentamientos.

En síntesis, los espacios de conflicto incorporan distintos actores y lo que propone

el paradigma orientado al actor es tomar en cuenta a todos, buscar los sentidos de cada uno, las distintas interpretaciones, narrativas, argumentos propositivos, para lograr una comprensión de los procesos donde las protestas se incluyen. Se trata de construcciones de imágenes sociales densas que, como dice Bourdieu (1999), sean representaciones complejas y múltiples, fundadas en la expresión de las mismas realidades en discursos diferentes, a veces irreconciliables y que, a la manera de novelistas como Faulkner, Joyce o Virginia Woolf (o incluso el *Don Quijote* de Cervantes), abandonan el punto de vista único, central, dominante, en beneficio de la pluralidad de puntos de vista coexistentes *y* muchas veces casi irreconciliables.

En toda protesta existe un hecho que se vive como injusto, agravante, maltratador. Los sujetos de la protesta expresan necesidades de cambio, necesidades de ser oídos, vistos, escuchados pero también su desprecio e ira por ciertas prácticas existentes en el mundo social (discriminación racial, violencia policial, violaciones a los derechos de los pueblos indios, etcétera)⁹. Se convierten

en una “voz moral”, lo que permite articular y elaborar sentimientos morales y convicciones tanto en ellos como en aquellos que observan o participan de forma periférica. Se produce una articulación no solo colectiva sino pública, lo que conduce a James Jasper, uno de los estudiosos de los aspectos “morales” de la protesta, a sostener que se profundizan las significaciones e impactos emocionales de creencias y sentimientos. Pocas instituciones en las sociedades modernas otorgan este tipo de espacios, incluso las iglesias, sinagogas y mezquitas son más importantes como lugares de encuentro que como auténticos *test* morales (Jasper, 1997: 5).

Según W. Gamson (1995: 90), la *injusticia* entendida como “indignación moral expresada en forma de conciencia política”, es un componente presente en casi todas las protestas estudiadas en este libro. Injusticia que, como bien lo remarca Gamson, “no es meramente un juicio cognitivo o intelectual sobre la equidad; es lo que los psicólogos denominan conocimiento caliente (*hot cognition*), y por lo tanto se encuentra cargado de emoción” (Ibídem: 90). Este marco requiere el desarrollo de un proce-

9 Esto ocurre también en las llamadas “protestas indeseables” donde los sujetos se sienten agraviados por tan-

ta tolerancia o libertad (las protestas contra los inmigrantes en Europa o a favor de los dictadores en la Argentina).

so de concientización del daño y del sufrimiento humano. No obstante, su dimensión crítica se basa en la abstracción del antagonista responsable del sufrimiento, lo que puede conducir a la aceptación y resignación al cambio.

El sentimiento de injusticia experimentado por los sujetos en forma individual puede conducir a su generalización cuando es compartido con los demás sujetos. En este proceso incide decisivamente la articulación colectiva del discurso de los derechos universales de justicia, libertad e igualdad que se inscribe en las prácticas sociales y su consiguiente apropiación.

En este sentido, Laclau y Mouffe (1987) se han interrogado acerca de las condiciones discursivas de emergencia de una acción colectiva encaminada a luchar contra las desigualdades y a cuestionar las relaciones de subordinación¹⁰. Así, la existencia de un “exterior discursivo” que impide estabilizar la subordinación como diferencia, determina la emergencia de

condiciones que permiten plantear las diferentes formas de desigualdad como ilegítimas y antinaturales (Ibídem: 174). A partir de allí se da un desplazamiento de la crítica de la desigualdad de unos espacios a otros (de la desigualdad en la esfera económica a la política, por ejemplo)¹¹.

REPERTORIOS DE ACCIONES

Los participantes en movimientos sociales o acciones colectivas emplean en general diferentes *repertorios de acciones*. Tal concepto es definido por Charles Tilly como “una serie de interacciones entre los detentadores del poder y las personas que se declaran con éxito portavoces de una base social (*constituency*). A lo largo de esta serie, los portavoces hacen públicas sus demandas a favor de cambios en la distribución o el ejercicio del poder y respaldan

10 Los autores distinguen tres tipos de relaciones: *relaciones de subordinación* (cuando un individuo se encuentra sometido a las decisiones de otro); *relaciones de opresión* (cuando las relaciones de subordinación se convierten en sede de un antagonismo) y *relaciones de dominación* (relaciones de subordinación consideradas como ilegítimas por los actores).

11 Para los autores, la “Declaración de los Derechos del Hombre” que instaura la Revolución Francesa determina la emergencia de dichas condiciones y el de un nuevo imaginario político y social sustentado en los principios de igualdad y libertad que habilita la posibilidad de que una relación de subordinación se transforme en una relación de opresión, y por ende, en sede de un antagonismo.

las demandas con manifestaciones públicas de apoyo” (Tilly, citado por Pérez Ledesma, 1994).

Además de las tradicionales, los movimientos suelen incluir formas novedosas u originales de acción. En el primer caso, la acción es transmitida culturalmente a través de las generaciones de trabajadores, campesinos, aborígenes, mujeres, etcétera, imprimiendo una memoria propia de la acción colectiva. Así, como sostienen Giarracca y Gras en su artículo sobre la protesta rural, los “cortes de ruta” no son creación de los desocupados y de los piqueteros —a quienes se ha denominado “cortadores de ruta”—, sino fueron inventados por los chacareños pampeanos que iniciaron el Grito de Alcorta a principios del siglo XX al sur de la provincia de Santa Fe y trasladados a la protesta de fin de siglo. De igual modo, las caravanas de los kollas analizadas en este libro, se remontan a la década del cuarenta y fueron actualizadas en años recientes a través de la memoria generacional.

Tilly categoriza a esta reserva de formas conocidas de acción como “repertorio de confrontación”, que puede dar origen a la utilización de estas rutinas por diversos grupos sociales en territorios cada vez más extensos y respecto de cuestiones de distinto tenor, creando lo que Tarrow (1997: 52) denomina “repertorio modular” de la acción.

En la acción colectiva los participantes cuentan con un repertorio de acciones que han adquirido en los procesos de aprendizaje, dentro del cual existen —y esto hay que resaltarlo— posibilidades de variación y creación.

Como sostienen los autores, las formas convencionales de acción suelen ser más utilizadas dado que, de este modo, se facilita el proceso de adaptación a repertorios ya conocidos por la gente y puesto que poseen para ellos resonancias simbólicas y culturales que los ligan al pasado.

En tal sentido, las huelgas, vinculadas con la cultura laboral, y las manifestaciones, con las fases de la democratización moderna, son expresión de esas formas modulares institucionalizadas, a menudo utilizadas por las organizaciones más sedimentadas. No obstante, ellas pueden aparecer junto a otro tipo de acciones: sabotaje, cortes de ruta, tomas simbólicas, etcétera.

Las formas no convencionales de la acción colectiva poseen el atractivo que trae consigo la incertidumbre de lo que se desconoce y además pueden atraer, por su originalidad o novedad, la atención de los medios y de los observadores.

La protesta argentina en la década de los años noventa se ha caracterizado por el surgi-

miento de formas novedosas e inéditas de acción cuya expresión máxima, por la repercusión y continuidad, ha sido la implementación de la “Carpa Blanca” de los docentes, que fue luego utilizada por otros actores sociales en diferentes momentos y lugares. No obstante, han trascendido otras formas, algunas de ellas a nivel internacional: las rondas alrededor de la Pirámide de Mayo que impulsaron las Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos cubriendo sus cabellos ante la orden imperiosa de “circular”; los “escraches” iniciados por la agrupación HIJOS a los torturadores del proceso militar; los “apagones”; los abrazos simbólicos a instituciones en proceso de privatización, entre otros, sin dejar de nombrar una en especial que ha marcado, por su innovación simbólica, y su espontaneidad, el nacimiento del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, el “paro de remates” de las chacras endeudadas a partir del uso de dos símbolos, uno nacional, el canto del Himno, y otro religioso, el rezo continuado.

La utilización de símbolos constituye un hecho trascendente en la perduración de los movimientos y en su trascendencia. Ellos forman parte de los “marcos de la acción colectiva”, sobreentendidos cognitivos vinculados con la construcción de los sentidos de la acción (Tarrow, 1997).

Los marcos de la acción colectiva se nutren de creencias y símbolos preexistentes, y apelan a una combinación de formas ancestrales y novedosas de lucha. Es el caso de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), que remonta sus orígenes a las luchas entre cañeros e ingenios hacia principios de siglo, o el recuerdo que el Grito de Alcorta significa para el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, en tanto se identifican con aquellos chacareros inmigrantes que luchaban contra el poder terrateniente, ambos analizados en este libro.

Asimismo, los marcos de significado que elaboran los movimientos sociales se encuentran disponibles para otros movimientos, de igual modo que las formas modulares de la acción. En la era de la globalización, tanto la tecnología de los *mass media* como el uso de Internet influyen en la adopción de acciones y en la adaptación de marcos culturales a través de la circulación de redes internacionales, transformando de este modo la lógica de los movimientos o la forma que adquiere la protesta.

Es el caso del movimiento internacional Vía Campesina, entre otros, con su consigna de “Globalizar la lucha, globalizar la esperanza”, cuyo análisis forma parte de este libro; o el ropaje de los piqueteros argentinos con sus

rostros cubiertos por un trozo de tela de color negro, que nos recuerda la imagen del subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en México.

Un interrogante que surge repasando los repertorios de protesta, tanto en los movimientos internacionales como en los locales, es cómo influyen estos en quienes tienen la capacidad de tomar decisiones. Parece claro que la “forma de acción”, “el repertorio”, apunta a varios blancos: la opinión pública, los medios, los que toman decisiones. Utilizan estrategias culturales, políticas, y las formas de acción pueden distinguirse según las “lógicas” o *modus operandi* que los activistas les asignan.

Un trabajo reciente (Della Porta y Diani, 1999) tipifica las formas de acción por:

1. La lógica de los números: la gran cantidad de participantes de una marcha no solo atrae la atención sino que produce algún grado de molestia en la vida cotidiana de una ciudad como para no ser ignorada. En un petitorio el interés por “los números” es aún más claro; pensemos en las campañas para el ingreso familiar de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), por ejemplo.
2. La lógica del daño material: infligir daño supone una hipótesis de cierta necesidad

de violencia entre los actores, “como una batalla del poder en la cual la participación de la sociedad civil no está solo confinada al acto electoral de las elecciones” (Ibídem: 176). En nuestro país puede ilustrarse con los cortes de ruta donde se queman cubiertas, o, como complemento a las marchas, cuando algún desprendimiento del grupo rompe vidrieras.

3. La lógica del testigo: se trata de una demostración de las convicciones, de mostrar lealtad a algunos principios aun a costa de correr riesgos personales. La desobediencia consciente (objetores de conciencia, por ejemplo) descansa en esta lógica. Pensemos en nuestro país: “las marchas del silencio” en la Catamarca agredida por la muerte de María Soledad, o el comienzo silencioso pero persistente de las Madres de Plaza de Mayo.

Las protestas combinan estas lógicas aun cuando siempre hay alguna que predomina. En los últimos años, los movimientos campesinos de raíz “gandhiana” de la India comenzaron a desarrollar lo que se conoce como “acción directa”, que suponen daños materiales a los patrimonios pero nunca a las personas. Y, justamen-

te, este componente “no violento” a personas es una gran e importante diferencia con las protestas de las décadas del sesenta y setenta.

BIBLIOGRAFÍA

- Arendt, H. 1998 *La condición humana* (Barcelona: Paidós).
- Bajtín, M. 1993 *Problemas de la poética de Dostoievski* (México DF: FCE).
- Bidaseca, K. 2000 “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. La emergencia de acciones colectivas, nuevos actores rurales y alianzas en el escenario del Mercosur” en *Cuadernos para el Debate*, N° 12 (Buenos Aires: IDES).
- Della Porta, D. y Diani, M. 1999 *Social Movements. An Introduction* (Malden: Blackwell).
- Foucault, M. 1992 *Microfísica del poder* (Madrid: La Piqueta).
- Gamson, W. 1995 “Constructing Social Protest” en Johnston, H. y Klandermans, B. (eds.) *Social Movements and Culture* (Mineápolis: University of Minnesota Press).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1997 “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. Las mujeres en la protesta rural en la Argentina” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 150.
- Giddens, A. 1979 “Las perspectivas actuales de la teoría sociológica” en *Central Problems in Social Theory* (Nueva York: Macmillan).
- Giddens, A. 1995 *La constitución de la sociedad* (Buenos Aires: Amorrortu).
- Habermas, J. 1987 *Teoría de la acción comunicativa II* (Madrid: Taurus).
- Hilhorst, D. 1992 “Discourse Formation in Social Movements. Issues of Collective Action” en Long, N. y De Haan, H. (eds.) *Images and Realities of Rural Life* (Assen: Van Gorcum).
- Jasper, J. 1997 *The art of moral protest* (Chicago: The University of Chicago Press).
- Keck, M. y Sikkink, K. 1998 *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Cornell: Cornell University Press).
- Laclau, E. y Mouffe, C. 1987 *Hegemonía y estrategia socialista* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- McAdam, D. 1982 *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970* (Chicago: The University of Chicago Press).
- McCarthy, J. y Zald, M. 1988 “Resource Mobilizations and Social Movements: A

- Partial Theory” en *American Journal of Sociology*, N° 82.
- Melucci, A. 1984 “An end to Social Movements?” en *Social Science Information* (Londres: SAGE) N° 4-5, Vol. 23.
- Melucci, A. 1985 “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements” en *Social Research*, N° 4, Vol. 52.
- Melucci, A. 1992 “Frontier Land: Collective Action between Actors and Systems” en Diani, M. y Eyerman, R. (eds.) *Studying Collective Action* (Londres: SAGE).
- Melucci, A. 1994 “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales” en *Zona Abierta* (Madrid) N° 69.
- Melucci, A. 1996 *Challenging Codes* (Londres: Cambridge University Press).
- Naishtat, F. 1999 “Acción colectiva y regeneración democrática del espacio público” en Verweren, P.; Quiroga, H. y Villavicencio, S. (comps.) *Filosofía de la ciudadanía* (Buenos Aires: Homo Sapiens).
- Nardacchione, G. 1997 “Acción y sentido: antagonismo y espacio público” en Seminario permanente del Área de Epistemología y Estudios filosóficos de la acción (coordinado por F. Naishtat y F. Schuster) (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, UBA) octubre.
- Rabotnikof, N. 1997 “El espacio público: caracterizaciones teóricas y expectativas políticas” en Quesada, F. (comp.) *Filosofía Política I, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía* (Madrid: Trotta).
- Rancière, J. 1996 *El desacuerdo* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Ricoeur, P. 1985 *Hermenéutica y acción. De la hermenéutica del texto a la hermenéutica de la acción* (Buenos Aires: Docencia).
- Scribano, A. 1998 “Argentina cortada: visibilidad social en el contexto del ajuste” en López Maya, M. (ed.) *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Tarrow, S. 1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza Universidad).
- Taylor, V. y Whittier, N. 1995 “Analytical Approaches to Social Movement Culture: The Culture of the Women’s Movement” en Johnston, H. y Klandermans, B. (comps.) *Social Movement and Culture* (Mineápolis: The University of Minnesota Press).
- Wittgenstein, L. 1988 *Investigaciones filosóficas* (México DF: UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas).

EL CONFLICTO AGRARIO 2008-2009: LOS DEBATES NECESARIOS*

INTRODUCCIÓN

Los mundos agrarios se conocieron más, sobre todo en las grandes ciudades, desde el conflicto por la Resolución 125 que establecía un régimen de retenciones móviles a las exportaciones de soja en el país. Y con la información acerca del qué, cuánto, cómo y dónde se producen los cereales y oleaginosas cuya producción se discutía diariamente en los programas de televisión y en los principales diarios, se conoció más acerca de los mundos sociales: las ciudades intermedias, poblados, rutas, rotondas y plazas de la Argentina “no porteña”, para decirlo de alguna manera. Aparecieron en los medios de comunicación los nombres de los

centros urbanos dependientes de la producción agraria —Trenque Lauquen, Firmat, Maciel, Alcorta, etcétera— y la ciudad de Buenos Aires demostró tener conexiones familiares presentes o pasadas con esos mundos sociales donde las producciones primarias son centro de las economías regionales y de las ciudades grandes y pequeñas de las provincias.

Este apoyo ciudadano al conflicto de 2008 fue uno de los centros del debate y un elemento significativo para la caracterización del problema. Por un lado, muchos grupos cercanos al Gobierno Nacional consideraron que las poblaciones que dieron esos apoyos eran potenciales aliados de una “nueva derecha” que intentaba desestabilizar al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner por su intento de subir las retenciones agropecuarias para una mejor redistribución de los ingresos. Para otros —actores sociales en juego, medios de comunicación, analistas políticos y gran parte

* Giarracca, N. 2010 “El conflicto agrario 2008-2009: los debates necesarios” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates* (Buenos Aires: Antropofagia).

de las poblaciones urbanas— la situación había emergido como detonante de un modo de tomar las decisiones y gestionar los conflictos por parte del Gobierno Nacional. Aquel discurso del 25 de marzo de 2008 de la Presidenta, denominando “piquetes de la abundancia” a las formas de manifestarse de los ruralistas, habría simbolizado para ellos un modo intolerante de administrar el conflicto que se sumaría a muchos otros “gestos” presidenciales en el mismo registro.

Esta situación fue profusamente debatida en los medios, diarios muy ligados a los sectores agrarios como *Clarín* o *La Nación* por un lado y, por otro, en *Página/12* a través de las columnas de opinión utilizadas por el grupo de Carta Abierta (CA), formado por intelectuales cercanos al Gobierno Nacional y otros especialistas e intelectuales (entre quienes me incluyo). Si bien, como veremos, los sectores que apoyaban al campo evitaban una caracterización política y ponían énfasis en las demandas económicas, CA basó su estrategia de debate en politizarlo (y me atrevería a decir “ideologizarlo”). ¿“Nueva derecha” o sectores productivos amenazados por un Poder Ejecutivo sospechado de autoritario y de hacer un uso indebido de lo recaudado?; esa es la pregunta que sintetiza aquella discusión.

Existen diferentes posiciones expuestas en referencia a la caracterización del conflicto y en ese debate intervinimos nosotros como Grupo de Estudios Rurales; lo hicimos de un modo que procuró no convertirlo en posiciones irreconciliables sino proponer diálogos para superar una dicotomía que se presentaba como insalvable. Tratamos de caracterizar a los actores agrarios en conflicto, la importancia del modelo agrario sojero en las políticas de Estado, y nos atrevimos también a caracterizar el tipo de conflicto con el que nos enfrentábamos.

Para intervenir en las caracterizaciones económicas de los actores en juego se necesitaba un conocimiento más especializado y técnico del sector agrario, y por tal motivo este tipo de debate se circunscribió a un círculo menos extendido de personas. Distinto fue cuando de interpretaciones políticas se trataba; allí se involucraron tanto periodistas como filósofos, historiadores, contadores, antropólogos, novelistas, religiosos, politólogos y sociólogos de todos los gustos. En este artículo me limitaré a las interpretaciones de los miembros del grupo denominado Carta Abierta (CA)¹.

1 Carta Abierta comenzó como un espacio de discusión de la coyuntura del conflicto y terminó como un fenómeno muy interesante desparramado por muchas

Para los miembros de CA estábamos en presencia de un actor social agrario ligado históricamente a sectores “golpistas” de la sociedad y que continúa conformando la base del modelo agrario que se enriquece con la expansión sojera. Son, en su criterio, los grandes propietarios de la rica región pampeana del país cuya tenencia de la tierra se remonta a la conformación de la Nación y del capitalismo argentino. El grupo de Economía y Tecnología de FLACSO armó una demostración empírica de esta posición. Es importante analizar cómo se sostuvo esta posición porque terminó expresándose en las declaraciones de muchos funcionarios de primera línea y del ex-presidente Néstor Kirchner. Estábamos nuevamente en presencia de “la vieja oligarquía”.

Frente a esta idea de la “vieja oligarquía” aparecieron otras posiciones: las nuestras y también las de otros grupos ligados a corrien-

tes políticas progresistas que denunciaron a los exportadores como sectores beneficiados detrás de la acción del Gobierno (Mario Caffero, Claudio Lozano, Pino Solanas, Alcira Argumedo). El dramático discurso en el Congreso Nacional de Claudio Lozano sintetizó estos intentos, siempre incompletos, de darle visibilidad a los actores sojeros que se quedan con las abultadas ganancias y sobreganancias (véase artículo de *Página/12* del 9-7-2008 y Teubal y Palmisano en este libro).

Creemos que para transformar el capitalismo neoliberal agrario se debe contar con información e interpretaciones que puedan corroborarse empíricamente. Las caracterizaciones e interpretaciones basadas en datos erróneos pueden servir para el debate mediático pero no para avanzar en una transformación desconcentradora de la estructura productiva y social del campo. Hemos demostrado con un importante soporte empírico que hubo grandes cambios en el sector agrario (Giarracca y Teubal, 2005); por esta razón, los sectores en conflicto (los miembros de la Mesa de Enlace) ya no son los núcleos de poder del nuevo sistema agrario que denominamos “agronegocio” y simplemente ocupan un papel subordinado y territorializado (básicamente antiguos propietarios de tierra) en el nuevo modelo.

provincias y en el exterior. Si bien desearon mantener ciertas distancias con el gobierno, fue conocida su estrecha relación con el ex presidente Néstor Kirchner. Aún hoy siguen representando el grupo de intelectuales cercanos al poder gubernamental. Sus cartas, sus artículos de opinión, fueron publicados por el diario *Página/12* y se encuentran en su blog <www.cartaabierta.org.ar>. En la bibliografía incluimos todas las fechas en que se sacaron las declaraciones.

En este artículo me propongo trabajar alrededor de dos cuestiones. Comenzaré con la caracterización económica de los actores, ya que con ella se habilita una mejor comprensión acerca de la naturaleza política del conflicto, que desarrollaré en la segunda parte de la argumentación. Considero que ya en las breves reflexiones que fui publicando en *Página/12* y *Crítica* intenté incluir algunas ideas acerca de la naturaleza del conflicto. Básicamente lo caractericé como un conflicto patronal por impuestos estatales que les influyen directamente en las condiciones de producción, tasas de ganancia y posibilidades de apropiación de renta. Es decir, uno de los muchos conflictos de los agricultores en todos los tiempos del capitalismo argentino que, en este caso, cobra una dimensión política por la respuesta desmesurada del Gobierno frente al paro y su escasa capacidad de negociación con estos capitalistas nacionales heterogéneos (pequeños, medianos y grandes).

EL DEBATE ACERCA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES DEL CONFLICTO

Me remito a la vasta bibliografía existente que se propone comprender las transformaciones

ocurridas desde 1976 tanto en el nivel de la economía mundial, de los organismos de crédito que comenzaron a tener una injerencia inédita en los Estados nacionales, como en los niveles de los territorios nacionales. Muchas veces hemos remarcado en nuestros trabajos que estas configuraciones económicas, sociales, culturales que vivimos hoy como escenario de nuestras vidas, no se realizaron de un momento para otro sino que comienzan con el disciplinamiento social que supuso la dictadura de 1976-1983, las medidas que condujeron a la des-industrialización, la apertura del comercio exterior y los climas sociales de terror e individualismo que acompañaron estos procesos (Giarracca, 2003; véase también entrevista a Norma Giarracca en *Página/12*, 31-03-2008). Todos estos cambios resultaron en “un campo social” mucho más complejo, heterogéneo y fragmentado. Lo que siguió en democracia poco cambió en relación con los ejes fundamentales del modelo que los grandes centros de poder generaban para estos países vía endeudamiento y servidumbres financieras. Si los setenta y ochenta fueron las décadas de los disciplinamientos sociales y significaron el establecimiento de un clima cultural que parecía decirnos “no hay alternativas”, es “esto o algo peor”, es decir etapas de una producción de subjetividades resignadas,

los noventa será la década en que se pondrá en marcha una segunda etapa de reformas estructurales, privatizaciones, predominio del sector financiero, y se establecerá todo el andamiaje legal para el modelo extractivo de los recursos naturales minería a cielo abierto, etcétera. En esos años se producen las privatizaciones de los hidrocarburos y de las empresas de servicio del agua; se emite un decreto de desregulación económica que afecta al sector agrario (Decreto 2284); se implementan paquetes de leyes para habilitar a las corporaciones del sector agrario, al gran negocio de la minería a cielo abierto en el país. Pero los noventa también serán la década en la que el programa de producción de subjetividades resignadas comienza a resquebrajarse y en el país comienza un gran “ciclo de protestas” que, me atrevería a decir, aún no ha finalizado².

En este contexto de profundas transformaciones en todos los niveles de la vida econó-

mica, social, cultural, es difícil sostener la permanencia de los viejos actores sociales con sus viejas conductas en el escenario nacional. En primer lugar porque desde 1975 hasta hoy hubo un recambio generacional en todos los ámbitos y si bien decimos con Pierre Bourdieu, que la “reproducción social” es fuerte y difícil de torcer, las generaciones viven distintos climas sociales y culturales y las dirigencias cambian en esos plazos de tiempo; en segundo lugar, porque las transformaciones impregnaron todas las instituciones del capitalismo argentino en sus diversos ámbitos: economía (mercado), política (Estado), educación, ciencia, salud, cultura. Y de esa catástrofe (para utilizar la metáfora de Ignacio Lewkowicz) quienes pueden salir adelante se parecen muy poco a lo que eran en los momentos previos a ella; muchos encontraron su final como agentes económicos y otros reaparecieron atados al motor de quienes pueden seguir adelante en la coyuntura. En nuestro caso, fueron las nuevas corporaciones transnacionales, las que se quedaron con las empresas públicas, con las empresas en cadenas agroindustriales y con los recursos naturales. Ya no son los mismos actores industriales, agrarios, banqueros, como no son los mismos dirigentes gremiales, o los mismos políticos, ni es la misma ciencia, la misma universidad ni los mismos medios de co-

2 Estas protestas, vale la pena decirlo, fueron opacadas durante el año 2008 por el supuesto conflicto del campo capitalista. Ese conflicto, dentro del espacio del poder político y económico, opacó las resistencias al modelo neoliberal que se daban simultáneamente a que las cámaras de televisión se concentraban casi exclusivamente en el conflicto campo-gobierno.

municación, aunque todo muestre un significativo “parecido de familia” (por aquello que nos recordaba Bourdieu). Incluso de los movimientos sociales centrados casi exclusivamente en la inserción de clase —el movimiento obrero— se pasó a otros diversos, centrados en problemas culturales y en las disputas territoriales.

En el registro de la economía agraria, además, se ha ido configurando una nueva lógica productiva que denominamos “agronegocio” que moldea un espacio dinámico, generador de grandes ganancias y con marcadas diferencias de funcionamiento con el antiguo sector agrario y agroindustrial (véase Giarracca y Teubal, 2008). En ese nuevo espacio económico del “agronegocio” se registra una fuerte intervención del sector financiero; en él, además, participan capitales transnacionales en puntos clave de la cadena de producción, distribución y ventas a los mercados externo y doméstico. Tanto las transnacionales que proveen insumos, los exportadores, así como las cadenas de “hipermercados” en el mercado interno, son unos pocos ejemplos de lo que deseo significar. Pero no es mi intención detenerme en el funcionamiento de este espacio económico y simplemente me remito al trabajo de Teubal y Palmisano en este libro.

Los viejos actores agrarios y agroindustriales del capitalismo nacional se van adaptando

de dos modos diferentes al nuevo escenario: traspasan sus patrimonios a los capitales transnacionales (para operar en el sector financiero o sumar a la fuga de capitales) que son los que imponen la nueva lógica de funcionamiento (empresas agroalimentarias, ingenios azucareros, grandes bodegas vitivinícolas, etcétera) o mantienen sus patrimonios nacionales y se subordinan a los nuevos “núcleos de poder”. Denominamos “núcleo de poder” en las cadenas de producción a aquellos agentes capaces de imponer qué, cómo, cuánto producir y subordinar los funcionamientos del resto de los agentes a su propia lógica (Vigorito, 1979; Teubal, 1999). En el nivel de la producción agraria, la novedad que se dibuja en la década del noventa y aparece con fuerza a partir de la expansión sojera es la gestión de los denominados “pools de siembra” o “fondos de inversión”.

LA CARACTERIZACIÓN DEL ACTOR ECONÓMICO

Los nuevos actores de la producción que habilitan la impresionante expansión sojera pampeana primero y luego en las otras regiones antes dedicadas a las agroindustrias tradicionales o donde habitaban comunidades campesinas e indígenas

así como en bosques y yungas, son estos nuevos inversores en la modalidad de “pools de siembra” o “fondos de inversión”. Estos agentes, que en la mayoría de los casos están fuertemente relacionados con el capital financiero y con el mercado internacional a través de la gestión de exportación, las empresas transnacionales y algunas importantes empresas nacionales (Arcor, por ejemplo), las proveedoras de insumos, agroquímicos, semillas, maquinarias, etcétera, configuran el conjunto de agentes económicos que componen el pacto fundante del capitalismo del “agronego” argentino en estos tiempos presentes.

Por eso, como no podía ser de otro modo, el debate alrededor del actor agrario productivo giró en torno al peso de los pools de siembra y fondos de inversión en la producción sojera. Es decir, se discutió si se trata de un nuevo actor hegemónico o si volvemos a estar frente al terrateniente pampeano de siempre ahora metamorfoseado en sojero.

Un estudio de FLACSO, que se entregó con el diario *Página/12* en 2009 (citado el año anterior por el mismo diario) de Arceo et al. (2009), sostuvo la hipótesis acerca de que el terrateniente propietario es el principal beneficiario del modelo y que, al mantener ese poder económico se guarda, como lo hizo históricamente, una posición de poder capaz de “jaquear” al poder

político que detenta el gobierno. Es decir, se invisibilizan los nuevos actores capaces de imponer leyes, decretos, resoluciones y se vuelve a apuntar a la “vieja oligarquía” en el supuesto de que activaría la memoria de la población que supo de sus andadas golpistas.

Para demostrar esta posición se toma el Censo Agropecuario (CNA) de 2002 y se lo compara con el anterior de 1988, año este en que los propietarios de la región pampeana explotaban en forma directa el 90% de la tierra cultivada; los autores sostienen que ese porcentaje para 2002 “apenas disminuyó al 86,4%”. Frente a esta situación se deriva la “invariante” presencia en el escenario pampeano del terrateniente, base de Sociedad Rural Argentina (SRA) y de Confederaciones Rurales Argentina (CRA).

La primera comprobación es que el propietario rural sigue siendo durante la fase de expansión el protagonista decisivo de la producción agropecuaria pampeana. En efecto, los propietarios trabajan el 90% de la superficie agropecuaria en 1988 y el 86% de la misma en 2002, lo cual indica la posición privilegiada que tiene el propietario en ambos relevamientos censales respecto a las restantes formas de tenencia. No obstante esta significativa estabilidad, es preciso reparar en una serie de alteraciones que refuerzan el protagonismo que tradicionalmente ejercieron los propietarios pero que

al mismo tiempo introduce nuevas facetas. En este sentido es revelador observar que la superficie trabajada por aquellos propietarios que solo explotan sus tierras descendió muy acentuadamente (9,5 millones de hectáreas) mientras que los propietarios que, además de explotar sus tierras, trabajan otras, se incrementaron en forma ostensible (prácticamente en cinco millones de hectáreas). La importancia de estos últimos, se pone de manifiesto cuando se constata que son los “tomadores

de tierras” más relevantes de la región pampeana superando ampliamente a quienes son “arrendatarios puros” entre los que se encuentran los Pools de Siembra pertenecientes al sector financiero. En efecto al confrontar la superficie tomada en arrendamiento por los propietarios y por quienes no lo son, se constata una notable superficie de los primeros (17,3 versus 5,5 millones de hectáreas de acuerdo al cuadro siguiente [ver Cuadro N° 1]). (Arceo et al., 2009: 71)

Cuadro N° 1

Distribución de la tierra de la región pampeana* según la toma de tenencia de la tierra, 1988 y 2002 (en millones de hectáreas y porcentajes)

	1998		2002		Diferencia 2002-1998	
	Hectáreas	%	Hectáreas	%	Hectáreas	%
Total Región Pampeana	70.749.256	100,0	68.245.542	100,0	-2.503.714	-3,5
1. Tierras trabajadas por los propietarios	63.589.989	89,9	59.009.761	86,3	-4.580.228	-7,2
2. Propietarios que no toman tierra	44.051.073	62,3	34.520.100	50,5	-9.530.973	-21,6
3. Propietarios que toman tierra en:	19.538.916	27,6	24.489.661	35,8	4.950.744	25,3
3.1 Arrendamiento	11.566.816	16,3	17.333.123	25,4	6.766.307	49,9
3.2 Contrato accidental	4.249.416	6	2.953.074	4,3	-1.296.342	-30,5
3.3 Otros**	3.722.684	5,3	4.105.244	6	382.561	10,3
4. Tierra trabajada por no propietarios	7.159.267	10,2	9.235.781	13,5	2.076.514	49,6
4.1 Arrendamiento	3.591.452	5,1	5.474.838	8	1.883.386	52,4
4.2 Contrato accidental	1.124.639	1,6	901.670	1,3	-222.969	-19,8
4.3 Otros**	2.443.176	3,5	2.859.273	4,2	416.097	17

* Comprende las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

** Incluye tierras ocupadas, aparcería, que no tienen la tenencia discriminada y otras.

Fuente: Elaborado sobre la base de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002.

Este razonamiento se basa en una relación que los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) no otorga en las publicaciones que se vienen haciendo desde 2003 y que todos sus usuarios citamos. Es la relación entre dos variables: “forma de tenencia” y “forma de gestión”. En efecto, tanto el censo de 1988 como el del 2002 incluyeron en su cédula censal las clásicas preguntas que indican las relaciones de propiedad con la tierra y las posibles combinaciones entre ellas. De este modo se obtienen “propietarios que no toman tierras” (en arriendo), “propietarios que toman tierra” (en arriendo), “arrendatarios”, “contrato accidental” y las posibles combinaciones. Por otro lado, en virtud de la importancia que adquiere el sector financiero a través de las nuevas formas productivas, en 2002 se incluyó una nueva pregunta que indagaba la “forma de gestión” de la empresa. Se preguntaba si el censado formaba parte de un “pool de siembra”. Esa respuesta se respondía por la afirmativa o la negativa y nada decía acerca de las características de la empresa censada. Fue una primera indagación acerca de un fenómeno que crecía día a día (aún las cifras no alcanzaban un rango significativo) y que para el proyectado y abortado censo de 2008 sería perfeccionada. Es decir, no existía fuente empírica alguna para que los investigadores

de FLACSO pudieran sostener la proposición: “La importancia de estos últimos (propietarios tomadores de tierra), se pone de manifiesto cuando se constata que son los ‘tomadores de tierras’ más relevantes de la región pampeana superando ampliamente a quienes son ‘arrendatarios puros’ entre los que se encuentran los pools de Siembra pertenecientes al sector financiero” (énfasis propio).

¿De dónde se había sacado que solo entre los arrendatarios puros se encuentran los “pools de siembra” ligados mayoritariamente al sector financiero? ¿Esto significaba que entre los propietarios no había gestiones del tipo “pool de siembra”? ¿Cómo podían estar seguros sin corroborarlo con los datos censales? Esta relación, que no aparecía en el trabajo de FLACSO en forma de hipótesis a comprobar sino de aseveración, despertó dudas y las marcamos en la primera versión del artículo de Giarracca, Teubal y Palmisano, que integra este libro, publicado por primera vez en Realidad Económica en agosto de 2008. De un simple análisis censal corroborábamos que la mayoría de los productores de “hasta 200 ha” son propietarios y también lo son la mayoría de quienes desaparecieron de la producción entre 1988 y 2002. Es decir, la condición de “propietario” en la Argentina no delimita por sí misma estratos sociales y

capacidad política de sus miembros; ni siquiera la delimita la relación entre tenencia y “cantidad de superficie” ya que, por ejemplo, algunos dueños de empresas agroindustriales suelen tener en propiedad o arriendo una superficie que los colocaría entre “los chacareros”. Aún más del simple cruce de “régimen de tenencia” según “escala de extensión” en el nivel nacional se deduce que en casi todas las subcategorías de propiedad se toma tierra, desde los estratos más pequeños a los más altos (Datos del CNA); algunos simplemente arriendan más tierras, otros entran en “pool de siembra”.

Profundizando estas cuestiones logramos, con datos censales de 2002, la información acerca de quiénes participan en los pools de siembra, grupo dentro del cual están, según nuestras hipótesis, gran parte de los nuevos actores del sector productivo. En efecto, en el conjunto de los que gestionan su explotación en la modalidad “pool de siembra” (o fondos de inversión) están algunas explotaciones poderosas por el volumen producido y/o por sus conexiones con la exportación; es decir agentes económicos hegemónicos en la cadena del “agronegocio” y están los otros, formados por pequeños propietarios (mayoritarios en la estructura social agraria desde su origen) tomadores de tierra para aumentar la escala de

producción. Veamos cómo se distribuye la variable “forma de gestión pool de siembra” en las variables que expresan las distintas formas de tenencia.

La forma de gestión “pool de siembra” que una parte incorpora como elemento central a inversores financieros (grandes y pequeños) tiene relaciones significativas con las principales formas de tenencia y no solo —como sostiene el trabajo de FLACSO— con los “arrendatarios puros” (arrendatarios y “contrato accidental”, de solo un año de alquiler). Es decir, la forma “pool de siembra” aparece con porcentajes altos entre las EAP (explotaciones agropecuarias) de propietarios (47%), pero mantiene guarismos significativos en los arrendatarios, en el contratista accidental y en combinaciones de “propietarios” con “arrendatarios” o “contratistas accidentales”. En la forma “propietario” en todas las provincias el porcentaje es mayor. Esto no nos llamó la atención pues en esos años llevamos a cabo un trabajo sobre los colonos del sur de Santa Fe y la mayoría de los que estaban produciendo soja declaraban pertenecer a un “pool de siembra”. Estos eran pequeños agricultores, y el “pool” era una solución para superar la escala de producción que la soja les exigía (véase Giarracca, Gras, Barbetta, 2005).

Pero ya existía para Santa Fe, Buenos Aires, y el resto de las provincias donde la soja se expandía, otro tipo de propietarios, de 2000 ha o más de tierra, que participaba en otro tipo de pool de siembra (a los que en los primeros años se los denominaba “fondos de inversión”). Esta combinación de propietarios grandes y tomadores de tierra (arrendatarios o contratos accidentales) con la participación del capital financiero en altos montos, sumado a los servicios de terceros para el proceso productivo más los importantes estudios agronómicos al servicio de esta lógica, fueron configurando el nuevo agente productivo que se corresponde con el resto de los actores de la cadena (los grandes exportadores, las corporaciones, corredores de bolsa, etcétera). No siempre se pueden corporizar en una persona como es el caso de Gustavo Grobocopatel, cabeza visible de Los Grobos, la familia Rodriqué de La Redención, o los Alvarado de El Tejar, quienes amasaron inmensas fortunas en muy pocos años acorde a los tiempos de la globalización, partiendo de extensiones y biografías variadas. Sin duda en este sector se encuentran familias de apellidos tradicionales pero están también los inmigrantes como los Grobocopatel, están los viejos estudios agronómicos de la vieja clase terrateniente pero

están además las nuevas generaciones de ingenieros agrónomos formados en la universidad del neoliberalismo, trabajando para estos actores³. Considero que estamos frente a la formación de un nuevo actor (no necesariamente encarnado en una persona única) que ostenta no solo rasgos económicos propios sino sociales y culturales; por ejemplo, otro tipo de relación con la universidad pública a la que la vieja clase terrateniente consideraba un lugar “peligroso”, una relación distinta con los medios de comunicación y que, incluso, creó sus propias “exposiciones” anuales de la mano de los principales matutinos porteños (Clarín y La Nación)⁴.

3 “Bajo la coordinación de Casenave y Asociados, la dirección técnica de Jorge González Montaner, el asesoramiento de Pablo Calviño y la participación de las compañías SPS, Syngenta, BASF, Nitragin, Dow Agrociencees y Glencore Argentina se sembrarán...” anunciaba orgullosamente La Nación, Campo, el 29 de abril de 2006. Es un pequeño ejemplo de la complejidad del nuevo agente agrario.

4 Durante el conflicto Gustavo Grobocopatel fue invitado a seminarios universitarios en representación de nuevos empresarios diferenciados de “la vieja oligarquía”.

Cuadro N° 2

Forma de tenencia y provincias por participación en un “pool de siembra” (%)

		Provincia										Total	
		Buenos Aires		Córdoba		Santa Fe		La Pampa		Entre Ríos			
Tipo de tenencia		Sup. (ha)	EAP										
Formas puras	Propiedad	39,60	45,02	37,76	41,63	55,25	52,63	75,05	54,35	38,11	38,11	44,36	47,01
	Sucesión indivisa	0,18	1,24	0,50	1,91	0,76	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,50
	Arrendamiento	20,93	17,91	24,42	27,27	13,33	19,03	2,94	15,22	0,82	0,82	18,00	19,66
	Aparcería	1,04	2,99	0,83	1,91	2,08	4,45	0,00	0,00	1,14	1,14	0,96	2,99
	Contrato accidental	10,83	12,69	7,15	7,66	4,04	4,45	0,17	2,17	24,67	24,67	9,09	9,08
	Ocupación con permiso	0,15	1,24	0,08	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,64
	Ocupación de hecho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,01	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
EAP que combina tierra en propiedad con:	Sucesión indivisa	1,74	0,50	0,59	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,43
	Arrendamiento	16,76	11,69	20,52	13,88	19,68	14,17	19,54	10,87	12,01	12,01	17,78	12,50
	Aparcería	0,80	1,49	2,80	1,44	0,00	0,00	1,71	15,22	1,37	1,37	1,27	1,82
	Contrato accidental	7,96	4,98	5,36	2,87	4,85	3,24	0,59	2,17	21,89	21,89	7,07	4,27
	Ocupación con permiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ocupación de hecho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos inéditos del CNA, 2002.

Estos nuevos actores productivos junto a las grandes exportadoras aceiteras y cerealeras que están lideradas por Cargill, Bunge Argentina, LCD Argentina, Aceitera General Deheza, Vicentin y Nidera, etcétera, son los núcleos del espacio económico que definimos como “agronegocio sojero”. Son empresas que exportaron en 2008 por un total de 20 mil millones de dólares, 28,7% de las exportaciones totales del país. Son empresas que se encuentran entre las 20 principales exportadoras (acompañadas por YPF-Repsol, Minera Alumbrera, Tenaris Siderca). Estas empresas están siendo demandadas por el fisco por una presunta evasión realizada entre enero de 2007 y mayo de 2008 que asciende a 1447,9 millones de dólares. Como lo demuestran el artículo de Teubal y Palmisano en este libro, por las características del sistema de retenciones, que en principio son pagadas por las exportadoras, estas luego las transfieren a los productores. O sea que los productores resignaron ingresos pero estos no fueron transferidos al Estado. Cabe destacar también que la industria aceitera, frigorífica y otras agroindustrias que forman parte del modelo, también han recibido múltiples subsidios del Gobierno en el marco de una “declarada” lucha contra la inflación. Estos escándalos con los exportadores fueron denunciados por Mario Cafiero

y proclamados en el debate parlamentario por el diputado Claudio Lozano (véase debate en diputados en La Trama y nuestro artículo en *Página/12* del 9 de julio de 2008).

¿Por qué insistir en la caracterización de que estamos en presencia de la vieja clase agraria? ¿Por qué tratar de invisibilizar estos profundos cambios en la estructura social agraria del país? Son interrogantes difíciles de responder ya que supone otorgar intencionalidades y no es mi propósito hacerlo sino simplemente mostrar cómo en los grandes debates se pueden “construir” los actores de acuerdo a las necesidades de los mismos. La mía también es una construcción, no existen “personas” o “grupos de personas” que se caracterizan como los caracterizamos nosotros, no existe un grupo que se autoidentifique como “núcleo de poder”, por ejemplo. No obstante una vez “realizadas” las construcciones comienzan a ser utilizadas para identificar situaciones o autoidentificaciones (efecto de teoría). Pasan del espacio teórico al cotidiano. Durante todo el siglo XX historiadores, economistas, ingenieros agrónomos, sociólogos, antropólogos fueron construyendo, contrastando, dando batallas de sentido para caracterizar al sector terrateniente, al chacarero y al campesino en la dinámica de la estructura agraria argentina (véase Giarracca, 1999).

Esta tarea retoma aquella otra y como entonces los fundamentos teóricos y empíricos son de primer orden.

CARACTERIZACIONES POLÍTICAS

El antiguo actor “terratendiente pampeano”, propietario de grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería y agricultura, representado por SRA y por las capas más concentradas de CARBAP, fue quien ostentó un papel económico, político y cultural significativo en la conformación de la Argentina “moderna”; fue quien trató de influir en todos los gobiernos a través de prácticas corporativas o quien apoyó a militares golpistas; es quien hoy mantiene su remanente, una sombra de lo que fue, en las mismas siglas gremiales que lo acompañaron por décadas. No obstante, los contenidos sectoriales y corporativos del sector hoy son muy distintos a los que tuvieron hasta el golpe de 1976. Esta es la base de nuestra diferencia con la postura del Gobierno y sus aliados intelectuales durante el conflicto⁵.

5 No solo nosotros registramos estas diferencias, lo hicieron legisladores, periodistas y otras personas con capacidad de observación.

Sus dirigentes ni siquiera tenían visibilidad mediática antes de 2008, nadie sabía quiénes eran Luciano Miguens, Mario Llambías, Eduardo Buzzi. Tampoco se sabía que el senador Roberto de Urquía había participado en la lista oficial y era el dueño de una de las empresas “ganadoras del modelo” sojero o que Gustavo Grobocopatel tuviera el poder económico que tiene y que concentrara una profunda admiración de la mayoría de los funcionarios del gobierno. La situación de comienzos de 2008 podría resumirse de este modo en referencia a las relaciones sociales entre actores agrario-Gobierno: 1) los nuevos inversores concentraban las simpatías de los funcionarios del gobierno “por innovadores, empresarios de la sociedad del conocimiento”, viajaban en el avión presidencial y ocupaban bancas y puestos de funcionarios⁶; 2) los medianos productores “negociaban” con mandos medios del gobierno tales como el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados o el presidente del INTA, sin conseguir mucho (una de las razones que explican sus posteriores alianzas) y 3) los miembros de la vieja clase terratenien-

6 No solo están los viajes en el avión presidencial sino que existen videos con escenas de Expoagro que muestran estas cercanas relaciones.

te, subordinada a los nuevos núcleos del poder, recibían oficialmente la desconfianza propia de los gobiernos democráticos por pecados pasados pero mantenían cierta cercanía social con muchos de los funcionarios de gobierno por la vecindad de sus residencias o por pertenencias a una mismo sector social⁷.

El paro, uno de los tantos de las entidades corporativas en todos los tiempos (véase Giarracca, Teubal y Palmisano en este libro), fue convertido en “conflicto” y caracterizado por el Gobierno como crucial e indispensable para cambiar de modelo, para “terminar con la polarización social, con la pobreza y la indigencia”. Fue construido para darlo a conocer por los medios e informar al conjunto de los argentinos como un conflicto cuya resolución podía afectar al pacto fundante, es decir un conflicto que refiere a la posibilidad de modificar las reglas aceptadas por el capitalismo de esta etapa. ¿Realmente lo fue? Nuestra hipótesis de trabajo es que no lo fue; con solo repasar la caracterización de quiénes son los núcleos de poder y con quiénes entraron en conflicto justificamos

7 Información de entrevistas periodísticas televisadas frente a preguntas acerca de los efusivos saludos entre funcionarios y dirigentes en los encuentros en la Casa Rosada.

la hipótesis. El razonamiento gubernamental y el de sus aliados estratégicos sostenía que si se podía disciplinar a los dirigentes agrarios, a los miles de agricultores y poblaciones rebeldes a los costados de las rutas, se estaría en condiciones de tomar el camino hacia la redistribución de los ingresos, en pos de cambios sustanciales en la estructura de clases y hacia la consolidación de una sociedad democrática que vence a sus sectores más conservadores, de derecha. Este fue el trasfondo del mensaje que se quería emitir. Este mensaje se encontró con un primer y grave problema: la oposición de los grandes y concentrados medios de comunicación que por intereses diversos habían tomado partido por “el otro” del conflicto, es decir por los dirigentes rurales⁸. De este modo generaron la otra cara de la moneda de la

8 Podría no haber sido así; por ejemplo, en los años con predominio de los sectores terratenientes Clarín representaba intereses desarrollistas industriales con Rogelio Frigerio a la cabeza. Ahora se encuentra muy comprometido con el sistema sojero o agronegocio en general, es en sí mismo un importante grupo económico concentrado; basta con analizar un par de ejemplares de su suplemento rural para corroborar esto. Existen intereses económicos en juego pero también ideológicos. El desarrollismo hoy se ubica, según el diario, en la expansión agraria en base a la biotecnología.

imagen oficial y construyeron su propia “representación social” del conflicto en la cual el Gobierno, supuestamente, quería manejar una caja más grande para generar hegemonía y mantenerse en el poder; en otras palabras, el Gobierno, en esta postura, deseaba sacarle sus razonables ganancias a un sector emprendedor que generaba riqueza genuina: el sector agrario. A lo largo de los meses la Presidenta, como respuesta a esta acusación, anunciaba nuevas medidas sociales y prometía subvencionarlas con las recaudaciones; trató por meses de demostrar un fin noble para el impuesto como se puede comprobar siguiendo las intervenciones de la Presidenta en el capítulo “La trama de un conflicto extendido” en este libro.

Intentaremos demostrar nosotros aquí cómo la construcción del Gobierno “campesinista” (de la democracia; de los derechos humanos y redistributivos de la sociedad, etcétera) fue una pieza clave para el desarrollo del conflicto y su posterior resolución parlamentaria. Pero también, a nuestro juicio, fue una pieza clave para que el Gobierno perdiera su pulseada con el campo (representado por la Mesa de Enlace) que se encontró muy cómodo en el rol de concentrar las oposiciones y críticas al Gobierno. Como dijo alguna vez Bertolt Brecht en referencia al acto teatral, se

había convertido lo cotidiano en algo extraordinario, y los dirigentes se sentían (y lamentablemente aún se sienten) muy a gusto en esa construcción que los transforma de dirigentes de segunda línea a sujetos en situaciones extraordinarias. Si bien no es nuestro objetivo abordar la batalla de sentidos entre estos dos factores de poder (Gobierno-medios) es, sin dudas, el trasfondo de cualquier tipo de análisis. De más está decir que nuestros discursos (ver última parte de este libro) intentaron no abonar ninguna de las posiciones y pusimos allí donde nuestras voces encontraron espacios —como estudiosos de la cuestión agraria— brechas que oxigenaran la oclusión discursiva enfrentada.

Pero pasado un tiempo prudencial, es necesario retomar los discursos de quienes rodearon y alentaron las posiciones binarias del Gobierno; esas posiciones que generaron los desplazamientos que investirían a los productores de las rutas de un poder hegemónico que no tenían y proponían repudiarlos como representantes de la “vieja oligarquía”; aquellos discursos que conducían a que la Presidenta el 1 de abril de 2008 comparara el “lock out” patronal al pre-golpe de febrero de 1976 con el paro agrario que ella enfrentaba en una operación de torsión de los hechos reales que preocupa-

ron a quienes vivimos aquellas época⁹; o volver a recordar a quienes en el debate intelectual ampliaron con sus calificativos y caracterizaciones supuestamente “expertas” (por la condición de universitarios, pensadores) las distancias que la propia Presidenta, erróneamente a mi juicio, estableció con los sectores medios agro-rurales (no solo chacareros sino habitantes de las ciudades intermedias del país), que en una gran proporción la había votado.

9 Dijo la Presidenta: “Las mismas organizaciones (que hoy paran) llamaron también a un ‘lock out’ patronal, allá por febrero del 76. Un mes después el golpe, la tragedia más terrible que han tenido los argentinos [...] Esta vez no han venido acompañados de tanques sino de ‘generales multimediáticos’” (<<http://www.casarsada.gov.ar/index>>). El “lock out” patronal de carácter golpista de 1976 al que hace mención la Presidenta, lo convocaron no solo la SRA y CARBAP sino conjuntamente el resto del Consejo Empresario Argentino, con la Cámara de la Construcción, de Comercio, las cámaras de los grandes importadores y exportadores, supermercados, bancos y por supuesto la entidad empresarial de Martínez de Hoz que luego tomaría directamente el rumbo económico del país (la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). ¿Por qué omitir a estas corporaciones industriales y de servicio y, sobre todo, por qué incluir a la Federación Agraria que no estuvo y mantuvo una posición digna allí y durante toda la dictadura militar? ¿Ese “las mismas”, un error de la presidenta o una estrategia de sus asesores?

Cualquier cientista social sabe que la batalla de sentidos fue tan importante como el enfrentamiento parlamentario o las mediciones de la densidad de las marchas y concentraciones en las calles. Por esta razón vale la pena simplemente recordar algunas de las cuestiones que se dijeron. No es nuestra intención analizar esos discursos desde el análisis semiótico sino intentar poner a su lado algunas reflexiones basadas en nuestra propia experiencia en el análisis social y en un derrotero de compromiso político de décadas¹⁰.

Tomaremos básicamente las declaraciones del grupo que se denominó Carta Abierta (CA), formado por un conjunto de intelectuales de la Facultad de Ciencias Sociales bajo el liderazgo de, entre otros, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional.

Dicen en su primera carta del 19 de abril de 2008:

Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a

10 Muchas veces durante el conflicto eché mano a mi propia experiencia durante los años setenta como una joven profesional que acompañó el corto período del Ing. Horacio Giberti en la Secretaría de Agricultura, a la vez que participaba en aquel impresionante movimiento social que se proponía transformaciones de fondo para el país.

una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones —comprensible objeto de litigio— dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad... Esta atmósfera política, que trasciende el “tema del agro”, ha movilizó a integrantes de los mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una democracia a la que aquellos sectores buscan limitar y domesticar. La inquietud es compartida por franjas heterogéneas de la sociedad que más allá de acuerdos y desacuerdos con las decisiones del gobierno consideran que, en los últimos años, se volvieron a abrir los canales de lo político. No ya entendido desde las lógicas de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario del debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. *Y, fundamentalmente, reabriendo la relación entre política, Estado, democracia y conflicto como núcleo de una sociedad que desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor equidad.* (Énfasis propio)

En el primer párrafo se delimitan los dos actores en conflicto y deducen la caracterización del mismo, veamos: “dura confrontación”; “sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes” y “un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta...”. Se describe una atmósfera política que trasciende el tema del agro y pone en jaque a la democracia misma. De este modo, el paro con sus actores que luego se constituirían en la Mesa de Enlace, se convertirán desde el comienzo, según CA, en quienes impedían el programa democratizador de la Presidenta inaugurando su gestión.

Desde 2003 el Gobierno del matrimonio Kirchner apostó fuertemente al modelo productivo extractivo como una de las patas importantes de su plan económico para el país (véase discurso de 2004 de Néstor Kirchner presentando el Plan Minero o la celebración en las páginas gubernamentales acerca del país que en la agricultura había dado el salto “productivista”). Los núcleos de poder del sistema productivo extractivo y de servicios públicos (refrendado por los Kirchner), las empresas exportadoras que se quedan con las retenciones (véase artículo de Teubal y Palmisano en este libro), las proveedoras de insumos como Monsanto, los grandes lobbistas de la deuda exter-

na, los grupos nacionales concentrados como Techint, las corporaciones mineras como Barrick Gold o la Alumbreira, las empresas de la privatización de los ferrocarriles, de los subterráneos, los grandes medios de comunicación, son quienes comandan con el Estado argentino el modelo económico. Estos fuertes actores económicos y políticos gozaban del consenso de empresarios nacionales agrarios, industriales, de servicios, de casinos y juegos, etcétera de las distintas regiones del país. Algunos por convicciones ideológicas y otros por subordinaciones de diversos tipos. En la actualidad ese consenso se ha resquebrajado, asistimos a una crisis de consenso hegemónico y en tal sentido el Gobierno aparece en litigio con muchos de sus antiguos aliados, todos aquellos que constituyeron con el Estado el pacto fundante del capitalismo de esta etapa del neoliberalismo (posterior a la década del noventa).

El interrogante que nos hacemos es ¿con este modelo es posible la redistribución de la riqueza más allá de las políticas asistenciales también consensuadas con los que diseñan estos modelos (Banco Mundial)? ¿Es el paro de los productores y ese relativo monto de ingresos fiscales (véase artículo de Teubal y Palmisano en este libro) que ganaba o perdía el Gobierno lo que imposibilitaba un cambio de

rumbo del país? ¿Por qué los Kirchner deciden utilizar las demandas de los productores agrarios para tratar de imponer a la sociedad una imagen binaria de sí misma?

Cuando la presidenta Fernández decide responder en términos descalificadores a los productores en las rutas, esperaba sin duda despertar las viejas antinomias del peronismo, tanto de 1945 como de 1973, referir a ese otro país injusto, de importante base agraria, al que el General Perón y Evita aludían constantemente en sus discursos¹¹. Sin embargo, esta estrategia no tuvo los efectos esperados sino el efecto contrario: se convertiría en un catalizador de muchos descontentos que los sectores medios tenían con el Gobierno en su nueva etapa. Y estos se hicieron escuchar como en ningún otro momento porque los medios de comunicación decidieron tomar sus voces para posicionarse también en contra del Gobierno. De este modo, los tradicionales sectores que se oponen a la política de derechos humanos del Gobierno,

11 El enfrentamiento de Juan Perón con la oligarquía ganadera en su primer gobierno llevó a esta a buscar su histórica alianza con sectores de las FFAA, sobre todo la Marina. En 1973, con el corto lapso de Cámpora-Juan Perón, la política de intercepción de renta agraria fue política de Estado.

el arco político partidario opositor y esa clase media —generalmente con poca voz mediática— se unieron a los reclamos del campo y constituyeron un espacio político confuso con voces superpuestas. En ese espacio también se encontraban sectores de la izquierda tradicional parlamentaria (Vilma Ripoll), grupos piqueteros y gran parte de la “centro izquierda”. Allí se constituía el espacio dicotómico al que alude unos días después CA. Es decir, entre el Gobierno y los medios de comunicación lograban borrar ese rasgo abigarrado de grupos para convertirlo en “la voz del campo”, espacio homogéneo, sin fisuras. CA registra inmediatamente el papel de los medios de comunicación y sostiene en esa primera carta:

En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente “la realidad” de los hechos, que generan “el sentido” y las interpretaciones y definen “la verdad” sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar

adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las *mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan*. (Énfasis propio)

Estaríamos totalmente de acuerdo con este párrafo si no fuera por la operación discursiva de ocultamiento de estas mismas capacidades semióticas del poder político. El Gobierno a través de sus voceros también estructuraba diariamente “la realidad de los hechos” con dispositivos que generan sentidos, interpretaciones y definen la verdad sobre los actores sociales y políticos. Estábamos frente a una verdadera batalla de sentidos con dos poderosos actores enfrentados: el primero por contar como pivote al Estado y el segundo, el llamado “cuarto poder” mediático (con el que el Gobierno había acordado desde 2003). En este espacio dicotomizado que pretendía generar distintos sentidos, los grandes perdedores fueron la duda, las posiciones que recogieran la historicidad del suceso, que pusieran toda la información disponible en el juego de nominar y significar. Lo más importante de remarcar aquí es que ni el Gobierno ni los medios de comunicación resaltaban lo que estaba por detrás de la construcción binaria: el gran “agronegocio” generador de riquezas que ambos grupos aprovechan mucho más que los chacareros o los ganaderos. Si

algún calificativo cabe al conflicto, sobre todo por la intervención del monopolio mediático (Grupo Clarín), se orientaría a ubicarlo al interior del bloque de poder hegemónico hasta marzo de 2008.

Frente a esta interpretación vale preguntarse ¿Por qué los actores ruralistas seguían el juego, entonces? FAA trataba de hacer explícito su rol subordinado mediante las voces de dirigentes de segunda línea pero eran simples surros en el contexto de los grandes poderes y, por otro lado, a los dirigentes de primera línea se los veía muy cómodos en el nuevo papel de visualización política en el que factores contingentes los habían ubicado. Gustavo Grobocopatel no aparecía en los medios, por el contrario era invitado a seminarios universitarios (en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por ejemplo) como integrante de la “sociedad del conocimiento” para discutir el conflicto que, supuestamente, no lo involucraba.

Tal vez por la cercanía de sus propios orígenes culturales, por razones políticas coyunturales, u otras razones, la mayoría de los sectores medios urbanos de Rosario, Córdoba y una buena parte de Buenos Aires no fueron convencidos por el discurso binario que apuntaba a los agricultores como la condensación de los límites de una democratización e inclusión so-

cial; entonces surgió la otra idea fuerte de CA: estábamos frente a un operativo “destituyente del gobierno popular”, concepto que desarrollará más extensa y claramente CA en la V Carta, ya en los epílogos del núcleo del conflicto (abril de 2009).

Recorre la Argentina la fanfarria de una restauración conservadora, expresión de una derecha vieja y nueva. Con arrebatos cambiantes, a veces con estridencia, muchas veces en la penumbra, nerviosamente se preparan. Van de reunión en reunión, en una coreografía que se hace y rehace bajo la bitácora de semanales gacetilleros del gran desquite. Ventrilocuos, pronostican el próximo viraje. El fin de la pesadilla. No llegan a ser aún la Santa Alianza. Pero a falta de un Metternich, pululan políticos de diversas historias y procedencias, estilos comunicacionales aparentemente objetivos y representantes de economías facciosas que apuestan a recrear un Estado sin capacidad de pensar el conjunto de la Nación, cuando es necesario transformarlo en el sentido contrario, sacudiéndose sus modos neoliberales y su debilidad institucional. Los restauradores exudan el deseo de recuperar los fastos de la Argentina del primer centenario, aquella en la que la mitología agroganadera representaba los fundamentos de la Nación. Sus narrativas del presente se inspiran en las injusticias y desigualdades del pasado.

¿A qué se llamaba restauración conservadora? ¿A la del Centenario, a la del país agroganadero de 1910? ¿Al criminal intento de 1976 en su momento represivo? Estamos seguros de que quienes esto escribieron, acordarían con nosotros que la restauración del conservadurismo de comienzos del siglo XX la dejamos en ese triste pasado del país. La configuración conservadora que sufrimos en el presente, la más enquistada y difícil de desarmar en el país actual, es de manufactura “menemista” (recordemos que se la llama además de neoliberal, neoconservadora); es esa construcción que toma su punto crucial en los noventa pero se prepara desde el golpe de 1976 y se proyecta en estos complejos presentes. La restauración conservadora no es un peligro futuro a partir del conflicto campo-Gobierno, sino un proceso en marcha y de muy difícil desactivación sin una fuerte decisión política, sin otro tipo de Estado, sin otro pacto fundante, sin una nueva Asamblea Constitucional. Por otro lado, los actores políticos son activos constructores de este modelo que hemos denominado “modernización conservadora” (véase entrevista a Norma Giarracca en González Arzac, 2009). La gran mayoría de los gobernadores y ex-gobernadores (Néstor Kirchner, Felipe Solá, Juan Carlos Romero, Eduardo Duhalde, etcétera)

son actores de primer nivel desde muy temprano en la consolidación de este modelo. En él, a nuestro juicio, participaron no solo Carlos Menem y Domingo Cavallo, sino que a partir de 1994 comenzarían a participar activamente el conjunto de gobernadores (y partidos políticos) a quienes se habilita, por la reforma constitucional, para tomar en sus manos el destino de los recursos naturales de este país. Tal vez esta sea la etapa más peligrosa e irreversible del modelo, y en ella el matrimonio Kirchner así como José Luis Gioja o Mario Das Neves, son piezas claves para su consolidación. Recordemos nuevamente que el senador Roberto de Urquía o César Gioja estaban en las listas que acompañaron las candidaturas de Cristina Fernández y Néstor Kirchner respectivamente.

El campo entró algo más tarde en la “modernización conservadora” de la mano de un modelo productivo que se asemeja a las producciones extractivas de la minería, el petróleo y que conceptualizamos como “agronegocio”. Para que tal cosa sucediera, se necesitaron legislaciones, políticas públicas, nuevas direcciones de biotecnología en la administración pública, etcétera. Todos los funcionarios del gobierno actual y el de Néstor Kirchner son acérrimos defensores del modelo extractivo: sojero, minero, petrolero. Todos estos actores

económicos correspondientes al nuevo modelo no necesitaban representación política: ya la tenían y la mantienen férreamente dentro del Estado y del grupo político gobernante. CA seguía sosteniendo en su quinta carta:

Los líderes del “partido del orden”, mientras aguardan el auxilio de la crisis, no pueden atravesar ciertos dilemas de parroquia: ¿qué representación política dará finalmente el nuevo bloque agrario que trae la sorprendente fusión en las consignas de los agronegocios de los sectores que *antaño se diferenciaban por distintos tipos de actividad agropecuaria*? Una nueva soldadura material y simbólica ha ocurrido frente a las nuevas características tecnológicas y empresariales de la explotación de la tierra sobre el trasfondo de ganancias inesperadas. Se trata de un bloque “enlazado” que, bajo un débil manto de republicanismo, se propone la cruzada restauradora y para hacerlo declara vetustos a los desvencijados partidos remanentes, exige una rechización social y pone en crisis también a las tradicionales representaciones del sector. (Énfasis propio)

Si algo se constató después del tiempo transcurrido desde la cima del conflicto es que toda la administración pública apoya el modelo de expansión sojera con inusitada coherencia. Y esto en el ámbito político, mientras que al

mismo tiempo que se pone la responsabilidad de todos los problemas de polarización social del país en los productores agrarios, se sigue apoyando como política de Estado la soja, el petróleo y la minería. Carta Abierta no fue ajena al apoyo que el Gobierno nacional daba a todas las instituciones agronómicas y científicas, articuladas con este modelo al que tantas veces Gustavo Grobocopatel anunciaba como el verdadero logro de la “sociedad del conocimiento”. ¿Entonces por qué necesitarían los agricultores una representación política nueva para las consignas de “agronegocio”? Recordemos la denuncia del investigador Andrés Carrasco contra los efectos dañinos del glifosato sobre embriones efectuada en abril de 2009 (*Página/12*, 13-04-2009). Cuando se hizo pública, salieron todos los dispositivos a cargo de los distintos ministerios para contrarrestar el impacto del anuncio ¿necesitaban un partido propio acaso los simples consumidores del agroquímico (los agricultores) para lograr semejante colaboración? Es evidente que no lo necesitaban porque no se trataba de sacar parte de los impuestos a los heterogéneos capitalistas del país sino de cuidar el negocio de una de las empresas más cuestionadas del mundo: Monsanto. Ni la denuncia, ni el impresionante apoyo de la comunidad científica internacio-

nal¹² impidieron al Gobierno archivar el asunto del glifosato (mientras las denuncias de las poblaciones afectadas aumentan y el gran sufrimiento social sigue).

Alrededor de mayo, cuando CA proclamaba formas nuevas de “golpes de Estado”, nosotros nos sumamos a las variadas voces que pedían que el debate se diera en el Congreso de la Nación (véase *Página/12*, 19-05-2008); la situación se iba tornando muy violenta dado la construcción maniquea “amigo-enemigo” que gobiernos e intelectuales defendían y en la que el campo opositor (medios, partidos opositores y Mesa de Enlace) parecía sentirse muy cómodo. Un puñado de periodistas independientes y políticos de centro izquierda (Claudio Lozano, Eduardo Macalusse, Pino Solanas, Alcira Argumedo, Ernesto Tenenbaum, etcétera) pedían semana tras semana tratar de “calmar las aguas” y buscar un espacio de debate acorde con la democracia que teníamos entre manos. El peligroso dispositivo “schmitteano” de amigo-enemigo podía generar consecuencias no deseadas en rutas y calles urbanas donde los enfrentamientos se caldeaban. Y en efecto, cuando comienza la etapa parlamen-

taria del conflicto, la situación se despeja de esa opresión que la había caracterizado hasta entonces. Como podemos registrar en el primer capítulo de este libro —“La trama...”— el 17 de junio la Presidenta manda el proyecto al Congreso e inmediatamente el oficialismo se encolumna en el mantenimiento de la Resolución N° 125; no obstante con el transcurrir de los días el proyecto se fue modificando y tomando en consideración muchos de los reclamos de los productores más allá de las retenciones. Pasaron muchos grupos, técnicos, especialistas por el Congreso donde las comisiones debatían y decididamente comenzaba otra etapa del conflicto.

No obstante estos avances en la discusión con mayor envergadura conceptual y empírica, el ex-presidente Néstor Kirchner concentró el núcleo duro del discurso oficial y llevó el conflicto a las calles de la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno decidió “medir” fuerzas alrededor del Congreso y si bien la situación parlamentaria distendió el enfrentamiento, el grupo callejero que se llamó “compromiso K”, endureció su discurso y CA se propuso comprender en sus propios términos las razones por las que las movilizaciones del campo (o antigobierno) eran tan masivas.

12 Véase <www.voces-de-alerta.blogspot.com>.

Un nuevo sentido común producido por los tejidos tecnoinformativos nutre así el círculo de captura de imágenes y discursos. Se habla como lo hace la llamada “sociedad del conocimiento”, y esta habla como lo hacen previamente quienes ya fueron tocados por la conquistada neoparla que insiste en estar “fuera de la política”, pero munidos de jergas sustitutivas de la experiencia pública. *Hasta el modo de ir a los actos políticos es puesto bajo la grilla admonitoria de un juez del Olimpo que dictamina los momentos de supuesta “falsa conciencia” de miles de conciudadanos que no poseerían la legítima pasión espontánea de los refundadores del nuevo federalismo sin historia, sin Estado, sin instituciones, sin sujeto. El descrédito de lo político comienza por destituir a las masas populares y sus imperfectas maneras, para hacer pasar por buenas solo las supuestas movilizaciones pastoriles roussonianas, efectivamente multitudinarias, que mal se sostienen bajo las diversas modalidades del tractorazo, más amenazante que bucólico.* (Carta Abierta III, junio de 2008, énfasis propio)

Lo que más llama la atención en la interpretación “de las supuestas movilizaciones pastoriles roussonianas” dispuestas a fundar un nuevo federalismo sin historia, sin Estado, sin instituciones y sin sujeto, es la mención a un posible descrédito de lo político que comienza a destituir a las masas populares y “sus

imperfectas maneras”. Referencia peligrosa y anticuada que siempre refiere a la supuesta “representación de las víctimas silenciosas” (las “masas populares”) que las viejas concepciones políticas amparadas por los sistemas de representación siempre se atribuyen (desde los conservadores populares hasta la vieja izquierda). Si algo llamó poderosamente la atención en las movilizaciones de uno y otro bando del conflicto fue la pasividad que los sectores populares del Gran Buenos Aires — otrora base de los redistributivos peronismos “con Perón”— mostraron en la coyuntura.

¿Cuáles eran las imperfectas maneras de “los de abajo y los de más abajo”? (como suelen decir los zapatistas): ¿acaso las manifestaciones de los tradicionales gremios de la CGT con sus prácticas gremiales habituales? ¿Las intempestivas apariciones de Luis D’Elia en la Plaza de Mayo? Fue muy notable que ese gran espacio, desconocido, invisibilizado por los medios de comunicación (quienes reflejan a sus habitantes solo como “sujetos de la inseguridad”) de los sectores populares urbanos no tuvo voz pública, no llegó a los espacios de las disputas callejeras. Estuvo ausente, callado, tal vez agobiado y distraído por sus propias condiciones de existencia (véase el capítulo de “La trama...”). Mientras los sectores subalter-

nos del campo tuvieron voces en los medios de comunicación (*Página/12* sacó declaraciones del MOCASE, del CAI, y de otros movimientos campesinos) a aquel sector sujeto de la política del país de la industrialización nacional, de la redistribución peronista y radical, se lo percibió callado y pasivamente transportado en una u otra movilización gestionadas por los intendentes de todo el país (recordemos la muerte del joven tucumano, véase *Crítica*, 7-7-2008).

Algunas voces cercanas al gobierno —algunos miembros de CA y funcionarios— intentaron colocar en el debate “el viático” (transporte y un dinero) como nuevas formas de expresión de los sectores populares y que las críticas a estas gestiones constituyen prejuicios de clase media. A mi juicio esta fue una pobre concepción de los modos de lograr los apoyos populares o justificar ese modo “neoliberal” del gobierno para acercarse a ellos. El vicepresidente de Bolivia, el intelectual y ex-activista Álvaro García Linera sostiene en su extenso trabajo sobre los movimientos sociales de su país, que los hombres del orden siempre sospechan de los supuestos “financiamientos espurios” de las largas marchas y huelgas porque no pueden creer cómo el pueblo boliviano puede mantenerse en tiempos de protestas con sus propios recursos, sin un centavo externo a sus propios

bienes; agreguemos que estaba hablando de sectores tan (o más) desposeídos como los sectores más castigados del gran Buenos Aires. En nuestro propio país, el peronismo popular, ese de los barrios obreros, las villas, los suburbios, demostró durante muchas décadas que no necesitaba “incentivos” para acompañar los proyectos que consideraba “suyos”. Fueron marchas que llegaron al millón de personas convencidas de que sus propios destinos estaban atados al proyecto que apoyaban.

Por aquellos meses de invierno, las clases medias urbanas se dividieron entre uno u otro espacio; CA es un claro ejemplo de esto, profesionales, maestros, artistas, universitarios, muchas texturas de sectores medios que formaron este colectivo con el claro propósito de apoyar y defender al gobierno de los Kirchner frente al “golpista campo”. En tanto en las marchas pro-campo se podía encontrar un amplio espectro de profesionales, empleados, docentes, pequeños empresarios que se ubicaban en dicho espacio por una difusa simpatía con “la lucha del campo” pero también, según las encuestas que logramos hacer durante los cacerolazos, por un nítido repudio al gobierno de Cristina Kirchner. Las razones de la oposición al gobierno que registramos en entrevistas que realizamos en tres marchas de la ciudad de Buenos Aires

son difíciles de organizar; se mezclan cuestiones acerca de los rasgos de personalidad del matrimonio en el poder (soberbia, autoritarismo, falsedad, etcétera) con un reclamo que se convirtió en una constante en las entrevistas: falta de transparencia en los usos de los fondos públicos (incluía corrupción, manejo de los ámbitos de control, acercamiento de amigos empresarios que reciben prebendas, etcétera). Las entrevistas fueron realizadas en la zona de Belgrano (Cabildo y Monroe, Cabildo y Jura-mento). Podemos suponer que en San Isidro, Olivos, Recoleta con predominio de sectores altos cercanos a los militares esas marchas expresaran otros sentidos cercanos al intento de desactivar la política de derechos humanos que generó el gobierno en respuesta al requisito de los organismos de derechos humanos. Entre las decenas de entrevistados en tres marchas, el 42% había votado a Cristina Fernández, el 33% a Elisa Carrió.

El debate parlamentario fue de un alto nivel de discusión y terminó en un empate pero el Senado, con el voto del presidente de la Cámara de Senadores y Vicepresidente de la Nación, inclinó la balanza para el lado del campo: se sustrajo la situación al 10 de marzo de 2008. Pero hubo derrotas anteriores, en la calle y en los medios; no obstante la derrota más im-

portante para el gobierno no fue en esos momentos sino otras consecuencias tales como las elecciones de junio de 2009, la ruptura con el Vicepresidente de la Nación (Presidente de la Cámara de Senadores) y el exacerbamiento del enfrentamiento con el grupo mediático Clarín, quien se convirtió en el peor y más brutal opositor del gobierno. A partir de ese momento, coincidimos que el Gobierno Nacional se enfrenta a un concentrado grupo económico que se propone sustituirlo (electoralmente) para seguir con ese imperio montado en base a oscuros y ominosos procesos (adquisición de Papel Prensa) que hasta 2008 no había salido a la luz. El modelo sojero sigue como la minería a cielo abierto, el despilfarro de agua de glaciares, la contaminación de los ríos, aumentan los casos de enfermedades por la fumigación con glifosato y muchos etcéteras.

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

En 2009 no se formó “el partido del campo”, no se registró un “giro a la derecha” institucional sino que en las elecciones de junio de 2009 hubo una gran dispersión del voto entre: 1) los sectores aliados al gobierno (gran parte de los

gobernadores mencionados anteriormente); 2) la alianza del peronismo disidente con el “marxismo” (seguidores de Mauricio Macri y muchos de los ex-gobernadores mencionados anteriormente), 3) un espectro de alianzas entre radicales, coalición cívica (seguidores de Elisa Carrió), “cobismo” (seguidores del vicepresidente Cobos), parte del socialismo y 4) una nueva franja del centroizquierda que en parte levantó la bandera crítica al modelo productivista extractivo: Proyecto Sur pivotado por la figura del cineasta Pino Solanas, con parte de la CTA, parte del socialismo, desprendimientos de la Coalición Cívica y otro pequeño espacio del intendente de Morón, Martín Sabatella, más cercano al kirchnerismo. Además se registró un alto nivel de abstencionismo (27%).

Los festejos poselectorales mostraron que nadie ganó plenamente pero que el gobierno de los Kirchner perdió sus mayorías parlamentarias y pasó a constituir la primera minoría. En algunas de las provincias en que más se sufre el modelo minero, por ejemplo La Rioja, encontraron motivos para festejar la derrota del oficialismo que se llevó puesta a la por entonces Presidenta de la Comisión de minería en la Cámara de Diputados; ganó un riojano productor agropecuario. El socialismo de Santa Fe que apoyó a sus agricultores y que nadie puede

suscribir que represente a la nueva o vieja derecha, refrendó su papel en la provincia.

¿Y el campo? Pablo Orsolini (Frente de Todos, por la provincia del Chaco) Ulises Forte (FREPAM), por La Pampa, Juan Francisco Casañas (ACyS, por Tucumán), Estela Garnero (Unión por Córdoba) por Córdoba y Lucio Aspiazu (Encuentro por Corrientes - ACyS) por Corrientes, todos de Federación Agraria, juraron como diputados nacionales en diciembre de 2009. Otros entraron como diputados provinciales como Jorge Solmi, PRO en la provincia de Buenos Aires (véanse las cifras y nombres completos en el artículo de Castro García, Comelli y Palmisano en este libro).

“Un hecho histórico”, titula la noticia el sitio de internet de Federación Agraria. Y en efecto, la participación directa en la política había sido casi un privilegio de la SRA, desde diputados como Guillermo Alchouron hasta miembros de dictaduras como Alfredo Martínez de Hoz. El antecedente más inmediato es el de Humberto Volando, que después de muchos años de presidente de la Federación Agraria se convirtió en diputado nacional. El conflicto de 2008 permitió esta representación “rural” en distintos partidos políticos, algunos considerados “de derecha” (como el PRO) pero muchos en partidos de larga tradición democrática como la

Unión Cívica Radical. Lo que ocurre es que esa “larga tradición democrática” fue adaptándose a los tiempos neoliberales y ni el peronismo ni el radicalismo persisten en la querrela por la igualdad. Por otro lado, existen sobradas pruebas que demuestran que las “representaciones corporativas” en el Congreso Nacional nunca fueron buenas para la democracia.

Solo en los discursos de una pequeña franja de legisladores y funcionarios estatales del poder ejecutivo y judicial podemos hallar núcleos semióticos de nuevas emancipaciones necesarias y rechazos explícitos a todos los discursos de derecha. Estamos parados en una situación que contiene 35 años de neoliberalismo, 30 mil desaparecidos, y un bombardeo mediático diario de apoyo al modelo y sus “necesidades sociales” (cárceles, seguridad, etcétera). Lo extraordinario es que haya resistencias a estas posiciones de derecha que también cruzan el arco social y político.

El gobierno nacional es hegemónicamente neoliberal —del siglo XXI y no de los noventa— aunque se presente con un supuesto discurso progresista. Ha hecho justicia con los derechos humanos y ha sacado una buena ley de medios de comunicación, pero la brutal entrega de recursos naturales y la ceguera frente al sufrimiento social del hoy (la sistemática

muerte y desapariciones de jóvenes/niños en los sectores populares, por ejemplo) colocan estos aciertos en otra perspectiva.

Por último, estos debates son necesarios porque la “realidad” resulta de discursos y prácticas que son objeto de interpretación. Michel Foucault (1991) pensaba el discurso como juego estratégico “de acción y reacción, de pregunta y respuesta, de dominación y retracción y también de lucha. El discurso —decía— es ese conjunto de hechos lingüísticos en determinado nivel, y polémico y estratégico en otro” (1991: 15). Las prácticas dejan algo así como marcas, huellas, a veces simples palabras dichas o escritas y es necesario recoger todo para intentar convertirlo en esas situaciones y procesos que luego, en las narrativas del investigador social, aparecen coherentes. Son los actores quienes otorgan significados y sentidos y desde ellos se nutre el narrador (sea ensayista o investigador social) para otorgar interpretaciones a determinada situación. Podríamos decir que el análisis social es (o debería ser) siempre más democrático que la sociedad que estudia: no le niega la palabra a nadie y necesita de todas las voces para comprender los complejos procesos que los hombres y mujeres construyen, en posiciones asimétricas, en la lucha por la ganancia, por el poder polí-

tico, por atávicos sentidos de pertenencia, por reconocimientos de todo tipo, y muchos etcéteras. Las posiciones sociales son fundamentales, como decía Pierre Bourdieu (1988) son importantes porque no son intercambiables, no es lo mismo un “chacarero” que Grobocopatel, un desocupado que un chacarero. Las relaciones de poder existen, las subordinaciones capaces de imponer devastaciones y maltratos sociales también.

Por eso es tan importante en cada tiempo el esfuerzo por dar cuenta de los mecanismos de poder, de subordinación, de explotación. Por eso son tan importantes las batallas, todas las batallas, las que llevan adelante el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Consejo Asesor Indígena, grupos de productores medios críticos de la conducción de Federación Agraria, las asambleas de pueblos cordilleranos, las publicaciones de Biodiversidad (Grain), las huelgas de nuevos grupos de jóvenes obreros, los periodistas responsables, los científicos conscientes, los abogados auto interpelados, los legisladores transgresores del orden económico, la Iglesia de los pobres, los universitarios que pelean por la independencia de pensamientos y todo aquello que se orienta a buscar nuevos sentidos para la construcción de una vida social. En las sociedades

que aspiran a democracias profundas y densas, se necesitan todas las voces y todas las batallas, también aquellas que producen los debates. Se trata de buscar senderos emancipatorios para construir nuevos modos justos, convivenciales (Illich, 2006) y libertarios de producir “espacios de esperanza” (Harvey, 2003) y el interrogante siempre abierto es qué papel puede jugar este viejo Estado-nación que en muy pocas ocasiones históricas enfrentó la querrela por la igualdad en contra del gran poder económico (véase mi prefacio al libro de De Sousa Santos, 2010). De esto se trata este debate. La aspiración de quien debate en la arena política se basa en acompañar el discurso con ciertas actitudes decodificadoras que “anticipen el poder desestructurador de la factibilidad social misma” (Roig, 2009: 45). Pero como este autor mismo alerta no siempre el discurso contrario puede evitar las formas discursivas de lo que quiere oponerse. Esto se inscribe en la “colonialidad del saber”, en evitar la posibilidad siempre abierta de que se piense especularmente en relación con “el amo” a quien se pretende reemplazar. Y aquí nuevamente la cuestión de los “polizones” del discurso liberal de la “democracia moderna”, del “desarrollo y progreso”, juega un importante papel.

BIBLIOGRAFÍA

- Arceo, N. y Basualdo, E. 2009 “Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles” en Arceo, E.; Basualdo, E. y Arceo, N. *La crisis mundial y el conflicto del agro* (Buenos Aires: La Página).
- Bourdieu, Pierre 1988 *Cosas dichas* (Buenos Aires: Gedisa).
- Foucault, M. 1991 *La verdad y las formas jurídicas* (Barcelona: Gedisa).
- Giarracca, N y Teubal, M. 2008 “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del ‘agronegocio’: el caso argentino” en Mançano Fernández, B. (org.) *Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual* (San Pablo: CLACSO).
- Giarracca, N. 1999 “Las ciencias sociales y los estudios rurales en la Argentina durante el siglo XX” en Giarracca, N. (coord.) *Estudios rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. 2003 (coord.) *Territorios y lugares. Entre las fincas y la ciudad. Lules en Tucumán* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. y Teubal, M. (coord.) 2005 *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N.; Gras, C. y Barbetta, P. 2005 “De colonos a sojeros. Imágenes de la estructura social del sur de Santa Fe” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza).
- González Arzac, R. 2009 *¡Adentro! Millonarios, chacareros y perdedores en la nueva Argentina rural* (Buenos Aires: Marea).
- Harvey, D. 2003 *The new imperialism* (Londres / Nueva York: Oxford University Press).
- Illich, I. 2006 *Obras reunidas I* (México DF: FCE).
- Roig, A. 2009 1981 *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano* (Buenos Aires: Una Ventana).
- Teubal, M. 1999 “Complejos y sistema agroalimentarios: Aspectos teórico-metodológicos” en Giarracca, N. (coord.) *Estudios rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas* (Buenos Aires: La Colmena).
- Vigorito, R. 1979 “Criterios metodológicos para el estudio de los complejos agroindustriales” en *El desarrollo agroindustrial y la economía internacional* (México DF: Codaisarth) Documento de trabajo para el desarrollo agroindustrial N° 1.

LA TRAGEDIA DEL DESARROLLO

DISPUTAS POR LOS RECURSOS NATURALES EN LA ARGENTINA* **

Este trabajo fue realizado con la finalidad de reflexionar acerca de las relaciones entre los denominados “nuevos movimientos sociales” y las democracias de nuestra región. Para tal fin presento algunos resultados de un trabajo de investigación que dirijo en la Universidad de Buenos Aires sobre la problemática de las acciones colectivas —o, como las denominamos nosotros, disputas¹— por la apropiación

y/o mantenimientos de los recursos naturales. Estas protestas sociales ya venían produciéndose desde la década del noventa en el interior del país (véase Giarracca et al., 2001) aunque desde principios de este nuevo siglo, se han convertido en las claves para la comprensión de las luchas sociales contra el modelo capitalista neoliberal en la Argentina y en toda América Latina. A mi entender estos actores son primordiales en la construcción de las democracias de la región.

Con el título de este artículo, tomado prestado el pensamiento de Marshall Berman “tragedia del desarrollo” (Berman, 1988, citado por Sibilía, 2005), adelantamos una posición crítica en relación con cierto impulso ciego hacia el dominio y la apropiación de la naturaleza. Una concepción del desarrollo basada en un proyecto cuyo eje central es el progreso técnico, desconectado de las necesidades de las mayorías y al servicio de la pura obtención de ganancias

1 El término “disputa” comporta el sentido de contender con otro por el mismo bien.

* Giarracca, N. 2007 “La tragedia del desarrollo. Disputas por los recursos naturales en la Argentina” en *Sociedad* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales de la UBA / Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Solina) N° 26, invierno.

* Este trabajo fue presentado en la Mesa “Movimientos Sociales y Democracia” del encuentro “Ciencia en el MERCOSUR”, junio de 2006.

y control social. El desarrollo, con sus significados otorgados por los países hegemónicos dentro del capitalismo, ha sumado abundantes críticas. Estos significados están centrados en el crecimiento económico y en la metáfora del continuo: “subdesarrollo-desarrollo”. Dice Gustavo Esteva en uno de los libros críticos más interesantes acerca de estos conceptos:

La metáfora del desarrollo dio hegemonía global a una genealogía de la historia puramente occidental, privando a los pueblos de culturas diferentes de la oportunidad de definir las formas de su vida social. La secuencia vernácula (desarrollar es posible después de enrollar) se invirtió con la transferencia. Las leyes científicas tomaron el lugar de Dios en la función de enrollar, definiendo el programa. (2001: 69)

Desde las teorías críticas originadas en Europa se cayó en la trampa de los sentidos fundacionales del concepto, se mostró el desarrollo, dice Esteva, como un proceso histórico que se desenvuelve con el mismo carácter necesario de las leyes naturales. La mayoría de los pensadores críticos latinoamericanos no cuestionaron esta concepción y hasta se encontraron atrapados y deslumbrados por el mito del desarrollo capitalista.

Si algunos actores son capaces de protestar y construir las condiciones de posibilidad para generar o mantener otros modos de reproducción material de la vida, alejados de la devastación del capitalismo neoliberal, se hace necesario para quienes los estudiamos y acompañamos un trabajo de “deconstrucción” de los conceptos que nos han guiado desde el pensamiento hegemónico y contrahegemónico durante gran parte del siglo XX. Muchos movimientos sociales del mundo, y particularmente de América Latina, han demostrado por un lado que la promesa del desarrollo perjudicó regiones y poblaciones que vivían en mejores condiciones antes de los programas de “modernización” y por otro, en ruptura con el mito, que podían tomar la cuestión en sus propias manos volviendo o implantando la agroecología, actividades económicas basadas en su propia cultura, iniciativas innovadoras y muchas veces de una alta complejidad técnica.

Caracterizaré brevemente los principales movimientos socioterritoriales que se enfrentan a las transnacionales y a los Estados nacionales o provinciales en estos escenarios. Nos ocupamos de las cuestiones de la producción minera, las papeleras y el agronegocio, así como de los actores que los han puesto en la agenda pública. En el último punto haremos algunas considera-

ciones acerca de los modelos económicos, la tecnociencia y la relación de todo esto con las posibilidades de expansión de los procesos de democratización dentro de la sociedad.

Las conceptualizaciones novedosas, que son abundantes en los últimos años, proponen un “conocimiento desde el sur” (De Sousa Santos, 2006), las epistemologías de frontera (Gerfo-guel, 2006) o la conciencia de la colonialidad del saber y del poder (Lander, 2000; Quijano, 2000) y apuntan a asumir las profundas crisis de los paradigmas epistemológicos de nuestro tiempo y a pensar desde estos campos experimentales que construyen los movimientos (De Sousa Santos, 2000). Asimismo junto a esta tarea de conocer desde estas sugerentes conceptualizaciones se llevan a cabo críticas radicales a las viejas miradas modernizadoras y desarrollistas. (Sachs, 2001, Santos, 2000) Este trabajo analiza estos nuevos “desarrollo” (basados en la devastación de los recursos naturales) y las oposiciones de los movimientos sociales desde estas líneas de pensamiento.

LAS DISPUTAS

Desde fines del siglo XX, las disputas más significativas en la Argentina —como en toda la

América Latina— se dan por los bienes naturales. Esto sucede desde que el capital, en sus formas más avanzadas y transnacionalizadas, tomó como centro importante de su valorización a los recursos naturales. En efecto, en los últimos veinte años vimos aparecer procesos de apropiación de la naturaleza dentro de nuevos campos de valorización del capital. La idea de desarrollo de estos nuevos tiempos implica la dominación de los recursos, sobre todo el agua, la energía y la diversidad biológica.

Los territorios son disputados económicamente dentro de un plan de dominación política mundial. Como dice Ceceña, el “otro nacional” pierde su expresión para reencarnarse como un único territorio a disputar (Ceceña, 2004). Según veremos en este trabajo (para la Argentina y Uruguay) los Estados nacionales contribuyen con leyes que habilitan las nuevas formas de inversión: leyes de privatización, patentamientos, licencias de utilización de semillas transgénicas, etcétera.

En otras palabras, de los viejos territorios primordiales del capitalismo privado —fábricas, espacios agrarios, espacios financieros—, dentro de las “naciones”, se pasa a una nueva configuración territorial mundial. Se trata de una territorialidad como proceso, espacios hoy en construcción y en disputa, geografías des-

garradas y reconfiguradas. Debemos recordar que el Estado-nación pasó de su condición de regulador del capital privado en términos de mediación a una función de habilitador del cambio, generando —por ejemplo— las nuevas normas jurídicas y aceptando las creadas en los espacios transnacionales, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).

LA SITUACIÓN ARGENTINA

La Argentina es uno de los países de América Latina que más expone su territorio y sus recursos naturales a los procesos de privatización y apropiación por parte del gran capital transnacional. Cuarto productor de petróleo en América Latina, hipoteca toda posibilidad de una política económica autónoma privatizando el petróleo y entregándoselo a empresas extranjeras. Otro ejemplo paradigmático fue la privatización del agua para el consumo (véase Giarracca y Del Pozo, 2005). Sumemos a esto la legislación favorable a la instalación de empresas mineras que, además de destrozarse los territorios y dejar sin agua a las poblaciones aledañas, otorgan muy bajos ingresos al país y hasta terminan cobrando incentivos estatales

por exportar por los puertos patagónicos. Lo que ocurre con la tierra agraria, los montes y las yungas aparece como otro indicador de la situación de exposición de este país a los grandes actores económicos.

Quiénes están denunciado y actuando para con el fin de parar estos atropellos son las mismas poblaciones: ciudadanos de pequeñas ciudades del interior del país, campesinos y comunidades indígenas que se organizan, concentran información, se conectan con organizaciones de otros países para intentar frenar a los nuevos inversores. La batalla es larga y muy desigual ya que enfrentan a los grandes capitales del mundo económico global: las grandes empresas mineras canadienses y australianas, las transnacionales de origen francés que han asumido el gerenciamiento del agua en casi todo el mundo, los grandes inversores sojeros, acompañados por las empresas Monsanto y Sigenta, y las grandes pasteras, como la española Ence y la finlandesa Botnia.

En este último tiempo, registramos varios conflictos por los recursos que concentran la escena nacional. Presentamos en este trabajo una selección de los más significativos, ya sea por el tipo de actores que involucran o por su permanencia en el tiempo. Todos ellos, además, se enmarcan en una situación donde el

significado de términos como “desarrollo” y “progreso” está no solo en juego sino en discusión.

EL RECHAZO A LA MINERÍA

El contexto macro institucional

Argentina es un país sumamente vasto en recursos mineros, con una superficie cercana a los 2.700.000 km². El 75% de las áreas con potencial minero se encuentra sin explotar, lo que hace del país un centro de atracción de inversoras, tal como lo propagandizan las páginas oficiales de Internet. Las principales áreas de explotación se localizan en la cordillera de Los Andes, en un recorrido de unos 4.500 kilómetros de largo. Un documento del Ministerio de Economía publicado en Internet recomienda la inversión en el sector minero, argumentando que, de acuerdo con un trabajo de la CEPAL (1999) basado en información de la Escuela de Minas de Colorado, EEUU, Argentina presenta la segunda Tasa Interna de Retorno más alta para un proyecto modelo de oro y la tercera Tasa Interna de Retorno más alta para un proyecto modelo de cobre, sobre un total de veinticuatro países considerados. El Ministerio de Economía complementó estos datos con otra

información acerca de la conveniencia de los bajos costos que ofrecen los servicios públicos y la mano de obra local.

Con la sanción de la Ley 24.196/93, en pleno gobierno neoliberal de Carlos Menem, hubo un incremento muy significativo de las inversiones mineras². Asimismo, estas empresas fueron aumentando en número³. Un informe de la

2 El flujo de inversiones extranjeras se dirigió principalmente a la exploración y explotación de minerales metalíferos, destacándose los emprendimientos de Bajo La Alumbrera y Salar del Hombre Muerto (Catamarca), Mina Aguilar (Jujuy), Cerro Vanguardia (Santa Cruz) y Veladero (San Juan, (Barrick Gold Corp., Homestake) todos en explotación. Entre los grandes proyectos que aún no han llegado a la etapa de explotación, se hallan: Agua Rica (Catamarca), Cordón de Esquel (Chubut), Pascua-Lama y Pachón (San Juan), Pirquitas (Jujuy) y Potasio Río Colorado (Mendoza). Existe otro importante número de emprendimientos mineros, algunos de los cuales están en explotación y otros en etapas de exploración o prospección (Ministerio de Economía).

3 Principales empresas mineras en Argentina: Bajo La Alumbrera (Xstrata, Wheaton River Minerals Ltd., Northern Orion Resources Inc.), Salar del Hombre Muerto (FMC Lithium Corp.), Mina Aguilar (Compañía Minera Aguilar S.A.), Cerro Vanguardia (Anglogold), Agua Rica (Northern Orion Resources Inc.), Farallón Negro (YMAD), Pirquitas (Silver Standard), Pascua-Lama (Barrick Gold Corp.), Pachón (Noranda), Manantial Espejo (Silver Standard, Pan American Silver Corp.),

CEPAL sostiene que de siete empresas mineras que se registraban en el país a comienzos de los noventa, se llegó en nuestros días al número de cincuenta y cinco firmas extranjeras y algunas pocas empresas nacionales. Y no era para menos; la citada ley configuró un marco legal inconcebible de ser generado por un Estado soberano: le otorga a las empresas extranjeras plenos derechos de acceder al crédito interno, transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas, repatriar su inversión, además de extraer cualquier tipo de mineral sin restricciones de ningún tipo (nuclear, por ejemplo).

Sumado a este marco general, podrán gozar de los siguientes incentivos que establece el régimen de inversiones mineras:

- Doble deducción de gastos de explotación: Se podrá deducir el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad del proyecto a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias;
- Devolución del IVA a la exploración: La Ley 25.429 incorporó la devolución de los créditos fiscales de IVA originados en la inversión en exploración, a los doce meses de producida la erogación.
- Exención de aranceles y tasas aduaneras: Las compañías mineras registradas están exentas del pago de derechos a la importación de bienes de capital y equipos especiales o partes componentes de dichos bienes. Las compañías de servicios mineros también gozan de este beneficio.
- Exenciones impositivas y deducciones: Las utilidades derivadas del aporte de minas y derechos mineros para constituir capital de sociedades están exentas del impuesto a las ganancias.
- Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (Activos). Capitalización de los avales de reservas mineras: Podrán ser capitalizados (tras su aprobación) hasta en un 50%.
- Devolución anticipada y financiamiento del IVA: Cuando se trate de proyectos nuevos o de un aumento sustancial de la capacidad productiva, recibirán el reembolso o el financiamiento de IVA en las siguientes transacciones: importación definitiva o compra de bienes de capital nuevos e in-

Andacollo (Andacollo Gold), Veta Martha (Coeur D'Alene), Potasio Río Colorado (Río Tinto), Borax Argentina (Borax Argentina), Arizaro/Lindero (Mansfield Minera S.A., Río Tinto) (Fuente: Secretaría de Minería). Un informante, miembro del Estado, me aseguró que existen alrededor de 500 proyectos mineros en marcha y 250 con trabajos de exploración avanzados.

- versiones en infraestructura destinadas al proceso productivo.
- Exención de contribuciones sobre la propiedad minera: No se impondrá ninguna contribución sobre la propiedad minera (ni sobre sus productos, establecimientos de beneficio, maquinaria, talleres y vehículos).
 - Gravámenes provinciales y municipales: En el Acuerdo Federal Minero (Ley 24.228), las provincias acordaron facilitar la eliminación de gravámenes y tasas municipales e impuestos de sellos que afecten la actividad minera dentro de cada provincia.
 - Regalías: De las veintitrés provincias argentinas, solo siete cobran regalías. Asimismo, varias provincias han adoptado nuevos esquemas de regalías, decrecientes a medida que crece el valor agregado al mineral dentro del territorio provincial.

Es decir, el marco legal para la explotación minera tiene tal permisividad y favorece de tal modo la inversión foránea que se puede comprender fácilmente el aluvión de capitales extranjeros llegados al país en los últimos años. Como decíamos anteriormente, el Estado no solo no regula, sino que habilita las condiciones para que la actividad económica extrac-

tiva, criticada por los modos de explotación y las consecuencias ambientales en todo el mundo, pueda encontrar una especie de “zona franca” jurídica y económica en la Argentina (y nos arriesgamos a suponer que en toda la América Latina).

LOS SUJETOS DE LAS PROTESTAS DEL “NO A LAS MINAS”

Las “asambleas de autoconvocados” son los principales actores en juego. Están integradas por ciudadanos de poblaciones afectadas por la explotación minera. Se trata de habitantes de ciudades “intermedias” (alrededor de 50.000 habitantes), con diferentes orígenes migratorios y étnicos (europeos, criollos, indígenas, etcétera). Poblaciones donde conviven desde profesionales con formación para acumular y organizar la información acerca de la producción minera hasta comunidades indígenas que tratan de articular sus propios saberes y “sentidos” del problema con los de los asambleístas.

Si bien la primera inversión y explotación extranjera pos legislación habilitadora fue en Catamarca, emprendimiento conocido como Bajo La Alumbrera, la acción colectiva de protesta aparece con fuerza e irrupción en la localidad de

Esquel, provincia de Chubut, en las postrimerías de 2002. El escenario nacional es el posterior al 19 y 20 de diciembre en la Argentina (véase Giarracca y Teubal, 2004) y el tipo de organización elegida en Esquel —la Asamblea— surge al calor de aquellas luchas en la gran ciudad.

En la sureña ciudad de Esquel se dio el puntapié inicial para seguir luego con el rechazo a los megaproyectos en otras zonas andinas. En ese “ciclo de protestas”, entre 2003 y 2007, Catamarca despertará a la disputa con su propia organización, articulándose a la red nacional⁴.

4 Dice la página web del movimiento “No a la mina”: “Desde el punto de vista de la política minera, La Alumbraera fue “la prueba de amor” ofrecida por el gobierno neoliberal de Carlos Menem y Domingo Cavallo a las corporaciones mineras transnacionales y exigida por estas. Además de la modificación del marco legal, *tributario* y administrativo que inauguró la etapa neoliberal en la minería argentina, resultaba necesaria una prueba piloto, que pusiera a prueba el nuevo marco. Fue una nueva mina descubierta por el poseedor de un cateo que manifestara su descubrimiento y se propusiera luego explotarla. Se trataba de una mina descubierta, investigada y factibilizada, que el Estado argentino sacó a licitación. Si observamos ahora cómo fue cambiando de manos (Lundin, Río Algom, North Ltd, MIM Holdings, BHP Billiton, Río Tinto, Xstrata, Wheaton River, Northern Orion), tal vez incluso puede sospecharse que “la prueba de amor” fue para que la disfrutaran un poco todos los que la exigieron” (<<http://www.noalamina.org>>).

Un habitante de Andalgalá (Catamarca), quien está a punto de vender su casa por la contaminación que la rodea, confiesa a un periódico provincial: “Hace diez años yo le di la bienvenida a La Alumbraera. Creía que era signo de progreso. Todos estábamos felices. Pero fue el error de mi vida. Todo fue mentira: no dieron trabajo, trajeron más pobreza y contaminaron todo. Nos están matando, en serio, se lo juro” (Andalgalá, Catamarca, 21-12-2005).

En esta pequeña ciudad del noroeste argentino, la disputa enfrenta a dos asociaciones: de un lado, la Suiza Xstrata, las canadienses Goldcorp y Northern Orion, que extraen cobre y oro, y del otro, una asamblea de jubilados, docentes, profesionales, amas de casa, que dedican su tiempo de descanso a aprender fórmulas o buscar por Internet otras experiencias similares a la suya, en el porfiado propósito de decirle “no a la minería”.

Durante el año 2006, en Andalgalá hubo una serie de protestas y reclamos y prepararon un plebiscito a raíz del proyecto de una nueva inversión. Ese año, además, sufrieron rupturas de mineraloductos con la consiguiente contaminación del agua del río cercano a la población.

Pero la apuesta política de la sociedad civil para poner límites a la actividad extractiva comienza en Esquel. La famosa asamblea de au-

toconvocados de esa localidad logra parar, en 2003, el proyecto de la minera Meridian Gold Inc., del tipo de “cielo abierto” y a base de cianuro. El tipo de minería “de tajo a cielo abierto” fue prohibido en Vallenar (Chile), Tambogrande (Perú), Cantón Cotacachi (Ecuador), San Luis de Potosí (México), Montana (Estados Unidos), San Marcos (Guatemala), Valle de Siria (Honduras), por citar solo algunos ejemplos. Como consecuencia, en 2002, en la provincia de Río Negro, se forma una cadena de asambleas que se extenderá por todo el país, creándose una red nacional ligada a los movimientos de otros países.

En la provincia sureña de Río Negro, a partir del trabajo de las asambleas de las localidades de Epuypén, Lago Puelo, Bariloche, Jacobacci, El Maitén, Maquinchao, el gobernador decidió prohibir la minería de oro con cianuro o mercurio y los “autoconvocados” reclamaron la urgente promulgación de una ley que prohibiera el desarrollo de este o cualquier otro sistema de minería que use agua mezclada con tóxicos y la suspensión definitiva de la autorización de cateos, con el fin de evitar el gran daño ambiental causado por la exploración.

Tal vez la novedad más significativa de los últimos tiempos es la demanda que la empresa Meridian Gold Inc. entabló contra una serie de vecinos de Esquel por difundir “la estrategia de

la empresa”. Se trata de material grabado de una reunión de hace unos años donde un grupo de lobbistas argentinos asesoran a los funcionarios de la empresa como quebrar la voluntad de resistencia de Esquel, ofreciéndoles sus servicios como personajes “cercanos” al gobierno. La demanda, instalada en Buenos Aires, está en curso y los abogados defensores de los asambleístas son del Centro de Estudios Legales y Sociales.

En síntesis, a estos pueblos patagónicos, así como a Calingasta, en la provincia de San Juan, se les suma el despertar de Catamarca y de muchas otras localidades para tratar de poner fin a los emprendimientos mineros atraídos por la benevolencia de la ley mencionada⁵.

5 Este no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú, creada en el 2000 por comunidades y rondas campesinas, mantiene una larga lucha contra las inversiones mineras canadienses y australianas y en algunos casos lograron parar los emprendimientos. Los agricultores del Valle de Tambogrande y la comunidad afectada por la mina conforman un espacio “plural y diversificado, no confesional, no gubernamental y no partidario” (como se definen ellos mismos), que articula de manera descentralizada movimientos involucrados en acciones concretas “por la construcción de un mundo diferente local e internacional” (Material del Encuentro de Tambogrande, Perú, disponible en Internet).

LA DISPUTA POR LA TIERRA

LOS ESCENARIOS

El espacio agrario argentino ocupa el 63% del territorio continental y está conformado por una región que, por su fertilidad, es conocida como una pradera productiva de significación mundial y por otras regiones con gran diversidad de suelos, posibilidades productivas y biodiversidad.

Históricamente, la estructura social agraria argentina se conformó de modo heterogéneo. La gran estancia agrícola ganadera coexistió durante el siglo XX con la pequeña y mediana explotación agraria. A diferencia de otros países de América Latina, la mediana y pequeña explotación (considerando dentro de estas últimas a las campesinas) llegó a representar el 78% de las unidades de explotación. Esta coexistencia fue posible gracias a una serie de arreglos institucionales que mantuvieron cierta negociación entre los actores económicos y el Estado (representado en el espacio productivo agrario por una serie de instituciones generadas después de la crisis de 1930: la Junta Nacional de Granos, la de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar, la Dirección de la Yerba

Mate, entre otras). Este entramado se desarma en 1991 con el decreto de desregulación económica de Menem-Cavallo (véase Teubal y Rodríguez, 2002) cuya política neoliberal habilita la producción a gran escala, una antigua demanda de los grandes actores económicos deseosos de poder sacar todo el provecho posible de las espaciosas extensiones de tierras excepcionalmente fértiles de este país.

Podemos afirmar que la disputa por la tierra comienza en la mitad de la década del noventa con un cambio significativo de modelo agrario. Coincide con la expansión sojera pero es mucho más que eso, es un cambio en la lógica de producción, es decir en el rol del sector productivo, de la tierra, del sector financiero, etcétera. En este nuevo modelo —que en el Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO hemos denominado “modelo del agronegocio”— la convivencia de las grandes empresas con las tierras campesinas e indígenas no está contemplada. La tierra en su conjunto entra en la valorización capitalista y de sus polisémicos sentidos para reducirse a una mera mercancía; incluso se desmonta, se termina con las yungas y otros territorios indispensables para un cierto equilibrio ecológico, todo en función de las nuevas inversiones. Los desmontes, según cifras de Greenpeace-Argentina, han aumenta-

do exponencialmente. Se calcula alrededor de 250 mil hectáreas desmontadas por año. Pero no solo los nuevos inversores presentan una conducta económica de este tipo sino que los viejos ingenios y otras antiguas agroindustrias adoptan la misma lógica. De allí que la disputa por el territorio recorra todo el país.

En síntesis, el paquete de políticas públicas parte del decreto de desregulación pero incluye también una serie de instrumentos con el que el Estado cuenta para promover una producción y no otra. En ese contexto, a los campesinos y a las comunidades indígenas se los ha tratado como a los desocupados urbanos: se generaron programas asistenciales en tanto se espera que terminen dejando definitivamente la tierra.

LOS SUJETOS DE LAS PROTESTAS: LOS CAMPESINOS Y LAS COMUNIDADES ABORÍGENES

En la primera parte de este proceso, los grandes actores económicos no tuvieron en cuenta a los campesinos. En primer lugar, porque estos no estaban ubicados en los mejores suelos que eran los que más importaban, y segundo, porque no los imaginaban organizados para

resistir sus embates. En efecto, durante los noventa, tuvieron que enfrentarse con la terquedad de muchos habitantes que desde hacía décadas ocupaban tierras, producían para la auto subsistencia y para el mercado y no estaban dispuestos a dejarlas ni a “cederlas”. La mayoría de los campesinos no cuenta con las titularizaciones de sus tierras, ya sea porque poseen una propiedad veinteañal o porque son sucesiones.

Los “nuevos” agentes, como las empresas sojeras, cuando deciden ocupar las tierras campesinas optan por estrategias múltiples, incluso por el desalojo violento. Para este fin, cuentan con sistemas judiciales provinciales atados a los poderes locales y muy influidos por los “nuevos poderes”. En todos los casos, los actores son los empresarios “desalojadores”, los campesinos o comunidades aborígenes y un sistema judicial bajo sospecha en forma implícita o explícita (como en Santiago del Estero; véase Barbeta, 2005).

La venta de tierras que aparece como un contrato voluntario muchas veces es el resultado de prácticas de arrinconamiento que al no presentar signos de violencia explícita (a diferencia de los desalojos), hacen que la desaparición de productores tome la forma de una “exclusión silenciosa”. Los campesinos que re-

sistieron a los embates de los desalojos y a los arrinconamientos donde los colocó la “nueva agricultura”: permanecen a través de organizaciones campesinas, primero incipientes y ahora más sólidas, que han conformado el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, compuesto por movimientos provinciales y regionales que se expanden a un ritmo muy acelerado⁶.

Las comunidades kolla, mapuche, wichí, toba y ava guaraní han protagonizado en años recientes una sostenida resistencia a los desalojos y, al mismo tiempo, no han abandonado su lucha por alcanzar la propiedad legal de las tierras que ocupan; no obstante este empeño, en muchas ocasiones, ellos han sido desalojados con violencia⁷. En nuestro país, está vi-

gente el marco legal que reconoce el derecho de los pueblos originarios a vivir en las tierras ocupadas por sus antepasados y a desplegar sus prácticas culturales y modos de vida; su cumplimiento y concreción permanece en el plano formal. Es decir, a pesar de la Ley Indígena 23.302, del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y de todos los tratados

6 Esta organización no escapó a la política de “integración” a la gestión kirchnerista que el gobierno ofreció a la mayoría de las organizaciones populares. Son, desde 2006, fuertes participantes en el programa Social Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Con esta integración nada se transformó en relación con lo que a los campesinos e indígenas les venía sucediendo con sus tierras.

7 Leamos la carta al presidente Kirchner enviada por la Comunidad Kolla Guaraní, Río Blando, Banda Norte, de la ciudad de Orán, provincia de Salta, en el 2004: “Sin ninguna orden escrita, ni aviso previo nos exigieron que nos vayamos (de sus tierras en proceso de reconoci-

miento legal) porque según ellos llegó la orden de desalojo. Sorprendidos, exigimos la orden escrita a lo cual se negaron. Les pedimos a estas personas que por favor no nos toquen nuestras cosas, que iríamos a buscar un abogado. Cuando vuelvo a mi casa habían tirado a mis dos niños y a mi anciana madre, mientras con hachas destrozaron mi casa y robaron todas mis pertenencias. En la casa de mi hermano Mario, mientras fue a las nueve de la mañana a buscar un abogado dejó a sus nueve hijos con su señora dentro de su casa. Cuando volvió encontró su casa destrozada y nada quedaba de sus bienes. Se habían robado todo y a los niños los tiraron al medio de la calle. A las 35 familias que desalojaron les pasó lo mismo y a toda la comunidad le robaron sus cosechas que ya estaban listas para levantar: choclos, maníes, mandioca, batata, etcétera, que iban a ir a los mercados. Ellos las levantaron y la robaron mientras a nosotros no nos dejaron entrar a las chacras para alimentar a nuestros niños y ancianos. También nuestros animales sufrieron la misma suerte, parte la robaron y parte quedaron desparramados sin poder alimentarlos” (comunicación electrónica de la Comunidad al equipo de investigación).

y convenios internacionales de rango constitucional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las demandas de los indígenas no se responden y las comunidades sufren aún la incertidumbre sobre la entrega de títulos. Muchas veces, los abusos de las autoridades locales, que hacen caso omiso del cumplimiento de la ley en relación con esas poblaciones, reproducen las viejas tradiciones discriminatorias de este país que alentaba, en el siglo XIX, la migración europea para “poblar” con blancos.

Si las demandas de derechos indígenas son de tan difícil cumplimiento, es justamente por esta gran disputa con las empresas por los territorios y sus riquezas. Tales procesos están aún hoy en marcha y aparecen como “imparables” por una legalidad jurídica con gran deslegitimación social pero muy difícil de transformar.

En síntesis, en el caso de las comunidades indígenas deben proceder en contra de una legislación nacional e internacional que el Estado argentino se comprometió a respetar. Y no lo hace, no la respeta, aun a costa de rozar con una política “etnocida”. La política de derechos humanos por la que este gobierno es positivamente conocido en el mundo, no alcanza para respetar los derechos sociales de las comunidades indígenas ni la propiedad veinteañal (in-

cluida en el Código Civil del siglo XIX) de los campesinos. El último informe acerca del estado de los derechos humanos que anualmente el Centro de Estudios Legales y Sociales produce, es muy elocuente al respecto en su capítulo final dedicado a las poblaciones indígenas.

EL CUIDADO DEL RÍO URUGUAY: LA PROTESTA POR LAS PAPELERAS

LOS ESCENARIOS DE LAS INVERSIONES EN FORESTACIÓN Y PAPELERAS

En el año 2003, el gobierno uruguayo de Julio Batlle posibilitó la inversión de dos papeleteras y un puerto para la vía fluvial, conectando el emprendimiento con anteriores desarrollos de forestación en el país. Según denuncian organizaciones ecologistas uruguayas y argentinas, el proyecto tuvo desde el comienzo varios vicios de procedimiento, como no contar con estudios ambientales o no proceder a la consulta con la Argentina, incumpliendo de este modo tratados preestablecidos. Por eso, en el 2005, cuando el gobierno de Tabaré Vázquez intenta poner en marcha la inversión, surge una organización binacional de muy diversos sectores

en contra de una iniciativa cuyas consecuencias podrían acarrear un verdadero desastre ecológico en el Río Uruguay.

Las compañías en juego son la española Ence y la finlandesa Matse Botnia. El intelectual uruguayo Raúl Zibechi sostiene que Botnia y Ence producirán ellas solas más que el conjunto de las once fábricas argentinas de similares características. Mientras Uruguay se autoabastece de papel con dos pequeñas fábricas en Juan Lacaze y en Mercedes, estas otras están destinadas a la exportación para abastecer las cuantiosas necesidades de los países del norte. Zibechi hace referencia, además, a las palabras que Alan Greenspan pronunció ante al Comité de Asuntos Extranjeros del Senado estadounidense, el 7 de junio de 2006, cuando hizo mención del etanol como un derivado de la celulosa que podría quebrar la dependencia de EEUU con el petróleo. Es decir, veía la nueva función de la celulosa como un estímulo muy fuerte para la generación de estas “cuencas pasteras” en el Cono Sur (Zibechi, 2006).

La española Ence, que finalmente se retiró de Fray Bentos, está en Uruguay desde 1989 con una terminal logística que cuenta con un patrimonio forestal de más de 62.000 hectáreas y anunció que invertirá 600 millones de dólares en una planta de celulosa de eucalipto cerca de

Fray Bentos, a 60 km de la ciudad argentina de Gualaguaychú. Fue con los gobiernos civiles que el modelo forestal se afianzó en Uruguay, impulsados por organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para forestar con destino a la industria papelera internacional. Cuando se creó la ley de promoción forestal, ya se vislumbraba un mercado internacional apetecible.

Uruguay tiene alrededor del 34% de su suelo apto para uso forestal y el 66% restante, propicio para la actividad agropecuaria. De las tierras forestables resta un poco más del 10% para poner en producción. En los últimos años, además, hubo un fuerte proceso de concentración a raíz de que los pequeños y medianos inversores forestales vendieron sus propiedades a las grandes empresas extranjeras.

De acuerdo con la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en 2002, solo la superficie subsidiada superaba las 625.000 hectáreas forestadas. El gobierno subsidia desde hace tiempo la actividad forestal y ha generado varios decretos y resoluciones con ese fin. Un trabajo de la UITA (Unión Internacional de Trabajadores de Alimentación) sostiene: “Hoy, un predio declarado de prioridad forestal accede al derecho de cobrar el subsidio y obtener los demás beneficios

otorgados por el Estado: 50 por ciento del costo ficto de la forestación; crédito preferencial —tasa Libor más 2 por ciento— del Banco República hasta por el cien por ciento del costo de la plantación con una gracia por diez años para capital e intereses; exoneración de tributos nacionales y municipales, aun de aquellos a crearse, y fuerte respaldo en obras de infraestructura (redes ferroviaria y vial, puentes, puertos) [...] Entre 1988 y 2000 el Estado aportó a los emprendimientos forestales 69,4 millones de dólares en subsidios directos, 55,8 millones en impuestos no pagados, 55 millones en créditos blandos y 234,1 millones en obras vinculadas al sector, según un estudio realizado por el economista Joaquín Etchevers, miembro del Grupo de Apoyo Parlamentario (GAP) del Frente Amplio. Un total de 414,3 millones de dólares que desde entonces se incrementaron año tras año, superando sobradamente los 500 millones” (Falco, 2006).

No es una actividad que genere trabajo ya que solo se ocupa en el sector el 1,88% de los trabajadores rurales. Los destinos de estas producciones forestales son muy limitados, de allí la estrategia de convertir a Uruguay en un territorio de forestación “con papeleras”. Esta integración aparece como viable, sobre todo por la falta de otro proyecto económico más

allá del “agronegocio” (al que también nuestros vecinos aspiran).

En el área industrial, cuatro son las empresas transnacionales que dominan totalmente el sector: las que están en conflicto, Botnia y Ence; la Stora Enso, que acaba de instalarse en el Uruguay con capitales sueco-finlandeses; y la estadounidense Weyer Haeuser. El proyecto de la Stora Enso, aprobado en 2005, comprende forestación e instalación de una planta de celulosa en el centro del país, a orillas del Río Negro. Weyer Haeuser está en tratativas de construir por lo menos cinco plantas de procesado de madera en el norte del país, que se instalarán en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Paysandú. La primera, en Tacuarembó, ya está iniciada y a punto de terminarse y no está excluido que construya otra planta de celulosa sobre el Río Negro⁸.

Las denuncias de contaminación causada por este tipo de empresas se multiplican en todo el mundo. Las intervenciones más significativas en relación con este trabajo son las que han pro-

8 Argentina no se queda atrás, cuenta con once plantas altamente contaminantes. En Brasil, la situación no es demasiado diferente y es conocida la lucha de los Sin Tierra contra los “desiertos verdes” (las plantaciones forestales).

ducido profesionales y ambientalistas uruguayos. Justamente, el uruguayo Ricardo Carrere, secretario del Movimiento Mundial de los Bosques Tropicales, quien visita frecuentemente la Argentina, sostuvo en una entrevista periodística que uno de los aspectos más peligrosos es el tamaño de estas papeleras: “Son grandes plantas que van a procesar en conjunto un millón y medio de toneladas. La escala es muy importante porque todas usan químicos”. Desmiente que haya nuevas tecnologías que no contaminen:

El año pasado, Suecia hizo un estudio del mar Báltico por este tema. Como las celulosas reemplazaron el cloro por dióxido de cloro, en el '93, se suponía que iba a bajar el nivel de toxinas (calificadas como cancerígenas y depresoras del sistema inmunológico). Pero ¿qué encontraron? Que siguió subiendo. (*Página/12*, 5-2-2006)

Por otro lado, un reciente informe de científicos de la Universidad de La República, después de un importante estudio medioambiental, presenta conclusiones contundentes. Por una parte, son alarmantes los efectos del cultivo forestal sobre los servicios ecosistémicos que proveen los pastizales naturales, así como los efectos generados por los efluentes líquidos de las plantas de celulosa. Precisamente, una de

las conclusiones a las que arriba el documento es que, para proveer de materia prima suficiente para el funcionamiento de las dos plantas de celulosa que ya se comenzaron a construir, es necesario aumentar el área forestada en un 40% en relación con la ya existente en Uruguay, que supera las 700.000 hectáreas.

Por otra parte, también es alarmante el nivel de consumo de agua de las dos plantas en un funcionamiento considerado normal. En efecto, el informe indica que “el funcionamiento de las plantas proyectadas requiere de un elevado consumo de agua tanto en la generación de la materia prima (monocultivos extensivos) como en su transformación (producción de celulosa)”. Las plantas tendrían un consumo diario conjunto de 140.000 m³.⁹

9 “Ambas celulosas prometen producir pulpa de eucalipto. Para esto, aplicarán la tecnología del proceso Kraft al sulfato en la producción de pulpa, empleando para el blanqueo la tecnología ECF (libre de cloro elemental), que utiliza compuestos de alta toxicidad. Con el Kraft, por cada tonelada de pulpa se libera a la atmósfera entre uno y tres kilos de dióxido de sulfuro, característico por el “olor a huevo podrido”. Las partículas sulfurosas se combinan con la humedad de las nubes y caen con la lluvia y el rocío: es la llamada y temida lluvia ácida” (*Clarín*, 2-5-2005).

LOS ACTORES: LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS Y LA ASAMBLEA DE GUALEGUAYCHÚ

*“Estamos en un territorio ocupado. Es una
lucha simbólica, no es una lucha armada, sino
‘almada’: de gente con alma.”*

MIEMBRO DEL EJÉRCITO ALPARGATISTA, ORGANIZA-
CIÓN ECOLOGISTA DE ENTRE RÍOS

En una periodización posible de la protesta, podríamos marcar el 30 de abril de 2005 como el “momento de la alborada”, de su aparición pública y masiva. Efectivamente, el sábado 30 de abril de 2005, argentinos y uruguayos llevaron a cabo “la mayor protesta ambientalista registrada hasta la fecha” (*Página/12*, 2-5-2005). Se encontraron en Gualeguaychú pero la gente provenía de Paraná, Victoria, Colón, Concepción del Uruguay y Buenos Aires. Unas cuarenta mil personas cubrieron el puente internacional que conecta Fray Bentos con Gualeguaychú, una ciudad de la provincia de Entre Ríos conocida por sus festividades carnalescas. El punto de encuentro de los manifestantes fue justamente el “corsódromo”, desde donde marcharon cuarenta kilómetros en caravanas y cuatro a pie hasta encontrarse en el lugar más alto del puen-

te; intercambiaron banderas y se fundieron en un abrazo con la población uruguaya.

El conflicto venía gestándose desde mucho antes y los actores de la protesta se habían ido configurando con un accionar sistemático que, por lo menos, se remonta al año 2003. Es importante recordar que la provincia del noreste argentino en cuestión —Entre Ríos— tiene una larga tradición de movimientos ambientalistas centrados en el cuidado de los ríos que la rodean.

Varios participantes de la Asamblea de Gualeguaychú reconocen que el antecedente más significativo es la Red de Asociaciones Socioambientales de Uruguay y Argentina, conocida como “la Red”, donde participan, por el lado argentino, M’Bigua de Paraná, el Foro de Ecologistas de Paraná, que funciona como el nexo entre Uruguay y Entre Ríos, y por el lado uruguayo, la organización Guayubira, con Ricardo Carrere como principal referente. Ese año, la corporación española Ence hacía su presentación pública y el Frente Amplio uruguayo presagiaba su próximo triunfo. En setiembre de 2003, en una audiencia pública en Fray Bentos, son las organizaciones uruguayas las encargadas de observar un informe sobre las papeleras generado por la Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA) de Uruguay. Es decir, en la primera etapa, las iniciativas estaban a cargo

de las organizaciones ambientalistas en forma conjunta y, cuando actuaban las uruguayas, lo hacían con mucha autonomía del Estado.

Mientras tanto, en Gualeguaychú, Argentina, las organizaciones ambientalistas comenzaron una campaña de información y difusión, en la que se integró a diversos sectores: poderes políticos locales, grupos económicos de la región y movimientos ecologistas, que se convocaban por diversas razones: el turismo, la posibilidad de incluir el tema en las campañas electorales de ese año, la contaminación, etcétera. Esta operación de difusión, que se dio sobre todo en colegios primarios y secundarios, alcanzó reuniones que congregaron a unas cuatrocientas personas, hasta que, el 3 de octubre de 2003, unos mil quinientos participantes convocados por las agrupaciones uruguayas y argentinas cortaron el puente que une las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos, con la consiguiente conformación de una organización no gubernamental: Vecinos Autoconvocados.

Durante el año 2004, Vecinos Autoconvocados entró en contacto con organizaciones de otros países —Chile y España, fundamentalmente— que enfrentaban situaciones similares con papeleras, cuyas consecuencias ambientales eran nefastas por la contaminación de los ríos cercanos y de la atmósfera. Poco después,

una pastera de Valdivia, Chile, que usaba la misma tecnología que se implantaría en Uruguay, tuvo un incidente catastrófico.

El período más conocido en la opinión pública de ambos países es el que va de abril de 2005 a nuestros días. Después de esa importante marcha del 30 de abril, se van sumando nuevos cortes de rutas y comienzan las acciones en el terreno diplomático. Además, se pide la intervención de Banco Mundial, quien nombra un ombudsman para reunirse con las partes en conflicto pero, unos meses más tarde, este mediador impone condiciones al otorgamiento de créditos por parte de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Es decir, en pocos meses se despliegan tres grandes líneas de acción: la irrupción del tema en el espacio público, la presión sobre el gobierno para abordar gestiones diplomáticas y la puesta en evidencia, gracias a los informes sobre las condiciones medioambientales, de que son emprendimientos que no deberían ser financiados.

En esta etapa, la Asamblea concentró las iniciativas y logró entrevistarse con el presidente argentino. Las organizaciones uruguayas desaparecieron del primer plano y una interpretación posible de sus causas es el triunfo del Frente Amplio y su incondicional apoyo. Para

la mayoría del pueblo uruguayo, el triunfo del Frente Amplio era una conquista largamente esperada y se consideraba que había que darle un tiempo prudencial de no oposición. Eduardo Galeano, en una de sus pocas declaraciones públicas en contra de las papeleras, declaró que no se trataba de una manifestación contra el gobierno, sería raro, aclaró, que él no estuviera presente en un acto que reivindica la soberanía nacional. Una de las banderas que el Frente Amplio levantó siempre¹⁰.

En octubre de 2005, la página de la presidencia de la República Oriental del Uruguay mostraba que el 58% de los uruguayos se oponía a la instalación de las papeleras por razones de cuidado del medio ambiente. Ese espíritu civilista y de respeto al medio ambiente aún no había sido colonizado por la propaganda basada en el reforzamiento de la identidad nacional, que cada tanto se reactiva: la del pequeño país que se siente amedrentado por su poderoso vecino. También había razones prácticas: las centrales sindicales, cuyos congresos se habían pronunciado en contra de las papeleras, deciden ahora apoyarlas —aun violando reglamentos internos— porque los dos principales

gremios (el metalúrgico y el de la construcción) tienen a muchos asociados trabajando en las papeleras, incluso a gran parte de sus dirigentes (Zibechi, 2006).

Podemos decir que el comienzo del verano 2005-2006 fue una oportunidad para que la Asamblea de Gualaguaychú cambiara la lógica de su formato de protesta: si hasta ese momento había prevalecido la numérica (congregar a miles de personas en cortes y marchas), con la cercanía del verano rioplatense aparece la posibilidad del “daño material”. En efecto, la circulación entre Uruguay y Argentina se incrementa exponencialmente en los meses de verano por el atractivo turístico de las playas orientales, que muchos argentinos de clase media y alta han elegido como lugar de veraneo. Los ingresos de origen argentino, si bien no han sido calculados oficialmente, representan una buena proporción de la entrada de divisas al país vecino. La estrategia de cortar la entrada por tierra repercutió fuertemente en el Uruguay, que sufrió las consecuencias económicas; aunque también supo aprovecharla para incentivar la propaganda contra los reclamos entrerrianos. En distintos momentos, se van sumando otras localidades entrerrianas, otros puentes cortados, de modo que la situación del verano de 2006 fue extraordinariamente intere-

10 Ver <<http://www.noalapelera.com.ar>>.

sante por muchos aspectos: la perseverancia de la población, los apoyos que lograban congregar, la instalación del problema ambiental en la propia Argentina.

Las gestiones diplomáticas se intensifican, hasta que surge la posibilidad de presentar una demanda en el Tribunal Internacional de La Haya, con un primer fallo desfavorable a la demanda argentina y un segundo favorable a la Asamblea. Pero el tema está instalado y con pocas posibilidades de revertirse; asimismo, muy lentamente pareciera que el silencio de la población uruguaya comenzara a resquebrajarse, con tibias manifestaciones en el centro de Montevideo en contra del modelo forestal-pastero que el gobierno eligió para desarrollar la economía nacional.

La actividad de la Asamblea no claudicó y continuó todo el año con los reclamos y protestas. Se celebró la decisión de Ence de retirarse de Fray Bentos y en diciembre de 2006 produjeron una numerosa manifestación en la Plaza de Mayo con el apoyo de muchas otras asambleas que luchan por el medio ambiente.

Los asambleístas de Gualeguaychú, en este verano del 2007, buscaron lograr el consenso del resto de la población y de esta manera otorgar mayor legitimidad a la lucha; utilizaron para ello nuevas estrategias y participaron en

acciones conjuntas con otras asambleas ambientales y organizaciones sociales.

En el marco de la propuesta de extender la lucha a otras regiones, los jóvenes de la asamblea, organizaron durante enero el “Encuentro sudamericano de ambientalistas” para oponerse al “saqueo, depredación y contaminación de nuestros recursos naturales”. Se llevó a cabo en Arroyo Verde, sobre la Ruta 136, y participaron jóvenes procedentes de varias provincias y de algunos países limítrofes. El objetivo fue coordinar acciones y debatir la situación actual. Sin embargo, a pesar de lo positivo de dicho encuentro, en uno de los intentos por sumar al pueblo uruguayo, la acción de manifestarse en Montevideo, repartir volantes informativos acerca de la oposición a las plantas de celulosa, terminó en un lamentable enfrentamiento entre uruguayos y argentinos en la Plaza Independencia.

Del mismo modo se expresaron opiniones divididas en Colón, Entre Ríos donde hubo algunos incidentes cuando un grupo de comerciantes afectados por el corte del puente internacional Gral. Artigas, intentaron levantarlo a la fuerza enfrentándose a los asambleístas.

En este mismo verano del 2007 los asambleístas porteños y militantes de izquierda realizaron una original protesta de apoyo

frente a la embajada de Finlandia, colocando dos piletas de lona, una con agua limpia y otra con agua sucia, en alusión a la contaminación que sufrirá el río Uruguay. La intención de los manifestantes fue sumar al Estado de Finlandia. Esta variedad de formas de acción y estéticas recorrieron un verano expectante con relación a los posibles desenlaces. (Giarracca y Petz, 2007)

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES: LA TRAGEDIA DEL DESARROLLO

A partir de “La cumbre de los pueblos”, que funcionó paralelamente a la Cumbre del MERCOSUR, realizada en Córdoba, en julio de 2006, se creó la Unión de Asambleas Ciudadanas. Entre sus reclamos, figuran tanto el reconocimiento a campesinos e indígenas de su derecho a la tierra como la suspensión de la actividad minera y de industrias contaminantes (papeleras), el rechazo al “agronegocio”. El interrogante que podemos plantear es ¿qué tienen en común las demandas de las poblaciones aborígenes con las asambleas de Gualeguaychú, Esquel, Andalgalá y las organizaciones campesinas? ¿Cuál es ese significativo vacío, en términos de Laclau (1996), capaz de articular estas de-

mandas particulares? A mi juicio, es la forma de encarar la vida, material y cultural, que en otras épocas llamábamos “modelo de desarrollo”. Estas asociaciones vienen a rechazar una manera de organizar la vida, la economía, un modo de relación con los bienes naturales, y muchos de ellos proponen desde sus propias acciones otro tipo de actividades económicas (véase Giarracca y Wahren, 2005; Esteva, 2001). La identidad común es construida desde el rechazo a un “modelo” que los excluye como ciudadanos con capacidad de optar por una “política de vida” (Giddens, 1994).

Dice un pronunciamiento de los catamarqueños contra la minería a gran escala: “Consideramos que el “progreso” no debe en ningún caso significar la destrucción de nuestro hábitat, de nuestros sitios sagrados, el saqueo de nuestros recursos naturales, de nuestras reservas de agua dulce, la contaminación de nuestro entorno natural, la agresión sistemática y progresiva de nuestro frágil ecosistema” (agosto de 2006, en <www.noalamina.com>).

Estos nuevos movimientos sociales —o, por lo menos, los nuevos sentidos que adquieren las acciones de estas poblaciones— se enmarcan en una nueva etapa del capitalismo en la que, nuevamente, los recursos naturales son centrales y se perciben en peligro. El concepto

de “territorio”, la idea de procesos de “territorialización”, marcando las identidades de las poblaciones que viven en esos lugares, circulan en los movimientos y entre los estudiosos que los acompañan.

Los recursos naturales siempre fueron fuente de riqueza y esto quedó claro desde el surgimiento del capitalismo. No son casuales las páginas que Adam Smith dedica a los fisiócratas en *La riqueza de las naciones*, tratando de relativizar el papel de la tierra en su producción y para mover a pensar que el trabajo y la técnica también cumplen importantes roles. Asimismo, el tercer tomo de *El Capital*, de Carlos Marx, está dedicado a la renta agraria (extensiva a otros recursos naturales que no son producto del trabajo humano y que el autor menciona especialmente) para comprender el funcionamiento del capitalismo. La esperanza en el desarrollo tecnológico llevó a la creencia de que se podrían llegar a sustituir esos recursos con mercancías generadas por el trabajo humano y la tecnología. Esta misma concepción condujo a que, desde el punto de vista económico y productivo, se tratara a los recursos naturales como infinitamente renovables, cuando casi ninguno lo es. Los recursos naturales, como el “futuro”, fueron expandidos al infinito; el presente y la experiencia de poblaciones que por siglos habían manejado con

precaución la naturaleza, fueron desperdiciados (De Sousa Santos, 2000).

Muchas veces se ha sostenido que el marxismo, enmarcado en las ideas modernas, instaló una relación con la naturaleza acorde a los postulados básicos de la revolución científica¹¹. Pero es importante recordar que en esta cuestión, como en muchas otras, Marx oscila entre los valores de su época y otras concepciones profundamente avanzadas. Fueron sus seguidores los que tuvieron pensamientos mucho menos complejos que los del fundador de la teoría e hicieron prevalecer el concepto de un desarrollo de las fuerzas productivas socialmente “indeterminadas”, ciego a las consecuencias de esos avances en el mundo social y natural.

La teoría crítica hubiese podido marcar una diferencia: construir otra relación con la natu-

11 A partir del método empírico de Bacon, la ciencia adoptó como fin la dominación y el control de la naturaleza. Dice el ecólogo Fritjof Capra: “Los términos que Bacon utilizaba para defender su nuevo método empírico no solo eran apasionados sino que, a menudo, se podían tachar de atroces. En su opinión, la naturaleza tenía que ‘ser acosada en sus vagabundeos’, ‘sometida y obligada a servir’, ‘esclavizada’, había que reprimirla por la fuerza y la meta de un científico era ‘torturarla hasta sacarle sus secretos’” (1992: 58).

raleza y con los aspectos políticos y culturales de la actividad económica, pero el determinismo eclosionó esa oportunidad. Por otro lado, poco se podía esperar del resto de la ciencia económica y de las teorías del desarrollo, que se basaron en una concepción fragmentaria del conocimiento y separaron las cuestiones del crecimiento económico de los valores sociales y culturales para reducirse a problemas de mercado, oferta, demanda, productividad. Hubo intentos posteriores *ad hoc* de agregar “lo social” “lo cultural” o plantearse la medición del “desarrollo humano” que poco pudieron remediar. La ciencia económica terminó convirtiéndose en una técnica de las empresas y de los gabinetes gubernamentales. Mientras tanto se creaban organismos internacionales o nacionales que abordaban separadamente las otras cuestiones.

Durante gran parte del siglo XX, prevaleció un modelo de desarrollo basado en la producción industrial que, si bien mostraba una marcada tendencia a la internacionalización del capital, respetaba aún ciertos límites impuestos por los Estados nacionales que todavía jugaban un significativo papel regulador y jurídico. Podemos arriesgar que por detrás de estos modelos industrialistas se encontraba un desarrollo científico que, de acuerdo con Paula Sibilia,

caracterizamos como “prometeico”: pretendía doblegar técnicamente a la naturaleza apostando al papel liberador del conocimiento, que generaba y aspiraba a mejorar las condiciones de vida de la humanidad (Sibilia, 2005: 45). Las promesas del “progreso”, es decir, paz, alimentos, salud y educación para todos, formaban parte del sentido central de la dupla desarrollo económico y científico que, de distintos modos, se desplegaba tanto en el capitalismo como en las sociedades comunistas (sobre todo en la Unión Soviética). Es de destacar que, en ese contexto, los Estados nacionales valoraban recursos como el petróleo, el gas, las minas, la tierra, el agua como geopolíticamente estratégicos y los mantenía en propiedad estatal o ejercían un riguroso control sobre ellos (en el caso de la tierra, había casi siempre restricciones de venta a las poblaciones extranjeras). A mediados de los años setenta, este modelo sufrió una “gran transformación” (véase Teubal y Rodríguez, 2002).

Existe una vasta bibliografía acerca de las particularidades de la economía capitalista en la nueva etapa globalizada, su conexión con el poder hegemónico, los modos políticos y militares de generación de hegemonías, etcétera (véase Ceceña, 2004). Desde los estudios agrarios, también se ha contribuido a la carac-

terización de este modelo en su naturaleza extractiva y concentradora, remarcando el paso de la agricultura alimentaria y agroindustrial al “agronegocio” (véase Giarracca y Teubal, 2006; Mançano Fernandes, 2006). Miguel Teubal ha demostrado el papel de la renta agraria y de su relación con los recursos naturales en esta nueva forma de crecimiento (véase Teubal, 2004). Agreguemos solamente que este nuevo modelo que opera en el plano internacional con nuevas instituciones legales, financieras, económicas, ha terminado de romper con las promesas de la modernización. Con los auspicios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se expanden formas expoliatorias y expropiatorias de este capitalismo al conjunto del territorio mundial. El hambre, la pobreza, el surgimiento de viejas y nuevas enfermedades irán devastando al Tercer Mundo mientras la polarización de la riqueza alcanza niveles desconocidos; las guerras, con alto costo de poblaciones civiles, acompañan sin tregua este proceso.

Algunos autores consideran que la denominada “tecnociencia” no es totalmente ajena al nuevo desarrollo. Una concepción “tecnocientífica” que tiende a convertirse en hegemónica en todo el mundo y que, a diferencia de la época del mito científico “prometeico”, hoy devela otras aspiraciones humanas alejadas de aque-

llas promesas de la modernidad. Paula Sibilia sostiene que existe un programa tecnológico oculto tras la ciencia de nuestros días, un fortalecimiento de una tradición “fáustica”¹². Y afirma: “De acuerdo a la perspectiva fáustica, [...] los procedimientos científicos no tendrían como meta la verdad o el conocimiento de la naturaleza íntima de las cosas sino una comprensión restringida de los fenómenos para ejercer la previsión y el control; ambos propósitos estrictamente técnicos. Es inevitable asociar los criterios fáusticos a la tecnociencia contemporánea. Hasta podríamos insinuar que existe cierta afinidad entre la técnica fáustica —con su impulso hacia la apropiación ilimitada de la naturaleza (humana y no humana)— y el capitalismo, con su impulso hacia la acumulación ilimitada de capital. Ese proyecto parece estar alcanzando su ápice hoy en día, como se observa en la ilimitada carrera tecnológica y su inextricable relación con los mercados globalizados” (2005: 50).

Muchos autores coinciden en que estos nuevos modelos no tratan de mejorar las condi-

12 Sibilia observa que las tradiciones “prometeica” y “fáustica” siempre han coexistido en el sistema científico, en tensión y debate, y que una u otra adquieren predominancia en distintas épocas.

ciones de vida de la mayoría de los hombres y de las mujeres, ni siquiera para lograr ciertos consensos que les permita seguir gobernando. De la búsqueda de consenso capaz de generar hegemonías, proyectos inclusivos, se mutó hacia una supuesta resignación: “esto o algo peor”, “la única salida” (Sibilia, 2005; De Sousa Santos, 2000).

Sin embargo, no todos se resignan; poblaciones enteras luchan y en el proceso mismo de estas luchas conciben otras formas de vida. Asimismo —y esto es importante destacarlo—, científicos de todo el mundo se oponen a las formas fáusticas de generar conocimiento y buscan soluciones desde el conocimiento científico para otras formas económico-sociales, donde el hambre, la educación, la salud de los cuerpos, la cultura y las democratizaciones sean debidamente considerados¹³.

13 En la discusión pública de este trabajo se dio un interesante debate entre científicos sociales y un representante de las ciencias exactas. Mi posición no es enjuiciar a “toda la ciencia” por cuanto yo misma forma parte de ella; se trata de crear espacios de reflexión crítica para lograr la autonomía de la ciencia en relación con las grandes corporaciones económicas. La finalidad de muchos grupos de investigadores de todo el mundo es que la ciencia nuevamente se ubique dentro de los pensamientos emancipadores, hoy (a diferencia

Como nos dice Vandana Shiva (2003), existen grandes movimientos sociales en las poblaciones y comunidades del Tercer Mundo para seguir siendo productoras de conocimiento, alimentos, medicamentos: ellos luchan por su derecho a guardar e intercambiar las semillas, por la libre utilización de los recursos y de los conocimientos para satisfacer sus necesidades, por la defensa de la diversidad cultural, etcétera. Es decir, detrás de las disputas por la tierra, el agua, la semilla, la biodiversidad, existe una lucha por la soberanía de los pueblos y por el derecho a mantener otras concepciones de la reproducción material de la vida y de la cultura.

Esta expansión de visiones alternativas resulta de la toma de conciencia de los nefastos resultados de la actual propuesta neoliberal capitalista, basada en el individualismo, en las relaciones patriarcales, en las democracias formales o en la guerra y en una “tecnociencia” ligada a los intereses de las grandes corporaciones. La mercantilización de la vida, el biopoder, es resistido en muchos lugares del mundo tanto de manera abierta e irruptiva

del pasado) en reinención. La autonomía, libertad y autorreflexión de las comunidades científicas son los principales caminos para lograr esto.

como en la práctica de construcción de “otros mundos” posibles.

Los movimientos sociales que presentamos en este trabajo expanden la democracia, marcan límites a un “desarrollo” que podemos caracterizar de apropiador y extractivo pero básicamente mortificante, que enferma y entristece a los sujetos. Hombres y mujeres pueden adoptar un papel pasivo frente a estas situaciones y agudizar el sentimiento de mortificación o pueden protestar (Ulloa, 1995). Pueden seguir engañándose con mitos y promesas (de trabajo, de un bienestar parecido al del norte, etcétera) o pueden emprender la vida desde sus propias potencialidades. Esta última es una actitud activa, transgresora y alegre y fuerza a los Estados a torcer algunos (no muchos) rumbos.

Tal vez la solidaridad y la alegría en las calles, los puentes y las plazas ganados por las protestas y los movimientos sociales constituyan no solo el mejor antídoto para estos procesos mortificantes (mortíferos muchas veces) sino la mejor oportunidad para pensar un futuro democrático para todos los que apuestan en serio a una sociedad mejor.

BIBLIOGRAFÍA

- Barbetta, P. 2005 “El Movimiento Campesino de Santiago del Estero: luchas y sentidos en torno a la problemática de la tierra” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza).
- Berman, B. 1988 “El Fausto de Goethe: la tragedia del desarrollo” en *Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Capra, F. 1992 *El punto crucial* (Buenos Aires: Estaciones).
- Ceceña, A. E. 2004 *Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI* (Buenos Aires: CLACSO).
- CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) *Informe anual sobre derechos humanos, 2006* en <www.cels.org.ar>.
- CEPAL 1999 *Panorama minero de América Latina a fines de los noventa* (Santiago de Chile: CEPAL) Serie Recursos Naturales e Infraestructura N° 1.
- De Sousa Santos, B. 2000 *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. Vol. 1: Para um novo senso comum. A ciência, o direito e a política*

- na transição paradigmática* (San Pablo: Cortez).
- De Sousa Santos, B. 2006 *Conocer desde el Sur. Para una cultura política emancipadora* (Lima: Universidad Nacional de San Marcos).
- Esteva, G. 2000 “Desarrollo” en Sachs, W. *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder* (México DF: Galileo).
- Falco, W. 2006 *Uruguay, país forestal: modelo en rojo* (Montevideo: Rel UITA / Brecha). Disponible en <<http://www.rel-uita.org/agricultura/uruguay/forestacion/>>.
- Gerfoguel, R. 2006 “La descolonización de la economía política y los estudios poscoloniales. Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global” en *Tábula Rasa* (Bogotá) N° 4, enero-junio.
- Giarracca, N. et al. 2001 *La protesta social en Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. y Del Pozo, N. 2005 “To make waves: water and privatization in Tucumán, Argentina” en Bennett, V.; Dávila-Poblete, S. y Nieves Rico, M. (ed.) *Opposing Currents. The Politics of water and gender in Latin American* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).
- Giarracca, N. y Petz, I. 2007 “La Asamblea de Gualeguaychú: su lógica de nuevo movimiento social y el sentido binacional ‘artiguista’ de sus acciones” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 226.
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2004 “‘Que se vayan todos’: Neoliberal collapse and social protest in Argentina” en Demmers, J.; Fernández Gilberto, A. E. y Hogenboom, B. (eds.) *Good governance in the era of global neoliberalism. Conflict and depolitisation in Latin America, Eastern Europe, Asia and Africa* (Londres / Nueva York: Routledge).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2008 “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del ‘agronegocio’: el caso argentino” en Mançano Fernandes, B. (org.) *Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual* (San Pablo: CLACSO, Colección Grupos de Trabajo / Expressão Popular).
- Giarracca, N. y Wahren, J. 2005 “Territorios en disputa: iniciativas productivas y acción política en Mosconi, Argentina” en Seoane, J. (comp.) *Reforma agraria y lucha por la tierra en América Latina. Territorio*

- y movimientos sociales* (Buenos Aires: CLACSO-OSAL) Año VI, N° 16.
- Giddens, A. 1994 *Consecuencias de la modernidad* (Madrid: Alianza).
- Laclau, E. 1996 *Emancipación y diferencia* (Buenos Aires: Ariel).
- Lander, E. 2000 *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (Buenos Aires: CLACSO).
- Mañano Fernandez, B. 2006 “Um nome para ‘modernizar’ o sistema de latifundio” en *Fórum, Suplemento do Journalunesp* (San Pablo: Universidade Estadual Paulista) Año XX, N° 211.
- Quijano, A. 2000 “Colonialidad del poder eurocentrismo y América Latina” en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (Buenos Aires: CLACSO).
- Sachs, W. 2001 *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder* (México DF: Galileo).
- Shiva, V. 2003 *Cosecha robada: el secuestro del suministro mundial de alimentos* (Buenos Aires: Paidós).
- Sibilia, P. 2005 *El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Teubal, M. 2004 “Rise and collapse of neoliberalism in Argentina: the role of economics groups” en *Journal of Developing Societies* (Londres: Thousand Oaks / Nueva Delhi: SAGE) Vol. 20, N° 3-4.
- Teubal, M. y Rodríguez, J. 2002 *Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica* (Buenos Aires: La Colmena).
- Ulloa, F. 1995 *Novela clínica psicoanalítica. Historial de una práctica* (Buenos Aires: Paidós).
- Zibechi, R. 2006 “Los movimientos según Zibechi: empezar de nuevo”, entrevista realizada por *La Vaca*, disponible en <<http://www.lavaca.org/seccion/actualidad/1/1398.shtml>>.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y PROTESTAS EN LOS MUNDOS RURALES LATINOAMERICANOS

NUEVOS ESCENARIOS Y NUEVOS ENFOQUES*

INTRODUCCIÓN

En la última década del siglo XX, los problemas de los campesinos y de los indígenas de América Latina vuelven a ocupar un espacio importante en la agenda política internacional. La rebelión de los indígenas en Chiapas, México, en el primer día de 1994; las acciones cada vez más coordinadas, complejas y públicas del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, los levantamientos de los campesinos ecuatorianos y bolivianos, nos enfrentan a la magnitud y relevancia de este fenómeno.

Desde fines de los años setenta, las acciones de los pobladores rurales —campesinos, *farmers*, obreros rurales— habían entrado en

una etapa de latencia o de casi invisibilidad y las pocas protestas que los involucraban no lograron atravesar los límites locales o, excepcionalmente, nacionales. El efecto de las reformas agrarias en el marco de regímenes de acumulación internamente orientados, así como de la expansión agroindustrial con integración de la agricultura familiar, configuraron escenarios donde los campesinos y sus familiares se articulaban a los mercados (de productos, de tierra, de crédito y también de trabajo) y se percibía la fuerte esperanza de lograr una mayor integración económica para los mundos subalternos agrarios a partir de esta conexión, aunque tales relaciones comportaran fuertes asimetrías sociales.

Simultáneamente, el debate académico se centraba en los mecanismos de subordinación de estos sectores y en los márgenes de negociación frente a las empresas procesadoras o de fabricantes de insumos. Si bien, por un

* Giarracca, N. 2002 “Movimientos sociales y protestas en los mundos sociales latinoamericanos. Nuevos escenarios y nuevos enfoques” en *Sociologías* (Porto Alegre) Año 4, N° 8, julio-diciembre.

lado, se contaban por millones los campesinos que aún quedaban fuera del mercado y de la expansión agroindustrial¹ y, por otro lado, los datos acerca de la población rural registraban una marcada disminución, la posibilidad de integrar los campesinos a una “vía agroindustrial de modernización” se sostuvo desde las políticas públicas y se celebró desde los “estudios campesinos”.

Los Estados nacionales fueron un soporte fundamental para esta relación agroindustrial; en muchos casos se caracterizaban como programas de desarrollo “tripartitos” (campesinos, empresas agroindustriales y Estados). El conflicto social, mientras tanto, se centraba en el contrato agroindustrial; en el logro de un acceso más justo a los créditos o en la relación con el Estado para mejorar su intervención. Asimismo, como muchos trabajadores rurales trabajaban para grandes empresas agroindustriales (en sus tierras o en sus empresas procesadoras), estas se convirtieron en los centros de reclamos de campesinos y de trabajadores rurales y agroindustriales. Recordemos, como

ejemplo, los conflictos con las empresas paraestatales en México (Tabamex, Inmecafé, etcétera), durante los años setenta.

Esta situación se fue modificando a medida que los gobiernos de la región, acompañados por los organismos internacionales, comenzaron a generar políticas tendientes a la liberalización de las economías nacionales orientadas a crear una economía abierta y globalizada. Así, los nuevos créditos provenientes de los organismos internacionales comenzaban a otorgarse condicionados a severas políticas de ajuste. En el nuevo marco de políticas macroestructurales, el Estado retiraba paulatinamente los apoyos imprescindibles para mantener la “integración” de las agriculturas campesinas a la expansión agroindustrial. Las medidas generales impulsadas por el nuevo modelo se orientaron a liberalizar el comercio exterior, a una apertura general al mercado mundial y a la formación de mercados regionales como la *North American Free Trade Association* (NAFTA) y el Mercado Común del Cono Sur (Mercosur).

Las consecuencias del nuevo modelo económico neoliberal son bien conocidas en lo que se refiere a los procesos de concentración de la riqueza, acentuación de las desigualdades sociales, aumento de la pobreza y de la desocupación. En el nivel de las agriculturas, la apertura

1 De Janvry et al. (1989) estimaban alrededor de 7 millones de explotaciones de tipo “subfamiliar” y sostenía que eran las que más habían crecido en los últimos treinta años.

exterior requirió de nuevas reglamentaciones para desarmar aquellas redes institucionales —desde las reformas agrarias hasta las instituciones de fijación de precios mínimos— que habían sostenido a la pequeña explotación familiar durante décadas. La modificación del artículo 27 de la Constitución de 1917 en México, y el decreto de Desregulación Económica de Argentina, en 1991, fueron, tal vez, los ejemplos más elocuentes en esta dirección.

El escenario conformado por unas nuevas reglas económicas tendientes a crear economías de escala en la agricultura, con fuertes inversiones de capital, con tecnologías acordes a tales condiciones y altas productividades, arrinconó a gran parte de los sectores de la pequeña explotación. Además, seguían pendientes problemas de tierra (por reparto o titularizaciones), así como otras reparaciones históricas de las poblaciones indígenas o soluciones para la pobreza extrema de los trabajadores sin tierra, etcétera. A este mapa social de “derechos pendientes” se sumaban pérdidas de derechos adquiridos. Tales situaciones implican, casi siempre, condiciones de posibilidad positivas para la expansión de la conflictualidad social. Es más fácil, dicen Laclau y Mouffe (1985), que se generen conflictos en una situación de pérdidas de derechos ad-

quiridos que en aquella otra donde esos derechos nunca echaron raíces.

Pero como toda situación social, la generada en las últimas décadas es compleja e implica racionalidades múltiples (y no una sola como desean creer los economistas neoliberales). Con el discurso económico neoliberal que redujo derechos sociales adquiridos, comenzó a circular, con más fuerza que nunca en nuestros territorios, un discurso liberal con alto contenido democratizador. En efecto, la puesta en marcha de unas reglas económicas que resultaban excluyentes de importantes sectores poblacionales, era acompañada con discursos de recuperación de formas democráticas de gobierno, de mayor respeto por las minorías, por las diferencias étnicas, por género, por respeto al medio ambiente, etcétera. Tales discursos circularon en el nivel de la globalización acompañando a los capitales y, a mi juicio, produjeron importantes impactos en los niveles locales además de los nacionales. Las Organizaciones No Gubernamentales cumplieron un relevante papel en la expansión de tales discursos. Por último, los avances de las tecnologías de comunicación, sobre todo Internet, coadyuvaron a romper con aislamientos y favorecer la circulación de tales discursos hasta en las regiones más aisladas geográficamente.

En síntesis, se presentó esta conjunción de condiciones que, por un lado, arrinconan y excluyen a los campesinos y a los trabajadores, pero que, por el otro, habilitan nuevas “oportunidades políticas” (Tarrow, 1997). Los gobiernos democráticos —aun los débiles— reconocen a los ciudadanos como portadores de derechos y admiten la posibilidad de demandar otros nuevos; este escenario y los discursos democratizadores (en varios sentidos), representan, junto con las condiciones económicas que los arrinconan, el marco en el que se generan y desarrollan los conflictos y acciones de la población rural de América Latina de la última década del siglo XX.

Pensar y reflexionar en el nivel de América Latina como una unidad, y sobre todo en relación con sus mundos rurales, puede conducirnos a generalizaciones estériles. La región tiene aspectos similares en relación con las políticas públicas que fueron impulsadas por los agentes de la globalización (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera). Además, no le costó mucho participar de una mayor integración internacional y de una mayor interacción cultural facilitada por las nuevas tecnologías de comunicación. Sin embargo, cada región, cada país, se constituyó en un escenario particular cuyos actores desplegaron procesos singulares e irrepetibles.

En este trabajo me ocuparé de las particularidades del Sur de América Latina, de los dos países con menor cantidad de poblaciones campesinas e indígenas: Uruguay y Argentina. Los conflictos agrarios que se desplegaron durante toda la década pasada en la Argentina y en los últimos años en Uruguay, tienen sus particularidades: la presencia de la explotación familiar capitalizada coexistiendo con grandes productores (Piñeiro, 1999).

En relación con los países del Cono Sur planteo una cuestión teórica: cómo conceptualizar las acciones que expresan diversos conflictos, diversos actores, diversos niveles de organización. ¿podemos sostener que son “movimientos sociales” con todas las cargas de sentidos que tal concepto acarrea? Soy cautelosa y prefiero mantener el análisis en los niveles conceptuales de “acciones de protesta” y delimito aquellas acciones que incorporan, en efecto, el sentido de una “protesta” (más adelante definiré el concepto) de aquellas otras que comportan presiones al poder político tendientes a defender intereses sectoriales. A este último tipo de acciones las conceptualizo como “corporativas”.

No obstante utilizar tales conceptos, parto del análisis más general de los “movimientos sociales” que permite sostener una mirada dis-

tinta (a la de décadas atrás) sobre estos procesos sociales. De allí que dedicaré un apartado a reflexionar acerca de las viejas y nuevas teorizaciones sobre los movimientos sociales campesinos de América Latina. Por último, me ocuparé de caracterizar las acciones de protesta del Cono Sur y me centraré en los conflictos agrarios de Argentina en los últimos años, basándome en información generada por nuestras propias investigaciones².

LOS ENFOQUES TEÓRICOS-METODOLÓGICOS

Durante la década de los años sesenta, Erich Wolf, estudiaba los movimientos campesinos como formas de “luchas” en referencia a los grandes cambios.

...las rebeliones campesinas del siglo XX ya no son solo simples respuestas a problemas locales si es que alguna vez lo fueron. Son reacciones locales ante disturbios sociales de gran importancia que han sido causados por importantes cambios de la sociedad... De este modo, cuando los protagonistas campesinos levantan la antorcha

de la rebelión, el edificio de la sociedad ya está en condiciones que los exponen a ese fuego. Cuando la batalla haya terminado la estructura no será la misma. (Wolf, 1973: 401)

La discusión giraba alrededor del problema del nivel de “clasicidad” de las poblaciones campesinas, en comparación con el de la clase obrera, que estaba destinada a tener el rol protagónico en los grandes cambios revolucionarios.

¿En qué medida se puede hablar del campesino como clase? se preguntaba Eric Hobsbawm (1976). El problema residía en establecer su conciencia de clase y, en tal sentido, la mayoría de los estudiosos de la época coincidieron con Shanin (1966) en considerarlo un sector de baja “clasicidad”. La personalización de las relaciones sociales, a través del clientelismo, el parentesco artificial como el compadrazgo, así como la expansión de la política de tipo faccional (Alavi, 1976), impedían la existencia de una conciencia de clase permanente.

Los campesinos tendían a relacionarse con sectores urbanos (clase obrera, intelectuales, etcétera) para superar esta limitación tan esencial. Y allí residía la segunda clave de los estudios de los movimientos campesinos de unas décadas atrás: la importancia de poder contar con intelectuales simpatizantes. La tercera cla-

2 Grupo de Estudios Rurales, UBA.

ve, en aquellos sugerentes estudios, residía en centrarse en el papel del campesinado medio.

En efecto, no eran los más pobres los llamados a levantarse, porque, como sostenía Hobsbawm, “por muy militantes que sean los campesinos, el ciclo de sus faenas los ata a su destino” (Ibídem: 124). La militancia y la participación en las organizaciones recaían en los campesinos medios, con mayores dotaciones de recursos —materiales y simbólicos— para la acción política.

La acción campesina se comparaba con las acciones políticas de la clase obrera, que tenía mayor nivel de conciencia de clase, mayor homogeneidad en tanto no poseedora de medios de producción y que establecía un vínculo con las vanguardias revolucionarias (partidos, intelectuales) de distinta naturaleza. En América Latina, como en el resto del mundo subdesarrollado, los trabajadores rurales estuvieron demasiado entreverados con las comunidades campesinas como para considerarlos sujetos políticos comparables a los obreros industriales.

Los campesinados protagonizaron grandes movimientos políticos durante las seis primeras décadas del siglo XX, pero las corrientes más ortodoxas del marxismo los colocaron siempre “bajo sospecha”. La condición de po-

seer o controlar tierra y sus apegos a tradiciones culturales que no contaban con las simpatías de los intelectuales “modernizadores” (por ej. la comunidad) contribuyeron a esta situación. El actor del cambio político se construía en referencia al capitalismo y a sus reglas de funcionamiento, donde las relaciones de propiedad eran fundamentales.

A partir de las grandes transformaciones que comenzaron a manifestarse en la década del ochenta y continuaron con más fuerza en la última década del siglo XX, la situación de los campesinos, sus movimientos y luchas así como los paradigmas de las Ciencias Sociales para comprenderlos, también cambiaron. Por un lado, obtuvieron reconocimiento como actor social capaz de protestar, reclamar, generar acciones colectivas. El hecho de que otros sujetos de cualquier origen social fueran aceptados como centro de los “nuevos movimientos sociales”³ condujo a una revisión, dentro de las Ciencias Sociales, de aquellas teoriza-

3 Jóvenes de clase media sin acceso a créditos que “tomaban” casas desocupadas en Europa o rechazaban el mandato de servir militarmente a sus naciones —objetores de conciencia—, madres de todas las condiciones sociales que reclamaban por sus hijos desaparecidos, etcétera.

ciones que estrechaban las oportunidades de acción política de cualquier actor social. Se comenzó a pensar la política como un modo de presentación de lo social, sin sujetos privilegiados “a priori”.

Por otro lado, los movimientos agrarios de la actualidad no manifiestan las pretensiones revolucionarias de otros tiempos (tomar el poder); sus demandas son variadas: persistencia en la producción, autonomía, participación, democratización (intensificación de procesos de ciudadanización). Tal vez el caso más paradigmático sea el movimiento indígena de la Selva Lacandona de Chiapas. La gran variedad de “formas de acción” que han desplegado — desde el levantamiento armado de comienzos de 1994, hasta “la poética” que apela a sentimientos profundos y simpatías de los sectores medios pasando por una marcha por México en estos primeros meses del 2001— no tiene como finalidad “tomar el poder” (a la vieja usanza revolucionaria) ni crear un partido político progresista (al nuevo estilo latinoamericano).

Los zapatistas, los movimientos indígenas de Ecuador, de Chile, así como el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, la aparición de Vía Campesina en el nivel internacional (véase Giarracca, Teubal y Domínguez, 2001) son fenómenos sociales originales que se resisten a

ser comprendidos con los viejos paradigmas de las Ciencias Sociales.

Para sumar complejidad, recordemos que estos nuevos movimientos campesinos e indígenas no tienen, necesariamente, correlatos en la conducta electoral de los pobladores rurales. Como sostiene Fox (1996), para mediados de los noventa y en términos generales creemos que la situación no varió mucho: las regiones rurales de América Latina apoyan electoralmente a los partidos conservadores debido a las redes clientelísticas muy consolidadas en las regiones donde predominan las antiguas organizaciones gremiales.

Estas situaciones de los mundos rurales no son ajenas a muchos otros cambios acaecidos en escenarios políticos, económicos, tecnológicos, sociales y culturales globales. Y el pensamiento social no fue ajeno a estos procesos; las Ciencias Sociales sufrieron sus propios virajes y las nuevas interpretaciones pos-estructuralistas encararon las novedades desde otros horizontes. La reproducción y la transformación social se encaró desde la reflexión acerca de las condiciones que habiliten la formación de “actores” capaces de “intervenir en un estado de las cosas”, capaces de producir nuevos sentidos. Se resignificó el concepto “estructura”, se mostró que, como todo siste-

ma de significantes, los mundos sociales son susceptibles de “comprensiones” y no de “explicaciones y predicciones”. En tales virajes las disciplinas sociales perdieron pretensiones de cientificidad y recuperaron su pasado junto a las Humanidades.

Alain Touraine, en su intento de reemplazar una representación de la vida social basada en nociones de sociedad, evolución y rol por otra, basada en nociones como historicidad, movimiento social y sujeto, fue uno de los pioneros en esta tarea. Los “movimientos sociales” (MS) aparecían en las nuevas teorizaciones como claves para comprender los nuevos tiempos. Touraine (1988) presentaba ciertos principios capaces de conceptualizar una relación como movimiento social y diferenciarlo de otros tipos de conductas colectivas y luchas. Definía al movimiento social como una acción conflictiva que cambiaba tanto las orientaciones culturales, como el campo de historicidad en forma de organización social, definidos a la vez por normas culturales generales y por relaciones de dominación social. Establecía tres principios: orientación cultural; control de la historicidad; lucha contra la dominación social.

En la misma línea, Alberto Melucci ubicaba el concepto MS en el centro de una teoría procesual que recuperaba el conflicto para dar

cuenta de sus dinámicas. Para que podamos adentrarnos en los análisis de los movimientos sociales —sostenía Melucci— es necesario que haya acciones colectivas y que estas provoquen una ruptura en los límites de compatibilidad del sistema en el cual se sitúan, sea a nivel del mercado o del Estado. Una acción colectiva, nos decía este autor, implica la existencia de una lucha entre dos actores por la apropiación y orientación de los valores sociales y de los recursos. Pero la acción colectiva incluye también —agrega— un segundo aspecto: conductas que transgreden las normas que han sido institucionalizadas en roles sociales. Es decir acciones que tienden a una ruptura de los límites de compatibilidad del sistema dentro del que se encuentran situados. Los Movimientos Sociales están constituidos por acciones colectivas que cumplen con la primera y la segunda condición. De este modo, nos advertía, los MS no son objetos empíricos sino construcciones analíticas.

Esta analítica nos conduce a la búsqueda de significados de las acciones, al sujeto que las genera y a situarlas en el sistema de relaciones sociales. Nos permite ubicar el conflicto como límite de toda positividad y, por lo tanto, a limitar las pretensiones positivistas de viejo cuño de tomar lo social, como dado, naturalizado. Se

comenzaban a reivindicar los mundos sociales y culturales, la vida cotidiana, las grandes pero también las pequeñas acciones de los actores, los grandes movimientos sociales pero también las pequeñas protestas.

Los autores europeos, entusiasmados además por los acontecimientos que ocurrían en sus países durante los años ochenta, buscaban las novedades de los movimientos sociales, a los que adjetivaron como “nuevos” y desde sus análisis proponían una mirada descentralizadora de las ubicaciones estructurales de los sujetos (la clase). Los Nuevos Movimientos Sociales no respondían a demandas de clases ni buscaban posicionarse frente o dentro del “poder” entendido como estructura.

Estas teorizaciones comenzaron a circular por América Latina. A mediados de la década del ochenta apareció uno de los primeros textos dedicados a la problemática: *Los movimientos sociales ante la crisis*. En este esfuerzo colectivo estimulado por CLACSO, producto de un seminario regional, el compilador del libro, Fernando Calderón, advertía la inmadurez teórica de la problemática si se consideraban las particularidades latinoamericanas. En la región, decía Calderón, los movimientos no aparecen claros ni definidos: la multidimensionalidad de las relaciones, los as-

pectos étnicos, locales, las historias políticas producen densos y complejos modos de aparición de conflictos y acciones.

Y efectivamente, el fluir de procesos diversos, con fuertes particularidades nacionales y regionales, que manifestaban las primeras respuestas a los “nuevos tiempos”, sostenían el temprano resquemor de Calderón. Pero también, vale decirlo, se iban generando conflictos y acciones con características desconocidas hasta entonces y diversos estudios empíricos que los registraban desde abordajes no tradicionales. Podríamos mencionar, a modo de ejemplo, el impresionante movimiento por los derechos humanos que se generó desde el Sur del continente o los insistentes intentos campesinos para lograr autonomía en México a través de las grandes marchas de la Coordinadora Plan de Ayala a la ciudad de México o las primeras acciones del Movimiento Sin Tierra en Brasil.

Como sostiene Fox (1996) a fines de 1980, el MST pasó a asumir un papel dominante en las acciones más radicales y directas a favor a la implantación de una Reforma Agraria en Brasil, en tanto en México, la formación de “redes”, “coordinadoras” buscaban estructuras organizativas de tipo horizontal entre los campesinos. En casi todos los casos aparecían otros

actores: la Iglesia Católica, las ONG, etcétera. La pregunta que rondaba entre los estudiosos era que “novedades” de estas acciones campesinas habilitaban a tratarlas como “nuevos movimientos sociales”.

Una pionera respuesta a tales interrogantes fue la de David Slater, quien en su temprano trabajo acerca de los NMS y el Estado en América Latina (1985), resaltaba la mercantilización, masificación y burocratización como rasgos acompañantes de la globalización económica. Se colonizaban todos los espacios de la vida, se mercantilizaban hasta los bienes simbólicos y los rituales sagrados, aumentaba la burocratización sumando a las estructuras nacionales las internacionales, etcétera.

De este modo, sostenía Slater, aparecían nuevas formas de subordinación y opresión y, simultáneamente, se ponía de manifiesto una ruptura con la idea de la constitución de una identidad social plena (la clase) que daba lugar a la representación política. Valiéndose de la conceptualización de Ernesto Laclau, el autor agregaba que las nuevas luchas habían provocado una crisis en tradicionales paradigmas de las Ciencias Sociales, en referencia a la caracterización de los agentes sociales y sus conflictos. El conflicto social, en su antigua versión, se caracterizó por tres rasgos:

1. las identidades estaban dadas por la posición en la estructura social;
2. el tipo de conflicto estaba determinado por el paradigma evolucionista (feudalismo-capitalismo; capitalismo-socialismo, etcétera);
3. el espacio del conflicto era la política donde se representaban los intereses dados por la ubicación económica de los agentes.

Con la aparición de los NMS, la unidad de estos tres aspectos del paradigma se rompería: los actores ya no podían ser caracterizados por su ubicación en la estructura de la producción sino que resultaban de varias posiciones, de varias ubicaciones (posiciones de sujeto en la conceptualización de Laclau y Mouffe, 1985).

Las reacciones contra esta analítica dentro de los estudios campesinos provenían del lado del marxismo más ortodoxo y no se hicieron esperar. En efecto, Tom Brass, uno de los editores de *Journal of Peasant Studies*, criticó esta posición y la consideró inaceptable para los estudios de América Latina. La crítica recaía, por supuesto, en la desvalorización de la analítica centrada en las “clases sociales” para caer nuevamente —según Brass— en posiciones neopopulistas en las que se perderían las dimensiones político-ideológicas (Brass, 1991).

A mi entender, Brass no puede comprender (o aceptar) los nuevos modos de pensar los aspectos políticos e ideológicos en las acciones colectivas de los mundos rurales de América Latina. Estos no se pierden sino que se los comprende de otro modo. Las nuevas teorizaciones toman los conflictos que hacen a las dimensiones económicas y por lo tanto, parten de una ubicación de los actores en la estructura agraria. Aunque haya dejado de utilizarse la clásica conceptualización marxista (que en los mundos agrarios trajo bastantes malentendidos) se ubica, se posiciona socialmente a los sujetos. Pero a las demandas de tipo social, los nuevos enfoques suman otras: la búsqueda por los derechos de las minorías, las diferencias por género, por etnias; menor corrupción, mayor participación en planes de gobiernos, por ejemplo.

Además, los reclamos no provienen necesariamente de una supuesta “identidad de clase”, sino que, por ejemplo, en los “Sin Tierra” participan pobladores rurales y desocupados urbanos, o bien en movimientos tales como El Barzón, en México, y las Mujeres Agropecuarias en Lucha, en Argentina, participan productores con cierto capital (las conceptualizaciones tradicionales no dudarían en ubicarlos como “pequeñas burguesías”).

El debate entre marxistas ortodoxos y pos-estructuralistas pierde todo sentido intelectual frente al avance del denominado Movimiento Campesino (Vía Campesina entre otros), que en realidad incluye una serie de sectores y de demandas que van desde los productores familiares europeos a los “consumidores concientes” pasando por las demandas indígenas, las de los trabajadores sin tierra, etcétera. Aquella vieja discusión fue agotándose frente al protagonismo de las llamadas genéricamente “luchas campesinas” que en el nivel mundial impactan en este nuevo milenio de un modo realmente inesperado y sorprendente.

El nuevo dispositivo conceptual permitió no solo comprender los grandes movimientos que conmueven al mundo (como Chiapas o el MST) sino otras expresiones de conflictos, protestas, como también considerar las estrategias de los actores en los niveles productivos, en los mercados laborales o en el de la participación en las pequeñas organizaciones. Todo ello nos permite vislumbrar un mundo rural activo, adaptándose o resistiendo a las nuevas condiciones, produciendo rupturas o pequeñas reformas o, en última instancia, buscando estrategias urbanas o migratorias. Tales imágenes sustituyen esas otras donde una “globalización” o “un mercado” arrasan, inevitablemente,

con las regiones “inviabiles” (como alguna vez las definió el Banco Mundial).

LA ESPECIFICIDAD DEL CONO SUR: ¿ACCIONES COLECTIVAS O ACCIONES CORPORATIVAS?

Argentina y Uruguay fueron países de América Latina donde coexistió la estancia ganadera, de considerables extensiones, con explotaciones pequeñas y medianas de tipo familiar capitalizada, dedicadas a las agriculturas y agroindustrias (caña, yerba, arroz, etcétera). Piñeiro suele caracterizar al Uruguay como un país “pastoril”, con un estancamiento relativo de este sector ganadero a partir de la crisis del 1930 (Piñeiro, 1995; 1999). Otro tanto ocurrió en la misma época en la Argentina, aunque el sector terrateniente pampeano siguió manteniendo un poder político relativo por muchas décadas más.

En las estructuras agrarias de ambos países se destacan los estratos de productores medios y familiares y, si bien a lo largo del siglo el número de hectáreas promedio por explotaciones aumentó y el peso relativo de las explotaciones medias y familiares disminuyó, este tipo de productor —a través de sus entidades

representativas la FAA y CNFR⁴— son actores relevantes en los mundos sociales del agro de ambos países.

En un trabajo de la década del ochenta, Diego Piñeiro (1985) intentó conceptualizar como “campesina” a la agricultura familiar de los estratos más bajos de superficie de la agricultura uruguaya y, muy influido por el trabajo de Scott (1976), se propuso registrar las acciones individuales de resistencia a la explotación capitalista.

En la medida en que su poder político no era efectivo —sostenía Piñeiro— y en la medida en que las organizaciones de productores tampoco podían ser efectivas debido al contexto político reinante en el país (se refiere a las dictaduras militares) las formas de resistencia al nivel de la unidad doméstica fueron las más relevantes. (Ibídem: 164)

En Argentina, durante los años setenta, se había generado un movimiento de pequeños productores en el Norte del país: las “Ligas Agrarias”. Ese movimiento tuvo demandas

4 FAA es la Federación Agraria Argentina y la CNFR es la Comisión Nacional de Fomento Rural de Uruguay, ambas creadas en la primera década del siglo XX (1912 y 1915 respectivamente).

heterogéneas (tierra, precios, créditos, etcétera) y formas de luchas novedosas dentro de la tradición agraria argentina. Abordado en los primeros momentos con analíticas tradicionales de las Ciencias Sociales, el movimiento fue objeto de muy diferentes interpretaciones. Hubo quienes lo consideraban parte de las luchas populares con alto contenido revolucionario (Ferrara; Francisco, 1973) o quienes calificaron esas luchas como movimientos de tipo populistas con reivindicaciones “pequeño-burguesas” (Bartolomé; Leopoldo, 1978).

Pero en ninguno de estos dos países, los pequeños productores ni sus resistencias pueden atribuirse el peso nacional que lograron en países como México, Brasil, Bolivia. En primer lugar, por el papel marginal de estos sectores en la sociedad global de ambos países, dados sus altos niveles de urbanización; en segundo lugar, porque los asentamientos de los agricultores fueron el resultado de procesos de colonización (a veces conflictivos) y las “reformas agrarias” no constituyeron banderas políticas. Uruguay es un país de “propietarios” y tales derechos son solo cuestionados por posiciones muy radicalizadas. En la Argentina los colonos accedieron a la tierra básicamente a partir de un aconte-

cimiento que conmovió al próspero país del “centenario”, en 1912: el Grito de Alcorta⁵. Este temprano acceso a la tierra los convirtió en pequeños propietarios recelosos de consignas de los partidos de izquierda que eran los únicos que levantaban la necesidad de una reforma agraria, partiendo del supuesto (nunca comprobado) de que el gran terrateniente pampeano era “un latifundista” (véase al respecto Giarracca, 1999).

Las acciones de los campesinos “rioplatenses” no son fácilmente comparables a las de los campesinos de Brasil, Paraguay o México. Pero hay otro aspecto que tenemos que considerar: muchas de las protestas del agro de ambos países estuvieron, y aún hoy están, conducidas por los productores —agrarios y pecuarios— más grandes.

Es necesario, por lo tanto, diferenciar demandas y orientaciones dentro de los “bloques” que se presentan como la “protesta del

5 El “centenario” de la Revolución de Mayo de 1810, encontró al país en crecimiento y próspera inserción en el capitalismo internacional. En 1912, los arrendatarios, productores de cereales, de la provincia de Santa Fe iniciaron un movimiento tendiente a lograr una mejor posición en el reparto del excedente agrario. La propiedad de la tierra fue una de sus principales consignas.

campo” tanto en Uruguay como en Argentina. Como sostiene Piñeiro en relación con su país:

Por lo mismo que es esta la base social de la protesta, no hay reclamos de carácter estructural. No se habla de los procesos regresivos en la distribución de la tierra, de los procesos de concentración de los activos físicos, de políticas diferenciadas para los pequeños y medianos productores. No se habla de la creciente extranjerización de la tierra. Solo se reclama por los precios de los productos, por las deudas y los impuestos que ahogan al campo. Uno de los lemas de este conflicto ha sido “rentabilidad o Muerte”. Son reclamos de un empresariado que quiere que se le asegure rentabilidad en su explotación. (1999: 25)

En efecto, si bien en Uruguay existen reclamos de sectores subalternos del agro —pequeños horticultores, sectores empobrecidos de la agricultura familiar, trabajadores rurales, etcétera— no son ellos, como actores, quienes aparecieron en la protesta de 1999. Las demandas empresariales, de carácter corporativas, son las que se visualizan tanto en las formas de acción como en la simbología del episodio de aquel año.

Otro tanto ocurre en Argentina cuando se trata de conseguir financiaciones o cambiar los precios relativos sin tocar la convertibilidad —

como se ocupan de aclarar las entidades— en movilizaciones y paros destinados a conseguir mejores condiciones de negociación con los funcionarios que, por otra parte, siempre los reciben en sus despachos y escuchan atentamente los reclamos. Esas movilizaciones son convocadas por las cuatro entidades del agro, pero están hegemonizadas por la tradicional Sociedad Rural Argentina.

A mi entender, en tales situaciones estamos en presencia de acciones corporativas, llevadas a cabo por las entidades con la necesaria capacidad de lobby para mejorar posiciones relativas. Schmitter (1987) define a las acciones de tipo corporativo como un sistema de representación reconocido y autorizado por el Estado, que se les ha otorgado el monopolio deliberado de la representación, a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus dirigentes y en la articulación de las demandas y apoyos (1987: 10). Otra lógica implícita en este tipo de representaciones es el de la homogeneidad en tanto se habla de “un campo”, “los productores”. De este modo, las diferencias y asimetrías internas que puján por expresarse son tapadas en aras de la búsqueda de un solo actor, un solo campo.

La habilidad de los sectores de grandes propietarios, en Uruguay y Argentina, consiste en

articular sus demandas con los sectores más golpeados por los ajustes presentando “un campo” en peligro, una unidad donde aparecen como “iguales” los pequeños productores empobrecidos, los trabajadores sin tierra y los propietarios de más de 1.000 ha o de más de 5.000 ha en ambos países, respectivamente.

LA NUEVA PROTESTA AGRARIA EN ARGENTINA

Defino “la nueva protesta agraria” en Argentina como el conjunto de acciones que comienzan a desplegarse e intensificarse a partir de los cambios institucionales que resultaron del decreto de desregulación económica generado por la presidencia de Carlos Menem, en 1991 y que duró 10 años.

La medida de política económica marcó un límite temporal importante debido al efecto producido en los procesos agrarios y los mundos rurales. Con esta medida, se disolvieron la mayor parte de las normas regulatorias, así como las instituciones que las llevaban a cabo y que habían permitido, a partir de las primeras décadas del siglo XX, la coexistencia de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias con la gran explotación agraria ganadera o mixta.

El tipo de acción desarrollada por los distintos sujetos de los mundos rurales, tanto sean productores, trabajadores, como desocupados o comerciantes de pequeños poblados, la caracterizamos como “acciones de protesta”, entendiéndolas como una subclase de las acciones colectivas que suponen intervenciones no convencionales en los espacios públicos para influir en quienes toman decisiones políticas. La protesta es un recurso político de quienes carecen de poder para hacer conocer sus demandas y se caracteriza por desarrollar formas de acción novedosas, no ortodoxas y con objetable legitimidad (Della Porta y Diani, 1999). La protesta social supone el fracaso de las instituciones en relación con sus capacidades para “oír, entender y resolver” los problemas de los ciudadanos. Las acciones de protesta, dice Grossi (1989), tienen como objetivo la transformación de los valores políticos dominantes y de las reglas del juego relativas al proceso de influencias sobre el poder (Ibídem: 41).

La nueva “protesta agraria”, en Argentina, comenzó con grandes marchas de tipo corporativo de los gremios que representan a productores medios y pequeños. Pero, a diferencia de lo que ocurriera en décadas anteriores, estos primeros eventos estuvieron hegemonizados por las entidades que nuclean a los pequeños y

medianos productores y no intervino la Sociedad Rural Argentina. Esta situación particular en el campo que dividía a las cuatro entidades corporativas, así como la falta de coherencia de los dirigentes de tales organizaciones en la demanda de políticas para el sector, presagiaban lo que ocurriría durante la década.

Desde fines de 1991 hasta julio de 1993, se habían registrado protestas locales como la de los fruticultores del Valle de Río Negro o la de los cañeros de Tucumán; pero la protesta se hace visible —pública y nacionalizada— a partir de la marcha agraria del 27 de julio de 1993. Ese día, los agricultores familiares de todo el país ganaron el espacio público de la Plaza de Mayo y demostraron su desacuerdo con las políticas económicas neoliberales (véase Giarracca y Teubal, 1993). Desfilaron con sus tractores los agricultores nucleados en la Federación Agraria Argentina (FAA) y en la CONINAGRO (la federación de tercer grado del movimiento cooperativo agrario). La voz cantante la llevó, sin dudas, la FAA bajo la presidencia de un viejo luchador y reconocido representante del sector de los chacareros, Humberto Volando. Fue una marcha del campo de los agricultores y los representantes de las grandes empresas agrarias y agroindustriales nucleadas básicamente en la Sociedad Rural Argentina (SRA) estuvieron ausentes.

Esta organización de grandes terratenientes (SRA) había sido protagonista principal de los reclamos de la década de los años ochenta, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín y había logrado articular a los pequeños y medianos productores a sus propios reclamos. Pero a partir del gobierno de Menem, ella se convertiría en un núcleo económico beneficiado por las nuevas medidas. A partir de 1989, las políticas públicas aparecían sesgadas a favor de grandes escalas de producción; la pequeña y mediana producción, comenzaban a sentir el rigor de las políticas neoliberales, pues las nuevas condiciones de funcionamiento les resultaban intolerables. De todos modos, en algunos pocos momentos de esta década, la Sociedad Rural Argentina llevó a cabo, con las tres organizaciones corporativas restantes, algunos paros agrarios debido a que evaluó que su propia rentabilidad agraria estaba en peligro. A partir de la devaluación y el reestablecimiento de los impuestos a las exportaciones —conocidos como “retenciones agropecuarias”— la vieja alianza corporativista se perfilaba nuevamente en este complicado 2002.

En 1994, los agricultores familiares volvieron a ganar la Plaza de Mayo, en esa oportunidad acompañando a todo el interior del país en lo que se conoció como la “Marcha Federal”. Se perfilaba de este modo la separación de la

Federación Agraria de la entidad de los grandes terratenientes y su alineación con la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA). Si bien el “modelo” en el nivel nacional aún mantenía cierto consenso, la ciudad capital —Buenos Aires— se conmocionaba con cada uno de estos encuentros.

Los elementos “novedosos” de las acciones de los actores del campo se manifestaron en plenitud a partir de entonces. Hizo su irrupción el “Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha”, se consolidaba la corriente interna de FAA “Chacareros Federados”, la organización “Movimiento Campesino de Santiago del Estero” (MOCASE) lograba una importante consolidación, comenzaban algunos cortes de ruta en varias provincias, volvieron a expresarse en huelgas de alcance provincial algunos trabajadores rurales y comenzaban a manifestarse los reclamos de los pueblos indios.

A nuestro entender, la “novedad” de la protesta reside, en primer lugar, en la aparición o el fortalecimiento de las organizaciones que nuclean a pequeños y medianos agricultores, campesinos, trabajadores rurales, pueblos indios. Es decir, se trata de sectores subalternos muy castigados por las políticas neoliberales. En segundo lugar aparece tal repertorio de acciones que permite reservar la “marcha” o “el

paro agrario” para ocasiones excepcionales y ubicar en el espacio público acciones periódicas tales como “paros de remates de tierras endeudadas”, “cortes de ruta”, “toma de explotaciones”, “toma de tierras”, etcétera.

La protesta social agraria en Argentina se intensificó dentro de la “protesta social nacional” que adquiría una magnitud inesperada, en los últimos años del gobierno del presidente Menem. En 1989, al comienzo de su gobierno, el número de “expresiones de conflictos” (medido por dos métodos diferentes) no sobrepasó los 200 por año pero, a partir de 1997, según las mismas fuentes, trepó a las casi 600 expresiones de conflictos por año. La intensidad y regularidad de los conflictos permiten caracterizarlos como “un ciclo de protesta”, en el que, aún hoy, el país está inmerso. Durante este período aparecieron la “Carpa Blanca” de los docentes, los “escraches” a violadores de los derechos humanos, los cortes de las rutas estratégicas en el nivel de la comunicación nacional donde desocupados agrarios y pequeños poblados urbanos se convirtieron en “fogoneros y piqueteros” (véase Giarracca y Gras, 2001), los “apagones” y muchas nuevas formas de acción.

En tal escenario de protesta, las acciones de los agricultores familiares, los conflictos de poblaciones indígenas para recuperar sus tie-

rras, las nuevas articulaciones de los pobres del campo con los de los centros urbanos (en una marcha de 1998), las acciones de las “chacareras” endeudadas que decidieron no perder sus tierras, de los campesinos que resistían desalojos de viejos y nuevos terratenientes, las “caravanas” de los pueblos indios, cobraron un sentido que los diferenciaba claramente de las acciones corporativas que cada tanto, aún, llevan las cuatro entidades corporativas pivoteadas por la Sociedad Rural Argentina.

En 1998, durante una marcha a la Plaza de Mayo que se llevó a cabo unos pocos días después de inaugurarse la tradicional exposición de la Sociedad Rural Argentina en el centro de la ciudad, se acuñó la consigna “el otro campo”. En su discurso inaugural el presidente de la SRA había sostenido “*este es el campo*”.

Los datos sobre protestas registrados durante los tres últimos años del siglo XX por una investigación que llevamos a cabo en la Universidad de Buenos Aires, dan cuenta de dos tipos de fenómenos: acciones de sujetos del sector agrario (productores, trabajadores, etcétera) y, en segundo lugar, acciones en zonas de baja urbanización afectadas por las crisis del sector primario, llevadas a cabo por sujetos no necesariamente agrarios (desocupados de ingenios, docentes, etcétera).

Cuadro N° 1

Tipos de sujetos participantes en la protesta agrorural 1997-1999 (%)

Sujetos sociales / año	1997	1998	1999	Total
Productores agrarios	30.8	40.9	51.7	42.5
Trabajadores Rurales	6.3	0.9	1.3	2.5
Trabajadores Agroindustriales	11.9	6.5	10.6	9.5
Aborígenes	8.0	8.8	7.6	7.4
Desocupados	21.4	19.1	5.9	14.6
Otros	21.6	23.8	22.1	24.5
Total	100.0 (159)	100.0 (215)	100.0 (236)	100.0 (610)

Fuente: Banco de datos del Grupo de Estudios Rurales, UBA.

Es interesante observar que el sujeto más importante de las protestas fueron los “productores agrarios”, lo cual marca claramente la crisis sin solución institucional del sector. Luego tienen peso los “desocupados” y en tercer lugar aparecen los reclamos de los trabajadores (aunque sumáramos rurales y agroindustriales).

Cuadro N° 2

Formas de acción de las protestas agrorurales, 1997-1999 (%)

Formas de acción	1997	1998	1999	Total
Movilizaciones	15,3	16,6	17,2	16,5
Cortes de ruta	33,3	7,6	22,3	19,9
Ocupaciones	3,3	9,0	10,3	8,1
Asambleas, plenarios, reuniones abiertas	19,3	35,5	12,2	23,1
Petitorios e intimidaciones	18,0	16,1	19,7	21,2
Otros (repudios, acciones judiciales, desobediencia civil, etcétera)	10,8	15,2	16,3	11,2
Total	100,0 (161)	100,0 (215)	100,0 (194)	100,0 (569)

Fuente: Banco de datos del Grupo de Estudios Rurales, UBA.

Como vemos en el Cuadro N° 2, las “movilizaciones” y los “cortes de Rutas” fueron las formas más frecuentes de protestar. En 1997 los cortes de ruta se impusieron como forma de acción, es el año de Cutral-Co y de la muerte de Teresa Rodríguez. Sin duda, estamos frente a un nuevo tipo de protesta (en el escenario de la protesta social nacional) que incluye demandas sectoriales de campesinos, “chacareros”, pueblos indios, trabajadores

desocupados junto a otras dirigidas a obtener mayor autonomía, mayores inserciones como ciudadanos en la vida política y, la más importante, el derecho a la existencia como actores económicos y sociales diferentes a la supuesta “producción a gran escala” que repite el discurso oficial como “única salida”. En todos ellos aparece un fuerte discurso acerca de una “identidad amenazada” que viene de orígenes étnicos (a veces en discusión, véase Domínguez y Mariotti, 2000), del género —“las mujeres chacareras”—, o de ser parte de la descendencia de aquellos que poblaron unas tierras vacías en los comienzos del siglo XX y crearon pueblos y mundos sociales.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

En este trabajo, me propuse reflexionar acerca de las acciones colectivas en los mundos agrarios y rurales de América Latina. Propuse pensar esta nueva etapa, difícil y compleja, para las poblaciones rurales desde las conceptualizaciones de una Sociología de los movimientos sociales que recupere al sujeto su capacidad agencial, pero también que recupere al investigador como “intérprete” de significados y sentidos de los actores y sus producciones.

Para iluminar en términos comparativos la nueva propuesta teórico-metodológica, dediqué algún espacio a recordar los paradigmas vigentes hasta fines de los setenta que abordaron los movimientos campesinos desde la centralidad del capitalismo y los modos para lograr transformaciones revolucionarias. El referente clásico fue “la clase obrera” y, a partir de allí, se trabajaba acerca de la baja “clasicidad” de los sectores campesinos.

En las nuevas ontologías sociales post-estructuralistas que reabrieron la discusión de “la acción social”, los denominados estudios de Movimientos Sociales (MS) tuvo un papel central. La perspectiva de los MS permite considerar los procesos de institucionalización y de cambios de los órdenes sociales. Melucci sostiene que tanto las “acciones colectivas” como los “movimientos sociales” son niveles analíticos de la acción y no entidades empíricas, (y esto es importante remarcarlo). Por su parte, Buechler y Kurt Cylke (1997) sostienen que muchas corrientes sociológicas están de acuerdo en que la sociedad es una creación social de la gente que luego, con frecuencia, olvida esta acción y “naturaliza” tales construcciones, las da por dadas. En el fondo de todo “orden social” hay un momento de ruptura, de des-orden producido por acciones disruptoras,

que tradicionalmente se han conceptualizado como “movimientos sociales”, “acciones colectivas”, o en ocasiones como “revoluciones” y las “contrarrevoluciones” o “contrarreformas”. Estamos en un nivel donde lo que está en juego es el sistema institucionalizado y las condiciones de posibilidad para modificarlo; la acción “en los límites de compatibilidad del sistema” como suele sostener Melucci.

Los movimientos sociales, sus actores, sus organizaciones son constructos sociales de difícil y compleja creación. El principal interrogante de las Ciencias Sociales en relación con ellos, gira acerca de las condiciones de posibilidad positiva para que tal cosa ocurra. No se trata de “conocer” a los “movimientos u organizaciones” (como si fuesen entidades empíricas), sino de analizar hasta qué punto ellos logran formarse como tales. Y en esta tarea es imprescindible orientarse a las dislocaciones de aquellas identidades sociales que aparecían como plenas, que no es otra cosa que el momento de expansión de la conflictualidad social. El momento en que las dislocaciones ponen en acto el carácter contingente de aquello que se nos presentaba como pleno, necesario y hasta cierto punto determinante. De allí además, la importancia que adquieren las nuevas acciones de protesta en escenarios políticos como el de Argentina.

Las acciones colectivas o movimientos sociales pueden derivar en nuevas institucionalizaciones que contengan nuevos derechos, nuevos espacios democratizadores. No obstante los cambios institucionales también pueden provenir de los sectores más poderosos y orientarse a anular “derechos sociales” anteriormente conquistados como muy bien lo han demostrado varios gobiernos de corte “neoliberal” en los últimos años.

En estos escenarios de fuertes cambios institucionales que desatan conflictos entre los sectores económicos concentrados, es necesario diferenciar “acciones colectivas”, con intenciones democratizadoras, de las “acciones corporativas”, tendientes a defender privilegios e intereses económicos.

En el Sur de América Latina, sobre todo en la Argentina, después de un período en el cual el discurso de “la única salida” había logrado convertirse en hegemónico (“sentido común”), se abrió un período de grandes protestas y de nuevas e importantes acciones del movimiento social por los derechos humanos. En relación con la protesta nacional, los análisis dan cuenta de la diversidad de actores, de formas de acción, de demandas, de niveles de organización (véase Schuster, 1999; Scribano, 1999; Iñigo Carreras, 1997).

En la protesta social agraria traté de diferenciar los eventos iniciados por las viejas alianzas, con demandas de tipo corporativas, de “la nueva protesta” (véase Alonso et al., 1999; GER, 1999). Nuevos actores (mujeres en un mundo rural fuertemente patriarcal, “pueblos indios” en un país de fuerte ascendencia europea; por ej.); nuevos repertorios de acciones; nuevas demandas y los intentos de construcción de redes horizontales entre ellos y con los movimientos campesinos de América Latina, nos habilita a sostener que estamos en presencia de un nuevo tipo de protesta social.

Esta “novedad” del mundo social agrario argentino difiere de la situación uruguaya. Si bien allá los sectores subalternos están arrinconados por el discurso neoliberal y tienen problemas graves, la protesta de 1999 estuvo hegemonizada por los sectores más fuertes. Más que derechos reclaman privilegios, como ocurre también con la SRA en Argentina. En la protesta uruguaya se manifestó “un solo campo” y en Argentina se construyó un espacio de conflictos para “otro campo”. Esa “otra situación” argentina es una condición de posibilidad positiva para la formación de un movimiento social. Y, por ahora, esta es una importante diferencia con Uruguay.

BIBLIOGRAFÍA

- Alavi, H. 1976 *Las clases campesinas y las lealtades primordiales* (México DF: Anagrama).
- Brass, T. 1991 "Moral Economists, subalterns, new social movements, and the (re-) emergence of a (post-) modernised (middle) peasant" en *Journal of Peasant Studies* (Londres) V. 18, N° 2.
- Buechler, S. y Cylke Jr., F. K. 1997 *Social movements: perspectives and issues* (Houston: Mayfield Publishing Company).
- Calderón, F. 1986 *Los movimientos sociales ante la crisis* (México DF: UNU).
- Carrera, N. I. y Cotarelo, M. C. 1997 "Las formas que toma la lucha social en la Argentina actual" en *Cuadernos del Sur* (Buenos Aires).
- Carrera, N. I. y Cotarelo, M. C. s/f "Relaciones de fuerzas en la Argentina actual. (De los 60 a los 90)", ponencia.
- De Janvry, A. et al. 1989 "Land and labour in Latin American Agriculture from 1950 to 1980" en *Journal of Peasant Studies*, V. 16, N° 3.
- Domínguez, D. y Mariotti, D. 2000 "Nuevas dinámicas de acción en el conflicto por la tierra" en *Revista de Comunicación Popular WAYRURO*, internet.
- Ferrara, F. 1973 *Qué son las ligas agrarias* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Fox, J. 1996 "A política e as novas formas de organização camponesa na América Latina" en Navarro, Z. (coord.) *Política, protesto e cidadania no campo* (Porto Alegre: Editora da Universidade, UFRGS).
- Giarracca, N. y Gras, C. 2001 "Conflictos y protestas en Argentina de finales del siglo XX con especial referencia a los escenarios regionales y rurales" en Giarracca, N. (comp.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1997 "El movimiento de mujeres agropecuarias en lucha: las mujeres en la protesta rural en la Argentina" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 150.
- Giarracca, N.; Teubal, M. y Domínguez, D. 2001 "El Foro Social Mundial: un paso más para "otro mundo posible" en Giarracca, N. (comp.) *La protesta social en la Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Giddens, A. 1995 *La constitución de la sociedad* (Buenos Aires: Amorrortu).

- Golsberg, C. 1999 "El movimiento agrario de misiones en un escenario en transformación", tesis de grado (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía).
- Grossi, M. 1989 "El cuestionamiento de la política partidaria: los movimientos de base en el Brasil" en *Crítica & Utopía, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales* (Buenos Aires).
- Hobsbawm, E. 1976 *Los campesinos y la política* (México DF: Anagrama).
- Laclau, E. 1993 *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Melucci, A. 1980 "The new social movements: a theoretical approach" en *Social Science Information*, N° 192.
- Melucci, A. 1989 *Sistema politico, partiti e movimenti sociali* (Milán: Feltrinelli).
- Piñeiro, D. 1985 *Formas de resistencia de la agricultura familiar* (Montevideo: CIESU).
- Piñeiro, D. 1998 "Cambios y permanencias en el agro uruguayo" en Giarracca, N. y Cloquell, S. (comps.) *Agriculturas del Mercosur: el papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena).
- Piñeiro, D. 1999 "Las organizaciones de trabajadores y empresarios y los vaivenes del Mercosur", ponencia presentada al IX Congreso Brasileño de Sociología (Porto Alegre: UFRGS).
- Schuster, F. 1996 "Protestas sociales en la Argentina: 1989-1996" en *Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina* (Buenos Aires: CELS).
- Schuster, F. 1998 *Social protest in contemporary Argentina: Is there anything new?* (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires) copia fotostática.
- Scribano, A. 1999 "Argentina cortada: cortes de ruta y visibilidad, el contexto del ajuste" en López Maya, M. (ed.) *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Scribano, A. s/f *Los otros, nosotros, y ellos: hacia una caracterización de las prácticas políticas en contextos de exclusión* (s/d) copia fotostática.
- Shanin, T. 1966 *Peasants and Peasants Societies* (Londres: Penguin Books).
- Slater, D. 1985 "Social Movements and a recasting of political" en Slater, D. (ed.) *New Social Movements and the State in Latin American* (Ámsterdam: CEDLA).

- Tarrow, S. 1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Buenos Aires: Alianza Universidad).
- Touraine, A. 1988 *La parole et le sang* (París: Odile Jacob).

EL “MOVIMIENTO DE MUJERES AGROPECUARIAS EN LUCHA”

PROTESTA AGRARIA Y GÉNERO DURANTE EL ÚLTIMO LUSTRO EN ARGENTINA*

*“...Nadie pudo ver nunca la incesante morada
donde todo repite nuestros nombres más allá de
la tierra.*

*Mas nosotros sabemos que ella existe, como
nosotros mismos.*

*Por el deseo de volver a vivir, entre el afán del
polvo
y la tristeza de aquello que quisimos...”.*

OLGA OROZCO (POETA PAMPEANA), *LA CASA*

INTRODUCCIÓN

En el último Censo Nacional Agropecuario de 1988, el 11% de las explotaciones figuran enca-

bezadas por mujeres que son “jefe de explotación”. Pero esta proporción aumenta cuando consideramos a las “mujeres ocupadas en las tareas agropecuarias” (17,34% de la PEA rural), y más aún cuando solo se toma la categoría “trabajadores familiares del productor”, donde la proporción de mujeres llega casi al tercio (Biaggi, 1998).

Los trabajos históricos muestran a las mujeres criollas o indias, anteriores a la expansión capitalista y a la colonización europea, como activas compañeras de los gauchos trashumantes: “...como una integrante permanente del grupo [...] y no como una simple y ocasional visitante...” (Vedoya, 1975). Esta situación se modifica con la expansión de la agricultura a partir de la segunda mitad del siglo XIX, momento que coincide con el comienzo de la colonización europea. A partir de entonces, el discurso “agrarista”, orientado a los colonos, se centró en la necesidad de la extensión técnica

* Giarracca, N. 2001 “El ‘Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha’: protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina” en Giarracca, N. (coord.) *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires: CLACSO-ASDI).

(extraída de los países europeos) y en ciertos valores de austeridad y laboriosidad familiar dentro del hogar, especialmente dedicado a las mujeres (Diodati y Fernández, 1998).

Durante este siglo las mujeres del campo ocuparon espacios sociales anteriormente dedicados solo a los hombres, sobre todo en las cooperativas y, a partir de 1980, en programas gubernamentales dedicados a estimular su participación. Lograron también algunos cargos en sindicatos de trabajadores rurales donde la proporción de mujeres era significativa, como el de embalaje y empaquetado de frutas de la región Sur del país (Bendini y Bonaccorsi, 1998). Pero el espacio gremial de los agricultores estuvo, hasta 1995, reservado para los hombres, y en esto no hubo ninguna excepción: desde la Sociedad Rural Argentina (representación gremial de los grandes terratenientes pampeanos) hasta las radicalizadas Ligas Agrarias, que agruparon a campesinos y colonos del Norte durante los años setenta.

En este trabajo reflexionamos acerca de un movimiento agrario iniciado y constituido por mujeres, esposas de pequeños y medianos agricultores o bien ellas mismas agricultoras. Este movimiento se denomina Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML), y surgió en 1995 de la acción espontánea de un

sector de colonos de una región vecina pero marginal en cuanto a la productividad de la rica Región Pampeana, productora de cereales y ganado vacuno.

Es importante señalar que la organización surge en un mundo rural “pampeano” tradicionalmente masculino: irrumpen con modos de acción novedosos y transgresores, como por ejemplo impedir una acción judicial. Lo hacen con un discurso que se radicaliza, y que marca discontinuidades con las acciones de protesta social agrarias previas, y establece nuevas alianzas desde un inicio al incluirse en el movimiento social de las mujeres. Estas características habilitan para pensarlo no solo como “un enfrentamiento” coyuntural, sino como “acciones colectivas” (que podrían derivar en un movimiento social o ser parte de él), las cuales se conectarían tanto al mundo rural como al movimiento social de las mujeres de los noventa.

En sus estudios acerca de las acciones de protesta, Charles Tilly (1986) caracteriza al “enfrentamiento” como una acción colectiva discontinua a favor de los propios intereses. En el caso de MML hay un intento de generar un nuevo sujeto social, de producir nuevos sentidos que dan cuenta de un conflicto que, más allá del reclamo puntual —parar los remates de los campos—, muestra un problema cultu-

ral del país de hoy: la posibilidad o imposibilidad de seguir viviendo en el campo o en las zonas rurales como lo hicieron los padres o los abuelos de las protagonistas. Dicho en otras palabras, el conflicto enuncia la tensión entre la posibilidad de persistencia o la desaparición de la “explotación agraria familiar capitalizada”, con todas las consecuencias culturales que esta aporía implica.

Estos rasgos alientan a pensar el MML en el marco analítico que ofrecen los estudios de los “nuevos movimientos sociales”. Sin embargo, hemos optado por no establecer denominaciones que indiquen puntos de partida, y por tratar de lograr la reconstrucción y el sentido de las acciones mismas que emprendieron estas mujeres partiendo del concepto más general de “acciones colectivas”. Como sostiene Melucci (1992), tenemos que precavernos de caer en la concepción frecuente de un sentido común que observa una unidad precisamente allí donde ella debe ser investigada. El problema es cómo este “nosotras” que aparece en los relatos se convirtió en “nosotras”, cómo y por qué un agregado social llegó a la definición de sí mismo como un colectivo capaz de actuar como grupo.

En los últimos años del siglo XX, después de un tiempo en el que las acciones del MML se li-

mitaban a parar los remates judiciales de otros agricultores endeudados, su visibilidad pública volvió a aumentar considerablemente con marchas, apariciones en los medios, etcétera.

A nuestro entender, esta mayor visibilidad del MML desde fines de 1998 se relaciona con dos situaciones: a. un aumento de la protesta social general del país que se repite en los años de elecciones nacionales importantes; b. un aspecto intrínseco al MML que tiene que ver con su expansión tanto territorial como en el nivel del fortalecimiento de la organización.

En efecto, después del período de emergencia, que fue de alta visibilidad pública, siguieron otros tiempos donde se reforzaron las solidaridades y se crearon nuevos códigos que permitieron desarrollar prácticas comunes. En ese otro momento —de latencia, como otro polo de la misma acción (Melucci, 1984)— se buscó armar las redes que sostendrían ese primer “mensaje” lanzado en el momento fundacional.

En los comienzos del 2000, a un poco más de cuatro años de sus primeras apariciones, no solo cuentan con la personería jurídica que las habilita como organización gremial, con una amplia expansión en el nivel territorial y una metodología de acción (códigos) que las identifica en todo el país, sino que son reconocidas como un actor de peso en el gremialismo agr-

rio nacional, que siempre se caracterizó por estar conformado por hombres.

En el análisis de la organización recurrimos a las dirigentes y participantes del movimiento como sujetos sociales, con prácticas, conocimientos, calificaciones, deseos y motivaciones que las habilitan a traspasar los límites marcados por las restricciones, y situarse con sus demandas y métodos de acción en el escenario de la protesta nacional, y por lo tanto en el espacio de la política. En tal sentido nos centraremos en las capacidades agenciales (en el sentido de Giddens, 1984) que habilitan al MML a intervenir como “actor” en un curso de acontecimientos o en un estado de cosas. Este presupuesto teórico que enuncia la relación entre la capacidad agencial y el poder precede a cualquier ubicación socioeconómica que formulemos para comprender al movimiento.

El proceso de expansión territorial y el fortalecimiento del movimiento no son dos procesos que se dan de modos necesariamente correlativos. Desde los comienzos mismos del MML aparecieron colonos en situaciones parecidas a las de las “pioneras”, quienes empezaron a comunicarse telefónicamente con ellas dispuestos a iniciar el mismo tipo de acciones. La expansión territorial siguió el impulso espontáneo de los primeros momentos, y no for-

taleció necesariamente al MML como “actor”. Sin embargo, este primer paso de “expansión” facilitó un proceso de identificación, una integración simbólica de estos colonos (o mejor dicho de estas mujeres), cuyas voces no habían sido recogidas por los otros actores gremiales. Este fue un primer e importante paso.

Cuando pensamos en el concepto “fortalecimiento” (*empowerment* en la conceptualización anglosajona), aparece en primer lugar el interrogante de Tarrow (1997) en su fundamental análisis sobre el tema: ¿cuáles son las circunstancias en las que surge el poder de los movimientos? Tarrow se orienta hacia las “oportunidades políticas” que organizan nuevas oleadas y dan formas a sus despliegues. Cuestiones como las tradiciones políticas, la tolerancia de las elites, los niveles de apertura y cierre de posibilidades políticas, el proceso de democratización en Argentina, etcétera, tienen una importancia fundamental para dar cuenta del poder en las organizaciones. Sin dejar de tomarlos en consideración, rescatamos otros aspectos relacionados con el fortalecimiento de las propias acciones de las primeras participantes.

El “poder” es un atributo de toda relación social, un proceso por el cual, en nuestro caso, las pioneras se percibieron como capaces de ocu-

par espacios públicos, y sobre todo de ocupar aquellos lugares donde se toman las decisiones que hacen a sus problemáticas económicas, sociales y culturales. Ellas se fueron fortaleciendo a medida que desplegaban acciones que las convertían en “más capaces y cognoscentes”.

Desde esta concepción del “poder”, y tomando las ideas de Pettersen y Solbakken (1998), “fortalecimiento” significa un proceso en el cual personas, organizaciones o grupos:

- adquieren conocimientos de dinámicas de poder trabajando en sus diferentes contextos de vida;
- desarrollan habilidades y capacidades para ganar un razonable control sobre sus vidas;
- ejercen ese control sin infringir los derechos de los otros;
- apoyan el fortalecimiento de otros en la comunidad.

En tal sentido, “poder” y “fortalecimiento” están fuertemente relacionados con el “conocimiento” en sentido amplio, que incluye tanto los conocimientos prácticos como los técnicos, pero también los “autoconocimientos” y aquellos otros que habilitan para tomar decisiones y optar. Aquellos que según Giddens (1991) dan sostén a las opciones de vida (políticas de vida).

En un primer momento desarrollaremos las demandas originales del MML, y luego nos dedicaremos a la extensión y al fortalecimiento del movimiento, marcando en especial las formaciones de redes sociales y las situaciones de encuentros.

LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO

Casi un año después de la Marcha Federal de 1994 (en la que participaron todas las provincias dirigiéndose a la ciudad capital), y con un gobierno nacional recién reelecto (Menem fue reelecto el 15 de mayo de 1995), los periódicos de la provincia de La Pampa alertaban acerca del riesgo que corrían los establecimientos agropecuarios cuyas deudas seguían un trámite que derivaría en la acción judicial. Los dirigentes agropecuarios locales transmitían muy poco optimismo acerca de las posibles negociaciones: no habían tenido éxito en los tiempos de campaña política preelectoral, menos aún —argumentaban— lo conseguirían después del triunfo político alcanzado por el presidente Menem (50% de los votos). El remate de las explotaciones agropecuarias se convertía en una amenaza real para los campos hipotecados.

La zona elegida para comenzar los remates fue Winifreda, una localidad situada a 45 kilómetros de Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa. Es una localidad fundada sobre los campos de un británico que murió en 1924, y cuyos herederos —dentro de los cuales estaba su hija Winifreda— arrendaron y vendieron a colonos alemanes, franceses, rusos, españoles e italianos. La zona no está dentro de la rica pampa húmeda, y la lluvia, por falta o demasía, siempre fue un problema. El Ferrocarril Oeste los conectaba con el puerto de Buenos Aires, y en muchos casos con la posibilidad de que el migrante recuperara a una familia que había quedado en Europa.

En el momento en que se inicia el MML, Winifreda tenía una característica inusual en estos pueblos rurales de Argentina: el gobierno y la justicia estaban en manos de dos jóvenes mujeres, que habían sido electas como Intendente (alcalde local) y Juez de Paz (encargada de legalizar nacimientos, casamientos, defunciones, etcétera).

El primer intento de remate se llevó a cabo precisamente en Winifreda, en una explotación propiedad de un matrimonio descendiente de franceses él, y de españoles y sirios ella. La explotación fue heredada del padre francés a fines de los setenta, y sostenida y expandida con mucho sacrificio por la familia Cornelis.

Lucy de Cornelis no se cansa de decir que se endeudaron porque le creyeron al ex-presidente Menem cuando prometía que aquellos que incorporaran tecnología y aumentarían la producción recibirían todo el apoyo del gobierno. No fue así. Las variables manejadas por el Ministerio de Economía —a pesar de incorporar tecnologías— los dejaron fuera de los márgenes de ganancia e inversión.

Se dio comienzo a los remates, pero los tasadores del Banco de la Provincia de La Pampa no se imaginaban que en la explotación de los Cornelis sería la esposa del propietario, Lucy, la que no aceptaría la práctica judicial y se lanzaría a una acción llevada por la desesperación, que terminaría convocando a muchas otras mujeres y poniéndolos en apuros. En efecto, cuando el martillero empezó su tarea, Lucy salió de su casa y acudió a los medios. En la FM local (radio) contó lo que estaba ocurriendo, y muchas otras familias, que estaban o no en la misma situación que los Cornelis, acudieron al llamado e impidieron el remate.

El esposo de Lucy había tenido actuación política en el Partido Radical. Sin embargo, la reacción no salió de él porque, como dice ella, es de la clase de hombres que piensa que una deuda siempre se debe pagar. La que salió fue Lucy, y según ella no fue una acción premedi-

tada: cuando los tasadores iniciaron su trabajo, fue presa de un ataque de furia tal que decidió salir de la casa y dirigirse a la radio local. Había un clima que predisponía a creer que la apelación tendría resultados. Era el primero de una larga lista de remates en carpeta, pero fue el primer llamado en una población que a esas horas estaba en pleno trabajo agrícola y de la que no se conocían reacciones conflictivas.

Es importante el reconocimiento y movilización de los recursos que utilizó Lucy: la radio, apelar a sus pares, poner la situación en un límite tal que apareciera la posibilidad de la “acción social” como eficaz.

Lo que querríamos remarcar en estos orígenes es que no hubo en esta protagonista una lógica de “medio-fines”, una “acción racional” que le llevara a medir medios y fines. El propósito de la acción fue generado por ella misma, y en el sentido que ella y los otros fueron atribuyendo a estas acciones aparecen los limitantes institucionales (la acción jurídica que se puede posponer pero no anular), las condiciones macro-económicas donde operan las fincas, y aparece también —y esto es lo importante de señalar— la capacidad de invención de Lucy como sujeto, su capacidad de iniciar una acción que derivaría en una situación inexistente en el momento previo.

No había nada que predijera que estas acciones sucederían (aun cuando a posteriori algunos quieren creer “que estaba todo armado”). Podrían no haber sucedido. Esta acción inicial fue una contingencia. Estas creaciones de propósitos de una acción colectiva suponen no solo esquemas de conocimientos, reconocimientos y movilización de los recursos con los que se cuenta, sino también densas interacciones e intercambios emocionales y afectivos (Melucci, 1992: 224).

Joaquina Moreno, una viuda sin hijos de 65 años que es otra de las dirigentes del MML, organiza y gestiona su campo con una prolijidad financiera sorprendente. Sabe que las deudas solo sirvieron para comenzar un movimiento cuyos propósitos están construyendo entre todas.

...Mi papá vino de España en 1908 cuando tenía 13 años, lo mandaron solo para acá, empezó de peonito [...] logró arrendar un campo un poco antes de que yo naciera, 100 hectáreas, en una gran explotación de 400 mil hectáreas. [...] Con el cambio del '45 [se refiere al advenimiento del peronismo en 1945] se les obligó a los propietarios a reconocer algunos derechos a los arrendatarios. Se les dio a los arrendatarios la posibilidad de comprar [...] mi padre compró 150 ha. Yo heredé ese campo [...] me casé con un periodista mendocino, era un “tipo” que podía estar en el campo sin salir [...]

como yo, nos gustaba esta vida, no nos importaba nada del mundo, mi marido falleció hace 6 años. [...] Nos fue bien, desde chiquita fui progresando despacito con mi trabajo, por supuesto con las debidas limitaciones y fui progresando casualmente hasta 1989. De entonces para acá me voy para atrás rápidamente...

A comienzos de junio de 1995 se realizó la primera asamblea. El diario provincial *La Arena* afirma: "...Con la sencillez de quien solo sabe de trabajo, con palabras simples, y en algunos casos hasta con lágrimas en los ojos, las mujeres agropecuarias autoconvocadas en asamblea, ayer en Winifreda, expusieron sin tapujos la difícil realidad del campo pampeano..." (*La Arena*, 4-6-1995). En estos primeros momentos, el movimiento contó con las simpatías de la prensa y de la población en general. Incluso, el gobernador de la provincia de La Pampa, cuando días después le acercaron el petitorio, se mostró comprensivo y prometió "revisar caso por caso" los endeudamientos.

Ellas se sintieron complacidas de tales respuestas, creyeron que las soluciones llegarían pronto. Así recuerda Joaquina Moreno la asamblea y la entrevista con el gobernador:

...La asamblea era grande esa vez. En Winifreda había como 300 personas por lo menos y la Comi-

sión se hizo en base a un productor por cada pueblo, de Trenel (su pueblo) estaba yo sola. Todas hablamos, cada "chica" fue exponiendo su problema, todas estaban por las deudas. Estaban un poquito "crudas" (se refiere a poco entrenadas en la acción gremial) y entonces yo expuse el problema de todos, porque la deuda no viene porque sí, la deuda era una consecuencia ¿eh? el origen de la deuda era la falta de políticas agropecuarias adecuadas. A la gente le gustó [...] no era una cosa del otro mundo, era lo que todo el mundo sabe, siente por su situación. Y entonces dijimos, qué hacemos, vamos a ver al gobernador, vamos a ver a "fulano" y ahí empezó todo. [...] Y bueno, fuimos, tuvimos una entrevista con el gobernador. El movimiento estaba recién iniciado [...] o sea en esa primera asamblea se originó la idea de elaborar un petitorio para llevárselo al gobernador y fuimos 10 señoras. Y estaba el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, quien "se metió" conmigo (inició un diálogo descortés con ella); yo daba ejemplos de la desvalorización de los novillos y me quiso hacer callar porque creía que yo no sabía nada, pero se metió mal porque yo tenía datos precisos. Bueno el gobernador nos atendió bien, lo invitamos a ponerse al frente de nuestros reclamos, así que ahora no diga que vamos en contra de él. Bueno no quiso, se "jodió" (él perdió la oportunidad de comprender). Siempre dicen "La Pampa está linda", La Pampa está linda en apariencia. En La Pampa hay medio millar de vacas menos que hace 6 o 7 años....

Tanto del relato de las protagonistas como del registro periodístico de la época de esos primeros momentos, se puede inferir la importancia de la primera acción de Lucy de Cornelis (convocar a sus pares para parar los remates): de ella surgía un movimiento con reivindicaciones, de tipo económico, claras y sencillas. Se proponían el apoyo de las autoridades provinciales para lograr que se pararan las amenazas de remates. Confiaban en que podrían dar cuenta de sus razones, en que sus reclamos serían lógicamente escuchados y sus problemas solucionados. Todavía no pensaban en un enfrentamiento con las autoridades políticas. El movimiento hubiese podido tener una vida coyuntural, y ser meramente reivindicativo.

EL DESARROLLO Y LA RADICALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO

"...Las mujeres agropecuarias se sienten defraudadas por el gobernador..."

"...Estamos verdaderamente dolidas...", dice Rosita de Garat."

Estos titulares del principal diario pampeano preanunciaban el final de las buenas relaciones

entre las mujeres agropecuarias y las autoridades provinciales. Solo unos días después de la entrevista con el gobernador y de escuchar las promesas acerca de la reconsideración de los remates, el Banco de La Pampa (banco oficial de la provincia) remató la maquinaria de dos productores en sociedad, quienes estaban endeudados. La presencia de las mujeres, el pedido de Rosita Garat, y la asistencia de los medios de comunicación, no bastaron para que se impidiera la subasta de una maquinaria perteneciente a estos dos chacareros prendada por el banco.

Rosita Garat, que asistió al remate, se expresó así:

...Buenos días. Con todo respeto me quiero dirigir a ustedes para decir que integro la comisión de esposas agropecuarias y solamente nuestra presencia acá está diciendo mucho, porque el martes estuvimos con el señor gobernador y nos dijo que el Banco de La Pampa no remataba. Bueno, esto es un remate, nos sentimos un poco tristes y defraudadas... (La Arena, 18-6-1995)

El fracaso en las negociaciones y la falta de cumplimiento de la palabra empeñada por el gobernador Marín tuvieron un efecto detonador en la expansión geográfica de las acciones

de las mujeres, así como en un cambio de actitud en las dirigentes pioneras.

Es posible que el gobernador de La Pampa haya prometido soluciones sin intenciones serias de buscarlas en modo inmediato (así, por lo menos, se muestra en los resultados). A nuestro juicio, Marín subestimó la capacidad de acción de estas “chacareras”. Sabía que las soluciones negociadas, donde cada parte cede algo, no eran frecuentes en la gestión del gobierno de Menem al cual él pertenecía, y sin embargo les prometió soluciones inmediatas. “...Bueno el gobernador nos atendió bien, lo invitamos a ponerse al frente de nuestros reclamos, así que ahora no diga que vamos en contra de él. Bueno no quiso, se jodió...”, nos dijo con una lógica muy alejada de la política partidaria Joaquina Moreno.

En la segunda mitad de 1995 el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha crecería en una forma inesperada por las pioneras: se realizan reuniones de mujeres en el oeste de La Pampa, y se conectan mujeres de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Neuquén y Río Negro.

El 21 de septiembre se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional: “Quinientas personas y ningún funcionario”, tituló la prensa el artículo acerca de la asamblea. Las dirigentes,

consecuentes con un estilo cívico que indica respeto a las autoridades democráticas, habían cursado invitaciones a todos, incluidos el presidente Menem, el secretario nacional de Agricultura, las autoridades provinciales, et-cétera. Querían soluciones consensuadas, no buscaban enfrentamientos.

Dijo Lucy de Cornelis en esa oportunidad:

...cuando en mayo mi desesperación llegó al límite máximo porque golpeé todas las puertas y nadie me escuchó. Por eso dispuse convocar a las mujeres y encontré una respuesta inesperada. Sentía impotencia porque factores externos nos estaban arrebatando nuestras cosas. Por eso decidimos luchar juntas y hacernos fuertes...

...No somos mujeres ricas, con autos importados ni mansiones lujosas, sino que venimos de familias que andaban en sulky o a caballo por los campos, abriendo surcos, cosechando a mano y hasta pariendo en el monte... (*La Arena*, 22-9-1995)

En esta Asamblea elaboraron y presentaron a las autoridades un petitorio con 15 demandas y apelaron a las autoridades políticas y a la sociedad civil. El texto decía:

...la Asamblea Nacional de Mujeres Agropecuarias en Lucha, con participación de mujeres representantes del comercio, la industria y otros

movimientos de todo el país, reunidas en Santa Rosa, La Pampa, el día 21 de septiembre de 1995 elaboramos el siguiente petitorio para ser elevado al excelentísimo Sr. Presidente de la Nación, gobernadores, senadores, diputados nacionales y provinciales y a los representantes del poder judicial... (*La Arena*, 22-9-1995)

De esta Asamblea salió el *Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha*. Se fueron conociendo, fueron reconociendo los recursos con los que contaban y generando una sociabilidad que fue importante en la continuidad del mismo. Las rionegrinas, por ejemplo, lograron que asistieran intendentes de las regiones agrarias que provenían de la lucha agraria gremial. Comenzaron a recibir adhesiones de la Federación Agraria, que aún estaba presidida por un viejo partícipe de las luchas agrarias, Humberto Volando. También recibieron apoyos de los pequeños comerciantes en situaciones no muy distintas a las suyas, y comenzaron a recibir el aliento de grupos de mujeres de todo el país.

Esta identidad de género las llevaría a elegir como fecha para ganar Buenos Aires los 8 de marzo, día internacional de la mujer. En efecto, tanto en 1996 como en 1997, el MML estuvo ese día ocupando la Plaza de Mayo, con tractores manejados por ellas, con adhesiones de

todas las entidades agropecuarias que agrupan a las pequeñas y medianas explotaciones y, por supuesto, con el apoyo de los movimientos feministas que ese día recuerdan las luchas mundiales de las mujeres. Pero para entonces el MML ya había radicalizado su posición: había logrado suspender con prácticas confrontativas varios remates ("los gritos hacen imposible los remates", comentaba un martillero), y el diálogo con las autoridades era "un diálogo de sordos", como ellas mismas lo caracterizan.

...Si no hay voluntad de pagar van a ser ejecutadas como cualquier deudor...", amenazaba a esas alturas el gobernador Marín, a lo que Lucy contestaba: "...Qué voluntad de pagar vamos a tener si no cosechamos y antes de llevarle plata al banco le tengo que dar de comer y educar a mis hijos..." (*Clarín*, 25-9-1996)

...El remate del campo de un pequeño agricultor, endeudado con un financista, de la localidad Luis Palacios, no se pudo concretar ayer ante la oposición de las 200 personas, que se concentraron frente al juzgado de Paz, convocadas por el MML de Santa Fe... (*Clarín*, 1-11-1996)

Las entidades gremiales insistían en la refinanciación de pasivos, buscaban la negociación tras el impacto que representaba la presencia

en televisión del MML. Mientras tanto, las mujeres se preparaban para suspender los remates, llegar a los medios de prensa y contar al público el diálogo de sordos con las autoridades democráticas.

Y efectivamente, sus voces simples, con la sinceridad y claridad de las mujeres de campo, tuvieron un fuerte impacto en la sociedad nacional. Son invitadas a programas de televisión tanto de tipo político como dedicados a las mujeres y, poco a poco, son identificadas como las dirigentes más combativas del sector agrario.

FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL MML

El proceso de expansión territorial contribuyó al fortalecimiento del movimiento en la medida en que incluyó actividades grupales, encuentros, incorporación de conocimientos, habilidades, elementos identificadores y construcción de redes de solidaridad. Otro nivel posible para abordar la “expansión” y el “fortalecimiento” del MML se relaciona con los contactos entablados con otras organizaciones de colonos, campesinos, pequeños productores endeudados, etcétera, del país o del exterior.

El concepto de “redes” al que nos referimos es amplio en tanto fenómeno cultural, conjunto de significados, normas y expectativas usualmente vinculados con correlatos de conductas de todo tipo (Curran et al., citado por Roggi, 1998). La red está concebida como estructuración, es decir, medio y resultado de la acción de los actores que participan en ella. El acento está en los actores, en la capacidad de vincularse con el medio y generar un conjunto de relaciones que habilite una estrategia de fortalecimiento.

En este apartado nos proponemos analizar y comprender el proceso de construcción del MML desde los conceptos de “expansión” y “fortalecimiento” enunciados en los párrafos anteriores.

Abordaremos tres niveles: 1) las acciones generadas por sujetos individualizados (diez dirigentes, incluidas las que definimos como “pioneras”¹) que se orientan a procesos de fortalecimiento de la organización; 2) la expan-

1 Con el término “pioneras” nos referimos al grupo de no más de diez mujeres que iniciaron el MML sin pensar en un programa racional de “medios-fines”, sino desde una respuesta a una situación vivida como injusta. Entre ellas se encuentran Lucy de Cornelis y Joaquina Moreno, ambas de La Pampa.

sión territorial del movimiento en estos años; 3) la conformación de redes sociales.

EL FORTALECIMIENTO DESDE LOS SUJETOS: LAS DIRIGENTES

Las primeras en organizarse fueron las mujeres de la provincia de La Pampa, desde el liderazgo de su actual presidenta, Lucy de Cornelis (LC). Decíamos antes que ella corría el peligro de perder sus tierras, y fue quien convocó y generó ese acontecimiento. Otra de las “pioneras”, Joaquina Moreno, no estaba endeudada y decidió participar porque consideró que, más allá de su situación personal, las condiciones para los pequeños y medianos agricultores estaban empeorando día a día, y que las organizaciones existentes tenían serias dificultades para reconocer y hacerse cargo de tales problemas. Luego llegan otras mujeres de la provincia de Santa Fe, más cerca de la rica región pampeana, las del Sur del país y, por último, las de las provincias más pobres, del Norte. Lucy cuenta esos primeros momentos con cierto asombro, marcando la precariedad del proceso:

...En la primera asamblea, había una mesa redonda que habíamos puesto y estaba yo sola delante

[...] aparte por la vergüenza, porque antes te ponías roja, de todos los colores. [...] Bueno ahora, dicen las otras mujeres, vamos a hacer una comisión provisoria. Y me eligieron presidenta. El 21 de septiembre (de 1995) cuando vienen las de las provincias dijimos: vamos a discutir. Había mujeres con más capacidad (que yo) y en esa reunión me eligieron presidenta nacional del movimiento. De ahí que se llame “Movimiento Nacional”, las de Santa Fe le ponen “en lucha” y las de Formosa “en pie” pero siempre todas dentro del movimiento....

La actual presidenta del MML reconoce la “capacidad” como un elemento fundamental para ser elegida dirigente, aunque el sentido que le da al recurso “capacidad” está básicamente relacionado con la educación formal. Esta es una creencia social muy difundida entre la población descendiente de los inmigrantes, quienes consideraban que educación formal y capacidad tienen una fuerte relación. Sin embargo, ella fue la elegida como presidenta del movimiento, porque la consideran “capaz” en el sentido de quienes pueden generar, reconocer y movilizar recursos, o de quienes poseen destrezas para iniciar una acción.

...Estábamos todas desesperadas pero ninguno tuvo la idea de salir al aire, convocar a la gente [...] por eso la apreciamos tanto a Lucy y no la

queremos abandonar porque fue la iniciadora y la que hoy mantiene la misma fuerza que en aquel momento... (Miembro del MML de La Pampa).

En las entrevistas a miembros del MML o a otras dirigentes, es frecuente encontrar la frase “ella nos unió/reunió/convocó/llamó para poder”, y las frases siguen: “luchar por nuestras tierras”, “enfrentar a los bancos”, “luchar contra todo esto”, “luchar todos juntos”. Esta “capacidad” de Lucy —este poder como acción—no deriva de su experiencia previa en organizaciones gremiales (pues no la había tenido) ni de su educación formal (no completó su educación media). Deriva, a nuestro juicio, de las habilidades e inversiones emocionales que esta mujer pudo poner en acto frente a una situación vivida como injusta y agravante. Ese momento de decisión —resignificar recursos, convocar a otros chacareros— fue relevante en sí, pero además ella *pudo* sostener la acción, asumió su rol de liderazgo.

En un estudio acerca de los “nuevos movimientos sociales” en América Latina, David Slater (1991) rescata la importancia de un “liderazgo” con el que se pueda garantizar una rudimentaria forma organizacional. Liderazgo, agrega el autor, que debe estar en posición de anunciar un proyecto, una serie de conceptos, imágenes y va-

lores dentro de un discurso, que pueda interpelar efectivamente a los sujetos sociales involucrados en la situación o región. Este anuncio de un proyecto —entendido como imágenes, códigos y valores— es lo que otorgó a la acción de LC la relevancia que resultaría en su liderazgo.

Ese liderazgo está basado, además, en sus propias destrezas para generar relaciones con los otros, capacidad para convocar y para ser autorizada por los otros en el propio acto. La “no aceptación” del discurso institucional (rechazo de las acciones judiciales) politizó su acción y la convirtió en una acción colectiva, donde un conflicto está implicado y donde participan dos actores enfrentados por la apropiación y orientación de valores sociales y recursos de tipo material y simbólico (Melucci, 1980).

Este proceso no necesariamente tuvo que ver solo con los niveles de educación formal alcanzados o con formaciones o capacitaciones previas de las protagonistas. Tuvo que ver con otros aspectos de “las pioneras” como sujetos, que las habilitaron para desplegar sus capacidades agenciales en un campo social dado. Los recursos educativos, las experiencias organizacionales, son elementos de primer orden en los procesos de formación de movimientos, pero también se pueden adquirir si se produce esta predisposición para la acción.

¿Qué sintieron las otras mujeres que escucharon la apelación de Lucy por la radio?

... ¡Ay! Una emoción muy grande porque la verdad estábamos todos desesperados pero ninguno tuvo la idea esa de poder salir al aire, convocar a la gente [...] ella salió, estaba sacando las cosas de su casa porque la iban a rematar, la amenaza del remate y desesperada dejó todo lo que estaba haciendo o sea como decimos nosotras "tíranos el delantal" y se fue a la radio... (Miembro del MML de la región).

Lo que Lucy logró poner en circulación tenía que ver con una situación económica común a un conjunto de agricultores, pero lo que desencadenó las acciones tuvo que ver con la posibilidad de innovar, de crear, de imaginar, de lograr un efecto. Hubo un campo en el cual los propósitos fueron construidos, coproducidos entre estas "pioneras" (tanto quien convocó como las que acudieron al llamado). Como nos recuerda Melucci (1992), este proceso es activo y relacional, generador de "identidades colectivas", e implica la presencia de esquemas de conocimientos, de densas interacciones, de inversiones subjetivas e inter-subjetivas, y de intercambios emocionales y afectivos.

Hemos entrevistado a 10 de las principales dirigentes actuales del MML, y de este material registramos algunos aspectos que permiten un primer acercamiento a ellas como sujetos. Las más jóvenes rondan los 40 años, y las más grandes los 65. Todas descienden de familias europeas: italianos, españoles y franceses². La mayoría tiene 3 o 4 hijos, pero dos no tienen descendencia. Solo dos habían tenido experiencias de participación política, una estudiantil y en derechos humanos, y la otra había intentado participar en el gremialismo agrario. Algunas habían sido socias o participado en cooperativas.

Estos rasgos permiten ubicarlas en un mundo social formado por las ciudades pequeñas o simples pueblos del interior del país, centros administrativos de los alrededores agrarios de sectores medios habitados por descendientes de inmigrantes que lograron con muchas dificultades cierta movilidad social durante este siglo, confiando en el trabajo y en el esfuerzo familiar, y valorizando la educación formal. Sabemos que Lucy y otras dirigentes tienen hijos

2 Aquí debemos aclarar que no fueron entrevistadas aún las representantes del norte, Formosa y Tucumán, y es posible que en estas zonas encontremos descendientes de "criollos" o incluso indígenas.

universitarios, o por lo menos en el nivel de enseñanza media³.

En varias de las entrevistas a estas 10 dirigentes registramos situaciones familiares difíciles, ubicadas en algún momento de sus pasados, relacionados con pérdidas de patrimonios, quiebras de empresas o de campos, o por lo menos historias de sacrificios para lograr la tierra familiar. Veamos algunos de los casos:

Caso I: "...Mi abuelo era italiano y se vino desde Italia ya grande, en la época en que se venía a "hacer la América" y trabajando compró campos. [...] Mi padre compró un tractor para que mi hermano —que no quería estudiar— fuera contratista rural y, bueno, tuvo mala suerte, se le fundió el tractor, para pagar el arreglo tuvo que vender el campo y sembró y ese año vino mal el clima y perdimos todo. Yo ya tenía 18 años y tuve que empezar a trabajar de sirvienta y mi hermano de peón rural para sobrevivir...".

Caso II: "...Yo siempre milité en lo agrario o en derechos humanos antes, en la Universidad, pero

esto... lo que pasa es que me toca muy de cerca porque yo soy hija de chacareros fundidos. El primer remate a que asistí fue al de mi familia a los 14 años y sufrí tanto que juré que nunca más iba a dejar que pasara alguno..." (En la entrevista luego se aclara que aquel remate tenía que ver con una pequeña empresa no agraria).

Caso III: "...Bueno el origen de mi familia fue, mi papá que fue inmigrante italiano (vino) con mi abuelo. Mi papá vino a los 14 años de Italia y se instalaron en una pequeña chacrita de Pergamino, antes tenía que arrendar campos, pagaban unos alquileres espantosos, cada vez que después de hacer el pozo, de hacer el rancho de adobe y allí poner a la familia, a lo mejor estaban 3 años y luego venía el dueño y les decía 'no, no quiero que trabajen más el campo, pongo a otro' y se tenían que ir dejando todo el sacrificio..."⁴.

Estos relatos testimonian historias frecuentes de los inmigrantes que llegaron masivamente durante varias décadas al país, que poblaron "la pampa gringa", y cuyas posiciones y derechos se lograron con sacrificios y diversas lu-

3 Esta caracterización de los sectores medios argentinos descendientes de europeos que poblaron no solo Buenos Aires sino también el interior, está ampliamente sustentada por la literatura de la primera mitad del siglo.

4 Los términos de los arrendamientos se fijaron cinco años después de uno de los grandes movimientos sociales agrarios de este siglo, conocido como "El grito de Alcorta", en 1912.

chas sociales urbanas y agrarias. El peligro de perder nuevamente aquellos derechos o patrimonios por los que sus familiares tanto lucharon aparece repetidamente en los relatos, y nos arriesgamos a pensarlo como una motivación —consciente o no— de la acción colectiva. Sus familiares se sobrepusieron al sentido de esas pérdidas, y estas mujeres lograron, con sus esposos o solas, conseguir una finca, una producción para el mercado, patrimonios y educación para los hijos. Nuevamente, como en las historias familiares, todo está en peligro.

En síntesis, el nivel de los sujetos es importante para entender aquellos aspectos que posibilitan el fortalecimiento: las trayectorias familiares, sus propios procesos de formación como mujeres de campo, hijas y nietas de inmigrantes, con sus tradiciones culturales, sus imaginarios en relación con la llegada de esos abuelos “gringos”. Se trata de comprender las singularidades que distinguen un relato de otro; los modos en que cada una vivió las condiciones de conformación de la vida social rural argentina. Esas experiencias personales de “logros y pérdidas” también se vinculan con esta decisión imprevista en los años noventa de “tirar el delantal” y salir a la escena pública. Tengamos presente que muchas otras miles de mujeres permanecen en sus hogares sin partici-

par (y a veces criticando al MML), y el análisis de este nivel —el de los sujetos sociales— colabora en la comprensión de estas diferencias.

LA EXPANSIÓN DEL MOVIMIENTO EN EL PAÍS

Desde el momento mismo de su creación, el MML buscó a los medios de comunicación y los utilizó como una herramienta de expansión. La radio local en el primer momento, y las repercusiones en la prensa escrita, fueron recursos relevantes para el proceso de expansión. Los periódicos provinciales anunciaban a las pocas semanas de que se parara el remate del campo de los Cornelis: “Cunde el ejemplo de Winifreda” (nombre del pueblo de LC). Allí también anunciaron que las mujeres del oeste de la provincia de La Pampa se auto-convocaron y después se pusieron en contacto con LC.

El 3 de junio de 1995 fue el remate en Winifreda, y el 21 de septiembre tuvo lugar la reunión donde se formó la “mesa nacional” a la que asistieron representantes de distintas zonas de La Pampa y de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro y Formosa. La primera etapa de expansión fue espontánea, aun cuando los medios de comunicación fueron de gran ayuda.

En una segunda etapa, “las pioneras” se trasladaban y participaban en los nuevos remates. El mecanismo era simple: los agricultores las llamaban porque les llegaba la cédula judicial; entonces ellas decidían quiénes iban y cómo financiaban el viaje. Las más conocidas se comunicaban con los medios, y las delegadas se trasladaban a la nueva región.

...Van apareciendo mujeres que se enteran por los medios [...] te digo que todavía es bastante artesanal....

Ellas mismas cuentan que muchas veces logran parar los remates porque los funcionarios retrasaban la acción frente a la posibilidad de intervención del MML, o porque ellas creaban las condiciones para que el remate no se pudiera concretar. En otras ocasiones no lograban pararlos, y los campos se vendían. En estos últimos casos, la presencia del MML generaba una situación solidaria en la que los perjudicados no se sentían solos.

...Yo creo que a medida que se van haciendo ejecuciones las mujeres se movilizan espontáneamente [...] el otro día en Bariloche no teníamos (formado el MML) y bueno, “las mujeres” fueron y pararon el remate....

Una de las dirigentes de la provincia de Santa Fe cuenta de este modo la creación de un grupo que se integró al MML desde la provincia de Tucumán:

...Y fue muy lindo, primero porque nosotros sabíamos del remate y fuimos a organizar el movimiento. Se organizó el movimiento, a los 15 días se hizo el remate. El remate, en realidad, se transformó en un acto público y político. Fue un montón de organizaciones, UCIT (Unión de Cañeros Independientes de Tucumán), estaban los de Federación Agraria, estaban todos, estaban las Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., estaba todo el movimiento adelante. Era la primera vez en Tucumán, entonces nos ponemos todos de pie cuando empieza el rematador y empezamos a cantar el Himno Nacional, (la situación) era totalmente nueva, el remate en medio del “bochinche” (pero) el remate se hace. Lo anulamos y a los 10 días se vuelve a hacer, lo anulamos otra vez...

El MML cuenta con un conjunto de asesores legales que apoyan estos actos y proponen las acciones judiciales a seguir en cada caso. Sus acciones se mueven en estos dos niveles: la protesta para impedir la acción del rematador, pero también las acciones legales necesarias y pertinentes.

Pequeños grupos de mujeres que comienzan a identificarse con el MML aparecen con

frecuencia en muchas provincias y regiones del país. Algunas de estas nuevas participantes logran luego viajar a las reuniones de la “mesa nacional”. Pero la organización es, en este terreno, de una marcada precariedad y espontaneidad. Faltan recursos económicos para financiar los viajes, los teléfonos, un simple lugar donde reunirse, o sus publicaciones. Sin embargo, en cada acto donde participan y con cada nuevo grupo de mujeres endeudadas que hace su aparición en el país, logran fortalecerse. Nos dice una activa dirigente de Santa Fe:

...Mirá últimamente formamos el movimiento en el Valle de Río Negro, en Neuquén, Santiago del Estero, Formosa, Buenos Aires, parte de Córdoba, no tenemos demasiado desarrollo del movimiento todavía. Santa Fe es muy fuerte, La Pampa, Río Negro, que te decía recién que lo creamos hace cuatro meses. Ayer (marzo de 1998) las mujeres pararon por primera vez un remate, tenían una alegría, me llamaron y aplaudían todas por teléfono, me llamaron a Rosario porque habían logrado parar el remate, hicieron su primera experiencia, eran 3 ha de una mujer que estaba ella al frente de la chacra, bueno llamó al movimiento y con la misma modalidad nuestra de cantar el himno y entorpecer el desarrollo del acto. Tuvo bastante repercusión porque hoy lo estaban pasando en TN (noticiero televisivo), anoche lo vi

en Canal 9. Todo eso ayuda a que los bancos tomen algunas medidas, yo creo que pesan mucho esas suspensiones de remates, porque *¿cómo explicás vos que un grupo de mujeres, solamente entonando el Himno Nacional y agarrándose de las manos, resista de esa forma, viste, un simple acto?...* (Entrevista, 1998, énfasis propio)

LA EXPANSIÓN HACIA AFUERA: LA FORMACIÓN DE REDES SOCIALES

Una de las primeras iniciativas de las “pioneras” fue conectarse con otras organizaciones del país y del exterior con mayores experiencias en este tipo de acciones. Sus esposos o padres eran o habían sido miembros de la Federación Agraria Argentina (FAA) o de las sociedades rurales locales que están agrupadas en la Confederación Rural Argentina (CRA). Habían tenido participación en el movimiento cooperativo, y por lo tanto su federación —CONINAGRO— también era una organización cercana.

Dentro de la FAA se había creado una corriente más combativa que la línea nacional oficial, denominada Chacareros Federados, que ha logrado un interesante desarrollo en Santa Fe y el Norte de la provincia de Buenos Aires.

La relación con los Chacareros Federados

fue muy importante, ya que el MML, a nuestro entender, tiene dos tipos de problemas con FAA: el primero tiene que ver con una diferencia en la concepción general del papel de las organizaciones gremiales, y el segundo con la concepción patriarcal que manifiestan los principales dirigentes de la Federación.

En efecto, mientras que FAA expresa desde hace unos años una posición negociadora y mantiene un discurso que pone el acento en los factores tecnológicos y en la eficiencia para integrarse al mercado, el MML presenta una posición más combativa, dado que sus demandas cuestionan a las instituciones que las indujeron a endeudarse para tecnificarse: “Estamos endeudadas porque creímos en la modernización tecnológica”, razonan ellas. La FAA no tiene problemas en generar alianzas con los grandes productores de la Sociedad Rural Argentina, en tanto que el MML busca formas de acercamiento al Movimiento de los Sin Tierra de Brasil.

El segundo problema, muy claramente enunciado en los relatos, tiene que ver con las posiciones de género. Las principales dirigentes del MML creen que sus acciones son cuestionadas por la FAA por haber sido generadas por mujeres. En reuniones gremiales o actos públicos con ellos, se sintieron descalificadas por frases que hacían referencia a sus “lugares naturales

en el hogar” o a las “funciones femeninas”. Una y otra vez, los dirigentes nacionales de la FAA aluden a funciones femeninas y masculinas, y se reservan los espacios públicos (hablar en actos, declaraciones a los medios) para ellos.

Es importante atender a estas diferencias señaladas por las dirigentes del MML en referencia a la principal organización gremial de los pequeños y medianos productores, ya que se relacionan con los aspectos que ellas mismas ponderan para generar alianzas. La capacidad para registrar los despliegues de asimetrías por género, criticarlos, y buscar los grupos donde los hombres estén más abiertos a estos nuevos aprendizajes democratizadores, señala ciertas habilidades personales y grupales. En efecto, buscan fortalecer y conectar al movimiento con otras organizaciones que cumplan estos dos aspectos (para ellas esenciales): combatividad y respeto por las posiciones de género⁵.

El MML se conectó además con organizaciones provinciales de pequeños agricultores o de comerciantes endeudados. Con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) desarrollaron no solo relaciones de solidaridad

5 Están muy atentas a no entablar relaciones con grupos de viejo estilo “nacionalista” xenófobos o conservadores.

en las acciones, sino ciertos proyectos de fortalecimiento organizacional. En la provincia de Tucumán el MML tiene una fuerte relación con el Centro de Empresarios de Famaillá, que agrupa a pequeños comerciantes.

Además, están en contacto y tratan de fortalecer vínculos con varias organizaciones de mujeres, con organismos de derechos humanos, y con la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), organizaciones gremiales combativas y alternativas a la vieja y “oficialista” Confederación General del Trabajo (CGT). Tienen fuertes contactos con algunos legisladores de los partidos de centroizquierda que conforman la Alianza (pero declaran neutralidad partidaria), con grupos de universitarios, con sectores de la Iglesia progresista (muchas de las dirigentes se manifiestan muy creyentes) y con grupos indigenistas. A sus asambleas nacionales concurren los medios de comunicación provinciales (*La Arena*, Pampa TV) pero también las grandes empresas nacionales de comunicación (*Clarín*, *La Nación*, Multicanal, etcétera).

Algunas de estas vinculaciones en el nivel nacional se orientan a la formación de “redes” en el sentido definido anteriormente: producen proyectos comunes, complementan acciones,

buscan generar nuevos sentidos que los incluyan en conjuntos, etcétera. Arriesgamos que es así con Chacareros Federados y con el MOCA-SE. Las otras relaciones son precarias, y por ahora tienden a conformarse como espacios donde ellas buscan apoyos. Son importantes recursos en las estrategias de sostenimiento de sus acciones y crean grandes corrientes de simpatías y solidaridad en distintos mundos sociales (el de las organizaciones de mujeres, el religioso, el universitario, etcétera).

En el nivel de América Latina mantienen contactos con la organización mexicana El Barzón, y con la brasileña Movimiento de los Sin Tierra (MST). Según la presidenta del MML, existe un proyecto para crear un “movimiento de deudores de América Latina”. Viajaron a México invitadas por miembros de El Barzón, y ellos estuvieron en Buenos Aires trabajando con las dirigentes de La Pampa y Santa Fe. La situación común de endeudamientos recientes —producto de las políticas neoliberales— es un punto muy fuerte de encuentro con los mexicanos. Las diferencias residen en la forma de expansión interna de ambos: mientras que El Barzón integró endeudados agrarios y no agrarios (comerciantes, pequeñas empresas), el MML prefiere mantenerse en el sector agrario.

...El Barzón empezó también con la deuda agraria en México. [...] Ahora estuve en México convocada por El Barzón, lo curioso es que empezamos con El Barzón que fue la primera (organización) que nos invitó pero ahora ellos dicen que nos conocen en Canadá, en Nueva Zelanda que las agriculturas son muy parecidas a las nuestras; ahora con El Barzón somos medio hermanos...".

Con el MST han mantenido varios encuentros, sobre todo con los dirigentes del Sur (Estado Río Grande Do Sul). Los une la demanda sobre la tierra: los brasileños para acceder a ella, y el MML para no perderla. "...Ellos son tan peleadores como nosotros...", sostiene una de las dirigentes remarcando el aspecto combativo del MST. Desde hace un tiempo están proyectando viajar a Europa, apelando a sus orígenes, para buscar apoyos y solidaridades.

En esta etapa de la organización, estas redes en formación dan cuenta más que nada de la conciencia y la apuesta que el MML hace a esta estrategia de fortalecimiento. El éxito dependerá del reconocimiento que logren y de la capacidad para movilizar este tipo de recursos.

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

La irrupción del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha tuvo lugar a mediados de los años noventa, cuando los escenarios político y económico argentinos presagiaban los ciclos de protestas que aparecerían unos años después.

La generación de la situación de endeudamiento, en especial para los pequeños y medianos agricultores, fue resultado de políticas concretas: convertibilidad y su consecuente disponibilidad monetaria, aumento o disminución de las tasas de interés, etcétera. A todo esto se sumaban una gran inestabilidad de los mercados internacionales —las crisis de México, la asiática, las de Rusia y Brasil—, los vaivenes de los precios agrícolas, y un Estado que decidió no tener políticas activas para los pequeños y medianos productores; o lo que es igual, un fuerte sesgo en materia de concentración empresarial.

El MML surgió frente a la crisis del endeudamiento del sector, pero con el tiempo se fue convirtiendo en una fuerte voz crítica al modelo en su conjunto. Y esta radicalización fue posible porque rompieron con un sentido común —muy aceptado por algunos, incluidos

varios maridos— que enuncia que las deudas son responsabilidad de los individuos que las poseen. Esta ruptura las habilitó para analizar y deconstruir sus propias deudas, plantear las irracionalidades de los montos que se fueron acumulando, y generar un nuevo discurso que pusiera en tela de juicio la legitimidad del endeudamiento y del modelo económico general⁶.

Asimismo, el MML aparece como un claro representante de la “nueva protesta social agraria”, y ello porque logra sumar a sus demandas económicas otras que dan cuenta de los problemas de la sociedad de fin de siglo. En efecto, en otros trabajos sostuvimos que la protesta de la década del noventa puede caracterizarse como novedosa, tanto porque surgen nuevos actores, como por el tipo de problemática social que logra hacer visible. En este caso, el tipo de actor —una organización de mujeres chacareras o campesinas— condiciona esas otras demandas que logran expresar y simbo-

lizar en la construcción del movimiento. En este trabajo deslizamos el problema de género, pero también aparecen cuestiones que hacen a la posibilidad de elegir una manera de vivir (opciones de vida) muy propias de nuestro mundo globalizado (Giarracca y Teubal, 1997).

Nos detuvimos en la “expansión” y el “fortalecimiento” del MML como los aspectos más relevantes de esta última etapa. El “poder del movimiento” se relaciona con las oportunidades políticas (a lo Tarrow), pero también, y de modo fundamental, con las acciones organizativas. De este modo, analizamos las primeras acciones y discursos de un grupo de dirigentes, y reflexionamos acerca de las posibilidades y limitaciones en la tarea de construcción de las redes sociales.

Las posibilidades futuras del MML están condicionadas por el modo de acción y por los logros en relación con sus reclamos, o dicho de otra manera, por el tipo de negociaciones o resistencias que emprendan. Pero más allá del problema del endeudamiento, en el MML se visualiza la comprensión de otro conjunto de problemas o “síntomas” sociales que son de índole cultural, que las dirigentes destacan en sus discursos, y que las orientan a buscar otro tipo de aliados. En tal nivel, las perspectivas del MML están muy relacionadas con la capa-

6 El problema de la responsabilidad de las deudas es sumamente discutido en un país donde el Estado, durante la última dictadura, se hizo cargo de gran parte de la deuda internacional privada; o donde en la actualidad el Estado auxilia y subsidia a grandes bancos y a empresas automotrices, y se declara impotente frente a los grandes evasores fiscales.

cidad de constituirse en redes y profundizar el aprendizaje que significa actuar en espacios tanto territoriales como virtuales.

BIBLIOGRAFÍA

- Bendini, M. y Bonaccorsi, G. 1998 *Con las puras manos* (Buenos Aires: La Colmena).
- Biaggi, C. 1998 “La mujer como productora agropecuaria en Argentina” en *Temas de mujeres, perspectivas de género* (Tucumán: CEHIM, Universidad Nacional de Tucumán).
- Diodati, L. y Fernández, S. 1998 “La mujer y la familia en el campo. Reflexiones de Carlos Lemée” en *Temas de Mujeres, perspectivas de género* (Tucumán: CEHIM, Universidad Nacional de Tucumán).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1995 “El día en que la Plaza de Mayo se vistió de campo” en Teubal, M. (comp.) *Globalización y expansión agroindustrial* (Buenos Aires: Corregidor).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1997 “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. Las Mujeres en la protesta rural en Argentina” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 150.
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1999 “Crisis y protesta agraria en Argentina: expansión y fortalecimiento del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha”, ponencia presentada al IX Congreso de la Asociación Brasileña de Sociología (Río Grande do Sul: Universidad Federal de Río Grande do Sul).
- Giddens, A. 1984 *The Constitution of Society* (California: University of California Press).
- Giddens, A. 1991 *Modernity and Self-Identity, Self and Society in the Late Modern Age* (Palo Alto: Stanford University Press).
- Melucci, A. 1980 “The New Social Movements: a theoretical approach” en *Social Science Information*, N° 19.
- Melucci, A. 1984 “An end to social movements? Introductory paper to the sessions on new movements and change in organizational forms” en *Social Science information* (Londres: SAGE) Vol. 23, N° 5/5.
- Melucci, A. 1992 “Frontier Land: Collective Action between actors and systems” en Diani, M. y Eyerman, R. (eds.) *Studying Collective Action* (Londres: SAGE).
- Pettersen L. y Solbakken, H. 1998 “Empowerment as a Strategy for Change for Farm Women in Western Industrialized Countries” en *Sociología Ruralis* (Londres) Vol. 38, N° 3.

- Roggi, M. C. 1998 *Cooperativas de trabajo: el papel de las redes sociales en su viabilidad y desarrollo* (Buenos Aires: CONICET)
Beca Iniciación, Informe de avance.
- Slater, D. 1991 “New social movements and old political questions. Rethinking state relations in Latin American Development” en *XV World Congress of the International Political Science Association* (Buenos Aires).
- Tarrow, S. 1997 *El poder en movimiento* (Madrid: Alianza).
- Tilly, C. 1986 *The Contentious French: Four Centuries of Popular Struggle* (Boston: Harvard University Press).
- Vedoya, J. C. 1975 “La mujer en las Pampas” en *Todo es Historia* (Buenos Aires) N° 15.

OTRAS FUENTES

Banco de datos de “expresiones de protestas” del Grupo de Estudios Rurales en base a diarios nacionales, regionales y provinciales.

BIENES COMUNES EN LA HEGEMONÍA EXTRACTIVISTA

DISPUTAS Y RESISTENCIAS*

GER-GEMSAL** ***

(GRUPO DE ESTUDIOS RURALES - GRUPO DE ESTUDIOS DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA)

INTRODUCCIÓN

Desde fines del siglo XX y comienzos del XXI una transformación diseñada desde los centros globales del poder hegemónico se tradujo, como muy pocas veces antes, en los territorios, en las relaciones políticas, económicas y sociales, así como en las resistencias y mundos de vida de las poblaciones de toda América Latina. Más allá del conocimiento de las estrategias geopo-

líticas, militares y económicas de los centros de poder global, existe una forma sencilla de poner en imágenes esta situación de nuestro continente. El Laboratorio Latinoamericano de Geopolítica dirigido por la economista mexicana Ana Esther Ceceña proveyó una serie cartográfica donde va demostrando como se superponen las regiones de recursos naturales disponibles, con las nuevas bases militares extranacionales y los proyectos de infraestructuras continental; el IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) para nuestra región.

Raúl Zibechi (2006) sostiene que el sur de América Latina es una de las pocas regiones del

* GER-GEMSAL 2013 “Bienes comunes en la hegemonía extractivista. Disputas y resistencias” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?* (Buenos Aires: Antropofagia).

** El Grupo de Estudios Rurales y el Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina son programas de investigación y docencia del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Véase <www.ger-gemsal.org.ar>.

*** La firma colectiva indica que este artículo es producto de investigaciones de los distintos integrantes de los programas, así como de las investigaciones colectivas de miembros de la Cátedra Sociología Rural financiadas por UBACYT y FONCYT. Una primera versión de este artículo fue publicado en 2010 en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 249, enero-febrero.

planeta que combina los cuatro recursos naturales estratégicos de esta etapa: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Y lo mismo decimos nosotros para este “sur del sur” que es nuestro propio territorio nacional. De allí que podamos advertir fácilmente no solo la presencia de las corporaciones transnacionales interesadas en los bienes comunes (Barrick Gold, Monsanto, Chevron, etcétera) sino los diseños políticos, jurídicos y legales que se realizaron para habilitar la modificación de la geografía, los cordones de infraestructura para sacar (o saquear) los recursos naturales y profundizar la dependencia colonial de los grandes centros de poder internacional.

Los territorios son disputados económicamente dentro de un plan de dominación política mundial. La “globalización” como dispositivo ideológico comunicacional, los efectivos procesos donde se jerarquizan las financiaciones de los organismos de crédito como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), los gerenciamientos comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o los nuevos tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), configuraron los nuevos escenarios en los que los Estados

nacionales solo contribuyen con leyes que habilitan las nuevas formas de inversión: leyes de privatización, patentamientos, licencias de utilización de semillas transgénicas, etcétera. El Estado también interviene en la búsqueda de “licenciamientos sociales” cuando se necesitan (el caso de la minería) o en la de disciplinamiento social en los muchos casos de poblaciones que resisten estas inversiones.

Estamos frente a procesos complejos que abarcan dimensiones económicas, sociopolíticas y culturales. Asimismo, se basan en viejas concepciones del desarrollo, en una ciencia acrítica (“tecnociencia”) al servicio de la innovación tecnológica de los grandes grupos económicos y de prácticas de gestión acordes a ellas. Nuevas redes como la Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción/Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), complejos programas para el “alivio de la pobreza rural” del Banco Mundial, así como organismos que se centran en una gestión de los recursos y de la biodiversidad, sustentadas en instituciones como el BM, el G8 o varias ONG como la World Wildlife Fund, World Conservation Union o el World Resources Institute, constituyen “la mano izquierda” de esta política de los grandes intereses internacionales. Estos programas

proponen “desarrollos territoriales”, “sustentabilidad” dentro del modelo neoliberal y siguen realizando inventarios de la biodiversidad latinoamericana y mundial para continuar con la actual política de apropiación, patentamientos o “biopiratería” de la flora y la fauna nativas.

En los países centrales existen regulaciones o controles que tienden a limitar estas actividades extractivas y esto conlleva un aumento de sus costos y una reducción de las ganancias. Como consecuencia, sea por la escasez o por sus efectos contaminantes, las empresas que utilizan los recursos naturales “a escala global” tienden a instalarse en los países afuera de sus territorios de origen, donde los mundos sociales de quienes toman las decisiones están a salvo y, como dice Ceceña, “el otro nacional” pierde expresión e importancia (Ceceña, 2004).

Si bien los intereses de estas corporaciones, sobre todo las dedicadas al gas y petróleo, podían ser registrados en los comienzos del período democrático, fue con el gobierno de Carlos Menem cuando los fuertes cimientos legales de este modelo de acumulación económica se establecieron. En efecto, en 1991, el entonces presidente firma el Decreto de Desregulación económica y unos años después las leyes de la autorización de las semillas transgénicas, habilitando en el sector agrario la instalación

del modelo sojero. Del mismo modo en 1993, se aprueba la Ley de Inversión Minera, otras de reordenamiento minero y regímenes de financiamiento; en 1995 se actualiza el Código de Minería; y en 1996 se genera el Tratado Binacional con Chile para la explotación de Pascua-Lama; asimismo, desde 1991 comienzan también los procesos de privatización de YPF, privatización del servicio del agua y de la energía eléctrica (véase Giarracca y Wahren, 2005; Giarracca y Del Pozo, 2005). Y tal vez lo más grave de todo haya sido el consenso alcanzado en la Asamblea Constituyente de 1994 para declarar la “provincialización” de los recursos naturales y establecer una obligatoria privatización (en la forma de consignaciones) de los mismos. Esta decisión habilitó una inédita concentración de poder económico en los gobiernos provinciales justificado bajo el manto del federalismo.

Esta nueva configuración del control y uso del territorio, colocó a los gobernadores — con sus luchas por los cargos y reelecciones, con sus golpes palaciegos, etcétera— en un lugar central de la arena política en la Argentina del siglo XXI. Por dos razones: la primera, es la posibilidad que se les presenta a los gobernadores de establecer alianzas económicas con fuertes actores transnacionalizados y, la segunda, es que queda en manos de los po-

deres judiciales provinciales y de las fuerzas represivas la gestión de los conflictos con las poblaciones que preservan su derecho sobre la tierra, como es el caso de los campesinos e indígenas frente al avance del agronegocio (véase Barbetta, 2009), o con aquellas comunidades que cuidan los cerros, los ríos y el medio ambiente en general como los casos de los conflictos cordilleranos y patagónicos en contra de la minería a cielo abierto (véase Giarracca y Hadad, 2009).

Otro elemento común de análisis en esta problemática de los bienes comunes reside en el tipo de ganancias y “sobreganancias” que la producción basada en recursos naturales genera. En efecto, estas producciones extractivas tienden a generar súper ganancias o “rentas diferenciales a escala mundial” que en la mayoría de los casos son apropiadas por estas grandes empresas y por un puñado de países del “norte global” (véase el artículo de Teubal y Palmisano sobre renta en este libro).

Otro argumento que deseamos poner en debate es el que formula una tecnociencia al servicio del capital concentrado. Se argumenta que esos recursos sin las nuevas tecnologías no son explotables y “no sirven para nada”. Esto supone una gran falacia: desde que el hombre es hombre se relacionó con los bienes

naturales y con los otros seres vivientes para la propia reproducción de la vida material, generando técnicas y herramientas para su uso en forma sustentable. El resultado es que unas culturas los cuidaron y aún los poseen y otras —las del norte— los esquilmaron. Ceceña en su informe del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica nos acerca una interesante descripción de Mann del Amazonas, excepcional región actualmente casi en guerra por las últimas decisiones del gobierno peruano: “... durante mucho tiempo unos pobladores inteligentes, que conocían trucos que nosotros aún estamos por aprender, utilizaron grandes parcelas de la Amazonía sin destruirla. Ante un problema ecológico, los indios lo resolvían. En vez de adaptarse a la naturaleza, la creaban. Estaban en pleno proceso de formación de la tierra cuando apareció Colón y lo echó todo a perder” (Mann, 2006: 410, citado en Ceceña et al., 2007).

En este escenario general acerca de la problemática de la tierra y de los cerros acechados por la minería a cielo abierto, presentamos los casos de estudio por el tipo de sujeto de las protestas y disputas (campesinos, indígenas, asambleístas).

LAS RESISTENCIAS: LOS ACTORES SOCIALES

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Luego de un primer momento en que el movimiento indígena logró posicionarse como sujeto político a nivel continental desde fines del siglo XX (Bengoa, 2000; Toledo Llancaqueo, 2005), parece constatar un cambio en el ciclo de luchas emprendidas por los pueblos originarios a partir del cual se han logrado nuevos avances en materia de derecho indígena. En la actualidad, lo que se estaría poniendo en juego es la capacidad de las organizaciones indígenas de ejercer la suficiente presión como para lograr definiciones sustantivas en materia de derechos territoriales, superando la mera declaración de principios que emprendieron algunos gobiernos y organismos internacionales y asegurando su efectivo cumplimiento en los territorios. Por otra parte, y en consonancia con la emergencia de lo étnico en el plano político y reivindicativo, se produjo un desplazamiento desde la tierra, en tanto referente principal de los reclamos, al concepto de territorio. Siguiendo a Toledo Llancaqueo (2005) este concepto contiene diferentes sentidos: como

jurisdicción de control político; como espacio geográfico (que implica la demarcación y la titulación); como hábitat o conjunto de recursos indispensables para la existencia colectiva; como biodiversidad y conocimientos indígenas sobre la naturaleza y su expresión en derechos de propiedad intelectual; como espacialidad simbólica e históricamente construida, es decir, vinculada a la identidad colectiva (etno-territorialidad). Y es en esta multiplicidad de aspectos que los territorios son agredidos por el avance en la explotación de los bienes comunes. Así, las comunidades indígenas han instalado la cuestión del valor simbólico que atraviesa los territorios, cuestionando con ello la univocidad del criterio productivista con el que la racionalidad occidental evalúa la sustentabilidad de los mismos. Es en este contexto que surgen una amplia variedad de experiencias de recuperación territorial como locus de identidad y relaciones sociales, de construcción de etno-territorios, en respuesta a fuerzas que afectan los derechos territoriales.

Es este el caso del pueblo kolla en la provincia de Salta, donde el avanzado proceso de deforestación responde a los cánones productivos y de saqueo del modelo extractivo-exportador imperante desde la década del noventa y cuenta con la anuencia de la dirigencia política guber-

namental, en varios casos involucrada directamente en la explotación sojera y los proyectos de deforestación. Entre los años 2002 y 2006 fueron desmontadas 414.934 ha en la provincia, más del doble de lo registrado entre 1998-2002. No obstante, aún más significativo fue el incremento de las cifras evidenciado en el año 2007, durante la gestión del entonces gobernador Juan Carlos Romero, cuando se autorizó —según datos oficiales— la tala de 435.399 ha. Durante el último trimestre de ese año debía entrar en vigencia la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331) y las solicitudes de permisos para desmontes involucraron una superficie de 130.602 ha. Estas cifras resultan elocuentes si se tiene en cuenta que la totalidad de los permisos de desmonte del período (2004-2007) abarcaba una superficie de 807.509 ha. Por otra parte, se trata de datos oficiales, por lo que cabe suponer que la superficie afectada es aún mayor si consideramos los desmontes realizados sin los permisos correspondientes.

Ante el saqueo de los bienes comunes que promueve este modelo extractivo hegemónico y que se hace presente de modo intempestivo en provincias como Salta, se ha configurado un escenario heterogéneo de organizaciones de pueblos originarios, campesinos, trabajadores

desocupados y ambientalistas, que fue configurando un entramado de relaciones sociales que intentan dar respuesta de forma organizada a este modelo de saqueo. Un hito importante en la visibilización de la resistencia frente al modelo lo constituyó la audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevó adelante en febrero de 2009 en respuesta del amparo presentado por comunidades de pueblos originarios y campesinos de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, a fines de 2008. En aquel amparo responsabilizaban a las autoridades nacionales y provinciales por la tala indiscriminada de bosques (más de un millón de hectáreas) frente al avance de la frontera agropecuaria y los proyectos forestales, y solicitaban la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las autorizaciones del desmonte. La Corte Suprema terminó por hacer lugar al pedido de las comunidades de ampliación de la medida cautelar de diciembre de 2008 a la totalidad de autorizaciones concedidas en los cuatro departamentos, hasta tanto el gobierno provincial y nacional realizara un estudio de impacto ambiental sobre el efecto acumulativo de estas deforestaciones¹.

1 El 29 de diciembre de 2008 la Corte ordenó la suspensión de la tala y los desmontes autorizados en el úl-

En este proceso, las comunidades kollas de Salta se han organizado en el Qullamarka², fortaleciendo así su lucha por el respeto a los derechos adquiridos como pueblos originarios y su autodeterminación territorial, generando diversas acciones de resistencia a este modelo extractivo. Por otra parte ha denunciado en varias oportunidades el avance de la explotación forestal en su territorio, incluso una vez expedida la Corte Suprema de Justicia en cuanto a su prohibición, al tiempo que ha venido denunciando el avance de la explotación minera y su repudio total a estas formas de saqueo y contaminación de los bienes comunes. En efecto, el Qullamarka hace frente cotidianamente en un territorio de más de un millón de ha a emprendimientos turísticos, mineros, educativos, proyectos de saqueo de bienes comunes; antagonizando con modelos de intervención territorial de diferentes programas de desarrollo de ONG y organismos estatales; a la vez que

timo trimestre de 2007, mediante una medida cautelar en función del principio precautorio (contemplado en el Art. 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675) y convocó a la mencionada audiencia.

2 Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas, que agrupa a las comunidades indígenas kollas de la provincia de Salta.

mantiene la lucha por la titulación comunitaria de su territorio.

Un caso similar se da en la provincia de Chaco, donde desde los años ochenta las comunidades de los pueblos Qom, Wichi y Mocoví, con el acompañamiento de un grupo de organizaciones no gubernamentales, han impulsado importantes movilizaciones con el propósito de instalar en el espacio público la discusión sobre la situación de los indígenas de la provincia. En un contexto de profundas transformaciones de la estructura social y del sistema productivo, el acceso a la tierra fue el reclamo central que estructuró las demandas históricas reimpulsadas por las comunidades.

Con ese escenario de fondo, hacia 1987 las demandas y movilizaciones indígenas derivaron en la sanción de la denominada “Ley del Aborigen Chaqueño” (Ley N° 3258). Desde la sanción de esa norma las comunidades obtuvieron la titulación de una superficie aproximada de 250.000 ha, a las que se suman otras 320.000 ha en la zona de El Impenetrable, que fueron reconocidas como pertenecientes a comunidades indígenas pero que aún no han sido restituidas formalmente (Beck, 2007). En este marco, la titularización comunitaria de 140.000 ha que se hizo efectiva en 1999 a favor de la Asociación Meguesoxochi en el Interfluvio Teuco-Berme-

jito, constituye un caso paradigmático porque se trata de la mayor restitución de tierras —en términos de la superficie afectada— a favor de los pueblos indígenas en la Argentina. Mientras tanto, durante los años noventa los procesos de reestructuración productiva se profundizaron en el marco del modelo de desarrollo que se consolidó a la par de las políticas neoliberales. La modernización del circuito algodonero avanzó de la mano de la mecanización de la cosecha y agudizó el declive de una de las principales fuentes de empleo rural, mientras que, sobre el final de la década, la expansión de la frontera agrícola adquirió un impulso decisivo al difundirse el cultivo de la soja transgénica en la provincia. La adjudicación irregular de tierras fiscales para ser incorporadas a la producción después del desmonte asumió una dimensión escandalosa. Según datos difundidos por trabajadores del Instituto de Colonización, el Estado chaqueño pasó de tener 3.500.000 ha a mediados de los noventa a poseer tan solo 650.000 ha en diciembre de 2007. Se ha señalado que gran parte de las adjudicaciones fue realizada en forma irregular, sin cumplir con las condiciones que establecen la Constitución Provincial y la Ley de Tierras (N° 2913).

Las comunidades indígenas y sus organizaciones de apoyo han reclamado insistentemen-

te durante los últimos años el cumplimiento de las normas vigentes para frenar el avance compulsivo de las empresas comerciales sobre sus territorios. Durante el año 2003 el Gobierno provincial impulsó la sanción de una nueva Ley de Bosques (N° 5285) que permitiría continuar con los desmontes, pero las Asociaciones Comunitarias de Nueva Pompeya, Nueva Población y Comandancia Frías —comunidades wichi de la zona de El Impenetrable— presentaron un recurso de amparo alegando que dicha iniciativa era inconstitucional. El argumento central, además de señalar que dicha ley favorecería la destrucción de monte nativo y que no contaba con los estudios de impacto ambiental requeridos, denunciaba que nunca se había dado participación a las comunidades en su diseño, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución Nacional. Como resultado, la justicia provincial atendió al reclamo y dejó sin efecto la nueva ley.

Finalmente, podemos afirmar que el caso del pueblo mapuche del sur del país presenta similares características a los anteriores, aunque también tiene algunas peculiaridades. Estas comunidades indígenas se encuentran ubicadas en el sur de la Argentina, fundamentalmente en las provincias de Río Negro y Neuquén, aunque con presencia también en Chubut y el

sur de Buenos Aires. A lo largo de las últimas décadas, los mapuches han emprendido una larga serie de acciones organizativas tendientes a la recuperación territorial y a la defensa de los bienes comunes en su territorio. Región rica en biodiversidad, minerales e hidrocarburos, la Patagonia ha sido y es objeto de múltiples intereses económicos, siendo quienes los detentan los principales agentes del despojo, conjuntamente con la complicidad del Estado nacional y provincial que no resguardan a las comunidades ni regulan la venta y/o la concesión indiscriminada de tierras y bienes. El otro mal llamado “desierto” —que nunca ha sido tal— sigue siendo aún un territorio en disputa por parte de las corporaciones internacionales y los gobiernos nacionales de turno.

Durante los años noventa las comunidades han iniciado procesos de recuperación territorial de *facto* en distintos puntos de la Patagonia, los cuales se mantienen hasta hoy con diferentes niveles de conflictividad y en distintas instancias judiciales. En dichas prácticas las comunidades ponen de manifiesto su opción por la vía de la acción directa, lo cual podría estar evidenciando la futilidad —o al menos la excesiva dilación— de los procesos legales de restitución iniciados hasta el momento. Pueden nombrarse varios hitos que grafican esto. Des-

de hace unos años se destaca la recuperación de 42.000 ha en Pulmarí, provincia de Neuquén, tras un largo proceso de ocupación e instancias judiciales varias a lo largo de más de una década. Allí el conflicto se produjo a partir de los incumplimientos recurrentes de los estatutos de administración de un predio de 110.000 ha por parte de la CIP (Corporación Interestadual Pulmarí), que estando integrada por autoridades nacionales, provinciales y representantes mapuches, debía hacerse cargo de la gestión conjunta del predio.

También en Neuquén es trascendente la oposición que viene presentando el pueblo mapuche a las empresas petroleras, ahora la nacionalizada YPF en sociedad con Chevron, y la nueva tecnología de extracción de gas denominada *fracking*.

Cabe mencionar que las recuperaciones territoriales han sido las acciones de mayor recurrencia del pueblo mapuche. Entre los múltiples procesos de recuperación territorial sobresale, por su resonancia internacional y su impacto mediático, la que se llevó a cabo en Santa Rosa de Leleque, provincia de Chubut, por tener como interlocutor a la corporación Benetton (véase el artículo de Gisela Hadad en este libro).

CAMPESINAS Y CAMPESINOS

En primer lugar se observa la línea de trabajo que vienen desarrollando algunas organizaciones que coordinaban en la Mesa Nacional de Organizaciones de Productores Familiares y que actualmente conforman el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI). En estas prácticas se registran paros de desalojos, recuperación de territorios, enfrentamientos con nuevos y viejos inversores sojeros, etcétera. En este movimiento abrevan el Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina (MOCASE-VC), el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza (UST), la Red Puna de Jujuy y el Encuentro Calchaquí (Salta), entre otros (incluso forman parte o se van integrando organizaciones cuyo ámbito de acción es el conurbano bonaerense y rosarino). Estas organizaciones son las que están más estrechamente ligadas a los movimientos campesinos latinoamericanos (especialmente a través de su participación en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo —CLOC—), y a la Vía Campesina a nivel internacional; con las cuales realizan permanentes encuentros y pasantías. Sus principales proposiciones y demandas son: a) Reforma Agraria Integral

para democratizar el control de los medios de producción y solucionar los problemas de pobreza en el campo y la ciudad; y b) Soberanía Alimentaria contra el modelo de agronegocios, para defender una cultura de producción, que provee de alimentos sanos a nuestro pueblo a través de un comercio justo. A su vez señalan la necesidad de que se respeten los territorios campesinos e indígenas como modo de que se reconozca el uso y la propiedad comunitaria de la tierra y los campos abiertos. En esta línea apuntan al “uso social” de la tierra, para que esta cumpla con una función social: “respetando la biodiversidad del medio ambiente y los derechos sociales de sus trabajadores, sirviendo para la producción de alimentos en condiciones de vida digna”.

El MNCI también ha avanzado en el desarrollo de procesos educativos y de formación desarrollados con criterios propios: la técnica en agroecología o Escuela de Agroecología, la Escuela Campesina para finalizar el ciclo primario, la Escuela de la Memoria Histórica, el Campamento Latinoamericano de Jóvenes y la Escuela de Formación Política, etcétera. Estos espacios educativos confluyen en la de conformación de una Universidad Campesina.

En segundo lugar, encontramos a la Coordinadora de Comunidades Indígenas y Trabajado-

res Rurales de la Argentina (COCITRA) que es el resultado de la articulación de organizaciones de diferentes identidades colectivas como el Consejo Asesor Indígena (CAI), la Unión de Campesinos Poriajhú del Chaco y el Campamento de Trabajo de Córdoba que también forman parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Como en las organizaciones anteriores, la lucha por sus tierras y el enfrentamiento a los actores del “agronegocio” son el centro de sus prácticas de luchas y resistencias. Asimismo, hay que prestar atención al intento de la Federación Agraria Argentina (FAA) de reivindicar las luchas de organizaciones campesinas de Santiago del Estero, Formosa y Misiones en la medida que FAA intentó interpretar la potencia que guarda esta nueva emergencia de la cuestión campesina en la Argentina. Y a la vez, no es menos cierto que para muchas organizaciones campesinas contar con el apoyo de FAA significa un respaldo nacional que precisan tanto a la hora de hacer visibles sus luchas, como al momento de protegerse de la represión que sigue a sus acciones en los territorios que disputan, allí donde la trama del poder local y provincial las aísla y les quita tanto recursos como capacidades. En un primer momento, la Mesa Nacional de Productores Familiares se inscribió dentro de la

FAA, y solo más tarde se autonomizó completamente, aunque algunas organizaciones hayan seguido vinculadas a la Federación de manera particular. Sin embargo, la confluencia de FAA con la Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada) y Confederación Rural Argentina (CRA), durante el “paro del campo” del 2008, conllevó a la salida de las organizaciones campesinas y la conformación del Frente Nacional Campesino —en un lanzamiento apoyado por Madres de Plaza de Mayo—. En general, este frente agrupaba organizaciones surgidas en los noventa que han confluído en este espacio muy recientemente. Algunas organizaciones que lo conforman han estado vinculadas a FAA, como las agrupaciones de Santiago del Estero. Otras vienen de una trayectoria de fuerte relación con partidos políticos y gobiernos de corte nacional y popular en nuestro continente (es el caso de una de las líneas del Movimiento Campesino de Formosa, MOCAFOR).

Por otro lado, el resurgimiento de las Ligas Agrarias marca la búsqueda de recuperar la tradición de sus luchas de las Ligas Agrarias de los años setenta; de hecho sus impulsores son ex-liguistas de las provincias de Chaco, Santa Fe y Corrientes. Este reagrupamiento asume un carácter regional y se inserta en instancias

nacionales de coordinación campesina. Se han conformado como asociación civil y ocupan cargos públicos.

Por último, es importante mencionar la Asamblea Campesina del Norte Argentino, estructurada en el 2006. Esta empalma experiencias de organización y lucha de larga data en Chaco, Formosa, Santiago, Corrientes y norte de Santa Fe, surgidas en los ochenta y noventa. Algunas de estas organizaciones participaban también del Frente Nacional Campesino, otras no. En este armazón de alcance regional, puede observarse la fuerte presencia de organizaciones del Chaco como la Unión de Pequeños Productores del Chaco —UNPEPROCH—, así como la Mesa de Organizaciones de Pequeños Productores del Chaco que aglutina a casi todas las organizaciones de esa provincia. Se trata de un espacio regional que posibilita a su vez la generación de otras tramas de relaciones a nivel provincial o nacional.

LOS PUEBLOS CORDILLERANOS Y LAS ASAMBLEAS DEL NO A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO

Con el marco legal establecido, la incorporación de tecnología “de punta” y la profun-

dización de la lógica extractiva, comienza a consolidarse un modelo productivo en base a la extracción de los recursos naturales no renovables y contaminación del medio ambiente. En la actualidad los proyectos de minería metalífera a cielo abierto que se encuentran en producción son: Cerro Vanguardia y Manantial Espejo (Santa Cruz); Veladero (San Juan); La Alumbrera (Catamarca) y Mina Pirquitas (Jujuy). A la vez, existen una gran cantidad de emprendimientos en etapa de construcción, entre los que se destaca el de Pascua-Lama por su envergadura y por ser el primer proyecto binacional argentino-chileno. Asimismo, se encuentran en vía de explotación varios proyectos de extracción de uranio en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, entre otras.

Es así que, al tiempo que proliferan las exploraciones y cateos en la región cordillerana por parte de las corporaciones mineras con el apoyo de funcionarios provinciales y nacionales, las poblaciones comienzan a alertarse, informarse y organizarse. De esta manera, surgen a lo largo del país alrededor de setenta asambleas de vecinos y autoconvocados que ven amenazadas sus condiciones y calidad de vida ante estos proyectos de megaminería. Si bien cada conflicto se encuentra teñido por su propia particularidad, las distintas luchas dise-

minadas por toda la zona cordillerana comenzaron a entrelazarse a partir de encuentros organizados a nivel nacional. De esta manera, en noviembre de 2003, se realizó en Buenos Aires el primer Encuentro Nacional de Comunidades afectadas por la Minería con la participación de delegaciones de las provincias de Catamarca, Córdoba, Chubut, Río Negro, San Juan y Tucumán. En abril de 2004 se encontraron por segunda vez en Tafí del Valle (Tucumán) y al año siguiente se congregaron en Andalgalá (Catamarca).

En julio de 2006 se conformaba la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) como una red nacional que articula la distintas asambleas y organizaciones de base afectadas por la megaminería, el modelo del agronegocio y los problemas urbano-ambientales, en defensa de los “bienes comunes, la salud y la autodeterminación de los pueblos”. A su vez, convergen en este mismo espacio organizaciones campesinas e indígenas, colectivos culturales, ONG y personas independientes. Como un espacio de intercambio, discusión y acción, la UAC se reúne tres veces al año en distintos lugares del país. De todos modos la dinámica más interesante de estas experiencias se visualiza en los territorios, donde encontramos por ejemplo, Chilecito y Famatina (La Rioja) que llevan sie-

te años impidiendo entrar al capital minero, la asamblea y el pueblo de Famatina en su totalidad incluido el sacerdote párroco y el intendente, con costos personales muy altos. Una de las últimas represiones subió el nivel de violencia policial (*Página/12*, 16-05-2013).

Aquí es necesario resaltar la dimensión multiescalar que atraviesa a los movimientos socioambientales, en el que se encuentran involucrados distintos actores (sociales, económicos y políticos) a nivel local, regional, nacional y global (Svampa, Bottaro y Sola Álvarez, 2009). Asimismo, otra distinción importante es la cantidad de terceros actores comprometidos con esas luchas territoriales que logran articular. Si bien este fenómeno incluye a los movimientos campesinos e indígenas, en el caso de las asambleas contra la minería cobra una significación particular (véase Giarracca y Mariotti, 2012).

Algunas asambleas como la de Chilecito y Famatina (La Rioja), y la de Cafayate (Salta) han logrado a través de una Ordenanza municipal que se prohíba el ingreso, tránsito y almacenamiento de sustancias tóxicas en sus departamentos; en otras regiones, como Esquel (Chubut), Tilcara (Jujuy) y San Carlos (Mendoza) los asambleístas lograron directamente prohibir la minería metalífera a cielo abierto en sus localidades. Es importante mencionar

como antecedente el plebiscito no vinculante que organizaron los vecinos autoconvocados de Esquel en marzo de 2003 en el que el 81% de la población pronunció un rotundo “no” a la minería tóxica.

Si bien el plebiscito de Esquel tuvo un arrastre multiplicador, despertando a otras regiones donde ya se habían implantado o se proyectaban emprendimientos mineros de gran envergadura; como correlato los gobiernos provinciales no permitieron que se llevara adelante ninguna consulta popular, a pesar de la demanda y presión de vecinos y autoridades municipales (tal es el caso de Calingasta, San Juan; Famatina, La Rioja; Tinogasta, Catamarca). Hasta ahora solo se logró nuevamente en Loncopué, Provincia de Neuquén el 3 de junio de 2012 cuando se logró ganar con el 80% al rechazar la minería.

Por otro lado, las asambleas realizan acciones directas que se caracterizan por ser disruptivas, autónomas, deliberativas y no violentas. Algunas de ellas forman parte de las acciones de protesta “tradicionales” o ya conocidas como las movilizaciones, caravanas, cortes de ruta, escraches, etcétera. A partir de las acciones llevadas a cabo por las asambleas se ha logrado prohibir la minería a cielo abierto en siete provincias: Chubut (2003), Río Negro (2005),

Tucumán (2007), La Pampa (2007), Mendoza (2007), Córdoba (2008) y San Luis (2008). Cabe aclarar que en La Rioja se había logrado dictar una Ley que prohibía la explotación minera con sustancias tóxicas en el 2007 y un año más tarde fue anulada por el actual Gobernador Beder Herrera, quien había impulsado esa legislación y destituido al Gobernador anterior, Ángel Mazza. En Chilecito y Famatina se dictaron las Ordenanzas N° 972/06 y N° 973/06 y en Cafayate se dictó la Ordenanza N° 13/08.

Surgen también nuevos modos de acción por parte de las distintas asambleas que luego son socializados y recreados por otros grupos de autoconvocados en sus respectivas regiones. Entre ellas, se pueden destacar la realización de charlas informativas en plazas y escuelas; las pintadas y los murales en las paredes de las ciudades y pueblos cordilleranos; las *performances*; el bloqueo del paso a vehículos del Estado y de las empresas mineras que circulan por la zona.

Bajo este contexto las asambleas de Tinogasta y de los Valles Calchaquíes decidieron no dejar pasar a los camiones que transportan insumos hacia Bajo La Alumbra, en Catamarca. Durante el 2008 los autoconvocados realizaron tres bloqueos de gran magnitud sobre las rutas nacionales N° 60 y N° 40. Estas incipientes

experiencias fueron conformando una “red de obstrucción”, que a la vez que no permiten que los insumos hacia la mina lleguen a tiempo y en algunos casos nunca llegan, se va construyendo un fuerte vínculo de solidaridad entre las distintas asambleas que se comunican, discuten y generan acciones conjuntas, haciendo que la propia lucha se convierta en la de todos.

En los últimos tiempos, se evidencia un recrudecimiento de la criminalización de la protesta que llevan a cabo estas poblaciones en resistencia. En este contexto, fueron allanadas diecisiete viviendas de habitantes del Barrio La Paz y autoconvocados de Tinogasta a raíz del episodio confuso en el que apareció un camión incendiado en el último bloqueo realizado en dicha ciudad. Paradigmática fue la represión de febrero de 2012 en Tinogasta con bloqueos de poblaciones y una violencia inusitada sobre las personas. A la vez, once vecinos de Cafayate fueron imputados del “delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre”, nueve meses después de la obstrucción a camiones que se dirigían hacia Bajo La Alumbraera.

A su vez la consolidación del modelo extractivo de la megaminería muestra su faceta institucional en el veto de la Ley de protección de los Glaciares (Ley N° 24.618) por parte del Poder Ejecutivo en noviembre de 2008. Por me-

dio de esta Ley se prohibía cualquier actividad que afectara la zona glaciaria y periglaciaria, que representan el 75% de la reserva hídrica del país. El argumento que respaldaba dicha decisión se basaba en los efectos negativos sobre el desarrollo y producción de las provincias cordilleranas que ocasionaría la veda de toda actividad sobre estas regiones. Dicha posición era reforzada por un discurso fuertemente federalista que defendía la autonomía de los Estados provinciales para disponer de los recursos naturales. La Ley de Glaciares vetada por el poder Ejecutivo, volvió al Parlamento y después de una larga y compleja discusión fue aprobada en septiembre de 2010 y esta vez sin veto presidencial. Por supuesto, la provincia de San Juan desconociendo la legalidad nacional mandó a poner un recurso de amparo que fue el medio por el cual siguió usando los glaciares durante todo este tiempo aun cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ley y contra la cautelar sanjuanina en julio de 2012.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN

El acervo de legislación y los cambios coyunturales desde los comienzos del neoliberalis-

mo, no tardaron en tomar una forma relativamente estable, que a su vez conservara importantes márgenes de mutabilidad que le permiten adaptarse a contextos diversos. En el caso de la producción agropecuaria se intensifica el proceso de reconversión de la producción desde un modelo de desarrollo agroindustrial hacia los llamados agronegocios (Giarracca y Teubal, 2008). Bajo este nuevo paradigma se perfila la primacía de las producciones destinadas a la exportación, las cuales requieren de una importante inversión de capital y la aplicación de tecnologías “de punta”. En la región pampeana, aunque en un proceso de franca expansión hacia otras regiones del país, la soja se muestra como el ejemplo más paradigmático. Su amplia adaptación a diversos suelos y condiciones climáticas permitió un vertiginoso ascenso tanto en volumen cosechado como en superficie implantada desde los años setenta. Pero el hito histórico debería ubicarse en el año 1996 cuando el Estado argentino autorizó la utilización de la soja transgénica (*Round up Ready*) en todo el territorio nacional. Esta política completó la conformación del paquete tecnológico compuesto por el herbicida de amplio espectro conocido como glifosato, la siembra directa y las semillas de soja (Teubal, 2006; Boy, 2005).

En este sentido, resulta importante aclarar que tanto la semilla como el herbicida son propiedad de la empresa multinacional Monsanto. La expansión de este modelo se profundiza a raíz de la mayor rentabilidad del cultivo de soja producto de la sostenida alza de su precio internacional. Como parte de una tendencia mundial del capital especulativo hacia la inversión segura en el mercado de los *commodities*, el constante aumento del precio de la soja permitió una suba de la renta diferencial de la tierra. Esto tuvo y tiene al menos dos consecuencias: por un lado, las tierras más fértiles obtienen cada vez mayores ingresos por una misma producción pues el valor real de la oleaginosa crece constantemente. Por el otro, la suba de los precios permite la incorporación a la producción de tierras que anteriormente no eran rentables para el cultivo, presionando la frontera agraria y el monocultivo hacia regiones marginales al modelo. Estos territorios están normalmente habitados por pueblos originarios y campesinos quienes son arrinconados y con los que las corporaciones y “nuevos inversores” (fondos de inversión o grandes terratenientes pampeanos o provinciales) entran en disputas, para preservar la tierra y los frágiles ecosistemas, como en el caso de las yungas. Por lo tanto, si bien existen múltiples

explicaciones para este fenómeno de suba de precios (aumento del consumo en países como India y China; desastres climáticos diversos; el aumento sostenido del petróleo que afecta a los insumos y presiona para la utilización de cultivos para la producción de biodiesel y etanol; etcétera), la principal fuente explicativa tendríamos que ubicarla en el avance de la lógica financiera en el sector agropecuario.

No obstante, como intentamos mostrar en este trabajo, a la lógica del agronegocio se le oponen otras lógicas de producción de alimentos (y no commodities), de cuidado de la tierra y de otra relación con los bienes comunes en general: son las apuestas de organizaciones de los pueblos indígenas y de los campesinos. Estos procesos de apropiación mercantil de los territorios también pueden constatarse con la megaminería. Si en el caso de la tierra la renta se genera principalmente con los mayores ingresos por la fertilidad de las mejores tierras, la minería lo hace por el control estratégico y monopolístico de un recurso que es escaso. En la tendencia mundial hacia el aumento de los *commodities*, los minerales no fueron la excepción; si bien el caso del petróleo es paradigmático por la alta dependencia del sistema capitalista mundial al *oro negro*, el oro, la plata, el cobre y la gran mayoría de los metales han

subido notablemente. Según un informe realizado por la Secretaría de Minería de la Nación (2008), en el año 2007 se realizaron inversiones destinadas a actividades de exploración, desarrollo de proyectos y producción de minerales por más de \$5.600 millones, que significaron un crecimiento acumulado de 748% con respecto al 2003 y la existencia de más de 336 emprendimientos mineros en todo el país. La emergencia de las organizaciones de los pueblos patagónicos y cordilleranos se coordinaron en muy pocos años y son paradigmáticos en esta lucha por parar esta actividad depredadora.

En conclusión, lo que encontramos en tensión en estos territorios es la existencia de lógicas y sentidos antagonísticos recreados en las disputas que protagonizan pueblos originarios, movimientos campesinos y asambleas de pueblos patagónicos y cordilleranos en torno al territorio y los bienes comunes. Creemos que el nivel de esta disputa estará también relacionada con el Estado nacional y, sobre todo, los Estados provinciales, que se encuentran en la simple disyuntiva de escuchar a las organizaciones, entrar en diálogos democráticos con ellas (las siete provincias que tienen leyes que prohíben o limitan la actividad minera es un ejemplo de esto); o la posibilidad de fortalecer la articulación económica y política con las corporaciones

del agronegocio y la minería y caer en la tentación de niveles intolerables de represión en un sistema democrático. Existen indicios alarmantes en tal sentido (La Rioja, Salta, Santiago del Estero, etcétera), por eso es necesario conocer y reflexionar sobre estos procesos que pueden debilitar a los gobiernos democráticamente elegidos en la Argentina hasta límites peligrosos.

BIBLIOGRAFÍA

- Barbetta, P. 2009 “En los bordes de lo jurídico. Conflictos por la tenencia legal de la tierra en Santiago del Estero”, tesis de doctorado (Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA) mimeo.
- Beck, H. H. 2007 “Aborígenes chaqueños: de la conquista al respeto por su cultura. Una historia inconclusa” en *Suplemento Antropológico* (Asunción) Vol. XLII, N° 1.
- Bengoa, J. 2000 *La emergencia Indígena en América Latina* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica).
- Boy, A. 2005 “Cambios productivos y sus repercusiones en el nivel agronómico” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coord.) *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).
- Ceceña, A. E. (comp.) 2004 *Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI* (Buenos Aires: CLACSO).
- Ceceña, A. E.; Aguilar, P. y Motto, C. 2007 *Territorialidad de la dominación: La Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)* (Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica).
- Giarracca, N. y Del Pozo, N. 2005 “La lucha por los derechos del agua en Tucumán. Transnacionales y mujeres en la protesta social” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. y Hadad, G. 2009 “Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera. Política de vida y agua en el centro de la escena” en Svampa, M. y Antonelli, M. (eds.) *Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Giarracca, N. y Mariotti, D. 2012 “Porque juntos somos muchos más. Los movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

- Giarracca, N. y Teubal, M. 2008 “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del ‘agronegocio’: el caso argentino” en Mançano Fernandes, B. (org.) *Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual* (San Pablo: CLACSO).
- Giarracca, N. y Warhen, J. 2005 “Territorios en disputa: iniciativas productivas y acción política en Mosconi, Argentina” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 16.
- Secretaría de Minería de la Nación 2008 *Informe “Minería en números 2008”* (Buenos Aires: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios).
- Svampa, M.; Bottaro, L. y Sola Álvarez, M. 2009 “Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el ‘efecto Esquel’ y el ‘efecto La Alumbrera’” en Svampa, M. y Antonelli, M. (eds.) *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Teubal, M. 2006b “Expansión del modelo sojero en la Argentina. De la producción de alimentos a los commodities” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 220, mayo-junio.
- Toledo Llancaqueo, V. 2005 “Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004. ¿Fronteras indígenas de la globalización?” en Dávalos, P. (comp.) *Pueblos indígenas, estado y democracia* (Buenos Aires: CLACSO).
- Zibechi, R. 2006 “IIRSA: la integración a la medida de los mercados” en <<http://www.ircamericas.org/esp/3314>>.

CUANDO HASTA LAS PIEDRAS SE LEVANTAN. OAXACA, MÉXICO, 2006

PRESENTACIÓN Y NOTAS METODOLÓGICAS*

PRESENTACIÓN

El conocido historiador marxista británico Eric Hobsbawm sostiene que se puede considerar un siglo XX corto, que comienza con la Revolución Rusa y finaliza con la caída del muro de Berlín. Sin restar importancia a estos acontecimientos históricos, suelo afirmar que, para América Latina, el siglo corto comienza con la Revolución Mexicana y termina con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) en Chiapas. Para quienes consideramos que existe un particular modo de situarse en el mundo, desde el sur, desde nuestros países de América Latina, el levantamiento campesino de 1910 en México mar-

có un hito en las rebeldías a los capitalismos vernáculos de aquellos tiempos del primer centenario de la independencia. En efecto, antes que en la China de Mao Tsé Tung, fue en México donde se enunció la posibilidad de que un proceso radical podía iniciarse “a distancia de las ciudades”¹. La Revolución Mexicana de 1910 nos legó una idea importante: las aspiraciones de una sociedad más justa, más igualitaria y libertaria pueden circular y convertirse en prácticas en los territorios campesinos hermanados con las comunidades indígenas. Es decir, no es única potestad de la clase obrera.

* Giarracca, N. 2008 “Presentación y notas metodológicas” en Esteva, G.; Valencia, R. y Venegas, D. (eds.) *Cuando hasta las piedras se levantan. Oaxaca, México, 2006* (Buenos Aires: GEMSAL / Antropofagia).

1 El concepto lo utiliza Badiou para el caso de China. Dice: “Tomemos la Revolución China. ¿Qué muestra la Revolución China en su primera parte? Nos muestra que se puede construir en el campo, con los campesinos, un poder que limite el poder reaccionario establecido en las ciudades” (2003: 13).

Los campesinos mexicanos no llegaron a convertirse en gobierno, sino que lo delegaron en una clase urbana ilustrada; lo mismo hicieron los campesinos rusos que venían luchando contra el zarismo desde mediados del siglo XIX. Los grupos ilustrados con formación liberal modernizadora en los dos países (liberales a lo latinoamericano en México y marxistas en Rusia) una vez ubicados en el Estado, desjerarquizaron el papel de los campesinos y traicionaron sus principios de lucha que se asentaban en la distribución igualitaria de la tierra. Sin embargo, la mexicana fue “historizada” como una posible revolución campesina inconclusa (y circularon muchas interpretaciones acerca de las razones) mientras que la rusa resultó, según las historias liberales y comunistas oficiales, como una revolución proletaria. Sostiene el historiador Ezequiel Adamovsky en una entrevista a raíz del aniversario de los acontecimientos “Fue una revolución obrera, pero también fue una revolución campesina. Es impensable todo el proceso sin la acción de los campesinos, que tenían sus propias organizaciones que poco tenían que ver con los bolcheviques, con una cultura muy igualitaria” (*Página/12*, “A 90 años de la Revolución Rusa”, 22-10-2007).

En el extremo final del siglo, la “caída del muro”, el agotamiento de esa esperanza revolu-

cionaria que ya venía decayendo en su afán de guiar las aspiraciones de las sociedades modernas, fue percibida como un momento “final”. Se habló de varios “finales”: de las ideologías, de la historia, de las esperanzas. Contrariamente, el hito histórico latinoamericano, el surgimiento del EZLN en Chiapas, mostró sin tapujos un “comienzo”. Nadie pone en duda la novedad del acontecimiento. Alain Badiou sostuvo que se trataba de una invención, una nueva política: a distancia del Estado. “La irrupción zapatista de Chiapas fija una medida al Estado mexicano. Muestra que ese Estado tradicional puede ser identificado y limitado por una nueva forma de acción política” (Badiou, 2003: 13). Esa fijación de límites, de identificación, agrega el autor, no se puede hacer desde el interior del Estado; de allí la necesidad de una ruptura con la vieja política, la necesidad de una política que escape a la organización estatal que somete toda posibilidad de innovación a la representación.

Estos dos pensamientos políticos, la posibilidad de una organización radical a distancia de las ciudades, corazón del capitalismo en la alborada del siglo XX y la política “a distancia del Estado” en sus ocasin, son a mi juicio, dos innovaciones significativas desde el Sur, desde los márgenes, que es el lugar desde donde se ve mejor la gramática del poder. Son

innovaciones, decimos, dentro de la siempre inacabada tarea de construir un “mundo otro”, es decir en el espacio de la política como actividad creativa.

El grito de Chiapas recorrió la América y un mundo desencantado lo acogió con esperanzas. Luego se sumaron experiencias como las de Ecuador y Bolivia que, a diferencia de la de México, fueron y vinieron del espacio de la gestión estatal buscando en una práctica sostenida la construcción de “Estados plurinacionales”. Las dificultades de sus luchas se suman año tras año. Pero como dice Boaventura de Sousa Santos, las nuevas prácticas de izquierda no solo ocurren en lugares poco familiares, sino que se llevan a cabo entre pueblos que hablan extraños lenguajes no coloniales (aymara, quechua, indi, urdu, arabic, ki-zulu, ki-kongo) u otros menos hegemónicos como el español y el portugués y donde sus referencias culturales y políticas no son occidentales (De Sousa Santos, 2007).

El siglo XXI comienza (o emerge) en estas nuevas resistencias: la Guerra del Agua en Cochabamba; las rebeliones argentinas del 2001-2002 bajo la polisémica consigna “que se vayan todos”; la aparición de ese extraño lugar de alturas, lenguas indias y luchas “rururbanas” como es El Alto, cerca de La Paz, en Bolivia.

Pero muy pronto las voces de los mexicanos volvieron a escucharse cuando un grupo de campesinos del Estado de México, en Atenco, obstruye un disparatado emprendimiento de Vicente Fox: la construcción de un nuevo y mega-aeropuerto en tierras agrícolas. Ya no cabían dudas: a la pretensión totalizadora del neoliberalismo se le ponen límites, se le fijan distancias, desde el Sur; en idiomas que no son los del poder.

No obstante estas resistencias, el poder constituido sacó de la galera sus caras más “amigables” para lograr restituir el orden. Zygmunt Bauman (2005) utiliza los conceptos, *societas* y *comunitas*, para referirse a la tensión siempre presente entre orden, jerarquías, estructuración, por un lado, y la espontaneidad, creatividad, autoorganización, fraternidad y rebeldía caótica, por el otro. Para el orden, *societas*, la posibilidad de la *comunitas*, de la imaginación humana, de su inventiva y coraje para romper la rutina (lo sedimentado injusto) y aventurarse por caminos inexplorados, siempre es una situación peligrosa. Tanto el mercado como el Estado invaden y colonizan la *comunitas*, por lo que esta implica para la rutina asistida desde el poder y por su deslumbrante capacidad productiva y potencial de autosuficiencia. Son espacios que “mercado y Estado” despojan de

todo valor; los corren de la atención pública, los inferiorizan.

Cuando lo que está en cuestionamiento son las dos instituciones básicas de este capitalismo —Estado y mercado— raudamente se generan mecanismos inesperados para volver al orden y recordarnos que otros “desarrollos” económicos u otros Estados más amistosos son siempre posibles. Como dice Badiou (2003), cuando “el movimiento” se opone peligrosamente “al Estado” (el autor juega con la dualidad de sentidos de los términos), ¿cuál es el mejor modo de terminar con el movimiento? Las elecciones. La vieja política siempre gana las elecciones porque están hechas para ella, dice el autor.

Por esas razones, en gran parte de América Latina han arribado al Estado, gobiernos con lenguajes netamente antineoliberales, que recuperan ciertos roles para limitar la voracidad del mercado: Inácio Lula Da Silva en Brasil, Néstor Kirchner (y ahora su esposa Cristina Fernández) en la Argentina, son dos ejemplos. Nuevamente se instala “la esperanza” de lograr este tipo de gobierno, de “centro izquierda” en todos los países donde se estaba resistiendo y donde existía la posibilidad de configurar novedades políticas de importancia. En Ecuador se apuesta a Rafael Correa, los movimientos boli-

vianos con sanos resguardos indígenas confiaron en Evo Morales, y México se ilusiona con un posible triunfo del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Pero poco antes de las elecciones del 2 de julio de 2006 en las que el candidato del PRD, Manuel Andrés López Obrador, tenía muchas posibilidades de ganar, “estas rebeldías” (en el decir de Ariel Colombo, 2002) irrumpen en un escenario nacional complejo y tensionado². Las rebeldías, el estado de “comuna” se desató esta vez en una ciudad del sur mexicano: Oaxaca de Juárez, ese colonial y magnífico lugar es la capital de uno de los Estados con mayor número de municipios y comunidades indígenas, lugar de emigrantes que envían las famosas remesas, lugar de organización comunal autónoma y de organizaciones con larga tradición de lucha. En este libro se narran los acontecimientos que durante esos meses de 2006, han marcado, como Chiapas en 1994, el derrotero del pensamiento político (entendido como una decisión ligada a una ruptura) del continente.

2 El EZLN había lanzado su Otra Campaña; la intelectualidad de izquierda apoyaba al PRD y el PAN y el PRI se alistaba para no perder hegemonía en el nivel nacional y estadual.

OAXACA REBELDE Y SUS NARRADORES

El Estado de Oaxaca se ubica en el sur de México, en el extremo suroeste del Istmo de Tehuantepec, la zona más angosta entre los dos océanos que tiene el país. Región rica en petróleo y maderas donde se ubica el municipio de Juchitán, conocido por haber estado en manos de la izquierda en pleno “reinado” del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Oaxaca colinda con los Estados de Guerrero al oeste, Puebla al noroeste, Veracruz hacia el norte y Chiapas al este. El Estado cuenta con 16 grupos etnolingüísticos, aun cuando a lo largo de los siglos los hablantes de lenguas indígenas han disminuido. Es una de las regiones que genera mayor número de migrantes, el 60% de los 570 municipios oaxaqueños tiene familias migradas, mientras que de la población estadual solo un 6% declara haber nacido fuera de Oaxaca. La agricultura, desde sus orígenes, sostienen Flores Leyva y Marini Zúñiga (2004),

reviste una relación sociedad-naturaleza en las que las necesidades concretas de su población, son satisfechas dentro del marco de esta relación [...] Los 570 municipios, los 710 núcleos agrarios comunales, los 766 ejidos y las más de 10 mil comunidades, conforman una matriz de posibilida-

des casi infinita de formas productivas que combinan en forma creativa el uso de los recursos naturales. (Ibídem: 109)

La Ciudad de Oaxaca de Juárez fue creada a fines del siglo XV y es un centro cultural, arquitectónico y artístico de gran significación en América Latina. Un importante porcentaje de su economía se basa en el turismo y es interesante resaltar que durante “la comuna” de 2006, comerciantes sectorialmente afectados por la huida de los turistas, apoyaron las rebeliones. Todos los años (excepto en 2007 por una gran represión) se celebra la Guelaguetza, donde todas las regiones del Estado, todas las culturas, festejan en un auditorio ubicado en el Cerro del Fortín. Muchos oaxaqueños organizados en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sostienen que en los últimos años la fiesta de la Guelaguetza había sido apropiada por los funcionarios corruptos y había perdido el sentido original.

Quienes narran los acontecimientos de este libro (Gustavo Esteva, Rubén Valencia y David Venegas) son todos oaxaqueños, pertenecen a distintas generaciones y tienen muy diferen-

tes experiencias de vida. La riqueza de estas diversidades se muestra con pinceladas de diferentes colores, tonos y matices que van organizando esas imágenes de los meses rebeldes; las narraciones sobre el lugar, los antecedentes y la inventiva de los hechos que se estiran hacia un futuro. La esperanza y lo que vendrá, en todos ellos, están puestos en la fuerza moral y espiritual de los actores, todo ese pueblo puesto de pie.

Me voy a permitir presentarlos, ayudada por ellos mismos.

Gustavo Esteva. Es muy fácil encontrarlo en Oaxaca, no solo porque la Universidad de la Tierra, donde se desempeña, es conocida por todos, sino porque es una persona abierta, sencilla y cordial, acostumbrada a recibir gente de todas partes del mundo y a entablar diálogos generosos con todos. Se presenta a sí mismo como un intelectual “desprofesionalizado” y en esa identidad muestra la coherencia con un pensamiento que pone en jaque a las instituciones, incluida la educación. Conoce desde muy joven la sociedad mexicana y se desempeñó en distintas etapas de su vida (marcadas por “rupturas”, como él mismo suele contar) en diversos espacios y dominios sociales y estatales. Fue partícipe destacado en el debate entre campesinistas y des-campesinistas de los años

setenta, argumentando a favor de una mirada que comprendiera la complejidad y riqueza de los sectores subalternos del campo mexicano.

Dice de él David C. Korten, conocido escritor y activista internacional³:

Gustavo es una voz activa del segmento “desprofesionalizado” de la comunidad intelectual del sur. Rechaza tanto la terminología como las construcciones del desarrollo en todas sus formas, por considerarlas inherentemente destructivas de los procesos humanos a través de los cuales la gente común se empeña en recrear comunidad como una expresión creativa de su cultura y aspiraciones. Gustavo argumenta que aun las prescripciones del desarrollo “alternativo” conducen inexorablemente a privar a la gente del control de sus propias vidas y desplazan el control a los burócratas, los tecnócratas y los educadores. En vez de suponer que el progreso humano encaja en un molde predeterminado que conduce a la creciente homogeneización de culturas y estilos de vida, prefiere un “pluralismo radical” que honra y nutre la diversidad cultural distintiva y habilita muchos caminos para la realización de aspiraciones autodefinidas. (2007: 1)

3 Entre sus obras destacan *When Corporations Rule the World* y *The Postcorporate World: There is Life after Capitalism*.

Gustavo cuando cuenta su vida habla de rupturas. La tercera e importante “ruptura” lo condujo a un acercamiento definitivo a estos mundos que se resisten a la “colonialidad” desde esos dignos rincones del sur mexicano. Dice:

En ese proceso, cada vez más cercano a la actividad concreta de los campesinos, pude poner en cuestión las categorías de todas las disciplinas en que había sido educado o había aprendido por mi cuenta. Empecé una crítica radical del desarrollo [...]. A lo largo de los años ochenta mi crítica al desarrollo se profundizó, particularmente al entrar en contacto con los amigos de Illich y otros pensadores o activistas radicales de diversas partes del mundo [...].

Sospecho que la ruptura principal se produjo cuando empecé a recordar mis contactos con mi abuela, cuando niño, como describí en un texto que sigo considerando muy importante para seguir mi trayectoria: *Regenerating People's Space*, escrito en 1986. Están ahí las nuevas cuestiones que me planteaba y cómo las empecé a enfrentar. Mi trabajo teórico sobre los marginales, bastante abundante en esos años, muestra claramente un nuevo camino, que se consolidó y afirmó cuando entré en contacto con Illich, la persona y el pensador, en 1983.

Aunque la ruptura está ahí, en los años 80, y lo que hice y escribí en esos años la muestran, me encontraba aún, sobre todo en el plano de las

ideas, arraigado en el horizonte de inteligibilidad occidental. Solo después de mi involucramiento con los zapatistas, a partir de 1994, y tras instalarme en San Pablo Etla, pude llegar a apartarme de ese horizonte y plantearme seriamente la posibilidad de que otro nuevo se había creado para mí, aunque todavía fuera incapaz de dar clara cuenta de él [...].

Por otro lado, la profundización de la crítica del desarrollo condujo, de la mano de Illich, a la crítica radical de la sociedad económica, lo que implicó la ruptura final con el marxismo. (2002: 6)

“Agregaría —nos dice hoy el autor—, que mi ruptura con el marxismo no es ruptura con Marx, insustituible aún para entender y trascender el capitalismo, sino una toma de distancia con el propio Marx, particularmente por su transformación en economista” (Conversación con GEMSAL).

Estas rupturas y esta generación de nueva subjetividad son solo posibles desde la conexión con sí mismo (con uno mismo) y con una comunidad a la que se siente pertenecer. De allí la significación de estas narraciones sobre Oaxaca desde Gustavo Esteva.

Decía antes que, mientras Gustavo Esteva representa una generación complicada del México contemporáneo, que sin embargo contiene nombres que son paradigmas para los intelectuales comprometidos (como nuestro autor), Rubén Valencia y David Venegas son parte de una juventud que recorre el continente y que dejará marcas en este nuevo siglo.

Rubén Valencia. Cuenta que sus padres fueron partícipes del movimiento universitario del 68 y que cuando decidieron mudarse a Oaxaca formaron parte de una interesante organización que ligó los estudiantes a los sectores populares urbanos y rurales de México, la COCEI (Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo). Ese movimiento dio lugar al primer municipio de izquierda del país, Juchitán, que según Francisco Toledo “logró enraizar a fondo entre las amplias masas juchitecas a través de su organización territorial en los comités de barrio, que complementaban a los destacamentos sectoriales de los campesinos y de los asalariados. Fue en el terreno de la lucha por el municipio donde la COCEI logró proponer espacios de confluencia y unidad popular, sin poner en peligro las demandas fundamentales de los campesinos pobres” (<www.proceso.com.mx>).

Siendo los padres de Rubén fundadores de la COCEI, es heredero de una larga tradición

de mexicanos que han luchado por una sociedad igualitaria, justa y libertaria. Cuando conversamos con él nos acerca al poeta y luchador social de la COCEI y del Frente Único Popular de Ixtepec, Alejandro Cruz Martínez, quien fue asesinado por defender territorios de campesinos y comunidades indígenas. El poeta-luchador, nos cuenta, sostenía que la resistencia de la COCEI en Oaxaca fue asumida no solamente a partir de su pertenencia a una cultura, en este caso la zapoteca, sino también desde “su ser político”. La madre tierra se erguía como la “madre territorio”, como el espacio colectivo de lo íntimo al que no solo había que cantar sino también que proteger, que aprovechar, convertir en aquello por lo que hay que pelear.

Justamente por este entrelazamiento entre la cultura y la política, de la COCEI y del movimiento actual, es que Rubén Valencia se compromete con el movimiento de Oaxaca: la búsqueda de la regeneración de lo propio, la lucha por el territorio, pero sobre todo la lucha por la dignidad, por encontrar por propia cuenta la vida digna entre sus pueblos; y las discusiones entre todos a través de las asambleas de Oaxaca, son dispositivos privilegiados en esas búsquedas. Pasado y presente se entretajan en las esperanzas de este joven luchador.

David Venegas. Nació en la ciudad de Oaxaca, su familia es de la sierra sur y siempre le gustó el campo, desde niño le gustaba ir a la tierra de sus abuelos. Dice que por ello estudió Ingeniería Agronómica en la Universidad de Chapingo, para volver a trabajar la tierra y estar cerca de ella. En eso andaba cuando vivió la represión de Atenco y los estudiantes de Chapingo hicieron una movilización en su apoyo. Después se enteró del intento de desalojo a los maestros en su Oaxaca natal el 14 de junio y el gran apoyo popular que recibieron. Fue entonces que decidió volver a su tierra a luchar junto a los suyos para defenderla.

David Venegas fue detenido el 13 de abril del 2007, escondido y torturado por la policía del gobierno. Estuvo en prisión 11 meses y fue liberado, primero porque los jueces federales no encontraron pruebas en su contra y segundo por la movilización social del pueblo y de las organizaciones que siguen en la lucha. David dijo en algún momento de su prisión:

Los pueblos de Oaxaca han demostrado asimismo que se es capaz de convivir, trabajar, crear, amar, reír y llorar de manera autónoma, sin el orden totalitario de ningún gobierno, aún en el

espíritu de tod@s l@s oaxaqueñ@s resuenan los tambores que invitan a la rebeldía y el susurro de Quetzalcoatl y Kukulkán nos da la certidumbre de que habremos de continuar el desarrollo de nuestra civilización truncada violentamente hace más de quinientos años.

David, quien estaba en prisión durante nuestra estadía en Oaxaca, agregó sus propias visiones, sus miradas, en las “Conversaciones” (con Rubén Valencia) que forman la segunda parte de este libro.

Nuestros encuentros (fuimos varios miembros del GEMSAL) fueron fluidos y tanto en las conversaciones con ellos como con otros oaxaqueños, pudimos darnos cuenta de que muchas de las ideas surgidas a raíz de los procesos de luchas y resistencias que ellos enunciaban en “voz alta” habían circulado casi en voz baja algunos años antes por aquí, cuando en la Argentina vivimos nuestras propias rebeliones (diciembre de 2001, véase *Tiempos de Rebelión* en esta misma colección). Son los pensamientos de las resistencias y propuestas de una sociedad más justa y libertaria de los “de abajo” y de los “de más abajo” (como suele decir Raúl Zibechi, parafraseando a los zapatistas), ideas irruptivas, deliberativas, autónomas y que pregonan la no violencia, que se

conectan de inmediato con pensamientos que mantuvieron sus vibraciones en estos quinientos años y pico de colonización y colonialidad de América Latina. Y es interesante que tales “pensamientos-sentimientos” hayan circulado en dos espacios latinoamericanos tan diferentes: uno, Oaxaca, paradigma del continente profundo indígena, diverso y comunalista y el otro, Buenos Aires, la ciudad más europeizada y producto más acabado de la “colonialidad” en los más diversos sentidos.

Otro aspecto importante en los encuentros con estos luchadores oaxaqueños tiene que ver con lo que sostiene Rubén Valencia en la entrevista que se presenta en este libro. A Oaxaca se debe llegar con el “corazón abierto”, sin presupuestos políticos ni esquemas intelectuales que a veces invisibilizan lo que nos rodea. Ellos dicen que Oaxaca es un centro espiritual muy importante pues así lo entienden las poblaciones originarias y esta cuestión se transmite en palabras, en imágenes, en las recorridas montañosas a las comunidades, en los diálogos densos con jóvenes y ancianos indígenas. Oaxaca es tierra de artistas, algunos reconocidos internacionalmente como Francisco Toledo, pero esa aptitud también configura a los artesanos que son capaces de otorgar al mundo piezas de significativo valor y está presente, además, en los modos de

pensar la política. Y justamente esta dimensión cultural, profundamente espiritual, es lo que nos propusimos transmitir con las voces de Gustavo, Rubén y David. Oaxaca se debe comprender desde esas voces y con sus imágenes (existen muchos videos accesibles, véase *Revista de OSAL*, N° 22, 2007). No obstante, esas palabras e imágenes son elecciones de quienes editamos este libro, pues como en todo proceso social existe una polifonía de voces y posiciones que generan la situación. Nuestra elección es clara y es coherente, además, con la línea de esta colección del GEMSAL. Se trata de una fuerte apuesta a la autonomía de los sujetos, tanto en sus dimensiones personales como colectivas. Y esta posición política —en construcción en toda nuestra América Latina— como bien lo sostiene Rubén no es fácil de explicar o problematizar, más allá de las pocas experiencias en marcha. Sin embargo, los distintos relatos de este libro demuestran con qué facilidad actúan las poblaciones cuando se dan las condiciones para que la *communitas* pueda surgir.

En este libro se reviven los momentos más interesantes de este México que marcó los límites del siglo a los latinoamericanos. Los autores detienen sus narraciones en el año 2006 cuando Oaxaca volvió a mostrar al mundo las posibilidades de pensar de nuevo una política

de emancipación “desde abajo”, pero entran el acontecimiento con los que siguen sucediendo en los años posteriores. Escuchando estos autores podemos conocer de otro modo no solo Oaxaca o los procesos de Chiapas (a los que Esteva hace constante referencia) sino al México del siglo XX, y sobre todo al de nuestros días. Acercarnos al “México profundo” como repetía Guillermo Bonfil y poder encontrarnos con otros modos de conocer nuestros países, abrirnos a una epistemología desde el sur, desde los márgenes, desde nosotros mismos. Recordemos que en México se “jugó” la América Latina del siglo XX, y probablemente lo que pase en estos próximos años en esa tierra “tan cerca de EEUU”, tenga una influencia tan decisiva como la anterior. Esteva es muy claro y concreto al respecto, tanto respecto de los peligros como de las posibilidades que se están gestando.

BIBLIOGRAFÍA

- Badiou, A. 2003 “Conferencias en Buenos Aires” en *Acontecimiento* (Buenos Aires: Escuela Porteña).
- Bauman, Z. 2005 *Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos* (Madrid: Fondo de Cultura Económica).

- Colombo, A. 2002 “¿De la protesta social a la desobediencia civil? ¿Del señoreaje a la soberanía? Dos reflexiones sobre la política argentina” en <<http://www.uasb.edu.ec/padh/revista5/articulos/arielcolombo.htm>>.
- De Sousa Santos, B. 2007 “The World Social Forum and the Global Left”, artículo para la conferencia *The World Social Forum and the Global Left* (Nueva York) agosto.
- Flores Leyva, G. y Marini Zúñiga, F. 2004 “La agricultura en Oaxaca” en Martínez Vásquez, R. M. (coord.) *Oaxaca escenario del nuevo siglo* (Oaxaca: Instituto de Investigaciones Sociológicas, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca).
- Mariotti, D. et al. 2007 *Tiempos de Rebelión: “Que se vayan todos” Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002* (Buenos Aires: Antropofagia / GEMSAL, Universalismos pequeños N° 2).

OTROS MATERIALES

- Adamovsky, E. 2007 “A 90 años de la Revolución Rusa”, entrevista en *Página/12*, 22-10.
- Esteva, G. 2002 “Rupturas”, texto de respuesta a la tesis doctoral de G. Terán,

“Conversations with Mexican Nomadic Storyteller, Gustavo Esteva: Learning From Lives on the Margins” (s/d).

Korten, D. C. “Esbozo biográfico de Gustavo Esteva”, participación en el *Foro del Desarrollo Centrado en la Gente*, presidido por D. C. Korten.

Proceso 2007 “Inauguran en Oaxaca retrospectiva visual sobre la COCEI y la Casa de la Cultura de Juchitán” en <www.proceso.com.mx>, 28-04.

NOTAS METODOLÓGICAS: “EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN” DESDE LUGARES DIFERENTES

(ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA
DEL INTELLECTUAL COMPROMETIDO)*

En este apartado deseo desarrollar unas pocas ideas acerca de lo que presentamos en este libro: el relato e interpretación de un importante movimiento de América Latina, de México, desde sus propios intelectuales (o lo que se ha dado en llamar “intelectuales nativos”); es decir, sujetos participantes y comprometidos con la situación. Esta modalidad de conocimiento era impensable algunos años atrás: o se publicaban materiales de una organización política con sus posibles intelectuales orgánicos, o el fenómeno era “explicado” por las Ciencias Sociales.

Este libro, enmarcado en el mundo universitario, presenta las reflexiones de oaxaque-

ños que no tienen inserciones académicas oficiales y les da una jerarquía semejante a las de cualquier otro trabajo académico. Es más, para nosotros es un verdadero orgullo el que un intelectual de la talla de Gustavo Esteva haya aceptado generosamente publicar su reflexión con nosotros, y estamos seguros de que no existe ningún otro material sobre estos hechos que pueda superar, por muchas razones, sus “Crónicas de un movimiento anunciado”. Tampoco creo que sea fácil encontrar un relato con los matices, reflexiones y referencias de ricas experiencias colectivas y subjetivas como las “Conversaciones” con Rubén Valencia y David Venegas.

Esta situación hubiese sido inhallable algunas décadas atrás, cuando las Ciencias Sociales estaban atravesadas por las ideas científicistas del positivismo y predominaban las dicotomías sujeto/objeto, estructura/acción, teoría/ praxis, entre otras. En aquel marco, el investigador te-

* Giarracca, N. 2008 “Notas metodológicas: ‘experiencia de investigación’ desde lugares diferentes. (Algunas reflexiones acerca del intelectual comprometido)” en Esteva, G.; Valencia, R. y Venegas, D. (eds.) *Cuando hasta las piedras se levantan. Oaxaca, México, 2006* (Buenos Aires: GEMSAL / Antropofagia).

nía que asemejarse lo más posible a un hombre de las ciencias naturales o exactas en sus laboratorios: tomar la situación social como un objeto y apartar todo rasgo de subjetividad: ideas, deseos, compromisos. La confianza en la posibilidad de esta tarea, se centraba en los métodos cuantitativos, los números; cuanto menos se usara el lenguaje, menos “contaminado” estaría el “objeto”. Los datos estadísticos, las encuestas, el número, reemplazaban las voces de los sujetos y con tales abstracciones se buscaban “regularidades estadísticas”, “correlaciones” y la esperanza de “explicar” y “predecir” desde los supuestos de la lógica formal. Ya ni nos acordamos de los informes, libros y *paper* producidos bajo aquellas epistemologías que el funcionalismo norteamericano quiso imponer. Y no los recordamos porque en las Ciencias Sociales solo perduraron los trabajos que ayudaron a pensar, a conocer y a comprender situaciones y procesos, apelando a formas diversas de producción del conocimiento. La mayoría de los trabajos perdurables en Ciencias Sociales incorporan la Historia, la Filosofía Social, la Psicología Social y muy pocos los resultados de encuestas o de grandes correlaciones estadísticas. Pensemos en Max Weber, en Émile Durkheim, en Alfred Schutz o más cercano a nuestros temas, en William Tomas, pionero de la Escuela de Chicago.

Los jóvenes científicos sociales de mediados del siglo XX disociaban sus trabajos de investigación, basados en encuestas, cálculos, curvas y desviaciones estándares, de otras actividades que les permitían crecer intelectual y emocionalmente: activismo político, prácticas artísticas, intervenciones espontáneas y no planeadas, en mundos interesantes. Muchas veces, en los cuadernos de campo que acompañaban los trabajos de recolección de datos, se contaban y describían situaciones desde un involucramiento subjetivo no permitido en el trabajo profesional.

Desde siempre hubo también miembros de organizaciones o movimientos sociales (indígenas, mujeres, negros, entre otros colectivos) que reflexionaron sobre su propia práctica. Gloria Anzaldúa, Bel Hoock para hablar de nuestros contemporáneos, pero si nos remontamos al siglo XIX, muy pocos intelectuales fueron indiferentes a la intervención política. Es imposible hablar, por ejemplo, del debate acerca de la comuna campesina rusa del siglo XIX y comienzos del XX sin presentar lo que significaban políticamente los populistas, los marxistas y la preparación de la revolución social.

La “academia”, entendida como el lugar que marca reglas formales o santifica acerca de la “cientificidad”, aparece en nuestros países lati-

noamericanos en la mitad del siglo XX. A partir de ese momento se despliega un pensamiento de las Ciencias Sociales que busca el reconocimiento de la “ciencia”, mientras su antecedente inmediato —el pensamiento social— estuvo imbricado con el ensayo, la literatura y muy diversos modos de narrativas y de formas artísticas. En la segunda mitad del siglo XX aparecen las carreras universitarias de las Ciencias Sociales, la profesionalización del pensamiento social. En las primeras décadas de funcionamiento, desde los lugares universitarios, se intentó marcar un límite entre “lo científico” y lo que no lo era. El texto científico debía diferenciarse del ensayo o de todo lo que suponía la hermenéutica, la comprensión. Fue el predominio de la Sociología norteamericana que influyó tanto en Latinoamérica como en Europa.

Desde hace 25 años todo el espacio académico se flexibilizó y ello ocurrió desde las propias disciplinas: se fueron abriendo paso distintas metodologías y abordajes de trabajo, relativizando la cuestión de la científicidad. Se habló de la ruptura del consenso ortodoxo o de crisis paradigmáticas. Se puso en cuestionamiento esa fuerte relación que se había establecido entre metodologías cuantitativas y científicidad. No es que el científicismo no esté presente en academias del norte o del sur, solo que se abren

espacios para otro tipo de trabajos a los que las escuelas académicas del norte, les dan su bendición (piénsese, por ejemplo, en los antropólogos de Rice University con George Marcus a la cabeza).

Pierre Bourdieu fue tal vez el sociólogo académicamente consagrado que dejó traslucir tempranamente en el escenario de los países centrales la crisis paradigmática y, a mi juicio, su compromiso social que aumentaba a cada momento, puede explicar en parte estas mutaciones. Si bien a lo largo de su obra trabajó desde una fuerte dispersión temática, casi siempre lo hizo alrededor de los mecanismos de dominación; más allá de los medios materiales de producción, destacó la importancia de la imbricada construcción del poder simbólico. En los últimos años publicó *Las miserias del mundo*, basado en largas entrevistas en “la escucha del otro”, ese sujeto que, como dijo en una conferencia “tiene cosas muy importantes que decirnos”. Aún más, en la última etapa de su vida salió al mundo a conversar con los sociólogos de América Latina acerca de la necesidad del compromiso con los movimientos sociales. Pensaba ese compromiso desde dentro de las instituciones pues aún apostaba al trabajo riguroso en términos intelectuales y consideraba que eso solo se podía lograr en el marco de la academia.

Estaba interesado en el “movimiento social europeo”, pero también en un “colectivo intelectual internacional” y pudo llegar a reconocer la importancia de América Latina en esta empresa.

A fines de junio del 2000, en la Universidad de Buenos Aires, la gran pantalla de la teleconferencia nos acercó a un Bourdieu preparado para una interacción densa con sus colegas latinoamericanos. Nos habló en un español que, aunque lo limitó en su expresión, lo acercó culturalmente a su público. No titubeó en ofrecernos un espacio distinto que tomara distancias de los partidos y gobiernos comprometidos con el neoliberalismo, un “colectivo intelectual internacional” conectado a los gremios y movimientos sociales de todo el mundo. En ningún momento se consideró un intelectual de un movimiento sino que percibía la necesidad urgente de comprometer a los científicos sociales de todo el mundo en contra del neoliberalismo. Ese último Bourdieu, está actualmente bastante desdibujado por quienes lo prefieren ver como un académico francés sin compromisos políticos y siguen citando sus primeras obras. Sin embargo, ese contacto con los sociólogos latinoamericanos del 2000¹, fue un hito en esta

1 También fue muy importante el discurso inaugural del Congreso Latinoamericano de Sociología en

historia de los intelectuales del norte, capaces de comprender la potencia de la América Latina en la construcción de un pensamiento social crítico que en ese comienzo de siglo parecía próximo a conseguirse.

Loïc Wacquant, uno de sus discípulos, sostiene que el origen de Bourdieu los conducía a esa sensación de estar siempre en los márgenes del mundo intelectual, “la trayectoria del milagro”, que lo ha llevado desde una de las regiones más bajas del espacio geográfico y social francés (un remoto pueblo en Béam) a la cima de la pirámide intelectual de su país...” (Wacquant, 2005: 2). En efecto, Pierre Bourdieu no se sentía cómodo en el mundo de los intelectuales “que tienen tantas respuestas y, de última, tan pocas preguntas...”. Intentó, en la última parte de su vida (esos tiempos cuando todo adquiere otras significaciones), superar la dicotomía entre el “compromiso” y “el trabajo académico”: marcó la artificialidad de tal oposición y, de hecho, sostuvo que “es preciso ser un científico autónomo que trabaja según las reglas de la academia para poder producir un saber comprometido, es decir un trabajo inte-

México, 1995, que dio Emmanuel Wallerstein en contra de esta devastadora sociedad configurada por el neoliberalismo.

lectual con compromiso”. ¿Será posible en estos tiempos pos-bourdieuianos seguir manteniendo esta esperanza? O para decirlo de otro modo: ¿se puede desde las reglas actuales del trabajo académico seguir produciendo un trabajo intelectual comprometido? ¿Es posible en Europa, en EEUU, en América Latina?

NUESTRA AMÉRICA

En América Latina, en los últimos catorce años (desde 1994) se abre un nuevo capítulo en la relación entre intelectuales y compromiso con los movimientos sociales. Primero, porque se inicia una nueva etapa de resistencias en nuestras regiones y esto se logra, no por las voces de los intelectuales (como deseaba Bourdieu), sino por la decisión de pobladores de todas partes de poner freno a las políticas devastadoras del neoliberalismo y por sus propias y complejas reflexiones. Dijimos en el prefacio que Chiapas fue un hito. Divide un antes y un después, nos pone a todos los latinoamericanos frente a nuevos actores que, —con sus caras tapadas— tienen la pretensión de ser vistos y escuchados (¡enorme paradoja!). Pero es Chiapas y luego serán Ecuador, Argentina, Brasil, nuevamente Ecuador, las resistencias, las po-

bladas, protestas, marchas que parecen no parar. Caen gobiernos, se cuestionan las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Se avanza y se retrocede en los acuerdos de paz en México, Guatemala, El Salvador, en las negociaciones por las políticas agrarias neoliberales, etcétera.

En aquellos años noventa los sociólogos, antropólogos, politólogos, con sus saberes y recursos, no podían, siquiera, desarmar los avances del neoliberalismo en sus propias instituciones: las universitarias. Las políticas del FMI y de la Organización Mundial del Comercio dirigían las transformaciones y las prácticas de profesores, investigadores y estudiantes. Nuevamente el saber académico se puso en duda y muchos jóvenes migraron a los movimientos sociales que aparecían como los únicos espacios autónomos de resistencias. Aparece la “investigación militante”, con jóvenes formados en los institutos de investigación que deciden desertar de los mismos. Pero el fenómeno también tiene otra cara, los llamados investigadores nativos: jóvenes campesinos, indígenas, mujeres, homosexuales, entre otros, que abordan las carreras de las Ciencias Sociales y deciden trabajar sus propias situaciones y procesos. También los hay autodidactas que apuestan a reflexionar las prácticas de sus pro-

pios movimientos con principios que los demarcan de posiciones apologéticas.

Raúl Zibechi, uno de los intelectuales latinoamericanos que más ha reflexionado acerca de los Movimientos Sociales de Latinoamérica, sostiene que una de sus características es “la capacidad para formar sus propios intelectuales. El mundo indígena andino perdió su intelectualidad como consecuencia de la represión de las insurrecciones anticoloniales de fines del siglo XVIII y el movimiento obrero y popular dependía de intelectuales que le trasmitían la ideología socialista “desde fuera”, según el modelo leninista. La lucha por la escolarización permitió a los indios manejar herramientas que antes solo utilizaban las elites, y redundó en la formación de profesionales indígenas y de los sectores populares, una pequeña parte de los cuales se mantienen vinculados cultural, social y políticamente, a los sectores de los que provienen. En paralelo, sectores de las clases medias que tienen formación secundaria y a veces universitaria se hundieron en la pobreza. De esa manera, en los sectores populares aparecen personas con nuevos conocimientos y capacidades que facilitan la autoorganización y la autoformación” (2007: 5).

CHIAPAS Y OAXACA, EL “CONOCIMIENTO NATIVO”

En la actualidad existen algunos movimientos sociales cuyas comprensiones profundas dependen básicamente de los intelectuales activistas, o militantes, o nativos (como se los suele denominar). Se puede debatir cuáles son, si los indígenas, los de las mujeres, o los ambientalistas, pero la lista la encabezan Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Oaxaca con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Las reflexiones de Marcos y los documentos del EZLN son materiales imprescindibles para empezar a comprender el fenómeno del sureste mexicano. Marcos habla sobre diversos aspectos: sobre las experiencias del movimiento y sobre los modos de conocimiento, de comprensiones, de visiones del mundo y de lo que vendrá. El resto de los miembros del movimiento produce materiales muy interesantes acerca de la marcha de los procesos. Marcos produce teorías, intenta epistemologías, advierte acerca de aquello que impide una cabal comprensión de estos mundos tan alejados del intelectual o universitario medio. Marcos no usa un lenguaje académico pero tampoco el viejo acervo militante de la izquierda. Sus dis-

cursos apelan a rememorar, evocar, buscar en nuestros propios sufrimientos producidos por las injustas y desiguales sociedades neoliberales, la comprensión del sureste mexicano. En los últimos tiempos, el debate con los intelectuales universitarios y con los medios de comunicación ocupa un lugar importante en sus escritos. Sostiene:

Desmemoria y deshonestidad suelen campar (no siempre, es cierto) en estos analistas de escritorio. Un día dicen una cosa y predicen algo, al otro día ocurre lo contrario, pero el analista ha perdido la memoria y vuelve a teorizar haciendo caso omiso de lo que dijo antes. No solo; además es deshonesto porque no se toma la molestia de respetar a sus lectores o escuchas. Nunca dirá: “ayer dije esto y no ocurrió u ocurrió lo contrario, me equivoqué”. Enganchado en el “hoy” de los medios, el teórico de escritorio aprovecha para “olvidar”. En la teoría, este académico produce el equivalente a la comida chatarra del intelecto, es decir, no alimenta, solo entretiene.

Otras veces, algún movimiento suple su espontaneísmo con el padrinazgo teórico de la academia. La solución suele ser más perjudicial que la carencia. Si la academia se equivoca, “olvida”; si el movimiento se equivoca, fracasa. En ocasiones, la dirección de un movimiento

busca una “coartada teórica”, es decir, algo que avale y dé coherencia a su práctica, y acude a la academia para surtirse de ella. En estos casos la teoría no es más que una apología acrítica y con algo de retórica.

Nosotros creemos que un movimiento debe producir su propia reflexión teórica (ojo: no su apología). En ella puede incorporar lo que es imposible en un teórico de escritorio, a saber, la práctica transformadora de ese movimiento.

Nosotros preferimos escuchar y discutir con quienes analizan y reflexionan teóricamente en y con movimientos u organizaciones, y no fuera de ellos o, lo que es peor, a costa de esos movimientos. Sin embargo, nos esforzamos por escuchar todas las voces, prestando atención no en quién las habla, sino desde dónde se habla. En nuestras reflexiones teóricas hablamos de lo que nosotros vemos como tendencias, no hechos consumados ni inevitables. Tendencias que no solo no se han convertido en homogéneas y hegemónicas (aún), sino que pueden (y deben) ser revertidas. Nuestra reflexión teórica como zapatistas no suele ser sobre nosotros mismos, sino sobre la realidad en la que nos movemos. Y es, además, de carácter aproximado y limitado en el tiempo, en el espacio, en los conceptos y en la estructura de esos conceptos. Por eso rechazamos las pretensiones de universalidad y eternidad en lo que decimos y hacemos”. (Énfasis propio)

Estas palabras se pronunciaron en el encuentro que se realizó en Chiapas para homenajear a Andrés Aubry en diciembre de 2007, cuando dialogó diariamente con Emmanuel Wallerstein, Naomi Klein, John Berger, etcétera y con nuestro autor, Gustavo Esteva.

Esteva tiene otra trayectoria. Ha escrito libros imprescindibles para todo académico que desea comprender la agricultura mexicana de los setenta, al campesinado y sus organizaciones, entre otros tópicos. Él mismo habla de “rupturas” para referirse a esas etapas de su vida en las que fue joven militante de izquierda, funcionario de gobierno del PRI, presidente de asociaciones académicas, etcétera. Hoy es un intelectual sin inserción académica oficial y su principal preocupación reside en otro tipo de “rupturas”: esas que naturalizan las instituciones coloniales como la educación, la universidad, el mercado, el desarrollo, la salud, etcétera. Cada una de sus acciones de ruptura intelectual está enmarcada en esta tarea conecta con su movimiento —la APPO— con la lucha de Chiapas y con los movimientos de América Latina y del mundo.

Comprender Oaxaca desde su perspectiva es iniciar una travesía para la cual tenemos que prepararnos, pues no tiene el barandal del conocimiento sedimentado, de aquel que pro-

viene de otros y va adquiriendo seguridad a fuerza de la repetición. Esteva provoca, causa inquietud, quiebra las viejas seguridades ontológicas como por ejemplo las que enuncian “las bondades de la educación pública, su capacidad de desarmar asimetrías en América Latina; las bondades del desarrollo para lograr el bienestar común, etcétera”. Rotas estas premisas fortalecidas, insistimos, a fuerza de repetición y debilitadas a fuerza de corroboración, él nos propone pensar, nominar, alejarnos no solo de las viejas ideas sino de sus representantes terrenales, las palabras. Gustavo Esteva, como antes Iván Illich, genera conceptos, nuevas palabras como por ejemplo “tradifas”². En él la comprensión se nutre también de rememoración, evocación y emoción. Más comprendemos sus palabras, más nos acercamos a otros modos de mirar, escuchar, percibir, sentir, las poblaciones de su Oaxaca natal y del México todo. Por eso, la lectura de su presentación de la comuna de Oaxaca, es algo más que “una experiencia de investigación”, es “una experiencia de conocimiento” o mejor dicho, es una vida traducida al registro de lecturas que nos inquietan y nos ubican en los espacios de nue-

2 “Los ‘tradifas’ o el fin de la marginación”. *El Tri-mestre Económico*. L (2) 1998, abril-junio, 733-770.

vas resistencias y nuevos pensamientos imbricados en ellas.

En estos nuevos conocimientos, surgidos de novedosos modos de participar en los acontecimientos que nos rodean, están las claves para “pensar la política” y por lo tanto seguir construyendo un “pensamiento crítico”. Los jóvenes que lo acompañan en este libro en el capítulo “Conversaciones”, no son militantes ni activistas “pre-formateados” en un discurso sino personas pensantes, que dudan, que generan conceptos, que revisan pasados y construyen presente.

BIBLIOGRAFÍA

- Giarracca, N. 2000 “Giddens y Bourdieu en Buenos Aires” en *Boletín* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA).
- Wacquant, L. 2005 “La sociología como socioanálisis: Relatos de Homo Academicus”, traducción de J. Ayero, inédito.
- Zibechi, R. 2007 “Presentación” en Mariotti, D. et al. *Tiempos de rebelión, Que se vayan todos. Calles y plazas en la Argentina de 2001-2002* (Buenos Aires: Antropofagia).

OTROS MATERIALES

Discursos de Marcos en el Homenaje a Andrés Aubry, diciembre de 2007. Disponibles en <www.ezln.org.mx>.

EL “DESARROLLO” BASADO EN LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES*

Existe un fuerte consenso acerca de que nos encontramos frente a una situación global crítica cuya base se vincula con lo que se conoce como “recalentamiento global”. El clima está cambiando y se expresa con hostilidad en muchas regiones del mundo. Estos fenómenos pueden observarse, principalmente, en el aumento de la temperatura global; el retraimiento y derretimiento paulatino de los glaciares (una de las principales reservas de agua); los cambios radicales en los regímenes de lluvias y en los sistemas meteorológicos a escala global, y en el aumento del nivel de los océanos y las cuencas hídricas. Estos cambios climáticos están provocando graves consecuencias: la expansión de algunas enfermedades tropicales

como la malaria o el dengue a otras regiones del planeta, la disminución y/o emigración de diversas especies animales y vegetales, la reducción de los caudales y reservas de agua potable y el aumento de los incendios forestales. A esta situación se suma la historia de un consumo intensivo de recursos naturales por parte del norte del planeta durante su desarrollo capitalista, que lo ha convertido en consumidor insaciable de diferentes materiales que fueron agotándose. Además, debe tomarse en cuenta la vulnerabilidad monetaria producto del hiperdesarrollo de los sistemas financieros y el regreso a las reservas regionales en oro.

Con todo ello podemos comprender las razones que orientaron a las grandes corporaciones de Europa, Canadá, Estados Unidos y Australia a asegurarse la disponibilidad de los recursos naturales que permanecen en territorios del sur. Recordemos lo que suele expresar el intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos: el

* Giarracca, N. 2011 “El ‘desarrollo’ basado en la extracción de recursos naturales” en CELS (ed.) *Derechos Humanos en Argentina. Informe 2011* (Buenos Aires: CELS / Siglo XXI).

80% de los recursos naturales que la humanidad necesita para su reproducción en el planeta se halla en territorios de comunidades indígenas y campesinas del sur, ya que esas poblaciones han sido las que supieron utilizarlos sin devastarlos.

Según la CEPAL (2009), las exportaciones de origen primario en los países de América Latina aumentaron significativamente en los últimos siete años. Este aumento se produjo tanto

en los países tradicionalmente exportadores de petróleo (Venezuela, México) o minería (Chile, Bolivia), como en los industrializados (Brasil, México) y en aquellos que históricamente se debatieron entre modelos agroexportadores e intentos de industrialización (Argentina, Uruguay). A modo de ejemplo, veamos los datos de la CEPAL para la Argentina y el bloque regional del Mercosur:

Cuadro N° 1

Exportaciones de productos primarios según su participación en el total (porcentaje del valor total de las exportaciones FOB de bienes)

País	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Argentina	67,4	69,5	72,2	71,2	69,2	69,2	69,1	69,2
Mercosur (con Bolivia y Chile)	58,6	59,6	60,7	60,5	60,2	63,1	64,8	65,9
Total	41,1	41,4	44,5	46,6	50,1	52,8	49,7	52,9

Fuente: CEPAL, 2009.

En el caso de nuestro país, la significación de las cifras se debe tanto a la expansión sojera como a los altos precios de esa principal *commodity* de exportación. No obstante, las empresas mineras se ubican en el período dentro de las diez primeras en la lista de las grandes exportadoras del país, junto a las agrarias y las petroleras. Es decir, la Argentina no escapa a la tendencia de reprimarización de toda la re-

gión y una importante base del modelo económico son producciones primarias extractivas y exportadoras de *commodities*. Los elementos que las caracterizan son:

- actividades con alto consumo de recursos no reproducibles, como por ejemplo el agua;
- remiten a escalas de producción mucho mayores que las tradicionales, por lo cual

- desplazan una multiplicidad de actividades preexistentes;
- utilizan “tecnologías de punta” (cuestionadas por la ecología);
 - se localizan territorialmente porque dependen de la existencia y la persistencia de determinados recursos naturales;
 - fueron impulsadas en el marco del neoliberalismo económico difundido a escala mundial;
 - generan mucho valor de cambio, grandes rentabilidades para algunos agentes económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad;
 - se vinculan con el interés de grandes corporaciones que las impulsan, y controlan sectores clave del espacio económico en el que operan;
 - desplazan masivamente tanto a trabajadores rurales, al campesinado y la agroindustria en general, como a pobladores circundantes;
 - se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver necesidades internas;
 - son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas regiones: agricultura “de proceso” o alimentaria, ganadería, turismo, cultivos industriales;

- la mayoría no son esenciales para la vida de las comunidades o del mundo en general. Se puede vivir sin oro y también sin soja, pero no se puede vivir sin agua ni alimentos;
- están generalmente relacionadas a la generación y apropiación de rentas de los recursos naturales.

En esta definición incluimos lo que denominamos “agronegocio” (Giarracca y Teubal, 2008), ya que, si bien es una producción agrícola-ganadera, funciona con la lógica económica del modelo extractivo en relación con los recursos naturales y humanos. El ejemplo paradigmático es la expansión sojera, pero cualquier producción (reforestación, caña de azúcar, olivicultura, ganadería, etcétera) puede mutar de una lógica de procesos (biológicos, económicos, sociales) a la del agronegocio; es decir, incluirse dentro de las actividades extractivas, cumpliendo la mayoría de los puntos anteriores.

El modelo de índole extractivo reúne entonces el agronegocio, la minería, la actividad petrolera y la forestación para pasta celulósica, entre otras. Estas actividades, junto a las infraestructuras básicas y consumos que requieren para su funcionamiento (agua de glaciares, represas hidroeléctricas, carreteras), han

colocado en la agenda de discusión pública la cuestión de los recursos naturales, así como el modelo de desarrollo.

La Constitución Nacional de 1994, en su art. 124, dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existente en su territorio”. Es decir, establece que los recursos naturales son de incumbencia provincial aun cuando las relaciones entre los actores económicos y sociales guardan importantes marcas de las decisiones nacionales de los años noventa. En el territorio se registran distintas escalas —nacional, provincial, local— que requieren nuestra atención; sobre todo cuando registramos los conflictos que generan las actividades entre tres actores: empresas, Estado y poblaciones.

En la década del noventa, en la Argentina se estableció la trama legal que habilitó la entrada del modelo extractivo: la privatización del petróleo, leyes y códigos para la gran minería a cielo abierto en el país y la expansión sojera¹. Constituimos uno de los países de América Latina que más expone su territorio y sus recursos naturales a los procesos de privatización y apropiación para la acumulación mundial de

capital. La privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), pionera en América Latina, es un notable ejemplo, y el casi monocultivo en suelos de envidiable fertilidad como la región pampeana es otro. Pero aún permanecen las regiones marginales de la expansión sojera, con importantes desarrollos agrícolas de alimentos que corren peligro de desaparecer sin una fuerte intervención estatal que logre regular procesos como la avalancha minera. Y de esto se trata la necesaria discusión sobre el modelo de desarrollo de tipo extractivo o el modelo agrario del país, que es la base, por ejemplo, del Programa Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial anunciado por el Poder Ejecutivo Nacional en mayo de 2010.

El geógrafo norteamericano David Harvey caracteriza estas actividades dentro de lo que denomina “proceso de acumulación por desposesión” (Harvey, 2003). Como en los procesos históricos de acumulación del primitivo capitalismo, los recursos naturales y los poderes estatales juegan un papel fundamental. La actividad extractiva es altamente rentable. Esa gran rentabilidad tiene que ver tanto con su tasa de ganancia como con las rentas diferenciales a escala mundial que son apropiadas en la mayor parte por las empresas del sector. Se trata de

1 Para mayor información véanse Svampa y Antonicelli, 2009; y Giarracca y Teubal, 2005.

actividades que son rentables no solo porque sus costos internos son relativamente bajos, sino también porque en la época actual se nota una tendencia alcista en los precios internacionales de las *commodities* de exportación. La valorización de esas rentas se realiza en el mercado mundial y en relación con estos precios internacionales en alza. Interesan los salarios más bajos que pueden existir en el nivel interno u otros costos de producción que en términos relativos pueden ser comparativamente más bajos. Pero la disponibilidad de recursos escasos frente a una demanda mundial creciente constituye un ítem fundamental que determina la rentabilidad de esas actividades.

EXPANSIÓN SOJERA: PARADIGMA DEL AGRONEGOCIO

En las últimas décadas se ha producido una impresionante expansión de la soja para la exportación, con una especialización creciente en la semilla transgénica y su paquete tecnológico (que incluye el glifosato). En concomitancia con esta expansión se lleva a cabo un proceso de concentración de la tierra, del control productivo y del capital. Las empresas y corporaciones transnacionales —o transnaciona-

lizadas— fueron ubicándose en sectores clave del complejo agroexportador y del sistema agroalimentario en su conjunto. Como sostienen Teubal y Palmisano (2010), son empresas entrelazadas y articuladas entre sí en un sistema que, aunque remite fundamentalmente a la soja, también caracteriza y afecta a otros sectores de la producción agropecuaria. La producción de soja pasó de 3,7 millones de toneladas en 1980-1981 a 11 millones en 1996-1997, y a 46,24 millones en 2007-2008, y de representar el 10,6% de la producción granaria total en 1980-1981 a más del 50% en 2006-2007. Más del 91% del aumento de la producción granaria total del país correspondió a la soja durante los diez años que van de 1998 a 2008. Otro tanto sucedió con la superficie sembrada, lo que acarreó múltiples problemas territoriales y sociales.

El cultivo venía en ascenso desde los años setenta y marcó un significativo aumento a partir de la campaña 1995-1996, con la autorización de la semilla transgénica y un contexto de precios favorables. Los datos muestran que entre 1990-1991 y 1995-1996 la superficie sembrada con la oleaginosa había crecido 1.000.000 de hectáreas, mientras que en el quinquenio posterior (1995-1996 y 2000-2001) crecería 4.660.000 hectáreas, y en el siguiente (2000-2001 a 2005-2006) el incremento sería de

4.700.000 hectáreas más sembradas con soja. Más cerca de nuestros días, en el trienio 2005-2006 a 2008-2009 la expansión fue de 1.270.000 hectáreas, con lo que se llega a más del 53% del territorio implantado con granos, casi 17 millones de hectáreas, mientras las estimaciones para 2009-2010 hablan de 18 millones de hectáreas (Teubal y Palmisano, 2010).

Esta significativa expansión ha acarreado una serie de consecuencias tanto en la estructura social agraria, en la estructura productiva y en los mundos campesinos e indígenas, como en el nivel ambiental y el de la salud. Podemos enumerar algunas de ellas a modo de ejemplo:

1. Desaparición de pequeños productores capitalistas en la región pampeana. Los casos más estudiados son los del sur de Santa Fe, donde los colonos podían producir, obtener ingresos familiares y ganancias razonables que permitían una vida digna, con una agricultura de procesos que aportaba alimentos al mercado nacional y a la exportación, con 100 o 150 hectáreas de superficie y una rotación adecuada de cultivos granarios. En la actualidad, esa explotación debe sumar tierra alquilando a vecinos (proceso cada vez más difícil por la competencia de los grandes *pools* de siembra que acaparan esas tierras), o debe cederla a un sojero de mayor capacidad, recibir esa renta y vivir en las ciudades intermedias o en Rosario. Además, todo el conocimiento del productor de tipo familiar que fue sumando adelantos técnicos, que proporcionaba por medio de la extensión un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) al servicio de aquel modelo, se ha ido desperdiciando y finalmente perdiendo.
2. Procesos de sustitución de tierra para ganadería, tambos, cultivos alimentarios por soja en cantidades muy importantes en casi todo el país.
3. Expansión de la frontera hacia el norte, acorralando campesinos con posesión veinteañal, así como a comunidades indígenas amparadas por legislaciones nacionales e internacionales. Todos estos desalojos han sido procesos cargados de violencia que marcaron la aparición en el país de guardias privadas de terratenientes e inversores armados, y la connivencia entre el poder económico y los poderes políticos provinciales.
4. Desaparición de bosques nativos. La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos no ha logrado las reglamentaciones provinciales más adecuadas y la tala indiscriminada para el cultivo de soja parece imparable.

5. Durante los dos últimos años se ha profundizado el debate acerca del uso del desmalezador asociado a la soja: el glifosato. Debido al avance de las investigaciones en embriología (impulsadas, entre otros, por el médico Andrés Carrasco), se han potenciado los estudios de los médicos provinciales, que en tareas encomiables y sin financiación llevan los registros del aumento de todo tipo de enfermedades en las zonas de fumigación aérea y también por tierra. El último año se han utilizado 200 millones de litros de glifosato en las 18 millones de hectáreas, sumados a los 70 millones de otros agroquímicos empleados en el resto de los cultivos. Esta cifra convierte a nuestro país en un verdadero laboratorio humano para registrar las consecuencias de estos agrotóxicos, con un costo de vidas humanas muy alto.

LOS CONFLICTOS POR EL AGRONEGOCIO

Como demuestra el punteo anterior, existen conflictos manifiestos y latentes alrededor del agronegocio. Nos ocuparemos de aquellos que reenvían a la expansión de los inversores a las comunidades campesinas e indígenas que,

a nuestro juicio, son los que laceran los derechos humanos de las poblaciones subalternas de este modelo agrario (aunque no negamos la violación de derechos humanos que acarrea, por ejemplo, la intoxicación con agroquímicos).

Los campesinos, las comunidades indígenas y los trabajadores rurales, todos ellos organizados con apoyo de organizaciones sociales, culturales, técnicas y grupos universitarios, y articulados a federaciones internacionales (Vía Campesina, por ejemplo), han logrado frenar algunos de los desalojos, aun cuando el sistemático avance de los inversores sojeros no se ha detenido. El Movimiento Nacional Campesino e Indígena ha registrado paros de desalojos, recuperación de territorios, enfrentamientos con nuevos y viejos inversores sojeros, etcétera; la Coordinadora de Comunidades Indígenas y Trabajadores Rurales de Argentina (COCITRA) articula distintas identidades, como el Consejo Asesor Indígena (CAI), la Unión de Campesinos Poriajhú del Chaco y el Campamento de Trabajo de Córdoba, que forman parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y de Vía Campesina, y tienen significativas acciones en estas luchas. En este último tiempo, la Federación Agraria Argentina (FAA) volvió a reivindicar las luchas de organizaciones campesinas de Santiago del

Estero, Formosa y Misiones, y a articularse con la cuestión campesina después de su alianza con corporaciones de terratenientes en la Mesa de Enlace. Finalmente, la Asamblea Campesina del Norte Argentino, estructurada en 2006, empalma experiencias de organización y lucha de larga data en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes y el norte de Santa Fe, y algunas de sus organizaciones participan en el Frente Nacional Campesino (GER, GEMSAL y Cátedra de Sociología Rural, 2010).

Por otro lado, en las comunidades indígenas, si bien se registran grandes avances en la recuperación de sus territorios, se sigue violando la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria (Ley 26.160), que da un marco de protección a las comunidades frente a los desalojos de sus tierras, e incluso suspende procesos judiciales en marcha. Otro tanto ocurre con la Ley de Protección de Bosques Nativos. Salta, en tal sentido, es un caso paradigmático aunque se haya llegado a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa provincia se ha configurado un frente de organizaciones de pueblos originarios, campesinos, trabajadores desocupados y ambientalistas que intenta dar respuesta de forma organizada a la deforestación y parar desalojos de comunidades protegidas.

En febrero de 2009, la Corte llevó adelante una audiencia pública en respuesta al amparo presentado por comunidades de pueblos originarios y campesinos de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, que responsabilizaban a las autoridades nacionales y provinciales por la tala indiscriminada de bosques (más de un millón de hectáreas) frente al avance de la frontera agropecuaria y los proyectos forestales, y solicitaban la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las autorizaciones de desmonte. El máximo tribunal terminó por hacer lugar al pedido de las comunidades de ampliación de la medida cautelar de diciembre a la totalidad de autorizaciones concedidas en los cuatro departamentos, hasta tanto el gobierno provincial y el nacional realizaran un estudio de impacto ambiental sobre el efecto acumulativo de estas deforestaciones.

En este escenario, las comunidades kolla de Salta se han organizado en el Qullamarka (Coordinadora de Organizaciones Kolla Autónomas, que agrupa a las comunidades indígenas kolla de la provincia) y de esta forma pudieron profundizar su lucha por la defensa del territorio. Por otra parte, han denunciado en varias oportunidades el avance de la explotación forestal en su territorio, incluso una vez expedida la Corte Suprema en cuanto a su

prohibición, al tiempo que han denunciado el avance de la explotación minera y su repudio total a estas formas de saqueo y contaminación de los bienes comunes. El Qullamarka resiste emprendimientos turísticos, mineros, educativos sin respeto a su cultura, y proyectos de saqueo de bienes comunes en un territorio de más de un millón de hectáreas, antagonizando con modelos de intervención territorial de diferentes programas de desarrollo de distintas ONG o de organismos estatales, mientras mantiene la lucha por la titulación comunitaria de su territorio (Ibídem).

Un párrafo aparte merecen los pueblos mapuche que llevan a cabo acciones para defender sus territorios no solo del avance de inversores nacionales y extranjeros, sino de todo el modelo extractivo en general. A modo de ejemplo, podemos citar el caso de la comunidad Paichil Antriao, en Villa La Angostura, donde un inversor de origen norteamericano pretendía acaparar el poco territorio que aún le queda a la comunidad. Durante varias semanas entre enero y febrero de 2010, se vivieron momentos de mucha tensión con dirigentes mapuches presos y lastimados, y la provincia de Neuquén puso en funcionamiento a las fuerzas especiales de represión, una vez más.

LA ACTIVIDAD DE LA MEGAMINERÍA

La Argentina es un país sumamente vasto en recursos mineros, con una superficie cercana a los 2.700.000 kilómetros cuadrados. El flujo de inversiones extranjeras se dirigió principalmente a la exploración y explotación de minerales metalíferos, destacándose los emprendimientos de Bajo La Alumbrera, Salar del Hombre Muerto y Agua Rica (Catamarca); Mina Aguilar y Pirquitas (Jujuy); Cerro Vanguardia (Santa Cruz); Veladero, Pascua-Lama y Pachón (San Juan); Cordón de Esquel (Chubut), y Potasio Río Colorado (Mendoza). Todos ellos en explotación o muy avanzados en sus preparativos para comenzar. Existe otro importante número de emprendimientos mineros, algunos de los cuales están en explotación y otros en etapas de exploración o prospección.

El 75% de las áreas con potencial minero se encuentra sin explotar, lo que hace del país un centro de atracción de inversores, tal como lo propagandizan las páginas oficiales de Internet. Las principales áreas de explotación se localizan en la cordillera de los Andes, en un recorrido de unos 4.500 kilómetros de largo. Un documento del Ministerio de Economía (Secretaría de Industria, Comercio y PyME, 2005) recomienda la inversión en el sector

minero, argumentando que, de acuerdo con un trabajo de la CEPAL de 1999, basado en información de la Escuela de Minas de Colorado (Estados Unidos), la Argentina presenta la segunda tasa interna de retorno más alta para un proyecto modelo de oro, y la tercera tasa interna de retorno más alta para un proyecto modelo de cobre, sobre un total de veinticuatro países considerados. El Ministerio de Economía complementa estos datos con otra información acerca de la conveniencia de los bajos costos que ofrecen los servicios públicos y la mano de obra local.

Con la sanción en 1993 de la Ley 24.196, en pleno gobierno neoliberal de Carlos Menem, hubo un incremento muy significativo de las inversiones mineras y estas empresas fueron aumentando en número. Un informe de la CEPAL (2005) sostiene que, de siete empresas mineras que se registraban en el país a comienzos de los noventa, se llegó en nuestros días al número de cincuenta y cinco firmas extranjeras y algunas pocas empresas nacionales. Y no era para menos; la citada ley configuró un marco legal inconcebible de ser generado por un Estado soberano: les otorga a las empresas extranjeras plenos derechos de acceder al crédito interno, transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas, repatriar su inversión, además de

extraer cualquier tipo de mineral sin restricciones de ningún tipo (nuclear, por ejemplo). Sumado a este marco general, las sociedades extranjeras que ingresen en este mercado gozarán de los siguientes incentivos, que establece el régimen de inversiones mineras:

- Doble deducción de gastos de explotación: se podrá deducir el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad del proyecto a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias.
- Devolución del IVA a la exploración: la Ley 25.429 incorporó la devolución de los créditos fiscales de IVA originados en la inversión en exploración, a los doce meses de producida la erogación.
- Exención de aranceles y tasas aduaneras: las compañías mineras registradas están exentas del pago de derechos a la importación de bienes de capital y equipos especiales o partes componentes de dichos bienes. Las compañías de servicios mineros también gozan de este beneficio.
- Exenciones impositivas y deducciones: las utilidades derivadas del aporte de minas y derechos mineros para constituir capital de sociedades están exentas del impuesto a las ganancias.

- Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (Activos). Capitalización de los avales de reservas mineras: podrán ser capitalizados (tras su aprobación) hasta en un 50%.
- Devolución anticipada y financiamiento del IVA: cuando se trate de proyectos nuevos o de un aumento sustancial de la capacidad productiva, recibirán el reembolso o el financiamiento del IVA en la importación definitiva o compra de bienes de capital nuevos e inversiones en infraestructura destinadas al proceso productivo.
- Exención de contribuciones sobre la propiedad minera: no se impondrá ninguna contribución sobre la propiedad minera (ni sobre sus productos, establecimientos de beneficio, maquinaria, talleres y vehículos).
- Gravámenes provinciales y municipales: en el Acuerdo Federal Minero (Ley 24.228), las provincias acordaron facilitar la eliminación de gravámenes y tasas municipales e impuestos de sellos que afecten la actividad minera dentro de cada provincia.
- Regalías: de las veintitrés provincias argentinas, muy pocas las cobran. En tanto, varias han adoptado nuevos esquemas, decrecientes a medida que aumenta el valor agregado al mineral dentro del territorio provincial.

Es decir, el marco legal para la explotación minera tiene tal permisividad y favorece de tal modo la inversión foránea, que puede comprenderse fácilmente el aluvión de capitales extranjeros llegados al país en los últimos años. Como dijimos anteriormente, el Estado no solo no regula sino que habilita las condiciones para que la actividad económica extractiva, criticada por los modos de explotación y las consecuencias ambientales en todo el mundo, pueda encontrar una especie de zona franca jurídica y económica en la Argentina (y nos arriesgamos a suponer que en toda América Latina).

ASAMBLEAS, MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES POR EL “NO A LA MINERÍA”

Existe en la actualidad una red de organizaciones con distintas formas de protesta, que van desde acciones de tipo territorial, como bloquear el paso de camiones de las empresas mineras, hasta la producción de videos con famosos artistas que interpelan a un público amplio para recapacitar acerca de lo que significa el modelo extractivo minero. En este último año, fue evidente que la articulación entre estas organizaciones permitió generar importantes avances.

En el nivel legislativo se realizaron audiencias públicas, se discutió y aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para el cuidado de Glaciares y Ambiente periglaciario; se llevaron a cabo acciones legales como amparos, denuncias, presentación de peticiones para la anulación de las leyes nacionales de minería y del código minero, la demanda de consultas populares y legislación que prohíba en el ámbito provincial la minería realizada con sustancias tóxicas.

A partir de estas acciones se lograron, en estos últimos años, leyes de prohibición de la minería a cielo abierto en siete provincias: Chubut (2003), Río Negro (2005), Tucumán (2007), La Pampa (2007), Mendoza (2007), Córdoba (2008) y San Luis (2008)².

EL CONFLICTO MÁS IMPORTANTE DE 2010: ANDALGALÁ, CATAMARCA

En diciembre de 2009 la comunidad de Andalgalá ya estaba alarmada porque una resolución

que circulaba con sello oficial hablaba de las riquezas del subsuelo de esa población y de la necesidad de trasladar toda la ciudad para hacer uso de esos minerales. Desde entonces, esta población cansina del Noroeste argentino comenzó a realizar fuertes protestas contra la empresa Agua Rica (propiedad de la canadiense Yamana Gold Inc., con sede en Toronto). Hubo marchas, sentadas, bloqueo del paso de camiones y otras formas de acción directa no violentas que caracterizan a estos movimientos. Por supuesto, también hubo contramarchas, ya que una parte de las poblaciones de estas cordilleras ha creído en las promesas de trabajo, desarrollo y progreso que traen las empresas (luego, como en el caso de La Alumbra, serían las primeras en denunciar las mentiras y las miserias de las mineras).

La movilización del pueblo de Andalgalá durante una semana entera y en asamblea permanente condujo a la caracterización del conflicto como una “pueblada”. Hubo altos costos sociales, ya que el gobierno provincial puso en acción un cuerpo represivo especial que actuó contra la población. Sin embargo, esta se mantuvo en una posición firme al negar la necesaria “licencia social” a Agua Rica-Yamana Gold, y continuó presionando para que la firma canadiense se retirara de la provincia. Es

² La Rioja había logrado dictar en 2007 una ley que prohibía la explotación minera con sustancias tóxicas, pero un año más tarde fue anulada por el actual gobernador Luis Beder Herrera, quien había impulsado esa legislación y destituido al gobernador anterior, Ángel Mazza.

importante señalar que durante el conflicto de febrero, las acciones de la empresa bajaron en los mercados de Canadá, lo cual demuestra que, a pesar de todo, las empresas no pueden imponerse por la fuerza.

LOS GLACIARES Y SU LEY

Los glaciares son reservas de agua que abastecen a ecosistemas, a la población y a diversas actividades productivas, especialmente agrícolas, y sirven también para aprovechamientos hidroeléctricos. El calentamiento global tiene efectos significativos sobre ellos que hacen peligrar la vida futura en el planeta. En la superficie de agua sobre el planeta, más del 70% corresponde a mares y océanos, pero esta abundancia es relativa ya que el 97,5% del total existente es agua salada, mientras que solo el 2,5% restante es agua dulce.

Por otro lado, del porcentaje total de agua dulce casi el 79% se encuentra en forma de hielo permanente en los hielos polares y glaciares. Del agua dulce en estado líquido, el 20% se encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel de profundidad en el que se hallan (algunos casos superan los 2.000 metros bajo el nivel del mar). Solo el 1% restante es agua dulce superficial de

fácil acceso. Esto representa el 0,025% del agua del planeta (Greenpeace Argentina, 2009a).

Los glaciares son una fuente de agua para la minería, que los afecta tanto en su etapa de exploración —con la construcción de caminos, la perforación, el uso de explosivos, el levantamiento de polvo que se deposita sobre ellos y acelera su derretimiento—, como en la explotación propiamente dicha, cuando la cantidad de agua diaria que se necesita para los procesos de lixiviación es de una magnitud incommensurable. Además, esa cantidad de agua desproporcionada para un uso racional en cualquier lugar del planeta es restada a las actividades de la agricultura de alimentos y al consumo humano.

La persistencia de los glaciares depende del balance entre el agua que se acumula en la parte superior del glaciar (generalmente en forma de nieve) y la que se derrite por ablación en la parte baja. Determinadas variables, como las precipitaciones de nieve y la temperatura, aumentan la masa de los glaciares; en años de lluvia crecen, en períodos secos disminuyen. De esta forma, Greenpeace realiza la siguiente clasificación para los glaciares argentinos (Greenpeace Argentina, 2009b):

- Subtropicales: son los glaciares de los Andes Desérticos y Centrales, con fuertes precipi-

taciones en invierno, veranos secos y fuerte radiación solar. En los Andes de San Juan y Mendoza residen los mejores ejemplos.

- Templados: son los del norte de la Patagonia, con precipitaciones durante todo el año, pero mucho más intensas en invierno, como ocurre en el norte de la Patagonia andina.
- Subantárticos: ocupan el Campo de Hielo Sur y corresponden al clima que caracteriza a los grandes campos de hielo patagónicos y las regiones aledañas, donde los glaciares se forman como consecuencia de las abundantes precipitaciones durante todo el año. Ejemplos: Glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur y otros glaciares de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
- Polares (Antártida): se refiere al clima extremadamente frío que impera en la Antártida y que es responsable de la presencia del manto de hielo.

Debido a los peligros de escasez de agua por el recalentamiento global y su importancia como fuente de agua dulce, el Congreso de la Nación insistió en 2010, después del veto presidencial de 2008, con una nueva ley de presupuestos mínimos para la conservación de glaciares y ambiente periglacial. La ley fue consensuada

por el oficialismo representado por el senador Daniel Filmus y el diputado Miguel Bonasso, de la oposición. Veamos brevemente los artículos más importantes de esta ley sancionada por el Congreso.

De suma importancia, y todo un avance en relación con la anterior ley vetada, en su segundo artículo define el área del ambiente periglacial “con suelos congelados que actúa como regulador de recursos hídricos”, protegiendo una pequeña pero muy importante porción de nuestro territorio. También protege las cuencas hídricas garantizando que, cuando el recurso nace en una provincia, cruza su territorio y continúa su recorrido por una o más provincias, exista un ente interprovincial —que es el Estado nacional— como garante de la unidad de la cuenca. Otro artículo importante de la ley es el 7°, referido a la evaluación ambiental estratégica, que agrega en su estudio los efectos acumulativos y regionales de los emprendimientos a realizarse. En otras palabras, analiza las relaciones de diversos proyectos entre sí.

Un documento firmado por un significativo número de intelectuales y científicos del país sostiene:

Los gobernadores que buscan escudarse en el artículo 124 de la Constitución Nacional —que

establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias— no pueden disponer exclusiva y discrecionalmente de sus recursos naturales, porque es justamente nuestra Carta Magna quien ha limitado lo absoluto de este dominio provincial. Así, *las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental son una facultad del Congreso nacional*, facultad que delegaron las provincias a través del artículo 41 de la Constitución. “*Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas*”. Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando afirmó que: “[...] corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las normas necesarias para complementarlas, ya que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada” (voto de los doctores Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Enrique Petracchi *in re* “Villivar Silvana *versus* provincia de Chubut y otros”, 17 de abril de 2007). Existe, por ende, una clara distribución de competencias Nación-provincias que provee un andamiaje institucional básico sobre el cual deben sancionarse e interpretarse las leyes de presupuestos mínimos. (Svampa et al., 2010)

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

Marshall Berman acuñó la frase “la tragedia del desarrollo” para referirse al drama de nuestro tiempo, en que rige el progreso técnico como un eje central, desconectado de las necesidades de las mayorías y al servicio de la pura obtención de ganancias y el control social (Berman, 1991). El desarrollo, con sus significados otorgados por los países hegemónicos dentro del capitalismo, ha sumado abundantes críticas en su contra. Estos significados están centrados en el crecimiento económico y en la metáfora del continuo “subdesarrollo-desarrollo”. Dice Gustavo Esteva en uno de los libros críticos más interesantes acerca de estos conceptos:

La metáfora del desarrollo dio hegemonía global a una genealogía de la historia puramente occidental, privando a los pueblos de culturas diferentes de la oportunidad de definir las formas de su vida social. La secuencia vernácula (desarrollar es posible después de enrollar) se invirtió con la transferencia. Las leyes científicas tomaron el lugar de Dios en la función de enrollar, definiendo el programa. (Esteva, 2000: 69)

Desde las teorías críticas originadas en Europa, se cayó en la trampa de los sentidos fundacionales del concepto, se mostró el desarrollo, dice Esteva, como un proceso histórico que se desenvuelve con el mismo carácter necesario de las leyes naturales. La mayoría de los pensadores críticos latinoamericanos no cuestionaron esta concepción y hasta se encontraron atrapados y deslumbrados por el mito del desarrollo capitalista.

Como vemos, severas críticas ha recibido el concepto de desarrollo en los pensamientos contemporáneos. No obstante, esa crítica se ha agudizado y particularizado a nuestros territorios latinoamericanos cuando nos referimos al “desarrollo extractivo”. En un provocativo ensayo, Jaürgen Shuldt y Alberto Acosta sostienen que los países que basan la reproducción material de su vida en los recursos naturales no pueden salir del círculo del subdesarrollo. Dicen estos autores:

La profusión de recursos naturales de que disponen tiende, entre muchos otros procesos endógenos de carácter patológico que la acompañan, a distorsionar la estructura y la asignación de los recursos económicos del país, redistribuye negativamente el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos, mientras se generaliza

la pobreza, da paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que consolidan mentalidades “rentistas”, profundiza la escasa y débil institucionalidad, alienta la corrupción y deteriora el medio ambiente. (Shuldt y Acosta, 2009: 10)

Suena como un enunciado paradójico: son pobres, son subdesarrollados porque tienen enormes riquezas naturales. Los autores muestran que los países actualmente ricos con importantes recursos naturales comenzaron a explotarlos cuando sus modelos económicos y democráticos ya estaban consolidados (Noruega, Suecia). Si este tipo de “contracasos” en el Norte rico no abunda, los casos de países con inmensos recursos naturales que han estado postrados en la polarización social, pobreza extrema, inestabilidad política, instituciones impregnadas de corrupción, sí abundan en el mundo. Desde los países petroleros de Asia hasta las minerías andinas y los países que derrochan la biodiversidad violando tratados internacionales que protegen los patrimonios de esas comunidades. La Amazonia en su conjunto es un claro y evidente ejemplo. Se podrá preguntar cuáles son las alternativas. Las hay, son muchas, y representan la esperanza de otros caminos. Los países andinos como Ecuador y Bolivia hablan del “buen vivir” (*sumak kaw-*

say). Es una interesante idea, heredada de las comunidades indígenas, que habrá que pensar para sociedades con historias más complejas. Es un desafío, pero se trata de no eludir estas discusiones en momentos en que la expansión de derechos sociales, comunicacionales, de género, culturales, así como la defensa irreducible del castigo a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura de 1976-1983, despiertan la esperanza de la construcción de una sociedad mejor. El extractivismo y la depredación de los territorios (agua, tierra, cerros, aire, bosques) es un camino solo de ida y no condice con una sociedad que aspira a que se respeten los derechos de todo tipo.

BIBLIOGRAFÍA

- Berman, M. 1991 *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad* (Madrid: Siglo XXI).
- CEPAL 2005 “Situación y beneficio de la actividad minera en la Argentina” en <www.cepal.org/publicaciones>.
- CEPAL 2009 *Informe económico* (Buenos Aires: CEPAL).
- Esteva, G. 2000 “Desarrollo” en Sachs, W. *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder* (México DF: Galileo).
- GER, GEMSAL y Cátedra de Sociología Rural 2010 “Recursos naturales/Bienes comunes: planes hegemónicos/disputas y resistencias” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 249, enero-febrero.
- Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) 2005 “Introducción” en *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2008 “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del ‘agronegocio’: el caso argentino” en Mançano Fernandes, B. (coord.), *Campesinado e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual* (San Pablo: CLACSO).
- Greenpeace Argentina 2009a “Justicia ambiental. La crítica situación del acceso al agua” en <<http://www.greenpeace.org/argentina/contaminacion/justicia-ambiental-la-cr-tica>>, marzo.
- Greenpeace Argentina 2009b “Cambio climático: futuro negro para los glaciares” en <<http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-climatico/>>

- cambio-climatico-futuro-negro-3.pdf>, agosto.
- Harvey, D. 2003 “The New Imperialism: Accumulation by Dispossession” en *The Socialist Register* (Londres: Merlin Press).
- Secretaría de Industria, Comercio y PyME 2005 *Invertir en Argentina. Minería* (Buenos Aires: Ministerio de Economía y Producción).
- Shuldt, J. y Acosta, A. 2009 “Petróleo, rentismo y subdesarrollo, ¿una maldición sin solución” en *Extractivismo, política y sociedad* (Quito: CLAES / CAAP / Fundación Rosa Luxemburgo).
- Svampa, M. et al. 2010 “Diez razones para apoyar la Ley de Protección de los Glaciares sancionada por la Cámara de Diputados” en <<http://maristellasvampa.net/blog/?p=138>>.
- Svampa, M. y Antonelli, M. A. (eds.) 2009 *Minería transnacional. Narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Teubal, M. y Palmisano, T. 2010 “El conflicto agrario: características y proyecciones” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates* (Buenos Aires: Antropofagia).

LA REBELIÓN DE 2001-2002: PROTESTAS, RUPTURAS Y RECOMPOSICIONES*

NORMA GIARRACCA Y MIGUEL TEUBAL**

*A Ema Teubal, porque la vida
y la ternura insisten.*

INTRODUCCIÓN

Durante los meses posteriores al 19 y 20 de diciembre de 2001, aparecieron un sinnúmero de

trabajos con diversas interpretaciones sobre los hechos ocurridos. Los partidos de izquierda hablaban de una situación pre-revolucionaria o de un “argentinazo”, mientras los sectores más conservadores marcaban la falta de alternativa política de un movimiento que, justamente, recusaba “a los políticos”. A partir de “estas rebeliones” —como las caracterizó el politólogo Ariel Colombo—, se puso en evidencia que, en la década anterior, había comenzado un ciclo de protestas y que las provincias le habían otorgado el principal escenario. Para algunos analistas, después de ese período, el país entero se levantó en una gran insurrección, siendo la de Buenos Aires la última gran pueblada después de Santiago del Estero, Cutral-Có, Mosconi, Tartagal, etcétera.

En este libro, precisamente, quisimos volcar los resultados de nuestras propias investigaciones acerca de qué estaba pasando en las provincias mientras la ciudad capital sonaba sus

* Giarracca, N. y Teubal, M. 2007 “La rebelión de 2001-2002: protestas, rupturas y recomposiciones” en AAVV *Tiempos de rebelión: “Que se vayan todos”. Calles y plazas en la Argentina, 2001-2002* (Buenos Aires: Antropofagia).

** Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

cacerolas o armaba sus asambleas barriales. Para poder armar el mapa social de protestas, rebeliones, acciones colectivas y saqueos fue necesario no solo trabajar el material de aquellos meses sino haber transitado por la información de la década, tanto en la gran ciudad como en las regiones provinciales. Aquí nos proponemos exponer esa información de modo resumido para que el lector pueda comprender “la trama” de la protesta en las provincias.

Los días previos a la jornada del miércoles 19 de diciembre de 2001, habían sido desesperantes. Hubo una gran variedad de protestas, pero las más notorias y extendidas fueron los saqueos a los supermercados. Si existe la sospecha de que el aparato del Partido Justicialista estimuló los saqueos, lo cierto es que la gran población comenzaba a estar masivamente desocupada, sin recursos y propensa a procurarse los alimentos de cualquier manera. En el atardecer de ese día, el presidente Fernando De la Rúa declaró el estado de sitio.

La respuesta al mensaje presidencial emitido por cadena radiofónica nacional fue inmediata. Desde los balcones y ventanas comenzó a sonar espontáneamente el ruido de cacerolas de un modo rítmico y continuo. Los medios, que acababan de transmitir el mensaje presidencial, siguieron difundiendo lo que ocurría

en distintos puntos de la ciudad y se convirtieron en un enlace importante del gran evento que empezaba a gestarse. Los porteños ganaron las calles, los vecinos de un mismo barrio convergían en las esquinas y las plazas; todos con vestimentas informales, las mujeres cargando a los niños y empuñando los más creativos implementos hogareños para hacer sonar la disconformidad y el hartazgo. Espontánea y simultáneamente, aparecían los primeros “Que se vayan todos”.

El grueso de la clase política fue repudiado: desde De la Rúa hasta Carlos Menem, Domingo Cavallo, Carlos Ruckauf, Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde e incluso el ex-vicepresidente Carlos Álvarez. El sentimiento de rechazo no solo cayó en los políticos sino también en los jueces de la Corte Suprema y los ex-funcionarios sospechados de corrupción en anteriores gobiernos. Esa noche, la policía no intervino en los barrios ni en el punto de convergencia después de la medianoche: la Plaza de Mayo.

Muchos permanecieron toda la noche en la plaza, en una demostración pacífica de desobediencia civil. En las primeras horas del día 20, Cavallo renunció y De la Rúa quedó libre para negociar con el Partido Justicialista. A los que permanecieron en la plaza se les sumaron, por la mañana, oficinistas, trabajadores y jóvenes

que se acercaban desde el Gran Buenos Aires. A media mañana llegaron los organismos de derechos humanos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo con sus inconfundibles pañuelos.

A mediodía se desataba ya la feroz represión, primero en la plaza y luego en las proximidades. Después se supo que gran parte del Gran Buenos Aires sufrió casi una masacre. Aun cuando ya ha comenzado el juicio a los responsables, no quedan claras las razones políticas que llevaron al gobierno de la Alianza a actuar de este modo. Unas 10 personas murieron en el centro y más de 30 en otras zonas, pero la mayoría cayó en el fatídico Gran Buenos Aires. Fue la peor represión durante un gobierno elegido democráticamente: en pocas horas, más de 40 personas, casi todos jóvenes, fueron asesinados a la vista de toda la población¹.

El Gobierno dimitió luego de algunos intentos para conseguir el apoyo justicialista. De la Rúa huyó en un helicóptero, frente al repudio de la población anonadada por el comportamiento de un Gobierno que había prometido

cambiar el rumbo neoliberal y despótico de Carlos Menem. Ante la crisis institucional, la principal oposición elevó interinamente al cargo presidencial a Adolfo Rodríguez Saa, del Partido Justicialista de San Luis, quien se mantuvo solo una semana en sus funciones. Después de varias tentativas, Eduardo Duhalde, el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires, fue investido por la Legislatura como presidente provisional.

Como decíamos antes, muchos procesos ayudan a comprender estos acontecimientos. Comenzaremos por la crisis económica, que sobredetermina un estado de conflictividad social que venía manifestándose en la década anterior. Pasaremos luego a presentar los principales datos de la protesta de los noventa para regresar a los hechos del 19 y 20 y preguntarnos qué pasó después.

LA CRISIS EN 2001 Y 2002

La primera gran crisis del nuevo milenio, que alcanza su punto álgido en 2001-2002, constituye una de las más importantes de nuestra historia, incluso más que la de los años treinta.

Si bien, como ocurre con todas las crisis, esta contiene aspectos sociales, económicos, cultu-

1 Recordemos que el Partido Radical tenía en el siglo XX el triste récord de “la semana trágica” (1919) y de “la Patagonia rebelde” (1921), dos históricos hechos de levantamientos populares reprimidos salvajemente con gobiernos elegidos por elecciones.

rales, políticos e institucionales, en lo esencial puede considerarse una crisis del neoliberalismo, del modelo socioeconómico implantado a rajatabla en nuestro país, fundamentalmente en la década del noventa.

Este modelo tuvo dos antecedentes importantes:

1. el golpe militar de 1976, que instauró una suerte de “Estado burocrático autoritario” (O’Donnell, 1979); y
2. el denominado “golpe económico” de 1989, que derivó en las hiperinflaciones del período 1989-1991.

Ambos “golpes” pueden ser visualizados como mecanismos de “disciplinamiento” de la sociedad argentina en su conjunto, preparatorios del “marco institucional” necesario para la plena implantación de los ajustes estructurales instrumentados en los años noventa.

Uno de los condicionantes de esos ajustes estructurales fue el denominado “Plan de Convertibilidad”, de abril de 1991. Este plan estableció un nuevo sistema cambiario, fijándose el peso en una relación de uno a uno con el dólar. Asimismo, se decretó la plena liberalización de las transacciones financieras desde y hacia el exterior y se prohibió toda creación monetaria

que no fuera respaldada por reservas de divisas del Banco Central, así como el flujo de capitales desde el exterior o nuevo endeudamiento externo. Presumiblemente, con esas disposiciones se eliminaría toda discrecionalidad del Gobierno con relación a la política monetaria y cambiaría y se establecería en el país una suerte de sistema patrón dólar².

Tales medidas tuvieron como objetivo manifiesto reducir las expectativas inflacionarias basadas en las devaluaciones del tipo de cambio que habían desatado las hiperinflaciones del período 1989-1991, prohibiéndose por ley toda indexación del aumento de precios³.

En términos generales, el objetivo de Domingo Cavallo, quien instituyó este régimen cambiario y monetario siendo ministro de Economía de Menem, era establecer en el país un sistema duradero que habría de estabilizar la

2 Se trata de un sistema generalmente en desuso desde los años treinta, solo aplicado por países como Hong Kong, Bermudas, las Islas Caymán, Estonia y Argentina. Un análisis crítico de estos regímenes se presenta en Eigengreen, Barry (1966: 139, 184).

3 Como excepción a esta prohibición, puede señalarse el alza de las tarifas de los principales servicios públicos, los que, una vez privatizados, fueron indexados por el índice de precios mayoristas de los EEUU (véase Teubal, 2007).

economía, abriéndose el camino para la implantación de un severo programa de *ajuste estructural*.

Entre las medidas adoptadas en el marco de este plan, pueden mencionarse:

1. Un programa radical de privatizaciones: en menos de tres años, se desbarató por completo el sistema empresario estatal con la privatización de más de treinta empresas públicas, tan diversas como teléfonos y comunicaciones, compañías aéreas, empresas petroquímicas, el petróleo, los ferrocarriles y otros sistemas de transporte, 10.000 Km. de caminos, el sistema de distribución del gas natural, la electricidad, el agua, las industrias del hierro y el acero, una serie de empresas incorporadas al área de defensa, represas hidroeléctricas y otros ítems variados, como canales de televisión, hoteles, puertos, silos e hipódromos. Si bien se trató de un programa drástico, no incluyó la institucionalización de los mecanismos de regulación que caracterizan a las privatizaciones aplicadas en el primer mundo. Muchas de estas operaciones fueron cuestionadas debido a su endeble base legal o a la corrupción relacionada con su implementación;
2. Una política de desregulaciones extremas y de apertura casi irrestricta hacia el exterior.

Se eliminaron todas las restricciones cuantitativas aplicadas a las importaciones y se redujo significativamente el nivel arancelario de estas. Iguales medidas fueron impuestas a la movilidad del capital, en particular, extranjero. Estas normas se correspondían con la eliminación de los regímenes de promoción industrial del interior del país y el programa “Compre nacional” aplicable a las compras estatales de bienes y servicios. Además, en el marco del Decreto de desregulación de 1991, se desregularon aspectos esenciales de la política agraria y se eliminaron los organismos que regulaban la actividad agropecuaria desde los años treinta. Con el correr del tiempo, fueron introduciéndose medidas desregulatorias importantes en el mercado laboral, que tendían a su “precarización”. Este aspecto del sistema culminó con la sustancial privatización del sistema de seguridad social. Y nuestro país se transformó en uno de los más desregulados del mundo, sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial;

3. La entrada al Plan Brady, que contó con el beneplácito de la comunidad financiera internacional y que regularizó plenamente los pagos de los servicios de la deuda externa. En parte, esto fue posible gracias a los re-

cursos provistos por el programa de privatizaciones. A partir de entonces, el sistema de ajuste estructural se sustentó en el continuo endeudamiento externo que se vio obligado a realizar el Gobierno ante la tendencia creciente del déficit de la balanza de pagos. Si bien, en un primer momento —hasta 1995 aproximadamente—, el Plan de Convertibilidad y los ajustes fueron acompañados por un sustancial ingreso de capitales desde el exterior, la crisis del tequila (México, 1995) revirtió esta situación. Así también, la fuga de capitales fue uno de los determinantes esenciales de la posterior crisis de comienzos del milenio;

4. Programas de ajustes fiscales severos, requeridos por el FMI como condicionante para la obtención de nuevos préstamos provenientes del exterior. La exigencia de que se lograran superávits fiscales y de la balanza de pagos fue considerada necesaria para acumular fondos destinados al pago de la deuda externa. Se hicieron corrientes las visitas de los técnicos del FMI al país y los consiguientes acuerdos, exigidos por ese organismo para promover, supuestamente, la confianza de los “inversores extranjeros”, en especial, aquellos vinculados con el sector financiero internacional. Gran parte de estos

ajustes incidieron directamente sobre los gastos de salud, educación y otras necesidades básicas de la población en general y, en particular, de los más necesitados.

HACIA LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA

Entre 1998 y 2004 (año este en que fue superada la debacle de 2001-2002), la economía argentina dejó de crecer. Tal estancamiento presagiaba una tendencia hacia la recesión, depresión que fácilmente podía desembocar en una crisis. A partir de entonces, también se intensificó la protesta social. Pese al cambio, en el clima político-social que había llevado a la derrota al candidato presidencial Eduardo Duhalde en 1999, el nuevo gobierno de De la Rúa, traicionando sus promesas electorales, continuó aplicando aquel severo ajuste estructural. Se aumentaron los impuestos, se redujeron los salarios y se sancionaron leyes adicionales para la “flexibilización” del mercado laboral. Ninguna de estas medidas tuvo efectos “contra cíclicos”. Todo lo contrario: contribuyeron significativamente a que se profundizara la crisis.

Los ministros de Economía de la Alianza en el poder fueron incapaces de abordar la crisis que comenzaba a manifestarse. Tanto José Luis Machinea, con su “blindaje financiero”, como Ricardo López Murphy, con sus ajustes extremos, o Domingo Cavallo, a quien se le dio poderes especiales para “salvar” a la Argentina de la debacle que se avecinaba, adoptaron estratagemas presumiblemente destinadas a crear “confianza” entre las organizaciones financieras internacionales pero que solo empeoraron la situación. El camino hacia la crisis estaba plenamente allanado: parecía que nada podía parar la corrida sobre los bancos y la fuga de capitales hacia el exterior. En realidad, el Gobierno y sus ministros de Economía estaban empeñados en evitar el *default* de la deuda externa y el fin de la convertibilidad, aun a costa de enormes penurias sociales, que son las que finalmente primaron. Se preocuparon únicamente por lograr la confianza de los círculos financieros internacionales y por el “riesgo país”, que generaría tasas de interés internacionales cada vez más altas. Pero no pudieron —o no quisieron— lidiar eficazmente con la corrida bancaria, la fuga de capitales y el drenaje de divisas. Entre febrero y noviembre de 2001 (cuando se creó el “corralito” para restringir el retiro de depósitos de los bancos), los pocos fondos del sistema bancario que quedaban —y que pertene-

cían fundamentalmente a los medianos y pequeños ahorristas— se redujeron a 16.300 millones de pesos/dólar. El drenaje continuó sin pausa: entre diciembre de 2001 y marzo de 2002, hubo una fuga de depósitos de 12.700 millones de dólares. Esta fuga total de 29.000 millones representa el 34% de los depósitos que el sistema bancario poseía en febrero de 2001. En ese mismo año, las reservas de divisas del Banco Central descendieron 19.000 millones de pesos/dólar.

La crisis apareció, como todas, como una crisis financiera y, también como todas, tuvo consecuencias nefastas sobre la actividad económica y la población en general. Con la corrida sobre los bancos y la fuga de capitales y divisas se rompió el crédito y la cadena de pagos. Ante el cierre de negocios y fábricas, la recesión se transformó en una crisis de enormes proporciones. La única salida que vislumbró el Gobierno para evitar la quiebra de algunos bancos fue la implementación del corralito (luego “corralón”). Sin embargo, al congelarse el retiro de fondos de los bancos, quedó totalmente deslegitimado el sistema bancario y se potenció el colapso del sistema económico en su conjunto.

A esa altura, estaba claro para la mayoría de la población que la crisis era resultado de las políticas neoliberales que la habían empobrecido, arruinando a la industria y robando a los

ahorristas que habían depositado sus peculios de buena fe en los bancos. No era de extrañar que los ciudadanos salieran a la calle con la sensación de que todos habían sido saqueados: no solo los desocupados, los trabajadores, los pensionados y jubilados, a quienes les robaron sus empleos, sus sueldos, sus pensiones y jubilaciones, sino también las clases medias y trabajadoras, a quienes despojaron de sus ahorros. Era razonable que los fundamentos mismos del sistema fueran cuestionados.

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS

¿Cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de los programas de ajuste estructural aplicados en forma drástica en la década del noventa? ¿Cómo incidieron, en última instancia, en la crisis económica de 2001-2002?

Hasta que comenzó a manifestarse la crisis del tequila, en 1995, el caso argentino era considerado en los foros internacionales como uno de los modelos a seguir, conjuntamente con el chileno y el mexicano (antes de Chiapas). Las medidas implementadas por el gobierno de Menem habían cambiado sustancialmente las reglas de juego de la economía argentina. El “mercado” comenzaba a reinar en forma inusitada y

los grandes intereses internos e internacionales festejaban por la rentabilidad alcanzada en sus negocios. Lógicamente, el ministro de Economía Domingo Cavallo era muy bien visto en los círculos financieros internacionales.

Paulatinamente, se fue instaurando en el país un nuevo “régimen de acumulación”, dejándose de lado el anterior proceso de industrialización por sustitución de las importaciones. Se manifestó como nunca la hegemonía alcanzada por los grandes grupos económicos, en particular, los intereses financieros. En este contexto, una de las marcas esenciales del modelo neoliberal fue el drástico proceso de desindustrialización que se manifestó en el país.

El conjunto de medidas de ajuste estructural tendiente a favorecer al mercado significó una enorme transferencia de ingresos, riqueza y poder hacia el grupo dominante socioeconómico y político y, en particular, hacia grandes corporaciones económicas nacionales y extranjeras. En este sentido, no se trataba solo de programas económicos, también se requería el ajuste de las instituciones para adecuarlas al funcionamiento del mercado, o sea, a favor de los grandes intereses asociados al establishment.

Pero esta concentración del poder y la riqueza, tuvo como contrapartida la devaluación de todo lo que tuviera que ver con lo social y, por

consiguiente, la marginalidad y la exclusión de la mayoría de la población. Como se señala con frecuencia, los ajustes estructurales aplicados en nuestro país implicaron una mayor regresividad en la distribución del ingreso, la desocupación en todas sus variantes y una reducción en los salarios e ingresos reales de los sectores de bajos recursos, tanto directos como indirectos. Implicaron también un aumento de las diferentes formas de pobreza e indigencia.

Se plantea esta perspectiva frente a aquella presentada por los defensores de las políticas de ajuste, que sostienen que el modelo:

1. no iba a ser altamente regresivo, en términos de sus consecuencias sobre la distribución de los ingresos y la riqueza;
2. iba a conducir a un crecimiento y desarrollo sostenido de la economía en el tiempo; y
3. no era un modelo que hiciera altamente vulnerable la economía a los shocks externos e internos (lo que finalmente trajeron a la luz los acontecimientos de estos años).

De más está decir que estas características están entrelazadas entre sí: el Plan de Convertibilidad juntamente con las privatizaciones y los demás elementos que conformaron los ajustes estructurales en los años noventa contribuye-

ron de diferente modo a la (regresión) retracción en la distribución de la riqueza y los ingresos y tuvieron un efecto determinante sobre la crisis y la protesta social.

LOS DATOS DE LA CRISIS EN 2001 Y 2002

Decíamos que la crisis comenzó en 1998. En 2002, el PBI había caído un 19,5%. La curva descendiente comienza con una baja del 3,4% en 1999, seguida por una del 0,8% en 2000. En los dos años siguientes, cae un 4,4% en 2001 y un 10,9% —casi un récord histórico— en 2002. Tal indicador refleja el colapso de la actividad económica. En los primeros meses de 2002, la actividad industrial cayó más del 18% (como ejemplo, la producción automotora descendió el 55%).

No sorprende, entonces, que aumentara la desocupación en el país. Hacia junio de 2002, la tasa de desempleo de la población económicamente activa alcanzó el 23% (se había fijado en 14,7% en 2000), mientras que otro 22% se consideraba subocupado. Diversas formas de desocupación y de ocupación altamente precaria se habían hecho endémicas en la Argentina de los años noventa.

Los ingresos reales empeoraron para la población, excepto para aquellos que poseen el

10% de las rentas más altas del país. Como consecuencia, la distribución de la riqueza alcanzó niveles inusitados de regresividad. En 1974, el 10% de la población con ingresos más bajos recibía un 2,3% del PBI, mientras que el 10% con ingresos más altos recibía el 28,2% del PBI, o sea, 12,3 veces más que aquellos. Para el año 2002, la brecha entre el 10% de la población más pobre y el 10% más rica se había ampliado a 33,6 veces.

Naturalmente, en este contexto, aumentaron los índices de pobreza e indigencia. El proceso de empobrecimiento en este período fue uno de los más rápidos e intensos en el mundo, alcanzando en 2002 niveles escandalosos. A comienzos de la década del noventa, el 15% de la población tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza. En el año 2000, esta relación había alcanzado el 30%. Entre enero y mayo de 2002, el número de personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza aumentó en 3,8 millones, o sea, 762.000 personas por mes, 25.000 por día. En junio de ese año, más de la mitad de la población (18 millones de personas) era “pobre”, mientras que el 22% (7,7 millones) era indigente, o sea, tenía ingresos que no le permitían comprar una canasta de bienes alimenticios básicos. Se estimaba que el 58% de los 9,8 millones de personas menores de 14 años era pobre, y el 28% era indigente. Como lo señalaba en su momento Clau-

dio Lozano, de la CTA: “La Argentina es un país en el que la mayoría de los pobres son jóvenes y la mayoría de los jóvenes son pobres” (Lozano, 2002). Esta penuria alcanzó también a los de mayor edad. Un gran porcentaje de jubilados y pensionados —quienes, de por sí, recibían ingresos muy bajos y engrosaban el grupo de los “nuevos pobres”— cayó a la categoría de indigente. Cabe destacar que 1,8 millones de trabajadores en actividad eran también indigentes. Según informes periodísticos, entre mayo de 1998 y mayo de 2002, los indigentes con trabajo aumentaron un 70%, lo cual refleja la paupérrima calidad de la mayoría de los empleos en la Argentina.

El grado de empobrecimiento que se alcanzó durante la crisis de 2001-2002 se manifiesta en los indicadores de desnutrición infantil. En La Matanza, en el Gran Buenos Aires, más del 58% de los niños se encontraban desnutridos; en la provincia de Misiones, más del 60% tenía algún tipo de anemia, debido a que el Gobierno había cortado la provisión de alimentos a las escuelas. La situación nutricional en el país resultó —y sigue resultando— escandalosa, dado que se produce lo suficiente como para alimentar adecuadamente a 300 millones de personas. La Argentina produce, entre otras cosas, 80 millones de toneladas de granos de todo tipo, más de 2 toneladas *per capita*. Sin embargo, en aquel

momento, millones de personas padecían hambre (una proporción importante de la población sigue padeciéndolo, pese a la recuperación económica lograda desde entonces).

No solo cundió el hambre en medio de la crisis. También se deterioraron como nunca los servicios sanitarios y educativos. En muchas provincias, los maestros y empleados públicos pasaban meses sin cobrar sus sueldos. Y comenzó la emigración masiva, en un país considerado históricamente como una patria de inmigrantes.

UNA DÉCADA DE PROTESTA

Si bien Carlos Menem y el Partido Justicialista ganaron las elecciones en 1989, se considera el año 1991 como el comienzo de una década signada por el neoliberalismo, que finalizaría con los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre. El período estuvo atravesado por la puesta en marcha de un plan económico que modificaría profundamente la fisonomía del país y por un “ciclo de protestas” en todo el territorio nacional.

En los comienzos de la democracia, fueron las grandes centrales sindicales quienes habían jaqueado al gobierno de la Unión Cívica Radical mientras los movimientos por los derechos humanos no cejaron en sus reclamos por justicia y

castigo a los responsables de la represión del período anterior. Pero las acciones de protestas que se iniciaron en la década del noventa eran de un nuevo tipo y se expandieron rápidamente, sobre todo, del interior al centro del país. En efecto, son protestas territoriales tanto en sus orígenes como en sus expansiones. La ciudad de Buenos Aires siguió siendo un escenario privilegiado para los reclamos, pero, a diferencia de lo que ocurría en la década del ochenta, las manifestaciones y los reclamos comenzaban en el interior y en muchas ocasiones se marchaba sobre Buenos Aires.

Una primera aproximación a estas protestas puede hacerse por medio de su cuantificación y, para ello, recurriremos a los datos de la Consultora de Investigación Social Independiente (CISI), que lleva un registro pormenorizado de las expresiones de conflictos a través de periódicos nacionales y provinciales⁴.

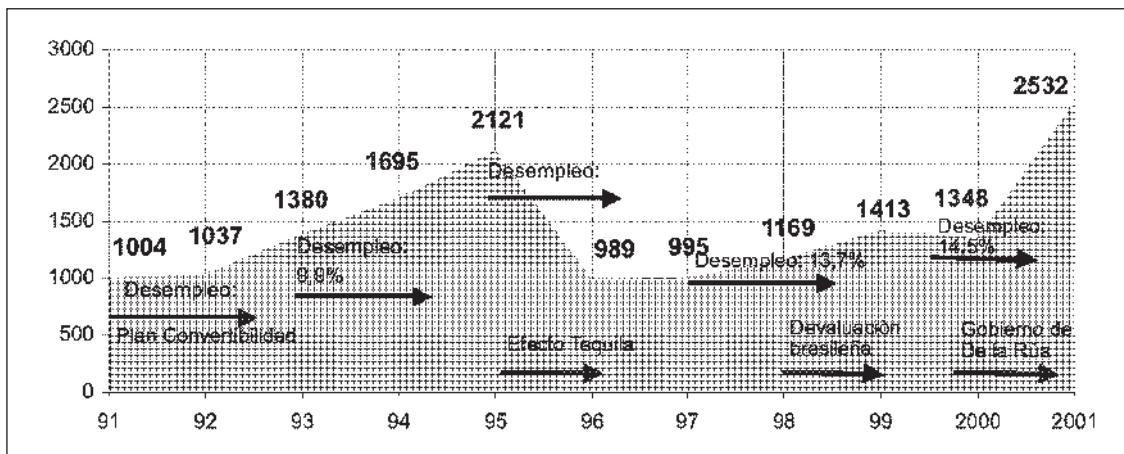
4 Dicho seguimiento, según la consultora, fue realizado de manera exhaustiva y diaria, dando como resultado un conjunto de 16.000 protestas. Se contabilizan los registros por la “forma de lucha”, independientemente del actor que la lleva a cabo. Es decir, si un sindicato realiza consecutivamente una huelga y una marcha, para la CISI constituyen dos expresiones de protestas. Esto puede dar un número superior al que resultaría si la protesta se registrara por “sujeto de la acción”. No obstante, lo importante es la variación de una década y, en tal sentido, la metodología siempre fue la misma.

Como vemos en el siguiente cuadro, las expresiones de conflicto registradas por la CISI no bajaron de mil por año durante toda la década, siendo 1995 el momento pico (año de la reelección presidencial de Carlos Menem). A partir de 1996, los registros bajan, y comienza un ascenso sostenido desde 1997 hasta el final de la década. Si en los ochenta la mayoría de

las acciones de protesta fueron llevadas a cabo por organizaciones sindicales (con excepción de aquellas realizadas por los movimientos de derechos humanos), en la década del noventa, las protestas de nuevos actores sociales, como desocupados, vecinos, campesinos, etcétera, llegaron a constituir un porcentaje muy importante del total.

Gráfico N° 1

Total de conflictos durante el Plan de Convertibilidad
(Período 1991-2001, eventos económicos y políticos más importantes)



Fuente: CISI, 2001: 6.

De 1996 a 1997 hubo un importante aumento (casi el 10%) en la participación de las protestas no sindicales. La desocupación y las tradicionales conexiones políticas del sindicalismo con el Partido Justicialista permiten comprender las razones de la disminución de las protestas de los asalariados organizados. Existían dos desprendimientos sindicales de la poderosa Confederación General de Trabajadores (CGT): la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Ambas fueron las principales organizadoras de los paros, marchas, alertas y ocupaciones con base sindical. La participación de la CGT oficial fue muy baja.

Según los datos de la CISI, los paros fueron la principal forma de la protesta sindical, acumulando el 35,4% de los registros; le siguieron las movilizaciones, con un 28,1%; luego, las declaraciones de alerta, las ocupaciones pacíficas, etcétera.

La protesta de tipo social (no sindical) creció exponencialmente en este periodo, pero la presencia de la lucha de tipo sindical también estuvo presente. La singularidad de la década reside, por un parte, en la presencia de gremios y centrales desprendidas de la CGT oficial y, por otra, en la falta de logros concretos de la lucha sindical (el 93% de las manifestaciones

no tuvieron respuesta alguna por parte de los actores demandados, fueran estos el Estado o del sector privado).

Las principales causas de los conflictos de base sindical giraron alrededor de los salarios. Cuando estas causas se cruzan por “tipo de empleador”, las salariales se mantienen como primer motivo de conflicto y el demandante es el Estado, mientras que a los sectores empresariales se les demanda más por mantenimiento de la “fuente de trabajo” y por el “deterioro de las condiciones laborales”.

La lista de gremios con mayor registro de protestas está encabezado por los docentes y los trabajadores del Estado (ambos gremios pertenecen a la CTA). El viejo sindicato de los metalúrgicos, actor de primera línea en los conflictos sindicales de los años sesenta y setenta, aparece ocupando el octavo lugar y produciendo solo algo más del 20% de los conflictos con base sindical.

La lucha por mantener la educación pública fue sostenida por los docentes, los estudiantes universitarios y los padres de alumnos. No obstante, la protesta del gremio de los maestros primarios —CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina)— fue significativa, pues se convirtió por más de dos años en la unidad simbólica

de muchos reclamos. Los maestros instalaron una gran carpa frente al Congreso Nacional y mantuvieron grupos de maestros ayunando (durante tres o cuatro semanas cada grupo) con el apoyo de otros actores, de visitantes internacionales, músicos, artistas, periodistas, etcétera. La “carpa docente” se levantó cuando asumió el gobierno de la Alianza, en 1999, pues las nuevas autoridades habían estado muy comprometidas con las luchas de los docentes y habían prometido aumentar el presupuesto para la educación pública.

La “carpa” fue, tal vez, la protesta que mostró con mayor claridad cómo el reclamo sindical podía articularse con los nuevos movimientos sociales que estaban surgiendo. El periodo estuvo atravesado por esta nueva protesta, que se había iniciado en mayor medida en el interior. Fue una década de lucha por la defensa de derechos adquiridos, de patrimonios acumulados por generaciones —como los campos de los productores familiares— por la preservación de posiciones sociales que habían permitido una cierta educación, salud y vivienda.

A diferencia de la década del setenta, cuando la lucha social buscaba expandir derechos o modificar una sociedad que se consideraba injusta, la de los años noventa pretendía mantener los derechos y patrimonios que se poseían.

El temor a las categorías pontificadas por el Banco Mundial —“excluidos” o “nuevos pobres”— se convirtió en un acicate para protestar, lo cual se ve claramente en la lucha de base sindical, donde los reclamos más frecuentes al sector empresario fueron por el mantenimiento de la fuente de trabajo. Pero también en los movimientos de base social se ve que reclamaban ya por trabajo (perdido o no encontrado), por no perder las casas, las tierras, etcétera.

Se protestó por muchas de las decisiones tomadas por el Gobierno, quien desreguló los espacios económicos y de la seguridad social, socavando instituciones generadas en las primeras décadas del siglo XX (son las que aparecen en el gráfico como causas “políticas”); también se protestó por decisiones de la Justicia, que se subordinó fuertemente al poder económico y político (“Justicia”); por las medidas económicas, que disminuyeron el presupuesto para el gasto social (“económicas”); por nuevas fuentes de trabajo o planes de trabajo para los desocupados (“trabajo”); por el mantenimiento de la educación pública (“educativas”); y toda la gama de reclamos de matriz cívica que son, quizás, las que intentaron la expansión de libertades, seguridades públicas y derechos (“sociales”).

Las nuevas protestas de base social se iniciaron en el interior del país; entre ellas considera-

mos al movimiento de desocupados, a los movimientos del sector agrario (al margen de las tradicionales corporaciones), a los movimientos de consumidores de servicios privatizados.

El movimiento de desocupados (ahora denominados “piqueteros”) se inició en 1996 en una provincia del sur del país: Neuquén. Los cortes se repitieron al año siguiente, en 1997, y desde entonces se expandió a otras provincias lejanas, ubicadas en el norte del país, hasta que en 2000 llegó a la provincia de Buenos Aires.

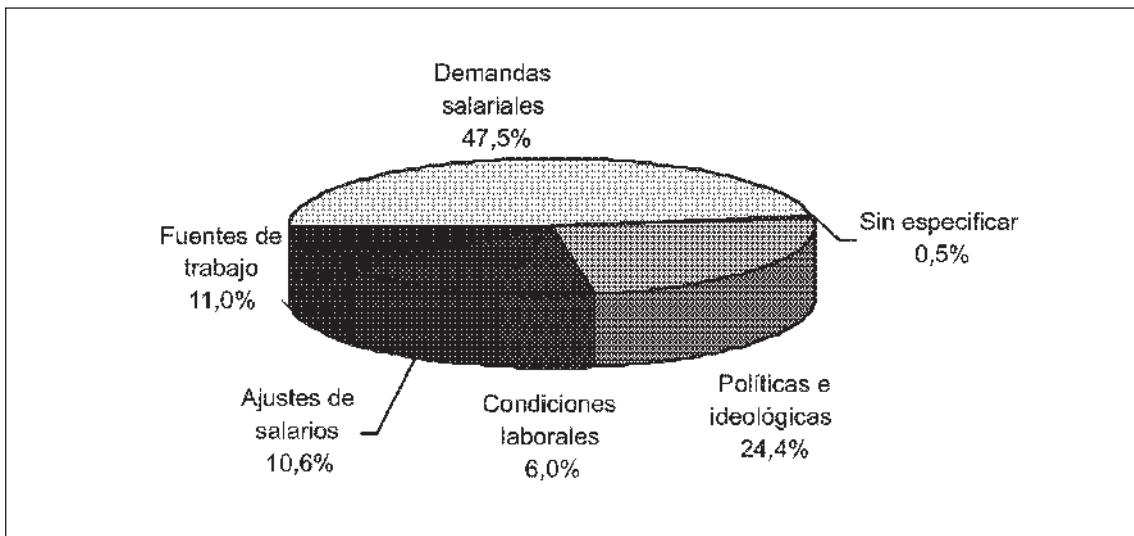
Los desocupados impusieron un género de protesta —los cortes de ruta— con unos actores centrales: “los piqueteros”. El montaje es siempre el mismo: se corta una ruta de importancia para la circulación de productos, con fogatas realizadas con cubiertas de vehículos o materiales similares; los hombres se turnan (sobre todo, durante la noche) y las mujeres se ocupan de conservar calientes la comida y la bebida. Son apoyados por otros actores de la región (docentes, empleados estatales, etcétera) y reciben apoyo de terceros (religiosos, periodistas y dirigentes gremiales y políticos). Generalmente, negocian la cantidad y la regularidad de los “planes Trabajar” con funcionarios provinciales o nacionales. En la provincia de Salta, desde 1997, se rea-

lizaron cortes de rutas casi todos los años y se ha logrado constituir una organización que incluye proyectos productivos de diversos tipos (véase Barbeta y Lapegna, 2001). Los “piqueteros” de la provincia de Buenos Aires comenzaron los cortes de ruta en forma sistemática en el año 2000 y han mantenido la misma estética y *performance* de sus compañeros del norte del país.

Los movimientos de campesinos y *farmers*, así como los de campesinos indígenas, fueron muy importantes durante la década y lograron articularse con los movimientos de los sectores empobrecidos de las ciudades (véase Grupo de Estudios Rurales, 2001). La lucha se centró en la tierra:

1. para recuperarla, a través de una legislación que finalmente estableció reparaciones históricas para las poblaciones indígenas;
2. para acceder a ella, lucha que llevan a cabo los movimientos de campesinos de las regiones del norte del país; o
3. para no perderlas, que fue el caso de un grupo de mujeres que se opusieron a los remates de sus tierras endeudas (véase Giarracca y Teubal, 2001).

Gráfico N° 2
Causas de los conflictos (1993-2000)



Fuente: CISI, 2001: 76.

En el interior, fueron muy importantes las luchas de vecinos de poblados de tamaño intermedio cuando se llevaron a cabo procesos de privatización. La más conocida es la realizada, desde 1995 a 1998, por poblaciones del sur de

Tucumán, que terminó con la retirada de una gran empresa francesa que había ganado la licitación para privatizar el servicio de agua potable en la provincia (véase Giarracca y Del Pozo, 2002).

LA PROFUNDIZACIÓN DE LA PROTESTA Y EL LEVANTAMIENTO POPULAR

A lo largo de aquellos años, las severas políticas de ajustes, el número creciente de pobres y la pelea sin cuartel para conseguir los planes sociales por parte de los desocupados fueron generando un clima de profundo rechazo hacia la clase política. A fines de noviembre de 2001, la medida conocida como “el corralito” exasperó a los ahorristas (la mayoría de ellos con ahorros inferiores a los diez mil dólares, con una clara inserción en los sectores medios urbanos)⁵.

La semana que comenzó el lunes 17 de diciembre sumó diversas acciones y protestas, fenómenos de naturaleza muy distinta:

1. protestas en las provincias, del mismo tipo que describimos en el apartado anterior;
2. nuevas protestas de comerciantes y ahorristas de Buenos Aires pero como vimos en “la trama” también en todo el país, de-

bido a la situación económica generada por el “corralito”;

3. rebeliones contra autoridades municipales y provinciales por falta de pago; y
4. los saqueos a supermercados, en varias provincias, en busca de alimentos (ver “la trama”).

Es decir, hubo viejas y nuevas protestas y, además, hubo saqueos por parte de los sectores más desesperados.

Lo que más inquietó al gobierno de Fernando De la Rúa fue, justamente, el desorden generado por los saqueos, que algunas fuentes consideran que se venían dando desde varios días atrás. Esta situación se dio en muchas provincias y en la ciudad capital; en algunos casos, comenzaba con reclamos de grupos de desocupados y la intervención de autoridades nacionales y provinciales evitaba el saqueo, convenciendo a los dueños de los negocios de repartir bolsones de comida. En todos los casos, hubo represión y fuertes enfrentamientos entre “saqueadores” y fuerzas policiales, en las provincias de Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. El saldo fue de 40 muertos reconocidos (a medida que avanzan las investigaciones, se suman más), 140 heridos (de los cuales 76 eran policías) y 551 detenciones.

⁵ La situación individual de los ahorristas guarda verdaderos dramas: se trataba de ahorros para afrontar enfermedades terminales, últimos ahorros de ancianos, ahorros transitorios de quienes habían vendido la casa y estaban por comprar otra, etcétera.

En la tarde del 19 de diciembre, el gobierno nacional informó que pondría en marcha un plan de emergencia alimentaria, pero se aprovechó esta comunicación para denunciar “activismo” en el grupo de los saqueadores, lo cual preparó el terreno para el anuncio, horas más tarde, del estado de sitio. En efecto, a las pocas horas, el Presidente firmó el decreto del Poder Ejecutivo que establecía el estado de sitio por treinta días en todo el territorio nacional. La respuesta de la población fue inmediata: el desconocimiento de la medida.

A nuestro juicio, lo que sucedió a partir de ese momento marca un quiebre con aquello que se venía dando desde comienzos de la semana, por muchas razones. En primer lugar, es el producto de una acción colectiva particular, la desobediencia civil, en tanto se desconoció una de las medidas que más atemorizaron en otras épocas a la población civil: el estado de sitio. En segundo lugar, la salida de los vecinos de Buenos Aires no se hizo por reclamos sectoriales, como había ocurrido durante todo el día (los ahorristas, los comerciantes, los maestros que no habían cobrado, etcétera) sino que se clausuraba cualquier reclamo sectorial y cualquier identidad social: salieron todos a la calle espontáneamente, desde el espacio privado, para encontrar en el transcurrir de esa noche la consig-

na que les daría nuevamente una identidad colectiva: “Que se vayan todos”. Con ese grito se dramatizaba aquello que marcó el carácter disruptor de la marcha: una falla en el sistema de representación político, cuyas consecuencias en aquel momento resultaban impredecibles.

La jornada posterior, la del 20 de diciembre, estuvo signada por la impotencia de un Gobierno desobedecido y deslegitimado, que a lo único que atinó fue a la violencia más extrema, cobrando un fatal número de víctimas. El gobierno provisional de Rodríguez Saa, elegido por la Asamblea Legislativa, renunció la semana siguiente después de otras marchas de características semejantes a las del 19 a la noche. El 1° de enero de 2002, se hizo cargo de la conducción del país Eduardo Duhalde, quien gobernó hasta el 25 de mayo de 2003, fecha en que asumió como presidente electo Néstor Kirchner.

LAS ASAMBLEAS BARRIALES

Después del 19 y 20 de diciembre, se sucedieron varias marchas con “cacerolazos”. La primera fue a la semana de asumir Rodríguez Saa y el desencadenante fue la presencia en el gabinete de un ex-intendente de Buenos Aires y sus reiteradas apariciones en público haciendo

alarde de su pasado como dirigente corrupto y cuestionado. Los porteños volvieron a salir a la calle, indignados con el nuevo Gobierno. Esa misma noche se conoció la dimisión del personaje cuestionado. A los dos días, renunciaba el propio Rodríguez Saa.

Estos dos momentos de la movilización popular —la que logró la renuncia de De la Rúa y la que empuja al ex-intendente y luego al nuevo presidente a renunciar— consolidaron la idea de que la gente en las calles, movilizada y reclamando, recuperaba el poder que antes había entregado a sus representantes y podía generar cambios en el ámbito del Estado. Los porteños descubrieron su poder destituyente y se plantearon su capacidad instituyente.

Desde los primeros días de enero, paralelamente al estreno del tercer gobierno, comenzaron a discutirse estas cuestiones y a generarse tres nuevas formas de acción derivadas del 19 y 20 de diciembre:

1. las asambleas vecinales,
2. el reclamo semanal para que renunciara la Corte Suprema de Justicia, y
3. una marcha —“cacerolazo”— semanal bajo la consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Tanto el “cacerolazo” semanal como el reclamo frente a los Tribunales de la Nación para que renunciara la Corte Suprema se volvieron rutinarios como formas de manifestación y se agotaron al terminar el verano. Constituyeron *performances* basadas en repertorios tradicionales de los argentinos: la marcha y la gran concentración. No obstante, se le sumaban nuevas estéticas aportadas por jóvenes artistas, desde las murgas (expresiones de ritmos populares usadas en los carnavales) hasta verdaderas representaciones teatrales⁶. Los primeros actos contra la Corte Suprema fueron convocados por la Asociación de Abogados Laboralistas y concentraron una importante cantidad de gente. Las manifestaciones tenían la clara demanda de que renunciaran los nueve miembros de la Corte que habían sido nombrados por los distintos gobiernos democráticos y que actuaron de modo dependiente y al servicio de las necesidades del gobierno de turno, sumando, además, hechos de corrupción. Este proceso derivó en un pedido de “juicio político” por

6 En una de las concentraciones y marchas contra la Corte Suprema, nueve jóvenes artistas disfrazados de presidiarios, portando carteles con los nombres de los ministros de la Corte, parodiaron un juicio en las escalinatas del edificio.

parte del Poder Legislativo, y la destitución de varios ministros de la Corte.

De estas tres acciones derivadas de las jornadas de diciembre, la formación de las “asambleas vecinales” es la que trajo consecuencias más interesantes. En efecto, desde las primeras semanas de enero, los vecinos se constituyeron en asambleas por barrios en casi toda la ciudad de Buenos Aires y en algunas zonas del Gran Buenos Aires. Estas se generaron en forma espontánea y, poco después, comenzó a funcionar una gran asamblea interbarrial (asamblea de asambleas) en el Parque Centenario de la ciudad de Buenos Aires. Hasta allí llegaban representantes rotativos de cada barrio, con las propuestas consensuadas. Al final de cada domingo, se votaban las propuestas del día y aquellas que lograban ser aprobadas se constituían en mandatos para el conjunto de las unidades participantes.

Estos grupos deliberativos eran tan variados como lo son los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Desde enero de 2002, se trataron y discutieron temas muy diversos y generales que con el correr de los meses se abandonaron o se dejaron como consignas constantes y se abordaron otro tipo de cuestiones, relacionadas con problemas que emanaban de la crisis de las instituciones del Estado. En efecto, en las

primeras semanas fue habitual que se votaran propuestas tales como “No pagar la deuda externa” o “Que se vaya Duhalde”. Con el tiempo, cada asamblea o conjunto de asambleas generó discusiones acerca de estos temas, pero se orientaban cada vez más a resolver problemas referidos a la salud, el consumo, el pago de los servicios, etcétera.

El aspecto más interesante de las asambleas, a nuestro juicio, es la implementación de otro modo de pensar la política: ya no solo como la delegación de poder que se efectúa en cada sufragio para que un gobierno tome decisiones en nombre de “una mayoría” sino como una participación permanente en el espacio público, convirtiendo a este en el lugar de la deliberación, el encuentro, la toma de decisiones, el rechazo de acciones gubernamentales. Las asambleas se organizaron de modo horizontal en tanto existía un rechazo a las formas tradicionales de representación. Con el tiempo y la participación de los partidos de izquierda, esa horizontalidad se diluyó y comenzaron las prácticas tradicionales.

En los comienzos —los primeros cuatro meses, más o menos—, la palabra circulaba por rigurosos turnos y la participación se establecía por la mera presencia, clausurando identidades que pudieran establecer cualquier forma de je-

rarquía. En muchas asambleas se discutieron los criterios de reunión y ni siquiera se establecieron claras marcas territoriales (por barrio). Una persona o familia podía encontrarse en un barrio que no fuera el suyo y participar en otra asamblea. Las representaciones fueron transitorias (para las interbarriales) y la idea de la vieja organización con dirigentes fue suprimida.

La presencia de los partidos de izquierda generó fuertes tensiones dentro de las asambleas y, sobre todo, dentro de la “interbarrial” de Parque Centenario. Con algunas excepciones, todos los partidos de izquierda tomaron a las asambleas y a las organizaciones de desocupados como espacios de militancia política, tratando de darles una “dirección” (que ellos evaluaban que les faltaba). Muchas asambleas rechazaron abiertamente estas actuaciones y otras fueron más tolerantes.

Las asambleas fueron las nuevas expresiones políticas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. En el interior del país, como vimos en “la trama” fue un fenómeno menos difundido. No obstante, en el mes de setiembre de 2002, hubo dos grandes marchas en las provincias del norte bajo la consigna “Que se vayan todos”; una de ellas, en la provincia de Jujuy, reprimida con una intensidad que nuevamente superaba los límites del sistema

democrático. A nuestro juicio, esta experiencia política que comienza el 19 de diciembre con el telón de fondo de la década, cubre la experiencia asamblearia, las multisectoriales provinciales, etcétera y se clausura con la muerte de los dos jóvenes piqueteros (Maximiliano Kosteki y Darío Santillán) en junio de 2002 y el desespejado llamado a elecciones de Duhalde.

LOS ECOS DEL 19 Y 20, CINCO AÑOS DESPUÉS

Cuando escribimos la última versión del artículo para este nuevo libro, han pasado ya cinco años y varios meses desde aquellas jornadas del 19 y 20. Néstor Kirchner está terminando su mandato de cuatro años con una reelección asegurada (que recaerá sobre él o sobre su esposa, la senadora Cristina Fernández). Las pocas asambleas que han perdurado tienen las semblanzas de organizaciones barriales preocupadas por asuntos concretos. El movimiento piquetero, que fue el centro de las protestas en 2002, 2003 y 2004, se encuentra fragmentado: quedan algunos grupos con poca presencia pública, manejados por partidos o militantes de izquierda que le dieron forma, y otros que trabajan para el gobierno nacional. Los llamados

grupos autónomos subsisten, muy reducidos, en la provincia de Buenos Aires y la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, pionera en esta categoría, se retuerce en la tensión entre la autonomía y la posibilidad de que uno de sus miembros participe en las elecciones municipales de 2007 con el partido gobernante.

Muchos consideran que esta “governabilidad” conseguida con los viejos actores de la protesta es un triunfo del grupo que rodea al presidente Kirchner por su gran capacidad de generar hegemonía y consenso. Lo han logrado con elementos disciplinantes y sin distribuir ingresos más allá de los múltiples programas sociales efectuados de modos distintos a la etapa anterior. En efecto, si bien los índices de pobreza e indigencia se redujeron drásticamente después de la subida de 2002 y 2003, siguen existiendo 10 millones de pobres y, de ellos, 3,3 millones por debajo de la línea de indigencia. El nivel de polarización social fluctúa sin bajar demasiado: el 10% más adinerado del país lo es 31 veces más que el 10% más pobre. Es decir, esta aparente “governabilidad” (para usar el término de los gobernantes) está lograda sin una política de distribución del ingreso que salpique a los sectores subalternos. Simplemente, las políticas asistencialistas se aplican con mayor eficiencia en sus dos sentidos: paliar la

miseria y producir un eficiente control social de los sectores más afectados. No obstante hay que remarcar que esto último se logra con gran despliegue de técnicas, coordinadores provenientes de grupos sociales, de un modo donde el control se transforma en “autocontrol” o “autodisciplinamiento” (véase el sugerente artículo de Zibechi, 2007).

Los sectores de medianos y altos ingresos han recompuesto sus ingresos y riquezas respectivos y gozan de la prosperidad que puede lograrse con una tasa de crecimiento económico que no baja del 8% anual. La ciudad capital, como casi todas las capitales provinciales, goza de la prosperidad que dejan el turismo y la reactivación del consumo. Un ejemplo elocuente es que nuevamente ha subido el consumo suntuario a niveles mayores que los de fines de la década del noventa.

Como decíamos antes, tampoco hubo grandes represiones (como en el gobierno de la Alianza)⁷ pero sí formas particulares de disciplinamiento y control social. En las manifestaciones hubo numerosos detenidos y la mayoría de los activistas está procesada y tiene por lo menos una causa judicial en su contra. Las Mujeres

7 En abril de 2007, en Neuquén las fuerzas represivas asesinan a un maestro en huelga.

Agropecuarias en Lucha, por ejemplo, organizadas en 1996, que pararon quinientos remates de sus tierras antes de la llegada del gobierno de Kirchner, fueron detenidas y procesadas por primera vez en setiembre de 2003, es decir, cuatro meses después de que se estrenaran las actuales autoridades, y en marzo de 2007, llegaron a los tribunales de Mercedes en un juicio por “desacato a la autoridad y lesiones leves”. Finalmente fueron absueltas. El juicio a los manifestantes que actuaron frente a la legislatura porteña, en 2004, fue paradigmático en este sentido. Los desalojos de campesinos e indígenas de sus tierras, en el interior, lejos de las cámaras de televisión, son llevados a cabo con mucha más violencia policial que la que se usaba en la década del noventa. No se respetan legislaciones nacionales ni internacionales; sin embargo, el costo interno es muy bajo. Los antropólogos han comenzado a hablar de “etnocidio”⁸.

El interrogante que nos planteamos, entonces, es ¿por qué? ¿Por qué las protestas vuel-

ven a ser de importancia regional y la opinión pública nacional (medios, intelectuales) no las levantan como elementos importantes del presente político? ¿Por qué los ecos del 19 y 20 se oyen y se sienten tan lejanos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué se ha logrado construir tal consenso alrededor de este Gobierno y su modelo general de país?

La respuesta es muy compleja y difícil. En primer lugar, existe un clima continental que recupera a los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, y los califica de “progresistas”. Son administraciones que se basan en una retórica “antineoliberal”, aunque generan sistemáticas condiciones para la profundización de la economía neoliberal de esta etapa del siglo XXI: entrega de los recursos naturales, arreglos bilaterales con EEUU y la Unión Europea, sometimiento a la política financiera internacional, etcétera. Pero vuelven a instalar “el mito del desarrollo”, la idea de un país productivo, con inversiones, con fuentes de trabajo.

Las nuevas protestas son las de los pobladores de las pequeñas ciudades del interior, campesinos e indígenas, por la defensa de los bienes naturales (Giarracca, 2007). En efecto, la asamblea de Gualeguaychú, las asambleas de autoconvocados por el “No a la minería” y la lucha de las comunidades indígenas y de los cam-

8 En un programa de televisión, “Los Mansos” (TN), sobre los tobas, los antropólogos entrevistados del equipo de Morita Carrasco caracterizaron la situación actual como etnocidio. En tal sentido, el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, 2006) muestra muy bien a qué se refieren los especialistas.

pesinos para que no les arrebaten sus tierras no han cejado y se han incrementado en toda esta década. Como ocurría en los años noventa, solo algunas (Gualedaychú) concentran la atención de Buenos Aires; el resto pasa desapercibido o, mejor dicho, bajo la indiferencia de la gran ciudad, que otra vez vive el mito de un desarrollo que temporalmente la favorece (como el Plan de Convertibilidad en su momento).

Por otro lado, el gobierno de Kirchner se abocó desde un comienzo a una causa muy cara a la sociedad argentina: la justicia y los derechos humanos, referidos a las atrocidades cometidas por el Estado nacional en la última dictadura militar. En este tema, desarrolló una política clara, firme y decidida y logró el respaldo de todo el espectro de organismos de derechos humanos y del “sector de movimiento” que los rodea. Este hecho influyó mucho en el apoyo de los intelectuales (sobre todo, los mayores de 50 años, o sea, la generación del Presidente y su esposa), de muchos periodistas (de los que se esperaban mayores críticas) y de gran parte de la población de sectores medios, que ha sido sensibilizada durante estos veinticuatro años acerca del sufrimiento de la generación del setenta.

Para comprender la relación que tienen estos logros del Gobierno con los acontecimien-

tos del 19 y 20, tenemos que preguntarnos qué otras posibilidades se jugaban en aquellos momentos. La rebelión y las asambleas duraron, como política en las calles, más de lo esperable. Pero ¿cómo mantenerse en las calles? ¿Cómo mantener esa capacidad destituyente-instituyente que tuvieron las primeras semanas? ¿Cómo conservar en las bases ese poder que se sustrajo del poder ejecutivo? ¿Cómo lograr que los otros poderes —legislativo y judicial— comprendieran estas nuevas expresiones políticas? Todo el andamiaje de la vieja política —izquierda, centro y derecha— se afanó para que la única salida posible fuera la del Estado, la de los partidos y la de las instituciones conocidas en el orden económico, social, educativo, cultural, etcétera. El fuerte espíritu institucionalista le propuso a la rebelión plebeya y anárquica volver a un orden y procuró asustarla diciéndole que el caos era peligroso, que hombres y mujeres en las calles era una señal sumamente inquietante.

Zygmunt Bauman (2005) utiliza dos conceptos, *societas* y *comunitas*, para referirse a la tensión siempre presente entre orden, jerarquías, estructuración, por un lado, y la espontaneidad, creatividad, autoorganización, fraternidad y rebeldía caótica, por el otro. En el análisis de estos últimos aspectos, siempre

posibles en los grupos humanos, desde el orden (*societas*) aparecen como el reinado de la anarquía. No obstante, agrega el autor, la posibilidad de la *comunitas* depende de la imaginación humana, de su inventiva y coraje para romper la rutina (lo sedimentado) y aventurarse por caminos inexplorados. Tanto el mercado como el Estado invaden y colonizan la *comunitas*, por lo que esta implica para la rutina asistida por el poder y por su escandalosa capacidad productiva y potencial autosuficiencia. Son espacios que mercado y Estado despojan de todo valor; los corren de la atención pública, los inferiorizan.

Cuando la *comunitas*, la política en las calles, los puentes y las plazas logran subsistir por mucho tiempo, los antiguos actores se preocupan y aparecen las viejas instituciones “para poner orden”. Los mecanismos son múltiples: se les resta apoyo a aquellos, se los aísla, se los reprime y judicializa. Se les buscan “direcciones revolucionarias” o partidos de “centro-izquierda” o de “izquierda independiente” para encauzarlos. Si lo que está en cuestionamiento son las dos instituciones básicas de esta sociedad, Estado y mercado, aparecen mecanismos inesperados para volver al orden y recordarnos que otros “desarrollos” económicos u otros Estados más amistosos

son siempre posibles. Por eso es interesante observar cómo se logró encauzar el cuestionamiento radical al Estado del 19 y 20. Como dice Badiou (2003), cuando “el movimiento” se opone peligrosamente “al Estado” (el autor juega con la dualidad de sentidos de los términos), ¿cuál es el mejor modo de terminar con el movimiento? Las elecciones. La vieja política siempre gana las elecciones porque están hechas para ella, dice el autor.

En la actualidad, aparecen otros cuestionamientos fuertes, pero esta vez a otras instituciones además del Estado: a las actividades económicas basadas en los recursos naturales (véase Giarracca, 2007). A nuestro modo de ver, aquí reside la continuidad más fructífera entre aquellos momentos de la rebelión y el presente: las asambleas que ya no están en las plazas porteñas sino en Esquel, Catamarca, San Juan, Gualaguaychú, luchando contra la economía extractiva y depredadora, luchando contra el mercado de esta etapa del neoliberalismo y denunciando al Estado como socio (como también lo fue de las privatizaciones en los noventa). Lo hacen con tenacidad y permanencia y ponen el tema del desarrollo (la gran “tragedia del desarrollo”) en la agenda pública.

Los significados y consecuencias (intervenciones) políticas de los cuestionamientos radi-

cales que se hacen esporádicamente al Estado, al mercado y a las viejas instituciones en general, tanto en la Argentina como en muchos otros países de América Latina y del mundo, no son de fácil comprensión. Es difícil pensarlos y entenderlos desde los paradigmas epistemológicos y societales que, a pesar de sus agotamientos, tienen vigencia. Los nuevos aportes teóricos como el de la “colonialidad del poder y del saber” (Quijano, 2000), los desafíos que ofrecen otras epistemologías del conocimiento, de “frontera” (Grosfoguel, 2006), las deconstrucciones de los conceptos de “progreso”, “desarrollo”, “mercado”, “educación”, “tecnociencia” (Ilich, 2006; Esteva, 2002; Sibilía, 2006) y otros modos de pensar la política (Badiou, 2003) se encaminan al esfuerzo de descifrar estos fenómenos que irrumpen desde las márgenes y que periódicamente conmueven al mundo.

BIBLIOGRAFÍA

- Azpiazu, D. 1998 *La concentración en la industria argentina a mediados de los noventa* (Buenos Aires: Flacso / Eudeba).
- Azpiazu, D. et al. 1986 *El nuevo poder económico en los años 80* (Buenos Aires: Legasa).
- Badiou, A. 2003 “Conferencias en Buenos Aires” en *Acontecimiento* (Buenos Aires: Escuela Porteña).
- Barbetta, P. y Lapegna, P. 2001 “Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en el norte salteño” en Giarracca, N. et al. *La protesta social en la Argentina* (Buenos Aires: Alianza).
- Basualdo, E. 2000 *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa* (Buenos Aires: FLACSO / IDEP / Universidad Nacional de Quilmes Ediciones).
- Basualdo, E. et al. 2002 *El proceso de privatización en Argentina. La renegociación con las empresas privatizadas* (Buenos Aires: La Página / Universidad Nacional de Quilmes Ediciones).
- Briones, C. et al. 2002 “Ruidos que hablan broncas. El decir y el hacer de las cacerolas en Argentina”, Tercer Encuentro Anual de Performance y políticas en las Américas. Globalización, migraciones y espacio público (Lima).
- Cheresky, I. 2002 “Autoridad política debilitada y presencia ciudadana de rumbo incierto” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 179, mayo-junio.

- CISI (Gonda, A.) 2001 “El Conflicto Social dentro del plan de convertibilidad. Argentina 1991-2001”, Informe (Buenos Aires: Consultora de Investigación Social Independiente).
- Colectivo Situaciones 2002 *19 y 20. Apuntes para el nuevo pensamiento social* (Buenos Aires: De Mano en Mano).
- Colombo, A. 2002 “Estas rebeliones” en <<http://www.forodesobedienciacivil.com>>.
- Esteva, G. 2000 “Desarrollo” en Sachs, W. *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder* (México DF: Galileo).
- Giarracca, N. et al. 2001 *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2001 “Crisis and Agrarian protest in Argentina. The Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha” en *Latin American Perspectives* (Riverside: Sage) Vol. 28 N° 6.
- Grosfoguel, R. 2006 “La descolonización de la economía política y los estudios poscoloniales. Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global” en *Tábula Rasa* (Bogotá) N° 4, enero-junio.
- Hardt, M. y Negri, T. 2002 *Imperio* (Buenos Aires: Paidós).
- Hershberg, E. 2002 “Why Argentina crashed — and is still crashing” in *Nacla*, Vol. XXXVI, N° 1, julio-agosto.
- Illich, I. 2006 *Obras reunidas* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Lewkowicz, I. y asociados 2002 *Sucesos argentinos* (Buenos Aires: Notas Ad-hoc).
- Lozano, C. 2002 *Catástrofe social en Argentina. La situación a junio del 2002* (Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación de la CTA).
- Petras, J. y Veltmeyer, H. 2002 “Argentina: entre la desintegración y la revolución” en <www.rebellion.org/hemeroteca/petras/argentina160702.htm>, traducción de J. Capelán y R. García.
- Quijano, A. 2000 “Colonialidad del poder: eurocentrismo y América Latina” en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (Buenos Aires: CLACSO).
- Rock, D. 2002 “Racking Argentina” en *New Left Review*, Vol. 17, septiembre-octubre.
- Schuster, F. et al. 2002 *La trama de la crisis* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires) Informe de Coyuntura N° 3.

- Scribano, A. 1999 "Argentina 'cortada': cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste" en López Maya, M. (comp.) *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Sibilia, P. 2005 *El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales* (Buenos Aires: FCE).
- Tarrow, S. 1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza Universidad).
- Teubal, M. 2000-2001 "Structural Adjustment and Social Disarticulation: The Case of Argentina" en *Science & Society* (Nueva York) Vol. 64, N° 4, invierno.
- Teubal, M. 2001 "From Import Substitution Industrialization to the 'Open' Economy in Argentina: The Role of Peronism" en Demmers, J.; Fernández Jilberto, A. E. y Hogenboom, B. (eds.) *Miraculous Metamorphoses. The Neoliberalization of Latin American Populism* (Londres / Nueva York: Zed Books).
- Zibechi, R. 2003 *Genealogía de la revuelta* (Buenos Aires: Letra Viva).
- Zibechi, R. 2007 "El arte de gobernar los movimientos", presentación al seminario "Telón de Fondo II" (Buenos Aires) 27-29 de abril.

EL DÍA EN QUE LA PLAZA DE MAYO SE VISTIÓ DE CAMPO*

NORMA GIARRACCA Y MIGUEL TEUBAL**

No es usual que el campo manifieste su penuria mediante un “tractorazo” como el que tuvo lugar el 27 de julio último. Fueron múltiples los contingentes de tractores, coches y camionetas que rodearon la Plaza de Mayo. Resulta infrecuente ver al “hombre de campo” ocupar un espacio compacto de la Plaza frente a los balcones mismos de una Casa Rosada un tanto desteñida. La marcha provocó un impacto sobre los porteños que no siempre tienen la

ocasión de conversar mano a mano con este personaje un tanto mitificado por la prensa y los medios de comunicación de masas. Esta vez fue el campo que vino a la ciudad y fue una oportunidad única para los porteños: poder dialogar coloquialmente con los productores agropecuarios, teniendo a tantos en un mismo sitio, al mismo tiempo.

¿Quiénes son? ¿Cuán representativos son del campo en su globalidad? ¿Por qué protestan? ¿Contra qué o quiénes?

No cabe duda de que fue una protesta que dejó perpleja a mucha gente. Para gran parte de la población, “el campo” está compuesto fundamentalmente por un conjunto importante de grandes ganaderos terratenientes, que poseen vastas extensiones, y que viven fundamentalmente de la renta agraria, o bien de otros negocios que tienen fuera del sector. No cabe duda de que este estrato social —“nuevo o viejo poder terrateniente”— existe. Incluso ha crecido

* Giarracca, N. y Teubal, M. 1993 “El día en que la Plaza de Mayo se vistió de campo” en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 118, agosto-septiembre.

** Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

como un beneficiario privilegiado del modelo económico aplicado en los últimos lustros. Asimismo, es quizás el principal protagonista que tuvo en cuenta el plan de Convertibilidad a la hora de elaborar una política agropecuaria de desregulaciones extremas y de liberalización plena del mercado.

Sin embargo, esos grandes productores agropecuarios son minoría en el campo argentino, pese a la influencia que aún ejercen. Una parte importante está nucleada en la Sociedad Rural Argentina (SRA), que no estuvo de acuerdo con el “tractorazo”. No fueron los grandes productores los que se asomaron a la Plaza de Mayo, aunque algunos pudieron haberlo hecho.

Los productores que desfilaron ese día, en su gran mayoría, fueron medianos y pequeños. Los más chicos, particularmente de las regiones más alejadas del país, tampoco estuvieron allí; no porque no quisieran, sino porque no podían debido a los altos costos del transporte y demás gastos involucrados. Para ellos, trasladarse a la Plaza significaba palabras mayores. No obstante, algunos asistieron.

Los que vinieron fueron fundamentalmente los productores medianos y chicos nucleados en la Federación Agraria Argentina (FAA) y en la CONINAGRO, aunque muchos que son miembros de las Confederaciones Rurales

(CRA) también participaron. Son los más afectados por el plan de Convertibilidad, que eliminó la Junta Nacional de Granos y otros entes reguladores de la actividad agropecuaria que les garantizaban precios sostenidos para la producción o canales opcionales para la comercialización. Son los productores que más utilizan insumos agropecuarios y los más comprometidos con el sector. El alza del transporte y del precio de los servicios e insumos (gasoil), les han aumentado inusitadamente los costos. Muchos fueron beneficiarios del “boom” de los años setenta, que se extendió hasta mediados de la década siguiente. Un dólar fijo los afecta especialmente ya que, con el alza de los costos internos, la baja de los precios internacionales reduce los precios internos de sus ventas. Son también los que más impuestos pagan y, por lo general, no tienen actividades fuera del sector como los grandes, que así compensan coyunturas desfavorables.

Son productores afectados por la crisis agropecuaria, por precios relativos desfavorables y por las políticas de liberalización y ajuste. Pese a que los precios de los alimentos siguen aumentando, no ocurre así con los precios agropecuarios, que desde el plan de Convertibilidad se mantienen o caen (Teubal, 1993). El ajuste a las provincias ha significado

que las gobernaciones y los municipios también intenten aumentar sus recaudaciones fiscales vía nuevos impuestos.

Estos guarismos no parecen reflejar un aumento de la importancia relativa de los productores medianos en los últimos 30 años como consecuencia del denominado proceso de “agriculturización”. No hay dudas de que el sector chacarero sigue teniendo una importancia primordial, pero también cabe destacar la notable persistencia de los grandes productores y la desaparición de muchos medianos y pequeños. El proceso tecnológico de años recientes significó un aumento del umbral tecnológico mínimo necesario para la supervivencia de una explotación agropecuaria rentable. Es este uno de los factores que contribuye a dejar fuera del mercado a muchos medianos y pequeños productores.

Cuando un funcionario del gobierno dijo hace poco que debían desaparecer necesariamente 200.000 productores, es seguro que no midió adecuadamente sus palabras. La desaparición de los medianos y pequeños productores puede tener consecuencias inconmensurables, no solo para el sector sino para el país en su globalidad. Son los auténticos productores agropecuarios los que desaparecerían —han desaparecido muchos— y que tradicionalmen-

te presentan los mayores niveles de productividad. Es interesante destacar que, de golpe, el gobierno ha descubierto la necesidad de que el campo se reconvierta o reestructure (no se sabe cómo ni hacia dónde), cuando hasta ahora insistía en que el eje del crecimiento futuro pasaba indefectiblemente por el agro ya que era considerado el sector con ventajas comparativas indiscutidas. Es evidente que el triunfalismo de otros tiempos que destacaba cómo la “agriculturización” y los “hitos tecnológicos” habían transformado radicalmente el sector, ha cedido a otros climas, que se empeñan en señalar su “ineficiencia” y la necesidad de que se “reconvierta” y aumente su orientación exportadora. Pero en este sentido, como señalan algunos de los entrevistados, lo que falta es una auténtica política agropecuaria en favor de los medianos y pequeños productores, comprometidos con la producción, quienes son, sin duda, la mayoría y los más representativos.

En las páginas que siguen presentamos entrevistas a seis productores agropecuarios. Fueron elegidos al azar. Presentaron una favorable predisposición a hablar de su situación; sus historias no deben diferir demasiado de las muchas otras historias que rondaban ese día por la Plaza de Mayo. Hablaron sobre sus problemas pero también sobre el sector en su globali-

dad; algunos eran dirigentes de organizaciones, otros simples miembros. En la transcripción de las entrevistas, respetamos sus expresiones.

Productor sojero de Santa Fe

Estoy ubicado en la zona de Totoras, provincia de Santa Fe, tengo 54 ha, son de propiedad de mi padre pero las trabajo yo, y tengo dos máquinas cosechadoras para trabajar afuera. Produzco 1.000 quintales de soja (alrededor de 40 ha), tengo una buena producción porque tengo un campo bueno. Después afuera, con las máquinas, trillo 35.000 quintales.

También tengo unos frutales, un poco para nosotros y otro poco para la venta. No tengo un balance completo de todo lo que hice; sin embargo tengo mis cálculos y de las dos tareas, he quedado justito, justito. Sin plata para volver a trabajar, pagando todo, los números son tan ajustados que a esta altura, a un mes de haberse trillado la soja, estamos en cero. En la estructura de costos la parte más pesada es la impositiva, también los repuestos y el mantenimiento. Yo en este momento con mi pequeña estructura estoy sujeto a control diferenciado especial, hace mucho que estoy inscripto; tengo que pagar IVA, ingresos brutos, leyes sociales... Saqué la cuenta: más o menos cada dos días hay un impuesto, los municipales (urbano, inmobiliarios, patentes, etcétera). Yo me manejo con todas las cartas sobre la mesa en la parte impositiva y se hace muy pesado trabajar.

Pertenezco a la Federación Agraria y estoy en el Consejo de la Cooperativa de Agricultores Federados, de acopio de cereales. Esta marcha es porque queremos respuestas a estos problemas que he estado enumerando; necesitamos, o una reducción del IVA o créditos a largo plazo, porque si estamos diciendo que los números no nos dan tampoco tenemos la solución con un crédito corto. Tengo mi carpeta completa, pero voy al Banco Nación y tengo que llevar “hasta la abuela” para firmar [...].

Yo soy hijo de productor y yo mismo soy productor de toda mi vida y vivo en el campo, y esto es importante porque cada vez que aparece un impuesto a mí me lleva días hacer ese trámite, tengo que saber de dónde saco la plata, tengo que ir a pagar a un gestor que me lleva los papeles pero yo tengo que llevarle todo ordenado... mi trabajo lo tengo. [...] Yo de chico tuve un tambito, todo lo que tengo, lo logré a costa de sacrificios. Mis padres dependen de mí, y yo no tengo familia; el único gasto que tengo es una casita que estoy haciendo para mis padres, que ya tienen más de 70 años, porque yo pienso que no deben estar en el campo, no tenemos pavimento, ni luz. Entiendo por qué un productor joven se quiere ir a vivir al pueblo. Yo me quedo en el campo porque me gusta el campo, incluso cuando tengo que ir al pueblo por todos estos trámites que son un enredo, me quitan tiempo para el campo, para trabajar que es lo que más me gusta.

Yo no sé si los que tienen a su cargo la política están haciendo las cosas bien, por ahí creemos que las están haciendo bien pero no es así; fijémonos los resultados, los jubilados no pueden vivir tampoco con 140 pesos [...] Los culpables de dónde arrancan no lo sé, pero yo diría que la crisis comienza desde hace dos años. Mire, yo no fui yendo para atrás en mi explotación, no fui avanzando como venía avanzando porque lo que tengo lo hice trabajando no especulando, mi meta siempre fue invertir, nunca me metí en los intereses y todo eso...

Hoy por ahí me arrepiento por haber invertido, porque para invertir tuve algunos créditos y ahora estoy trabajando para pagar esos créditos [...] Los pequeños productores —me incluyo porque soy un pequeño productor— estamos trabajando sin reserva, entonces (si) falla una cosecha, lo podría sentir mucho. Fíjese: este año salió bien pero ya me quedé sin nada pero pagué, pero ¿si la cosecha no hubiese andado bien?

Productor frutícola de Río Negro

Me voy a presentar, yo soy A. E., un productor de la zona de General Roca, provincia de Río Negro. Nuestra producción primaria es manzanas, peras y uvas; además tenemos otros productos que son frutos de carozo: pelones, duraznos, ciruela. Integro la Cámara de Fruticultores de General Roca y estamos acá por la situación que vivimos como productores agrarios de este país, devastados por los políticos de turno.

Nuestra provincia es muy rica pero los políticos no han sabido hacer gestiones para administrar sus riquezas [...].

La actividad frutícola está formada por pequeños, medianos y grandes productores y las empresas de empaque que son las de compra y venta. Estas empresas son las que en su mayoría han sido favorecidas por los distintos planes de gobierno que les han permitido tener créditos que no siempre han pagado [...].

Las cooperativas se han fundido porque en algunos casos los productores no han tenido el manejo y las han dejado en manos de una gerencia. Los grupos empresarios están formados por gente del Valle y gente de afuera, están comprando fincas y el productor se convierte en trabajadores de ellos. Nosotros reclamamos ciertas condiciones de rentabilidad que permitan la subsistencia del productor y yo le voy a dar algunos números para que más o menos nos ubiquemos. Aquí en Buenos Aires hemos visto que un kilo de manzanas se vende a \$2; fíjese lo que nos roba el Estado: el IVA de \$2 son 36 centavos, esto es lo que recibe el Estado sin ningún costo. Ese kilo de manzana fue adquirido al productor por menos de 10 centavos, que todavía no se cobró, por supuesto. Si el Estado los 36 centavos los vuelve a volcar a la producción regional, el productor —podríamos decir una frase callejera— es Gardel.

En términos generales, estamos actualizados tecnológicamente. El papel de las cooperativas

ha sido cada vez menos importante en la cadena (agroindustrial) por esta falta de avance de los productores agrarios.

Habría que restituir el Banco de la Provincia, castigar a quienes lo han saqueado y restituirlo como apoyo a la producción. Además se necesitaría que nuestras embajadas, en vez de hacer las cosas que nos enteramos que hacen, se pongan a trabajar un poco y busquen contactos comerciales para que podamos vender nuestros productos, tanto en los mercados tradicionales como en otros nuevos. Además, cuidar nuestro mercado interno y no abrirlo trayendo frutas de cualquier parte y sin ningún control: sin cuidar a nuestros productores y a nuestros consumidores.

Productora arrocera de Entre Ríos

Mi nombre es D. C., mi campo está en Entre Ríos. Hago arroz en mi propio campo, tengo una arrocera chica de 50 hectáreas. En total tengo 850 ha y dedico el resto del campo a la ganadería; antes hacíamos un poco de lino pero ahora no hacemos más porque los precios no compensan. Por eso, lo único que podemos hacer es cría, un poquito de engorde y arroz. Antes cedía tierra en arriendo pero ya no lo hago.

El insumo directo más caro en arroz es el combustible: para una arrocera de 50 ha más o menos hay que calcular 30 mil litros de combustible para una campaña. El principal problema de los arroceros es que es muy difícil con el precio depri-

mido de hoy y con el tiempo que se tarda en comercializarlo, que quede el resto suficiente para comprar el combustible con el dinero propio [...] El combustible es un problema que tiene “agarrado” a la mayor cantidad de arroceros ya que solo puede sacarse a crédito. Créditos por productos se consiguen muy pocos, en general son créditos por intereses y el interés bancario normal ahora es el 30% anual, tres veces la inflación reconocida por el ministro Cavallo. Naturalmente nadie puede con el precio del arroz levantar ese crédito y los bancos ya no refinancian y entonces ahí es donde comienza la cadena de “acogotamiento” del productor. Otro problema es en el momento de la comercialización. Cuando nosotros recogemos el arroz no se vende en forma inmediata, depende de los años, la variedad, etcétera, y en esto lo más importante a destacar es que cada cooperativa arrocera (porque en general se entrega a las cooperativas aunque también se pueden entregar a los molinos que “acogotan” como quieren) tiene que “rebuscársela” (como se dice vulgarmente) para hacer sus negocios de venta. No hay ninguna política de exportación centralizada por el gobierno, para conseguir mercados externos [...] El problema este es grave, es como si al país en su totalidad no le importara buscar y sostener mercados para sus ventas de la producción nacional.

Ahora estamos exportando muy poco, el arroz “largo fino” se exporta más. El mercado interno

está deprimido y manejado por los grandes molinos. Hace un tiempo el Estado daba los *warrants*, que eran una especie de anticipo que daba un valor arbitrario al quintal y anticipaba ese dinero a los productores para que pudieran hacer frente hasta el momento de la venta. Esto ya no existe más, y ese es otro momento donde el productor se endeuda porque tiene que empezar con los laboreos para la cosecha, además que tiene que saldar otros créditos, de combustibles por ejemplo, ni hablar si tuvo una rotura de maquinaria. Allí sin *warrant* tiene que lograr obtener una prefianciación de origen bancario, que tiene de nuevo los intereses de los que hablamos hace un rato. De modo que esas son las pinzas que tiene el productor. Las dos cosas fundamentales que debería hacer el gobierno en este sentido son: primero, una política centralizada, gubernamental, de conseguir y defender mercados externos en el marco de negocios bilaterales de comercialización. Tantas porquerías que compramos afuera, podríamos hacer negocios bilaterales, “les compramos esto y le vendemos lo otro”; segundo, no subsidiar, pero sí dar créditos especiales para la producción.

Esas son las dos cosas mínimas que se le piden al gobierno. El campo no pide la devaluación, este país no subsidia la producción agropecuaria (como lo hacen los países desarrollados) pero lo grave es que no tiene una política coherente; pedimos una política de sostén de las producciones. Las cooperativas, cuando son genuinas, siguen la

suerte de los productores. Nuestra cooperativa el año pasado se embarcó en inversiones y si este año los productores no cosechan bien no va a haber forma de amortizar el gasto. Las cooperativas no pueden trabajar en este marco. En el mercado internacional competimos con países que tienen mejor defensa de su producción y entonces colocan sus exportaciones en mejor posición.

Ex productor avícola de Buenos Aires

Yo soy un ex-productor avícola, del partido de Magdalena, no pude aguantar. Cuando empezamos éramos 30 productores, hoy quedan tres o cuatro. Hoy los galpones se alquilan a empresas. Nosotros hacíamos el ciclo del pollo completo: el alimento balanceado, aparte lo faenábamos y lo entregábamos a los comercios. Hacíamos la distribución directamente mayorista, supermercados, carnicerías, etcétera. Ya en la etapa de Mazzorín, cuando se congeló el precio, con el plan Austral nos pusieron un precio máximo, que se mantuvo dos meses con los insumos estables; después los insumos empezaron a subir pero vos no podías levantar el precio de tu producto porque te clausuraban. Los insumos empezaron a subir, a subir, a subir y se vendía en negro y a sobreprecio si no, no te vendían. Los vendían las multinacionales, y cuando empezó el Austral estaban a, supónete, \$30 el kg de girasol y a los pocos meses estaba tres veces más caro. Esto te llevaba a una realidad: que el pollo te costaba \$5 pero lo tenías que

vender a \$4,50, así ellos (el gobierno) empezaron a traer importados. Eso siguió y si tenías créditos en los bancos, te fundías. Desde esa época hasta ahora no cambió la política para la producción de este tipo.

En esta etapa se logró “filtrar” a todos los pequeños y medianos avicultores. De allí en más las grandes empresas multinacionales y nacionales manejan la plaza. En estos momentos hay otra crisis fuerte porque se mantiene la misma política económica, de castigar los insumos y traer el importado sin arancel y que vienen subvencionados. Si hablamos a precio internacional hoy en la Argentina el pollo sale 1 dólar y medio y en otros países 85 centavos de dólar. Queda poca gente y también ellos se están fundiendo, va a quedar nada más que la empresa grande. Lo que es clave y que la gente de la ciudad no entiende, es que se dice: “traemos importados y entonces los productores que se embromen; está caro y lo van a tener que bajar”. No es esa la realidad porque los que traen los importados son las mismas empresas multinacionales, por ejemplo Cargill trae pollos Cargill del Brasil. Ellos cesantean a la gente, bajan costos y traen importados. Los que no pueden entrar en este negocio internacional, funden. El mercado queda para pocos grupos, para tres o cuatro; se está haciendo en pollos, en cerdos y en casi todos los rubros. Fui productor avícola de 1969 a principios de 1986. Allí no pude seguir, se había dado una situación incierta en 1978 con

Martínez de Hoz, con los importados también, pero había mayor poder adquisitivo y la calidad del pollo importado era menor.

Con Mazzorín fue imposible seguir, ellos nos controlaban a nosotros pero no a la firma grande. Fuimos a ver a los funcionarios (de la Secretaría de Comercio) con la Federación Agraria para reclamarles sobre esta situación, fue imposible. Nosotros habíamos empezado en pequeña escala, cuando crecimos invertimos —en vez de comprar dólares invertimos y fue el peor error de nuestra vida—; tanto con Martínez de Hoz como con Mazzorín el que invirtió perdió, el que compró dólares ganó. Ahora estoy trabajando de camionero, haciendo fletes.

Productor tambero de Buenos Aires

Tengo alrededor de 60 vacas, antes tenía un tambo, hacía queso pero ahora tengo todo parado. Yo hice lo mío “a pulmón”, mis instalaciones... en la época de Martínez de Hoz debía y bueno... haciendo quesos y más o menos hasta el año 1986, 1987, aguanté y ahora para invertir necesito un montón de otras cosas, tener marca, etcétera. No debo un peso, estamos tratando de trabajar en una cooperativa para poner “marca” entre varios y para que los costos sean compartidos. Los grandes monopolios se han quedado con parte de la deuda y compiten con uno y nosotros nos “quedamos debajo de la estrella”. El problema de fondo es político [...].

El gobierno plantea el tema de la reconversión, que se haga otra cosa, pero el tema es qué hay que hacer, fuera de la soja, de la carne, de la leche, de las cosas clásicas que se hacen en la Argentina, qué hacer. ¿Qué podemos hacer frutilla? Sí, pero inundamos la Pampa Húmeda de frutillas, ¿y a quién se las vendemos? Eso lo puede hacer Chile porque están en una pequeña franja entre el mar y la montaña, pero nosotros no podemos hacer lo mismo que Chile. Hay que ver qué se puede hacer con nuestra producción, perfeccionándonos con lo que nosotros tenemos, el tema es el mercado. Un mercado achicado como el que tenemos, 30 millones, paupérrima la situación de los salarios y entonces eso no nos da salida, y encima con restricciones en la exportación. Hoy, para que un tambo de leche sea rentable, necesita 1.300, 1.500 litros, necesita cambios en la tecnología, una gran concentración genética, esos factores inciden cada vez más. ¿Pero qué hace el gobierno? Le cobra más impuestos, no le dejan salida para poder dar el salto. El problema es que nosotros tenemos 200 ha, estamos en la Federación Agraria y no podemos, pero aquí (en la Plaza de Mayo) hay productores de 1.000 o 1.500 ha que tampoco pueden y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la salida? Ellos se ponen en duros pero no piensan en estos factores. Nosotros creemos que hay que hacer una integración vertical agroindustrial, no horizontal; vertical y con las cooperativas. Yo pertenezco a la Cooperativa Granjera y de Con-

sumo de Verónica. Las cooperativas están en este camino de la integración, necesitamos montar laboratorios, poner marcas a nuestros productos. Somos 30 productores, la hicimos en 1955, cuando había una colonia; ahora tenemos el local, pusimos una carnicería, ahora queremos hacer hamburguesas, productos con una cierta elaboración, pero necesitamos plata, sin plata no se hace nada, por eso andamos buscando esas salidas. Estamos en el camino, con condiciones en contra. Pero nosotros planteamos que la granja es mejor que estar en una villa y es mucho más sano [...]. Aquí históricamente le han dado créditos a las grandes compañías y no se los cobraron; yo debo 5.000 dólares, por ejemplo, y me ponen la bandera de remate, después dicen que hay igualdad ante la ley. Yo no digo que nos regalen las cosas, pero a los productores ligados, comprometidos con sus empresas hay que darles apoyo.

Productor cañero de Tucumán

Soy productor cañero de la provincia de Tucumán. Soy un mediano productor, secretario de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), que nuclea a 13 mil productores independientes de caña de azúcar. Vinimos a acompañar esta protesta como integrantes de la Federación Agraria. El campo buscó manifestarse públicamente en el corazón del poder, desde una situación agobiante de crisis que sufre y que en nuestra provincia tiene una significación aún mayor dada sus desven-

tajas estructurales, por la gran distancia que tiene de los grandes centros de consumo.

Esta política de apertura es ingenua, porque con las políticas que llevan los países centrales nuestro país abre sus mercados a producciones que vienen subsidiadas y van desplazando las producciones nacionales. Esto está produciendo un proceso de empobrecimiento. Al poner en marcha todos los mecanismos de desregulación, se desbarataron las herramientas para defensa del precio. En nuestra actividad tuvo un efecto muy fuerte y nos volteó el ingreso histórico del sector cañero en el orden del 72% y esto produjo un proceso significativo en la provincia, donde hay serias dificultades en las franjas de pequeños y medianos productores. En la provincia se profundizó la pobreza —que tiene uno de los índices más altos— y de persistir esta política se puede dar un proceso de desintegración en nivel ya no provincial sino nacional. Por ello urge que se restituya la política para el sector agropecuario. Más allá de los criterios economicistas con que se maneja la economía, hay que atender a realidades específicas, las características propias que tienen las regiones y a partir de allí hacer un país integrado. Si el gobierno dice que el Brasil produce más barato azúcar y por lo tanto debemos traerlo de allí, nosotros diríamos: ¿y qué hacemos con la gente que produce en nuestro país? La caña llevó a que Tucumán fuera una de las provincias más densamente pobladas del Norte argentino. El problema

es que no existen demasiadas producciones opcionales a la caña, y en ella somos competitivos en relación con el Brasil, pero hay que recordar que el país vecino tiene mecanismos de subsidios a su producción lo cual le permite sostenerse y competir. En cambio a nosotros nos obligan a competir con producciones subsidiadas, apoyadas por sus estados y ello es competir en situaciones altamente desventajosas; se hace imposible. La consecuencia es la marginación de una parte importante de la población de la producción y luego tendrá que salir el Estado a sostenerla o directamente la olvidarán.

Una de las características de esta crisis azucarera, en comparación con otras que hemos vivido, es que la actual está enmarcada dentro de una crisis económica general donde las actividades económicas se van reduciendo y van quedando unas pocas con claras ventajas competitivas en el mercado internacional. Quienes no estamos insertos en esas actividades quedamos marginados y se nos hace imposible sostenernos.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Todos nuestros entrevistados pertenecían a Federación Agraria y a cooperativas. La mayoría de ellos, aun de lejanos lugares del país y dedicados a disímiles producciones, coincidieron

en algunos puntos, más allá de los reclamos convocantes, que merecen ser remarcados:

- necesidad de que se generen políticas para el sector agropecuario; imposibilidad de competir en los mercados internacionales con producciones que provienen de países que tienen políticas de promoción a la producción;
- insistencia sobre la necesidad de una política promotora de exportaciones y el papel que en ello pueden cumplir la Cancillería y sus embajadas;
- sensación de que las políticas económicas, de Martínez de Hoz en adelante, castigaron la producción y promovieron la especulación financiera. Estas políticas se han caracterizado por la falta de créditos, altas tasas de interés y sesgos a favor de los más grandes (empresas transnacionales, grandes productores, grupos económicos en general);
- necesidad de programar y financiar las reconversiones; que hay que discutir muy bien qué nuevas producciones son posibles, para qué mercados, etcétera;
- ciertas certezas acerca de que la gente de campo ya no encontrará otras inserciones económicas fuera del agro y que las soluciones tienen que ser para quedarse en sus tierras;

– imagen de una política económica en pinzas que los agobia; por un lado, con impuestos, aumento de los insumos y, por otro, con la falta de promoción a la producción (mercados, precios, etcétera).

Los dirigentes entrevistados pusieron el acento, más que el resto, en la falta de diálogo con técnicos y políticos que deberían ser los encargados de generar políticas y soluciones. Los miembros de las cooperativas insistieron en la crisis por la que ellas atraviesan, como resultado de la situación de sus miembros; sin embargo, cuando se piensa en acciones opcionales siempre aparece la cooperativa como una herramienta importante.

La cooperativa y la integración agroindustrial fueron señaladas como opciones organizativas por varios de los entrevistados.

La mujer rural estuvo representada por varias productoras presentes en la Plaza —nuestra entrevistada arrocerera es un ejemplo— pero, seguramente, muchas quedaron atendiendo a los chicos, las explotaciones, los cultivos, las huertas y animales, o en las pequeñas ciudades donde algunas familias han logrado mudarse.

VARIACIONES ENTRE CENSOS

El Censo Nacional Agropecuario del año 1988, que acaba de publicarse, señala un descenso significativo de las explotaciones totales en relación con las que registran los censos anteriores de 1969 y 1960.

Si bien el número total de las explotaciones mayores de 1.000 ha (27.355) disminuyó levemente en relación con 1969 (aun cuando aumentó en relación con el censo de 1960), representan solo el 7,2% del total de las explotaciones “con límites definidos”. En 1969, este estrato de explotaciones representaba el 6,1% del total de las explotaciones agropecuarias, mientras que en 1960 constituía el 5,6%; un aumento en términos relativos. Estas explotaciones agropecuarias poseen en conjunto 133.640.000 hectáreas, 76% de la superficie agropecuaria total del país. Según el censo de 1969 este estrato de explotaciones era dueño de 157.956.000 ha, 75% del total, mientras que en 1960 registraba 120.350.000 ha, 68% de la superficie agropecuaria total. En relación con los censos anteriores, el de 1988 registra para el estrato de entre 1.000 y 5.000 ha, una leve reducción en el total de las extensiones de tierra. El estrato de más de 5.000 ha también aumentó en relación con el censo de 1969, pero no en relación con el de 1960.

La cantidad de tierra que posee una explota-

ción agropecuaria es solo un elemento que define su importancia relativa: 500 hectáreas de tabaco en Salta definen una explotación agropecuaria mucho más importante que 3.000 ha en la Patagonia árida. Una explotación agropecuaria pequeña, pero muy intensiva en trabajo y capital, puede ser más importante que una explotación ganadera extensiva. El capital que integra la explotación agropecuaria y el grado de intensidad de los procesos productivos involucrados, definen cada vez más la importancia de la empresa agropecuaria. Los avances tecnológicos y el uso creciente de maquinaria tienden a hacer de la agricultura una actividad “capital intensiva”. También define la importancia relativa de la explotación agropecuaria el hecho de que muchas explotaciones pueden pertenecer a un mismo dueño. Gran cantidad de las explotaciones de menos de 1.000 ha pertenecen a terratenientes mayores (véase Basualdo y Khavisse, 1993).

Es cierto que la tierra ha perdido importancia en relación con otros factores de producción o de poder económico. Sin embargo, sigue constituyendo un elemento importante. Son pocos los países del mundo en donde las grandes explotaciones poseen tan vastas extensiones. En los Estados Unidos solo en los Estados de Nueva México, Nevada, Wyoming y Arizona existen ranchos de entre 1.300 y 1.900 hectáreas. En cambio, en el

de Nueva Inglaterra el tamaño promedio del predio es de 68 hectáreas. El tamaño promedio de las explotaciones en los EUA ha ido creciendo en décadas recientes pero no supera las 182 ha, en tanto que en nuestro país alcanza las 470 ha; en Europa es diez veces menor que el nuestro.

¿Cuán representativo es el estrato de “medianos y pequeños” productores agropecuarios en nuestro país? El Censo Agropecuario de 1988 registra 282.029 explotaciones agropecuarias de menos de 200 ha y 68.873 en el estrato de 200 a 1.000. Estos estratos representaban 74% y 18%, respectivamente del total de las explotaciones. (El grueso de los productores que protestaron el otro día en la Plaza de Mayo, seguramente están incluidos en estos estratos). Pese a su importancia

numérica, las de menos de 200 ha controlaban solo 13.637.000 ha, 7,7% de la superficie agropecuaria total del país. El estrato de 200 a 1.000 ha acumulaba 30.161.000 ha, 17% de la superficie total.

El número de explotaciones incluidas en el estrato de menos de 200 ha se redujo sustancialmente en relación con los últimos dos censos. La cantidad de explotaciones pertenecientes al estrato de entre 200 a 1.000 ha también se redujo en relación con 1969, no así en relación con el censo de 1960. Asimismo, el estrato de menos de 200 ha redujo sustancialmente la superficie que controla en relación con 1969 y 1960. El estrato intermedio de 200 a 1.000 también redujo la cantidad de tierra que controla en 1988 en relación con 1969, aunque aumenta en relación con 1960.

Cuadro N° 1

Cantidad y superficie total por estrato de las explotaciones agropecuarias

	1988				1969				1960			
	Explotaciones agropecuarias	%	Superficie (miles de hectáreas)	%	Explotaciones agropecuarias	%	Superficie (miles de hectáreas)	%	Explotaciones agropecuarias	%	Superficie (miles de hectáreas)	%
TO-TAL	378.357*		177.437		538.430		210.656		471.756**		175.142	
Hasta 5 ha	57.057		148		100.379		248		71.814		201	
5-25	84.618		1.189		125.686		1.752		109.590		1.559	
25-100	93.271		5.371		139.067		8.200		127.463		7.710	
100-200	47.083		6.929		63.438		9.394		58.795		8.778	
Subtotal	282.029	74,6	13.637	7,7	428.570	79,6	19.594	9,3	367.662	78	18.348	10,5
200-1.000	68.873	18,2	30.161	17	77.047	14,3	33.306	15,8	63.153	13	26.545	15,1
1.000-5.000	21.254	5,6	45.691	25,8	25.829	4,8	57.472	27,3	20.697	4,4	48.014	27,4
Más de 5.000	6.101	1,6	87.949	49,6	6.984	1,3	100.484	47,7	5.661	1,2	72.336	41,3

* Con "límites definidos".

** Se incluyen 14.586 explotaciones de "campo abierto sin especificación".

BIBLIOGRAFÍA

- Basualdo, E. y Khavisse, M. 1993 *El nuevo poder terrateniente* (Buenos Aires: Planeta).
- INDEC 1989 *Anuario estadístico de la República Argentina, 1983-1986* (Buenos Aires: INDEC).
- INDEC 1992 *Censo Nacional Agropecuario 1988* (Buenos Aires: INDEC).
- Teubal, M. 1993 “Hambre y crisis agraria en el ‘granero del mundo’” (s/d) mimeo.

DE LAS FINCAS Y LAS CASAS A LAS RUTAS Y LAS PLAZAS: LAS PROTESTAS Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA ARGENTINA DE LOS MUNDOS “RURURBANOS”

UNA MIRADA DESDE AMÉRICA LATINA*

Este congreso de los sociólogos rurales de América Latina, a fines de 2002, nos encuentra en un momento de grandes crisis y transformaciones institucionales, después de una larga década de resistencias a unas políticas basadas en los principios del neoliberalismo, ejecutadas por la mayoría de los Estados nacionales bajo la atenta mirada y asesoramiento de los organismos de crédito internacionales.

El triunfo del Partido dos Trabalhadores en Brasil que lleva a un político de origen obrero-sindical a la máxima magistratura del gobierno, la llegada al gobierno —por medio de las elecciones— de la alianza de los coroneles y campesinos indígenas ecuatorianos que había protagonizado una histórica marcha en los

comienzos de 2000¹, así como la heterodoxa democracia venezolana con sus componentes rebeldes a las políticas neoliberales y la crisis de legitimidad institucional de Argentina, son solo algunas situaciones novedosas en el continente. A partir de ellas se pueden pensar los procesos de América Latina en momentos de pasajes, atravesando un escenario incierto, pero diferente al que se había concretado con cierto grado de consenso social alrededor de los principios del libre mercado articulado a democracias delegativas y formales que aplicaron los programas de ajuste.

Estos nuevos escenarios actuales tienen mucho que ver con las acciones colectivas, de protesta, de surgimiento de nuevos actores socia-

* Giarracca, N. 2003 “De las fincas a las casas a las rutas y las plazas: las protestas y las organizaciones sociales en la Argentina de los mundos ‘rururbanos’. Una mirada desde América Latina” en *Sociologías* (Porto Alegre) Año 5, N° 10, julio-diciembre.

1 Cuando revisaba este trabajo para su publicación, la coalición con Lucio Gutiérrez llegaba a su fin y los ministros que respondían a la organización de Pachakutik se retiraban del gobierno.

les, de resignificaciones de ciertas trayectorias políticas de la región, que se fueron desplegando a lo largo de la última década del siglo XX. Y muchas de estas nuevas experiencias tienen que ver con los mundos sociales rurales y agrarios. Dice el *Report on Rural Movements* de NACLA (2000) que en muchas partes de América Latina, los movimientos sociales rurales han tomado el centro de los escenarios políticos de sus naciones. Y agregamos nosotros, que no solo en países con fuertes tradiciones de luchas campesinas como México o Brasil, sino que en países de fuertes tradiciones de luchas obreras urbanas como en la Argentina, aparecen nuevos actores que ya no están, necesariamente, articulados a los mundos industriales. En efecto, en este país de urbanización temprana, la protesta de los noventa se “des-territorializó” y comenzó a desplegarse en los mundos rurales y de baja urbanización (lo que en este trabajo llamamos “rururbanos”) con actores de muy baja visibilidad política pública en la historia de las luchas sociales argentinas: desocupados, indígenas, campesinos, mujeres agricultoras, etcétera.

El retroceso de las amplias mayorías en la participación de las riquezas nacionales, se dio durante dos décadas, “la perdida” —la del ochenta— en términos de la CEPAL, y la de los

noventa que registró tales índices de pobreza que afligen a los propios constructores de este modelo concentrador de riquezas. Un informe sobre el Panorama Social de América Latina 2002-2003, de la CEPAL, muestra que si bien los porcentajes de la pobreza bajaron entre 1990 y 2002, de 48,3% a 43,9%, en volumen absoluto de población se registró un aumento de 20 millones de pobres (pasó de 200 millones a 220 millones). Lo mismo ocurre en el nivel de la indigencia. Tal vez el caso más dramático sea el de la Argentina, cuyos gobernantes siguieron al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario Internacional endeudando al país, entregando sus recursos naturales a las empresas transnacionales, flexibilizando el mercado laboral y desregulando la economía. Todo lo cual, condujo al país a una de las crisis más profundas de su historia; entre 1999 y 2002, el porcentaje de pobres casi se duplicó (pasó de 23,7% a 45,4%) mientras los indigentes se multiplicaron por tres. En realidad, no solo América Latina sufrió las consecuencias del modelo neoliberal, el crecimiento de la economía mundial fue más bajo entre los años ochenta y dos mil (época de oro del liberalismo y de la desregulación que se hacía en nombre del crecimiento) que entre los años sesenta y ochenta, período de regulaciones y proteccionismos (Cassen, 2003).

Pero así como al finalizar la década del noventa, la protesta se hizo global, internacional, enfocada a los organismos internacionales que fueron activos actores de estas transformaciones (Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera), en muchos países de América Latina, novedosas y significativas resistencias que se desplegaron durante toda la década encontraron en 1994, un momento donde irrumpieron “pensamientos”, en el sentido filosófico del concepto. La aparición del movimiento zapatista en México en el mismo instante en que el país ingresaba al TLC (Tratado de Libre Comercio), colocó en el espacio de las resistencias nuevos pensamientos políticos, por primera vez a distancia del Estado, centrados en la autonomía, con una lógica discursiva más cerca de la “estética expresiva” que de la “científica” de los viejos discursos de izquierda de las décadas de los sesenta y setenta.

El desarrollo de la tecnología de información y comunicacional habilitó nuevas formas de circulación del capital financiero que fue uno de los pilares del nuevo modelo, pero también permitió la acción a distancia de los grupos en resistencia. Y tal vez el ejemplo paradigmático de esto fue la propagación de las ideas del zapatismo y su tremendo impacto en una po-

blación mundial que vivía con cierto malestar los avances “deshumanizante” del capitalismo neoliberal. Hoy, muchas de las ideas del zapatismo circulan por espacios académicos, culturales, artísticos y encuentran muchos aliados entre los mundos sociales urbanos europeos. De hecho, el primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, llevado a cabo en Chiapas a fines de julio de 1996 por iniciativa del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), con la presencia de casi medio centenar de organizaciones de la resistencia de todo el mundo, es considerado el antecedente más importante de la serie de protesta que se conoce como movimiento anti-globalización neoliberal.

Casi simultáneamente al levantamiento zapatista, en una pobre provincia de la Argentina, con altas proporciones de población rural, en una ciudad capital donde la gente vive de la administración pública o de los servicios hacia la agricultura —me refiero a la provincia de Santiago del Estero— la población se levantó contra el Estado provincial, quemando los edificios y persiguiendo a los “políticos corruptos”. Ese episodio, en pleno gobierno de Carlos Menem, se recuerda como el “santiagueñazo” y es uno de los importantes antecedentes de la crisis de legitimidad política de comienzos del nuevo si-

glo. A los pocos meses de todo esto, en junio de 1994, en Ecuador, los indígenas de todo el territorio convocaron a una movilización que paralizó durante dos semanas el país. Como sostiene Nina Pacari (1996), abogada y líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la protesta se orientó en contra de la Ley de Desarrollo Agrario, pieza clave del plan de ajuste estructural del programa implementado por Sixto Durán Ballén.

La ley aprobada por el Congreso apelaba por la eliminación de las tierras comunales a favor de la agricultura empresarial, acompañando otras medidas que favorecían los intereses de los grandes terratenientes. Se ignoraba todo lo concerniente a los indígenas, campesinos, y pequeños agricultores del Ecuador. (Ibídem: 23, traducción propia).

Podríamos sumar a este listado de protestas y resistencias campesinas e indígenas con sus ramificaciones a las poblaciones urbanas, al Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Brasil así como los muchos otros sindicatos campesinos de este país como la Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (CONTAG); la Federación Nacional Campesina de Paraguay, los movimientos campesinos e indígenas de Bolivia, Colombia, Perú, Chile. La mayoría de ellos

se integran en la organización latinoamericana que los agrupa —Congreso Latinoamericano de Organizaciones Campesinas (CLOC)— y a través de ella, a la organización internacional Vía Campesina. Del mismo modo a lo largo del continente se van desplegando luchas por la preservación de recursos naturales como el agua en encuentros de poblaciones campesinas y de pequeños centros urbanos como son los casos de Cochabamba y de la protesta por la privatización del agua en el sur de Tucumán en Argentina. Las poblaciones mapuches del sur argentino reclamaron por la instalación de una empresa minera, aduciendo lo que significaría en términos de gasto del agua y los campesinos bolivianos se oponen a la exportación del gas boliviano a Chile. Significativamente, nuevos reclamos, nuevas estéticas comienzan a circular de uno al otro lado del continente sin que sus protagonistas, que coinciden en sumar al reclamo histórico de la tierra otros recursos naturales, necesariamente, sepan unos de los otros.

Los encuentros entre estas organizaciones en federaciones continentales e internacionales, la movilidad territorial de algunos de los dirigentes así como los principios de orden político universalizables como pueden ser la “soberanía alimentaria”, el respeto a la biodiversidad, bioseguridad así como a la diversidad cultural, los derechos humanos, el respeto a la igualdad de

género, marcan las novedades, producen nuevos sentidos y deben desafiarnos a pensar (véase Vía Campesina). Todavía es mayor el desafío de comprensión acerca de lo que ocurre en el sur mexicano, en los niveles de las experiencias de las comunidades autónomas como en el de un nuevo pensamiento que se expresa una y otra vez en los materiales de la organización zapatista y que no puede ser interpretado con los conceptos tradicionales que solíamos manejar los cientistas sociales unas décadas atrás.

Querría terminar esta introducción con un interrogante. ¿Estamos los sociólogos rurales de América Latina a la altura de estas circunstancias? ¿Tenemos nosotros conceptos, ideas nuevas para los problemas que plantean estas situaciones? ¿Pueden nuestros trabajos, nuestras reflexiones, acompañar los derroteros de estos nuevos pensamientos activos que se despliegan por el continente?

EL MODELO AGRARIO NEOLIBERAL EN LA ARGENTINA

Los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado en 2002, en todo el territorio de la Argentina, muestran una fuerte caída de la cantidad de explotaciones agropecuarias del

país. En el nivel nacional, la disminución es del 24,5%, en relación con el CNA de 1988. Pero la proporción aumenta sustancialmente en provincias como Buenos Aires (33%), Córdoba (36,4%), Neuquén (41,4%), Tucumán (41,2%), Corrientes (35,7%), San Luis (39,3%) y Mendoza (31,6%). Esta tendencia a la concentración agraria fue anunciada por trabajos académicos, consultoras privadas y el mismo Instituto Nacional De Estadísticas y Censos.

A fines de la década del noventa, se calculaba que desaparecían 435 tambos lecheros por año; algunos trabajos académicos estimaban una disminución de explotaciones en el Alto Valle del Río Negro, en Santa Fe y en Tucumán. Algo similar anticipaban los estudios sobre la Región Pampeana: Eduardo Basualdo, a cargo del equipo de investigaciones económicas de FLACSO, adelantó hace tiempo la concentración agraria y midió la concentración de la tierra (con fragmentaciones ficticias). Por otra parte, en 1999, Miguel Murmis escribió un artículo sobre el agro, en el que se refería a los “mega empresarios” con notoriedad periodística, como George Soros, con campos en el Noroeste y el Noreste, en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y el grupo Benetton expandiéndose hacia el sur.

Según el CNA, la superficie media por explotación para 2002 es de 538 ha, es decir, 68 ha más

por explotación que en 1988 (470 ha). Esta cifra es aún más significativa si la comparamos con los promedios de las explotaciones agrarias de EEUU, que no superan las 200 ha, o de la Unión Europea, que no superan las 50 ha. En EEUU, solo en los Estados de New México, Nevada, Wyoming y Arizona existen ranchos cercanos a las 2.000 ha. En mi país, cuando hablamos de los “mega empresarios” agropecuarios, estamos frente a una magnitud de 350.000 hectáreas.

Estos rasgos del campo argentino surgen como resultado de una década de políticas neoliberales tanto en el nivel de la economía general como otras referidas al sector agrario. A comienzos de la década del noventa, el gobierno de Carlos Menem, con su ministro de Economía Domingo Cavallo, decretó la “desregulación económica” que afectó básicamente al campo (véase Teubal y Rodríguez, 2002). Se daba fin a un modelo de desarrollo agrario en el que había coexistido la gran explotación de los terratenientes con la pequeña y mediana agricultura de carácter familiar. La medida se basaba en el supuesto —que fue aceptado acriticamente por la mayoría de los especialistas en el sector— de que la liberación que se propiciaba desataría un proceso de crecimiento que, con el tiempo, “derramaría hacia abajo”.

Si bien en los primeros años de la década los únicos perjudicados por estas medidas fueron

los sectores subalternos (campesinos, pequeños capitalistas, jornaleros) a mediados de los noventa, se produjeron, por un lado, fuertes bajas en los precios internacionales de los productos, y por otro, marcados cambios en las condiciones internas generadas por la convertibilidad, las privatizaciones y la desregulación total del sector. En tal contexto, el camino elegido por los fuertes actores económicos, con el apoyo del Estado y con la ayuda de un eficaz dispositivo comunicacional, fue “la salida hacia delante”: aumento de la producción agropecuaria con especialización en oleaginosas y aumento de las exportaciones de sus derivados. Para ello se optó por nuevas tecnologías (las semillas transgénicas), nuevas prácticas agronómicas (la siembra directa) y por organizaciones empresariales con determinadas escalas de producción, complementadas por contratistas, subcontratistas y terceristas. El territorio elegido fue el país en su conjunto. Esta decisión comportaba cambios en las orientaciones productivas y en la estructura social agraria, con la consecuente desaparición de muchos agricultores.

Los datos del CNA evidencian esta transformación: en tres regiones del país —el Noroeste, el Noreste y la Región Pampeana— se observa, con relación a 1988, un aumento del 138%, 86% y 60% respectivamente de la superficie implanta-

da con oleaginosas, es decir, la soja; un escaso 23% de aumento de la superficie implantada con cereales en la Región Pampeana y una significativa disminución de la superficie implantada con cultivos industriales en el Norte. Los cultivos industriales fueron los que conformaron el espacio social y rural de las economías regionales: la caña de azúcar en Salta, Jujuy y Tucumán; la yerba mate, el té y el tabaco en el litoral; la viticultura en Mendoza, etcétera.

Es decir, el fuerte aumento de la producción de soja se produjo en detrimento de otros cultivos agropecuarios: los tambos en Santa Fe y Córdoba, la caña de azúcar y la horticultura en Tucumán; las yungas salteñas; los árboles frutales, las leguminosas, lentejas y arvejas, el ganado porcino en la provincia de Buenos Aires, etcétera. Y también —y esto es tan importante como lo anterior— en detrimento de una gran cantidad de campesinos con propiedad ventiañal (más de veinte años ocupando la tierra), desalojados por los nuevos inversionistas sojeros con el beneplácito de los funcionarios provinciales y con la presencia de grupos armados en un país donde esta situación no se conocía².

En el nivel productivo, el sector agrario logró cosechas récord y valores de exportación de las manufacturas de origen agropecuario, duplicadas en una década. Los actores económicos que llevan a cabo esta transformación —las poderosas empresas como Monsanto, Niderca, Novaris; los exportadores; los grandes productores que se expanden, etcétera— se ubican en posiciones relativas muy ventajosas, gracias a un sector de muy alta rentabilidad debido a un recurso natural que responde como siempre ha respondido la tierra en la Argentina. También se benefician otros sectores en forma directa o indirecta: contratistas, terceristas, estudios agronómicos, grandes comercios de agroquímicos y de productos para el agro, fabricantes de maquinarias, bancos, empresas aseguradoras, una franja de productores medios que toman más tierra, publicaciones agraristas que reciben avisos, etcétera. Es probable que algunas poblaciones no inundadas del interior de la Región Pampeana se vean beneficiadas también con esta expansión.

No obstante, sabemos con certeza que los pequeños y medianos productores (hasta 200 ha) no pudieron ingresar al nuevo “modelo sojero” y que, anteriormente, con la rotación productiva de sus 50 o 100 ha, vivían dignamente, daban trabajo a su familia y a terceros, educaban a sus

2 Registrados por un informe de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno nacional en agosto de 2003.

hijos y renovaban sus equipamientos agrarios. Sabemos que la desaparición de esta franja de productores que consumían y operaban en el lugar derivó en consecuencias nefastas para los poblados y ciudades intermedias que están rodeados por el campo y que vivían de actividades derivadas de él (talleres mecánicos, pequeños comercios de insumos agropecuarios, aseguradoras, cooperativas, etcétera). En la mayoría de los pueblos y pequeñas ciudades del interior se registra un gran deterioro económico-social.

Los campesinos del norte del país comenzaron a ser desalojados de sus tierras o rodeados por explotaciones sojeras que, en muchos casos, contaminan sus tierras, sus animales y afectan la salud de las poblaciones (véase Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2003). Los pequeños y medianos productores que se endeudaron para entrar en el modelo, perdieron o están amenazados de perder sus tierras por la presión de sus acreedores. Otros, los que se transformaron en pequeños rentistas cediendo las tierras a los grupos de inversión sojera, no terminan de insertarse en pueblos con altas tasas de desocupación. Los datos acerca de la pobreza y la indigencia que acompañan a este proceso ya fueron mencionados en la introducción de este trabajo.

LA PROTESTA SOCIAL DE LA DÉCADA

Las manifestaciones sociales y culturales de estos procesos se registraron en todas las regiones del país, desde la rica región pampeana hasta el norte campesino. No obstante, la misma situación estructural habilitó dos tipos de acciones de los sectores subalternos: 1) trataron de adaptarse a las nuevas circunstancias económicas por medio de lo que en nuestros trabajos llamamos “estrategias sociales”, tales como la pluriactividad, la multiocupación, las migraciones temporales, organizando formas asociativas para emprender partes del proceso productivo o la compra de insumos con el fin de abaratar costos, etcétera y 2) comenzaron a protestar en primer lugar intentando movilizar a los viejos gremios que representaban a los pequeños y medianos productores, la Federación Agraria Argentina, y luego claramente al margen de esta, buscando nuevos modos de expresión, nuevas estéticas en las acciones y nuevas demandas.

La protesta que registramos durante toda la década del noventa, se diferencia claramente de las de otras décadas de la historia argentina. Para no irnos muy lejos, durante los años setenta tanto las centrales sindicales como las organizaciones territoriales o las ambiguas Ligas Agrarias, estaban insertas en un proyecto de “transformación

de las estructuras vigentes”, los objetivos políticos en relación con el Estado eran evidentes. Durante los años ochenta, con la llamada “transición democrática” las protestas giraban sobre dos ejes: la pérdida de la participación obrera en la economía y los derechos humanos. El centro de ambas protestas fueron las grandes ciudades aun cuando en el filo de los noventa una lucha local conmovió el país desde una clara reivindicación universal: Catamarca aclamaba por justicia³.

La protesta de los noventa ya no se daba en los centros urbanos prioritariamente, sino que durante toda la década que va desde 1991 hasta 2001, se registra en la mayoría de las regiones de la Argentina. Se sumaban a los reclamos históricos de un “interior” postergado en la etapa “modernizadora”, las nuevas demandas originadas por la aplicación de las políticas neoliberales que restringían y anulaban derechos socia-

les de la población. Con algunas excepciones (que veremos más adelante) las protestas se originaron por la pérdida de derechos sociales activada por las políticas de corte neoliberal.

En efecto, los rasgos más significativos de la protesta de los noventa fueron, por un lado la “desterritorialización”, es decir ya no darse en centros urbanos industriales sino de norte a sur del país, y por otro lado, el tipo de reclamo que la caracterizó. Las demandas de las miles de protestas sociales registradas en la década estuvieron fuertemente orientadas a: preservar derechos sociales adquiridos durante el siglo XX (condiciones de trabajo, salarios dignos, educación pública, etcétera); preservar pequeños patrimonios familiares (como son los casos de pequeños y medianos empresarios agrarios o industriales amenazados por las deudas); demandar un ingreso mínimo frente a la pérdida del trabajo remunerado (la lucha de los desocupados), etcétera. Es decir, en general son protestas de “defensa” y “preservación” frente al avance de las políticas “expropiatorias” del neoliberalismo. De allí que muchas veces se caracteriza a estas acciones como fragmentadas ya que se mantuvieron en el orden de lo social y sin llegar a ser corporativas, no lograron trascender la pura protesta.

Nuestros estudios se basaron en territorios que caracterizamos como “rurubanos”, toman-

3 Una joven estudiante fue asesinada por hijos de funcionarios del gobierno provincial y, como muchas otras veces, se intentó tapar las pruebas. Durante muchos meses las “marchas del silencio” de las adolescentes, sus padres y una monja conmovieron a todo el país. La derivación de este caso fue la retirada del gobierno provincial del Partido Justicialista con una tradición del peor caudillismo regional. Hasta el día de hoy, una coalición opositora sigue ganando las elecciones y los asesinos están presos.

do las acciones de los actores agrarios como agricultores, trabajadores, etcétera y otras desplegadas en poblados y ciudades de baja organización (el criterio de ciudad intermedia de 50.000 habitantes).

Para mostrar algunos aspectos de la protesta de la década en el interior del país, tomaremos el año de 1999 para el que contamos con un mapa completo de las distintas regiones (para el resto de la década contamos con una base de datos por muestreos regionales, véase Giarracca, 2001). La base, con registros de periódicos provinciales, se construyó, como decíamos antes, tomando dos criterios: a) que las acciones las desarrollaran sujetos agrarios (campesinos, agricultores en general, trabajadores agrarios o agroindustriales) en cualquier territorio del país (incluida la Ciudad de Buenos Aires) y b) acciones de protesta de otros sujetos sociales en territorios de bajo nivel de urbanización. Este último criterio se tomó sobre el supuesto de que en tales ciudades la influencia de las crisis de los sectores agrarios y extractivos tuvieron consecuencias sociales de gran consideración. Estas pequeñas ciudades, además, desarrollaron muchos aspectos que las acercan a la “nueva ruralidad”. Son asentamientos de productores y mano de obra agraria, sus servicios están dirigidos al campo, etcétera.

La protesta de 1999, de carácter agrorural, se enmarca en la protesta nacional de toda la década y forma parte de lo que conceptualizamos como un “ciclo de protesta” (Tarrow, 1997) que finaliza con los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí comienza, a nuestro juicio, otra etapa donde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires son los territorios que juegan como centros de atención mientras el interior entra en un período de transición. Tanto las nuevas condiciones de producción (por la devaluación) como los nuevos discursos y prácticas políticas generados a partir del 19 y 20 de diciembre, sitúan al interior en forma diferenciada.

Durante toda la década, el país estuvo atravesado por una serie de protestas sociales dirigidas básicamente al Estado en sus manifestaciones nacionales, provinciales y municipales. Recordemos que, a partir de 1991, se había puesto en marcha el Plan de Convertibilidad que ataba el peso nacional al dólar y que fue acompañado por la desregulación total de la economía, un proceso muy amplio de privatizaciones de las empresas públicas de servicios y de extracción de petróleo y un fuerte proceso de flexibilización de las condiciones de trabajo. Si bien las protestas se hacen sistemáticas y rutinizadas en el interior, todo el territorio na-

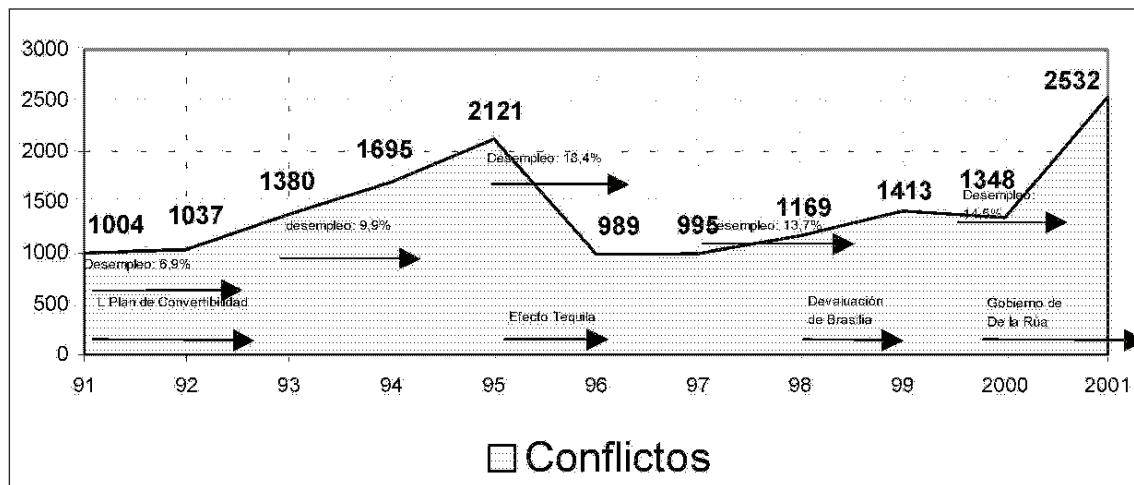
cional es el gran escenario y la ciudad capital presenci6 protestas propias y recibió las ajenas como el lugar significado por el poder estatal de la nación.

Una rápida caracterización de la protesta nacional de la década, la haremos en base a los

datos generados por la Consultora de Investigación Social Independiente (CISI) que registró todo el período. De esos datos podemos concluir que la cantidad de “expresiones de conflictos” registrados durante toda la década, sobrepasó los 1.000 anuales.

Gráfico N° 1

Total de conflictos durante el Plan de Convertibilidad peso/dólar
(Período 1991-2001, eventos económico-políticos más importantes)



Fuente: CISI, 2001.

En efecto, estos datos demuestran que de 1.004 casos en el año 1991 pasaron al pico máximo de la década, 2.121, en 1995 (año de la reelección de Carlos Menem), siendo 1996 el año de registro más bajo y luego se dibuja una curva ascendente hasta trepar cerca de 2.000 expresiones de protesta, en los últimos años de la década. El informe nos dice que estos conflictos comenzaron con un gran peso de los gremios y sindicatos y luego fueron virando a actores sociales no agremiados (“vecinos”, “desocupados”, etcétera). Las “huelgas” fueron acotadas aunque con paros generales más largos (pasaron de 24 a 48 horas); de las grandes movilizaciones se pasó a la toma de calles, puentes, rutas, caravanas de protesta y en la década aparecieron las nuevas “formas de protesta” como “escraches”, “encadenamientos” y “actos simbólicos”. En términos gremiales, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) aparece, después de 1996, como un actor importante y el conflicto se desplaza (siempre en términos cuantitativos) del Gran Buenos Aires y Córdoba a la Capital Federal y Jujuy. Un aspecto importante del trabajo del CISI es que más del 90% de las “expresiones de conflictos” tuvieron un carácter pacífico y, además, que el 93% no registra ninguna respuesta del demandado (CISI, 2001).

LA PROTESTA EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Como vimos, el interior del país sufrió las consecuencias de la política de corte neoliberal muy tempranamente. Pueblos enteros vieron como sus pobladores se quedaban sin trabajo por las privatizaciones de la empresa petrolera (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), las nuevas condiciones para la agricultura deshabilitaban la integración de la pequeña y mediana explotación agraria que había caracterizado a la agricultura argentina durante todo el siglo XX. Comienza para el campo argentino el período en que las decisiones de producción, de las opciones tecnológicas (y por tanto los problemas de sustentabilidad y cuidado de los recursos naturales) y las divisas de exportación quedan en manos de las grandes transnacionales (Monsanto, Novartis, etcétera) (véase Teubal y Rodríguez, 2002).

Estas imágenes agrarias de pequeños y medianos productores arrinconados, campesinos expulsados por nuevos inversores, trabajadores rurales y semiurbanos de pequeños poblados desocupados, coexistían con los problemas derivados del cambio de funciones del Estado nacional y el traspaso de la educación, la salud, etcétera a la responsabilidad provincial o municipal. En efecto, los problemas de la

educación pública, los bajos salarios pagados a los maestros, el deterioro de los presupuestos para la salud, para el mantenimiento de las infraestructuras de caminos y puentes, se agravaron y llevaron a los poblados y pequeñas ciudades del interior a situaciones desconocidas por las actuales generaciones. El problema de las inundaciones en la región agraria más rica del país completó el panorama (véase *Le Monde Diplomatique*, N° 30, 2001). Es decir, en el interior, mientras comenzaba el incremento de la producción de cereales en todas las regiones (sobre todo la soja) reemplazando a cultivos tradicionales como las hortalizas o el algodón (en manos de pequeñas y medianas explotaciones), la población comenzaba a sentir las peores consecuencias del modelo neoliberal por un lado y por otro las exigencias de las transnacionales de convertir al país en un país monoprodutor de soja a gran escala.

Las poblaciones comenzaron a manifestarse en el espacio público en una clara expresión de rechazo a esta difusa y compleja política. Así, después de paros y marchas regionales, en 1993 los pequeños y medianos productores de todo el país marcharon hacia la Ciudad de Buenos Aires mostrando el estado en que estaba el campo y sobre todo sus sectores subordinados. Un año después, en 1994, estos sectores vuel-

ven a marchar con todo el interior en lo que se conoció como la Marcha Federal.

Un momento muy importante para la protesta agrorrrural fue la aparición de las Mujeres Agropecuarias en Lucha en 1995, dando la pelea para no perder sus tierras hipotecadas por deudas contraídas algunos años atrás. La metodología de lucha fue simple: cantar el himno nacional, rezar, impedir que el acto judicial se llevara a cabo. Pararon en estos años alrededor de 500 remates y se expandieron por todo el país. Fueron las primeras en instalar el problema del sector financiero en el país y en los primeros años lograron simpatías de muchos sectores pero poca repercusión en los gremios de los pequeños y medianos productores como es la Federación Agraria⁴.

4 Estos argumentos sobre la escala de producción pueden encontrarse explícitos, hasta el cansancio, en los suplementos rurales de los principales diarios capitalinos. No resulta fácil oponerse a ellos por lo que significó la idea de “progreso” agropecuario en la sociedad argentina. Sin embargo, la tecnología adoptada es importada de países cuyos promedios de superficie de las unidades de explotación son varias veces menores a los del país. Pero el dispositivo comunicacional funcionó por muchos años y, una vez más, unas mujeres son los que vinieron a cuestionar aquello instalado en el sentido común.

En efecto, mientras los pequeños y medianos agricultores comenzaban a darse cuenta de que no tenían salida y de que no era una cuestión solo de ellos y de sus familias, las viejas corporaciones del agro intentaban de una u otra forma mostrar que se trataba de una nueva “modernización” que requería un aumento en la escala de producción y “un esfuerzo” de los agricultores. La situación derivó en que en la Federación Agraria surgiera una corriente interna, Chacareros Federados, más cercana a las Mujeres Agropecuarias en Lucha que a la conducción de la Federación Agraria. Por otro lado, las grandes corporaciones como la Sociedad Rural Argentina, entraron en los procesos de privatización de puertos y ferrocarriles como socios privilegiados del modelo.

En 1996 se realizó el primer “corte de ruta” en la provincia sureña de Neuquén, en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul, lugar donde YPF había reducido su planta debido al proceso de privatizaciones. Los cortes de ruta se repitieron en 1997. De este conflicto deriva la protesta docente de carácter nacional conocida como “Carpa Blanca” y los cortes de ruta en las provincias del Norte, Salta en las localidades de Tartagal y General Mosconi. Las luchas de estas localidades tienen un

sentido muy similar a las del Sur pero se les suman otros actores sociales: trabajadores estatales, poblaciones indígenas, trabajadores rurales, etcétera y son mucho más extendidas en el tiempo. En efecto, hubo cortes de ruta en Salta en 1997, 1999, 2000, 2001 y 2002. En noviembre del 2000, los policías mataron al obrero desocupado Aníbal Verón y en 2001 murieron otras personas. Los desocupados obtenían planes sociales de bajos montos con los que comenzaban proyectos de tipo productivos comunitarios, sin abandonar la lucha hasta el día de hoy (véase Svampa y Peyreya, 2003).

Los años de elecciones nacionales fueron momentos de recrudecimientos de las protestas en general. En 1995, reelección de Carlos Menem, fue un año pico de protestas nacionales. En octubre de 1999 hubo nuevamente elecciones presidenciales y durante todo el año se registró un gran número de protestas. Las conceptualizadas como “agrorrurales” suman alrededor de 600⁵. El marco general que

5 Estos datos resultaron de la investigación “Violencia y Ciudadanía” donde participaron investigadores de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay y que tuvo como centro la Universidad Federal De Río Grande do Sul bajo la coordinación de José Vicente Tavares

desarrollamos en estas páginas, permite comprender la diversidad de actores que se reconocen en las protestas de 1999 (Cuadro N° 1). En efecto, podemos observar que aun cuando los “Productores agrarios” protagonizaron la tercera parte de las acciones, se registraron “Desocupados”, “Vecinos y Habitantes”, “Aborígenes” junto con los “Trabajadores rurales y agroindustriales”.

dos Santos. Fueron presentados en el informe final de dicha investigación y en una ponencia en un seminario de CLACSO, en septiembre de 2002. Una anotación acerca de estas cifras: no son comparables con las que otorga CISI por razones metodológicas. La consultora toma como unidad de análisis “formas de acción”, independientemente de los “sujetos de la acción”. Nosotros tomamos “sujetos” es decir que si se trata de un mismo sujeto, aun cuando desarrolle varias formas de acción, lo contabilizamos como un solo registro. El gran valor de contar con los datos de CISI se basa en la permanencia del registro en el tiempo y la compatibilidad de las conceptualizaciones. Teniendo en cuenta que nuestras cifras son más “conservadoras” (reducimos la cantidad de protestas en comparación al informe) es interesante observar que las 600 protestas agrorurales son alrededor del 40% de las nacionales que registra el CISI.

Cuadro N° 1
Protestas agrorurales según sujeto de la acción (Argentina, 1999)

Sujetos de la acción	Porcentaje
Productores agrarios	32,4
Trabajadores municipales o provinciales	12,8
Vecinos y habitantes	12,5
Trabajadores rurales o de agroindustrias	10,6
Desocupados	5,8
Familiares (de reclusos, de víctimas de delitos)	4,5
Aborígenes	3,7
Otros (docentes, usuarios, reclusos, albañiles, jubilados)	17,7
Total	100 (602)

Fuente: Banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Consecuente con esta diversidad de actores es la diversidad en los “repertorios de protesta” (Cuadro N° 2). Podemos observar que junto a las clásicas “Movilizaciones” o “Paro Agrario” (el de julio de ese año fue muy importante), encontramos “Cortes de rutas/calles/puentes”, “Ocupación de espacios públicos o edificios”, “Paros de Remate”. Los “cortes de ruta” forman parte del repertorio

de acciones del interior del país. Fueron utilizados en la gran protesta de los chacareros en 1912, conocido como Grito de Alcorta, y fueron acciones habituales de las Ligas Agrarias que en los años setenta movilizaron a campesinos y chacareros.

Cuadro N° 2

Protestas agrorurales según formas de acción (Argentina, 1999)

Formas de acción	Porcentaje
Movilizaciones	19,5
Cortes de rutas/calles/puentes	17,2
Presentación de cartas, documentos, intimaciones, solicitadas y comunicados de prensa	17,5
Ocupación de espacios públicos o edificios	11,4
Asambleas, plenarios, reuniones	11,3
Paro agrario	2,8
Paro de remates	2,0
Otros (paros, repudios, acciones judiciales, actos, desobediencia civil, abrazo)	18,3
Total	100 (600)

Fuente: Banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Es interesante comprobar que cuando cruzamos “sujetos de la acción” por “Formas de la acción” observamos que cada “sujeto” utiliza un amplio repertorio de acciones, tanto las

que forman parte de sus tradiciones de lucha (acciones modulares) como las nuevas formas aparecidas en los últimos tiempos. Así, por ejemplo, vemos que los “Productores Agrarios” utilizan el “paro” o las “Movilizaciones” pero también los “cortes de ruta/calles/ puentes” que aparecen asociadas a los desocupados. Los “Aborígenes” están más acostumbrados a presentar sus reclamos por escrito pero también han realizado marchas y cortes de ruta.

Cuadro N° 3

Protestas agrorurales de productores según forma de acción (Argentina, 1999)

Formas de acción	Porcentaje
Movilizaciones	17,2
Cortes de rutas/calles/puentes	19,8
Asambleas, plenarios, reuniones	19,3
Presentación de cartas, documentos, intimaciones, solicitadas y comunicados de prensa	21,9
Paro agrario	8,3
Paro de remates	4,2
Otros (acciones judiciales, paros no agrarios, ocupaciones públicas)	9,4
Total	100 (192)

Fuente: Banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Cuadro N° 4

Protestas agrorurales de productores agrarios según tipo de reclamo (Argentina, 1999)

Reclamo	Porcentaje
Políticas económicas y defensa de economías regionales	76,7
Lucha por la tierra y/o la vivienda	4,7
Políticas públicas	6,7
Cuestiones ambientales	0,5
Derechos humanos / Justicia	0,5
Demandas laborales / Falta de trabajo	4,7
Deficiencias en servicios públicos	1,0
Otros	5,2
Total	100 (193)

Fuente: Banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Cuadro N° 5

Protestas agrorurales de trabajadores agrarios y agroindustriales según forma de acción (Argentina, 1999)

Formas de acción	Porcentaje
Movilizaciones	12,5
Cortes de ruta y/o calles	26,6
Ocupación de espacios públicos o edificios	23,5
Asambleas, plenarios, reuniones	7,8
Presentación de cartas, documentos, solicitudes y comunicados de prensa	12,5

Paro y estado de alerta sindical	10,9
Otros	6,3
Total	100 (64)

Fuente: Banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Cuadro N° 6

Protestas agrorurales de trabajadores rurales y agroindustriales según tipo de reclamo (Argentina, 1999)

Reclamo	Porcentaje
Políticas económicas y defensa de economías regionales	7,8
Demandas laborales / Falta de trabajo	90,6
Lucha por la tierra y la vivienda	1,6
Total	100 (64)

Fuente: Banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Cuadro N° 7

Protestas agrorurales de aborígenes según forma de acción (Argentina, 1999)

Formas de acción	Porcentaje
Movilizaciones	18,2
Cortes de ruta y/o calles	9,1
Asambleas, plenarios, reuniones	13,6
Presentación de cartas, documentos, solicitudes y comunicados de prensa	40,9
Acto	9,1

Otras (ocupación de edificios y acciones judiciales)	9
Total	100 (22)

Fuente: Banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Cuadro N° 8

Protestas agrorurales aborígenes según tipo de reclamo (Argentina, 1999)

Reclamo	Porcentaje
Políticas de educación y salud	4,5
Derechos aborígenes	31,8
Lucha por la tierra y/o la vivienda	59,1
Políticas públicas	4,5
Total	100 (22)

Fuente: Banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Encontramos una clara diferenciación en el “tipo de reclamo”: los “Productores agrarios” se concentran en aquellos que se basan en “Políticas económicas y defensas de las economías regionales” mientras que los “Aborígenes” se concentran en la búsqueda de sus derechos y la lucha por la tierra. Los cortes de rutas y otros espacios públicos concentran casi la mitad de las formas de protesta de los “Trabajadores agrarios y agroindustriales” quienes, además, piden por salarios y condiciones de trabajo.

La lucha por la tierra fue un reclamo que atravesó no solo el año bajo estudio sino toda la década. Pero en esta Argentina agraria heterogénea, la tierra contiene un sentido polisémico. Es decir, tiene diversos significados para los distintos actores sociales. La tierra es un aspecto esencial de sus cosmovisiones para las poblaciones indígenas mapuches o kollas, por ejemplo. El mapuche o el kolla se sienten pertenecientes a la tierra y piden, básicamente, una reparación histórica a través de las leyes de recuperación de campos que pertenecieron a sus ancestros. Para los campesinos, por ejemplo para el Movimiento Campesino Santiagueño, la tierra forma parte de sus herramientas básicas de trabajo y luchan por acceder a ella. Mientras tanto, para las Mujeres Agropecuarias en Lucha, que accedieron a la tierra por herencia de sus padres o abuelos (generalmente colonos europeos), sus campos significan patrimonios familiares y luchan por no perderlos. Podríamos agregar a esta polisemia que para el terrateniente la tierra es una mercancía como cualquier otra.

La lucha por la tierra se combinó en estos espacios agrorurales de la Argentina con la lucha por el trabajo, la vivienda, la salud. Es decir, por derechos adquiridos en los proce-

sos democratizadores del siglo XX y en peligro de perderlos en sus finales. Cuando la “ciudadanía” está en peligro de ser perdida, la protesta va en aumento.

Por último, querría señalar una protesta de la década, que a mi modo de ver tuvo contenidos y formatos semejantes a las nuevas protestas que se dan a partir del 2001. Se trata de la lucha por la recuperación de la empresa de aguas y servicios de cloacas de Tucumán, privatizada en 1995 que ya adelantamos en la introducción de este trabajo. Cuando el consorcio francés-español “Aguas del Aconquija” se hizo cargo, la gente de los poblados del Sur de Tucumán comenzó a manifestarse contra la privatización por considerarlo un acto corrupto más del gobierno provincial y, decididamente, no aceptaron el aumento de las tarifas. Tuvieron como herramienta fundamental la desobediencia civil instrumentando el “no pago” de los servicios a la transnacional. Lograron en 1998 la retirada de la empresa y se convirtió en una protesta que en estos días atrae la atención internacional (véase el largo artículo que le dedicó el *New York Times* el 26 de agosto de 2002 y Giarracca y Del Pozo, 2005).

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

Querría reflexionar sobre dos órdenes de problemas: aquellos que se derivan del análisis de la protesta argentina de la década, ligándola con lo sucedido en los finales de 2001 y cuyas marcas son observables en el país actual, y aquel otro problema que enuncié en la introducción de este trabajo y que relaciona los procesos, acontecimientos y situaciones que se despliegan en América Latina con los paradigmas de interpretación de nuestras disciplinas.

Las múltiples protestas, con o sin organizaciones sociales, durante toda la década del noventa, constituyen un aspecto significativo para comprender los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre en la Argentina así como los nuevos sentidos de la política asamblearia en las calles porteñas, los barrios “piqueteros”, las fábricas recuperadas, de los tiempos posteriores. No obstante, lo que ocurrió desde finales de 2001 no se deriva, necesariamente, de la década; es decir, protestas, ajustes, pobreza, desempleos, pérdidas de derechos sociales, vaciamiento de la palabra por parte de los políticos, etcétera, constituyen los escenarios, la “situación incompleta” de donde se deslizan los acontecimientos posteriores. Son antecedentes que permiten la

comprensión, pero a *posteriori*, cuando ya los hechos ocurrieron. No los anuncian, constituyen a posteriori, las condiciones estructurales de la situación emergente.

Tampoco el fenómeno de la rebelión del 19 y 20 se relaciona con los intereses sociales particulares, como quedó claro que ocurre con la mayoría de las protestas de la década. En la rebelión de diciembre del 2001, intereses e identidades sociales fueron suspendidos en tanto la calle no la ganaron los desocupados, los obreros, o los ahorristas (como muchas veces se interpreta), sino que salen “pobladores” de la gran ciudad, ciudadanos “sin Estado”, en una demanda que difícilmente se hubiese podido realizar a “otro”, o, pensar que se podía llegar a cumplir: el famoso “que se vayan todos”. En esta enunciación política, polisémica y precaria, recaían los nuevos sentidos de esta rebelión. Una rebelión contra el corazón de la democracia liberal que acompaña al capitalismo de fin de siglo: la representación política. Se puso en duda la relación representantes-representados, se cuestionó la legitimidad de tal vínculo y lo que ocurrió en los meses posteriores fue una larga discusión acerca de lo que todo esto implicaba. La idea se expandió hacia toda representación posible y el pensamiento de una política a distan-

cia del Estado, también circuló tímidamente por las plazas, estaciones de tren y calles de la ciudad de Buenos Aires en lo que se recordará como las “asambleas barriales”.

La rebelión del 19 y 20 se llevó a cabo en diversos escenarios regionales. El interior del país donde se desarrollaban protestas iguales a las que describimos para 1999 (una ruta provincial en Tucumán estuvo cortada durante todo el 19 de diciembre de 2001 por los trabajadores de un ingenio reclamando salarios atrasados), en algunos municipios de Buenos Aires se estaban dando acciones explícitas contra los funcionarios y en todo el país se dieron durante el 18, 19 y 20 acciones de saqueos a supermercados. Este último tipo de acciones fueron las más cuestionadas pues hay razones para creer que detrás de las mismas estaba el aparato político clientelístico del Partido justicialista con el fin de apresurar la salida del gobierno de Fernando de la Rúa. No obstante no fueron estos saqueos, ni las protestas de las provincias, los que derivaron en la renuncia del presidente. Fue tal conjunción de hechos, que es imposible saber cuáles fueron los más importantes. No obstante, a mi entender, dos momentos son claves para la rebelión: la decisión presidencial de declarar el estado de sitio (en un país donde tal medida está relacionada con los gobiernos

militares) y, aún más importante, la decisión de los porteños (habitantes de la ciudad de Buenos Aires) de no acatarlo, es decir de declarar una clara acción de “desobediencia civil”.

Los acontecimientos de esos días están documentados en varios trabajos (véase Colombo, 2002; Schuster, 2002; Giarracca y Teubal, 2003; Cheresky, 2002 entre otros), lo importante en este trabajo es poder diferenciar estas acciones, de carácter político (es decir sin que se jugaran intereses sociales sectoriales), de las acciones de las protestas de la década que tuvieron serias dificultades para encontrar los elementos universalizables que hubiesen habilitado un sentido general, público y político del accionar social. El país entró desde entonces en una crisis de legitimación profunda y con significativas consecuencias⁶. Si bien durante

2002, las nuevas configuraciones políticas surgidas o resignificadas por la rebelión del 19 y 20 de diciembre fueron perdiendo la potencia inicial debido a razones complejas e imposibles de esbozar en este trabajo, las experiencias asamblearias, las 110 fábricas recuperadas, el movimiento social piquetero, marcan los diversos procesos actuales de múltiples formas aún no fáciles de aprehender y comprender.

Por otro lado, simultáneamente a los procesos de rebelión y experimentación política y cultural del 2002, las distintas poblaciones tuvieron que aceptar que debían seguir viviendo en medio de unas crisis que no solo eran de carácter institucional sino que ponían a las mayorías en una infernal maquinaria de empobrecimiento, desde la devaluación que redujo los salarios al tercio de diciembre de 2001, los ahorros incautados, hasta la desaparición de puestos de trabajos etcétera. Los jóvenes que pudieron, optaron por una huida del país solo comparable a los años del exilio político mientras que la deuda entraba en *default* y los diferentes grupos económicos se enfrentaban

6 Cuando reviso esta ponencia para su publicación, en la Argentina ya se votó nuevo presidente después de un interregno ocupado por el senador Eduardo Duhalde. Un gobernador del sur patagónico, Néstor Kirchner, ganó con solo el 22% de los votos la presidencia de la nación. Desde allí comienza una etapa para lograr consensos y apoyos con una política que intenta diferenciarse de sus antecesores. Está consiguiendo un alto grado de apoyo que es casi personal en consonancia con su estilo de gobierno; no obstante para las elecciones a gobernadores y legisladores de 2003 vuelve a marcarse la distancia de

la población con una dirigencia política que insiste en prácticas y modos de gestión: frente al voto obligatorio se dan abstenciones entre 30 y 40% del padrón electoral y votos en blanco y anulaciones entre 3 y 10%.

mostrando las peores caras del capitalismo neoliberal. Pero el gobierno de Duhalde (vicepresidente de Menem) ya no pudo negociar con el FMI en las condiciones que este establecía, dejó de pagar la deuda, no pudo permitir ajuste de tarifas de las empresas privatizadas y condujo a una salida electoral en las mejores condiciones que el clima nacional le permitía y que su ministro de Economía Roberto Lavagna colaboró a construir. El fenómeno producido alrededor de la figura de Néstor Kirchner, tiene que ver, también, con un país posterior al 19 y 20 de diciembre.

Mientras el sector agrario se convertía para el gobierno en el espacio que se podía gravar dadas sus ventajas en el comercio internacional (básicamente la soja), las demandas de los campesinos desalojados por los nuevos inversores, las chacareras endeudadas, los obreros agroindustriales despedidos, etcétera con frecuencia caían en el saco roto de las autoridades estatales y, por otro lado, perdían las simpatías de las poblaciones urbanas enfrascadas en sus propios conflictos. Volvieron a circular demandas sociales agrarias en un contexto donde el campo se iba convirtiendo, según el dispositivo comunicacional del poder agrario-exportador, en el gran salvador de la nación (véase Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2003). Los pueblos

se empobrecían y las cifras de pobreza, hambre e indigencia, como vimos, alcanzaban cifras impensables en el otrora “granero del mundo”⁷.

Para terminar, querría volver a los interrogantes que sostuve en la primera parte de este trabajo. Es decir, si estamos en condiciones de seguir el derrotero de todos estos acontecimientos de América Latina y, además, qué tipo de herramientas tenemos para tal fin. Comparo la posición del sociólogo portugués Boaven-

7 Las políticas de carácter progresista del gobierno de Kirchner no alcanzan al sector agroalimentario. Mientras las críticas sociales al monocultivo sojero van en aumento, el gobierno tiene dos serias limitaciones para abordar el problema: 1) el campo paga retenciones a las exportaciones (vale tener en cuenta que muy por debajo de lo que corresponde) y, por lo tanto, aporta a las arcas del gobierno y 2) el equipo presidencial argumenta constantemente la idea del desarrollo económico basado en la “producción” desde una posición acrítica de las tecnologías, el deterioro medioambiental, etcétera (ha vuelto atrás en muchas conquistas de la lucha ecológica de los últimos años). Por ahora no parece tener un gran costo por estas posiciones y esto es lógico por dos razones: 1) el país apenas está saliendo de un capitalismo netamente financiero y especulador, todo discurso “productivista” es apoyado y 2) porque en la Argentina se añoran las épocas de las modernizaciones productivas. El viejo recuerdo del “progreso ilimitado” (a cualquier precio) sigue funcionando como un fuerte imaginario social.

tura de Sousa Santos cuando sostiene que estamos en una doble transición paradigmática: la sociocultural y la epistemológica. Dice el autor:

La transición epistemológica ocurre entre el paradigma dominante de la ciencia moderna y el paradigma emergente que designo por paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente. La transición societal menos visible se da desde un paradigma dominante —sociedad patriarcal; producción capitalista; consumismo individualista y mercantilizado; identidades fortalezas; democracia autoritaria; desarrollo global desigual y excluyente— hacia un paradigma o conjunto de paradigmas de los que aún no conocemos sino las vibraciones emergentes de las que hablaba Fourier. (2000: 16)

Mi propuesta a los sociólogos rurales de América Latina es que nuestra disciplina debe reflexionar desde esta “apuesta” que se asienta en la idea de que estamos en momentos de pasajes, de transiciones y, consecuentemente, lograr una fidelidad a la misma que supone dudar de los viejos acompañantes teóricos metodológicos. Convivimos con viejos problemas pero que se resisten a las viejas soluciones. Pero también convivimos con situaciones inimaginables hace unas décadas, configuraciones económicas, sociales, culturales, ideológicas

imposibles de comprender desde los viejos paradigmas de interpretación.

En *Imperio*, Negri y Hardt comienzan su novedosa construcción teórica sosteniendo que

Nuestra hipótesis básica consiste en que la soberanía ha adquirido una forma nueva, compuesta por una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos por una única lógica de dominio. Esta nueva forma global de soberanía es lo que llamamos “imperio”. (2002: 11)

Frente a una concepción tal, una dominación sin límites, sin espacios y tiempos definidos, le anteponen un social expandido a través de las resistencias, las luchas y los deseos de la multitud. Dentro de las numerosas críticas recibidas por el polémico trabajo, importan aquellas que muestran como los autores no pueden salir de la concepción ontológica de “totalidad” que, aunque en contradicción, se expresa siempre a sí misma (Cerdeiras, 2003).

Para otras concepciones teóricas, más ligadas a los paradigmas liberales en la línea de Hannah Arendt, las protestas sociales son parte de las formas democráticas de gobierno y a partir de ellas pueden ampliarse los márgenes de los derechos individuales y sociales con total independencia de los modos de control economí-

co (Schuster y Pereyra, 2001; Pérez, 2002). Una línea parecida sostienen Laclau y Mouffe (1987) cuando desde el concepto gramsciano de hegemonía, piensan la transformación ubicando la política como un modo —en diferencia— de expresarse lo social y recuperan la posibilidad de una democracia radicalizada. Para los pensadores dentro de la línea del francés Alan Badiou (1990), lo importante es recuperar la autonomía de lo político y considerar esta actividad humana dentro de los espacios de procedimientos de verdad, junto al arte, la ciencia y las relaciones amorosas, en las que es posible “la invención”, la creatividad. En tal pensamiento, si bien lo político puede darse en cualquier lugar de “lo social”, no todo social es político, lo político más bien, es la excepcionalidad de lo social.

Puede pensarse que entre “el acontecimiento”, la invención política de Badiou y la pura dominación de “Imperio” donde todo social se convierte en condición de resistencia, es posible pensar espacios sociales, económicos donde por la intervención de un sujeto puedan darse nuevas producciones de sentido, nuevas subjetividades, aun dentro de un mundo que no para de extender su reproducción económica y su control social (y militar). En tal sentido, vuelvo a recuperar a De Sousa Santos en su concepto “campo de experimentación” cuando dice:

Hoy la esperanza reside en la posibilidad de crear campos de experimentación social donde sea posible resistir localmente las evidencias de la inevitabilidad, promoviendo con éxito alternativas que parecen utópicas en todos los tiempos y lugares excepto en aquellos en que ocurren efectivamente. Es este “realismo utópico” que preside las iniciativas de los grupos oprimidos que, en un mundo donde parecen haber desaparecido las alternativas, se van construyendo, un poco por todas partes alternativas que tornan posible una vida digna y decente. (De Sousa Santos, 2000: 36)

Esta fugaz recorrida por estos pensadores contemporáneos a nosotros, que intentan asumir estos momentos de transiciones y pasajes de nuestro mundo actual y que toman distancias de las comprensiones que perdieron el sentido de radicalidad, sin el cual las Ciencias Sociales se transforman en un saber puramente técnico, tienen como finalidad abrir este espacio de reflexión como momento necesario de nuestra disciplina para acompañar toda la riqueza del momento latinoamericano actual. Los cambios en los niveles institucionales que mencionaba en la introducción, no pueden comprenderse sin las protestas, las rebeliones, los movimientos campesinos, indígenas, “los campos de experimentación” que recorren el continente. Y los cambios en los niveles de la agroalimenta-

ción, de los mercados laborales, de las migraciones, etcétera tampoco pueden abordarse, desde nuestras disciplinas, sin integrar estos nuevos escenarios institucionales y las múltiples resistencias y experimentaciones de las poblaciones subalternas.

BIBLIOGRAFÍA

- Badiou, A. 1990 *Se puede pensar la política* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Basualdo, E. y Bang, J. 1997 *Los grupos de sociedades en el sector agropecuario pampeano* (Buenos Aires: FLACSO / INTA).
- Cassen, B. 2003 “Los efectos de la liberalización del comercio mundial” en *Le Monde Diplomatique*, Año V, N° 51, septiembre.
- Cerdeiras, R. 2003 “Las desventuras de la ontología. Biopolítica del imperio” en *Acontecimiento* (Buenos Aires) N° 24-25, mayo.
- Cheresky, I. 2002 “Autoridad política debilitada y presencia ciudadana de rumbo incierto” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 179, mayo-junio, pp. 112-129.
- Colombo, A. 2002 “Estas rebeliones” en <www.forodesobedienciacivil.com>.
- De Sousa Santos; B. 2000 *A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência* (San Pablo: Cortez).
- Domínguez, D.; Lapegna, P. y Sabatino, P. 2003 *Diagnóstico socioeconómico. Efectos de la agricultura industrial en el área de agricultura familiar* (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Grupo de Estudios Rurales).
- Giarracca, N. et al. 2001 *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. et al. 2003 *Territorios y lugares: Entre las fincas y la ciudad, Lules en Tucumán* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. y Del Pozo, N. 2005 “To make waves: water and privatization in Tucumán, Argentina” en Bennett, V.; Dávila-Poblete, S. y Nieves Rico, M. (ed.) *Opposing Currents. The Politics of water and gender in Latin American* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2003 “Que se vayan todos. A decade of crisis and protest in Argentina” en Fernández Jilberto, A. y Hogengoom, B. (coords.) *Good Governance in the Era of Global Neoliberalism: socio-economic conflict and depolitization in*

- Asia, Africa, Latin America and Eastern Europe* (Londres: Zed Press).
- Hard, M. y Negri, A. 2002 *Imperio* (Buenos Aires: Paidós).
- Laclau, E. y Mouffe, C. 1987 *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia* (Madrid: Siglo XXI).
- Murmis, M. 1998 “El agro argentino: algunos problemas para su análisis” en Giarracca, N. y Cloquell, S. (comps.) *Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales* (Buenos Aires: La Colmena / CLACSO).
- Pacari, N. 1996 “Taking on the neoliberal agenda” en *NACLA. Report on the Americas*, V. XXIX, N° 5, marzo-abril.
- Pérez, G. 2002 “Modelo para armar: complejidad y perspectiva de la protesta social en la Argentina reciente” en *Argumentos* (Buenos Aires: IIGG) N° 1, diciembre.
- Schuster, F. 2002 “La trama de la protesta” en *Cuadernos de coyuntura* (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Instituto Gino Germani) N° 4.
- Schuster, F. y Pereyra, S. 2001 “La protesta social en la Argentina democrática. Balance y perspectivas de una forma de acción política” en Giarracca, N. et al. *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Svampa, M. y Pereyra, S. 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras en Argentina* (Buenos Aires: Biblos).
- Tarrow, S. 1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza Universidad).
- Teubal, M. y Rodríguez, J. 2002 *Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica* (Buenos Aires: La Colmena).

OTRAS FUENTES

- Censo Nacional Agropecuario 2002.
- CEPAL, <www.ecla.cl/>.
- CISI (Gonda, A.) 2001 “El conflicto social dentro del plan de convertibilidad. Argentina 1991-2001”, Informe (Buenos Aires: Consultora de Investigación Social Independiente).
- Le Monde Diplomatique* 2001 Año III, N° 30, diciembre.
- NACLA: Report on the Americas* 2000 Vol. XXXIII, N° 5, marzo-abril.
- Vía Campesina, <www.viacampesina.org>.

LA LUCHA POR LOS DERECHOS DEL AGUA EN TUCUMÁN

TRANSNACIONALES Y MUJERES EN LA PROTESTA SOCIAL* **

NORMA GIARRACCA Y NORMA DEL POZO***

INTRODUCCIÓN

Durante 1998, en Tucumán, la provincia más pequeña de la Argentina, ocurrió un hecho insólito pero festejado por toda una población que aún no llegaba a darse cuenta de la magnitud de lo que había logrado. “Los franceses quieren irse” titulaba el principal periódico provincial y seguía: “La Compagnie Générale des Eaux,

operadora del servicio de agua y cloacas de Tucumán que brinda Aguas del Aconquija, anunció que iniciará una ofensiva a nivel nacional e internacional para poder retirarse de la provincia”. ¿Qué había ocurrido para que una fuerte empresa europea que había ganado el pliego de privatización de la concesión del servicio de agua y cloacas de la provincia en 1995¹ quisiera retirarse tres años después? ¿Qué suerte había corrido esta compañía en un país donde las privatizaciones de empresas estatales de servicios representaron negocios excelentes para los capitales franceses, españoles, italianos, etcétera?

* Giarracca, N. y Del Pozo, N. 2005 “La lucha por los derechos del agua en Tucumán. Transnacionales y mujeres en la protesta social” en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.) *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).

** Una versión muy parecida en inglés se publicó en 2005 como “To make waves: water and privatization in Tucumán, Argentina” en Bennett, V.; Dávila-Poblete, S. y Nieves Rico, M. (ed.) *Opposing Currents. The Politics of water and gender in Latin American* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).

1 La ley provincial de privatización se sancionó en 1993 y la empresa que ganó la licitación se hizo cargo del servicio en 1995.

*** Educadora y miembro fundadora de ADEUCOT (Asociación en Defensa de Usuarios y Consumidores de Tucumán).

La empresa había enfrentado, desde el momento en que se le traspasaron los bienes y la operación del servicio, una demanda sostenida y continua de los usuarios de toda la provincia. Por un lado, el servicio de agua y cloacas de la empresa Aguas del Aconquija S.A. (nombre que adoptó localmente el consorcio) incluía un fuerte aumento de las tarifas, y por otro lado, no se solucionaban viejos problemas de la presión del agua que el Estado había anticipado —en parte, en función de la propaganda privatizadora— como un logro de la nueva inversión. Los usuarios consideraron que los aumentos de tarifas representaban un agravio a sus derechos. Se organizaron y resistieron y la acción que finalmente logró el retiro de la gran empresa fue la “desobediencia civil” que, en este caso, se expresó en la negativa a pagar el servicio de agua y cloacas. La protesta duró casi cuatro años y en ella se destacaron las mujeres, algunas con experiencia en luchas sociales y otras que salían al espacio público por primera vez.

En el presente trabajo, rescatamos esta protesta social que, si bien fue local, tuvo consecuencias globales por afectar a una de las empresas más importantes del mundo en su rubro. En efecto, el consorcio que ganó el pliego de privatización estaba formado por la Compag-

nie Générale des Eaux, que tiene la concesión de servicios sanitarios en 56 países del mundo, y por Dycasa, una empresa de dragados y construcciones de origen español².

Se trató de reclamo urbano que cubrió pequeños poblados, pero que ocurrió en una década atravesada por la expansión de la conflictividad social en todo el territorio nacional. Las medidas necesarias para implementar el modelo económico neoliberal fueron resistidas por movilizaciones sociales sostenidas a partir de las transformaciones macro-institucionales iniciadas en 1991, que tuvieron fuertes consecuencias en el aumento de la desocupación, así como en el nivel de los derechos sociales adquiridos durante el siglo XX. La resistencia social fue en aumento durante ese período y abarcó, especialmente, algunas de las regiones del interior del país, entre ellas el noroeste, donde se encuentra Tucumán (véase Giarracca et al., 2001).

Con la dinámica social iniciada en los noventa en la Argentina, surgen nuevas formas

2 Durante 1996, en medio del conflicto, Dycasa redujo notablemente su participación en la sociedad y fue la empresa francesa la que finalmente se enfrentó con la sociedad civil y con el gobierno provincial antes de retirarse de Tucumán.

de participación en el espacio público, aparecen sujetos no representados por las formas políticas tradicionales (sindicatos, partidos políticos), que se expresaron en novedosas acciones tales como cortes de ruta, “piquetes”, desobediencia civil, “escraches”, carpas de protesta, cacerolazos, etcétera. Según Della Porta y Diani (1999), una de las características de la protesta es su capacidad para movilizar a la opinión pública mediante un proceso persuasivo, en el que intervienen los medios de comunicación para ejercer presión sobre quienes toman decisiones políticas. Esta acción colectiva aparece, así, como una irrupción conflictiva que se inscribe en el espacio público a partir de una demanda concreta y que necesita tanto del discurso como de la práctica para adquirir visibilidad. Su especificidad viene dada por la manifestación de un litigio y la construcción de un sentido político público.

La especificidad del conflicto del agua en Tucumán deriva de varios aspectos: en primer lugar, involucró a una gran empresa extranjera de servicios en un período en el que predominaba una enérgica demanda de “seguridad jurídica” al Estado por parte de los nuevos inversores; en segundo lugar, fue un movimiento urbano pero de ciudades pequeñas y de pueblos del interior de Tucumán (veremos más adelante que

la ciudad capital fue reticente a participar); en tercer lugar, insistimos, la participación de las mujeres fue decisiva para sostener y llevar la lucha hasta las últimas consecuencias.

La protesta del agua logró poner en acto una forma de acción que no es fácil de llevar a cabo por los conjuntos sociales activos: la desobediencia civil. Como sostiene Colombo (2001: 1), la desobediencia civil es una subcategoría de la acción colectiva y supone el cumplimiento de cuatro aspectos: es una práctica deliberativa, autónoma, disruptiva y no violenta. Lo que esta viene a cuestionar es la decisión institucional tomada por una “mayoría” (en este caso, parlamentaria) mostrándola como “errónea” o “defectuosa”. Es una práctica muy difícil de poner en marcha por razones que van desde lo emocional (temores) hasta los principios personales que refieren al “buen ciudadano” (no querer aparecer como deudores, morosos, etcétera). No obstante, en el caso de la protesta por el agua en Tucumán pudo articularse y obtener un éxito contundente.

Como veremos a lo largo de este trabajo, la organización de la gente logró un acontecimiento inusitado: que la empresa se marchara. Sin embargo, su accionar no finalizó aquí pues luego había que decidir la readjudicación, y en ese proceso se pusieron en acto las posibilida-

des y limitaciones de la acción colectiva. Es decir, la organización de los usuarios no solo tuvo que iniciar una ofensiva contra una empresa que agraviaba derechos sino que debió además articular alianzas con los municipios (alcaldías), tomar posición frente al gremio de los sanitarios (sindicato de los trabajadores de la ex-empresa estatal del agua) y generar alternativas para los servicios de agua y cloacas. Y tal vez en esta etapa es donde se pusieron en evidencias las limitaciones de la organización ya que se terminó aceptando la solución propuesta por el Estado³. Sin embargo, este proceso constituyó un invaluable aprendizaje para la etapa que se abriría más adelante, al comienzo de la reprivatización.

Por último, unas palabras en relación con la autoría de este artículo. Fue realizado por una académica de las Ciencias Sociales, estudiosa de los mundos sociales tucumanos, y por una de las mujeres que inició y llevó a buen puerto esta lucha. Para que esta sociedad fuera fructífera y permitiera iluminar el texto, los relatos de quien vivió la experiencia aparecen entre comillas, con sus iniciales (NDP), como se pro-

cede con el resto de los participantes entrevistados y en las citas de los materiales textuales. Su participación contribuyó también tanto al trabajo de recopilación y organización del material y el registro de otros testimonios como al trabajo de reflexión e interpretación de los hechos, producto esto de una “sociedad”, no muy frecuente en las Ciencias Sociales.

EL ESCENARIO TERRITORIAL: LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

La provincia de Tucumán es la más pequeña del país: ocupa 22.524 kilómetros cuadrados, que representan solo el 0,8% de la superficie nacional. Pero es también la región de mayor densidad de población: 50,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Tuvo una de las urbanizaciones más tempranas de la región norte del país; a principios del siglo XX ya tenía el 40% de su población residiendo en pequeñas ciudades. Tiene una alta tasa de desempleo, que en los últimos años trepó al 20%, lo que representa más de cien mil personas. Asimismo, registra una tasa de mortalidad infantil que supera en tres puntos a la nacional.

La caña de azúcar es la principal producción agrícola de Tucumán, participa en más del 50%

³ Tiempo después, durante el año 2000, ocurriría lo mismo con la Coordinadora del Agua en Cochabamba, Bolivia, en lo que se conoce como “la guerra del agua”.

de su Producto Bruto Agrícola (PBA). En los últimos años, la agroindustria citrícola (principalmente la del limón) orientada a la exportación, registró una fuerte expansión. También cuenta con actividades industriales instaladas desde los años sesenta y con emprendimientos comerciales ligados con el turismo y con las finanzas. San Miguel de Tucumán, la capital provincial, cuenta con alrededor de 600.000 habitantes. Las demás ciudades, que no pasan los 37.000 habitantes cada una, se concentran en la zona cañera, en una cadena hacia el sur, y se desarrollaron justamente alrededor de los ingenios y sus cercos. Es decir, las fábricas azucareras están dentro de la ciudad, muestra cabal de la importancia de la agroindustria en los orígenes mismos de esas localidades.

Estas ciudades pequeñas, sedes de los municipios y delegaciones comunales de los alrededores (comunales rurales), albergan familias conectadas con las actividades agroindustriales, comerciales, de servicios, así como profesionales y artesanos. En nuestro artículo aparecen varios vecinos de estos poblados, quienes se organizaron dentro de cada ciudad y, a su vez, en una red que agrupó a siete de ellas. El conjunto de poblaciones, desde la más cercana a la ciudad capital (San Isidro de Lules) hasta la más lejana en dirección sur (Concepción),

forma una línea que bordea las carreteras más importantes del sur de la provincia.

Durante las décadas de sesenta y setenta, Tucumán fue escenario de luchas gremiales de campesinos, trabajadores de la agroindustria azucarera y de los empleados estatales (sobre todo, los maestros). Esta efervescencia social había llevado a algunas organizaciones de izquierda a considerarla clave desde el punto de vista de la acción política y organizativa, razón por la cual, incluso antes del golpe de Estado de 1976, la provincia sufrió operaciones militares de control social de fuerte tono represivo.

Una vez instalado el proceso militar (1976-1983), se nombró gobernador a uno de los militares que había operado allí con anterioridad: el general Antonio Domingo Bussi. Este militar, oriundo de Buenos Aires, llevó a cabo una gobernación de carácter totalmente represivo: fusilamientos y desapariciones de personas, encarcelamientos sin procesos judiciales, etcétera, en un clima de terror que acompañó por muchos años a la provincia. No obstante, Bussi llevó a cabo también una política económica que, mediante la inversión pública, logró cierto desarrollo y crecimiento provincial. Esta situación neutralizó los efectos del terror y la represión en una parte importante de la población, sobre todo urbana, que dio apoyo al dictador y,

luego de restaurada la democracia, a su partido político, Fuerza Republicana.

Por esta razón, a mediados de 1995, el partido de Antonio Domingo Bussi ganó las elecciones y se convirtió —con la mitad de la provincia en activa oposición— en gobernador democráticamente elegido⁴. En efecto, más de la mitad del electorado provincial no lo votó e hizo campaña en su contra; su candidatura avivó la condena de la clausura de juicios a los represores por parte de las organizaciones de derechos humanos, que responsabilizaron al Estado nacional por este nefasto regreso. De 1995 a 1999, el militar Bussi gobernó la provincia en un clima de crisis tras crisis y fue acusado por la legislatura de varios actos administrativos ilegales. En 1999, la lista de Fuerza Republicana, encabezada por su hijo Ricardo, perdió las elecciones para la gobernación provincial.

Bussi rememoraba un período de la historia del país que trajo mucho sufrimiento a la población, pero también trataba de representar un discurso nacionalista que había caracterizado a los militares de la Argentina. Es importante remarcar esto para comprender la participación del gobierno provincial durante el conflicto

con la empresa francesa Aguas del Aconquija. Mientras el gobierno nacional, a cargo del Partido Justicialista, abría las puertas a capitales transnacionales y le ofrecía las máximas garantías de funcionamiento y de beneficios económicos, con un discurso netamente neoliberal, el gobierno provincial deslizaba ciertas pretensiones del viejo nacionalismo de los años cuarenta y cincuenta, lo cual tenía efectos importantes en una provincia que había apoyado históricamente al viejo partido del general Perón (1945-1955/1973-1976).

La situación provincial no originó el conflicto por el agua ni su desarrollo, y menos aún su éxito, pero fue una condición que favoreció a las organizaciones de consumidores en cierto momento de la contienda. Como veremos en este trabajo, hubo una primera etapa en la que los vecinos tomaban las iniciativas: se organizaron, supieron peticionar, decidieron la “desobediencia civil” mediante el “no pago”, etcétera, hasta que el gobierno provincial decidió intervenir. Ese segundo momento se originó en enero de 1996, cuando el agua de la ciudad capital comenzó a salir de los grifos muy oscura debido a un aumento de manganeso. A partir de allí, el gobierno provincial se hizo cargo de las demandas de los usuarios y logró unificar los tres poderes del Estado provin-

4 Llegó a la gobernación con más del 40% de los votos, representando a la primera minoría.

cial en una posición firme frente a Aguas del Aconquija. Todos los entrevistados coinciden en que, cuando el gobernador percibió que la situación estaba totalmente fuera de su control, intentó retroceder y apoyar al gobierno nacional para salvar a la compañía francesa, pero que ya era demasiado tarde: la consigna del “no pago” era obedecida a esa altura por un 80% de la población y la empresa no podía resistir tal situación económica.

La participación en la contienda de un gobierno de baja calidad democrática no debe opacar, a nuestro juicio, la acción de los vecinos, quienes retomaron —después de muchos años de miedo e inmovilización urbana, generados precisamente por Bussi— la actuación en los espacios públicos, *a pesar* del recuerdo de tiempos de represión y violencia.

CÓMO SE SUCEDIERON LOS HECHOS

En este apartado, organizaremos los hechos referidos al conflicto en función del actor que predominó en la arena social de la protesta durante los distintos períodos. Construimos una cronología, según el tipo de actor social que llevó a cabo las acciones más importantes del proceso. De este modo, en un primer momen-

to, nos centramos en los “usuarios”, construyendo el movimiento social, protestando, originando la desobediencia civil; y, en un segundo momento, en el Estado, instituyendo medidas para rescindir el contrato y buscando una empresa operadora que sustituyera a Aguas del Aconquija.

ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL CONFLICTO, EL MOMENTO DE LOS USUARIOS

En el marco de un amplio programa de privatizaciones que emprendió el gobierno de Carlos Menem en la década del noventa, el Estado provincial de Tucumán —en esos momentos a cargo de Ramón Ortega (Partido Justicialista)— sancionó una ley para otorgar el servicio de agua y cloacas de la provincia a una empresa privada.

En el primer año de su mandato, Carlos Menem mandó sancionar una ley de Reforma de la Administración Pública (N° 23.696), que autorizaba “la privatización parcial o total o la liquidación de compañías, corporaciones, establecimientos o propiedades productivas, totales o parcialmente poseídas por el Estado” (citada por Loftus y McDonald, 2001). De esta manera, se pudo privatizar todos los servicios

públicos sin consulta pública. Tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estuvieron muy involucrados en este proceso⁵.

El servicio tucumano, que años atrás había dependido del ente estatal Obras Sanitarias de la Nación y luego de la institución local, la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DI-POS), fue licitado y otorgado en concesión a una empresa privada con capitales franceses y españoles.

Por un decreto del Poder Ejecutivo de la provincia, se traspasó el servicio y se estableció el modo de operación, de control y regulación y las condiciones para los trabajadores. Se daba cumplimiento, de tal modo, a las modificaciones que recibiera la ley de privatización. Se creó el Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (ERSACT), or-

ganismo que tendría un rol primordial durante el conflicto.

En 1993, el mismo año en que se efectuaban los pliegues de la concesión, algunos municipios comenzaron a preocuparse por la suerte que correrían sus propias inversiones en el servicio de agua y cloacas. Tales inversiones habían resultado del esfuerzo económico de las comunas y de los vecinos, quienes financiaron por sus propios medios, la mayor parte de las obras de infraestructura que se traspasarían a la empresa que ganara. Hasta entonces, el servicio de agua había sido considerado un servicio público y, como tal, ameritaba el esfuerzo de quienes eran sus beneficiarios. El concepto de mercantilización del agua (considerado un bien común) y la privatización del servicio conducían a los municipios a reclamar sus inversiones a una empresa que se instalaba en búsqueda de ganancias. Así, la comuna de Monteros, durante 1995 (año en que se concretó el traslado), fue la primera en plantear al gobierno provincial aquella demanda en una carta firmada por los vecinos, otorgándole entidad a un nuevo e importante actor que comenzaba a participar: el usuario. El 22 de junio de ese año se realizó el primer acto público en Monteros con la participación de los legisladores provinciales disidentes de las

5 En una entrevista realizada por Alex Jones al periodista de la BBC y del *London Observer*, el americano Greg Palast, este comenta: “Y esto sucedió porque Argentina empezó a fines de los ochenta, por órdenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a vender todos sus activos, los activos públicos. Me refiero a cosas que nosotros ni locos haríamos en Estados Unidos, como vender el sistema de agua potable. [...] se vendió por monedas a una compañía llamada Enron” (<<http://www.greg-palast.com>>).

privatizaciones y con los trabajadores cesanteados de la vieja empresa provincial de agua. Esta movilización fue convocada por los vecinos y, particularmente, por muchas vecinas de esta localidad del sur tucumano.

En el mes de junio de 1995, poco antes de que la empresa concesionaria se hiciera cargo, se conocieron las nuevas tarifas que regirían. Se hablaba de un desmedido incremento tarifario del 67,9% y se sumaba un permiso de traslado de tasas municipales y tributos provinciales propios de una explotación comercial, con lo cual se elevaba aún más el aumento inicial⁶. La suba definitiva fue de 104% con relación a las últimas boletas del organismo provincial (DIPOS). En 1991, antes de entrar en vigencia la Ley Nacional de Convertibilidad (que fijó el peso al dólar), la tarifa provincial del servicio de agua y cloacas había sido actualizada en un 42,57% y se le había sumado un 18% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), que luego había

sido elevado al 21%. Es decir, al momento de asumir la empresa francesa, no existía ningún atraso tarifario y el aumento de 104% se llevaba a cabo en el marco de congelamientos de los salarios, de las pensiones y jubilaciones y de una importante crisis de la principal actividad agroindustrial de la provincia.

Entre los meses de junio y octubre de 1995, los vecinos de los distintos pueblos y ciudades del interior de la provincia comenzaron a movilizarse. Primero lo hacían en cada localidad, sin enterarse de que en los pueblos vecinos ocurría lo mismo; solo más tarde se conectaron y comenzó, de este modo, la acción conjunta de siete ciudades del sur provincial: San Isidro de Lules, Bella Vista, Aguilares, Alberdi, Concepción, Simoca y Monteros.

En realidad, fuimos los vecinos de Monteros quienes comenzamos a movernos y articular con los vecinos de los otros municipios. El 4 de octubre de ese año se realizó un acto y se decidió conformar una comisión e invitar a más gente. Nos reunimos el 6 de octubre en Bella Vista y formamos la Comisión Coordinadora de Usuarios del Interior. Si bien las mujeres trabajábamos mucho y éramos mayoría, en la comisión aparecían solo tres compañeras en carácter de delegadas. No queríamos aparecer. (NDP)

6 La facturación de Aguas del Aconquija S.A. contemplaba un incremento del 67,9% sobre los valores tarifarios de la última facturación de DIPOS (la empresa provincial que desaparecía con la privatización) y se le sumaba el costo que representaban para el concesionario los impuestos provinciales, tasas municipales, sobre la tarifa de servicios neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el aporte del 6% para el Ente Regulador.

En el mes de octubre asumió el nuevo gobierno provincial y en noviembre se constituyó ADEUCOT (Asociación en Defensa de los Usuarios y Consumidores de Tucumán), con representación del interior y de la ciudad capital. En los meses siguientes ocurrirían dos hechos de fundamental importancia, uno en el ámbito oficial y otro en el de los actores. En efecto, en la legislatura provincial se formaba una Comisión Investigadora del proceso de privatización y del cuadro tarifario, y los usuarios (ADEUCOT) lanzaban en sus encuentros y asambleas la idea de una medida decisiva: el “no pago” de los servicios.

Si bien en ADEUCOT estaban representados tanto el interior provincial como la ciudad capital, los usuarios del interior eran quienes llevaban a cabo el mayor número de acciones. Por eso, en el mes de diciembre decidieron realizar un acto de concientización en la ciudad más grande de la provincia, San Miguel de Tucumán, que aún no daba señales de sumarse masivamente al “no pago” de las nuevas tarifas⁷.

7 El primer acto público en la capital de la provincia fue un fracaso, muy poca gente se acercó a dialogar con los activistas de los pueblos que formaban el movimiento de los usuarios. No obstante, después del episodio del agua con manganeso, esta actitud se revirtió.

Efectivamente, el discurso hegemónico acerca de la privatización de las empresas públicas y la mercantilización de los “bienes comunes” había logrado mayor consenso en las poblaciones de las grandes ciudades del país.

En síntesis, los rasgos más salientes del movimiento generado frente a la privatización del agua expresaban una alta participación de las mujeres, un gran respaldo de los pobladores de ciudades pequeñas del corredor agroindustrial cañero e incluía una particular forma de protesta: el “no pago”, que llegaría a perjudicar a la empresa sin expresar violencia física.

DE LOS GRIFOS SALE AGUA NEGRA: INTERVIENE EL ESTADO PROVINCIAL

En enero de 1996, ocurrió un hecho imprevisto que cambió la actitud de indiferencia de la ciudad de San Miguel de Tucumán: de los grifos comenzó a salir agua negra. Los vecinos reaccionaron y muchos se plegaron a la campaña del “no pago” que llevaban a cabo las comunas del interior. La empresa explicó que la anomalía del servicio se debía a un inexplicable aumento de manganeso en la zona de extracción. El incidente duró alrededor de un mes, el gobierno penalizó a la empresa y le obligó a des-

contar el mes de servicio en las facturas. Pero la consecuencia más importante de este hecho consistió en que, por primera vez, el Estado provincial manifestó la posibilidad de rescindir el contrato de Aguas del Aconquija S.A.

La suma de unas tarifas imposibles de pagar por una población que se empobrecía, la mala calidad del servicio y las sospechas de corrupción de la anterior gestión provincial en el proceso de consignación, conducía al gobierno tucumano a posicionarse con cierta dureza frente a la empresa.

De este modo, en 1996, se logró un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo provinciales, en el que ambos órganos sostenían que la privatización del agua se había llevado a cabo con procedimientos incorrectos. Las voces de reclamo de los usuarios le llegaban al gobierno a través del presidente del Ente Regulador de Agua y Cloacas de Tucumán (ER-SACT): baja calidad del servicio, aumento de tarifas desmedido, negativa al diálogo por parte de la empresa, etcétera. La legislatura provincial fue cauta y pidió un cambio sustancial de actitud pues quería evitar la anulación del contrato. Mientras tanto, un dictamen de la Fiscalía de Estado provincial aconsejaba citar a la compañía para persuadirla de una reestructuración del cuadro tarifario. El cuestionamiento

por parte de las principales instituciones del Estado provincial generaba una situación altamente favorable para la acción de los vecinos.

Por su parte, los funcionarios de Aguas del Aconquija aseguraban que no aceptarían una rescisión unilateral del contrato de concesión. La empresa forzó una declaración muy dura del embajador de Francia en relación con el problema, lo que actuó sobre el gobierno nacional presionándolo para que interviniera en el proceso provincial.

Esta alternancia de conflictos, negociaciones y renegociaciones en las que participaban instituciones locales, nacionales y la empresa —estas últimas apoyadas por las autoridades francesas— se prolongó hasta setiembre de 1996, cuando finalmente la administración provincial decidió revocar la concesión.

Posteriormente, el gobierno debía negociar con la empresa el periodo de transición hasta el nuevo llamado a licitación, ya que el contrato establecía que en una situación tal, iniciada por cualquiera de las partes, Aguas del Aconquija debería seguir operando durante dieciocho meses, plazo durante el cual el gobierno decidiría a quién y en qué condiciones traspasaría el servicio. Aparecía la posibilidad, por lo menos en las ciudades del interior, de “municipalizar” la prestación (ponerla a cargo del municipio o alcaldía).

Un comunicado de prensa de la asociación de los siete municipios del interior enumeraba muy claramente las demandas:

- No pago hasta que se sancionara la ley de municipalización.
- Negociación con la participación de los intendentes y usuarios.
- Transferencias de servicios a los municipios basadas en el documento refrendado por los intendentes ante la comisión de Obras Públicas de la legislatura.
- Suspensión de cortes y de amenazas de reducción de servicios por parte de Aguas del Aconquija.
- Compromiso de los usuarios de pagar el valor histórico solo ante el cumplimiento de los puntos anteriores.

En el transcurso del conflicto, los municipios y los usuarios habían adquirido la facultad de demandar al gobierno provincial la presencia de sus representantes en las negociaciones. Asimismo, buscaban el cambio de actitud de la empresa, que ya utilizaba amenazas legales. Pero lo más importante es que se empezó a concretar el proyecto de la municipalización del servicio con la participación accionaria de los usuarios.

Durante 1996, el trabajo se concentró en cada ciudad, con autoridades municipales que formaban parte de las comisiones pro municipalización del servicio. Era un hecho que Aguas del Aconquija abandonaba el control del servicio de siete municipios (eran nuestras siete ciudades). Los estudios y conclusiones a las que arribábamos eran serios y viables. Sin embargo, tuvimos que superar muchas maniobras (de parte de funcionarios provinciales, nacionales y legisladores) que intentaban desalentarnos, decepcionarnos, pintando futuros catastróficos respecto a la calidad del servicio que podría brindar una empresa municipal con aporte de los usuarios así como a su factibilidad económica. Teníamos que reforzar nuestra tarea de persuasión, apelando a todos los recursos: primero técnicos y, si no alcanzaba, recurríamos a que fuera la gente de los barrios la que presionara. Finalmente, resolvieron impulsar la municipalización (NDP).

Como veremos, la decisión de la municipalización duró poco.

LAS PROPUESTAS PARA REEMPLAZAR A AGUAS DEL ACONQUIJA

En 1997, el debate ya no giraba alrededor de la rescisión del contrato sino de cómo se reem-

plazaría la operación del servicio. Había diferencias sustanciales entre las propuestas de los usuarios en conjunto con los municipios y la de los gremios de trabajadores de la empresa. Mientras los primeros deseaban la municipalización en la forma de empresas mixtas (los municipios con participación de los usuarios), los trabajadores proponían una cooperativa de trabajo. En el primer caso, se trataba de una empresa en la que participaban la municipalidad en la operación técnica y los usuarios como socios administradores.

Los vecinos desconfiaban del gremio y se oponían a su propuesta. Este había pactado con la empresa francesa y con todas las otras adjudicatarias del agua del país durante los procesos de privatización⁸.

Los consumidores luchaban por la municipalización y combinaban tal reclamo con otros que los unían a distintos sectores. Hubo varias marchas convocadas por múltiples ac-

tores sociales, desde los maestros hasta los trabajadores de los ingenios. Todos eran vecinos y usuarios y la demanda por un servicio adecuado de agua atravesaba a las demás. Hubo reclamos, hubo poesías, hubo mucha energía social puesta al servicio de una mejor calidad de vida en una sociedad que comenzaba a sentir, con rigor, los efectos de las políticas de corte neoliberal.

La discusión parlamentaria se extendió durante todo el año 1997 aunque nadie dudaba de que la empresa se retiraría. Algunos legisladores, conscientes de que esta situación podría acarrearles consecuencias con el partido nacional gobernante, trataban de mediar para llegar a una solución conciliadora. Sobre todo, que la empresa no se retirara totalmente: entregar los municipios del interior a otras compañías (en las formas discutidas) y que la firma francesa permaneciera en la capital de la provincia.

Por otro lado, se mantenían las diferencias entre “trabajadores” y “usuarios” en la construcción del futuro sin empresa. En ese momento (mediados de 1997), hubo un principio de acuerdo y algunos municipios se separaron del servicio que otorgaba la empresa. En efecto, la ciudad capital y sus alrededores, que sumaban unas cien mil cuentas, quedarían para la empresa Aguas del Aconquija, mientras los

8 Para asegurarse el apoyo sindical, la ley de reforma del Estado ofreció a los trabajadores un 10% del paquete accionario en un Programa de Propiedad Participada. Dicen Loftus y McDonald: “Esencialmente, fueron sobornados para ‘acompañar’ el proceso del principio al fin, un proceso que resultó en una reducción a la mitad de la planta de personal debido a los despidos” (2001: 78).

municipios del interior se debatían entre la municipalización y la operación por parte de los trabajadores de Obras Sanitarias.

Debemos recordar que, aun en esta situación de negociación del Poder Ejecutivo provincial, un 80% de los usuarios mantenía con firmeza la suspensión del pago de sus boletas.

La organización de los consumidores (ADEUCOT) apostaba a que, una vez aprobado el nuevo contrato de concesión, los diez municipios separados accedieran a controlar la prestación y explotación de los servicios. Con ese objetivo, se preparaban los informes técnicos para que el ente regulador (ERSACT) los estudiara y definiera si se estaba en condiciones de atender las demandas.

Finalmente, en agosto de 1997, la empresa comenzó a manifestar su disconformidad a través de declaraciones de sus principales funcionarios, y el 27 de ese mes rescindió el compromiso “por culpa del Estado concedente”. A su vez, el gobierno provincial respondió firmando el decreto N° 2270/1, por el cual anulaba el contrato de concesión por no cumplimiento de los acuerdos que había refrendado la legislatura.

La empresa manifestaba que acudiría a la competencia del Tratado Internacional de Protección y Promoción de Inversiones entre Francia y Argentina, es decir, a la injerencia

del tribunal arbitral que habilita el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

A pesar de que quería retirarse lo más rápido posible (antes de noviembre de 1997), la compañía estaba exigida por el Estado a permanecer los dieciocho meses que preveía el convenio. En las negociaciones se introdujeron varias modificaciones en cuanto a fechas, al establecimiento de una tarifa “razonable” para el período de transición, etcétera.

Mientras tanto, el gobierno nacional manifestaba preocupación ya que el conflicto podía llegar a presentarse como una muestra de inseguridad jurídica para los nuevos inversores extranjeros. No obstante, a comienzos de 1998, acordó con la provincia una estrategia común frente a la denuncia de la empresa en el CIADI. Para este entonces, el Banco Mundial comenzó a participar en forma directa, asesorando a la provincia en la preparación de los nuevos pliegos licitatorios. La empresa francesa, mientras tanto, se consideraba “cautiva porque no nos dejan ir de Tucumán” (*La Gaceta*, 26-4-1998).

Finalmente, en febrero de 1998, el gobierno nacional decidió que el problema desarrollado en Tucumán debía ser seguido por la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustenta-

ble que encabezaba María Julia Alzogaray, una funcionaria de origen neoliberal. La provincia comenzó a estudiar la transferencia transitoria de la prestación de agua y cloacas al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), quien se hizo cargo definitivamente del servicio sin que se pudieran viabilizar las propuestas de los usuarios ni la de los trabajadores. Con esta medida, la administración del presidente Menem pretendía descomprimir la situación financiera que atravesaba la empresa extranjera (quien seguía brindando el servicio sin poder cobrar) y facilitar su retiro antes del tiempo que establecía en contrato de transición. Esta decisión se cristalizó en el marco de una visita del presidente argentino a Francia y del “lobby” que ejercieron los directivos del grupo Vivendi, representante de la Compagnie Générale des Eaux (CGE) —la firma madre de la compañía Aguas del Aconquija—, a través de su vicepresidente de asuntos internacionales, Thierry de Beaucé, según sostenía una información publicada en *La Gaceta* (12-6-1998).

En efecto, el ente nacional se hizo cargo del servicio y la nación cubrió los 7,5 millones de pesos (dólares) que costaría en los primeros meses hasta que se fuera regularizando el pago de los usuarios. En un principio, se creía que alcanzaría un tiempo limitado (seis meses) pero

sucesivos cambios en el gobierno nacional y provincial favorecieron que la empresa siguiera al frente de sus funciones por medio de renovaciones periódicas. El gobierno provincial justicialista de Miranda retiró la demanda a la empresa Aguas del Aconquija con la excusa de mejorarla, pero no la restituyó. En 2003 hubo un nuevo cambio de gobierno y la situación aún se encuentra en idéntico estado.

En el CIADI, después de un fallo a favor de la provincia, se hizo lugar a una apelación de la empresa. Durante 2004, la administración provincial realizará una presentación, esta vez con el apoyo del gobierno del presidente Néstor Kirchner. El mismo año, además, la operadora nacional se retirará y dejará el servicio en manos de una empresa mixta, formada por el gobierno provincial y los trabajadores de la empresa.

ADEUCOT Y EL PAPEL DE LAS MUJERES

La organización fundada por los usuarios perduró en el tiempo y fue capaz de conseguir una legislación que les permite ahora estar presentes en todos los organismos reguladores de los servicios públicos. En la ciudad de Lules, lugar de residencia de su presidente, las reuniones se llevan a cabo semanalmente y el número de

participantes no disminuye sino que aumenta con el paso del tiempo.

Los usuarios se dan cuenta de que deben contar con un “constructo Social”, una herramienta para solucionar todas las consecuencias de sus primeras y espontáneas acciones de 1995. Por eso, en un primer momento, se había armado una coordinadora en el club social de Monteros. Luego, cuando crecieron en número y en entusiasmo, siguiendo el consejo de un abogado, tramitaron la personería jurídica. Fue el momento de la alborada, de liderazgos iniciales y de redes horizontales.

En realidad, fuimos los vecinos de Monteros quienes comenzamos a movernos y articular con los vecinos de los otros municipios. El 4 de octubre de ese año se realizó un acto y se decidió conformar una comisión e invitar a más gente. Nos reunimos el 6 de octubre en Bella Vista y formamos la Comisión Coordinadora de Usuarios del Interior. Si bien las mujeres trabajábamos mucho y éramos mayoría, en la comisión aparecían solo tres compañeras en carácter de delegadas. No queríamos aparecer (NDP).

Nélida G., activa participante también de Lules y concejal municipal por aquel entonces, recuerda que en aquella primera etapa los trabajadores de DIPOS sintieron que corrían riesgos la-

borales y buscaron solidaridad de los usuarios. Solidaridad —agrega— que no encontraban en sus propios gremios. En la transición (desde la ley de privatización a la entrega de la empresa) la compañía provincial emprendió una reestructuración basada en la disminución el número de obreros, y los trabajadores que no contaban con el apoyo del gremio habían recurrido a los usuarios, que además eran sus vecinos.

Los primeros miembros de la asociación reconocen que fueron las personas adultas y las mujeres las primeras en emprender esta lucha. Nélida tenía 37 años, se había formado como dirigente política vecinal pagando de su propio peculio cursos de Historia, Teoría del Estado, etcétera, además de atender su casa y tres hijos. Cuando se le interroga acerca de las motivaciones por las que participó, alega:

Lo que me llevó era... este... mucha rabia, en verdad, rabia, porque todo lo que habían sido las mejoras del servicio las habían financiado los gobiernos municipales con aportes de los vecinos. Y es como que le estábamos entregando todo eso a empresas privatizadas... este... que por otro lado cobraban bastante caros los servicios que prometían y que a futuro nos condenaba porque, a partir del quinto año, se iban incrementando... Y eso quizá fue lo que más me llevó a participar (NG).

Esta dirigente de Lules era una de las participantes más jóvenes en un movimiento que convocaba a gente mayor de cuarenta años, a muchas amas de casa que peleaban por sus mayores presupuestos familiares. El mundo social tucumano comparte con todo el norte argentino ciertas jerarquizaciones de tipo tradicional que incluye la supremacía de la autoridad patriarcal, de los mayores sobre los jóvenes, de las familias de apellido frente a los sectores populares. En alguna medida, Tucumán, como escenario de fuertes luchas sociales durante muchas décadas, puede ostentar mayores figuras en relación con tales discursos jerarquizadores del espacio social. Esto se puede registrar en el papel que tienen las mujeres en los mundos cotidianos y en los espacios públicos. Por un lado, las mujeres aparecen —comparativamente con otras provincias— con un grado de participación pública más alto pero, en las relaciones cotidianas, la dependencia de la autoridad paterna y luego conyugal es muy fuerte.

Los interrogantes que nos planteamos son por qué las mujeres comenzaron el reclamo y por qué las posiciones que ocupan en ADEUCOT no están al nivel del activismo que desarrollaron. Como en otras protestas, las mujeres se movilizaron y lograron generar asociaciones, pero los dirigentes siguen siendo los hombres.

El conjunto de ciudades y pueblos que contribuyó a la organización tiene la característica de constituir lugares en los que los mundos rurales y urbanos se articulan. En nuestros últimos trabajos los conceptualizamos como espacios rururbanos (Giarracca et al., 2003). Algunas de las mujeres que participaron en la protesta son esposas o hijas de productores pequeños o medianos y todas son residentes de ciudades imbuidas de los problemas de la agroindustria cañera. En los años de la lucha por el agua, la situación agraria era difícil y los ingresos familiares se habían visto disminuidos. El Estado provincial pagaba en “bonos” (dinero de circulación limitada) y en los grupos familiares muchos miembros recibían sueldos del Estado. Es decir, la situación económica de los hogares no podía soportar un aumento de los servicios.

Por otro lado, las mujeres tucumanas son las que generalmente llevan las cuentas familiares, y esto con relativa facilidad debido a que tienen un nivel de instrucción igual o mayor que el de los hombres. Siendo ellas las que recibieron las boletas con los aumentos de las tarifas del agua, es una consecuencia razonable que fueran las primeras en reaccionar frente a los acontecimientos.

Recordemos, por último, que en la provincia se organizan manifestaciones con cierta asidui-

dad y, durante la misma época, estos pueblos se movilizaron en contra de la contaminación producida por los ingenios. Las “marchas de los barbijos” (llamadas de ese modo pues recorrían las ciudades con barbijos que simbolizaban la polución) fueron promovidas por muchas de las vecinas que participaban también en la protesta del agua.

Así, el núcleo inicial de la movilización fue una red de mujeres pertenecientes a estos pueblos y ciudades cercanas, quienes eran vecinas, habían compartido otras acciones colectivas, conocían sus domicilios y hasta sus teléfonos, aunque vivieran en diferentes localidades. Cuando la red se puso en funcionamiento, potenciaron sus recursos individuales e, incluso, los del pequeño grupo de cada pueblo, hecho que podemos constatar, sobre todo, a partir de la decisión del “no pago”. Aunque haya sido una medida acordada en la ciudad capital, fueron estas luchadoras las que con mayor entusiasmo la pusieron en marcha apenas comprobaron que era una estrategia posible.

Si bien todos reconocen el papel preponderante de las mujeres, al pasar a la etapa de los encuentros con legisladores y políticos, los hombres comenzaron a participar. Se produjo una división del trabajo: las mujeres eran las activistas en los territorios y los hombres prepa-

rababan los documentos y recursos técnicos para interpelar a los funcionarios y empresarios.

Esta contradicción aparece reflejada en la participación pública de las mujeres: son las que inician movimientos, las que más activan, las mejores organizadoras, etcétera, pero, a la hora de formalizar organizaciones, no detentan cargos de autoridad. El presidente de ADEUCOT interpreta los hechos marcando la radicalidad de las posiciones femeninas en este proceso.

Todos decían que estábamos locas, cómo le íbamos a ganar a una gran empresa. (NG)

Los políticos nos miraban como si estuviésemos locas y yo sé que pensaban: “¡Estas mujeres...!”. (NDP)

Al comienzo la gente decía que éramos cuatro locas, enfrentando semejante monstruo... (NDP)

El sentido común tucumano sostiene que quienes piensan dos veces son los hombres, que las mujeres se comportan de modo emocional. Sin embargo, unánimemente reconocen que quienes se mantuvieron firmes en la medida del “no pago” fueron las mujeres y que ese grado de emotividad en la alborada de la lucha constituyó un recurso positivo.

En realidad, fuimos los vecinos de Monteros quienes comenzamos a movernos y articular con los

vecinos de los otros municipios. El 4 de octubre de ese año se realizó un acto y se decidió conformar una comisión e invitar a más gente. Nos reunimos el 6 de octubre en Bella Vista y formamos la Comisión Coordinadora de Usuarios del Interior. Si bien las mujeres trabajábamos mucho y éramos mayoría, en la comisión aparecían solo tres compañeras en carácter de delegadas. No queríamos aparecer. (NDP)

No había nada de la situación de partida que garantizara que el proceso desatado lograría su cometido. Que sucediera lo que sucedió fue una contingencia. Lo que hubo, como sostiene Melucci (1992), fue una definición de esos propósitos en tanto coproducción de los actores en un activo proceso relacional donde se jugaron esquemas de conocimientos, densas interacciones e intercambios emocionales y afectivos⁹.

Cuando “los franceses se fueron” (como la población suele describir) fue el momento de

9 Es interesante recordar que las mujeres que iniciaron la lucha por los derechos humanos en los años de la dictadura (1976-1983) también eran tratadas de “locas” y hoy constituyen el movimiento Madres de Plaza de Mayo. Otras mujeres agricultoras que pelean por sus tierras también reciben frecuentemente el calificativo de “locas” (véase Giarracca y Teubal, 2001).

la batalla ganada y del regreso a los pueblos, pero sin abandonar los espacios públicos. La gente no tenía conciencia de la magnitud de lo que había logrado. Una de las activistas recién se dio cuenta de la dimensión de sus acciones algunos años después cuando, en 1999, fue al Encuentro Nacional de Mujeres en el sur del país¹⁰. La sencilla narración de su experiencia armó un revuelo en el evento y, al día siguiente, varias participantes del encuentro la rodeaban y le pedían que la contara una y otra vez.

Estas mujeres reconocen que las redes establecidas entre todos, y especialmente entre ellas, es uno de los resultados perdurables de la lucha. En la actualidad, ADEUCOT se ocupa de la defensa de los consumidores en cualquier rubro. Ana, la activista de Bella Vista, es la presidenta de la asociación en su ciudad y no solo la sostiene en forma democrática y horizontal sino que también mantiene relaciones de cooperación con las filiales del resto de la provincia y con otras organizaciones.

Por último, las mujeres fueron entusiastas defensoras de la salida que proponía una em-

10 El Encuentro Nacional de Mujeres es realizado anualmente por las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Suelen reunir hasta quince mil mujeres y contar con invitados de otros países.

presa mixta entre comunas y usuarios (lo que en este trabajo denominamos “municipalización”). Era una oportunidad para gestionar la prestación y participar de una empresa comunal; oportunidad que se mantiene abierta, no obstante, para la próxima consignación del servicio. Sin duda, las mujeres tucumanas, después de esta experiencia, están mucho más predisuestas y capacitadas para participar en una empresa de este tipo¹¹.

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

A fines de 2001, una rebelión generalizada de la población nacional puso al descubierto los nefastos resultados de una política neoliberal en la que las privatizaciones de las empresas de servicio fueron elementos claves. El presidente electo en 1999, Fernando de la Rúa, asumió el mando bajo la promesa de corregir los “nefastos” resultados de diez años de gobierno de Carlos Menem (seis de ellos con el ministro de Economía neoliberal Domingo Cavallo). Sin

embargo, no solo no efectuó tales correcciones sino que llegó a convocar al mismo Cavallo para profundizar las medidas económicas. Hasta que, en diciembre de 2001, después de una de las movilizaciones y protestas más extendidas de la década, presidente y ministro se vieron obligados a renunciar, dejando atrás un tendal de muertos.

En los primeros momentos del gobierno provisional que le sucedió, varios legisladores nacionales pusieron al descubierto la fuga de capitales que grupos financieros y empresas privatizadas habían cometido contra los intereses del país, en tanto estas últimas se negaban por todos los medios a que sus tarifas dejaran de indexarse por el dólar después del final de la convertibilidad (un peso = un dólar). A comienzos de 2002, el país entero condenaba las operaciones perpetradas en esa última década, de tal suerte que lo acontecido seis años antes en la pequeña provincia de Tucumán, en total aislamiento, resultaba doblemente significativo.

En efecto, en los años noventa, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires aceptaban pasivamente la privatización de sus servicios de agua y cloacas mediante la concesión de Aguas Argentinas, compuesta por un grupo de inversores con mayoría accionaria de la *Suez Lyonnaise des Eaux*, mientras Tucumán ofrecía

11 En la actualidad, existen 107 fábricas bajo gestión obrera en el país, en algunas de las cuales las mujeres cumplen papeles gerenciales.

resistencia en su territorio a otra empresa francesa¹². Si analizamos las condiciones generales del servicio y las tarifas, no vemos grandes diferencias que justifiquen por qué el distrito más importante y politizado del país no reaccionó y una población dispersa, con bajos recursos, en una provincia pequeña, se paró en firme y declaró: “Así no”.

A nuestro entender, no hay respuesta a este interrogante. El gran dilema de las Ciencias Sociales es por qué en condiciones macro institucionales semejantes unos sujetos deciden actuar y otros no, unos ganan las calles y otros aceptan resignadamente condiciones desfavorables. Podemos suponer que, a diferencia del interior del país, la población de la Ciudad de Buenos Aires gozaba por aquel entonces de altos ingresos y de algunas ventajas de las políticas del neoliberalismo (como los créditos, el

dólar barato para viajar, etcétera). Pero eso no explica todo. Lo cierto es que en el único sitio del país donde se rechazó la privatización de un servicio fue en Tucumán. Y se lo hizo con la resistencia civil, con la gente de los poblados, con las mujeres. Lo notable es que se podría decir lo mismo del “cacerolazo” del 19 y 20 de diciembre de 2001: se originó en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Fue otra resistencia, una “desobediencia civil” a una medida presidencial: la imposición del “estado de sitio”. Y otra vez se destacaron las mujeres, quienes impusieron ese famoso artefacto culinario para la música del evento: las cacerolas.

La eficacia de la acción de Tucumán se basó en varios aspectos, pero, sin duda, el más importante fue la medida del “no pago”, lo que en este trabajo interpretamos como desobediencia civil. Este simple acto de suspender el pago trajo consecuencias inesperadas para la empresa y, a pesar de las presiones de Francia, nunca se pudo revertir. Lo importante es que la gente se animó a actuar y que lo hizo, básicamente, por el poder de la organización. La acción conjunta, la posibilidad de generar una identidad colectiva potencia las decisiones individuales, mitiga los miedos, refuerza las voluntades.

Varias cuestiones estaban en juego, el agua simboliza muchas cosas que tienen que ver con

12 Asimismo, una compañía adjudicataria de los servicios en el sur de la provincia de Buenos Aires, Azurix, subsidiaria de *Azurix Corporation* (EEUU) —esta, a su vez, filial del grupo norteamericano Enron, cuya reciente caída fue un escándalo en Estados Unidos—, estaba en situación de producir, a principios de 2002, el segundo alejamiento de una transnacional por los fuertes reclamos de cientos de vecinos de las ciudades de Bahía Blanca, Punta Alta, Pehuajó, Carlos Casares y 9 de julio, debido a la pésima calidad del servicio.

la organización básica de la vida. El resultado de aceptar la propuesta de la empresa hubiera sido una situación de empobrecimiento, de menor calidad de vida, de cambios en costumbres muy arraigadas.

La década de 1991-2001 es un “ciclo de protesta” (Tarrow, 1997) y habilita la comprensión de lo que diferentes teorías sociales nos recuerdan: que lo que reconocemos cotidianamente como organización social, luego institución, es una creación social de la gente. No obstante, pronto se produce un “olvido”, un “ocultamiento” de la potencia de la práctica colectiva. Dicen Buechler y Cylke:

...el precio por el olvido de la autoría humana del mundo es una negación de la habilidad para cambiarlo y una pérdida de control potencial sobre nuestras propias vidas. De todas las formas de acción estudiadas por los sociólogos, los movimientos sociales son las formas más dramáticas en las que los seres humanos periódicamente rompen con las imágenes, alienadas y reificadas, del mundo, para reclamar su autoría y su poder de configurarlo acorde a sus propias aspiraciones. (Buechler y Cylke, 1997: 575-576, traducción nuestra)

La protesta del agua en Tucumán presagió un nuevo tipo de conflicto en América Latina (por

ejemplo, “la guerra del agua” en Bolivia o protestas en Ecuador y Panamá) y en otros lugares como Sudáfrica (véase John Tagliabue en *New York Times*). En noviembre de 2002, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas avanzó sustancialmente en la implementación de un convenio sobre los derechos sociales y culturales sobre el agua (*Unedited version*, E/C, 12-2002-11). Este documento dice en su introducción: “El agua es un recurso natural y público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano que garantiza el acceso al agua es indispensable para una vida digna. Es un prerrequisito para la realización de otros derechos humanos”.

Los derechos garantizados por las Naciones Unidas deben atravesar los Estados nacionales y estar por encima de los derechos económicos que conducen a privatizar los servicios de agua. Muchas poblaciones están en conocimiento de esta situación y los próximos procesos de privatización o renegociación de contratos las tendrán como activos actores. Después de Tucumán y Cochabamba, las privatizaciones del agua no serán procesos de fácil resolución.

BIBLIOGRAFÍA

- Buechler, S. y Cylke, F. 1997 "The Centrality of Social Movements" en Buechler, S. y Cylke, F. (eds.) *Social Movements. Perspectives and Issues* (California: Mayfield Publishing Company).
- Colombo, A. 2001 "Justificación de la desobediencia civil", copia fotostática.
- Della Porta, D. y Diani, M. 1999 *Movimientos sociales. Una introducción* (Oxford: Blackwell).
- Giarracca, N. et al. 2001 *La protesta social en la Argentina* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. et al. 2003 *Territorios y lugares. Entre las fincas y la ciudad. Lules en Tucumán* (Buenos Aires: La Colmena).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2001 "El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha" en Giarracca, N. et al. *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Loftus, A. y McDonald, D. 2001 "Sueños líquidos: una ecología política de la privatización del servicio de agua en Buenos Aires" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 183.
- Melucci, A. 1992 "Frontier Land: collective action between actors and systems" en Diani, M. y Eyerman, R. (eds.) *Studying Collective Action* (Londres: SAGE).
- Tarrow, S. 1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza).

LA TIERRA: POLISEMIAS, CONFUSIONES Y DEBATES*

A raíz de la discusión política preparatoria de los proyectos de una ley que limitara la venta de tierra a extranjeros, hubo un número considerable de reuniones, opiniones y artículos periodísticos, que tuvieron como eje central la tierra. Finalmente prevaleció el proyecto del gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner y la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales —enunciada como Ley de Tierras— limitando la adquisición por parte de extranjeros, se aprobó con muy pocos cambios. ¿Qué nos ha dejado esta discusión? ¿Qué significados en el nivel agrario y de pensamiento social habilita la ley? Estos dos interrogantes son los que trataré de responder en este artículo.

* Giarracca, N. 2012 “La tierra: polisemias, confusiones y debates” en *Causa Sur; Pensar Nuestra América*, Año 1, N° 2, junio-julio.

La tierra, base de una de las actividades más antiguas del hombre¹ siempre fue esquivo para su conceptualización, debido a las diferentes relaciones que las diversas culturas entablaron con ella. Por eso la enuncio como un concepto polisémico; para las culturas ancestrales como las indígenas de la América Latina/Abya Yala, los hombres/mujeres pertenecen a ella, son parte indisoluble de ese espacio material y espiritual que conforma la Naturaleza y en ella la tierra. Para los campesinos, descendientes de aquellas culturas que habitaron y dieron sentido a estos territorios, la tierra es su principal herramienta de trabajo; se la cuida pues sin ella no hay vida.

1 “Cerca de 11 mil años, cuando los pueblos nómadas en varias regiones del mundo se asentaron, constituyeron lo que hoy conocemos como grupos familiares (unidad familiar agrícola) y comenzaron a cultivar alimentos” (véase Meillassoux, 1987).

Por otro lado, para el chacarero —*farmer* en la bibliografía anglosajona— la tierra es un legado familiar, un patrimonio que se pasa de una a otra generación y hasta la expansión sojera se cuidaba como cualquier otro legado familiar. Por último, la tierra para el capitalista es una mercancía, se compra, se vende, se usa y abusa. Aquí debemos marcar la primera falacia del pensamiento que da sustento al capitalismo: la tierra se comporta como una mercancía aunque no lo es; no es producto del trabajo humano pero sí es un recurso renovable. En efecto, a diferencia de otros medios de producción, la tierra no puede ser construida por los hombres como cualquier mercancía, como una fábrica o una maquinaria. No es producto del trabajo humano pero el capitalismo le hace jugar ese papel y la consecuencia de mayor significación es que como su acceso es limitado —no pueden comprar tierra todos los que quieran porque en determinado momento no hay más, no se vende más— entonces quienes la poseen pueden fijar una precio de producción por arriba del costo y de la ganancia media que rige en el sector: es decir, se produce una “sobreganancia” que desde los clásico, sobre todo desde la formulación de Karl Marx, se denomina renta agraria absoluta. El terrateniente agrario —actor capitalista— recibe una “sobreganancia”

por poseer un medio limitado, que no tiene el resto de la burguesía productiva.

De allí que para los pensadores de fines del siglo XIX y comienzos del XX, la tierra era el factor que hacía que el sector agrario fuera problemático y se discutió “la cuestión agraria”. Sumada a esta renta absoluta existe un segundo tipo que se denomina “renta diferencial” y se relaciona con la fertilidad de los suelos favoreciendo —dando una sobreganancia adicional— a los que controlan las tierras más fértiles, debido a la mayor productividad frente a la misma inversión de capital. Muchos autores sostuvieron que en el mercado internacional de productos agrarios, la Argentina granaria, favorecida por una de las praderas más fértiles del mundo, obtiene una “renta diferencial a escala internacional”.

Si recalamos esta característica de la tierra, estudiada, revisada y revisitada por múltiples pensadores y especialistas desde el siglo XIX, es para mostrar que si bien la tierra es limitada, no se trata de un recurso no renovable como señala la ley en cuestión y asimismo el Programa Estratégico Agroalimentario. Con los cuidados que los agricultores han aprendido a lo largo de los siglos, la tierra es renovable: con rotaciones, diversificación y descansos, se usa indefinidamente. La tierra se agota, se esquil-

ma, se erosiona, cuando tiene un uso indebido —monocultivo, falta de rotación y descanso, abuso de agroquímicos, etcétera— por eso nos preguntamos por qué dos políticas públicas de este gobierno en relación con la agricultura, definen a la tierra como un recurso no renovable; ¿no es una profecía autocumplida, por conocer de antemano que el uso productivo que se le da a la tierra la llevará a esquilmarla? Es convertir en no renovable, estropear uno de los recursos más valiosos que nuestra geografía ostenta y, en contraste, impone como una responsabilidad política e intergeneracional, el cuidarla y mantenerla renovable.

EL USO DE LA TIERRA

La segunda cuestión que debemos abordar —no tomada en cuenta por la Ley de Tierras— es la diferencia entre la propiedad y el control de la tierra. Es cierto que la propiedad de la tierra se relaciona con la soberanía territorial de un Estado-Nación y la mayoría de los países —como enumeran los considerandos de la ley— limita el dominio a sujetos jurídicos extranjeros, sean personas o sociedades. Pero en nuestro país, con la significativa expansión de formas “no propietarias” de tenencia en la

producción agraria, es necesario limitar el uso y control sobre la tierra. Por ejemplo, haciendo abuso de la Constitución de 1994 que le otorga el dominio de los recursos naturales, dos provincias pretendieron dar en “consignación” por un largo tiempo cerca de 300.000 ha a dos países extranjeros; la legislación acerca de minería habilita la entrega por décadas de importantes territorios de frontera u otros que cuentan con las reservas más importantes de agua dulce, a corporaciones extranjeras conocidas mundialmente por conductas empresariales autoritarias y casi imperiales².

¿Quién determina que esas tierras no podrían tener usos agrarios? Más aún, como la ley enuncia “usos rurales” la definición es todavía más laxa ya que en la bibliografía actualizada, mientras el concepto “agrario” se destina a la producción de este sector, lo “rural” supone todo territorio donde las poblaciones —trabajen o no en el sector agrario— habitan y extraen recursos para la vida, etcétera. Entonces ¿no sería pasible de aplicación la Ley de Tierras para territorios de actividad minera de baja al-

2 Es notable la descripción del investigador enjuiciado por la Barrick Gold en Canadá, William Sacher, del comportamiento de estas empresas en su país de origen (Sacher, s/f).

tura? La legislación minera de la década de los noventa protege a estas corporaciones extranjeras con la figura de la “concesión”, que actualmente también comienza a aplicarse para el sector agrario. Además, en ese caso el Código Minero habla del “subsuelo” aun cuando estos eufemismos son discutibles en un debate político con voluntad de transformación.

El párrafo anterior intenta introducirnos en una problemática central para toda nación soberana e independiente: ¿qué uso puede hacerse de los recursos naturales que son bienes comunes de esa comunidad imaginada que llamamos Estado-Nación?

Al constituir los recursos naturales los bienes no producidos por el trabajo humano y formando parte de lo que se ha llamado en Occidente “naturaleza”, quienes deciden su uso son aquellos que transitoriamente tienen a su cargo la conducción y gestión del país. En estas sociedades capitalistas modernas/coloniales/patriarcales/racistas, ese uso lo decide una de sus instituciones más importantes: el Estado.

El Estado argentino nunca se caracterizó por el respeto a la naturaleza ni tampoco por las poblaciones originarias, que sí la han respetado desde siempre. Recordemos que el 82% de los territorios que aún pueden usarse para la reproducción de la humanidad, están en te-

rritorios campesinos e indígenas. El momento fundacional de la Argentina moderna fue un acto inicial de exterminio y despojo de territorios —un “genocidio fundacional” sostiene la antropóloga Diana Lenton— y lo acompaña otro hecho aberrante: el reparto de la tierra saqueada a esas poblaciones entre pocas familias del poder. Aun cuando durante el siglo XX los gobiernos democráticos del Partido Radical y del peronismo intentaron corregir esta perversión inicial, la historia de los militares en el poder tiene mucha relación con esa clase terrateniente formada en base al exterminio y saqueo que marcó nuestra historia.

Pero en la actualidad esa clase terrateniente, aún con ínfulas de conservación del viejo poder, pasó a convertirse en un sector subordinado a los nuevos actores económicos que el neoliberalismo global propició y nosotros denominamos “agronegocio”. Esos nuevos actores, que no necesariamente están encarnados en una persona física, acarrear a modo de “polizontes” al peor rasgo del capitalismo actual, como dice Boaventura de Sousa Santos: hambre infinita de recursos naturales y sobre todo tierra.

Por todo esto insistimos en que debe revisarse la utilización que el gobierno propicia para los recursos naturales y en especial para la tie-

rra. Recordemos que somos uno de los países de mayor concentración de tierra, con unidades de 538 hectáreas en promedio y de los que más hipotecamos ese recurso con la tendencia al monocultivo de granos en base a las llamadas tecnologías de punta —por ejemplo, el paquete sojero— que por el principio precautorio no debiera utilizarse. Y se lo utiliza, se lo expande, se avanza sobre los bosques nativos, las yungas y el saqueo de los territorios campesinos e indígenas. Dice un grupo de pueblos indígenas en relación con la Ley de Tierra:

El tratamiento de la Ley de Límite a la Extranjerización de la Tierra, lesiona gravemente la paz y la paciencia que tuvieron los pueblos originarios durante cientos de años, haciéndolos responsables absolutos de las muertes de hermanos indígenas de todo el territorio nacional hasta la fecha e intimidándolos a reflexionar en tratar prioridades que benefician a unos cuantos en desmedro de millones, informándoles que damos por finalizado cientos de años de rogarles diálogos y participación real. (Junta Indígena Nacional de Conflictos, 2011)

Los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los pequeños productores capitalistas de lo que denominamos “agricultura de alimentos”, reclaman producir la alimentación

de la población, exportar el resto jerarquizando a América Latina, volver a los saberes campesinos y a un conocimiento científico-técnico al servicio de la soberanía nacional y el bienestar de las poblaciones, como rechazo a este conocimiento “tecnocientífico” al servicio del lucro de los grandes actores económicos del neoliberalismo global.

¿Responde esta ley a esas demandas? De ningún modo: limita la venta a extranjeros a un 15% del territorio rural cuando ni siquiera se sabe cuánto ya está en manos de ellos y no menciona nada acerca de la utilización del suelo o de su cuidado, que es responsabilidad primordial de un Estado por ineludible su compromiso intergeneracional. Más grave aún, complementa esta legislación con el Programa Estratégico Agroalimentario, en el que sin eufemismos profundiza el modelo del “agronegocio” y establece una meta de aumento del 60% del volumen de producción, que implica ampliar este tipo de expansión que critican los pueblos indígenas. Todo adornado con propuestas que los hombres y mujeres que pensaron el desarrollo agrario capitalista en los comienzos del siglo XX, ya habían enunciado. Es decir, el pensamiento social que acompaña estas leyes atrasa un siglo, mientras el creador del movimiento de quien se dice tributario este gobierno, Juan Perón, en su

“Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo” de 1972, se adelantaba 40 años a lo que hoy llamamos pensamiento social del siglo XXI que circula en debates generales y constitucionales en otros países de América Latina:

El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica y, si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas [...] El ser humano cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras llega a la Luna gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. Ya en el colmo de su insensatez, mata el mar que podía servirle de última base de sustentación. (Perón, 1972)

No es casual entonces que, a partir de 1973, el presidente Juan Perón enviara al Congreso Nacional un paquete de leyes sobre el sector agrario, que hubiese cambiado este destino colonial que hoy parece imposible eludir.

BIBLIOGRAFÍA

- Junta Indígena Nacional de Conflictos 2011
“Nota dirigida a los Señores Diputados de la Nación”, 14-12.
- Meillassoux, C. 1987 *Mujeres, graneros y capitales* (México DF: Siglo XXI), .
- Perón, J. 1972 *Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo* (Buenos Aires: Instituto de Altos Estudios Juan Perón).
- Sacher, W. s/f Disertación en el Instituto Gino Germani (Buenos Aires) inédito.

EL FORO SOCIAL MUNDIAL DE PORTO ALEGRE: OTRO PASO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES GLOBALIZADOS* **

NORMA GIARRACCA, MIGUEL TEUBAL*** Y DIEGO DOMÍNGUEZ****

INTRODUCCIÓN

En la década del noventa, después de un período en el que habían decaído los llamados “nuevos movimientos sociales” en Europa, comenzó una fuerte expansión mundial de protestas sociales y luchas diversas. La mayoría de ellas tuvo como

* Giarracca, N.; Teubal, M. y Domínguez, D. 2001 “El Foro Social Mundial de Porto Alegre. Otro paso de los movimientos sociales globalizados” en Giarracca, N. (coord.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Madrid / Buenos Aires: Alianza).

** Un artículo muy parecido a este fue publicado en *Realidad Económica*, N° 178. En esta nueva versión acortamos la información acerca de Vía Campesina e introducimos reflexiones acerca del evento generadas por organizaciones rurales y ecologistas de nuestro país. En tal sentido, queremos agradecer al Grupo de Reflexión Rural y a las Mujeres Agropecuarias en Lucha, sus opiniones y reflexiones en relación con el evento.

signo distintivo la reacción al profundo malestar causado por las consecuencias —económicas, sociales, políticas y culturales— derivadas del “neoliberalismo”. Recordemos que, como dicen los estudios clásicos sobre estos temas (Michael Lipsky, citado por Della Porta y Diani, 1999), la “protesta” es un recurso de aquellos que carecen de poder para tomar decisiones que afectan a las grandes mayorías. De hecho, los movimientos de protesta han tenido efectos cuando generan

*** Economista, PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, Berkeley. Profesor consulto e investigador superior del CONICET. Fue profesor titular de Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas, y de Economía II de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex-miembro del Transnational Institute de Ámsterdam.

**** Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Instituto Gino Germani, sociólogo y docente de Sociología Rural de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires.

formas de acción, nuevas, heterodoxas, dramáticas y cuestionables en su legalidad.

Si bien a finales de siglo fue cuando las protestas adquirieron el carácter “global” con Seattle, Praga, Davos, durante toda la década algunos movimientos sociales irrumpieron en la prensa internacional y crearon lazos internacionales a través de Internet: fue así en el despertar del 10 de enero de 1994, en la Selva Lacandona de Chiapas cuando los indígenas zapatistas comenzaron su lucha; fue así con las acciones de movimientos ecologistas que conmovieron al mundo formando una cadena de acciones a raíz de la decisión de Jacques Chirac, en 1995, de realizar pruebas nucleares en el atolón de Mururoa; fue así con las luchas y marchas de los campesinos de la India por todo el mundo, a raíz de la política de la empresa Monsanto en aquel país; fue así, cuando los organismos de derechos humanos lograron “globalizar” la aplicación de justicia a los represores latinoamericanos; fue así cuando el mundo conoció y apoyó las luchas del Movimiento Sin Tierra de Brasil.

Luego conocimos Seattle, que si bien irrumpió como “novedad”, tuvo por detrás una sólida organización que se fue cristalizando en la década. Para los que seguimos los procesos agrarios, sabernos que la Organización Mundial del Comercio (OMC) se convertía, desde su crea-

ción, en el símbolo de la destrucción de “una agricultura con agricultores”. Los campesinos de Francia, Italia, España, en conexión con agricultores de la India, Asia en general, América Latina, etcétera, iniciaban Vía Campesina, una interesante organización que es capaz de articular diversas demandas, diversas culturas, diversas tradiciones, con sólidas y rigurosas propuestas (que veremos más adelante).

Todo ello y mucho más, precedió al Foro Mundial de Porto Alegre que se desarrolló del 25 al 31 de enero de 2001; pero el encuentro “gaúcho” fue pensado y organizado como un eslabón distinto en esta cadena de eventos de la resistencia global. En efecto, el Foro Social Mundial tuvo como finalidad transitar por una reflexión que batallara con las ideas dominantes, presentadas como “la única salida”, convertidas en sentido común durante mucho tiempo. La palabra, el encuentro cara a cara para discutir ideas, predominó como forma de acción aun cuando no faltaron las tradicionales “acciones directas” (levantar los cultivos con semillas transgénicas de los campos de Monsanto, irrumpir en un McDonald’s), las expresiones teatralizadas, musicales.

En este trabajo, nos proponemos desde nuestras propias experiencias como participantes del Foro y científicos sociales estudiosos de los nuevos movimientos sociales de los mundos rurales,

transmitir algunas imágenes del evento y una comprensión más general del significado dentro de los movimientos de resistencia globalizada. Nos detendremos, por razones obvias, en la organización Vía Campesina así como en la participación de los grupos rurales de la Argentina.

UN EVENTO MUNDIAL “A LA BRASILEÑA”

El partido gobernante de Río Grande do Sul — Partido del Trabajo— tuvo un papel de primer nivel en la organización del Foro y recibió la reprimenda del gobierno nacional bajo el argumento del gasto que había demandado su preparación. Sin embargo, los habitantes de Porto Alegre se sentían de parabienes por la cantidad de personas que se alojaban, tomaban taxis, consumían en la caliente ciudad sureña bajo el calor estival. Y la elección del lugar fue fundamental para crear un clima de optimismo en los participantes, ya que la consigna “otro mundo es posible” cobraba un sentido realista frente a un Estado con crecimiento económico mayor al nacional, con una tasa de desocupación de un dígito, con una ciudad que hasta hoy hace alarde de discutir participativamente su presupuesto, con una universidad estatal progresista pero que guarda celosamente su excelencia y

seriedad, con políticos cálidos, cercanos a la gente y, sobre todo, incorruptibles.

El evento prometía ser de alta participación, pero la realidad desbordó todas las expectativas. Las cifras periodísticas indicaron que circularon cerca de 20 mil personas en el Centro de Eventos de la Pontificia Universidad Católica, uno de los pocos lugares preparados para recibir semejante cantidad de participantes. Hubo 117 países representados, 104 panelistas, 1870 periodistas de todo el mundo y 50 traductores “oficiales” (en los talleres hubo muchos más de forma espontánea).

El Foro abrigó “tribus” de todos los continentes, de todos los matices del amplio espacio del “progresismo” internacional, de todas las demandas que el mundo puede hacerle a este “mundo” que las clases dirigentes muestran aún con cierto orgullo.

Colores, razas, indumentarias e idiomas de varias partes del mundo se unieron ayer en un desfile por el centro de Porto Alegre en la Marcha contra el Neoliberalismo y por la vida. La caminata reunió millares de participantes del Foro Social Mundial. (*Zero Hora*, 26-1-2001)

El diario más leído en Porto Alegre, considerado poco simpatizante del partido gobernante,

celebraba de este modo la marcha inaugural del 25 de enero. Y, en efecto, la celebración de apertura del Foro, presagió las diversidades étnicas, culturales, de idiomas, de edades, de ubicaciones sociales, de ideas que atravesarían el encuentro. Junto a los tambores que reproducían la “batida” del grupo bahiano Olodum, la marcha mostraba al ex-ministro del Interior de Francia, Jean Pierre Chevenement, a la plana mayor del PT, a jóvenes entusiastas con pancartas de todo tipo, esbeltas africanas con sus bellas indumentarias, confluyendo todos en un encuentro que generaba optimismo y mucha energía social.

Luego siguieron cuatro días de intenso trabajo en cuatro “mesas” simultáneas que todas las mañanas abordaban temas tales como: ¿Cómo construir un sistema de producción de bienes y servicios para todos? ¿Qué comercio internacional queremos? ¿Qué sistema financiero es necesario para asegurar la igualdad y el desenvolvimiento? ¿Cómo garantizar las múltiples funciones de la tierra? ¿Cómo traducir el desenvolvimiento científico en desenvolvimiento humano? ¿Cómo garantizar el carácter público de los bienes comunes a la humanidad, su desmercantilización, así como el control social sobre el medio ambiente? ¿Cómo promover la universalización de los derechos humanos y

asegurar la distribución de la riqueza? ¿Cómo construir ciudades sustentables? ¿Cómo fortalecer la capacidad de acción de las sociedades civiles y la construcción del espacio público? ¿Cómo asegurar el derecho a la información y la democratización de los medios de comunicación? ¿Cuáles son los límites y las posibilidades de una ciudadanía planetaria? ¿Cómo garantizar las identidades culturales y proteger la creación artística de la mercantilización? ¿Cuáles son los fundamentos de la democracia y de un nuevo poder? ¿Cómo democratizar el poder mundial? ¿Cuál es el futuro de los Estados Naciones? ¿Cómo mediar en los conflictos y construir la Paz?

Durante la tarde se desarrollaron alrededor de 370 talleres armados por las organizaciones no gubernamentales y al atardecer se llevaron a cabo los “testimonios”, donde pudimos escuchar a Eduardo Galeano, Lula, Hebe de Bonafini, João Stedile y Danielle Mitterrand, entre otros.

Los talleres fueron verdaderos laboratorios sociales donde ONG de todo tipo, gremios, centrales campesinas, empresarios, centros académicos o profesionales, expusieron formas de acción y nuevos esquemas de conocimientos; problematizaron y marcaron agendas; se expandieron y fortalecieron en el encuentro mismo. Las discusiones de los talleres fueron

participativas ya que panelistas y asistentes intercambiaban puntos de vista verbalmente, cara a cara (a diferencia de lo que ocurrió en las “mesas” donde las preguntas se hicieron por escrito); hubo casos en que miembros de movimientos y organizaciones presentes fueron invitados a convertirse en panelistas. Sin traducción simultánea (como durante las mañanas), en los talleres en los que participamos nadie se quedó sin entender otros idiomas por las iniciativas espontáneas y autoorganizadas de los presentes. En síntesis, en estos talleres no solo se registraron “novedades” en las intervenciones y narrativas de los panelistas sino que, en muchos casos, el espacio mismo se convirtió en un buen ejemplo de prácticas sociales innovadoras.

POR QUÉ EL FORO FUE EL “ANTIDAVOS”

La resistencia al pensamiento único, al neoliberalismo, a los intereses financieros internacionales constituyó un elemento unificador de las protestas que se dieron en los últimos tiempos. El Foro Social Mundial, como decíamos antes, se enmarcó claramente en este movimiento. La fecha para su realización no fue caprichosa: se trataba de realizar un encuentro simultáneo

con el Foro Económico Mundial que se reúne todos los años en la ciudad de Davos, Suiza, y a la que asisten los actores “destacados” de la economía y las finanzas mundiales. Pero hubo una diferencia significativa con las protestas realizadas anteriormente. No cabe duda de que la crítica a Davos ha generado protestas de todo tipo, debido precisamente a las consecuencias de las políticas que sustentan el “pensamiento único”. Porto Alegre dio cuenta de la diversidad y variedad de esa crítica en todos los órdenes sociales, económicos, políticos, culturales, mediáticos, etcétera.

Asimismo, esa perspectiva crítica a Davos representa a la gran mayoría de la población mundial. Como señaló *Veja*, revista de gran difusión en el Brasil que no simpatizaba con lo que estaba ocurriendo en Porto Alegre, pero que no podía dejar de reconocer su razón de ser:

Si la población mundial estuviese representada por una villa de 100 habitantes, el escenario sería el siguiente: 63 serían asiáticos, trece africanos, diez europeos, nueve sudamericanos y apenas cinco norteamericanos. Esos pocos norteamericanos serían dueños de 59% de toda la riqueza de la villa. Ochenta personas habitarían viviendas precarias, setenta serían analfabetas y cincuenta

mal nutridas. La globalización económica que beneficia a mucha gente (sic) no consigue todavía aplanar las desigualdades sobre las cuales las sociedades humanas construyen su progreso. (*Veja*, 31-01-2001)

En efecto, también Davos comienza a preocuparse por las consecuencias de sus políticas, por lo que los promotores del neoliberalismo tienden a considerar como “costos sociales inevitables” de ese pensamiento único, pero nunca poniendo en cuestionamiento la esencia misma del proyecto global. En ese sentido durante el encuentro se hizo hincapié en que “Davos necesita de Porto Alegre”. ¿Podría ser que ese proyecto tremendamente excluyente esté perdiendo legitimidad en el concierto mundial, y por tanto necesite de reajustes “sociales” siempre y cuando no cuestionen los fundamentos mismos del modelo?

LA TELECONFERENCIA-DEBATE: DAVOS-PORTO ALEGRE

Durante el encuentro se produjo un diálogo electrónico entre Porto Alegre y Davos. La teleconferencia enfrentó a miembros del Foro Social con miembros del Foro Económico, en un intercambio un tanto desigual por los enfo-

ques planteados. Del lado del Foro Económico la cara más saliente del debate fue la del magnate George Soros. Estuvo acompañado por Björg Edlund, representante de una multinacional sueca, y dos funcionarios de las Naciones Unidas, March Mallour y Jorge Ruggie. Desde Porto Alegre expusieron Rafael Alegría, titular de Vía Campesina, Bernard Cassen, de la organización ATTAC, Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, Aminata Traoré, ministra de Cultura de Malí; Oded Grajew, presidente de la organización empresaria Cives, y uno de los organizadores activos de Porto Alegre, la norteamericana Njoki Njehu y Waldo Bello, economista filipino miembro del Transnational Institute de Ámsterdam y representante de una ONG.

El debate fue en gran medida un “diálogo entre sordos”, y esto vale como metáfora así como descripción de un hecho real: fallas técnicas de la transmisión originadas en Suiza.

“Estamos aquí para discutir economía y defendemos el derecho de ustedes de discutir en Porto Alegre las cuestiones sociales”, dictaminó uno de los miembros de Davos. A lo cual Porto Alegre respondió críticamente: “Porto Alegre es el futuro, Davos ya es el pasado”. Soros pasó a ser blanco de las críticas y abucheos (en Porto Alegre) desde el primer momento: “Me llamo George Soros y estoy in-

teresado en reformar, no en destruir”, se defendió el magnate.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo le respondió: “Me llamo Hebe de Bonafini y estoy en Porto Alegre para denunciar que la deuda externa se paga con vidas”.

Oded Grajew, siguiendo en esta tónica, preguntó si sabían cuántas veces se había pagado ya la deuda externa y cuántos niños mueren por día en el mundo. Soros contestó diciendo que hoy las multinacionales producen más riqueza que el trabajo campesino. Bonafini lo increpó duramente por evadir la respuesta.

En definitiva, como era de esperar, casi no hubo diálogo. Davos insistía en la necesidad de discutir “seriamente” los temas económicos, a lo que Porto Alegre respondía insistiendo en la preeminencia de los temas sociales. Sin embargo, se puso de manifiesto, eso sí, que los temas sociales, en efecto, forman parte de los temas económicos y que el problema puede reducirse al interrogante ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de economía? Aminata Traoré, resumió: “...el debate demostró la arrogancia de los ricos y la necesidad que tenemos de consolidar este movimiento social y crear alternativas”.

QUÉ ES VÍA CAMPESINA

Como decíamos antes, Vía Campesina fue un actor importante en el Foro Social Mundial por muchas razones: siendo el país anfitrión Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) tuvo una fuerte presencia y despertó las simpatías y curiosidad de las delegaciones de los países invitados (hubo una actividad en los asentamientos del MST); José Bové, de la Confederación de Campesinos Franceses, había alcanzado fama internacional a raíz de las acciones contra los McDonald's en Francia; los agricultores de todo el mundo se sienten amenazados frente al modelo concentrador.

El Movimiento Mundial Vía Campesina nuclea organizaciones de campesinos, campesinas, indígenas, trabajadores rurales, pequeños agricultores, de más de 26 países de África, América, Asia y Europa, representando alrededor de 40 millones de campesinos del mundo todo. Algunas de las organizaciones miembro más destacadas de América Latina son la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC), y el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. La Argentina está representada a través del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y de la Coordinadora de Organizaciones de Campesinos,

Indígenas y Trabajadores Rurales de Argentina (COCITRA).

Con la consigna “Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza”, el movimiento campesino internacional Vía Campesina reinstala el debate sobre un modelo de desarrollo rural que se enmarca en una propuesta de cambio social más amplia, que alcanza a la sociedad en su conjunto, y no solo a los campesinos. De esta manera Vía Campesina proyecta la histórica demanda campesina de reforma agraria sobre el escenario global de un desarrollo ambiental y socialmente sustentable:

Es necesario proponer cambios en la agricultura, en la propiedad de la tierra y en los procesos de desarrollo rural, como parte de un amplio proyecto popular para nuestros pueblos. Donde haya un nuevo orden económico, social y político.

En términos generales Vía Campesina se expresó en su III Asamblea Internacional (Bangalore, India, octubre de 2000) contra el sistema económico neoliberal, contra el pago de los intereses de la deuda externa de los países del Tercer Mundo, contra la reconcentración de la tierra, contra las políticas del Banco Mundial, contra la represión en el campo y la existencia de milicias privadas y de grupos paramilitares,

y a favor del amor a la tierra, de la preservación de los saberes tradicionales, del respeto a la diversidad biológica y cultural como principio de la vida, y de la implementación de un plan de acción llamado Campaña Global por la Reforma Agraria.

En términos específicos Vía Campesina se enfrenta con el modelo de agricultura que prioriza la racionalidad económica, basada en el lucro, por ende depredadora del medio ambiente en la medida de sus intereses; que homogeneiza la producción, las tecnologías, las semillas, que es excluyente de las formas de vida rural; que genera el éxodo de la población, y profundiza la pobreza urbana y rural. Vía Campesina exige que los gobiernos del mundo hagan cumplir los derechos de los agricultores; que se destine la tierra para las familias que quieran producir; que se eliminen todas las ayudas directas e indirectas a las exportaciones; que se incluya en los sistemas de enseñanza de las escuelas básicas el tema de una agricultura campesina sustentable buscando generar un cambio de actitud hacia la Madre Tierra; y finalmente, que se establezca un modelo de desarrollo rural *con* campesinos.

A partir de esta agenda general y específica Vía Campesina se proyecta en el escenario global en representación de los campesinos del

mundo, instalando un discurso capaz de producir alianzas con los movimientos sociales que actualmente proponen una alternativa inclusiva de humanidad... *un mundo donde entren todos los mundos*. Vía Campesina no solo ha logrado desarrollarse como la expresión propiamente campesina a nivel mundial, incorporando todas las problemáticas del sector, sino que sustenta su argumentación en valores universales. Lo innovador del planteo que realiza Vía Campesina es que apela al “*derecho a la vida*” para oponerse al proyecto de las grandes multinacionales en el campo, y al proyecto organismos financieros y comerciales multilaterales en el mundo.

El movimiento internacional campesino alerta de los riesgos que corre ya no un sector de la sociedad, ya no un país, ya no los excluidos y olvidados del mundo, sino toda la humanidad, conjuntamente con la naturaleza, en cuanto diversidad biológica y cultural: “La diversidad es nuestra propia forma de vida”. La Vía Campesina eleva LA VIDA como única razón y ley de nuestra existencia presente y futura: “Los genes, la vida, son propiedad de la misma vida”.

Para entablar la resistencia y lucha, no solo expone argumentos sino que promueve la acción directa no violenta: destrucción de cul-

tivos transgénicos, movilizaciones urbanas, manifestaciones ante organismos nacionales e internacionales, presentación de proyectos de ley, elaboración de documentos que planteen alternativas al modelo agrario *sin* campesinos que se quiere imponer, etcétera.

Como ejemplo de la actitud de movilización permanente que proponen han convocado a la población mundial —con motivo del 17 de abril, Día Mundial del Campesino— con el fin de elevar las demandas protestando globalmente contra las semillas y alimentos genéticamente modificados (transgénicos) y su patentamiento por las transnacionales de agroquímicos. Sus acciones defienden la soberanía alimentaria y comercial, y de la bioseguridad, postulando la primacía de los derechos humanos y del valor de la vida por sobre los intereses comerciales, (que refleja la OMC).

Vía Campesina postula la lucha por los derechos de los agricultores, que son eminentemente colectivos, en todos los escenarios e instancias nacionales e internacionales (ONU, OMC, FMI, OIT, FAO, etcétera).

Los campesinos cuentan actualmente con la posibilidad histórica de ampliar sus recursos políticos y su capacidad de acción, pues poseen un movimiento social internacional enraizado en los espacios locales. En un mundo que

se globaliza en varios sentidos, los campesinos están demostrando, a partir de Vía Campesina, su vitalidad, muchas veces negada y combatida por izquierda y por derecha, para luchar en defensa propia, por lo que eligen, por el respeto de la diversidad en todos los niveles.

A diferencia de otros movimientos sociales autocentrados, y del modelo socioeconómico y cultural que se impone con la fuerza de las armas y la inhumana indiferencia desde los centros de poder político y económico, gubernamental o no, Vía Campesina lleva adelante una lucha que, siendo propia, es a la vez global, que integra a todos a partir de su diversidad, pues nos habla de nuestra universal humanidad, de nuestra amiga frágil y generosa, la tierra, de nuestra responsabilidad para con las próximas generaciones, que nos convoca a recuperar la humildad, abandonar un poco la obscenidad del exceso y la abundancia, pero también la de la miseria, y celebrar la vida, cada uno a su manera, pero todos juntos, con lucha, con alegría, con dignidad.

Nosotros, los campesinos y campesinas y sociedades agrícolas de pequeña escala, no estamos vencidos. Somos fuertes y tenemos determinación y somos la mayoría en el mundo. Estamos orgullosos de nuestro trabajo, el cual es producir

alimentos seguros para nuestras familias y la humanidad. Apreciamos nuestra diversidad, tanto biológica como cultural. El futuro es nuestro.

LAS ORGANIZACIONES RURALES ARGENTINAS

El Movimiento Campesino Santiagueño es miembro de Vía Campesina; sin embargo, sus dirigentes por distintos problemas no pudieron llegar a Porto Alegre. Algunos de sus jóvenes técnicos asumieron la representación y participaron como asistentes en los talleres de la organización internacional.

El Movimiento de Mujeres en Lucha —que se propone integrar Vía Campesina— estuvo representado por su presidenta Lucy de Cornelis. Para Lucy el Foro Social Mundial fue una experiencia excepcional. Participó y expuso su experiencia en un taller de la tarde, donde se presentaron varias organizaciones latinoamericanas y europeas. Lucy se conmovió al comprobar cómo luchan por obtener la tierra las organizaciones campesinas latinoamericanas.

Escuchar a los africanos, a los franceses, a los latinoamericanos, se te abrió la mente. Vemos que este sistema ha atacado a todo el mundo... uno descubre cuánta gente tiene necesidad de tierra y

nosotros que la tenemos nos las quieren quitar. Yo creo que las tierras productivas nuestras sirven también para alimentar al mundo.

En su exposición, contó como siempre su experiencia personal, con palabras sencillas, sin aditivos que dramatizaran aún más sus situaciones. Sus palabras tuvieron mucha acogida tanto en las organizaciones latinoamericanas como en las europeas. Danielle Mitterrand participó en esta misma mesa y sus palabras conmovieron a Lucy: “Escuchar a la señora de Mitterrand fue una experiencia importante”. Recordemos que sus suegros fueron colonos franceses que llegaron a La Pampa y que legaron aquellas tierras —que hoy están en peligro de ser perdidas— a su esposo.

“Yo estoy trabajando en La Pampa para que el año que viene vayamos más a este Foro”, acota la presidenta del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, segura de que este tipo de inserciones fortalece a la organización.

Estas fueron las únicas organizaciones gremiales presentes en el Foro Social Mundial del 2001. No obstante hubo una serie de ONG de tipo ambientalista, como el Grupo de Reflexión Rural, Alerta Transgénico, etcétera, y estudiosos del sector agrario que expusieron la situación por la que atraviesa el agro argentino.

Para el Grupo de Reflexión Rural, que viene llevando una campaña sostenida acerca del peligro de perder la diversidad genética y cultural en nuestro país, el Foro fue la posibilidad de interaccionar con muchos otros en el mundo que piensan similares cuestiones y de refundar en ese diálogo la capacidad de acción, “el recuento de fuerzas y la toma de conciencia de las nuevas dimensiones del movimiento global”:

Para nosotros en particular, como Grupo de Reflexión Rural y como UITA, fue una gran satisfacción y hasta un espaldarazo el que muchos de los temas que hemos tenido que denunciar y debatir en la Argentina en casi práctica soledad, hayan sido temas centrales del Foro y reiteradamente tratados en diversos talleres. Nos referimos a defender *la necesidad de la Seguridad Alimentaria, a la lucha contra los organismos transgénicos vinculándola a la crítica del modelo rural de una agricultura sin agricultores* e incluso las grandes campañas anunciadas para preservar *las semillas como patrimonio de la Humanidad*.

Y agregan:

En Porto Alegre tuvimos la ocasión de reflexionar juntos, también fue importante el poder reconocernos mutuamente y comprobar que somos muchos y que cada vez somos más. Fue

asimismo valioso para nosotros escucharlo al francés José Bové y a muchos otros reconocidos dirigentes y percibir en ellos las características de los nuevos liderazgos, su entereza, su agresividad, su disposición a estar en la primera línea de la lucha y el acompañar siempre a la acción con el pensamiento.

El Grupo de Reflexión Rural sintetiza la amplitud y diversidad del Foro Social Mundial con la imagen de un río abierto capaz de cobijar esos muchos mundos que el modelo actual solo intenta homogeneizar o marginar:

Como un río salido de madre el Foro se hizo ingobernable e inmanejable, y de ese modo paradójicamente se hizo también de todos, del conjunto y de cada uno, preservándose en todo momento un clima festivo en que las afirmaciones y exposiciones culturales fueron preponderantes. Un mar de colores y de banderas, un universo de vestimentas y una babel de lenguas en que distintos mundos se esforzaron por reconocerse y convivir armoniosamente, eso fue el Foro Social Mundial. Y en esos climas mágicos propios de ciertos momentos únicos en que la historia pareciera acelerarse, se logró el milagro de aunar absolutamente lo diverso y demostrar a todos que frente al avance del capitalismo global, los pueblos han encontrado una alternativa de pensamiento contestatario y son capaces de elaborar las estrate-

gias necesarias para poder creer que otro mundo es posible... *Otro mundo es posible.*

Las vivencias ocurridas fueron plasmando en los grupos, caso el Grupo de Reflexión Rural, un “espíritu” renovado habitado de convicciones florecidas:

De manera que no hay otras opciones más que las de sumarse a este movimiento de resistencia que se propone, un movimiento multitudinario y libertario, un movimiento vivenciable, donde vuelven a existir sueños de justicia y donde la solidaridad y el amor son otra vez las reglas de lo humano.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Esos días fueron intensos y nuestras experiencias están fragmentadas por las elecciones que realizamos en el día a día. Es difícil tener una visión de conjunto, por eso propusimos en este trabajo transmitir algunas imágenes, describir algunos escenarios y la organización Vía Campesina y arriesgar algunas interpretaciones.

En relación con el debate Davos-Porto Alegre, que tanto dio que hablar, circularon dos interpretaciones: 1) que el diálogo, con todas sus

dificultades, fue importante y posibilitará que en un futuro los poderosos actores de la globalización neoliberal incorporen los reclamos; 2) que ese domingo se puso en acto algo profundo que expresa que no hay diálogo posible, que los actores que mostraron las cámaras desde Davos y Porto Alegre pertenecen a dos mundos sociales y culturales irreconciliables. Mientras la primera postura fue sostenida por la prensa moderada, la segunda se apoyaba en la evidencia empírica de todos estos años que mostró, tanto en el plano nacional como global, que los fundamentalistas del neoliberalismo fueron incapaces de incorporar en sus discursos y políticas los reclamos de los diversos actores que luchan por un mundo más justo, equitativo y solidario.

En definitiva, el Foro se constituyó, en palabras de su propia convocatoria,

en un marco de esperanza y un nuevo espacio mundial para la reflexión y la organización de todos aquellos que se contraponen a las políticas neoliberales y que están construyendo alternativas para priorizar el desenvolvimiento humano y la superación de la dominación de los mercados en cada país y en las relaciones internacionales.

Como decíamos al comienzo de este trabajo, la propuesta de crear el Foro Social Mundial deri-

va de las movilizaciones ocurridas en Europa, contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en 1998; las grandes manifestaciones de Seattle, durante y contra el encuentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en noviembre de 1999; las realizadas en Washington, Praga, Niza y otras ciudades en meses recientes, en contra de las políticas del FMI y el Banco Mundial, etcétera. Esas movilizaciones —y muchas otras que se realizaron desde entonces— pusieron definitivamente en evidencia la emergencia de un movimiento cívico mundial, más allá de las fronteras nacionales, de resistencia al neoliberalismo.

El encuentro fue muy importante, además, en ese propio intento de constituir una identidad colectiva de carácter internacional. Las simbologías que comienzan a representar este tipo de eventos —las “acciones directas” no violentas, las dramatizaciones con buena dosis de teatralidad en las marchas y actos, la mezcla de arte (emociones) con pensamiento, los “pañuelos” (blancos de las Madres de Plaza de Mayo; verdes de Vía Campesina), etcétera— dan cuenta de la creación y circulación de códigos comunes. Tal vez el más explicitado sea el de la “no violencia” sobre los seres vivientes de este planeta y el respeto por el planeta tierra en general. De ahí que en los métodos más radica-

lizados de los activistas, denominados “acción directa”, se complementen con el calificativo “no violenta” y los componentes “ecologistas” sean comunes a varios movimientos.

Estos códigos y símbolos esbozan un proyecto que intenta desafiar al “neoliberalismo”. En el nivel de las ideas (alternativas como suele decirse), es un momento de “transición paradigmática” (De Sousa Santos, 2000): comienza a romperse la hegemonía (el sentido común) del pensamiento “neoliberal”, pero por la propia fuerza de su brutalidad más que porque se expanda un pensamiento crítico con efectos sobre la arena social. En este nivel, en el Foro hubo algunos intentos de “mimeografiar el pasado” (como dice una canción popular brasileña), muchas propuestas derivadas de la propia experiencia de la gente (como las de Vía Campesina, por ejemplo) y algunos esfuerzos de interesantes intelectuales para construir la parte de la bisagra que apoye y sustente en el plano de las ideas (un nuevo sentido común) a tanta energía social desafiante y rebelde pero también organizadora y “agencial”.

BIBLIOGRAFÍA

- De Sousa Santos, B. 2000 *A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência* (San Pablo: Cortez).
- Della Porta, D. y Diani, M. 1999 *Social Movements. An Introduction* (Oxford: Blackwell).
- Vía Campesina 2000 *Secretaría Operativa Internacional* (Tegucigalpa).

OTRAS FUENTES

- Periódico *Zero Hora*.
- Revista *Veja*.

RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO, “RECUPERACIÓN DE ESTADO”

MOSCONI, ARGENTINA DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE LUCHA* **

NORMA GIARRACCA Y JUAN WAHREN***

“Este continente, con la cooperación de hombres y de capitales europeos, y en los últimos tiempos también norteamericanos, ha emprendido su constitución económica e iniciado la explotación intensiva de sus riquezas naturales, equipándose adecuadamente para ello. En

cambio, de esta cooperación ha sufrido cinco siglos de vasallaje, que aún vive, pues la mayor parte de los beneficios de sus exportaciones no quedan en su poder. Tiempo es que esta situación termine y que tales beneficios sean justo usufructo de los pueblos sudamericanos”.

GENERAL ENRIQUE MOSCONI

* Giarracca, N. y Wahren, J. 2009 “Recuperación del territorio, ‘recuperación de Estado’: Mosconi, Argentina después de ocho años de lucha” en Tavares dos Santos, J. V. (org.) *Democracia, violências e lutas sociais na América Latina* (Porto Alegre: Editora de Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS).

** Este artículo se basa en investigaciones llevadas a cabo con financiación de FONCYT y UBA. Los autores agradecen a la UTD y a los pobladores de Mosconi la predisposición para que este trabajo se lleve a cabo.

*** Doctor en Investigación en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) y sociólogo. Becario CONICET y miembro de GER-GEMSAL (Grupo de Estudios Rurales-Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina).

La localidad de General Mosconi, en la noroesteña provincia argentina de Salta, cercana a la frontera con Bolivia, alcanza según el último censo poblacional 16.267 habitantes y abarca la ciudad que lleva ese nombre, las localidades de Campamento Vespucio y Coronel Cornejo así como una zona aledaña habitada por las comunidades indígenas wichíes, mocovíes, churupíes y guaraníes. Está administrada formalmente por una estructura municipal y es la sede de la UTD, organización generada al calor de los cortes de

rutas, movilizaciones y luchas iniciadas en 1997 (véase Barbetta y Lapegna, 2001; Svampa y Pereyra, 2003).

Hasta la instalación de la Standard Oil, fue un espacio destinado a la explotación maderera y luego fue adquiriendo el perfil de las denominadas “economías de enclave” alrededor de empresas extranjeras de carácter extractivo. Con la creación de YPF y los costosos logros de llevar a manos públicas no solo la exploración y explotación sino la comercialización del hidrocarburo, el Estado se afianzó como organizador y beneficiario de la actividad. Comenzaba de este modo en Mosconi, la producción social del territorio que hoy sus habitantes recuerdan como los orígenes del lugar.

De las narrativas de los actores, podemos interpretar que mientras los pozos petroleros, el ferrocarril, las escuelas, los hospitales, las rutas fueron del Estado-Nación a través de su empresa, el territorio que los contenía era considerado “de todos”; no había nada que disputar más allá de los beneficios que YPF podía otorgar dentro de un claro sistema de desigualdades. Tal sistema, plasmado sobre el espacio a través de barrios (para técnicos y gerentes; para empleados y obreros; para las comunidades indígenas, etcétera) estuvo

fuertemente jerarquizado y los indígenas fueron los que quedando afuera recibieron algunos beneficios indirectos por la vecindad con poblaciones que gozaban de altos ingresos.

No obstante este desigualitario mundo “ypefeano” (creado por YPF), ese pasado se añora pues el presente para la mayoría es devastador; tanto el espacio social como el territorial están configurados por la exclusión y la situación general está agravada por las condiciones laborales e institucionales que ofrece el Estado provincial. Por tales razones, quienes lucharon y generaron la UTD, se proponen no solo la construcción de un espacio social digno para los desocupados y el resto de la población sino muchas cosas más: una nueva institucionalización (lo que el referente Juan C. Fernández denomina *recuperación de Estado*) y una recuperación territorial; una reapropiación de sus territorios en el más amplio significado del concepto.

Esta complejidad de espacios, tiempos, sujetos, actores sociales, agentes económicos, funcionarios políticos municipales, provinciales, nacionales conforman una de las experiencias más rica de la Argentina pos-noventa. No solo por la historia de lucha del pasado cercano sino por la construcción de un presente desde la desconstrucción de

ideas tan arraigadas en nuestras “modernas” naciones, como la de “Estado”, “territorio” “trabajo”, etcétera.

En este trabajo tomaremos solo dos de los aspectos centrales, el que se orienta a la recuperación del territorio a través de emprendimientos generados por la UTD y su resignificación del “Estado”. La primera parte, la cuestión territorial, ya fue abordada en un trabajo publicado en la *Revista de OSAL* y en este escrito suplementaremos ese análisis con la cuestión estatal.

DE TERRITORIOS, ESPACIOS Y LUGARES

La modernidad fragmentó y nominó los territorios tanto política como económicamente. El Estado-Nación fue la unidad política privilegiada, quien fijó los límites nacionales —proceso no exento de serios conflictos entre países— como antes lo habían realizado reyes, emperadores, iglesia, etcétera. La pretensión estatal fue homogenizar espacios y poblaciones bajo las categorías “territorio nacional” y “ciudadanos estatales”. Por otro lado, el capitalismo “modernizante” jerarquiza y segrega el espacio; dividido, enfrenta unos a otros (campo-ciudad, por

ejemplo); los vuelve antagónicos; avanza, territorializa, desgarrando el espacio geográfico (Zibechi, 2003).

Pero el territorio es mucho más que todo esto; el territorio contiene procesos, son los hombres/mujeres quienes territorializan y fijan territorialidades; marcan, transforman esos espacios en lugares (Tuan, 1997). Para los sociólogos, entre el territorio y el sujeto está el *lugar*, marcado por el hombre/mujer pero que, a su vez, le deja marcas primordiales. Por eso a pesar de los intentos homogenizadores de la modernidad, los territorios y lugares expresan múltiples marcas que también pueden leerse en clave de desigualdades y exclusiones. El territorio, muchas veces identificado como “naturaleza”, en nuestra concepción incluye de entrada al hombre/mujer, pero como sostiene Morin (2003), de un modo que lo distingue del resto de sus componentes: puede reflexionar acerca de esta relación, genera una cultura y actúa en consecuencia. El “territorio-naturaleza” dentro del capitalismo se convierte en “recursos naturales” y pasa a ser expropiable, degradable, mercantilizable. Transformada en “recursos”, nos dice De Sousa Santos (2003), puede ser explotada hasta la extenuación y el hombre y la sociedad quedan separados de la naturale-

za y esta segregación no permite formular ni equilibrios ni límites (ibídem: 77).

Mosconi, en este escenario conceptual es un lugar conectado profundamente con la experiencia, marcado por los mundos de vidas de quienes lo habitaron y habitan; podemos decir que Mosconi es *un lugar practicado* (De Certeau, 1979) que habilita para la comprensión de los diversos sentidos que los sujetos generan sobre el territorio. Permite reconstruir procesos de apropiación y desapropiación, de integración y exclusión. Las narrativas de los sujetos son insumos privilegiados que muestran los entrecruzamientos de culturas, de paradigmas, de tiempos y de modos de percibir el entorno, la relación con los otros y la relación con el territorio.

Como muchas ciudades intermedias del interior del país, Mosconi se generó alrededor de actividades económicas primarias, en este caso extractivas: primero la madera y luego el petróleo teniendo como encuadre departamental a General San Martín, actualmente tercer productor provincial de soja¹. La

importancia del rico subsuelo habilitó tempranamente una conciencia territorial en los habitantes, la experiencia práctica de conocer acerca de los pozos petrolíferos. A diferencia de otras ciudades intermedias del interior, la actividad agrícola no formó parte del acervo cultural o laboral de la región (véase Giarracca et al., 2003). Los habitantes de Mosconi, Vespucio y Cornejo buscaron siempre salidas laborales alrededor de la actividad petrolera y los servicios ligados a ella mientras las poblaciones aborígenes, como todas las del Gran Chaco, han tenido tradición de pescadores y recolectores y desarrollado una rica actividad artesanal textil.

Hoy, cuando la mayoría de los habitantes siente arrebatado su territorio, la UTD aborda desde actividades productivas y culturales su recuperación y, paradójicamente, la agrícola se convirtió en una herramienta de primer nivel, no solo por el asentamiento que produce sobre las tierras (municipales u otorgadas en *comodato* por algún privado) sino por representar una herramienta de primer nivel en la estrategia de la autogestión, de la reproducción material de la vida.

1 De las 90.602 hectáreas implantadas del Dto. General San Martín, 30.380 corresponden a oleaginosas, es decir, soja. Se convierte así en el tercer departamento sojero de la provincia de Salta (CNA, 2002).

DEL ESTADO-NACIÓN AL “ESTADO DE LA VIDA”

“La recuperación de Estado es eso, es poder ir buscando las alternativas, las posibilidades y si te encontrás cerrado el camino, vas a tener que tratar de pasar por otro lado... te vas a encontrar la tranquera allá y no vas a poder pasar: buscás otro lugar... claro, ahora lo que no sabés es cuanto es el tiempo que te va a llevar...”

JUAN CARLOS “GIPI” FERNÁNDEZ

La mayoría de los autores coinciden en que el concepto de Estado surge a partir de la Revolución Francesa y que está muy relacionado con el capitalismo. Y como dicen los historiadores, la emergencia de la nación fue fundamento y correlato de los Estados, en el moderno sentido de comunidad política. Sin embargo, es interesante saber que hay otro sentido, previo al moderno, de nación referido a comunidad étnica (Chiaramonte, 2004) que podría ser antecedente del significado posterior a la modernidad que suelen darle los pueblos aborígenes. Cuando aparece la comunidad política, lo hace ligada al Estado y a un determinado territorio. Pero tanto la noción

de Estado como la de nación surgieron y están relacionadas con la historia europea, respondiendo a la historia política concreta de aquellas sociedades.

El pensador boliviano Raúl Prada, en un trabajo reciente, pregunta cuál es la función del Estado en las sociedades periféricas como las nuestras, qué significación históricas tienen las formas de Estado en nuestras sociedades; qué clase de arquitectura política es la que termina de construirse en el decurso de las dramáticas historias de estas sociedades. Y se acerca a estos interrogantes con una imagen interesante asemejada al sincretismo que han sufrido las religiones en nuestro continente: en nuestras sociedades ocurre algo parecido con las formas estatales, dice el autor, se producen mezclas, simbiosis, dualismos entre las formas políticas y los diagramas de poder autóctonos. (Prada, 2005: 12).

Podemos coincidir con B. Anderson cuando sostiene que la nación es un constructo social, un artefacto cultural que los sujetos en sociedad han utilizado de distintos modos históricos. Fuera de Europa y de los países centrales, en muchas circunstancias estos conceptos sirvieron como armas de los subordinados para poner límites a las expansiones y dominaciones de aquellas otras naciones. Dicen Negri y

Hardt que la nación hizo las veces de línea de defensa contra la dominación de naciones más poderosas y de fuerzas externas económicas, políticas e ideológicas (2002: 102). Por eso en las etapas de “nacionalismos”, los Estados toman en sus manos los recursos estratégicos como, en América Latina, fue el petróleo.

El “Estado” que rememoran los pobladores que salieron a la ruta de la UTD, es ese, el que se hacía cargo de la educación, de la salud, de la vivienda con las ganancias de una actividad económica tan importante como la petrolera. Desde el derrumbe de ese Estado fueron comprendiendo que en la nueva etapa económica, ese vacío no sería reemplazado por el capital privado. Por eso la constante necesidad de evocar otras épocas, presentes en edificios, barrios, pozos petroleros pero por otro lado, buscar el modo de encontrar otra matriz organizativa de la vida social de la comunidad.

En muchas ocasiones cuando hablan de “recuperación de Estado”, los referentes de la UTD nos remiten a la “recuperación de la familia, a la recuperación de la vida”. En este sentido podemos pensar que la referencia a la familia y a la vida apunta a recrear aquellos lazos sociales y familiares que la crisis del Estado de Bienestar y las políticas neoliberales se encargaron de destruir sistemáticamente. De hecho,

las luchas iniciales encaradas por la UTD fueron de carácter netamente defensivo, cortaron las rutas, como luego tantos otros desocupados en la Argentina, reclamando el derecho a trabajar que les permitiera seguir viviendo con dignidad. Luego, los propios caminos de construcción que se fue dando la UTD, marcaron nuevas lógicas de organizarse y generaron espacios alternativos a los institucionales y estatales, suplantando funciones que antes cumplía el Estado (o YPF en el caso de Gral. Mosconi) y generando espacios propios de trabajo y producción ya que el mercado tampoco los garantizaba. Así es como esta “recuperación de Estado” implicaría retornar a los vínculos sociales básicos que existían en la “sociedad salarial”, pero no solo, significaría también la construcción de alternativas propias, que desconocen en la práctica a los espacios institucionales y del mercado, y así es como puede entenderse el funcionamiento de la UTD como un “municipio paralelo” (López Echague, 2002, Svampa y Pereyra, 2003) donde se gestionan desde limpieza de plazas, refacciones de escuelas, paradas de ómnibus, hospitales y centros de salud, hasta arreglos y construcción de viviendas en forma cooperativa, pasando por la gestión de puestos de trabajo en empresas, planes sociales, y proyectos productivos cooperativos.

Así la concreción de obras y proyectos comunitarios y productivos configura un entramado socio-territorial en la región que permite pensar ciertos procesos que genera la UTD en esta clave de una construcción autónoma y alternativa de los canales institucionales de participación y deslegitiman a los funcionarios gubernamentales que ya no son los que ejercen el “monopolio de la obra pública”. Es esta búsqueda de alternativas al sistema que la UTD fue generando es lo que también permite leer la clave de lo que ellos llaman “recuperación de Estado” y la constitución, de hecho, de un municipio paralelo en la zona. Cuando estaban llegando las maquinarias para los proyectos productivos, “Gipi” Fernández comentaba que *“con las maquinarias, el camión, el tractor, el aserradero, con todos los proyectos, ahora sí que vamos a ser el municipio paralelo”*.

Esta “recuperación de Estado”, creemos, se enmarca en una posible tensión entre una práctica política “autónoma” (independiente del Estado, la Iglesia, los partidos políticos y sindicatos tradicionales) y una construcción político-territorial anclada en el plano local, y la concepción “nostálgica” del Estado de Bienestar muy ligada a la experiencia laboral y social de YPF que trasluce la UTD (Svampa y Pereyra, 2003). Si analizamos las distintas reconfigura-

ciones del territorio que se producen en esta región, vemos por un lado a un Estado (provincial y municipal) en una, paradójicamente, activa política de retirada; y a las multinacionales petroleras y sojeras apropiándose de vastas zonas y recursos naturales y, por otro lado, encontramos a la UTD, recuperando la identidad de los trabajadores desocupados a partir de los proyectos productivos, recomponiendo lazos sociales perdidos a través de las acciones colectivas, estableciendo nuevos vínculos entre sujetos disímiles que conviven y resignifican la propia organización, generando nuevas formas de organizarse. En definitiva, reconfigurando el territorio en un sentido comunitario, pero también productivo y solidario, construyendo con añoranza hacia lo “años dorados” del Estado de Bienestar, pero también sabiendo que ese pasado ya no puede retornar, y que deben buscar nuevas formas de sociabilidad e inventar nuevas formas de producir y reproducir la vida, sus vidas y sus territorios.

El General Enrique Mosconi, fundador y promotor de YPF, afirmaba en 1928 en el prólogo a su libro *El petróleo en el Norte*, que “la Standard Oil ha puesto en práctica su ya famoso catecismo de acción: la penetración sonriente, la consolidación cuidadosa y la imposición insolente” (citado en Mayo, Andino y García

Molina, 1983). Hoy las compañías petroleras que actúan en la zona² pasaron del monopolio al oligopolio; pero las estrategias empresarias no parecen haber cambiado tanto desde la década del veinte del siglo pasado. La etapa de “penetración sonriente” se dio durante las privatizaciones, los retiros voluntarios, los “proyectos de reactivación regionales”, la etapa de “consolidación cuidadosa” también ha concluido con la definitiva apropiación de los recursos del subsuelo y el definitivo retiro del Estado del control y regulación de la extracción y exploración petrolífera. Actualmente es la “imposición insolente” el modelo de acción de las petroleras multinacionales, que continúan extrayendo los recursos petroleros y gasíferos contaminando la zona, generando escasas o nulas inversiones en las poblaciones locales, así como contratando escasa mano de obra especializada. En los años veinte quien se opuso a esta lógica “extractiva” de las compañías petroleras fue Enrique Mosconi y la ardua construcción de una empresa petrolera estatal, YPF, potente y eficaz que compitiera con la Standard Oil y defendiera la soberanía de los recursos naturales. Hoy es una organización de excluidos;

2 Repsol YPF, Petrobras, Tecpetrol, Pan American Energy, Pluspetrol, etcétera.

de desocupados, jóvenes, indígenas y mujeres que dan esa misma y desigual pelea contra las empresas multinacionales e inacción (o represión) estatal, por recuperar sus recursos, sus territorios y, en definitiva, por recuperar sus formas de reproducción de la vida.

MOSCONI, OCHO AÑOS DESPUÉS

LOS CORTES COMO ÚLTIMO RECURSO

Actualmente las acciones colectivas de protesta de la UTD son muy esporádicas; desde el año 2003 que no se realizan cortes de ruta masivos y prolongados y los de acceso son cada vez más ocasionales. Esto parece obedecer a varios factores: por un lado el contexto político nacional hace que estas medidas de lucha hayan perdido bastante legitimidad, lo cual sumado al esfuerzo que implica la organización de los proyectos productivos y a la campaña de desprestigio contra la UTD montada desde el gobierno provincial y municipal y las empresas petroleras³ a

3 A fines de 2003 durante un corte de acceso importante a una de las empresas petroleras de la zona, fueron incendiadas en un confuso episodio las instalaciones administrativas y los depósitos de la empresa

partir de un incidente durante una de sus protestas. Los medios de comunicación local y provincial han jugado un papel importante en esta campaña de desprestigio hacia la UTD.

A todo esto debe sumarse que a la represión directa por parte del Estado frente a la protesta social, en los últimos años se sumó la estrategia de la “judicialización de la protesta social”, estrategia de la cual Mosconi es un caso paradigmático: José “Pepino” Fernández, uno de los referentes más importantes de la UTD, tiene más de cien causas judiciales, casi todos los integrantes de la UTD están procesados judicialmente por haber participado de alguna movilización, corte de ruta, corte de acceso; e incluso existen casos de algunos integrantes de la UTD que están procesados por acciones en las que ni siquiera estuvieron presentes.

Aún en estos difíciles escenarios, la UTD acompaña las protestas de otros movimientos, como fue la de maestros en los comienzos de 2005 o busca modos de manifestarse que generen consenso en la comunidad. Su sede es

en cuestión. Las acusaciones recayeron sobre la UTD, aunque no hay pruebas fehacientes de que el incendio haya sido provocado por los manifestantes. La UTD plantea que fue obra de infiltrados que provocaron el incendio para deslegitimar a la organización.

un lugar de encuentro de movimientos de todo el país y hasta algunos de América Latina así como de diversos viajeros. La presencia de cineastas, la discusión de películas críticas al modelo neoliberal, los encuentros con gente de otras partes de país, talleres, etcétera dan lugar a expansión de su presencia dentro de la comunidad y al acercamiento de población marginal o ajena a la organización.

DE LAS RUTAS A LOS EMPRENDIMIENTOS

Con el primer corte de ruta en 1997 comienzan a aparecer los primeros “Planes Trabajar”⁴ que eran gestionados por el Municipio y tenían una duración de entre tres y seis meses. En los sucesivos cortes realizados, los pobladores de Gral. Mosconi fueron consiguiendo más subsidios, hasta que en 1999 es la organización de los desocupados quien comienza a gestionar una porción considerable de ellos. De este modo se rompe por un lado, el manejo “clien-

4 Los “Planes Trabajar” fueron una herramienta de las políticas sociales neoliberales para paliar el creciente proceso de desocupación desde mediados de los noventa. Ahora predominan los denominados “Plan Jefas y Jefes de Hogar desocupados” con un subsidio de \$150 (alrededor de 50 dólares).

telar” de la Municipalidad y los partidos políticos tradicionales, y por otro, se habilita para que sea la propia organización quien decida qué trabajos realizar a partir de esos ingresos. Se comienzan a sumar a los trabajos comunitarios (limpieza de plazas, barridos de calles, asistencia en comedores, etcétera), proyectos de ampliación y refacción de escuelas y centros de salud, construcción de paradas de ómnibus, salones para las sociedades de fomento de los distintos barrios⁵ y se inicia también el armado de otro tipo de emprendimientos comunitarios de carácter productivo: las huertas y las ladrilleras. Se produce de este modo el pasaje de la etapa de trabajo de servicios comunitarios al productivo. La producción de las huertas siempre se destinó al consumo de los integrantes del equipo de trabajo y en muchos casos también a comedores, escuelas u hospitales. Lo mismo ocurre con las ladrilleras, lo producido se utiliza para las necesidades de

5 De hecho los trabajos comunitarios se ampliaron de múltiples formas en beneficio de la comunidad de Mosconi y fueron una gran marca de legitimidad de la UTD, frente a la casi inactiva Municipalidad local. Además de lo detallado, la UTD también pintaba y refaccionaba casas, cambiaba ranchos por casas de material, desmalezaba terrenos, e incluso mantenía en buen estado el cementerio.

quienes allí trabajan y para los trabajos comunitarios de la UTD, solo esporádicamente se vende en el mercado local. En la actualidad se intenta ampliar la producción para poder comercializar en los mercados de la zona.

En los comienzos los insumos y herramientas necesarios para el trabajo comunitario y para los incipientes proyectos productivos, fueron obtenidos por medio de lo que ellos denominan “cortes de acceso” (bloqueos a las entradas de las empresas petroleras multinacionales) para demandar estos materiales y puestos de trabajo “genuino” (es decir la restitución de relación salarial). En la actualidad también reciben subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y han conseguido maquinarias y vehículos para contar con un equipamiento adecuado para el desarrollo de los proyectos productivos⁶.

6 Nos parece importante resaltar que la UTD fue una de las primeras organizaciones de desocupados en plantearse la realización de proyectos productivos propios, autogestionados, como una salida “digna” al problema de la desocupación, bastante antes que estos proyectos fueran asimilados por políticas de asistencia gubernamental. Esta puesta en práctica de proyectos productivos tuvo, a partir de esta experiencia, una notoria influencia en distintas organizaciones de desocupados del resto del país.

De este modo se entrelazan las metodologías de lucha y el desarrollo de proyectos productivos y comunitarios. Este tipo de construcción organizativa les dio una gran legitimidad en el seno de la localidad: los vecinos de Mosconi ven los resultados de los cortes de ruta y de acceso y se benefician con ellos. Las “marcas” del trabajo de la UTD son estas tres letras como YPF y en un formato que rememora la vieja empresa. Ese logo se lo observa en todo Mosconi: las paradas de ómnibus, salas de salud municipales, sociedades de fomento, en las comunidades aborígenes y hasta en la sede de una Universidad generada por propia iniciativa. A partir de estos proyectos la UTD recupera aquellos espacios abandonados por el Estado y el trabajo se torna “social” más allá de las familias que integran la organización. Sus emprendimientos están expandidos, son para todos y van convirtiendo el espacio en un *lugar practicado*.

En efecto, el trabajo cotidiano, el cuidado de los lugares públicos así como el armado de los proyectos comunitarios reconfiguran el espacio y las asimétricas relaciones sociales que la privatización y el resto de las políticas neoliberales acentuaron. Hoy, en el seno de la UTD, conviven y se articulan, desocupados estructurales, ex-ypefeanos, aborígenes, estu-

diantes universitarios y terciarios, jóvenes desocupados sin trayectorias laborales formales, mujeres que hoy son quienes —con el plan y el proyecto productivo— sostienen el hogar; todos en la búsqueda colectiva de salidas dignas para la reproducción material de la vida.

Se recupera, en palabras de ellos, *la cultura del trabajo* y a través de la actividad humana (productiva o de servicios para todos) se propone reconfigurar espacios físicos, sociales y culturales. El modelo organizativo a veces es propio, creado e imaginado por ellos para estos nuevos tiempos pero en otros momentos se lo piensa dentro del paradigma de la ex-YPF. Juan Carlos “Gipi” Fernández, responsable de la Oficina Técnica y referente de la UTD, nos decía:

...yo pienso que lo que se está formando acá es lo de las fábricas de antes. Entonces yo a esto lo llamo “recuperación de Estado”, porque estás recuperando la familia, estás recuperando lo que es una fábrica de antes. Recuperar las personas que están fuera del sistema.

Pero estos principales referentes saben que la vuelta a la época de YPF es imposible y plantean otras formas de organización y trabajo. Continúa Fernández:

[Pensamos] que no sea lo clásico de una empresa, sino que sea bien regional y que pueda ser bien regional con una capitalización hacia fuera, que sea decidido por todos los actores que componen cada emprendimiento, para que no sea una persona que decida y los joda (perjudique) a ellos. [...] Este trabajo es más genuino que el de las empresas [...], con un sueldo que ganás menos, pero que no define nadie por vos, que lo define la misma gente... ellos mismos piensan, o sea el grupo de gente que trabaja en el emprendimiento, que piense por sí mismo y sepan desarrollarse.

En esta segunda parte de la entrevista se expresa una modalidad de recuperación diferente a la de los viejos tiempos: ya no es la organización fabril vertical y desigual sino modos donde el trabajo es más igualitario y con un fuerte componente autogestivo de la producción y de la organización social.

Con respecto al trabajo parece también repetirse, en parte, esta tensión a la que nos referíamos anteriormente entre la construcción de autonomía y la reconstrucción del Estado de Bienestar, en el sentido de que en la UTD coexisten (en una forma para nada contradictoria) la superposición de dos lógicas distintas de entender al trabajo. Por un lado la evocación al ideal de las fábricas y la sociedad salarial, con demandas y luchas concretas para conseguir

puestos de trabajo “genuinos” en las empresas petroleras; y por otro, una fuerte apuesta a los proyectos productivos autogestionados que, al decir de los referentes de la UTD, son “más genuinos” porque aunque quienes participen en estos emprendimientos obtendrían una menor remuneración, serían ellos mismos quienes decidirían las condiciones de producción y distribución del excedente, sin jefes ni patrones dirigiendo los emprendimientos.

LAS MARCAS TERRITORIALES DE LOS PROYECTOS

“Ahora con los proyectos que salen, pensamos que se van a armar con una parte administrativa fuerte, donde la gente sepa lo que tiene, que lo decidan ellos también, y que no decida uno en cierta forma por ellos, sino que también decidan en el armado de todo esto, donde va a haber una supervisión, donde el desarrollo de cada uno sea acompañado con cada emprendimiento, como se dice, uno enganchado con el otro, ¿no? Y hay cosas de no creer, pero es casi seguro que lo que es la parte maderera va a articularse con la parte agrícola-ganadera, la parte agrícola-ganadera se va a fortalecer con lo que es la parte de fábrica de ropa, lo que es

fábrica de ropa se va a fortalecer con lo que es el basurero ecológico. Entonces hemos sacado maquinarias básicas para que el desarrollo general sea potenciado para la gente”

JUAN CARLOS “GIPI” FERNÁNDEZ
(UTD, MOSCONI. ENTREVISTA)

En la actualidad la UTD presenta una gama muy variada de proyectos productivos. A las huertas comunitarias, un gran emprendimiento agrícola y las ladrilleras se suman un basurero ecológico donde se recicla vidrio, plástico y se planea generar abono orgánico para las huertas, un taller de herrería y soldadura (donde además se realizan cursos de capacitación), una clasificadora de porotos que hace el trabajo para una empresa de la zona, un aserradero portátil que aprovecha la madera que se genera con los desmontes (que de no ser utilizada por la UTD sería quemada por los dueños de los campos) y varios talleres de costura artesanal que con las nuevas maquinarias recibidas se los articulará con las necesidades del resto de los emprendimientos y fabricará ropa para el mercado.

Un párrafo aparte amerita el proyecto de las 350 ha a pocos kilómetros de Mosconi. Son tierras otorgadas en comodato (contrato de

utilización por un tiempo determinado) por el municipio a la organización donde actualmente los “emprendedores” están llevando a cabo trabajos de cercado y limpieza. Es un proyecto agrícola-ganadero muy ambicioso: alrededor de 30 pequeños productores están iniciando diferentes producciones como la horticultura, frutales, criadero de chanchos, gallinas y gansos; asimismo se destina un espacio común para la siembra de porotos, soja y maíz orgánicos, orientados al mercado externo.

En la articulación de estos emprendimientos se pone en acto estos nuevos modos de organizar las actividades económicas; plasmarlas sobre el territorio; generarlas desde creativas relaciones sociales u otras más conocidas como las cooperativas. Las iniciativas se entrelazan por dos instancias: la coordinación técnica y administrativa y otra logística, ambas a cargo de la organización. En el primer nivel, la administración de los emprendimientos está centralizada por las oficinas de gestión de la UTD y supervisada por los propios integrantes de los distintos proyectos. En el segundo nivel, la organización propone un uso coordinado y cooperativo del equipamiento⁷. Esta articulación

7 Se trata de un tractor de 120 HP, una rastra, un camión, aserraderos portátiles y diversas herramien-

logística se complementa con los procesos de trabajo: el abono orgánico del basurero se destina a las huertas; las reparaciones de herramientas se realizan desde el taller de herrería y soldadura, etcétera. La comercialización en estos complejos económicos regionales, se planea también en forma coordinada, tanto en el nivel de los mercados locales, regionales, nacionales o internacionales.

En relación con la recuperación territorial, un reciente emprendimiento de construcción cooperativa de vivienda se muestra en sus narrativas como una herramienta de primer nivel. En efecto, se está planificando la construcción de 320 viviendas que se distribuyen entre las localidades de Mosconi, Vespucio y Cornejo, pero también incluyen comunidades aborígenes y pueblos alejados ubicados en las montañas y yungas lindantes con Bolivia. El referente de la UTD lo articula de este modo con el complejo regional:

Yo pienso que la vivienda, la obra pública, va a ayudar en ese sistema [...]. Estamos hablando que no es solo la UTD. O sea que estamos hablando de quién se va beneficiar con viviendas, quién

se va a beneficiar con 320 puestos de trabajo. Y en todo lo que estoy diciendo está incluida, la gente, (en la) frontera con Bolivia; [...] son lugares de arriba de la frontera... ¿Quiénes se van a favorecer?: la comunidad indígena que nunca tuvo vivienda, ¿Quién se va a favorecer?: el barrio Milagro, el barrio Cruces, en donde hay un petrolera y en donde están tapados con lonas, con carpas. Entonces el tener mejor hábitat nos va ir cambiando y nos va a dar la posibilidad a nosotros que les otorguemos fortalecimiento... (Juan Carlos "Gipi" Fernández, UTD, Mosconi. Entrevista)

Además de una reconfiguración de la vida, estos proyectos expresan una apuesta territorial de la UTD. Las marcas de la organización reorganizan el territorio a partir de la producción autogestionada. Se recuperan espacios abandonados por YPF y el Estado, y se ocupan otros más allá de donde se encuentran las empresas petroleras que rodean Mosconi. Fuertes agentes económicos que también disputan la apropiación del territorio público a través de barreras, seguridad privada, control policíaco. Es otro modo de disputarlo, violentando la cotidianeidad de la región. En los lejanos espacios, la UTD construye escuelas y viviendas al viejo estilo de habitar los territorios de frontera.

tas para huertas, conseguidos a través de subsidios nacionales.

REFLEXIONES FINALES

La territorialidad en Mosconi se va fijando a partir de múltiples intervenciones de la UTD: en el terreno comunitario y cultural, en áreas productivas, en áreas de servicios. Pero también está la ruta como un lugar simbólico y a la vez concreto, desde dónde la organización comenzó estos procesos. Como vimos en este trabajo, esta recuperación abarca más allá de la ciudad de Mosconi; incluye pueblos aledaños, comunidades aborígenes alejadas, campos y poblados; territorios recuperados por sus propios habitantes mediante el trabajo autogestionario pero también en la disputa cotidiana con las grandes empresas petroleras y sojeras.

Los proyectos productivos pueden ser comprendidos como meras estrategias de sobrevivencia ya que muchas organizaciones de desocupados otorgan señales para pensarlas así: el objetivo final es volver a la fábrica y poner nuevamente el capitalismo industrial en funcionamiento. No es un pensamiento ajeno a la UTD; la búsqueda de “trabajo genuino” se basa en esta concepción. Después de todo, las empresas petroleras no cerraron (como las fábricas en el Gran Buenos Aires) y sus ganancias se saben extraordinarias por los precios internacionales del petróleo; trabajar para ellas soluciona

la vida (por lo menos unas pocas vidas). Pero en Mosconi, esta posibilidad coexiste en tensión con otra que, a nuestro entender, pretende ligar con mayor creatividad la práctica política cotidiana de la organización con un nuevo modo de pensar la economía. Liga, como en los viejos tiempos de pensamientos emancipadores, política y economía; intenta desde los mismos sujetos, generar una economía como “si la gente importara” (Schumacher, 1974). Y esta nueva práctica “política-económica” territorializa, apropia territorio, lo marca y desencadena procesos autonómicos.

Los principales referentes de la UTD problematizan las consecuencias del sistema de explotación petrolera en el medio ambiente y en la salud. Tienen una actitud crítica frente a los desmontes⁸ (aunque con un agudo sentido pragmático hagan uso de las maderas) y conocen perfectamente las consecuencias del modelo productivista sojero que sus “vecinos”, los grandes inversores, ponen en funcionamiento a su alrededor. Estas nuevas reflexiones les permiten encuentros con otras organizaciones

8 Greenpeace viene denunciando el proceso de desmontes de la provincia de Salta cuyo propósito último es la expansión de la frontera agrícola para aprovechar los precios internacionales de la soja.

ligadas al medio ambiente, a los mundos campesinos que sufren el modelo sojero, a las organizaciones bolivianas portadoras de cosmovisiones indígenas integradoras de la naturaleza.

Los avances en sus proyectos productivos los orientan a imaginar una serie de actividades articuladas y capaces de generar ingresos. No escatiman integrarse a mercados locales, nacionales e internacionales. Por lo menos en el nivel de los principales referentes, todos esos espacios comerciales se hacen presentes a través de los mercados del sofisticado complejo económico en gestación. Pero esos espacios, marcados por la economía de mercado, llegarán tan lejos como las iniciativas permitan⁹ en tanto el proceso productivo de ejecución cotidiana los remite a un territorio delimitado. Allí es donde se les presenta el desafío de articular las actividades económicas con la acción política. Los principales referentes descartan, por ahora, asumir funciones de gobierno municipal y la política partidaria tampoco la toman como una posibilidad. En tal sentido, la UTD es una

9 Es interesante en este punto recordar que otra organización de desocupados el MTD, La Matanza, por medio de un acuerdo con un exitoso empresario del diseño, coloca guardapolvos de trabajo en el exterior: Nueva York, Tokio, etcétera.

organización flexible que acoge peronistas, radicales, gente de partidos de izquierda y partidarios. No es por esos meandros donde intentan encontrar el sentido político de sus luchas. No obstante hay un claro sentido político que se expresa desde aquellos inicios en la ruta y que coexiste en tensión con la necesidad de resolver los problemas de reproducción inmediatos de la población. Entendemos por sentido político, la voluntad de intervenir en disrupción en lazos que generan opresión, desigualdades, miseria y depredación del medio ambiente. Y orillando estos significados, la UTD otorga un profundo sentido transformador a su presencia en estos territorios y lugares. Está construyendo, en las peores condiciones estructurales e institucionales¹⁰, un *campo de experimentación* (De Sousa Santos, 2000) donde se entrecruzan las rupturas con viejos discursos en relación con los modos de organización¹¹, con las formas de

10 Los principales referentes y muchos jóvenes y mujeres están con procesos judiciales que los limitan, por ejemplo, en la movilidad, en cualquier transacción comercial, etcétera.

11 Es interesante observar que en Mosconi solo se llevan a cabo asambleas cuando están en cortes de rutas, es decir, en el momento de la acción directa. Tampoco se decide verticalmente y allí es donde radica la nove-

producción y con las jerarquizaciones de género, étnicas y sociales. Y, a nuestro juicio, por estos senderos el *campo de experimentación* se fortifica y nos sorprende.

BIBLIOGRAFÍA

- Barbetta, P. y Lapegna, P. 2001 “Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en el norte salteño” en Giarracca, N. et al. *La protesta social en la Argentina* (Buenos Aires: Alianza).
- Chiaromonte, J. C. 2004 *Nación y Estado en Iberoamérica* (Buenos Aires: Sudamericana).
- De Certeau, M. 1979 *La invención de lo cotidiano* (México DF: Universidad Iberoamericana).
- De Sousa Santos, B. 2000 *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. Para um novo senso comum. A ciência, o direito e a política na transição paradigmática* (San Pablo: Cortez).
- De Sousa Santos, B. 2003 *La caída del angelus novus: ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política* (Bogotá: ILSA).
- Giarracca, N. et al. 2003 *Territorios y lugares* (Buenos Aires: La Colmena).
- Hardt, M. y Negri, T. 2002 *Imperio* (Buenos Aires: Paidós).
- Larra, R. 1976 *Mosconi, general del petróleo* (Buenos Aires: Timerman).
- López Echagüe, H. 2002 *La política está en otra parte. Viaje al interior de los nuevos movimientos sociales* (Buenos Aires: Norma).
- Mayo, C. A.; Andino, O. R. y García Molina, F. 1983 *La diplomacia del petróleo (1916-1930)* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- Morin, E. 2003 *El método: la humanidad de la humanidad, la identidad humana* (Madrid: Cátedra).
- Prada Alcoreza, R. 2005 “Estado periférico y sociedad interior”, versión fotostática.
- Schumacher, E. F. 1974 *Small is beautiful* (Londres: Abacus).
- Svampa, M. y Pereyra, S. 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).

dad: existen fuertes consensos generados más que en reuniones en la cotidianidad. En esos “espacios-tiempo” difíciles de registrar para los que no pertenecemos a la organización.

- Tuan, Y. F. 1997 *Space and place* (Mineápolis: University of Minnesota Press).
- Zibechi, R. 2003 *Genealogía de la revuelta* (Buenos Aires: Nordan Comunidad / Letra Libre).

OTRAS FUENTES

- Entrevistas de campo, agosto de 2004 y marzo de 2005.
- INDEC 2002 *Censo Nacional Agropecuario*.
- INDEC 2001 *Censo Nacional de Población*.

“VEJACIONES X 8”: ARTE Y PROTESTA SOCIAL EN BUENOS AIRES*

NORMA GIARRACCA (COORDINADORA)

**COLABORADORES: KARINA BIDASECA, PABLO LAPEGNA,
DANIELA MARIOTTI, CECILIA ARAMENDY, MARTÍN LÍO,
CELINA MINGO ACUÑA, ELENA MINGO ACUÑA, FLORA PARTENIO,
JULIA SOSA, ANA MARIEL WEINSTOCK**

PRÓLOGO

Durante todo el 2001, la protesta social se manifestó de muy diversos modos pero casi siempre orientó sus reclamos y demandas a lograr modificaciones en la injusta distribución de responsabilidades por la deuda económica del país. A mitad de año, los argentinos comenzamos a sufrir una nueva consigna —“déficit cero”— que atravesaría mundos sociales y cotidianos. Se la combinó, además, con una tasa cuantitativa denominada “riesgo país” y ambas se convirtieron, con cierto éxito, en herramientas destinadas al control social infundiendo miedos en la población.

El segundo cuatrimestre universitario comenzó en este clima de protesta que incluía desde asambleas de “piqueteros” en el partido bonaerense de La Matanza hasta las grandes movilizaciones por la educación pública. Todo lo que atañe a la vida fue amenazado: los presupuestos para la educación y la salud; los sueldos; las jubilaciones; los ahorros; los derechos, en fin, la reproducción social y en gran cantidad de gente, su propia sobrevivencia.

Comenzamos el Seminario de Investigación a mi cargo, en el escenario de una huelga de los docentes de la Universidad de Buenos Aires. La temática de estudio en el Seminario de Investigación¹ —la protesta social— estaba prevista

* Giarracca, N. (coord.) et al. 2001 “Vejaciones x 8: arte y protesta social en Buenos Aires” en *Informes de Coyuntura* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) N° 2, diciembre.

1 En la carrera de Sociología [de la UBA] es obligatorio cumplir con determinada cantidad de horas de prácticas de investigación. Los equipos de trabajo del Instituto Gino Germani reciben, cuatrimestre tras cuatrimestre, alumnos avanzados que se integran en los

para los mundos agrarios y rurales. Por tales razones la apertura del seminario fue pública y se convirtió en un encuentro entre profesores, alumnos de nuestra institución y dirigentes sociales del campo y del interior del país. De este modo Lucy Cornelis, Joaquina Moreno del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, Néstor del Pozo de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán, y Norma Del Pozo nos acompañaron en aquel inicio de cuatrimestre que fue el momento de mayor tensión en la protesta universitaria.

Sin embargo, dadas estas condiciones por las que atravesábamos, los estudiantes nos propusieron tratar todas las dimensiones de la protesta social: la del campo, la del interior, la de los maestros, piqueteros, docentes universitarios, etcétera. La cátedra aceptó el desafío y comenzamos a trabajar en el nivel nacional.

Si bien la protesta social bajó su intensidad a partir de los acontecimientos internacionales que se iniciaron en Nueva York, una acción

proyectos con un plan de tareas aprobado por la Carrera. Mi cátedra ofrece, por lo menos, un seminario de investigación por año y la experiencia con los estudiantes convertidos en jóvenes investigadores siempre ha sido excelente. No es la primera vez que el cuatrimestre finaliza con una publicación producto del trabajo conjunto.

colectiva llevada a cabo dentro de una institución educativa, a fines de setiembre, impactó en el espacio público por su originalidad y singularidad. Fue la protesta musical en el Conservatorio Nacional de Música López Buchardo, ubicado a unas pocas cuadras del Instituto Gino Germani.

Cuando acudí al llamado de los estudiantes del Conservatorio, el sábado 29 de setiembre, lo hice por el lugar que ocupa la música en mi vida y porque me siento familiarmente muy cercana a los músicos jóvenes. No obstante, cuando estuve allí, esperando el momento justo para que “Vejeciones” de Erik Satie comenzara a sonar ininterrumpidamente, comprendí que podía compartir la experiencia con la cátedra y con los estudiantes del seminario; que podíamos convertir esta protesta en un “estudio de caso”. Cuando se los propuse, tanto los integrantes de la cátedra como los estudiantes aceptaron con sincero entusiasmo. La misma noche del lunes siguiente (la semana de interpretación fue de sábado a sábado) nos trasladamos con grabadores y cámaras fotográficas al Conservatorio. Se trataba de registrar motivaciones, ideas, sentidos, escenarios y aquella música que se repetía una y otra vez.

“Vejeciones x 8” (nombre que adoptó la experiencia) se fue convirtiendo para todos noso-

tros, con el correr de los días, en una clave para pensar, reflexionar sobre sentidos y formatos de protesta, pero también para lograr nuevas sensaciones y vivencias otorgadas por sujetos de mundos académicos “parecidos y diferentes” (a la vez) a los propios. Muy pocas veces, en muchos años de docencia, logré compartir con un grupo tanto entusiasmo y compromiso por el trabajo del seminario cuatrimestral.

Estuvimos varias veces durante aquella semana del 29 de setiembre al 6 de octubre en el Conservatorio, escuchamos una y otra vez la misma obra por distintos pianistas que, desde sus singularidades interpretativas, proponían ritualizar y regresar a la repetición de aquella música sin compases. Entrevistamos a estudiantes, a profesores, a pianistas, al director del Conservatorio; volvimos varias veces más, finalizada la protesta, a esa magnífica casa de estilo inglés.

Docentes y estudiantes hicieron sus registros en clave sociológica pero, intuitivamente, comprendieron que la consigna “...y la música no para” refería, además, a lo que no es fácil de capturar con nuestras técnicas de análisis, y se esforzaron por expresarlo de distintos modos en este texto; acudieron, a veces, al propio Satie y, en otras ocasiones, a otros docentes (los del Conservatorio) quienes logran captar,

profundamente, los complejos sentidos de la música y del arte en general.

La “cátedra-grupo de investigación” ofreció su experiencia docente, sus saberes relacionados con el trabajo intelectual, su bibliografía, sus asesoramientos y acompañamientos en las prácticas de investigación, etcétera. El resultado contenido en esta publicación es producto del trabajo grupal pero el lector encontrará, también, un excedente que pertenece exclusivamente a estos futuros sociólogos convertidos en analistas sociales.

Con esta publicación queremos difundir esta experiencia realizada por una “cátedra docente-equipo de investigación”, durante un momento muy especial del país. Mostrar que durante un cuatrimestre “en huelga” pudimos comprometernos y participar sin dejar de trabajar; reflexionar sobre lo que nos pasaba con otros que comparten situaciones difíciles — sean estos músicos o campesinos— pero no paralizarnos. Con este trabajo, queremos reflejar una coyuntura muy especial de nuestro país pero también un modo de trabajar que rescata las mejores tradiciones de compromiso con nuestro alrededor.

Deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los músicos —estudiantes y profesores— que recibieron esta iniciativa

de trabajo de una institución vecina con entusiasmo y se mostraron dispuestos a colaborar. El maestro Santiago Santero no solo puso a nuestra disposición la información que rodea la protesta sino su profundo conocimiento acerca de la música y sus diversos sentidos. Nuestro agradecimiento también al director del Instituto Gino Germani, Lic. Pedro Krotsch por entusiasmarse con nuestro trabajo y apoyar nuestras iniciativas con relación al Conservatorio Nacional de Música. Por último y como siempre, mi agradecimiento a Miguel Teubal, quien esta vez en su condición de músico, nos acompañó a las entrevistas y nos preparó en la computadora la obra de Satie para poder anejarla a este trabajo.

ESCENARIOS: LA PROTESTA SOCIAL NACIONAL

La década de los noventa significó para la Argentina un período de profundas transformaciones, tanto económicas como políticas y sociales. Al emprender un análisis de estos cambios, el observador centra su mirada en determinadas dimensiones, en virtud del problema que se propone abordar. Es por ello que, para comenzar esta exposición, delimitaremos

brevemente el ciclo de protesta que comienza a desarrollarse durante los noventa en Argentina, para luego centrarnos en la especificidad de los conflictos ocurridos durante 2001.

Dentro de estos, nos detendremos en las demandas generadas en torno a la defensa de la educación pública para, de esta forma, lograr un marco que nos permita comprender la protesta “Vejaciones x 8”, llevada a cabo en el Conservatorio Nacional de Música López Buchardo.

Enmarcadas en un contexto de expansión del modelo neoliberal aplicado por el gobierno de Menem (1989-1999) y de consolidación de algunos espacios democráticos, las protestas sociales, en la década del noventa, se orientaron al reclamo de derechos, reclamos de carácter universal (Schuster y Pereyra, 2001). Estos derechos se ven atentados por las transformaciones económicas y las reformas aplicadas al Estado. Con las primeras medidas de los años noventa, que apuntaron a las privatizaciones de las empresas públicas y la denominada “racionalización” del Estado, los reclamos se orientaron a la defensa del mantenimiento de ingresos y derechos.

Hacia 1995, se producía una gran dispersión de protestas y de sus formatos, emparentada con una erosión de las legitimidades sindicales y la multiplicación de las identidades políticas

y sociales. Fueron apareciendo, en forma progresiva, protestas enraizadas, cada vez más, en una matriz ciudadana o de derechos.

Siguiendo una secuencia temporal de las protestas, inaugurada en 1991, podemos observar momentos de alta movilización y períodos de baja en la intensidad de la acción, es decir, de latencia (Melucci, 1994). En trabajos anteriores sostenemos que se inicia un “ciclo de protesta” (Tarrow, 1997) como fase donde se expande la conflictualidad social, donde estallan una multiplicidad de acciones, una diversidad de formatos de protestas, etcétera. Esta atmósfera habilita una rápida difusión de las acciones, de los más a los menos movilizados.

Como sostiene Tarrow, las oportunidades políticas creadas por los precursores o “madrugadores” (movilizados) incentiva la aparición de nuevas formas de acción.

A partir de 1997, se registraron nuevas movilizaciones y protestas que adquirieron mayor intensidad y regularidad. Aparecieron los piquetes en Cutral-Có, como acto disruptor y empezaron a extenderse por el norte del país (véase Barbetta y Lapegna, 2001). Asimismo, aquel fue el año de otro acontecimiento en materia de protesta social: la Carpa Blanca docente.

Las formas que tomaron las protestas en esta última década han incluido nuevos repertorios de acción colectiva: marchas de silencio; abrazos simbólicos a distintas instituciones; “cacerolazos” y apagones; lluvia de telegramas y de correos electrónicos; paros de remates; piquetes de desocupados (cortes de calles, rutas y puentes); “escraches” a militares de la dictadura; clases públicas con cortes de calles en universidades y escuelas; la instalación de la carpa blanca; el “santiagueño”, como expresión del reclamo que incluyó la quema de edificios públicos. Un análisis de esta rápida enumeración puede detenerse en diferentes aspectos, pero interesa recuperar aquí aquel que subraya la aparición de formas creativas u originales de protesta, en las cuales el componente simbólico juega un papel central, ubicando en un plano secundario la importancia otorgada a la “lógica del número” (Della Porta y Diani, 1999). Es decir, el objetivo principal de muchas de las protestas en los noventa, se orienta tanto a influir en los representantes electos como llevar a cabo algún tipo de acto que, poniendo en juego alguna expresión “novedosa”, llame la atención de los medios de comunicación.

LAS PROTESTAS DE 2001 Y LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Las protestas sociales durante el 2001, lejos de declinar, presentan la profundización de anteriores conflictos y la aparición de nuevas demandas y actores movilizados. En abril, se realizaron movilizaciones en repudio a la creación del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), y durante el transcurso del año se multiplicaron los cortes de ruta en todo el país. El piquete de La Matanza sostenido durante 17 días durante el mes de mayo; las “jornadas piqueteros” de 24, 48 y 72 horas; la realización del primer “Congreso de Organizaciones Sociales, Territoriales y de Desocupados” en el mismo lugar, y el corte de ruta de General Mosconi (Salta) en junio —con su cruenta represión que costó la vida a dos personas— situaron a esta forma de protesta y a sus protagonistas, en el centro de la escena nacional. Asimismo, los cortes de la autopista Ricchieri, las ollas populares y protestas dentro del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, generados por el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, marcaron el ritmo de un año sacudido por la crisis económica y el reclamo social.

Este marco de intensa movilización se da en el contexto de una política de ajuste por parte

del gobierno nacional, que tiene a la educación como uno de los rubros en que se focaliza la reducción presupuestaria. A comienzos del año, el ministro de Economía, Ricardo López Murphy, intentó llevar a cabo un recorte del 40% en la educación y eliminar el Fondo de Incentivo Docente (FONID), lo que promovió paros y movilizaciones de maestros y profesores primarios, secundarios y universitarios. En el ámbito universitario, fueron tomadas las principales facultades del país y en muchas de ellas se dictaron clases públicas, rechazando la reducción del presupuesto. Finalmente, se dio marcha atrás con estos recortes, pero la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía reinstalaba esta problemática: se efectuó un recorte salarial del 13% a empleados estatales y jubilados; se produjeron retrasos en el pago del FONID y se discutió acerca de su continuación en el 2002, como así también el posible arancelamiento de las universidades. Estas medidas llevaron a que los docentes bonaerenses mantuvieran un paro de casi cuatro semanas en rechazo al recorte salarial y que las universidades arrancaran el segundo trimestre en estado de alerta y movilización. Se realizaron así paros activos, y nuevamente surgieron las clases públicas, las marchas y la toma de facultades.

El reclamo por la educación puede pensarse, dentro de este marco, como una protesta de matriz cívica, en donde se apela a un reclamo de carácter universal como lo es el derecho a la educación, en donde “la defensa de la educación pública” se erige en la protección de un “derecho adquirido” que ahora es puesto en cuestión por las políticas de ajuste del Estado. Este tipo de protestas pone en juego la defensa de una institución que, desde la construcción del Estado Nacional, fue considerada como el principal medio para permitir la igualdad de oportunidades y posibilitar la formación de ciudadanos. Es por ello que la lucha por la educación pública puede verse, desde una mirada estrecha, como un reclamo sectorial pero, si ampliamos el espectro, podemos también observar que en este conflicto se pone en acto la defensa de una instancia de democratización social y de construcción de ciudadanía.

EL CASO DE ESTUDIO: “VEJACIONES X 8”

¿De qué hablamos cuando hablamos de vejaciones? Estamos haciendo referencia a una experiencia de desazón, humillación, de ultraje a la dignidad personal. Buscando en el diccionario, encontramos una constelación de palabras:

maltratar: tratar mal a uno de palabra u obra /
humillar: abatir el orgullo o altivez de uno /
vejar: molestar, perseguir, hacer que se sienta humillado /
dignidad: respeto que merece alguien, cualidad de digno /
digno: que merece algo.

Palabras que atraviesan “otros discursos” de este tiempo: un grupo de actores cerraba la “Marcha contra la Pobreza” en Plaza de Mayo con estas palabras: “Indignidad, miseria, resistencia, trabajo, compromiso, ñoquis, esclavitud, esperanza” (*Clarín*, 22-9-2001). Haciendo referencia a la situación que están padeciendo los docentes, al no cobrar el sueldo, ni el aguinaldo, sumado a los atrasos en el pago del incentivo docente, Marta Maffei (CTERA) se expresó de esta manera en un reportaje: “Hay compañeros con la luz cortada, el gas cortado. No pueden viajar ni para ir a la escuela. Es un destrato gravísimo, un ultraje” (*Página/12*, 7-11-2001).

Constelación de palabras que también se despliegan en las respuestas dadas por los entrevistados de la protesta musical del Conservatorio ante la pregunta “¿Por qué *Vejaciones*, de Erik Satie?”: “El maltrato, el abuso, las vejaciones”, “el maltrato que se le causa a una persona buscando herir su dignidad... las cosas que están pasando, ajustes... están atentando contra la dignidad de la gente”, “la cultura y la educación están siendo

vejadas”, “constante abuso que está teniendo la educación pública acá en Argentina”.

Cabe ahora preguntarse: ¿por qué elegimos la acción del Conservatorio Nacional de Música, en un año caracterizado por múltiples expresiones de protesta en todo el país? Creemos que la protesta “Vejaciones x 8” es original por su modo de utilizar el tiempo y el espacio; por la forma de convocatoria, la obra escogida, la interpretación de la misma como un ritual y la idea de repetición de la obra como base de la reiteración de un reclamo frente al “discurso único”. Es de esta manera como se pone de manifiesto que “Las formas no convencionales de la acción colectiva poseen el atractivo que trae consigo la incertidumbre de lo que se desconoce y además pueden atraer, por su originalidad o novedad, la atención de los medios o los observadores” (Giarracca y Bidaseca, 2001: 34).

Creemos también que la acción colectiva del Conservatorio puede ser enmarcada en la orientación que tomó la protesta social en la Argentina a partir de 1995, es decir, apelando a una matriz cívica que aborda reclamos de carácter universal, a través de la enunciación de derechos de ciudadanía: en este caso, la educación. En este sentido, el volante emitido por la Comisión Organizadora de “Vejaciones x 8”, expresaba:

En sintonía con toda la comunidad educativa, alza su voz diciéndole no al recorte, al arancelamiento y a la privatización de la educación pública [...] Considerando la grave situación que atraviesa la educación pública en general, y la artística en particular; producto de una deuda externa ilegalmente contraída, que con intereses monstruosos no hace más que hundirnos económicamente, sumado a una política nacional que coloca en primer lugar los intereses internacionales, redundando en el perjuicio de aquellos que alguna vez fueron considerados derechos humanos, pero que día a día están pasando a ser cada vez más el privilegio de unos pocos, como son la educación y la salud.

De la misma forma manifestaba una de las organizadoras de la protesta, insertando su reclamo dentro de un espectro más amplio:

[...] Digamos, hay mucho con lo que pelear. En este caso, dijimos hagamos esta protesta del afuera, unámonos a la lucha que surge un poco desde los piqueteros, de las universidades, porque nos parece que es un momento de unir fuerzas, de tirar todos para un mismo lado... Dijimos, podemos hablar de la interna del IUNA porque nos toca particularmente a nosotros, pero decidimos ir a los grandes temas que nos unen con los otros sectores. Por eso la convocatoria es tan grande. (Entrevista a organizadora de la protesta)

Esta protesta nos muestra la actualización de nuevos repertorios en las acciones colectivas en donde la acción se convierte en un fin “en sí”: es decir, la protesta no se constituye únicamente como un recurso estratégico del cual valerse para poder acceder a la distribución de ciertos recursos, sino que, además, el “estar ahí” enriquece a los actores a través del fortalecimiento de sus vínculos. Mediante ese encadenamiento de manos que tocan un mismo piano, la interpretación ininterrumpida de una obra musical como modalidad de lucha irrumpe y se desglosa en dos dimensiones: la ritual y la política. Estas dos dimensiones imbricadas conforman un modo particular de intervenir y actuar en la realidad, en donde resuena la idea de política como invención y no “como medio para”; como posibilidad de pensar la ruptura con el sentido común, las ideologías y los consensos establecidos (Cerdeiras, 1997).

RITO PAGANO: ETNOGRAFÍA DE UNA PROTESTA

“Concierto contra el Recorte, VEJACIONES de Erik Satie, Entren y pasen, 168 horas sin parar”.

“Educar para la significación/ educar para la expresión/ No a la privatización/ Basta de

abusos/ Educar para convivir/ “Vejaciones x 8”/ Educar para apropiarse de la historia/ “Vejaciones x 8” contra años de continuo abuso”.

“Pieza para piano intitulada Vejaciones, para la ejecución de este motivo 840 veces de continuo convendrá prepararse por anticipado y en el más absoluto silencio mediante severas inmovilidades. Al mismo tiempo las vejaciones concebidas como música perpetua que siempre recomienza consta de un tema que deberá tocarse 840 veces seguidas (Erik Satie)”

“Basta de abusos, no a la privatización de la educación pública y gratuita. No al recorte. No al arancel. Nuestra lucha no cesa. La música no para”.

“Si pretenden seguir vejándonos/ les duplicamos la apuesta/ Centro de estudiantes Conservatorio Nacional de Música. Mucha fuerza en los dedos en los párpados y en el pecho”.

CARTELES EXHIBIDOS DURANTE LA PROTESTA

En el Conservatorio Nacional se vive una realidad de carencias materiales indispensables para el desarrollo normal de la formación de quienes eligieron la música como carrera, como trabajo, como vida.

Se buscó a través de la acción colectiva la posibilidad de romper con el hermetismo de la

institución y para ello convocaron a músicos egresados del Conservatorio y a otros ajenos al ámbito académico.

La arquitectura del edificio de Córdoba 2445 de la Ciudad de Buenos Aires, denotaba un mundo particular de vida, distante a nuestro mundo cotidiano como profesores y estudiantes de la UBA. Extraña sensación paradójica que rompía con las características que definen *per se* a la protesta, siempre vinculada al disturbio, al alboroto, a la congregación de centenares de cuerpos y almas que se unen para reclamar.

En la entrada al Conservatorio distintos carteles, confeccionados artesanalmente, invitaban al público a asistir y a participar de “Veja-ciones x 8”; otros anunciaban las actividades a realizarse y otros indicaban el modo de organización del evento y los roles que debían cumplir el asistente de sala, el cronometrador y su asistente, encargados de controlar la duración de cada ejecución. Otro cartel otorgaba sentido artístico a la protesta: “No aplaudir hasta el sábado 6/10”.

Del hall de entrada, una escalera de madera conducía a los pisos superiores. En el primer piso encontramos el salón de actos, escenario de la protesta. El mismo conservaba el estilo arquitectónico Tudor del resto del edificio. A medida que nos íbamos acercando, una tenue

luz y una extraña sensación de tranquilidad invadían el ambiente cerrado y aislado. La música repetitiva, monótona, recreaba el misticismo propio del rito, sumergiéndonos en una especie de hipnosis que nos trasladaba a otro espacio-tiempo.

En el medio del salón, el piano de cola, objeto central del ritual, dominaba el espacio de la sala; una bandera nacional lo envolvía y sobre él, una antigua araña barroca de la que caían manojos de carteles con inscripciones alusivas a la protesta. Detrás del piano, un tapiz rojo con un gran pentagrama y diferentes partituras que pintaron artistas plásticos del Instituto de Arte De la Cárcova; una videofilmadora daría luego testimonio de todo el evento.

Dos televisores proyectaban películas y cortometrajes de cine mudo de Murnan: “El gabinete del Dr. Caligano” y “La última carcajada”; “Perro Andaluz” y “La edad de Oro” de Luis Buñuel, que habían sido facilitados por los organizadores de un evento realizado en el teatro San Martín unos años antes. En las paredes, grabados, retratos, frases sueltas y manuscritos de Satie reflejaban la estética del lugar.

Al piano, el intérprete, mediante la recreación de la obra, participaba de la corriente de conciencia esotérica de Satie, para sumergirnos en el flujo del “tiempo interior” (Schutz,

1974) que constituye el sentido de *Vejaciones*. El músico compartía con nosotros un espacio, una “relación de sintonía mutua” (Schutz, 1974), en la que los acordes resurgen desde el pasado para recrear en nuestras conciencias el misticismo de Satie.

Mediante el rito, los músicos iban rotando y ejecutando una misma pieza musical que recomenzaba de modo cíclico; se construía un sentir colectivo, a partir de una identidad amenazada; una comunidad de espacio-tiempo específica en el que el tiempo se tornaba circular y el lugar físico nos remitía a otro tiempo histórico. Como expresa Schutz (1974) “...toda obra de arte, una vez elaborada, existe como una entidad significativa independiente de la vida personal de su creador” (ibídem: 162). Por única vez, la obra de Satie adquiriría un nuevo sentido; exacerbaba potencialmente la capacidad de invención de los sujetos; diseminaba la protesta en los más recónditos lugares incorporando una nueva narrativa de irrupción fundadora a la multiplicación de “microacontecimientos erráticos” (Badiou, 1990), que se expresan como relatos desgarrados tratando de huir del desasosiego y buscando la restitución del lazo.

¿POR QUÉ “VEJACIONES X 8”?

TEXTURAS Y PROCESO DE “VEJACIONES X 8”

La obra propuesta por el compositor francés dura aproximadamente veintiuna horas y consiste en repetir ochocientos cuarenta veces una misma partitura de aproximadamente un minuto y medio. Por eso, multiplicar la obra por ocho significó tocar ininterrumpidamente durante una semana entera. Y cuando se afirma que se tocó ininterrumpidamente durante siete días, fue literalmente así: el piano no dejó de sonar un solo segundo en el traspaso de pianista a pianista. Una verdadera “maratón interpretativa”.

El Conservatorio Nacional funciona desde principios del siglo XX con rango de terciario. Pero desde la creación del Instituto Universitario Nacional de Artes (IUNA), por firma y decreto del ex-presidente Carlos Menem, adquirió nivel universitario. El nuevo estatus institucional trajo aparejado los problemas de la educación universitaria en Argentina. De ahí, la justificada preocupación por el arancelamiento, uno de los principales motores de este reclamo.

La organización de la protesta estuvo en manos de un grupo de alrededor de diez per-

sonas entre profesores y estudiantes. Ellos coincidieron en calificar a “Vejaciones x 8” como la primera protesta “propia” en la historia del Conservatorio.

Yo fui el primer receptor de la idea... estaba en la clase...y (el profesor) me tiró así como que, de entrecasa, estaría bueno hacer esta obra *Vejaciones*. Me dijo que se había hecho en el San Martín en el ochenta y ocho... Una experiencia que le parecía bastante interesante (para) elevarlo a una semana el período de duración. Ese lunes, me encantó la idea, y así como la recibí, al rato salí de la clase y me puse a hablar con otra gente que después pasó a ser parte de la comisión que organizamos. Y bueno, todos nos enganchamos con la idea y dijimos: “esto lo tenemos que hacer sí o sí, así seamos cinco personas y toquemos durante 24 horas por día cada uno, pero lo vamos a hacer”. Y así, de a poco, fue tomando forma la cuestión. (Entrevista a estudiante del Conservatorio)

Vejaciones, considerada una de las más extrañas composiciones de Erik Satie, fue compuesta en 1893. Según el compositor, debía ser interpretada con una previa preparación de profundo silencio y con inmóvil seriedad. A más de cien años, en una metamorfosis del tiempo y la historia, al ritmo de la imprevisibilidad fue

sacudida del polvo y el olvido para ser resignificada en “Vejaciones x 8”.

Si hubiese que sintetizar cómo explicaron los actores su propia experiencia, se podría decir: “fue simple, más de lo que pensábamos”; cuando una de las organizadoras se refirió a los participantes, comentó: “se enamoró de la idea”; “estamos muy desbordados”. No es difícil imaginar que la idea del profesor aconteció y prendió una mecha que, en lugar de encender el fuego, explotó la música: “Somos siete, bueno, cada uno tocará un día entero pero esto se hace”. Con esta convicción entonces, un puñado de estudiantes se lanzó a organizar una protesta inédita en el Conservatorio, pese a que la apuesta de la “vieja institución” fue: “se caen al cuarto día”.

En el crujido de las tablas de un aula, el destello irrumpía. Las paredes, tantas veces dibujadas como lugar de encierro en donde la vida que amanece tiritada en el olvido, esta vez no pudo con una idea que la voz y el deseo multiplicó y potenció. Los muros de la aula estallaron.

Vejaciones, creada para enfrentarse a la Academia de fines del siglo XIX, recobró su significado crítico para defender el Conservatorio de comienzos del siglo XXI. Puede resultar paradójico: ¿enfrentar y defender a la institución musical del momento? Sin

embargo no nos parecerá tan paradójico, si consideramos que la obra artística es un contexto provisto de sentido, que participa del magma social y por lo tanto, del proceso de institucionalización de sentido (Schutz, 1974). En este marco, entendemos el concepto "institución" en el medio de la tensión instituyente/instituido, donde el primer aspecto se centra en la gestación y el fluir de un sentido, y el segundo, se refiere a su cristalización y convalidación en una forma determinada, llámese ley, academia o conservatorio. Son dos caras de una misma moneda y la "institución" es la moneda.

Satie tiene una relación muy tirante con la institución que enseña música y viceversa. Los conservatorios no lo incluyen en sus materias, salvo algunas excepciones, verdaderas grietas por donde se filtró *Vejaciones*. La misma tensión observamos con relación al concepto "institución", también la encontraremos más adelante en el concepto de "poder". Poder como posibilidad "la protesta pudo ser", como ejercicio de una fuerza "adquirió poder", y como capacidad "poder emocionarse".

PODER ACONTECER

"Es preciso que la estética se oriente hacia una nueva dirección, o estamos perdidos".

ERIK SATIE

Emergió un sonido, como disonancia, la presencia de una voz se desprendió durante toda una semana. Brotó la originalidad de una protesta que al entrelazar los chirridos de un piano en el caer de cada nota y partitura que se repitió, confrontó la vejación repetitiva de un "único discurso". Monedas diferentes de una misma cara, pero diferentes en el ahí, de este "campo polifónico" cotidiano. Las voces decían:

El maltrato que se le causa a una persona buscando herir su dignidad... todas las cosas que están pasando, en definitiva, están atentando y no es un ajuste así un poquito, ya es una cosa que atenta contra la dignidad de la gente.

Es una buena manera de hacer frente a un discurso... un discurso único que circula constantemente, entonces es como un símbolo, que el estar repitiendo toda una semana el mismo discurso, como se viene repitiendo un solo discurso constantemente, en base a eso, en base a la posibilidad de... de poder llegar a instalar el debate de pensamiento único que es pagar la deuda, ajustar-

nos... el modelo económico y la educación, esa única manera de ver y la posibilidad de organizar un contra discurso.

El significado de insistir en un reclamo constante y que de alguna manera vaya en contra de la otra línea que se baja desde el gobierno. (Entrevistas a estudiantes del Conservatorio)

Además de la originalidad, “Vejaciones x 8” tuvo la marca del deseo y la sensibilidad. Su fuerza convocante residió más en su capacidad de emocionar a sus participantes que en la justicia y racionalidad de su consigna compartida y consensuada por todos: “Defensa de la educación pública, contra el ajuste”. Más aún, nadie podría enfrentarse públicamente contra tales principios.

¿Tocar y/o escuchar el piano para denunciar la actual política económica-educativa? Para algunos oídos, pudo parecer un despropósito por la proporción del poder musical con respecto al poder que se enfrenta. Sin embargo, la gente se autoconvocó y creyó en la protesta. Frente a la inercia de la inevitabilidad del déficit cero, dio su voto de confianza y con él la protesta pudo ser, adquirió poder... poder emocionarse junto a un par, protestando al mismo tiempo, defender ejerciendo los espacios para la individualidad y el espíritu frente a la mercantilización de la educación y la cul-

tura. Muestras de un campo polifónico de batallas y enfrentamientos, en donde la concepción de poder como propiedad se disuelve en la idea de poder como ejercicio, como constelaciones de fuerzas diversas que están en juego permanente. Especie de malla de red que naufraga en trazos múltiples con la posibilidad de irrumpir acontecimientos únicos o de que el tejido se tense y la trama se invierta.

En este contexto la idea de sujeto que subyace es la de un sujeto en construcción que, con relación a la perspectiva nietzscheana sobre la invención del conocimiento, renuncia al sujeto pre-dado y trascendente; aquel que Foucault formuló como un punto de origen que funda las condiciones de posibilidad para el surgimiento del conocimiento y de la verdad. Un sujeto que no está dado de una vez y para siempre sino que se constituye en el interior mismo de la historia y que a cada instante es fundado y vuelto a fundar por ella (Foucault, 1995).

En este sentido es que antes enunciábamos la idea de “campo polifónico”, de batallas por dar sentidos, de enfrentamientos, en donde los sujetos son construidos en “dispositivos”, especie de puntos terminales del poder.

Y son construidos a través de “técnicas”, saberes que se aplican a la modificación de

algo pero en medio de determinadas relaciones de fuerza, por lo que no son neutrales ya que están ligadas a tácticas de ejercicio del poder aplicadas sobre otro para producir un efecto. A su vez estas “técnicas y tácticas” trazan “estrategias”: dirección posible que toma un cierto grupo de ejercicio de poder que construye cuerpos. Pero las mismas no son subjetivas, en el sentido de que no están predeterminadas desde el comienzo, sino que se van contrayendo en el desarrollo azaroso de las prácticas.

En estas múltiples situaciones existe margen de acción para los que están al margen de la hoja. El espacio es también para las narrativas desde las sombras, para la posibilidad de otras voces, recordando palabras de Marcos desde Chiapas, “no las que vienen de arriba sino las que trae el viento de abajo”. Posibilidad de potenciarse o devaluarse, pero posibilidad al fin.

Agua de azar niegan el determinismo. Sorbos de contingencia priman. En este mar de historia, las olas, cual acontecimiento pueden irrumpir e ir más allá de lo pensado desafiando cápsulas de piedra que duermen como evidencias dadas y definitivas.

LAS VENAS DE LA PROTESTA

Entendemos a la protesta “como una forma específica de acción colectiva” que “aparece como una irrupción conflictiva” en el espacio público, lugar polifónico en donde se entrecruzan las disputas hegemónicas y contrahegemónicas (Giarracca y Bidaseca, 2001), imprimiendo su visibilidad en el correr de los discursos y la acción que la entreteje, aunque también fluye y se entrelaza con los períodos de latencia.

Este abordaje nos sumerge en una oscilación entre la estructura de oportunidades y la acción. Es decir, nos introduce en la posibilidad de jugar en la mitad del terreno en la que se encuentran los sujetos y su capacidad de atribuir sentidos a las situaciones antes que a nuestras ansias conjurables y tabuladoras, que marcan el ritmo de los “a priori” o de teorías que, orientadas por las claves de la acción racional, señalan los aspectos instrumentales, estratégicos y racionales de la acción, dejando en la oscuridad los aspectos identitarios.

Nos centramos, entonces, en un sujeto con “capacidad de alterar sus destinos”, cuya acción no es escindible en las dicotomías: instrumental/expresiva, racional/irracional. Aprender en este sentido a trazar bisagras, para adentrarnos al campo de lo social y captar la

interioridad de las situaciones (Giarracca y Bidaseca, 2001).

En este sentido, para abordar el suceso de la Protesta Musical, tomaremos en nuestra construcción la diversidad de gamas que se desprenden de los diferentes enfoques acerca de la protesta. Es así que hacemos, o mejor dicho, las situaciones reales nos invitan a jugar con múltiples herramientas conceptuales en la aventura de la aprehensión.

Las teorías de la acción racional —cuya lógica implícita predominante es el enfoque utilitarista de la acción, es decir, el rastreo de la maximización del auto interés como motivación de la acción y el cálculo racional de las estrategias posibles como método de decisión— entran en juego subsumiendo la acción en una relación costo-beneficio. Este enfoque, si bien nos puede brindar elementos para explorar redes organizativas y la gestión de la acción, deja a la sombra territorios que tienen que ver con relaciones identitarias que nuclea a las teorías de la subjetividad e identidad colectivas y de los nuevos movimientos sociales que tuercen las linternas al campo de la “activación de la voz” como un beneficio, fin y medio simultáneamente.

La identidad colectiva constituye en sí un “incentivo selectivo para la acción”, de este

modo el abanico se abre y el análisis se corre del seguimiento unidireccional de cálculo y estrategia de la acción y nos permite incorporar la existencia de elementos subjetivos de la acción y entrar a trabajar con lo imprevisible o por lo menos con motivos de la acción que merecen no cerrarnos en extremos.

Creemos pertinente, entonces, tomar y descartar, recortar en la gama de los grises, en la gama de lo real.

El formato de la protesta musical fue original, difícil de repetir, único. Cuando trabajamos el concepto de “repertorios de acción colectiva” lo hicimos desde la idea que configura “...el conjunto de medios de los que dispone un grupo particular para realizar reclamos, el cual no se explica solamente en términos instrumentales, como el medio más adecuado para alcanzar el fin deseado en una determinada circunstancia sino al propio tiempo en términos de aprendizaje. La vigencia de un repertorio implicaría: rutinas cotidianas y redes de organización de la población, experiencia acumulada de acciones colectivas, una memoria y un saber, estándares predominantes de derecho y justicia y patrones de expresión” (Farinetti, 1998).

Si bien en la acción los actores cuentan con “repertorios modulares” o convenciona-

les, adquiridos en los procesos de aprendizaje, (marchas, huelgas, o petitorios) existen posibilidades de variación u acontecimientos como “Vejaciones x 8” que configuran repertorios no convencionales, marcados por el gesto de la originalidad y la incertidumbre de lo que se desconoce. Desde sus propias identidades los músicos nos hablaron, nos expresaron con un repertorio casi exclusivo. Repertorio irrepetible, en algún sentido, aun cuando, unas semanas después, Miguel Ángel Estrella desarrolló la continuidad del acto en su Tucumán natal.

¿POR QUÉ VEJACIONES DE ERIK SATIE?

En este repertorio novedoso se apela a la utilización de un símbolo: *Vejaciones*, que en un ahora resignificado se vincula con la construcción de los sentidos de la acción y así alimenta y es parte de estos nuevos marcos de la acción colectiva.

Creemos que en la particularidad de la obra —en cuanto a su estructura y en la traza de ruptura que marcó su autor, Erik Satie— están parte de las claves de su rescate. Parte entrelazada a otras presentes que iremos deshilando.

Con relación a la ruptura y estructura de la obra y su autor, podemos decir que *Vejaciones*, tal como nos explicaba uno de los docentes del

Conservatorio: “es una obra que pone en cuestión la idea misma de obra”. Irrumpe, se sale de los parámetros establecidos y produce un corte: “crea otras reglas, es un mundo propio y que no necesariamente pasa, esto que los europeos quieren, que sea universal”. Las fisuras dejan ver sus grietas a contra luz del “discurso musical” consensuado del momento. Satie, excéntrico —“en el sentido literal de la palabra... corrido del centro, de algo que constituía en su momento una historia”, una “verdad” musical— en la manera de pensar y en las armonías y melodías que usaba, de estilo anticonvencional y por veces irónico, representó una de las rupturas más significativas con el Romanticismo Francés del siglo XIX. “No hay manera de analizar esas obras desde el punto de la construcción romántica... Las herramientas analíticas que dan las materias Armonía y Contrapunto y Morfología, se caen con estas músicas”. La metamorfosis de la morfología de “la verdad musical” vive en un permanente juego de roces y disputas. Como todas “las verdades”, se aleja de ser un lugar tranquilo. Las disputas hegemónicas y contrahegemónicas no han de quedarse dormidas, el agua de la mar polifónica no estaba ni está serena. Después de todo, si bien “la música se estudia desde ciertas prácticas comunes... —en definitiva la armonía es

una práctica común, un consenso, un ritmo” (entrevista a docente del Conservatorio)— los conjuros o “tipificaciones” no son de una vez y para siempre.

Satie, entonces, en las voces de su rescate, fue un “antiacadémico, anticonservatorio”, un “revolucionario, sobre todo en las ideas [...] Quizás no fue el mejor músico de la historia, pero tuvo ideas que realmente revolucionaron toda la música, de hecho, esta obra [...] cambió la idea de lo que es una obra musical. Porque se tenía el concepto, como que una obra es una melodía que tiene cierto desarrollo y llega así como a un punto de tensión [...] En cambio acá hay una cosa que empieza, sigue, no hay direccionalidad” (entrevista a estudiante del Conservatorio). “Es decir no es una obra que se desarrolle, ni es una obra que nos cuente nada... ni que nos lleve hacia ningún lado. Es una especie de friso eterno. En ese sentido una obra antirromántica por excelencia” (entrevista a docente del Conservatorio).

Creemos, en el camino de hallar las claves de su rescate, que *Vejaciones* es una suerte de símbolo dentro del círculo de manos desde donde se desprenden los acordes; que fisuró la voz única de los parámetros establecidos y que hoy, en sintonía con ese pasado, los músicos la retoman para poner en cuestión una voz única

que prevalece a costa del ahogo y la vejación de otras. Símbolo en el que a la vez reposa un nombre inevitablemente actualizado en los tiempos que corren, configurando el trazo de otro puente con el pasado, ya que la obra también resuena hoy desde su propia etiqueta.

Hilando para atrás nos preguntamos, en la intención de seguir encontrando cruces: ¿qué pensaba Satie al bautizar *Vejaciones* a su obra? Y los hallazgos emergieron. Por algo *Vejaciones* se desperdigaba en cada rincón del Conservatorio y latía cada vez más profundo en cada peldaño que nos acercaba a ella.

Esa es la pregunta, nadie la sabe contestar. Podemos suponer muchas cosas... que la palabra vejaciones acompaña al tipo de escritura de la partitura, una escritura adrede imposible. Es decir, donde una línea melódica que podría estar escrita de una manera sencilla, está escrita de la manera más compleja que vos te puedas imaginar. Tenés un acorde en SI mayor que está escrito como SOL Bemol, DO Bemol, RE Sostenido... cuando vos leés esto, con tu formación clásica, el cerebro te empieza a funcionar mal. Tu formación no sirve para leer eso. Es decir, yo encuentro un fenómeno interesante en la escritura de la partitura en el sentido de escribir perversamente. Una obra que prácticamente no se puede leer. Tiene algunas notas, que es una locura, él

evidentemente estaba buscando algo y creo que el título debió tener que ver... (Entrevista a docente del Conservatorio).

Con relación a la intención de los sentidos de la acción que se dibujaban en la protesta, creemos que estudiantes y docentes eligieron una obra perversa en correlato a una situación perversa: se eleva el conservatorio al rango universitario pero faltan marcadores en las aulas; se crean los órganos representativos de la institución pero se eligen a dedo; les donaron treinta y seis pianos nuevos de última generación pero se están arruinando porque no hay quien los afine.

El IUNA se encuentra en un período de “normalización” debido a que la justicia aún no se ha pronunciado sobre una asamblea irregular que eligió a Raúl Moneta como rector. En lugar de los mecanismos democráticos previstos como los concursos docentes, indispensables para elegir al Consejo Superior y llamar a una Asamblea Universitaria, una resolución del gobierno menemista habilitó por única vez a los Consejos Asesores a elegir al Decano. Así, Moneta accedió al Rectorado, en medio de una asamblea donde se les pegó a diputados y no se permitió el ingreso a estudiantes. Durante todo el año pasado y el actual, docentes y estudiantes estuvieron movilizadas por este tema.

Exigieron al Ministerio de Educación que actuara por vía administrativa derogando la resolución vigente, para que las dependencias del IUNA fueran preservadas por los alumnos, como actualmente sucede con las escuelas Nacional de Arte Dramático y Prilidiano Pueyrredón. Durante una semana, se declaró un estado de asamblea permanente sin suspender las clases, que fueron utilizadas para discutir estos problemas.

Todo esto desembocó en una asamblea y una semana después, surgió “Vejaciones x 8”. “Si cae la Resolución 851 (resolución que designó a Moneta en su cargo), cae todo: nuestras autoridades también” (entrevista a estudiante organizadora).

Como decíamos antes, un nombre se actualiza. Indagando en las entrevistas se dilucidaba las posibles razones de Satie en el bautizo de su parto: “Él en su momento rompió y se opuso a todo seguimiento” a la vez que “esta obra se la dedicó a la crítica, a darles con un caño. Es como una vejación someter a los críticos a escuchar 840 veces esta cosa que se repite, que se repite y que se repite... es más, la escritura al final está llena de... es incomodísima de leer, creo que con la intención de molestar a (quien tiene) que estudiar”. “Bueno, que una persona sola toque veinte horas ya es en sí mismo... te

pone en un límite” (entrevistas a estudiante y docente).

Podemos entrever que *Vejeciones* (y luego “Vejeciones x 8”) como sinónimo de maltrato, abuso, ofensa a la dignidad, tiene un inevitable y directo correlato en la realidad que vivimos de ajuste, privatización y “perpetua” deuda externa.

El pasado, como una raíz, se resignifica en la sed de un presente, que toma a una obra y a un autor —los cuales, en virtud de su ruptura, se los rescata en la necesidad de confrontar un repetitivo discurso hegemónico— en la necesidad de un corte, aunque sea un tajo al telar de lo inamovible y único. Por otro lado, un nombre (por diferentes motivos: los del autor en su época y los de los participantes de la protesta hoy) aceita una bisagra en el tiempo, cuyas figuras como los mosaicos de los caleidoscopios, se interpretan y ven según los ojos de la época. Ayer Satie y su búsqueda. Hoy, vejación que vivimos a diario.

Y si hablamos de necesidad de un corte y el rescate de un antiacadémico, el corte filtró también las paredes mismas del conservatorio. Porque si “...el Conservatorio es muy conservador... y no acepta todo aquello que funcione por corte...” sino que solo “...acepta aquello que, aunque complejo, funcione como una con-

tinuidad evolutiva...”, se ahogó durante una semana en lo sonoro de una disonancia que, alejada de la armonía, es una especie de veneno para sus tripas. Disonancia que proviene de los cauces de su compositor, de mirada muy crítica con respecto a los espacios académicos (entrevista a docente).

Vejeciones produjo, entonces, un quiebre en el sentido de ser una puerta articuladora y de entrada (por lo menos momentáneamente) de la vida y muerte musical, que permanece a las orillas de sus “miopes” muros “...ya que el conservatorio no tiene una relación potente con la producción musical de Buenos Aires y del país, siendo que es nacional” (entrevista a docente). Hecho que se transfiguró durante el letargo de toda esa semana: “Se estableció un vínculo profundo con una serie de artistas que nunca habían entrado al conservatorio o no están... Adriana de los Santos, el ‘Chango’ Spasiuk, Gerardo Gandini, Pía Sebastiani. Nadie antes había invitado a Gandini hasta que pasó esto. El conservatorio es muy miope. No mira a los artistas que hay, y en esta protesta los miramos, los invitamos y vinieron” (entrevista a docente).

Es evidente que el trabajo subterráneo, latente desde hace 10 o 12 años por parte de algunos docentes en el empeño de producir

una renovación de conceptos recogió los frutos que se potenciaron en el estallido de la imprevisibilidad.

Muchos de los autores del siglo XX no son incorporados en la currícula del Conservatorio, “...de hecho las cátedras de instrumentos no incluyen absolutamente nada a posterior de la década del cuarenta. Nada. Nada de Ligeti, nada de John Cage, de Luciano Berio. Absolutamente nada, no existe” (entrevista a docente). Quizás la mecha que explotó la música sacuda la armonía añeja con acordes en contramarcha, y las hojas de la puerta flameen al compás de la diversidad de ritmos.

Si antes nos preguntábamos el por qué *Vejaciones* de Erik Satie y fuimos encontrando las claves en la particularidad de la obra en cuanto su estructura y ruptura, no perdimos de vista las bisagras que sostuvieron su rescate, bisagras de la mano de un pasado que es un símbolo muy fuerte al igual que las manos con necesidades desde el presente.

Estas manos, en medio de experiencias acumuladas, memorias y sentidos de “la justicia”, rutinas y ansias de nuevas formas de expresión, fueron aprendiendo y tallando este novedoso repertorio de acción: “Vejaciones x 8”, al compás del rito. Y esto, creemos que es otra clave de rescate de Satie y su obra, ligada a

algo que late tenuemente hoy, que empieza a despuntarse y asomarse dispersamente: la activación de la voz por fuera de repertorios convencionales escapando a una lógica o juego de la representación-gestión que produce inmovilidades y a la reducción de la política como simple instrumental o medio. El entretejido conceptual que aborda la acción solo desde el enfoque de las oportunidades políticas y desde el juego de las demandas al Estado, harían agua en esta protesta, ya que en “Vejaciones x 8” hay búsqueda e intención no solo circunscripta al canal de una demanda a un Estado que, por otra parte, cada día afina más su voz neoliberal. En este sentido, se rescata también de *Vejaciones*, la circularidad de su tiempo, su duración: además de arte y obviamente protesta, *Vejaciones* es rito.

Es una obra que dura en la versión que él pide (Satie) veintipico de horas, es evidente que está planteado más, sobre todo a partir de la repetición, más como un rito que es lo que yo sostuve todo el tiempo en lo que nosotros hicimos, mucho más como un rito que como una obra con desarrollo... Satie mismo propone que esto debe ser tocado 840 veces... pero para eso el intérprete debe practicar severas inmovilidades. (Entrevista a docente).

En esa etapa de su vida, Satie estaba pasando por una época así como muy mística... en cierta forma la obra habla, como una especie de búsqueda espiritual, una cuestión de algo que se repita 840 veces funciona como una especie de mantra, o sea es como una especie de ritual la obra, y en cierta forma nosotros lo tomamos como una especie de ritual de protesta, no en sentido religioso pero si como una cosa que exige cierto grado de compromiso de la persona que está participando y bueno por otro lado, también tiene que ver con una búsqueda profunda a la que apuntamos nosotros, una búsqueda de mayor integración, que es lo que nos permite también esto"... "Que la obra sea reiterativa nos da la posibilidad por un lado de extender el tiempo que quisiéramos y una semana nos pareció mucho más contundente que 21 horas y nos daba la posibilidad de sumar a muchísima gente. (Entrevistas a estudiantes)

ARTE Y PROTESTA JUNTOS: UN DESCONCIERTO

Si algo no quiso "Vejeciones x 8", es ser un concierto.

...Tampoco la idea era que sea un auditorio, no. Es una protesta y es un hecho artístico al mismo tiempo... no tiene que dejar de ser ni una cosa ni la otra, si no se puede transformar en un concier-

to. Y por eso cosas pegadas en las paredes, pasar películas, como que la gente tenga otros intereses también [...] Si quiere circular que circule, si se quieren venir con un colchón y tirarse a dormir... nadie le va a decir nada. O sea, no es que sea un auditorio esto, sino que es un lugar donde está sonando música como forma de protesta. También se están organizando conferencias y debates con sociólogos, filósofos y demás. Generar espacio para el debate también nos pareció que era importante ya que es una protesta, tiene que haber un lugar donde se pueda hacer una especie de debate. (Entrevista a estudiante)

Además de la circularidad del tiempo de la obra, existieron indicios de circularidad en el espacio. Aspectos que sumados a la puesta en escena, plantearon una ruptura con la idea de obra de arte como espectáculo.

...No hay un horario del todo fijo, pero, más o menos entre las doce de la noche y dos de la mañana, se cierra la puerta hasta la mañana siguiente a las ocho, pero bueno el que quiere toca timbre y le abrimos la puerta. La idea es que esto, pueda ingresar gente durante todo el día. (Entrevista a estudiante)

A diferencia del espectáculo, constituido por la distancia artista/espectador, "...el ritual es con-

juntivo, pues instituye una unión (podríamos decir aquí que una comunión) o, en todo caso, una relación orgánica entre dos cuerpos (que se confunden en el límite, uno con el personaje de oficiante, y el otro con el de la colectividad de los fieles)...” (Levi-Strauss, 1964).

Jesús González Requena (1995) distingue distintos modelos² del espectáculo. En su topo-

2 El modelo carnavalesco, caracterizado por la escena abierta y móvil, donde el rol de espectador que mira y cuerpo que se exhibe son intercambiables y el deseo circula gratuito, lo que hace imposible la consolidación del cuerpo fetiche. La murga, la feria, el festival de rock y ciertos *meetings* políticos son derivaciones empobrecidas del modelo carnavalesco. En el modelo circense, la escena está completamente clausurada pero en disposición circular o elíptica (lo que todavía le permitía al espectador cierta arbitrariedad para ocupar el espacio). Los roles espectador/artista ya no son reversibles. Hipódromo, corridas de toros, olimpiadas, otras pruebas deportivas como carreras de automóviles son algunos ejemplos. Con el modelo de la escena a la italiana, emerge un sistema topológico basado en la perspectiva. Con ella se consagra el sujeto trascendental: aquel que desde un lugar privilegiado, mira un universo razonablemente ordenado o, más exactamente, ordenado en función de su propia razón. La danza, la ópera, la misa y, obviamente, el teatro se inscriben dentro de este tipo de modelo. Por último, el modelo de la escena fantasma a los nuevos espectáculos cinematográfico y electrónico (González Requena, 1995).

logía, el concierto se inscribe dentro de la escena a la italiana donde los roles de espectador y artista son fijos e irreversibles, el conjunto escenográfico (el juego escénico de los actores y los decorados) se dispone en términos perspectivistas, ordenándose en función de un centro óptico exterior, definido por el lugar ocupado por el espectador. Se impone de manera neta el divorcio entre el espectáculo y la calle, y la economía del deseo se encauza en términos de economía mercantil: pagar la entrada.

Yo creo que lo que asustaba era la protesta y el evento que se sale de eje y que no es un concierto. Conciertos acá se hacen muchos, se hacen todo el tiempo, pero algo así no se hizo nunca... Conciertos se hacen muchos pero eso no implica que estén presentes algunas obras que debieran estar. Y eventos que se salen de la forma concierto, directamente no. Y esto yo creo que asustó. (Entrevista a docente).

En “Vejaciones x 8” encontramos una escena semiabierta (aunque dentro del Conservatorio), determinada por la circularidad de las personas y en algunos casos por la reversibilidad de los roles artista/espectador (ya que muchos pianistas que ejecutaron la obra luego asumieron el tópico de “espectadores” al escuchar a los demás).

Además, se trató de un evento gratuito y por lo tanto, fuera de la lógica de la mercantilización del arte. La idea de apertura también se puede rastrear en el recital final, cuya convocatoria en la calle reunió distintos géneros: rock, folklore, clásico, instrumental, etcétera.

Desde el inicio y durante todo el desarrollo de la protesta se mantuvo el principio de igualdad ante el reclamo: "...cuando hicimos la gacetilla de prensa y demás, no se aclaró exacto el horario en que tocaba determinada persona, creo por una cuestión de respeto hacia los otros, una persona puede tener mucho más nombre que otra pero estamos todos en la misma. Se aclaró que va a estar qué sé yo, Gerardo Gandini, Pedro Aznar... no sé, un montón de personas, pero no el horario" (entrevista a estudiante).

Este "ritual de protesta" entonces, tomó e indagó en un tiempo circular, con miras a potenciar y construir una integración e identidad en donde participar, involucrarse y comprometerse. Fueron brújulas que también signaron la protesta.

Yo creo que la repercusión más importante, la que más esperamos, no es el hecho de una respuesta a nivel de políticos sino más que nada la respuesta a nivel de la gente [...] Como de eso

que genera la conciencia de que se pueden hacer cosas importantes y que para lograrlas lo que hay que tratar, eso de tener una idea clara y defenderla esa idea. Y que no necesariamente tenga que ser una idea tan puntual, tiene que ser algo con lo que se sienta identificado simplemente. (Entrevista a estudiante)

Las brújulas entonces, vibraron durante los siete días y siete noches en las que se fue entretejiendo una red de músicos, antes inexistente. Cadena de teléfonos, e-mails y "búsqueda profunda". Búsqueda que ligada al desafío de lo novedoso y la integración, constituyó en sí "un incentivo selectivo para la acción". El placer de activar la voz y su resonancia crítica como un "beneficio, fin y medio" a la vez. Caja de resonancia, cuyas cuerdas sostenidas, conjugaron y se arriesgaron a un proceso simultáneo de sentido e identidad alternativo e incierto, en el empaste de una "acción instrumental y expresiva". En este sentido tomamos la siguiente interpretación de Revilla Blanco: "Cuando los círculos de reconocimiento existentes no dotan de sentido a mi acción, y cuando la pérdida de referentes para la constitución de identidades se generaliza, una de las opciones posibles es la producción alternativa de sentido; la (re) constitución de una identidad colectiva que

dote de certidumbre a la acción individual y colectiva... de este proceso de identificación alternativo que produce sentido para la acción individual y colectiva... se deriva que no sea pertinente la separación entre la acción instrumental (orientada hacia el logro de recursos que permitan defender los intereses) y acción expresiva (orientada por el proceso de identificación)” (Revilla Blanco, 1994: 200). Seguido a esta cita, rescatamos las palabras de uno de los participantes de “Vejaciones x 8”:

Hay algo además de la forma de protesta contra determinada cosa, contra un sistema, contra lo que sea, hay algo que me parece muy mágico: de que un piano esté una semana ininterrumpidamente sonando. O sea, yo tuve el privilegio de venir el último día, es como que agarrás un piano cargadito, o sea, creo que no es subjetivo, creo que eso existe... Bueno, hay algo mágico, hay algo como personal, qué se yo, está bueno sentirse un eslabón en una cadena que no se corta hace una semana... Me parece increíble que haya toda una suma de pianistas participando, y como que cada uno se pasa la posta. No sé, es algo lindo, fuerte... este clima de unión, de unión por algo. (Entrevista a un pianista)

Los artesanos de este repertorio, entonces, con una “economía moral” propia, capaz de

definir lo “injusto” y activar así las reivindicaciones contra el recorte, la privatización, el arancelamiento y el ajuste nacional, rozaron también la intensidad de la participación emocional al compás de la vejación vivida, ya interpretada. “Unión, unión por algo” y “yo les puedo asegurar que la sensación cuando estaba en casa por ejemplo a las 3 de la mañana, saber que eso está sonando. Levantarse a las 9 y saber que eso está sonando. Venir acá, y sigue sonando. Te vas a tu casa y sigue sonando. El final fue demoledor, de una emotividad increíble” (entrevista a estudiante y docente).

Por otro lado, un camino donde la protesta no debe desdibujar su identidad como artistas ni la de la obra de arte. A la vez que la música no debía sonar a concierto, ensombreciendo las voces de la protesta:

Me puse muy estricto, porque claro, armada la cosa después quería tocar todo el mundo, incluso la gente que no era pianista. Y eso fue duro, pero no, absolutamente no. Es decir, la obra es la obra... creo que donde está el mayor logro es en que la protesta fuera un evento artístico. (Entrevista a docente)

Acá la novedad es por un lado, producir un hecho artístico, porque nos interesa muchísimo la calidad interpretativa y eso es darle nivel al reclamo.

Pero por otro lado es un reclamo y eso no hay que perderlo de vista.

Utilizando nuestro medio de expresión como músicos, la protesta... no es que estamos reclamando algo particular del conservatorio, sino que es nuestra forma de plegarnos a lo que está pasando, en todo el país. (Entrevistas a estudiantes)

El repertorio, entonces, quedó oscilando entre el arte y la protesta. Simultaneidad que expresó un “basta de bombos” o “los paros no van más”. Y una apuesta en donde nuevos artesanos se concatenaron a la exploración de nuevos sentidos en ese espacio de búsqueda. Un “hacer lo que sabemos” y “hacer lo que somos” trascendió el sentido contestatario. “Toco *vejaciones* y te vejo un poco”, me sumerjo en un pentagrama circular, con sabor a rito, que se carga de una cadena de manos y a la vez protesto, grito con la agudeza de una vejación sonora.

Lo que puede decirse entonces, también presente en “*Vejaciones x 8*”, es una irrenunciable presentación, el ahí, el movimiento desabotado, desmadejando una acción e identidad simultáneamente. Porque ese hacerse voz de protesta, en la carne de un piano ininterrumpido, en el camino del rito de la búsqueda, apostó a potenciarse novedosamente.

Algo late, en la irrupción de esta protesta, y algo de lo transitado y conocido incomoda y no convoca. Quizás *Vejaciones* como repertorio que configura nuevas formas de resistencia, bordeó el camino del desafío, con el riesgo que eso implica, de buscar y no encontrar, de la incertidumbre y su vértigo, que la tan densa disonancia de los viejos repertorios despierta.

UN FINAL A TODA CALLE... DEL SILENCIO A LOS APLAUSOS

El final llegó el sábado 6 de octubre y, por fin, se aplaudió. La última nota fue esperada por una gran cantidad de gente que colmó la sala del Conservatorio. Los aplausos se extendieron durante casi diez minutos. Después de la actuación del Coro Nacional de Jóvenes, la música se trasladó a la calle. Desde temprano los sonidistas y técnicos trabajaron en la instalación del escenario sobre la calle Córdoba —cortada solo parcialmente—, mientras los estudiantes de la Escuela de Arte Ernesto de la Cárcova, pintaban un mural en la fachada del Conservatorio en el que quedaron latiendo estas palabras: “Mientras toda la ciudad dormía, como un trabajo desde la profundidad, la secuencia

sonora siguió su transcurso vivo. Creada para la continuidad, sostenida por personas en busca de la dignidad y elevando desde la música la protesta contra las estructuras del abuso, la indiferencia y el desamor”.

Los artistas fueron sumándose, y entre acorde y acorde, los organizadores de la protesta leyeron adhesiones, los nombres de los pianistas que habían participado y consignas tales como: “No al recorte, no al arancel universitario”, “la música no para”. Los músicos que tocaron traían aires del folclore, tango y jazz: Ernesto Jodos, “Chango” Spasiuk, Liliana Herrero, Marcela Palladores, Lidia Borda, Martín Pavlovsky y Rodolfo Mederos.

Algunos de ellos, arriba del escenario, cambiaron el lenguaje de la música por el de la palabra y expresaron: “El problema de este país es la ignorancia. Ignorar lo que le sucede al otro; ignorar lo que sucede cotidianamente. Ojalá que no perdamos esa fuerza que tienen ustedes, esa conciencia, ese ejemplo. Me parece que hoy en día son más ejemplo los hijos que los padres. No lo pierdan. Pero trabajen todos los días, cuídenlo. Así, que me dieron ganas de compartir esto... de hablar con ustedes” (Chango Spasiuk). Liliana Herrero, también se valió de las palabras para decir: “Me pareció escuchar, cuando tocaban maravillosamente,

Jodos primero y después el Changuito Spasiuk, que las bocinas estaban en RE”³. Más adelante, a raíz de los ruidos provocados en forma intencionada por los automovilistas que pasaban, la artista expresó: “Las bocinas me están enloqueciendo, no escucho la guitarra, pero porque están desafinados ellos”.

La protesta, paradoja de un espacio donde acontece, se nos presentó, en apariencias, sin fisuras; resistencia que fue adquiriendo su carácter vejatorio a lo largo de la semana y que, sin embargo, mostró las grietas donde fue posible vislumbrar nuevas formas de protesta del espíritu.

La música presenta todas las características de un verdadero simbolismo, salvo una: la existencia de una connotación asignada... Es un idioma limitado, como un lenguaje artificial [...] En sus expresiones más elevadas, la música aunque es evidentemente una forma simbólica, constituye un símbolo incompleto. La articulación es su

3 Fue un sábado cerca de las 10 de la noche, pero la policía no permitió cortar Córdoba sino solo dos carriles y dejar habilitado un tercero para el tránsito. Mientras esta negociación se llevaba a cabo, varios automóviles tocaron bocinas en señal de protesta por la espera; situación que molestaba mucho a los músicos y en ese contexto, Liliana Herrero aludió a las bocinas en “re”.

vida, pero no la aserción; la expresividad pero no la expresión. (Larger, citado por Schutz, 1974: 162, énfasis propio)

Símbolo incompleto, estructura fallada, la música irrumpe en el escenario nacional de la protesta argentina de estos tiempos para incorporar el nuevo sentido de la política fusionada al arte como horizonte de creación estética y radical invención histórica (Badiou, 1990).

ANEXO N° 1

NOMBRES DE LOS PIANISTAS QUE PARTICIPARON DE “VEJACIONES X 8”, POR ORDEN DE APARICIÓN

Andrés Orlando - Gabriela Bernasconi - Andrea Vallarini - Mónica Vallarini - Daniel Godfrid - Gastón Rocatti - Hernán Ballesteros - Daniel Montalto - Yamila Fernández - Elba Lanata - Santiago Santero - Adriana de los Santos - Giselle de Luque - Fabiana Galante - Guillermo Cárdenas - Santiago Cano - Beatriz Tabares - Raquel Losoviz - Néstor Zulueta - Jorge Bergaglio - Carmen Baliero - Marcelo Katz - Adrián Paenza - Diana Schneider - Jorge Ruiz Passaro - Pablo Polidoro - Susana Kasakoff - Silvia Ziblat - Haydée Schwartz - Silas Bassa - Victoria

Lamberti - Bruno Delucchi - María Laura Novoa - Camila Juárez - Juan Belvis - Damián Tepman - Ramiro Luengo - Claudio Pascua - Natalia Pérez - Gabriela Navarro Landaverria - Susana Ravina - Ernesto Cantero - Diego Schissi - Paula Ruggieri - Juliana L. Fernández - María Julia Migliarini - Susana Spadini - Gerardo Gandini - Ezequiel Sarubbi - Patricia Martínez - Martín Pavlovsky - Alfredo Corral - Luis Arias - Rosa Wainer - Rosa Tcach - Verónica Santángelo - Pablo Woizinski - Luciana Aló - Laura Pironio - Javier Velárdez - Ezequiel Birman - Norma Bavio - Aldo Antognazzi - Alejandro Labastía - Graciela Bonnet - Guillermo Pozzatti - Elena López Amaya - Manuel Massone - Agustina Herrera - Benjamín Sebban - Mercedes Taltabull - Amorina Mesquida - Cecilia Gros - Adrián Iaies - Silvina Zicolillo - Olga Galperín - Mónica Bacchetto - Hernán Schwartzman - Ivana Spector - Fernando Ilusic - Margarita Fernández - Pía Sebastiani - Alejandro Cervera - Hernán Matorra - Julieta Colángelo - Cecilia López - Diego Verolli - Lucía Besfamille - Ramiro Pettina - Maximiliano Ciaffi - Gabriel Aguilera - Laura Pellegrini - Marcelo Conte - Santiago Torricelli - Luciana Layoia - Gabriel Paiuk - Alicia Campastro - Mariano Palavecino - Soon He Jung - Fernando Britos - Lucía Losavio - Damián Montiel - Mercedes Pomilio - Popi

Kleinman - Cecilia Fracchia - Aníbal Glüzmann
 - Ana Foutel - Perla Becker - Ofelia del Amo
 - Francisco Cervilla - Eduardo Checchi -
 Eduardo Carvalho - Gabriel Luna - Gastón
 D'Amico - Agustín Pozzo - Oscar Albanese -
 Alejandro Sánchez - Adrián Fernández - Julio
 C. García Cánepa - Juan Pietranera - Rodrigo
 Núñez - Romina Thesz - Leonardo Stefani
 - Mariano Losi - Ursula Steingart - Soledad
 Crespo - Pablo Zartman - Andrea Cruz - Jean
 Pierre Luque - Guido Rocaglia - Matecha
 Rezzano - Miguel Teubal - Elena Larionow -
 Carolina Cho - Celeste Molina - Lucía Maranca
 - Susana Espinosa - Fernanda Morello - Edith
 Bernárdez - Liliana Sáinz - Hugo Caligaris -
 Pablo Kohan - Alan Kwiek - Pedro Aznar - María
 Inés Velázquez - Natalia González - Emiliano
 Greizerstein - Estanislao Centanin - Juan Pablo
 Santocono - Juan Manuel Borjas - Hernán Fassa
 - Marcelo Cabrol - Estela Telerman - Mariano
 Delli Quadri - Pablo Torres - Santiago Botirolí
 - Regina Benavente - Claudio Espector - Alicia
 Pes - María Angélica Corrado - Iris Bacal -
 Johanna Suárez - Ofelia Carvajal - Pablo Ávila
 - Esteban Gismondi - Marta Millán - Andrea
 Álvarez - Mariano Irschich - Ya Lin Chu - María
 Mercedes Varela - Coco Santisteban - Eva
 Álvarez - Violeta de Gainza - Mónica Cosachov
 - Dolores Linares - Antonio Russo - Manuel de

Olaso - Vanesa Viola - Víctor Naranjo - Gabriel
 Aguilera - Matías Teodori - Francisco García
 Fauré - Pablo Cernik - María Julia Grossi - Laura
 Astudillo - Pablo Passols - Daniel Wechsler -
 Gustavo Hernández - Alicia Cipolla - María
 Laura Antonelli - Marcelo Delgado - Federico
 Sarudiansky - Analía Goldberg - Claudio
 Schulkin - Ana María Floriani - José Luis Juri
 - Perla Gonilski - Gustavo Álvarez - Carolina
 Ceriani - Flavio Guerez - Laura Falcone -
 Beatriz Pedrini - Bárbara Civita - Dora Castro
 - Néstor Ballesteros.

BIBLIOGRAFÍA

- Badiou, A. 1990 *¿Se puede pensar la política?*
 (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Barbetta, P. y Lapegna, P. 2001 “Los cortes
 de ruta en el norte salteño: cuando la
 protesta toma forma” en Giarracca, N.
 et al. *La protesta social en Argentina.
 Transformaciones económicas y crisis
 social en el interior del país* (Buenos
 Aires: Alianza).
- Cerdeiras, R. 1997 “Una política de la no-
 representación” en *Dialéctica, Revista de
 Filosofía y Teoría Social* (Buenos Aires) N°
 9, octubre de 1997.

- Della Porta, D. y Diani, M. 1999 *Social Movements* (Oxford: Blackwell).
- Farinetti, M. 1998 “¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina”, Documento de Trabajo de la Cátedra de Análisis de la Sociedad Argentina, Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Foucault, M. 1995 *La verdad y las formas jurídicas* (Barcelona: Gedisa).
- Giarracca, N. et al. 2001 *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, N. y Bidaseca, K. 2001 “Introducción” en Giarracca, N. et al. *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- González Requena, J. 1995 *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad* (Madrid: Cátedra).
- Levy Strauss, C. 1964 *El pensamiento salvaje* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Melucci, A. 1994 “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales” en *Zona Abierta* (Madrid) N° 69.
- Revilla Blanco, M. 1994 “El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido” en *Zona Abierta* (Madrid) N° 69.
- Satie, E. 1998 *Memorias de un amnésico y otros escritos* (Madrid: Ardora).
- Schuster, F. y Pereyra, S. 2001 “La protesta social en la Argentina democrática. Balance y perspectivas de una forma de acción política” en Giarracca, N. et al. *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Schutz, A. 1974 *Estudios sobre Teoría Social* (Buenos Aires: Amorrortu).
- Tarrow, S. 1997 *El poder en movimiento* (Madrid: Alianza).

PRODUCCIÓN Y MERCADOS PARA LA VIDA: UNA POSIBILIDAD EMANCIPADORA PARA EL SIGLO XXI*

Para hablar del tema de la producción y los mercados no capitalistas en una Argentina conformada en “el progreso y la modernización”, se necesita un profundo conocimiento de las comunidades indígenas. Tales poblaciones han dado muestra de la capacidad de perseverancia, de otras formas de construcción de la vida, de otras formas de producción de bienes y de construcción de relaciones entre los hombres, así como de otras formas de intercambio de las producciones físicas y simbólicas. No tengo una larga tradición en el conocimiento de las organizaciones indígenas; sí, una larga trayectoria en el estudio de las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas

de América Latina (también de Argentina) comparten con las comunidades indígenas la capacidad de perseverar en una forma de construcción de su vida, de su producción, de sus mercados, de sus maneras de socializarse.

De hecho, durante la época del modelo de sustitución de importaciones y del Estado-nación, a los indígenas de América Latina se los llamaba campesinos. Esta fusión de identidades campesina e indígena pudo darse porque ambas —aun con todos los intentos del capitalismo por penetrarlas— guardaron una forma de producir al margen del mercado.

Los sociólogos rurales desarrollamos una sensibilidad especial respecto de la expansión de los mercados derivada de la mercantilización de todos los espacios de la naturaleza y de la vida. Uno de los factores centrales de nuestras preocupaciones es la tierra. Y uno de los primeros bienes naturales que el capitalismo mercantiliza es la tierra; la convierte en mer-

* Giarracca, N. 2008 “Producción y mercados para la vida: una posibilidad emancipadora para el siglo XXI” en Giarracca, N. y Massuh, G. (comps.) *El trabajo por venir. Autogestión y emancipación social* (Buenos Aires: Goethe Institut / GEMSAL / Antropofagia).

cancia, siendo que ella no es producto del trabajo humano; la privatiza, le da carácter limitado. Si a ello se suma la formación de las clases propietarias, el resultado es la apropiación de la renta agraria. Y esto, que aparece como algo tan natural en la historia del capitalismo, ha traído consecuencias nefastas para la humanidad: no solo una distribución desigual de la riqueza y de la tierra, sino también el problema del hambre en el mundo, derivado del desigual acceso a los alimentos.

Tanto en la tradición liberal de la economía clásica como en la teoría marxista, existe un componente acerca del mercado que, a mi modo de ver, contribuyó a la resolución ideológica del concepto que colonizó todos los aspectos de la vida. Recordemos que, para el marxismo, el mercado expresa relaciones sociales que son “socialmente indeterminadas” (fuerzas económicas independientes de la voluntad de los hombres). El mercado se conforma a espaldas y más allá de las decisiones de los productores; es más, nos dice el marxismo, si todos los productores decidieran producir con las últimas tecnologías, dada la alta composición orgánica de capital que se generaría, sería inevitable una baja en la tasa de ganancia.

¡Qué decir de la “mano invisible” de Adam Smith! El mercado capitalista está basado en

la idea del hombre como sujeto egoísta (Adam Smith decía que el bienestar general se logra a partir del egoísmo individual). La concepción de sujeto que tiene por detrás la teoría neoclásica, la teoría liberal, es la idea del hombre egoísta de donde resulta que la posibilidad de regular todos estos egoísmos humanos la tiene el mercado que termina convirtiéndose, de este modo, en un eficiente administrador de los recursos y de las producciones para el conjunto de la sociedad.

La mayoría de las veces, y sobre todo a partir del neoliberalismo, el mercado aparece en singular, como un dispositivo ideológico que permite organizar no solamente la economía, la famosa economía de mercado, sino también todos los aspectos de la vida. Hoy en día es muy frecuente escuchar decir: “el mercado de arte”, “la oferta educativa”, “la facturación en salud”. Hoy la industria farmacéutica necesita ampliar su franja de productos. En función de ello y, con el fin de aumentar el mercado de los psicofármacos pediátricos en la Argentina, empiezan a generarse diagnósticos sobre cualquier síntoma en los niños. Es decir, se trata de esta idea del mercado sin límites comerciales ni éticos, que puede colonizar cualquier cuestión o aspecto de la vida de los humanos.

El mercado como dispositivo ideológico y comunicativo se muestra en todos los ámbi-

tos. Los medios de comunicación proclaman disparates como “los mercados son sensibles”, se habla del “nerviosismo en el mercado”; el mercado aparece como un ser animado, como un mecanismo de control al que todo el mundo le debe respeto. Mientras este nivel de organización que nos propone el discurso hegemónico se expande en toda América Latina, África y Asia, existen otras formas de pensar la producción para la vida. Observemos a las organizaciones mapuches: han perdurado siglos, y han perdurado a pesar de la gran dominación que han soportado desde hace más de quinientos años. Y esto es por la fuerza de la cultura y de la voluntad humana de producir y de organizar la vida de otra forma. Esta otra forma tiene como cuestión fundamental el “producir para vivir”, como dice Boaventura De Sousa Santos, producir para las necesidades de la vida y no para el mercado.

La producción de alimentos para el mercado tiene como única finalidad producir ganancias; alimentar poblaciones es, en este contexto, un objetivo secundario. Esta distorsión, que se intenta naturalizar a través de dispositivos ideológicos muy sofisticados, es lo que han rechazado estas comunidades manteniendo una forma de producir y una forma de intercambiar relacionadas siempre con los “mercados reales”.

Con tal concepto deseamos significar instituciones, organizaciones creadas por la acción de los hombres, no a espaldas de la sociedad, sino por la acción de mujeres y hombres, donde los agentes se encuentran e intercambian básicamente para satisfacer las necesidades de alimentación, de vestimenta, de formación. El control es comunitario y no reside en el mercado; se produce para el bien común a partir de los aspectos solidarios y fraternos que todos los humanos expresamos, de la misma forma en que lo hacemos con los aspectos egoístas.

“Gipi” Fernández, de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, sostiene siempre que ellos obtuvieron 7 mil hectáreas y no las pusieron a producir, sino que simplemente las consideraron reserva. Esto sería incomprensible para un economista neoliberal, ¿cómo tener recursos y no ponerlos en producción para llevar al mercado, para tener dinero y para tener ganancias? También creo que los ejemplos de las comunidades indígenas, los ejemplos de los campesinos, y los ejemplos de todas estas experiencias son “campos de experimentación” y nos permiten, nos estimulan a pensar que hay otras maneras de producir, de intercambiar, de generar mercados; hay otras formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, de considerar la

salud, la educación, lo sagrado y las relaciones entre los seres humanos.

¿EXISTE EL ESPACIO PARA “LOS MERCADOS” FUERA DE “EL MERCADO”?

¿Existe un espacio fuera del mercado neoliberal? Podemos formular esta pregunta de otra manera, adhiriendo a los grandes proyectos emancipadores de los siglos XIX y XX: ¿existe un espacio sin relaciones de dominación entre los seres humanos?

Esa gran pregunta generó proyectos políticos alternativos durante un siglo entero de lucha de masas. Hoy esta misma pregunta inquiera por la existencia de un espacio de producción, de mercados y de intercambios fuera de la lógica del mercado neoliberal. ¿Existe un espacio que no esté basado en la dominación? ¿Se puede pensar ese espacio? O, como nos desean hacer creer desde la ideología del discurso hegemónico, esos espacios son imposibles de pensar porque la lógica capitalista los integra a todos, subordinándolos y convirtiéndolos en partes subalternas, marginales, explotadas de su propio funcionamiento.

La gran pregunta que se hacen los economistas agrarios y los agrónomos con mentalidad

neoliberal es por qué siguen existiendo formas de producción y mercados no capitalistas. Por qué siguen existiendo los campesinos si, por las leyes del mercado, deberían estar fuera de él. La Economía Agraria clásica diría que están produciendo a unos costos que no les permiten competir, es decir, no tendrían que existir; pero aquellos que conocemos de cerca lo que pasa en las economías campesinas, sabemos que a veces la familia campesina sale a trabajar afuera para tener ingresos que le permitan seguir manteniendo la unidad de explotación. Esto es impensable en la lógica del capitalismo. Estos factores —que de alguna manera ponen en cuestionamiento y en tensión la lógica capitalista— son los que determinan los escenarios indígenas y campesinos de los dos tercios de la humanidad. Por otro lado, esta nueva forma de construir comercio justo, fábricas recuperadas, economías populares, no ya economías campesinas sino economías populares urbanas, muestra que ellos aprenden mucho de estas historias, de las historias indígenas y de las historias campesinas.

Pero hay otra cuestión: es posible la sustitución de un modelo por otro. Por ejemplo, el modelo del comercio justo, del comercio solidario, ¿sustituye al modelo capitalista?, ¿debería sustituirlo? Es una pregunta que no

tiene respuesta, pero es importante formularla en forma colectiva ¿el capitalismo tiene tantas debilidades como para ser sustituido por estas construcciones que se dan en sus márgenes?, ¿o estamos construyendo otros modelos, otras economías, sin pensar en sustitución? Esto se está discutiendo en toda América Latina a nivel de las distintas formas que adquiere la agricultura.

En el Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO estamos contraponiendo dos modelos: el modelo del agronegocio (con la soja o el etanol) y el modelo de la economía campesina. El ejemplo más desarrollado es el de Brasil, donde hay relaciones entre ambos, pero también hay espacios de autonomía. En Bolivia, el vicepresidente García Linera habló del “capitalismo andino”, para referirse a una articulación entre la economía agraria campesina, la economía familiar de los sectores urbanos populares y el capitalismo avanzado del Oriente, de los departamentos de la “Media Luna”. Y también en la Argentina, cuando pensamos lo que se está haciendo en términos de comercio justo, de organizaciones agrarias campesinas, de economía regional —como en el caso de General Mosconi—, etcétera. Hay dos modos de pensar: el de la sustitución del capitalismo o el de una construcción propia

autónoma. ¿Terminará sustituyendo uno a otro? ¿O terminará el capitalismo destruyendo todas estas posibilidades de construcción de otro mundo? A mí me parece que son preguntas abiertas, que no tienen respuestas en este momento pero que de alguna manera pueden llevarnos a pensar y a discutir.

EL MITO DE LA ECONOMÍA COMPLEJA DICE QUE EL CAPITALISMO ES IMPRESINDIBLE

Es necesario deconstruir algunas ideas que parecen arraigadas; son aquellas que afirman, por ejemplo, que las “otras economías” —las que están al margen del capitalismo— pueden producir solo bienes simples como alimentos o vestimentas, pero no bienes complejos como antibióticos o computadoras. No hace falta remontarse a 600 años atrás planteando los avances científicos de las poblaciones originarias, basten algunos ejemplos simples dentro del capitalismo.

Algo que a todos nos compete de cerca son las computadoras y los programas de computación. Estos programas que parecen tan complejos se hacen en la casa de un conjunto de muchachitos que trabajan por su cuenta y después

les venden sus investigaciones a las grandes empresas. Doy este ejemplo relacionado con la mistificación que existe hoy alrededor de esta llamada “sociedad del conocimiento” donde se nos presenta la producción y la relación con los recursos como una cuestión muy compleja, fuera del alcance de nosotros como seres del montón. No me voy a referir al tema de los antibióticos porque de eso dará cuenta Andrés Carrasco más adelante, lo que quiero decir es que hoy, más que nunca, se hace necesario volver a recuperar la potencia que tenemos como humanos y saber que podemos producir cualquier cosa, que todo lo que se ha producido hasta ahora, lo han producido los hombres y mujeres como todos nosotros. Debemos recuperar esa potencia en tanto somos seres económicos; esa potencia que otorga la fe en que cualquiera de nosotros es capaz de producir cualquier cosa. La gran ideología montada a nuestro alrededor nos tiene convencidos de que lo importante, los objetos de última generación, se producen con la tecnociencia, es decir, con un saber sofisticado, difícil y sobre todo lejos del alcance de nosotros como productores. Deconstruyamos los mitos que tan bien genera el capitalismo para controlarnos y restarnos potencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Acuña, C.; Ciancaglini, S.; Gociol, J. y Rosemberg, S. 2004 *Sin patrón. Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores* (Buenos Aires: La Vaca Editora).
- Aglietta, M. 1976 *Régulation et Crises du Capitalism* (París: Calmann-Levy).
- Altvater, E. 1997 *Die Zukunft des Marktes* (Münster: Westfälisches Dampfboot).
- Altvater, E. 2005 *Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine radikale Kapitalismuskritik* (Münster: Westfälisches Dampfboot).
- Altvater, E. 2006 *Solidarische Ökonomie. Reader des Wissenschaftlichen Beirats von Attac* (Hamburgo: VSA Verlag).
- Altvater, E. y Mahnkopf, B. 1996 *Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft* (Münster: Westfälisches Dampfboot).
- Altvater, E. y Mahnkopf, B. 2002 *Globalisierung der Unsicherheit. Arbeit im Schatten, Schmutziges Geld und informelle Politik* (Münster: Westfälisches Dampfboot).
- Altvater, E.; Baethge, M. y Bächer, G. 1985 *Arbeit 2000. Über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft* (Hamburgo: VSA Verlag).

- Altwater, E.; Chomsky, N.; Davis, M.; Eppler, E.; Galtung, J.; Habermas, J.; Huntington, S.; Klein, N.; Mahnkopf, B.; Sassen, S. et al. 2006 *Der Sound des Sachzwangs, Globalisierungs Reader* (Berlín / Bonn: Blätter Verlagsgesellschaft).
- Boyer, R. 1989 *La teoría de la regulación: un análisis crítico* (Buenos Aires: Humanitas).
- Braverman, H. 1974 *Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century* (Nueva York / Londres: Monthly Review Press).
- Dal Ri, N. M. (comp.) 1999 *Economia solidária: o desafio da democratização das relações de trabalho* (San Pablo: Arte e Ciência).
- Davis, M. 1990 (1986) *Prisoners of the American Dream. Politics and Economy in the History of the US Working Class* (Londres / Nueva York: Verso).
- De Melo Lisboa, A. 2004 “Mercado solidario” en Cattani, A. D. (org.) *La otra economía* (Buenos Aires: UNGS / Fundación OSDE / Altamira).
- De Sousa Santos, B. (org.) 2002 *Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista* (Río de Janeiro: Civilização Brasileira).
- De Sousa Santos, B. y Rodríguez, C. 2002 “Introdução: para ampliar o canone da produção” en De Sousa Santos, B. (org.) *Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista* (Río de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Fajn, G. et al. 2003 *Fábricas y empresas recuperadas. Protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad* (Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación).
- Fajn, G. y Rebón, J. 2005 “El taller ¿sin cronómetro? Apuntes acerca de las empresas recuperadas” en *Revista Herramienta* (Buenos Aires) N° 28.
- Giarracca, N. (coord.) 1994 *Acciones colectivas y organización cooperativa* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, Serie Bibliotecas Universitarias).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2005 *El campo argentino en la encrucijada* (Buenos Aires: Alianza).
- Godio, J. 1983 *Historia del movimiento obrero latinoamericano* (México DF: Nueva Sociedad / Nueva Imagen).
- Gorz, A. 1998 *Misérias del presente, riqueza de lo posible* (Buenos Aires: Paidós).
- Hobsbawm, E. J. 1967 *Labouring Men. Studies in the History of Labour* (Garden City: Anchor Books / Doubleday).

- Holloway, J. 2006 *Contra y más allá del capital* (Buenos Aires: Herramienta).
- Iturraspe, F. 1986 *Participación, cogestión y autogestión en América Latina* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Lafargue, P. 2005 “Derecho a la pereza” en Sartelli, E. (comp.) *Contra la cultura del trabajo* (Buenos Aires: Razón y revolución).
- Lukács, G. 1978 *Historia y conciencia de clase* (Barcelona: Grijalbo).
- Mackintosh, M. 1990 “Abstract markets and real needs” en Bernstein, H.; Crow, B.; Mackintosh, M. y Martin, C. *The Food Question: Profits Versus People* (Nueva York: Monthly Review Press).
- Marglin, S. 1996 “What Do Bosses Do? The Origins and Functions of Hierarchy in Capitalist Production” en Lippit, V. (comp.) *Radical Political Economy. Explorations in Alternative Economic Analysis* (Nueva York / Londres: M. E. Sharpe).
- Marx, K. 1974 *El capital* (México DF / Madrid / Buenos Aires / Bogotá: Siglo XXI) Tomo I, Vol. 1-3.
- Marx, K. 1978 (1953) *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858* (Buenos Aires: Siglo XXI) Tomos 1 y 2.
- Pannekoek, A. 1976 *Los consejos obreros* (Buenos Aires: Proyección).
- Polanyi, K. 1980 (1947) “Nuestra obsoleta mentalidad de mercado” en *Commentary*, Vol. 13.
- Polanyi, K. 1992 *La gran transformación* (Madrid: La Piqueta).
- Quijano, A. 2002 “Sistemas alternativos de produção” en De Sousa Santos, B. (org.) *Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista* (Río de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Rebón, J. 2007 *La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción* (Buenos Aires: Colectivo Ediciones / Ediciones Picaso).
- Reich, R. 1991 *The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism* (Nueva York: Alfred Knopf).
- Rosanvallon, P. 1979 *La autogestión* (Madrid: Fundamentos).
- Teubal, M. 1995 “Notas sobre la mano de obra excedentaria del tercer mundo” en Teubal, M. et al. *Globalización y expansión agroindustrial. ¿Superación de la pobreza en América Latina?* (Buenos Aires: Corregidor).

- Thompson, P. 1983 *The Nature of Work. An Introduction to Debates on the Labour Process* (Londres: Macmillan Publishers).
- Wacquant, L. 2000 *Las cárceles de la miseria* (Buenos Aires: Manantial).
- Wacquant, L. 2007 *Una invitación a la sociología reflexiva* (México DF: Siglo XXI).
- Wright, E. O. 2006 “Compass Points. Toward a socialist alternative” en *New Left Review*, N° 41.

Cuarta Parte

PERSPECTIVAS DESDE EL SUR. COLONIALIDAD DEL PODER, OTROS BICENTENARIOS

PRESENTACIÓN DE *TEORÍA Y CRÍTICA DEL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO* DE ARTURO ROIG, A MODO DE HOMENAJE*

En los comienzos de 2010, Celeste Plaza, Editora de *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano*¹ me invitó a presentar esta magnífica obra de su abuelo, Arturo Roig. Esta solicitud me llenó de inquietud; cómo negarme a un pedido semejante y qué hacer para estar a la altura de las circunstancias. No soy filósofa, mis conocimientos de la historia de las ideas en América Latina son más que modestos; no obstante no podía dejar de leer nuevamente el libro y poder lograr algún comentario desde, por qué no, mi propia experiencia contemporánea sobre la región. Además, cómo no apro-

vechar la oportunidad de expresar en público mi tremenda admiración por este inmenso intelectual, gran ser humano que había tenido la suerte de conocer a mediados de los ochenta. Cuando terminé la presentación Arturo Roig se acercó y me dijo muy conmovido “por qué quiere emocionarme tanto”. Me di cuenta de que más que mis conocimientos de Filosofía e Historia de las ideas que habían sido traídos a la mesa por otros panelistas idóneos, yo había aportado la experiencia de una socióloga tempranamente consciente de nuestra ubicación en América Latina, con una trayectoria de vida que incluye morar por aquellos territorios y quien, además, había compartido unos años de trabajo, llenos de esperanza en los comienzos del regreso a la democracia, con él. Después de la presentación Celeste Plaza me pidió que la publicara como reseña del libro, nunca lo hice justamente por el pudor de quien sabe que no está hablando de un tema suficientemente co-

1 Publicado por primera vez en 1981, luego por Editorial Una Ventana, en 2009.

* Giarracca, N. 2012 “Presentación de *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano* de Arturo Roig, a modo de homenaje” en *Realidad Económica*, N° 268, mayo-junio.

nectado al aporte del libro. No obstante ahora decidí publicarla.

Arturo Roig falleció en Mendoza el 30 de abril de 2012, a pocos meses de cumplir 90 años. En los últimos años lo encontré con cierta frecuencia, volví a retomar ese diálogo que tanto había valorado cuando él dirigía el CRICYT-Mendoza e integraba la Comisión de Filosofía del CONICET y yo colaboraba medio tiempo con la Secretaría de Coordinación Académica de esa institución para organizar el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Por un tiempo ese diálogo se había espaciado mucho pero en los últimos años, cuando viajaba a Mendoza lo visitaba y también me las arreglaba para encontrarlo en Buenos Aires en sus visitas para presentaciones de libros o simplemente médicas para él o para su compañera de toda la vida, Irma Alsina. En esos encuentros siempre terminaba entramada en esa combinación de erudición y generosidad que sus charlas armaban y volvía cargada de consejos bibliográficos más útiles sobre mis temas de investigación.

Estas notas escritas para presentar su libro, hoy se convierten en un medio para homenajearlo porque fue uno de los intelectuales más importantes de este país, el gran pensador de Nuestra América y de lectura ineludible para

quienes asumimos una “mirada situada” del mundo, una mirada desde el sur, es decir, desde América Latina.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

En primer lugar deseo agradecer a Celeste Plaza y al Prof. Arturo Roig por invitarme a esta presentación porque sinceramente no creo estar a la altura de las circunstancias para dar cuenta de semejante obra y de semejante autor. Por eso trataré de marcar tres cuestiones que son posibles de abordar desde mi formación y experiencia, que pueden interesar a los presentes.

En primer lugar, plantear el contexto de producción de la obra y su actualidad. Como se dice el apartado de los orígenes de los materiales, el libro está formado por conferencias, cursos, seminarios sobre prensadores latinoamericanos impartidos en Europa, México, Venezuela, Ecuador y presentados en congresos y seminarios en diversos países de América Latina desde 1969 a 1978. De esta recopilación lúcida y coherente de trabajos, se ofreció al lector una primera versión de libro en Fondo de Cultura Económica, México en 1981. En esta nueva versión de la editorial Una ventana se agrega un trabajo —muy importante sin duda como guía

de lectura— del austríaco Gunther Mahr y un comentario bibliográfico de Norberto Espinoza sobre el libro de Mahr.

Es decir, estamos frente a una obra que recoge el trabajo, reflexión, aportes del Prof. Roig en aquella década de los setenta cuando, recordemos, muchos de los pensamientos filosóficos políticos que recorrían el continente aún formaban parte del pensamiento emancipador que nos habían legado los autores europeos de la modernidad: los liberales y los marxistas.

Vivíamos todavía coletazos de la fuerte “conciencia de ruptura” (para usar conceptos del propio Roig) de lo que significó la Revolución cubana en 1960. Del pensamiento latinoamericano se buscaba formular un marxismo local que no superaban en absoluto los logros de Carlos Mariátegui, décadas antes.

La revolución campesina de 1910 de México estaba bajo fuertes sospechas justamente porque aquellos sectores no representaban una “clase para sí”, en parte por su ubicación estructural pero también por la baja formación de clase, según los grandes relatos del marxismo. Así, se recordaba, se comportaron como simples “campesinos” cuando, en México, llegaron a la puerta del poder y se retiraron. Luego se comprobó que el campesinado latinoamericano podía aparecer como un irrefutable sector

de resistencia y entonces se acudió a los postulados no leninistas como el “trotskismo” en Perú o el “maoísmo”, origen de reflexiones que habían pensado un sujeto político campesino a distancia de la ciudad.

En los sesenta, desde estas perspectivas, el pensamiento latinoamericano estaba “bajo la sospecha” de localista, limitado, confuso y cuando se lo utilizaba se advertía que se estaba corriendo el peligro de opacar el coherente pensamiento universal que representaba el marxismo como idea emancipadora moderna. Pensemos por ejemplo, debates entre campesinistas y proletaristas que recorrió América Latina aunque tuvo su punto de enclave más importante en México. Campesinos y su “baja clasicidad”, la condena de estar ligado a la tierra, el calificativo de “neopopulistas” a quienes teorizaban las posibilidades políticas del campesinado fueron muy frecuentes. Debemos reconocer que también encontramos muchos y variados intentos de mezclar los pensamientos, las tradiciones, hacer una realidad de esas ideas del barroco latinoamericano donde predominan las mixturas. Pero era toda una tensión que dividió y hasta llegó a enfrentar el campo de las nuevas izquierdas latinoamericanas (al margen de los viejos partidos comunistas).

Hace poco leí *Nosotros los indios*, de Hugo Blanco, un mestizo que en los sesenta recuperó una doble conciencia: de resistencia como peruano sensible a la injusticia de su país y como sujeto que reconoce su pasado indígena y marcha a trabajar de campesino al Cusco y allí comienza a formar sindicatos. Nos cuenta que toda su formación trotskista (recibida en la Argentina donde fue estudiante de Agronomía) entra en tensión con los planteos de la resistencia campesina e indígena de la Convención, región del sur peruano donde desarrolla su trabajo militante. Por ejemplo, nos dice, la tensión de llevar el proyecto de la “reforma agraria” mientras los campesinos indígenas le mostraban que ellos deseaban volver al Ayllú y no otra cosa. Hugo Blanco fue un extraordinario militante que, antes de Marcos en Chiapas, aprendió de quienes eran portadores naturales de las ideas y prácticas indígenas y supo darle el valor relativo que tenía su propia formación. En nuestro país, fue el momento del surgimiento de las llamadas Cátedras Nacionales en las cuales se recuperaban muchos de los autores que recorren las páginas del libro que presentamos. Sus principales integrantes debatían muy fuertemente con distintos grupos políticos que en su mayor parte se negaba a incorporar cualquier pensamiento que no aludiera a las teorías

críticas generadas en Europa: el marxismo clásico, el “gramscismo”, el “trotskismo”, etcétera.

En esas condiciones de producción de pensamiento y de acción política, Arturo Roig trabajaba para darle significado al “nosotros” latinoamericano, buscando la concepción del sujeto, esa capacidad del hombre de producir experiencias históricas. Como nos dice Mahr en el libro que presentamos “Con Roig estamos ante un personaje que por un lado es un gran conocedor de la Filosofía europea y por otra parte considera que eso no basta y por ello aspira a combinar el pensamiento europeo con una perspectiva latinoamericana”.

Y cuando hablamos de pensamiento europeo nos referimos a Aristóteles, Platón, Hegel, Kant pero también Marx, Engels, Gramsci y toda la gama de pensamiento crítico. Lo que aportó nuestro autor en aquella compleja coyuntura, fue la naturaleza del sujeto, la teorización sobre una moral de la emergencia y su opción por una filosofía práctica.

Para cerrar este punto me interrogo qué hubiese sucedido con las luchas sociales o estatales emancipadoras de aquellos años, me refiero a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, el Cono Sur, etcétera, si hubiesen estado más impregnadas con esta perspectiva que ofrecía contemporáneamente Arturo Roig. Y esta duda

la retomaré en el tercer punto cuando me interrogo acerca de la actualidad de este libro y de estas ideas.

En segundo lugar, deseo señalar aquellos elementos que me parecen que estando presente en aquellas décadas, quedaban invisibilizadas bajo las luces de un pensamiento que en su afán de marcar una universalidad modernizante nos impedía vernos como “nosotros, los latinoamericanos”; nos dificultaba mirarnos en un espejo que nos devolviera una imagen compleja, dramática pero empíricamente más cerca de lo que éramos, lo que somos y no vernos a imagen y semejanza de los europeos; sobre todo en ese intento siempre inacabado de la búsqueda de una emancipación posible.

En tal sentido Roig una y otra vez reenvía al complejo problema de la identidad como “latinoamericanos” que deriva en la pregunta sobre América Latina. E inmediatamente, después de remitir a las realidades histórico-culturales plantea el punto de vista de las parcialidades; parcialidad de países, culturas, idiomas. Nos dice “No es un yo el que mira sino un “nosotros” y no es un “todos los hombres” los que miran con nosotros, sino algunos, los de nuestra diversidad y parcialidad”. Insiste “la cerrazón de la nómada no es ontológica sino ideológica y su apertura consiste en la toma de

conciencia, por obra de nuestra inserción en el proceso social e histórico, de la parcialidad de todo mirar”.

Esa conciencia de la parcialidad de todo mirar aparece como un interesante antecedente de lo que hoy, criticando a los “epistemicidios” de los blancos europeos, se conoce como “conocimiento situado”. Ideas que nos traen los autores de las corrientes “decoloniales” o poscoloniales de Asia y África.

Roig también nos habla de horizonte de comprensión que a la vez es comprensión del mundo y de sí mismos pero también ocultamiento. Y en este punto aparece la diversidad de ideas de ese pensamiento latinoamericano y esos múltiples horizontes de comprensión ya que, nos alerta el autor, la diversidad no siempre remite a una misma unidad. Para ejemplificar ofrece las ideas de Francisco de Bilbao, José Martí, Juan Bautista Alberdi, Domingo Sarmiento y nos va mostrando esas diversas y antagónicas construcciones del “nosotros los latinoamericanos”. Por ejemplo Alberdi se remitía a un “nosotros los europeos latinos en América” o a un nosotros que era la aristocracia de origen español. Roig muestra a Alberdi en ese contexto de perplejidad durante la invasión francesa a México; perplejidad de que algunos rechazaran la civilización frente a lo

que los que los rodeaban. Ni que mencionar a Carlos Bunge en ese intento de tratado de Psicología de los latinoamericanos según el cual las poblaciones indígenas se han caracterizado por su espíritu vengativo y su ferocidad, superior a los primitivos salvajes europeos; el indio mestizado es un híbrido que muestra caracteres visibles de degeneración, en fin el mulato mucho más que el mestizo de blanco e indio, se le presenta como el monstruo apocalíptico que amenaza las sociedades modernas de América centrada en las ciudades. Y Roig nos conmueve y casi, diría yo nos reenvía a los orígenes de ese pensamiento perverso, mortífero que circuló desde muchos órdenes de poder hacia el “otro”, cuando nos sintetiza que para Bunge se atreve a enunciar que el alcoholismo, la viruela y la tuberculosis tenían el sentido de depuradores de elementos étnicos, europeizándolos y que tales males constituyeron más que enfermedades una bendición. Así se pregunta Roig que tienen que ver el sujeto latinoamericano de Bunge con el de Martí, por ejemplo y yo agregaría incluso con el de Pomar de Ayala o cualquier otro intelectual indígena con todo derecho de pensar en estos, sus territorios. En definitiva, es posible tomar conciencia de la complejidad de la tarea de Roig solo con repasar alguno de estos “legados” que confluyen

desde los pensamientos europeos hasta generar estas parcialidades, estas configuraciones sociales generadas en estos territorios.

El libro continúa con una recorrida desde las fuentes filosóficas europeas hasta lo que él llama “un comienzo con la Filosofía latinoamericana de Vaz Ferreira”, la ubicación del pensamiento en sus fuentes europeas, pero también el pensamiento filosófico de México. Una lectura que considero ineludible está en el Capítulo XIV sobre La conciencia americana y su experiencia de ruptura.

La tercera cuestión que deseo plantear se refiere a la actualidad de la tarea y pensamiento de Arturo Roig. Les decía al comienzo que en la década en la cual estos trabajos fueron escritos el pensamiento emancipador aún provenía del marxismo y lo máximo que se podía lograr desde estos territorios era cierta “traducción” latinoamericana. El punto crucial eran los medios de producción que una vez controlados permitían marchar hacia la sociedad socialista que en aquellos tiempos constituía la utopía, la mejor sociedad posible. Es cierto, y Roig también lo recuerda, que toda esta efervescencia política coexistió con discusiones que se centraban en la dependencia, y se generaba información en relación con los fuertes vínculos de dependencia económica que ataba a estos territorios

a distintas metrópolis de turno. Pero en el pensamiento político de esa época, todo era superado por la construcción del socialismo.

Los setenta y ochenta fueron años de derrotas, de grandes sufrimientos de las poblaciones latinoamericanas infligidos tanto por los ejércitos represores a cargo de terminar con el sueño socialista latinoamericano como por los civiles que en el “mientras tanto” o a posteriori gestaron las condiciones para introducir los cambios necesarios para imponer el modelo de sociedad que llamamos para simplificar “neoliberal”. La década de los ochenta fue la década perdida según CEPAL y fue cuando se logró acallar por un rato las resistencias de unas poblaciones que, en el decir de Perry Anderson, más resistieron durante todo el siglo XX.

Pero los primeros que reaccionaron contra los elementos mortificantes del neoliberalismo fueron las poblaciones indígenas, tal vez entusiasmados y acompañados por las conquistas legislativas conseguidas a nivel internacional debido a los 500 años de invasión colonial en 1992. Ecuador con sus marchas, sus reclamos, sus logros de inestabilizar gobiernos concentradores, marcados por la “desposesión” y la corrupción, hasta llegar al día de hoy con gobiernos distintos aunque no exentos de tensiones. Irrumpió en 1994 Chiapas, luego Ecuador,

Bolivia, etcétera; la presencia de esta América/ Abya Yala profunda no pudo evitarse y, como siempre ocurre, comenzaron las reflexiones e ideas alrededor de estas luchas. Se descentraron los sujetos políticos modernos como la clase obrera y apareció la cuestión indígena como cuestión netamente política.

Así surge, creo que en reuniones de LASA (Latin American Studies Association), un grupo de latinoamericanos, la mayoría residentes en Estados Unidos, que generan pensamientos-activos que acompañan los derroteros de los movimientos indígenas y muchos otros de carácter socio-territorial: campesinos, afro-brasileños, colombianos, etcétera, y que se llama “decoloniales” para diferenciarse de los poscoloniales de Asia (Said, Guha, etcétera). Tal vez la presentación en público de este grupo fue el libro compilado por Edgardo Lander en el 2000 que se llama *La Colonialidad del saber. Eurocentrismo y Ciencias Sociales*.

Por qué traigo esta cuestión: porque esta corriente o como quiera llamarse, toma mucho de Arturo Roig, aun sin citarlo como corresponde. Incluso el libro de Walter Mignolo (argentino de origen) toma la famosa frase de O’Gorman acerca de la “invención de América Latina” en un interesante libro, que Roig desarrolla en su primer artículo del libro bastante antes de que

aquel otro saliera. En definitiva, deseo manifestar que esta nueva corriente, tributa al aporte filosófico de Arturo Roig, lo reconozcan suficientemente o no.

Una particularidad de Roig es que no reniega del pensamiento europeo sino lo toma, lo deconstruye con una confianza notable que marca bien algunos de los comentaristas finales, y lo incorpora a nuestras necesidades de pensamientos activos. No hay pudor en Roig de reconocer la fertilidad de algunos de los programas filosóficos europeos; no lo toma desde el “desigual” sino como un par, seguro, como comenta Mahr, como un igual. Y creo que el resultado es complejo y rico.

Si en los decoloniales hay una propuesta de “opción decolonial” en Roig encontramos conceptos tan interesantes como “conciencia de ruptura”, “conciencia culposa de ruptura” y el muy pertinente en este año 2010 del bicentenario, “segunda independencia”. En su pensamiento tiene un lugar importante lo que denomina la moral de la emergencia, la potencia de las clases oprimidas en un nuevo programa emancipador en emergencia y al que nuestro autor ha contribuido mucho más de lo que las generaciones que coexistimos con él, podemos evaluar.

A MODO DE “CODA”

Si me permiten y tengo un minuto más, querría contarles lo que representó encontrarme hace 25, 26 años con el profesor Roig en la construcción de los espacios democráticos de la ciencia. Cuando lo conocí empecé a leerlo (preparé su legajo para invitarlo a la Carrera de Investigación Científica) y comencé a escucharlo —aún recuerdo su impactante discurso al asumir como director del CRYCYT—; pero sobre todo en esos casi cinco años pude observar sus acciones, construyendo instituciones, modificando, transgrediendo e innovando. Pude comprobar la fuerza de la voluntad, por un lado, pero también la fuerza de la honestidad intelectual y humana que funcionan como testimonios. Lo pude observar en relación con los científicos, con el personal de apoyo, el personal de mantenimiento, etcétera. La última vez que fui a Mendoza como funcionaria del CONICET, el CRYCYT que él dirigía inauguraba una excelente guardería para los niños de las becarias y personal de la institución. Una persona del CRYCYT que seguía la tarea diaria de Roig me comentó: “ves estas mujeres hoy orgullosas de su creación —la guardería— fueron durante mucho tiempo figuras fantasmales de la administración del CRICYT (durante la dic-

tadura); no se las oía y algunos ni siquiera las veían. Pero llegó Roig y sacó lo mejor de ellas: la creatividad para hacer una guardería distinta y tener cerca de los niños, la alegría de trabajar allí, la felicidad de contribuir a un proyecto interesante y democrático”.

Del mismo modo, mi propio instituto de investigaciones el “Gino Germani” está dividido en “Áreas” siguiendo sus ideas acerca de la organización académica. Bastó que le pidiera a comienzos de los noventa que nos diera una charla sobre cómo era esa organización para que nos visitara en el magnífico *petit* hotel de la calle Callao (hoy el Bar Notorious), nos mostrara la importancia del edificio durante quince minutos de historia de la cultura arquitectónica de Buenos Aires que nos permitió observar lo que en todo ese tiempo habíamos olvidado, para después, sacarnos —a nosotros también— del molinete de la repetición, de la reproducción automática de formas de organización de espacios de investigación en la UBA, para lograr pensar una forma interesante llena de oportunidades que pusimos en práctica.

Así es el Dr. Arturo Roig, un pensador activo, un sujeto que siempre porta una caja llena de sorpresas que hace que valga más la pena habitar estos mundos y resistir a las injusticias. Muchas gracias.

EL BICENTENARIO: MIRADAS SOBRE LA ARGENTINA*

*A Lidu Teubal porque eligió nacer
en el Buenos Aires del Bicentenario.*

DESDE EL FONDO DE LOS TIEMPOS

Durante mayo de 2010, en la Argentina se celebró el Bicentenario, los doscientos años del momento en que los territorios del virreinato del Río de la Plata —que no coincide con la unidad política territorial actual—, por complejas circunstancias que no vamos a desarrollar en este trabajo, deciden tomar distancia de la Corona española. Ese acontecimiento inicia un período de transición plagado de convulsiones políticas y sociales: los criollos blancos

educados en (o por) Europa, con posiciones heterogéneas en relación con el hecho colonial, van configurando una dominación política, territorial, cultural, social, etcétera, nunca exenta de conflictos. Se preparan ejércitos con el fin de expulsar militarmente a los españoles, cuando la unidad continental despunta como posibilidad, pero, al mismo tiempo, se marcan las líneas de frontera con las comunidades indígenas en resistencia, con la intención de hacerles saber quiénes habían “heredado” estos territorios, usurpados unos siglos antes. Ambas fuerzas, la que sueña con la “gran nación americana” y la que observa al país con la mirada europeizada y lo piensa concentrado y unificado, coexisten en nuestra historia más allá de sus momentos fundacionales.

El siglo XIX está signado por los enfrentamientos de distintos proyectos, que se juegan tanto en el plano militar como en el cultural. Algunos caudillos de las provincias alejadas

* Giarracca, N. 2011 “El Bicentenario: miradas sobre la Argentina” en Giarracca, N. (comp.) *Bicentenarios (otros), transiciones y resistencias* (Buenos Aires: Una Ventana).

de Buenos Aires combaten las ideas del liberalismo económico, que las elites porteñas promueven en detrimento de sus regiones, y logran entablar relaciones cercanas con diferentes sectores subalternos: los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y los trabajadores criollos de las minas y de las haciendas. En la “historia oficial”, estos caudillos ocupan el lugar de la “barbarie” (entramados con los sectores subordinados), frente a la “civilización” europeizada y modernizadora, encarnada en el sector criollo “aportañado”, ya propietario y blanco.

La formación de la Argentina moderna comienza a consolidarse con la llamada “generación del 80” (1880), precisamente con la invasión militar a los últimos territorios indígenas libres luego de siglos de arrinconamiento y masacres. Hasta ese momento, algunas de las poblaciones indígenas conviven con los criollos, los españoles y sus descendientes de la época colonial, las poblaciones de origen africano¹ y las nuevas migraciones de españoles e italia-

nos, que vienen como asalariados o colonos agrícolas. Se calcula que, entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, entran al país más de cinco millones de europeos, de los cuales casi las tres cuartas partes son españoles e italianos. Estas mezclas étnicas representan un gran obstáculo para las elites gobernantes que, desde Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, buscan la “civilización” modernizadora, el blanqueamiento y la educación escolar de la población, apelando a la migración europea nórdica. Afanosamente, se estimula la entrada al país de esas poblaciones; así, los europeos mediterráneos que efectivamente llegaron a estas tierras, antes que ser una solución, pasaron a formar parte del “problema”.

La conversión, con intenciones marcadamente homogeneizadoras, se va desarrollando como mecanismo de control en todos los aspectos de la vida, y el sistema educativo es un dispositivo de primer orden para lograrlo. La pedagogía constituye el gran artífice de una subjetividad moderna y, al mismo tiempo, de “la invención del otro”, de la alteridad que se requiere en la conformación de un determinado sujeto (moderno/blanco/educado). Castro Gómez (2000) se ocupa de relacionar los hechos fundacionales de las naciones latinoamericanas, las “constituciones” (el momento de

1 Los afrodescendientes constituían el 30 por ciento de la población en 1810; fueron diezmos por las epidemias durante el siglo XIX, dadas las condiciones de vida ominosas en las que se encontraban, y por las guerras, adonde se los enviaba en primer lugar.

“inventar la ciudadanía”, es decir, un campo de sujetos homogéneos que hagan posible el proyecto moderno/capitalista), con la educación. La escuela busca —dice el autor— introyectar una disciplina sobre la mente y el cuerpo; el comportamiento del niño debe ser controlado, vigilado y sometido a la adquisición de conocimientos, capacidades, hábitos, modelos culturales, estilos de vida que lo habiliten como un ser “productivo” para la sociedad proyectada (ibídem: 149).

La propuesta educativa sarmientina, precisamente, se basa en el más estricto control cultural; es un proceso de homogeneización hasta en los modos de vestirse, que impone un guardapolvo (delantal) blanco que oculta las vestimentas de los niños, reveladoras de sus diferencias². Prohíbe los idiomas de las

2 En las escuelas normales (de formación de maestros) se solía explicar la adopción del delantal blanco como una noble intención de generar “igualdad” de clases, pero los resultados muestran su ineficacia, ya que todo el sistema educativo fue, desde los comienzos, muy diferenciador. En México, por ejemplo, que tiene una sociedad mucho más diversa que la nuestra, los niños visten las ropas que les son propias, las cuales manifiestan diferencias sociales pero también regionales, culturales y lingüísticas. Es un país que, aunque sus elites lo quisieran, sería imposible de homogeneizar culturalmente.

comunidades indígenas (guaraní, quechua, mapuche, etcétera) y vigila muy de cerca los intentos de las comunidades europeas recién llegadas de mantener sus lenguas o dialectos. Los niños con acentos diversos son descalificados, ridiculizados y son destinatarios de los epítetos que aún hoy circulan por la cultura discriminante argentina³: “tanitos” (italianos), “gallegos” (cualquier español), “rusito” (judío de cualquier origen nacional), “turco” (cualquier descendiente de árabes). Con las migraciones de países limítrofes se sumaron los “bolitas” (bolivianos) y los “paraguas” (paraguayos).

Quienes jerarquizan y subalternizan a “los otros” son las elites blancas, pero también se fomenta la discriminación entre los propios grupos subalternos. Una de las dramáticas consecuencias de esta operación cultural es la racialización, inferiorización y jerarquización social que significa el calificativo “cabecita ne-

3 Cuando revisamos este trabajo para su publicación en papel, suceden las declaraciones racistas y xenóforas del Jefe de Estado porteño Mauricio Macri y de sus funcionarios, a raíz de la ocupación de tierras para vivienda por parte de bolivianos, paraguayos y argentinos “sin techo”. Sus dichos tuvieron eco entre los vecinos cercanos al predio ocupado, lo cual nos alerta de que estamos en un momento grave en relación con la xenofobia y el racismo de una parte de los argentinos.

gra”, en referencia a la emergente clase obrera, a mediados del siglo XX. En fin, “cabecitas negras”, “indios”, “tanitos y galleguitos”, “rusitos y turcos” componen esa alteridad que el Estado-nación requiere para formar la identidad ciudadana blanca, educada, civilizada, que forma parte de la república imaginada, después de la operación de reprimir y ocultar las diferencias étnicas, culturales y sociales. República que se mira en un espejo europeizante, que le refleja una imagen falsa y distorsionada, divergente de esa otra que nos devuelve la buena literatura y el arte en general⁴; la imagen de la diversidad de tonos de piel, de color de ojos, de idiomas y acentos, de modos de ser niños, mujeres, ancianos. Esta distorsión identitaria le impide a la elite gobernante elaborar una agenda de los problemas que, en el proyecto de Estado-nación, aun en su propia lógica, tiene que tomar en cuenta y solucionar⁵.

4 Por ejemplo, la obra pictórica de Antonio Berni: La huelga, Juanito Laguna, Ramona Montiel; el propio Martín Fierro, de José Hernández, de mitad del siglo XIX, y las obras de Roberto Arlt, Leopoldo Marechal, Germán Rozenmacher (“Cabecita negra”) y, por supuesto, de David Viñas y Osvaldo Bayer.

5 Tal vez fue solo el gobierno del general Juan Perón, de 1945 a 1955, el que se percató de esta situación y

En síntesis, para estas generaciones que construyen la nación argentina en el siglo XIX, poblar con europeos los temidos desiertos (según la imagen de territorio que Sarmiento difundía) y educar, representan las metas más importantes de un Estado capaz de acompañar el desarrollo y el progreso al que aspiraban. Y, en los cincuenta años que van de 1880 a 1930, el deslumbrante desarrollo agroexportador sitúa, en efecto, al país entre los de mayor crecimiento económico, y se cree que “poblar y educar” son los mecanismos pertinentes para crear una nación blanca (la del primer centenario de la independencia de España, en 1910). Para la nación del Centenario no existen los etnocidios, la apropiación salvaje de la tierra, la subalternización de las poblaciones en nombre de un capitalismo que prometía un lugar reservado para pocos países. La crisis de 1930 da por terminada esa ilusión y a la Argentina le espera una historia cíclica de

otorgó valor político y dignidad tanto a esos sectores proletarizados, “los cabecitas negras”, “los descamisados”, como a los distintos sectores del interior del país. Como dice Beatriz Ocampo (2004), de este modo, el peronismo pasó de representar un movimiento político a ser un movimiento político-cultural, y eso explica, en parte, su persistencia en la escena política argentina.

democracias y dictaduras que finaliza en 1983, cuando se pone fin a la sangrienta dictadura militar iniciada en 1976.

LA ARGENTINA AGROEXPORTADORA-MODERNA-COLONIAL DEL CENTENARIO

La formación de la Argentina moderna y pujante que llega al centenario de su independencia en 1910 está fuertemente relacionada con uno de sus principales recursos naturales: la tierra, esto es, con el acceso a la tierra y la apropiación del territorio.

A comienzos del siglo XIX, la geografía argentina muestra una diversidad y una heterogeneidad agraria muchas veces ocultada por la historiografía. El gaucho, que varios estudios recientes muestran como un jefe de familia pobre, generalmente “puestero”, coexiste con propietarios rurales de poca extensión, que producen trigo y otros alimentos para aquel pequeño Buenos Aires. Poco después aparece la cría de animales; y en décadas posteriores a 1810, año del inicio de la gesta independentista, sucesivas expediciones militares se encargan de apropiarse de las tierras aún en manos de sus poseedores originarios: las poblaciones indígenas. El gaucho es reclutado

por las autoridades locales y pasa de cultivar sus tierras a trabajar para terceros. El memorable libro de José Hernández, *Martín Fierro*, relata este proceso de apropiación de la tierra para la cría de ganado, cuando el personaje central debe abandonar familia y tierras de cultivo porque es reclutado compulsivamente por el ejército. El sufrimiento de estos sectores subalternos, desde el comienzo del fondo de nuestra historia como nación, queda plasmado en este largo poema.

La situación cambia en la segunda mitad de siglo XIX, cuando los productores laneros inician un fuerte proceso de “modernización” (expansión de las relaciones capitalistas de producción). En 1866, un grupo selecto de productores laneros crea la Sociedad Rural Argentina con el fin de innovar tecnológicamente en la producción que se exporta a Europa. Para ello, no solo se conecta con centros científicos europeos sino que se relaciona con las elites locales ilustradas que apoyan esta ideología de la modernización (Domingo F. Sarmiento es uno de los primeros socios honorarios de la Sociedad Rural). La historiadora Hilda Sabato (1989), en su trabajo sobre la expansión del ganado lanero, sostiene que dentro del Estado se registran fuertes discusiones y propuestas para instalar un modelo parecido al *farmer* del *Mid-*

west norteamericano. Hasta en los momentos de mayor esplendor lanar hubo voces críticas frente a la apropiación y concentración de la tierra pública. Aunque en minoría, la “otra voz” marca siempre una diferencia.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, con el cambio del ganado ovino por el ganado vacuno y los comienzos de la agricultura “granaria”, un capitalismo moderno, emprendedor, pujante comienza a profundizarse. No obstante, la sociedad que se configura a partir de ello es polarizada, con muchos sectores excluidos de los derechos políticos, con gran cantidad de inmigrantes que viven hacinados en conventillos y deben soportar condiciones de trabajo deplorables, donde el derecho a huelga es considerado una acción criminal. En este hito histórico que es el mayo del primer centenario de la independencia, alrededor de 2.000 huelguistas son detenidos, 100 son sometidos a deportación y centenares son confinados a Ushuaia. Mientras las centrales de trabajadores convocan a 70.000 manifestantes para denunciar la situación y exigir la libertad de los presos, el presidente José Figueroa Alcorta decreta el estado de sitio y el Congreso Nacional sanciona la pena de muerte para los activistas sindicales. Es decir, el desarrollo capitalista temprano, con tecnología de punta y actores moderniza-

dores, no resulta garantía de la formación de una sociedad democrática, igualitaria y respetuosa de los derechos de los pobladores.

NUESTROS TIEMPOS: EL BICENTENARIO Y UN CAMBIO QUE TRANSFORMÓ LOS FESTEJOS

El derrotero de la Argentina durante el siglo XX ha sido muy estudiado, sobre todo, por ese fenómeno político que representó el peronismo, que vino a modificar el destino de sociedad agroexportadora, desigual, jerarquizada que presagiaba el Centenario. Quienes lograron imponer esa posibilidad democratizadora en el país fueron, en primer lugar, el Partido Radical, con el ascenso de los sectores medios al gobierno, y, en segundo lugar, los sucesivos gobiernos de Juan Perón, con su concepción de “capitalismo social” (basado en la industrialización y en la integración de los asalariados a la riqueza nacional); no obstante, las fuerzas concentradoras, coloniales, autoritarias, constituidas en un “Estado terrorista”, estuvieron allí para recordar que el orden y el poder no se rinden tan fácilmente ante la resistencia y las luchas democráticas. Y tal vez esto ha ocurrido porque la historia

colonial, la formación del Estado moderno basado en el exterminio y la naturalización de la violencia, así como los militares que asumen funciones de gobierno, han sido justificados por la intelectualidad de todos los tiempos. No negamos que otra parte tuvo palabras de repudio hacia aquellos hechos y propició miradas desde abajo, desde quienes resistían al poder; pero fue minoritaria. Las dictaduras militares no existen en soledad: poderes económico-civiles pero también los intelectuales, periodistas, artistas convergen en estos deseos concentradores de riqueza, racistas, autoritarios y hasta ominosos (así lo prueba la dictadura de 1976-1983). El “discurso del amo”, como sostienen los psicoanalistas para dar cuenta de la oclusión cultural de algunas situaciones, siempre fue una tentación tanto para las clases dirigentes como para muchos intelectuales argentinos⁶.

En efecto, la historia del poder de matriz colonial no ha sido lo suficientemente revisada; contrariamente, fue reafirmada por las elites poscoloniales criollas y por las sucesivas generaciones de la *intelligentzia* local. Las diferentes comunidades de pueblos indígenas fue-

ron denominadas “los indios”. Aníbal Quijano (2000) sostiene que, desde el momento en que los ibéricos pisan y nominan estos territorios, borran la gran variedad de culturas, idiomas, identidades y memorias (mayas, chimús, aymaras, guaraníes, etcétera) y, trescientos años después, quedan reunidos en la sola identidad de “indios”. Con este etnocidio identitario comienza un verdadero despojo del lugar de esos pueblos en la historia de la cultura de la humanidad. Dice Quijano: “...el patrón de poder fundado en la colonialidad implicaba también un patrón cognitivo, una nueva perspectiva de conocimiento dentro de lo cual lo no-europeo era pasado y de ese modo inferior, siempre primitivo” (ibídem: 221). Lo mismo podría plantearse en relación con los sectores populares que, como decíamos antes, son reducidos a la identidad de “cabecitas negras”.

Primero, la fuerza de las resistencias obreras durante todo el siglo XX y luego, a finales de siglo, la emergencia indígena en toda América Latina son las que pusieron una distancia a esa historia moderna/colonial, generadora de un capitalismo salvaje que no se satisface con recursos naturales y ganancias sino que busca un despiadado ordenamiento territorial — como desde el fondo de los tiempos— basado en un profundo sufrimiento social.

6 Agradezco a la psicoanalista Norma Barros por ayudarme a pensar este sugerente concepto.

Y aquí recurrimos nuevamente a Quijano (2000), cuando nos muestra la paradoja de mirarnos en el espejo europeo sin ser europeos (aunque algunos se parezcan o algún abuelo se parezca a ellos), operación que resulta en esa imagen parcial y distorsionada de América Latina. Cuando aceptamos aquella imagen como nuestra pero seguimos siendo lo que somos, se profundiza la tragedia. “Y como resultado no podemos nunca identificar nuestros verdaderos problemas, mucho menos resolverlos, a no ser de una manera parcial y distorsionada” (ibídem: 226). Esta figura del “espejo europeizante” en los tiempos actuales llega a límites impensables en el discurso de las dirigencias políticas, económicas, científicas. Boaventura de Sousa Santos (2006) apela a una imagen simbólica que da un personaje de Samuel Beckett cuando declara “Llévate mi espejo, él no precisa de mí”, Así, se construye (con la ayuda de intelectuales orgánicos y medios de comunicación) una imagen de la sociedad argentina que adquiere vida propia y se autonomiza de nuestras verdaderas imágenes de vida; cobra una realidad que quienes caminamos estos territorios sentimos extraña, ajena o, por lo menos, absurdamente parcial. Nuestra imagen sin el espejo europeo es desgarradora (como la de toda nuestra América) pero variada, rica en

culturas, en formas de producir, de conocer, de saber, de ser...

EL BICENTENARIO: UNA VISIÓN

En los inicios de la organización de la celebración del Bicentenario, el Gobierno nacional parece basarse en esa imagen parcial y distorsionada del espejo europeizante. Poco o nada se habla y reflexiona acerca de aquellos momentos fundacionales desgarradores, excluyentes, violentos, que nos marcaron. En la página oficial, se oculta esa historia cuando se resaltan los pensamientos que configuraron “la sociedad moderna”, interpretada además, exclusivamente, según el pensamiento social europeo (aquellos que piensan diferente “no utilizan un pensamiento científico”). En esos tiempos, el politólogo José Nun tiene a su cargo la Secretaría de Cultura de la Nación y la celebración (él usa el concepto “festival”, de Durkheim) tiene como objetivo “crear conciencia en la ciudadanía acerca de la importancia de la construcción misma del Bicentenario como un horizonte común, que le dé un sentido unificador a las obras y metas que debemos emprender de inmediato. Todo esto para decirles por qué el mayor objetivo al que podemos aspirar es que, en 2010,

alguien nos pregunte: “¿Dónde está el proyecto nacional?”, y nosotros podamos responderle: este día de fiesta es un día de celebración de nuestra independencia, de todas las cosas buenas hechas en el siglo que pasó y, sobre todo, del proyecto nacional que se viene desplegando en estos últimos cinco años. Este es el proyecto nacional: las escuelas, la justicia social, la prosperidad económica, el respeto a los derechos humanos, la concientización y la identidad nacional de toda la población, la disminución de la desigualdad, la consolidación de la democracia, todo esto es proyecto nacional. Por eso estoy firmemente convencido de que vale la pena empuñar nuestras mejores energías en producir con entusiasmo nuestro gran festival”.

Con esta fuerte creencia en “un sentido unificador”, el ex-secretario de Cultura cree poder saldar una historia traumática de devastación, saqueos y sufrimientos y tapar los traumas y catástrofes que el capitalismo y la matriz colonial de poder producen en nombre del desarrollo, del progreso. Se sigue mirando en el espejo europeizado que marca agenda (desconociendo la problemática indígena, el saqueo de recursos naturales, la cuestión alimentaria, etcétera).

La catástrofe existe y se resiste a ser ocultada en este siglo XXI, por más “festivales” que se programen. El trauma, el Pachakuti del

Antiguo Perú del siglo XVI, fue negado pero insiste tercamente en reaparecer, en ser entre nosotros, aunque las autoridades políticas lo ignoren, aunque pasen raudamente de la “heroica independencia” (por cierto, también “acriollada”, por la operación que consiste en ocultar el origen de la composición de los ejércitos libertadores) a la próspera “república de la soja”. Este presente distorsionado o, por lo menos, con una fuerte inversión de sentidos (como dice siempre Horacio Machado) es el que parece predominar en “el gran festival” del Bicentenario argentino oficial, y sobre el que, en aquellos primeros días, conduce José Nun.

Cuando todo parecía encaminado a la celebración de un nuevo centenario, con “sojeros” en vez de “ganaderos” y con la tradición de una cultura liberal “acriollada”, algo aconteció. En julio de 2009, la Presidenta decide relevar al secretario de Cultura, José Nun (a quien designa como embajador en Gran Bretaña), y nombra en su lugar a Jorge Coscia. El nuevo secretario tiene cierta trayectoria como militante del campo popular y como cineasta comprometido con temas sociales y políticos (excepto las causas indígenas, debemos aclararlo)⁷. Inmediatamen-

7 A fines de 2010 y comienzos de 2011, un grave problema relacionado con las tierras surgió en la comuni-

te después de asumir, la página web dedicada al Bicentenario cambia y comienza a vislumbrarse lo que finalmente ocurrió en la Semana de Mayo. El nuevo secretario explica: “El perfil de la celebración es federal y latinoamericano. Apunta a reivindicar la diversidad cultural y la construcción de identidad y de justicia. El pluralismo es otro de los factores esenciales, porque participan la totalidad de las provincias argentinas”. Un giro radical en relación con la propuesta de José Nun.

LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO EN BUENOS AIRES

Los pueblos de América Latina, en especial el argentino, tienen vocación de ocupar los espacios públicos. Las plazas, las grandes avenidas, los espacios abiertos se convierten en lugares de encuentro, de protesta, de marchas o de fiestas. Por eso, lo ocurrido desde el viernes 21

dad formoseña La Primavera, con el saldo de un indígena asesinado. Parte de la comunidad vino a reclamar a Buenos Aires y, en los debates acerca la reparación histórica de los territorios indígenas, el secretario Coscia apoyó a las autoridades provinciales acusadas hasta el cansancio de producir casi un etnocidio.

al martes 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires no es inesperado.

Quienes planifican los festejos terminan optando por una gran fiesta popular con el epicentro en Buenos Aires y con réplicas en cada provincia. Poco se supo antes de esos días acerca del contenido, pero el cambio de secretario de Cultura y la participación de Tristán Bauer, quien tuvo a su cargo el canal Encuentro, de alto contenido latinoamericanista, presagiaban que habría marcadas diferencias con las fiestas del Centenario (o con los “festivales” durkheimianos de José Nun).

En un principio, en los días previos, se construye un ancho corredor en la Avenida 9 de Julio y se monta un inmenso escenario, que parecen organizados para recibir, mostrar, deleitar y crear una situación donde los autores del hecho cultural están claramente del lado de los organizadores y arriba del escenario. Pero los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, los de las provincias y los latinoamericanos que llegan por esos días producen una transformación que convierte el festejo en un fenómeno cultural y político. Si a los festejos hubiesen asistido cien, doscientos, trescientos mil “espectadores”, la autoría del acontecimiento hubiese quedado en manos de los organizadores, pero, con una concurrencia tan intensa y com-

prometida (millones de personas), multitudes de todas las edades y condiciones sociales se convierten en coautores de la celebración. Indudablemente, la situación no hubiese sido la misma sin esta masiva afluencia.

La apropiación del espacio público, la colaboración en la organización —por momentos casi una autoorganización—, la ausencia de incidentes y el involucramiento (cantar, bailar, dialogar con los artistas) convierten al “público” en coautor. Le recuerdan al “poder” que los de abajo también son los que, finalmente, construyen los procesos y situaciones sociales y políticas.

El interrogante que se nos plantea es por qué la propuesta del Gobierno nacional logra tal respuesta. A mi juicio, se conjugan muchas cosas. Hubo una excelente oferta cultural: diversa y de alto nivel de calidad. La música era variada y el desfile del 25 de Mayo estuvo atravesado por dos criterios importantes: calidad artística y una cosmovisión del pasado y de los derroteros de la historia reciente que la mayoría de los argentinos siente como parte de su historia y de su vida.

Se hizo una propuesta cultural con la que muchas de las poblaciones urbanas y rurales de este país se sienten identificadas: una nación que no desea mirarse en el espejo de los

pueblos autoritarios sino en una Latinoamérica en plena búsqueda de su dignidad; el reconocimiento a quienes lucharon por la igualdad, la libertad, los derechos humanos, desde Tupac Katari a José Gervasio Artigas, desde el Che a Juan y Evita Perón, con sus errores y aciertos, pero con ese núcleo tenaz de justicia y libertad (recordemos que en la Casa Rosada se inauguró una galería de retratos de estas personalidades).

Tal vez lo más impactante del festejo fue un desfile callejero, el 25 de mayo a la tarde, a cargo del grupo artístico Fuerza Bruta, con varias carrozas donde se realizan 19 puestas en escena, mezcla de teatro con danza acrobática y una excelente escenografía, que representan distintas épocas de nuestra historia. El espectáculo apuesta a una sociedad que valora los esfuerzos de quienes trabajan honestamente y rechaza la especulación corrupta (lo cual se expresa en un cuadro de personajes que cuelgan y que reparten papeles sin valor durante las crisis financieras). Otras escenas representan a las Madres de Plaza de Mayo, iluminados sus pañuelos blancos bajo la lluvia, durante las famosas rondas; al Ejército Libertador, que da cuenta de una organización popular en la que no faltan los afrodescendientes; a los inmigrantes, llegados en un barco de 30 metros de lar-

go, que se mueven lentamente por las calles de la esquiva ciudad; a la “agricultura gringa”; al Éxodo Jujeño; a los golpes de Estado que prenden fuego a la Constitución; todo con variados dispositivos escénicos como agua, humo, música, además de excelentes intérpretes⁸.

En síntesis, una Filosofía popular-descolonial, latinoamericanista, progresista atraviesa los festejos que brinda el Gobierno nacional y dos millones de personas por día (se calcula que pasaron seis millones en total) se sienten identificadas, se emocionan, lagrimean y, seguramente, se sienten argentinos con cierto orgullo y cierta dignidad.

“MOSTRAR LA HILACHA”: LA ÚLTIMA CARROZA SOBRE EL FUTURO (PRESENTE)

Como vimos en el apartado anterior, la gran mayoría de las 19 imágenes de Fuerza Bruta sobre la historia del Bicentenario son sencillamente maravillosas, no solo por el nivel artístico sino por su contenido filosófico-político; sin

ausencias notables, cada cuadro nos permite reflexionar sobre los hitos históricos de estos 200 años. Los inmigrantes, literalmente colgados de esos barcos —como seguramente se sentían esos seres desterritorializados por la pobreza—, o los especuladores y sus víctimas de todos los tiempos y colores de dinero (pesos, australes, dólares) colgados en el vacío, generando vacío, fueron cuadros conmovedores. No obstante, el último cuadro sobre “el futuro” habilita a pensar que aquella otra mirada despreciativa respecto de las poblaciones subalternizadas está aún lamentablemente presente y que, ante el mínimo descuido, aparece con todas las connotaciones que comentaba en los primeros apartados de este trabajo: homogeneidad, educación sarmientina que nivele, iguale, haga desaparecer las diferencias culturales, étnicas, regionales.

Suelo comentar que, para imaginar el presente/futuro (no hay imaginario del futuro sin anclas en el presente)⁹, existen dos grandes posibilidades reflejadas en el cine futurista de calidad de años atrás (cuando imaginaban

8 Véanse algunos momentos en <http://www.taringa.net/posts/videos/5615886/Desfile-Bicentenario_-Fuerza-Bruta-_25-de-Mayo-de-2010_.html>.

9 Pensemos en el cine futurista, como *Children of men*, de Alfonso Cuarón, o *Avatar*, de James Cameron; todos tienen un ancla en el presente porque, inevitablemente, se imagina desde “hoy”.

cómo serían las primeras décadas del siglo XXI). Una es la estética del legendario cineasta Stanley Kubrick en *2001: Odisea del espacio*: un futuro blanco, incontaminado, donde la ciencia omnipotente controla y resuelve las dificultades, poblado de subjetividades conformadas casi sin deseos ni conflictos porque la socialización científica así lo habilita. Otra es la estética futurista de Terry Gillian, quien lanzó, un tiempo después que Kubrick, la película *Brazil*. El film presenta una sociedad con un Estado megaburocratizado, controlador y repleto de excesos, con trabajadores en deplorables condiciones laborales y de supervivencia; mujeres de las clases poderosas preocupadas por múltiples y frecuentes cirugías estéticas, en un escenario de violencia de todo tipo, naturalizadas por las poblaciones. Aun cuando Gillian nos muestra este marco desolador, también se centra en un sujeto, un protagonista que nunca pierde su capacidad de soñar, de crear el (im) posible lazo amoroso que —como la ternura para el psicoanalista Fernando Ulloa (1995)— todo lo restituye y permite un sentido para la reproducción social de la vida. Ese sujeto montado en un caballo alado que galopa por sobre la “realidad” reenvía al optimismo trágico del que nos habla Boaventura de Sousa Santos (2005).

Estas dos imágenes, el futuro blanco y perfecto, dominado por la ciencia, y aquel otro construido por los humanos, con sus grandezas, miserias, conflictos, técnicas y sueños, suponen dos modos de imaginar el siglo XXI, dos estéticas, dos formas de mirarnos en presente para imaginar futuros. El construido imaginativamente por la fiesta del Bicentenario estuvo más cercano al de Kubrick que al de Gillian; fue blanco, ordenado, lleno de computadoras y con música que sonaba oriental; los niños en la escuela “aprendían” a ser hombres de tiempos por venir (basta observar su obsesión por las *netbooks*). Los locutores, emocionados, destacan las dos grandes amarras para anclarnos y recibir / entrar / llegar con comodidad al futuro: la ciencia (la “sociedad del conocimiento”) y la educación (sarmientina).

¿Es así?

Repito, no hay futuro que no esté anclado en el presente y que ya convertido en pasado no deja marcas que podamos vislumbrar en los imaginados años que vendrán. Entonces, rastremos esas marcas del hoy para proyectar hacia delante, pensemos lo que realmente está en disputa, precisemos el papel de las famosas “tecnologías de punta” que otorga la tecnociencia, hagamos etnografías del día a día en las provincias, incluyendo prácticas educativas

recientes, y construyamos imaginariamente el Cuadro N° 20 del espectáculo de Fuerza Bruta sobre la base de esa proyección.

¿Qué ocurriría con un cuadro que mostrara las plantaciones de soja y los “mosquitos” o helicópteros fumigando en las narices de los niños banderilleros? ¿O a los campesinos e indígenas golpeados que pierden sus territorios (eso que desconoce el secretario Coscia)? ¿Qué sucedería si se mostraran las mineras que destruyen los cerros con grandes explosiones de dinamita a cielo abierto? ¿Qué pasaría si se hubiese mostrado la destrucción de los glaciares? ¿O las vertientes y arroyos contaminados con cianuro, mientras el gobernador Gioja sonreía con su poncho celeste en el lugar de los festejos? ¿Qué pasaría si se mostraran las escuelas provinciales que adaptan los planes de estudio a las necesidades de las empresas mineras? ¿Cómo reaccionar si mostraran a los profesores, padres y alumnos de la Escuela Normal de la Rioja, a la que asistió Rosarito Vera, marchando contra el despojo del edificio histórico? ¿Cómo representar semejantes contradicciones con la narrativa crítica respecto de los órdenes dominantes en los cuadros del pasado? ¿Cómo comprender que se estén dejando estas marcas cuando se miró crítica y lúcidamente el pasado?

En la década de los noventa, nadie hubiese apostado a que en 2010 se mirara críticamente aquel horror. Por eso no es tan descabellado fantasear con que, dentro de un tiempo, se pueda revisar con la misma mirada, radicalmente crítica, este sistema extractivo de la economía argentina, con su aparcería política, que involucra universidad, educación, justicia. Lo que no se sabe, volviendo a la ciencia ficción, es quién será el organizador de la fiesta popular donde se celebrará la superación de ese sistema. Podemos descartar a unos cuantos; no nos imaginamos que puedan llevar a cabo tal transformación Gioja ni sus descendientes (no sabrían cómo construir el “doble discurso”), ni los descendientes de los políticos partidarios actuales, educados en pleno neoliberalismo, ni los que sostienen las posiciones más honestas y defensoras de los recursos naturales ya que, con esa virtud no llegarán a ser gobierno. ¿Estamos convencidos de que las multitudes, así como festejaron la crítica a la especulación financiera de los noventa, aplaudirían la voluntad superadora del extractivismo económico? Es una duda, dados los poderosos aparatos ideológicos con los que se mueven los hombres del poder, sobre todo los políticos claramente de derecha. De allí la necesidad de dar grandes batallas culturales, incluso obligando al

Gobierno nacional a que unifique su discurso. Porque la nación se forma con culturas pero también con territorios. El dilema siempre está en cómo dispersar el Estado¹⁰ o construir una política a distancia de él.

PENSANDO EL BICENTENARIO, A MODO DE CONCLUSIÓN

Lo que ocurrirá a partir de ahora nadie lo sabe pues es un proceso abierto. El Gobierno nacional genera un acontecimiento cultural de mucha significación que solo gente necia puede no advertir. Pero, como dice la frase popular, “muestra la hilacha” (eso que querría ocultar). Hay que recordar que, junto con la búsqueda de la igualdad, los pueblos piden el respeto por la naturaleza y exigen distancia respecto de las corporaciones económicas que saquean recursos naturales; muchos desprecian a los saqueadores de recursos tanto como a los especuladores financieros de los cuadros del desfile. Por eso hay que interpelar al Gobierno para que le asegure continuidad a la cosmovisión desplegada estos días y para exigirle que vaya con-

cretando una construcción social, económica y política en esa dirección. Construcción consciente de nuestro territorio que, junto con las culturas, son los dos pilares fundamentales de nuestra identidad nacional. Aunque sabemos de la dificultad de la tarea, hay que sostener ese reclamo como apuesta decolonial.

Podemos plantearnos: ¿se puede pensar el pasado en una trama cercana a los postulados de las opciones descoloniales y actuar en el presente enmarcados en el neoliberalismo colonial, que entrega recursos, posterga sectores populares, concentra riquezas, aunque reivindica nuestra posición en América Latina? Parece que sí, la mayoría de los países con los denominados “gobiernos progresistas” actúan bajo este doble discurso. Los compromisos y —en el caso de la Argentina— la aparcería con el poder globalizado tienen mayor fuerza política que los lazos culturales, con un pasado de resistencias y de búsqueda de dignidad frente a los órdenes de poder. Además, como vimos en el último cuadro de Fuerza Bruta, algunos políticos creen posible expresar sus pensamientos anclando un discurso que visibiliza a los sectores populares, a los indígenas, a los afrodescendientes, valora la agricultura de alimentos, critica la especulación, a los que desconocieron la Constitución (ahora

10 Véase Raúl Zibechi en este libro.

con tratados internacionales de avanzada en materia de derechos indígenas y ambientales) y, en la práctica político-institucional, optar por el proyecto de “modernización”, crecimiento económico basado en el desarrollismo extractivo (minería, soja, petróleo), en una industrialización azarosa, complemento de importaciones absurdas (como las de China), y en una distribución de los ingresos fiscales (el “mito del excedente”), vía dispositivos clientelares para las “políticas sociales”.

Este doble discurso, que mantuvo en los últimos años la consigna de “reducir la desocupación, la pobreza y la indigencia”, tuvo una importante crisis hacia el final del año del Bicentenario. Miles de “sin techo” ocuparon espacios públicos y contaron frente a las cámaras de televisión sus sufrimientos, sus miserias, denunciaron sus bajos ingresos, la falta de apoyo, mientras una clase media con acceso a pequeños patrimonios mostró una cara racista, discriminadora, xenófoba, estimulada por el Jefe de Gobierno porteño. ¿Participó esta clase media de los festejos del Bicentenario? ¿Pueden convivir en un mismo espacio revisiones críticas de nuestra historia, reexaltaciones de nuestros rasgos de resistencia y solidaridad, con presentes egoístas y racistas? ¿Pueden convivir la exaltación a la biotecnología, base

del agronegocio sojero, con los discursos inflamados por descubrir las condiciones laborales de los trabajadores rurales de sus empresas? Son interrogantes de complejas respuestas.

A mi juicio, la posibilidad de celebrar los 200 años con una mirada cercana a las propuestas descoloniales se convierte en una cuestión de humores personales, que pueden alterarse (como pudimos comprobar con el cambio, a último momento, del secretario de Cultura), mientras no se despliegue un pensamiento crítico sobre nuestro presente por parte de las más altas dirigencias nacionales. En un país que ha pasado por los horrores de los setenta y de los noventa, no alcanzan pequeños logros culturales (el Bicentenario, la ley de matrimonio igualitario, la ley de medios, etcétera) para modificar un sendero que aparece como una huella profunda, donde es difícil evitar caer. Los avances que se logran para apartarnos y forjar nuevos senderos se dan por la tenaz resistencia y lucha de unas poblaciones que, desde el fondo de los tiempos, han intentado hacer prevalecer los principios de una sociedad igualitaria, solidaria y libertaria. Ese espacio de movimientos sociales o poblaciones en lucha aparecen con organizaciones poco consolidadas (en comparación a lo que fue el movimiento obrero en otros tiempos), con di-

ficultosas construcciones de redes nacionales e internacionales y desgarradas entre las tibias creencias de que hay que apoyar los intentos progresistas del gobierno de Cristina Kirchner y los arrinconamientos que los agentes de poder hacen en sus territorios y en sus vidas. En octubre de 2010 falleció Néstor Kirchner, factor muy importante en la construcción del modelo de país que este grupo en funciones de gobierno lleva a la práctica. Es decir, el año del Bicentenario ha transcurrido cargado de sucesos institucionales importantes, así como de resistencias y luchas.

Para cerrar, recordemos que las efemérides son oportunidades para pensarnos como sociedad y, en tal sentido, este Bicentenario de la Revolución de Mayo nos invita a la reflexión sobre nuestra historia, nuestros orígenes, nuestro presente, desde muchos puntos de vista: disciplinarios, de ubicación geográfica, social, cultural, etcétera. Desde hace un tiempo, tenemos un ensamble de voces que, por momentos, compone una música que acepta las reglas de consonancia de un orden establecido, sedimentado y naturalizado, que viene desde la matriz colonial; en otros momentos, pareciera que esas voces intentan romper los códigos de la tonalidad para suscitar otras imágenes musicales disonantes, plenas de belleza y novedad.

Es cuando intervienen otros pensamientos de este tiempo, *de otros tiempos* (los intelectuales indígenas, los que pensaron “otras naciones”, por ejemplo), todos imbricados en un *aquí y ahora* con la urgencia de las poblaciones que apuestan a un cambio para lograr una sociedad más justa, libertaria y equitativa.

BIBLIOGRAFÍA

- Castro Gómez, S. 2000 “Ciencias Sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro” en Lander, E. (comp.) en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (Buenos Aires: CLACSO / UNESCO).
- De Sousa Santos, B. 2006 *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. (Encuentros en Buenos Aires)* (Buenos Aires: CLACSO).
- Nun, J. (comp.) 2005 “Debates de Mayo I. Nación, Cultura y Política” (Buenos Aires: Gedisa).
- Ocampo, B. 2004 *La nación interior* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Quijano, A. 2000 “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Lander, E. (comp.) *La colonialidad del saber:*

eurocentrismo y ciencias sociales (Buenos Aires: CLACSO / UNESCO).

Sábato, H. 1989 *Capitalismo y Ganadería en Buenos Aires, La fiebre del lanar* (Buenos Aires: Sudamericana).

Ulloa, F. 1995 *Novela clínica psicoanalítica* (Buenos Aires: Paidós).

OTRAS FUENTES

<<http://www.bicentenario.argentina.ar>>.

CAMBIAR DE ESPEJO: MIRARNOS EN AMÉRICA LATINA

REFLEXIONES, DESDE LA ARGENTINA, INSPIRADAS EN LAS ENTREVISTAS AL DR. NOAM CHOMSKY*

Las sugerentes entrevistas realizadas al intelectual norteamericano Noam Chomsky dan pie para reflexionar acerca de los problemas de la construcción del Estado-nación en América Latina así como sobre las formas comunales de vida de muchas poblaciones que habitaban/habitan en sus territorios y que resurgen como opciones políticas en la última parte del siglo XX. Querría detenerme en la aparición de estos procesos en la Argentina ya que su fuerte imaginario social, la ubica como el país más “europeizado” de América Latina; como una Nación donde la “colonialidad” (Qui-

jano, 2000) caló tan hondo en su trama cultural que los sectores “pensantes” o “progresistas” tradicionalmente se plantearon solamente una parte de estos problemas (el surgimiento del Estado) pero muy pocas veces la cara oculta de la modernidad capitalista: la operación cultural de subalternización de las diversas poblaciones involucradas. La cuestión indígena quedó recluida a una antropología colonial y con influencias marcadamente racistas¹; cuando hoy

* Giarracca, N. 2011 “Cambiar de espejo: mirarnos en América Latina. Reflexiones, desde la Argentina, inspiradas en las entrevistas al doctor Noam Chomsky” en Meyer, L. M. y Maldonado, B. (coords.) y AAVV *Comunalidad, educación, y resistencia indígena en la era global. Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano* (Oaxaca de Juárez: CSEIIO).

1 La escuela “fenomenológica etnológica argentina” del antropólogo de origen italiano Marcelo Bórmida, formado en ciencias naturales en Europa, con claros rasgos racistas biologicistas, marcó la disciplina tanto en la Universidad de Buenos Aires como en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Durante 25 años fue una escuela hegemónica, y casi única en el período de la dictadura militar donde tuvo su momento de apogeo. Con la muerte de Bórmida en 1979, su esposa continuó con su línea. A partir de 1983 comparte el campo

aparece, es por la insistencia de intelectuales como Osvaldo Bayer² y de los propios actores sociales (las comunidades indígenas junto con poblaciones campesinas) en el dramático escenario de la expansión agraria sojera.

En los estudios poscoloniales la noción de comunidad aparece como un fuerte dispositivo contra el Estado y su organización capitalista; esta comunidad (o comunalidad como la llaman los oaxaqueños³) se ofrece como un campo político de los subalternos, excluidos y dominados y como una clara “opción decolonial” (Mignolo, 2008). En este punto el interrogante que cabe para un país como la Argentina, es en qué medida los sectores populares mayoritarios en estos tiempos neoliberales de desocupación quedan al margen de las posibilidades de las opciones decoloniales que otorga la “comunalidad” tan presente en Bolivia, Ecuador

académico con escuelas con influencias norteamericanas, europeas y posmodernas.

2 El intelectual Osvaldo Bayer así como el escritor David Viñas se ocuparon de denunciar durante el siglo XX desde sus ensayos y novelas el oscuro comienzo del Estado-nación “blanqueado”. Viñas nos habla del etnocidio “como el cadáver oculto de la habitación del fondo” (citado por Ocampo, 2004).

3 Véase Esteva et al., 2008.

y México. Si bien en estos últimos países, en la “memoria de mediano plazo” (Prada, 2005) también aparecen los sectores obreros, en la Argentina a diferencia de ellos, fueron el centro de las luchas sociales, culturales y nacionales de gran parte del siglo XX mientras los agricultores e indígenas tuvieron un lugar menos destacado. Ese es un problema a pensar en esta etapa política del país, sobre todo después de la corta vida de las organizaciones de trabajadores desocupados y la cooptación de algunas de ellas por parte de los gobiernos pos-crisis 2001-2002. El otro aspecto es el resurgimiento de la voz indígena, campesina y de pueblos cordilleranos (en los pies de la Cordillera de los Andes), como uno de los fenómenos más significativos de este siglo. Los otrora marginales en la construcción de Estado-nación y capitalismo argentino, hoy son significativos actores que lo cuestionan radicalmente. No obstante esta importancia, en términos de volumen poblacional representa una clara minoría en relación con las grandes masas urbanas desocupadas o precariamente ocupadas de las grandes urbes del país, que son en última instancia, quienes definen las contiendas electorales.

La formación de la Argentina moderna comienza a consolidarse con la llamada “generación del 80” (1880), precisamente con la

invasión militar a los últimos territorios indígenas libres, después de siglos de arrinconamientos y masacres. Hasta esos años algunas de las poblaciones indígenas coexistían con los criollos, los españoles y sus descendientes de la época colonial, con las poblaciones de origen africano⁴ y con las nuevas migraciones de españoles e italianos que venían como asalariados o colonos agrícolas. Se calcula que entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, entraron al país más de cinco millones de europeos de los cuales casi las tres cuartas partes fueron españoles e italianos. Estas mezclas étnicas representaban un gran obstáculo para las elites gobernantes que desde Domingo F. Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, buscaban la “civilización” modernizadora apelando a la migración europea nórdica y al blanqueamiento y educación escolar de la población. Afanosamente se estimulaba la entrada al país de poblaciones europeas blancas, nórdicas; así los europeos mediterráneos que efectivamente llegaron a estas tierras,

4 Los afrodescendientes fueron el 30% de la población en 1810 y fueron diezmos por epidemias durante el siglo XIX dadas las condiciones de vida ominosas en las que se encontraban y las guerras a donde se los enviaba en primer lugar.

más que una solución, pasaron a formar parte del problema.

LA EDUCACIÓN

Y en la Argentina, tal como lo describe Chomsky para Estados Unidos, la conversión homogeneizadora se fue desarrollando como procesos de control en todos los aspectos de la vida y el sistema educativo cumplió aquí, como allá, la función de un dispositivo de primer orden. La pedagogía constituyó el gran artífice de una subjetividad moderna y al mismo tiempo de “la invención del otro”, de la alteridad que se requiere en el proceso de conformación de un determinado sujeto (moderno/blanco/educado). Castro Gómez (2000) se ocupa de relacionar los momentos fundacionales de las naciones latinoamericanas, las “constituciones” (el momento de “inventar ciudadanía”, es decir un campo de sujetos homogéneos que hicieran posible el proyecto moderno/capitalista) con la educación. La escuela busca, dice el autor, introyectar una disciplina sobre la mente y el cuerpo, y el comportamiento del niño deberá ser controlado, vigilado y sometido a la adquisición de conocimientos, capacidades, hábitos, modelos culturales, estilos de vida que los ha-

bilite a convertirse en “productivos” a la sociedad proyectada (ibídem: 149).

En la Argentina “el padre del aula” (espacio físico y simbólico del aprendizaje escolar) es Sarmiento quien generó no solo la legislación educativa básica que acompañó la Constitución de 1853 (a la que Alberdi contribuyó con sus ideas “ilustradas”) sino los símbolos, prácticas y discursos de la educación pública que perduran hasta la actualidad. Sarmiento fue plenamente consciente de que así como el formato de la Constitución se había inspirado en los grandes pensadores del Norte, la educación debería seguir los mismos pasos. En un Congreso Pedagógico de 1881 se interroga: “¿Educamos nosotros argentinamente? No; educamos como el norteamericano Mann, el alemán Froëbel y el italiano Pestalozzi nos han enseñado a educar a los niños. Los hacemos aprender de manera racional todo aquello que hoy se enseña en las escuelas bien organizadas del mundo” (Citado por Ocampo, 2004: 47).

Sarmiento representó no solo el político-intelectual de América Latina que pretendió imponer a sangre y fuego la “civilización”, es decir el capitalismo/moderno/colonial, sino quien se ocupó de perseguir y prohibir todo rastro cultural de los pueblos indígenas pero también de los caudillos en resistencia de esos pueblos

cordilleranos que mencioné antes y donde, paradójicamente, él había nacido⁵.

La propuesta educativa “sarmientina” se basaba en el más estricto control cultural, la homogeneización hasta en los modos de vestirse imponiendo para eso un guardapolvo (delantal) blanco que tapara las vestimentas de los niños, prohibiendo los idiomas de las comunidades indígenas (guaraní, quechua, mapuche, etcétera) y vigilando muy de cerca los intentos de las comunidades europeas por mantener sus lenguas o dialectos. Los niños con acentos diversos fueron descalificados, burlados y pasaron a formar parte de los epítetos que aún hoy circulan por la cultura discriminante argentina: “tanitos” (italianos) “gallegos” (cualquier español), “rusito” (judío de cualquier origen nacional) “turco” (cualquier descendiente de árabes). Con las migraciones de países limí-

5 En su novela *Facundo*, una de las mejores obras literarias de su tiempo, Sarmiento se ocupa de denotar y advertir de la peligrosidad de un criollo riojano, caudillo de gran coraje a quien le atribuye rasgos ominosos que relaciona con las condiciones ecológicas del “desierto” (campo cordillerano). *Facundo* Quiroga es recordado hoy por estos pueblos enfrentados a la expansión de la minería a cielo abierto, como el primero en defender sus cerros de la codicia europea en los comienzos del siglo XIX.

trofes se sumaron los “bolitas” (bolivianos) y “paraguas” (paraguayos).

Quienes jerarquizaron y subalternizaron a “los otros” fueron las élites blancas pero también se fomentaron las discriminaciones entre los propios grupos subalternos. Una de las dramáticas consecuencias de esta operación cultural fue la racialización, inferiorización y jerarquización social que significó el calificativo “cabecita negra” usado para la emergente clase obrera, a mediados del siglo XX. En fin, “cabecitas negras”, “indios”, “tanitos y galleguitos”; “rusitos y turcos” generaron esa alteridad que el Estado-nación requiere para formar la identidad ciudadana blanca, educada, civilizada que pasaría a formar parte de “la república” imaginada después de la operación de reprimir y ocultar las diferencias étnicas, culturales y sociales. República que se miró en un espejo europeizante que le devolvió una imagen falsa y distorsionada a esa otra que nos devuelve la buena literatura y el arte en general⁶; la ima-

6 Por ejemplo la obra pictórica de Antonio Berni: “La huelga”, “Juanito Laguna”, “Ramona Montiel”; el propio *Martín Fierro* de José Hernández de mitad del siglo XIX y las obras de Roberto Arlt, Leopoldo Marechal, Germán Rozenmacher (“Cabecita negra”) y por supuesto, de Viñas y Bayer.

gen de la diversidad de tonos de piel, idiomas y acentos, color de ojos, modos de ser niños, mujeres, ancianos. Esta distorsión identitaria le impidió a las élites gobernantes generar una agenda de los problemas que en el proyecto de Estado-nación, aún en su propia lógica, tenía que tomar en cuenta y solucionar⁷.

En síntesis, para estas generaciones que construyeron la nación argentina en el siglo XIX, poblar con europeos los temidos desiertos (en las imágenes del territorio que Sarmiento difundía) y educar, representaban las metas más importantes para lograr los requerimientos de un Estado capaz de acompañar el desarrollo y progreso que aspiraban. Y en los 50 años que van de 1880 a 1930, el deslumbrante desarrollo agroexportador puso, en efecto, al país entre los de mayor crecimiento económico y se creyó que “poblar y educar” habían

7 Tal vez fue solo el peronismo, el gobierno del General Juan Perón de 1945-1955, quien se percató de esta situación y otorgó valor político y generó dignidad tanto en esos sectores proletarizados, “los cabecitas negras”, “los descamisados”, como a los distintos sectores del interior del país. Como nos dice Beatriz Ocampo (2004), de este modo el peronismo pasó de representar un movimiento político a otro político-cultural y eso explica en parte su persistencia posterior en la escena política argentina.

sido dispositivos capaces de crear una nación blanca (la del primer centenario de la independencia de España en 1910). Para esa nación del Centenario (como para esta que se prepara para recibir el Bicentenario en 2010) no existieron los etnocidios, apropiación salvaje de la tierra, subalternización de las poblaciones en nombre de un capitalismo que prometía un lugar reservado para pocos países. La crisis de 1930 dio por terminado esa ilusión y a la Argentina les esperaba una historia cíclica de democracias y dictaduras que finalizaría hace 25 años cuando se puso fin a la sangrienta dictadura de 1976-1983.

EDUCACIÓN, TERRITORIOS Y RESISTENCIAS

La Argentina forma parte de esa América Latina que Perry Anderson describe como el territorio donde se realizan el mayor número de resistencias nacionales, sociales y culturales de este complicado mundo. El siglo XX no solo es recordado en este sur por las grandes e innumerables huelgas obreras y los levantamientos de colonos agrícolas europeos reclamando tierras, sino por largas marchas hacia Buenos Aires de las comunidades indígenas del norte,

el “Malón de la Paz”, en un insistente reclamo de sus tierras ancestrales arrebatadas por los propietarios de la “próspera” industria cañera-azucarera. Las ideas anarquistas y socialistas que habían portado aquellos migrantes europeos que desilusionaron a Sarmiento y Alberdi, junto a pensamientos de signo nacionalista como el Grupo FORJA⁸ (Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Juan José Hernández Arregui, etcétera); la persistencia de un pensamiento indígena recuperado por intelectuales latinoamericanos como José Carlos Mariátegui o la propia voz del indígena aymara-boliviano Fausto Reinaga y el llamada pensamiento “dependentista”, sobre todo el de Don Pablo González Casanova, marcaron los pensamientos que acompañaron estas resistencias.

El “mundo obrero” de las grandes ciudades generó heroicas luchas frente a las dictaduras cíclicas y los procesos de concentración económica transnacionalizada. También fue el que mayor atención del Estado concentró: la educación y el control de sus territorios (el

8 Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, FORJA, fue una agrupación política fundada en 1935, que actuó dentro de la esfera de influencia de la Unión Cívica Radical, y se disolvió en 1945, cuando asume el peronismo.

“barrio obrero” alrededor de la fábrica) fueron focos de atención represivos de los gobiernos militares. Por ejemplo en la populosa región industrial denominada “La Matanza” se crearon batallones de policía represiva especiales que actuaban durante las huelgas de fábrica y hacían trabajo de “inteligencia” en los barrios. Otro tanto se podría decir en materia educacional donde las rígidas estructuras burocráticas incluían la figura del “inspector”, una especie de “policía pedagógico” que llegaba a una escuela y presenciaba una clase sin permiso alguno o el “celador”, quien cuidaba especialmente la conducta de los niños y jóvenes.

Frente a este orden de dominación (omninoso por cierto) las múltiples resistencias juveniles de la época, centraron esfuerzos en el nivel del territorio y la educación. Y esto porque en la Argentina, como también lo explicita Chomsky para su país, “los años sesenta fueron un período de surgimiento de activismo...”. Y en ese clima “sesentista y setentista”, se valoraba la organización barrial-territorial y se la fomentaba para lograr autonomía del apartado burocrático político de las dictaduras así como para reclamarles y arrancarles derechos sociales y ciudadanos. El supuesto de esta actividad territorial era la fuerte creencia, de impronta “gramsciana”, en una “cultura

popular” (un núcleo de “buen sentido”) que incluía la solidaridad, la resistencia cotidiana y que daba sustento a esa política plebeya representada principalmente por el peronismo combativo y odiado por las clases dominantes. En algún sentido el barrio de aquellos tiempos se equipararía a la “comunidad” campesina e indígena, sobre todo por ese fuerte sentimiento solidario que provenía del conocimiento de los hombres entre sí dentro de las fábricas cercanas, y la sociabilidad de las mujeres y niños en un espacio marcado y cuidado por ellos, un “lugar practicado” (en el decir de De Certeau) por estos sectores subalternos.

Cambiar los ejes de la educación liberal “sarmientina” constituía otro eje del activismo de aquellos años. En 1968 se formaba en la “CGT de los Argentinos” (Confederación General del Trabajo), constituidas por sindicalistas luchadores y honestos desprendidos de la CGT oficial, una Comisión de Educación destinada a: “propender a la formación de la conciencia gremial y política de los sectores docentes argentinos; Lograr la nacionalización de dichos sectores de clase media en su gran mayoría —apartándolas de las influencias de corrientes liberales en todos sus aspectos—; Difundir los postulados de la CGT de los Argentinos...; Tomar contacto con todas las entidades que

agrupan a los docentes argentinos, a fin de organizar sus luchas con las que vienen librando los trabajadores de todo el país” (Comunicado de Prensa de la CGT de los Argentinos) Asimismo, no es casual que los hermanos Arancibia, maestros rurales tucumanos y fundadores del sindicato de la provincia, fuesen asesinados en el estreno de la dictadura militar de 1976-1983.

En la corta “primavera democrática” de 1973-1974⁹ donde los activistas asumieron algunas responsabilidades públicas, era habitual la visita de Paulo Freire al país y sus postulados recorrieron no solo los rincones donde se diseñaban las políticas públicas alternativas sino las escuelas de todo el país. En efecto, recuperado ese ministerio en 1973, arrebatado a esa mezcla de liberalismo “sarmientino” y derecha católica que lo controlaba durante las dictaduras, aparece una experiencia muy interesante. Fue la Dirección Nacional de Educación Adulta (DINEA) que retomaba los postulados de Paulo Freire y trataba de descentralizar los programas educativos recuperando las diversidades poblacionales provinciales. Aun con la

poca información que se cuenta sobre esta experiencia, todo indica que no se llegó a discutir la posibilidad de la “educación bilingüe” para las regiones de comunidades indígenas¹⁰.

POS-DICTADURA Y CONSTRUCCIONES DEMOCRÁTICAS

Los barrios obreros fueron centro del terror y represión durante la “maldita dictadura” (1976-1983), cuando retornan los gobiernos civiles, el trabajo industrial había disminuido 25%, los delegados de sindicatos combativos habían desaparecido y los salarios eran los más bajos desde la época de posguerra; reinaba el trabajo informal y el miedo generalizado. La educación había vuelto a la centralización desde Buenos Aires y a la eterna ambición —tanto de dictaduras como de gobiernos civiles— de homogeneizar a las diversas poblaciones en las escuelas. Los “liberales” (nativos) ahora devenidos en “neoliberales” y las sórdidas derechas autoritarias habían hecho su trabajo con un costo

9 Si bien el segundo gobierno peronista fue de 1973 a 1976, cuando se produce el golpe de Estado, con la muerte del Juan Perón en 1974, se terminan todas las posibilidades de transformación que la etapa tuvo.

10 Agradezco al sociólogo Pedro Krotsch, Director Nacional de Educación Agrícola de aquellos años, ayudarme a recordar aquellos tiempos y corroborar la información que aquí se presenta.

de treinta mil desaparecidos, miles de presos y de exiliados. En materia de política económica poco o nada pudieron revertir desde el Estado estos gobiernos de los 25 años de democracia; el “mundo obrero” derivó en el “mundo de desocupados” o precarizados, objeto de políticas sociales focalizadas de los organismos multilaterales de crédito (como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) que se entroncaron con las políticas clientelares de los aparatos del “peronismo conservador” (vaciado de su contenido fundacional); asimismo surgieron procesos de pauperización y violencia como ocurre en todas las grandes urbes de América Latina. Sin embargo un activismo de nuevo signo recorre esos mundos urbanos y una preocupación principal vuelve a ser la educación. Los denominados “Bachilleratos Populares” para jóvenes y adultos¹¹ florecen por barrios donde estudiantes universitarios en articulación con organizaciones territoriales, propusieron otros programas de enseñanza y son ellos mismos quienes trabajan educativamente con los jóvenes y adultos

marginados por el orden neoliberal. Muchos de estos bachilleratos tienen reconocimiento oficial y piensan extender la experiencia a la educación primaria (primera etapa educativa). Pero lejos se está de aquellos barrios obreros que nos atrevimos a comparar con las comunidades campesinas o indígenas.

Entonces, al margen de estos escenarios de experiencias urbanas aún muy incipientes, el nuevo siglo encuentra a la Argentina muy cerca de las mismas resistencias populares de toda la América Latina. El centro de las mismas ya no emana solamente del “mundo obrero” sino de los mundos de aquellos actores sociales otrora marginales del capitalismo industrial y agroexportador pampeano. La centralidad del capitalismo financiero y una nueva geopolítica internacional basada en la expropiación de los recursos naturales, conducen a este desplazamiento de las resistencias de las grandes ciudades a los pequeños poblados, ciudades intermedias (menos de 50 mil habitantes) y a las comunidades campesinas e indígenas. La lucha por la tierra y el territorio, la defensa de las montañas cordilleranas amenazadas por la actividad de la minería a cielo abierto, la expansión de la soja y otros cultivos transgénicos, la actividad forestal ligada a las grandes papeleras contaminantes de los ríos, la amenaza a las reservas

11 Paralelamente estas experiencias de “Bachillerato Populares” fueron surgiendo también en distintas fábricas recuperadas por sus trabajadores tanto en Capital Federal como en el conurbano bonaerense.

acuíferas, a la biodiversidad, los montes, las selvas, los glaciares... son los nuevos rostros de un capitalismo salvaje que rememora la etapa de saqueos y pillajes coloniales. Y esta nueva realidad nos acerca a las problemáticas del resto de América Latina y habilita un diálogo con los pueblos hermanos acerca de los nuevos pensamientos, lo que llamamos “opciones decoloniales”, emancipadoras y libertarias. Por primera vez en nuestra historia, por ejemplo, se discute en las comunidades indígenas la educación bilingüe; por primera vez el reconocimiento identitario indígena forma parte de las demandas de grupos campesinos; por primera vez el Estado debe aceptar que existen poblaciones con derecho a su cultura, su lengua, su autonomía, su territorio como lo establece la legislación internacional.

La vecindad con Bolivia y su denso proceso de transformación, la circulación de intelectuales latinoamericanos comprometidos con los movimientos sociales y los cambios institucionales pero, sobre todo la emergencia de la voz pública de referentes indígenas y campesinos de estos territorios acercan la América profunda a mi país. La voz del Estado y los sectores dominantes (y acomodados en general) sigue insistiendo en la imagen del espejo europeizante, no obstante el pasado se resiste a ser ocul-

tado. Un mapuche nos recordó en un seminario en plena ciudad de Buenos Aires en 2006: “Hace un rato, cuando esperaba afuera a que terminara la pausa y trataba de concentrarme en lo que iba a decir, tuve una sensación de enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque recordaba que hace casi cien años por esta misma calle (la Avenida Corrientes) pasaba nuestro cacique; lo llevaban a La Plata donde terminó por morir-se. Pensaba también en lo que habrá sentido el cacique Pincén cuando lo llevaban encadenado a la isla Martín García. Nuestra tradición está inserta en la tradición de esas mismas luchas. Ellos, como hoy nosotros, trataron de defender el espacio vital para seguir viviendo como lo habían hecho hasta entonces” (Chacho Liempe, mapuche del Consejo Asesor Indígena, véase en Liempe, 2008: 124)

Los mapuches, arrinconados por el poder de Benetton y Soros (que arrebatan sus territorios), quienes, además, se levantan en su solo grito con sus hermanos chilenos y el *qullamarka* kolla (que reclaman 1.500.000 ha de territorio en el norte del país) nos acercan a las luchas latinoamericanas. También las asambleas de los pueblos cordilleranos (Esquel, Famatina, Chilecito, Andalgá...) que, como las comunidades peruanas, ecuatorianas y las guatemaltecas, denuncian el saqueo de la

actividad minera transnacional. Todos estos pueblos argentinos son minoritarios a la hora de emitir los votos para elegir autoridades y el grueso de la población urbana está inserta en la trama clientelar del viejo, conservador y desgastado peronismo. Aun así, los aires de transformaciones de países que exigen el diálogo intercultural al estilo de Bolivia y Ecuador y que reflexionan sobre otros modos posibles de Estado (plurinacional o pluriétnico) o los que soplan desde más al norte, al estilo del segundo zapatismo de “un mundo donde quepan todos los mundos”, llegan y refrescan los apelmazados pensamientos coloniales que perduran en espacios centrales de la Argentina.

Cuando leí al Dr. Noam Chomsky me di cuenta de que estas resistencias y propuestas que emanan de la América profunda, resuenan en toda la Indo-afro-América, desde Canadá a la Argentina aunque los derroteros históricos hayan sido diferentes y sus manifestaciones también.

BIBLIOGRAFÍA

- Castro Gómez, S. 2000 “Ciencias Sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro” en Lander, E. (comp.)
- La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (Buenos Aires: CLACSO / UNESCO).
- Esteva, G. et al. 2008 *Cuando hasta las piedras se levantan. Oaxaca, México, 2006* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Liempe, C. 2008 “Resistirse a la desaparición. La experiencia del pueblo mapuche” en Giarracca, N. y Massuh, G. (comps.) *El trabajo por venir* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Mignolo, W. 2008 “El vuelco de la razón: sobre las revoluciones, independencias y rebeliones de fines del XVIII y principios del XIX” en <www.otrosbicentenarios.blogspot.com>.
- Ocampo, B. 2004 *La nación interior* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Prada, R. 2005 “Sobre la caracterización de la formación social-cultural-territorial”, conferencia en el Instituto Goethe (Buenos Aires) inédito.
- Quijano, A. 2000 “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Lander, E. (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (Buenos Aires: CLACSO / UNESCO).

TRES PARADOJAS PARA REPENSAR LA POLÍTICA*

Desde el fondo de los tiempos, América Latina recupera hoy una memoria marcada a fuego por la desposesión de sus territorios; primero por los españoles, luego por los criollos en connivencia con poderes imperiales. Territorios vastos, de abundante vegetación y cambiantes climas sufrieron el saqueo de sus riquezas; la población originaria fue explotada y finalmente condenada a lo que —unos cuantos siglos después— un presidente norteamericano denominó como subdesarrollo. Igual que el término “desarrollo”, rara vez una palabra fue tan universalmente aceptada desde el mismo día de su acuñación política en 1949 (Esteva, 2001). El presidente norteamericano Harry Truman la empleó para identificar una calamidad específica que afectaba a la mayor

parte de los seres humanos y a la mayoría de los países fuera de los Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa. Para Gustavo Esteva, “desarrollo” aparece como un algoritmo: es un signo arbitrario cuya definición depende del contexto teórico en el que se inserte; algo así como si cada uno (personas o grupos) pudiera describir las condiciones ideales para las mejores aspiraciones humanas. Más que un término cognitivo, sería un vector emocional.

El discurso hegemónico otorgó al “desarrollo” el sentido de progreso, avance, mejoría, evolución positiva. Por eso fue y, en alguna medida todavía es, tan difícil oponerse a él: ¿quién quiere rechazar lo positivo del progreso? Desarrollo significa iniciarse en un camino que otros conocen mejor y cuyas metas ya alcanzaron; significa esforzarse hacia delante dentro de una calle de un solo sentido; promete enriquecimiento, conlleva siempre la superación de la pobreza con la creciente dependencia de

* Giarracca, N. 2012 “Tres paradojas para repensar la política” en Massuh, G. (ed.) *Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina* (Buenos Aires: Mardulce).

la guía y la administración de otros. Ser parte de un país subdesarrollado tiene algo de humillante, de indigno; las ideas propias no son operativas, hay que confiar en los expertos, ellos traerán el desarrollo (Esteva, 2001).

Desde hace varios años también los europeos han comenzado a revisar el alcance y la significación de términos como “desarrollo” y “progreso”. Entre ellos, Boaventura de Sousa Santos, Marshall Berman, los promotores del “decrecimiento” como Serge Latouche o el politólogo alemán Elmar Altvater en sus críticas sobre el límite del desarrollo¹. Para Santos se trata de un proceso de agotamiento de los pilares básicos de la modernidad: la ciencia, el derecho, la concepción del poder y la organización de la economía. Frente a la irrefutable crisis institucional y cultural que arrastra la debacle económica actual, comienzan a visibilizarse aquellas otras culturas que la modernidad occidental intentó hacer desaparecer. Son las “ruinas emergentes” que proponen otro modo de organizar la vida. Conceptos como la *umma* (comunidad de creencias de la cultura musulmana), el *dharma* del hinduismo o el *Sumak Kawsak* (“buen vivir” de las culturas andinas)

comienzan a cobrar una nueva relevancia. Según Boaventura de Sousa Santos se necesitan trabajos interculturales o de “traducción” para la preparación de ese otro mundo pos-moderno del pos-desarrollo (De Sousa Santos, 2006).

Berman se basa en una cita de Marx para sugerir que el progreso contiene un poder destructivo, que el dinamismo innato de la cultura y la economía modernas termina por aniquilar todo lo que crea (ambientes físicos, instituciones sociales, ideas metafísicas, visiones artísticas, valores morales) con el solo fin de seguir creando. En esta lucha de construcción y destrucción donde “todo lo sólido se desvanece”, la tragedia del desarrollo consiste en el deseo permanente de creación de un espacio homogéneo sin huellas ni rastros de aquello que lo precedió. Frente al impulso ciego del desarrollo actual que lleva a la apropiación de la naturaleza y de otros modos de concebir la vida que no sean las del progreso técnico, Berman propone la necesidad de imaginar otros horizontes y de crear nuevos modos de desarrollo al servicio del género humano (Berman, 1988).

Sin embargo, los medios de comunicación y el mundo académico siguen operando con la dupla desarrollo-subdesarrollo en su sentido tradicional. Para América Latina, el desarrollo siempre estuvo ligado al modelo económico

1 Véanse De Sousa Santos, 2000; Berman, 1988 y Altvater, 2011.

impulsado por aquel asombro de los ibéricos cuando pusieron el primer pie en el continente: el deslumbramiento por la vastedad y la opulencia de la riqueza natural. Aquel modelo que, a pesar de numerosas resistencias sociales y políticas, la región jamás pudo abandonar: el desarrollo basado en los recursos naturales.

De hecho, los países cuya economía está basada en los recursos naturales nunca pueden salir del círculo del subdesarrollo: la profusión de recursos naturales a disposición tiende, entre varios factores endógenos de carácter patológico que acompañan el proceso, a distorsionar la estructura y la asignación de los recursos económicos del país, redistribuye negativamente el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos mientras se generaliza la pobreza, se generan crisis económicas recurrentes, se profundiza la escasa y débil institucionalidad, se alienta la corrupción, se deteriora el medio ambiente al tiempo que consolidan mentalidades “rentistas” (Schuldt y Acosta, 2009: 10).

Parece un enunciado paradójico: son pobres y son subdesarrollados porque tienen enormes riquezas naturales. Si bien hay excepciones, los casos de países con inmensos recursos naturales, postrados desde antaño en la polarización social, de pobrezas extremas, inestabilidad

política e instituciones impregnadas de corrupción, suelen ser la regla general. Desde los países petroleros de Asia, los diamantes del África hasta las minerías andinas, hoy por hoy se violan tratados internacionales de protección a las comunidades originarias, al medio ambiente, a la biodiversidad con el fin de acceder a los recursos naturales. La Amazonía en su conjunto es un claro y evidente ejemplo de ello.

Estas reflexiones se orientan a configurar los escenarios de los países de América Latina en la actualidad. Aquel despojo colonial dio lugar a debates, conflictos y hasta guerras internas en los diversos Estados nacionales después de la independencia y, es necesario admitirlo, hubo no pocos intentos de salir de la tradición exportadora de recursos recurriendo a estrategias de sustitución de exportaciones mediante la industrialización. Fue el caso de Cuauhtémoc Cárdenas en México, Juan Perón en la Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, El MNR en Bolivia, Haya de la Torre en Perú. No obstante, desde mediados de la década del setenta, con el acceso del modelo económico y cultural que denominamos “neoliberalismo”, la región retorna a los orígenes y vuelve a delinear sus estrategias económicas en los modelos extractivos. A mediados de los setenta comienzan a debilitarse las expectativas de los desarrollos

industriales nacionales bajo control estatal; así se dio comienzo a un profundo cambio económico de la mano de los organismos multilaterales de crédito, instituciones clave en los procesos de endeudamiento. En esta nueva etapa estos organismos adquieren un protagonismo fundamental porque intervienen directamente sobre los aparatos estatales marcando políticas a seguir y, al mismo tiempo, constituyendo tribunales arbitrales para el arreglo de los diferendos entre las partes al margen del sistema judicial de derecho público estatal e internacional (el CIADI del Banco Mundial, por ejemplo, que implica la renuncia a un atributo esencial de la soberanía: la competencia territorial de los tribunales nacionales)². Estos modos de operar se hacen especialmente visibles en el seno de las actividades de la producción de energía y la extracción de petróleo; en los últimos años, en la minería, la reforestación,

2 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, miembro del Grupo del Banco Mundial cuyo presidente es, *ex officio*, el Presidente del mismo Banco Mundial. El organismo ayuda a constituir tribunales arbitrales internacionales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados que aceptan someterse a ese procedimiento. Compárese con el artículo de Mirta Antonelli en este mismo volumen.

la producción de biocombustibles y, en el caso argentino, la gran expansión sojera a partir de mediados de la década del dos mil.

Si bien sería exagerado asimilar estas nuevas actividades extractivas a los modelos de enclave exportadores de la colonia, aislados de la sociedad en general, existen dos rasgos que los identifican:

1. La generación de abultadas rentas diferenciales, sobreganancias que, sumadas a los fabulosos ingresos de las corporaciones económicas, no permanecen en el país de origen. Según sostienen los pensadores de la corriente “decolonial” como Aníbal Quijano o Walter Mignolo, el despojo de la renta constituyó la base del “capitalismo-modernidad” europeo. En la actualidad, determinadas relaciones con Estados o empresas del hemisferio norte, generan situaciones unívocamente coloniales; España, por ejemplo, país acreedor de la deuda externa argentina, se hizo merecedora de la antigua petrolera estatal YPF y la colocó —sobre la base del recurso y la renta argentinas— entre las primeras petroleras del mundo. Es así que hoy, la Argentina debe “importar” petróleo de su propio subsuelo pagándolo a precio internacional.
2. Tanto durante la colonia como en la actualidad las empresas adquieren los instrumen-

tos necesarios para constituirse como un Estado dentro del Estado; el territorio en el que se asientan marca un universo en el que las leyes del país en cuestión no tienen vigor. A medida en que se debilita la lógica del Estado-nación con la globalización, se produce un efecto de “desterritorialización”³. El ejemplo más dramático en nuestros días es el emprendimiento Pascua-Lama de la empresa minera canadiense Barrick Gold, surgido de un tratado bilateral entre la Argentina y Chile firmado en 1996, por el cual los Estados transfirieron soberanía, es decir poder de decisión, cediendo un territorio con una legalidad que solo atiende a los intereses mineros.

LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE LOS “GOBIERNOS PROGRESISTAS” DE AMÉRICA LATINA

Para Raúl Zibechi, el modelo primario extractivo, que cede las riquezas a las grandes corporaciones transnacionales, es parte de una segunda etapa del modelo económico neoliberal

(Zibechi, 2011). La primera fase es el traspaso de los activos nacionales a grandes actores económicos transnacionales. Primero fueron las empresas, patrimonios colectivos generados a fuerza de ahorro y trabajo nacional. La segunda, los recursos naturales, bienes comunes territoriales de los conjuntos sociales. Se trata de bienes comunes para los que incluso se piden derechos propios: algunos países de América Latina discuten la necesidad de incluir los derechos de la naturaleza en sus constituciones. Ambas etapas coexisten en el mismo registro económico y cultural del neoliberalismo. En la década del noventa se prometía que la venta de empresas públicas solucionaría la falta de gasto en salud, educación, seguridad: no se hizo nada. En la actualidad, el dispositivo de articulación del modelo y la búsqueda de consenso popular corresponde a los excedentes, aparentemente un factor para mantener subsidios, bolsas, planes, o como quieran llamarse los factores de “alivio de la pobreza” del Banco Mundial. La gran consigna que se esgrime desde el Estado es: sin expoliación del petróleo, del gas, de los minerales, de la tierra, no hay ingresos para sacar a la población de la indigencia. Es la razón que ata al modelo tanto a las “derechas” productivistas como de las “izquierdas” (oficialistas) que ven en el pro-

3 Cfr. Gudynas, 2005.

ductivismo extractivo la única condición para la integración de poblaciones empobrecidas o excluidas del consumo.

Esta situación, que parte de los ingresos fiscales por actividades extractivas (petróleo, minería, soja, etcétera) como factor único e insustituible para “el alivio de la pobreza” (en términos del Banco Mundial), merece una reflexión. No todos los países de América Latina poseen actividades extractivas en manos de corporaciones transnacionales. En algunos casos se dan asociaciones heterodoxas en las que los Estados nacionales juegan un papel preponderante (los Estados de Venezuela y Brasil son socios principales en la industria petrolera, por ejemplo). Lo que se generaliza es el discurso por el que solo a través de los ingresos fiscales provenientes de la industria extractiva se pueden hacer políticas sociales. Según Raúl Zibechi, esto forma parte de una especie de círculo vicioso para garantizar una nueva gobernabilidad: la “acumulación por desposesión” debe ser compensada necesariamente por políticas sociales. Dice el autor:

Los emprendimientos mineros andinos, las cincuenta millones de hectáreas sembradas con soja y los cultivos forestales, casi no necesitan mano de obra, pero sí mucha agua que es devuelta con-

taminada con mercurio y agrotóxicos. A diferencia del modelo industrial que necesitaba obreros en la producción y obreros en el consumo (o sea en la producción y en la realización del plus-valor), el modelo extractivista puede funcionar con máquinas automatizadas y robots, y no necesita consumidores ya que las commodities se venden en países remotos. (Zibechi, 2011: 34)

De allí la necesidad inherente al nuevo modelo extractivo de expandir las “políticas sociales” para integrar al consumo, aunque sea al consumo mínimo, a la masa de excluidos de la actividad industrial, del campo de agricultores y de los servicios nacionalizados del pasado. El Plan Bolsa Familia de Brasil alcanza a casi 50 millones de personas, un 30% de la población, mientras que en algunos Estados del nordeste los beneficiarios alcanzan al 65% de los habitantes. Los planes para los argentinos subalternizados y marginalizados nunca alcanzan: cuanto más se los amplía, más exclusión genera el modelo vigente.

Más de cien millones de pobres han mejorado su situación material en América Latina, calcula Zibechi. Al mismo tiempo, van perdiendo la autonomía de organizarse por quedar cooptados por la maquinaria estatal. El discurso hegemónico de América Latina proclama hoy que

esta distribución de dinero público (vía políticas sociales) puede activarse solo a través de los ingresos que provienen de las actividades extractivas. Por lo tanto, las actividades extractivas son imprescindibles. Esto forma parte de la gran trampa del subdesarrollo armada por la geopolítica internacional en búsqueda de los recursos naturales conjuntamente con sus socios locales de América Latina.

Evo Morales, desde la presidencia de Bolivia, fue muy elocuente al discutir con sus críticos el modelo extractivista: “Están queriendo que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya regalías, no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy”.

LA LÓGICA EXTRACTIVISTA

No toda la actividad basada en la explotación de recursos naturales responde a su lógica. Por más que en los datos estadísticos de la región se encuentren indiferenciados, es importante distinguirlos conceptualmente. A nosotros, que provenimos de la Argentina, nos resulta evidente que no toda actividad agrícola es “extractiva”. Por un lado existe la “agricultura de procesos o alimentos”; por el otro, el “agronegocio”, que sí es una actividad extractiva al igual que la

minería, el petróleo o la explotación del uranio. La agricultura tradicional de procesos mantiene una lógica productiva diferente, basada fundamentalmente en “procesos naturales”, ciclos orgánicos con bajo insumo de agroquímicos, el aprovechamiento del trabajo familiar, la organización y uso de las cooperativas.

La lógica extractiva es el conjunto de aquellos procesos productivos que procuran extraer recursos de la naturaleza, algunos recuperables —los que atañen a la agricultura— y otros, como los minerales, que no se recuperan jamás. En la agricultura hay aspectos no reproducibles ni sustentables y otros que sí lo son. Con el avance del capitalismo se fueron sustituyendo los procesos naturales por insumas agroindustriales (industrialización de la agricultura). Lo que denominamos “agronegocio” no es más que la lógica del neoliberalismo aplicada al sector agrícola.

David Harvey sostiene que en la etapa actual del desarrollo del capitalismo mundial, caracterizada por la difusión del neoliberalismo a escala internacional, prevalece un proceso de acumulación por desposesión opuesto a lo que tradicionalmente constituía el proceso de acumulación expansiva de capital (Harvey, 2004). Para Harvey, este proceso involucra

[...] la mercantilización y privatización de la tierra; la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad —común, colectiva, estatal, etcétera— en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancías y la supresión de formas de producción y consumo alternativos; Los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales... El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos. (Ibídem: 113)

Si bien muchos de estos rasgos han formado siempre parte de la geografía del capitalismo, en la actualidad han aparecido mecanismos completamente nuevos de acumulación por desposesión como “[...] la biopiratería, el pillaje del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas pocas grandes empresas multinacionales, la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción agrícola” (Harvey, 2004: 114).

El siguiente es un listado de características del modelo extractivista que hemos elaborado con Miguel Teubal (Giarracca y Teubal, 2010):

- significan actividades con alto consumo de recursos que no son reproducibles, como por ejemplo el agua;
- se remiten a escalas de producción mucho mayores que las tradicionales desplazando multiplicidad de actividades preexistentes;
- utilizan “tecnologías de punta”;
- se hallan localizadas territorialmente porque dependen de la existencia y la persistencia de determinados recursos naturales;
- fueron impulsadas en el marco del neoliberalismo económico difundido a escala mundial;
- son actividades que generan mucho valor de cambio, grandes rentabilidades para algunos agentes económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad;
- se vinculan con el interés de grandes corporaciones que las impulsan y que controlan sectores clave del espacio económico en el que operan;
- desplazan masivamente tanto a trabajadores rurales, al campesinado, a la agroindustria en general, como a pobladores circundantes;
- se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver necesidades internas;

- son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas regiones: agricultura, ganadería, turismo, cultivos industriales;
- no son esenciales para la vida de las comunidades, o del mundo en general. Podemos vivir sin oro y también sin soja, pero no podemos vivir sin agua ni alimentos;
- están generalmente relacionadas con la generación y apropiación de rentas de los recursos naturales.

MODELO EXTRACTIVO EXPORTADOR

La gran rentabilidad de la actividad extractiva tiene tanto que ver con sus tasas de ganancia como con las “rentas diferenciales a escala mundial” apropiadas por las empresas del sector. Se trata de actividades que son rentables no solo porque sus costos internos son relativamente bajos, sino también porque actualmente existe una tendencia alcista en los precios internacionales de los commodities de exportación. La valorización de esas rentas se realiza en el mercado mundial y, en consecuencia, se relacionan con estos precios internacionales en alza. La disponibilidad de recur-

sos “escasos” frente a una demanda creciente a nivel mundial constituye un ítem fundamental que determina la rentabilidad de dichas actividades. Sin embargo, la alta rentabilidad generada por la actividad minera no puede ser la única dimensión considerada en los análisis sobre la cuestión. También deben tenerse en cuenta una serie de “costos” involucrados en la producción que no se tienen en cuenta en el precio final: sociales, económicos, culturales, medioambientales, y sobre la salud humana. Son costos que los economistas denominan eufemísticamente “deseconomías externas” (economías externas a las empresas involucradas en la producción).

Definidas las actividades extractivas desde su lógica económica, asumiremos que la mayoría de los países productores de alimentos están virando hacia los “agronegocios”. Cuando se analizan las modificaciones de los porcentajes de exportaciones del sector primario, se observa la presencia de un indicador adecuado para comprender lo que está ocurriendo en América Latina. Nuestra experiencia nos dice que gran parte de la agricultura está bajo la lógica del “agronegocio”, sobre todo la de exportación en la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, México, Guatemala...

Cuadro N° 1

Exportaciones de productos primarios según su participación en el total (porcentaje del valor total de las exportaciones FOB de bienes)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Argentina	67,4	69,5	72,2	71,2	69,2	69,2	69,1	69,2	68,0
Bolivia	79,4	84,2	83,9	86,7	89,4	89,8	91,9	92,8	92,9
Brasil	46,0	47,4	48,5	47,0	47,3	49,5	51,7	55,4	60,9
Chile	82,2	83,2	83,8	86,8	86,3	89,0	89,6	88,0	88,2
Colombia	60,6	62,2	65,7	62,9	65,3	64,4	60,8	68,5	72,6
Ecuador	88,1	89,7	88,0	90,7	91,0	90,4	91,3	91,7	90,9
México	14,9	15,7	18,6	20,2	23,0	24,2	25,0	27,1	24,9
Perú	81,4	83,0	83,0	83,1	85,3	88,0	88,6	86,6	87,8
Uruguay	58,4	63,7	66,3	68,4	68,5	68,7	68,9	71,3	74,8
Venezuela	88,8	86,2	87,3	86,9	90,6	92,7	—	—	—
Mercosur (con Bolivia y Chile)	58,6	59,6	60,7	60,5	60,2	63,1	64,8	65,9	68,4
Total	41,1	41,4	44,5	46,6	50,1	52,8	49,7	52,7	52,9

Fuente: CEPAL, Informe Económico 2009 y 2011.

En el cuadro se observa el peso cada vez mayor que adquieren las exportaciones primarias en América Latina: 52,9% en 2009; los altos porcentajes de países como Bolivia, Ecuador, Chile y el significativo aumento en el país más desarrollado industrialmente de la región: Brasil. Este país fue tradicionalmente minero debido a que la producción de aluminio, por ejemplo, era insumo a su creciente producción industrial;

pero el ritmo de crecimiento de la actividad minera actual y el peso de la de metales como el oro sorprende cualquier estimación. Eduardo Gudynas estima que la producción de aluminio se duplicará para 2013, y se triplicará la de cobre, expandiendo la actividad minera. Con respecto a Brasil, además del agronegocio sojero y el aluminio, existe una cuantiosa inversión para la construcción de usinas hidroeléctricas

altamente depredatorias. El país menos reprimarizado en sus exportaciones es México, otro de los países industrializados. El aumento en las cifras de exportación basadas en productos primarios muestra una tendencia errática.

Párrafo aparte merece la Argentina, país que se conforma como nación en base a un capitalismo agroexportador, que luego fue cumpliendo etapas de industrialización con un fuerte anclaje en la agroindustria. La política de Estado actual es la actividad extractiva. Se supone que de allí saldrán los recursos para mantener una posición hegemónica frente a una sociedad con una larga tradición de protestas y reclamos por sus derechos de participación en la riqueza nacional. Los recursos naturales bajo la gestión de las provincias y no de la nación, producto de una modificación de la Constitución Nacional en 1994, habilitó a los gobernadores a generar negocios con las empresas extranjeras desconociendo los reclamos de las poblaciones. La desindustrialización que comenzó en la época de la dictadura militar 1976-1983 fue preparando el terreno para este modelo económico basado en producciones primarias y fue introduciendo en el país a las transnacionales de la importancia y conflictividad de Monsanto o Barrick Gold, poco después de que se privatizaron las compañías nacionales y estatales de

servicios públicos (teléfono, electricidad, gas, etcétera) durante la década del noventa con subsidios que se llevaron gran parte de los ingresos fiscales de la Nación.

La presidenta Cristina Kirchner insiste en que el país se está industrializando, incorporando conocimiento que proviene del sistema científico nacional y que este proceso ha llevado a que la Argentina sea el único país de América Latina que ha bajado la “reprimarización” en el componente de exportación. En uno de los tantos discursos públicos sostuvo:

Yo los invito a recorrer los números del comercio exterior de las últimas décadas. [...] Ustedes lo saben: hemos logrado un nivel de exportaciones como hacía décadas que no lo lográbamos. Como si esto fuera poco, de acuerdo a informes de la CEPAL, somos el único país en Latinoamérica que no ha reprimarizado sus exportaciones, sino que —por el contrario— ha logrado una mayor participación en las exportaciones de las manufacturas de origen industrial. (Fernández de Kirchner, 2011)

Si observamos el cuadro, en efecto, durante 2009, año de gran sequía y de profundización de la crisis internacional, baja un punto el valor de las exportaciones primarias y seguramente aumenta un punto el resto (entre las que se

encuentran las exportaciones industriales). Es una coyuntura que de ningún modo marca una tendencia. Las estimaciones en base a los datos de la CEPAL para 2010 muestran que las exportaciones totales para ese año alcanzan 68.500 millones de dólares mientras que para 2009 representaban 55.669 (recordemos que fue el año de la sequía). También registra que en 2010 las exportaciones de origen primario aumentaron 55% con relación al año anterior (mientras las de origen industrial aumentaron 24,6%). En consecuencia, si en el año 2009 los productos primarios representaban un 68% del valor total de las exportaciones, en el año 2010 los productos primarios que alcanzaron el valor de 57.875 millones de dólares representaría una proporción mucho más alta que el 69% de 2008 y de años anteriores en las exportaciones de origen primario. Es decir, no hemos perdido la tendencia a la “reprimarización” sino que por ahora la marcamos aún más; en parte debido al aumento de los precios internacionales de los commodities. En cuanto a las exportaciones de productos industriales, aumentaron 24,6% pero allí lo que tiene peso real, según CEPAL, es la industrial automotriz y sus exportaciones a Brasil. Por lo menos en el nivel de las exportaciones, la deseada industrialización de la Presidenta no se hace evidente; si tenemos

en cuenta las proyecciones del aumento del “agronegocio” del Programa Estratégico Agroalimentario para 2020 y el dinamismo que los gobiernos provinciales y el nacional le imprimen a la actividad minera, estas proporciones se mantendrán o incluso aumentarán.

LAS RESISTENCIAS

Podemos dividir a América Latina en tres grupos de países en base a la caracterización de los gobiernos que se convierten en condiciones de posibilidad de los avances o retrocesos de las resistencias. Algo así como lo que los especialistas norteamericanos denominan “estructura de oportunidades políticas”.

1. Los países andinos con movimientos indígenas fuertes, pioneros en las luchas contra el neoliberalismo y cuyos gobiernos tienen, por un lado, un discurso apoyado en los principios de “buen vivir” y por el otro, profundizan las actividades extractivas: Ecuador y Bolivia.
2. Países con una “estructura de oportunidades políticas” negativa, ya que sus gobiernos están en manos de grupos políticos cercanos a la filosofía que da origen a la devastación e

- imponen formas represivas explícitas: México, Colombia, Chile y, hasta hace poco, Perú.
3. Países de mayor pretensión capitalista modernizadora desde su propia historia con gobiernos actuales que podemos caracterizar de “socialdemocracias” latinoamericanas: Uruguay, Brasil y la Argentina.

No hemos mencionado a todos los países. Tomamos aquellos que consideramos paradigmáticos porque no pretendemos una clasificación exhaustiva sino un pantallazo de las distintas maneras de emprender, profundizar y transmitir a las poblaciones el modelo extractivista o de reprimarización. Por otro lado, lo que importa aquí es hacer visible el grado de resistencias de sus poblaciones.

DE LA TIERRA A LOS TERRITORIOS: LOS PAÍSES ANDINOS (ECUADOR Y BOLIVIA)

Ecuador marcó un acontecimiento de visibilidad internacional cuando en 1990, cuatro años después de haberse organizado la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), se produjeron los “levantamientos nacionales” que, mediante enfrentamientos

y negociaciones, consiguieron un conjunto de reivindicaciones, entre ellas el reconocimiento de los territorios de las comunidades indígenas. Víctor Toledo Llancaqueo (1992) tipifica cinco sentidos del polisémico concepto *territorios* en las demandas indígenas: 1) territorio como jurisdicción que es una zona bajo control político de un colectivo indígena; 2) territorio como los espacios geográficos de tierras a demarcar y/o restituir y titular en propiedad; 3) territorio como hábitat, como el conjunto sistémico para la existencia, según la definición del Convenio 169 de la OIT; 4) territorio como biodiversidad y conocimientos indígenas sobre la naturaleza, y su expresión en derechos de propiedad intelectual; y 5) espacialidad socialmente construida, vinculada a la identidad colectiva que suele denominarse etno-territorialidad. Concluye diciendo que el reclamo de derechos territoriales se refiere al conjunto de dimensiones que se vinculan al derecho a la libre determinación.

La CONAIE, con sus tempranas demandas y resistencias frente a las políticas económicas neoliberales, fue atravesando por uno u otro sentido de territorio a lo largo de sus luchas. En 1994, los indígenas convocaron a una movilización que paralizó el país durante semanas. Para Nina Pacari, abogada por entonces del movimiento, la protesta se orientó en contra

de la Ley de Desarrollo Agrario, pieza clave del plan de ajuste estructural generado por el entonces presidente Sixto Durán Ballén: la Ley aprobada por el congreso eliminaba las tierras comunales a favor de la agricultura empresarial, además de otras medidas que favorecían a los intereses de los grandes terratenientes. Se ignoraba todo lo concerniente a los indígenas, campesinos y pequeños agricultores de Ecuador (Pacari, 1996; traducción propia).

Se trata de una etapa en la que los indígenas preservan sus derechos como campesinos agricultores frente al avance del “agronegocio” (nombre que dimos al neoliberalismo agrario en América Latina). Estas movilizaciones logran des-instituir gobiernos no solo neoliberales sino corruptos como los de Abdalá Bucaram (1996-1997) y Jamil Mahuad (1998-2000). El movimiento indígena, junto con otras organizaciones urbanas, apoyó al coronel Lucio Gutiérrez (2003-2005), convencidos todos de que llevaría sus reivindicaciones a medidas concretas de gobierno. Cuando esto no se produjo, apoyaron su destitución. Después de un corto período de gobierno se produce un movimiento golpista civil llamado Rebelión de los Forajidos que reclamaba la salida inmediata de Gutiérrez del gobierno. El Congreso de Ecuador declaró la vacancia presidencial y nombró a Luis Alfre-

do Palacios como presidente. Después de un corto período se llamó a elecciones. Ganador de las elecciones fue el economista Rafael Correa, quien tomó una decisión audaz e irruptiva: no presentó candidatos al Congreso para llamar inmediatamente a una Constituyente Social. Así comenzó una nueva etapa en Ecuador, rica, contradictoria y difícil de interpretar.

Bolivia es uno de los países de América Latina de mayores resistencias durante el siglo XX⁴. Luchas étnicas, campesinas, obreras, regionales y nacionales, cruzaron la historia de este país que nunca se resignó a los destinos que la geopolítica internacional le deparaba como territorio de saqueos de sus recursos, desde el Potosí colonial de socavones hasta el de las riquezas del subsuelo. El final de siglo y los comienzos del nuevo milenio marcaron un punto de inflexión en las capacidades y movilizaciones de viejos y nuevos actores sociales. Para García Linera, la comunidad indígena, campesina y Ayllu son la columna vertical articuladora de otros grupos sociales y otros modos locales de unificación. Más que un movimiento social, la cultura campesino-indígena de Bolivia sería un movimiento societal, “una

4 Véase García Linera, 2004.

sociedad entera que se traslada en el tiempo” (García Linera, 2004: 15).

Las exitosas luchas por recuperar el agua como bien público en Cochabamba (2000), las luchas por el gas en 2004, las insurrecciones, marchas, numerosos levantamientos de las comunidades andinas hacia la ciudad de El Alto que llevaron a la renuncia del gobierno de Carlos Mesa, culmina en una salida institucional absolutamente novedosa: el acceso al gobierno de Bolivia de un frente de organizaciones políticas y sociales liderados por el aymara Evo Morales.

Tanto en Bolivia como en Ecuador se transita por una etapa institucional que en algún sentido permitirá modificaciones importantes desde el Estado a través de los debates de las Asambleas Constituyentes. Durante los primeros años del gobierno de Evo Morales, los movimientos sociales mostraron una enorme capacidad de propuestas y alternativas al orden vigente contra el que habían luchado durante tantos años. El Pacto de Unidad entre organizaciones importantes marcó un hito en las negociaciones dentro del proceso de debate constituyente, que la derecha boliviana no había cejado de hostigar en su intento de paralizarlo. La creación de un Estado Plurinacional conjuntamente con los cambios en las relaciones económicas opresoras, devastadoras y

saqueadoras del capitalismo boliviano fueron dos de los principales objetivos de la Constituyente boliviana. Si bien la que se llevó a cabo en Ecuador tuvo conflictos de menor intensidad, las fuerzas transformadoras de los nuevos dispositivos políticos institucionales fueron limitando las aristas del antiguo país neoliberal, racista y conservador. A pesar de las dificultades que tuvieron estos procesos despertaron entusiasmos en quienes seguimos y apoyamos la transformación andina.

Al respecto, Boaventura de Sousa Santos:

El sentido político de la refundación del Estado deriva del proyecto de país consagrado por la Constitución. Cuando, por ejemplo las constituciones de Ecuador y Bolivia consagran el principio del buen vivir (*Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña*) como paradigma normativo de la ordenación social y económica o cuando la Constitución de Ecuador consagra los derechos de la naturaleza entendida según la cosmovisión andina de la Pachamama, definen que el proyecto de país debe orientarse por caminos muy distintos de los que conducirán a las economías capitalistas, dependientes, extractivistas y agroexportadoras del presente. (De Sousa Santos, 2010)

No obstante, en los últimos años no se produjeron avances importantes en el sentido de la

“cosmovisión andina”. Las luchas por los territorios ancestrales continúan y se han intensificado tanto en Bolivia como en Ecuador, donde existe un fuerte debate interno producto de las tensiones que produce la continuidad (nos atreveríamos a decir “la intensificación de la continuidad...”) de las políticas de corte extractivas. Uno de los temas que más conflictos generó dentro del bloque del partido de gobierno en la Asamblea Constituyente de Ecuador fue el minero. En marzo de 2008, en pleno proceso constitucional, el Ministerio del Ambiente eliminó la protección de los Bosques del Sur del Ecuador dejando sin efecto la ley de protección que tenía treinta años de vigencia. Meses después se deroga el Reglamento de Consulta y Participación vigente desde 2002 y el Reglamento del Artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental sobre la participación ciudadana y consulta previa, vigente desde 2006. En su lugar se dictó el Decreto Ejecutivo N° 1040 para favorecer la entrega de permisos rápidos a las empresas mineras.

La comunidad guaraní de Tentayapi, que ya se había opuesto con éxito a la exploración petrolera en 2003, demandó en julio de 2011 el respaldo de los pueblos indígenas del mundo y de los cuerpos especializados de la ONU para afrontar el conflicto en ciernes con la empresa

transnacional petrolera Maxus-Repsol. La iniciativa legislativa “Ley sobre la Pachamama”, que propone el carácter vinculante del derecho a la consulta previa sobre toda actividad extractiva en sus territorios, fue presentada por las organizaciones indígenas de Bolivia a la Asamblea Legislativa Plurinacional a mediados de 2010 tras protagonizar una marcha desde la ciudad de El Alto hasta la plaza Murillo de La Paz. Otro ejemplo: el 24 de octubre de 2011, después de 64 días de marcha sacrificada que la policía y miembros del partido gobernante habían intentado impedir en varias oportunidades, los indígenas de las Tierras Bajas y del Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS) lograron que el presidente Evo Morales promulgara la Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional que impediría la construcción de una carretera que atravesaba los territorios de los pobladores. El TIPNIS es una zona muy aislada y protegida, cuya autonomía era reconocida desde la década del noventa. El conflicto del TIPNIS es complejo. El Gobierno defendía la construcción de la carretera porque ayudaría a la integración de las diferentes comunidades y les daría las facilidades necesarias para mejorar la salud, la educación y el comercio de sus productos. Pero también es cierto que la carretera abriría la puerta a numerosos proyectos

extractivos, que traerían consecuencias sociales y ambientales negativas (de Brasil y empresas asociadas) y que, por otro lado, el gobierno intentó recortar la autonomía del territorio sin consultar a las poblaciones indígenas involucradas. En ese sentido, la ceguera del gobierno, luego del antecedente del gasolinazo (diciembre de 2010), revela un proceso de construcción de la hegemonía poco democrática: no hay consulta a las organizaciones, y cuando las hay, el gobierno busca tutelarlas. Luego de una marcha de indígenas del TIPNIS a La Paz, apoyada por varias organizaciones indígenas y ambientalistas, y después de un oscuro hecho de represión, el gobierno de Evo Morales retrocedió en sus propósitos, aun si no está del todo claro cuál será la resolución final del conflicto. Pero la guerra de los hidrocarburos de Bolivia no ha concluido.

DISPUTAS EN LAS PEORES CONDICIONES POLÍTICAS: MÉXICO, COLOMBIA, PERÚ Y CHILE

En estos países las políticas neoliberales de corte extractivista se ponen en marcha sin ningún tipo de tensiones o críticas internas. En todos ellos la represión va en aumento. En México y

Colombia el conflicto generado por el narcotráfico con sus enfrentamientos con el Estado complica y dificulta la gestación de resistencias.

En materia agrícola, México siguió al pie de la letra los mandatos de los organismos internacionales de crédito durante los años ochenta y noventa. Empezó a entregar sus recursos naturales poniendo en jaque la diversidad biológica; permitió la hibridación de la semilla del maíz sin las tensiones ideológicas que se produjeron en la Argentina o Brasil en el nivel institucional a pesar de importantes movimientos y organizaciones ambientalistas radicados en el país. El Observatorio Latinoamericano de Geopolítica dirigido por la mexicana Ana Esther Ceceña es una excelente plataforma desde donde seguir los corredores de infraestructura, saqueos, militarización y represión de los últimos años sobre el mapa geopolítico del continente⁵. El período actual de luchas campesinas e indígenas por sus territorios es intenso, violento y continuo. Los conflictos generados por las empresas megamineras y la biopiratería de los laboratorios internacionales con el consecuente despojo de la biodiversidad aparecen, muchas veces, como contiendas entre comuni-

5 Véase <<http://www.geopolitica.ws/>>.

dades indígenas, durante décadas atravesadas por el clientelismo político. Chiapas y Oaxaca no pueden soslayarse como centros importantísimos de irradiación de resistencias; permanentemente son víctimas consuetudinarias de fuertes represiones. En 2009, distintas comunidades y organizaciones indígenas del Estado de Chiapas emprendieron acciones para defender y reivindicar su derecho al territorio, a la protección y al cuidado de sus recursos naturales y a la protección del patrimonio, factores que conforman su identidad como pueblos originarios. El 27 de abril de 2010, por ejemplo, fuerzas parapoliciales atacaron una misión civil humanitaria que se dirigía a la Agencia Municipal de San Juan Copala, Oaxaca, sitiada justamente en su lucha por la autonomía territorial frente al gobierno del Estado. En esa misión de paz, civil, pacífica, había defensores de derechos humanos, observadores civiles y periodistas, del Colectivo VOCAL, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano, Maestras y Maestros de la Sección 22, concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y reporteros de la revista *Contralínea*, todos acompañados por una caravana de observadores internacionales de derechos humanos provenientes de Finlan-

dia, Italia, Bélgica y Alemania. Allí mueren asesinados un periodista finlandés y una importante luchadora contra la actividad minera: Betty Cariño Trujillo. Podríamos enumerar muchas otras resistencias en Mitzitón (Chiapas, 2010), Oaxaca, Atenco, Tila, San Sebastián Bachajón, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, para demostrar la férrea voluntad de estos pueblos por la defensa de sus territorios.

Es necesario destacar, por último, que en el México actual la lucha por la tierra se caracteriza por la continua intervención del Gobierno y de los partidos políticos para promover y estimular enfrentamientos entre distintos grupos campesinos e indígenas; con este método se socavan las bases de solidaridad de las comunidades. Un significativo abogado de las comunidades de Oaxaca advierte que “la tierra da muchos votos y las comunidades terminan lidiando, pero el problema de fondo no son ellos, sino los políticos” (Giarracca y Teubal, 2009).

Durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), de estricto corte neoliberal, las poblaciones de Perú sufrieron despojos mucho más cruentos que en etapas anteriores. En julio de 2007 el gobierno promulgó el Decreto Legislativo N° 982 que dispone la inimputabilidad de los militares y policías que maten a personas empleando sus armas reglamentarias y en cum-

plimiento de su deber. El reciente acceso del nuevo presidente Ollanta Humala ha generado no pocas expectativas de acercamiento al estilo de los gobiernos de Ecuador y Bolivia. Hoy por hoy, el conflicto minero ocupa el centro de la escena de la resistencia peruana: el proyecto de la minera Yanacocha continúa como epicentro de conflictos. Un caso paradigmático del período de Alan García fue, sin dudas, el del pueblo amazónico de Bagua donde se produjo un violento enfrentamiento entre pueblos indígenas y fuerzas de seguridad en junio de 2009. Los conflictos ocurrieron al cabo de un mes de protestas de pueblos indígenas contra decretos promulgados por el gobierno cuyo objetivo era facilitar la implementación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y abrir la Amazonía a la actividad minera, hidrocarbúrrifera e hidroeléctrica. El gobierno derogó los decretos N° 1090 y 1064 después de uno de los peores episodios de violencia de los últimos tiempos. En Perú se concentra la mayor cantidad de grandes empresas mineras del mundo. El gran aumento de la actividad minera desde el gobierno de Fujimori fue acompañado por el incremento de conflictos y violencia alrededor de operaciones mineras a gran escala, principalmente ubicados en la zona rural andina caracterizada por sus altos niveles de pobreza.

Temiendo que los proyectos mineros contaminen sus tierras y fuentes locales de agua, las comunidades han tratado de bloquearlos y han expresado frustración por la ausencia de mejoras en su calidad de vida, pese a las tremendas ganancias generadas por las compañías mineras que operan en su vecindad. 40% de la población peruana vive en la pobreza; en la región andina las tasas de pobreza superan el 70%. El reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, entidad del gobierno peruano, dio a conocer a mediados de 2009 una lista de 91 conflictos activos alrededor de operaciones mineras ubicadas a lo largo del país. Estos datos podrían duplicarse si se hiciera un reporte de la situación actual (Snack, 2009). Precisamente en el país que se realizó la primera consulta vecinal del continente contra la instalación de una minera (de origen canadiense), los conflictos se multiplican día a día.

En Colombia, dada la heterogeneidad de las problemáticas que se arrastran desde mucho tiempo atrás, la situación de los últimos años es sumamente complicada. Ante el avance minero y la expansión del agronegocio (Colombia es uno de los mayores productores continentales de biodiesel a partir de la palma africana) las comunidades negras del Pacífico y los pueblos indígenas ven su supervivencia seria-

mente amenazada. La propia Corte Constitucional colombiana declaró en 2010 al Pueblo Embera en grave peligro de desplazamiento y desintegración y en emergencia junto a otros 34 pueblos indígenas de todo el país. Campesinos, indígenas y población afrodescendiente son asesinados, amenazados, torturados, intimidados o desplazados al defender su existencia y sus territorios frente al saqueo de los recursos naturales. La “guerra” colombiana está focalizada, tal como han denunciado las organizaciones indígenas del Cauca, justamente en las regiones donde las multinacionales esperan conseguir jugosas ganancias.

El proyecto minero Mandé Norte/Murindó de la empresa minera norteamericana Muriel Mining Corporation constituye un caso paradigmático por encontrarse dentro de un territorio indígena y en medio de una de las últimas selvas tropicales del planeta. En la madrugada del 30 de enero de 2010, la comunidad de Alto Guayabal en el Resguardo Uradá Jiguamiandó fue bombardeada por el ejército resultando heridos varios miembros de una misma familia; tras estos hechos se escondía la velada intención de desplazar a los indígenas de su territorio para dejar vía libre a la minería. Según las organizaciones indígenas de Colombia, el 65% de las concesiones mineras vigentes en Colom-

bia se encuentran en tierras ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes.

El cerro Jaicatuma (“Filo de los espíritus” en lengua Embera) también conocido como Cara de Perro, está ubicado en las selvas del Medio Atrato, zona decretada como Reserva Forestal por el gobierno colombiano desde 1959. El territorio llamado Río Murindó es uno de los mayores resguardos indígenas en Colombia, y pertenece legalmente a varias comunidades locales indígenas y afrocolombianas. El área también fue concesionada a la compañía norteamericana Muriel Mining Corporation en enero de 2009 resguardada por un batallón del Ejército Nacional.

Uno de los mayores flagelos colombianos es el continuo desplazamiento de pobladores cuando mantienen su hábitat en zonas propicias para el agronegocio, la explotación minera o hidrocarbúfera. En términos económicos, el desplazamiento oculta un fenómeno de consecuencias atroces que pasa inadvertido: hoy existen 4,5 millones de colombianos desplazados. El impacto de este crimen sobre la economía campesina se traduce en desabastecimiento de productos agrícolas en el mercado local, a tal punto que una parte importante de la canasta básica de alimentos se completa con las importaciones de granos, hortalizas y cereales de otros países.

En Chile, largos años de aplicación de políticas neoliberales provocaron una gran devastación de los recursos naturales: la disminución de los volúmenes de captura en la pesca y la destrucción del bosque nativo (una constante desde la conquista). La actividad frutícola, con manejo intensivo de fertilizantes y plaguicidas peligrosos para la salud, generó una alta incidencia en la contaminación de los recursos acuíferos. Lo mismo se produjo por la actividad minera que afectó directamente la calidad de vida de la población. Una serie de legislaciones de corte represivo limitó la intensidad de conflictos, tal vez el ejemplo más importante sean los mapuches encarcelados y con fuertes violaciones de derechos de todo tipo.

Existen mapas en diversas páginas de organizaciones no gubernamentales que dan cuenta de los principales conflictos que involucran a empresas termoeléctricas, carboneras, mineras, forestales, celulosas, vertederos, plantas químicas de tratamiento de aguas, salmoneras, represas hidroeléctricas, entre otras; todos los conflictos evidencian graves consecuencias sociales con gran impacto ambiental. Como en toda América Latina, responsables fundamentales son las corporaciones en complicidad con el Estado en sus diversos niveles.

Infinidad de conflictos se extienden por todas las regiones que conforman la República Chilena, en algunas predominan la actividad minera con empresas canadienses y norteamericanas que concentran la utilización de aguas, recurso escaso en todo el país. En la localidad de Quebrada Blanca, al sureste de Iquique, donde los vecinos denunciaron la filtración de aguas contaminadas por la minera canadiense Teca, el escaso recurso hídrico está destinado, casi en su totalidad, a las mineras Doña Inés de Collahuasi SCM, BHP Billiton.

Como en Brasil, las termoeléctricas y las empresas hidroeléctricas generan fuertes tensiones y problemas por la localización de poblaciones, inundaciones de regiones enteras y modificación del ecosistema. Durante 2009, por ejemplo, una fuga de agua y vapor de más de 60 metros, provocada por sondajes de la empresa Geotérmica del Norte en la Región de Atacama, originó un daño ambiental considerable y se logró el retiro de sus instalaciones del lugar después de numerosas acciones de las poblaciones vecinas.

Un párrafo aparte amerita el emprendimiento binacional argentino-chileno de la empresa canadiense Barrick Gold: el proyecto Pascua-Lama, una explotación que usa cianuro para separar la piedra del metal precioso, proce-

dimiento que implica un serio peligro de contaminación de las aguas del Valle del Huasco. La minera Pascua-Lama fue denunciada por numerosas organizaciones ambientalistas en diferentes ámbitos nacionales e internacionales. Entre los tantos informes y peritajes que revelaron la depredación ambiental de la minera, uno de los más importantes es el de Greenpeace Argentina titulado “Barrick: minería responsable de destruir los glaciares” publicado en julio de 2011⁶.

BRASIL Y ARGENTINA: “MODELO SIN TENSIONES”

Brasil y la Argentina siempre aspiraron a un fuerte desarrollo. En ambos, la filosofía positivista de comienzos del siglo XX caló hondo y aún con diferencias muy fuertes en sus historias, poblaciones, territorios, cada uno a su estilo apostaron por la modernidad y el desarrollo. Son países que creen poder desarrollarse en el mismo nivel de los países centrales; con frecuencia, esa convicción los separó del

resto de América Latina. Por eso es que posturas críticas a la modernidad y al desarrollo son difíciles de anclar en ambos países. Políticos, periodistas, intelectuales aspiran a ser “modernos”, los pensamientos alternativos del siglo XXI (los de fuertes raíces andinas como el “buen vivir” o los que postulan el derecho de la naturaleza) son difíciles de introducir no solo en sus clases dirigentes sino en la academia, en el periodismo, y sobre todo, en las generaciones mayores de 45 años.

Las tradiciones progresistas gubernamentales siempre fueron desarrollistas; lo que ocurriera con las poblaciones subalternas, fueran obreras, campesinas, indígenas o afrodescendientes, se arreglaría con un buen excedente manejado por el Estado de manera adecuada. Muchas veces dieron muestra de que tal cosa era posible con gobiernos desarrollistas y sin grandes niveles de corrupción; en la actualidad, esa creencia vuelve con fuerza a la agenda pública. Millones de personas han entrado al consumo a partir del desarrollo actual; Brasil se vislumbra como uno de los países con mayor capacidad de liderazgo capitalista de la región.

Así como las críticas al desarrollo extractivo o al simple desarrollo capitalista son frecuentes en Ecuador y Bolivia (pensemos por ejemplo en las publicaciones emanadas de la Canci-

6 Véase <<http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/barrick-responsable/>>.

llería Boliviana o muchos de los funcionarios de segunda y tercera línea de Ecuador), en Brasil y en la Argentina, por el contrario, la discusión no está presente en los espacios estatales. Tampoco circula entre los intelectuales. Es por eso que el modelo extractivo se expande con ahogadas voces críticas y gritos desesperados de las poblaciones que habitan esos territorios.

Sin embargo, los conflictos emanados del modelo extractivo existen, se registran y tienen consecuencias también para el Estado. El hecho de que una ecologista como Marina Silva haya obtenido el 20% de los votos a la presidencia en Brasil en los mismos comicios que llevaron a Dilma Rousseff a la presidencia, indica que unos cuantos millones no están de acuerdo con el tratamiento las políticas que destruyen la rica biodiversidad, tal vez única, del gran país de Sudamérica. En la Argentina el tema ha llegado al Congreso de la nación recién en 2009. Existen numerosas “audiencias públicas” e incluso se logró sancionar una Ley de Protección a los Glaciares, inmediatamente objetada legalmente por las provincias mineras.

Si bien los dos países se asemejan en estas marcas positivistas y desarrollistas, existen diferencias en el tipo de resistencias, luchas y protestas que se llevan a cabo. Brasil es un país con una tradición “institucionalista” más

fuerte que la de la Argentina; desde su independencia, en Brasil se formó una clase dirigente estable que interpretó sus intereses privados como parte del interés del Estado. Frente a una promesa del Estado se genera la confianza de que un cambio es posible si cuenta con la paciencia de la ciudadanía para que los funcionarios lleven a cabo sin escollos sus políticas. El caso más ilustrativo fue la autorización del gobierno de Lula del uso de organismos genéticamente modificados en el cultivo de soja luego de que un “Brasil libre de transgénicos” fuera uno de los slogans centrales de la campaña política que lo llevó a la presidencia. Solo así se explica la sorprendente ausencia de reacción del Movimiento de los Sin Tierra (MST) frente a la medida.

Bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva hubo menos asentamientos campesinos que bajo el gobierno del neoliberal Fernando Henrique Cardoso; hecho que investigadores y funcionarios explican en función de la creciente obra de infraestructura realizada por el gobierno de Lula en los asentamientos ya existentes. Sin embargo, llama la atención que desde el MST hubiera bajo el gobierno de Lula menos confrontación con la tradicional concentración de la tierra por parte de grandes empresas o terratenientes (Giarracca y

Teubal, 2009). Acaso la vitalidad de la protesta y de la resistencia en Brasil ya no se encuentran en el sector campesino, sino en las poblaciones víctimas de las grandes represas hidroeléctricas como ocurre con la central de Belo Monte, en el río Xingú, en el occidental Estado de Mato Grosso, o en varias de Río Grande do Sul. La construcción de la represa de Belo Monte fue varias veces postergada debido a la oposición de movimientos sociales. Pasa lo mismo con las hidroeléctricas de Madeira y Tocantins exigidas por los sojeros. La cantidad de familias involucradas en las obras de las grandes represas se acerca al millón de ciudadanos; así como sus resistencias son dignas de admiración y registro, no se puede negar que las perspectivas de trabajo, aunque sean temporales, sirven siempre como un tamiz de la protesta.

En cuanto a la Argentina, un país eternamente desilusionado de las instituciones gubernamentales, los movimientos de resistencias al modelo extractivo mantienen una distancia prudencial con el Estado a quien involucran, con justicia, en la devastación y la contaminación. La lucha contra la minería abarca comunidades indígenas, campesinas y poblaciones cordilleranas. Estas últimas son las más desprotegidas legalmente ya que defienden territorios simbólicos y una “política

de vida” de mejoramiento integral. Se organizan en asambleas de autoconvocados y su lucha por la integridad de los cerros y el libre acceso al agua es constante y progresivo. En varias provincias se lograron leyes que prohíben la minería a cielo abierto o la minería con usos de productos tóxicos; lamentablemente, estas leyes, a pesar de ser sancionadas y estar en vigencia, son permanentemente desbaratadas por el lobby político-empresario. En este sentido, las comunidades indígenas litigan con un dispositivo legal más amplio para defender sus territorios: leyes internacionales les permiten elevar sus reclamos en organismos internacionales. No obstante, la lucha es desigual. Numerosos asesinatos de integrantes de esas comunidades y millones de hectáreas de pérdida de territorio lo demuestran. Pero las comunidades siguen resistiendo al modo indígena, con paciencia, con una gran firmeza cuando están organizados. Algunas organizaciones sociales de campesinos se acercan al Estado y a los funcionarios del área de agricultura participando en programas estatales en un doble juego gubernamental que, por un lado habilita a los inversores a que les arrebaten los territorios y, por otro, los hacen partícipes de planes sociales y de otro tipo de apoyos para que se sientan incluidos. El peligro de integrar

una resistencia tolerada por la institucionalidad depende más de los “cuadros medios” que acompañan a los campesinos (agrónomos, activistas, etcétera, que viven en las zonas e integran sus luchas), siempre más propensos a recibir dádivas que las mismas bases campesinas. Sucede algo similar a la situación de la dirigencia del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil.

El avance de la actividad extractiva en la Argentina multiplica los conflictos con poblaciones. Los pobladores no se resignan a entregar sus territorios, abandonarlos o cambiar de vida. Los mapeos de conflictos de este tipo abundan; por más que existen en todo el país, se concentran en provincias de muy baja densidad democrática como La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Neuquén. La permanente expansión de la frontera agrícola, con su consecuente intensificación del monocultivo de la soja, fue responsable de la deforestación y desertificación de miles de hectáreas. Téngase en cuenta que, de las 32 millones de hectáreas sembradas en la Argentina, casi 20 millones pertenecen al sembradío de soja. No obstante, oponerse al cultivo de la soja transgénica o señalar el peligro que implica el indiscriminado uso de su pesticida (el glifosato) es casi una herejía para la opinión

generalizada. Esto explica por qué las posturas más críticas al cultivo de la soja provengan más de sectores intelectuales o académicos que suman su voz a la lucha de los pueblos fumigados en provincias como Santa Fe o Córdoba, centros de la producción sojera⁷. Aun cuando la cantidad de conflictos sea amplia y en esas luchas se involucran intelectuales, periodistas, sacerdotes, científicos, legisladores y (solo algunos) productores agrarios, el poder de las corporaciones y su aparcería con los distintos niveles del Estado impiden lograr legislaciones que limiten estas actividades. Estas organizaciones aún no han podido articularse por la dificultad de encontrar sentidos articuladores permanentes dentro del orden de una nueva política. La relación de la resistencia argentina con la lucha de los países andinos aún es muy débil; fiel a su pretendida tradición europea, la Argentina se resiste a la aventura intelectual de ensayar pensamientos alternativos al desarrollo occidental, a la modernización y a la desmercantilización de la vida (Giarracca, 2011).

7 Véase <www.ger-gemsa.org.ar> y <<http://gepecydii-gg.sociales.uba.at/>>.

MÁS ALLÁ DE LAS PARADOJAS

Tres paradojas trasvasan la situación actual de América Latina. La primera proviene de la conjunción de dos conceptos tan antagónicos como subdesarrollo y abundancia: países ricos en recursos naturales incapaces de reducir las significativas franjas de pobreza de sus poblaciones aun bajo el riesgo de dilapidar sus recursos naturales. La segunda conjuga una modalidad política progresista, que por un lado esgrime un discurso de izquierda, con una tradición desarrollista socialdemócrata y por el otro no cuestiona el saqueo de los recursos naturales, sino que lo integra como parte esencial de las políticas de Estado. La tercera ofrece un horizonte abierto: el de los movimientos, que hace más de una década hacían eclosión en sus luchas proponiendo nuevas formas de articulación social y ahora no logran reunirse alrededor de consignas como aquella del “otro mundo es posible” del Foro Social Mundial.

Una economía basada exclusivamente en la explotación de recursos naturales profundiza el subdesarrollo y genera democracias de baja calidad (Schuldt y Acosta, 2009). La segunda situación paradójica marca la coexistencia y entrelazamiento entre una ideología neoliberal y un neodesarrollismo. Esta constelación genera

el actual “Consenso de los Commodities” y su paradójica redistribución del ingreso⁸.

Es importante detenerse en los derroteros de los movimientos sociales que, irrumpiendo en la década del noventa con fuerza promisoriosa, se mantienen a la defensiva sin poder avanzar en una lucha que, si bien es asimétrica, conlleva todo el potencial para despertar voluntades mayoritarias en los distintos países. Caben pocas dudas de que la delantera en presencia política la tienen los movimientos de los países andinos, hoy en una posición distinta a la década del noventa. Por entonces producían una ofensiva contra los gobiernos neoliberales a los cuales lograban desestabilizar y cambiar. En la actualidad se deben mover entre el respeto y el reconocimiento de los logros que representan los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales en términos de reducción de pobreza e indigencia y las críticas a sus políticas de Estado en relación con los recursos naturales. A nuestro juicio, se trata de movimientos que han aportado importantes novedades que sin duda el viejo orden intenta restarle potencialidad como por ejemplo la declaración de los Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir. Aun-

8 Véase el texto de Maristella Svampa en este mismo volumen.

que se trata de bienes culturales ancestrales de las comunidades, al discutirlos en el seno de las asambleas constituyentes lograron, por un lado, darle un estatus jurídico que antes no tenían; por el otro instalarlos dentro del discurso del sentido común de una ciudadanía no siempre respetuosa de las cosmovisiones indígenas. Situación distinta a la de Brasil y la Argentina, donde es muy difícil que los movimientos sociales se sientan identificados con las culturas andinas ya que siempre se han pensado como parte de países europeizados, a pesar del peso indígena y africano en Brasil y la importante población indígena y criolla en la Argentina (el famoso “cabecita negra” del peronismo). En la Argentina el mundo social en que se llevan a cabo este tipo de luchas es significativamente heterogéneo: desde las comunidades indígenas (a quienes resuenan las ideas de los países andinos), los campesinos de asentamientos recientes sin una historia de luchas como el resto de la América Latina, poblaciones de sectores medios cercanas a explotaciones mineras y, finalmente, una cantidad importante de activistas agrupados en organizaciones sociales (no siempre con el formato de ONG) de historias políticas propias y formaciones ideológicas en las que predominan ideas emancipatorias del liberalismo o del marxismo. No es tarea fácil,

más allá del momento de los enfrentamientos concretos, buscar sentidos comunes entre sujetos tan diversos.

Muchos de estos movimientos nacieron alrededor del 19 y 20 de diciembre de 2001 bajo la consigna “que se vayan todos”. Eran rebeliones que señalaban la falla en el sistema de representación política, mostraba considerables reservas con respecto a las instituciones de la democracia y decidía organizarse horizontalmente. Sin embargo, es imposible salir de la trampa que impone este capitalismo salvaje a partir de la maquinaria económica y la lógica estatal.

El sistema de representación no cambió en los países que habían despertado las esperanzas de un nuevo pacto fundante a través de la modificación de sus constituciones (Bolivia, Ecuador, Venezuela). El Estado y sus instituciones democráticas no son los actores adecuados para llevar a cabo un cambio de rumbo hacia el “buen vivir” andino o (para usar la polisémica y holística idea andina), o para acceder a un mundo “otro”, alternativo al que nos ofrece esta etapa devastadora del capitalismo global. La representación solo habilita la gestión del Estado, que puede ser mejor o peor, más o menos corrupta. El Estado se subordina a la economía, conserva lo existente y se muestra

impotente frente a la transformación que reclaman los nuevos sujetos⁹.

Europa, frente a su propia crisis actual, sostiene “siempre más Estado, nunca menos”. ¿Es así para la América Latina donde los Estados muestran siempre su impotencia (o aparcería) frente a las grandes corporaciones del modelo extractivo? ¿No se necesitará otra lógica estatal capaz de darle a las poblaciones movilizadas de las bases su merecido lugar político sin pretender articular verticalmente dichas luchas en nombre de la “construcción hegemónica”? A nuestro entender, si hay una región en condiciones de implementar una nueva política que se precie de tal por su potencial emancipativo y radical, es la América Latina y para ello hay que habilitar espacios para dejar emerger las novedades que muchas poblaciones están generando. Pensamientos fuertes como “buen vivir” (*Sumak Kawsay*) con la consiguiente desmercantilización de la vida, democracia de la tierra, derechos de la naturaleza, dispersión del poder, mandar obedeciendo, soberanía alimentaria, la expansión de lo común (o la comunalidad de los mexicanos); la insistencia de cambiar la idea de “participación” por

la de “presencia” en los espacios públicos de acuerdo a nuestros propios deseos y límites; las transformaciones de adentro hacia fuera y de abajo hacia arriba, etcétera no son más que ráfagas de aire nuevo que neutralizan en algún sentido la fuerte carga cultural del neoliberalismo. Se podrá salir de la etapa maldita de la actividad extractiva, depredadora y devastadora de la naturaleza, mortificante de miles de poblaciones, desde un trabajo arduo a partir de los viejos Estados y de acuerdo a las posibilidades de cada país (de funcionarios y legisladores conscientes de la situación) como desde la invención de una política que rompa con la matriz colonial de dominación y potencie las resistencias sociales para generar nuevos sujetos capaces de articular estas luchas con las muchas otras que se dan en estos mundos y sostener, apostar, a una nueva forma de pensar la política, que es la base de otro modo de pensar la vida, la naturaleza y las relaciones entre los seres humanos.

BIBLIOGRAFÍA

- Altvater, E. 2011 *Los límites del desarrollo. Acumulación, crecimiento y huella ecológica* (Buenos Aires: Mardulce).

9 Cfr. Cerdeiras, 2011.

- Berman, M. 1988 *Todo lo sólido se desvanece en el aire* (Madrid: Siglo XXI).
- De Sousa Santos, B. 2000 *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. Vol. 1: Para um novo senso comum. A ciência, o direito e a política na transição paradigmática* (San Pablo: Cortez).
- De Sousa Santos, B. 2006 *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social: encuentros en Buenos Aires* (Buenos Aires: CLACSO).
- De Sousa Santos, B. 2010 *Refundar el Estado* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Esteva, G. 2001 “Desarrollo” en Sachs, W. (ed.) *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder* (México DF: Galileo).
- Fernández de Kirchner, C. 2011 “Discurso del Cierre del Congreso Metalúrgico”, 4 de agosto.
- García Linera, Á. 2004 *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia* (La Paz: Diakonia / Oxfam / Plural).
- Giarracca, N. 2011 “El Bicentenario, miradas sobre la Argentina” en Giarracca, N. (comp.) *Bicentenarios (otros), transiciones y resistencias* (Buenos Aires: Una Ventana).
- Giarracca, N. y Teubal, M. (coord.) 2009 *La tierra es nuestra, tuya y de aquel... Las disputas por el territorio en América Latina* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2010 “Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo” en *Revista Alasru, Nueva Época* (México DF) N° 5.
- Gudynas, E. 2005 “Geografías fragmentadas: sitios globalizados, áreas relegadas” en *Revista del Sur* (Montevideo) N° 160.
- Harvey, D. 2004 “The New Imperialism: Accumulation by Dispossession” en *The Socialist Register* (Londres: Merlin Press).
- Pacari, N. 1996 “Taking on the Neoliberal Agenda” en *NACLA. Report on the Americas*, Vol. XXIX, N° 5, marzo/abril.
- Schuldt, J. y Acosta, A. 2009 “Petróleo, rentismo y subdesarrollo ¿una maldición sin solución?” en Schuldt, J. et al. *Extractivismo, política y sociedad* (Quito: CAAP / CLAES).
- Snack, K. 2009 *Conflictos mineros en el Perú: Condición crítica* (Lima: Oxfam América).
- Toledo Llancaqueo, V. 1992 “Utopía y naturaleza. El nuevo movimiento ecológico de los campesinos e indígenas de América Latina” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 122.
- Zibechi, R. 2011 *Política y miseria* (Buenos Aires: La Vaca).

PRÓLOGO A *NOSOTROS LOS INDIOS* DE HUGO BLANCO*

Estamos frente a un libro que conmueve y sorprende por muchas razones. Conmueve por la posibilidad de conocer de modo directo las luchas de América/Abya Yala extendidas por múltiples tiempos y territorios. Conmueve porque las resistencias están narradas en una forma simple y profunda; conmueve por lo que representa su autor, Hugo Blanco, para muchas generaciones de luchadores; por su inmenso afecto por la selva y por la Pachamama; por el privilegio de convertirnos en testigos del intercambio epistolar entre el protagonista y José María Arguedas en los últimos momentos trágicos de la vida del escritor. Conmueve por constatar una vez más los infinitos sufrimientos que el orden colonial infligió e inflige a vastas poblaciones; sorprende por el grado de empobrecimiento subjetivo del “hombre

moderno” que es capaz de provocar los peores sufrimientos en prisiones, enfrentamientos, saqueos... Sorprende por la actualidad que adquieren esas luchas de los años sesenta en los contextos regionales e internacionales actuales tan diferentes en algunos aspectos y tan cercanos en la continuidad del poder colonial y depredador. Sorprende y conmueve la posibilidad de seguir los derroteros de aquel estudiante de Agronomía que en estas tierras argentinas se convierte en un militante político tenaz e íntegro hasta llegar a este presente de madurez y compromiso.

Por eso un primer interrogante que nos podemos formular como consecuencia de la lectura de *Nosotros los indios*, expresa qué une los tiempos y las luchas del joven Hugo Blanco con las actuales. O, dicho de otro modo, qué nos otorgan sus reflexiones para pensar las luchas de hoy. Nos otorga su escritura como un legado de quien reflexiona sobre su propia vida

* Giarracca, N. 2010 “Prólogo” en Blanco, H. *Nosotros los indios* (Buenos Aires: Herramienta / La Minga).

y la transmite como experiencia militante a las generaciones posteriores.

Hugo Blanco es “un sujeto social rebelde”, que pudo sentir las injusticias, las injurias, la tragedia colonial de sus hermanos indígenas en su propio cuerpo y generar ese “nosotros” que da título a este libro. Fue un dirigente campesino con reconocimiento internacional en épocas en que muchos hombres y mujeres podían sentirse irreductiblemente rebeldes pues había un futuro posible; es decir, había certezas en las teorías emancipadoras y ejemplos históricos para constatarlas. Los debates de los pensadores y militantes de la Revolución de Octubre, el monumental emprendimiento de la China de Mao Tse Tung, el voluntarismo infinito de Sierra Maestra o los movimientos de liberación de África, permitían pensar vías y horizontes posibles.

Existía un pensamiento político, una decisión ligada a una ruptura —como lo define Alain Badiou— y que Carlos Marx lo había expresado como una apuesta en su “Manifiesto”. Ese pensamiento político emancipador aún circulaba como un fantasma cruzando mares y entremezclándose con las ideas de los intelectuales indígenas y criollos de América Latina con las de los revolucionarios de la India, de África y de Asia. Esa apuesta a la construcción de un

“espacio de no dominación”, atravesaba tiempos y territorios, influía en revoluciones y rebeliones, partidos de izquierda europeos, batallas de liberaciones nacionales. Finalmente, como construcción histórica se agotó porque, a mi juicio, cayó en la trampa que la “modernidad” le tendió: el “desarrollo”, “la modernización”, “la tecnociencia”; es decir el predominio de la regulación social frente a sus raíces libertarias.

El agotamiento de los pilares de la modernidad socavó la emancipación para quedarse con la pura regulación, con el puro control social. Pero la potencia de ese pensamiento decimonónico que prefiguraba un espacio de “no dominación”, que fue capaz de articular las luchas obreras europeas con las campesinas e indígenas de América Latina o las de liberación nacional de Asia y África, impregna aún hoy la búsqueda de los pensamientos emancipatorios en las múltiples resistencias. Y, a mi entender, Hugo Blanco viene a representar esta constante, esta tenacidad, esta presencia irreductible de un pensamiento político, es decir de una decisión ligada a una ruptura; a la ruptura con un orden moderno/colonial, capitalista, racista, patriarcal e individualista.

En la segunda mitad del siglo XX, comienzan a decaer las teorías críticas donde las ideas de “revolución” y de “sociedad igualitaria”, apare-

cían viables y posibles. No obstante, siempre la decisión de entregar la vida a esas luchas fue una opción difícil como bien lo demuestra este libro. Y esto por muchas razones; la primera se encuentra en el nivel de sufrimiento personal, las penurias en las prisiones, el ominoso reconocimiento de lo que es capaz de hacer quien domina, la sensación de estar siempre cerca de la muerte. Blanco lo sabe y cuando lo narra nos advierte no solo acerca de su propio sufrimiento sino de los que aún padecen muchos seres humanos en todo el mundo; sufrimientos con los que convivimos durante nuestras vidas, a veces conscientes, decididos a denunciarlos y combatirlos y muchas otras veces, negándolos, haciendo como que suceden en lugares tan lejanos que no nos involucran. Él se preguntaba al salir de las prisiones cómo es posible que los seres humanos nos acostumbremos a coexistir con el sufrimiento de tantos otros que quedan allí. En efecto sabemos de ese sufrimiento como así también de un listado interminable de situaciones mortificantes y ominosas que involucra aborígenes, presos, niñas en estado de secuestro sexual, jóvenes en riesgo de fusilamientos, habitantes de *favelas* faccionalizadas, y largos etcéteras.

Considero que el hallazgo más significativo en la lectura de este libro reside en la historia

de vida de Hugo Blanco, en ese andar político más parecido al de los activistas indígenas del presente que al de los luchadores de las décadas de sesenta y setenta. Y este es precisamente el dispositivo que habilita no solo reconocerlo por sus luchas dentro de su tiempo sino como un sujeto capaz de adelantarse a él. Creo que esto es uno de los puntos que permite dar cuenta del motivo de tanto respeto: por un pasado comprometido, pero también por ser un sujeto capaz de leer las circunstancias de las acciones colectivas de La Convención y Lares en una clave en la que se escuchan los sonidos actuales del sureste mexicano zapatista, la rebeldía indígena de las montañas y selvas ecuatorianas o la esperanza campesina e indígena boliviana.

Detengámonos un instante en esta cuestión: ¿qué han sido de los referentes de las luchas de las décadas del sesenta y setenta? La mayoría de ellos son hoy nombres del pasado y cuando participan en la política actual lo hacen como funcionarios, legisladores, líderes de partidos políticos y no siempre en posiciones que rememoren sus historias rebeldes. Hugo Blanco es una de las dignas excepciones y este libro es una de las claves para comprenderla como tal. Él no pudo imaginar luchas ni senderos sin estar allí, inmerso en esos mundos a los que de

ningún modo deseaba “representar” sino aportar presencia, coraje, lucidez, compromiso. En el libro nos cuenta como fue buscado por otros líderes para realizar acuerdos y que siempre se negó a llevarlos a cabo convencido del papel de los colectivos, de las comunidades como centro de las decisiones. En un momento cuando se refiere a las guerrillas sostiene “Las ideas que yo tenía en la cabeza por influencia cubana no cuentan, cuenta lo objetivo; afortunadamente siempre respeté lo que la mayoría opinaba y, en el caso de la lucha armada, también”.

Las “buenas intenciones” de quienes creen saber qué necesitan los campesinos, las comunidades indígenas y deciden otorgarlo, sea una conducción política, una ideología o una fórmula para llevar a cabo una reforma agraria, representan una historia repetida y conocida por los que seguimos de cerca los avatares de los pueblos. Es una vieja discusión que atravesó el siglo XX desde sus comienzos cuando las revueltas campesinas de la Rusia pre-revolucionaria, llenas de coraje y novedades eran ignoradas y despreciadas porque sus bases comunitarias no tenían “ningún valor” para la revolución que ciertos círculos ilustrados imaginaban. O recuérdese el desprecio con que fueron tratadas las comunidades indígenas de los territorios latinoamericanos durante la

puesta en marcha de reformas agrarias “modernizadoras”. Blanco ironiza al respecto: “se trajeron fórmulas de no sé dónde, salidas de no sé qué iluminados cerebros, siendo que nosotros tenemos una organización colectivista milenaria, el ayllú, la comunidad campesina”. Los pensamientos que acompañaron muchas luchas así como los gobiernos desarrollistas latinoamericanos profundizaron, a veces más allá de su “buena voluntad”, las relaciones que los distintos órdenes coloniales habían impuesto a los largo del siglo. Las comunidades fueron acusadas de atraso, improductividad, ignorancia e inferiorizadas frente a una supuesta modernización que acarrearía prácticas científicas, superiores, productivas que encarnaban el “avance y el progreso”. En otras palabras, como dice Boaventura de Sousa Santos se las convertía en “ausentes” en una operación que llegó hasta lograr verdaderos “epistemicidios” y genocidios.

Hugo Blanco recorre grandes páginas de la historia de su país hasta llegar a la esperanza del Chiapas mexicano en 1994, al Foro Social Mundial que abre el milenio en 2001, y adentrarse en los significados depredadores, mortificantes del neoliberalismo de nuestros días. Recorremos con él desde aquel impresionante campo de experimentación político que fue la

reforma agraria en el departamento de Cusco, arrancada al poder por las movilizaciones y luchas campesinas de La Convención y Lares; las corrientes internas entre los dirigentes; los juicios de desahucio; los derroteros institucionales de gobiernos militares; la cárcel, la amnistía, la solidaridad internacional y hasta sus varios exilios y regresos; siempre el regreso a ese lugar que sin duda lo marcó como sujeto pero al que él dejó marcas que perdurarán más allá de su propia vida.

Este libro también es una muestra de la fuerza del orden colonial en los países andinos pero a la vez de la potencia de estos pueblos que marcan siempre senderos de rupturas con las simples prácticas que remiten a sus raíces culturales. Creo no equivocarme si digo que Blanco expone esta tensión constante de nuestros países en las figuras contrapuestas de dos escritores: Mario Vargas Llosa y José María Arguedas. Mientras el *tayta*, como lo llama Blanco a Arguedas, vive, crea, padece desde las raíces de su “Perú profundo”; Mario Vargas Llosa habla el lenguaje del colonizador, habla por boca del “amo”. Arguedas es un hombre libre mientras el “moderno” Vargas Llosa no lo es. No puede serlo pues nunca es libre aquel que lleva la voz del amo adentro. Y en esta tensión se retuercen aún nuestras naciones (de este

viejo y desgastado Estado-nación) habitadas por indígenas, mestizos y los poderosos criollos europeizados que pueden enraizarse en los territorios que les dieron cobijo, o pueden quedar atrapados por la colonialidad del etnocidio y del epistemicidio.

Por último, querría realizar una pequeña reflexión sobre las resistencias de nuestro tiempo. Nunca las luchas de los pueblos de la América Latina estuvieron tan articuladas como en la actualidad. El Cono Sur nunca estuvo antes tan cercano a los problemas de las comunidades de las sierras peruanas, de los territorios altos de Guatemala o del Sureste mexicano como en estos tiempos. ¿Qué habilitó esas cercanías y hermandades en las luchas? En gran parte, fue el proyecto geopolítico militar internacional que decidió apropiarse de los recursos naturales de nuestros territorios en una segunda vuelta de la historia colonizadora. El actual saqueo de los recursos es solo comparable al de los primeros siglos de la devastación colonial; antes se hizo en nombre de la modernización y la evangelización, hoy se hace en nombre del desarrollo, la democracia y la ciencia (la tecnociencia). Dice la pensadora Ana Esther Ceceña al respecto:

Un único proyecto de mercantilización total de la naturaleza para uso masivo desde el centro de

México hasta la punta de Tierra del Fuego. No se trata de la explotación de los elementos naturales para uso doméstico, ni local ni nacional, sino de su explotación de acuerdo con las dimensiones de un comercio planetario sostenido, en un 50%, por empresas transnacionales. La infraestructura que se propone —y que se requiere— es justamente la que permitirá a América Latina convertirse en una pieza clave en el mercado internacional de bienes primarios, a costa de la devastación de sus territorios, abriendo nuevamente esas venas de la abundancia que sangran a la pachamama y que alimentan la acumulación de capital y la lucha mundial por la hegemonía. El diseño de esta infraestructura va del corazón a las extremidades, del centro de Sudamérica hacia los puertos en el caso de IIRSA y de Colombia-Panamá hacia la frontera con Estados Unidos en el caso del Proyecto Mesoamericano, nuevo nombre del Plan Puebla Panamá. (Ceceña, 2009).

La dominación es continental, pero las resistencias también lo son. Pocos argentinos saben, por ejemplo, que cuando el valiente pueblo de la localidad patagónica de Esquel impuso su plebiscito para rechazar la minería en su localidad tenía como paradigma el pueblo hermano de Tambogrande en Perú que un año antes había logrado el mismo rechazo con el mismo dispositivo. Las resistencias contra la devasta-

ción minera, de los bosques y las selvas, de la tierra y de los recursos del subsuelo recorren el continente desde México hasta ese sufrido sur patagónico de la Nación Mapuche. El ejemplo de las poblaciones amazónica de Bagua durante 2009, mostró que contra un pueblo decidido a mantener su territorio no hay transnacionales ni gobiernos coloniales que basten.

Este libro es una de las tantas bisagras que se proponen entrelazar estas luchas; narra las del pasado cuyos destellos libertarios se visualizan en las del presente; marca rupturas y continuidades al tiempo que nos desafía a seguir pensando desde nuestros diferentes lugares y luchas actuales. Esos lugares en la selva amazónica de una tenacidad sin límites en 2009, en las grandes alturas del Cusco peruano o de El Alto en Bolivia, del sureste mexicano de “la Digna Rabia”, en esa digna Nación Mapuche que expresa su repudio al Chile racista, en esos lugares a recuperar de los pueblos Kollas o del pueblo Diaguita del Noroeste argentino; la perseverancia de las comunidades ecuatorianas, con las huelgas de los obreros argentinos que no se doblegan. Esos lugares de las luchas por mantener los cerros y montañas fuera del alcance de las corporaciones mineras de los pueblos cordilleranos de Chile, Argentina y de toda la Abya Yala.

Una luchadora de la Asamblea de Chilecito, provincia de La Rioja, Argentina, que intenta mantener su cerro fuera del alcance de la devastadora empresa minera Barrick Gold —en el conflicto sintetizado en la consigna “El Famatina no se toca”— siempre cuenta una historia que une tiempos y articula resistencias de un modo fácil de comprender por quienes habitamos estos territorios de antiguos pobladores olvidados por algunos. Dice Gabriela que los ancianos riojanos narran que en la cumbre del cerro Famatina descansan las almas aborígenes, y cuando se produjo el levantamiento de Túpac Amaru, el Famatina tronó llamándolos a recuperar sus territorios y la dignidad de su cultura. La lucha para preservar el cerro de la minería a cielo abierto, así como tantas otras —por la tierra, el agua, los derechos sociales, la autonomía cultural pero también política de las comunidades, etcétera—, entretienen hoy viejas y nuevas voces de resistencias en una concepción del tiempo difícil de comprender por el orden colonial de ayer y de hoy.

BIBLIOGRAFÍA

- Ceceña, A. E. 2009 “Caminos y agentes del saqueo en América Latina” en *Biodiversidad en América Latina y el Caribe*, página web, 29-10. Disponible en <<http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/52722>>

SOBRE LA AUTORA

NORMA GIARRACCA (Ramos Mejía, 1945 - Buenos Aires, 2015) fue socióloga y profesora titular de Sociología Rural en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Pensadora ineludible en torno a los estudios agrarios latinoamericanos, luego de múltiples exilios, ya de vuelta en Argentina se dedicó a fundar el Instituto de Investigaciones Gino Germani en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el cual dirigió. También coordinó el área de Ciencias Sociales, Educación y Filosofía del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y creó la cátedra de Sociología Rural y el Grupo de Estudios Rurales (GER). Más adelante también fundaría el Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina (GEMSAL).

En los tempranos años noventa participó del Grupo Montevideo de Universidades del Mercosur, junto a reconocidos especialistas de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

En CLACSO coordinó el Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural. Como coordinadora del GT publicó: *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires, 2001). Asimismo, prologó el libro *Ruralidades latinoamericanas. Identidades y luchas sociales* (Buenos Aires, 2004), presentando a una nueva generación de científicos sociales. Mantuvo vínculos cercanos con los procesos de Oaxaca y la creación de la Universidad de la Tierra.

Intelectual y militante política comprometida con su tiempo y su lugar, Norma dedicó su vida a la formación de estudiantes y equipos de investigación, hasta su fallecimiento en 2015.

Los aportes de Norma Giarracca al pensamiento social, y en particular a la Sociología Rural, son vastos y multifacéticos.

En esta Antología hemos pautado cuatro secciones que reflejan la evolución de sus intereses y prioridades: “La Sociología Rural y el debate sobre el campesinado”; “Agroindustria, agronegocio y extractivismo”; “Protesta y movimientos sociales”; y, finalmente, “Perspectivas desde el Sur. Colonialidad del poder, otros bicentenarios”. Estos núcleos temáticos inevitablemente se entrecruzan. Todo su trabajo está imbuido de un profundo sentido político, que se basa en las preguntas:

¿cómo contribuir a las luchas que realizan los sectores subalternos en las sociedades capitalistas para superar las condiciones de vida en que se encuentran? ¿Cómo superar los procesos de explotación y los deterioros ambientales que provoca el proceso de “desarrollo” que se está llevando a cabo en el mundo en general?

Se señaló alguna vez su “carácter fuerte”, pero este no era otra cosa que su fuerte sentido de justicia, que nunca dejó de manifestar, incluso frente a los más encumbrados.

Del Prólogo de Miguel Teubal.

Patrocinado por



Agencia Sueca de Desarrollo Internacional

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



CLACSO

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

ISBN 978-987-722-287-6



9 789877 222876